Radicar - Acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley 2111 de 2021

Julian Salamanca Latorre <jsalamanca@coljuristas.org>

Jue 26/05/2022 16:05

Para: Secretaria3 Corte Constitucional <secretaria3@corteconstitucional.gov.co>

CC: Paula Andrea Villa <pvilla@coljuristas.org>;Manuel Fernando Quiroga Argüello <fernandoquiroga@coljuristas.org>;gustavo gallón giraldo <ggallon52@yahoo.com>;feliciano.valencia@senado.gov.co <feliciano.valencia@senado.gov.co>;andrea.lopera@senado.gov.co <andrea.lopera@senado.gov.co>;Sneither Cifuentes <sncifuentes@defensoria.gov.co>;faljure07@gmail.com <faljure07@gmail.com>;Juan David Romero Preciado <acspub@cajar.org>;dsanchez@asociacionminga.co <dsanchez@asociacionminga.co>;presidencia.anzorc@gmail.com <presidencia.anzorc@gmail.com>;fundaciondhoc2020@gmail.com <fundaciondhoc2020@gmail.com>;ascalg.lozadaguayabero@gmail.com <ascalg.lozadaguayabero@gmail.com>;coordossac2010@hotmail.com <coordossac2010@hotmail.com>;tatiana.rodriguez@censat.org <tatiana.rodriguez@censat.org>;franciscohenao@cjyiracastro.org.co <franciscohenao@cjyiracastro.org.co>;asormnm@gmail.com <asormnm@gmail.com>;Julián González Escallón <jdgonzalez@coljuristas.org>

Honorables magistrados/as
Corte Constitucional
E. S. D.

Presentamos ante ustedes una acción pública de inconstitucionalidad en contra de los artículos 1 y 6 de la Ley 2111 de 2021 "*por medio de la cual se sustituye el Título XI "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones*".

Adjuntamos el texto de la demanda, el compilado de cédulas de ciudadía de los actores y un enlace en Google Drive en donde podrán encontrar las gacetas parlamentarias enunciadas como anexos.

Los anexos 5, 6, 10, 13, 15, 18 y 19 son videos que no puedieron ser adjuntados a este correo, por ello en el texto de la demanda se encuentran los hipervínculos para consultarlos en el canal oficial de Youtube del Congreso de la República.

Cordialmente,

Anexos_Demanda.rar

Julián Salamanca Latorre
Abogado - Área de Litigio
(+57 1) 7449333 ext. 1040 | www.coljuristas.org
Carrera 15 A Bis 45-37, C.P. 111311, Bogotá, D.C., Colombia

Bogotá D.C., mayo de 2022

Honorables
Magistradas y Magistrados
CORTE CONSTITUCIONAL

Ref. Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 1 (parcial) y 6 de la Ley 2111 de 2021 *"Por medio de la cual se sustituye el Título XI "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones"*.

Gustavo Gallón Giraldo, Paula Villa Vélez y Julián Salamanca Latorre, director, directora del área de litigio y abogado de litigio de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), respectivamente, Feliciano Valencia Medina y Pablo Catatumbo Torres Victoria, senadores de la República, Willian Ferney Aljure Martínez, electo representante a la Cámara, Jomary Liz Ortegón Osorio, Rosa María Mateus Parra y Juan David Romero Preciado, presidenta, coordinadora y abogado del eje de defensa del territorio del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, respectivamente, Diana Sánchez Lara, directora ejecutiva de la Asociación MINGA, Arnobi de Jesús Zapata Martínez, representante legal de la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas (ANZORC), Edilberto Daza Bejarano, representante legal de la Fundación por la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el oriente y centro de Colombia (DHOC), Fernando Torres Cardozo, representante legal de la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales Ambientales y Campesinas del Caquetá (COORDOSAC), Elver Medina Díaz, representante legal de la Asociación Campesina Ambiental Lozada Guayabero (ASCAL-G), Tatiana Rodríguez Maldonado, Coordinadora general de la Asociación Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo (CENSAT), Francisco Henao Bohórquez, abogado de la Corporación Jurídica Yira Castro, Glosman Calderón Gómez, Presidente Asociación de Juntas de Acción Comunal Ríos Mira, Nulpe y Mataje (ASOMINUM), identificadas e identificados como aparece al pie de nuestras firmas, con fundamento en el numeral 6° del artículo 40 y el numeral 1º del artículo 242 de la Constitución Política, así como del Decreto 2067 de 1991, respetuosamente interponemos ante ustedes demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 1 (parcial) y 6 de la Ley 2111 de 2021 *"Por medio de la cual se sustituye el Título XI "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones"* (en adelante Ley 2111 de 2021).

Con la finalidad de facilitar la comprensión del presente documento, nos permitimos presentar a continuación su contenido:

1. NORMAS DEMANDADAS
2. NORMAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS
3. SÍNTESIS DE LA DEMANDA
4. COMPETENCIA DE LA CORTE EN LA MATERIA
5. CONSIDERACIONES JURÍDICAS PREVIAS
- 5.1. Situación de la población campesina en Parques Nacionales Naturales
- 5.2. Desconocimiento del rol de protección y conservación que ejercen las comunidades rurales en áreas de protección ambiental

6. CARGOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ALEGADOS SOBRE LA NORMA
    6.1. **Primer cargo:** La norma acusada viola el principio de proporcionalidad – artículos 336 y 336A del Código Penal
        6.1.1. Contenido y alcance del principio de proporcionalidad
        6.1.2. Aplicación del test estricto de proporcionalidad
    6.2. **Segundo cargo:** La norma acusada viola el principio de estricta legalidad en materia penal – artículos 333 y 336 del Código Penal
        6.2.1. Contenido y alcance del principio de estricta legalidad
        6.2.2. Desconocimiento del principio de estricta legalidad del artículo 333
        6.2.3. Desconocimiento del principio de estricta legalidad del artículo 336
    6.3. **Tercer cargo:** La norma acusada desconoce la obligación constitucional de implementar de buena fe el Acuerdo Final de Paz (artículos 330 y 330A del Código Penal)
        6.3.1. La obligación constitucional de cumplir de buena fe el Acuerdo Final de Paz
        6.3.2. La conexidad de la disposición demandada con los contenidos del Acuerdo Final
        6.3.3. Los derechos de las comunidades campesinas dedicadas a los cultivos de uso ilícito
        6.3.4. El juicio integrado de igualdad frente a la disposición acusada
        6.3.5. Derecho de las víctimas del conflicto armado interno a la reparación integral
        6.3.6. Análisis de la expresión demandada: un tratamiento penal inconstitucional a las familias campesinas con cultivos de uso ilícito
    6.4. **Cuarto cargo:** La norma acusada desconoce la garantía de control de legalidad de la captura prevista en el artículo 28 constitucional
7. CONCLUSIONES
8. SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA
9. PRETENSIONES
10. ANEXOS
11. NOTIFICACIONES

1. NORMAS DEMANDADAS

Los cargos de inconstitucionalidad se dirigen contra las siguientes disposiciones:

Artículos del Código Penal adicionados y/o modificados por el artículo 1 de la Ley 2111 de 2021 *"Por medio de la cual se sustituye el Título XI "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones"*:

> **Artículo 330. Deforestación.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente tale, queme, corte, arranque o destruya áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
>
> La pena se aumentará a la mitad cuando:
>
> 1. Cuando la conducta se realice para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito o para mejora o construcción de infraestructura ilegal.

2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.

Artículo 330A. Promoción y financiación de la deforestación. El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte, arranque o destrucción de áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará a la mitad cuando:

1. Cuando la conducta se realice para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal.

2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.

Artículo 333. Daños en los recursos naturales y ecocidio. El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o cause un impacto ambiental grave o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título o a los que estén asociados con estos, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Parágrafo 1. Para los efectos de este artículo se entiende por ecocidio, el daño masivo y destrucción generalizada grave y sistémica de los ecosistemas.

Parágrafo 2. Por impacto ambiental grave se entenderá, la alteración de las condiciones ambientales que se genere como consecuencia de la afectación de los componentes ambientales, eliminando la integridad del sistema y poniendo en riesgo su sostenibilidad.

Artículo 336. Invasión de áreas de especial importancia ecológica. El que invada, permanezca así sea de manera temporal o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en área de reserva forestal, ecosistemas de importancia ecológica, playas, terrenos de bajamar, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, parque nacional natural, área o ecosistema de interés estratégico, área protegida, definidos en la ley o reglamento incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.

Artículo 336A. Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica. El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.

Artículo 6 de la Ley 2011 de 2021 que modifica el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal:

Artículo 6. El artículo 302 de la Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo inciso que quedará así:

Cuando la captura en flagrancia se produzca en ríos o tierra donde el arribo a la cabecera municipal más cercana solo puede surtirse por vía fluvial o siempre que concurran dificultades objetivas de acceso al territorio como obstáculos geográficos, logísticos, ausencia de infraestructura de transporte o fenómenos meteorológicos que dificulten seriamente el traslado del aprehendido, se realizarán todas las actividades para lograr la comparecencia del capturado ante el juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin que en ningún caso exceda las 36 horas siguientes, contadas a partir del momento de la llegada al puerto o municipio más cercano, según el caso. La autoridad competente deberá acreditar los eventos descritos en el presente inciso.

2. NORMAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS

Las normas superiores violadas son las siguientes:

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.
En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.

Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

Artículo 243. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.

Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.

Acto Legislativo 02 de 2017 *Por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la Constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera*

> **Artículo 1.** La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:
>
> **Artículo transitorio 01.** En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el día 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las

> leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las disposiciones constitucionales.
>
> Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.

3. SÍNTESIS DE LA DEMANDA

En esta acción de constitucionalidad se examinan cuatro cargos de inconstitucionalidad contra las disposiciones previamente citadas de la Ley 2111 de 2021 que entró en vigencia el 29 de julio de 2021. Cada uno de los cargos se sintetiza a continuación:

Primer cargo: Vulneración del principio de proporcionalidad. Los tipos penales establecidos en los artículos 336, *invasión de áreas de especial importancia ecológica*, y 336A, *financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica*, vulneran el principio de proporcionalidad en materia penal derivado del artículo 29 superior, toda vez que el legislador da un tratamiento punitivo a conflictos socioambientales en zonas de frontera agraria que afecta de manera diferenciada a un grupo de especial protección constitucional: personas campesinas y trabajadoras rurales sin tierra.

Segundo cargo: Vulneración del principio de estricta legalidad. Los tipos penales establecidos en los artículos 333, *daños en los recursos naturales y ecocidio*, y 336, *invasión de áreas de especial importancia ecológica*, contravienen el principio de estricta legalidad o tipicidad penal derivado del artículo 29 superior, dada la vaguedad y ambigüedad en su configuración objetiva y material.

Tercer cargo: desconocimiento de la obligación constitucional de cumplimento del Acuerdo Final de Paz, derivada del Acto Legislativo 01 de 2017. Los tipos penales establecidos en los artículos 330, *deforestación*, y 330A, *promoción y financiación de la deforestación*, desconocen la obligación constitucional de implementar de buena fe el Acuerdo para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera (en adelante Acuerdo Final de Paz), al ser abiertamente contrarios a normas y políticas públicas vigentes necesarias para su cumplimento, específicamente en el punto 4 relacionado con la solución al problema de las drogas ilícitas, lo cual deriva en inseguridad jurídica y vulneración de derechos en contra de la población beneficiaria del mentado Acuerdo.

Cuarto cargo: Violación al artículo 28 constitucional. El artículo 6 de la Ley 2111 de 2021, que modificó el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal al introducir una excepción frente al cómputo de las 36 horas con las que cuentan las autoridades para poner a un capturado a disposición de los jueces de control de garantías, vulnera el artículo 28 de la Constitución Política y desconoce el precedente constitucional sobre las garantías del capturado en flagrancia.

4. COMPETENCIA DE LA CORTE EN LA MATERIA

De acuerdo con el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer esta demanda dado que está dirigida contra una norma legal respecto de la cual no existe cosa juzgada; es decir, este Tribunal aún no se ha pronunciado acerca de la constitucionalidad del enunciado normativo acusado, por lo cual procede un fallo de fondo al respecto.

5. CONSIDERACIONES JURÍDICAS PREVIAS

La interposición de esta acción de inconstitucionalidad obedece a la preocupación fundada acerca de cómo los artículos objeto de reproche que establecen tipos penales, y que están orientados a proteger los recursos naturales como bienes jurídicos tutelados por medio del título XI del Código Penal, lejos de ser eficaces para cumplir con ese objetivo, dan cuenta de que el legislador hizo un uso desproporcionado del derecho penal como primer recurso [*prima ratio*] para la resolución de conflictos que en esencia son de carácter socioambiental, y cuya atención y resolución es competencia de autoridades administrativas del sector ambiental y del sector agrario, dado que aquellas problemáticas se sitúan específicamente en zonas de frontera agrícola. Nos referimos en particular a aquellas situaciones jurídicas difusas de ocupación de zonas denominadas *de especial importancia ecológica* o *de protección ambiental* por parte de comunidades rurales, campesinas, indígenas, afrocolombianas y víctimas del conflicto armado, sujetos de especial protección constitucional, como lo ha manifestado la Corte a través de copiosa jurisprudencia.

Siendo así, la presente acción demuestra que, con la finalidad de buscar mecanismos de protección ambiental, los artículos reprochados convierten el aparato represivo del Estado en persecutor de conductas que, en la mayoría de los casos, son realizadas en razón de la imposibilidad material de tener acceso a la tierra en condiciones de mínima dignidad, e incluso en observancia de normas y políticas públicas que las promueven, como la ocupación de bienes baldíos de la nación con expectativas de acceso y formalización de derechos de propiedad sobre las tierras.

Con ello no se tiene la pretensión de hacer un juicio de valor sobre los mecanismos existentes o necesarios para la protección de los recursos naturales y el medio ambiente. Por el contrario, la presente demanda desarrolla argumentos que permiten comprender de mejor manera los impactos desproporcionados que los tipos penales establecidos con la pretensión de protección ambiental ocasionan para sujetos de especial protección constitucional. A pesar de que estos son reconocidos como tales por su condición de vulnerabilidad manifiesta y que la legislación agraria valida sus propias prácticas de ocupación de tierras rurales, la legislación penal tipifica incongruentemente dichas prácticas como delitos.

A nuestro juicio, el uso irracional del derecho penal lleva a una contradicción peligrosa en el ordenamiento jurídico colombiano que afecta principalmente a estos sujetos, pues desconoce la estructura antidemocrática de la tenencia de la tierra que ha obligado a poblaciones enteras a asentarse en áreas de protección ambiental, así como el rol de protección y conservación que dichas poblaciones ejercen en las zonas que a través de las disposiciones demandadas se pretenden proteger.

De este modo, el primer apartado tiene como finalidad ofrecer elementos relevantes sobre la situación de comunidades campesinas en ejercicio de ocupación en Parques Nacionales Naturales y otras áreas de protección ambiental destacando el rol de protección y conservación que dichas comunidades ejercen. Las consideraciones siguientes son presentadas como parte del contexto de aplicación de las normas acusadas, y se estiman relevantes para enriquecer el debate constitucional planteado en el desarrollo de

los cargos formulados en la demanda, esto es, la proporcionalidad entre el uso del derecho penal y la garantía de derechos fundamentales. También se destaca la necesidad de preservar el principio de tipicidad en lo penal como garantía constitucional, así como la nueva realidad política y jurídica que trajo consigo el Acuerdo Final de Paz, cuyo contenido integra prerrogativas que obligan al Estado y a todas sus instituciones a cumplir de buena fe con lo acordado, lo que en materia legislativa y jurisprudencial indica su interpretación en estrecha relación con derechos de víctimas históricas del conflicto armado.

5.1. Situación de la población campesina en Parques Nacionales Naturales

Las tensiones derivadas de la presencia de campesinos y campesinas en áreas protegidas, como los Parques Nacionales Naturales, parten del proceso de colonización dirigido por el Estado colombiano y se agudizan con la aparente contradicción entre actividades agrícolas y conservación ambiental. Bajo la premisa del cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de protección y conservación de áreas ambientalmente estratégicas, Colombia ha adoptado instrumentos normativos que prohíben habitar estas áreas, incluso en los casos en que la ocupación de los predios antecede a la constitución del parque o la zona protegida.

El campesinado, considerado como grupo, es un sujeto de derechos colectivos y sus integrantes son ciudadanos a quienes históricamente les han sido negados y desconocidos derechos de todo tipo. Este sujeto jurídico –opuesto al de ciudadano con derechos, que sigue siendo por antonomasia quien vive en lo urbano o en la ciudad– viene reclamando desde hace años sus derechos al reconocimiento, acceso a la tierra, soberanía alimentaria y trabajo digno; sin embargo, hasta la fecha solo se han dado algunos avances normativos y jurisprudenciales, tal como se verá más adelante (ver *infra* cargo primero de inconstitucionalidad).

Actualmente hay miles de personas habitando las áreas naturales protegidas de Colombia, lo que implica varios conflictos territoriales de carácter socioambiental. Por un lado, muchas de estas figuras territoriales han sido diseñadas y manejadas desde un enfoque de conservación "sin gente" o "sin campesinos", según el cual la protección de los ecosistemas se adelanta sin intervención de actividades antrópicas. Por otro lado, la mayoría de los habitantes de las áreas protegidas son campesinos que han llegado a estas zonas por procesos de empobrecimiento, expulsión y violencia, que han cambiado el uso del suelo para procurarse un sustento mediante actividades agropecuarias.

Uno de los casos más graves es el de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), figura que tiene el mayor nivel de restricción ambiental[1]. Según el Censo Nacional Agropecuario de 2014[2], estas áreas protegidas eran habitadas por 22.000 personas, tenían 7.919 viviendas construidas, y 1,2 millones de hectáreas bajo usos agropecuarios (6,9 % del total extensión cubierta como área del SPNN)[3]. Muchos de estos habitantes son campesinos que han sido empujados o atraídos desde los valles andinos y las sabanas hacia los ecosistemas de alta montaña o de bosque tropical que ahora son áreas protegidas y cuyos procesos de movilización parten, en gran medida, de actos de negación de derechos

---

[1] El régimen de los PNN puede encontrarse en los arts. 13 y 14 de la Ley 2ª de 1959 (ver en http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/914-plantilla-bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos-58#leyes), en el Decreto 622 de 1977 (https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0622_1977.htm) y en el capítulo V del Decreto-Ley 2811 de 1974 (ver http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2811_1974_pr008.html#326).

[2] DANE. (28 de marzo de 2016). *Censo Nacional Agropecuario 2014. 11a Entrega. Boletín.* Obtenido de Dane.gov.co: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-agropecuario-2014#11

[3] Es necesario aclarar que no se ha incluido la categoría de campesino en los instrumentos censales aplicados en el país por lo que esta cifra puede ser imprecisa, pero se ha constatado que la mayoría de estos pobladores, agricultores y ganaderos son campesinos porque la mayoría de las explotaciones son de pequeña o mediana extensión.

como la concentración de tierras que se ha dado en el interior del país desde el siglo XIX o desplazamientos forzados originados tanto por el conflicto armado como por violencias económicas[4]. También se cuenta la colonización campesina promovida por el Estado o grandes empresas para implementar políticas de reforma agraria basadas en la expansión de la frontera agrícola y la titulación de tierras "baldías", como es el caso de los PNN de la Amazonía, de la región del Catatumbo, o de la Costa Atlántica[5]. Además, la instalación de enclaves extractivos o de productos de "bonanza" (quina, caucho, maderas, etc.), destacándose el PNN-Catatumbo, en donde las primeras olas de colonización fueron promovidas por petroleras estadounidenses[6], o de los PNN de la Amazonía, donde hubo varios enclaves de caucho y productos maderables desde el siglo XIX[7]. Ha habido también otras políticas estatales, como las misiones para la evangelización de indígenas, el control de fronteras nacionales o el establecimiento de colonias agrícolas penales, como puede verse en los PNN de Paramillo, la Paya y el Nevado del Huila[8]. A esto se agrega el surgimiento de economías ilegales en las periferias del país, como el cultivo de coca, que ha representado una alternativa para los campesinos expulsados y empobrecidos que llegan desde el interior[9].

Distribución del número de Unidades Productivas Agropecuarias en PNN

[4] Ver Carrillo González, L. (2017). *Proceso de poblamiento en áreas declaradas Parque Nacional Natural.* Bogotá: Ministerio de Ambiente; Parques Nacionales Naturales; Parques con Campesinos; ANZORC; WWF; FAO; Unión Europea; LeGrand, C. ([1988]2016). *Colonización y protesta campesina en Colombia. 1850-1936.* (H. Valencia Goelkel, Trad.) Bogotá: Universidad de los Andes; Universidad Nacional de Colombia; CINEP; Fajardo Montaña, D. (1997). Fronteras, colonizaciones, y construcción social del espacio. En C. Caillavet, & X. Pachón, *Frontera y poblamiento. Estudios de Historia y Antropología de Colombia y Ecuador* (págs. 237-282). Bogotá D.C.: Instituto Francés de Estudios Andinos. Obtenido de https://books.openedition.org/ifea/2509?lang=es#bibliography; Centro Nacional de Memoria Histórica. (2018a). *Tierras. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico.* Bogotá: CNMH; Ruiz Serna, D. (2003). Campesinos entre la selva, invasores de reservas. *Tabula Rasa No. 1*, 183-210.

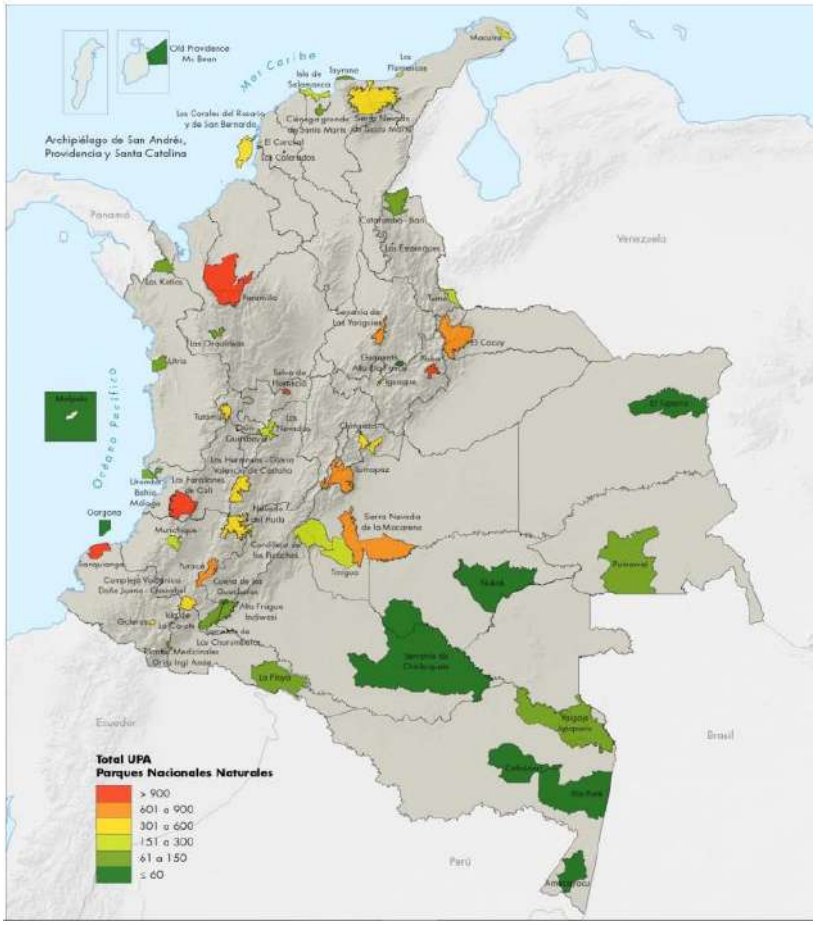
[5] Centro Nacional de Memoria Histórica. (2018a). *Tierras. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico.*

[6] Vega Cantor, R., & Aguilera Peña, M. (1995). *Obreros, colonos y motilones: una historia social de la Concesión Barco (1930-1960).* Bogotá: Fedepetrol; Centro Nacional de Memoria Histórica. (2018b). *Catatumbo: memorias de vida y dignidad.* Bogotá: CNMH.

[7] Polanco Ochoa, R. (2013). *Leguízamo: hacia una construcción histórica del territorio.* Bogotá: Tropenbos Internacional Colombia; Arcila Niño, O., & Salazar Cardona, C. A. (2007). *Sur del Meta. Territorio Amazónico.* Bogotá: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas -Sinchi-; Molano, A. ([1986] 2006). *Selva Adentro. Una historia oral de la colonización del Guaviare.* Bogotá: El Áncora Editores.

[8] Carrillo González, L. (2017). *Proceso de poblamiento en áreas declaradas Parque Nacional Natural.* Bogotá: Ministerio de Ambiente.

[9]; Reyes Posada, A. (2009). *Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia.* Bogotá: Norma; y Garzón, J. C., Gélvez, J. D., & UNODC. (2018). *¿Quiénes son las familias que viven en las zonas con cultivos de coca? Caracterización de las familias beneficiarias del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos.* Bogotá: FIP; UNODC.



Fuente: DANE, 2016

El régimen jurídico de las áreas del SPNN fue diseñado y ha sido manejado sin tener en cuenta este fenómeno de poblamiento campesino. Así se crearon y se reglamentaron desde los años 50, asumiendo que se protegía ecosistemas deshabitados[10]. Luego, en los años 70, se modificó para admitir el comanejo de los PNN con sujetos étnicos (indígenas y comunidades negras), incluso admitiendo el traslape entre territorios indígenas y el área protegida[11]; sin embargo, para la población campesina no étnica se han aplicado las restricciones generales del régimen jurídico de PNN, con el objetivo último de reubicarlos fuera de estas áreas.

El régimen jurídico[12] de las áreas del SPNN implica varias limitaciones para los campesinos: 1) limitaciones a la tenencia de la tierra, porque los predios se retiran del comercio y, en consecuencia, no pueden celebrarse negocios jurídicos sobre ellos ni pueden hacer parte de programas de reforma agraria o formalización de la tenencia de la tierra, a la par que el Estado se reserva la facultad de expropiar propiedades y mejoras dentro del PNN[13]; 2) limitaciones en los usos del suelo, con reglas de actividades permitidas y prohibidas que proscriben cualquier actividad humana productiva, asumiendo que son incompatibles con la conservación ecológica[14], y que son controladas mediante procesos sancionatorios y penales; y 3) límites en los procedimientos de zonificación de las áreas del SPNN porque son

[10] Ponce de León Chaux, E. (2007). Consideraciones jurídicas frente a la ocupación de áreas protegidas por comunidades campesinas. En P. N. Colombia, *Bases técnicas y legales de la Política de Participación Social en la Conservación* (págs. 71-152). Bogotá: Parques Nacionales Naturales de Colombia.
[11] CECOIN. (2008) *¿Son compatibles los territorios indígenas y los Parques Nacionales? Aproximaciones jurídicas.* Bogotá: CECOIN.
[12] Está contenido en la Constitución colombiana (art. 63), en la Ley 2ª de 1959, el capítulo V del Decreto-Ley 2811 de 1974 y el Decreto 622 de 1977.
[13] Ver art. 63 de la Constitución colombiana, arts. 13 y 14 de la Ley 2ª de 1959, art. 335 del Decreto-Ley 2811 de 1974, y art. 10 del Decreto 622 de 1977.
[14] Ver arts. 328, 331 y 332 del Decreto 2811 de 1974, y arts. 5 y 8 del Decreto 622 de 1977.

insustraíbles[15], por lo que no pueden sustraerse porciones del polígono de estas áreas para corregir problemas de zonificación, dada la presencia previa de actividades humanas.

Las tres limitaciones referidas implican problemas de seguridad jurídica en la tenencia de tierras para las familias campesinas, quienes tienen que someterse a programas de reubicación, y el cierre de oportunidades para garantizarse un sustento mediante actividades agropecuarias, así sean sostenibles o de bajo impacto. Esto, aunado a los problemas de gobernanza del Estado colombiano, que no ha tenido la capacidad para garantizar el cumplimiento estricto de sus normas, ni para cumplir sus políticas de redistribución de tierras a nivel nacional.

Cabe anotar que, entre 1999 y 2001, se formuló la Política Pública de Participación Social en la Conservación, también conocida como *Parques con la gente*[16], que concebía la permanencia de campesinos dentro de los PNN con prácticas de producción sostenibles. No obstante, esta política fue suspendida durante el gobierno de Álvaro Uribe. Posteriormente, desde el primer gobierno de Santos, se intentó formular una Política Pública de PNN con población campesina[17], en negociación con una delegación de organizaciones campesinas, pero sin éxito. De acuerdo con el equipo técnico de la delegación campesina a la Mesa de Concertación Nacional, las tensiones entre las autoridades ambientales y la población campesina se plantean en los siguientes términos:

> Esta sobreposición espacial ha generado innumerables conflictos entre la institucionalidad de Parques Nacionales Naturales (…) y los campesinos asentados en estas áreas que reclaman se les regularice su situación territorial ante el Estado, para así garantizar sus derechos fundamentales, pues su no reconocimiento del Estado les significa no acceder a servicios y derechos básicos. Por su lado, para PNN la presencia campesina limita su deber de proteger y conservar la biodiversidad presente en estas áreas, afirma tener una serie de obligaciones con la protección y conservación de estas áreas, obligaciones que se ven restringidas por la presencia campesina. Así, para la institucionalidad, los campesinos son mayoritariamente invasores u ocupantes irregulares de estas áreas. Además, señalan que la Constitución Política, les da el carácter a los Parques Nacionales de inalienables, inembargables e imprescriptibles, razón por la cual, argumentan, cualquier opción de sustracción o realinderamiento está constitucionalmente prohibida[18].

Esta clara contradicción entre las percepciones institucionales sobre lo que implica la ocupación en áreas de protección ambiental y las necesidades y apuestas de los campesinos que ocupan áreas del SPNN, parte de un desconocimiento del rol de protección y conservación que cumplen las familias campesinas en estas zonas. Ellas no son solamente comunidades invasoras u ocupantes irregulares, sino sujetos que, de acuerdo a sus propias condiciones de vida, despliegan sobre estas áreas un ejercicio permanente de protección, e incluso coadyuvan a la restauración de ecosistemas que se han visto afectados.

Aunque actualmente existe la opción de realizar acuerdos para el uso y conservación de área del SPNN con población campesina en situación de vulnerabilidad con la condición de que realicen actividades permitidas, como el ecoturismo o la restauración[19], estos programas buscan la reubicación del campesinado y la eliminación de cualquier actividad productiva antrópica.

---

[15] Ver las sentencias C-649 de 1997 (http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1997/C-649-97.htm) y C-598 de 2010 (http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/C-598-10.htm).

[16] Parques Nacionales Naturales. (2001). *Política de participación social en la conservación.* Bogotá: Parques Nacionales Naturales de Colombia.

[17] Ver http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/mesacampesinos/acuerdo/.

[18] Betancourt M., Posada V., Lastra C., Carrillo L. y Montealegre V. (2017) Informe final. Carta Acuerdo FAO-ANZORC. Bogotá D. C., Colombia. Pág. 3

[19] Ver las resoluciones 247 de 2007 (sobre restauración participativa), 531 de 2013 (ecoturismo), 362 de 2012 (vigilancia y control) y 364 de 2012 (de Sistemas Sostenibles para la Conservación), del Ministerio de Ambiente.

No obstante, la misma cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha reconocido el rol de restauración de las comunidades rurales que ocupan áreas de protección ambiental con decisiones como la adopción del *"Protocolo para el desarrollo de la estrategia de Restauración Ecológica Participativa (REP) al interior de las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales"*[20]. En dicho protocolo se afirma que la misión de conservación de las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales debe partir del reconocimiento por parte del Estado de la presencia de ocupantes en PNN y hacerlos partícipes en condiciones de equidad de los procesos dirigidos a la conservación. También se dice que dichos procesos de restauración, si bien no deben generar derechos o expectativas sobre los mismos, sí articulan el conocimiento científico con los conocimientos tradicionales o vivenciales de quienes ocupan las áreas de protección.

A pesar de las dificultades y la lentitud con la que avanzan este tipo de propuestas, hay que diferenciar dos cuestiones acerca de los conflictos socioambientales a las cuales deben responder las autoridades competentes: por un lado, la protección de bienes y recursos naturales para impedir su depredación y los daños que pueden llevar a su extinción irreparable y, por otro lado, las necesidades de tierras que tienen las comunidades rurales que ocupan las áreas de protección ambiental que albergan los recursos de flora, fauna e hídricos que deben ser tutelados, sin desconocer en todo caso que en el centro de estos conflictos se encuentran sujetos a los cuales el Estado debe garantizar derechos fundamentales a la vida, a la alimentación y a la dignidad humana, entre los más importantes.

En este caso, el endurecimiento de la legislación penal, lejos de significar un desestimulo de conductas que afecten y dañen los recursos naturales, como debería ser su objetivo, sí menoscaban derechos de poblaciones vulnerables y proscriben conductas que, de hecho, juegan un papel en el ejercicio de conservación, protección y restauración de estas áreas, como explicamos a continuación.

5.2. Desconocimiento del rol de protección y conservación que ejercen las comunidades rurales en áreas de protección ambiental

La política agraria del país adolece de una armonización con la legislación ambiental que se ha expedido buscando generar mecanismos de protección de los recursos naturales, en la cual se reconozca a los sujetos campesinos y rurales como agentes de conservación y protección de ecosistemas estratégicos y áreas de protección ambiental que, en muchas ocasiones, han sido ocupadas de manera tradicional, incluso antes de las delimitaciones ambientales realizadas en distintas zonas del país.

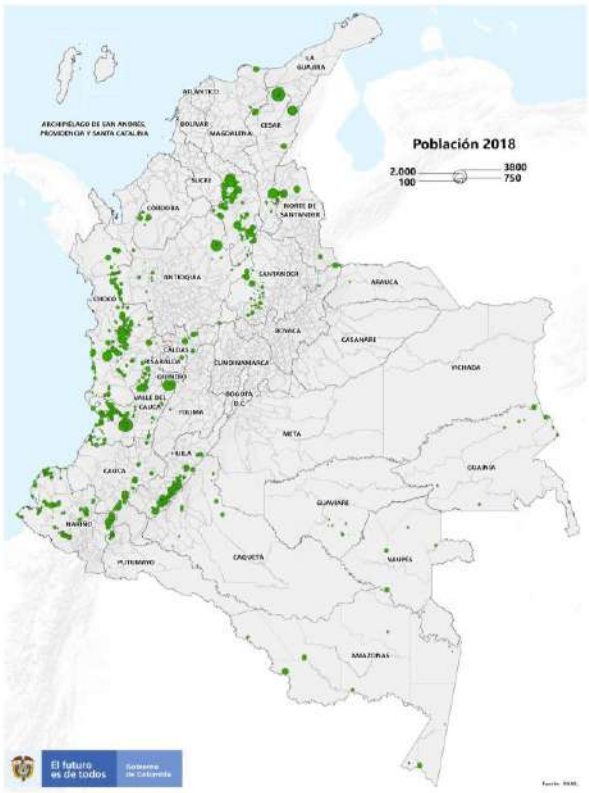
A pesar de que las necesidades de tierras de las comunidades rurales en muchos casos pasan por conflictos de ocupación en áreas definidas como de especial protección ecológica (como las que se ubican en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que incluye Parques Naturales, Reservas Ecológicas, o los bordes y zonas de amortiguación de los páramos y otras figuras del ordenamiento territorial ambiental), ha sido prevalente el enfoque de amparo al ambiente, olvidando el deber estatal de protección, que también recae a favor de la población rural.

Es así como la Ley 2ª de 1959, entendida como parte del marco legal de la política ambiental del país, no ha sido actualizada de acuerdo con las nuevas realidades del ordenamiento territorial, además de los procesos de colonización y de ampliación de la frontera agrícola, lo que genera que muchas personas

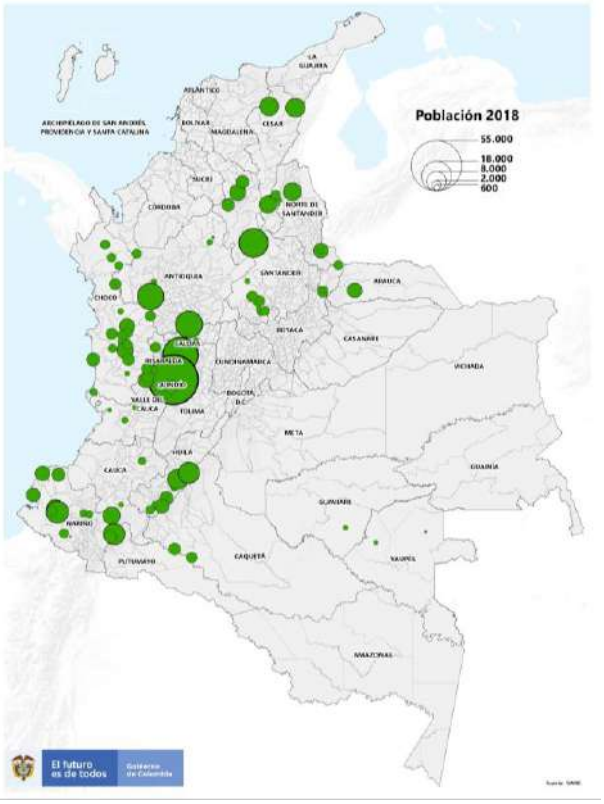
[20] Ver las resoluciones 247 de 2007 "Por la cual se establece el Protocolo para el desarrollo de la estrategia de Restauración Ecológica Participativa (REP) al interior de las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales y se toman otras determinaciones".

habiten hoy territorios protegidos por la Ley 2ª y se enfrenten a las limitaciones ambientales impuestas por la normativa. En los siguientes mapas puede advertirse con mayor claridad este asunto:

Población en centros poblados ubicados en zonas de reserva forestal de la Ley 2ª de 1959



Población en cabeceras municipales ubicadas en zonas de reserva forestal de la Ley 2ª de 1959



Fuente: Dane 2021

Ahora bien, al hablar de delitos ambientales es fundamental conocer el contexto de las principales amenazas y riesgos para las áreas protegidas en el país, así como reconocer la relación que tienen las distintas comunidades con el entorno y el uso que hacen de la biodiversidad.

Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, y a su vez cuenta con una gran diversidad étnica y cultural. En cada uno de sus ecosistemas, es posible encontrar que comunidades campesinas, indígenas, negras, palenqueras y raizales han desarrollado una manera particular de relacionarse con su entorno y tienen distintos usos de la biodiversidad, cuestión que no ha sido desconocida por expertas y expertos temáticos y sabedores de pueblos y comunidades locales de las diversas regiones del país. Por ejemplo, organismos nacionales e internacionales, como el Instituto Humboldt y la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), con apoyo de la ONU, realizaron la primera Evaluación Nacional de Pérdida de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, presentando una serie de hallazgos y recomendaciones sobre las medidas que debe tomar el Estado para la restauración, conservación y protección de recursos naturales.

De acuerdo con esta evaluación, es preciso que el Estado reconozca y articule los conocimientos y sistemas de gobernanza de todas las comunidades asentadas en áreas de importancia ecológica atendiendo a que las áreas de mayor concentración de bosques y zonas de reserva forestal coinciden con tierras y territorios de asentamientos de comunidades étnicas y también campesinas que desarrollan sistemas propios de gobierno y también de manejo ambiental, así las instituciones no los hayan incorporado a sus definiciones de políticas públicas. El concepto sobre el cual se desarrolla esta recomendación es el de **bioculturalidad**, entendida como "los *estrechos vínculos entre la diversidad biológica y cultural de los pueblos indígenas, negros, raizales, campesinos y de otras comunidades locales, para integrarla en las distintas políticas públicas tanto ambientales y culturales, como sociales, políticas y económicas, en la medida en que a través de estas políticas se pueden proteger efectivamente dichos vínculos"*[21].

En el caso de América Latina, históricamente el campesinado ha tenido un importante papel en la protección del ambiente y en la conservación de los recursos naturales a los que varios movimientos sociales y grupos de base se han ido uniendo a través de las luchas y la organización. Un referente de este trabajo es el movimiento social internacional La Vía Campesina, creado en la década de los ochenta, y que hoy tiene presencia en los cinco continentes, creado e influenciado fuertemente por las y los campesinos de nuestra región[22]. A su vez, la Declaración de Quito de 1990, hecha en el marco de la oposición a las celebraciones de los 500 años de la llegada de Colón a América, marcó las bases de lo que se convertiría en este movimiento transnacional campesino. Ahí fue expresada una profunda preocupación colectiva sobre la destrucción de la naturaleza[23].

Uno de los grandes logros y manifestaciones del rol indispensable del campesinado en la protección del medio ambiente de este movimiento campesino es la elaboración, incidencia y, finalmente, la aprobación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Campesinas y otras Personas Trabajadoras en las Zonas Rurales[24].

En la región de América Latina y el Caribe, el 80 % de las explotaciones pertenece a la agricultura familiar, incluyendo a más de 60 millones de personas, convirtiéndose en la principal fuente de empleo agrícola y rural, pero no solo producen la mayor parte de los alimentos para el consumo interno de los países de la región, sino que suelen desarrollar actividades agrícolas diversificadas, que son fundamentales para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad[25]. Es este uno de los aspectos más relevantes de la protección al ambiente y la agricultura campesina, pues la respuesta del campesinado al cambio climático ha minimizado la pérdida de cosechas a través de un mayor uso de variedades locales tolerantes a la sequía, cosechando agua, sembrando cultivos mixtos, creando sistemas agrosilvícolas, realizando prácticas de conservación de suelos e implementando otras técnicas tradicionales[26].

Otro aspecto a valorar en este caso son las construcciones culturales logradas por comunidades locales que habitan estas áreas protegidas, pues desarrollan una identidad con el territorio que les ha permitido

---

[21] Evaluación Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Resumen para Tomadores de Decisión. Pág. 23. Tomado de http://www.humboldt.org.co/images/pdf/RTD%20Final%20v290521%20Lanzamiento.pdf.

[22] Maria Elena Martinez Torres y Peter M. Rosset, Del conflicto de modelos para el mundo rural emerge la vía campesina como movimiento social transnacional, Resumen.

[23] Maria Elena Martinez Torres y Peter M. Rosset, Del conflicto de modelos para el mundo rural emerge la vía campesina como movimiento social transnacional, p. 29.

[24] ILSA, Luchas Agrarias en América Latina, p. 16.

[25] Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de Política.

[26] CLACSO, La revolución agroecológica de América Latina: Rescatar la naturaleza, asegurar la soberanía alimentaria y empoderar al campesino, Miguel A. Altieri, y Víctor Manuel Toledo, p. 178.

adquirir conocimientos y saberes respecto a los ecosistemas existentes en estas áreas, pero también generar procesos de apropiación social y política de los territorios[27], conduciendo a la conformación de organizaciones sociales que entran en tensión con el Gobierno ante políticas económicas incompatibles con sus formas de habitar los ecosistemas, sean de conservación estricta o de explotación y extracción de recursos.

No obstante, como se mencionó previamente, la normatividad en materia ambiental presenta serias restricciones para las comunidades rurales que habitan áreas de protección ambiental, y el endurecimiento de la legislación penal y el control territorial a través de políticas militares hace todavía más difícil el reconocimiento de este rol de conservación. Al respecto, por ejemplo, desde el año 2019 el Gobierno ha implementado la "Estrategia Artemisa contra la deforestación", encabezada por el Ministerio de Defensa y a cargo del Ejército Nacional.

Un año después de la firma del Acuerdo de Paz, el país perdió 219.973 hectáreas de bosque natural, un aumento del 23 % con respecto al año inmediatamente anterior[28]. Para contrarrestar esta situación, la Oficina Ambiental de Planeación del Ejército Nacional asumió la tarea de poner en marcha la estrategia a través de 88 viveros forestales ubicados en los Comandos de División en diferentes zonas del país. La primera fase de esta estrategia comenzó en los Parques Nacionales Naturales de la Serranía de Chiribiquete y Sierra de La Macarena, extendiéndose luego al Resguardo Llanos de Yarí en el Caquetá y al Parque Nacional Natural La Paya en el Putumayo.

Según el Ejército Nacional, tras cinco fases y año y medio de implementación, la campaña Artemisa ha realizado 244 operaciones militares (en los PNN Tinigua, Chiribiquete, La Paya, Macarena y Picachos), recuperado 5.917 hectáreas de Parques Naturales, capturado a 224 personas por delitos ambientales e invertido 3.000 millones de pesos[29]. Adicionalmente, la citada oficina reporta que, a pesar de la pandemia, ha continuado sembrando árboles con el propósito de mitigar el daño ambiental y ha logrado producir 257.214 especies nativas como frailejones, palma y caucho, entre otras[30].

Aunque a simple vista podría pensarse que esas cifras ofrecen un respaldo a la estrategia del Gobierno, esta apreciación no se puede tomar a la ligera teniendo en cuenta que la intervención militar para detener la deforestación en contextos como el Área de Manejo Especial de La Macarena, ubicada entre los Parques Nacionales Tinigua y Sierra de La Macarena, puede representar serios problemas para las comunidades que habitan la región.

En el mismo sentido, la Zona de Reserva Campesina del Guaviare, la Reserva Forestal de la Amazonia y el Resguardo Indígena Nukak Makú en el Guaviare, presentan elementos comunes de acaparamiento de tierras a manos de actores armados ilegales. En estas zonas protegidas, desmontar una hectárea de bosque puede costar entre 500 mil y 1 millón de pesos, por lo que el campesinado –en su mayoría de escasos recursos- no es el principal actor de la deforestación.

---

[27] David Schlosberg, "Climate Justice and Capabilities: A Framework for Adaptation Policy", Ethics & International Affairs,26, no.4 (2012), pp. 445–461.

[28] Ver: https://www.elespectador.com/ambiente/que-tan-efectiva-ha-sido-la-intervencion-militar-para-detener-la-deforestacion-article/ 21 de septiembre de 2020.

[29] Ver: https://www.elespectador.com/ambiente/que-tan-efectiva-ha-sido-la-intervencion-militar-para-detener-la-deforestacion-article/ 21 de septiembre de 2020.

[30] Ver: Así va la operación Artemisa con la que el Ejército trabaja por reforestar - Servicios - Justicia - ELTIEMPO.COM 12 de agosto de 2020.

No obstante, el peso de la estrategia militar sí ha recaído sobre las familias campesinas, quienes se han visto judicializadas y han denunciado abusos de fuerza en el desarrollo de las operaciones, como los presentados en el Área de Manejo Especial de La Macarena, donde resultaron dos personas muertas y veinte capturadas. Por ello, en febrero de 2020, la voz de las comunidades campesinas y procesos organizativos de la región -algunos de los cuales suscriben la presente acción de inconstitucionalidad- se hizo sentir para oponerse a los operativos y capturas de personas que desarrollan actividades de subsistencia en las áreas protegidas, pero no son los principales actores que cometen delitos ambientales para, por ejemplo, introducir cabezas de ganado en zonas protegidas como un método de ocupación.
Con la anterior exposición queremos poner de manifiesto un contexto general que cobija los tres cargos de proporcionalidad, estricta legalidad y desconocimiento de la obligación de cumplir de buena fe el Acuerdo Final de Paz examinados a continuación. Como podrá observarse en el desarrollo de cada uno de los cargos enunciados, lo que está en pugna es: (i) la plena observancia de principios constitucionales que deben ser garantizados por el legislador en el uso del derecho penal como mecanismo para la protección de recursos naturales de fauna, flora e hídricos como bienes jurídicos tutelados, y (ii) la garantía de derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional que se encuentran en zonas de protección ambiental que hacen parte de tales bienes jurídicos tutelados.

6. CARGOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ALEGADOS SOBRE LA NORMA

6.1. CARGO 1: VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

Normas acusadas: Artículo 336. *Invasión de áreas de especial importancia ecológica* y artículo 336A. *Financiación de invasión de áreas de especial importancia ecológica*, adicionados y/o modificados por el artículo 1 de la Ley 2111 de 2021 al Código Penal, Ley 599 de 2000

6.1.1. Contenido y alcance del principio de proporcionalidad

El artículo 1° de la Constitución Política establece que Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto a la dignidad humana, precepto que no debe entenderse como meramente enunciativo, sino que tiene repercusiones en la construcción del derecho nacional, como la imposición de límites a la libertad de configuración punitiva del legislador. En un Estado constitucional y social de derecho son los asociados quienes tienen la titularidad de los derechos reconocidos por el ordenamiento legal, de manera tal que la institucionalidad existe para proteger y garantizar dichas prerrogativas. En este sentido, ninguna institución pública, ni siquiera el legislador, puede restringir los derechos fundamentales salvo que se trate de una medida estrictamente necesaria y útil para alcanzar una finalidad constitucionalmente valiosa y cuando el beneficio, en términos constitucionales, sea superior al costo que la restricción apareja[31].

En el campo del derecho penal la Corte Constitucional ha señalado en su jurisprudencia que el margen de configuración punitiva del Congreso tiene como extremos las prohibiciones dadas por el constituyente (artículos 11, 12 y 13 superiores) y las conductas que está obligado a criminalizar de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos (genocidio, tortura, desaparición forzada, etc.)[32]. En el intermedio se encuentra su campo de acción en donde el texto superior hace las veces de carta de navegación: señala rutas e impone restricciones a la labor legislativa.

[31] Corte Constitucional, sentencia C-720 de 2007.
[32] Ibídem.

Estas restricciones son fijadas por los principios de necesidad, de exclusiva protección de bienes jurídicos, estricta legalidad, culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad[33] del derecho penal moderno, los cuales son aplicados desde la óptica de los valores, principios y derechos reconocidos en la Constitución[34]. Así las cosas, el legislador solamente puede tipificar aquellas conductas que ocasionen lesiones graves a los bienes jurídicos que la sociedad considere más valiosos y cuya protección solo sea posible por medio de las instituciones del derecho penal.
En el presente caso, el legislador transgredió los límites marcados por el principio de proporcionalidad que la Corte ha relacionado con la obligación intrínseca de respetar los derechos fundamentales y con los principios de necesidad del derecho penal y de razonabilidad de los delitos y las penas.

La obligación de respetar los derechos fundamentales, especialmente su núcleo esencial, implica considerar a los tipos penales no solo como mecanismos de protección de bienes jurídicos, sino también como restricciones severas al ejercicio de derechos[35], de forma tal que en su redacción el legislador debe tener en cuenta las afectaciones reales y materiales que su actividad pueda generar a las garantías fundamentales de la ciudadanía[36].

La jurisprudencia constitucional ha reconocido la existencia de un *corpus iuris campesino* compuesto por los derechos a la alimentación, el mínimo vital, el trabajo, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de escoger profesión u oficio, reconociendo a la par que las actuaciones de la administración deben encaminarse a garantizar su subsistencia, promover la realización de su proyecto de vida y garantizar el goce efectivo de los mencionados derechos[37].

Este reconocimiento de derechos se ve reforzado con la declaratoria del campesinado como una población vulnerable que ha sido discriminada e invisibilizada históricamente, por lo cual se ha sostenido que, en circunstancias de marginalización, pobreza y absoluta dependencia de la explotación de la tierra, las personas campesinas deben ser consideradas sujetos de especial protección constitucional. Señala la Corte:

> Para la población campesina del país, los riesgos surgen tanto de la permanencia de un estado de cosas específico, esto es, el nivel de marginalización y vulnerabilidad socioeconómica que los ha afectado tradicionalmente; como de los cambios que están teniendo lugar en los últimos tiempos, a saber: las modificaciones profundas en la producción de alimentos, al igual que en los usos y en la explotación de los recursos naturales[38].

El estándar de protección se incrementa cuando en la persona concurren otras condiciones de vulnerabilidad: situación de discapacidad, situación de desplazamiento forzado, si se es mujer cabeza de familia, si se es menor de edad, adulto mayor, etc.

En el caso que se somete a estudio de la Corte la persistencia de los artículos 336 y 336A del Código Penal en el ordenamiento jurídico colombiano redunda en la criminalización de la presencia de familias campesinas en parques naturales y zonas de reserva forestal, y conlleva a que se desconozcan los derechos fundamentales a la vivienda, la soberanía alimentaria, la libertad personal y el acceso a la tierra.

---

[33] Corte Constitucional, sentencia C-939 de 2002.
[34] Corte Constitucional, sentencias C-038 de 1995, C-070 de 1996, C-442 de 2011 y C-742 de 2012.
[35] Corte Constitucional, sentencia C-241 de 2012.
[36] Corte Constitucional, sentencias C-587 de 1992, C-125 de 1996, C-239 de 1997, C-404 de 1998, C-177 de 2001, C-442 de 2011 y C-241 de 2012.
[37] Corte Constitucional, sentencia C-077 de 2017.
[38] Corte Constitucional, sentencia T-348 de 2012.

Como se expuso *supra*, en la sección de contexto y alcances de la norma demandada, el Estado colombiano ha adelantado operativos conjuntos entre la Fiscalía General de la Nación y las fuerzas militares con el fin de judicializar a los campesinos que viven al interior de parques nacionales naturales y zonas de reserva forestal. Estos operativos han causado serios vejámenes a los derechos fundamentales de quienes resultan procesados y son prueba del uso desmedido e irracional del derecho penal para tramitar conflictos por el uso de la tierra.

El deber del legislador de obrar conforme al principio de necesidad tiene fundamento en el carácter subsidiario y fragmentario del derecho penal e implica mantener al derecho penal como *última ratio*, de tal suerte que para criminalizar una conducta se requiere que no existan otros medios de control menos gravosos, o cuando existiendo y aplicándose hayan fallado[39]. En palabras de la Corte:

> i) El derecho penal sólo es aplicable cuando para la protección de los bienes jurídicos se han puesto en práctica otras medidas no represivas, que pueden ser, por ejemplo, de carácter laboral, administrativo o mercantil, y ellas han resultado insuficientes; por tanto, sería desproporcionado e inadecuado comenzar con una protección a través del derecho penal.
> ii) El Estado debe graduar la intervención sancionadora administrativa y penal, de modo que siempre que sea posible alcanzar el amparo del bien jurídico mediante el recurso a la potestad sancionadora de la administración, debe preferir ésta a la penal, por ser menos gravosa, al menos para las conductas menos dañosas o menos peligrosas[40].

Lo anterior implica que el Estado tiene el deber de buscar alternativas de solución menos lesivas que el derecho penal para resolver los conflictos que puedan surgir entre los ciudadanos y entre aquellos y la administración. Así, serán preferibles los procedimientos y trámites administrativos sobre la criminalización primaria, orden de prioridades que parece invertir el legislador con la tipificación de la permanencia de campesinos en reservas forestales y parques naturales.

La parte accionante entiende que uno de los objetivos que guían la criminalización primaria y secundaria de quienes habitan en zonas ambientalmente protegidas es la preservación del ambiente y la lucha contra la deforestación. No obstante, no es constitucionalmente admisible aplicar las mismas medidas sancionatorias a supuestos de hecho altamente disímiles: la persecución y sanción de los grandes proyectos de tala ilegal, de contrabando de especies, de deforestación y erosión del suelo y de aquellas actividades que impliquen una gran destrucción de recursos biológicos no es comparable con las actividades de subsistencia de poblaciones vulnerables y marginalizadas.

Ahora bien, la doctrina ha señalado que los principios de razonabilidad y de proporcionalidad del tipo y de la pena conducen a ponderar las finalidades de prevención y represión del delito con los derechos fundamentales de las personas y con los valores y principios que emanan de la Carta Política.

Como bien señaló el magistrado Alejandro Linares Cantillo[41], a pesar de la posibilidad técnica de separar los componentes del principio de necesidad de las penas de los de razonabilidad y proporcionalidad, un adecuado estudio constitucional analizaría la norma demandada a partir de ambos postulados, ya que no sería posible concluir que una medida penal que no resulta necesaria sea, no obstante, proporcionada.

---

[39] Corte Constitucional, sentencias C-647 de 2001, C-226, C-312, C-370, C-489 y C-762 de 2002, C-897 de 2005, C-355 y C-988 de 2006, C-575 y C-636 de 2009 y C-442 de 2011.
[40] Corte Constitucional, sentencia C-356 de 2003.
[41] Corte Constitucional, sentencia C-203 de 2016.

Al coincidir la argumentación para responder a los cargos de necesidad con los de razonabilidad y proporcionalidad del delito y la pena, el examen de constitucionalidad debe llevar a que la Sala Plena se pregunte si la conducta sobre la que se erige un reproche constitucional tiene la virtualidad de afectar gravemente bienes jurídicos de especial relevancia para el ordenamiento y si la pena efectivamente persigue la realización de fines constitucionales. En línea con lo anterior, esta Corporación ha explicado que:

> Si bien el Legislador cuenta con una amplia potestad de configuración normativa para el diseño de la política criminal del Estado y, en consecuencia, para la tipificación de conductas punibles es evidente que no por ello se encuentra vedada la intervención de la Corte cuando se dicten normas que sacrifiquen los valores superiores del ordenamiento jurídico, los principios constitucionales y los derechos fundamentales[42].

Considerar como típicas, antijurídicas y culpables las actividades esenciales para la supervivencia de los campesinos solo por el lugar en el que estas se desarrollan genera un manto de duda respecto a la proporcionalidad de la medida, más aún cuando el ordenamiento legal no prevé alternativas de relocalización o construcción conjunta de planes de manejo ambiental. En este sentido, se hace necesario aplicar el 'test de proporcionalidad' a la norma demandada, método que ha decantado la jurisprudencia y la doctrina constitucional para resolver la colisión de derechos o principios.

El juicio de proporcionalidad se basa en la premisa conforme a la cual el Estado solo puede restringir los derechos fundamentales cuando tiene razones constitucionales suficientes y públicas para justificar su decisión, de manera que la restricción solo podrá efectuarse cuando se trata de una medida estrictamente necesaria y útil para alcanzar una finalidad constitucionalmente valiosa y cuando el beneficio en términos constitucionales es superior al costo que la restricción apareja. Cualquier restricción que no supere este juicio carece de fundamento constitucional y, por lo tanto, debe ser expulsada del ordenamiento jurídico.

El uso del juicio de proporcionalidad sirve al propósito fundamental de analizar la constitucionalidad de las decisiones del órgano legislativo que pueden comprometer los derechos fundamentales y, al mismo tiempo, limitar la discrecionalidad judicial en estos asuntos sensibles. Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad no se aplican con la misma intensidad en todos los eventos, sino que, para el caso del control de constitucionalidad, ella depende de la materia objeto de la norma demandada y del grado de legitimidad y representatividad democrática de la autoridad que la expide.

De conformidad con los avances jurisprudenciales, el *test de proporcionalidad* constituye un instrumento hermenéutico para realizar un juicio de valor que, de una parte, evalúe las repercusiones negativas derivadas de una medida en otros intereses jurídicos de igual jerarquía; y, de otra, estudie la conducencia e idoneidad del medio escogido para la consecución de unos fines constitucionalmente deseables. El objetivo de su aplicación es determinar si los intereses jurídicos en balanza se encuentran nivelados o si, por el contrario, existe alguno que se esté viendo claramente desfavorecido[43].

Así, la Corte ha distinguido tres niveles de intensidad en la aplicación del juicio o test de proporcionalidad:

---

[42] Corte Constitucional, sentencias C-247 de 2004 y C-334 de 2013.
[43] Corte Constitucional, sentencia C-835 de 2013.

1. El test leve según el cual basta con que la medida persiga un fin legítimo y que resulte idónea para alcanzarlo.

2. El test intermedio, en el cual ya no solo se requiere que el fin sea legítimo sino además constitucionalmente importante, mientras que el medio no solo debe ser adecuado sino efectivamente conducente para alcanzar dicha finalidad. Este estándar debe aplicarse cuando la medida pueda afectar el goce de un derecho constitucional no fundamental, o cuando existe un indicio de arbitrariedad.
3. El test estricto, en donde se exige no solo que el fin perseguido sea legítimo e importante, sino además imperioso. El medio escogido debe ser adecuado, efectivamente conducente y necesario, o sea, que no pueda ser reemplazado por un medio alternativo menos lesivo. Adicionalmente, se incluye la aplicación de un juicio de proporcionalidad en sentido estricto, conforme al cual los beneficios de adoptar la medida enjuiciada deben ser claramente superiores a las restricciones que ella impone a los principios constitucionales afectados con la misma.

El test estricto se aplica cuando está de por medio una clasificación sospechosa como las enumeradas en forma no taxativa en el artículo 13 de la Constitución; o cuando la medida recae principalmente en personas en condiciones de debilidad manifiesta, grupos marginados o discriminados, sectores sin acceso efectivo a la toma de decisiones o minorías insulares; o también cuando la medida *prima facie* afecte el goce de un derecho constitucional fundamental y cuando se examina una medida que crea un privilegio. Al respecto, la Corte ha precisado que:

> La estructura argumentativa de la proporcionalidad en sentido estricto se compone de tres etapas, a saber: (i) determinar las magnitudes que deben ser ponderadas, quiere ello decir, establecer la importancia de la medida de intervención legislativa en el derecho fundamental afectado, e indicar la importancia de la realización del fin perseguido por la intervención legislativa; (ii) comparar dichas magnitudes, con el propósito de determinar si la importancia de la realización del fin perseguido por la restricción legislativa es mayor que la importancia de la intervención en el derecho fundamental; y, (iii) elaborar una relación de precedencia condicionada entre el derecho fundamental y el fin legislativo, tomando como cimiento el resultado de la comparación antedicha con el fin de asignar prioridad a alguno de los extremos en el caso concreto[44].

De este modo, siguiendo la metodología propuesta para el test de proporcionalidad en sentido estricto, la Corte ha entrado a evaluar si la restricción a derechos fundamentales generada por una medida cuestionada resulta equivalente a los beneficios que reporta, o si, por el contrario, es desproporcionada ocasionando una afectación mucho mayor a estos intereses jurídicos de orden superior[45].

En el presente caso corresponde aplicar el test de proporcionalidad en su versión más estricta, toda vez que la medida afecta de manera cierta el goce de derechos constitucionales fundamentales como la libertad personal, la libertad de circulación, el mínimo vital y el libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Además, tiene la virtualidad de recaer sobre personas en situación de debilidad manifiesta, como lo son las familias campesinas en situación de ocupación de PNN u otras áreas de protección ambiental.

En ese orden de ideas, a continuación, será analizada la relación costo-beneficio que la medida acusada representa, esto es, de un lado, los beneficios que tiene la virtualidad de reportar y, de otro, los costos que su obtención implica, con el objetivo de evidenciar cómo no supera un juicio estricto de proporcionalidad y, por consiguiente, debe ser declarada inconstitucional.

---

[44] Ibíd.
[45] Corte Constitucional, sentencia C-144 de 2015.

6.1.2. Aplicación del test estricto de proporcionalidad

Armonizar el deber de protección estatal que recae sobre el ambiente, a la par del reconocimiento de la población campesina como un especial sujeto de derechos, es una tarea que ha venido realizando la Corte en el desarrollo de su jurisprudencia.

Así, aunque ha reconocido la relevancia jurídica del derecho a un ambiente sano que implica un mandato de protección activa y eficaz del ambiente, derivado de los artículos 8, 79 y 95 superiores, conocidos como los artículos que establecen los cimientos de la llamada Constitución Ecológica[46], también ha defendido al campo y a los campesinos como bien jurídico y sujeto de especial protección constitucional, respectivamente. Veamos:

Por un lado, según lo expuesto por la Corte, la defensa de un ambiente sano como uno de los objetivos del Estado social de derecho tiene una triple dimensión:

> [D]e un lado, la protección al medio ambiente es un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación. De otro lado, aparece como el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales. Y, finalmente, de la constitución ecológica derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares.

De otro lado, la Constitución de 1991 reconoció los derechos de la población campesina desde un enfoque productivista en los artículos 64, 65 y 66, es decir, el reconocimiento hecho por el constituyente principalmente se centró en el trabajador agrario y la tierra vista como medio de producción, dejando por fuera del texto constitucional otros ámbitos que se construyen más allá de la esfera económica en las dimensiones políticas, sociales, culturales y ambientales edificantes de la relación campesina con la tierra.

Debido a esta ausencia de reconocimiento integral del campesinado en tanto población que se relaciona de manera especial con la tierra, y produce formas particulares de organización socio ambiental en sus territorios, se han generado condiciones históricas de vulnerabilidad y discriminación, sumadas a la afectación derivada de los cambios en la producción de alimentos y las presiones del capital para apropiarse de tierras[47]. En virtud de ello, la Corte Constitucional les hizo un reconocimiento como sujetos de especial protección de la siguiente manera:

> [L]os campesinos y los trabajadores rurales son sujetos de especial protección constitucional en determinados escenarios. Lo anterior, atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad y discriminación que los han afectado históricamente, de una parte, y, de la otra, a los cambios profundos que se están produciendo, tanto en materia de producción de alimentos, como en los usos y la explotación de los recursos naturales.
>
> Teniendo en cuenta la estrecha relación que se entreteje entre el nivel de vulnerabilidad y la relación de los campesinos con la tierra, nuestro ordenamiento jurídico también reconoce en el "campo" un bien jurídico de especial protección constitucional, y establece en cabeza de los campesinos un Corpus iuris orientado a garantizar su subsistencia y promover la realización de su proyecto de vida.
>
> Este Corpus iuris está compuesto por los derechos a la alimentación, al mínimo vital, al trabajo, y por las libertades para escoger profesión u oficio, el libre desarrollo de la personalidad, y la participación, los cuales pueden interpretarse como una de las manifestaciones más claras del postulado de la dignidad humana[48].

---

[46] Desde sus albores, la Corte ha desarrollado una comprensión integral de las disposiciones constitucionales que exigen la protección del ambiente partiendo desde el mismo preámbulo de la Carta. Al respecto, puede consultarse la sentencia T-411 de 1992, entre otras.
[47] Ver, entre otras, las sentencias C-021 de 1994, C-536 de 1997, C-644 de 2012 y C-077 de 2017.
[48] Corte Constitucional, sentencia C-077 de 2017.

Esta jurisprudencia ha sido recogida por el Ministerio Público buscando mecanismos para su efectivo cumplimiento. Así lo hizo la Procuraduría General de la Nación en su Directiva 007 del 11 de junio de 2019 sobre *"Lineamientos para el reconocimiento, prevención, promoción y defensa de los derechos del campesinado"*, dirigida a funcionarios del Ministerio Público, autoridades públicas nacionales, departamentales distritales y municipales y servidores públicos. En dicha directiva, la Procuraduría General de la Nación reconoce al campesinado como sujeto de derechos integrales y sujeto de especial protección constitucional, y exhorta a las autoridades de todos los niveles de la administración pública a establecer planes y programas para materializar este reconocimiento.

Recientemente la Corte, en sentencia C-300 de 2021, hizo el estudio sobre la constitucionalidad del inciso 3 del artículo 10 de la Ley 1930 de 2018, donde tuvo lugar la aplicación del test de no regresividad en materia ambiental y, luego, el análisis estricto de proporcionalidad de la medida, conforme se sintetiza a continuación.

En primer lugar, delimitó el contenido y alcance de la norma acusada que admite la continuidad de actividades agropecuarias en ecosistemas delimitados como páramos bajo tres condiciones: (i) que tengan bajo impacto; (ii) que ya se vinieran desarrollando antes de la promulgación de la Ley 1930 de 2018; y (iii) que para el efecto se haga uso de buenas prácticas, v. gr., cumplir el plan de manejo ambiental del área en la cual son ejecutadas, o respetar las prohibiciones contenidas en el artículo 5 de esa misma ley.

En segundo lugar, agotó el test de no regresividad encontrando que si bien con la norma acusada se disminuye el nivel de protección anteriormente previsto en otras disposiciones legales que sí prohibían cualquier tipo de actividad agropecuaria en los ecosistemas paramunos, y que resulta moderada con la permisividad de que sean actividades de bajo impacto, ello no genera una afectación al contenido esencial o mínimo del derecho al ambiente, por dos razones: primera, porque no se trata de una autorización amplia que faculte la realización de cualquier actividad productiva dentro de los páramos (está condicionada a ser agropecuaria de bajo impacto); y segunda, porque escapa al ámbito de las facetas relacionadas con el principio de no discriminación.

En tercer lugar, procedió a desarrollar el test estricto de proporcionalidad advirtiendo dos finalidades constitucionalmente imperiosas perseguidas por la norma acusada: la protección de los derechos al territorio, la seguridad alimentaria y la identidad cultural de las comunidades campesinas paramunas, de una parte, y el reparto equitativo de las cargas que impone la protección de los páramos como ecosistemas estratégicos para la producción de agua, la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad, de la otra[49].

Al evaluar el requisito de idoneidad, la Corte encontró que la medida lo satisface, pues permite a las comunidades campesinas paramunas continuar habitando su territorio, así como labrar la tierra para obtener su alimento y la comercialización de productos articulados en el ciclo económico local, desde luego, orientadas por buenas prácticas que cumplen con los estándares ambientales y en defensa de los páramos[50].

[49] Corte Constitucional, sentencia C-300 de 2021.
[50] Ibíd.

Respecto del requisito de necesidad, destacó que el legislador desde una perspectiva de justicia ambiental haya optado por una medida menos regresiva, puesto que, por ejemplo, adoptar una prohibición de las actividades agropecuarias de bajo impacto, así fuese acompañada de medidas económicas compensatorias, no permite garantizar los derechos fundamentales al territorio, la seguridad alimentaria y la supervivencia cultural de las familias campesinas habitantes de páramos.

Además, resaltó la existencia de evidencia científica que demuestra el impacto positivo de involucrar a la población habitante paramuna en los procesos de conservación, preservación y restauración de esos ecosistemas.

Por último, concluyó que la autorización prevista en el artículo 10 de la Ley 1930 de 2018 comporta deberes a cargo del Estado, la sociedad civil y la comunidad académica y científica, de modo que para la continuidad de actividades agropecuarias de bajo impacto en ecosistemas paramunos se requiere realizar inversión pública, acompañamiento institucional y transferencias de ciencia, tecnología e innovación hacia las comunidades campesinas a quienes cobija, a fin de que estas puedan adaptar sus formas de producción. Tal perspectiva es coherente con la superación del paradigma estrictamente "preservacionista" que pretendía mantener los ecosistemas de especial protección libres de toda intervención humana, y que ha venido siendo reemplazado por modelos mixtos de conservación:

> El paradigma preservacionista fue controvertido en la comunidad académica y desde finales de la década de los setenta se formularon modelos mixtos de conservación, en parte como respuesta a las consecuencias que esta visión de la protección ambiental tiene en la capacidad estatal de hacerse a las tierras de las zonas protegidas, el ejercicio de los derechos las comunidades que habitan los territorios protegidos, ya sea por la contaminación, la depredación de recursos naturales y la imposibilidad de ejercer actividades para garantizar su subsistencia o, inclusive, por ser la causa de desplazamientos. Este giro incorporó la atención por la conservación del medio ambiente, una preocupación por los grupos más vulnerables de la sociedad y su calidad de vida. El modelo de áreas protegidas y parques naturales, si bien conservó los elementos esenciales del paradigma proteccionista, fue adaptándose para extender la acción de conservación al trabajo con las comunidades aledañas a las áreas protegidas. Así, surgió un nuevo paradigma de conservación que integra una perspectiva de derechos humanos y que sostiene que estos dos componentes son inseparables y requieren el uno del otro; el conservacionismo, por un lado, conlleva la garantía de derechos como la salud, el medio ambiente y la seguridad alimentaria, por una parte y, por la otra, el enfoque de derechos humanos en la conservación del medio ambiente crea las condiciones para que la protección sea efectiva y las políticas no resulten meros enunciados[51].

En síntesis, la anterior decisión es un precedente valioso, cuya referencia resulta del todo pertinente para el caso concreto, porque allí la Corte continúa avanzando en la armonización entre derechos campesinos y de pobladores rurales y la protección del ambiente, de manera que sea posible gestionar modelos de ordenamiento, uso y gestión ambiental desde una participación activa y eficaz de esas comunidades, donde las actividades antrópicas, en lugar de ser tajantemente prohibidas, entren a ser objeto de regulación, teniendo presente el contexto ecológico y sociocultural existente en cada ecosistema. Es precisamente con este entendimiento como se procede a desarrollar cada una de las etapas del test estricto de proporcionalidad sobre las medidas tachadas de inconstitucionalidad a continuación.

En el test estricto de proporcionalidad, la validez de la disposición analizada depende de que el medio elegido para el logro del fin que se ha identificado como constitucionalmente imperioso sea efectivamente conducente para el efecto. Es decir, en este primer estadio del test, el juez constitucional debe determinar

[51] Corte Constitucional, sentencia C-300 de 2021.

si "*la injerencia que el Estado pueda generar en la efectividad de un derecho fundamental resulta lo suficientemente apta o adecuada para lograr el fin que se pretende conseguir*"[52].

En este caso, corresponde a la Corte determinar si la criminalización de las conductas de invasión de áreas de especial importancia ecológica, así como su financiación, constituye una medida realmente idónea para el logro del fin constitucional perseguido: la protección del ambiente, la garantía del derecho a un ambiente sano y la reversión de los efectos del cambio climático.
De acuerdo con el IDEAM en 2020 se deforestaron 171.685 Has en el país, un descenso de apenas el 8 % en relación con 2019. En ese mismo informe, el IDEAM destacó que la deforestación se concentra en los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Antioquia[53]. Asimismo, señaló como principales causas de la deforestación: la praderización para acaparamiento de tierras, malas prácticas en ganadería extensiva, extracción ilícita de minerales, cultivos de uso ilícito y la ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas. Muchas fueron las reacciones al informe del IDEAM, entre ellas la de WWF, entidad que afirmó:

> En la Amazonia, la deforestación está en su mayoría conectada con un proceso de apropiación de tierras que es el síntoma de la bajísima gobernabilidad y la falta de institucionalidad en la zona. El fenómeno de la apropiación se da en varios pasos: inicia con la deforestación y luego hay dos caminos: la potrerización, con la que pasan a ejercer una actividad legal pero informal, dedicándose a la ganadería extensiva, o la vía ilegal, con la que siembran cultivos ilícitos en los terrenos. Estas actividades se dinamizaron durante la pandemia[54].

Como advierte WWF, la problemática ambiental en el país, en general, y en la Amazonía, está atravesada por varios factores que exceden el ámbito de aplicación o de persuasión del derecho penal; detrás de la deforestación hay una grave crisis en la gobernanza de la tierra y en la democratización de su uso y tenencia, atravesado por la poca o selectiva presencia estatal en los departamentos del sur del país. Estas dinámicas ya han sido conocidas por los jueces constitucionales, quienes han reconocido que:

> Los reseñados factores, generan directamente la deforestación de la Amazonía, provocando a corto, mediano y largo plazo, un perjuicio inminente y grave para los niños, adolescentes y adultos que acuden a esta acción, y en general, a todos los habitantes del territorio nacional, tanto para las generaciones presentes como las futuras, pues desboca incontroladamente la emisión de dióxido de carbono (CO_2) hacia la atmósfera, produciendo el efecto invernadero, el cual transforma y fragmenta ecosistemas, alterando el recurso hídrico y con ello, el abastecimiento de agua de los centros poblados y degradación del suelo[55].

Tramitar conflictos por el uso, la ocupación y la tenencia (UOT) de la tierra a través del derecho penal únicamente pone el foco de atención en el castigo de los responsables materiales que el sistema logre identificar, pero no brinda ninguna respuesta a las necesidades de reforestación del territorio, de manera que no alcanza, a cabalidad, el fin de preservar el ambiente. La persecución penal no logrará, *per se*, reducir el índice anual de deforestación por debajo del 100 %.

Con ocasión de estos conflictos socioambientales, el Instituto Humboldt, la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) y más de 100 expertas y expertos temáticos y sabedores de pueblos y comunidades locales de las diversas regiones del país,

---

[52] Corte Constitucional, sentencia C-144 de 2015.
[53] Véase IDEAM (2021), Resultados del monitoreo de deforestación año 2020 y primer trimestre del 2021. Disponible: http://www.ideam.gov.co/documents/10182/113437783/Presentacion_Deforestacion2020_SMByC-IDEAM.pdf/8ea7473e-3393-4942-8b75-88967ac12a19
[54] WWF (2021), ¿Qué representa el incremento del 8 % en la deforestación en Colombia? Nuestros expertos lo explican https://www.wwf.org.co/en/?367792/Que-representa-el-incremento-del-8-en-la-deforestacion-en-Colombia-Nuestros-expertos-lo-explican
[55] Corte Suprema de Justicia, STC 4360, sentencia del 5 de abril de 2018.

presentaron la primera Evaluación Nacional de Pérdida de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, con el apoyo de la ONU, donde presentan una serie de recomendaciones para los tomadores de decisiones. Dentro de las recomendaciones es importante resaltar que señalan:

> Las áreas de mayor conservación de los bosques en el país coinciden en gran medida con territorios donde los pueblos indígenas, negros, afrodescendientes, palenqueros, raizales, campesinos y de otras comunidades locales desarrollan sistemas propios de gobierno y manejo, por lo cual es urgente reconocer y articular de forma más clara los conocimientos y sistemas de gobernanza comunitaria y la institucionalidad ambiental.
>
> Es necesario reconocer la bioculturalidad, entendida como los estrechos vínculos entre la diversidad biológica y cultural de los pueblos indígenas, negros, raizales, campesinos y de otras comunidades locales, para integrarla en las distintas políticas públicas tanto ambientales y culturales, como sociales, políticas y económicas, en la medida en que a través de estas políticas se pueden proteger efectivamente dichos vínculos. Más específicamente, los acuerdos, reglamentos, protocolos y estrategias de los pueblos para la protección y manejo de sus territorios y su biodiversidad (planes de vida indígena, planes de etnodesarrollo de territorios de comunidades afro, negras, raizales y palenqueras, y planes de desarrollo sostenible de las zonas de reserva campesina, así como otros acuerdos locales para el manejo y el cuidado del territorio) deben ser reconocidos dentro de la planificación de los entes territoriales y demás autoridades, dotándolos de financiación y apoyo para su implementación, gestión y seguimiento (4.1.1)[56].

Cabe recordar que durante el trámite del proyecto de ley de la norma examinada, la entonces iniciativa legislativa tuvo concepto negativo del Consejo Superior de Política Criminal. Aunque si bien en el documento no se hizo referencia directa al artículo examinado, sí precisó que la iniciativa en su integralidad carecía de fundamentación empírica, proporcionalidad, intervención mínima y razonabilidad, todos principios que deben regir la política criminal del Estado. Por lo anterior, se hace necesario que el Estado redoble sus esfuerzos por encontrar soluciones a los problemas de UOT desde una política pública con enfoque de derechos, cuyo marco normativo ya existe, y no desde el énfasis en el derecho penal.

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 en su artículo 253 consagró el deber del Ejecutivo nacional de construir una política pública para el campesinado junto con las asociaciones campesinas; el artículo 7 de este mismo Plan facultó al gobierno para "*celebrar acuerdos con población campesina en condición de vulnerabilidad, que habite, ocupe o realice usos tradicionales asociados a la economía campesina en áreas protegidas del SINAP que deriven su sustento de estos usos y que puedan ser reconocidos por las entidades que suscriben los acuerdos con una relación productiva artesanal y tradicional con el área protegida*"; la sentencia STC 4360 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia le ordenó al gobierno nacional construir un Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano (PIVAC) y un Plan de Acción en contra de la deforestación de la Amazonía en conjunto con la sociedad civil; y la ya reseñada sentencia C-300 de 2021 dio mayores herramientas de armonización entre el derecho ambiental y los derechos fundamentales del campesinado.

Este marco normativo debería materializar los acuerdos celebrados entre el Gobierno nacional y el campesinado en procesos de negociación como, por ejemplo, el de San Juan de Lozada en el año 2019, medidas que propenden por la protección del ambiente y por el reconocimiento del campesinado como sujeto activo en la reforestación y la guardia de la Amazonía y como sujeto del derecho a la participación en asuntos ambientales.

En esa misma línea, este alto tribunal ha sostenido que a la hora de tomar decisiones en materia de ordenamiento territorial es preciso *"respetar los espacios de participación que la Constitución y las leyes*

[56] Evaluación Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Resumen para Tomadores de Decisión, pág. 23. Tomado de http://www.humboldt.org.co/images/pdf/RTD%20Final%20v290521%20Lanzamiento.pdf

reconocen a la ciudadanía para expresarse y decidir sobre la vocación productiva de sus territorios y sobre las ofertas de desarrollo que puedan causar impactos en su medio ambiente y en sus vidas"[57].

De igual forma, la Corte ha reconocido en el escenario de decisión de acciones de tutela que las demandas de justicia participativa son un componente de la justicia ambiental[58] y, en ese orden, ha indicado que corresponde a las entidades públicas encargadas de garantizar un ambiente sano posibilitar:

> [L]a conformación de espacios de participación ciudadana que permitan a los pobladores describir sus hábitos y costumbres en relación con el entorno del área que habitan, para con ello obtener un diagrama que conduzca a deducir las probables afectaciones que sufrirían por el impacto generado en la ejecución de grandes proyectos industriales, así como determinar los correspondientes mecanismos de mitigación según las características de cada caso particular[59].

La jurisprudencia constitucional ha protegido en distintos escenarios el derecho fundamental a la participación ambiental de las comunidades en las decisiones de las autoridades. En la sentencia T-316 de 2017 se encuentra una compilación de decisiones de amparo adoptadas en relación con: (a) los procedimientos de planeación, implementación y construcción de rellenos sanitarios; (b) las prohibiciones de actividades que afectan el ambiente y generan sustento a poblaciones marginadas; y (c) la ejecución de proyectos de infraestructura con impacto en el ambiente o las condiciones de vida de personas en situación vulnerable[60].

En esta misma línea la Corte ha sostenido que: *"la participación de la sociedad en materia ambiental juega un rol central en la obtención de un orden justo, puesto que la intervención de las personas es una condición imprescindible para alcanzar la sostenibilidad de los ecosistemas y la distribución equitativa de recursos naturales"*[61].

Por lo anterior, y ante la profunda violación de derechos fundamentales de la población de campesina, la criminalización de su presencia en Parques Nacionales Naturales no resulta ser la más idónea en la resolución de los conflictos de UTO de la tierra, ni la más idónea en la preservación del ambiente y el patrimonio natural.

En relación con la necesidad, es preciso destacar cómo el mandato de protección del ambiente a cargo del Estado conlleva cuatro deberes primordiales, a saber: prevenir, mitigar, indemnizar o reparar y castigar; sin embargo, la Constitución no define expresamente el alcance de cada una de esas expresiones, por lo que corresponde al legislador desarrollar su contenido con atención a criterios de razonabilidad y proporcionalidad:

> La definición de los mecanismos concretos para la aplicación del mandato de protección ambiental y los deberes que de este se derivan, hacen parte de la libertad de configuración del legislador limitada por los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. En este sentido, a menos que se esté en presencia de un mandato imperativo de la Constitución, como el previsto en el artículo 81, el legislador está autorizado y a su vez tiene el deber, para armonizar los mandatos constitucionales de protección ambiental con el resto de la Constitución y adoptar medidas razonables y proporcionadas para resolver los eventuales conflictos que esto pudiera generar[62].

---

[57] Corte Constitucional. sentencia C-123 de 2014.
[58] Corte Constitucional, sentencia T-294 de 2014.
[59] Corte Constitucional, sentencia T-095 de 2015.
[60] En ese contexto específico, la sentencia T-361 de 2017 expone cómo las salas de revisión de la Corte han precisado que el derecho a la participación ambiental se traduce en: : i) la convocatoria pública de los posibles afectados; ii) la identificación de las personas perturbadas por medio de censos completos así como amplios; iii) el suministro de información adecuada sobre la decisión o ejecución del proyecto; y iv) la concertación razonada sobre el objeto de debate en la planificación y ejecución del proyecto, así como en la evaluación de impactos y la fijación de compensaciones.
[61] Corte Constitucional, sentencia T-361 de 2017.
[62] Corte Constitucional, sentencia C-300 de 2021.

Dado que el ambiente se erige como un bien jurídico superior, patrimonio de la Nación e indispensable para la realización de la vida digna, está claro que es tanto un derecho como un deber de la comunidad vinculado con la igualdad, pues todas las personas deben tener acceso a los recursos naturales, siempre repartiéndose de manera equitativa las cargas de responsabilidad en su cuidado y preservación[63].

Sobre esta materia, cabe mencionar que conforme a la enunciación del artículo 1 del Código de Recursos Naturales (Decreto Ley 2811 de 1974), *"el ambiente es patrimonio común y por ende el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social".* De tal definición se extrae que existen en el andamiaje jurídico actual alternativas que permiten la coexistencia de las comunidades rurales y las áreas de especial importancia ecológica, sin necesidad de pasar por la órbita del derecho penal para castigar la presencia antrópica en dichos ecosistemas.

Ahora bien, si la protección y defensa del ambiente tienen un carácter colectivo, también poseen una esfera individual porque su desconocimiento puede impactar derechos fundamentales de individuos. Al respecto, la Corte ha sostenido que:

> El derecho al ambiente sano (...) fue incorporado en la Constitución Política dentro del capítulo de los derechos colectivos, aunque posee también una faceta individual, en la medida en que es imprescindible para el desarrollo de un proyecto de vida digno para cada persona. Como derecho colectivo, su naturaleza es difusa, lo que significa, básicamente, que cada persona lo disfruta, sin exclusión de los demás. Como derecho individual se materializa en la defensa del entorno inmediato de cada persona y es una condición de vigencia de otros derechos fundamentales, especialmente, la salud y la vida[64].

Desde luego, no deja de advertirse que tratándose de ecosistemas estratégicos, el deber de protección estatal del ambiente cobra una mayor intensidad; sin embargo, ello no implica que prevalezca por encima de los derechos de las comunidades rurales a permanecer en sus territorios, dado que, en la misma conceptualización del sector ambiental en el país, se reconoció la posibilidad de simbiosis entre el aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo, la sostenibilidad ambiental y los derechos humanos.

Por esa razón, insistimos en que existen otras medidas alternativas con perspectiva de preservación y desarrollo equitativo orientadas hacia una coexistencia del ser humano como parte integral de los ecosistemas, regulando los efectos nocivos de la explotación desmedida de recursos naturales que pueden producirse causando un impacto negativo con alto valor ambiental[65].

En ese sentido, no pueden imponerse medidas legislativas gravosas que, alejadas de un enfoque de justicia ambiental, desconocen las causas estructurales subyacentes a la situación de vulnerabilidad manifiesta, pobreza y desposesión en la que se encuentran miles de familias campesinas.

Sobre el particular, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha advertido la alta desigualdad, para el campesino y la población rural, en las condiciones de ejercicio de sus derechos, así como la identificación de los desalojos forzados y despojo de tierras, ausencia de una reforma agraria,

---

[63] Ver: sentencia T-294 de 2014.

[64] Corte Constitucional, sentencia SU-217 de 2017.

[65] Iniciativas como las TICCA, que son Territorios y Áreas Conservadas por pueblos Indígenas y Comunidades Locales, demuestran que pueden ser las encargadas de gobernar y conservar la naturaleza. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN define los TICCA así: "*son ecosistemas naturales y o modificados con un valor significativo en términos de biodiversidad, de servicios ambientales y valores culturales, conservados voluntariamente por comunidades indígenas y locales (sedentarias o móviles), mediante leyes consuetudinarias u otros medios".*

remuneración salarial indigna, falta de cobertura del sistema de protección social, entre otros, como factores que aumentan esta situación de vulnerabilidad[66].

Precisamente, el Censo Nacional Agropecuario[67] demostró que la situación de tenencia de la tierra en Colombia corresponde a una gran brecha de inequidad donde el pequeño productor que explota unidades agropecuarias menores a 5 hectáreas representa un 70,4 % del total de unidades (1.669.287 Unidades Productoras Agropecuarias – UPAs de 2.370.099), y ocupa únicamente el 2,0 % de todo el territorio rural productivo censado (2.160.347 ha de 108.993.335 ha)[68].

Asimismo, mediante los resultados de tal ejercicio estadístico agropecuario, se detallaron otras situaciones de inequidad como son: el 83,6 % de los productores declararon no tener infraestructura para el desarrollo de sus actividades agropecuarias; el 66,7 % declararon no utilizar ningún tipo de riego para sus actividades, a pesar de ser un país con grandes riquezas hídricas; el 83,6 % afirmó no tener maquinaria de uso agropecuario; y el 83,5 % aseguró no haber recibido asistencia técnica en el año 2013, para el desarrollo de sus actividades de subsistencia[69].

Estos elementos del panorama rural evidencian no solo la falta de garantías respecto del acceso democrático a la tierra, sino que permiten advertir otros factores explicativos de la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentra la población campesina de Colombia.

Al respecto, en 2018 se dio lugar a la conformación de una mesa experta de la ruralidad colombiana, que señaló cómo la dimensión territorial referida al ambiente y los recursos naturales es determinante del tipo de actividad económica que desarrolla el campesino y la sostenibilidad de sus comunidades y entornos: "estas relaciones son definitivas en la resiliencia y permanencia de una comunidad campesina en un territorio"[70].

Sumado a ello, cabe resaltar que la jurisprudencia constitucional ha reconocido la relación intrínseca entre el derecho al ambiente sano y la protección especial del derecho de la población rural a subsistir de los recursos que le ofrece el entorno donde se encuentra asentada. Sobre dicha conexión, la Corte ha estipulado lo siguiente:

> [E]l desarrollo sostenible es un proceso para mejorar las condiciones económicas, sociales y mantener los recursos naturales y la diversidad, que debe propender por garantizar la sostenibilidad social la cual "pretende que el desarrollo eleve el control que la gente tiene sobre sus vidas y se mantenga la identidad de la comunidad"; y la sostenibilidad cultural, que "exige que el desarrollo sea compatible con la cultura y los valores de los pueblos afectados[71].

De ahí que la Corte defienda la participación de las comunidades en materia ambiental como un elemento central en la obtención de un orden justo, puesto que la intervención de las personas es una condición imprescindible para alcanzar la sostenibilidad de los ecosistemas y la distribución equitativa de recursos

---

[66] Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. A/HRC/36/58, 36º período de sesiones del 11 al 29 de septiembre de 2017. Informe del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta encargado de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales aprobada oficialmente el 29 de septiembre de 2018.
[67] Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Noviembre de 2016. Resultados del Tercer Censo Nacional Agropecuario 2014. Tomo 2.
[68] Con el agravante de ser incierta la relación formal o informal que tienen dichos productores con las unidades agrícolas que explotan, pues fue una información que no se logró identificar, en contraste con los títulos debidamente registrados ante las autoridades competentes.
[69] Ibíd.
[70] Conceptualización del campesinado en Colombia. Documento Técnico para su Definición, Caracterización y Medición. Actualmente se encuentra en estudio por parte del Gobierno nacional.
[71] Corte Constitucional sentencia T-348 de 2012.

naturales[72]. Por lo expuesto, consideramos que, para lograr una adecuada gestión de los asuntos ambientales, se requiere la participación de las comunidades, pues precisamente la deliberación de los diversos sectores de la sociedad trae beneficios prácticos frente a la resolución de conflictos, así como enriquece la evaluación de los impactos ambientales, sociales, culturales y económicos derivados de las medidas a ser adoptadas.

Abordar este tipo de conflictos socioambientales, como la deforestación, la ocupación de áreas de especial importancia ecológica o de bienes baldíos con enfoque de derechos humanos, implica reconocer que hay presencia de comunidades rurales en esos territorios, cuyas demandas sociales han sido históricamente desatendidas por parte del Estado y requieren de medidas alternativas de diálogo social y concertación. Para ello, es fundamental la generación de confianza legítima entre las partes interesadas no solo desde una comunicación respetuosa; además, es indispensable el rechazo a los actos violentos en lógica de criminalización de las comunidades campesinas y étnicas, así como de defensoras y defensores de derechos humanos y del ambiente.

Por consiguiente, no resulta constitucionalmente admisible que la respuesta estatal sea aplicar una medida represiva para penalizar a las comunidades rurales. En consecuencia, las normas objeto de reproche resultan inconstitucionales, pues no superan el análisis estricto sobre su idoneidad y necesidad al concentrar el deber estatal de protección del ambiente en el ejercicio punitivo de control de las autoridades, en detrimento de los derechos fundamentales que tienen la virtualidad de afectar a la población campesina y/o rural.

6.2. CARGO 2: VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE ESTRICTA LEGALIDAD

Normas acusadas: Artículo 333. *Deforestación*, y artículo 336. *Invasión de áreas de especial importancia ecológica* adicionados y/o modificados por el artículo 1 de la Ley 2111 de 2021 al Código Penal, Ley 599 de 2000

6.2.1. Contenido y alcance del principio de estricta legalidad

Tanto la doctrina[73] como la jurisprudencia[74] han reconocido la consagración positiva y constitucional en Colombia del principio de tipicidad penal como componente esencial del derecho al debido proceso, según el cual:

> [E]l legislador se encuentra obligado a establecer claramente en qué circunstancias una conducta resulta punible con el fin de que los destinatarios de la norma sepan a ciencia cierta cuándo responden por las conductas prohibidas por la ley. No puede dejarse al juez, en virtud de la imprecisión o vaguedad del texto respectivo, la posibilidad de reemplazar la expresión del legislador, pues ello pondría en tela de juicio el principio de separación de las ramas del poder público[75].

Lo anterior se desprende de cláusulas constitucionales como las contenidas en los artículos 1 y 29 superiores, según los cuales Colombia es un Estado social de derecho que reconoce como fundamental el derecho al debido proceso, el cual "*se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas*"

---

[72] Corte Constitucional, sentencia T-361 de 2017.
[73] Velásquez Turbay, C. (2004), Derecho Constitucional, 3ª Ed. Universidad Externado de Colombia, págs. 361-365.
[74] Corte Constitucional, sentencia C-343 de 2006.
[75] Corte Constitucional, sentencia C-173 de 2001.

e implica que "*nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio".*

Dado que el Estado, en aplicación del principio de Estado de derecho, solo puede actuar según lo dispuesto en la Constitución y las leyes, y que los particulares solo son responsables por la infracción de estas disposiciones, es necesario que los lineamientos que establezca el legislador sean claros, ciertos y expresos, pues de lo contrario se abrirían caminos a la comisión de arbitrariedades por parte de las autoridades públicas, desconociéndose aún más el principio de legalidad. En palabras de la propia Corte:

> En el Estado de Derecho se parte de la base de que quien gobierna es la ley y no los hombres (…) la ley del Estado de Derecho proviene de la manifestación de la voluntad general, por consiguiente exclusivamente la libertad de los hombres puede verse limitada a través de la ley (…) En este orden de ideas, el Estado de Derecho apareja consigo el encuadramiento jurídico del poder que trae como resultado la eliminación de las arbitrariedades no sólo por parte de los gobernantes sino de los mismos órganos del Estado[76].

Conforme se desarrollará para cada uno por separado, la inconstitucionalidad alegada de los artículos 333 y 336 del Código Penal, se desprende de una recapitulación de los objetos de protección de cada tipo penal y que poseen un íntimo relacionamiento con la problemática de conflictos socio-ambientales existentes en las zonas de frontera agrícola en el país.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha distinguido dos aspectos del objeto de protección en el análisis gramatical de los tipos penales: uno material y otro jurídico. En concreto, la Corte ha indicado que el objeto de protección tiene una doble entidad:

> (...) jurídica, en cuanto se refiere al interés que el Estado pretende proteger y que resulta vulnerado con la acción u omisión del sujeto activo, y material, que hace relación a aquello (persona o cosa) sobre lo cual se concreta la vulneración del interés jurídico tutelado y hacia el cual se orienta la conducta del agente[77].

Frente al objeto material de protección, de la lectura de los tipos penales establecidos en los artículos acusados se identifican al menos dos elementos sobre los que recaen las prohibiciones:

i. Las áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, que busca proteger el tipo penal de Deforestación. El IDEAM ha definido esta categoría como un espacio de tierra ocupada por especies vegetales diversas[78]; mientras que la FAO, en desarrollo de las obligaciones internacionales en materia de captura de carbono, establecidas en el Protocolo de Kioto, estableció que el bosque natural es el *área de bosques compuestos por árboles autóctonos, no plantados por el hombre*[79]. Por tal razón, se entiende que el bosque natural es aquel espacio poblado de especies vegetales sobre el cual el ser humano no ha intervenido. El ordenamiento jurídico también habla de áreas o zonas forestales.

ii. Las áreas de especial importancia ecológica, que son definidas por el Convenio sobre Diversidad Biológica, incorporado al ordenamiento jurídico mediante la Ley 165 de 1994, como un área

---

[76] Corte Constitucional, sentencia C-319 de 2007.
[77] Corte Constitucional, sentencia C-297 de 2016.
[78] Principalmente ocupada por árboles que puede contener arbustos, palmas, guaduas, hierbas y lianas, en la que predomina la cobertura arbórea con una densidad mínima de dosel del 30%, una altura mínima de dosel in situ de 5 metros al momento de su identificación y un área mínima de una hectárea. Se excluyen las coberturas arbóreas de plantaciones forestales comerciales, cultivos de palma y árboles sembrados para la producción agropecuaria.
[79] Ver: https://www.fao.org/3/y1997s/y1997s1q.htm

"*definida geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación*". Es decir, estas áreas son definidas por las autoridades ambientales y por el legislador, y se caracterizan por tener especiales relaciones bióticas entre la diversidad de especies y ecosistemas en un espacio geográfico que exigen su delimitación para evitar afectaciones derivadas de la intervención indebida del ser humano.

Sin embargo, dadas las particularidades propias para la configuración de cada tipo penal, el desconocimiento al principio de estricta legalidad será analizado en cada uno de los casos a continuación.

6.2.2. Desconocimiento del principio de estricta legalidad del artículo 333 del Código Penal

Atendiendo a la integralidad del análisis de constitucionalidad que promueve la presente acción, reiteramos que el examen encomendado a la Corte no tiene como objeto desconocer la necesidad de que el Estado adopte medidas de protección del medio ambiente y los recursos naturales; sin embargo, revisando la literatura sobre el llamado delito de ecocidio[80], se ha aceptado que uno de los elementos que ha limitado su aprobación por parte de los Estados es la amplitud e imprecisión existente sobre el concepto de *ecocidio* para la configuración del delito.

Lo anterior conlleva a dificultades de orden legal para su incorporación en ordenamientos jurídicos internos, aunque haya una cruzada mundial por establecer medidas para mitigar la depredación ambiental, incluso proponiendo que tal conducta se convierta en un delito de lesa humanidad[81].

Para el caso colombiano, el delito de *"daños en los recursos naturales y ecocidio"* adicionado en el artículo 333 al Código Penal a través de la Ley 2111 de 2021 no cuenta con antecedentes en la legislación penal colombiana, por lo cual merece un análisis detallado sobre su correcta estructuración a la luz del principio de estricta legalidad que, en derecho penal, deriva en la taxatividad o tipicidad como principio constitucional, de acuerdo con los elementos que la Corte Constitucional ha desarrollado sobre la facultad del legislador en esta materia y que se expresa *"en la obligación que tiene [...] de establecer de manera clara, específica y precisa las normas que contienen conductas punibles y sus respectivas sanciones"*[82].

En reiterada jurisprudencia, la Corte ha establecido que el cumplimiento de este principio se constata por medio de dos aspectos de configuración del delito: jurídico y material, siendo el aspecto jurídico el que refiere *"al interés que el Estado pretende proteger y que resulta vulnerado con la acción u omisión del sujeto activo"*, y el aspecto material el *"que hace relación a aquello* (persona o cosa) *sobre lo cual se concreta la vulneración del interés jurídico tutelado y hacia el cual se orienta la conducta del agente"* [83].

Con mayor precisión, ha dicho la Corte que este principio contiene los siguientes elementos: *i) la conducta sancionable debe estar descrita de manera específica y precisa, bien porque está determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; ii) debe existir una sanción cuyo contenido material lo define la ley; y, iii) la obligatoria correspondencia entre la conducta y la sanción*[84].

---

[80] De Paor, Risteard, (2020). Hacia la criminalidad climática: creación de una quinta categoría de crimen bajo el Estatuto de Roma para penalizar la agravación del cambio climático. Towards climate criminality: the creation of a fifth category of crime under the Rome Statute to criminalize climate change aggravation. Recuperado de https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/61515/1/malonsod%2c%20289-325%20De%20Paor.pdf.

[81] Ver https://ecocidelaw.com/history/. https://medioambiente.uexternado.edu.co/ecocidio-nuevo-crimen-internacional/

[82] Corte Constitucional, sentencia C-091 de 2017.

[83] Corte Constitucional, sentencia C-297 de 2016.

[84] Corte Constitucional, sentencia C-091 de 2017.

De acuerdo con ello, nos referiremos a la imprecisión con la que se define la conducta punible y el bien jurídico a proteger con la creación de este nuevo tipo penal, realizando un análisis sobre tres elementos de la redacción del artículo 333 vigente en el Código Penal que evidencian la vulneración del principio de estricta legalidad o tipicidad penal.

El primer elemento de análisis es el título o denominación del tipo penal en el que el legislador incorporó dos expresiones, a saber: (i) *"daños en los recursos naturales"* y (ii) *"ecocidio"*, conectándolas a través de una conjunción. Esta nominación obliga a preguntar si hay en la legislación preexistente o en la misma norma que le da vida jurídica una definición que permita al juez la adecuación del tipo a una o varias conductas punibles. A este respecto, si bien el primer elemento del tipo, denominado *"daño en los recursos naturales"* tendría correspondencia con el contenido de la norma que se modificó a través de la Ley 2111 de 2021, esto es, el título XI *"De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente"* del Código Penal, no sucede lo mismo con el novedoso elemento de *"ecocidio"* pues, si bien en el parágrafo primero del artículo examinado se ofrece una *definición*, esta resulta completamente ambigua y general, al señalar que se entiende por ecocidio *"el daño masivo"* y *"la destrucción generalizada, grave y sistémica de los ecosistemas"*.

¿A qué norma puede acudir el juez para determinar qué es un *"daño masivo"* de los recursos naturales? ¿Cómo podría determinar o individualizar la conducta cuya consecuencia es la *"destrucción generalizada, grave y sistemática de los ecosistemas"*? ¿Suponemos que cuando se habla de '*ecosistemas*' se trata de ecosistemas estratégicos, de ecosistemas de especial importancia ecológica? El vacío normativo advertido tampoco puede ser subsanado acudiendo a otras normas, dado que este tipo penal no cuenta con antecedentes en la legislación colombiana, luego no habría un criterio legal de interpretación en el ordenamiento jurídico al que el juez pueda acudir para interpretar el tipo.

El segundo elemento de análisis es la imprecisa identificación de la o las conductas punibles que se pretende desestimular para evitar el daño al medio ambiente y los recursos naturales. Al respecto, el artículo examinado se refiere a aquellas conductas que se realicen *"con incumplimiento de la normatividad existente"* y que *"dañen los recursos naturales a que se refiere el título o a los que estén asociados con estos"*; los verbos rectores de la conducta son *destruir*, *inutilizar*, *hacer desaparecer* o *causar impactos ambientales graves*, o realizar alguna conducta que *de cualquier otro modo dañe* los recursos naturales como bienes jurídicos tutelados.

Así, la Corte Constitucional ha afirmado que el principio de legalidad exige no solamente que las conductas punibles estén previamente establecidas por el legislador, sino también que estén *"inequívocamente definidas por la ley* (...) *pues solamente así se cumple con la función garantista y democrática, que se traduce en la protección de la libertad de las personas y el aseguramiento de la igualdad ante el ejercicio del poder punitivo por parte del Estado"*[85]. Pero, en el caso del artículo 333 del Código Penal, al analizar los verbos rectores de '*destruir', 'inutilizar', 'hacer desaparecer' o 'causar'* para referirse a impactos ambientales graves a los recursos naturales, no se encuentra una definición inequívoca de la conducta que permita su identificación precisa; en cambio, lo que sí se encuentra es una evidente vaguedad en la redacción del artículo que cuestiona su idoneidad como mecanismo para proteger los bienes jurídicos tutelados.

[85] Corte Constitucional, sentencia C-091 de 2017.

Dado que este nuevo tipo penal incorpora un *delito de daños* en materia ambiental, la falta de precisión de las conductas punibles se hace todavía más evidente con la expresión *"o de cualquier otro modo..."*, pues esta lleva a interpretar que, además de los verbos rectores ya referenciados, **cualquier otra conducta** que implique una afectación o daño a los recursos naturales, sin delimitar ni la acción ni la gravedad de la misma, llevaría entonces a su persecución criminal, siendo este un tipo penal en blanco que no cumple con los mínimos establecidos por la Corte para este tipo de delitos. Esta ambigüedad resulta tanto más violatoria del principio de estricta legalidad, cuanto que, contrario a la finalidad preventiva de la pena, promueve la persecución indiscriminada de conductas indeterminadas que por esa vaguedad en la configuración del tipo penal *podrían* considerarse punibles, haciendo del poder punitivo del Estado un aparato de persecución general.

En el mismo sentido, si nos detenemos en el análisis de la expresión *"el que con incumplimiento de la normatividad existente…"* relacionada sintácticamente con los verbos rectores que determinan la conducta, así como con la expresión *"o de cualquier otro modo..."*, no hay precisión jurídica alguna en esta, ¿A qué normatividad se hace referencia si los recursos naturales que son objeto de protección son variados y tanto su protección como las conductas que pueden afectarlos son distintas? Además de la variedad indeterminada de actividades que harían imposible determinar por parte del sujeto activo de la conducta si en efecto se estaría incurriendo en la comisión de un delito, estas ambigüedades dan lugar a una profunda e insoslayable inconsistencia del tipo penal, pues por una aparente necesidad de abarcar un universo heterogéneo de conductas, la consecuencia es que el tipo carece de contenido propio para poder determinar las conductas a perseguir.

Si como clave explicativa se toman como referencia algunos de los tipos penales establecidos en dicho título, dentro de los cuales está desde la pesca ilegal y el tráfico de fauna y flora, hasta la *invasión de áreas de especial importancia ecológica* y la *apropiación ilegal de baldíos* (artículo 337), surge el siguiente interrogante: ¿Qué conductas diferentes a las ya definidas en el título XI del Código Penal pueden ocasionar un impacto ambiental grave o un daño a los recursos naturales susceptible de ser perseguido penalmente con fines de prevención? Tal interrogante solamente debería ser respondido por el legislador y no surgir como consecuencia de la falta de claridad jurídica de una norma vigente, como en efecto sucede con el artículo 333 examinado.

Lo anterior conecta con el análisis del tercer elemento a considerar, esto es, los bienes jurídicos que se pretende proteger con la creación de este nuevo delito. Es preciso entonces reiterar que se trata de la protección de los recursos naturales; no obstante, cuando en el artículo se señala que la consecuencia que se pretende prevenir es el daño a *"los recursos naturales a que se refiere este título o a los que estén asociados con estos"*, de nuevo la estructura del tipo penal incurre en vaguedad, pues la expresión *"o los que estén asociados con estos"* remite a un objeto indeterminado. La pretendida asociación entre recursos naturales y otros bienes o recursos susceptibles de ser protegidos abre una brecha de interpretación que no permite que la configuración del tipo penal en su objeto material sea clara y pueda ser así identificada por la autoridad judicial que examina la conducta punible, ¿Qué bienes están asociados a los recursos naturales objeto de protección del capítulo XI del Código Penal?

Podría interpretarse que el legislador se refería a los recursos naturales de los que trata el Código Nacional de Recursos Naturales; sin embargo, ello abre otra pregunta: ¿Cómo determinar si en efecto se trata de esos bienes y solamente de esos? ¿Es posible, por mera asociación, identificar una conducta típica y perseguirla? De nuevo, estos interrogantes, al contrario de surgir de una norma penal vigente, deben ser

respondidos de forma clara y precisa por el legislador para que los funcionarios judiciales tengan como fuentes de interpretación las normas mismas, para así no extralimitarse en sus funciones.

En la misma línea, el objeto material al que el tipo penal hace referencia también resulta vago e indeterminado cuando se trata de la consecuencia que se pretende evitar, esto es, generar un *impacto ambiental grave* o *daño* a los recursos naturales como bienes jurídicos tutelados. Si bien en el parágrafo segundo del artículo examinado se afirma que deberá entenderse por impacto ambiental grave *"la alteración de las condiciones ambientales que se genere como consecuencia de la afectación de los componentes ambientales, eliminando la integridad del sistema y poniendo en riesgo su sostenibilidad"*, expresiones como *"alteración de las condiciones ambientales"*, *"componentes ambientales"* o *"integridad del sistema"* no se corresponden con definiciones que puedan ser encontradas taxativamente en la normatividad vigente, por lo cual el juez debería acudir a definiciones extralegales para definir en cada caso tanto la tipicidad como la antijuridicidad de la conducta. Esto llevaría a una circunstancia muy peligrosa en la implementación del derecho penal en el entendido de que habría una suerte de libertad en la configuración material del delito por parte de los administradores de justicia, contraviniendo con ello el principio constitucional del debido proceso y los derechos fundamentales asociados a este.

En síntesis, la falta de precisión del objeto material y jurídico de este tipo penal, además de una configuración formal precaria y carente de contenido propio, permite caracterizarlo como un tipo penal indeterminado o en blanco, contrario a las garantías y principios constitucionales derivados del artículo 29 superior que garantiza el aseguramiento de la igualdad ante el ejercicio del poder punitivo por parte del Estado, como lo ha declarado la Corte Constitucional. Si la pretensión del legislador era crear un nuevo tipo penal para la protección del medio ambiente, resultaba de considerable importancia definirlo de manera rigurosa y en observancia tanto de los principios del derecho penal como de los criterios que ha establecido la jurisprudencia constitucional y que demarcan de manera exacta tanto la autonomía del legislador en esta materia como las limitaciones que se establecen frente al derecho penal como último recurso, atendiendo a la finalidad constitucional de prevención general de la pena, presupuestos que la norma examinada no cumple.

6.2.3. Desconocimiento del principio de estricta legalidad del artículo 336

La modificación del artículo 336 del Código Penal (antiguo artículo 337) contraviene el artículo 29 de la Constitución Política porque desconoce el principio de estricta legalidad de las normas penales. En concreto, la expresión "permanecer, así sea de manera temporal" contraviene este principio por su extrema vaguedad y amplitud, mientras que el uso las categorías "ecosistema de importancia ecológica" y "ecosistemas de interés estratégico" contraviene este precepto constitucional ya que estas categorías no están definidas en la ley.

El artículo 336 del Código Penal reformado por la Ley 2111 de 2021 adolece de vaguedad en la configuración del tipo objetivo predicable en dos aspectos: la conducta y el objeto material. En cuanto al primero, diremos que la conducta no quedó tipificada adecuadamente, ya que uno de sus verbos rectores, con su respectivo calificativo, puede subsumir una generalidad de actividades que hace imposible para el sujeto activo determinar a ciencia cierta si se encuentra cometiendo un delito; frente al segundo elemento, señalaremos que se desconoce el principio de estricta legalidad, por cuanto la categoría "*ecosistemas de especial importancia ecológica*" no cuenta con una definición normativa.

El segundo de los verbos rectores del artículo 336, con su respectivo calificativo, contiene la disposición que se considera inconstitucional: *permanecer -así sea de manera temporal-* es una descripción genérica por cuanto en ella se enmarcan una multiplicidad y variedad de conductas que llevan a que sea prácticamente imposible establecer si se está o no contraviniendo la norma penal.

De tal forma, se enmarcarían en el mismo tipo penal conductas como la del colono que se encuentra radicado en alguna de las áreas enunciadas en el tipo penal, la del contrabandista de madera que ingresa a un bosque natural a talar madera de forma ilegal o la del turista que por un breve instante atraviesa o acampa en alguna de estas zonas. Esta descripción tan genérica conlleva a una indeterminación de la disposición acusada, síntoma del quebrantamiento del principio de estricta legalidad por parte del legislador.

Ahora bien, la norma acusada de inconstitucional también quebranta el principio de legalidad por el uso de la categoría '*ecosistema de especial importancia ecológica'*; la única definición normativa que la parte demandante pudo encontrar de esta expresión se encuentra en el artículo 10 del Decreto 2041 de 2014, mediante el cual se reglamenta el trámite de licencias ambientales, a saber:

> **Artículo 10.** *De los ecosistemas de especial importancia ecológica.* Cuando los proyectos a que se refieren en los artículos 8° y 9° del presente decreto, pretendan intervenir humedales incluidos en la lista de humedales de importancia internacional (RAMSAR), páramos o manglares, la autoridad ambiental competente deberá solicitar concepto previo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre la conservación y el uso sostenible de dichos ecosistemas.
>
> De igual manera, las autoridades ambientales deberán tener en cuenta las determinaciones que sobre la materia se hayan adoptado a través de los diferentes actos administrativos en relación con la conservación y el uso sostenible de dichos ecosistemas.

Salvo por algunas menciones en la sentencia T-666 de 2002, esta categoría no cuenta con mayores definiciones o precisiones en leyes o reglamentos. En lo que respecta a la categoría 'área o ecosistema de interés estratégico' el Decreto 2372 de 2010 contiene la siguiente definición:

> **Artículo 29. Ecosistemas estratégicos.** Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos como áreas de especial importancia ecológica gozan de protección especial, por lo que las autoridades ambientales deberán adelantar las acciones tendientes a su conservación y manejo, las que podrán incluir su designación como áreas protegidas bajo alguna de las categorías de manejo previstas en el presente decreto" (subrayado fuera del original).

Salta a la vista que, normativamente, la definición de ecosistema estratégico incluye en sí misma la categoría de 'área de especial importancia ecológica', de manera que ambos conceptos referencian zonas de origen y recarga acuíferas como páramos y humedales RAMSAR, pero esta remisión no cumple con los requisitos de certeza y claridad de los tipos penales, dado que permite hacer remisiones normativas erróneas. Respecto a los tipos penales en blanco, la Corte Constitucional ha señalado que:

> Los tipos penales 'en blanco' son aquellos en los que al definir el supuesto de hecho (es decir, la conducta que se quiere prohibir) el legislador menciona un referente normativo específico, por lo que se habla de una remisión o reenvío normativo. Este se denomina propio, si se dirige a una norma de la misma jerarquía o impropio, si lo hace a una de inferior jerarquía (...). Los tipos penales en blanco solo son admitidos si la remisión que hacen a otras normas permite determinar la conducta penalizada y si la norma objeto de remisión existe al momento de la necesaria integración del tipo, es determinada, de público conocimiento y respeta los derechos fundamentales. Así mismo, la validez constitucional de los tipos abiertos está sujeta a que el margen de indeterminación sea moderado y a la disponibilidad de referentes para precisar su contenido y alcance. Y, en general, la vaguedad y ambigüedad de las normas penales resulta admisible,

conforme a la garantía bajo análisis, sólo si elementos objetivos habilitan de alguna manera distinguir lo prohibido de aquello que no lo está"[86].

En conclusión, teniendo en cuenta que son escasos e imprecisos los referentes normativos a los que el artículo 336 del Código Penal remite, el tipo penal que quiso consagrar el legislador resultó en una redacción vaga y ambigua en uno de los componentes de la tipicidad objetiva: el objeto material mismo.

6.3. CARGO 3: DESCONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE IMPLEMENTAR DE BUENA FE EL ACUERDO FINAL DE PAZ

Normas acusadas: Artículo 330. *Deforestación* y artículo 330A. *Financiación de la deforestación* adicionados y/o modificados por el artículo 1 de la Ley 2111 de 2021 al Código Penal, Ley 599 de 2000

Este cargo se encuentra dirigido a demostrar cómo las normas acusadas desconocen la obligación estatal de implementar de buena fe el Acuerdo Final de Paz, en particular lo referido a los contenidos del punto 4. En ese orden de ideas, el presente apartado abordará los siguientes aspectos: (i) obligación constitucional de cumplir de buena fe el Acuerdo Final de Paz; (ii) conexidad de la disposición demandada con los contenidos del referido Acuerdo; (iii) derechos de las comunidades campesinas dedicadas a los cultivos de uso ilícito afectados por el incumplimiento a lo acordado; y (iv) análisis de la expresión demandada: un tratamiento penal inconstitucional a las familias campesinas con cultivos de uso ilícito.

6.3.1. La obligación constitucional de cumplir de buena fe el Acuerdo Final de Paz

Conforme a lo establecido en la jurisprudencia constitucional, la paz es en definitiva un eje axial de la Constitución Política en su triple condición de valor, derecho y deber fundamental; sin embargo, la realidad en la que operan estas dimensiones constitucionales ha estado mediada por un conflicto armado interno, cuyas dinámicas de guerra han hecho de estos presupuestos normativos una aspiración democrática a la cual se debe propender, sin perjuicio de la autonomía que las autoridades constituidas tengan, en garantía de otros valores, como el orden público, la seguridad nacional o la convivencia ciudadana.

Siendo un presupuesto, una aspiración y una obligación del Estado, la paz se constituye en un elemento que es indispensable garantizar dentro del ordenamiento jurídico interno. En ese horizonte, una de las apuestas de construcción de paz adelantada por el gobierno Santos permitió instalar la mesa de conversaciones que condujo a la suscripción de un Acuerdo de Paz entre ese gobierno y las FARC-EP, cuya naturaleza jurídica fue objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional.

Con el objetivo de otorgar estabilidad y seguridad jurídica al referido Acuerdo, se expidió el Acto Legislativo 02 de 2017 para la implementación de toda una política de Estado, multimodal y multinivel, con la pretensión de abarcar las distintas causas estructurales del conflicto armado interno y contribuir a su solución definitiva. La reforma introducida por el referido acto legislativo dispuso que las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo acordad entre las partes. En específico, el **inciso segundo del artículo transitorio primero** del acto en mención, establece que *"**las***

[86] Corte Constitucional, sentencia C-091 de 2017.

actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado*, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación* ***deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado****, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final"* (subrayado fuera del original)[87].

En sentencia C-630 de 2017, la Corte ratificó el carácter jurídicamente vinculante del citado Acuerdo con los ajustes que derivaron del proceso de fallida refrendación popular. Según las consideraciones de la decisión, aun cuando no puede considerarse en su integridad como un Acuerdo Especial en virtud del derecho internacional público, ni fue incorporado al ordenamiento jurídico interno mediante Ley de la república, sí debe entenderse como una **Política de Estado**, orientada por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo que lo elevó a la categoría de disposición constitucional, yendo más allá de ser una mera política para los órganos de gobierno. Sobre ello, la referida sentencia señala:

> La norma establece así un ámbito sustancial, en el sentido de que los contenidos del Acuerdo Final que correspondan a normas de derecho internacional humanitario y de derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, y los conexos con ellos, serán, con sujeción a la Constitución, parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y leyes de implementación y desarrollo del mismo. Un **ámbito personal**, en cuanto **asigna a todas las instituciones y órganos del Estado, no solo al Gobierno Nacional, una doble obligación**. Por un lado, cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final y, por el otro, que **sus actuaciones**, los desarrollos normativos del Acuerdo Final que adopten, y su interpretación y aplicación, **guarden coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, objetivos, compromisos, espíritu y principios del Acuerdo Final.** Y un ámbito temporal, pues las obligaciones consignadas en la enmienda regirán durante tres periodos presidenciales posteriores a la firma del Acuerdo"[88].

Este ámbito personal de la norma constitucional resulta ser la justificación para aplicar el Acuerdo Final como parámetro de constitucionalidad en el caso que nos atañe, ya que en aquella ocasión la Corte entendió que **el Acto Legislativo establece una obligación de medio en cabeza de todas las autoridades**, entre ellas el legislador, encaminada a dar los mejores esfuerzos para cumplir con lo estipulado, como se desprende de lo que sigue:

> Dicho mandato ha de entenderse como una obligación de medio, lo que implica que **los órganos políticos, en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, deberán llevar a cabo, como mandato constitucional, los mejores esfuerzos para cumplir con lo pactado, en el marco de los principios de integralidad y no regresividad**.
>
> Ello comprende a los funcionarios de la Administración Pública, **al Congreso obrando como Legislador y como constituyente secundario**, y al propio órgano de control de constitucionalidad, cuyos juicios deberán producirse a partir, obviamente, de la Constitución, así como de la conexidad con los contenidos del Acuerdo Final ya implementados[89] (subrayado fuera del original).

En ese orden de ideas, la obligación de implementar el Acuerdo Final de Paz es un compromiso vinculante que requiere de los mejores esfuerzos de todas las autoridades estatales, quienes están llamadas a contribuir efectivamente al cumplimiento de lo acordado; no obstante, dicha obligación está sometida al principio de supremacía constitucional y a la independencia y autonomía que el texto superior le reconoce a cada una de las instituciones públicas.

---

[87] Acto Legislativo 02 de 2017. Incorpora dos artículos transitorios al Capítulo VII del Título Transitorio sobre instrumentos de justicia transicional de la Constitución Política.
[88] Corte Constitucional, sentencia C-630 de 2017.
[89] Corte Constitucional, sentencia C-630 de 2017.

Por ello, la implementación de lo acordado debe respetar las competencias constitucionales de cada autoridad, dirigidas de manera progresiva e integral al cumplimiento de las finalidades y objetivos trazados en la política de paz como política de Estado. Al respecto, la Corte ha precisado que:

> En lo que se refiere a los órganos y autoridades públicas, en virtud del principio de buena fe, estas adquieren el deber no solamente de actuar de acuerdo con las específicas atribuciones constitucionales y legales que le han sido conferidas, sino también de **orientarse y conducirse en concordancia con los compromisos adquiridos** por las propias autoridades del Estado, **lo cual implica que tengan que adelantar todas sus gestiones, en desarrollo de la articulación, coordinación y colaboración armónica de los poderes públicos que, para el caso bajo examen, se materializa en el propósito general de consolidar una paz estable y duradera**, objetivo cardinal atinente no solo al ejecutivo central, sino de la organización estatal en todo su conjunto[90] (subrayado fuera del original).

Derivado de lo anterior, puede afirmarse que la implementación de lo estipulado en el Acuerdo Final de Paz es una obligación del legislador, quien debe realizar en el marco de sus competencias, dentro de las que se destaca la libertad de configuración en materia penal, el mejor esfuerzo integral y no regresivo para materializar los diferentes puntos que aquel contempla, en relación con el eje axial de la paz y con diferentes derechos fundamentales involucrados en su desarrollo. Frente al carácter vinculante de ese mandato de progresividad, la Corte dispuso:

> (i) La expresión "obligación" del inciso segundo del **artículo 1º se refiere a una obligación de medio, esto es, de llevar a cabo los mejores esfuerzos para cumplir con lo establecido en el Acuerdo Final, entendido como Política de Estado,** cuyo cumplimiento se rige por la condicionalidad y la integridad de los compromisos plasmados en el mismo.
>
> (ii) Y, la expresión "deberán guardar coherencia" del inciso segundo del artículo 1º se entiende en el sentido que impone a los órganos y autoridades del Estado el cumplimiento de buena fe de los contenidos y finalidades del Acuerdo Final, para lo cual, en el ámbito de sus competencias, gozan de un margen de apreciación para elegir los medios más apropiados para ello, en el marco de lo convenido, **bajo el principio de progresividad"**[91] (subrayado fuera del original).

De esta forma, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final de Paz son elementos que vinculan jurídicamente a todas las autoridades del Estado, no solo en cuanto al desarrollo normativo que del mismo texto del Acuerdo se desprende, sino **en el marco de todas sus actuaciones en relación con sus competencias**, dado que lo acordado se constituye en un documento de política pública estructural, que va más allá de los programas de gobierno y las autoridades administrativas encargadas de su ejecución.

Por consiguiente, consideramos que la actuación del Congreso de la República en ejercicio de su libertad de configuración legislativa debe estar orientada a contribuir a la implementación de lo acordado, pero en el presente caso, por el contrario, se observa que las disposiciones acusadas establecen un trato discriminatorio en materia penal en contra de las comunidades campesinas.

Lejos de mantener una colaboración armónica con los planes de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito definidos en la mesa de conversaciones de La Habana como la fórmula preferente para la solución al problema de las drogas ilícitas, el artículo 330 de la Ley 599 del 2000 -adicionado por el artículo 1 de la Ley 2111 de 2021- establece como agravación punitiva del delito de deforestación la realización de la conducta "*para cultivos de uso ilícito*". Así, la disposición acusada guarda una relación de conexidad con las acciones dirigidas para implementar el Acuerdo Final de Paz en su punto 4 afectando directamente su implementación, conforme pasa a desarrollarse a continuación.

---

[90] Corte Constitucional, sentencia C-630 de 2017.
[91] Corte Constitucional, sentencia C-630 de 2017.

En primer lugar, daremos cuenta de esa relación de conexidad necesaria para un análisis de constitucionalidad que use como parámetro de interpretación los objetivos trazados por el Acuerdo Final de Paz; en segundo lugar, referiremos los derechos fundamentales afectados con la negativa a la implementación del punto 4; y finalmente, en tercer lugar, realizaremos un análisis de la disposición acusada[92].

6.3.2. La conexidad de la disposición demandada con los contenidos del Acuerdo Final de Paz

Uno de los asuntos abordados por el Acuerdo Final de Paz es el atinente al problema de las drogas ilícitas, que se reconoce como una causa del conflicto armado que exige **medidas integrales y progresivas** para una adecuada intervención de las autoridades del Estado, la cual está atravesada por el **principio de tratamiento diferenciado**, que puede verse en cada uno de los tres aspectos del Punto 4 del citado Acuerdo: i) el programa de sustitución voluntaria se contempla teniendo en cuenta la vulnerabilidad especial de las campesinas y los campesinos cultivadores; ii) las estrategias criminales para la persecución del narcotráfico se enfocarán en sus eslabones más rentables y poderosos, planteando mecanismos de persecución penal de las finanzas ilícitas y las redes de corrupción; y iii) la estrategia frente al consumo que se enfocará en sus aspectos profilácticos y terapéuticos en detrimento de la criminalización imperante.

El tratamiento diferenciado, que busca implementar cada uno de los tres aspectos referidos, ha sido desarrollado por distintas autoridades: por un lado, el Gobierno nacional, en virtud de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas para la implementación del Acuerdo Final de Paz, profirió el Decreto Ley 896 del 2017, a través del cual se implementó un tratamiento diferenciado en favor de campesinas y campesinos con cultivos de uso ilícito, habitantes de territorios rurales y periféricos históricamente afectados por el conflicto armado, con el fin de rehabilitar diferentes derechos fundamentales relacionados con sus condiciones materiales de existencia, como el mínimo vital, la vivienda, el acceso progresivo a la propiedad, que son satisfechos con economías ilícitas que buscan transitar hacia la legalidad.

A partir de esa norma se creó el Plan Nacional de Sustitución Integral de Cultivos Ilícitos –PNIS-, que resulta ser una estrategia alternativa de reducción de hectáreas sembradas de materias primas para la cadena de valor del narcotráfico, basado en la sustitución voluntaria y el tratamiento penal diferenciado al pequeño campesino cultivador.

De otro lado, esta Corte ha reconocido la implementación del punto 4 como un parámetro de análisis para el juez constitucional en sede de tutela, principalmente en el Auto **A-389 de 2019**, proferido en el marco del trámite de cumplimiento de la sentencia **T-236 de 2017** frente a los actuales programas de erradicación forzada de cultivos ilícitos, estrategia de seguridad nacional implementada unilateralmente por la Fuerza

---

[92] Al respecto, este Honorable Tribunal en sentencia C-040 de 2020, tuvo la oportunidad de analizar una demanda de inconstitucionalidad contra una Ley por desconocer los compromisos del Acto Legislativo 02 de 2017. Allí se establecen varios puntos de análisis al respecto, que retomamos en la presente demanda de constitucionalidad: *"...los demandantes no demuestran (i) que la disposición demandada sea una* ***norma de implementación*** *del Acuerdo de Paz; (ii) no indican los contenidos de dicho Acuerdo relativos a* ***derechos fundamentales*** *o al Derecho Internacional Humanitario, que puedan ser tenidos como* ***referentes de desarrollo y validez o como parámetros de interpretación de la disposición demandada****; (iii) no argumentan por qué el punto 6.1 del Acuerdo debe ser aplicado como referente respecto de la disposición demandada; y (iv) aún en el evento en que el Acuerdo Final pudiera tener dichas funciones respecto de la disposición demandada, tampoco es claro por qué razón la misma supone un recorte a los recursos para la implementación del Acuerdo de Paz, o plantea ineficiencia o ineficacia en el uso de los recursos pues, contrario a lo planteado por los demandantes, los parágrafos 1 y 2 de la disposición demandada establecen claramente que la financiación de los planes especiales para las ZEII provendrá de recursos adicionales del presupuesto público, recursos de cooperación internacional y aportes del sector privado , y que en ningún caso podrán comprometer los recursos definidos por el Plan Marco de Implementación para los PDET.*

Pública. Allí se reconoce que: *"(...) la promoción de la sustitución voluntaria permite enfrentar la expansión de los cultivos ilícitos mediante un programa alternativo a la erradicación, lo que además de honrar lo pactado,* ***cumple fines constitucionales relevantes****".*

En esa decisión se reconoce la condición de vulnerabilidad de las familias habitantes de la ruralidad dedicadas a los cultivos de uso ilícito, quienes son **sujetos de protección atravesados por distintas dinámicas de desigualdad**, a saber: i) la desigualdad entre las zonas urbanas y las ruralidades, que ha generado concentraciones de los recursos económicos en favor de las ciudades; ii) el conflicto armado interno, que ha generado graves vulneraciones a los derechos humanos en los territorios que han poblado; y iii) el abandono de las instituciones del Estado, que no han atendido en debida forma las necesidades sociales de estas personas, desatendiendo también su obligación de garantía de derechos fundamentales. En dicha oportunidad, fue reconocida la desigualdad histórica de las familias campesinas de escasos recursos que han colonizado las zonas de frontera agrícola en el país así:

> Durante las últimas décadas del periodo colonial, y las primeras del periodo republicano, cientos de familias campesinas migraron hacia los valles interandinos, especialmente del Magdalena, con el fin de cultivar tabaco (nicotina), producto que se exportaba y se cotizaba con altos precios internacionales para la producción de cigarrillos. En torno a la exportación del tabaco se produjo una fuerte migración de familias campesinas. Posterior al ciclo del tabaco, se produjo la migración hacia el occidente del país, de la mano del cultivo y producción de café (cafeína) con las mismas finalidades, la exportación a mercados internacionales. Ahora, y **desde hace más de tres décadas, la migración interna de colonos se produce hacia regiones que antes eran frontera agrícola, hacia la altillanura amazónica y de la Orinoquia, y en la que, en algunas ocasiones, el cultivo que permite la subsistencia es la planta de coca**, con miras a la producción de cocaína. En esto son coincidentes la historiografía nacional y el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)[93] (subrayado fuera del original).

Asimismo, allí se reconocen los compromisos del Estado colombiano en la lucha contra el narcotráfico como un asunto de relevancia central en la política de seguridad y defensa nacionales, que ponen el énfasis en el combate frontal al número de cultivos ilícitos, el cual es el indicador de aciertos y retrocesos en la política de drogas colombiana. Sin embargo, en atención a la exigencia constitucional de un enfoque dignificador de personas en situación de debilidad e inferioridad, es preciso una revisión del enfoque de atención al problema de las drogas ilícitas, que permita un abordaje integral de todas las variables de análisis, entre las que se incluye el desplazamiento forzado por las condiciones económicas en el centro del país, que estimulan la migración interna hacia las zonas de frontera agrícola. Al respecto, esa misma decisión sostiene que *"una importante variable tiene que ver con el permanente movimiento demográfico que se desarrolla internamente en el país, debido a que* ***en algunas regiones de Colombia persiste un régimen de tenencia y explotación de la tierra que no garantiza el acceso*** *a los campesinos"*.

Otro de los enfoques diferenciales de atención a esta problemática tiene que ver con el reconocimiento de las necesidades y características particulares de los territorios, espacios con relaciones económicas, políticas y culturales diferenciadas. Las dinámicas sociales de los territorios especialmente afectados por la guerra, así como caracterizados por la debilidad institucional y el poco atractivo económico, deben ser tenidas en cuenta por las autoridades que buscan establecer un tratamiento jurídico sobre determinados grupos poblacionales.

En el caso que analizamos, es preciso reconocer la exigencia, que el Acuerdo Final de Paz establece, de un enfoque territorial en el abordaje de las problemáticas en las zonas de frontera agrícola en el país, caracterizadas por ser lugares de colonización de familias campesinas, habitantes de zonas rurales, que

[93] Corte Constitucional, A-387 de 2019. Proferido en sede de cumplimiento de la sentencia T-236 de 2017.

por su vulnerabilidad socioeconómica se ven forzadas a dedicarse a los cultivos de uso ilícito. La Corte ha reconocido que: *"(...) dichos cultivos se ubican en* **zonas de frontera agrícola,** *es decir,* ***aquellos espacios en los que el bosque o la selva y la tierra cultivable colindan.*** *Con ello, el aumento de los cultivos de uso ilícito se hace a costa de deforestar terrenos de ecosistemas como la selva amazónica"* [94].

El tratamiento diferenciado a los campesinos con cultivos de uso ilícito, en el marco de las apreciaciones ya mencionadas, y que esta misma Corte ha identificado como elementos de análisis del problema de las drogas ilícitas, debe ser una **acción del Estado situada en las zonas de frontera agrícola**, en atención al enfoque territorial y a un análisis histórico de las políticas estatales frente a la lucha contra las drogas, que respecto de la disposición acusada se refiere a medidas de política criminal orientadas a penalizar conductas conexas con las usuales prácticas de colonización que ejercen campesinas y campesinos empobrecidos por las lógicas de acumulación de recursos en los centros urbanos y el conflicto armado interno.

Por su parte, la disposición acusada plantea una **estrategia de criminalización en las zonas de frontera agrícola del país contra los cultivadores de uso ilícito**, y lo anterior se desprende cuando analizamos en perspectiva los distintos objetos materiales de protección de los tipos penales establecidos en los artículos 330, 330A, 336 y 336A del Código Penal, sustituidos en su totalidad por el artículo 1 de la Ley 2111 de 2021. La deforestación, la invasión de áreas de especial importancia ecológica y el aprovechamiento ilegal de baldíos tienen por separado distintos elementos característicos de las zonas de frontera agrícola como objetos de protección material, que respectivamente son el *bosque natural*, las *áreas protegidas* y los *baldíos de la Nación*, los cuales son bienes jurídicos trastocados por los fenómenos de colonización campesina en estos territorios.

En virtud de la Ley 1776 de 2016, así como en desarrollo de aspectos del Punto sobre Reforma Rural Integral en el Acuerdo Final, el Gobierno ha definido la frontera agrícola como "*el* ***límite del suelo rural que separa las áreas donde las actividades agropecuarias están permitidas, de las áreas protegidas, las de especial importancia ecológica****, y las demás áreas en las que las actividades agropecuarias están excluidas por mandato de la ley o el reglamento"*[95]. Esta definición, aplicable a la política pública de adjudicación de tierras y desarrollo rural, fue el resultado de una decantación de distintas referencias que aludían al límite espacial entre las actividades pecuarias humanas y el paisaje natural, conformado por la vegetación y la fauna nativas de cada territorio.

En ese sentido, si bien en ninguno de los apartes de la Ley 2111 del 2021 se hace mención expresa al Acuerdo Final de Paz ni a la necesidad de su implementación directa a través de los mecanismos ordinarios con los que cuentan las autoridades públicas, de lo que se ha venido extrayendo podemos concluir que este trámite legislativo ordinario, dentro del cual se busca establecer una política criminal frente a las conductas que lesionan gravemente el medio ambiente y los bienes de la naturaleza, está incluido un tratamiento penal destinado a las problemáticas de las zonas de frontera agrícola, cuyos fenómenos de colonización están mediados por la afectación a bosques naturales, áreas protegidas y baldíos de la Nación.

---

[94] Corte Constitucional. Auto 387 de 2019.

[95] Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA. Ministerio de Agricultura. Identificación general de la frontera agrícola en Colombia. Enero del 2018. Disponible en: https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Projects_Documents/IDENTIFICACION%20GENERAL%20DE%20LA%20FRONTERA%20.pdf

La protección a las áreas de bosque natural por los tipos penales de Deforestación y promoción/financiación de esa conducta (artículos 330 y 330A de la Ley 599 de 2000), sustituidos por el artículo 1 de la Ley 2111, tienen una relación de conexidad estrecha con la implementación del punto sobre solución al problema de las drogas ilícitas, dentro del cual se encuentra una estrategia integral para el abordaje de los conflictos socioambientales en estas zonas a través de los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo, así como los planes de desarrollo con enfoque territorial, que pretenden rehabilitar los derechos fundamentales de poblaciones históricamente afectadas por el conflicto armado interno.

A continuación, haremos mención de distintas garantías involucradas en la implementación, tanto del Acuerdo Final de Paz como de la disposición acusada, y que están en cabeza de familias campesinas dedicadas a los cultivos de uso ilícito en las zonas de frontera agrícola.

6.3.3. Los derechos de las comunidades campesinas dedicadas a los cultivos de uso ilícito

Como hemos venido mencionando, el Acuerdo Final de Paz es un documento de política de Estado, vinculante para todas las instituciones públicas en el marco de sus competencias constitucionales, quienes están comprometidas a observar sus objetivos, su espíritu y sus finalidades, con el fin de contribuir a la construcción de paz, teniendo en cuenta que es un eje axial del ordenamiento constitucional vigente.

Sin embargo, otra de las exigencias jurisprudenciales para tener en cuenta lo acordado como parámetro de constitucionalidad es la conexidad de los contenidos del Acuerdo Final de Paz con derechos fundamentales definidos en la Constitución Política. Por ello, la parte aquí accionante resalta dos derechos que son desarrollados por el Punto 4 y resultan seriamente involucrados con la disposición demandada al criminalizar la deforestación para la siembra de cultivos de uso ilícito.

En primer lugar, el derecho-principio de igualdad material sobre las y los campesinos dedicados a los cultivos de uso ilícito, dado que la disposición acusada desconoce el principio de tratamiento diferenciado que el Acuerdo Final de Paz contempla para campesinos y campesinas que realizan estas actividades; y, en segundo lugar, los derechos que estos grupos poblacionales exigen a la rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en clave de reparación integral como poblaciones especialmente afectadas por el conflicto armado interno.

6.3.4. El juicio integrado de igualdad frente a la disposición acusada

Como mencionamos en párrafos precedentes, es una obligación de Estado, en virtud del Acuerdo Final de Paz, **establecer un tratamiento diferenciado** en los distintos ámbitos de la función pública **a las familias campesinas dedicadas a los cultivos de uso ilícito**, el cual no se ve reflejado en los tipos penales de Deforestación y Promoción y financiación de la deforestación que, con ocasión de su condición de vulnerabilidad ante los fenómenos de colonización en zonas de frontera agrícola de los cuales han sido sujetos históricos, constituyen medidas desproporcionadas y arbitrarias a la luz del principio de igualdad material.

Campesinos y campesinas son los principales habitantes de las zonas de frontera agraria en el país. Ellos y ellas sufren una grave situación de desigualdad, que las conmina a constituirse en el eslabón más débil

de la cadena de valor del narcotráfico, principal mecanismo de financiación de grupos armados ilegales. Como se desprende del monitoreo que los organismos internacionales realizan sobre los cultivos de uso ilícito, el tratamiento penal diferenciado que se les reconoce a estos campesinos y campesinas es un mecanismo jurídico que armoniza las exigencias en materia de lucha contra las drogas con el reconocimiento de la grave situación de desigualdad de estas personas.

Una estrategia integral que armonice las exigencias jurídicas de seguridad e igualdad material implica un tránsito eficaz de economías ilícitas a economías lícitas, que garantice la dignificación de las comunidades campesinas y la no necesidad de resiembra. Los aquí accionantes consideramos transgredido el derecho a la igualdad material de los campesinos y las campesinas, habitantes de las ruralidades ubicadas en zonas de frontera agrícola, por cuanto la norma objeto de reproche establece un tratamiento penal indiscriminado en relación con el fenómeno de los cultivos de uso ilícito, sin tener en cuenta las condiciones especiales de las personas campesinas habitantes de territorios en zonas de frontera agrícola, donde se desarrollan principalmente –por no decir que de manera exclusiva– actividades de cultivos de uso ilícito. Esta afirmación se deriva de una comparación entre los datos sobre cultivos de uso ilícito elaborados por la UNODC[96] con las conclusiones de la UPRA del Ministerio de Agricultura, al delimitar las zonas de frontera agraria a nivel nacional[97].

Al respecto, es preciso recordar que la inspiración constitucional sobre este valor superior ordena tratar de manera igual a los iguales y de manera desigual a los desiguales. Bajo el modelo constitucional vigente, el tratamiento igualitario ante la ley, conocido como igualdad formal, resulta insuficiente para garantizar un orden social justo, y es preciso que el Estado ofrezca condiciones que materialicen las condiciones de igualdad entre las personas. La igualdad, entonces, es un principio relacional, sobre el que es imprescindible establecer puntos de comparación entre sujetos de derechos, quienes se encuentran en posiciones económicas, culturales o sociales diferentes entre sí.

Para realizar este análisis, es preciso recapitular la metodología de análisis del derecho/principio de igualdad, desarrollada en la jurisprudencia constitucional, y que establece unos criterios de comparación en términos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estrictos, a través del denominado test integrado de igualdad, que tiene distintas intensidades en relación con las temáticas a abordar, e incluye cuatro aspectos de análisis, cuya combinación va variando conforme a la intensidad de la temática.

El test estricto de igualdad, incluye un análisis de los fines, que debe ser imperioso y constitucionalmente no prohibido, así como de los medios, que deben ser efectivamente conducentes y necesarios para el logro del fin, conforme se expuso en la formulación del primer cargo de la presente demanda.

En el caso que aquí presentamos, consideramos la necesidad de aplicar un test estricto a la disposición demandada, dado que resultan involucrados en su aplicación sujetos de especial protección constitucional como una población vulnerable[98]. Estos son las familias campesinas, a la luz de los hallazgos constitucionales y de una lectura de distintas disposiciones constitucionales que garantizan el acceso progresivo de la propiedad a personas sin tierra o con tierra insuficiente, con ocasión de una condición

---

[96] Al respecto, ver el reporte sobre monitoreo de territorios afectados por cultivos de uso ilícito de 2020, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC), disponible en: https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_de_territorios_afectados_por_cultivos_ilicitos_2020.pdf

[97] Op. Cit. Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA.

[98] Corte Constitucional, sentencia C-116 de 2021. Allí se enlistan las distintas poblaciones vulnerables reconocidas jurisprudencialmente, entre ellas las personas víctimas de desplazamiento forzado, del conflicto armado interno y las personas campesinas.

histórica de desigualdad en la propiedad de la tierra rural. Al respecto, la Corte Constitucional ha reiterado las reglas jurisprudenciales de la siguiente manera:

> 125. En tercer lugar, el escrutinio estricto o fuerte evalúa: i) si el fin perseguido por la norma es imperioso; ii) si el medio escogido, además de ser efectivamente conducente, es necesario, esto es, si no puede ser reemplazado por otros menos lesivos para los derechos de los sujetos pasivos de la norma; y, por último, iii) si los beneficios de adoptar la medida exceden o no las restricciones impuestas sobre otros valores o principios constitucionales; es decir, si la medida es proporcional en sentido estricto.
>
> 126. Esta modalidad de escrutinio se aplica, inter alia, a **hipótesis en las que la misma Constitución señala mandatos específicos de igualdad, lo que se traduce en una menor libertad de configuración del Congreso** y, por consiguiente, en un juicio de constitucionalidad más riguroso. De esta forma, la Corte Constitucional ha aplicado el escrutinio estricto o fuerte cuando la medida: i) contiene una clasificación sospechosa como las enumeradas no taxativamente en el primer inciso del artículo 13 de la Constitución; ii) **afecta a personas en condiciones de debilidad manifiesta o grupos discriminados o marginados**; iii) en principio, impacta gravemente un derecho fundamental; o iv) crea un privilegio[99] (subrayado fuera del original).

En atención a las reglas precitadas, procedemos a delimitar cada una de ellas en relación con la disposición demandada:

Carácter estricto del test. Como se ha venido mencionando a lo largo del escrito de demanda, las familias campesinas dedicadas a los cultivos de uso ilícito son sujetos de colonización en zonas de frontera agrícola a consecuencia de fenómenos de violencia sociopolítica y desigualdad económica que las ha llevado hacia una migración forzada a lugares apartados de los centros hegemónicos[100] y, debido a la falta de otras oportunidades para garantizar su sostenimiento, se dedicaron a las únicas actividades rentables en dichos territorios: la cadena de valor del narcotráfico.

El propio ordenamiento jurídico contiene expresiones que reconocen la grave condición de desigualdad en la que se encuentran inmersas las familias campesinas habitantes de las zonas de frontera agrícola. Tanto el Decreto Ley 896 de 2017, analizado por la Corte Constitucional en su sentencia C-493 de 2017, como la Ley 1941 de 2018, analizada en la sentencia C-040 de 2020 y desarrollada en el Decreto 2278 de 2019, reconocen la existencia de poblaciones especialmente afectadas por el conflicto armado en razón de su cohabitación con los escenarios militares y económicos de aquel.

Las familias campesinas dedicadas a los cultivos de uso ilícito son sujetos en condición de debilidad manifiesta y constituyen una población marginada en razón del conflicto armado y de las brechas económicas existentes entre los centros urbanos y las periferias rurales. Residen en zonas apartadas donde la acción del Estado es débil, donde también operan grupos armados al margen de la ley que ejercen coacción sobre ellas, y donde además existen índices de necesidades básicas insatisfechas. Estas circunstancias deben ser tenidas en cuenta por el Estado al tipificar penalmente los agravantes de los tipos penales de deforestación y promoción o financiación de la misma.

Finalidad imperiosa. La razón de tipificar los cultivos de uso ilícito como agravante de los tipos penales de los artículos 330 y 330A reside en los compromisos de Estado colombiano frente a la lucha contra las drogas, así como en las exigencias constitucionales de mantenimiento del orden público y de condiciones

---

[99] Corte Constitucional, sentencia C-345 de 2019, reiterada en la sentencia C-116 de 2021.
[100] Corte Constitucional. Auto A-387 de 2019.

pacíficas, dado que la cadena de valor del narcotráfico financia los grupos armados que compiten con el Estado por el control territorial y poblacional en diversas zonas del país.

La desarticulación de las economías ilícitas es un objetivo de gran envergadura para materializar las condiciones de seguridad de comunidades y personas violentadas por las estructuras de poder criminal que se nutren del negocio de la producción y comercialización de estupefacientes. Los artículos 189-3, 189-4 y 218 constitucionales establecen las facultades del Gobierno nacional en materia de orden público. A su vez, el artículo 150-11 regula la facultad del legislativo de codificar diversos asuntos de la agenda pública, como la política criminal del Estado, a través de la cual busca prevenir y sancionar conductas dañosas para los bienes jurídicos tutelados.

Por su parte, la disposición acusada es un tipo penal que busca proteger el bien jurídico del medio ambiente y los recursos naturales, que se materializan en áreas de bosque natural, no intervenidos por el ser humano, y donde reposa gran riqueza natural en términos de biodiversidad, bien de especial importancia en virtud de la denominada Constitución Ecológica[101], conformada por varias disposiciones que reconocen y protegen el patrimonio natural. En las zonas donde las áreas de bosque colindan con las áreas de intervención humana a través de actividades agropecuarias, conocida como frontera agrícola, se han generado graves focos de deforestación que son objeto de preocupación del legislador, quien pretende prohibirlas para proteger la biodiversidad ante la actividad humana.

Medio conducente y necesario. Ahora bien, el medio escogido por el legislador para abordar los conflictos socio-ambientales que se presentan en las zonas de frontera agrícola, y que afectan los bosques naturales y su biodiversidad, es la prohibición expresa bajo amenaza de criminalización de la conducta de deforestar para el cultivo de plantas de uso ilícito.

De acuerdo con lo que hemos venido mencionando, la penalización de estas conductas como una forma de prevenir y castigar los cultivos de uso ilícito no es la única herramienta con que cuenta el Estado para abordar la lucha contra el narcotráfico. Partiendo de la base de que el principal indicador de avance en la lucha contra las drogas es la reducción de los cultivos de uso ilícito, la Corte Constitucional ha distinguido entre los mecanismos de erradicación forzada y los mecanismos de sustitución voluntaria, pues implican dos enfoques de atención diferenciados respecto los cuales se dijo lo siguiente:

> **Este modelo punitivista y prohibicionista tuvo consecuencias adversas y pobres resultados**, pues durante más de tres décadas produjo el castigo de los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, y no disminuyó ni de la producción ni del consumo. Muestra de lo anterior, fue la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS) de 2016, la cual tuvo como principal objetivo evidenciar las consecuencias de la política prohibicionista y la urgencia de transitar hacia una política con enfoque de derechos y salud pública[102] (negrillas fuera del original).

La política de drogas enfocada en la reducción de cultivos de uso ilícito posee varias vías para alcanzar los fines mencionados anteriormente, relacionados con la seguridad y la protección al medio ambiente. El enfoque prohibicionista y punitivista ha convertido los mecanismos de erradicación forzada en una colisión entre la Fuerza Pública y las economías ilícitas sin salida, pues la persistencia de condiciones de desigualdad estructural ha permitido que estén disponibles permanentemente familias y personas para dedicarse a estas actividades ilícitas bien recompensadas por los grupos armados ilegales, dada la exigencia de cubrir necesidades básicas insatisfechas en los territorios más apartados de la ruralidad.

---

[101] Corte Constitucional, sentencia C-032 de 2019.
[102] Corte Constitucional, auto A-387 de 2019.

Por su parte, la política de sustitución voluntaria apunta a la reducción de los cultivos a través de una estrategia que permita a las familias cultivadoras dejar de sembrar y no volver a hacerlo, acompañada de medidas de rehabilitación de sus derechos sociales que garanticen la no repetición de las causas objetivas del cultivo por condiciones vulnerables. En diversos pronunciamientos, la Corte ha reconocido la importancia de la lucha contra las drogas, pero asimismo ha defendido la necesaria observancia de distintos enfoques que protejan derechos fundamentales de comunidades vulnerables.

Así, por ejemplo, en la sentencia T-080 de 2017, se ampararon los derechos a la consulta previa de comunidades étnicas en cuyos territorios se desarrollaban acciones de erradicación forzada de manera manual por efectivos de la Fuerza Pública -denominadas PECAT- y el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con Glifosato (PECIG), teniendo en cuenta la especial relación de dichos cultivos con actividades de subsistencia y espirituales.

Más adelante, en la reconocida sentencia T-236 de 2017, la Corte analizó la petición de tutela de comunidades afrodescendientes del Chocó afectadas en su vida e integridad personal ante las consecuencias en la salud humana derivadas de las aspersiones aéreas de glifosato en el marco del PECIG. Allí se reconoció la necesidad de un enfoque preventivo basado en el principio de precaución, ante la inexistencia de certeza en la no afectación a la salud de las personas.

En ese marco se adoptó el Auto 389 de 2019, donde este alto tribunal indicó que los mecanismos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito son estrategias cuya aplicación es prevalente respecto de otras estrategias con las que cuenta el Estado para resolver la problemática derivada de dichos cultivos.

Finalmente, la sentencia T-690 de 2017 analiza la posible vulneración del derecho a la vida e integridad personal de comunidades campesinas en varios municipios de Putumayo, ante la vulneración de los operativos de erradicación forzada de la Policía y el Ejército que han generado el desplazamiento forzado de la población civil debido a la agudización del conflicto armado en la zona. Allí se reconoció la importancia de un enfoque preventivo que reconozca la urgencia de las necesidades de las poblaciones potencialmente afectadas por actividades del Estado, en específico por las labores de erradicación, que deben contemplar planes de contingencia en la ejecución de estos medios, para garantizar los derechos de los campesinos como población vulnerable en los casos analizados.

Estas decisiones judiciales en sede de tutela constituyen precedentes de importancia para la identificación de las medidas constitucionalmente conducentes y necesarias para un efectivo alcance de los fines señalados. Del recorrido jurisprudencial se concluye que existen diversos enfoques que dan cuenta de abordajes distintos de la problemática de la destrucción de bosque natural para cultivos de uso ilícito, de modo que la protección del ambiente y la reducción de cultivos de uso ilícito pueden ir de la mano con un enfoque prevalente de la sustitución sobre la criminalización para el caso de familias campesinas vulnerables habitantes de zonas rurales de frontera agrícola. En ese sentido, identificamos una primera incongruencia dentro del juicio de igualdad que deriva en una inconstitucionalidad por este cargo.

Medida estrictamente proporcional. Finalmente, los aquí accionantes consideramos que la expresión "*para cultivos de uso ilícito*", que busca penalizar las acciones de talar, quemar, arrancar o destruir áreas de bosque natural con esta finalidad, es una medida legal que trata igual a desiguales: los campesinos vulnerables que se dedican a los cultivos de uso ilícito en zonas de frontera agrícola, donde se desarrollan

estas actividades, frente a otros sujetos que pueden transgredir el bien jurídico tutelado a través de los verbos rectores mencionados, para otras finalidades.

Existiendo otros medios menos lesivos de derechos fundamentales que buscan alcanzar el fin de acabar con los cultivos de uso ilícito que financian la guerra y deforestan la selva, la criminalización de la acción de deforestar para cultivar estupefacientes, cuando recae sobre campesinos que se fuerzan por sus condiciones socioeconómicas a ello, afecta distintos bienes jurídicos, como la libertad y la dignidad humana de estas comunidades, que son penalizadas y condenadas a penas privativas de la libertad que profundizan sus condiciones de vulnerabilidad social.

Como vimos en el acápite precedente, además de vulnerar distintos derechos constitucionales de poblaciones marginalizadas, la norma resulta ineficaz, puesto que la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y la penalización de los cultivadores sin medidas reales que prevengan la reincidencia en la siembra no hace más que proliferar el fenómeno de los cultivos ilícitos en nuevas zonas de bosque y áreas protegidas, ampliando aún más la deforestación en zonas de frontera agrícola. La penalización indiscriminada de los pequeños campesinos vulnerables, eslabones más débiles de la cadena de valor del narcotráfico, desconoce la finalidad intrínseca de la decisión de dedicarse a los cultivos de uso ilícito, que es la satisfacción de necesidades básicas en un ambiente hostil, caracterizado de la siguiente manera:

> Las zonas que desarrollan una dependencia con los cultivos ilícitos suelen ser caracterizadas por bajos niveles de presencia efectiva del Estado, con una limitada provisión de bienes y servicios, bajos niveles de inserción a la economía legal, alta vulnerabilidad social y falta de control por parte del gobierno. Muestra de ellos son los casos de Afganistán, México y Colombia, donde el problema de los cultivos no solo es un asunto que afecta la seguridad, sino que está íntimamente ligado al desarrollo[103].

Partiendo de este estado de cosas, un enfoque criminal que aborde la problemática de los cultivos de uso ilícito en las zonas de frontera agraria, donde se encuentran los fenómenos de deforestación, implica una vulneración de distintas garantías de las familias campesinas vulnerables que se dedican a estos cultivos buscando garantizar condiciones materiales para el ejercicio de derechos como el acceso a un mínimo vital, la vivienda, la educación, la salud y el acceso progresivo a la propiedad, no garantizados por el Estado ante una carencia histórica de atención a estas poblaciones y abandono en esos territorios. Asimismo, se transgrede de manera desproporcionada la libertad, dado que no se da cuenta de las razones estructurales que configuran estas conductas punibles en los escenarios dados, ante lo cual concluimos que la medida resulta a todas luces desproporcionada cuando existen otros mecanismos menos lesivos de estos derechos, con los cuales se cumplen los cometidos fijados anteriormente.

6.3.5. Derecho de las víctimas del conflicto armado interno a la reparación integral

Otras de las garantías involucradas en el problema jurídico que aquí se plantea son los derechos que les asisten a las víctimas del conflicto armado interno con ocasión del grave estado de cosas inconstitucional que la Corte Constitucional constató en materia de atención a la población desplazada, y cuyo análisis se amplió a todas las personas victimizadas por la violencia armada que ha atravesado la historia del país. Ya desde la sentencia C-228 de 2002 se ha reconocido la naturaleza constitucional de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral en favor de las víctimas de hechos punibles, dada la

[103] Fundación Ideas para la Paz, "Cultivos ilícitos: el problema y las alternativas posibles", nota publicada en junio de 2018. Disponible en: https://www.ideaspaz.org/publications/posts/1685

vinculatoriedad de diversos instrumentos internacionales. Asimismo, la Corte ha reconocido la conexión de varias disposiciones constitucionales con estas garantías, de la siguiente manera:

> Los derechos constitucionales de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición, como lo ha señalado esta Corte, encuentran fundamento en los siguientes preceptos de la Constitución:
>
> 1. El principio de dignidad humana (Art.1° CP),
> 2. El deber de las autoridades de proteger los derechos de todos los residentes en Colombia (Art. 2° CP),
> 3. Las garantías del debido proceso judicial y administrativo (art. 29, CP),
> 4. La cláusula general de responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que causen los servidores con dolo o culpa grave (art. 29, CP),
> 5. La consagración de los derechos de las víctimas como derechos de rango constitucional (Art. 250 núm. 6 y 7 CP),
> 6. La integración del bloque de constitucionalidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (Art. 93 CP),
> 7. El derecho a acceder a la justicia (art. 229 CP),
> 8. El artículo transitorio 66 (Artículo 1 del Acto legislativo 01 del 31 de julio de 2012), que contempla el deber de adoptar instrumentos de justicia transicional que garanticen en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y establece que en cualquier caso se aplicarán mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas[104].

En particular, la parte accionante considera que las familias, comunidades y personas campesinas habitantes de las zonas de frontera agrícola se ven forzadas a dedicarse a las economías ilícitas en razón de las dinámicas de conflicto armado que se desenvuelven en tales territorios, y mantienen las condiciones de desigualdad en las que se encuentran.

Por tal razón, insistimos en afirmar que, como se desprende de pronunciamientos constitucionales y los hallazgos del Gobierno nacional, la situación de precariedad en que se encuentran las familias campesinas dedicadas a cultivos de uso ilícito las lleva a incurrir en estas conductas típicas de manera forzada, sin un propósito criminal dirigido a formar parte de estructuras asociadas al narcotráfico, sino que están subordinadas y en muchos casos son victimizadas por las mismas.

No puede dejar de advertirse que la economía ligada a los cultivos de uso ilícito ha estado vinculada a los distintos fenómenos de colonización de aquellas zonas con desarrollo de economías extractivas como el caucho o la quinua en el siglo XIX, y que en el siglo XX se inclinó por la marihuana, la amapola y la coca. Asimismo, con el advenimiento de instrucciones geopolíticas que en los años 70 se realizaron desde los Estados Unidos, estos fenómenos de colonización fueron criminalizados y la población campesina terminó entre el fuego cruzado del Estado y grupos armados ilegales que se hicieron al control de la producción -principalmente de pasta de coca- para su transformación y comercialización en el mercado internacional, sin que exista simbiosis alguna entre los eslabones débiles y los fuertes dentro de la cadena de valor[105].

La falta de oportunidades y la estigmatización de todo el marco de sus actividades cotidianas como delincuentes que hacen parte del negocio lucrativo del narcotráfico han sido elementos de reivindicación por parte de este grupo poblacional, al cual se le ha negado su ciudadanía, teniendo que dedicarse a la supervivencia en territorios nunca intervenidos por el Estado social.

---

[104] Corte Constitucional, sentencia C-180 de 2014.

[105] Pinto Ocampo, M. Entre la represión y la concertación: los cocaleros en el Chapare y en el Putumayo. Informe final del concurso: Movimientos sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe. Programa Regional de Becas CLACSO. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2002/mov/pinto.pdf

Las normas acusadas tipifican y agravan las penas sobre comportamientos a los cuales las familias campesinas se han visto conminadas sin un análisis integral que dé cuenta de su victimización por todos los actores del conflicto armado, quienes han querido encontrar réditos económicos con la situación de precariedad, y muchas veces utilizan la fuerza para imponer las condiciones de operatividad de su negocio ilícito.

En ese sentido, el Acuerdo Final de Paz optó por desarrollar un subpunto dedicado a la problemática del campesino cultivador de hoja de coca, amapola y marihuana, dando cuenta del reconocimiento de aquellos como víctimas del conflicto armado, y promoviendo los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial o las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, entre otras medidas de reparación, que ayuden a mejorar su inclusión social.

Asimismo, con el tratamiento penal diferenciado, se reconoce la existencia de poblaciones especialmente afectadas por el conflicto armado interno que exigen medidas de rehabilitación y satisfacción de sus derechos fundamentales. Al respecto, la Corte en una última ocasión se refirió a este tópico y precisó que concibe la reparación de la siguiente manera:

> El **derecho a la reparación integral** tiene por objeto el resarcimiento de los daños causados a las víctimas. Se encuentra integrado por la facultad de exigir medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y no repetición. Sobre el particular la jurisprudencia ha señalado que la restitución plena exige "el restablecimiento de la víctima a la situación anterior al hecho de la violación, incluyendo la restitución de las tierras usurpadas o despojadas".
>
> En caso de que ello no sea posible, ha dicho la Corte que "es procedente (…) la compensación a través de medidas como la indemnización pecuniaria por el daño causado". Este derecho incluye también la obligación de adoptar medidas de "rehabilitación por el daño causado, mediante la atención médica y psicológica, así como l**a prestación de otros servicios sociales necesarios para esos fines" de modo que se restablezcan las condiciones físicas y sicológicas de las personas**. Este Tribunal sostuvo, también, que existe un derecho a "la satisfacción, a través de medidas simbólicas destinadas a la reivindicación de la memoria y de la dignidad de las víctimas" **adoptando aquellas dirigidas "a proporcionar bienestar y contribuir a mitigar el dolor de la víctima**".
>
> A su vez el derecho a la no repetición comprende las medidas que tienen por objeto "**asegurar que no se repitan los hechos victimizantes"**[106] (negrillas fuera del original).

Tomando en cuenta estos elementos, consideramos que criminalizar la tala de bosques naturales para la siembra de cultivos de uso ilícito por parte de comunidades campesinas en zonas de frontera agrícola transgrede su derecho a la reparación integral.

Por un lado, a estas comunidades les asiste el derecho a beneficiarse de medidas de rehabilitación que reviertan la exclusión, empobrecimiento y marginalización a las que se han visto enfrentadas. De otro, también deben ser sujetas de medidas de satisfacción que, a la par de solucionar la problemática de las drogas ilícitas, les dignifiquen como sujetos de especial protección constitucional. La criminalización de los pequeños cultivadores, como hemos visto, no es un mecanismo que sirva para paliar la producción y consumo de estupefacientes ni para dignificar a las personas que resultan siendo el eslabón más débil en la cadena del narcotráfico.

---

[106] Corte Constitucional. Sentencia C-588 de 2019.

6.3.6. Análisis de la expresión demandada: un tratamiento penal inconstitucional a las familias campesinas con cultivos de uso ilícito

Teniendo en cuenta todos los parámetros expuestos, podemos concluir que la expresión "*para cultivos de uso ilícito*", contenida en el artículo 330 de la Ley 599 de 2000 sustituido por el artículo 1 de la Ley 2111 de 2021, es inconstitucional, luego de una delimitación de las disposiciones constitucionales claramente observadas en los capítulos precedentes, relativas a la obligación de cumplimiento de buena fe del Acuerdo Final en su punto 4, relacionado con la garantía de la igualdad material y los derechos a la reparación integral de familias campesinas cultivadoras de uso ilícito en zonas de frontera agraria, en delimitación del criterio de pertinencia del debate constitucional aquí planteado.

Por su parte, en términos de claridad y especificidad, hemos delimitado el objeto de litigio a la proposición "talar, quemar, cortar, arrancar o destruir áreas de bosque natural para cultivos de uso ilícito", que busca penalizar con prisión esta conducta. Esta misma expresión, referida como agravante del tipo penal que la precede, también está contenida en el artículo 330A de la Ley 599, sustituido por el artículo 1 de la Ley 2111 de 2021, que tipifica la promoción y financiación de la deforestación, conducta típica independiente y que penaliza acciones diferentes a la deforestación.

A nuestro juicio la conducta del artículo 330 penaliza la acción efectiva de talar o destruir bosques para cultivar; mientras que el artículo 330A penaliza la acción de ***promover*** la tala para cultivar, lo cual hace referencia a la actividad del empresario que estimula y financia al campesino cultivador a derribar bosque para realizar nuevos cultivos, y es quien se lucra con el negocio ilegal en detrimento de las condiciones y vulnerabilidades de la actividad del campesino.

Por lo anterior, estimamos que no debe ser penalizada con agravación punitiva en razón de las garantías de igualdad material y reparación integral de las que deben ser beneficiarias las familias campesinas a través de una especial atención del Estado, así como del principio de tratamiento penal diferenciado como el eslabón débil dentro de la cadena de valor del narcotráfico.

En ese sentido, los aquí accionantes dejamos claro el incumplimiento de la obligación constitucional de cumplir de buena fe el Acuerdo Final de Paz por parte del Congreso de la República a través de esta medida legislativa, teniendo en cuenta la afectación que ocasiona a los derechos a la igualdad y la reparación, conforme se expuso en este apartado.

De manera suficiente se referenciaron los pronunciamientos jurisprudenciales que desarrollan el Acto Legislativo 02 de 2017, el juicio integral de igualdad y los derechos de las víctimas como ejes definitorios del ordenamiento constitucional, para reconocerlos como parámetros de constitucionalidad desconocidos por el legislador al penalizar la actividad de deforestar para cultivo de uso ilícito, cuando sea realizada por campesinos vulnerables en zonas de frontera agrícola.

En conclusión, consideramos que las expresiones "*tale, queme, corte, arranque o destruya áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural"* y "*para cultivos de uso ilícito"* constituyen una proposición jurídica que busca penalizar la destrucción de bosque natural, sin establecer un tratamiento distinto en favor de aquellas personas campesinas vulnerables que se ven forzadas a estas conductas. Con ello, se vulnera la obligación de cumplimiento de buena fe de lo acordado, que irradia todas las gestiones de las autoridades en el marco de sus competencias constitucionales, y que en el caso

del legislador implica la exigencia de un tratamiento penal diferenciado a favor del campesinado cultivador.

Asimismo, esta proposición jurídica (relacionada con el punto 4 del Acuerdo Final por desarrollar una estrategia de tratamiento de los cultivos de uso ilícito) transgrede garantías fundamentales involucradas en la implementación de lo acordado, como el principio y derecho a la igualdad material y los derechos de las víctimas del conflicto a la reparación en clave de satisfacción y no repetición. Los campesinos y campesinas vulnerables que habitan zonas de frontera agrícola exigen un tratamiento que reconozca su condición de inferioridad, debilidad y marginalidad, así como su especial afectación por el conflicto armado, al ser la base de su sustento económico con ocasión de su vulnerabilidad.

En ese sentido, si bien el fin es constitucionalmente imperioso y legítimo (dado que busca garantizar la seguridad de las comunidades y la protección de la biodiversidad que albergan los bosques naturales) no es conducente ni necesario para solucionar la destrucción de bosques para cultivos de uso ilícito porque la erradicación forzada y la criminalización del campesino es la última medida disponible por el Estado, pues prevalece la sustitución.

Al tratar de manera igualitaria a los campesinos vulnerables habitantes de las zonas de frontera agrícola con otros sujetos dedicados a la deforestación para cultivar productos ilícitos se transgrede de manera desproporcionada el derecho a la igualdad material de los primeros, pues equipara a sujetos de especial protección constitucional con sujetos que no se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o marginalidad, agravando aún más su condición de inferioridad y debilidad.

Así las cosas, solicitamos a la Corte que declare la inexequibilidad de la expresión "*para cultivos de uso ilícito*" contenida en el numeral segundo del inciso segundo de la expresión acusada, así como la exequibilidad condicionada de la expresión "*tale, queme, corte, arranque o destruya áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural",* en el entendido de que cuando estas conductas sean realizadas por campesinos vulnerables para cultivos de uso ilícito, debe ser aplicado un tratamiento diferenciado en el que prevalezcan los mecanismos voluntarios de sustitución para armonizar la restricción de sus derechos a la libertad y la dignidad con las exigencias de seguridad y protección de la biodiversidad.

6.4. CARGO 4: DESCONOCIMIENTO DEL ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL

Norma acusada: Artículo 6 de la Ley 2111 de 2021 que modifica el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal

El artículo 6 de la Ley 2111 de 2021 modificó el artículo 302 del Código Penal referido a la captura en flagrancia. Así, la reforma dispuso que cuando la captura en flagrancia se produzca en ríos o tierra donde el arribo a la cabecera municipal más cercana solo puede surtirse por vía fluvial o siempre que concurran dificultades objetivas de acceso al territorio (v gr. obstáculos geográficos, logísticos, ausencia de infraestructura de transporte o la ocurrencia de fenómenos meteorológicos que dificulten seriamente el traslado), deberán realizarse todas las actividades para lograr la comparecencia del capturado ante un juez de control de garantías.

En particular, la norma acusada determina que aquellas labores orientadas a poner al aprehendido a disposición de autoridad judicial competente deben llevarse a cabo en el menor tiempo posible sin que en ningún caso exceda las 36 horas siguientes, **contadas a partir del momento de la llegada al puerto o municipio más cercano,** según el caso.

Lo anterior introduce una excepción generalizada que no resulta razonable respecto del parámetro constitucional previsto en el artículo 28 de la Constitución Política, conforme al cual toda persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

Respecto a la posibilidad de introducir excepciones o de dar una interpretación laxa de las 36 horas fijadas en el artículo 28 superior, la Corte ha sido enfática en señalar que de ninguna manera el legislador puede ampliar dicho término, es decir, la aplicación de esta norma constitucional no admite la posibilidad de un cumplimiento gradual. Por el contrario, se trata de un máximo que al legislador le está vedado desconocer.

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional se ha pronunciado sosteniendo que la posibilidad de interrumpir el término de 36 horas es incompatible con los artículos 28, 30 y 250.1 de la Constitución Política, dado que prolongar el lapso para la legalización de la captura en flagrancia, así sea en supuestos excepcionales, quebranta el derecho de *hábeas corpus* y rompe los presupuestos esenciales del derecho fundamental a un debido proceso.

La sentencia C-163 de 2008, por ejemplo, dio oportunidad para que la Corte analizara la modificación del artículo 2° de la Ley 906 de 2004 -realizada por el inciso tercero del artículo 1 de la Ley 1142 de 2007- y considerara que el mandato superior establece un parámetro temporal cierto en el que cualquier restricción de la libertad debe someterse a control judicial. Al respecto, manifestó en su decisión que *"[u]n examen sistemático de los preceptos constitucionales relacionados con la libertad individual y los límites a sus restricciones, permite afirmar que toda privación efectiva de la libertad personal debe ser sometida a control judicial de inmediato, y a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a su producción"*. Por tal razón, resolvió condicionar la exequibilidad de la norma en el entendido de que dentro del término de treinta y seis (36) horas posteriores a la captura se debe realizar el control efectivo a la restricción de la libertad por parte del juez de garantías o, en su caso, del juez de conocimiento.

Frente a ese condicionamiento, también ese mismo año la Corte, en sentencia C-425, aclaró que la diferencia en el ejercicio de las funciones a cargo del juez de conocimiento y el juez de garantías radica en la forma como realizan sus actuaciones. Mientras que para efectos del control de garantías todos los días y las horas son hábiles, es decir, dichos jueces prestan su función de manera continua e ininterrumpida, tratándose del juez de conocimiento su servicio únicamente puede prestarse en días y horas hábiles.

Además, resaltó la importancia de que exista un control judicial sobre los aspectos fácticos alrededor de la detención del capturado, pues se trata de una actuación centrada en garantías esenciales vinculadas al derecho a la libertad, como son la información sobre los motivos de la captura, y el respeto por la dignidad humana del aprehendido, lo cual incluye la defensa de su integridad física y sicológica.

De otra parte, en la sentencia C-042 de 2018, la Corte se ocupó de revisar la constitucionalidad del artículo 56 de la Ley 1453 de 2011 que introdujo reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal,

al Código de Infancia y Adolescencia, y a las reglas sobre extinción de dominio. La norma acusada condicionaba el término de 36 horas para efectuar la audiencia de control de legalidad sobre la captura en los casos en que el sujeto era aprehendido para el cumplimiento de una sentencia.

Esa providencia destacó al control judicial de la captura como expresión del sistema de garantías de la libertad a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y fue enfática en señalar que la excepción al control judicial de la captura con ocasión del cumplimiento de una sentencia, por parte del juez de conocimiento, dentro del término de 36 horas, desconoce el artículo 28 de la Constitución porque permite un entendimiento según el cual esta modalidad de captura no exige el cumplimiento de esa garantía constitucional definida por el constituyente primario en un sentido amplio para evitar privaciones arbitrarias a la libertad y otros actos concurrentes que puedan poner en riesgo la dignidad del capturado. De este modo, sostuvo:

> [...] una interpretación derivada del carácter restrictivo de las disposiciones que contemplan afectaciones a la libertad y de hermenéutica sistemática e integral de los postulados superiores *pro libertate* concluye que es inadmisible en términos *ius fundamentales* y superiores una privación de la libertad cualquiera que sea su naturaleza, que no cuente con la definición de un plazo para el respectivo control de su legalidad y de su constitucionalidad.
>
> En suma, el control judicial de cualquier modalidad de privación de la libertad, está sujeto a las siguientes reglas: i) debe realizarse por la autoridad judicial competente; y ii) el capturado será presentado ante el juez dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la restricción de la misma.

Por lo anterior, y siguiendo el precedente jurisprudencial de la sentencia C-163 de 2008, decidió condicionar la exequibilidad de la norma bajo el entendido de que el capturado deberá ponerse a disposición del juez de conocimiento o en su ausencia ante el juez de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la privación de la libertad.

Conforme a lo expuesto, la expresión, ***"contadas a partir del momento de la llegada al puerto o municipio más cercano"*** contenida en el artículo 6 de la Ley 2111 de 2021 introduce una excepción general a través de una expresión abierta e indeterminada, puesto que no dice nada sobre el tiempo transcurrido entre la captura y la llegada al puerto o municipio más cercano, rompiendo así con la idea de fijar un límite temporal cierto y concreto para los ejecutores de la captura. De tal forma, se rompe con la subregla constitucional según la cual:

> Una interpretación derivada del carácter restrictivo de las disposiciones que contemplan afectaciones a la libertad y de hermenéutica sistemática e integral de los postulados superiores *pro libertate*, concluye que es inadmisible en términos *ius fundamentales* y superiores una privación de la libertad cualquiera que sea su naturaleza, que no cuente con la definición de un plazo para el respectivo control de su legalidad y de su constitucionalidad[107].

Por ello, el pronunciamiento que la Corte Constitucional realice sobre este asunto resulta de importancia trascendental para evitar que las reformas cuya pretensión es dotar de mejores herramientas a las autoridades investigativas para la protección del medio ambiente y los recursos naturales a través de la sanción penal, no termine convirtiéndose en el pretexto para ampliar los términos de legalización de capturas en flagrancia con una cruzada de persecución judicial al campesinado ocupante de áreas de especial protección ambiental.

[107] Corte Constitucional, sentencia C-042 de 2018.

7. **CONCLUSIONES**

Lo expuesto en la presente acción permite sostener que las disposiciones examinadas no superan un análisis de constitucionalidad por los cargos sustentados y desconocen que el Estado tiene una deuda histórica frente a los pobladores del campo colombiano, reflejada en el Acuerdo Final de Paz y otros instrumentos de protección normativa y jurisprudencial que reconocen la necesidad de adoptar medidas para garantizar la protección de sujetos de especial protección constitucional, que son los más afectados por las normas penales que aquí se examinan.

Aunado a ello, la falta de articulación entre la normatividad agraria y ambiental, y una clara contradicción entre estas y la normatividad penal vigente que parece proscribir prácticas del campesinado so pena de persecución judicial, han generado una agudización de conflictos socio-ambientales, toda vez que ante los justos reclamos por formalización de derechos de acceso y propiedad de tierras por parte de familias campesinas han sido sometidas a procesos judiciales, o a desalojos forzados sin opciones de compensación o reubicación en condiciones de dignidad, al tratarse de áreas delimitadas como de protección ambiental.

Consideramos que las medidas de protección ambiental para mitigar, prevenir y controlar la devastación y depredación de los recursos naturales de que tratan los artículos examinados son inconstitucionales, atendiendo a la mínima intervención en materia penal de asuntos que pueden ser tratados por medio de otros mecanismos de manera más eficaz y respetuosa de los derechos de sujetos de especial protección constitucional.

Resulta pertinente recordar que las conductas descritas en los artículos considerados inconstitucionales son objeto de sanción administrativa, lo que implica que ya existe una protección de bienes jurídicos tutelados como los recursos naturales, así como una serie de mecanismos de reparación y compensación por los daños y afectaciones que en ningún sentido se verían debilitados por la exclusión del poder punitivo del Estado en estos.

Ahora bien, aunque nos hemos manifestado con amplitud y rigurosidad sobre la inconstitucionalidad de las normas que por la presente acción se demandan, es posible que nuestros argumentos no sean apreciados en igual sentido por parte del órgano de cierre de la jurisdicción constitucional. Por esta razón, estimamos pertinente presentar una pretensión subsidiaria buscando hacer menos gravosas las implicaciones de orden constitucional que tienen los tipos penales examinados.

En ese sentido y en caso de que nuestras pretensiones principales no prosperen, solicitamos declarar la constitucionalidad condicionada de los artículos 330, 330A, 333, 336 y 336A, para que frente a las conductas tipificadas por estos artículos opere la eximente de responsabilidad a favor de personas campesinas, indígenas y afrocolombianas que derivan su subsistencia de los bienes inmuebles ocupados, en sentido similar a lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 337, sobre apropiación ilegal de baldíos de la nación, adicionado por la Ley 2111 de 2021 al Código Penal.

Consideramos que si bien el legislador definió esta eximente de responsabilidad penal únicamente en atención a las posibles afectaciones de las que podrían ser sujetos estas poblaciones por la persecución en abstracto de conductas que les son propias en sus usos y costumbres, en el desarrollo argumentativo de

esta acción hemos presentado suficientes razones para ampliar dicha eximente al tratarse de las mismas poblaciones que serían sujetos de esta persecución penal indiscriminada.

8. SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA

Proponemos que la magistrada o el magistrado ponente solicite a la Sala Plena de la Corte Constitucional la celebración de una audiencia pública sobre la materia, haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 12 del Decreto 2067 de 1991[108], y en el artículo 60 del reglamento interno de la Corte[109], habida cuenta de la trascendencia del debate propuesto mediante esta acción de inconstitucionalidad.

Las y los accionantes consideramos de vital importancia que la Corte Constitucional pueda escuchar de primera mano los argumentos, propuestas y dificultades que han experimentado las comunidades y organizaciones campesinas sobre esta nueva normatividad penal, así como las opiniones de académicos, investigadores y todas aquellas personas e instituciones que tienen conocimiento de las problemáticas socio-ambientales derivadas de la tensiones existentes por la criminalización del campesinado, las víctimas del conflicto y otras personas que habitan la ruralidad por ocupaciones y expectativas de tenencia en áreas que han sido consideradas de importancia ecológica y ambiental.

Como participantes de la audiencia pública proponemos a organizaciones campesinas como la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, la Fundación por los Derechos Humanos del Centro Oriente de Colombia –DHOC–, la Asociación Campesina Ambiental Lozada-Guayabero, entre otras; a académicos y ambientalistas como Juan Pablo Ruiz, identificado con C.C. No. 79.145.532, quien puede ser notificado en la Cra. 5 # 28-46 apto 801; Manuel Rodríguez Becerra, identificado con C.C. No. 17.159.508, quien puede ser notificado en la Carrera 10# 86-89, Bogotá; y Gregorio Mesa Cuadros, identificado con C.C. No. 4112836, quien puede ser notificado en el correo electrónico gmesac@unal.edu.co entre otros.

9. PRETENSIONES

De acuerdo con los cargos formulados, y dada la particular técnica legislativa de la reforma realizada por la Ley 2111 de 2021 que en su artículo primero sustituyó en su integralidad el Título XI *"De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente"* del Código Penal, esta única disposición integra cinco (5) de los artículos del Código Penal examinados en esta acción, por lo cual, nos permitimos solicitar respetuosamente a la Corte Constitucional:

> **Primero.** DECLARAR INEXEQUIBLES los artículos 336 y 336A del Código Penal, adicionados por el artículo 1 de la Ley 2111 de 2021, por vulneración de los principios de proporcionalidad y de estricta legalidad.

---

[108] El inciso primero del artículo 12 del Decreto 1260 de 1991 establece que "Cualquier magistrado podrá proponer hasta 10 días antes del vencimiento del término para decidir, que se convoque una audiencia para que quien hubiera dictado la norma o participado en su elaboración, por sí o por intermedio de apoderado, y el demandante, concurran a responder preguntas para profundizar en los argumentos expuestos por escrito o aclarar hechos relevantes para tomar la decisión. La Corte, por mayoría de los asistentes, decidirá si convoca la audiencia, fijará la fecha y hora en que habrá de realizarse y concederá a los citados un término breve pero razonable para preparar sus argumentos. Las audiencias serán públicas".

[109] El artículo 60 del reglamento de la Corte (Acuerdo 05 de 1992) establece: "Convocación a audiencia. La Sala Plena de la Corte, a solicitud de cualquier Magistrado, por mayoría de los asistentes y teniendo en cuenta los antecedentes del acto objeto de juzgamiento constitucional y la importancia y complejidad de los temas, convocará a audiencia pública a las personas que deban intervenir en ellas de acuerdo con la ley y fijará su fecha, hora y lugar. Las citaciones a las personas y la organización de la audiencia corresponderá al Magistrado sustanciador".

Segundo. DECLARAR INEXEQUIBLE el artículo 333 del Código Penal, por vulneración del principio de estricta legalidad.

Tercero. DECLARAR INEXEQUIBLE la expresión *"para cultivos de uso ilícito"* contenida idénticamente en el numeral 1° de los artículos 330 y 330A del Código Penal, dado que esta desconoce la obligación constitucional de implementar de buena fe las disposiciones contenidas en el Acuerdo Final de Paz, en particular el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores.

Cuarto. DECLARAR INEXEQUIBLE el artículo 6 de la Ley 2111 de 2021, que modifica el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, en consideración estricta a las garantías constitucionales ya establecidas para las personas capturadas en flagrancia.

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA

En el evento de que las pretensiones principales no sean acogidas por la Corte Constitucional, solicitamos a la Corte Constitucional:

DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de los artículos 330, 330A, 333, 336 y 336A en el entendido de que si la conducta tipificada es cometida por personas campesinas, indígenas o afrodescendientes, cuya subsistencia dependa de la habitación, trabajo o aprovechamiento de los bienes tutelados de que tratan tales artículos, no habrá lugar a responsabilidad penal.

10. **ANEXOS**

- **Anexo 1.** Gaceta N° 1083 de 2019, en la que se publicó el proyecto de ley N° 283 de 2019 Senado, 446 de 2021 Cámara "Por medio del cual se sustituye el título XI, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000".

- **Anexo 2.** Concepto Consejo Superior de Política Criminal sobre el proyecto de ley N° 283 de 2019 Cámara y 446 de 2021 Senado "Por medio del cual se sustituye el título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 de 2000".

- **Anexo 3.** Gaceta N° 162 de 2020, en la que se publicó la ponencia para primer debate en Comisión Primera de Cámara de Representantes del proyecto de ley N° 283 de 2019 Cámara y 446 de 2021 Senado "Por medio del cual se sustituye el título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 de 2000".

- **Anexo 4.** Gaceta N° 205 de 2020, en la que se publicó la enmienda a la ponencia para primer debate en Comisión Primera de Cámara de Representantes del proyecto de ley N° 283 de 2019 Cámara y 446 de 2021 Senado "Por medio del cual se sustituye el título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 de 2000".

- **Anexo 5.** Sesión del 8 de junio de 2020 de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en la que se abrió el debate del Proyecto de ley N° 283 de 2019 Cámara y 446 de 2021 Senado "Por medio del cual se sustituye el título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el

medio ambiente" de la ley 599 de 2000". Disponible en https://youtu.be/9C77DMAAeUE?t=3954 [minuto 01:05:54 en adelante].

- **Anexo 6.** Sesión del 12 de junio de 2020 de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en la que se aprobó el Proyecto de ley N° 283 de 2019 Cámara y 446 de 2021 Senado "Por medio del cual se sustituye el título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 de 2000". Disponible en https://youtu.be/pJHQf7J4zfs?t=1799 [minuto 29:29 a 01:38:06].

- **Anexo 7.** Gaceta N° 513 de 2020, en la que se publicó el acta de la sesión del 12 de junio de 2020 de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en la que se discutió el Proyecto de ley N° 283 de 2019 Cámara y 446 de 2021 Senado "Por medio del cual se sustituye el título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 de 2000".

- **Anexo 8.** Gaceta N° 512 de 2020, en la que se publicó el texto definitivo aprobado en Comisión Primera de Cámara de Representantes del proyecto de ley N° 283 de 2019 Cámara y 446 de 2021 Senado "Por medio del cual se sustituye el título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 de 2000".

- **Anexo 9.** Gaceta N° 1127 de 2021, en la que se publicó la ponencia para segundo debate en Plenaria de Cámara de Representantes del proyecto de ley N° 283 de 2019 Cámara y 446 de 2021 Senado "Por medio del cual se sustituye el título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 de 2000".

- **Anexo 10.** Sesión del 6 de abril de 2021 de la Plenaria de la Cámara de Representantes en la que se discutió y aprobó el Proyecto de ley N° 283 de 2019 Cámara y 446 de 2021 Senado "Por medio del cual se sustituye el título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 de 2000". Disponible en https://www.youtube.com/wathttps://youtu.be/pJHQf7J4zfs?t=1799ch?v=hadxdsfCNUY&t=5966s [minuto 01:04:35 en adelante].

- **Anexo 11.** Gacetas N° 328 de 2021, en la que se publicó el texto definitivo aprobado en Plenaria de Cámara de Representantes del proyecto de ley N° 283 de 2019 Cámara y 446 de 2021 Senado "Por medio del cual se sustituye el título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 de 2000".

- **Anexo 12.** Gaceta N° 427 de 2021,en la que se publicó la ponencia para primer debate en Comisión Primera de Senado de la República del proyecto de ley N° 283 de 2019 Cámara y 446 de 2021 Senado "Por medio del cual se sustituye el título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 de 2000".

- **Anexo 13.** Sesión del 27 de mayo de 2021 de la Comisión Primera del Senado de la República en la que se aprobó el Proyecto de ley N° 283 de 2019 Cámara y 446 de 2021 Senado "Por medio del cual se sustituye el título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 de 2000". Disponible en https://youtu.be/F8F-xzrzeaE?t=14578 [minuto 04:02:58 en adelante].

- **Anexo 14.** Gaceta N° 602 de 202, en la que se publicó la ponencia para segundo debate en Plenaria de Senado de la República del proyecto de ley N° 283 de 2019 Cámara y 446 de 2021 Senado "Por medio del cual se sustituye el título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 de 2000".

- **Anexo 15.** Sesión del 17 de junio 2021 de la Plenaria del Senado de la República en la que se discutió y aprobó el Proyecto de ley N° 283 de 2019 Cámara y 446 de 2021 Senado "Por medio del cual se sustituye el título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 de 2000". Disponible en https://youtu.be/NUpLvhdGzB4?t=26575 [minuto 07:22:55 a 08:33:13].

- **Anexo 16.** Gaceta N° 755 y 820 de 2021, en la que se publicó el texto definitivo aprobado en Plenaria de Senado de la República del proyecto de ley N° 283 de 2019 Cámara y 446 de 2021 Senado "Por medio del cual se sustituye el título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 de 2000".

- **Anexo 17.** Gacetas N° 683 y 686 de 2021, en las que se publicó el informe de conciliación del proyecto de ley N° 283 de 2019 Cámara y 446 de 2021 Senado "Por medio del cual se sustituye el título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 de 2000".

- **Anexo 18.** Sesión del 18 de junio 2021 de la Plenaria de la Cámara de Representantes en la que se aprobó el informe de conciliación del Proyecto de ley N° 283 de 2019 Cámara y 446 de 2021 Senado "Por medio del cual se sustituye el título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 de 2000". Disponible en https://youtu.be/BIdYtgqq-sM?t=3324 [minuto 55:24 a 01:25:53].

- **Anexo 19.** Sesión del de 20 junio 2021 de la Plenaria del Senado de la República en la que se aprobó el informe de conciliación del Proyecto de ley N° 283 de 2019 Cámara y 446 de 2021 Senado "Por medio del cual se sustituye el título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 de 2000". Disponible en https://youtu.be/zUOVqgwghgw?t=5111 [minuto 01:25:11 a 04:43:19].

- **Anexo 20.** Gaceta N° 68 de 2022 en la que se publicó oficialmente la Ley 2111 de 2021 sancionada "Por medio del cual se sustituye el título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 de 2000".

11. **NOTIFICACIONES**

Las y los accionantes recibirán notificaciones de acuerdo con los siguientes datos:

Nombre: Comisión Colombiana de Juristas
Domicilio: Carrera 15A bis # 45-37
Correo electrónico: notificaciones@coljuristas.org
Número telefónico: (601)7449333

Nombre. Feliciano Valencia Medina
Domicilio. Carrera 7 # 8-68. Oficina 603. Bogotá.
Correo electrónico. feliciano.valencia@senado.gov.co
Número telefónico. 3823682.

Nombre. Pablo Catatumbo Torres Victoria.
Domicilio. Carrera 7 # 8-68. Oficina . Bogotá.
Correo electrónico.
Número telefónico.

Nombre. Willian Ferney Aljure Martínez
Domicilio. Carrera 16b #35a-50. Villavicencio.
Correo electrónico. faljure07@gmail.com
Número telefónico. 3145182214

Nombre. Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Domicilio. Calle 16 # 6-66. Piso 25. Bogotá.
Correo electrónico. acspub@cajar.org
Número telefónico. 3046562010

Nombre. Diana Sánchez Lara
Domicilio. Calle 19 # 4-88A 1203. Bogotá.
Correo electrónico. dsanchez@asociacionminga.co
Número telefónico. 3105618591

Nombre. Arnobi de Jesús Zapata Martínez
Domicilio. Calle 17 # 5-21. Bogotá.
Correo electrónico. presidencia.anzorc@gmail.com
Número telefónico. 3212526357

Nombre. Edilberto Daza Bejarano
Correo electrónico. fundaciondhoc2020@gmail.com
Número telefónico. 3125128203

Nombre. Elver Medina Díaz
Correo electrónico. ascalg.lozadaguayabero@gmail.com
Número telefónico. 3229430469

Nombre. Fernando Torres Cardoso
Correo electrónico. coordossac2010@hotmail.com
Número telefónico. 3144587422

Nombre. Tatiana Rodríguez Maldonado
Domicilio. Carrera 27A # 24-10 Piso 2. Bogotá.
Correo electrónico. tatiana.rodriguez@censat.org
Número telefónico. 3114400229

Nombre. Francisco Henao Bohórquez
Domicilio. Carrera 10 No. 15-39 oficina 507
Correo electrónico. franciscohenao@cjyiracastro.org.co
Número telefónico. 3118484738

Nombre. Glosmán Calderón Gómez
Correo electrónico. asormnm@gmail.com
Número telefónico. 3182852950

De las y los accionantes,



Gustavo Gallón Giraldo
C.C. 19.157.375
Director Comisión Colombiana de Juristas



Julián Salamanca Latorre
C.C. 1.032.465.670
Abogado Comisión Colombiana de Juristas



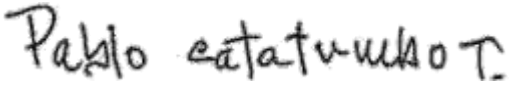
Paula Villa Vélez
C.C. 21.527.700
Directora área de litigio
Comisión Colombiana de Juristas



Diana Sánchez Lara
C.C. 51.852.119
Directora Ejecutiva
Asociación MINGA



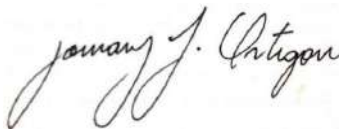
Feliciano Valencia Medina
CC. 10.484.369
Senador de la República



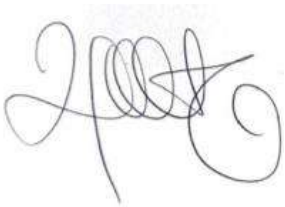
Pablo Catatumbo Torres Victoria
CC. 14.990.220
Senador de la República



Willian Ferney Aljure Martínez
CC. 86.056.096
Electo Representante a la Cámara



Jomary Ortegón Osorio
C.C. 52.537.603
Presidenta CAJAR



Rosa María Mateus Parra
C.C. 1.098.617.592.
Coordinadora Eje Defensa del Territorio
CAJAR



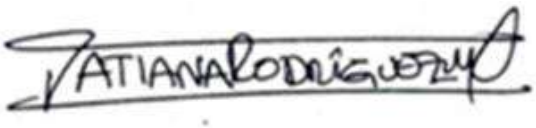
Juan David Romero Preciado
CC. 1.032.480.857
Abogado CAJAR



Edilberto Daza Bejarano
CC. 17.292.134
Representante legal DHOC



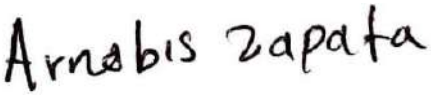
Elver Medina Díaz
CC. 96.333.535
Representante legal ASCAL-G



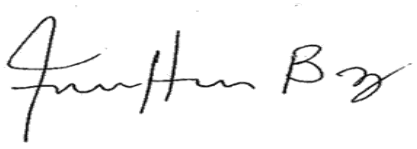
Tatiana Rodríguez Maldonado
CC. 52.934.966
Coordinadora general CENSAT Agua Viva



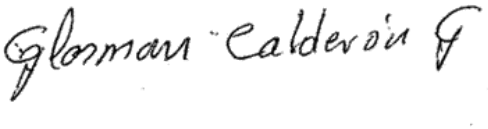
Fernando Torres Cardoso
CC. 16.683.652
Representante legal COORDOSAC



Arnobi de Jesús Zapata Martínez
CC. 78.590.521
Representante legal ANZORC



Francisco Henao Bohórquez
CC. 8.128.924
Abogado
Corporación Jurídica Yira Castro



Glosman Calderón Gómez
CC. 17.292.678
Presidente Asociación de Juntas de Acción Comunal
Ríos Mira, Nulpe y Mataje - ASOMINUM

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

I S S N 0 1 2 3 - 9 0 6 6

AÑO XXX - Nº 1083 | Bogotá, D. C., miércoles, 25 de agosto de 2021 | EDICIÓN DE 32 PÁGINAS

DIRECTORES: GREGORIO ELJACH PACHECO, SECRETARIO GENERAL DEL SENADO, www.secretariasenado.gov.co; JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO, SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA, www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PROYECTOS DE LEY

PROYECTO DE LEY NÚMERO 231 DE 2021 CÁMARA

por medio del cual se modifica el porcentaje de repartición de las contraprestaciones portuarias.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como objeto fortalecer las autoridades portuarias distritales y modificar la distribución de las contraprestaciones portuarias que se establecen en los artículos 17 de la Ley 768 de 2002, 80 de la Ley 1617 de 2013 y 7 de la Ley 1ª de 1991. De esta forma se desarrolla en la Ley las autoridades portuarias distritales y se aumentan los recursos de las alcaldías o distritos donde operen terminales marítimos.

Artículo 2° El artículo 7° de la Ley 1ª de 1991 modificado por el artículo 1° de la Ley 856 de 2003 quedará así:

"Artículo 7°. Monto de la contraprestación. Periódicamente el Gobierno nacional definirá, en los planes de expansión portuaria, la metodología para calcular el valor de las contraprestaciones que deben pagar quienes obtengan una concesión o licencia portuaria, por concepto del uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público y por concepto del uso de la infraestructura allí existente.

Las contraprestaciones por el uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público las recibirá la Nación a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), o quien haga sus veces, incorporándose a los ingresos propios de dicha entidad, y los municipios o distritos donde opere el puerto. La proporción será de un cincuenta por ciento (50%) a la entidad Nacional, y un cincuenta por ciento (50%) a los municipios o distritos en donde se encuentra ubicada la concesión portuaria, que lo destinarán a inversión social o para obras que complementen la competitividad portuaria. Las contraprestaciones por el uso de la infraestructura las recibirá el municipio o distrito en un cincuenta por ciento (50%) para obras de infraestructura o inversión social y el Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), o quien haga sus veces recibirá el otro cincuenta por ciento (50%).

En el caso de San Andrés la contraprestación por el uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público y por infraestructura se pagará al departamento por no existir municipio o distrito en dicha isla.

Parágrafo 1°. La contraprestación que reciba la Nación por concepto de zonas de uso público e infraestructura a través del Instituto Nacional de Vías, Invías, o quien haga sus veces, se destinará únicamente a la ejecución de obras y mantenimiento para la protección de la zona costera, dragado de mantenimiento y/o profundización, construcción y/o mantenimiento de estructuras hidráulicas de los canales de acceso a todos los puertos a cargo de la Nación, para el diseño, construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de las vías de acceso terrestre, férrea, acuático y fluvial a los puertos del respectivo distrito o municipio portuario y a las obras de mitigación ambiental en el área de influencia tanto marítima como terrestre.

Para el caso del Distrito de Buenaventura, las contraprestaciones portuarias que reciba la nación a través de "INVIAS", se invertirán únicamente en mantenimiento, dragado y profundización del canal de acceso al puerto.

Parágrafo 2°. El canal de acceso del Puerto de Barranquilla y sus obras complementarias estarán a cargo de la Nación, para lo cual podrán destinar los recursos a que se refiere el presente artículo en coordinación con la autoridad portuaria distrital, sin perjuicio de que otras entidades incluida Cormagdalena, concurran con financiación y realización de obras necesarias.

Parágrafo 3º. La ejecución de los recursos por percibir y los que se perciban por concepto de las contraprestaciones a que se refiere el presente artículo, a partir de la vigencia de la presente ley por cada puerto, se hará en una proporción igual al valor de la contraprestación aportada por cada puerto para financiar las actividades a que se refiere el parágrafo primero del presente artículo.

Parágrafo 4º. El Canal de acceso al puerto de Cartagena, incluido el Canal del Dique, podrá invertir la contraprestación que reciba la Nación por concepto de zonas de uso público e infraestructuras en obras complementarias y de mitigación del impacto ambiental, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo primero del presente artículo, siempre en coordinación con la autoridad portuaria.

Parágrafo transitorio. Las contraprestaciones que Invías y los municipios o distritos tengan comprometidas hasta la entrada en vigencia

de la presente ley continuaran siendo recibidas por la entidad beneficiaria de la contraprestación hasta su ejecución."

Artículo 3°. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación previa sanción, y deroga las leyes contrarias.

De los Honorables Representantes,

LEÓN FREDY MUÑOZ LOPERA
Representante a la Cámara
Partido Alianza Verde

MARTHA VILLALBA HODWALKER
Honorable Representante a la Camara

MARÍA JOSÉ PIZARRO RODRÍGUEZ
Representante a la Cámara
Coalición Decentes

JULIÁN GALLO CUBILLOS
Senador de la República
Partido Comunes

Luis Alberto Albán Urbano
Representante a la Cámara
Partido Comunes

ALEXANDER LÓPEZ MAYA
Senador de la República
Partido Polo Democrático Alternativo

EDWIN FABIAN ORDUZ DIAZ
Representante a la Cámara

AIDA AVELLA ESQUIVEL
Senadora de la República
Coalición Decentes-Unión Patriótica

JAIRO REINALDO CALA SUÁREZ
Representante a la Cámara
Partido COMUNES

ANTONIO SANGUINO PÁEZ
Senador de la Repùblica
Partido Alianza Verde

WILMER LEAL PÉREZ
Representante a la Cámara
Partido Alianza Verde

OMAR DE JESUS RESTREPO CORREA
Representante a la Cámara
Partido Comunes

DAVID RACERO MAYORCA
Representante a la Cámara por Bogotá
Coalición Decentes

PROYECTO DE LEY NUMERO 231 De 2021

"Por Medio Del Cual Se Modifica El Porcentaje De Repartición De Las Contraprestaciones Portuarias"

La presente ponencia consta de las siguientes partes:

- **I.** OBJETO DE LA PROPUESTA
- **II.** EXPOSICION DE MOTIVOS
  1. Justificación
  2. Objetivos
  3. Marco legal
  4. Antecedentes
- **III.** IMPACTO FISCAL
- **IV.** ANÁLISIS SOBRE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS

I. OBJETO DE LA PROPUESTA

El presento proyecto de ley tiene por objeto generar una distribución equitativa de las contraprestaciones portuarias entre la nación, los municipios y distritos donde operan puertos, en el marco de la descentralización fiscal.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con el fin de realizar la exposición de motivos del presente proyecto de Ley, y argumentar la relevancia de aprobación del mismo, este acápite se ha dividido en seis (6) puntos así: (1) Justificación. (2) Objetivos. (3) Marco legal. (4) Antecedentes. (5) Impacto fiscal.

1. Justificación

Contraprestaciones:

Este proyecto de ley es de suma importancia para Colombia en el entendido que busca descentralización fiscal mediante una distribución más equitativa de los recursos que se generan a nivel local, pero que al nivel nacional son apropiados, más aún, teniendo en cuenta que cada vez a los municipios y distritos se les adjudican más competencias, las cuales muchas veces no pueden atender debido a la falta de presupuesto.

Por lo tanto, mediante este proyecto de ley se pretende corregir el desbalance de distribución de las contraprestaciones portuarias, las cuales son pagadas por parte de las sociedades portuarias a los municipios y distritos donde operan y a la Nación.

Para entender la complejidad de la situación se debe tener claro que las contraprestaciones portuarias son una obligación que se deriva de una concesión portuaria la cual es un contrato administrativo en virtud del cual la Nación, por intermedio de la Superintendencia General de Puertos, permite que una sociedad portuaria ocupe y utilice en forma temporal y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquéllas o éstos, para la construcción y operación de un puerto, a cambio de una contraprestación económica (contraprestación portuaria) a favor de la Nación, y de los municipios o distritos donde operen los puertos.

El problema radica en cómo se distribuye entre la Nación y los municipios y distritos donde operan. Para ello hay que entender que hay dos tipos de contraprestación portuaria. Por un lado, la contraprestación por uso y goce espacio público la cual se distribuye 80% para la Nación a través INVIAS y tan solo el 20% para el municipio o distritos donde opere el puerto marítimo. Por otro lado, la contraprestación por infraestructura el 100% para la nación a través de INVIAS. Esto de denota la sobre-monopolización de recursos fiscales por parte de la Nación, que causa serios estragos sobre los entes territoriales, politizando e ideologizando los recursos públicos.

Como se puede evidenciar hay una gran inequidad en la distribución de las contraprestaciones portuarias en cuanto al porcentaje que se apropia la Nación. Más aun teniendo en cuanta, que solo algunos municipios y distritos debido a su ubicación costera y geográfica pueden contar con puertos marítimos como es el

caso de Cartagena, Buenaventura, Santa Marta, Barranquilla, Turbo entro otros. No obstante, se debe tener en cuenta que no todos los municipios y distritos son aptos para contar con este privilegio y por ello deben percibir una compensación justa por contar con esta ventaja.

Con lo anterior no se quiere desmeritar la importancia de los puertos para la economía nacional y la conectividad internacional. Pero si se quiere evidenciar, una inequidad en el cómo se distribuyen dichos recursos, a sabiendas de las problemáticas que padecen día a día los municipios y distritos donde operan puertos, donde se pueden evidenciar graves falencias por falta de inversión social.

Así las cosas, las alcaldías para sortear y dar solución a los múltiples problemas locales necesitan de recursos económicos que les permita cumplir a cabalidad con los fines del Estado, es por ello, la gran importancia de este proyecto de ley, toda vez, que propone aumentar el porcentaje de la contraprestación portuaria que reciben los distritos y municipios con puertos. En donde se distribuya equitativamente los recursos de las contraprestaciones portuarias como se muestra a continuación.

	Municipio y Distrito con puertos marítimos		Nación a través de INVIAS	
Tipo de Contraprestación Portuaria	**ESPACIO PUBLICO**	**INFRAES.**	**ESPACIO PUBLICO**	**INFRAES.**
Distribución Vigente	20%	0%	80%	100%
Distribución Propuesta	50%	50%	50%	50%
*ESPACIO PUBLICO = Contraprestación por el uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público				
*INFRAS. = Contraprestación por uso de infraestructura				

Ahora bien, cabe resaltar que el presupuesto de INVIAS no se verá afectado significativamente, ya que para 2018 el presupuesto de INVIAS era de dos billones doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho millones ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos cuatro pesos ($2.247.448.144.604) y que para el año 2019 el presupuesto de INVIAS tuvo un crecimiento del 36.2% en su presupuesto aumentando a tres billones quinientos veintiún mil setecientos setenta y tres millones cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos diez pesos ($3.744.644.696.966) y para 2020 el presupuesto de INVIAS fue de dos billones doscientos setenta y cuatro mil ochocientos setenta y cinco millones ochocientos sesenta y dos mil ochocientos doce ($2.274.875.862.812).

Porcentaje de las contraprestaciones portuarias respeto presupuesto de INVIAS

Vigencia	Presupuesto Invías	Fluctuación	Fluctuación%	Contraprestaciones portuarias	Contraprestación % respeto presupuesto INVIAS
2020	$ 2.274.875.862.812	-$ 1.246.897.567.598	-36%	$ 147.974.950.094,00	6,50
2019	$ 3.521.773.460.410	$ 1.274.325.315.806	36%	$ 104.565.434.090,00	2,97
2018	$ 2.247.448.144.604	-$ 21.996.517.549	-1%	$ 180.079.302.330,00	8,01
2017	$ 2.269.444.662.153	-$ 383.610.570.990	-17%	$ 161.807.241.134,00	7,13
2016	$ 2.653.055.233.143	-$ 1.422.002.496.857	-54%	$ 134.163.084.640,00	5,06
2015	$ 4.075.057.730.000			$ 63.261.362.368,00	1,55
Total / Promedio	**$ 17.041.655.093.122**	**-$ 360.036.373.438**	**14,4%**	**$ 791.851.374.656,00**	**5,20**

Como se puede apreciar el porcentaje de las contraprestaciones portuarias que representan del presupuesto de INVIAS es ínfimo, ya que en los últimos 6 años solo correspondió a un promedio del 5,2% de los billones de presupuesto que son asignado a INVIAS, por otro lado, INVIAS tiene una fluctuación de 14,4% lo que permitiría asimilar ajustar su cartera fácilmente con la propuesta de este proyecto de ley.

Este proyecto de ley de ninguna forma quiere o propone que las Sociedades Portuaria paguen más contraprestaciones, solo se busca que la distribución porcentual entre la nación y los municipios y distritos de las citadas contraprestaciones portuarias sea equitativa, de esta forma las alcaldías tendrán mayor presupuesto para inversión social y atención de sus necesidades, de tal manera que no estén supeditadas a esperar recursos del nivel nacional.

Por último, resulta necesario hacer un ajuste en el bajo porcentaje que perciben las alcaldías por concepto de contraprestaciones, a sabiendas que tienen que soportar de forma directa con el impacto social, ambiental, ecológico y el desgaste que generan los puertos.

Contexto histórico

El contexto normativo de los puertos marítimos ha venido cambiando paulatinamente, con un primer viraje de noventa grados que se aprecia en 1991 en donde se liquida Colpuertos, iniciando una privatización de los puertos marítimos en Colombia. Lo anterior dio paso a un nuevo marco legal para el sector portuario mediante la ley 1 de 1991 (enero 10).

La historia de los puertos en donde se ejerce la actividad de importación y exportación en Colombia, comienza con la creación de la Empresa Puertos de Colombia- Colpuertos, la cual fue creada por medio de la ley 159 de 1959; esta tuvo una primera etapa de (1959-1974) donde fue totalmente centralizado tanto su manejo presupuestal como gerencial. En 1974 se da inicio a la segunda etapa donde se descentraliza Colpuertos, esta descentralización trajo consigo varios cambios que produjo, que para 1982 la empresa entrará en crisis, en 1991 se generará un proceso de liquidación.

Para 1991 se expide la ley 1 *"Por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones"* la cual estipula reglas para la entrada de los puertos privados en Colombia, de esta forma se da inicio a una nueva etapa de puertos marítimos en Colombia, generando así un auge en la expansión portuaria.

2. **Objetivos:**

General:

Distribuir de manera equitativa de los recursos de las contraprestaciones portuarias entre la Nación, los distritos y municipios donde operen puertos marítimos.

Específicos:

- Incrementar el porcentaje recibido por parte de las contraprestaciones por uso de infraestructura y por uso goce temporal, con exclusividad de las zonas de uso público hacia los municipios y distritos donde operan puertos marítimos.
- Que los municipios y distritos con puertos marítimos tengan la capacidad económica para poder invertir en problemas sociales que se presenten en la comunidad.
- Establecer el Consejo Superior y la figura de Director Ejecutivo de las autoridades portuarias Distritales, para un óptimo cumplimiento de sus funciones de ley.

3. **Marco legal**

Desde la Constitución Política de Colombia en su artículo primero como principio la descentralización como modo de gobierno. Con respecto a las contraprestaciones la misma constitución en su artículo 361 dice lo siguiente:

Artículo 361. Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 5 de 2011:

> "(...) Los departamentos, municipios y distritos en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como **los municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las regalías y compensaciones, así como a ejecutar directamente estos recursos.** (...)" **[Énfasis propio].**

Desde este artículo nos deja apreciar que los municipios y distritos donde operan puertos obtengan una compensación mediante recursos para que sean ejecutados directamente. El anterior artículo constitucional ha sido desarrollado mediante el artículo 7 de la ley 1 de 1991 el cual en un principio quedó así:

"**ARTÍCULO 7°. *Monto de la contraprestación***. Periódicamente el Gobierno Nacional definirá, por vía general, en los planes de expansión portuaria, la metodología para calcular el valor de las contraprestaciones que deben dar quienes se beneficien con las concesiones portuarias.

Esta contraprestación se otorgará a la Nación y a los municipios o distritos en donde opere el puerto, en proporción de un 80% a la primera y un 20% a la segunda. Para efectos de la metodología, el Gobierno deberá tener en cuenta escasez de los bienes públicos utilizables, los riesgos y costos de contaminación, los usos alternativos, y las condiciones físicas y jurídicas que deberían cumplirse para poder poner en marcha y funcionamiento el terminal portuario. Una vez establecido el valor de la contraprestación, no es susceptible de modificarse.

Todas las sociedades portuarias pagarán una contraprestación por las concesiones portuarias. Sin embargo:

7.1. Si la Nación lo acepta, una sociedad portuaria puede pagar en acciones el monto de la contraprestación durante el período inicial de sus operaciones, y sin que el porcentaje del capital que la Nación adquiera por este sistema llegue a exceder del 20% del capital social.

7.2. Las demás entidades públicas que hagan parte de sociedades portuarias podrán incluir en sus respectivos presupuestos apropiaciones para aumentar su participación en el capital, facilitando así el pago de la contraprestación.

El artículo antes mencionado de la ley 1 de 1991 se modificó por medio del Artículo 1 de la Ley 856 de 2003 el cual estipula lo siguiente:

Artículo 7°. *Monto de la contraprestación*. Periódicamente el Gobierno Nacional definirá, en los planes de expansión portuaria, la metodología para calcular el valor de las contraprestaciones que deben pagar quienes obtengan una concesión o licencia portuaria, por concepto del uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público y por concepto del uso de la infraestructura allí existente.

Las contraprestaciones por el uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público las **recibirá la Nación a través del Instituto Nacional de Vías, Invías**, o quien haga sus veces, incorporándose a los ingresos propios de dicha entidad, y a los municipios o distritos donde opere el puerto. **La proporción será: De un ochenta por ciento (80%) a la entidad Nacional, y un veinte por ciento (20%)** a los municipios o distritos, destinados a inversión social. Las **contraprestaciones por el uso de la infraestructura las recibirá en su totalidad el Instituto Nacional de Vías, Invías**, o quien haga sus veces. **[Énfasis propio]**

En el caso de San Andrés la contraprestación del veinte por ciento (20%) por el uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público se pagará al departamento por no existir municipio en dicha isla.

PARÁGRAFO 1°. La contraprestación que reciba la Nación por concepto de zonas de uso público e infraestructura a través del Instituto Nacional de Vías, Invías, o quien haga sus veces, **se destinará especialmente a la ejecución de obras** y mantenimiento para la protección de la zona costera, dragado de mantenimiento y/o profundización, construcción y/o mantenimiento de estructuras hidráulicas de los canales de acceso a todos los puertos a cargo de la Nación, para el diseño, construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de las vías de acceso terrestre, férrea, acuático y fluvial, a los puertos del respectivo distrito o municipio portuario y a las obras de mitigación ambiental en el área de influencia tanto marítima como terrestre. **[Énfasis propio]**

PARÁGRAFO 2°. El canal de acceso del Puerto de Barranquilla y sus obras complementarias estarán a cargo de la Nación, para lo cual podrán destinar los recursos a que se refiere el presente artículo, sin perjuicio de que otras entidades incluida Cormagdalena, concurran con financiación y realización de obras necesarias.

PARÁGRAFO 3°. La ejecución de los recursos por percibir y los que se perciban por concepto de las contraprestaciones a que se refiere el presente artículo, a partir de la vigencia de la presente ley por cada puerto, se hará en una proporción igual al valor de la contraprestación aportada por cada puerto para financiar las actividades a que se refiere el parágrafo primero del presente artículo.

PARÁGRAFO 4°. El Canal de acceso al puerto de Cartagena, incluido el Canal del Dique, podrá invertir la contraprestación que reciba la Nación por concepto de zonas de uso público e infraestructuras en obras complementarias y de mitigación del impacto ambiental, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo primero del presente artículo."

En rango constitucional el artículo 361 que estipula que los municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales tiene derecho a participar por regalías y compensaciones, esto bajo la lógica que se beneficien por el privilegio de contar con un área de bajamar para explotación portuaria.

En cuanto al artículo 7° de la ley 1 de 1991 (10 enero) estipula como se repartirá porcentualmente del monto de la contraprestación portuaria. En un primer momento el monto por contraprestación se dividía así, 80% para la nación a través de INVIAS y tan solo un 20% para municipios y distritos donde operen puertos.

Esto fue modificado, y se redujo aún más a lo que reciben los municipios y distritos al dividir las contraprestaciones portuarias en dos, esto por medio del artículo 1 de la ley 856 de 2003, quedando de la siguiente forma: una por uso y goce temporal y el uso exclusivo de las zonas de uso público, en este caso el 80% va para INVIAS y nuevamente tan solo el 20% para la Nación y la nueva contraprestación que es por el uso de la infraestructura iría en un 100% para INVIAS.

Sin embargo, en el caso distribución de las contraprestaciones portuarias de Barranquilla es diferente ya que se aplica el 64 de la Ley 1242 de 2008 "*Por la cual se establece el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones"* el cual reza lo siguiente:

"**ARTÍCULO 64.** La concesión sobre los puertos fluviales a cargo de la Nación o de entidades competentes y la de los puertos privados que se construyan se regirán conforme a los procedimientos establecidos en la Ley 1ª de 1991 y las normas que la reglamenten o modifiquen. Los particulares que administren u operen puertos o muelles fluviales bajo cualquier modalidad diferente a la concesión tendrán un plazo de 18 meses a partir de la promulgación de la presente ley para que se homologuen o soliciten la concesión portuaria.

PARÁGRAFO 1o. El Gobierno Nacional por conducto del Ministerio de Transporte procederá a definir de inmediato los términos, el plazo y las contraprestaciones de las concesiones en los puertos fluviales que se encuentren ubicados en áreas portuarias diferentes a los últimos 30 kilómetros del río Magdalena.

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional por conducto del Ministerio de Transporte procederá a definir de inmediato los términos en los cuales se otorgarán las concesiones portuarias fluviales por parte de la entidad competente en cada vía fluvial.

PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo modificado por el artículo 1 de la Ley 1557 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> En los últimos treinta kilómetros del río Magdalena el 60% de la contraprestación por zona de uso público e infraestructura la recibirá la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), o quien haga sus veces, quien

tendrá a cargo las obras de encauzamiento y mantenimiento en el canal de acceso a la Zona Portuaria de Barranquilla; el restante 40% se destinará a los municipios o distritos destinados a reforestación y saneamiento básico. Para inversión en las vías de acceso terrestre a la zona portuaria de Barranquilla, Cormagdalena coordinará con el Invías los recursos que aportará para tal fin, de la contraprestación recibida.

Las contraprestaciones que el Invías tenga comprometidas en futuras vigencias hasta la entrada en vigencia de la presente ley, continuarán siendo recibidas por dicha entidad hasta su ejecución.

En todo caso, el Instituto Nacional de Vías (Invías) o quien haga sus veces y las entidades del orden nacional y territorial, del nivel central y descentralizado podrán, de conformidad con lo establecido en la Ley 489 de 1998, aunar esfuerzos presupuestales, técnicos, físicos para adelantar obras de encauzamiento y mantenimiento de los últimos 30 kilómetros del río Magdalena, bajo la coordinación del Ministerio de Transporte.

La contraprestación por zonas de uso público en infraestructuras ubicadas en el resto del Río Magdalena como en sus conexiones fluviales de su competencia, las recibirá en su totalidad Cormagdalena."

Como se puede apreciar en el anterior articulo mas en específico el parágrafo tercero estipula que las contraprestaciones que se generan en los últimos treinta kilómetros del rio magdalena se distribuyen de la siguiente manera 60% para la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) y el 40% restante para los distritos y municipios, de esta forma para el caso de Barraquilla recibe 20% mas que el resto de los municipios portuarios generando así un inequidad competitiva.

El marco legal de contraprestaciones portuarias no responde a preceptos constitucionales de justicia, equidad y descentralización, más aún se hace necesario cambiar estos porcentajes sabiendo de las grandes necesidades sociales como en salud, educación, servicios básicos domiciliarios, alcantarillado entre otros, que padecen los municipios y distritos donde operan puerto y que muchas veces debido a la falta de recursos no pueden invertir en solucionar las problemáticas sociales, por eso se hace necesario que estos municipios y distritos al tener el privilegio de contar con puertos, puedan beneficiarse de una manera justa de estos, sin desconocer que la Nación también deba beneficiarse.

4. Antecedentes

Una iniciativa similar fue presentada hace cuatro (6) años por el entonces senador Edison Delgado Ruiz, fue el proyecto de ley 015 de 2015 de Senado *"por medio de la cual se modifica el artículo 1° de la ley 856 de 2003 y se dictan otras disposiciones"*. Esta iniciativa buscaba que los municipios y distritos donde funcionan puertos reciban el 60% de la contraprestación por el uso temporal de las playas y bajamares y de igual manera, el 60% de la contraprestación por el uso de la infraestructura. Las contraprestaciones por el uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público las recibirá la Nación a través del instituto nacional de vías – INVIAS, o quien haga sus veces, incorporándose a los ingresos propios de dicha entidad y los municipio o distritos donde opere el puerto.

La anterior iniciativa mencionada llegó hasta segundo debate del Senado, pero fue archivada de acuerdo con el artículo 190 de la ley 5 de 1992 y 162 de la Constitución Política, vencimiento de términos.

Por su parte, el proyecto de ley No. 188 de 2019 Cámara, "*Por medio del cual se modifica el porcentaje de repartición de las contraprestaciones portuarias*" fue radicado el 21 de agosto 2019 en la secretaria general de la Cámara de Representantes, siendo autor el Honorable Representante a la Cámara León Fredy Muñoz Lopera. El texto original radica en la Gaceta 780 de 2019, este proyecto de contaba con el mismo espíritu de busca una distribución equitativa de las contraprestaciones portuarias. Los proyectos de ley 023 de 2019 Cámara y 188 de 2019 Cámara fueron acumulados por parte de la mesa directiva de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. El texto acumulado radica en la en la Gaceta 1181 de 2019. El día 03 de junio de 2020 fue aprobado en primer debate en la comisión sexta constitucional por unanimidad.

Sin embargo, el proyecto de ley 023 de 2019 acumulado con el proyecto de ley 188 de 2019 fue archivado mediante votación en la plenaria de la cámara de representantes quedado 61 a favor y 90 votos en contra.

III. IMPACTO FISCAL

De conformidad con lo establecido artículo 7° de la Ley 819 de 2003, los gastos que genere la presente iniciativa se entenderán incluidos en los presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión a que haya lugar.

Teniendo en cuenta lo anterior, y dada la obligación del Estado de velar por el interés general, así como de promover la autonomía de las entidades territoriales, es relevante mencionar que una vez promulgada la Ley, el Gobierno deberá promover su ejercicio y cumplimiento. Ademas, se debe tener en cuenta como sustento, un pronunciamiento de la Corte Constitucional, en la cual se puntualizó de acuerdo con la sentencia C-490 de 2011, lo siguiente:

> "**El mandato de adecuación entre la justificación de los proyectos de ley y la planeación de la política económica, empero, no puede comprenderse como un requisito de trámite para la aprobación de las iniciativas legislativas**, cuyo cumplimiento recaiga exclusivamente en el Congreso. Ello en tanto (i) el Congreso carece de las instancias de evaluación técnica para determinar el impacto fiscal de cada proyecto, la determinación de las fuentes adicionales de financiación y la compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo; y (ii) aceptar una interpretación de esta naturaleza constituiría una carga irrazonable para el Legislador y otorgaría un poder correlativo de veto al Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, respecto de la competencia del Congreso para hacer las leyes. Un poder de este carácter, que involucra una barrera en la función constitucional de producción normativa, se muestra incompatible con el balance entre los poderes públicos y el principio democrático. La exigencia de la norma orgánica, a su vez, presupone que la previsión en cuestión debe contener un mandato imperativo de gasto público." (Resaltado fuera del texto).

Así mismo, la Corte Constitucional en la Sentencia C-502 de 2007, **en la cual establecido que el impacto fiscal de las normas no puede convertirse en óbice y barrera para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa**:

> "En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso, reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, **con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo.**
>
> **Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento.**
>
> **Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda.**" (Resaltado fuera de texto).

De igual modo, al respecto del impacto fiscal que los proyectos de ley pudieran generar, la Corte ha dicho:

> "Las obligaciones previstas en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 constituyen un parámetro de racionalidad legislativa, que está

encaminado a cumplir propósitos constitucionalmente valiosos, entre ellos el orden de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica y la aplicación efectiva de las leyes. Esto último en tanto un estudio previo de la compatibilidad entre el contenido del proyecto de ley y las proyecciones de la política económica, disminuye el margen de incertidumbre respecto de la ejecución material de las previsiones legislativas. El mandato de adecuación entre la justificación de los proyectos de ley y la planeación de la política económica, empero, no puede comprenderse como un requisito de trámite para la aprobación de las iniciativas legislativas, cuyo cumplimiento recaiga exclusivamente en el Congreso. Ello en tanto (i) el Congreso carece de las instancias de evaluación técnica para determinar el impacto fiscal de cada proyecto, la determinación de las fuentes adicionales de financiación y la compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo; y (ii) aceptar una interpretación de esta naturaleza constituiría una carga irrazonable para el Legislador y otorgaría un poder correlativo de veto al Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, respecto de la competencia del Congreso para hacer las leyes. Un poder de este carácter, que involucra una barrera en la función constitucional de producción normativa, se muestra incompatible con el balance entre los poderes públicos y el principio democrático. Si se considera dicho mandato como un mecanismo de racionalidad legislativa, su cumplimiento corresponde inicialmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez el Congreso ha valorado, mediante las herramientas que tiene a su alcance, la compatibilidad entre los gastos que genera la iniciativa legislativa y las proyecciones de la política económica trazada por el Gobierno. (...). El artículo 7º de la Ley819/03 no

Puede interpretarse de modo tal que la falta de concurrencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público dentro del proceso legislativo, afecte la validez constitucional del trámite respectivo." (Sentencia C-315 de 2008).

Como lo ha resaltado la Corte, si bien compete a los miembros del Congreso la responsabilidad de estimar y tomar en cuenta el esfuerzo fiscal que el proyecto bajo estudio puede implicar para el erario público, es claro que es el Poder Ejecutivo, y al interior de aquél, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el que dispone de los elementos técnicos necesarios para valorar correctamente ese impacto, y a partir de ello, llegado el caso, demostrar a los miembros del órgano legislativo la inviabilidad financiera de la propuesta que se estudia.

No obstante, lo anterior, es necesario indicar que el impacto fiscal de este proyecto es positivo para las alcaldías y distritos donde operan puertos, pues incrementa el presupuesto de inversión social e infraestructura. En cuanto a INVIAS el impacto es casi nulo, ya que las contraprestaciones portuarias en las últimas 5 vigencias solo han representado el 5.2% del presupuesto de INVIAS, por otro lado, el presupuesto de esta entidad fluctúa cada año lo que prepararía para ajustar su presupuesto en la siguiente vigencia, esto genera que lo propuesto sea fácil de incorporar.

Cabe aclarar que tanto en la normatividad vigente como en el proyecto de ley presentan dos excepciones, la primera es que en el caso de San Andrés al ser departamento y no haber munición o distrito en la isla, la contraprestación por el uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público será girado al departamento en el mismo porcentaje. El otro caso es el de Barranquilla que mediante la resolución 1882 de 2009 de INVIAS cede el recaudo de la contraprestación portuaria a la Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena – Cormagdalena y el artículo 1 de la Ley 1557 de 2012.

La tabla a continuación expone los ingresos por contraprestación portuaria, por uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público de los distritos y los municipios donde operan puertos marítimos entre los años 2004- 2014; información extraída del proyecto de ley 015 de 2015 Senado, debido a que desde el 2010 INVIAS registra la contraprestación de las sociedades portuarias de Barranquilla debido a que son giradas a Cormagdalena.

ZONA PORTUARIA	2004 - 2015		
	ALCALDIA	INVIAS	TOTAL
	ESPACIO PUBLICO	INFRAES.	
BARRANQUILLA	17.508	70.033	16.688	104.229
RIOHACHA	13.120	52.479	18.554	84.153
CARTAGENA	32.622	130.488	81.005	244.115
COVEÑAS	1.920	7.681	7.205	16.806
STA. MARTA	22.985	91.941	36.563	151.489
BUENAVENTURA	32.239	128.956	122.079	283.274
TUMACO	2.060	8.238	3.313	13.611
TURBO	55	221	70	346
SAN ANDRES	37	147	312	496
TOTALES	**$ 122.546**	**$ 490.184**	**$ 285.789**	**$ 898.519**
* Cifras expresadas en millones.				
* Datos de Barraquilla son solo hasta el 2009				

Como se puede apreciar en la anterior tabla hay una gran disparidad en cuanto lo que reciben las alcaldías y lo que recibe la Nación a través de INVIAS, esto ha generado que entre 2004 al 2015 las alcaldías dejaron de percibir cerca de $326.714 millones de pesos al no ser igualitaria la repartición.

A continuación, muestran el recaudo y distribución de las contraprestaciones de los últimos cuatro (5) años.

ZONA PORTUARIA	2016			
	ALCALDIA	INVIAS		TOTAL
	ESPACIO PUBLICO		INFRAES.	
GUAJIRA	$ 7.507.235.611	$ 30.028.942.443		$ 30.028.942.443
STA MARTA Y CIENAGA	$ 8.370.687.631	$ 33.482.750.525	$ 7.518.881.602	$ 41.001.632.128
CARTAGENA	$ 2.506.431.346	$ 10.025.725.383	$ 2.749.349.653	$ 12.775.075.035
MORROSQUILLO	$ 594.049.138	$ 2.376.196.550	$ 836.818.781	$ 3.213.015.331
BUENAVENTURA	$ 6.558.170.257	$ 26.232.681.029	$ 17.585.132.532	$ 43.817.813.561
URABA	$ 3.388.259	$ 13.553.038	$ 15.268.034	$ 28.821.072
TUMACO	$ 314.049.257	$ 1.256.197.026	$ 394.117.688	$ 1.650.314.714
TOTALES	**$ 25.854.011.498**	**$ 103.416.045.994**	**$ 29.099.568.290**	**$ 132.515.614.284**
*ESPACIO PUBLICO=Contraprestación por el uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público				

*INFRAS. = Contraprestación por uso de infraestructura

ZONA PORTUARIA	2017			
	ALCALDIA	INVIAS		TOTAL
	ESPACIO PUBLICO		INFRAES.	
GUAJIRA	$ 7.116.817.724,95	$ 28.467.270.900		$ 28.467.270.900
STA MARTA Y CIENAGA	$ 9.277.801.803,83	$ 37.111.207.215	$ 8.928.577.907	$ 46.039.785.122
CARTAGENA	$ 4.459.825.732,09	$ 17.839.302.928	$ 2.458.688.037	$ 20.297.990.965
MORROSQUILLO	$ 532.921.215,49	$ 2.131.684.862	$ 1.807.934.417	$ 3.939.619.279
BUENAVENTURA	$ 8.556.439.305,00	$ 34.225.757.220	$ 22.484.578.392	$ 56.710.335.612
URABA	$ 999.701.337,96	$ 3.998.805.352	$ 13.571.581	$ 4.012.376.933
TUMACO	$ 448.989.761,82	$ 1.795.959.047	$ 458.817.617	$ 2.254.776.664
TOTALES	**$ 31.392.496.881**	**$ 125.569.987.525**	**$ 36.152.167.951**	**$ 161.722.155.475**
*ESPACIO PUBLICO=Contraprestación por el uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público				
*INFRAS. = Contraprestación por uso de infraestructura				

ZONA PORTUARIA	2018			
	ALCALDIA	INVIAS		TOTAL
	ESPACIO PUBLICO		INFRAES.	
GUAJIRA	$ 5.714.761.746	$ 22.859.046.982		$ 22.859.046.982
STA MARTA Y CIENAGA	$ 7.130.855.747	$ 28.523.422.990	$ 8.478.380.402	$ 37.001.803.392
CARTAGENA	$ 5.646.896.929	$ 22.587.587.716	$ 2.426.565.454	$ 25.014.153.169
MORROSQUILLO	$ 1.087.096.676	$ 4.348.386.705	$ 222.964.688	$ 4.571.351.393
BUENAVENTURA	$ 14.815.291.312	$ 59.261.165.249	$ 24.814.419.409	$ 84.075.584.659
URABA	$ 1.054.727.288	$ 4.218.909.154	$ 26.072.120	$ 4.244.981.274
TUMACO	$ 531.670.853	$ 2.126.683.410	$ 185.698.051	$ 2.312.381.461

TOTALES	**$ 35.981.300.551**	**$ 143.925.202.206**	**$ 36.154.100.124**	**$ 180.079.302.330**
*ESPACIO PUBLICO=Contraprestación por el uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público				
*INFRAS. = Contraprestación por uso de infraestructura				

ZONA PORTUARIA	2019			
	ALCALDIA	INVIAS		TOTAL
	ESPACIO PUBLICO		INFRAES.	
GUAJIRA	$ 5.914.995.891	$ 23.659.983.563		$ 23.659.983.563
STA MARTA Y CIENAGA	$ 8.088.039.585	$ 32.352.158.340	$ 4.977.370.476	$ 37.329.528.817
CARTAGENA	$ 5.085.574.479	$ 20.342.297.918	$ 2.572.216.116	$ 22.914.514.034
MORROSQUILLO	$ 1.122.962.673	$ 4.491.850.690		$ 4.491.850.690
BUENAVENTURA	$ 2.700.016.260	$ 10.800.065.039	$ 279.487.248	$ 11.079.552.288
URABA	$ 983.166.687	$ 3.932.666.749		$ 3.932.666.749
TUMACO	$ 289.334.488	$ 1.157.337.950		$ 1.157.337.950
TOTALES	**$ 24.184.090.062**	**$ 96.736.360.249**	**$ 7.829.073.841**	**$ 104.565.434.090**
*ESPACIO PUBLICO=Contraprestación por el uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público				
*INFRAS. = Contraprestación por uso de infraestructura				

Como se puede apreciar de las anteriores tablas lo recaudado por parte de las alcaldías y distritos donde se ubican puertos es ínfimo a comparación con lo que recibe la nación a través de INVIAS, mas aun como se visualiza que las alcaldías no reciben nada por parte de las contraprestaciones de infraestructura.

Se reitera que el proyecto de ley no representa esfuerzo fiscal significativo, pues la medida consiste en redistribuir los mismos recursos entre la Nación y las entidades territoriales, mas no dejar de percibir algún tipo de recurso.

Además, que el marco fiscal de mediano plazo de INVIAS no se verá afectado ya que en el articulado del proyecto queda explicito que la nueva distribución comienza a regir con las contraprestaciones que no estén comprometidas para de esta forma no afectar las inversiones que ya estén planificadas.

De tal modo, causa un leve impacto fiscal negativo al presupuesto de INVIAS al disminuir el porcentaje que recibe por contraprestaciones portuarias, en cambio la promoción y aplicación de esta ley provoca mayores beneficios para los distritos y municipios con puertos marítimos, los cuales se representan en una descentralización real de recursos por parte de la nación hacia los municipios que se deberían beneficiar por tener los puertos.

IV. ANÁLISIS SOBRE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS

De acuerdo con lo ordenado en el artículo 3º de la Ley 2003 de 2019, en concordancia con los artículos 286 y 291 de la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso), y conforme con el objetivo de la presente iniciativa, se puede concluir inicialmente:

Se presume que no hay motivos que puedan generar un conflicto de interés para presentar esta iniciativa de ley.

Tampoco se evidencian motivos que puedan generar un conflicto de interés en los congresistas para que puedan discutir y votar esta iniciativa de ley.

Sin embargo, se debe tener presente que, el conflicto de interés y el impedimento es un tema especial e individual en el que cada congresista debe analizar si puede generarle un conflicto de interés o un impedimento.

Cordialmente,

LEÓN FREDY MUÑOZ LOPERA
Representante a la Cámara
Partido Alianza Verde

MARÍA JOSÉ PIZARRO RODRÍGUEZ
Representante a la Cámara
Coalición Decentes

Luis Alberto Albán Urbano
Representante a la Cámara
Partido Comunes

EDWIN FABIAN ORDUZ DIAZ
Representante a la Cámara

JAIRO REINALDO CALA SUÁREZ
Representante a la Cámara
Partido COMUNES

MARTHA VILLALBA HODWALKER
Honorable Representante a la Camara

JULIÁN GALLO CUBILLOS
Senador de la República
Partido Comunes

ALEXANDER LÓPEZ MAYA
Senador de la República
Partido Polo Democrático Alternativo

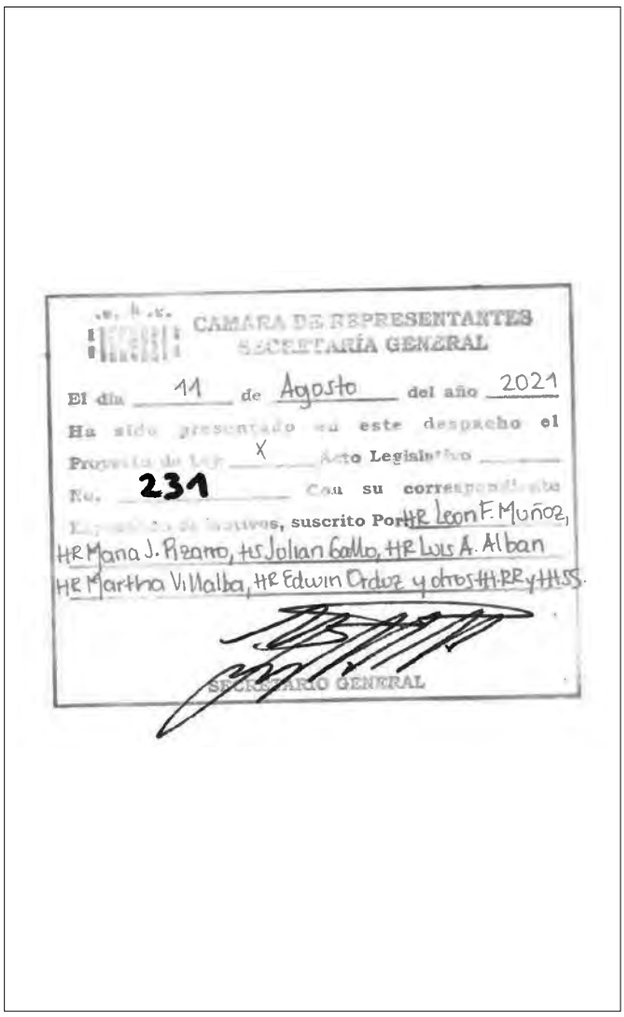
AIDA AVELLA ESQUIVEL
Senadora de la República
Coalición Decentes-Unión Patriótica

ANTONIO SANGUINO PÁEZ
Senador de la Repùblica
Partido Alianza Verde

WILMER LEAL PÉREZ
Representante a la Cámara
Partido Alianza Verde

DAVID RACERO MAYORCA
Representante a la Cámara por Bogotá
Coalición Decentes

OMAR DE JESUS RESTREPO CORREA
Representante a la Cámara
Partido Comunes


CAMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL
El día 11 de Agosto del año 2021
Ha sido presentado en este despacho el
Proyecto de Ley X Acto Legislativo
No. 231 Con su correspondiente
Exposición de Motivos, suscrito Por HR Leon F. Muñoz,
HR Mana J. Rizano, HS Julian Gallo, HR Luis A. Alban
HR Martha Villalba, HR Edwin Ordoz y otros HH.RR y HH.SS.
SECRETARIO GENERAL

PROYECTO DE LEY NÚMERO 232 DE 2021 CÁMARA

por medio del cual se reglamenta el modelo para la atención y seguimiento de adolescentes y jóvenes que estuvieron bajo custodia del Estado a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Con el fin de facilitar la lectura del documento el mismo seguirá el siguiente orden:

1. Articulado
2. Objeto del Proyecto de Ley
3. Exposición de Motivos
4. Marco Constitucional y Normativo
5. Conflictos de interés

ARTICULADO

PROYECTO DE LEY No. _____ DE 2021 CÁMARA

"Por medio del cual se reglamenta el modelo para la atención y seguimiento de adolescentes y jóvenes que estuvieron bajo custodia del Estado a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar"

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene como objeto la implementación medidas tendientes a crear una política pública que permita fortalecer el proceso formativo y de seguimiento a los niños, niñas y adolescentes declarados en adoptabilidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de los adolescentes y jóvenes que se encuentren en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) con medida privativa de la libertad en Centro de Atención Especializada y cumplan con las condiciones establecidas para su permanencia en el lineamiento técnico que expida el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) hasta los veinticinco (25) años de edad, a fin de asegurar la inclusión social y lograr su máximo desarrollo personal y social

Parágrafo. Los adolescentes y jóvenes que se encuentren en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) con medida privativa de la libertad en Centro de Atención Especializado, beneficiarios de la presente Ley serán aquellos adolescentes y jóvenes que estuvieron bajo custodia del Estado a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), es decir, no harán parte de la población beneficiada, los adolescentes o jóvenes cuya custodia y cuidado la tengan sus progenitores o un tercero.

Artículo 2. Responsabilidad de las entidades. Las entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal garantizarán la inclusión real y efectiva de la población beneficiaria de esta ley, debiendo asegurar un trato preferente y diferencial, que implique el ejercicio cierto de sus derechos.

Artículo 3. Proyecto De Vida. Para efectos de esta Ley, por proyecto de vida se entenderá aquel proceso de construcción permanente durante el ciclo vital del ser humano que integra el contexto sociocultural en los que se desarrolla el individuo, permitiéndole tomar decisiones libres e informadas y el desarrollo de un pensamiento autocrítico, reflexivo y creativo.

En este sentido, el proyecto de vida le permite identificar a la población beneficiaria de esta ley, los recursos y potenciales personales, así como reconocer lo que el entorno ofrece para que, a partir de ello, se logre la preparación para una vida autónoma e independiente.

Artículo 4. Estrategia De Fortalecimiento Del Proyecto De Vida. Créase la estrategia de fortalecimiento del proyecto de vida para la población beneficiaria de esta ley. La estrategia permitirá que, con trato preferente, se brinde una orientación socio-ocupacional, se promueva la construcción de su identidad, su participación en escenarios culturales, artísticos, deportivos, de recreación, y el acceso a la salud, a la educación y al trabajo, con el fin de consolidar su proyecto de vida.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) estará a cargo de la estrategia y coordinará con las entidades competentes los criterios de ingreso, permanencia y egreso de la estrategia en todos sus componentes. Para ello, deberá elaborar esta estrategia de manera coordinada con el Ministerio de Justicia y del Derecho, en su calidad de rector del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SNCRPA), en lo relativo a las personas que siendo menores de edad ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes con medida privativa de la libertad en Centro de Atención Especializada.

Las entidades encargadas de adoptar las medidas establecidas en esta ley en materia de educación, cultura, deporte y trabajo serán responsables del efectivo cumplimiento de lo aquí establecido.

Parágrafo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en coordinación con el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes, cuando se trate de las personas que estén vinculadas al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, estará a cargo del seguimiento de la estrategia con las entidades responsables, a través de un Plan de Acción que deberá ser elaborado por el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y el Comité Técnico del SNCRPA en un plazo no mayor a seis (6) meses a partir de la promulgación de la presente Ley.

TÍTULO II
DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CONSOLIDAR EL PROYECTO DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO PROTECCIÓN DEL ICBF

CAPITULO I
DISPOSICIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Artículo 5. Del Fondo Especial de Educación. El fondo especial de ayudas educativas, administrado por el Icetex, está orientado a garantizar el acceso a la educación superior o estudios para el trabajo y desarrollo humano de la población beneficiaria, objeto de esta ley, que cumpla con los requisitos establecidos y manifieste su intención de continuar con estos niveles de educación. El fondo deberá asumir el 100% del valor de la matrícula, además del sostenimiento y materiales de estudio, de acuerdo con los montos, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en los lineamientos técnicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); de conformidad con los recursos que priorice el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dentro de la trasferencia que realice al Icetex y siempre que los recursos de financiación sean consistentes con el Marco de Gasto del Sector.

Parágrafo 1. Los recursos del Fondo Especial, de que trata este artículo, no podrán ser destinados para fines distintos a los establecidos en la presente Ley.

Parágrafo 2. La intención de continuar con los niveles de educación deberá ser manifestada por el beneficiario a través de escrito dirigido al Fondo Especial de Educación.

Parágrafo 3. El beneficio del fondo especial de ayudas educativas será otorgado para cursar una (1) sola carrera de educación superior en la modalidad de pregrado.

Artículo 6. Recursos del Fondo Especial de Educación. El fondo del que trata el artículo 5 de la presente ley operará con recursos que priorice el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Nacional. Este Fondo podrá recibir aportes de personas naturales o jurídicas, entidades territoriales y de los cooperantes internacionales que así lo dispongan.

Parágrafo 1. El Icetex, en calidad de administrador del fondo, suscribirá el respectivo convenio con el Ministerio de Educación Nacional y el instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el que las dos partes establecerán el respectivo Reglamento Operativo del Fondo a administrar. En el reglamento Operativo del Fondo deberán quedar plasmados los requisitos que deben cumplirse para adquirir la calidad de beneficiario de la estrategia educativa.

Parágrafo 2. El acceso a las instituciones de educación superior se sujetará a los procesos de admisiones establecidos en cada una de ellas, incluyendo la posibilidad de crear grupos especiales para la población objeto de la presente ley

Parágrafo 3. Los jóvenes que hubieran ingresado al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) siendo menores de edad y que hayan iniciado sus carreras de educación superior en fase de pregrado o estudios para el trabajo y desarrollo humano, encontrándose bajo medida privativa de libertad y que hayan cumplido el término de la misma, tendrán el beneficio establecido en el artículo 10 de la presente ley, siempre que hayan iniciado sus carreras en el marco de la estrategia a cargo del ICBF y que cumplan los requisitos de esta.

Parágrafo 4. El Ministerio de educación deberá garantizar un porcentaje mínimo anual para el mantenimiento del Fondo Especial de Educación. El incremento anual de dicho presupuesto no podrá estar por debajo del IPC anual.

Artículo 7. Servicio Nacional De Aprendizaje Sena. En los cupos que se habiliten para la formación que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, se priorizará, facilitará y garantizará el acceso de la población beneficiaria de esta ley en todos los programas de formación virtual y presencial que se oferten.

El Sena, en asocio con el ICBF y con el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Justicia y del Derecho, en un término máximo de seis (6) meses, posteriores a la entrada en vigencia de esta ley, diseñará y pondrá en práctica una estrategia de formación laboral con enfoque diferencial adoptada y adecuada a los perfiles de los adolescentes vinculados al SRPA.

Artículo 8. Programas Culturales y Deportivos. El Ministerio de Cultura y el Ministerio del Deporte, conforme a su naturaleza jurídica y en coordinación con las entidades territoriales competentes, garantizarán el acceso y permanencia, con trato preferente a los beneficiarios de esta ley, a los programas de cultura, recreación y deporte con los que cuente el Gobierno Nacional, los distritos, departamentos y municipios, acorde con sus intereses y expectativas. Para los programas de alto rendimiento se tendrán en cuenta las características técnicas requeridas para cada programa.

CAPITULO II
DISPOSICIONES EN MATERIA LABORAL Y EMPRENDIMIENTO

Artículo 9. Programas Laborales. El Ministerio de Trabajo y el Servicio Público de Empleo, garantizarán el acceso preferente de los jóvenes beneficiarios de esta ley, a los programas para el fortalecimiento de las habilidades laborales y a aquellos que brinden herramientas que faciliten su ingreso al mercado laboral, mejoren su desempeño en los sitios de trabajo y promuevan generación de sus ingresos, en concordancia con lo establecido en la Ley 1780 de 2016.

Parágrafo 1. El Ministerio de Trabajo y el Servicio Público de Empleo deberán orientar a los jóvenes beneficiarios de esta ley, en las diferentes alternativas de generación de ideas productivas, con el fin de ser presentadas a los fondos o entidades que apoyan el emprendimiento con la consecución de una capital semilla.

Parágrafo 2. El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA a través del Fondo Emprender y la Agencia de Emprendimiento e Innovación - INNpulsa, o quien haga sus veces, promoverán convocatorias de emprendimiento y realizarán acompañamiento y asesoría permanente para la viabilización y financiación de las ideas de negocio o emprendimientos de los jóvenes que cumplan las características de la presente ley.

Para tales efectos, INNpulsa podrá generar una coordinación con los fondos del sector privado que se dediquen a financiar proyectos de emprendimiento y capital semilla.

Artículo 10. Empleabilidad. El Gobierno Nacional deberá priorizar el acceso a cargos públicos, así como en el tema contractual, a los jóvenes beneficiarios de esta ley, siempre y cuando cumplan los requisitos que se requieren para el empleo al cual se postulan. Para tal efecto el Gobierno Nacional tendrá un plazo de seis (6) meses para reglamentarlo.

Parágrafo. Las vinculaciones laborales que se realicen en virtud de la presente ley deberán ser reportadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que será la encargada de llevar el registro de los cargos con los que se beneficiaran los jóvenes egresados.

Artículo 11. Emprendimiento. Orientar a los jóvenes beneficiarios de esta ley, en las diferentes alternativas de generación de ideas productivas con el fin de ser presentadas a los fondos o entidades que apoyan con la consecución de una capital semilla.

Artículo 12. Organismos Cooperantes. Los organismos internacionales cooperantes que participen en cualquier programa o servicio del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, podrán apoyar o patrocinar la estrategia que promueva la consolidación del proyecto de vida de los beneficiarios de esta ley que se encuentren bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Artículo 13. Observatorio de seguimiento de la protección a jóvenes y adolescentes que estuvieron bajo custodia del Estado. Créase el Observatorio de Seguimiento de la protección, con el objetivo de recopilar la información, evaluar el impacto y elaborar propuestas de mejoramiento a la política pública de los programas establecidos en la presente Ley, a partir de la Estrategia de fortalecimiento del proyecto de vida de los jóvenes y adolescentes que estuvieron bajo custodia del Estado a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Parágrafo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reglamentará el funcionamiento y los demás aspectos necesarios para la puesta en marcha del Observatorio, en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 14. Vigencia y Derogatorias. Esta ley rige a partir de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias.

Cordialmente,

JHON ARLEY MURILLO BENÍTEZ
Representante a la Cámara
Partido Colombia Renaciente

ALEXANDER BERMÚDEZ LASSO
Representante a la Cámara
Departamento del Guaviare

CARLOS JULIO BONILLA SOTO
Honorable Representante a la Cámara
Departamento del Cauca.

HENRY FERNANDO CORREAL
Representante a la Cámara
Departamento del Vaupés

FABER ALBERTO MUÑOZ CERÓN
Representante a la Cámara
Partido de la U

JORGE ELIÉCER TAMAYO MARULANDA
Representante a la Cámara

JORGE ENRIQUE BENEDETTI M.
Representante a la Cámara por Bolívar

ELOY CHICHI QUINTERO ROMERO
Representante a la Cámara
Dpto Cesar

JEZMI LIZETH BARRAZA ARRAUT
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

FELIPE ANDRÉS MUÑOZ DELGADO
REPRESENTANTE A LA CÁMARA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

ANATOLIO HERNÁNDEZ LOZANO
Representante a la Cámara

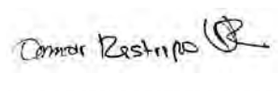
JOSÉ LUIS CORREA LÓPEZ
Representante a la Cámara

MARÍA CRISTINA SOTO DE GÓMEZ
Representante a la Cámara
Partido Conservador

JAIRO REINALDO CALA SUÁREZ
Representante a la Cámara
Partido COMUNES



JAIRO HUMBERTO CRISTO CORREA
Representante a la Cámara
Departamento Norte de Santander



OMAR DE JESUS RESTREPO CORREA
Representante a la Cámara
Partido COMUNES

Proyecto de Ley _____ de 2021 Cámara
"ley de egreso para jóvenes que estuvieron bajo custodia del Estado"

OBJETO DEL PROYECTO DE LEY

"Ingresé a Bosconia en el 2011 por situación de vida en calle y problemas familiares; fue difícil, primero me rehabilite en el Calvario, pero ahora que estoy afuera, siento que volví a vivir lo mismo que antes"
Cristian David Caicedo, 22 años, Cali – Colombia.

La experiencia indica que los niños, niñas y adolescentes para quienes no se logra un proceso de adopción, los cuales son declarados en situación de adoptabilidad y el ICBF a través de su programa de protección del ICBF alojan múltiples expectativas frente a lo que será su futuro mientras se encuentren en el sistema de protección y al salir de este, pues al igual que cualquier otro individuo tienen el derecho a que el estado en su representación legal (padre o madre) merecen y necesitan afianzar sus fortalezas y habilidades a nivel personal, afectivo, social, relacional, cultural, académico, profesional y laboral para tener una vida estable y satisfactoria.

El presente proyecto de ley tiene como objeto la creación de medidas tendientes a garantizar la consolidación de los derechos de adolescentes y jóvenes para el pleno desarrollo de su proyecto de vida, a fin de asegurar su plena inclusión social y su máximo desarrollo personal y social, el cual será de aplicación para aquellos adolescentes jóvenes que egresan del Sistema de Protección a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

En este sentido, la finalidad de este proyecto es crear un apoyo post – egreso a nivel gubernamental, ya que esta población tan vulnerable realmente no "existe" en Colombia, una vez egresados de las instituciones de protección, los jóvenes no reciben ninguna consideración especial por la ley. En nuestro país existen más de 60.000 niños y niñas viviendo internados en instituciones de protección, y más de 11.000 que egresan de las instituciones anualmente al cumplir la mayoría de edad, y/o alcancen los 25 años de edad máxima permitida para la permanencia de los jóvenes en el sistema de protección, del mismo modo se vuelve primordial y vital definir un sistema de apoyo para que los adolescentes jóvenes egresados de protección, logren llevar una vida independiente y digna como adultos.

Por otro lado, el egreso sin apoyo alguno, implica perder la inversión social realizada por el Estado colombiano, por consiguiente el estado debe implementar políticas y estrategias de seguimiento para los jóvenes que egresan de protección, ya que se convierten en un grupo excluido por la misma acción gubernamental y que cuenta con menores oportunidades para lograr lo que quieren ser y hacer en sus vidas.

Esta medida legislativa se retoma tanto en su articulado como en su exposición de motivos al Lineamiento Técnico del Modelo para la Atención de Adolescentes y Jóvenes Adoptables o Vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal, en preparación para la Vida Autónoma e Independiente del **"Proyecto Sueños, Oportunidades para Volar"** y la tesis doctoral para la Universidad Nacional de Educación a Distancia **"El Tránsito a la Vida Adulta de Jóvenes Egresados del Sistema de Protección en Colombia: Trayectorias, Fuentes de Resiliencia e Intervenciones Socioeducativas"** autoría de Teresita de Lourdes Bernal Romero, máster en innovación e investigación en educación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, **ICBF,** es la institución que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia, brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos.

Dentro del ICBF, las modalidades son las formas en las que se presta el servicio de protección integral, se caracterizan por el grupo poblacional de atención previamente definido, por las condiciones técnicas específicas requeridas para desarrollar el proceso de atención y cumplir con el objetivo de la medida de restablecimiento de derechos decretada a favor del NNA en función de su interés superior. A través de la medida de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes que ingresaron al ICBF con un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos – **PARD,** se pretende que NNA restauren su dignidad e integridad para realizar un ejercicio y goce efectivo de los derechos que les han sido vulnerados; si esa condición no se ha alcanzado, el Estado será responsable hasta tanto no se logren garantizar estos derechos.

El Sistema de Protección se define como las acciones institucionales que promueven el restablecimiento de los derechos de NNA, mujeres gestantes y mujeres lactantes, cuando estos han sido vulnerados, amenazados o inobservados basados en el cumplimento de los principios del interés superior y prevalencia de sus derechos. En tal sentido a fin de garantizar a los adolescentes el derecho a la educación formal hasta los 18 años, también se les ofrece algunos cursos de educación no formal, todo esto enmarcado dentro de los programas de Proyecto de Vida y de Preparación para la Vida Laboral y Productiva, en algunas ocasiones a los jóvenes y adolescentes de excelente rendimiento académico el Estado o las organizaciones les financian algún tipo de carrera técnica o profesional, razón por la cual pueden permanecer con la medida hasta máximo los 25 años de edad, en los servicios de protección. De allí que solo "algunos" logren ingresar a instituciones de educación técnica o profesional; para los demás en cambio no existe una política clara que les permita acceder a una institución de formación superior, herramienta vital para su tránsito a la vida adulta.

Ahora bien quienes han estado bajo el cuidado que el gobierno les ha brindado, reconocen que ha sido la mejor opción sobre alguna otra alternativa; sin embargo, para algunos otros, su tiempo bajo el mismo ha sido la causal de un sinnúmero de inconvenientes y frustraciones. En este sentido, la mayoría de las dificultades experimentadas por la población aplican en general al sistema de protección en sí, bien sea en ambiente familiar o institucional.

"Mi papá me dijo que somos 11 hermanos, de los cuales solo conozco a 4, los otros 7 no sé en qué mundo están, si están en Cali o si están en Venezuela algunos, no los conozco Y el que conozco pues es drogadicto, ahora está desintoxicando su cuerpo en un lugar, la relación es buena, ojalá se recupere pronto. Como les dije, desde que se murió mi mamá, mi hermano se hundió en las drogas, él lo tomo muy personal, o sea le dolió mucho y eso hizo que el adentrara a las drogas como pa´olvidarse, mi mamá murió cuando yo tenía 7 años, yo vivía con ella, era el único, mi papá apareció me llevo con él al Calvario, ahí viví con él, pero la relación era extraña, paso el tiempo y le cogí cariño, pero usted sabe, la mamá es la mamá y no hay papá que valga"
Jefferson Jiménez, 25 años, Cali – Colombia

La vida en protección genera un alto nivel de inestabilidad para los niños por ser traslados a distintas instituciones o modalidades de cuidado, la inestabilidad contribuye a resultados pobres de educación y de desarrollo personal. De igual manera, los problemas emocionales y de relación social contribuyen a problemas de comportamiento y dificultades en la escuela. El aislamiento es específicamente producto de ser internado, y contribuye a la carencia de habilidades sociales que, a su turno, se convierten en dificultades que estos jóvenes enfrentan en su cotidiano vivir como: la inserción al mundo laboral, sus ingresos son menores a los de otros jóvenes, dependen del sistema de prestaciones sociales y tienen dificultades para adaptarse al mundo externo, entre otras situaciones.

Adicionalmente, Stein (2008)[1] afirma que una consecuencia de los desplazamientos en protección es lo que más se les dificulta a los jóvenes y echar raíces en un sitio cuando egresan de protección, la cultura institucional se preocupa principalmente por el cuidado físico del niño y con el establecimiento de rutinas, pero la falta de interacción necesaria para el desarrollo cognitivo y del lenguaje puede producir problemas graves (Johnson, Browne, & Hamilton-Giachritsis, 2005)[2] .

Generalmente, los niños internados tienen oportunidades limitadas para establecer relaciones de apego, especialmente donde la proporción entre niños - cuidadores es alta y existe alta rotación de los miembros de personal.

[1] Stein, M. (2008). Young people leaving care. National Childrens Bureau Higlight, 240, 1- 4. Recuperado de http://www.york.ac.uk/inst/spru/research/pdf/ YPLeavingCare.pdf.

[2] Jekielek, S. y Brown, B. (2005). The transition to adulthood: characteristics of young adults ages 18 to 24 in America. Washington: The Annie E. Casey Foundation – Population Reference Bureau – Child Trends. Recuperado de http://www.prb.org/pdf05/transitio ntoadulthood.pdf.

Posiblemente el efecto más profundo de la institucionalización es que los NNA llegan a ser aislados de la sociedad y esto les afecta de múltiples maneras. En este sentido, las oportunidades que alcanza este grupo son influenciadas negativamente por la actuación del Estado y la única forma de compensación, sería la de brindar los mecanismos suficientes para que los jóvenes que fueron institucionalizados, logren condiciones en igualdad con las de cualquier otro miembro en esta sociedad. Ejemplo de ello es que muchas veces, la ubicación de un niño o niña en una institución no toma en cuenta la ubicación geográfica de sus origines, y puede llegar a ser internado lejos de la familia, o inclusive de su cultura (el caso de los niños indígenas). Los resultados de educación para los jóvenes en protección reflejan constantemente falta de atención personalizada y las bajas expectativas que tienen no solo los niños, sino también los cuidadores.

Finalmente el egreso de una institución se genera a partir de: reunificación con la familia, la adopción, el traslado de un centro de recepción a otra modalidad más permanente, el traslado entre instituciones por razones de edad, el colapso de una ubicación con la familia propia o una familia sustituta (implicando la necesidad de buscar otra modalidad temporal o permanente), la fuga del menor del medio de protección, o por cumplir la mayoría de edad. Una vez que egresen no pueden volver a la institución si encuentran dificultades en el camino, y no cuentan con el apoyo económico, práctico y emocional sostenido que una familia normalmente garantiza (Stein M, 2014)[3].

Durante la etapa de la adolescencia período de transición de la etapa de niñez a la etapa adulta, momento del egreso, el joven busca ser autónomo, desea manejar su vida, ser independiente. Las necesidades prioritarias que debe satisfacer son la de organizar y administrar su vida y la de construir una imagen propia para sí mismo, para los demás y para la sociedad. La institución debe permitir la movilidad del adolescente dentro y fuera de la misma, se hace importante delegar funciones y responsabilidades con el fin de reforzar la autonomía[4].

Pero en Colombia la realidad para los egresados del Sistema de Protección describe la prevalencia de tendencias como pobreza, inestabilidad de vivienda, déficits educativos y laborales, fragilidad de salud mental y falta de redes de apoyo social en los jóvenes que han estado en protección.

A continuación se describen los programas sobre las Buenas Prácticas en el Tránsito a la Vida Adulta, que se han desarrollado en países como Inglaterra, España, Argentina y Perú. Para Colombia, la Fundación Formación D'Futuros, organización sin ánimo de lucro y que no depende del Sistema de Bienestar Familiar, ha generado un programa para egresados del sistema de protección.

[3] Stein, M. (2014). Young people's transitions from care to adulthood in European and post- communist Eastern European and Central Asian societies. Australian Social Work, 67(1), 24-38. Recuperado de http://eprints.whiterose.ac.uk/77006/1/MSasw2oct2013. pdf.

[4] Estado mundial de la infancia 2011. La adolescencia Una época de oportunidades, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Febrero de 2011.

País	Descripción	Buenas Prácticas en el Tránsito de la Vida Adulta		
Inglaterra		Leaving Care, la que pone de manifiesto la responsabilidad del Estado en el cuidado y el soporte de las personas que han estado sin protección parental. A partir de lo cual se generaron ciertos recursos como: 1) Programas para jóvenes entre los 16 y los18 años, como casas que los prepararan para el egreso y algún tipo de apoyo económico; 2) Programas para los jóvenes entre los 18 y 21 años, los cuales pueden permanecer en acogimiento familiar si lo desean; y 3) Programas para los jóvenes entre 21 a 24 años, en términos de recursos económicos para proyectos de formación o inclusive para vivienda.	**España**	La entidad Opción 3 trabaja en diferentes cambios fundamentales en el desarrollo del joven, como: apoyo social y prelaboral a los adolescentes y jóvenes, en el que se despliegan capacitaciones prelaborales en temas de búsqueda de empleo, habilidades sociales, formación prelaboral e intermediación laboral. También realizan actividades de promoción personal y social como lúdicas y deportivas, clubes de ocio y educación en valores. Además, acompañamiento socioeducativo en situaciones personales y mediaciones familiares. La Fundación Tomillo, ha generado el programa Transición a la Autonomía de Jóvenes Extutelados, cuyo objetivo es favorecer la integración social de los jóvenes ex tutelados que no cuentan con ningún apoyo. El programa está dirigido a los jóvenes entre 18 y 21 años en procesos de autonomía laboral, económica y acceso a redes sociales, han generado una serie de cartillas dirigidas tanto a formadores (educadores) como
				jóvenes para facilitar procesos de inserción laboral.
Argentina		DONCEL es una organización de la sociedad civil argentina que está liderando el trabajo en este país sobre el tránsito a la vida adulta. El objetivo del programa es incrementar las oportunidades de integración sociolaboral de jóvenes entre 16 y 21 años que están en situación de vulnerabilidad y que viven en Hogares o Institutos de la Argentina, para facilitar su egreso de estas instituciones. A través de este programa busca interrumpir el ciclo de marginalización y aislamiento al que se arriba, entre otras cosas, por la falta de empleo y el bajo nivel educativo de estos jóvenes El programa plantea como objetivos especifico: el acompañamiento de los jóvenes en la construcción de su proyecto de vida; facilitar experiencias positivas en el trabajo, presentar un gran abanico de posibilidades laborales a los jóvenes a través de redes, concientizar a la sociedad, en especial, a las empresas en la importancia de este tipo de programas y su participación en el.	**Perú**	Proyecto Luz en el Camino ha generado con los mismos jóvenes egresados una guía para ayudar a otros en su egreso y tránsito a la vida adulta. Los jóvenes, autores del trabajo utilizan como orientación las mismas preguntas que ellos se plantearon en el momento del egreso: ¿Me irá bien?, ¿Qué estudiaré?, ¿En qué trabajaré?, ¿tendré una pareja?, ¿Una familia? A partir de ellas proponen una serie de alternativas y consejos.

Colombia
La Fundación Formación D'Futuros, organización sin ánimo de lucro y que no depende del Sistema de Bienestar Familiar, ha generado un programa para egresados del sistema de protección. La organización atiende adolescentes y jóvenes procedentes de centros de atención especializada, ofreciendo diferentes tipos de programas, en la ciudad de Cali. Uno de ellos facilita el acceso a la educación básica, una carrera técnica o tecnología a los jóvenes entre 18 y 21 años que viven en la institución. Además, hacen procesos de acompañamiento en resolución de conflictos, convivencia y fortalecimiento de habilidades laborales, incluyendo el manejo del dinero. Por otra parte, atienden adolescentes en protección todavía o a egresados, brindando servicios como: biblioteca, sistemas e internet, actividades lúdico-formativas, punto de encuentro y fortalecimiento de red, jornada laboral donde reciben acompañamiento y guía en la búsqueda de empleo y participación en procesos de selección, fortalecimiento de habilidades laborales a través de la red. Realizan talleres para adolescentes en protección y para los equipos ayudando a fortalecer la preparación para el egreso, estos incluyen temas como: habilidades sociales, sujetos de derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, proyecto de vida.

Tránsito a la Vida Adulta – Jóvenes Bajo Protección

Generalmente los jóvenes desarrollan en la adolescencia logros evolutivos que se consideran como "conocimientos, habilidades y actitudes que se supone adquirirán en diversos puntos de su ciclo vital". El tránsito a la vida adulta es el proceso de cambio, de individualización, de resolución de conflictos, de asunción de nuevos roles y de toma de decisiones en pro de lograr una vida autónoma y responsable. Es durante esta fase de búsqueda de autonomía e independencia, donde se deberán potencializar dichos aspectos para fortalecer la consolidación de su proyecto de vida que una vez diseñado y estructurado, este dará las pautas que guiaran a los adolescentes y jóvenes en la búsqueda de las herramientas que permitirán mejorar su calidad de vida, este proceso enfrenta a los jóvenes a grandes desafíos teniendo que construir proyectos de vida en un mundo atravesado por las incertidumbres, la competitividad y las pocas oportunidades (Gentile, 2009 y Olmos, 2011)[5].

El bienestar social y emocional debe potenciar en los jóvenes un proceso de autonomía en las condiciones que se espera lo haría una familia, previendo un apoyo continuo, pero otorgándole responsabilidades de la misma manera, hasta que se encuentre en capacidad de ejercer su independencia en un marco de garantía de derechos. Son distintas las trayectorias de jóvenes en riesgo social que las de los jóvenes que cuentan con redes de apoyo, que están incluidos socialmente y que se les ha preparado para este proceso. Asumir los retos del tránsito a la vida adulta, de por sí complejos en cualquier persona, puede constituirse en un proceso más desafiante cuando existen dificultades sociales, llegando muchas veces a legitimar círculos de exclusión social, los jóvenes que egresan de los sistemas de protección del Estado se constituyen en un grupo en riesgo social en el proceso de tránsito a la vida adulta; pues al cumplir la mayoría de edad ya no cuentan con el mismo apoyo del sistema y muchas veces ni de sus familias, para el caso de los adolescentes del Sistema de Responsabilidad para Adolescentes y que para el caso de los adolescentes declarados en adoptabilidad están totalmente desarraigados de ellas, puesto que cuentan con una situación jurídica definida de fondo como es la adoptabilidad.

A partir de ahí tienen que enfrentarse a cambios como: buscar un lugar donde vivir, un trabajo con el cual sostenerse, deben afrontar la soledad, inclusive algunos no tienen sistema de salud, no han culminado sus estudios y deben desarrollar nuevos hábitos y rutinas diarias. En Colombia el proceso sugiere que para este tipo de poblaciones debe existir un sistema de seguimiento[6] y acompañamiento por seis meses después del egreso, sin embargo, son escasos los datos sistemáticos sobre los egresados de protección, también son escasos los datos sobre como estos jóvenes han vivido este proceso, cuáles de los elementos que les brindó protección les ha permitido o no enfrentar el proceso de llegar a la vida adulta, cómo ha sido el tránsito y cuál es su situación actual. Lo más interesante es que no se reportan datos sobre cuántos egresan por mayoría de edad, ni de su situación actual.

[5] Gentile, A. (2009). Inestabilidad laboral y estrategias de emancipación. (Tesis doctoral). Universidad de Barcelona. Recuperada de http://www.tdx.cat/handle/10803/31854?s how=full.

[6] Oficio con radicado del ICBF – Cecilia de La Fuente de Lleras No. 443803 del 14 de agosto de 2018. Solicitando el número de adolescentes y jóvenes sin discapacidad mayores de 15 años, con declaratoria de adoptabilidad, con estudios de noveno grado terminado que se encuentren vinculados a educación media y/o formación para el trabajo y desarrollo humano y/o formación técnica, tecnológica y/o universitaria, es decir que ya estén perfilados para la preparación para la vida autónoma e independiente".

El comprender el tránsito a la vida adulta como proceso diferenciado implica reconocer que cada joven es un ser único, que enfrenta situaciones y puede tener otras complejidades debido a situaciones familiares, educativas, políticas, sociales y económicas que no le favorecen. Teniendo en cuenta estas situaciones, el tránsito a la vida adulta puede presentar diferentes trayectorias en cada uno de estos jóvenes; sin embargo, en todos ellos pareciera que deben asumir este proceso de una forma "acelerada". Ya cuando han egresado, un elemento importante en el tránsito a la vida adulta de estos jóvenes es el asumir responsabilidades para las cuales no se les ha preparado, por ejemplo: el manejo del dinero, la organización en una cuenta bancaria, las compras de los alimentos, el pagar los servicios básicos de una vivienda (agua y luz) y el pagar una vivienda, entre otras. Igualmente puede ser difícil para ellos buscar un empleo, diligenciar una hoja de vida, saber cómo vestirse para el trabajo e inclusive pedir ayuda (Greeson y Thompson, 2014)[7]. Todas estas situaciones que tienen que enfrentar los egresados de protección en el tránsito a la vida adulta los puede llevar a construir trayectorias fallidas, pues son muchos los desafíos que enfrentan sin apoyo. A pesar de ser elementos y obligaciones que están contempladas en los procesos de atención de las instituciones que conforman el sistema de protección, donde permanecen los jóvenes por largos períodos de tiempo, antes de su egreso, pero que a toda luz resultan insuficientes y débiles al momento de terminar la medida de restablecimiento de derechos.

Esta dificultad se atribuye precisamente al descuido de políticas al respecto que generen otras posibilidades y mecanismos de inclusión para estos jóvenes. El tránsito a la vida adulta en los jóvenes egresados de protección representa definitivamente múltiples desafíos que requieren de un apoyo particular y de unas políticas que faciliten este proceso. Dependiendo del acceso a recursos las trayectorias de los jóvenes puede ser totalmente diferentes y el haber estado en protección puede ser una oportunidad o todo lo contrario.

MARCO CONSTITUCIONAL Y NORMATIVO

En su artículo 44, la Constitución Política consagró como derechos fundamentales de los menores la salud y la seguridad social, la educación, la cultura y la recreación entre otros. De igual forma, establece la obligación, por parte del Estado, la sociedad y la familia de asistir y proteger a los menores, con el fin de que estos logren el ejercicio pleno de sus derechos y se desarrollen de manera armónica e integral.

ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

[7] Greeson, J. y Thompson, A. (2014). Aging out of foster care. En Jensen, J. The Oxford handbook of emerging adulthood. Doi: 10.1093/oxfordhb/97801997 95574.013.18.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

Acorde con lo establecido en la Constitución Política de Colombia, el interés superior de los niños se encuentra en la Convención de los Derechos de los Niños en el artículo 3, el cual determina que "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño". Estableciendo que todas las medidas respecto del niño deben estar basadas en la consideración del interés superior del mismo y corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado, cuando las personas responsables, no tienen capacidad para hacerlo.

De igual forma, la Convención reconoce como sujetos de derecho a los menores, lo que implica una acción estatal diferencial afirmativa que permita garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y su desarrollo integral, contemplando las acciones y garantías que los países parte deben establecer para los niños, niñas y adolescentes sometidos a su jurisdicción, entre los cuales se pueden resaltar los artículos 4, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 30 y 39 de la Convención.

El Comité de Derechos del Niño, órgano encargado de interpretar la Convención mencionada, señalo en la Observación General No. 14 que "La plena aplicación del concepto de interés superior del niño exige adoptar un enfoque basado en los derechos, en el que colaboren todos los intervinientes, a fin de garantizar la integridad física, psicológica, moral y espiritual holísticas del niño y promover su dignidad humana".

Colombia se acogió, como los otros países latinoamericanos, a la Declaración de los Derechos del Niño y a partir de ello ha realizado cambios y ajustes a la normatividad sobre la infancia, la adolescencia, la protección y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Algunos de estos cambios se evidencian en el Código de la Infancia y Adolescencia (República de Colombia. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, Ley 1098, 2006) que remplaza al antiguo Código del Menor, con su reciente modificación a través de la Ley 1878 de 2018, y a los diferentes lineamientos técnicos que han surgido después de esta transición. La protección es definida actualmente como el conjunto de políticas, programas y acciones que evitan la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situaciones como: explotación sexual y laboral, abandono, maltrato y tortura.

En Colombia, inicialmente, el cuidado y la protección son responsabilidad de la familia; sin embargo, cuando las familias no pueden proteger a sus hijos, la sociedad civil y en especial el Estado deben intervenir desde medidas que permitan restituir y garantizar sus derechos fundamentales (república de Colombia. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, Ley 1098, artículo 7, 2006).

Estas medidas son definidas y orientadas, en el caso de Colombia, por el Sistema Nacional de Bienestar Familiar – SNBF.

El Sistema Nacional de Bienestar Familiar Colombiano tiene como objetivos misionales: la protección integral de la infancia y la adolescencia, la promoción de políticas públicas sobre estos grupos poblacionales, la evaluación y seguimiento de sus derechos, el impulso de las políticas al

respecto y el fortalecimiento de los sistemas familiares para que puedan asumir su responsabilidad en el cuidado de niños, niñas y adolescentes (república de Colombia. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, Resolución 6464, 2013). Para lograr estos objetivos el Sistema lo conforman diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y distintos actores que deben contribuir a la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entre estas organizaciones y actores figuran: el Ministerio de la Protección Social, del cual depende el Sistema, la sociedad, la familia, niños, niñas y adolescentes, entes territoriales del nivel nacional, departamental, distrital y municipal, los comisarios de Familia, la Registraduría Nacional del Estado Civil, organizaciones vincula- das al sector salud y educativo, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, entidades que desarrollan programas de atención para el restablecimiento de derechos (protección), la Policía de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los jueces de Familia y Municipales, el Ministerio Público, el Ministerio de Cultural y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF (república de Colombia. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, 2007c). El Sistema se encarga entonces de coordinar los esfuerzos, los programas y los proyectos de las diferentes instituciones adscritas para garantizar los derechos a los niños, niñas y adolescentes.

De igual forma en el lineamiento técnico del modelo para la atención de adolescentes y jóvenes adoptables[8] o vinculados al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, en preparación para la vida autónoma e independiente del "proyecto sueños, oportunidades para volar", expresa que "tanto en el caso de niños , niñas y adolescentes a favor de quienes se adelanta un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, como en el caso de los adolescentes declarados en adoptabilidad y los vinculado al sistema de responsabilidad para adolescentes, se evidencia una permanencia dentro de los servicios de protección, razón por la cual el ICBF se ve en la necesidad de implementar y diseñar un proyecto de vida acordes a sus necesidades y capacidades.

Allí mismo contempla como edad límite los 25 años, es decir esta iniciativa de ley será pertinente en tanto entraría en el escenario de vida de la población como una forma de que el estado siga garantizando el fortalecimiento de su identidad personal, las competencias trasversales o habilidades sociales, su capacidad de autogestión y participación y de esta manera puedan volver realidad su integración social a través de la formación académica, laboral, promoviendo el sentido de identidad, pertenencia y afiliación, con miras a su real vida autónoma e independiente. Así mismo para el caso de los jóvenes vinculados al sistema de responsabilidad penal sería seguir acompañándola implementación de su proyecto de vida y la generación de cambios satisfactorios y sostenibles, que den un nuevo sentido a su vida y que facilite la mejor y mayor interacción y convivencia con su entorno.

[8] En adelante con adoptables se entenderá que: Conforme la Ley 1098 de 2006 arts. 63, 66, 73, los niños, niñas y adolescentes son adoptables, cuando: (i) Son declarados en situación de adoptabilidad por el Defensor de Familia o por el Juez de Familia cuando el primero pierde competencia, (ii) La adopción haya sido consentida previamente por parte de quienes ejercen la patria potestad ante el Defensor de Familia y queda en firme una vez ha transcurrido el término ordenado en la ley; (iii) La adopción es autorizada por el Defensor de Familia. En casos excepcionales, se incluirán aquellos jóvenes que cumplieron su mayoría de edad estando al cuidado del ICBF en situación de vulneración de derechos o sin definición de situación jurídica y que no cuenten con referentes familiares que puedan asegurar su cuidado y apoyo. Lo anterior, con base en lo establecido por el concepto emitido por el ICBF el 20-08-2015 Radicado No. 061179.

Fundamento Legal

El artículo 51 del Código de Infancia y Adolescencia, señala que el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes es responsabilidad del Estado en su conjunto a través de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de informar, oficiar o conducir ante la autoridad competente, a todos los niños, las niñas o los adolescentes que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, debiendo asegurarse que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice su vinculación a los servicios sociales.

El artículo 51 del Código de Infancia y Adolescencia, señala que el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes es responsabilidad del Estado en su conjunto a través de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de informar, oficiar o conducir ante la autoridad competente, a todos los niños, las niñas o los adolescentes que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, debiendo asegurarse que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice su vinculación a los servicios sociales.

Fundamento Jurisprudencial

El presente proyecto de ley busca, entre otros, dar alcance a lo dispuesto por la Corte Constitucional mediante Sentencia Integradora C-586 de 2014, por medio de la cual reconoce la situación de la población objeto de la iniciativa y subsanó la omisión relativa del legislador en el sentido de otorgarle a los jóvenes que se encuentran bajo cuidado del ICBF, la exención del pago de la cuota de compensación militar y de los costos de expedición de la libreta militar.

La Corte, al realizar el análisis de exequibilidad del artículo 6° de la Ley 1184 de 2008, dispuso que:

"Los jóvenes que alcanzan su mayoría de edad bajo el cuidado y protección del ICBF conforman un grupo de población con especiales características de vulnerabilidad social y económica. Se trata de jóvenes que no han tenido la oportunidad de crecer en el seno de una familia, debido a que fueron abandonados por sus padres o a que el Estado consideró necesario retirarlos de su núcleo familiar, bien fuera porque este se constituía en un factor de vulneración o porque no ofrecía condiciones para asegurar la protección integral de sus derechos. Cuando un menor se encuentra en tales circunstancias, se da inicio a un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, a cargo del Defensor de Familia, dentro del cual es posible adoptar alguna de las medidas previstas en el artículo 53 de la Ley 1098 de 2006, entre las cuales se encuentra la Resolución de Declaratoria de Adoptabilidad, que opera en situaciones extremas en las que se considera que el único mecanismo para restablecer el derecho del menor a tener una familia es a través de su entrega en adopción. Como consecuencia de tal declaratoria, el Estado se encarga del cuidado y protección integral del menor, hasta tanto culmine con éxito el proceso de adopción o, en caso de no hallar una familia adoptante, hasta que alcance la mayoría de edad.

Así las cosas, cuando estos jóvenes cumplen los 18 años sin encontrar una familia que los adopte, se enfrentan a una situación crítica pues, además de carecer del apoyo afectivo, social y económico que proveen las redes de parentesco, se ven abocados a seguir adelante con su proyecto de vida sin contar ya con la protección de la institución estatal que hasta ese momento tenía el deber legal de acompañarlos en su proceso de crecimiento. Quedan, por tanto, en una condición de doble orfandad, en una etapa que resulta decisiva para definir el curso de sus vidas y en la cual, si bien ya no son niños, tampoco son adultos todavía. Son adolescentes y, por tanto, aún experimentan los cambios físicos, sicológicos, emocionales y sociales propios de este período de transición entre la niñez y la adultez, pero deben afrontarlos sin contar con una red de apoyo claramente definida y sin los recursos que les permitan solventar de manera autónoma las nuevas obligaciones y responsabilidades que trae consigo la mayoría de edad".

Además, respecto al alcance de otorgar la protección hasta la edad de los 25 años, en la Sentencia C-451 de 2005 la Corte Constitucional indicó que el estado de hijo dependiente por asuntos académicos no puede prolongarse indefinidamente en el tiempo, por ello: "la edad de 25 años viene a ser un criterio razonable ya que para ese momento los hijos dependientes de sus padres cuentan, por lo general, con una profesión u oficio que les permite lograr su independencia económica y proveerse su propio sustento, motivo por el cual se encuentra justificada su exclusión como beneficiarios de la sustitución pensional, pues ya no se trata de una persona en condiciones de vulnerabilidad que por lo tanto necesite medidas de protección especial".

Las condiciones de vulnerabilidad son atribuibles a la política pública de protección; sin embargo es necesario reconocer que los mismos no son homogéneos entre países y que pueden diferenciarse entre ellos. En países como el Reino Unido, se ha investigado el tema durante las últimas cinco décadas y se han realizado cambios en la política de protección como lo afirma Stein. En cambio, en países como Argentina y Colombia, el tema de protección es poco estudiado, y esto además de las condiciones de desigualdad social que existen en el contexto, hacen que la problemática de protección se vuelva más severa y la población más invisible.

Existe un análisis extenso sobre los efectos psicosociales de la política de protección pero someramente se han analizado los efectos que tiene esta situación sobre el desarrollo humano a nivel del país. Esto abre dos vacíos para nuevas investigaciones: por un lado, por la responsabilidad del Estado en la compensación de los efectos negativos que experimentan los niños y adolescentes bajo tutela estatal.

Dicho lo anterior, es claro que favorecer en estos adolescentes y jóvenes el desarrollo de competencias que les permitan optimizar sus diferentes áreas personales a la luz de la elaboración de un proyecto de vida, se convierte en un objetivo primordial del estado en el marco de sus responsabilidades. Con el objetivo de permitir que los adolescentes y jóvenes declarados en situación de vulnerabilidad bajo protección del ICBF desarrollen habilidades y competencias para salir adelante y consolidar su proyecto de vida, se deben generar estrategias y programas que, en el marco de su proceso de formación, les permita acceder a oportunidades que les permitan cumplir sus objetivos y metas de vida propuestas y construir identidad y potencializar su el liderazgo en y la toma de decisiones.

CONFLICTO DE INTERESES

Con base en el artículo 3º de la Ley 2003 de 2019, según el cual "El autor del proyecto y el ponente presentarán en el cuerpo de la exposición de motivos un acápite que describa las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, de acuerdo con el artículo 286. Estos serán criterios guías para que los otros congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de impedimento, no obstante, otras causales que el Congresista pueda encontrar".

A continuación, se pondrán de presente los criterios que la Ley 2003 de 2019 contempla para hacer el análisis frente a los posibles impedimentos que se puedan presentar en razón a un conflicto de interés en el ejercicio de la función congresional, entre ellas la legislativa.

"Artículo 1º. El artículo 286 de la Ley 5 de 1992 quedará así:

(...)

a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.

b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.

c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes circunstancias:
a) Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o de acto legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores.

b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el congresista en el futuro.

c) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan beneficios, en el cual, el congresista tiene un interés particular, actual y directo. El voto negativo no constituirá conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente.

d) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que regula un sector económico en el cual el congresista tiene un interés particular, actual y directo, siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual.

e) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo que tratan sobre los sectores económicos de quienes fueron financiadores de su campaña siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual para el congresista. El congresista deberá hacer saber por escrito que el artículo o proyecto beneficia a financiadores de su campaña. Dicha manifestación no requerirá discusión ni votación.

f) Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades referidas al parentesco con los candidatos (...)".

De lo anterior, y de manera meramente orientativa, se considera que para la discusión y aprobación de este Proyecto de Ley no existen circunstancias que pudieran dar lugar a un

eventual conflicto de interés por parte de los Honorables Congresistas, pues es una iniciativa de carácter general, impersonal y abstracta, con lo cual no se materializa una situación concreta que permita enmarcar un beneficio particular, directo ni actual. En suma, se considera que este proyecto se enmarca en lo dispuesto por el literal a del artículo primero de la Ley 2003 de 2019 sobre las hipótesis de cuando se entiende que no hay conflicto de interés.

En todo caso, es pertinente aclarar que los conflictos de interés son personales y corresponde a cada Congresista evaluarlos, pudiendo manifestar cuando considere que está inmerso en impedimento.

De los Honorables Congresistas. Cordialmente,

JHON ARLEY MURILLO BENÍTEZ
Representante a la Cámara
Partido Colombia Renaciente

ALEXANDER BERMÚDEZ LASSO
Representante a la Cámara
Departamento del Guaviare

CARLOS JULIO BONILLA SOTO
Honorable Representante a la Cámara
Departamento del Cauca.

HENRY FERNANDO CORREAL
Representante a la Cámara
Departamento del Vaupés

FABER ALBERTO MUÑOZ CERÓN
Representante a la Cámara
Partido de la U

JORGE ELIÉCER TAMAYO MARULANDA
Representante a la Cámara

JORGE ENRIQUE BENEDETTI M.
Representante a la Cámara por Bolívar

ELOY CHICHI QUINTERO ROMERO
Representante a la Cámara
Dpto Cesar

JEZMI LIZETH BARRAZA ARRAUT
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

FELIPE ANDRÉS MUÑOZ DELGADO
REPRESENTANTE A LA CÁMARA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

ANATOLIO HERNÁNDEZ LOZANO
Representante a la Cámara

JOSÉ LUIS CORREA LÓPEZ
Representante a la Cámara

MARÍA CRISTINA SOTO DE GÓMEZ
Representante a la Cámara
Partido Conservador

JAIRO REINALDO CALA SUÁREZ
Representante a la Cámara
Partido COMUNES

JAIRO HUMBERTO CRISTO CORREA
Representante a la Cámara
Departamento Norte de Santander

OMAR DE JESUS RESTREPO CORREA
Representante a la Cámara
Partido COMUNES

PROYECTO DE LEY NÚMERO 233 DE 2021 CÁMARA

por medio de la cual se adiciona un artículo y se modifica el artículo 6° de la Ley 1874 de 2017 y se dictan otras disposiciones.

Con el fin de facilitar la lectura del documento el mismo seguirá el siguiente orden:

1. Articulado
2. Objeto del Proyecto de Ley
3. Exposición de Motivos
4. Justificación del Proyecto de Ley
5. Marco Constitucional y Normativo
6. Conflicto de intereses

ARTICULADO

PROYECTO DE LEY NUMERO ____ DE 2021 CÁMARA

"Por medio de la cual se adiciona un artículo y se modifica el artículo 6 de la Ley 1874 de 2017 y se dictan otras disposiciones"

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1. Objeto. La presente ley busca garantizar la creación de los contenidos relacionados con las comunidades NARP (Negros, Afros, Raizales y Palenqueras) en la cátedra de historia, de tal forma que se garantice la construcción de una identidad nacional, con base en las raíces culturales e históricas afrocolombianas y la participación de estas, en la creación del contexto colombiano actual.

Artículo 2. Adiciónese un nuevo artículo a la Ley 1874 de 2017, que indique:

Artículo 7. La Comisión Asesora del Ministerio de Educación Nacional para la enseñanza de la Historia de Colombia, deberá incluir, como mínimo, el siguiente contenido con el fin de garantizar la visibilización de las comunidades NARP en el proceso histórico colombiano:

a) Contexto Histórico, Económico, social y geográfico de los continentes americano, europeo y Africano de la Reconquista.

b) Relaciones pluriculturales e históricas durante la conquista, la colonia y su influencia en las guerras independentistas.

c) Contemporaneidad marcada por los avances sociales y la influencia de las distintas comunidades en los acontecimientos de los siglos XX y XXI

Artículo 3. Modifíquese el parágrafo 1 del artículo 6 de la Ley 1874 del 2017, el cual quedara así:

Parágrafo 1°. Establézcase la Comisión Asesora del Ministerio de Educación Nacional para la enseñanza de la Historia de Colombia, como órgano consultivo para la construcción de los documentos que orientan el diseño curricular de todos los colegios del país. La comisión estará compuesta por un representante de las academias de Historia reconocidas en el país, un representante de las asociaciones que agrupen historiadores reconocidos y debidamente registrados en el país, un representante de facultades de educación, específicamente de las licenciaturas en ciencias sociales, docentes de cátedra de sociales con énfasis en historia y un representante de las facultades y/o departamentos que ofrecen programas de Historia en instituciones de educación superior, escogido a través de las organizaciones de universidades**,** un representante de los docentes que imparten enseñanza de las ciencias sociales en instituciones de educación básica y media, escogido a través de las organizaciones de maestros y un representante especialista en historia del pueblo afrocolombiano, escogido por la Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades Negras, el cual debe cumplir con las siguientes credenciales: (a) Que Sea historiador o profesor de Ciencias Sociales con Maestrías o Doctorado, (b) Que posea publicaciones e investigaciones académicas sobre el tema, debidamente comprobadas y justificadas.

El Gobierno nacional reglamentará la composición y funcionamiento de esta comisión en un plazo no mayor a seis (6) meses después de entrada en vigencia la presente ley.

Artículo 4. Formación docente. El Ministerio de Educación Nacional, a través de las entidades territoriales certificadas, y en articulación con los comités territoriales de formación docente, deberá diseñar e implementar programas que permitan una formación que integre los contenidos mencionados en el artículo 2 de la presente ley.

Artículo 5. Inversión para la producción de contenidos. El Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Cultura, deberán destinar fondos para facultades o departamentos universitarios de investigación histórica con enfoque afro, avaladas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación, que permitan financiar estudios e investigaciones constantes e ininterrumpidas de la historia de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y exalten la importancia para la realidad del país.

Artículo 6. Vigencia. La presente ley tiene vigencia a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables Congresistas. Atentamente,

JHON ARLEY MURILLO BENITEZ
Representante a la Cámara
Partido Colombia Renaciente

ALEXANDER BERMÚDEZ LASSO
Representante a la Cámara
Partido Liberal

CARLOS JULIO BONILLA SOTO
Honorable Representante a la Cámara
Departamento del Cauca.

HENRY FERNANDO CORREAL
Representante a la Cámara
Departamento del Vaupés

FABER ALBERTO MUÑOZ CERÓN
Representante a la Cámara
Partido de la U

JORGE ELIÉCER TAMAYO M.
Representante a la Cámara

NORMA HURTADO SÁNCHEZ
Representante a la Cámara

JORGE ENRIQUE BENEDETTI M.
Representante a la Cámara por Bolívar

JEZMI LIZETH BARRAZA ARRAUT
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

ELOY CHICHI QUINTERO ROMERO
Representante a la Cámara
Dpto Cesar

FELIPE ANDRÉS MUÑOZ DELGADO
REPRESENTANTE A LA CÁMARA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

JOSÉ LUIS CORREA LÓPEZ
Representante a la Cámara
Partido Liberal

MARÍA CRISTINA SOTO DE GÓMEZ
Representante a la Cámara

ANATOLIO HERNÁNDEZ LOZANO
Representante a la Cámara

Partido Conservador

JAIRO REINALDO CALA SUÁREZ
Representante a la Cámara
Partido COMUNES

JAIRO HUMBERTO CRISTO CORREA
Representante a la Cámara
Partido Cambio Radical

FABIÁN DÍAZ PLATA
Representante a la Cámara
Departamento de Santander

OMAR DE JESUS RESTREPO CORREA
Representante a la Cámara
Partido COMUNES

Proyecto de Ley _____ de 2021 Cámara

"Por medio de la cual se adiciona un artículo y se modifica parte del artículo 6 de la Ley 1874 de 2017 y se dictan otras disposiciones"

OBJETO Y FINALIDAD DEL PROYECTO DE LEY

El proyecto de ley busca garantizar la creación de los contenidos relacionados con las comunidades NARP (Negras Afro, Raizales y Palenqueras) en la catedra de Historia de tal forma que se garantice la construcción de una identidad nacional, con base a las raíces culturales e históricas afrocolombianas y la participación de estas, en la creación del contexto colombiano actual. Consiguiendo así que se enaltezca y promulgue la participación de la comunidad Afro siendo de conocimiento general para los compatriotas, garantizando la diversidad étnica y cultural, protegidas constitucionalmente, también en nuestra historia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

"Solo el conocimiento del pasado puede garantizar el estudio y evaluación del presente para planificar acertadamente el futuro" – PhD. Pedro González Sevillano

Desde que en Colombia se instauro la carta política actual, donde se reconoce la pluralidad del país en su primer artículo, además de proteger la diversidad de etnias y culturas de la nación en su séptimo artículo, el Estado ha intentado abarcar, de forma amplia, la integración de comunidades étnicas históricamente discriminadas, como lo son las NARP, sin lograrlo a cabalidad. Un gran ejemplo de esto es la invisibilización sistemática y casi normalizadas de las comunidades Afro en la Historia Patria, excluyéndola a tal punto de desconocer su participación en acontecimientos tales como La Batalla de Boyacá en los algunos homenajes hechos para celebrar el bicentenario del magno evento, resulta indignante el contenido y la intención de las fotografías donde el ejército colombiano le rinde homenaje a los Héroes de nuestra independencia, pero, inexplicablemente, deja por fuera a los que también entraron al campo de batalla con fuerza, con ardor y valentía, negros, mulatos y zambos, identificados peyorativamente como "ejército de las castas".

Solo unos pocos datos, entre tantos, para demostrar la participación de las comunidades NARP en nuestra Historia:

• septiembre de 1816. José de San Martín pide al Director Supremo de las Provincias Unidas de Suramérica 10.000 negros esclavos o manumitidos.

• junio 2 de 1816, Simón Bolívar, desde Carúpano, Venezuela, decreta el Primer Estatuto-Ley de Libertad para los esclavos y familias de quienes se incorporen a la guerra de independencia y los castigos para los que no atendieran el llamado.

• Julio 25 de 1819, Simón Bolívar en la Batalla del Pantano de Vargas a Juan José Rondón, "coronel, Salve usted la Patria" … y la salvó. Rondón era negro.

• febrero de 1820, Simón Bolívar le ordena a Francisco de Paula Santander el envío de 8.000 esclavos sacados de las provincias de Antioquia, Chocó y Popayán.

• diciembre 9 de 1824, Batalla de Ayacucho. 270 negros llevados por José María Córdoba desde las minas del río Andágueda, Chocó, le dieron el triunfo al Mariscal Sucre y obtuvieron reconocimiento y su libertad.

• Para la Campaña Libertadora de 1819, Alejandro Pedión, Presidente de Haití, por segunda vez, le dio a Bolívar: 7 barcos, 4.000 fusiles con bayoneta, 15.000 libras de pólvora, 15.000 libras de plomo, pedernales para fusil, víveres, dinero en efectivo y 3.500 hombres (1,500 eran negros)

De igual manera, resulta cuestionable el silencio de los eruditos frente a esta agresión a la rigurosidad histórica. El color distinto de la piel no puede ser un estigma a la hora de hacer el balance de aportes a la nacionalidad colombiana y americana.

Indudablemente, la participación de las comunidades NARP en las guerras de independencia es una realidad indiscutible, por lo cual es necesario que nuestros contenidos en las cátedras de historia de educación tengan una representación en dicha Comisión Asesora del Ministerio de educación Nacional para la enseñanza de la historia de Colombia.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY

Como se evidencia, la preocupación para la enseñanza de la cultura negra en la educación secundaria y universitaria ha sido permanente en el seno de las comunidades NARP atreves de los años y es por eso que se trae a colación datos históricos y con relevancia

ante la negación de su existencia, en cuanto a la enseñanza de la historia y la realidad de los africanos y sus descendientes en el sistema educativo, se observa que en la actualidad, no está siendo contada como debería ser y que en algunos centros de educación se continua de forma marginal, por ello es de vital importancia que no se cometan los mismos errores frente a la invisibilización de las comunidades NARP en la catedra histórica de nuestro país.

MARCO CONSTITUCIONAL Y NORMATIVO

El 27 de diciembre de 2017 mediante la Ley 1874 se establece la obligatoriedad de la catedra de historia, donde en su primer artículo establece uno de los objetivos primordiales por los cuales se toma la decisión así:

> *"Artículo 1. (…) integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales en la educación básica y media, con los siguientes objetivos:*
>
> *a) Contribuir a la formación de una identidad nacional que reconozca la diversidad étnica cultural de la Nación colombiana (…)" (Ley 1877/17 art.1)*

El texto resaltado hace referencia a la promesa de esta catedra de rescatar la diversidad étnica en el proceso histórico de Colombia, promesa que incluye por supuesto, a la comunidad afro, de la cual somos voceros. A pesar de ello, en esta misma ley, en el artículo 6 donde agregan dos parágrafos al artículo 78 de la Ley 115 de 1994, en el primero de ellos establece una comisión especial para crear los contenidos que usaran en las mallas curriculares que aseguraran la puesta en marcha de la catedra de historia así:

> *"Artículo 6: (…) Parágrafo 1°. Establézcase la Comisión Asesora del Ministerio de Educación Nacional para la enseñanza de la Historia de Colombia, como órgano consultivo para la construcción de los documentos que orientan el diseño curricular de todos los colegios del país. La comisión estará compuesta por un representante de las academias de Historia reconocidas en el país, un representante de las asociaciones que agrupen historiadores reconocidos y debidamente registrados en el país, un representante de facultades de educación, específicamente de las licenciaturas en ciencias sociales, docentes de cátedra de sociales con énfasis en historia y un representante de las facultades y/o departamentos que ofrecen programas de Historia en instituciones de educación superior, escogido a través de las organizaciones de universidades y un representante de los docentes que imparten enseñanza de las ciencias sociales en instituciones de educación básica y media, escogido a través de las organizaciones de maestros. El Gobierno nacional reglamentará la composición y funcionamiento de esta comisión en un plazo no mayor a seis meses después de entrar en vigor la presente ley (…)" (Ley 1877/17 art.6)*

El fragmento resaltado en el parágrafo, se describen las características de los integrantes de la comisión ya mencionada, y que trae en consecuencia el decreto 1660 de 2019 donde se cumplen las instrucciones en cuanto a la creación y regulación de la comisión que será agregada al artículo 2 de la Ley 1015 de 2015 así:

> *"ARTÍCULO 2. Integrantes. La Comisión Asesora estará conformada por los siguientes miembros:*
>
> *1. Un (1) representante de las academias de Historia reconocidas en el país.*
>
> *2. Un (1) representante de las asociaciones que agrupen historiadores reconocidos y debidamente registrados en el país.*
>
> *3. Un (1) representante de facultades de educación, específicamente de las licenciaturas en ciencias sociales, docentes de cátedra de sociales con énfasis en historia.*
>
> *4. Un (1) representante de las facultades y/o departamentos que ofrecen programas de historia en instituciones de educación superior, escogido a través de las organizaciones de universidades.*
>
> *5. Un (1) representante de los docentes que imparten enseñanza de las ciencias sociales en instituciones de educación básica y media, escogido a través de las organizaciones de maestros. El docente escogido deberá cumplir las siguientes características:*
>
> *a. Ejercer el cargo de docente de aula en el sector oficial con derechos de carrera.*
>
> *b. Haber desempeñado el cargo docente en el área de Ciencias Sociales durante los últimos tres (3) años de servicio contados a partir la fecha de la primera posesión.*
>
> *c. Poseer alguno de los siguientes títulos académicos de pregrado:*
>
> *- Licenciatura en Ciencias Sociales (solo o con otra opción o con énfasis).*
>
> *- Licenciatura en Historia (solo, con otra opción o con énfasis).*
>
> *- Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales (solo o con otra opción)*
>
> *- Licenciatura en Educación con énfasis en Ciencias Sociales (solo o con otra opción)*
>
> *- Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Ciencias Sociales (solo o con otra opción)*

- Licenciatura en Etnoeducación con especialidad en Ciencias Sociales Licenciatura en etnoeducación para Básica con énfasis en Ciencias Sociales y Cultura.

d. Poseer título de maestría o doctorado en áreas afines a su título profesional o al

área de Ciencias Sociales.

e. Certificar participación en proyectos de investigación educativa en el campo de la enseñanza de las ciencias sociales, y/o contar con publicaciones en revistas indexadas con temas relacionados con ciencias sociales, enseñanza de la historia y/o el objeto de la Ley 1874 de 2017, en los últimos tres (3) años.

6. Un (1) representante del Ministerio de Educación Nacional, designado por el Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media (…)" (Decreto 1660/19 art.2)

El texto resaltado describe los criterios de selección de forma más detalladas que lo dicho en el parágrafo que se agregó al artículo 78 de la Ley 115 de 1994. Como se puede constatar en ninguna de las 2 regulaciones revisadas se incluyen expertos en historia de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, lo cual causa que la participación de dichas comunidades se vea pasada por alto en la historia y no se cumplan el objetivo planteado en la Ley 1874 del 2017.

CONFLICTO DE INTERESES

Con base en el artículo 3º de la Ley 2003 de 2019, según el cual "El autor del proyecto y el ponente presentarán en el cuerpo de la exposición de motivos un acápite que describa las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, de acuerdo con el artículo 286. Estos serán criterios guías para que los otros congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de impedimento, no obstante, otras causales que el Congresista pueda encontrar".

A continuación, se pondrán de presente los criterios que la Ley 2003 de 2019 contempla para hacer el análisis frente a los posibles impedimentos que se puedan presentar en razón a un conflicto de interés en el ejercicio de la función congresional, entre ellas la legislativa.

"Artículo 1º. El artículo 286 de la Ley 5 de 1992 quedará así:

(…)

a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.

b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.

c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes circunstancias:

a) Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o de acto legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores.

b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el congresista en el futuro.

c) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan beneficios, en el cual, el congresista tiene un interés particular, actual y directo. El voto negativo no constituirá conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente.

d) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que regula un sector económico en el cual el congresista tiene un interés particular, actual y directo, siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual.

e) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo que tratan sobre los sectores económicos de quienes fueron financiadores de su campaña siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual para el congresista. El congresista deberá hacer saber por escrito que el artículo o proyecto beneficia a financiadores de su campaña. Dicha manifestación no requerirá discusión ni votación.

f) Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades referidas al parentesco con los candidatos (...)".

De lo anterior, y de manera meramente orientativa, se considera que para la discusión y aprobación de este Proyecto de Ley no existen circunstancias que pudieran dar lugar a un eventual conflicto de interés por parte de los Honorables Congresistas, pues es una iniciativa de carácter general, impersonal y abstracta, con lo cual no se materializa una situación concreta que permita enmarcar un beneficio particular, directo ni actual. En suma, se considera que este proyecto se enmarca en lo dispuesto por el literal a del artículo primero de la Ley 2003 de 2019 sobre las hipótesis de cuando se entiende que no hay conflicto de interés.

En todo caso, es pertinente aclarar que los conflictos de interés son personales y corresponde a cada Congresista evaluarlos, pudiendo manifestar cuando considere que está inmerso en impedimento.

De los Honorables Congresistas. Cordialmente,

JHON ARLEY MURILLO BENITEZ
Representante a la Cámara
Partido Colombia Renaciente

ALEXANDER BERMÚDEZ LASSO
Representante a la Cámara
Partido Liberal

CARLOS JULIO BONILLA SOTO
Honorable Representante a la Cámara
Departamento del Cauca.

HENRY FERNANDO CORREAL
Representante a la Cámara
Departamento del Vaupés

FABER ALBERTO MUÑOZ CERÓN
Representante a la Cámara
Partido de la U

JORGE ELIÉCER TAMAYO M.
Representante a la Cámara

NORMA HURTADO SÁNCHEZ
Representante a la Cámara

JORGE ENRIQUE BENEDETTI M.
Representante a la Cámara por Bolívar

JEZMI LIZETH BARRAZA ARRAUT
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

ELOY CHICHI QUINTERO ROMERO
Representante a la Cámara
Dpto Cesar

FELIPE ANDRÉS MUÑOZ DELGADO
REPRESENTANTE A LA CÁMARA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

JOSÉ LUIS CORREA LÓPEZ
Representante a la Cámara
Partido Liberal

MARÍA CRISTINA SOTO DE GÓMEZ
Representante a la Cámara
Partido Conservador

ANATOLIO HERNÁNDEZ LOZANO
Representante a la Cámara

JAIRO REINALDO CALA SUÁREZ
Representante a la Cámara
Partido COMUNES

JAIRO HUMBERTO CRISTO CORREA
Representante a la Cámara
Partido Cambio Radical

FABIÁN DÍAZ PLATA
Representante a la Cámara
Departamento de Santander

OMAR DE JESUS RESTREPO CORREA
Representante a la Cámara
Partido COMUNES

PROYECTO DE LEY NÚMERO 234 DE 2021 CÁMARA

por medio de la cual se reglamenta la participación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger y garantizar el derecho a la salud de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras existentes en el territorio nacional, mediante el reconocimiento y salvaguarda de su integridad cultural y de sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales; de conformidad con lo establecido en la Constitución Política, en los Tratados Internacionales y las demás leyes relativas a dichas comunidades.

Artículo 2. Aplicación. La presente ley garantiza el derecho de acceso y participación de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, en el sistema general de seguridad social en salud y en los servicios de salud, en condiciones dignas y apropiadas, observando el debido respeto y protección a la diversidad étnica y cultural de la Nación.

Artículo 3. Principios. Para la interpretación y aplicación de la presente ley, además de los principios generales consagrados en la Constitución Política, son aplicables los siguientes principios

Principio de diversidad étnica y cultural: el sistema practicará la observancia y el respeto al estilo de vida de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y tomará en consideración sus especificidades culturales, sociales, geográficas y ambientales.

Principio de identidad cultural: deberá reconocerse y respetarse las diferencias culturales propias de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; y en razón de ello, el Estado deberá propender por el mantenimiento de sus costumbres, prácticas tradicionales, medicina tradicional y demás expresiones de su cultura.

Principio de autodeterminación: deberá garantizarse a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras su derecho a escoger su propio devenir y a determinar libremente su desarrollo social y cultural.

Principio de autonomía: el Estado deberá reconocer el derecho de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras a regirse según sus costumbres y tradiciones, bajo el marco de lo establecido en la Constitución y las leyes.

Principio de participación: se promoverá la participación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en los aspectos económicos, políticos, administrativos, culturales y sociales del país.

Principio de enfoque diferencial: deberá reconocerse la existencia de las características particulares de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, ante lo cual el Estado deberá ofrecer especiales garantías y esfuerzos encaminados a la eliminación de las situaciones de discriminación y marginación de dichas comunidades.

Artículo 4. El gobierno nacional, dentro de un plazo máximo de un (1) año contado a partir de la promulgación de la presente ley, deberá reglamentar y garantizar el derecho de acceso y la participación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombia, con observancia de la protección a la diversidad e integridad cultural y autonomía de dicha población.

En razón de ello, deberá reglamentar la forma de operación, financiamiento, funcionamiento y control de un Sistema de Seguridad Social en Salud especial aplicable a la población negra, afro, raizal y palenquera del país, organizado y prestado a nivel comunitario bajo su propia responsabilidad y control, que atienda sus condiciones sociales, económicas, geográficas, y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

Parágrafo 1. Dentro del proceso de reglamentación señalado en el presente artículo deberá realizarse el respectivo proceso de concertación y retroalimentación con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Parágrafo2. Dentro de este Sistema Especial de Seguridad Social en Salud las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras podrán asociarse con privados a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de habilitación que defina la normatividad.

Artículo 5. El Ministerio de Salud y Protección Social, dentro de la política pública de salud, garantizará el ejercicio del derecho de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras a gozar de un sistema de salud especial y a participar en el Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombia, con observancia de la protección a su diversidad, integridad cultural y autonomía.

Artículo 6. Vigencia. Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

De los Honorables Congresistas. Atentamente,

JHON ARLEY MURILLO BENITEZ
Representante a la Cámara
Partido Colombia Renaciente

ALEXANDER BERMÚDEZ LASSO
Representante a la Cámara
Partido Liberal

FABER ALBERTO MUÑOZ CERÓN
Representante a la Cámara
Partido de la U

HENRY FERNANDO CORREAL
Representante a la Cámara
Partido Liberal

JORGE ELIÉCER TAMAYO MARULANDA
Representante a la Cámara

JORGE ENRIQUE BENEDETTI M.
Representante a la Cámara por Bolívar

ELOY CHICHI QUINTERO ROMERO
Representante a la Cámara
Dpto Cesar

FELIPE ANDRÉS MUÑOZ DELGADO
REPRESENTANTE A LA CÁMARA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

ANATOLIO HERNÁNDEZ LOZANO
Representante a la Cámara

MARÍA CRISTINA SOTO DE GÓMEZ
Representante a la Cámara
Partido Conservador

JAIRO REINALDO CALA SUÁREZ
Representante a la Cámara
Partido COMUNES

JAIRO HUMBERTO CRISTO CORREA
Representante a la Cámara
Partido Cambio Radical

OMAR DE JESUS RESTREPO CORREA
Representante a la Cámara
Partido COMUNES

Proyecto de Ley _____ de 2021 Cámara
"Por medio de la cual se reglamenta la participación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia"

2. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY

El presente proyecto de ley busca reglamentar la participación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del país en el sistema general de seguridad social, las cuales han sido reconocidas legal y jurisprudencialmente como minoría étnica y por ende son sujetos de especial protección.

3. CONSIDERACIONES GENERALES

La Organización Internacional del Trabajo, define a los pueblos tribales como *"los pueblos en países independientes que se distingan por sus condiciones sociales, culturales y económicas de otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial"*. En igual sentido, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia define a los grupos étnicos como *"poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas, los distinguen del resto de la sociedad y que han mantenido su identidad a lo largo de la historia, como sujetos colectivos que aducen un origen, una historia y unas características culturales propias, que están dadas en sus cosmovisiones, costumbres y tradiciones"*; y reconoce como grupos étnicos, entre otros, a los indígenas y a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del país.

Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras a lo largo de la historia han sido puestas en condiciones de marginalidad y han vivido el desconocimiento de sus derechos, lo que en la actualidad se ha hecho más notorio con la invisibilización de que son víctimas y la situación de pobreza que viven; *"aproximadamente el 85% de la población afrocolombiana vive en condiciones de pobreza y marginalidad, sin acceso a todos los servicios públicos básicos"*[1]. Sumado a esto, la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera tiene un precario acceso a los servicios de salud, pudiendo acceder a estos tan sólo un poco más de la mitad de la población, adicional a que en zonas como el Pacífico colombiano se cuenta con hospitales que no tienen las condiciones de salubridad correspondientes, los equipos técnicos ni el talento humano necesario para garantizar la prestación adecuada del servicio, así como demora en el pago de salarios u honorarios a los trabajadores del sector salud, que puede ser de más de 2 meses; lo que hace aún más

[1] Informe del Movimiento Nacional Afrocolombiano CIMARRON sobre la situación de derechos humanos de la población afrocolombiana (1994-2004)

grave la situación. *"En el Pacífico la baja calidad de vida de las personas afecta gravemente la salud, producto de la conjugación de múltiples problemas; como el hecho de no tener servicio de agua potable, falta de saneamiento ambiental sumado a que la calidad de atención en salud no es adecuada para algunos grupos de personas. La mayoría de la población afrocolombiana se encuentra localizada en las zonas marginales y relegadas de los beneficios del desarrollo. A todo esto se suma el gran impacto del desplazamiento forzado, que ha afectado particularmente a las comunidades negras asentadas en los territorios colectivos. En términos generales el panorama se agrava porque en los diferentes sectores de la región pacífica se presenta: 1. Incapacidad para identificar los enfermos (búsqueda y diagnóstico); 2. Incapacidad para incluirlos bajo tratamiento, una vez identificados (registro, información y notificación); y 3. Incapacidad para mantenerlos bajo tratamiento, una vez incluidos (no adherencia). En estas poblaciones se presenta una morbilidad dada por el embarazo incidental, hipertensión esencial, infecciones virales o intestinales, parasitosis, diabetes mellitus, entre otras. De igual modo son frecuentes los problemas de desnutrición, Enfermedad Diarreica Aguda EDA e Infección Respiratoria Aguda IRA, enfermedades prevenibles que por lo general afectan a niños, adolescentes y adultos mayores."*[2]

A lo largo del tiempo, la Organización Internacional del Trabajo ha brindado especial atención a los pueblos tribales, al reconocer que ellos se encuentran en condiciones socioeconómicas y laborales más difíciles que el resto de la población, con motivo, principalmente, a la discriminación generada a causa de su étnia o raza. Esta atención especial de la OIT se ha reflejado en sus acciones y en la adopción de distintos instrumentos orientados a la protección de dichos pueblos; ejemplo de ello es el Convenio 169 sobre Pueblos indígenas y tribales, adoptado el 20 de julio de 1989, que surgió a partir de la necesidad de atender la situación presentada en muchos países en relación con que estos pueblos no gozaban de los derechos en iguales condiciones y niveles que la otra parte de la población y que en consecuencia, estaban viendo un detrimento en sus condiciones de vida y costumbres.

El Convenio 169 tiene dos postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas y tribales a mantener y fortalecer sus creencias, costumbres, identidades, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afecten. Dicho Convenio fue ratificado por Colombia a través de la Ley 21 de 1991, motivo por el que el país adquirió el deber de adecuar la legislación nacional a lo contemplado en él y a realizar las acciones pertinentes para ello; adicional al compromiso de informar periódicamente a los órganos de control de la OIT sobre la aplicación en la legislación y en la práctica de lo allí dispuesto.

En el literal a del artículo 1° del Convenio 169 de la OIT se establece que el mismo aplica *"a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial."* (…) *"La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio"*.

De tal modo que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, tanto constitucional como legal (primordialmente con la Ley 70 de 1993) y jurisprudencialmente han sido reconocidas como grupo étnico culturalmente diverso, con identidad propia y destinatarias de normas constitucionales, nacionales e internacionales que salvaguardan su diversidad étnica y cultural; en tal sentido, es que precisamente a través de la Ley 70 de 1993 se establecieron mecanismos para proteger la identidad cultural de las comunidades afro del país, así como garantizarles derechos especiales y beneficios basados en su carácter de minorías étnicas[3]; en su artículo 2, numeral 5, la ley define a la población negra como *"el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos"*.

Y es que precisamente mediante dicha ley se desarrolló el artículo transitorio 55 de la Constitución Política, que indicaba, entre otras cosas, que *"Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico (…)* <u>*La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades*</u>*, y para el fomento de su desarrollo económico y social"*; con lo cual queda en evidencia el reconocimiento constitucional que se hizo a las comunidades negras, afrocolombianas raizales y palenqueras del país y ante lo cual queda claro que estas comunidades se encuentran en igualdad de condiciones en relación con los pueblos indígenas, en términos del reconocimiento de su diversidad y de la protección de sus derechos culturales.

Adicionalmente, en el artículo 2° del Convenio 169 de la OIT se indica que *" Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad"* y que *"Esta acción deberá incluir medidas: a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población"*. Lo cual es reforzado con lo señalado en el artículo 3 del mismo: *"Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades*

[2] Revista Cuidarte. Artículo *"POR UN FUTURO MEJOR: PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA AFRODESCENDIENTES"*

[3] Artículo 1 Ley 70 de 1993. *"(…) Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana."*

fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos."

Específicamente en referencia a la seguridad social, el Convenio en su artículo 24 establece que los regímenes de seguridad social deberán aplicarse sin ningún tipo de discriminación; y en su artículo 25 señala que el gobierno deberá poner a disposición de los pueblos tribales los servicios de salud adecuados o proporcionarles los medios que les permitan organizar y prestar dichos servicios bajo su propia responsabilidad y control y que tengan en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

En el mismo sentido, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, interpretado por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su Observación General No. 14, indicó que los servicios de salud deben ser *"apropiados desde el punto de vista cultural"*, es decir, que deben tener en cuenta *"los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales"* de los pueblos indígenas y tribales; para el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, es esencial que para poder llevar a cabo esto, las comunidades étnicas se *"establezcan, organicen y controlen los servicios de suerte que puedan disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental"*.

Conforme a lo anterior y como quiera que en Colombia, además de los pueblos indígenas, se ha reconocido a los NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES y PALENQUEROS como grupo étnico culturalmente diverso, por el legislador (especialmente a través de la Ley 70 de 1993) y por la comunidad internacional (en particular a través del Convenio 169 de la OIT), es claro que ellos, así como los indígenas (Ley 691 de 2001), también tienen el derecho a tener un sistema de seguridad social en salud organizado y controlado por ellos mismos, que esté organizado a nivel comunitario, en la medida que se pueda, y que sea adecuado a sus circunstancias socio - económicas, geográficas y culturales. Y es que en concordancia con ello, la Ley 70 de 1993 en su artículo 37, indica la obligación del Estado de tomar las acciones y medidas necesarias para garantizar a las comunidades negras el conocimiento de sus derechos y obligaciones, en especial lo relacionado con el trabajo, las posibilidades económicas, la educación y LA SALUD.

Al respecto la Corte Constitucional ha indicado que existen ciertas condiciones que determinan si se trata o no de un grupo culturalmente diverso o etnocultural, sujeto de especial protección constitucional, dentro de las cuales se encuentran: que tengan un elemento objetivo (relacionado con la existencia de rasgos culturales y sociales compartidos por los miembros del grupo y que los diferencian de los demás grupos o sectores sociales) y que tengan un elemento subjetivo (relacionado con la existencia de una identidad grupal que lleve a los individuos a asumirse como parte del grupo). De tal forma que, para la Corte la diversidad sociocultural no es exclusiva de los pueblos indígenas, pues reconoce que en Colombia hay otras comunidades que tienen una cultura propia y que en consecuencia deben ser protegidas, por cuanto la Constitución Política consagra el deber de proteger la identidad y diversidad de todos los grupos culturales, y no sólo la de los indígenas; reconociendo así derechos étnicos, culturales, territoriales y políticos a los distintos grupos étnicos existentes en el país, dentro de los cuales destacan el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de los resguardos indígenas y de los territorios colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas raizales y palenqueras del país, así como el derecho a ser consultados y a participar en las decisiones que puedan afectarlos.

Así mismo, la Corte Constitucional ha manifestado que el derecho a la igualdad implica que las autoridades públicas deban brindar un trato igual a los destinatarios que se encuentren en situaciones o circunstancias iguales o equivalentes y un trato desigual a los destinatarios que se encuentren en situaciones o circunstancias dispares; así las cosas, como quiera que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, desde el punto de vista de la diversidad étnica y cultural, se encuentran en iguales situaciones fácticas, normativas, prácticas y culturales que los pueblos indígenas, por cuanto ambas son minorías étnicas y están en condición de marginalidad a nivel social y económico, tienen derecho a que les sean reconocidos los mismos beneficios y garantías que les sean al otro.

La Corte Constitucional, en múltiples pronunciamientos, ha señalado que dentro del territorio nacional, existen distintos grupos con condiciones culturalmente diversas ("comunidades etno - culturales") y que son sujetos de especial protección constitucional. Ejemplo de ello es la Sentencia T 1130 de 2003, en la cual establece una serie de criterios para calificar la existencia de un grupo etno-cultural no indígena como comunidad de especial protección: *"sus miembros (i) tienen un vínculo comunitario establecido desde el nacimiento y que, salvo su libre abandono o renuncia, termina con la muerte, (ii) tienen una relación con su comunidad que no se limita a determinados aspectos puntuales y específicos, sino que cubre un "entero plexo de interacciones en cuanto que se hace partícipe en una forma definida de vida"*; para la Corte, dichas condiciones no son sólo aplicables a las minorías indígenas sino que también lo son para la generalidad de comunidades diversas, cobrando así la calidad de requisitos para el reconocimiento de la autodeterminación de la minoría diferenciada y la posterior adscripción de derechos especiales. Una vez cumplidas estas condiciones nace para estas comunidades un doble sentido de pertenencia: son nacionales, porque tienen la calidad de colombianos, siendo así titulares de los derechos, garantías y deberes consagrados en la Constitución Nacional; y tienen vínculo comunitario, que les permite desarrollarse dentro de un marco diferenciado.

En igual sentido, la Corte en Sentencia C 169 de 2001 manifestó que *"las comunidades negras (…) ha sido reconocido por el legislador como un grupo étnico especial. En efecto, tanto la Ley 70 de 1.993 (que desarrolla el artículo Transitorio 55 de la Carta), como la Ley 99 del mismo año (sobre protección del medio ambiente), así como la Ley 199 de 1.995 (que organiza el Ministerio del Interior), parten de tal reconocimiento para otorgar una serie de derechos a las mencionadas colectividades, definidas en el artículo 2-5 de la Ley 70/93. Este reconocimiento genera, como consecuencia inmediata, el que las comunidades negras adquieran la titularidad de derechos colectivos similares a los de las comunidades indígenas, con las diferencias impuestas por sus especificidades culturales y su régimen legal propio. Lo que es más importante, se hacen acreedores a los derechos que consagra el Convenio 169 de la O.I.T"*. En este pronunciamiento, también procedió a fijar unos criterios para determinar qué comunidades negras podrían considerarse como grupos étnicos sujetos de especial protección constitucional: *"(…) la norma internacional en comento hace referencia a dos requisitos que deben concurrir a la hora de establecer quiénes se pueden considerar como sus beneficiarios: (i) Un elemento "objetivo", a saber, la existencia de rasgos culturales y sociales compartidos por los miembros del grupo, que les diferencien de los demás sectores sociales, y (ii) un elemento "subjetivo", esto es, la existencia de una identidad grupal que lleve a los individuos a asumirse como miembros de la colectividad en cuestión. De la definición legal que consagra el artículo 2-5 de la Ley 70/93, se desprende que las comunidades negras cumplen con esta doble condición, y por ende se ubican bajo el supuesto normativo del Convenio mencionado.*"

De tal manera, la Corte Constitucional hace evidente el reconocimiento jurídico que se ha hecho a la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera a partir de las condiciones compartidas de existencia y de identidad colectiva: *"Debe anotarse, eso sí, que el reconocimiento de derechos especiales a las comunidades negras no se hace en función de su "raza", puesto que ello implicaría presuponer que, en un país con un grado tan alto de mestizaje como lo es Colombia, existen aún "razas puras", lo cual es a todas luces inaceptable (…) Por ese motivo, debe quedar claro que los derechos colectivos de las comunidades negras en Colombia son una función de su status en tanto grupo étnico, portador de una identidad propia que es digna de ser protegida y realzada, y no del color de la piel de sus integrantes"*. En razón de ello, *"el término "comunidades negras", como lo indica el artículo 1 de la Ley 70 de 1.993 en consonancia con el artículo Transitorio 55 de la Constitución, se refiere tanto a aquellas que habitan en la Cuenca del Pacífico colombiano, como a las que estén ubicadas en otros puntos del territorio nacional y cumplan con los dos elementos reseñados"*.

"Desde esta perspectiva puede afirmarse que el legislador consideró que el proceso al que se hace referencia propició procesos concomitantes de búsqueda de libertad y dio lugar a construcciones propias y experiencias individuales, familiares y colectivas acompañadas por "un sentimiento y percepción del territorio como algo singular y propio", que prefigura el elemento "peculiar y central" de los grupos negros del pacífico colombiano, que constituirá con el tiempo su denominada "etnicidad territorializada".

Así pues, queda en evidencia que la jurisprudencia de la Corte ha reconocido la existencia fáctica y la organización jurídica especial de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras entendiéndolas como grupos étnicos sujetos de especial protección, ubicadas en zonas geográficas reconocidas como de propiedad colectiva y con un mecanismo legal de representación jurídica como grupo; y en consecuencia, ha reconocido que la obligación constitucional del legislador, derivada de los artículos 1 y 25 del Convenio 169, no se restringe por tanto a establecer un sistema de salud especial sólo para los pueblos indígenas sino que también aplica a los demás pueblos tribales existentes en el territorio, como lo es la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.

Por otro lado, en el "Plan Nacional Integral de Largo Plazo para la Población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal 2006 – 2019", se concluyó que las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas están en la misma situación en temas de salud, con motivo a sus mismas condiciones de pobreza que les impide acceder de manera efectiva al Sistema de Seguridad Social en Salud. De esta forma, dada la situación de marginalidad y discriminación que ha afrontado la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, dicha población goza de una especial protección por parte del Estado, lo que justifica que le sean reconocidas medidas especiales para su protección, al igual que sucede con la población indígena; y es que tanto los indígenas como los afrodescendientes requieren el acceso a planes y programas de salud que tengan en cuenta y respeten la particularidad de sus prácticas y tradiciones, así como su identidad e integridad cultural y social, en la medida que los conocimientos y prácticas de medicina tradicional son una expresión de estas, por lo que su protección, mantenimiento y fortalecimiento favorecen su preservación. Del mismo modo, es importante que dentro de dichos planes y programas, y en general en el sistema de salud, se garantice la participación tanto de una como de otra población en la prestación, administración, toma de decisiones y control de los servicios de salud que les sean suministrados.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se evidencia la necesidad de dar aplicación de un sistema de seguridad social en salud especial para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del país, teniendo como fundamento principalmente las siguientes razones:

a) Los miembros de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras se encuentran en condiciones socio económicas muy inferiores respecto a las de los demás miembros de la sociedad, lo que se ve reflejado, entre otros, en la baja calidad de sus viviendas, el no cubrimiento de sus necesidades básicas, sus precarias condiciones de vida, la dificultad de cobertura y acceso a los servicios públicos y por supuesto, la dificultad de acceso al sistema de seguridad social en salud, causada principalmente por no contar con la capacidad de pago de sumas requeridas para poder acceder a los servicios de salud (cuotas moderadoras, copagos, etc.)

b) Los miembros de grupos afrocolombianos tienen estructuradas comunidades o colectivos tradicionales (consejos comunitarios).

Los consejos comunitarios se constituyen como una persona jurídica que ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y la normas que regulan los temas relacionados con el sistema de derecho propio de cada comunidad[4].

c) Es esencial la implementación de una UPC diferencial aplicable para la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera por cuanto ésta se encuentra ubicada en zonas geográficas de mayor siniestralidad, apartadas y/o de difícil acceso, razón por la que es necesario reconocer este tipo de prima adicional; dicha UPC diferencial también atendería las particularidades culturales y epidemiológicas propias de la población. De acuerdo con el Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, del Ministerio de Salud y Protección Social,

[4] DECRETO 1745 DE 1995. *"Por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las "Tierras de las Comunidades Negras" y se dictan otras disposiciones"*.

el censo de 2005 mostró que la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera se encuentra mayormente concentrada (70%) en las zonas costeras del país.

En conclusión, es notoria la necesidad de aplicar un sistema de seguridad social en salud para la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera desde un enfoque diferencial, tal y como se ha venido haciendo con la comunidad indígena; basado en la diversidad étnica y cultural, reconocida y protegida por la Constitución y la normas y regulaciones nacionales e internacionales (acogidas por Colombia) y desde la cual se respeten y reconozcan sus particularidades (lo tradicional, lo medicinal, sus prácticas, sus hábitos, sus experiencias y sus comportamientos). Permitiendo a su vez la conservación y trasferencia de saberes y tradiciones a sus generaciones y el empoderamiento de la población afro del país en la participación y toma de decisiones respecto a sus condiciones de vida y bienestar, especialmente en lo relacionado con su acceso a los servicios de salud.

El presente proyecto de ley busca precisamente esto, a través de la reglamentación de la participación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el Sistema General de Seguridad Social en Colombia.

4. MARCO CONSTITUCIONAL, NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

CONSTITUCIONAL:

Artículo 1 Constitución Política.

"Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general."

Artículo 7 Constitución Política.
"El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana."

Artículo 8 Constitución Política.

"Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación."

Artículo 13 Constitución Política.

"Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan."

Artículo 70 Constitución Política.

"El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación."

Artículo 85 Constitución Política.

"Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y 40."

LEGAL:

Ley 70 de 1993.

"Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política".

Ley 21 de 1991.

"Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989".

Ley 22 de 1981.

"Por medio de la cual se aprueba La Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidad en Resolución 2106 del 21 de diciembre de 1965 y abierta a la firma el 7 de marzo de 1966.

Convenio 169 de la OIT.

"Sobre pueblos indígenas y tribales".

Conpes 3169 de 2002

"Política para la población afrocolombiana".

JURISPRUDENCIAL

SENTENCIA C 864 DE 2008

El 03 de septiembre de 2008 la Sala Plena de la Corte Constitucional profirió la sentencia referida, por medio de la cual estudió y resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 691 de 2001 *"mediante la cual se reglamenta la participación de los Grupos Étnicos en el sistema General de Seguridad Social en Colombia."*, fundada en el presunto desconocimiento del derecho a la igualdad, identidad e integridad cultural de las comunidades afrodescendientes, negras, palanqueras y raizales, al ser excluidos de los beneficios especiales de acceso y participación en el sistema general de salud que se concedieron a través de dicha ley.

En dicha sentencia, la Corte señala, entre otros aspectos, que *"(…) Así pues, es claro que aparte de las comunidades indígenas, la propia Constitución reconoce la existencia de otros "grupos étnicos" a los cuales dispensa especial protección constitucional.*

6.1.2 En el caso concreto de las comunidades negras, el constituyente (i) las reconoció de manera particular, (ii) señaló además algunas de las zonas dónde están asentadas algunas de estas comunidades dentro del territorio nacional, admitiendo que podían existir "otras zonas del país que presenten similares condiciones" y (iii) protegió sus derechos a la identidad cultural y a la propiedad colectiva de la tierra. (…)

Es claro entonces que ***al igual que los pueblos indígenas, los otros grupos étnicos*** *que menciona la Constitución Política y aquellos más que respondan a la definición de "pueblos tribales" dada en el artículo 1° del Convenio 169 de la OIT,* ***tienen un derecho de rango constitucional a un sistema de seguridad social en salud que (i) "les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control", (ii) en la medida de lo posible esté organizado a "nivel comunitario", y (iii) sea adecuado a sus circunstancias "económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.***

(…) De la definición legal que consagra el artículo 2-5 de la Ley 70/93, se desprende que las comunidades negras cumplen con esta doble condición, y por ende se ubican bajo el supuesto normativo del Convenio mencionado. Esta definición, así como el establecimiento de un régimen especial de protección de la cultura e identidad de tales comunidades, constituyen tan sólo el reconocimiento jurídico de un proceso social que ha cobrado fuerza en años recientes, y que es ampliamente observable en varias regiones del país, a saber, la consolidación de un grupo poblacional que se autodenomina "negro", a partir de distintos tipos de organizaciones locales que, partiendo de la base de unas condiciones compartidas de existencia y de una creciente identidad colectiva, han resuelto darse a la tarea de promover mancomunadamente la defensa de sus intereses, históricamente desconocidos, cuando no vulnerados frontalmente, por la sociedad mayoritaria. Se trata, así, de un actor social emergente, no en el sentido de ser un fenómeno exclusivo de esta época -puesto que las comunidades negras se comenzaron a configurar desde los primeros tiempos de la esclavitud en nuestro país, cuando se establecieron los "palenques", pueblos de esclavos fugitivos o "cimarrones", y se sentaron las bases para lo que hoy aparece como una cultura propia-, sino en cuanto se trata de un grupo que sólo en las últimas décadas ha podido asumir la tarea de organizarse más allá del ámbito local o regional.

(…) Por último, es conveniente puntualizar que, para los efectos del proyecto bajo revisión, el ***término "comunidades negras",*** *como lo indica el artículo 1 de la Ley 70 de 1.993 en consonancia con el artículo Transitorio 55 de la Constitución,* ***se refiere tanto a aquellas que habitan en la Cuenca del Pacífico colombiano, como a las que estén ubicadas en otros puntos del territorio nacional y cumplan con los dos elementos reseñados.*** *Asimismo, a falta de una mención expresa, se deben entender incluidas dentro de las dichas "comunidades negras", para todo lo relacionado con la circunscripción especial que se estudia, a las agrupaciones raizales del Archipiélago de San Andrés y Providencia, las cuales no sólo comparten con las primeras un origen histórico común en las raíces africanas que fueron trasplantadas a América, sino que han sido reconocidas por esta corporación, en consonancia con el artículo 310 de la Carta, como un grupo étnico titular de derechos especiales (cfr. sentencias C-530/93, T-174/98 y C-1022/99, M.P. Alejandro Martínez Caballero).*

(…) Así pues, es claro que la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido la existencia fáctica y la organización jurídica especial de las comunidades negras del Pacífico colombiano, entendidas como grupos étnicos sujetos de especial protección, ubicadas en zonas geográficas reconocidas como de propiedad colectiva de estos grupos, que además tienen establecido un mecanismo legal de representación jurídica como grupo, que no desconoce "la noción de colectividad que les es propia, es decir aquélla conectada con "el tronco cuya cabeza visible se identifica con un antepasado" . Además, este reconocimiento no se restringe a las comunidades negras del litoral Pacífico, sino que se extiende a otras que estén ubicadas en otros puntos del territorio nacional, siempre que cumplan con los dos elementos reseñados por la jurisprudencia para ser consideradas como grupos étnicos, es decir el elemento objetivo y el subjetivo antes comentado.

A juicio de la Corte, del anterior estudio de las normas constitucionales y su desarrollo legal, de la jurisprudencia constitucional, de las observaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y de la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional, se desprende con toda nitidez que, además de los pueblos indígenas, ***existen en Colombia como realidad fáctica otras comunidades o grupos étnicos*** *que responden a la definición dada en el literal a) del artículo 1° del Convenio 169 de la OIT ,* ***y que en tal virtud tienen el derecho a que se refiere el artículo 25 de dicho Convenio, que ordena que se pongan a su disposición servicios de salud adecuados, que puedan ser organizados y prestados a nivel comunitario bajo su propia responsabilidad y control, y que tengan en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.***

(…) Por todo lo anterior, la Corte concluye que ***la obligación constitucional del legislador, derivada de lo dispuesto en los artículos 1° y 25 del tantas veces citado Convenio 169, no se restringía a establecer un sistema de salud especial para los pueblos indígenas, sino que se hacía extensivo a todos los demás pueblos tribales existentes en el territorio nacional****, entre los cuales se encuentran aquellos que se acaban de mencionar.*

Así las cosas, la obligación del legislador era establecer un sistema de salud especial para los pueblos indígenas y también para los demás grupos étnicos existentes en el país, que puedan quedar cobijados por la definición de pueblos tribales contenida en el artículo 1° del convenio 169 de la OIT.

(…) ***El Convenio 169 de la OIT, por formar parte del llamado "bloque de constitucionalidad", impone al legislador una obligación de diseñar un sistema de salud especial, no sólo para los pueblos indígenas, sino también para los demás grupos étnicos que puedan existir en el país.***

(…) La Ley 691 de 2001 diseña un Sistema de Salud Especial exclusivamente para los pueblos indígenas.

d. ***Por lo tanto, el legislador ha incumplido su obligación de diseñar un sistema de salud especial para los grupos étnicos distintos de los pueblos indígenas.***

(…) No obstante, en la medida en que la Corte ha encontrado que ***el legislador, hasta ahora, no ha producido una ley que permita ejercer el derecho constitucional de las comunidades étno culturales no indígenas a gozar de un sistema de salud especial, y que al respecto existe una omisión legislativa de carácter absoluto,*** *en la parte resolutiva de de esta providencia* ***exhortará al Congreso Nacional para que,*** *en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, provenientes de lo dispuesto en los artículos 1° y 25 del Convenio 169 de la OIT,* ***regule para dichas comunidades servicios de salud adecuados, en lo posible organizados y prestados a nivel comunitario bajo su propia responsabilidad y control, que tengan en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales****."*

Sentencia SU 510 de 1998

En relación con los criterios para calificar la existencia de un grupo etnocultural no indígena como comunidad de especial protección:

"(…) sus miembros (i) tienen un vínculo comunitario establecido desde el nacimiento y que, salvo su libre abandono o renuncia, termina con la muerte, (ii) tienen una relación con su comunidad que no se limita a determinados aspectos puntuales y específicos, sino que cubre un "entero plexo de interacciones en cuanto que se hace partícipe en una forma definida de vida". Para la Sala, estas condiciones que en principio hacen referencia a las minorías indígenas, resultan aplicables a la generalidad de comunidades diversas, por lo que tales condiciones de pertenencia cobran la calidad de requisitos para el reconocimiento de la autodeterminación de la minoría diferenciada y la posterior adscripción de derechos también diferentes de los que son titulares los demás colombianos.

5. Por lo tanto, la comunidad diferenciada debe ser identificable, a través de las características etnoculturales que le son propias a sus miembros, lo que se traduce, como se dijo líneas atrás, en la existencia de una visión arraigada y tradicional de ver el mundo y de un sistema de valores propio y distinto al de la cultura mayoritaria. Reunidas estas cualidades, nace para las comunidades un sentido de pertenencia doble: Son nacionales, porque ostentan la calidad de colombianos, siendo por ello titulares de los derechos, garantías y deberes consagrados en la Carta Política. Igualmente, conservan su vínculo comunitario que les permite desarrollarse dentro del marco axiológico, religioso y político del grupo diferenciado, en concordancia con el reconocimiento contenido en el artículo 7º Superior. (…)"

El proyecto de ley no conlleva un impacto fiscal, debido a que en el articulado no se ordena un gasto público, pues en el mismo se señala expresamente que se autoriza al Gobierno Nacional para que reglamente todo lo relacionado con la puesta en marcha y funcionamiento de un Sistema de Seguridad Social en Salud especial aplicable a la población negra, afro, raizal y palenquera del país, teniendo así éste la potestad de adaptar lo consagrado en la iniciativa legislativa a las condiciones específicas, alcances y límites del marco fiscal.

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que el proyecto de ley está acorde con los distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la materia, específicamente con la sentencia C 866 de 2010, en la cual manifestó una serie de subreglas sobre el análisis del impacto fiscal de las normas:

"… es posible deducir las siguientes subreglas sobre el alcance del artículo 7º de la Ley 819 de 2003:

i) Las obligaciones previstas en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 constituyen un parámetro de racionalidad legislativa, que cumple fines constitucionalmente relevantes como el orden de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica;

ii) El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 corresponde al Congreso, pero principalmente al Ministro de Hacienda y Crédito Público, en tanto que 'es el que cuenta con los datos, los equipos de funcionarios y la experticia en materia económica. Por lo tanto, en el caso de que los congresistas tramiten un proyecto incorporando estimativos erróneos sobre el impacto fiscal, sobre la manera de atender esos nuevos gastos o sobre la compatibilidad del proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, le corresponde al Ministro de Hacienda intervenir en el proceso legislativo para ilustrar al Congreso acerca de las consecuencias económicas del proyecto';

iii) En caso de que el Ministro de Hacienda y Crédito Público no intervenga en el proceso legislativo u omita conceptuar sobre la viabilidad económica del proyecto, no lo vicia de inconstitucionalidad puesto que este requisito no puede entenderse como un poder de veto sobre la actuación del Congreso o una barrera para que el legislador ejerza su función legislativa, lo cual 'se muestra incompatible con el balance entre los poderes públicos y el principio democrático'; y

iv) El informe presentado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público no obliga a las células legislativas a acoger su posición; sin embargo, sí genera una obligación en cabeza del Congreso de valorarlo y analizarlo. Solo así se garantiza una debida colaboración entre las ramas del poder público y se armoniza el principio democrático con la estabilidad macroeconómica".

Adicionalmente, es importante tener presente lo manifestado por la Corte Constitucional en Sentencia C 490 de 2011:

*"****El mandato de adecuación entre la justificación de los proyectos de ley y la planeación de la política económica, empero, no puede comprenderse como un requisito de trámite para la aprobación de las iniciativas legislativas****, cuyo cumplimiento recaiga exclusivamente en el Congreso. Ello en tanto (i) el Congreso carece de las instancias de evaluación técnica para determinar el impacto fiscal de cada proyecto, la determinación de las fuentes adicionales de financiación y la compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo; y (ii) aceptar una interpretación de esta naturaleza constituiría una carga irrazonable para el Legislador y otorgaría un poder correlativo de veto al Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, respecto de la competencia del Congreso para hacer las leyes. Un poder de este carácter, que involucra una barrera en la función constitucional de producción normativa, se muestra incompatible con el balance entre los poderes públicos y el principio democrático. La exigencia de la norma orgánica, a su vez, presupone que la previsión en cuestión debe contener un mandato imperativo de gasto público."*

De modo tal que el impacto fiscal de las leyes, no puede convertirse en una barrera para que el Congreso de la República pueda ejercer su función legislativa, pues de serlo estaría vulnerando el principio de separación de las ramas del poder público al lesionar la autonomía del legislativo. Por lo cual, tal y como lo ha señalado la Corte, el artículo 7 de la Ley 819 de 2003: "***debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda****."*

6. CONFLICTO DE INTERÉS

Con base en el artículo 3º de la Ley 2003 de 2019, según el cual *"El autor del proyecto y el ponente presentarán en el cuerpo de la exposición de motivos un acápite que describa las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, de acuerdo con el artículo 286. Estos serán criterios guías para que los otros congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de impedimento, no obstante, otras causales que el Congresista pueda encontrar"*.

A continuación, se pondrán de presente los criterios que la Ley 2003 de 2019 contempla para hacer el análisis frente a los posibles impedimentos que se puedan presentar en razón a un conflicto de interés en el ejercicio de la función congresional, entre ellas la legislativa.

"Artículo 1º. El artículo 286 de la Ley 5 de 1992 quedará así:

(…)

a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.

b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.

c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes circunstancias:

a) Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o de acto legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores.

b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el congresista en el futuro.

c) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan beneficios, en el cual, el congresista tiene un interés particular, actual y directo. El voto negativo no constituirá conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente.

d) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que regula un sector económico en el cual el congresista tiene un interés particular, actual y directo, siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual.

e) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo que tratan sobre los sectores económicos de quienes fueron financiadores de su campaña siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual para el congresista. El congresista deberá hacer saber por escrito que el artículo o proyecto beneficia a financiadores de su campaña. Dicha manifestación no requerirá discusión ni votación.

f) Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades referidas al parentesco con los candidatos (...)".

De lo anterior, y de manera meramente orientativa, se considera que para la discusión y aprobación de este Proyecto de Ley no existen circunstancias que pudieran dar lugar a un eventual conflicto de interés por parte de los Honorables Congresistas, pues es una iniciativa de carácter general, impersonal y abstracta, con lo cual no se materializa una situación concreta que permita enmarcar un beneficio particular, directo ni actual. En suma, se considera que este proyecto se enmarca en lo dispuesto por el literal a del artículo primero de la Ley 2003 de 2019 sobre las hipótesis de cuando se entiende que no hay conflicto de interés.

En todo caso, es pertinente aclarar que los conflictos de interés son personales y corresponde a cada Congresista evaluarlos, pudiendo manifestar cuando considere que está inmerso en impedimento.

De los Honorables Congresistas. Atentamente,

JHON ARLEY MURILLO BENITEZ
Representante a la Cámara
Partido Colombia Renaciente

ALEXANDER BERMÚDEZ LASSO
Representante a la Cámara
Partido Liberal

FABER ALBERTO MUÑOZ CERÓN
Representante a la Cámara
Partido de la U

HENRY FERNANDO CORREAL
Representante a la Cámara
Partido Liberal

JORGE ELIÉCER TAMAYO MARULANDA
Representante a la Cámara

JORGE ENRIQUE BENEDETTI M.
Representante a la Cámara por Bolívar

ELOY CHICHI QUINTERO ROMERO
Representante a la Cámara
Dpto Cesar

FELIPE ANDRÉS MUÑOZ DELGADO
REPRESENTANTE A LA CÁMARA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

ANATOLIO HERNÁNDEZ LOZANO
Representante a la Cámara

MARÍA CRISTINA SOTO DE GÓMEZ
Representante a la Cámara
Partido Conservador

JAIRO REINALDO CALA SUÁREZ
Representante a la Cámara
Partido COMUNES

JAIRO HUMBERTO CRISTO CORREA
Representante a la Cámara
Partido Cambio Radical

OMAR DE JESUS RESTREPO CORREA
Representante a la Cámara
Partido COMUNES

PROYECTO DE LEY NÚMERO 235 DE 2021 CÁMARA

por la cual se adoptan medidas para contribuir al bienestar del sector cafetero, se incentiva el consumo interno, se autoriza la creación del programa de donación Quiero a los cafeteros. Y se declara el café como bebida nacional.

Ley de incentivos a la producción y al consumo de Café en Colombia

Proyecto de Ley No. ____ de 2021

Por la cual se adoptan medidas para contribuir al bienestar del sector cafetero, se incentiva el consumo interno, se autoriza la creación del programa de donación Quiero a los cafeteros. Y se declara el café como bebida nacional.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. *Objeto*. Objeto. La presente ley tiene tres propósitos: a) crear el programa de donación voluntaria "Quiero a los cafeteros"; b) Declarar el café como bebida nacional; e c) Incentivar el consumo interno.

Artículo 2°. *Definiciones.* Para los efectos de la presente ley, aplican las siguientes definiciones:

1. *Pequeño productor*: Persona natural que explota o ejerce el control técnico, económico, administrativo sobre un área de café o finca cafetera mediante la toma de decisiones de siembra, eliminación o zoqueo del lote, entre otras, y cuyos activos no superan el equivalente a doscientos ochenta y cuatro (284) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) siempre y cuando el 75% de sus activos estén invertidos en el sector cafetero y no menos de las 2/3 partes de sus ingresos provengan de dicha actividad.

2. *Recolector de café*: Personas naturales que desarrollan actividades relacionadas con el mantenimiento de la plantación y por medidas durante la recolección de las cosechas del café, con independencia del vínculo jurídico a través del cual las realicen. En ese sentido, la presente ley reconoce que el recolector de café puede ser considerado trabajador dependiente, contratista o independiente por cuenta propia.

CAPÍTULO I

Programa de donación "Quiero a los Cafeteros" y el fondo para la vejez de los cafeteros.

Artículo 3°. *Programa de donación Quiero a los Cafeteros*. Autorícese al Gobierno Nacional la creación del programa de donación voluntaria por parte de los compradores y consumidores de café o sus productos derivados denominado "Quiero a los Cafeteros". Tendrá como propósito el recaudo organizado de aportes voluntarios hasta por el 20% del precio pagado por la compra de café en cualquiera de sus formas o productos con café. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

Los recursos recaudados por este programa se destinarán con exclusividad al ***Fondo para la vejez de los Cafeteros***.

Artículo 4°. *Fondo para la vejez de los Cafeteros*. Con el fin de administrar los recursos que se recauden por concepto del programa *Quiero a los Cafeteros*, créese un patrimonio autónomo ***Fondo para la vejez de los Cafeteros*** cuyos recursos se destinaran de manera exclusiva la financiación de programas orientados a generar ingresos durante su vejez a los pequeños productores y recolectores de café.

Deberá ser administrado por una fiduciaria de reconocida idoneidad, y de conformidad con los requisitos y condiciones que para el efecto expida el Gobierno Nacional. La Junta Directiva del patrimonio autónomo deberá estar integrada por representantes del Gobierno Nacional y del gremio cafetero en Colombia.

Parágrafo. El gobierno reglamentará la materia en un periodo no mayor a seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

CAPÍTULO II

De la declaratoria del café como bebida nacional

Artículo 5°. *Declaratoria del café como bebida nacional*. Declárase al café de Colombia como producto y bebida nacional en razón de su relevancia histórica, social, económica y cultural.

El gobierno realizará lo necesario para garantizar las denominaciones de origen del café colombiano, y la debida protección de sus características fisicoquímicas. Así mismo, la Superintendencia de Industria y Comercio realizara las revisiones necesarias para evitar que cafés con orígenes distintos sean comercializados en el país como "Café de Colombia".

CAPÍTULO III

De la promoción del consumo interno

Artículo 6°. ***Promoción del consumo interno de café colombiano***: El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en coordinación con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, diseñará e implementará, estrategias de promoción del consumo de café colombiano, tanto en el exterior, como en el interior del país.

Parágrafo: La promoción del consumo de café colombiano, deberá fundamentarse en estrategias de largo plazo, donde se estimule la demanda efectiva y se fortalezca la oferta con innovación.

Artículo 7°. Compras de café colombiano por parte de las entidades públicas o de economía mixta. Las entidades públicas o de economía mixta del Estado colombiano de acuerdo con el régimen jurídico de contratación que le sea aplicable, cuando compren café, preferirán los cafés locales, producidos en Colombia.

Parágrafo. Toda compra de café por parte de las entidades públicas o de economía mixta, deberá ser realizada tomando en consideración los términos de la Ley 816 de 2003, a través de la cual se busca apoyar a la industria nacional a través de la contratación pública.

Artículo 8°. Inclusión del café en programas de alimentación. El Estado adoptará acciones para fomentar la oferta y el consumo de café en el marco de los programas de alimentación financiados con recursos públicos, siempre y cuando sea permitido, de acuerdo a las condiciones nutricionales de cada programa. Para ello en un plazo no mayor a seis (6) meses se el Ministerio de Salud y Protección Social dispondrá una actualización de los resultados de estudios existentes sobre el café en la salud, y determinará la viabilidad de incluirlo en la alimentación infantil, de adultos y adultos mayores financiados por el Estado. Hecha la determinación, si resultará favorable se procederá en un término no mayor a 6 meses a incluirlo en dichas dietas.

CAPÍTULO IV.

Piso mínimo de protección social.

Artículo 9°. Acceso al piso de Protección Social. Los pequeños productores y recolectores de café que tengan relación contractual laboral o por prestación de servicios, por tiempo parcial y que en virtud de ello perciban un ingreso mensual inferior a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente - SMLMV deberán vincularse al Piso de Protección Social que estará integrado por: i) el Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad en Salud, ii) el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS como mecanismo de protección en la vejez y iii) el Seguro Inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por BEPS siempre y cuando no superen el tope de ingresos de (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente en promedio durante un (1) año calendario.

En estos eventos el aporte al programa de los Beneficios Económico Periódicos – BEPS deberá ser asumido enteramente por el empleador o el contratante y corresponderá al 15% del ingreso mensual del trabajador o contratista. De este monto se destinará el 1% para financiar el Fondo de Riesgos Laborales, con el fin de atender el pago de la prima del Seguro Inclusivo. Sin perjuicio de lo anterior, las personas que no tengan una vinculación laboral o no hayan suscrito un contrato de

prestación de servicios y no tengan capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización al Sistema Integral de Seguridad Social podrán afiliarse y/o vincularse bajo la modalidad del piso de protección social de que trata este artículo y serán los responsables de realizar el aporte al programa BEPS y el pago del seguro inclusivo. En todo caso, las personas deberán cumplir con los requisitos de acceso o pertenencia a los diferentes componentes del piso de protección social.

Parágrafo primero. En ningún caso el ahorro en el mecanismo de los Beneficios Económicos Periódicos podrá ser inferior al tope mínimo establecido para ese Servicio Social Complementario.

Parágrafo segundo. El Gobierno nacional reglamentará la materia; así mismo podrá establecer mecanismos para que los pequeños productores y recolectores de café al programa BEPS, realicen ahorros en este servicio social complementario de forma conjunta con la adquisición de bienes y servicios, y para que los trabajadores dependientes cobijados por el presente artículo tengan acceso al sistema de subsidio familiar.

Artículo 10°. Costos y deducciones imputables al IBC de los pequeños productores y recolectores de café. Los pequeños productores y recolectores independientes con ingresos netos iguales o superiores a 1 salario mínimo legal mensual vigente (smlmv) que celebren contratos de prestación de servicios personales, cotizarán mes vencido al Sistema de Seguridad Social Integral, sobre una base mínima del 40% del valor mensualizado del contrato, sin incluir el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales con ingresos netos iguales o superiores a un (1) salario mínimo legal mensual vigente efectuarán su cotización mes vencido, sobre una base mínima de cotización del 40% del valor mensualizado de los ingresos, sin incluir el valor del Impuesto al Valor Agregado - IVA. En estos casos será procedente la imputación de costos y deducciones siempre que se cumplan los criterios determinados en el artículo 107 del Estatuto Tributario y sin exceder los valores incluidos en la declaración de renta de la respectiva vigencia.

El Gobierno nacional reglamentará el mecanismo para realizar la mensualización de que trata el presente artículo.

Para efectos de la determinación del ingreso base de cotización -IBC de los trabajadores independientes por cuenta propia que clasifiquen como pequeños productores y recolectores de café en los términos de la presente Ley, se entenderá que los costos y deducciones que se pueden imputar a la base mínima corresponden en el mismo porcentaje y alcance a los costos y deducciones inherentes a la mano de obra en los cultivos de café de que trata el artículo 66-1 del Estatuto Tributario.

Artículo 11. Facúltese al Ministerio de Educación Nacional (MEN), en articulación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), para que diseñe, estructure e implemente en la malla curricular de las instituciones educativas oficiales, una cátedra de educación en temas concernientes al sector agropecuario, de carácter obligatorio, la cual busque recuperar el interés y dotar de conocimiento a los estudiantes del ciclo básico, para ser agentes del cambio en la ruralidad colombiana.

PARAGRAFO 1: En las zonas cafeteras del país, está cátedra se concentrará particularmente en temas relacionados con la cultura cafetera.

Artículo 12°. *Reglamentación.* El Gobierno Nacional reglamentará en un lapso no superior a seis (6) meses todo lo concerniente a las disposiciones de los capítulos anteriores.

Artículo 13°. *Vigencia*. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Paloma Valencia-Laserna
Senadora de la República

RODRIGO VILLALBA MOSQUERA
Senador de la República

ALEJANDRO CORRALES
Senador de la República

ENRIQUE CABRALES BAQUERO
Representante a la Cámara por Bogotá.

GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI
Representante a la Cámara por Risaralda

RUBEN DARIO MOLANO PIÑEROS
Representante a la Cámara por Cundinamarca.

Índice

Exposición de motivos

I. Introducción

II. Contexto del café en Colombia

a. Mercado del Café
b. La Federación Nacional de Cafeteros, el consumo interno y el monopolio del café tostado
c. Investigación y apoyo técnico

III. Mercado Laboral Cafetero

a. Beneficios Económicos Periódicos y financiación.

IV. Reflexiones.

V. Bibliografía.

Articulado

INTRODUCCIÓN

La presente ley tiene como objeto desarrollar una política de incentivos dirigida a mejorar las condiciones sociales de los productores y recolectores de café en Colombia. Dicho sector productivo en el país, ha impulsado por décadas la economía y ha sido sinónimo de progreso y de unidad gremial y social. Sin embargo, desde los años 80's este sector ha venido enfrentando grandes dificultades, circunstancia que amerita una intervención estatal que permita corregir dichas fallas, para asegurar no solo los niveles de producción esperados por el mercado sino también la mano de obra que la sustenta y por supuesto esa dimensión inmaterial que representa la cultura cafetera que se ha desarrollado y arraigado en el corazón de todos los colombianos.

Para contextualizar esta iniciativa, se estructura el presente documento a través de tres secciones. Con la primera sección denominada contexto del café en Colombia, se hace un breve recorrido por el mercado del café en el país, el papel de la Federación Nacional de Cafeteros, el consumo interno, el monopolio del café tostado y el desarrollo de investigación y apoyo técnico para el sector. En este acápite, se contextualiza la grave situación de los productores y recolectores de café.

La segunda sección, explora el mercado laboral cafetero colombiano con el propósito de profundizar en las realidades que justifican la presente Ley. Por último, con la sección tres se hace una breve reflexión sobre los mayores productores de grano en el mundo y específicamente sobre las condiciones en que desarrollan esta actividad, para así comparar con el contexto nacional.

I. Contexto del café en Colombia

a. Mercado del café:

Esta sección explica brevemente la composición del mercado cafetero en Colombia y las dinámicas del mercado de café tostado a nivel internacional. Para tal fin, primero se muestra la evolución del mercado internacional del café durante las últimas dos décadas; en segundo lugar, se expone la producción local respecto a hectárea cultivada y; en tercer lugar, la estructura de costos de producción dentro de las fronteras de la unidad productiva.

El mercado internacional del café ha evolucionado aceleradamente durante el último cuarto de siglo por el aumento en la productividad por hectárea cultivada en Brasil y Vietnam. Sin embargo, en Colombia el panorama es contrario, el aumento en los costos de producción, la disminución en la mano de obra disponible y la caída en la productividad por hectárea de café han provocado una pérdida importante de la participación en el mercado internacional. Para 1992, el país produjo 16 millones de sacos anuales, la mayor producción en su historia, mientras que para 2012 se producían sólo 8.5 millones. En este orden de ideas, al principio de la década de los 90 la producción de Colombia equivalía al 21.5% de la producción mundial, mientras que en 2012 solo era de 6.3%, como lo muestra la ilustración 1.[1]

Ilustración 1. Participación de Colombia en el Mercado Mundial de Café (Kilos)



La realidad del sector cafetero en Colombia se puede empezar a dimensionar, entendiendo por ejemplo, que el 96% de los productores nacionales tienen menos de 5 hectáreas y que estos pequeños productores representan el 70% de la producción nacional. Por tal razón, es esencial preservar no solo la estabilidad de sus ingresos sino lograr condiciones mínimas de seguridad social para el desarrollo de su actividad, incentivando así apertura de nuevas unidades productivas y relevo generacional para todas las etapas de la producción.

[1] Juan José Echavarría, Pilar Esguerra, Daniela McAllister, Carlos Felipe Robayo. 2014. Informe de la Misión de Estudios para la Competitividad de la Caficultura en Colombia, p21

Así las cosas, la caída en la participación en el mercado internacional, que es solo una consecuencia de la crisis estructural del sector, se explica parcialmente por las pérdidas monetarias en las que incurren los productores a lo largo del país, hecho que los ha obligado a trasladarse a otros cultivos como el del cacao o plátano, porque los costos de producción superan los precios de venta en más de 40% en la gran mayoría de los departamentos donde se cultiva el café (Meta, Norte de Santander, Caquetá y Boyacá)[2]. Aún con el PIC (Protección al Ingreso Cafetero) o sin imputar los costos laborales, la producción de café no es rentable en Colombia, dicha situación se agrava en las zonas que no pertenecen al tradicional eje cafetero donde la garantía de compra no opera eficientemente, obligando a los caficultores a acudir a mercados alternos.

Los costos de producción del grano en Colombia, comparados con los de Honduras, Nicaragua, Perú y Brasil, son sustancialmente más altos, especialmente desde el año 2008, lo que pone de manifiesto que la crisis del sector requiere con urgencia de la creación de medidas de intervención estatal contundentes, dentro de las cuales se destaca la necesidad de formalización y estabilización de la oferta de mano de obra que se necesita para la producción y recolección del grano, brindando así condiciones laborales óptimas para el productor y el recolector. Sin estas reformas, la producción de café en el mediano plazo será inviable y los productores se verán obligados a migrar hacia cultivos verdaderamente rentables (véase la Ilustración 2[3].).

Ilustración 2. Costos de producción del café



En la Tabla 1, se evidencia que los rubros con mayor participación en los costos de producción por hectárea en Colombia son la mano de obra y los fertilizantes, ocupando el 40.7% y el 15.1% respectivamente. Las condiciones sociales y económicas de los pequeños productores y los recolectores son precarias y el acceso a los servicios sociales del Estado es limitado. Con esta información se espera establecer los patrones de migración de los recolectores tanto geográfica como laboralmente, porque como se verá posteriormente la demanda de mano de obra en la caficultura supera a la oferta en el total, poniendo en riesgo la recolección del grano.

Tabla 1. Estructura de Costos de producción (% de los costos totales)[4]

	Mano de Obra (1)	Insumos (2)	Total (3)
1 Instalación			18.9
2 Control de Arvenses	9.1	1.3	10.4
3 Fertilización	2.2	13.0	15.1
4 Control Fitosanitario			
Broca	2.9	0.5	3.3
Roya	1.2	1.2	2.4
Otras Plagas	0.7	0.4	1.1
Otras Sostenimiento	1.3	0.2	1.5
5 Recolección	40.7		40.7
6 Beneficio			6.1
7 Administración y Gastos Generales			6.2
8 Costos Totales ($ por Hectárea)			100.0
9 De los Cuales Costos Variables			60.6

b. La Federación Nacional de Cafeteros, el consumo interno y el monopolio del café tostado.

Esta sección busca exponer brevemente el rol de la Federación Nacional de Cafeteros, con el objetivo de dimensionar los retos que enfrentan los productores y recolectores de café después de que el grano sale de las unidades productivas. Dado el encargo de política pública que la ley 9 de 1991 le dio a la FNC se desatacan dos frentes que son vitales para los propósitos de la presente iniciativa legislativa. El primero, relacionado con la promoción del consumo interno y el segundo con la comercialización internacional de la producción.

En el mercado del café la FNC va más allá de ser la administradora del Fondo Nacional del Café y cumple un rol importante dentro de la estructura del mercado

[2] Ibíd., p55
[3] Ibíd., p42
[4] Juan José Echavarría, Pilar Esguerra, Daniela McAllister, Carlos Felipe Robayo. 2014. Informe de la Misión de Estudios para la Competitividad de la Caficultura en Colombia, p51

cafetero en Colombia. A continuación se pretende explicar cómo se estructura dicho mercado tanto por el lado de la oferta como el de la demanda.

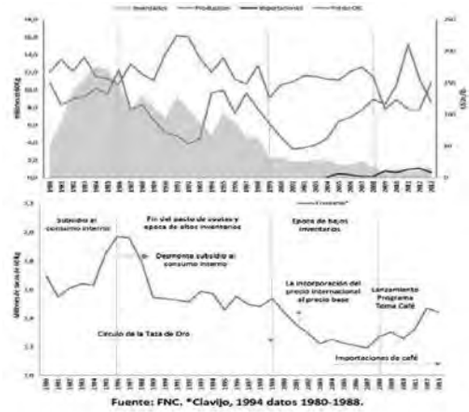
En este mismo sentido, la FNC ejerce cuatro labores que hacen parte de su estructura interna. En las compras locales (Almacafé, cooperativas y otros intermediarios), en el mercado de derivados de café (tostadoras y trilladoras como Buencafé), en el mercado de tiendas de café (como Juan Valdez) y, finalmente, en el proceso de comercialización internacional.

Respecto al consumo interno, es importante destacar que a pesar de los últimos programas de incentivos como "Toma Café", el mismo no ha podido regresar a los niveles de consumo de mediados de los años 80, debido -en parte- al fin del subsidio al consumo. Sin embargo, a la hora de analizar los fundamentos que explican el bajo consumo histórico de café de las últimas décadas en Colombia, parece importante considerar la regulación de la calidad de la producción nacional.

Por décadas, el consumidor colombiano ha tomado el café que proviene del procesamiento de la pasilla subsistente del café exportado o, peor aún, de las importaciones de los países vecinos. Según la Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario –Agronet-, entre 2005 y 2013, Colombia importó 4,2 millones de sacos para suplir el consumo interno por 552 millones de dólares, recursos que perdieron potencialmente los cafeteros colombianos, dicho fenómeno se evidencia en la Ilustración 3. Sin lugar a dudas frente a esta situación, resultaría oportuno impactar el espacio del consumidor buscando un cambio de hábitos en la toma de café y el establecimiento del incentivo a la creación de denominaciones de origen y de cafés especiales, para aumentar positivamente la demanda interna, lo que en palabras de la Misión de Estudios para la Competitividad de la Caficultura se concreta en: "*la FNC ha menospreciado el potencial del mercado doméstico, que tradicionalmente ha sido abastecido con cafés de baja calidad. El consumo doméstico es muy bajo (en comparación por ejemplo a Brasil), y los colombianos carecen de conocimiento y sofisticación en el consumo del café*"[5].

[5] Juan José Echavarría, Pilar Esguerra, Daniela McAllister, Carlos Felipe Robayo. 2014. Informe de la Misión de Estudios para la Competitividad de la Caficultura en Colombia, p63

Ilustración 3. Tendencias del consumo interno de café 1980-2013[6]



Fuente: FNC. *Clavijo, 1994 datos 1980-1988.

Así mismo, no solo los reducidos o nulos márgenes de rentabilidad o el bajo consumo interno afectan al caficultor, sino que además, aquel se ve presionado por la estructura del mercado internacional del grano, ya que este es dominado por un reducido número de multinacionales (Kraft, Nestlé, etc.), las cuales compran casi la mitad de la cosecha mundial. Según informe de Oxfam Internacional, el 93% de los beneficios por la venta de café se quedan por fuera de la finca, mientras que a los agricultores sólo les llega un 7%. De acuerdo con este estudio, los consumidores pagan unos 3,60 dólares por una libra de café tostado y molido, sin embargo, los agricultores reciben sólo 24 centavos por cada libra[7]. Ante este contexto, las instituciones cafeteras deben aunar esfuerzos para mejorar los precios para los

[6] Ibíd., p135

[7] Pobreza en tu taza: la Verdad sobre el negocio del café, Oxfam Internacional, 2002: "*con un diferencial del 1.500%, no extraña que las grandes compañías vivan en la opulencia y los campesinos malvivan y pasen hambre*".

caficultores a través de potencializar el mercado nacional y de generarle valor agregado al café que sale de las fincas.

Particularmente, inversores de capital, entre los que se incluye el Grupo Santo Domingo y los Van Damme de Bélgica (Socios fundadores de AB Inbev), se han enfocado en la compra de empresas procesadoras de café molido e instantáneo. Con base en la información suministrada por medios de comunicación[8], la empresa Jacobs Douwe Egberts (JDE), la cual resultó de la fusión entre D.E Master Blenders y la división de café de Mondelez, se convirtió en el segundo actor del mercado de café tostado e instantáneo que mueve anualmente US$84.500 millones, dicha empresa que ahora tiene aproximadamente un 16% del mercado tendrá ventas anuales superiores a los US$13.000 millones.

En conclusión, el mercado de café se ve amenazado por oligopsonios que quieren controlar el mercado y el precio, yendo en detrimento de los productores y caficultores, circunstancia que afectará en mayor medida aquellos que sean menos productivos. Adicionalmente, frente al bajo consumo de café interno comparado con el de otros países, se hace necesario promover el consumo, por lo que la presente ley contempla incluir en el PAE (Plan de Alimentación Escolar) una medida que incluya una toma de café en las raciones diarias, adicionalmente, de unas compras institucionales de café que promuevan el desarrollo del consumo de la producción nacional, reemplazando así las importaciones de café para el consumo local.

c. Investigación y apoyo técnico

Un eslabón importante en la cadena de producción del café, es la investigación científica y el apoyo técnico dado a los caficultores. En este sentido la FNC toma las medidas y acciones respectivas, sin embargo, no necesariamente se llega a todos la población del sector, quedando vacíos porque en últimas son oportunidades perdidas para mejorar la calidad de los granos sembrados, de aumentar la formación de los caficultores, la oferta de café al mercado nacional e internacional y las perspectivas futuras de producción. De las decisiones que tome la FNC en estos sectores depende en gran medida la competitividad del sector del café.

[8] http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/jacobs-douwe-egberts-nueva-segunda-compania-cafe-mas-grande-del-mundo/211935

A pesar que la FNC y Cenicafé, decidan sobre el destino de los recursos de investigación para el sector del café y conduzcan los contenidos de las formaciones de los caficultores y los apoyos técnicos, esto no se ha reflejado significativamente en el consolidado de la productividad del sector, ya que este no ha aumentado. En Colombia, en el período 1990-2013, la productividad disminuyó 13%. En el mismo lapso, la productividad en Vietnam aumentó 280%, en Honduras 85%, en Nicaragua 142% y en Brasil 185% (arábiga). Si tomamos el periodo 2000-2013, observamos que la disminución en Colombia es aún más grave: cae la productividad en 20%. En 1990, Colombia producía 14.2 sacos por hectárea. En ese año, Vietnam producía 11.1 sacos y Brasil 7.7 sacos. Sin embargo, la jerarquía cambió diametralmente: en los últimos años, Colombia ha venido produciendo 11.5 sacos por hectárea (hoy aproximadamente está en 15 sacos), cuando Vietnam y Brasil producen respectivamente 39.3 y 24 sacos por hectárea.

II. Mercado laboral Cafetero.

La crisis estructural de la caficultura, que se evidencia en la pérdida de participación en el mercado internacional, gira en torno al productor y al recolector de café. Con base en los datos proporcionados por el Banco Mundial, para Colombia en 1981 la agricultura representaba el 19,8% del PIB y en 2014 esta proporción llego a ser del 6,3% del PIB. En las economías desarrolladas es aún menor dicha proporción, por ejemplo, para Francia en ese mismo año el sector agrícola representaba el 4% del PIB en 2014 fue del 1,7% del PIB. Por el contrario, el sector servicios a través de los años ha aumentado la participación en el PIB, para Colombia en 1981 el sector servicios ocupada el 48,7% del PIB, para 2014 ocupaba el 57,7% del PIB.

De la misma forma, el número de empleos en el sector servicios sobre el total de empleos ha venido aumentando en las economías desarrolladas, en el caso de Francia en 1981 representaba el 57% de los empleos, mientras que en 2014 representó el 76% de los empleos. Mientras que para Colombia, en 1985 representaba el 69% de la fuerza laboral en 2014 representó el 64%, sin embargo, durante los últimos años la tendencia se ha mantenido al alza.

De otro lado, el número de empleos en la agricultura sobre el total de empleos en la economía, para Colombia en 1985 fue del 1% mientras en 2011 fue de 18% y en 2014 del 16%. Dicho fenómeno en los 80's, se explica principalmente por el auge del sector cafetero para la década. Sin embargo, se observa que recientemente la proporción de empleados en la agricultura sobre la masa laboral ha venido disminuyendo debido al desplazamiento forzado y el aumento de las oportunidades laborales en las ciudades. Por otro lado, en Francia esta proporción fue del 7% en 1985 mientras que en 2014 fue del 3%. De estas dos proporciones, se puede concluir que si bien en Colombia la proporción de empleados en el sector agrícola ha aumentado desde 1985 esta tendencia se ha reversado en los últimos años, porque como se verá más adelante la población rural ha disminuido.

Los fenómenos sociales y económicos anteriormente expuestos, que explican estos cambios en el mercado laboral, están asociados a los episodios frecuentes y sostenidos de violencia que han desplazado la población rural a las ciudades, como se evidencia desde 1981, cuando la población rural era del 37%, comparado con el 2014 esta proporción pasó a ser del 24%. Disminución que se explica en parte por las oportunidades que encuentran los jóvenes en las ciudades para conseguir un ingreso estable, oportunidades de estudio, capacitación técnica y de servicios de salud, por lo que la población rural es cada vez más vieja y escaza.

Con base en la información suministrada por el Banco Mundial y los diferentes estudios sobre la caficultura colombiana, esta sección se articulará a través de tres engranajes. El primero de ellos, analizará el estudio realizado por Rocha (2014) para la OIT (Organización Internacional del Trabajo), el cual permitirá hacer conclusiones con respecto a la demanda y oferta de trabajadores en el sector. Con el segundo, complementado con los datos suministrados por la FNC, se articulará el argumento de Rocha (2014) para concluir que el déficit en la caficultura en el largo plazo va a ser mayor; y con el tercero y último, con base en los datos de Echavarría (2014) y en línea con las dos conclusiones anteriores, se estudiarán algunos indicadores de la fuerza laboral con el objetivo de dejar presentes las motivaciones de la presente Ley. (Ver Ilustración 3.)

Ilustración SEQ Ilustración * ARABIC 4. Engranaje



De acuerdo al estudio realizado por Rocha (2014), en el mercado laboral cafetero a 2012, hubo 703 mil ocupados para suplir una demanda de 714 mil trabajadores en el sector, sin embargo los resultados son dispares a nivel departamental. De acuerdo con la Tabla 2., La demanda de trabajadores en los departamentos de Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima, Antioquia, Magdalena, Cundinamarca y Cesar es deficitaria en un 39,10%, la cual es compensada estacionalmente por los departamentos donde existe un superávit de mano de obra. Dicho fenómeno es explicado por la época del año en la que se realiza la recolección y que permite que los recolectores migren a diferentes partes del país aprovechando así para obtener un ingreso estable a lo largo del año.

La mano de obra deficitaria de los departamentos del centro y norte del país (eje cafetero), donde las condiciones laborales son mejores, es suplida por el exceso de oferta de los departamentos del sur del país, en especial de Huila y Cauca. A pesar de que dichos movimientos suplen las necesidades de mano de obra en los departamentos deficitarios, a largo plazo la brecha entre la oferta y demanda de trabajo tenderá a ser mayor al 2% actual de déficit.

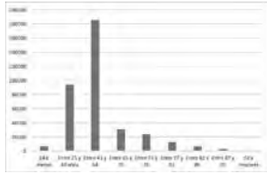
Tabla 2. Oferta y Demanda laboral cafetera en 2012.

Departamento	Oferta	Demanda	Oferta-Demanda
Tolima	54.212	87.698	(31.486)
Antioquia	75.219	106.790	(31.571)
Risaralda	16.486	42.576	(26.091)
Caldas	40.396	63.750	(23.354)
Magdalena	2.010	15.116	(13.105)
Cundinamarca	18.339	27.941	(9.582)
Quindío	14.893	23.914	(9.043)
Cesar	13.638	18.497	(4.859)
Boyacá	6.784	6.764	20
Otros	5.650	-	5.650
Nariño	31.698	29.682	2.016
Santander	40.532	37.329	3.209
Norte de Santand	26.340	19.878	6.463
Huila	134.484	112.321	22.142
La Guajira	25.350	3.054	22.296
Valle del Cauca	83.365	55.819	27.546
Cauca	106.127	63.447	42.680
Total Nacional	702.691	714.491	(11.800)

Fuente: Rocha (2014)

De acuerdo a la base de datos del SICA (Sistema de Información Cafetera) y como se muestra en la Ilustración 4, en Colombia hay 534.302 cafeteros. De los cuales el 34,6% se encuentran entre los 41 y 64 años, además se observa que la población relevo, es decir los que se encuentran entre 25 y 40 años, apenas representa el 17,54%, lo que se traduce en que por cada joven entre los 25 y 40 años hay 1.97 personas entre los 41 y 64 años. A largo plazo, con el aumento en la demanda por mano de obra en los cafetales, en especial en las nuevas regiones cafeteras de Arauca y el Meta y el aumento en la demanda en el sector de los servicios, se espera que el déficit actual del 2% de mano de obra aumente exponencialmente si no se mejoran las condiciones laborales de los productores y recolectores.

Ilustración 5. Distribución de los caficultores colombianos, según rango de edad.



Asimismo, de los cafeteros registrados en el SICA, 365.139 se encuentran clasificados por el SISBEN I, II o III y de estos solo 6.539 se encuentran registrados en los BEPS, pero solo 1.462 se encuentran aportando a dichos beneficios. Se debe tener en cuenta que los caficultores registrados en el SICA no incluyen al total de la población de recolectores y como se vio en la sección anterior existen caficultores que son netamente recolectores. En otras palabras, dado que más del 70% de la producción nacional de café es llevada a cabo por pequeños productores, estos también recolectan café en otras fincas diferentes a las suyas. Estos hechos son síntomas de las precarias condiciones económicas de los recolectores, quien en su mayoría gana solo lo necesario para subsistir o menos.

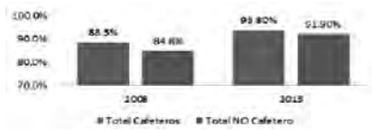
Por último, según Echavarría (2014) en 2012, solo el 2% de los trabajadores cafeteros se encontraba cotizando al sistema de pensiones. Proporción que en relación con los trabajadores agrícolas es baja, algo cercano al 11,5% y en la industria y los servicios lo es aún más con un 35%. Este hecho implica que los cafeteros son vulnerables a los cambios en el mercado internacional del café, porque la mano de obra representa un porcentaje importante en los costos del café.

Lo mismo ocurre con la cobertura de seguridad social en el sector cafetero. Según Echavarría[9] (2014), el 92.5% de los caficultores está afiliado al sistema de salud (principalmente a través del SISBEN y del régimen subsidiado puesto que no tienen contratos escritos y no cotizan a partir de su trabajo), cifra levemente superior a la afiliación de los otros sectores agrícolas (90.3%).

Importante subrayar, que sólo el 2% de los caficultores están afiliados a las pensiones, siendo la proporción más baja frente a los otros sectores agrícolas, mientras 11.5% del resto de los campesinos colombianos están afiliados a pensiones. En la siguiente gráfica[10], se evidencia que a pesar de que el nivel de cobertura de la seguridad social haya aumentado en el mundo cafetero, éste ha aumentado más en el no cafetero.

[9] Ibíd., p68
[10] Ibíd., p69

Ilustración 6. Población Afiliada al Sistema General de Seguridad Social y Régimen de los Afiliados.



En conclusión, para que la comercialización y producción del café sea viable y se supere la crisis actual se debe aumentar el bienestar de los productores y recolectores de café, facilitándoles el acceso a seguridad social (SISBEN, Régimen Subsidiado de Salud y BEPS) a través de los mecanismos que se dispongan en el articulado de la presente Ley. Con esto no solo se garantiza el bienestar de los actuales recolectores y productores más pobres si no que se generan los incentivos necesarios para que haya relevo generacional.

a. Beneficios Económicos Periódicos y financiación.

Los Beneficios Económicos Periódicos - BEPS, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, son un programa de ahorro voluntario para la vejez, impulsado por el Gobierno Nacional que favorece a millones de colombianos que hoy no cuentan con la posibilidad de cotizar para una pensión, o que habiéndolo hecho, cumplieron la edad y no lograron obtenerla.

Los BEPS le permiten al afiliado ahorrar la cantidad que quiera y cuando pueda, sin multas o intereses de mora en caso de no poder realizar aportes. Además, el Gobierno Nacional premia el esfuerzo al ahorro entregando un subsidio del 20 por ciento sobre lo que se haya ahorrado.

Estar en el programa BEPS, es tener la oportunidad de iniciar un ahorro que será disfrutado en la vejez como una forma de ingreso. Este ahorro voluntario por ser flexible en su monto y periodicidad, les permitirá a los afiliados administrar de una mejor forma los ingresos de la etapa productiva. Se le permite al afiliado ahorrar desde COP$5.000 hasta un máximo de COP$940.000 por año.

Para acceder al beneficio, se deben cumplir los siguientes requisitos: para el caso de las mujeres haber cumplido 57 años y para los hombres haber cumplido 62. También, que el monto de los recursos ahorrados, más el valor de los aportes obligatorios, más los aportes voluntarios al Fondo de Pensiones Obligatorio y otros autorizados por el Gobierno Nacional para el mismo propósito, no sean suficientes para obtener una pensión mínima. Así mismo, que el monto anual del ahorro sea inferior al aporte mínimo anual señalado para el Sistema General de Pensiones.

Para acceder a los BEPS se debe estar clasificado por en los niveles I, II o III del SISBEN, cumpliendo con los requisitos que se describen en la tabla 3 y ser legalmente mayor de edad. Personas indígenas residentes en resguardos, deberán presentar el listado censal.

Tabla 3. Puntajes de SISBEN que pueden aplicar al programa BEPS.

ÁREA	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
Área 1 (14 Ciudades)	0,01 - 41,90	41,91 - 43,63	43,64 - 57,21
Área 2 (Otras cabeceras)	0,01 - 41,90	41,91 - 43,63	43,64 - 56,32
Área 3 (Rural Disperso)	0,01 - 32,98	32,99 - 35,26	35,27 - 40,75

Como se estudió en secciones anteriores, el acceso a la seguridad social no solo es un incentivo para las nuevas generaciones si no que es la posibilidad para las personas que ya no alcanzan a cotizar para su pensión para que accedan a un auxilio para su vejez.

Por otro lado, se considera necesario extender la aplicación del piso de protección social que se introdujo en el Plan Nacional de Desarrollo en beneficio de los caficultores que, por la estacionalidad y tiempos de cosecha, pueden llegar a percibir en 1 o 2 meses más de 1 SMLMV, pero cuyos ingresos en promedio en el año no superan dicho monto. Bajo la redacción actual de la norma, estos caficultores se quedan por fuera del ámbito de aplicación del piso mínimo. Pero, dadas las restricciones presupuéstales del Gobierno, es necesaria la creación del el programa de donación voluntaria "Quiero a los cafeteros" el cual permitirá recolectar recursos adicionales para asegurar mejores posibilidades y condiciones sociales para la etapa de vejez de los recolectores y caficultores más pobres.

III. Reflexiones

a. Brasil

En dos décadas Brasil, ha logrado ampliar su producción de café un 86%, pasando de 27 millones a 51 millones de sacos, aumentando su participación en el mercado internacional, al pasar de 29% a 35%. En el mismo lapso, la productividad por hectárea aumentó por tres, elevándose a más de 25 sacos por hectárea. Adicionalmente, en el último cuarto de siglo, la agricultura brasileña ha crecido a más del doble que el promedio nacional[11]. En contraste, en Colombia el sector cafetero ha creciendo a ritmos insuficientes e inferiores al promedio nacional. En el mismo periodo de comparación, la producción y productividad de café ha disminuido y nuestra participación en el mercado internacional del café se ha evaporado. La productividad de Colombia en el año 2000 era similar a la de Brasil hoy, pero en la actualidad es la mitad de la brasileña[12].

La fortaleza de la economía agrícola brasileña se ha fundamentado en combinar la inversión del sector privado de gran escala con la participación de los pequeños productores enmarcados y protegidos bajo la organización de grandes cooperativas fortalecidas y una constante inversión en la investigación de nuevas tecnologías.

b. Vietnam

Según la FAO[13], las áreas de café de Vietnam crecieron 23.9% anualmente durante la década de 1990. En 1997, el país era ya el cuarto exportador del mundo después de Brasil, Colombia e Indonesia. Sólo tres años después, Vietnam sobrepasó a Indonesia y a Colombia para convertirse en el segundo mayor exportador del mundo. Durante el año 2012, las exportaciones alcanzaron un aumento récord de más de 30% a 1,7 millones de toneladas. Ese nivel de exportación superó a la primera posición de Brasil. Actualmente, el café robusta de Vietnam representa el 70% del café que se comercializa en el mundo.

IV. Bibliografía.

Echavarría, Juan José. Esguerra, Pilar. McAllister, Daniela. Robayo, Carlos Felipe 2014. Informe de la Misión de Estudios para la Competitividad de la Caficultura en Colombia

Rocha García, Ricardo. 2014. Informalidad Laboral Cafetera: Rasgos, Determinantes y Propuestas de Política.

Cordialmente,

Paloma Valencia-Laserna
Senadora de la República

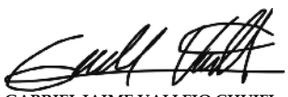
ALEJANDRO CORRALES
Senador de la República

ENRIQUE CABRALES BAQUERO
Representante a la Camara
Partido Centro Democratico,

FERNANDO NICOLÁS ARAUJO R
Senador de la República

César Eugenio Martínez Restrepo
Representante a la Cámara por Antioquia

[11] En 2013, el sector agrícola brasileño creció al 7%, cuando a nivel nacional la economía tuvo una expansión de 2.3%.
[12] Juan José Echavarría, Pilar Esguerra, Daniela McAllister, Carlos Felipe Robayo. 2014. Informe de la Misión de Estudios para la Competitividad de la Caficultura en Colombia, p175
[13] Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación



GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI
Representante a la Cámara por
Risaralda



RODRIGO VILLALBA MOSQUERA
Senador de la República

Proyecto de Ley No. ____ de 2021

Por la cual se adoptan medidas para contribuir al bienestar del sector cafetero, se incentiva el consumo interno, se autoriza la creación del programa de donación Quiero a los cafeteros. Y se declara el café como bebida nacional.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. *Objeto*. Objeto. La presente ley tiene tres propósitos: a) crear el programa de donación voluntaria "Quiero a los cafeteros"; b) Declarar el café como bebida nacional; e c) Incentivar el consumo interno.

Artículo 2°. *Definiciones*. Para los efectos de la presente ley, aplican las siguientes definiciones:

1. *Pequeño productor*: Persona natural que explota o ejerce el control técnico, económico, administrativo sobre un área de café o finca cafetera mediante la toma de decisiones de siembra, eliminación o zoqueo del lote, entre otras, y cuyos activos no superan el equivalente a doscientos ochenta y cuatro (284) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) siempre y cuando el 75% de sus activos estén invertidos en el sector cafetero y no menos de las 2/3 partes de sus ingresos provengan de dicha actividad.

2. *Recolector de café*: Personas naturales que desarrollan actividades relacionadas con el mantenimiento de la plantación y por medidas durante la recolección de las cosechas del café, con independencia del vínculo jurídico a través del cual las realicen. En ese sentido, la presente ley reconoce que el recolector de café puede ser considerado trabajador dependiente, contratista o independiente por cuenta propia.

CAPÍTULO I

Programa de donación "Quiero a los Cafeteros" y el fondo para la vejez de los cafeteros.

Artículo 3°. *Programa de donación Quiero a los Cafeteros*. Autorícese al Gobierno Nacional la creación del programa de donación voluntaria por parte de los compradores y consumidores de café o sus productos derivados denominado "Quiero a los Cafeteros". Tendrá como propósito el recaudo organizado de aportes voluntarios hasta por el 20% del precio pagado por la compra de café en cualquiera de sus formas o productos con café. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

Los recursos recaudados por este programa se destinarán con exclusividad al ***Fondo para la vejez de los Cafeteros***.

Artículo 4°. *Fondo para la vejez de los Cafeteros*. Con el fin de administrar los recursos que se recauden por concepto del programa *Quiero a los Cafeteros*, créese un patrimonio autónomo ***Fondo para la vejez de los Cafeteros*** cuyos recursos se destinaran de manera exclusiva la financiación de programas orientados a generar ingresos durante su vejez a los pequeños productores y recolectores de café.

Deberá ser administrado por una fiduciaria de reconocida idoneidad, y de conformidad con los requisitos y condiciones que para el efecto expida el Gobierno Nacional. La Junta Directiva del patrimonio autónomo deberá estar integrada por representantes del Gobierno Nacional y del gremio cafetero en Colombia.

Parágrafo. El gobierno reglamentará la materia en un periodo no mayor a seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

CAPÍTULO II

De la declaratoria del café como bebida nacional

Artículo 5°. *Declaratoria del café como bebida nacional*. Declárase al café de Colombia como producto y bebida nacional en razón de su relevancia histórica, social, económica y cultural.

El gobierno realizará lo necesario para garantizar las denominaciones de origen del café colombiano, y la debida protección de sus características fisicoquímicas. Así mismo, la Superintendencia de Industria y Comercio realizara las revisiones necesarias para evitar que cafés con orígenes distintos sean comercializados en el país como "Café de Colombia".

CAPÍTULO III

De la promoción del consumo interno

Artículo 6°. ***Promoción del consumo interno de café colombiano***: El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en coordinación con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, diseñará e implementará, estrategias de promoción del consumo de café colombiano, tanto en el exterior, como en el interior del país.

Parágrafo: La promoción del consumo de café colombiano, deberá fundamentarse en estrategias de largo plazo, donde se estimule la demanda efectiva y se fortalezca la oferta con innovación.

Artículo 7°. Compras de café colombiano por parte de las entidades públicas o de economía mixta. Las entidades públicas o de economía mixta del Estado colombiano de acuerdo con el régimen jurídico de contratación que le sea aplicable, cuando compren café, preferirán los cafés locales, producidos en Colombia.

Parágrafo. Toda compra de café por parte de las entidades públicas o de economía mixta, deberá ser realizada tomando en consideración los términos de la Ley 816 de 2003, a través de la cual se busca apoyar a la industria nacional a través de la contratación pública.

Artículo 8°. Inclusión del café en programas de alimentación. El Estado adoptará acciones para fomentar la oferta y el consumo de café en el marco de los programas de alimentación financiados con recursos públicos, siempre y cuando sea permitido, de acuerdo a las condiciones nutricionales de cada programa. Para ello en un plazo no mayor a seis (6) meses se el Ministerio de Salud y Protección Social dispondrá una actualización de los resultados de estudios existentes sobre el café en la salud, y determinará la viabilidad de incluirlo en la alimentación infantil, de adultos y adultos mayores financiados por el Estado. Hecha la determinación, si resultará favorable se procederá en un término no mayor a 6 meses a incluirlo en dichas dietas.

CAPÍTULO IV.
Piso mínimo de protección social.

Artículo 9°. Acceso al piso de Protección Social. Los pequeños productores y recolectores de café que tengan relación contractual laboral o por prestación de servicios, por tiempo parcial y que en virtud de ello perciban un ingreso mensual inferior a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente - SMLMV deberán vincularse al Piso de Protección Social que estará integrado por: i) el Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad en Salud, ii) el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS como mecanismo de protección en la vejez y iii) el Seguro Inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por BEPS siempre y cuando no superen el tope de ingresos de (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente en promedio durante un (1) año calendario.

En estos eventos el aporte al programa de los Beneficios Económico Periódicos – BEPS deberá ser asumido enteramente por el empleador o el contratante y corresponderá al 15% del ingreso mensual del trabajador o contratista. De este monto se destinará el 1% para financiar el Fondo de Riesgos Laborales, con el fin de atender el pago de la prima del Seguro Inclusivo. Sin perjuicio de lo anterior, las personas que no tengan una vinculación laboral o no hayan suscrito un contrato de prestación de servicios y no tengan capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización al Sistema Integral de Seguridad Social podrán afiliarse y/o vincularse bajo la modalidad del piso de protección social de que trata este artículo y serán los responsables de realizar el aporte al programa BEPS y el pago del seguro inclusivo. En todo caso, las personas deberán cumplir con los requisitos de acceso o pertenencia a los diferentes componentes del piso de protección social.

Parágrafo primero. En ningún caso el ahorro en el mecanismo de los Beneficios Económicos Periódicos podrá ser inferior al tope mínimo establecido para ese Servicio Social Complementario.

Parágrafo segundo. El Gobierno nacional reglamentará la materia; así mismo podrá establecer mecanismos para que los pequeños productores y recolectores de café al programa BEPS, realicen ahorros en este servicio social complementario de forma conjunta con la adquisición de bienes y servicios, y para que los trabajadores dependientes cobijados por el presente artículo tengan acceso al sistema de subsidio familiar.

Artículo 10°. Costos y deducciones imputables al IBC de los pequeños productores y recolectores de café. Los pequeños productores y recolectores independientes con ingresos netos iguales o superiores a 1 salario mínimo legal mensual vigente (smlmv) que celebren contratos de prestación de servicios personales, cotizarán mes vencido al Sistema de Seguridad Social Integral, sobre una base mínima del 40% del valor mensualizado del contrato, sin incluir el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales con ingresos netos iguales o superiores a un (1) salario mínimo legal mensual vigente efectuarán su cotización mes vencido, sobre una base mínima de cotización del 40% del valor mensualizado de los ingresos, sin incluir el valor del Impuesto al Valor Agregado - IVA. En estos casos será procedente la imputación de costos y deducciones siempre que se cumplan los criterios determinados en el artículo 107 del Estatuto Tributario y sin exceder los valores incluidos en la declaración de renta de la respectiva vigencia.

El Gobierno nacional reglamentará el mecanismo para realizar la mensualización de que trata el presente artículo.

Para efectos de la determinación del ingreso base de cotización -IBC de los trabajadores independientes por cuenta propia que clasifiquen como pequeños productores y recolectores de café en los términos de la presente Ley, se entenderá que los costos y deducciones que se pueden imputar a la base mínima corresponden en el mismo porcentaje y alcance a los costos y deducciones inherentes a la mano de obra en los cultivos de café de que trata el artículo 66-1 del Estatuto Tributario.

Artículo 11. Facúltese al Ministerio de Educación Nacional (MEN), en articulación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), para que diseñe, estructure e implemente en la malla curricular de las instituciones educativas oficiales, una cátedra de educación en temas concernientes al sector agropecuario, de carácter obligatorio, la cual busque recuperar el interés y dotar de conocimiento a los estudiantes del ciclo básico, para ser agentes del cambio en la ruralidad colombiana.

PARAGRAFO 1: En las zonas cafeteras del país, está cátedra se concentrará particularmente en temas relacionados con la cultura cafetera.

Artículo 12°. *Reglamentación.* El Gobierno Nacional reglamentará en un lapso no superior a seis (6) meses todo lo concerniente a las disposiciones de los capítulos anteriores.

Artículo 13°. *Vigencia.* La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Paloma Valencia-Laserna
Senadora de la República

ALEJANDRO CORRALES
Senador de la República

ENRIQUE CABRALES BAQUERO
Representante a la Cámara por Bogotá

RODRIGO VILLALBA MOSQUERA
Senador de la República

GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI
Representante a la Cámara por Risaralda

RUBEN DARIO MOLANO PIÑEROS
Representante a la Cámara por Cundinamarca

CONTENIDO

Gaceta número 1083 - miércoles 25 de agosto de 2021

CÁMARA DE REPRESENTANTES **Págs.**

PROYECTOS DE LEY

Proyecto de ley número 231 de 2021 Cámara, por medio del cual se modifica el porcentaje de repartición de las contraprestaciones portuarias. 1

Proyecto de ley número 232 de 2021 Cámara, por medio del cual se reglamenta el modelo para la atención y seguimiento de adolescentes y jóvenes que estuvieron bajo custodia del Estado a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 8

Proyecto de ley número 233 de 2021 Cámara, por medio de la cual se adiciona un artículo y se modifica el artículo 6° de la Ley 1874 de 2017 y se dictan otras disposiciones. 14

Proyecto de ley número 234 de 2021 Cámara, por medio de la cual se reglamenta la participación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia. 18

Proyecto de ley número 235 de 2021 Cámara, por la cual se adoptan medidas para contribuir al bienestar del sector cafetero, se incentiva el consumo interno, se autoriza la creación del programa de donación Quiero a los cafeteros. Y se declara el café como bebida nacional..... 23

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2021

CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA CRIMINAL

Estudio a las propuestas de Proyecto de Ley 283 de 2019 Cámara *"Por medio del cual se sustituye el título XI "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente"*, y Proyecto de Ley 013 de 2020 Cámara "*Por medio del cual se crea el delito de Fracking en la Ley 599 de 2000*".

Proyecto de Ley 283 de 2019 Cámara *"Por medio del cual se sustituye el título XI "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente."* Proyecto de Ley 013 de 2020 Cámara *"Por medio del cual se crea el delito de Fracking en la Ley 599 de 2000".*	
Autores	H.R. Juan Carlos Lozada Vargas
Fecha de presentación	1 de octubre de 2019 20 de julio de 2020
Estado	Trámite en Comisión
Referencia	Concepto No 13.2020

1. El Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal, en sesión del 17 de abril de 2020, analizó y discutió el Proyecto de Ley 283 de 2019 ***"Por medio del cual se sustituye el título XI "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente".*** De igual manera, en sesión del 04 de agosto de 2020, analizó y discutió el Proyecto de Ley 013 de 2020 Cámara ***"Por medio del cual se crea el delito de Fracking en la Ley 599 de 2000"***. En este orden, a continuación, se proceden a exponer las consideraciones y observaciones que se hicieron.

I. Objeto de los Proyectos de Ley

2. De acuerdo con la exposición de motivos, el Proyecto de Ley 283 de 2019 busca *"sustituir el Título XI del Código Penal Colombiano en aras de actualizar su contenido, introducir nuevos tipos penales, así como ajustar los verbos rectores y las modalidades de los actuales delitos en contra de los recursos naturales y el medio ambiente, permitiendo valorar la sanción de acuerdo al Impacto Ambiental (IA), consecuencia del actuar típico, antijurídico y reprochable de quien comete la conducta, estableciendo de manera coherente y armónica*

unos mínimos y máximos punitivos, tanto en tiempos como en multas[1]*"*, para lo cual se proponen reformas al Código Penal.

3. Así mismo, de acuerdo con la exposición de motivos del Proyecto de Ley 013 de 2020, este *"tiene como objeto crear el delito de Fracking en el Código Penal colombiano, para tal efecto, se adiciona un artículo al Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000, consecuencia del actuar típico, antijurídico y reprochable de quien comete la conducta, estableciendo de manera coherente y armónica unos mínimos y máximos punitivos, tanto en tiempos como en multas, en aras de garantizar el derecho a gozar de un ambiente sano",* para lo cual se propone la incorporación del tipo penal de Fracking dentro del Código Penal.

II. Marco Constitucional, legal y doctrinal

4. Como sustento para la adopción de las distintas medidas contempladas en el Proyecto de Ley 283, de cara a cumplir con la finalidad de fortalecer la lucha contra la alteración y destrucción del medio ambiente, en la exposición de motivos se acudió a la importancia del bien jurídico objeto de tutela[2], señalando que *el derecho al medio ambiente adecuado se determina en función de las exigencias del desarrollo de la persona, en aras a alcanzar los niveles de calidad de vida propios de toda sociedad desarrollada*[3].

5. Adicionalmente, con la adopción del Decreto 2811 de 1974, también denominado Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, se estableció que el medio ambiente es patrimonio común, y que tanto el Estado como los particulares deben participar en su preservación y manejo, bajo el entendido de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y resulta necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos.

6. De igual manera, se mencionó el artículo 79 de la Constitución Política, el cual se encuentra ubicado en el Capítulo III "De los Derechos Colectivos y del Ambiente" y, en el que se consagra que *"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley*

[1] Véase: Exposición de motivos.
[2] Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero. "El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural (...) la protección del medio ambiente ha adquirido en nuestra constitución un carácter de objetivo social, que al estar relacionado adicionalmente con la prestación eficiente de los servicios públicos, la salubridad y los recursos naturales como garantía de la supervivencia de las generaciones presentes y futuras, ha sido entendido como una prioridad dentro de los fines del Estado y como un reconocimiento al deber de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
[3] Quintero, G. (2005). Derecho Penal. Parte Especial. Quinta edición, Thomson-Aranzadi. Navarra.

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.[4]*"*

7. En este mismo sentido, la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C-198 de 1997 expresó que *"Cabe anotar que la selección de los bienes jurídicos merecedores de protección, el señalamiento de las conductas capaces de afectarlos, la distinción entre delitos y contravenciones, así como las consecuentes diferencias de regímenes sancionatorios y de procedimientos obedecen a la política criminal del Estado en cuya concepción y diseño se reconoce al legislador, en lo no regulado directamente por el Constituyente, un margen de acción que se inscribe dentro de la llamada libertad de configuración (...) Sin embargo, esta facultad no es absoluta, porque al momento de concretarse el tipo penal, es decir, al describir la conducta objetiva punible, mediante la selección de aquellos comportamientos, que destruyan, afectan o ponen en peligro bienes jurídicos esenciales para la vida en comunidad el legislador debe tener en cuenta los fines, valores, principios y derechos contenidos en la Constitución"*[5]. Así las cosas, se concluye en la exposición de motivos que es al legislador a quien corresponde dar alcance a la protección y conservación del derecho a un ambiente sano.

8. De igual forma, en el Proyecto de Ley 013, como sustento para la incorporación del tipo penal de Fracking dentro del ordenamiento jurídico penal colombiano, en la exposición de motivos también se acudió al artículo 79 de la Constitución Política, mencionado con anterioridad.

9. Así mismo, se señala el impacto que tiene el método sobre el medio ambiente, haciendo énfasis en que las sustancias químicas y desechos tóxicos del fracking pueden contaminar aguas superficiales y subterráneas, el suelo y contribuir a la crisis climática. Esta contaminación puede ser grave y en muchos casos irreversible; por ejemplo, las aguas residuales tóxicas del fracking pueden contener concentraciones elevadas de elementos radiactivos como el Radio y en casos de derrames, filtraciones o una disposición deficiente, pueden afectar acuíferos, ríos, suelos y otros elementos del ambiente[6].

10. De la misma forma, acude a estudios publicados en el *Journal of Science Advances*[7] y la Agencia para la Protección del Ambiente de Estados Unidos[8], en los que se expone que se

[4] Constitución Política, artículo 79.
[5] Corte Constitucional. Sentencia C-198 de 1997, M.P. Fabio Morón Diaz.
[6] AIDA; Fundación Heinrich Böll. (2016) Principio de precaución: herramienta jurídica ante los impactos del Fracking
[7] Kondash, A; Lauer, N & Vengosh, A. (2018) The intensification of the water footprint of hydraulic fracturing. Science Advances

han presentado incidentes de contaminación de acuíferos en países como Estados Unidos y Canadá, y que así no se tenga en cuenta la contaminación que pueda generar sobre el agua, el fracking sí genera una presión sobre los recursos hídricos. Así mismo, estos estudios señalan el impacto del fracking en el ciclo del agua y el agua para el consumo humano.

11. Al hilo de lo anterior, la exposición de motivos indica el impacto sobre la biodiversidad y sobre el cambio climático, aduciendo que los animales son expuestos a los mismos químicos y riesgos que las personas, en este entendido, que este método puede afectar la flora y la fauna por el desarrollo industrial que requiere, además de contaminar ríos en donde viven especies.[9] Así, pues, señala que un 25% del calentamiento global proviene del metano, y aunque éste luego de su emisión es reabsorbido por la tierra en 12 años, en el tiempo que está en la atmósfera es mucho más dañino que el CO2, pues atrapa hasta 84 veces más calor. El metano se libera, o quema, en los diferentes pasos de la producción y transporte del petróleo, pero lo anterior es más pronunciado en la producción a través del fracking.[10]

12. Además, acude a un estudio realizado por el Comité sobre Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo[11], en el cual se indica que el fracking puede causar daños graves e irreparables en la salud de las personas: cáncer, daños en el sistema inmunológico, cambios en la química de la sangre; toxicidad en los pulmones, hígado y riñones; daños en el sistema reproductivo; nacimientos con bajo peso y defectos congénitos; e incremento en la incidencia de deficiencias cardíacas congénitas, entre otras afecciones graves.

III.Observaciones en materia político criminal

13. El Consejo Superior de Política Criminal advierte que una vez estudiados los Proyectos de Ley 283 de 2019 y 013 de 2020, emite concepto desfavorable, atendiendo a los siguientes argumentos:

14. La exposición de motivos no fundamenta, ni empírica, ni jurídica, ni políticamente, que resulte necesario la agravación punitiva de los tipos penales ya existentes en el Proyecto 283, ni la incorporación de los nuevos delitos en ambos Proyectos. Vemos una somera justificación que hace referencia a la importancia del medio ambiente y del impacto

[8] U.S. EPA. Hydraulic Fracturing for Oil and Gas: Impacts from the Hydraulic Fracturing Water Cycle on Drinking Water Resources In the United States (Final Report). U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC. (2016)
[9] Center of Biological Diversity. Fracking Threatens California's Wildlife.
[10] Roberts, D. (2019) Fracking may be a bigger climate problem than we thought.
[11] Parlamento Europeo – Comité sobre Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, Reporte sobre los impactos ambientales en las actividades de extracción de gas y petróleo de lutitas, 2011.

ambiental, sin un estudio real sobre idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.

15. Es menester indicar que el Consejo Superior de Política Criminal, en reiterados pronunciamientos, ha señalado que en las exposiciones de motivos de los proyectos de ley o de acto legislativo, debe presentarse un diagnóstico sobre el problema que se pretende regular o dar respuesta con la nueva ley, así como indicar por qué las medidas propuestas son las más adecuadas, junto a los posibles efectos que generaría la iniciativa.

16. Al respecto, sobre el principio de la fundamentación en evidencia empírica, debe decirse que ha sido una de las grandes banderas del Consejo Superior de Política Criminal y de la Corte Constitucional[12], en lo que respecta a la definición de la política pública criminal en el Estado colombiano[13]:

> *"Toda medida de política criminal, en especial aquellas que afecten el sistema penal, deberán estar justificadas empíricamente respecto a su necesidad y sus consecuencias. Por lo tanto, no pueden existir prohibiciones penales, reducción de beneficios ni aumentos punitivos carentes de justificación fáctica"*[14].

17. Revisados los Proyectos de Ley objeto de estudio, vemos cómo no hay justificación seria sobre la agravación punitiva de los tipos penales ya existentes, ni de la incorporación de los nuevos delitos; no existe ni fundamentación ni evidencia empírica sobre el impacto que estas reformas tendrían dentro del sistema judicial, así como tampoco se hace un análisis juicioso del impacto que este proyecto tendría en el sistema penitenciario.

18. Adicionalmente, para garantizar el fundamento empírico de la política criminal, es necesario, que la selección de los medios de intervención sobre un problema de política criminal estén vinculados estrechamente con la definición del mismo y con su superación, lo cual no se ve plasmado en los presentes Proyectos de Ley, puesto que no se demuestra cómo la creación de

---

[12] "La política criminal colombiana necesita con urgencia crear y fortalecer los precarios sistemas de información sobre la criminalidad y sus dinámicas, para poder presentar propuestas que retroalimenten las diversas respuestas institucionales a los fenómenos criminales (…) Es claro que uno de los puntos álgidos y problemáticos de la política criminal es la ausencia de fundamentación empírica, pues esta falencia afecta transversalmente todas las etapas de la misma. Como se indicó, la falta de información confiable hace casi imposible diagnosticar certeramente cuál es el estado de cosas en las diversas etapas de la política pública, lo cual repercute a su vez en la formulación de soluciones y en la medición de resultados". Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-762 de 2015, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

[13] Comisión Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano, junio de 2012.

[14] Consejo Superior de Política Criminal. Concepto 06 de 2019. Estudio a la propuesta de Proyecto de Ley 164 de 2018 Senado "Por medio del cual se modifican los artículos 365 y 366 de la Ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano, se reglamenta el porte de armas blancas y se dictan otras disposiciones", y Consejo Superior de Política Criminal. Lineamientos de Política Criminal.

otros tipos penales, o la agravación de las penas de los ya existentes, podrían afectar el fenómeno que se pretende perseguir, para lograr los fines del derecho penal.

19. En ese sentido, es necesario mencionar que teniendo en cuenta el carácter de última ratio del derecho penal, deben respetarse los principios de subsidiariedad, proporcionalidad, mínima intervención, necesidad y merecimiento de pena[15]; a partir de lo cual resulta más viable fortalecer el control, la vigilancia y la protección del medio ambiente por vía administrativa, antes de reforzar la intervención del derecho penal.

20. Por otro lado, en cuanto a la inclusión del criterio de *"impacto ambiental"* en el Proyecto de Ley 283, para establecer la pena a imponer, es importante tener en cuenta que no se propone una metodología específica para poder determinarlo y que la iniciativa de innovar en cuanto a la determinación de la pena puede generar inconvenientes, tal como se menciona en el mismo Proyecto de Ley *"en la valoración y establecimiento de la pena del juez no media un estudio técnico, necesario para este tipo de delitos, que permita determinar con certeza el daño a los distintos recursos naturales, tanto renovables como no renovables y las consecuencias a mediano y largo plazo de su actuar"*[16].

21. Si bien la determinación del daño se busca subsanar al imponerle esta carga al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y, es cierto que la consagración de penas y sanciones constituye una competencia propia del legislador que, en principio es libre para asignar diferentes consecuencias negativas a los comportamientos que considera reprochables y antijurídicos[17], la misma debe estar ajustada a los criterios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad y, por ende, debe estar determinada, por lo que no resulta viable proponer un criterio que no está establecido de manera definitiva.

22. Igualmente, frente a la misma propuesta, es importante resaltar que el criterio de *"impacto ambiental"* resulta inaplicable en gran parte de los delitos contra el medio ambiente, teniendo en cuenta que estos ostentan el carácter de tipos penales de peligro[18], en los cuáles no se hace necesario determinar y cuantificar el impacto ambiental ocasionado con la conducta punible, debido justamente a que no es necesaria una causación del daño, pero sí, al menos, la puesta efectiva en peligro del bien jurídico tutelado.

---

[15] Corte Constitucional. Sentencia C-365 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[16] Véase: Exposición de motivos.
[17] Corte Constitucional, Sentencia C-329/03. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis.
[18] "Se suele distinguir entre tipos de lesión y tipos de peligro. Los primeros, describen conductas que destruyen o menoscaban un bien jurídico; mientras que los segundos, regulan comportamientos en los cuales sólo se avizora la probabilidad de lesión para el bien jurídico, lo cual puede suceder en abstracto o en concreto, de donde ha surgido la división —según la estructura de las descripciones típicas— entre tipos de peligro abstracto y tipos de peligro concreto." Velásquez, F. (2009). Derecho Penal, Parte General. Librería jurídica COMLIBROS, cuarta edición. Bogotá. Véase también, Sentencias C-320 de 1998; C-674 de 1998 y C-843 de 1999.

23. Por otro lado, el Consejo Superior de Política Criminal tiene diversas observaciones específicas sobre la técnica legislativa de algunos tipos penales cuya modificación se propone y sobre la incorporación de otros nuevos delitos, como se expondrá a continuación:

Texto legal vigente	Texto propuesto
ARTÍCULO 330A. ***Manejo ilícito de especies exóticas***. El que con incumplimiento de las normas vigentes existentes, introduzca, trasplante, manipule, experimente, inocule, o propague especies silvestres exóticas, invasoras, que pongan en peligro la salud humana, el ambiente, las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento a ocho (108) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimas mensuales vigentes.	**ARTÍCULO 332.** ***Manejo ilícito de especies exóticas.*** El que introduzca, trasplante, manipule, experimente, mantenga, adquiera, inocule, libere o propague especies silvestres exóticas o invasoras, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento a ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de trece mil (13.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

24. El nuevo texto propuesto para el artículo 332 suprime el elemento normativo establecido en la norma actual *"el que con incumplimiento de las normas vigentes existentes"*, al respecto deben mencionarse el numeral 21 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993 y el numeral 19 del artículo 9 del Decreto 2820 de 2010. La primera norma regula la obtención, uso, manejo, investigación, importación, exportación, así como la distribución y el comercio de especies y estirpes genéticas de fauna y flora silvestres[19] y, la segunda establece que se otorgarán

[19] Ley 99 de 1993, artículo 5, numeral 21 "Regular, conforme a la ley, la obtención, uso, manejo, investigación, importación, exportación, así como la distribución y el comercio de especies y estirpes genéticas de fauna y flora silvestres; regular la importación, exportación y comercio de dicho material genético, establecer los mecanismos y procedimientos de control y vigilancia y disponer lo necesario para reclamar el pago o reconocimiento de los derechos o regalías que se causen a favor de la nación por el uso de material genético"

licencias ambientales para el establecimiento de zoo criaderos con fines comerciales de especies exóticas en ciclo cerrado[20].

25. Lo anterior quiere decir que legalmente existen excepciones que, bajo determinados criterios, permiten la realización de esta conducta, lo que no prevé el legislador al suprimir el elemento normativo mencionado, pues lo que se debe sancionar penalmente es el desconocimiento o incumplimiento de lo inicialmente autorizado.

ARTÍCULO 333. ***Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo.*** El que provoque, contamine o realice directa o indirectamente en los recursos de agua, suelo, subsuelo o atmósfera, con ocasión a la extracción o excavación, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años, y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**ARTÍCULO 335B.** ***Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo.*** El que contamine directa o indirectamente la atmosfera, el suelo, el subsuelo o las aguas como consecuencia de la actividad de extracción, excavación, exploración, construcción, inyección, deposito, montaje, explotación, beneficio, transformación o transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. Si la conducta se realizare como consecuencia de la minería a cielo abierto la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad de la pena.

[20] Decreto 2820 de 2010, artículo 9, numeral 19 "La caza comercial y el establecimiento de zoo criaderos con fines comerciales" parágrafo 3 "Las Corporaciones Autónomas Regionales solamente podrán otorgar licencias ambientales para el establecimiento de zoo criaderos con fines comerciales de especies exóticas en ciclo cerrado, para tal efecto, el pie parental deberá provenir de un zoo criadero con fines comerciales que cuente con licencia ambiental y se encuentre debidamente autorizado como predio proveedor"

26. La propuesta del artículo 335B genera problemática por cuanto la actividad minera, en sí misma, genera efectos de contaminación[21]. La norma va dirigida a sancionar penalmente cuando esa contaminación supere el riesgo permitido establecido en las normas existentes; sin embargo, como está propuesta la redacción, no es posible diferenciar la conducta delictiva de la no delictiva[22].

27. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta, conforme a la redacción de la propuesta actual, una consideración que ha sido objeto de estudio y análisis por parte de la doctrina

> *"Entender el delito de contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero e hidrocarburos como un delito de resultado puede ser contrario a la aparente necesidad de la norma. Es decir, toda actividad minera genera efectos devastadores contra el medio ambiente, que se califican incluso de graves e irreversibles; entonces, no resulta claro por qué no se sanciona la mera puesta en peligro del bien jurídico, sino que deba esperarse a la lesión efectiva del mismo.*
>
> *Político-criminalmente es más conveniente entender este delito como un típico delito de peligro, no como uno de lesión, por la misma necesidad de protección del bien jurídico, para adelantar las barreras punitivas con el fin de sancionar la actividad minera capaz de generar contaminación ambiental, sin exigir resultado alguno"* [23].

Texto legal vigente	Texto propuesto
ARTÍCULO 338. ***Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales***. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normas vigentes existente explote, explore o extraiga yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar graves	**ARTÍCULO 329B.** ***Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales*.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes excave, explote, explore o extraiga yacimiento minero, arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que

[21] Alianza Mundial de Derecho Ambiental ELAW (2010). Guía Para Evaluar EIAs de Proyectos Mineros. Primera edición, Eugene OR 97403.
[22] "Lo cierto es que la Fiscalía General de la Nación realiza imputaciones conforme a esta norma al aplicar aparentemente este verbo rector, con lo cual hace una interpretación sistemática del Código y se remite a la normatividad reguladora en la materia, es decir, al Código de Minas, que establece que para ejercer la actividad minera se deben tomar ciertas precauciones y cuando ello no se hace, surge este delito. Es decir, se aplica, al igual que con los otros delitos de contaminación ambiental, un criterio de niveles de contaminación permitidos, de tal manera que si este se sobrepasa se estará en presencia del acto delictivo". Suárez, B (2017). Retos de la regulación Jurídico Penal de la Minería en Colombia, Estudio del artículo 333 del C.P.
[23] Ibídem.

daños a los recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se realice a través de minería a cielo abierto, o con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.

28. Sobre el tipo penal de "explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales", el Consejo Superior de Política Criminal en concepto previo, estableció una serie de recomendaciones, las cuales resultan aplicables a la propuesta realizada en el Proyecto de Ley objeto de estudio

> *"En la práctica judicial pueden presentarse algunos problemas en la adecuación típica de ciertas conductas que no se realicen durante todas las fases del proceso de explotación minera, entendido como el "proceso de extracción y procesamiento de los minerales, así como la actividad orientada a la preparación y el desarrollo de las áreas que abarca el depósito mineral", según lo define el Glosario Técnico Minero ya citado. En este sentido, el Consejo Superior de Política Criminal sugiere que el proyecto incluya, dentro de sus definiciones, los conceptos de exploración y explotación, como medida de unificar la interpretación de las disposiciones, precisar el alcance de los tipos penales previstos, y disminuir al máximo las dificultades que puedan tener jueces y fiscales al momento de decidir sobre los casos que lleguen a su conocimiento"*[24]

[24] Consejo Superior de Política Criminal. Concepto sobre el estudio de la propuesta del Proyecto de Ley sin radicar "Por medio del cual se establecen disposiciones para la lucha contra la minería ilegal y se dictan otras disposiciones"

Texto propuesto
Artículo 329C. ***Fracking.*** El que realice actividades de explotación y aprovechamiento del suelo o del subsuelo a través del método de fractura hidráulica, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de treinta y cinco mil (35.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales o altere o destruya acuíferos.

29. Frente a esta propuesta del Proyecto de Ley 283, el Consejo Superior de Política Criminal considera que no es viable incorporar el tipo penal de Fracking, toda vez que la posibilidad de admitir proyectos piloto de esta técnica dentro del país ha sido objeto de debate y estudio por parte del Consejo de Estado[25] en los últimos años. Incluso, este Alto Tribunal no se ha pronunciado sobre cuáles serían las condiciones para la implementación de proyectos piloto en el país.

30. Adicionalmente, la Comisión Interdisciplinaria Independiente encargada por el Gobierno Nacional en el año 2019, concluyó que en Colombia es posible realizar Proyectos Piloto Integrales de Investigación mediante la técnica del fracturamiento hidráulico con perforación horizontal, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. En este sentido, la Comisión publicó un informe completo que contiene las principales conclusiones y recomendaciones que el Gobierno Nacional deberá tener en cuenta al implementar PPII relacionados con yacimientos no convencionales a través de la técnica de Fracking.

31. Es importante señalar que esta misma propuesta es la presentada en el Proyecto de Ley 013 de 2020, así:

[25] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección B. Auto radicado: 57819 de 2018. C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

Texto propuesto
Artículo 338A. ***Fracking.*** El que realice actividades de explotación y aprovechamiento del suelo o del subsuelo a través del método de fractura hidráulica, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales o altere o destruya acuíferos.

32. Se destaca que la propuesta de ambos Proyectos de Ley es, en esencia, la misma, el único cambio es la supresión del segundo inciso y el máximo de la multa, el cual, en el Proyecto de Ley 283 es de treinta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, mientras que en el Proyecto de Ley 013, es de cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

33. Dentro del tiempo que transcurrió desde la presentación del Proyecto de Ley 283 y el 013, el Ministerio de Minas y Energías expidió el Decreto 328, mediante el cual se fijaron los lineamentos para adelantar las pruebas piloto y, aunado a ello, se expidió la Resolución 40185 del 7 de julio de este año, también del Ministerio de Minas y Energía, la cual complementa el Decreto en mención, porque establece los criterios técnicos para el desarrollo de los Proyectos Piloto de Investigación Integral en yacimientos no convencionales de hidrocarburos por medio de la técnica de fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal, mejor conocida como fracking.

34. Dentro de los criterios técnicos establecidos, se encuentra el desarrollo de máximo cuatro PPII en el país en los que se podrá perforar, completar, fracturar, estimular, y dimensionar, mediante la técnica de fracking, hasta dos pozos horizontales los cuales podrán ser distribuidos en un máximo de dos locaciones. Para esto, Las compañías interesadas en desarrollar PPII deberán obtener la aprobación para la perforación de cada uno de los pozos. Para tal propósito, deberán presentar ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos el programa para la perforación, el formato de intención de perforar un pozo PPII, y la documentación técnica relacionada, según lo establece la Resolución 40185.

35. En la misma línea de argumentación, conforme a la normativa expedida por el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos publicó un proyecto de acuerdo que adiciona el Acuerdo 2 de 2017, con el objeto de incorporar las reglas que permitan realizar los

Proyectos de Investigación en desarrollo de los Proyectos Piloto de Investigación Integral sobre Yacimientos No Convencionales -YNC de hidrocarburos con la utilización de la técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal –FH-PH"[26].

36. Además de que, tal como está planteada la propuesta, desconoce que se puede avanzar con proyectos pilotos integrales de investigación con técnica de fracturación hidráulica propuestos en los programas exploratorios, cumpliendo determinados requisitos y bajo algunos lineamientos; el Consejo Superior de Política Criminal considera que, si bien en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 013 se aducen los impactos que esta técnica ocasiona dentro del medio ambiente y los posibles daños que podría causar al ser humano, no justifica la intervención del derecho penal para castigar esta conducta, como se mencionó con anterioridad.

37. Aunado a lo anterior, tenemos el evidente problema de hacinamiento penitenciario y carcelario, po lo que la incorporación de nuevos tipos penales dentro del ordenamiento jurídico debería estar plenamente justificada y, en la propuesta del Proyecto de Ley no solo no está justificada, sino que adicionalmente no se exponen los criterios a partir de los cuales se fija la pena de prisión que se propone para el tipo penal de fracking.

Texto propuesto
Artículo 331A. ***Deforestación.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, tale, queme, corte o destruya, en todo o en parte bosques naturales, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de treinta y siete mil (37.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o

[26] Agencia Nacional de Hidrocarburos. Proyecto de Acuerdo de Proyectos de CEPI en PPII.

radiactivas, o con la conducta se altere las aguas, se ocasione erosión del suelo, se modifique el régimen climático, se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

38. Respecto a la incorporación del tipo penal de Deforestación, debe hacerse alusión a uno de los conceptos emitidos por el Consejo Superior de Política Criminal sobre el estudio que se efectúo al Proyecto de Ley "Minería ilegal", en el cual dijo:

> *"Ahora, a partir de la exposición de motivos que acompaña la iniciativa de reforma, el Consejo Superior de Política Criminal observa la necesidad de que se incluya una nueva circunstancia de agravación referida a una mayor punición cuando el daño a los recursos naturales consista en la tala ilegal de bosque natural, dada la importancia de este último en materia de medio ambiente para nuestro país.*
>
> *Con este marco entonces es que el Consejo Superior considera que resulta ajustado desde el punto de vista político criminal crear un nuevo instrumento en el marco del derecho penal -un agravante- que fortalezca los instrumentos que legales que hoy se tienen con miras a proteger, también desde el derecho penal, los bosques colombianos, a través del reconocimiento expreso de que el delito de Daños en los Recursos Naturales establecido en el artículo 331 del Código Penal merece un mayor reproche si la afectación consiste en tala ilegal de bosque natural"* [27]

39. Es así como, este cuerpo colegiado considera que en lugar de la creación de un tipo penal autónomo como lo propone este Proyecto de Ley, es más coherente optar por la incorporación de un agravante del tipo penal de "Daños en los recursos naturales" en el que se incluya la tala ilegal de bosque natural, también denominada deforestación.

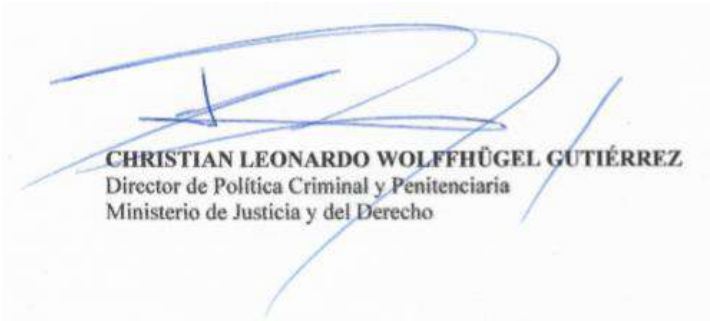
IV. Conclusión

40. Atendiendo a las consideraciones esbozadas, los Proyectos de Ley desconocen los principios de fundamentación empírica, proporcionalidad, intervención mínima y razonabilidad que rigen el diseño e implementación de la política criminal y, además, la propuesta del Proyecto 283 cuenta con varias imprecisiones en la técnica legislativa, por lo que el Consejo Superior de Política Criminal, emite concepto desfavorable para el Proyecto de Ley 283 de 2019, *"Por*

[27] Consejo Superior de Política Criminal. Concepto sobre el estudio a la propuesta de Proyecto de Ley 164 de 2018 Senado "Por medio del cual se adiciona el artículo 331 de la Ley 599 de 2000, a su vez modificado por el artículo 33 de la ley 1453 de 2011" Lo que se busca es establecer "un aumento de la pena cuando "la afectación consista en la tala ilegal de bosque natural", con el fin de disminuir la deforestación que se ha venido presentando en los últimos años en el país por causa de la siembra de cultivos ilegales, el narcotráfico, el tráfico de madera y otras actividades que inclinan a diferentes grupos económicos a atentar contra el medio ambiente y los bosques naturales."

medio del cual se sustituye el título XI "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" y, en el mismo sentido, para el Proyecto de Ley 013 de 2020 *"Por medio del cual se crea el delito de Fracking en la Ley 599 de 2000"*.

CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA CRIMINAL



Elaboró: Eliana Entralgo – Alba Jineth Castro - Dirección de Política de Criminal y Penitenciaria - Secretaría Técnica CSPC
Revisó: Christian Wolffhügel Gutiérrez – Director de Política Criminal y Penitenciaria
Aprobó: Consejo Superior de Política Criminal

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

I S S N 0 1 2 3 - 9 0 6 6

AÑO XXIX - Nº 162 | Bogotá, D. C., lunes, 27 de abril de 2020 | EDICIÓN DE 50 PÁGINAS

DIRECTORES: GREGORIO ELJACH PACHECO, SECRETARIO GENERAL DEL SENADO, www.secretariasenado.gov.co; JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO, SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA, www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PONENCIAS

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 283 DE 2019 CÁMARA

por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000.

Bogotá, D. C., 13 de abril de 2020

Honorable Representante

JUAN CARLOS LOZADA VARGAS

Presidente

Comisión Primera Constitucional Cámara de Representantes

Ciudad.

Referencia: Informe de Ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 283 de 2019 Cámara.

Honorables Representantes:

En cumplimiento del encargo hecho por la Honorable Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes del Congreso de la República y de conformidad con lo establecido en el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, me permito rendir Informe de Ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 283 de 2019 Cámara, "*por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000", con base en las siguientes consideraciones*:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CONTENIDO

1. Trámite de la iniciativa

2. Objeto del Proyecto de ley.

3. Justificación del Proyecto.

4. Antecedentes jurídicos y normativos sobre la materia en Colombia.

5. Regulación penal de otros países en materia ambiental.

6. Actualización propuesta por el Proyecto.

6.1. Creación de nuevos Capítulos al Título.

6.2. Tipos penales que se conservan.

6.3. Tipos penales retirados.

6.4. Tipos penales adicionados.

6.4.1. Del aprovechamiento ilícito.

6.4.2. La Deforestación y la promoción y financiación a la deforestación como delitos autónomos.

6.4.3. De los plásticos de un solo uso y los residuos.

6.4.4. Disposiciones comunes para los delitos en contra de los recursos naturales y el medio ambiente.

6.5. El Impacto Ambiental (IA).

6.5.1. El estudio de Impacto Ambiental (IA) en Colombia.

6.5.2. La sanción de acuerdo al Impacto Ambiental (IA)

7. Competencia del Congreso.

8. Pliego de modificaciones.

9. Proposición.

10. Texto propuesto para primer debate al Proyecto de ley número 283 de 2019 cámara.

1. TRÁMITE DE LA INICIATIVA

El Proyecto de ley número 283 de 2019 Cámara, fue radicado el día 30 de octubre de 2019 por el Honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes solicitó concepto del Consejo de Política Criminal el día 14 de noviembre. El día 18 de noviembre se designó como único ponente al honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas.

2. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY

El presente Proyecto de ley tiene como objeto sustituir el Título XI del Código Penal colombiano en aras de actualizar su contenido, introducir nuevos tipos penales, así como ajustar los verbos rectores y las modalidades de los actuales delitos en contra de los recursos naturales y el medio ambiente, permitiendo valorar la sanción de acuerdo al Impacto Ambiental (IA), consecuencia del actuar típico, antijurídico y reprochable de quien comete la conducta, estableciendo de manera coherente y armónica unos mínimos y máximos punitivos, tanto en tiempos como en multas.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La Constitución Política de Colombia a través de su artículo 79 estableció el derecho más colectivo de los humanos: el derecho a gozar de un ambiente sano, determinando que es deber del Estado, proteger la diversidad e integridad del ambiente y las áreas de especial importancia ecológica.

A fin de materializar dicho mandato, una de las medidas adoptadas en pro de darle alcance al artículo 79 Constitucional, fue la de incluir en el Código Penal como delito aquellas conductas que generen un daño o pongan en riesgo los recursos naturales tanto renovables como no renovables del país.

Sin embargo, ante las nuevas dinámicas sociales, políticas y económicas que afronta el planeta, es necesario robustecer la lucha en contra de la alteración y destrucción del ambiente, corrigiendo los actuales tipos penales que han resultado ineficaces y no proporcionales, e introduciendo prohibiciones a conductas que, a pesar de no encontrarse tipificadas, producen un impacto ambiental negativo en la biodiversidad del país.

4. ANTECEDENTES JURÍDICOS Y NORMATIVOS SOBRE LA MATERIA EN COLOMBIA

De acuerdo a Quintero Olivares: *"En nuestra Constitución, el derecho a un medioambiente adecuado se determina en función de las exigencias del desarrollo de la persona, en aras a alcanzar los niveles de calidad de vida propios de toda sociedad desarrollada"*[1] Es así como las distintas Cartas Políticas que ha tenido nuestro país han resaltado la importancia del ambiente como bien jurídico que debe ser tutelado.

Bajo esta noción, en 1974 se expidió el Decreto 2811, *"por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente"*. Decreto que estableció que el ambiente es patrimonio común y que tanto el Estado como los particulares debían participar en su preservación y manejo, en el entendido que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos[2]. Y que toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano.

En este Decreto también se definió: 1. los recursos naturales renovables, 2. los factores que deterioran el ambiente, como la contaminación, la erosión, la sedimentación en los cursos y depósitos de aguas, la alteración perjudicial de paisajes naturales, entre otros, y 3) los principios que rigen el uso de los elementos ambientales y recursos naturales[3].

En el año 1980 se promulgó el Decreto 100, "*por el cual se expide el nuevo Código Penal", el cual incluía en el título VII <Delitos contra el orden económico social>, un capítulo segundo denominado <De los delitos contra los recursos naturales>, incluyendo de esta manera siete tipos penales que defendían el bien jurídico tutelado del ambiente, a saber*:[4]

- Ilícito aprovechamiento de recursos naturales.
- Ocupación ilícita de parques y zonas de reserva forestal.
- Explotación ilícita de yacimiento minero.
- Propagación de enfermedades en los recursos naturales.
- Omisión de información de presencia de plagas o enfermedades infectocontagiosas.
- Daños en los recursos naturales.
- Contaminación ambiental.

Resulta curiosa la ubicación del capítulo de los recursos naturales en el título de los delitos económicos, más aún cuando el tipo penal de <Violación de fronteras para explotación de recursos naturales> se encontraba en el capítulo segundo <de los delitos contra la seguridad del Estado> del título de <Delitos contra la existencia y seguridad del Estado>. Hecho que fue corregido con la expedición de la Ley 599 del 2000.

En julio de 1991, se expidió la actual Constitución Política de Colombia, que determinó:

---

1 *G. QUINTERO OLIVARES et al., Derecho Penal. Parte especial. 5ta ed., Navarra, Edit. Thomson- Aranzadi, 2005, págs. 1162-1163.*

2 *Decreto 2811 de 1974.*

3 *Ibídem.*

4 *Decreto 100 de 1980.*

"Artículo 79. *Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.*

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines"[5].

La Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C-746 de 1998, con ponencia del Magistrado Antonio Barrera Carbonell afirmó:

"Esta corporación. (…) ha considerado que compete al legislador, conforme a la cláusula general de competencia, trazar la política criminal del Estado y determinar cuáles conductas constituyen delitos y cuáles contravenciones. Sobre el particular expresó la Corte en la Sentencia C-198/97, lo siguiente:

"Cabe anotar que la selección de los bienes jurídicos merecedores de protección, el señalamiento de las conductas capaces de afectarlos, la distinción entre delitos y contravenciones, así como las consecuentes diferencias de regímenes sancionatorios y de procedimientos obedecen a la política criminal del Estado en cuya concepción y diseño se reconoce al legislador, en lo no regulado directamente por el Constituyente, un margen de acción que se inscribe dentro de la llamada libertad de configuración".

Sin embargo, esta facultad no es absoluta, porque al momento de concretarse el tipo penal, es decir, al describir la conducta objetiva punible, mediante la selección de aquellos comportamientos, que destruyan, afectan o ponen en peligro bienes jurídicos esenciales para la vida en comunidad el legislador debe tener en cuenta los fines, valores, principios y derechos contenidos en la Constitución"[6].

Dando así la certeza de que la política criminal compete exclusivamente al legislador, quien debe dar alcance a la protección y conservación del derecho al ambiente sano.

Bajo este entendido en el año 2000 se expidió la Ley 599, *"por la cual se expide el Código Penal"*, el cual derogó el Decreto 100 de 1980, y para el caso de proteger el bien jurídico del ambiente incluyó dentro de su articulado el Título XI <De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente> con un capítulo único llamado <Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente>, el cual había:

Conservado los tipos penales sobre la materia del Decreto 100 de 1980, a saber:[7]

- Ilícito Aprovechamiento de recursos naturales.
- Daños en los recursos naturales.
- Contaminación ambiental.

Modificado los delitos de:

- Propagación de enfermedades en los recursos naturales **por** Manejo y uso ilícito de organismos, microorganismos y elementos genéticamente modificados.
- Ocupación Ilícita de parques y zonas de reserva forestal **por** Invasión de áreas de especial importancia ecológica.
- Explotación ilícita de yacimiento minero **por** Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.

Eliminado el delito de:

- Omisión de información de presencia de plagas o enfermedades infectocontagiosas.

Ubicado en este título el delito de

- Violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de los recursos naturales.

Creando los delitos de:

- Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero.
- Experimentación ilegal de especies, agentes biológicos o bioquímicos.
- Ilícita actividad de pesca.
- Caza ilegal.

Y creando la modalidad culposa para los delitos de:

- Daños en los recursos naturales.
- Contaminación ambiental.

Pasando de 7 a 11 tipos penales que buscaban proteger el bien jurídico de los recursos naturales y el medio ambiente.

Posteriormente se expidió la Ley 890 de 2004, *"por la cual se modifica y adiciona el Código Penal"*[8], que actualizó y aumentó las penas dispuestas para varios tipos penales del Código Penal, entre los que se encontraban los del título XI < De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.>.

En el año 2011 entró en vigor la Ley 1453[9], la cual modificó en su contenido los 11 delitos del Título XI del Código Penal y adicionó dos nuevos tipos penales, a saber:[10]

- Manejo ilícito de especies exóticas.
- Contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos.

Adicionalmente incluyó la modalidad culposa para el delito de:

- Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero.

Siendo así como a la fecha de hoy el Código Penal colombiano cuenta con un título específico y un capítulo único para proteger el bien jurídico tutelado del medio ambiente, el cual consta en su

---

5 *Constitución Política de Colombia, 1991.*

6 *Sentencia C-746 de 1998, M. P. Antonio Barrera Carbonell.*

7 *Ley 599 del 2000.*

8 *Ley 890 de 2004.*

9 *"Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad".*

10 *Ley 1453 de 2011.*

articulado de 13 tipos penales y 3 modalidades culposas, para un total de 14 artículos.

A pesar de este gran avance, el código penal se ha quedado corto para prevenir y sancionar el comportamiento de aquellos que atentan contra el ambiente y los recursos naturales, tanto renovables como no renovables.

Por lo cual, es pertinente primero: **actualizar** los tipos penales vigentes con las dinámicas actuales de explotación, contaminación y destrucción de los recursos y la biodiversidad del país, y segundo: **crear nuevos tipos penales** que aborden y den alcance a una nueva política criminal en favor de la protección y conservación del ambiente.

5. REGULACIÓN PENAL DE OTROS PAÍSES EN MATERIA AMBIENTAL

Son muchos los países que cuentan con tipos penales que buscan sancionar a aquellas personas que atentan contra los recursos naturales y el ambiente. Países como Perú, Ecuador y España tienen una legislación sobre la materia que puede considerarse de avanzada, pues además de tener normas penales iguales o similares a las que encontramos en nuestro código, han concebido prohibir conductas que decantaban en daños a los recursos naturales, conductas que a la fecha no se encuentran prohibidas en nuestro país y que, es menester implementar con sanciones idóneas, pertinentes y necesarias.

El Código Penal peruano de 1991 cuenta con un Título XIII denominado <Delitos contra la ecología> el cual contiene un Capítulo Único <Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.>, dicho capítulo está compuesto por 12 tipos penales, de los cuales es menester destacar cuatro, a saber:[11]

- Artículo 310.- Depredación de bosques protegidos[12].
- Artículo 311.- Utilización indebida de tierras agrícolas[13].
- Artículo 313.- Alteración del ambiente o paisaje[14].
- Artículo 314.- Medida cautelar[15].

Por su parte el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano (COIP)[16] fue publicado el 10 de febrero de 2014 y cuenta con un capítulo cuarto denominado <Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama> el cual consta de 5 secciones: Delitos contra la biodiversidad, Delitos contra los recursos naturales, Delitos contra la gestión ambiental, Disposiciones comunes, y Delitos contra los recursos naturales no renovables, su contenido suma en conjunto 23 tipos penales, de los cuales se deben resaltar los siguientes:

- Artículo 248.- Delitos contra los recursos del patrimonio genético nacional[17].
- Artículo 251.- Delitos contra el agua[18].

---

11 *Código Penal peruano de 1991.*

12 *Artículo 310. Depredación de bosques protegidos. El que destruye, quema, daña o tala, en todo o en parte, bosques u otras formaciones vegetales naturales o cultivadas que están legalmente protegidas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años. La pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años y de noventa a ciento veinte días-multa, cuando: 1. Del delito resulta la disminución de aguas naturales, la erosión del suelo o la modificación del régimen climático. 2. El delito se realiza en lugares donde existen vertientes que abastecen de agua a un centro poblado o sistema de irrigación.*

13 *Artículo 311. Utilización indebida de tierras agrícolas. El que utiliza tierras destinadas por autoridad competente al uso agrícola con fines de expansión urbana, de extracción o elaboración de materiales de construcción u otros usos específicos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años. El que valiéndose de anuncios en el propio terreno o a través de medio de comunicación social, ofrece en venta para fines urbanos u otro cualquiera, áreas agrícolas intangibles, será reprimido con la misma pena.*

14 *Artículo 313. Alteración del ambiente o paisaje. El que, contraviniendo las disposiciones de la autoridad competente, altera el ambiente natural o el paisaje urbano o rural, o modifica la flora o fauna, mediante la construcción de obras o tala de árboles que dañan la armonía de sus elementos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con sesenta a noventa días-multa.*

15 *Artículo 314. Medida cautelar. El Juez Penal ordenará, como medida cautelar, la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o temporal del establecimiento de que se trate de conformidad con el artículo 105 inciso 1°, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad en materia ambiental.*

16 *Código Orgánico Integral Penal (COIP), 2014.*

17 *Artículo 248. Delitos contra los recursos del patrimonio genético nacional. El atentado contra el patrimonio genético ecuatoriano constituye delito en los siguientes casos: 1. Acceso no autorizado: la persona que incumpliendo la normativa nacional acceda a recursos genéticos del patrimonio nacional que incluya o no componente intangible asociado, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años de prisión. La pena será agravada en un tercio si se demuestra que el acceso ha tenido finalidad comercial. 2. Erosión genética: la persona que con sus acciones u omisiones ingrese, reproduzca, trafique o comercialice organismos o material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional, que incluyan o no componente intangible asociado, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, tomando en consideración el valor de los perjuicios causados. 3. Pérdida genética: la persona que con sus acciones u omisiones provoque pérdida del patrimonio genético nacional, que incluya o no componente intangible asociado será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, tomando en consideración el valor de los perjuicios causados.*

18 *Artículo 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. Se impondrá*

- Artículo 252.- Delitos contra suelo[19].
- Artículo 253.- Contaminación del aire[20].

Mientras que el Código Penal Español (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.) cuenta con un Título XVI <De los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente>, el cual en sus capítulos III <De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente> y IV <De los delitos relativos a la protección de la flora, fauna, y animales domésticos> consta de 15 tipos penales, de los cuales se acentúan 2, a saber:

- Artículo 326[21].
- Artículo 331[22].

el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes.

19 *Artículo 252.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes.*

20 *Artículo 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.*

21 *Artículo 326. 1. Serán castigados con las penas previstas en el artículo anterior, en sus respectivos supuestos, quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, recojan, transporten, valoricen, transformen, eliminen o aprovechen residuos, o no controlen o vigilen adecuadamente tales actividades, de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas, muerte o lesiones graves a personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.*

2. Quien, fuera del supuesto a que se refiere el apartado anterior, traslade una cantidad no desdeñable de residuos, tanto en el caso de uno como en el de varios traslados que aparezcan vinculados, en alguno de los supuestos a que se refiere el Derecho de la Unión Europea relativo a los traslados de residuos, será castigado con una pena de tres meses a un año de prisión, o multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de tres meses a un año.

22 *Artículo 331. Los hechos previstos en este capítulo serán sancionados, en su caso, con la pena inferior en grado, en sus respectivos supuestos, cuando se hayan cometido por imprudencia grave.*

De acuerdo con lo anterior, los países antes señalados tienen tipos penales autónomos para la deforestación, la utilización indebida de tierras, la alteración al recurso natural del paisaje, el aprovechamiento del recurso genético, la contaminación o desecamiento del agua, los daños graves en el suelo, la contaminación del aire y el aprovechamiento o destrucción ilegal de residuos.

Así como establecen una modalidad culposa para todos los delitos ambientales, en razón al daño que se ocasiona si o si con el actuar negligente, imperito o imprudente, y permiten la acción de una medida cautelar por parte del juez en aras de interrumpir o mitigar el daño ambiental.

Normas loables y necesarias que deben ser recogidas por nuestra legislación, entre otras, para proteger efectivamente los recursos naturales y el ambiente.

6. ACTUALIZACIÓN PROPUESTA POR EL PROYECTO

La finalidad principal del presente proyecto es sustituir el título concerniente a los delitos en contra de los recursos naturales y el medio ambiente, en aras de:

1. Modificar el orden de los actuales tipos penales, los cuales pareciera no se encuentran ordenados de acuerdo a un tema o un recurso natural específico al cual proteger, pues se empieza con el aprovechamiento de los recursos renovables, continúa con el manejo de microorganismos, con las especies exóticas, salta al daños en los recursos, seguido de la contaminación en sus variables, para continuar con la experimentación en especies, agentes biológicos o bioquímicos, saltando de nuevo a la pesca y a la caza (que hacen parte de la fauna), continuando con la invasión a áreas de importancia ecológica y concluyendo con la explotación minera.

Para lograr lo anterior es menester en primera medida, ordenarlos y categorizarlos de acuerdo a unos capítulos (9), lo cual permite, además, modificar la numeración de los artículos para que tengan un mejor hilo conductor.

2. Ajustar la terminología utilizada en los tipos penales en blanco, para que no se contradigan con los Decretos 2811 de 1974, 1608 de 1978, 1715 de 1978, 4688 de 2005, 2372 de 2010 y las Leyes 84 de 1989, 99 de 1993 y 685 del 2001, unificando de esta manera el lenguaje técnico sobre la materia.

3. Modificar la redacción de los tipos penales vigentes, incluir verbos rectores nuevos y eventos en los que se impondrá una pena superior al considerarse más gravosos.

4. Eliminar tipos penales que, en razón a la introducción de nuevas conductas, configuran o podrían configurar un non bis in ídem.

5. Incluir tipos penales nuevos, en aras de establecer una Política Criminal efectiva acorde con la Constitución que dé alcance al derecho

constitucional de conservación y protección del ambiente, teniendo en consideración el caso peruano, ecuatoriano y español.

6. Crear unas disposiciones comunes a todo el título.

7. Modificar la metodología empleada para la determinación de la sanción a aplicar, supeditándola específicamente al Impacto Ambiental (IA) que la conducta tenga como consecuencia.

Es así como se proponen las siguientes sustituciones a la normativa actual sobre la materia.

6.1 CREACIÓN DE NUEVOS CAPÍTULOS AL TÍTULO

Como fue referido, se hace necesario eliminar el capítulo único, el cual era insuficiente y crear varios capítulos al Título XI para poder realizar una clasificación por temas y recursos naturales a proteger. Es así, como se introducen los siguientes Capítulos:

CAPÍTULO I: De los delitos contra los recursos del agua y del suelo. Compuesto por cinco tipos penales que abordarán lo pertinente sobre el aprovechamiento de los recursos del agua, del suelo, los yacimientos mineros, entre otros.

CAPÍTULO II: De los delitos contra la biodiversidad de la fauna y de la flora. Compuesto por ocho tipos penales que abordarán lo pertinente sobre el aprovechamiento de los recursos de la fauna y la flora, así como la caza y pesca ilegal y la deforestación.

CAPÍTULO III: De los delitos contra la biodiversidad genética. Compuesto por un tipo penal que abordará lo pertinente sobre el aprovechamiento de los recursos genéticos de la biodiversidad.

CAPÍTULO IV: De los delitos contra el hábitat y el paisaje natural. Compuesto por dos tipos penales, y dando alcance al Código de Recursos Naturales y a la Ley 99 de 1993, estas normas abordarán lo pertinente sobre la alteración o destrucción de los diferentes hábitats y la alteración del recurso natural del paisaje.

CAPÍTULO V: De la contaminación ambiental. Compuesto por seis tipos penales que abordarán lo pertinente sobre los diferentes tipos de contaminación, así como de los elementos contaminantes.

CAPÍTULO VI: De la invasión de áreas de especial importancia ecológica. Compuesto por dos tipos penales que abordarán lo pertinente sobre la invasión de áreas de reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas o áreas protegidas, entre otras y su financiación.

CAPÍTULO VII: De la destinación ilegal de tierras. Compuesto por un tipo penal que abordará lo pertinente sobre la destinación ilegal de áreas de reserva forestal, ecosistemas estratégicos, entre otras, para un uso diferente al determinado por la ley.

CAPÍTULO VIII: Impacto Ambiental (IA). Compuesto por un tipo penal que abordará lo pertinente a la pena de prisión y de multa de acuerdo al Impacto Ambiental en los eventos en que se produzca.

CAPÍTULO IX: Disposiciones comunes a los capítulos anteriores. Compuesto por cuatro tipos penales que abordarán lo pertinente respecto a las circunstancias de agravación punitiva, la modalidad culposa, la extinción de dominio y la procedencia de medidas cautelares.

6.2. TIPOS PENALES QUE SE CONSERVAN

Del texto actual vigente se propone conservar con modificaciones en ubicación, numeración, verbos rectores, configuración y sanción, los siguientes tipos penales, los cuales continúan siendo idóneos y pertinentes, en rasgos generales, a saber:

- Manejo y uso ilícito de organismos, microorganismos y elementos genéticamente modificados. *(De este tipo penal se modifica además su nombre, el cual quedará así: Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos).*
- Manejo ilícito de especies exóticas.
- Contaminación ambiental.
- Contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos.
- Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo.
- Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos.
- Ilícita actividad de pesca. (De este tipo penal se modifica además su nombre, el cual quedará así: Pesca ilegal).
- Caza ilegal.
- Invasión de áreas de especial importancia ecológica.
- Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.
- Modalidad culposa.

Conservando así 11 tipos penales con modificaciones.

6.3 TIPOS PENALES RETIRADOS

Por otro lado, del texto actual vigente se hace necesario eliminar varios tipos penales, toda vez que, de acuerdo con las modificaciones que se realizarán sobre los delitos ya enunciados y con la introducción de nuevos artículos al código, se configuraría o se podría generar un non bis in ídem.

En consecuencia, resulta necesario eliminar los siguientes delitos:

• **Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables.** En razón a que este tipo penal no distinguía la importancia, gravedad y consecuencias de explotar, aprovechar o traficar distintos tipos de recursos, toda vez que no es lo mismo realizar la conducta en un recurso forestal que en uno de la fauna o uno hidrobiológico. Bajo esta misma línea el tipo penal no contemplaba los casos del aprovechamiento y explotación de los recursos del agua y del suelo. En consecuencia, de la eliminación de este tipo penal se crean cinco tipos penales nuevos:

i. aprovechamiento ilícito de las aguas y sus recursos biológicos;

ii. aprovechamiento ilícito de los recursos de la tierra, el suelo y el subsuelo;

iii. aprovechamiento ilícito de los recursos de la fauna;

iv. aprovechamiento ilícito de los recursos de la flora; y

v. aprovechamiento ilícito de los recursos genéticos de la biodiversidad.

• **Violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de recursos.** Este tipo penal primero fue concebido como un delito en contra de la seguridad del Estado, que posteriormente fue movido al presente título. Su configuración aborda tanto recursos naturales renovables como no renovables y tiene un sujeto activo calificado (el extranjero). Sin embargo, el tipo penal resulta inocuo, toda vez que, la ley penal se aplica en todo el territorio nacional y sobre todas aquellas personas que cometan conductas prohibidas, sin importar su raza, religión, ideología, sexo o nacionalidad (salvo los casos previstos en el artículo 33 sobre la inimputabilidad). En consecuencia, no es de recibo que exista un tipo penal autónomo para una conducta que puede y debe ser sancionada a través de otro tipo penal general.

• **Daños en los recursos naturales.** Este tipo penal se hace necesario eliminarlo, debido a que se limita a proteger recursos biológicos, excluyendo los daños que puedan producirse al suelo, a los recursos geotérmicos o el daño al paisaje. Aunado a las modificaciones introducidas por el presente Proyecto de ley, toda vez que, la configuración de cualquier tipo penal del presente capítulo, necesariamente tiene como consecuencia un daño en los recursos naturales de acuerdo a los verbos rectores utilizados, ya fuera un daño grave o uno leve. En el caso práctico significa un concurso de delitos obligatorio, donde su configuración como delito autónomo se hace compleja.

En razón a esto y a la introducción de una nueva metodología en la valoración de la pena, se hace necesario eliminar el presente delito, ya que la mayoría de los tipos penales del Título XI valorarán su sanción de acuerdo al efectivo daño o impacto ambiental producido, consecuencia de un estudio técnico, develando así la relevancia jurídico penal de la proximidad del daño, aplicándose directamente en la pena.

Eliminando así 3 tipos penales.

6.4. NUEVOS TIPOS PENALES ADICIONADOS

En aras de: 1. actualizar la normativa vigente frente a las nuevas dinámicas de aprovechamiento ilegal de los recursos naturales y daño al ambiente, y 2. establecer una Política Criminal efectiva acorde con los deberes impuestos al Estado por el artículo 79 de la Constitución Política, valorando el ejemplo de los Códigos penales de Perú, Ecuador y España, se hace necesario introducir como nuevos tipos penales, los siguientes:

i. Aprovechamiento ilícito de las aguas y sus recursos biológicos.

ii. Daño en coral.

iii. Aprovechamiento ilícito de los recursos de la tierra, del suelo y del subsuelo.

iv. Depósito o inyección de sustancias en el suelo.

v. Fracking.

vi. Aprovechamiento ilícito de los recursos de la fauna.

vii. Tráfico de fauna.

viii. Aleteo.

ix. Aprovechamiento ilícito de los recursos de la flora.

x. Deforestación.

xi. Promoción y financiación de la deforestación.

xii. Aprovechamiento ilícito de los recursos genéticos de la biodiversidad.

xiii. Destrucción o alteración de hábitat.

xiv. Alteración del paisaje.

xv. Fabricación, importación, exportación, tráfico o uso de plásticos.

xvi. Aprovechamiento ilícito de residuos.

xvii.Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica.

xviii. Destinación ilegal de tierras establecidas.

Y las siguientes disposiciones comunes de los tipos penales del Título XI:

- Impacto Ambiental (IA)
- Circunstancias de agravación punitiva.
- Extinción de dominio.
- Medida cautelar.

Teniendo de esta forma, veintidós (22) artículos nuevos, para un total de treinta y tres (33) tipos penales enfocados exclusivamente en la protección de los recursos naturales y el ambiente.

6.4.1. DEL APROVECHAMIENTO ILÍCITO

Respecto a los delitos, de: a) Aprovechamiento ilícito de las aguas y sus recursos biológicos, b) Aprovechamiento ilícito de los recursos de la tierra, del suelo y del subsuelo, c) Aprovechamiento ilícito de los recursos de la fauna, d) Aprovechamiento ilícito de los recursos de la flora y e) Aprovechamiento ilícito de los recursos genéticos de la biodiversidad, debe señalarse que estos se crean ante la eliminación del tipo penal de Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables.

Lo anterior era necesario, ya que de esta manera se corrige la falencia del artículo eliminado, al no incluir una protección a los recursos naturales del suelo y del agua, y no distinguir adecuadamente, a través de verbos rectores y penas distintas, la realización y consecuencias nocivas para el medio ambiente, de la comisión de un aprovechamiento en los distintos tipos de recursos naturales.

Así como tampoco protegía adecuadamente el aprovechamiento de los recursos genéticos o la explotación y tráfico de la flora y de la fauna, teniendo en consideración que; 1. La explotación de animales y plantas, su comercio y la destrucción del hábitat, es capaz de hacer mella importante en sus poblaciones e incluso posibilitar que algunas especies estén ad portas de la extinción,[23] y 2. Los delitos de caza ilegal y pesca ilícita, por su especialidad, eran insuficientes para proteger adecuadamente a la fauna silvestre.

6.4.2. LA DEFORESTACIÓN Y LA PROMOCIÓN Y FINANCIACIÓN A LA DEFORESTACIÓN COMO DELITOS AUTÓNOMOS

En 1994, Colombia ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), mediante la Ley 164, con el fin de buscar alternativas que le permitan adelantar acciones para enfrentar el cambio climático. Posteriormente, mediante la Ley 629 de 2000 se ratificó el Protocolo de Kioto, cuyo objetivo es reducir los gases de efecto invernadero (GEI), a través de la venta de cupos de emisiones por parte de los países que no son parte del Anexo 1 de la CMNUCC a las 37 economías industrializadas.

En la Conferencia de las Partes (COP – 13) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), sesión celebrada en Bali en el año 2007, se crea un mecanismo de intervención a través de enfoques políticos y de incentivos relacionados con la reducción de las emisiones derivadas de la degradación, deforestación y gestión de los bosques en los países en desarrollo, denominada REDD+. Este mecanismo en Colombia se ha expresado desde 2012 con el proceso de construcción de la Estrategia Nacional REDD+.

Siete años después de Bali, en la Declaración de Nueva York sobre Bosques de 2014 en el marco de la Cumbre de Cambio Climático, Colombia se comprometió, según sus capacidades, a alcanzar la meta de reducir a CERO la deforestación en el 2030, y apoyar las metas del sector privado de eliminar la huella de deforestación de la producción de materias primas agrícolas.

En el marco del Acuerdo de París, aprobado por Colombia mediante Ley 1844 de 2017, el país se comprometió con una reducción del 20% de las emisiones de GEI con respecto a las emisiones proyectadas para el año 2030.

La Honorable Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia STC4360 – 2018 de fecha 5 de abril de 2018, afirmó[24]:

"Resulta claro, pese a existir numerosos compromisos internacionales, normas vigentes y jurisprudencia sobre la materia, (sic) el Estado colombiano no ha enfrentado eficientemente la problemática de la deforestación en la Amazonía".

En relación con los impactos que conlleva la deforestación, la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques –"Bosques Territorios de Vida"[25], señala que:

"(…) Esta problemática se hace más relevante si se tiene en cuenta que además de las emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO2e) hacia la atmósfera que contribuyen al cambio climático, la deforestación trae como consecuencias la transformación y fragmentación de ecosistemas, aumenta el número de especies en condición de amenaza, altera el recurso hídrico y con ello, el abastecimiento de agua de los centros poblados, y degrada el suelo (DNP 2011)".

Adicionalmente, en el artículo titulado *"Las regiones más deforestadas en lo que va del 2017"* publicado por la *Revista Semana* Sostenible de fecha 2017/05/04, se afirma que:

"En términos ambientales, la deforestación es la principal preocupación que tiene el país en este momento. La transformación de los bosques para convertirlos en pastizales, sembrar cultivos de coca, para facilitar proyectos de infraestructura o para explotar la madera y los recursos minerales que los componen es el principal aporte de Colombia al calentamiento global.

Además, a medida que avanza la destrucción de los bosques primarios no solo aumentan las emisiones contaminantes a la atmósfera,

[23] *J. Galeano Rey y J. Montañez Ruiz, Manual de derecho penal, parte especial, Tomo II, Bogotá, Editorial Temis, 2011.*

[24] *Corte Suprema de Justicia Sentencia STC-4360 – 2018 del 5 de abril de 2018. M. P. Luis Armando Tolosa Villabona. P .41.*

[25] *Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques –Bosques Territorios de Vida. Bogotá. 2010. p. 57.*

sino que se esfuman las posibilidades de que el país honre los compromisos que ha adquirido internacionalmente para enfrentar el cambio climático. Como se sabe, la gran mayoría de los recursos que los países extranjeros han prometido para financiar esta lucha, están supeditados a la reducción de la deforestación"[26].

En la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques - "Bosques Territorios de Vida"[27], se distinguen las siguientes causas directas e indirectas de la deforestación:

"Las principales causas directas de la deforestación en el país son (González et al. 2017): ***expansión de la frontera agropecuaria, extracción ilícita de minerales, expansión de la infraestructura, extracción de madera e incendios forestales****. (Subrayado y negrilla nuestros)*

Sin embargo, es importante tener presente que estas causas directas[28] *de la deforestación son impulsadas por causas indirectas o subyacentes*[29]*, que agrupan complejas variables sociales, políticas, económicas, tecnológicas, y culturales, que influyen en las decisiones tomadas por los agentes*[30] *que deforestan, y ayudan a explicar el porqué del fenómeno de deforestación. En este sentido, las principales causas subyacentes de la deforestación son factores tecnológicos y económicos (mercados, economías ilegales e incentivos estatales; tecnologías, costos de producción y consumo), factores políticos e institucionales (políticas sectoriales y territoriales; presencia institucional y condiciones sociales; uso, distribución y derechos de propiedad sobre la tierra; conflicto armado y posconflicto); factores culturales (visión del bosque; arraigo, prácticas ancestrales y educación); factores demográficos (crecimiento de la población, migración); factores biofísicos (pendiente, clima, suelos, yacimientos, oferta hídrica, presencia de maderas finas, accesibilidad). Resulta también indispensable trabajar en mejorar el financiamiento para implementar medidas que reduzcan la deforestación, mejorar la coordinación y establecer arreglos institucionales eficientes, reducir las presiones ambientales, y fortalecer la gestión forestal a nivel nacional y regional*". (Subrayado nuestro).

Según el más reciente reporte del IDEAM[31], se evidencia que:

- En el año 2018 se deforestaron 197.159 hectáreas.
- En un modelo bajo se proyecta que la deforestación aumentará a 250.000 hectáreas para el año 2022, mientras que si se continúa con un modelo medio o un modelo alto, se proyecta que para para ese mismo año se tendrán 300.000 y 360.000 hectáreas deforestadas respectivamente.
- El 70,1% de la deforestación del año 2018 ocurrió en la región de la Amazonia. En el 2017 acumuló el 65,5%.
- Continúa la tendencia creciente de la deforestación en la región de la Orinoquia. La deforestación aumentó en 2.120 hectáreas.
- El departamento con mayor aumento de la deforestación fue Meta con cerca de 8 mil hectáreas.
- Para el año 2018 la deforestación en áreas del Sistema de Parques Nacionales representó el 10,7% del total nacional.
- En la jurisdicción de SEIS Áreas Protegidas se concentró el 92,5% de la deforestación de Parques Nacionales Naturales.
- Las áreas de Parques Nacionales Naturales acumularon una deforestación de 21.046 hectáreas.
- El 9,3 de la deforestación del país se presentó en jurisdicción de resguardos indígenas. (18.322 hectáreas).

Encienden las alarmas la situación de la deforestación en Colombia, por lo que se hace necesario que, si bien, a pesar de que se propone la creación del tipo penal de aprovechamiento ilícito de los recursos de la flora, es menester que se cree un delito autónomo que sancione específicamente la deforestación.

6.4.3. DE LOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO Y LOS RESIDUOS

En el reporte del Estado de los Plásticos presentado por las Naciones Unidas[32] se afirma, que:

---

[26] *26https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/ARTÍCULO/deforestacion-en-colombia-las-regiones-mas-deforestadas-en-2017/37730*

[27] *Ibídem cita 7. p. 72 - 73.*

[28] *Ibídem. "Se relacionan con actividades humanas que afectan directamente los bosques. Agrupan los factores que operan a escala local, diferentes a las condiciones iniciales estructurales o sistémicas, los cuales se originan en el uso de la tierra y que afectan la cobertura forestal mediante el aprovechamiento del recurso arbóreo, o su eliminación para dar paso a otros usos. Las causas directas permiten entender cómo se transforma el bosque".*

[29] *Ibídem. "Son factores que refuerzan las causas directas de la deforestación. Agrupan complejas variables sociales, políticas, económicas, tecnológicas, y culturales, que constituyen las condiciones iniciales en las relaciones estructurales existentes entre sistemas humanos y naturales. Estos factores influyen en las decisiones tomadas por los agentes y ayudan a explicar el porqué se presenta el fenómeno de deforestación".*

[30] *Ibídem. "Personas, grupos sociales o instituciones (públicas o privadas), que, influenciadas o motivadas por una serie de factores o causas subyacentes, toman la decisión de convertir los bosques naturales hacia otras coberturas y usos, y cuyas acciones se ven manifestadas en el territorio a través de una o más causas directas. Los agentes constituyen el actor más importante dentro de la caracterización".*

[31] *IDEAM, Resultados monitoreo de la deforestación 2018.*

[32] *ONU Medio Ambiente. El Estado de los Plásticos. Pers-*

"Los beneficios del plástico son innegables. El material es barato, liviano y fácil de hacer. Estas cualidades han llevado a un auge en la producción de plástico durante el siglo pasado y la tendencia continuará. Se estima que la producción mundial de plástico se disparará en los próximos 10- 15 años. Actualmente, somos incapaces de hacer frente a la cantidad de residuos plásticos que generamos. Solo una pequeña fracción se recicla y alrededor de 13 millones de toneladas de plástico se filtran en nuestros océanos cada año, dañando la biodiversidad, las economías y, potencialmente, nuestra propia salud.

El mundo necesita urgentemente reconsiderar la manera en la que fabricamos, usamos y administramos el plástico".

Es claro que las conductas contaminantes generan un riesgo próximo para el medio ambiente dada la probabilidad de que el daño resulte irreparable cuando es superada la capacidad de autorrecuperación del medio[33].

Consecuencia de lo anterior, resulta necesario tipificar los delitos de <Fabricación, importación, exportación, tráfico o uso de plásticos.> y <Aprovechamiento ilícito de residuos.>. Toda vez que deben tomarse medidas inmediatas y urgentes en aras de mitigar la contaminación generada por este tipo de elementos.

6.4.4. DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS DELITOS EN CONTRA DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE

El Código penal actual solo trae una disposición común sobre la modalidad culposa, la cual solo es aplicable específicamente a los delitos de Daños en los recursos naturales, Contaminación ambiental y Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo. Por lo delicado que resulta el equilibrio ecológico y las consecuencias nefastas que pueden devenir de su destrucción, se hace necesario crear varias disposiciones comunes que, por un lado, sancionen más severamente las conductas cometidas en contra de los recursos naturales y el ambiente, y por el otro, den al operador judicial herramientas para salvaguardar el derecho humano más colectivo.

Por lo anterior, se propone adicionar de manera general para todos los tipos penales del Título XI del Código Penal los siguientes artículos:

1. **Circunstancias de agravación punitiva.** Todas las penas de cualquiera de los delitos en contra de los recursos naturales y el ambiente se aumentarán a la mitad cuando con su comisión: I) se afecten ecosistemas naturales, calificados como estratégicos, II) se ponga en peligro la salud humana, las especies de flora, fauna o su hábitat, y III) sea consecuencia de la acción o la omisión de quienes ejercen funciones de control y vigilancia, esto quiere decir que para este tipo de delitos tiene lugar la denominada posición de garante.

2. **Modalidad culposa.** Bajo la lógica utilizada por la Ley 1453 de 2011 para incluir en el Código Penal la modalidad culposa del delito de Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, la cual reza:

"La contaminación ambiental que por culpa se ocasione al explotarse yacimiento minero o hidrocarburo es un hecho de común ocurrencia en nuestro medio, por ello se hace necesario extender el objeto de reproche penal a esta clase de comportamientos"[34].

Se nos permite concluir que, por la naturaleza del bien jurídico que se desea proteger, aunado con la afectación nefasta que una conducta, ya fuere con dolo, dolo eventual, culpa sin representación o culpa con representación puede ocasionar en los recursos naturales y el medio ambiente, es necesario generar un reproche hacia todas las conductas culposas que lo puedan violentar.

Así, "al tratarse de un delito imprudente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 9° y 23 del Código Penal, en el plano del injusto deberá constatarse la creación de un riesgo desaprobado, en el que debe tenerse en cuenta la infracción a la norma que constituye el hecho indicador de la creación del riesgo desaprobado, y su realización en el resultado típico, que, para el caso bajo estudio, estará dado por la contaminación de aguas, suelo, subsuelo o atmósfera"[35], o el impacto ambiental generado.

De acuerdo a Quintero Olivares: "Otro argumento que cabe aducir, en favor de la punición imprudente de las conductas constitutivas de delito ambiental, radica en que esta forma de delincuencia pocas veces, por no decir prácticamente nunca, opera con dolo directo, sino que en la mayoría de los casos el acto de contaminación, desde la óptica del actuar subjetivo, es reconducible a un dolo de consecuencia necesaria y muy especialmente a supuesto de dolo eventual (…) la previsión de la punición de supuestos de imprudencia grave, permite matizar situaciones próximas en términos de desvalor de acción, que poseen significación distinta y que deben poder ser valoradas a los efectos individualización de responsabilidad por parte del juez[36].

pectiva del día mundial del medio ambiente. 2018. p. 3-5. Ver:
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25513/state_plastics_WED_SP.pdf?isAllowed=y&sequence=5

33 *J. Galeano Rey y J. Montañez Ruiz, Manual de derecho penal, parte especial, Tomo II, Bogotá, Editorial Temis, 2011.*

34 *J. Galeano Rey y J. Montañez Ruiz, Manual de derecho penal, parte especial, Tomo II, Bogotá, Editorial Temis, 2011.*

35 *Ibídem.*

36 *G. Quintero Olivares et al., Derecho Penal. Parte especial. 5ta ed., Navarra, Edit. Thomson- Aranzadi, 2005, págs. 1243 y ss.*

Ratio decidendi para introducir la propuesta de una modalidad culposa aplicable a todos y cada uno de los delitos que componen el Título XI del Código Penal, en los casos en que ello sea posible de acuerdo a su configuración estructural.

3. Extinción de dominio. Se propone establecer que, los bienes tanto muebles como inmuebles empleados para el desarrollo de actividades que atenten contra el ambiente sean sometidos a extinción de dominio, de acuerdo a los términos establecidos en la Ley 1708 de 2014, *"por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio"*.

Así como en los casos en que se utilicen animales para la comisión de conductas punibles, estos sean decomisados y puestos a disposición de la autoridad competente. Lo anterior tiene una finalidad de prevención general sobre la sociedad y prevención especial sobre el individuo que cometa la conducta.

4. **Medida cautelar**. Como se pudo ver en los países de Ecuador y España, estos facultaron al juez para ordenar una serie de medidas que propendan por interrumpir la comisión de la conducta punible, así como suspender o prevenir el Impacto Ambiental (IA) que derive del hecho contrario a derecho. Ejemplo que Colombia debe seguir e implementar en su normativa, en pro de generar unas herramientas pertinentes e idóneas que permitan proteger de manera efectiva el bien jurídico tutelado del ambiente.

6.5 EL IMPACTO AMBIENTAL (IA)

La relevancia del estudio del Impacto Ambiental tiene razón de ser en el derecho que tienen todas las personas, las generaciones presentes y futuras a gozar de un ambiente sano, que emerge del conjunto normativo configurativo del sistema ambiental, (…), sin lugar a dudas, el fundamento de la obligación que la legislación ambiental ha impuesto a las personas de presentar una declaración de efecto o de impacto ambiental, sustentada en la realización de los correspondientes estudios técnicos, acerca de cuáles son las consecuencias que en el ambiente o en los recursos naturales va a producir el desarrollo o ejecución de una determinada obra o actividad[37].

6.5.1 EL ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL (IA) EN COLOMBIA

Desde el año 1993 en Colombia se habla de Impacto Ambiental (IA). A través de la Ley 99 de ese mismo año se creó el Ministerio de Medio Ambiente. Donde se determinó, entre otras cosas, que: 1. la biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, debería ser protegida prioritariamente, 2. las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serían objeto de protección especial, 3. el paisaje por ser patrimonio común debía ser protegido, y 4. los estudios de impacto ambiental serían el instrumento básico para la toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el ambiente.

Bajo este entendido, si una persona jurídica o natural desea que se le expida una licencia ambiental para el desarrollo de un proyecto, debe adelantar un estudio de impacto ambiental, el cual permita prever las consecuencias que ha de tener en los recursos naturales y en el ambiente, así como las opciones, herramientas y medidas disponibles para mitigar dichas consecuencias.

En el artículo 5° de la precitada Ley se establecieron las funciones del Ministerio de ambiente, que, en lo que respecta a los estudios de impacto ambiental, debe:

"(…)

17. Contratar cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones, la elaboración de estudios de investigación y seguimiento de procesos ecológicos y ambientales y la evaluación de impacto ambiental"[38].

Numeral que fue demandado por Constitucionalidad y que a través de sentencia C-649 de 1997 del Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell, determinó su exequibilidad[39].

Aunado a lo anterior, la Ley 99 determinó en su Título VIII <De las licencias ambientales>, en su artículo 57 <Del estudio de Impacto Ambiental> que el estudio de impacto ambiental contendría información sobre la localización del proyecto y los elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y la evaluación de los impactos que puedan producirse.

Posteriormente, el Decreto 1076 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", definió de manera taxativa el Impacto Ambiental, así: cualquier alteración en el medio ambiental biótico, abiótico y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad.

Así como estableció los criterios para la evaluación del estudio de Impacto Ambiental, supeditándolo a lo dispuesto por el "Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de proyectos".

Al día de hoy, para adelantar un estudio de Impacto Ambiental (IA), se cuenta con varias matrices que identifican y evalúan la extensión, duración, reversibilidad, importancia y magnitud del Impacto Ambiental. Es así como

[37] *Sentencia C-649 de 1997, M. P. Antonio Barrera Carbonell.*

[38] *Ley 99 de 1993.*

[39] *Sentencia C-649 de 1997, M. P. Antonio Barrera Carbonell.*

La Universidad Nacional de Colombia, a través de su libro "Metodología para la evaluación de impactos ambientales",[40] identificó seis (6) metodologías distintas para reconocer y valorar el Impacto Ambiental, a saber:

1. Metodología de Leopold.

2. Metodología Cualitativa.

3. Metodología de la Matriz de Valoración de Riesgo RAM (Risk Assessment Matriz).

4. Metodología de las Empresas Públicas de Medellín (EPM)

5. Metodología de redes complejas.

6. Metodología Battelle-Columbus.

Cada una de estas metodologías clasifica la importancia del Impacto Ambiental en distintas categorías, un ejemplo de esto es la Metodología de Leopold, que después de valorado el Impacto Ambiental y de acuerdo a un puntaje establecido, puede clasificar el impacto como Benéfico, Despreciable, Significativo y Altamente Significativo.

Mientras que la Metodología cualitativa, consecuencia de una fórmula matemática, clasifica el impacto en una escala que lo puede valorar de acuerdo al resultado obtenido:

Ecuación:

I = ±[(3 In) + (2 Ex)+ Mo + Pe + Rv + Rc + Si + Ac + Ef + Pr]

Para interpretar el resultado de la evaluación se aplica la siguiente escala:

Irrelevante = <25

Moderado = 25-50

Severo = 50-75

Crítico = >75

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desde hace poco más de 25 años ha tenido las herramientas para valorar los distintos tipos de metodologías y efectivamente expedir la licencia ambiental considerando el Impacto Ambiental.

Consecuencia de lo anterior, podemos afirmar que en Colombia el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene una experiencia idónea para establecer el Impacto Ambiental que pueda surgir de la comisión de delitos en contra de los recursos naturales y el ambiente.

6.5.2 LA SANCIÓN DE ACUERDO AL IMPACTO AMBIENTAL (IA)

Actualmente los delitos en contra de los recursos naturales y el ambiente acarrean consecuencias penales por el hecho de ejecutar el verbo rector aunado con los elementos subjetivos y normativos del tipo objetivo.

La gravedad de la conducta solo se tiene en consideración por parte del juez penal al momento de establecer el monto de la pena y de la multa, lo anterior de acuerdo con el sistema de cuartos que señala el artículo 61 de la Ley 599 del 2000, con base en las conductas descritas en los artículos 55 y 58 del mismo código, tal y como lo ha reiterado la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-181 de 2016, Magistrada Ponente Gloria Stella Ortiz Delgado[41].

Sin embargo, en la valoración y establecimiento de la pena del juez no media un estudio técnico, necesario para este tipo de delitos, que permita determinar con certeza el daño a los distintos recursos naturales, tanto renovables como no renovables y las consecuencias a mediano y largo plazo de su actuar.

Es menester que la determinación de la pena esté supeditada y se establezca de acuerdo con el Impacto Ambiental (IA) que efectivamente produzca el delito.

Es por esto por lo que, el presente proyecto, desea innovar en cuanto a la determinación de la pena a imponer de acuerdo al Impacto Ambiental (IA).

Para lo cual se requiere que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible determine la metodología que se utilizará para valorar el Impacto Ambiental (IA), de acuerdo a unos mecanismos objetivos que tengan como resultado una cifra numérica entre 1 y 100 (Como es el caso de la metodología cualitativa), que permitan que en el desarrollo de las diferentes etapas del proceso, tanto el ente acusador, como el fallador puedan determinar la gravedad de la conducta punible y la pena a imponer, de acuerdo al Impacto Ambiental (IA) ocasionado.

7. COMPETENCIA DEL CONGRESO

7.1 CONSTITUCIONAL

Artículo 114. Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración.

El Congreso de la República, estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes

Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.

2. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones.

3. Aprobar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas que hayan de emprenderse o continuarse, con la determinación de los recursos y apropiaciones que se autoricen para su

[40] *Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Metodología para la Evaluación de Impactos Ambientales, 2018.*

[41] *Sentencia C-181 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.*

ejecución, y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos.

4. Definir la división general del territorio con arreglo a lo previsto en esta Constitución, fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus competencias.

7.2 LEGAL

LEY 3ª DE 1992. POR LA CUAL SE EXPIDEN NORMAS SOBRE LAS COMISIONES DEL CONGRESO DE COLOMBIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 2º. *Tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes funcionarán Comisiones Constitucionales Permanentes, encargadas de dar primer debate a los proyectos de acto legislativo o de ley referente a los asuntos de su competencia.*

Las Comisiones Constitucionales Permanentes en cada una de las Cámaras serán siete (7) a saber:

Comisión Primera.

Compuesta por diecinueve (19) miembros en el Senado y treinta y cinco (35) en la Cámara de Representantes, conocerá de: reforma constitucional; leyes estatutarias; organización territorial; reglamentos de los organismos de control; normas generales sobre contratación administrativa; notariado y registro; estructura y organización de la administración nacional central; de los derechos, las garantías y los deberes; rama legislativa; estrategias y políticas para la paz; propiedad intelectual; variación de la residencia de los altos poderes nacionales; asuntos étnicos.

8. PLIEGO DE MODIFICACIONES

TEXTO RADICADO	TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
ARTÍCULO 1o. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente: **TÍTULO XI.** **DE LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTE** **CAPÍTULO I.** **DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS DEL AGUA Y DEL SUELO** **ARTÍCULO 328.** ***Aprovechamiento ilícito de las aguas y de sus recursos biológicos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, use, explore, aproveche o se beneficie de las aguas o de los especímenes, productos o partes de los recursos biológicos de las aguas y del suelo o el subsuelo del mar territorial o de la zona económica de dominio continental e insular de la República, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de veinticinco mil (25.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se desvíe, destruya, inutilice o haga desaparecer los cuerpos hídricos o sus recursos biológicos.	**ARTÍCULO 1o.** Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente: **TÍTULO XI.** **DE LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTE** **CAPÍTULO I.** **DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS DEL AGUA Y DEL SUELO** **ARTÍCULO 328.** ***Aprovechamiento ilícito de las aguas y de sus recursos biológicos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, use, explore, aproveche o se beneficie de las aguas o de los especímenes, productos o partes de los recursos **hidrobiológicos o** biológicos de las aguas y del suelo o el subsuelo del mar territorial o de la zona económica de dominio continental e insular de la República, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de veinticinco mil (25.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se desvíe, destruya, inutilice o haga desaparecer los cuerpos hídricos o sus recursos **hidro**biológicos. **ARTÍCULO 328A.** ***Destrucción de coral.*** El que destruya, inutilice, altere, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe arrecife coralino, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de quinientos (500) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

	Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se desvíe, destruya, inutilice o haga desaparecer los cuerpos hídricos o sus recursos hidrobiológicos.
ARTÍCULO 329. ***Aprovechamiento ilícito de los recursos de la tierra, del suelo y del subsuelo.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, trafique, comercie, explore, aproveche o se beneficie de los recursos naturales de la tierra, del suelo o del subsuelo o provoque o realice directa o indirectamente extracciones, excavaciones, aterramientos o vibraciones en el suelo o el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**ARTÍCULO 329.** ***Aprovechamiento ilícito de los recursos de la tierra, del suelo y del subsuelo.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, trafique, comercie, explore, aproveche o se beneficie de los recursos naturales de la tierra, del suelo o del subsuelo o provoque o realice directa o indirectamente extracciones, excavaciones, aterramientos o vibraciones en el suelo o el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de veintiséis mil (26.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de veintiséis mil (26.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.	La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.
ARTÍCULO 329A. ***Depósito o inyección de sustancias en el suelo.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes realice inyección o depósito de sustancias que generen daños en el ambiente, en el suelo o en el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente:	**ARTÍCULO 329A.** ***Depósito o inyección de sustancias en el suelo.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes realice inyección o depósito de sustancias que generen daños en el ambiente, en el suelo o en el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente:
Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.	La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.
ARTÍCULO 329B. ***Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes excave, explote, explore o extraiga yacimiento minero, arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de	**ARTÍCULO 329B.** ***Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes excave, explote, explore o extraiga yacimiento minero, arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de

setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se realice a través de minería a cielo abierto, o con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.	La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se realice a través de minería a cielo abierto, o con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.
ARTÍCULO 329C. ***Fracking.*** El que realice actividades de explotación y aprovechamiento del suelo o del subsuelo a través del método de fractura hidráulica, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**ARTÍCULO 329C.** ***Fracking.*** El que realice actividades de explotación y aprovechamiento del suelo o del subsuelo a través del método de fractura hidráulica, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de treinta y cinco mil (35.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de treinta y cinco mil (35.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales o altere o destruya acuíferos.	La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales o altere o destruya acuíferos.
CAPÍTULO II. **DE LOS DELITOS CONTRA LA BIODIVERSIDAD DE LA FAUNA Y DE LA FLORA**	**CAPÍTULO II.** **DE LOS DELITOS CONTRA LA BIODIVERSIDAD DE LA FAUNA Y DE LA FLORA**
ARTÍCULO 330. ***Aprovechamiento ilícito de los recursos de la fauna.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, capture, extraiga, transporte, mantenga, trafique, comercie, adquiera, aproveche, explote o se beneficie de la fauna, o realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**ARTÍCULO 330.** ***Aprovechamiento ilícito de los recursos de la fauna.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, capture, extraiga, transporte, mantenga, **trafique,** comercie, **adquiera,** aproveche, explote o se beneficie de la fauna, o realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos,	La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos,

explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.	explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat. ARTÍCULO 330A. *Tráfico de fauna.* El que trafique o que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes adquiera especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas o invasoras incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de trescientos (300) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.
ARTÍCULO 330A. ***Caza ilegal.*** El que sin permiso de autoridad competente o infringiendo las normas existentes, cazare en época de veda o excediere el número de piezas permitidas, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la misma pena incurrirá quien realice caza deportiva. Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ochenta y cuatro (84) a ciento ochenta (180) meses y multa de diecisiete mil (17.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.	**ARTÍCULO 330BA.** ***Caza ilegal.*** El que sin permiso de autoridad competente o con **incumplimiento de infringiendo** las normas **vigentes existentes**, cazare en época de veda o excediere el número de piezas permitidas, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la misma pena incurrirá quien realice caza deportiva. Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ochenta y cuatro (84) a ciento ochenta (180) meses y multa de diecisiete mil (17.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.
ARTÍCULO 330B. ***Pesca ilegal.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese, envase o almacene ejemplares o productos de especies protegidas, vedadas o en peligro de extinción, incurrirá, sin	**ARTÍCULO 330CB.** ***Pesca ilegal.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese, envase o almacene ejemplares o productos de especies protegidas, vedadas o en peligro de extinción, incurrirá, sin

perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá el que exceda el número de piezas autorizadas o de tallas menores a las permitidas, las comercie, o utilice instrumentos no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente para cualquier especie.	En la misma pena incurrirá el que exceda el número de piezas autorizadas o de tallas menores a las permitidas, las comercie, o utilice instrumentos no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente para cualquier especie.
Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de cuarenta y cuatro mil (44.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de cuarenta y cuatro mil (44.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en zonas o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva, se construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ríos, ciénagas, lagunas, caños y canales o con la conducta se desequen, varíen o bajen su nivel, o se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.	La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en zonas o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva, se construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ríos, ciénagas, lagunas, caños y canales o con la conducta se desequen, varíen o bajen su nivel, o se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.
	ARTÍCULO 330D. *Aleteo.* El que cercene, retenga aletas de tiburón y descarte el resto del cuerpo al mar, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en zonas o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva, se construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ríos, ciénagas, lagunas, caños y canales o con la conducta se desequen, varíen o bajen su nivel, o se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.
ARTÍCULO 331. *Aprovechamiento ilícito de los recursos de la flora.* El que sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, adquiera, recolecte, extraiga, corte, tale, arranque, posea, destruya, transporte, trafique, comercie, aproveche o se beneficie de las especies de la flora silvestre o acuática, incurrirá, sin perjuicio de	**ARTÍCULO 331.** *Aprovechamiento ilícito de los recursos de la flora.* El que sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, adquiera, recolecte, extraiga, corte, tale, arranque, posea, destruya, transporte, trafique, comercie, aproveche o se beneficie de las especies de la flora silvestre o acuática, incurrirá, sin perjuicio de

las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en zonas o áreas de reserva, en período de producción de semillas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.	La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en **reserva climática,** zonas o áreas de reserva, en período de producción de semillas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.
ARTÍCULO 331A. ***Deforestación.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normas vigentes, tale, queme, corte o destruya, en todo o en parte bosques naturales, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**ARTÍCULO 331A.** ***Deforestación.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, tale, queme, corte o destruya, en todo o en parte bosques naturales, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de treinta y siete mil (37.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de treinta y siete mil (37.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se altere las aguas, se ocasione erosión del suelo, se modifique el régimen climático, se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.	La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, **reserva climática,** ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se altere las aguas, se ocasione erosión del suelo, se modifique el régimen climático, se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.
ARTÍCULO 331B. ***Promoción y financiación de la Deforestación.*** El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte o destrucción, en todo o en parte de bosques naturales, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**ARTÍCULO 331B.** ***Promoción y financiación de la Deforestación.*** El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte o destrucción, en todo o en parte de bosques naturales, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se altere las aguas, se ocasione erosión del suelo, se modifique el régimen climático, se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.	La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, **reserva climática**, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se altere las aguas, se ocasione erosión del suelo, se modifique el régimen climático, se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.
ARTÍCULO 332. *Manejo ilícito de especies exóticas.* El que introduzca, trasplante, manipule, experimente, mantenga, adquiera, inocule, libere o propague especies silvestres exóticas o invasoras, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento a ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**ARTÍCULO 332. *Manejo ilícito de especies exóticas.*** El que **sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes** introduzca, trasplante, manipule, experimente, mantenga, **comercie adquiera**, inocule, libere o propague especies silvestres exóticas o invasoras, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento a ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de trece mil (13.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de trece mil (13.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
ARTÍCULO 332A. *Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos.* El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normas vigentes importe, introduzca, comercialice, exporte, manipule, experimente, libere, inocule, o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos moléculas, sustancias o elementos que constituyan un riesgo o pongan en peligro la salud humana, el ambiente o la existencia de los recursos de la fauna, de la flora o biológicos de las aguas, o alteren perjudicialmente sus poblaciones incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**ARTÍCULO 332A. *Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes importe, introduzca, comercialice, exporte, manipule, experimente, libere, inocule, o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos moléculas, sustancias o elementos que constituyan un riesgo o pongan en peligro la salud humana, el ambiente o la existencia de los recursos de la fauna, de la flora o biológicos de las aguas, o alteren perjudicialmente sus poblaciones incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de diecisiete mil (17.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de diecisiete mil (17.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
Si se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad.	Si se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad.
CAPÍTULO III. **DE LOS DELITOS CONTRA LA BIODIVERSIDAD GENÉTICA**	**CAPÍTULO III.** **DE LOS DELITOS CONTRA LA BIODIVERSIDAD GENÉTICA**
ARTÍCULO 333. *Aprovechamiento ilícito de recursos genéticos de la biodiversidad.* El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, exporte, mantenga, trafique, comercie, aproveche, explore, valorice, transforme o se beneficie a cualquier título de los recursos genéticos de la flora o la fauna, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a	**ARTÍCULO 333. *Aprovechamiento ilícito de recursos genéticos de la biodiversidad.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, exporte, mantenga, trafique, comercie, aproveche, explore, valorice, transforme o se beneficie a cualquier título de los recursos genéticos de la flora o la fauna, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a

que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El que promueva, financie, dirija, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en este artículo, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	El que promueva, financie, dirija, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en este artículo, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
CAPÍTULO IV. **DE LOS DELITOS CONTRA EL HÁBITAT Y EL PAISAJE NATURAL**	**CAPÍTULO IV.** **DE LOS DELITOS CONTRA EL HÁBITAT Y EL PAISAJE NATURAL**
ARTÍCULO 334. *Destrucción o alteración de hábitat.* El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes destruya o altere hábitat de especies de la flora o de la fauna, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente:	**ARTÍCULO 334. *Destrucción o alteración de hábitat.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes destruya o altere hábitat de especies de la flora o de la fauna, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente:
Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
ARTÍCULO 334A. *Alteración del paisaje.* El que sin permiso de autoridad competente con incumplimiento de la normas vigentes, altere el recurso del paisaje urbano o rural, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**ARTÍCULO 334A. *Alteración del paisaje.*** El que sin permiso de autoridad competente con incumplimiento de la**s** normas vigentes, altere el recurso del paisaje urbano o rural, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de trece mil (13.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de trece mil (13.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
CAPÍTULO V. **DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL**	**CAPÍTULO V.** **DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL**
ARTÍCULO 335. *Contaminación ambiental.* El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes provoque, contamine o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, disposiciones o ruidos en el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, o demás recursos naturales incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cincuenta y cinco (55) a ciento doce (112) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**ARTÍCULO 335. *Contaminación ambiental.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes provoque, contamine o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, disposiciones o ruidos en el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, o demás recursos naturales incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cincuenta y cinco (55) a ciento doce (112) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000)	Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000)

salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el presente artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, concurra alguna de las siguientes circunstancias:	La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el presente artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas. 2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por las normas vigentes o haya infringido más de dos parámetros. 3. Cuando la contaminación, descarga, disposición o vertimiento se realice en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas. 4. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, emisiones o disposiciones. 5. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo. 6. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de vigilancia y control de la autoridad ambiental. 7. El perjuicio o alteración ocasionados adquieran un carácter catastrófico o irreversible.	1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas. 2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por las normas vigentes o haya infringido más de dos parámetros. 3. Cuando la contaminación, descarga, disposición o vertimiento se realice en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas. 4. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, emisiones o disposiciones. 5. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo. 6. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de vigilancia y control de la autoridad ambiental. 7. El perjuicio o alteración ocasionados adquieran un carácter catastrófico o irreversible.
ARTÍCULO 335A. *Contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos.* El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes contamine, almacene, transporte, vierta o disponga inadecuadamente, residuo sólido peligroso incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**ARTÍCULO 335A. *Contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes contamine, almacene, transporte, vierta o disponga inadecuadamente, residuo sólido peligroso incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el presente artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, concurra alguna de las siguientes circunstancias:	La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el presente artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas. 2. Cuando la descarga o disposición se realice en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas. 3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente la descarga o disposición. 4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo. 5. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya	1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas. 2. Cuando la descarga o disposición se realice en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas. 3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente la descarga o disposición. 4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo. 5. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya

obstaculizado la actividad de vigilancia y control de la autoridad ambiental. 6. El perjuicio o alteración ocasionados adquieran un carácter catastrófico o irreversible.	obstaculizado la actividad de vigilancia y control de la autoridad ambiental. 6. El perjuicio o alteración ocasionados adquieran un carácter catastrófico o irreversible.
ARTÍCULO 335B. ***Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo.*** El que contamine directa o indirectamente la atmosfera, el suelo, el subsuelo o las aguas como consecuencia de la actividad de extracción, excavación, exploración, construcción, inyección, deposito, montaje, explotación, beneficio, transformación o transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**ARTÍCULO 335B.** ***Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo.*** El que contamine directa o indirectamente la atmosfera, el suelo, el subsuelo o las aguas como consecuencia de la actividad de extracción, excavación, exploración, construcción, inyección, deposito, montaje, explotación, beneficio, transformación o transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
Si la conducta se realizare como consecuencia de la minería a cielo abierto la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad de la pena.	Si la conducta se realizare como consecuencia de la minería a cielo abierto la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad de la pena.
ARTÍCULO 335C. ***Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, realice experimentos, con especies, agentes biológicos o bioquímicos, que constituyan, generen o pongan en peligro o riesgo la salud humana, el ambiente o la existencia de los recursos de la fauna, la flora o biológicos de las aguas, o altere sus poblaciones, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**ARTÍCULO 335C.** ***Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, realice experimentos, con especies, agentes biológicos o bioquímicos, que constituyan, generen o pongan en peligro o riesgo la salud humana, el ambiente o la existencia de los recursos de la fauna, la flora o biológicos de las aguas, o altere sus poblaciones, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de treinta y siete mil (37.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de treinta y siete mil (37.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
ARTÍCULO 335D. ***Fabricación, importación, exportación, tráfico o uso de plásticos prohibidos.*** El que fabrique, trafique, importe, exporte, distribuya, comercialice, transporte, almacene, financie, ofrezca, adquiera, suministre a cualquier título o use elementos de plástico prohibidos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**ARTÍCULO 335D.** ***Fabricación, importación, exportación, tráfico o uso de plásticos prohibidos.*** El que fabrique, trafique, importe, exporte, distribuya, comercialice, transporte, almacene, financie, ofrezca, adquiera, suministre a cualquier título o use **elementos de plástico prohibidos** bolsas utilizadas para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías, distribuidas en los puntos de pago; bolsas plásticas para embalar periódicos, revistas y facturas; bolsas utilizadas en las lavanderías para empacar ropa lavada; rollos de película extensible para el empaque de alimentos a granel, excepto los cárnicos; rollos de bolsas vacías para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías o llevar alimentos, excepto los cárnicos; rollos de película extensible y de burbuja utilizados para proteger objetos durante las mudanzas dentro del territorio nacional; envases y recipientes

	para contener o llevar alimentos preparados de consumo inmediato; bolsas para contener líquidos; platos, bandejas, cubiertos (cuchillos, tenedores, cucharas), vasos y guantes para comer; mezcladores y pitillos para bebidas y soportes plásticos para las bombas de inflar; soportes plásticos de los Copitos de Algodón o hisopos flexibles con puntas de Algodón incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las sanciones previstas en este artículo, no aplicarán sobre aquellos plásticos de un solo uso diseñados para propósitos médicos o de salud pública, por razones de asepsia e higiene o contener sustancias químicas que presentan riesgo a la salud humana en su manipulación.
ARTÍCULO 335E. ***Aprovechamiento ilícito de residuos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, recoja, transporte, valorice, transforme, elimine o aproveche residuos sólidos o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**ARTÍCULO 335E.** ***Aprovechamiento ilícito de residuos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, recoja, transporte, valorice, transforme, elimine o aproveche residuos sólidos o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
CAPÍTULO VI. **DE LA INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA**	**CAPÍTULO VI.** **DE LA INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA**
ARTÍCULO 336. ***Invasión de áreas de especial importancia ecológica.*** El que invada, permanezca, así sea de manera temporal, o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en áreas de reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, definidos en la ley o reglamento, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**ARTÍCULO 336.** ***Invasión de áreas de especial importancia ecológica.*** El que invada, permanezca, así sea de manera temporal, o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en áreas de reserva forestal, **reserva climática,** zonas de nacimientos hídricos, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, definidos en la ley o reglamento, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente.	La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente.
ARTÍCULO 336A. ***Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica.*** El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento	**ARTÍCULO 336A.** ***Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica.*** El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento

ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente.	La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente.
CAPÍTULO VII. **DE LA DESTINACIÓN ILEGAL DE TIERRAS**	**CAPÍTULO VII.** **DE LA DESTINACIÓN ILEGAL DE TIERRAS**
ARTÍCULO 337. ***Destinación ilegal de tierras establecidas.*** El que utilice o destine con uso diferente para el cual fueron definidas las tierras establecidas, declaradas, tituladas o delimitadas por autoridad competente, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**ARTÍCULO 337.** ***Destinación ilegal de tierras establecidas.*** El que utilice o destine con uso diferente para el cual fueron definidas las tierras establecidas, declaradas, tituladas o delimitadas por autoridad competente, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá quien use o destine tierras sobre las cuales se hubiese cometido deforestación para fines distintos a la resiembra o restauración.	En la misma pena incurrirá quien use o destine tierras sobre las cuales se hubiese cometido deforestación para fines distintos a la resiembra o restauración.
Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se impondrá prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa de trescientos (300) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se impondrá prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa de trescientos (300) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de once mil (11.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de once mil (11.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
CAPÍTULO VIII. **IMPACTO AMBIENTAL (IA)**	**CAPÍTULO VIII.** **IMPACTO AMBIENTAL (IA)**
ARTÍCULO 338. ***Impacto Ambiental (IA).*** Cuando las conductas del presente título tengan como resultado un Impacto Ambiental (IA), el ámbito punitivo de movilidad de la pena de prisión y de multa se dividirá en tercios, así: uno mínimo, uno medio y uno máximo.	**ARTÍCULO 338.** ***Impacto Ambiental (IA).*** Cuando las conductas del presente título tengan como resultado un Impacto Ambiental (IA), el ámbito punitivo de movilidad de la pena de prisión y de multa se dividirá en tercios, así: uno mínimo, uno medio y uno máximo.
La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio mínimo cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) que no pase de cincuenta (50) IA.	La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio mínimo cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) que no pase de cincuenta (50) IA.
La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio medio cuando la afectación tuviere como consecuencia un	La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio medio cuando la afectación tuviere como consecuencia un

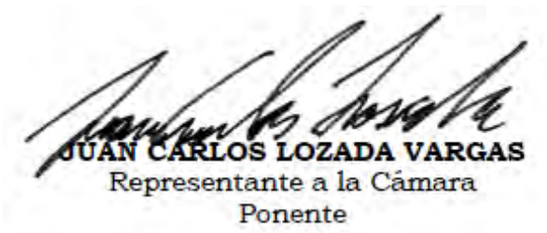
impacto ambiental superior a cincuenta (50) IA sin exceder de setenta y cinco (75) IA. La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio máximo cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental que pasare de setenta y cinco (75) IA.	impacto ambiental superior a cincuenta (50) IA sin exceder de setenta y cinco (75) IA. La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio máximo cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental que pasare de setenta y cinco (75) IA.
CAPÍTULO IX. **DISPOSICIONES COMUNES**	**CAPÍTULO IX.** **DISPOSICIONES COMUNES**
ARTÍCULO 338A. *Circunstancias de agravación punitiva.* Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán a la mitad cuando: 1) Se afecten ecosistemas estratégicos que hagan parte de las áreas protegidas del Sistema Nacional, Regional o Local. 2) Cuando el daño ambiental sea consecuencia de la acción u omisión de quienes ejercen funciones de vigilancia y control. 3) Se pongan en peligro la salud humana, las especies de flora, fauna o su hábitat.	**ARTÍCULO 338A. *Circunstancias de agravación punitiva.*** Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán a la mitad cuando: 1) Se afecten ecosistemas estratégicos que hagan parte de las áreas protegidas del Sistema Nacional, Regional o Local. 2) Cuando el daño ambiental sea consecuencia de la acción u omisión de quienes ejercen funciones de vigilancia y control. 3) Se pongan en peligro la salud humana, las especies de flora, fauna o su hábitat. **4) Cuando se genere pérdida de biodiversidad.**
ARTÍCULO 338B. *Modalidad culposa.* Si por culpa se ocasionare alguna de las conductas descritas en este título, en los casos en que ello sea posible según su configuración estructural, la pena correspondiente se reducirá a la mitad.	**ARTÍCULO 338B. *Modalidad culposa.*** Si por culpa se ocasionare alguna de las conductas descritas en este título, en los casos en que ello sea posible según su configuración estructural, la pena correspondiente se reducirá a la mitad.
ARTÍCULO 338C. *Extinción de dominio.* Los bienes muebles e inmuebles empleados para el desarrollo de las conductas descritas en este título serán sometidos a extinción de dominio en los términos de la Ley 1708 de 2014. Tratándose de animales, estos serán puestos a decomiso y disposición de la autoridad competente. Lo previsto en el presente artículo no aplicará frente a los delitos de depósito o inyección de sustancias en el suelo (Art. 329A C.P.), alteración del paisaje (Art. 334A C.P.), fabricación, importación, exportación, tráfico o uso de plásticos prohibidos (Art. 335D C.P.), aprovechamiento ilícito de residuos (Art. 335E C.P.) e invasión de áreas de especial importancia ecológica (Art. 336 C.P.).	**ARTÍCULO 338C. *Extinción de dominio.*** Los bienes muebles e inmuebles empleados para el desarrollo de las conductas descritas en este título serán sometidos a extinción de dominio en los términos de la Ley 1708 de 2014. Tratándose de animales, estos serán puestos a decomiso y disposición de la autoridad competente. Lo previsto en el presente artículo no aplicará frente a los delitos de depósito o inyección de sustancias en el suelo (Art. 329A C.P.), alteración del paisaje (Art. 334A C.P.), fabricación, importación, exportación, tráfico o uso de plásticos prohibidos (Art. 335D C.P.), aprovechamiento ilícito de residuos (Art. 335E C.P.) e invasión de áreas de especial importancia ecológica (Art. 336 C.P.).
ARTÍCULO 339. *Medida Cautelar.* El juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.	**ARTÍCULO 339. *Medida Cautelar.*** El juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.
ARTÍCULO 2o. *Reglamentación del Impacto Ambiental.* El Gobierno Nacional en un término de tres (3) meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley, expedirá la reglamentación sobre el método para determinar el daño ambiental según el Impacto Ambiental (IA) en los términos del artículo primero.	Se mantiene igual.
ARTÍCULO NUEVO.	**ARTÍCULO 3o. *Pedagogía sobre el ambiente.*** Los establecimientos educativos de educación básica, media y universitaria, incluirán en su Proyecto Educativo Institucional, una catedra ambiental que busque la compresión, el fomento y la participación ciudadana para generar conciencia ambiental sobre el buen uso de los recursos naturales, las practicas que son contrarias a la sostenibilidad, la importancia de las áreas de especial importancia ecológica y las regulaciones y leyes sobre la materia.

	Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación promoverán programas de formación docente para el desarrollo de las mencionadas estrategias.
ARTÍCULO 3o. *Vigencia.* La presente ley entrará en vigencia seis (6) meses después de la fecha de su promulgación y deroga el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000.	**ARTÍCULO 43o. *Vigencia.*** La presente ley entrará en vigencia seis (6) meses después de la fecha de su promulgación y deroga el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000.

9. PROPOSICIÓN

Con fundamento en las anteriores consideraciones, presento ponencia positiva con modificaciones al texto radicado y, en consecuencia, solicito a los Honorables Representantes que integran la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, dar Primer Debate al Proyecto Ley número 283 de 2019 Cámara, "por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000".

Cordialmente,



JUAN CARLOS LOZADA VARGAS
Representante a la Cámara
Ponente

10. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 283 DE 2019 CÁMARA

por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000.

El Congreso de la República

DECRETA:

Artículo 1°. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:

TÍTULO XI

DE LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTE

CAPÍTULO I

De los delitos contra los recursos del agua y del suelo

Artículo 328. *Aprovechamiento ilícito de las aguas y de sus recursos biológicos*. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, use, explore, aproveche o se beneficie de las aguas o de los especímenes, productos o partes de los recursos hidrobiológicos o biológicos de las aguas y del suelo o el subsuelo del mar territorial o de la zona económica de dominio continental e insular de la República, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de veinticinco mil (25.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se desvíe, destruya, inutilice o haga desaparecer los cuerpos hídricos o sus recursos hidrobiológicos.

Artículo 328A. *Destrucción de coral.* El que destruya, inutilice, altere, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe arrecife coralino, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de quinientos (500) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se desvíe, destruya, inutilice o haga desaparecer los cuerpos hídricos o sus recursos hidrobiológicos.

Artículo 329. Aprovechamiento ilícito de los recursos de la tierra, del suelo y del subsuelo. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, trafique, comercie, explore, aproveche o se beneficie de los recursos naturales de la tierra, del suelo o del subsuelo o provoque o realice directa o indirectamente

extracciones, excavaciones, aterramientos o vibraciones en el suelo o el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de veintiséis mil (26.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.

Artículo 329A. Depósito o inyección de sustancias en el suelo. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes realice inyección o depósito de sustancias que generen daños en el ambiente, en el suelo o en el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente:

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.

Artículo 329B. ***Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes excave, explote, explore o extraiga yacimiento minero, arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se realice a través de minería a cielo abierto, o con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.

Artículo 329C. ***Fracking.*** El que realice actividades de explotación y aprovechamiento del suelo o del subsuelo a través del método de fractura hidráulica, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de treinta y cinco mil (35.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales o altere o destruya acuíferos.

CAPÍTULO II

De los delitos contra la biodiversidad de la fauna y de la flora

Artículo 330. ***Aprovechamiento ilícito de los recursos de la fauna.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, capture, extraiga, transporte, mantenga, comercie, aproveche, explote o se beneficie de la fauna, o realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con

la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

Artículo 330A. ***Tráfico de fauna.*** El que trafique o que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes adquiera especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas o invasoras incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de trescientos (300) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

Artículo 330B. ***Caza ilegal.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, cazare en época de veda o excediere el número de piezas permitidas, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá quien realice caza deportiva.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ochenta y cuatro (84) a ciento ochenta (180) meses y multa de diecisiete mil (17.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

Artículo 330C. ***Pesca ilegal.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese, envase o almacene ejemplares o productos de especies protegidas, vedadas o en peligro de extinción, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que exceda el número de piezas autorizadas o de tallas menores a las permitidas, las comercie, o utilice instrumentos no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente para cualquier especie.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de cuarenta y cuatro mil (44.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en zonas o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva, se construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ríos, ciénagas, lagunas, caños y canales o con la conducta se desequen, varíen o bajen su nivel, o se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

Artículo 330D. ***Aleteo.*** El que cercene, retenga aletas de tiburón y descarte el resto del cuerpo al mar, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en zonas o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas,

inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva, se construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ríos, ciénagas, lagunas, caños y canales o con la conducta se desequen, varíen o bajen su nivel, o se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

Artículo 331. ***Aprovechamiento ilícito de los recursos de la flora.*** El que sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, adquiera, recolecte, extraiga, corte, tale, arranque, posea, destruya, transporte, trafique, comercie, aproveche o se beneficie de las especies de la flora silvestre o acuática, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva climática, zonas o áreas de reserva, en período de producción de semillas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

Artículo 331A. ***Deforestación.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, tale, queme, corte o destruya, en todo o en parte bosques naturales, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de treinta y siete mil (37.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, reserva climática, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se altere las aguas, se ocasione erosión del suelo, se modifique el régimen climático, se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

Artículo 331B. ***Promoción y financiación de la Deforestación.*** El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte o destrucción, en todo o en parte de bosques naturales, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, reserva climática, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se altere las aguas, se ocasione erosión del suelo, se modifique el régimen climático, se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

Artículo 332. ***Manejo ilícito de especies exóticas.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes introduzca, trasplante, manipule, experimente, mantenga, comercie, inocule, libere o propague especies silvestres exóticas o invasoras, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento a ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de trece mil (13.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338.

Artículo 332A. ***Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas

vigentes importe, introduzca, comercialice, exporte, manipule, experimente, libere, inocule, o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos moléculas, sustancias o elementos que constituyan un riesgo o pongan en peligro la salud humana, el ambiente o la existencia de los recursos de la fauna, de la flora o biológicos de las aguas, o alteren perjudicialmente sus poblaciones incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de diecisiete mil (17.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338.

Si se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad.

CAPÍTULO III

De los delitos contra la biodiversidad genética

Artículo 333. ***Aprovechamiento ilícito de recursos genéticos de la biodiversidad***. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, exporte, mantenga, trafique, comercie, aproveche, explore, valorice, transforme o se beneficie a cualquier título de los recursos genéticos de la flora o la fauna, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El que promueva, financie, dirija, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en este artículo, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO IV

De los delitos contra el hábitat y el paisaje natural

Artículo 334. ***Destrucción o alteración de hábitat.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes destruya o altere hábitat de especies de la flora o de la fauna, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente:

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338.

Artículo 334A. ***Alteración del paisaje***. El que sin permiso de autoridad competente con incumplimiento de las normas vigentes, altere el recurso del paisaje urbano o rural, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de trece mil (13.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338.

CAPÍTULO V

De la contaminación ambiental

Artículo 335. ***Contaminación ambiental*.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes provoque, contamine o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, disposiciones o ruidos en el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, o demás recursos naturales incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cincuenta y cinco (55) a ciento doce (112) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el presente artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.

2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por las normas vigentes o haya infringido más de dos parámetros.

3. Cuando la contaminación, descarga, disposición o vertimiento se realice en reserva

forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas.

4. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, emisiones o disposiciones.

5. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.

6. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de vigilancia y control de la autoridad ambiental.

7. El perjuicio o alteración ocasionados adquieran un carácter catastrófico o irreversible.

Artículo 335A. ***Contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos***. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes contamine, almacene, transporte, vierta o disponga inadecuadamente, residuo sólido peligroso incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el presente artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.

2. Cuando la descarga o disposición se realice en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas.

3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente la descarga o disposición.

4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.

5. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de vigilancia y control de la autoridad ambiental.

6. El perjuicio o alteración ocasionados adquieran un carácter catastrófico o irreversible.

Artículo 335B. ***Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo***. El que contamine directa o indirectamente la atmosfera, el suelo, el subsuelo o las aguas como consecuencia de la actividad de extracción, excavación, exploración, construcción, inyección, depósito, montaje, explotación, beneficio, transformación o transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338.

Si la conducta se realizare como consecuencia de la minería a cielo abierto la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad de la pena.

Artículo 335C. ***Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, realice experimentos, con especies, agentes biológicos o bioquímicos, que constituyan, generen o pongan en peligro o riesgo la salud humana, el ambiente o la existencia de los recursos de la fauna, la flora o biológicos de las aguas, o altere sus poblaciones, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de treinta y siete mil (37.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338.

Artículo 335D. ***Fabricación, importación, exportación, tráfico o uso de plásticos.*** El que fabrique, trafique, importe, exporte, distribuya, comercialice, transporte, almacene, financie, ofrezca, adquiera, suministre a cualquier título o use bolsas utilizadas para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías, distribuidas en los puntos de pago; bolsas plásticas para embalar periódicos, revistas y facturas; bolsas utilizadas en las lavanderías para empacar ropa lavada; rollos de película extensible para el empaque de

alimentos a granel, excepto los cárnicos; rollos de bolsas vacías para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías o llevar alimentos, excepto los cárnicos; rollos de película extensible y de burbuja utilizados para proteger objetos durante las mudanzas dentro del territorio nacional; envases y recipientes para contener o llevar alimentos preparados de consumo inmediato; bolsas para contener líquidos; platos, bandejas, cubiertos (cuchillos, tenedores, cucharas), vasos y guantes para comer; mezcladores y pitillos para bebidas y soportes plásticos para las bombas de inflar; soportes plásticos de los Copitos de Algodón o hisopos flexibles con puntas de Algodón incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las sanciones previstas en este artículo, no aplicarán sobre aquellos plásticos de un solo uso diseñados para propósitos médicos o de salud pública, por razones de asepsia e higiene o contener sustancias químicas que presentan riesgo a la salud humana en su manipulación.

Artículo 335E. ***Aprovechamiento ilícito de residuos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, recoja, transporte, valorice, transforme, elimine o aproveche residuos sólidos o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO VI

De la invasión de áreas de especial importancia ecológica

Artículo 336. ***Invasión de áreas de especial importancia ecológica.*** El que invada, permanezca, así sea de manera temporal, o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en áreas de reserva forestal, reserva climática, zonas de nacimientos hídricos, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, definidos en la ley o reglamento, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338.

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente.

Artículo 336A. ***Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica.*** El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338.

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente.

CAPÍTULO VII

De la destinación ilegal de tierras

Artículo 337. ***Destinación ilegal de tierras establecidas.*** El que utilice o destine con uso diferente para el cual fueron definidas las tierras establecidas, declaradas, tituladas o delimitadas por autoridad competente, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá quien use o destine tierras sobre las cuales se hubiese cometido deforestación para fines distintos a la resiembra o restauración.

Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se impondrá prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa de trescientos (300) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de once mil (11.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales

mensuales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338.

CAPÍTULO VIII

Impacto Ambiental (IA)

Artículo 338. ***Impacto Ambiental (IA).*** Cuando las conductas del presente título tengan como resultado un Impacto Ambiental (IA), el ámbito punitivo de movilidad de la pena de prisión y de multa se dividirá en tercios, así: uno mínimo, uno medio y uno máximo.

La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio mínimo cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) que no pase de cincuenta (50) IA.

La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio medio cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental superior a cincuenta (50) IA sin exceder de setenta y cinco (75) IA.

La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio máximo cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental que pasare de setenta y cinco (75) IA.

CAPÍTULO IX

Disposiciones Comunes

Artículo 338A. ***Circunstancias de agravación punitiva.*** Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán a la mitad cuando:

1. Se afecten ecosistemas estratégicos que hagan parte de las áreas protegidas del Sistema Nacional, Regional o Local.

2. Cuando el daño ambiental sea consecuencia de la acción u omisión de quienes ejercen funciones de vigilancia y control.

3. Se pongan en peligro la salud humana, las especies de flora, fauna o su hábitat.

4. Cuando se genere pérdida de biodiversidad.

Artículo 338B. ***Modalidad culposa.*** Si por culpa se ocasionare alguna de las conductas descritas en este título, en los casos en que ello sea posible según su configuración estructural, la pena correspondiente se reducirá a la mitad.

Artículo 338C. ***Extinción de dominio.*** Los bienes muebles e inmuebles empleados para el desarrollo de las conductas descritas en este título serán sometidos a extinción de dominio en los términos de la Ley 1708 de 2014.

Tratándose de animales, estos serán puestos a decomiso y disposición de la autoridad competente.

Lo previsto en el presente artículo no aplicará frente a los delitos de depósito o inyección de sustancias en el suelo (Art. 329A C. P.), alteración del paisaje (Art. 334A C. P.), fabricación, importación, exportación, tráfico o uso de plásticos prohibidos (Art. 335D C. P.), aprovechamiento ilícito de residuos (Art. 335E C. P.) e invasión de áreas de especial importancia ecológica (Art. 336 C. P.).

Artículo 339. ***Medida Cautelar.*** El juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.

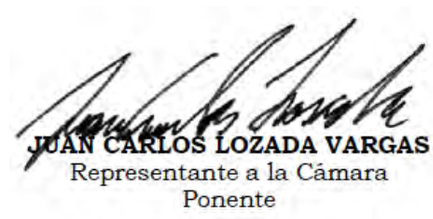
Artículo 2°. ***Reglamentación del Impacto Ambiental***. El Gobierno Nacional en un término de tres (3) meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley, expedirá la reglamentación sobre el método para determinar el daño ambiental según el Impacto Ambiental (IA) en los términos del artículo primero.

Artículo 3°. ***Pedagogía sobre el ambiente.*** Los establecimientos educativos de educación básica, media y universitaria, incluirán en su Proyecto Educativo Institucional, una catedra ambiental que busque la compresión, el fomento y la participación ciudadana para generar conciencia ambiental sobre el buen uso de los recursos naturales, las prácticas que son contrarias a la sostenibilidad, la importancia de las áreas de especial importancia ecológica y las regulaciones y leyes sobre la materia.

Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación promoverán programas de formación docente para el desarrollo de las mencionadas estrategias.

Artículo 4°. ***Vigencia.*** La presente ley entrará en vigencia seis (6) meses después de la fecha de su promulgación y deroga el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000.

Cordialmente,



JUAN CARLOS LOZADA VARGAS
Representante a la Cámara
Ponente

* * *

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 284 DE 2019 CÁMARA

por medio del cual se declara patrimonio cultural nacional a algunos barrios de Bogotá por su carácter urbanístico y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D. C., 26 de marzo de 2020

Honorable
Representante

EMETERIO JOSÉ MONTES DE CASTRO	DIANA MARCELA MORALES ROJAS
Presidente Comisión Sexta Constitucional	**Secretaria Comisión Sexta Constitucional**
Cámara de Representantes	Cámara de Representantes
Ciudad	Ciudad

Referencia: Informe de Ponencia para Primer Debate al Proyecto de ley número 284 de 2019 Cámara, *por medio del cual se declara patrimonio cultural nacional a algunos barrios de Bogotá por su carácter urbanístico y se dictan otras disposiciones*.

Cordial saludo,

En cumplimiento del encargo hecho por la Honorable Mesa Directiva de la Comisión Sexta Constitucional de la Cámara de Representantes del Congreso de la República y de conformidad con lo establecido en el Artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, procedo a rendir Informe de Ponencia para Primer Debate en Cámara al **Proyecto de ley número 284 de 2019 Cámara,** "por medio del cual se declara patrimonio cultural nacional a algunos barrios de Bogotá por su carácter urbanístico y se dictan otras disposiciones".

Atentamente,



MARÍA JOSÉ PIZARRO RODRÍGUEZ
PONENTE

I. ANTECEDENTES

El **Proyecto de ley número 284 de 2019 Cámara** es de autoría de los Honorables Representantes a la Cámara: Katherine Miranda Peña y Germán Navas Talero.

Esta iniciativa fue radicada ante la Secretaría General de la Cámara de la República el 31 de octubre de 2019 y publicada en la ***Gaceta del Congreso*** bajo el número 1083 de 2019.

II. OBJETO DEL PROYECTO

El presente Proyecto de ley *"por la cual se declara patrimonio cultural nacional a algunos Barrios de Bogotá por su carácter urbanístico y las plazas fundacionales de Bogotá, se dictan otras disposiciones"* tiene como objeto declarar patrimonio cultural algunos barrios de la ciudad, los cuales cuentan con una planificación y estructura arquitectónica determinantes desde el siglo pasado, inspirados en los altos estándares de la época a nivel técnico, estético y funcional, como lo son el barrio Palermo, Pablo VI, La Esmeralda y El Polo .

Así mismo, busca elevar a patrimonio nacional las plazas fundacionales de los barrios Usaquén, Engativá, Usme, Fontibón y Suba con el fin de preservar la historia urbanística de los colombianos.

III. CONSIDERACIONES GENERALES

"Las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para cada uno de sus

habitantes, solo porque, y solo cuando, son creadas para todos",

Jane Jacobs.

A) IMPORTANCIA DE LA INICIATIVA

El desarrollo de las ciudades a lo largo de la historia, ha estado acompañado de la construcción de un patrimonio inmobiliario que termina por convertirse en parte de la identidad de estas, como lo son, los barrios, calles, parques, plazas públicas, casas y edificaciones en general que han contribuido a la realización de las ciudades y a su crecimiento.

En ese sentido, el propósito de este Proyecto de ley es lograr que en Bogotá sean conservados aquellos edificios, barrios y lugares particulares que surgieron en un determinado momento histórico y que marcarán el desarrollo de la Bogotá futura. La idea de la renovación urbana arrasadora ha ido quedando en el pasado, en esta medida, el patrimonio de las ciudades no puede ser destruido o minimizado por favorecer infraestructuras modernas que se superpongan por encima de aquellos inmuebles o lugares dignos de protección por su valor histórico.

En Bogotá se desarrollaron barrios con ideas de planes urbanos y con viviendas ejecutadas por los nuevos pobladores de la capital que llegaron de otras regiones del país con el impulso del Instituto de Crédito Territorial (ICT) que estimuló la autoconstrucción. Estos barrios se lograron con trabajo colaborativo y tienen un valor urbano sin igual, ya que se construyeron a partir de las necesidades de sus pobladores, como el barrio: Muzú, Quiroga, La Perseverancia, barrio estatal Buenos Aires, Barrio residencial Quesada, barrio estatal Acevedo Tejada, barrio popular Restrepo, Barrio obrero Santander, urbanización Luna Park, urbanización residencial Teusaquillo, Veraguas, Bachué, El Polo y La Esmeralda, entre muchos más.

Los procesos urbanos vividos no pueden ser olvidados por prioridades del mercado, en el que la renovación urbana sea tan arrasadora que no reconozca cómo se construyó la ciudad, sin embargo, Bogotá ha pasado por diferentes estados de planeamiento que deben ser reconocidos y valorados como bien lo describe Salazar:

"Hacia 1930 el vertiginoso crecimiento iniciado en las tres primeras décadas del siglo XX transformó la estructura urbana y desbordó los precarios instrumentos de control […] la planificación que se practicó hasta entonces se basaba en unas pocas normas de urbanización (parcelación) y zonificación […] en adelante el urbanismo en Bogotá asumió, como muchas ciudades de la América Latina, la influencia del urbanismo europeo y norteamericano de la época, derivado por una parte de los grands travaux de Haussmann en parís y el plan de Ensanche de Cerdá para Barcelona y por el naciente City planning"[1].

El planeamiento urbano no es reconocido como uno de los fuertes de un país como Colombia, es un no reconocer que desde hace muchos años hemos pensado en cómo construir una ciudad que sea integral para todos, influenciados por los movimientos de otros países de los CIAM y de las teorías de Bauhaus.

La visión de este Proyecto de ley es que, en Bogotá, es necesario conservar cada edificio, barrio y lugar que surgió en un determinado momento histórico y que marcó el desarrollo de la Bogotá futura. La idea de una renovación urbana arrasadora quedó atrás en el concepto de la modernidad de las ciudades, donde se priorizaban las grandes avenidas por encima del patrimonio de la ciudad, es tiempo de reconocer que estamos en la construcción de la ciudad contemporánea.

Aunque existe la decisión de conservar el patrimonio distrital de algunos lugares como las plazas fundacionales de los barrios Usaquén, Engativá, Usme, Fontibón y Suba, surge la necesidad de elevar su rango a patrimonio nacional, reconociendo que el patrimonio cultural urbano tiene un valor en la memoria e historia nacional donde sobresalen aspectos de su naturaleza urbana, arquitectónica, natural, histórica y sin duda uno de los más importantes lo social: los habitantes.

El análisis del patrimonio está determinado por su articulación en las diferentes escalas. Al determinar un solo edificio o un conjunto de ellos como patrimonio sin reconocer el contexto en el que se construyó, se desconocen las dimensiones físicas, temporales y socioculturales. Al realizar el reconocimiento de un barrio como patrimonio nacional este tendrá validez en el futuro, esto debe ser respetado y al reconocer su validez histórica urbana no se puede deshacer de acuerdo con conveniencias de gobiernos o con la necesidad edificadora de los constructores.

El patrimonio cultural inmueble es una determinante del ordenamiento territorial según la Ley 388 de 1997 desarrollado en su artículo 10, y es de recordar que el patrimonio cultural inmueble existe como parte de la ciudad que se ido consolidado a lo largo de la historia, aunque se discuta el valor cultural de esto.

Un barrio planeado por un urbanista como LeCorbusier o Karl Bruner tiene un valor cultural en cualquier parte del mundo. En este caso al ser nombrados como patrimonio cultural inmueble se les da un peso histórico, estético y simbólico y elevarlos como patrimonio cultural nacional aseguran su protección y conservación.

Es importante recordar que la ciudad de Bogotá se construyó a partir de la necesidad de construir vivienda para los nuevos residentes que migraron masivamente a la capital. Ronaldo Ramírez en su artículo sobre "evaluación social de las políticas y programas de vivienda: un análisis de la contribución de la vivienda a la reducción de la pobreza urbana", muestra que las viviendas de interés social constituidas como parte del mercado y como solución de vivienda a los colombianos de 32 metros cuadrados para una familia fueron una política de Estado para entregar una vivienda social de verdad que marcó la vida de cientos de colombianos.

En el caso de la vivienda social existen momentos que enmarcan el urbanismo bogotano entre ellos están: 1. Higienista: por ejemplo, barrio residencial Quesada, barrio La Perseverancia, barrio estatal Buenos Aires; 2. institucional 1942–1965: barrio Muzú, centro urbano Antonio Nariño. 3. Transición 1965–1990: barrio Kennedy experimental, Pablo VI; 4. Cooperativismo; 1970 - 1990 y 5. Subsidios 1990–2009.

Uno de los logros más importantes en el caso de Bogotá es que se consideró un laboratorio urbano que buscamos proteger de decisiones arbitrarias bajo el argumento de la renovación pues se pone en riesgo el perder la historia de la vivienda social y de nuestra ciudad.

Finalmente, en las observaciones que hizo la Universidad Nacional de Colombia al proyecto de revisión del Plan Ordenamiento Territorial fue la necesidad de conservar la historia urbana de la ciudad, claramente lo que está buscando este proyecto:

"no se desarrolla, la preocupación urbanística contemporánea por la valoración de la ciudad

[1] Salazar, José. Construir la ciudad moderna: superar el subdesarrollo. Enfoques de la planeación urbana en Bogotá (1959 – 2010).

construida. Si bien hay un trabajo sobre las tipologías diversas que se encuentran en la ciudad, esto no es suficiente para hacer una valoración que establezca de manera específica la forma como cada una de las partes de la ciudad tiene virtudes a conservar. Esto es un punto absolutamente válido en el urbanismo contemporáneo: Favorecer la diversidad del territorio es una ventaja productiva y sostenible. Por el contrario, el POT generaliza los tratamientos, por ejemplo, la renovación, en extensas áreas de la ciudad (más de 9.000 hectáreas) que presupone que son tejidos "obsoletos" donde es necesario hacer un cambio total de los existentes. La defensa de la diversidad de condiciones de desarrollo (que incluye tipologías, densidades, espacios libres, ecosistemas, etc.) es una base indiscutible que el POT desconoce"[2].

Los barrios que se escogieron en el presente proyecto de ley, son una muestra de la política social del país en otros tiempos, donde existía una diferenciación entre los que podían acceder a un crédito en el Banco Central Hipotecario para ese entonces y entre una acción más institucional en que el gobierno realizaba con el Instituto de Crédito Territorial, que se pretende proteger y conservar.

B) MARCO NORMATIVO

Retomando el marco normativo de la exposición de motivos de este proyecto de ley, este se enmarca en los derechos económicos sociales y culturales reconocidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y otros instrumentos continentales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) y la Carta Constitutiva de la Organización de los Estados Americanos, las constituciones de los Estados han incorporado el reconocimiento de estos derechos, como sucedió en Colombia.

La Carta Política de 1991 contempló, entre otros, los siguientes mandatos:

- **Artículo 70.** El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

- **Artículo 71.** La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

- **Artículo 72.** El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.

Estas normas han sido desarrolladas por la Ley 397 de 1997 *"por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias"*, que es nuestra Ley General de Cultura, la cual dio lugar a la expedición de otras leyes y decretos que conforman hoy en día nuestra reglamentación cultural, en el ámbito nacional y territorial.

Por su parte, la Ley 388 de 1997, *"por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones"* en su artículo 10 señala que, en los planes de ordenamiento territorial, los municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación y de los departamentos, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad con la legislación correspondiente.

Adicionalmente, encontramos la Ley 1037 de 2006 por medio de la cual se aprueba la "Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial", aprobada por la Conferencia General de la Unesco en su XXXII reunión, celebrada en París y clausurada el diecisiete (17) de octubre de dos mil tres (2003), y hecha y firmada en París el tres (3) de noviembre de dos mil tres (2003).

[2] Observaciones al POT de la UNAL, específicamente de la maestría de urbanismo.

A la Ley General de cultura se le han hecho algunas modificaciones, por ejemplo, como la contemplada por la Ley 1185 de 2008 en la cual se establecieron algunas disposiciones sobre integración del patrimonio cultural de la Nación.

En relación con esta misma ley tenemos a la Ley 715 de 2001, *"por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros*", que asegura la asignación de recursos para cultura en los municipios a través del Sistema General de Participaciones, Ley 768 de 2000 sobre ordenamiento urbano (patrimonio cultural inmueble), Ley 599 (Código Penal que tipifica delitos contra el patrimonio cultural); y los decretos 1313 y 3322 de 2008 sobre el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, el 763 de 2009 sobre el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural, entre otros.

Toda la normatividad expuesta en líneas arriba, está implícito el desarrollo de un deber político y moral de fomentar y proteger todos aquellos actos que constituyan un valor cultural y artístico para la nación, como lo son los barrios objeto de esta iniciativa legislativa.

Por otra parte, es imperativo mencionar que el Congreso de la República ha aprobado leyes declaratorias de patrimonio de material inmueble, por lo que la elevación a patrimonio nacional puede ser otorgado por el legislativo sin ninguna restricción, como lo evidencian las siguientes leyes:

- **Ley 103 del 6 de octubre de 1931,** *"por la cual se fomenta la conservación de los monumentos arqueológicos de San Agustín"*.

- **Ley 28 del 11 de octubre de 1935,** "*Sobre conmemoración del primer centenario de la muerte del General Francisco de P. Santander"*.

- **Ley 75 del 22 de septiembre de 1937, "***por la cual se conmemora el primer centenario de la muerte del General Santander***", donde se declara como monumento nacional la iglesia de Villa del Rosario de Cúcuta.**

- **Ley 6ª del 20 de agosto de 1948,** *"por la cual se hace una declaratoria de monumento nacional, de modifican para sus efectos las Leyes 4ª de 1940 y 107 de 1946 y se vota una partida", donde se declara como monumento nacional el lugar donde reposan, en la ciudad de Riohacha los restos del Almirante y General de la República, héroe de la independencia de Colombia, don José Prudencio Padilla.*

- **Ley 163 del 30 de diciembre de 1959,** *"por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y Monumentos Públicos de la Nación"*.

- **Ley 164 del 30 de diciembre de 1959,** *"por la cual se adquiere para la Nación la casa en que nació el General Francisco de Paula Santander, se le declara monumento nacional, y se dictan otras disposiciones"*.

- **Ley 103 del 30 diciembre de 1960,** *"por la cual se declara monumento nacional la capilla donde fue bautizado don Marco Fidel Suárez, en Bello (Antioquia)***"**.

- **Ley 150 del 30 de diciembre de 1960,** *"por la cual se declara a la ciudad de Santa fe de Antioquia monumento nacional y se dictan otras disposiciones" SANTAFÉ DE ANTIOQUIA Sector Antiguo de la ciudad de Santa Fe de Antioquia _ PATRIMONIO MATERIAL INMUEBLE El sector antiguo abarca " las calles, plazas, plazoletas, murallas, inmuebles, incluidos casas y construcciones históricas, en los ejidos, muebles etc., incluidos en el perímetro que tenían éstas poblaciones durante los Siglos XVI, XVII, XVIII"*.

- **Ley 81 del 26 de septiembre de 1961,** *"por la cual la Nación adquiere la casa en donde murió el Precursor de la Independencia, don Antonio Nariño, y se dictan otras disposiciones", donde se declaró monumento nacional la casa en donde murió Antonio Nariño en Villa de Leyva (Boyacá).*

- **Ley 132 del 31 de diciembre de 1963,** *"por la cual se declara monumento nacional la casa que fue de don Manuel María Mosquera Arboleda, en Popayán"*.

- **Ley 42 del 18 de noviembre de 1965** "por la cual se declara monumento nacional la iglesia parroquial de Tópaga, en el Departamento de Boyacá".

- **Ley 51 del 26 de diciembre de 1967,** *"por la cual se ordena la celebración del sesquicentenario de la Campaña Libertadora de 1819 y se dictan otras disposiciones", donde se declaró como monumentos nacionales: la casa donde murió el General Juan José Reyes Patria, héroe de la Batalla de Gámeza, ubicada en el perímetro urbano de la población de Corrales y la casa en ruinas, así como los predios adyacentes, esta* última *ubicada en el Municipio de Ventaquemada, en donde se alojó el Estado Mayor Libertador en la noche del 7 de agosto de 1819 y en donde se dio, al Padre de la Patria, el primer parte de batalla y triunfos, en la Campaña Libertadora.*

- **Ley 36 del 22 de diciembre de 1971,** *"por la cual se ordena la preservación de un*

monumento histórico y se dictan medidas para su restauración y conservación", donde se ordena la preservación, restauración y conservación del monumento histórico, "Iglesia y Monasterio de La Concepción", ubicado en el antiguo Centro Cívico de Santa Fe de Bogotá.

• **Ley 18 del 30 de diciembre de 1972,** *"por la cual la Nación se asocia a hechos históricos en la ciudad de Caloto, se declaran unos monumentos nacionales y se dictan otras disposiciones", donde se declara como monumentos nacionales tanto la Casa Colonial donde se alojó el Libertador en distintas ocasiones en esa ciudad, como el Santuario donde se venera hace varios siglos la imagen de la Niña María, casa y Santuario situados al oriente de la plaza principal, colindando por el Norte con la calle principal, al Oriente el hospital, al Sur, una calle y al Occidente la plaza pública.*

• **Ley 11 del 21 de enero de 1977,** *"por la cual se honra la memoria del gran General Tomás Cipriano de Mosquera con motivo del centenario de su muerte y se dictan otras disposiciones", donde se declaró como utilidad pública e interés social y como monumento nacional, la casa el gran General Tomás Cipriano de Mosquera con sus patios y jardines y el terreno anexo, en una superficie de cinco hectáreas a la redonda de la hacienda de su propiedad donde él vivió y murió, en Coconuco, departamento del Cauca.*

• **Ley 25 del 25 de noviembre de 1978,** *"por medio de la cual se declara un monumento nacional, se honra la memoria de un servidor de la patria y se dictan otras disposiciones**"**, se declara monumento nacional el "Puente de Occidente"*, sobre el río Cauca, entre los Municipios de Olaya y Santa Fe de Antioquia.

• **Ley 4ª del 9 de enero de 1986,** *"por la cual el Congreso de Colombia honra la memoria del doctor Adriano Perdomo Trujillo, fundador de la Cruz Roja Colombiana", donde se declara como monumento nacional la casa donde nació y vivió el doctor Adriano Perdomo Trujillo, en la población de Yaguará, la cual será destinada a honrar su memoria.*

• **Ley 50 del 9 de octubre de 1986,** *"por la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 450 años de la fundación de Tunja, se rinden honores a la memoria de su fundador don Gonzalo Suárez Rendón y se conceden facultades extraordinarias y autorizaciones al Presidente de la República", donde se declara como monumento nacional la construcción del "Templo de la Libertad o Monumento Histórico Religioso"* en el Puente de Boyacá y las relacionadas con la "Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla".

• **Ley 74 del 5 de octubre de 1993,** *"POR medio de la cual se declara Monumento Nacional el Templo de la Parroquia del Calvario en el Barrio Campo Valdés, ubicada en la zona nororiental de la ciudad de Medellín, y se dictan otras disposiciones".*

• **Ley 112 del 19 de enero de 1994,** *"por la cual se ordenan unas inversiones y se declara un Monumento Nacional.", donde se declara como Monumento Nacional la edificación e instalaciones del Conservatorio de Música "Alberto Castilla"* en Ibagué, departamento del Tolima.

• **Ley 112 del 19 de enero de 1994,** *"por la cual se ordenan unas inversiones y se declara un Monumento Nacional**".** Se declara como Monumento Nacional la edificación e instalaciones del Conservatorio de Música "Alberto Castilla"* en Ibagué, Departamento del Tolima.

• **Ley 260 del 17 de enero de 1996,** *"por medio de la cual se declara Monumento Nacional El Templo de San Roque, en el Barrio de San Roque, de la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico".*

• **Ley 499 del 25 de mayo de 1999,** *"por medio de la cual se declara un Monumento Nacional, se honra la memoria de un servidor de la Patria y se dictan otras disposiciones", donde se declara Monumento Nacional "El túnel de La Quiebra y la infraestructura inmediata a esta obra de ingeniería", ubicados en el corregimiento de Santiago, jurisdicción del municipio de Santo Domingo, departamento de Antioquia.*

• **Ley 48 del 1 de septiembre de 1966, "***por la cual se declara monumento nacional la casa en donde nació Custodio García Rovira, y se dictan otras disposiciones".*

• **Ley 503 del 18 de junio de 1999,** *"por medio de la cual se declara Monumento Nacional el Templo Parroquial de San Sebastián, en el Municipio de Morales, departamento de Bolívar".*

• **Ley 532 del 5 de noviembre de 1999,** *"por medio de la cual se declara Monumento Nacional el Templo Parroquial San Antonio de Padua del municipio de Soledad, departamento del Atlántico"***.**

• **Ley 571 del 3 de febrero de 2000,** *"por medio de la cual se declara Monumento Nacional la "Basílica Menor del Señor de los Milagros", del municipio de San Benito Abad, departamento de Sucre".*

• **Ley 667 del 30 de junio de 2001, "***por medio de la cual se rinde honores al Beato Mariano de Jesús Euse Hoyos y se dictan otras*

*disposiciones***",** *se declara monumento nacional y patrimonio histórico el Templo Parroquial Nuestra Señora de Chiquinquirá, ubicado en el municipio de Angostura, departamento de Antioquia, en la diócesis de Santa Rosa de Osos.*

• **Ley 735 del 27 de febrero de 2002,** *"por la cual se declaran monumentos nacionales, el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil; se adoptan medidas para la educación universitaria y se dictan otras disposiciones."*

• **Ley 835 del 10 de julio de 2003,** *"por medio de la cual la Nación se vincula a la conmemoración de los 300 años de fundación del municipio de San Juan del Cesar, departamento de La Guajira, y se autorizan apropiaciones presupuestales para proyectos de cultura e interés social".*

• **Ley 889 del 7 de julio de 2004,** *"por la cual se erige en patrimonio cultural y educativo de la Nación la Biblioteca Pública Departamental Meira del Mar."*

• **Ley 0891 del 7 de julio de 2004,** *"por la cual se declara Patrimonio Cultural Nacional las Procesiones de Semana Santa y el Festival de Música Religiosa de Popayán, departamento del Cauca, se declara monumento Nacional un inmueble urbano, se hace un reconocimiento y se dictan otras disposiciones."*

• **Ley 936 del 30 de diciembre de 2004** *"por medio del cual se declara patrimonio histórico y cultural de la Nación, el Municipio de Pore, Casanare, y se dictan otras disposiciones", donde se declaró como bien de interés cultural de carácter nacional el complejo arquitectónico conformado por la antigua Iglesia de Pore, la edificación conocida como "la cárcel" y el túnel que comunica a estas dos construcciones.*

• **Ley 1036 del 26 de julio de 2006,** *"por medio de la cual la Nación declara Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación a la institución educativa Santa Librada del municipio de Neiva, departamento del Huila, y se dictan otras disposiciones".*

• **Ley 1049 del 26 de julio de 2006,** *"por medio de la cual la Nación se asocia y rinde homenaje al municipio de Cartago, en el departamento del Valle, con motivo de la celebración de los cuatrocientos sesenta y cuatro (464) años de su fundación, exalta la capacidad creadora y el espíritu de su gente y se dictan otras disposiciones", donde se declaran como monumento nacional y parte del patrimonio cultural de Colombia los siguientes inmuebles, situados en el Municipio de Cartago: Iglesia San Jerónimo, Iglesia Santa Ana e Iglesia San Francisco.*

• **Ley 1053 del 26 de julio de 2006**, *"por la cual se incorpora la población de San Sebastián de Buenavista, en el departamento del Magdalena, patrimonio histórico de la República de Colombia y la Nación se asocia al 260 aniversario de su fundación".*

• **Ley 1067 de 2006,** *"por medio de la cual se declara como patrimonio cultural y deportivo de la Nación el Estadio Moderno Julio Torres "Cuna del Fútbol Colombiano" del Distrito Industrial, Especial y Portuario de Barranquilla y se dictan otras disposiciones".*

• **Ley 1126 del 14 de febrero de 2007,** *"por medio de la cual se declara patrimonio cultural de la Nación y Monumento Nacional la Casa Museo del Poeta Julio Flórez en el municipio de Usiacurí, departamento del Atlántico y se dictan otras disposiciones".*

• **Ley 1248 del 24 de noviembre de 2008 "***por medio de la cual la Nación rinde homenaje a la pintora Débora Arango Pérez y se declara museo y bien de interés cultural de la Nación la casa en que vivió***".**

• **Ley 1435 del 6 de enero de 2011,** *"por la cual la Nación declara patrimonio histórico y cultural de la Nación algunos inmuebles del Sanatorio de Agua de Dios en Cundinamarca y del Sanatorio de Contratación en Santander y se dictan otras disposiciones".*

• **Ley 1497 del 29 de diciembre de 2011,** *"por la cual la Nación rinde homenaje al Maestro* Ómar *Rayo", donde se declara como Monumento Nacional el Museo de Rayo.*

• **Ley 1498 del 29 de diciembre de 2011, "***por la cual se declara bien de interés cultural de la Nación la Concatedral de Nuestra Señora del Socorro, ubicada en el municipio de Socorro, departamento de Santander y se dictan otras disposiciones".*

C) BARRIOS OBJETO DE LA INICIATIVA

Se debe resaltar que la ciudad de Bogotá se construyó a partir de la necesidad de construir vivienda para los nuevos residentes que emigraron masivamente a la capital por causas económica y coyunturales desde finales del siglo XIX, con la expansión de territorio urbano y la creciente violencia en las zonas rurales. Esta situación ocasionó que en la capital empezarán a implementarse políticas de vivienda social para las clases media y baja, capaz de sostener la industria emergente y el sentido urbano de la nueva vida colombiana. Los barrios que se escogieron en el proyecto de ley, son una muestra de la política social del país en planeación urbana.

Barrio Palermo



Fuente: Google Maps



Fuente: Exposición de barrios antiguos bogotanos, facultad de artes de la Universidad Nacional de Colombia.

Este barrio residencial, se desarrolló bajo gestión privada de la empresa Tulio Ospina y Cía., con el proceso de parcelación – loteo y urbanización – servicios. La edificación se realizó de manera individual y con la modalidad realizada por encargo.

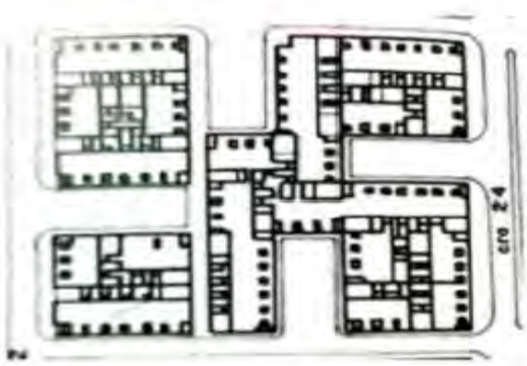
El barrio se consolidó en la última parcial de la antigua hacienda Chapinero Carbonell, con el diseño urbano del urbanista Karl Brunner. La idea era empalmar los tejidos de los barrios Quezada desarrollado en 1910 y Santa Teresita en 1930 que formaban los límites.

El desarrollo se realizó a partir de un eje central, organizó con referencia del parque de Palermo. La zona residencial tiene edificaciones que cuenta con espacios de transición como antejardines y accesos laterales a la vivienda, en su interior cuenta con un espacio para jardín.
La importancia de este barrio radica en su gran componente arquitectónico de estilo victoriano y "ciudad jardín", por lo que su apariencia
cuenta con una riqueza narrativa de aquellos tiempos de tradición familiar.

Barrio Polo Club



Fuente: Google Maps



DISTRIBUCIÓN DE MANZANA, EL POLO 1961

Fuente:
http://portfolios.uniandes.edu.co/gallery/20108919/CF-Barrio-El-Polo-Proyecto-Urbano-2013-1

Este barrio está ubicado entre la Autopista Norte, calle 80 y av. NQS, se empezó a construir en 1957. Se considera que desde lo arquitectónico y lo urbanístico, fue una construcción masiva. Dos etapas de construcción desarrollada por los arquitectos Ricaurte, Carrizosa & Prieto y la firma Robledo, Drew Castro.
Como se pensó desde finales de los años 50s en la periferia (en ese momento) de la ciudad, se consolidó como centro urbano de numerosos jardines y estructura vecinal acogedora.

El barrio se creó por el Banco Central Hipotecario, las dos firmas debían pensar en la unidad y el crecimiento urbano que tenía Bogotá, el BCH apostó en su mayoría a proyectos de poca altura a escala humana.

Según lo expresado en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 284/2019, el barrio Polo Club se hizo pensando en los principios modernos de LeCorbusier, Oscar Nieneyer y Lúcio Costa, estos teóricos luego iban a influenciar a reconocidos arquitectos como Rogelio Salmona y Germán Samper. La idea, era realizar una intervención arquitectónica experimental, donde las edificaciones y el predio, se construían, y los ejes o vías se comunicaba entre su uniformidad (nuevos órdenes urbanos.)

Barrio La Esmeralda	
 Fuente: Google Maps  Fuente: http://portfolios.uniandes.edu.co/gallery/23384347/Barrio-La-Esmeralda-Bogota-Analisis-Urbano	Financiado por un convenio internacional entre Colombia y EE.UU., con el fin de construir 1268 unidades de vivienda, incorpora un nuevo modelo de espacios libres y colectivos dentro de una súper manzana. Plantea una nueva tipología de vivienda unificada, agregada en hilera, se encuentra ubicado entre las carreras 59 A y 50, y las calles 44 y 53. . Este sector fue edificado entre 1964 y 1967, con el impulso del Instituto de Crédito Territorial, el respaldo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por su sigla en inglés) y las labores de la Constructora de Vivienda de Bogotá. En un principio era conocido como Urapanes. Es uno de los barrios, que a pesar de su localización céntrica entre avenidas principales, cuenta con corredores verdes y espacios de tranquilidad para la comunidad.

Barrio Pablo VI	
 Fuente: Google Maps  Fuente: http://portfolios.uniandes.edu.co/gallery/27928617/Taller-Ciudad-I-2015-1-Pablo-VI-Viejo	Esta urbanización comenzó a construirse en 1966, con motivo de la visita del Papa Pablo VI a Colombia el 22 de agosto de 1968. Era la primera vez que un Sumo Pontífice llegaba a Latinoamérica. Como interventor del Instituto de Crédito Territorial, ICT, fue nombrado Alberto González, ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Colombia, para dirigir la construcción de la primera etapa del conjunto, la cual constaba de 1.119 apartamentos, para alojar a unas 12 mil personas. Las obras duraron unos seis meses, por la premura del tiempo, para albergar a los miles de peregrinos que asistirían al Congreso Eucarístico Internacional presidido por el Papa italiano, Pablo VI. Este conjunto, el cual pertenece a la localidad de Teusaquillo, fue diseñado por los arquitectos Eduardo Londoño y Gabriel Pardo, quienes con este proyecto ganaron en 1968 el prestigioso Premio Eternit. Tiempo después se construyó la segunda etapa, que, a pesar de sus fachadas de ladrillo, conserva el estilo abierto de la primera etapa que lleva el nombre de Pablo VI Para el arquitecto Carlos Niño Murcia, profesor pensionado de la Universidad Nacional de Colombia y un experto en el tema sobre bienes de interés cultural:

	"Paulo VI no tiene los bloques altos, como los que tiene el conjunto Antonio Nariño, el cual fue construido durante el gobierno de Rojas Pinilla, en el año 1953, o 1954. Gracias a la ley de propiedad horizontal, Paulo VI ha preservado su fachada y estructura." Asimismo, Niño afirma que *"este conjunto tiene una riqueza de espacios, sobre todo verdes, que muy pocos lo tienen y que, por ejemplo, hoy, en el 2018, ya no lo están haciendo, ahora crean parqueaderos, bloques como lo que están haciendo en Soacha, con edificios de 5 pisos. Pablo VI tienen una jerarquía de calles por donde entra y sale todo el mundo; una jerarquía menor para los autos, que van a los sitios de parqueadero, pero también muchas zonas verdes, muchísimas, es un verdadero parque"*. Por último, Niño afirma que *"el conjunto mantiene su calidad, ya que lo que él percibió, es que los residentes cuidan su entorno, como las zonas verdes. Caso contrario a las casas de algunos barrios, en donde se han transformado de forma arbitraria, eliminando los jardines y patios por hacer tiendas y pequeños apartamentos."* Tomado de: Hernández, Richard. ¿Conoce la historia del barrio Paulo VI en Bogotá?

Plaza Fundacional de Usaquén	
 Fuente: Revista Semana	Esta zona fue muy importante en la época de la colonia, fue asiento de varias haciendas como Santa Ana, Santa Bárbara y El Cedro; fue proveedor de arena y piedra para la construcción de la ciudad de Bogotá. Su riqueza histórica indígena, desde su nombre y ubicación, hacen de la plaza fundacional un atractivo turístico y de caracterización de la zona.
Plaza Fundacional de Bosa	
 Fuente: Bosa.gov.co	La plaza de Bosa fue escenario de uno de los momentos más dramáticos de la historia muisca: allí el Zipa fue ahorcado por órdenes de Gonzalo Jiménez de Quesada porque no se cumplieron las ofrendas de oro solicitadas, también, allí fueron ahorcados Cuxinimpaba y Cucinimegua, herederos del trono de Tisquesusa, de esta manera el conquistador le puso fin al linaje de los zipas. En el siglo XIX se lanzó una ley para la desindigenización de la capital, que incluida la zona de Bosa, y para el año de 1954, es anexada al distrito especial.

Plaza Fundacional de Usme	
 Fuente: Usme.gov.co	Su nombre proviene de una indígena muisca llamada Usminia la cual estaba ligada sentimentalmente a los Caciques de la época en la antigua Bacatá (Bogotá). En el año de 1911 se convierte en municipio, con el nombre de Usme, destacándose a la vez, por los conflictos y luchas entre colonos, arrendatarios y aparceros por la tenencia de la tierra.
Plaza Fundacional de Engativá	
 **Fuente**: Cívico	Engativá fue un asentamiento indígena, punto estratégico usado por los conquistadores españoles para marginar a los indígenas. En 1972 se convirtió en la localidad 10 de la capital.

Plaza Fundacional de Suba	
 Fuente: Suba Alternativa	El municipio de Suba fue un importante asentamiento indígena. En el año de 1954 suba dejó de ser un municipio para incorporarse como parte del distrito.
Plaza Fundacional de Fontibón	
 Fuente: Bogota.gov.co	Fontibón es "anexado en 1954 al Distrito Especial de Bogotá; en el año 1977 se establece como Alcaldía Menor y la Constitución Política de 1991 lo convierte en localidad de Bogotá. Hoy Fontibón es uno de los centros industriales importantes de la Capital".

Con respecto a su declaración de patrimonio, el Decreto Distrital 190 de 2004 declara como patrimonio distrital las plazas fundaciones mencionadas en el presente proyecto de ley en los artículos 124 y 125 numeral 1 sección a. Sin embargo, se hace necesario elevar su rango a patrimonio nacional como forma de protección y conservación ante eventualidades proyectos de reestructuración o renovación urbana que pongan en peligro la historia, la memoria y la cultura de estas plazas, ya que en la historia de la ciudad ha ocurrido que la declaratoria de bienes ha sido levantada en algunos casos por favorecer proyectos de renovación, como por ejemplo:

El Monumento de los Héroes caídos, están compuestos por dos obras: la primera es una escultura en bronce de Simón Bolívar y por una edificación de seis pisos, declarada como bien de interés cultural del ámbito nacional a través de la Resolución 395 de 2006, expedida por el Ministerio de Cultura y declarada como Bien Mueble de interés distrital a través de la Resolución 0035 de enero 13 de 2006, expedida por la Secretaría Distrital de Planeación. Este monumento planean moverlo para la construcción del metro de Bogotá, pretenden que la nueva estructura del edificio funcione como un museo de historia para hacer homenaje al bicentenario. Esta escultura ya ha sido movida en dos ocasiones, en 1910, cuando fue creada, fue instalada en el parque de la Independencia, pero fue desmontado y guardado en el vivero El Campín para facilitar la ampliación de la calle 26 hasta el año 1962 cuando finalmente fue instalado en su actual ubicación.

El proyecto de renovación urbana "Alameda Entreparques" pensado como un gran proyecto inmobiliario, pretende unir el parque El Virrey y el Simón Bolívar e intervenir al menos 12 barrios de la localidad de Barrios Unidos, entre ellos La Patria, San Martín, Santa Sofía, Juan XXIII, 11 de noviembre, La Aurora y Alcázares Norte, lo que eliminaría más de ocho barrios tradicionales de Bogotá.

La casa de Pérez Norzagaray construida en 1957, la cual gozaba de protección arquitectónica desde 1997 y fue declarada bien inmueble de interés cultural del ámbito Distrital a través de la Resolución 606 de 2001 expedida por la alcaldía de Bogotá; a pesar de dicha declaratoria como bien cultural, luego de que el dueño original falleciera, su esposa e hijos solicitaron que se levantara la declaratoria como bien cultural. El día 6 de noviembre de 2008 el Consejo Asesor de Patrimonio de Bogotá le dio la razón y sugirió retirar la casa Pérez Norzagaray de la lista de conservación, finalmente la casa fue demolida.

Con estos ejemplos se puede ver claramente que la declaración de patrimonio distrital no basta para proteger los bienes inmateriales, por lo que es indispensable declararlos como patrimonio cultural a nivel nacional dada su importancia a nivel histórico, cultural y patrimonial.

VI. PLIEGO DE MODIFICACIONES

Se relacionan a continuación las modificaciones propuestas al articulado:

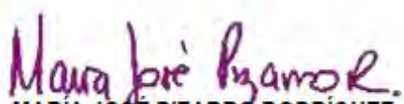
TEXTO RADICADO	PLIEGO DE MODIFICACIONES
Artículo 1°. Declárase patrimonio cultural los Barrios Palermo, Pablo VI, La Esmeralda, El Polo y las plazas fundacionales de la ciudad de Bogotá con su área de influencia en 200 metros.	**Artículo 1°**. Declárase patrimonio cultural los Barrios Palermo, Pablo VI, La Esmeralda, El Polo y las plazas fundacionales **de los barrios Usaquén, Engativá, Usme, Fontibón y Suba**, con el fin de preservar la historia urbanística de los colombianos con su área de influencia en 200 metros.
Artículo 2°. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Cultura, establecerá el plan especial de salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y estímulo para el patrimonio urbanístico y de planeamiento de Barrios históricos por su concepción urbana. **Parágrafo 1°.** Dicho plan contendrá, como mínimo: a) Análisis de los hitos urbanísticos, en el planeamiento de las ciudades, que deben ser conservados por su carácter; hecho por el Ministerio de Cultura. b) Creación de programas de preservación del patrimonio cultural urbano.	**Artículo 2°.** El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, establecerá el plan especial de salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y estímulo para el patrimonio urbanístico y de planeamiento de **los barrios y plazas fundacionales objeto de la presente ley.** **Parágrafo. El plan especial contendrá como mínimo un análisis de los hitos urbanísticos que deben ser conservados y la creación de programas de preservación del patrimonio cultural urbano.**

Artículo 3°. A su cargo, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá elaborará una recopilación documental sobre el urbanismo bogotano recuperando la historia urbana y su planeamiento para publicar cinco mil (5.000) ejemplares de la misma.	**Artículo 3°.** La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá **realizará** una recopilación documental **sobre el patrimonio urbanístico y de planeamiento de los barrios y plazas fundacionales objeto de la presente ley, emitiendo un documental y publicando cinco mil (5.000) ejemplares resultado de la recopilación documental.**
Artículo 4°. Autorízase al Gobierno Nacional para hacer, anualmente, la apropiación presupuestal con el fin de dar permanente protección al patrimonio urbanístico de la ciudad de Bogotá.	**Artículo 4°. Autorícese** al Gobierno Nacional para hacer anualmente la apropiación presupuestal, con el fin de dar permanente protección al patrimonio urbanístico de la ciudad de Bogotá.
Artículo 5°. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias	**Artículo 5°.** La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias

V. PROPOSICIÓN

En relación con los puntos anteriormente expuestos y dada la importancia que esta iniciativa legislativa reviste, solicitamos a los honorables miembros de la Comisión Sexta Constitucional de la Cámara de Representantes debatir y aprobar en Primer Debate el **Proyecto de ley número 284 de 2019 Cámara,** *"por medio del cual se declara patrimonio cultural nacional a algunos barrios de Bogotá por su carácter urbanístico y se dictan otras disposiciones"*.

De la honorable representante,



MARÍA JOSÉ PIZARRO RODRÍGUEZ
Ponente

* * *

VI. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE EN CÁMARA, PROYECTO DE LEY NÚMERO 284 DE 2019 CÁMARA

por medio del cual se declara patrimonio cultural nacional algunos barrios de Bogotá por su carácter urbanístico y se dictan otras disposiciones

Artículo 1°. Declárase patrimonio cultural los Barrios Palermo, Pablo VI, La Esmeralda, El Polo y las plazas fundacionales de los barrios Usaquén, Engativá, Usme, Fontibón y Suba, con el fin de preservar la historia urbanística de los colombianos con su área de influencia en 200 metros.

Artículo 2°. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura, establecerá el plan especial de salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y estímulo para el patrimonio urbanístico y de planeamiento de los barrios y plazas fundacionales objeto de la presente ley.

Parágrafo. El plan especial contendrá como mínimo un análisis de los hitos urbanísticos que deben ser conservados y la creación de programas de preservación del patrimonio cultural urbano.

Artículo 3°. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá realizará una recopilación documental sobre el patrimonio urbanístico y de planeamiento de los barrios y plazas fundacionales objeto de la presente ley, emitiendo un documental y publicando cinco mil (5.000) ejemplares resultado de la recopilación documental.

Artículo 4°. Autorícese al Gobierno Nacional para hacer anualmente la apropiación presupuestal, con el fin de dar permanente protección al patrimonio urbanístico de la ciudad de Bogotá.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

De la honorable representante,



MARÍA JOSÉ PIZARRO RODRÍGUEZ
Ponente

Bibliografía:

Salazar, José. Construir la ciudad moderna: superar el subdesarrollo. Enfoques de la planeación urbana en Bogotá (1959-2010).

Observaciones al POT de la UNAL, específicamente de la maestría de urbanismo. Robledo, Arturo, La arquitectura como modo de vida. Recuperado de: https://idpc.gov.co/descargas/publicaciones/arturo_robledo.pdf

Ceballos, Juliana, Pablo VI Viejo, Recuperado de: http://portfolios.uniandes.edu.co/gallery/27928617/Taller- Ciudad-I-2015-1-Pablo-VI-Viejo

Hernández, Richard. ¿Conoce la historia del barrio Paulo VI en Bogotá? Recuperado de: https://www.radionacional.co/noticia/barrio-pablo-vi

Natalia Correal Avilán. (2017). La plaza hispanoamericana Siglos: XVI, XVII y XVIII. Caso de estudio como análisis tipológico. RevistArquis. https://doiorg.ez.urosario.edu.co/10.15517/ra.v6i2.30533.

Usme: riqueza indígena e histórica, 27 de febrero 2010, Disponible: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3859636

Yolanda Sierra, Yolanda y Jean Carlo Sánchez, "Bogotá, un museo al aire libre", Disponible: https://revistas.idep.edu.co/index.php/mau/article/view/656/641

Moreno L. Gabirel. Teusaquillo, un barrio cultural, histórico y patrimonial de Bogotá

Disponible en: https://www.metrocuadrado.com/noticias/actualidad/teusaquillo-un-barrio-cultural-historico-y- patrimonial-de-bogota-2537

Leyes consultadas:

- Ley 388 de 1997
- Constitución Política de Colombia
- Ley 397 de 1997
- Ley 1037 de 2006
- Ley 715 de 2001

* * *

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 299 DE 2019 CÁMARA, 277 DE 2019 SENADO

por medio de la cual se reconoce al porro y al Festival Nacional del Porro de San Pelayo como manifestación del patrimonio cultural inmaterial de la Nación y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, abril de 2020

Honorable Representante

EMETERIO JOSÉ MONTES DE CASTRO

Presidente Comisión Sexta Constitucional Permanente

CÁMARA DE REPRESENTANTES

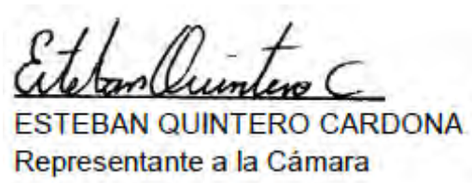
Ciudad.

Referencia: Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 299 de 2019 Cámara, 277 de 2019 Senado, *"por medio de la cual se reconoce al Porro y al Festival Nacional del Porro de San Pelayo como manifestación del Patrimonio cultural inmaterial de la Nación y se dictan otras disposiciones"*.

Respetado Presidente,

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo ordenado por la mesa directiva de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, de acuerdo a los oficios allegados y conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 5ª de 1992, me permito presentar informe de Ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes, al Proyecto de ley número 277 de 2019 Cámara, "*por medio de la cual se reconoce al Porro y al Festival Nacional del Porro de San Pelayo como manifestación del patrimonio cultural inmaterial de la Nación y se dictan otras disposiciones"*.

Cordialmente,



* * *

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE PROYECTO DE LEY 277 DE 2019 CÁMARA

por medio de la cual se reconoce al porro y al Festival Nacional del Porro de San Pelayo como manifestación del patrimonio cultural inmaterial de la Nación y se dictan otras disposiciones.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DEL PROYECTO

El proyecto de ley objeto de estudio corresponde a una iniciativa congresional presentada por la senadora de la República Ruby Helena Chagüí Spath.

El proyecto tuvo primer y segundo debate en el Senado de la República y luego fue enviado a la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes y el día 07 de febrero de 2020 fui notificado como ponente para primer debate en Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.

II. OBJETO DEL PROYECTO

El proyecto de ley 277 de 2019 Cámara tiene como objeto reconocer al porro y al Festival Nacional del Porro de San Pelayo como

manifestación del patrimonio cultural inmaterial de la Nación.

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

a) Estructura del proyecto

El presente proyecto de ley, además del título, se compone de cuatro (4) artículos. En estos incluye el objeto y la vigencia.

b) Consideraciones frente al proyecto

El origen del porro

El escritor e historiador William Fortich, "sostiene que el porro nació en la época precolombina, a partir de los grupos gaiteros de origen indígena, luego enriquecido por la rítmica africana. Y más tarde evoluciona al ser asimilado por las bandas de viento de carácter militar, que introdujeron los instrumentos de metal vientos europeos (trompeta, clarinete, trombón, bombardino, tuba), que hoy se utilizan".

De otro lado, "el compae Goyo" Guillermo Valencia Salgado, "dice que su principal fuente creativa se encuentra en elementos rítmicos de origen africano, principalmente de antiguas tonadas del pueblo Yoruba, que en el Sinú y el San Jorge dieron lugar al surgimiento del "baile cantado". Por informaciones de tradición oral recogidas por este irreemplazable estudioso del folclore, se supo que el porro también se tocó sólo con tambores y acompañamiento de palmas y cantado. Lo mismo que con gaitas y pito atravesado"[1].

El porro en su variante porro palitiao es oriundo del departamento de Córdoba, y el tapao se le asigna a San Marcos y Corozal en el departamento de Sucre. Comúnmente se acepta que su nacimiento se dio en San Pelayo, en donde se mantiene esta rica tradición musical año tras año con la celebración del Festival Nacional del Porro, y donde además se ha dado la evolución del ritmo y su expresión musical, con características muy peculiares.

El porro como patrimonio cultural

El porro es un ritmo musical alegre y fiestero, propicio para bailes sociales y festejos tradicionales de gran popularidad, como carralejas, festividades y fandangos. Su danza es de temática amorosa, cortejo y seducción, donde el hombre le galantea a la mujer para enamorarla.

El porro tradicional o campesino se suele clasificar en dos tipos o categorías principales: tapa'o y palitia'o.

El palitia'o, oriundo de las tierras del Sinú, toma su nombre según la versión más aceptada, por la forma como se golpea con el percutor una tablilla incorporada al aro del bombo o externa a este. Esto ocurre al momento en que el bombo queda en silencio y el clarinete toma el rol protagónico.

El porro palitia'o se encuentra estructurado por cuatro partes o secciones: danza, porro, boza danza. Las danzas, de cortos compases, dan inicio y fin a la obra como en una especie de anuncio que da entrada y salida al porro propiamente y a sus dos partes principales.

La sección porro se identifica por estar dominada por el sonido de la trompeta y la boza por ser el momento en que predomina el clarinete y en que suele suspenderse la percusión del bombo e iniciarse el golpeteo del palo sobre la tablilla (el paleteo).

Estos elementos característicos del porro palitia'o no están presentes siempre en todos los temas. María Varilla, por ejemplo, que se ha llamado el himno de córdoba no posee las danzas de entrada y final. Igualmente El Gavilán Garrapatero, Soy palayero y la Mona Carolina carecen de la danza inicial, lo contrario de un Porro tapao como Roque Guzmán, que cuenta con las danzas a su inicio y final, sin que por ello sea uno palitiao.

Por su parte el porro "tapa'o" o sabanero por ser originario de las sabanas de los departamentos de Córdoba Sucre y Bolívar, se llama así por la predominante forma como el ejecutante del bombo tapa con la mano el parche opuesto al que percute, y carece de la sección boza Musicólogos como Victoriano Valencia han identificado otros rasgos como la improvisación, a cargo de cada instrumento o grupo de estos, que se da en las formas viejas del porro, del fandango campesino y también de la puya. Otros rasgos de las nuevas composiciones porristicas destacadas por el mismo Valencia son: estrechamiento de las secciones, ampliación del coro o su supresión y aceleración del ritmo.

En palabras del maestro William Fortich, "el porro significa para el Caribe colombiano alegría, fiesta, música, gastronomía, oralidad, historia, memoria, nostalgia, familia, amigos, pueblo, región, identidad"[2].

En Colombia el Porro tiene total relevancia, por sus orígenes, historia y trascendencia cultural; actualmente existen diferentes celebraciones y festivales, que sin duda, le dan reconocimiento y le otorgan ese significado de patrimonio cultural.

Uno de los eventos más sobresalientes e importante, es el Festival Nacional del Porro, que recoge todo el peso de la tradición musical de las poblaciones de Sucre y Córdoba, las tierras míticas del Sinú. Este Festival tuvo su inicio en el año 1977 con el nombre del "Festival del Porro Pelayero" para celebrar el bicentenario de la fundación del Municipio, desde ese entonces,

[1] https://danzasnabusimake.jimdofree.com/historia-de-danzas/danza-el-porro/

[2] http://alegriaseduca.blogspot.com/2015/11/del-porro-el-porro-ritmo-musical-de-la.html

cada año la población de San Pelayo ha sido el lugar de encuentros de cientos de bandas de la región, manteniendo la tradición y cultura característica de la región.

El Festival Nacional del Porro se celebra anualmente entre los días 29 de junio y 3 de julio, es un festival en el que participan las agrupaciones de viento o bandas tradicionales de todo el país y bandas internacionales invitadas, con desfile de alborada y competencias entre las mismas[3].

La celebración tiene un toque muy llamativo que atrae a propios y turistas, en las calles del pueblo se realiza el desfile de las aguadoras donde además participan carrozas con diferentes alegorías relacionadas con las tradiciones locales. El Festival inicia con una alborada en la que las bandas participantes interpretan al unísono el porro "María Varilla", composición del Maestro Alejandro Ramírez Ayazo, que es considerado el himno del festival, y que se hace en honor a la legendaria bailadora de fandango. En el tercer día del Festival, todas las bandas se dirigen al cementerio donde interpretan porros y colocan hermosas coronas de flores muchas de ellas en forma de instrumento, para homenajear a los músicos desaparecidos[4].

El folclorólogo Guillermo Valencia Salgado hace referencia al Festival Nacional del Porro como un "compendio de hechos folclóricos, convertidos en manifestaciones populares espontáneas y transmitido de generación en generación".[5]

claro que esta bella tradición tiene que seguir enriqueciendo el valor cultural de nuestro país, para ello se le debe dar toda la importancia y el reconocimiento, razón por la cual, se hace necesario proteger a través de normas jurídicas, el invaluable carácter histórico y cultural que representa el Porro y el Festival Nacional del Porro de San Pelayo, como manifestación del patrimonio cultural inmaterial de la Nación.

MARCO NORMATIVO

Disposiciones constitucionales

– Artículo 2º. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

– Artículo 7º. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

– Artículo 8º. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

– Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

– Artículo 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado.

Sentencia C 553 de 2014

– "La protección del patrimonio cultural de la Nación tiene especial relevancia en la Constitución, pues constituye un signo o una expresión de la cultura humana, de un tiempo, de circunstancias o modalidades de vida que se reflejan en el territorio, pero que desbordan sus límites y dimensiones".

Sentencia C 264 de 2014

– "La protección a la cultura no se agota en las obligaciones del Estado, sino que denota unos derechos y deberes correlativos de los particulares, de manera tal que la regulación de dicha protección debe atender también a la protección de los derechos, tanto individuales como colectivos, pero también al objetivo mismo de la preservación de la cultura para el respeto y preservación de la pluralidad. Adicionalmente, el derecho a la cultura está intrínsecamente ligado a otros derechos humanos, como la educación, y la libertad".

Sentencia C 288 de 2017

– "la Corte debe tener en cuenta la amplia competencia del Congreso para reconocer una expresión o actividad como parte del patrimonio cultural de la Nación, la cual no se agota en las expresiones incluidas en la lista representativa de patrimonio cultural, y en general, tampoco se agota en aquellas manifestaciones que hayan sido reconocidas por la Rama Ejecutiva. La Corte ha dicho que "*el Congreso tiene la competencia para señalar las actividades culturales que merecen una protección del Estado, máxime cuando en este* órgano *democrático está representada la diversidad de la Nación"*.

Disposiciones legales

– Ley 397 de 1997, Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias:

3 http://alegriaseduca.blogspot.com/2015/11/del-porro-el-porro-ritmo-musical-de-la.html

4 https://www.colombia.com/turismo/ferias-y-fiestas/festival-nacional-del-porro/

5 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-110828 https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/2662/2741

"Artículo 4°: El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos *como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico".*

El articulado del Proyecto de ley

Después de haber referenciado la relevancia del Porro y el Festival Nacional del Porro de San Pelayo, como representación de los diversos valores culturales Cordobeses y Sucreños, es importante especificar en qué consisten las diferentes disposiciones, para entender cómo materializan el objetivo de la iniciativa.

El artículo 1º presenta el propósito de la ley; esto es, reconocer al Porro y al Festival Nacional del Porro de San Pelayo, en el departamento de Córdoba como Manifestación del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, así como también, para su postulación e inclusión en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura.

El artículo 2º por su parte, faculta al Ministerio de Cultura para establecer e implementar un Plan Especial de Salvaguardia según lo dispuesto en la Ley 397 de 1997, que busque proteger la tradición folclórica del Porro como ritmo tradicional y del Festival Nacional del Porro de San Pelayo como materialización de las distintas expresiones culturales en torno a este ritmo.

Por otra parte, el artículo 3º autoriza la Nación para asignar recursos presupuestales para el fomento y la protección de las muestras culturales referidas en dicha ley.

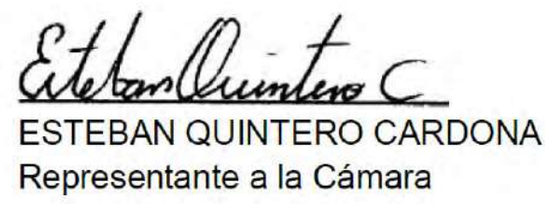
Impacto fiscal

Frente al impacto fiscal y los gastos presupuestales que pueda acarrear el proyecto de ley, el articulado de la iniciativa autoriza al Gobierno para que disponga de estos rubros con el objetivo de ejecutar y materializar lo contenido en el mismo.

V. PROPOSICIÓN

En mérito de lo expuesto, rindo ponencia positiva y solicito a los Honorables Representantes de la Comisión Sexta Constitucional Permanente dar Primer Debate al Proyecto de ley número 299 de 2019 Cámara, 277 de 2019 Senado, *"por medio de la cual se reconoce al porro y al Festival Nacional del Porro de San Pelayo como manifestación del patrimonio cultural inmaterial de la Nación y se dictan otras disposiciones".*

Del honorable representante,



ESTEBAN QUINTERO CARDONA
Representante a la Cámara

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE PROYECTO DE LEY 299 DE 2019 CÁMARA, 277 DE 2019 SENADO

por medio de la cual se reconoce al porro y al Festival Nacional del Porro de San Pelayo como manifestación del patrimonio cultural inmaterial de la Nación y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Reconózcase al porro y al Festival Nacional del Porro de San Pelayo, en el departamento de Córdoba como Manifestación del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y postúlense para su inclusión en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura.

Artículo 2°. Facúltese al Ministerio de Cultura para establecer e implementar un Plan Especial de Salvaguardia según lo dispuesto en la Ley 397 de 1997, que busque proteger la tradición folclórica del porro como ritmo tradicional y del Festival Nacional del Porro de San Pelayo como materialización de las distintas expresiones culturales en torno a este ritmo.

Artículo 3°. Autorícese a la nación asignar recursos presupuestales para el fomento y la protección de las muestras culturales referidas en la presente ley.

Parágrafo. Los departamentos y municipios podrán asignar presupuesto para el fomento y la protección de las muestras culturales referidas en la presente ley.

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación.

Cordialmente,



ESTEBAN QUINTERO CARDONA
Representante a la Cámara

COMISIÓN SEXTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SUSTANCIACIÓN

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE

Bogotá D.C., 16 de abril de 2020

En la fecha fue recibido informe de ponencia para primer debate al **Proyecto de ley número 299 de 2019 Cámara, 277 de 2019 Senado,** *por medio de la cual se reconoce al porro y al Festival Nacional del Porro de San Pelayo como manifestación del patrimonio cultural inmaterial de la nación y se dictan otras disposiciones*.

Dicha ponencia fue firmada por el Honorable Representante Esteban Quintero Cardona.

Mediante Nota Interna número C.S.C.P. 3.6 – 082 / del 16 de abril de 2020, se solicita la publicación en la ***Gaceta del Congreso*** de la República.



DIANA MARCELA MORALES ROJAS
Secretaria General

CONTENIDO

Gaceta número 162 - lunes 27 de abril de 2020

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PONENCIAS **Págs.**

Informe de ponencia para primer debate Texto propuesto al proyecto de ley número 283 de 2019 Cámara, por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. 1

Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley número 284 de 2019 Cámara, por medio del cual se declara patrimonio cultural nacional algunos barrios de Bogotá por su carácter urbanístico y se dictan otras disposiciones 33

Informe de ponencia Texto propuesto para primer debate al proyecto de ley número 299 de 2019 Cámara, 277 de 2019 Senado, por medio de la cual se reconoce al porro y al Festival Nacional del Porro de San Pelayo como manifestación del patrimonio cultural inmaterial de la Nación y se dictan otras disposiciones 46

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2020

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXIX - Nº 205 Bogotá, D. C., miércoles, 13 de mayo de 2020 EDICIÓN DE 42 PÁGINAS

DIRECTORES: GREGORIO ELJACH PACHECO
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO
www.secretariasenado.gov.co

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA
www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

ENMIENDAS

ENMIENDA INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 283 DE 2019 CÁMARA

por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000.

Bogotá, D. C. 8 de mayo de 2020

Honorable Representante

JUAN CARLOS LOZADA VARGAS

Presidente

Comisión Primera Constitucional

Cámara de Representantes

Ciudad

Referencia: Enmienda Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 283 de 2019 Cámara

Honorables Representantes:

Comedidamente me permito dar alcance al Informe de Ponencia para Primer Debate al Proyecto de ley número 283 de 2019 Cámara, *por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000"*, con el fin de presentar **enmienda** a su articulado, en razón a que con posterioridad a su radicación, este despacho recibió sendas comunicaciones provenientes de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)[1] y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap)[2], las cuales contienen un conjunto de comentarios que, por considerarlos pertinentes, se ha estimado necesario acogerlos en una parte, de manera tal que exigen hacer ajustes al articulado propuesto, antes de que se dé el primer debate, de la siguiente manera:

En consecuencia, acojo las siguientes propuestas sobre el **artículo 1°** que sustituye el Título XI, *"De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente"* Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000:

I. SE MODIFICA el Artículo 328, el cual quedará así:

Artículo 328. Aprovechamiento ilícito de las aguas y de sus recursos biológicos. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, use, explore, aproveche o se beneficie de las aguas o de los especímenes, productos o partes de los recursos hidrobiológicos~~,~~ ~~o~~ biológicos* ***o pesqueros*** *de las aguas y del suelo o el subsuelo del mar territorial o de la zona económica de dominio continental e insular de la República, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

[1] Oficio Radicado 2020065438-2-000, fechado el 28 de abril de 2020, suscrito por Rodrigo Suárez Castaño, director General ANLA.

[2] Oficio Radicado S2020NC000405- fechado el 4 de mayo de 2020, suscrito por Miguel Ángel Ardila Ardila, Jefe Oficina Asesora Jurídica AUNAP.

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de veinticinco mil (25.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

*La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se desvíe, destruya, inutilice o haga desaparecer los cuerpos hídricos**, o** sus recursos hidrobiológicos **o pesqueros**.* - **(PROPUESTA AUNAP).**

II. SE MODIFICA el Artículo 330, el cual quedará así:

Artículo 330. Aprovechamiento ilícito de los recursos de la fauna. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, capture, extraiga, transporte, mantenga, comercie, aproveche, explote o se beneficie de la fauna, o realice actividades que impidan o dificulten su reproducción**, crecimiento** o migración incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

*La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, **prohibidas,** protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.* - **(Propuesta AUNAP)**

III. SE MODIFICA el Artículo 330C, el cual quedará así:

Artículo 330C. Pesca ilegal. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese, envase o almacene ejemplares o productos de especies protegidas, vedadas**, prohibidas** o en peligro de extinción, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

*En la misma pena incurrirá el que exceda el número de **individuos o** de piezas autorizadas**, o comercialice por debajo** de **las** tallas **menores a las** permitidas, **las comercie,** o utilice instrumentos**, aparejos y artes de pesca** no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente para cualquier especie.*

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de cuarenta y cuatro mil (44.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

*La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en **zona protegida o prohibida, área de reserva o** zonas o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva, se construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ríos, ciénagas, lagunas, caños y canales o con la conducta se desequen, varíen o bajen su nivel, o se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.* - **(Propuesta AUNAP)**

IV. SE MODIFICA el Artículo 330D, el cual quedará así:

Artículo 330D. Aleteo. *El que cercene**, retenga** aletas de tiburón, **las retenga** y descarte el resto del cuerpo al mar, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

*La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en zonas **protegidas o prohibidas, áreas de reserva o zonas** o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de **aparejos y artes de pesca prohibidos o no autorizados,** venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva, se construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ríos, ciénagas, lagunas, caños y canales o con la conducta se desequen, varíen o bajen su nivel, o se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.* - **(Propuesta AUNAP)**

V. SE ELIMINA el Artículo 335D y en consecuencia cambia la numeración del Artículo 335E, el cual quedará:

Artículo 335E~~D~~. Aprovechamiento ilícito de residuos. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se*

apropie, recoja, transporte, valorice, transforme, elimine o aproveche residuos sólidos o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. - **(Propuesta ANLA)**

VI. PLIEGO DE MODIFICACIONES

TEXTO RADICADO	TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
Artículo 1°. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:	**Artículo 1°.** Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:
TÍTULO XI	**TÍTULO XI**
DE LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTE	**DE LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTE**
CAPÍTULO I	**CAPÍTULO I**
DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS DEL AGUA Y DEL SUELO	**DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS DEL AGUA Y DEL SUELO**
Artículo 328. ***Aprovechamiento ilícito de las aguas y de sus recursos biológicos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, use, explore, aproveche o se beneficie de las aguas o de los especímenes, productos o partes de los recursos biológicos de las aguas y del suelo o el subsuelo del mar territorial o de la zona económica de dominio continental e insular de la República, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 328.** ***Aprovechamiento ilícito de las aguas y de sus recursos biológicos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, use, explore, aproveche o se beneficie de las aguas o de los especímenes, productos o partes de los recursos **hidrobiológicos,** biológicos **o pesqueros** de las aguas y del suelo o el subsuelo del mar territorial o de la zona económica de dominio continental e insular de la República, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de veinticinco mil (25.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de veinticinco mil (25.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se desvíe, destruya, inutilice o haga desaparecer los cuerpos hídricos o sus recursos biológicos.	La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se desvíe, destruya, inutilice o haga desaparecer los cuerpos hídricos**,** ~~o~~ sus recursos **hidro**biológicos **o pesqueros**.
	Artículo 328A. ***Destrucción de coral.*** **El que destruya, inutilice, altere, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe arrecife coralino, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de quinientos (500) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.**
	Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

TEXTO RADICADO	TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
	La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se desvíe, destruya, inutilice o haga desaparecer los cuerpos hídricos o sus recursos hidrobiológicos.
Artículo 329. ***Aprovechamiento ilícito de los recursos de la tierra, del suelo y del subsuelo.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, trafique, comercie, explore, aproveche o se beneficie de los recursos naturales de la tierra, del suelo o del subsuelo o provoque o realice directa o indirectamente extracciones, excavaciones, aterramientos o vibraciones en el suelo o el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 329.** ***Aprovechamiento ilícito de los recursos de la tierra, del suelo y del subsuelo.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la**s** normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, trafique, comercie, explore, aproveche o se beneficie de los recursos naturales de la tierra, del suelo o del subsuelo o provoque o realice directa o indirectamente extracciones, excavaciones, aterramientos o vibraciones en el suelo o el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de veintiséis mil (26.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de veintiséis mil (26.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.	La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.
Artículo 329A. ***Depósito o inyección de sustancias en el suelo.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes realice inyección o depósito de sustancias que generen daños en el ambiente, en el suelo o en el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente:	**Artículo 329A.** ***Depósito o inyección de sustancias en el suelo.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes realice inyección o depósito de sustancias que generen daños en el ambiente, en el suelo o en el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente:
Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.	La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.
Artículo 329B. ***Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes excave, explote, explore o extraiga yacimiento minero, arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 329B.** ***Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes excave, explote, explore o extraiga yacimiento minero, arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

TEXTO RADICADO	TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se realice a través de minería a cielo abierto, o con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.	La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se realice a través de minería a cielo abierto, o con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.
Artículo 329C. ***Fracking.*** El que realice actividades de explotación y aprovechamiento del suelo o del subsuelo a través del método de fractura hidráulica, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 329C.** ***Fracking.*** El que realice actividades de explotación y aprovechamiento del suelo o del subsuelo a través del método de fractura hidráulica, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de treinta y cinco mil (35.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de treinta y cinco mil (35.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales o altere o destruya acuíferos.	La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales o altere o destruya acuíferos.
CAPÍTULO II **DE LOS DELITOS CONTRA LA BIODIVERSIDAD DE LA FAUNA Y DE LA FLORA**	**CAPÍTULO II** **DE LOS DELITOS CONTRA LA BIODIVERSIDAD DE LA FAUNA Y DE LA FLORA**
Artículo 330. ***Aprovechamiento ilícito de los recursos de la fauna.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, capture, extraiga, transporte, mantenga, trafique, comercie, adquiera, aproveche, explote o se beneficie de la fauna, o realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 330.** ***Aprovechamiento ilícito de los recursos de la fauna.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, capture, extraiga, transporte, mantenga, **~~trafique,~~** comercie, **~~adquiera,~~** aproveche, explote o se beneficie de la fauna, o realice actividades que impidan o dificulten su reproducción**, crecimiento** o migración incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

TEXTO RADICADO	TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.	La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas**, prohibidas**, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.
	Artículo 330A. ***Tráfico de fauna.*** **El que trafique o que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes adquiera especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas o invasoras incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de trescientos (300) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.**
	Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
	La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.
Artículo 330A. ***Caza ilegal.*** El que sin permiso de autoridad competente o infringiendo las normas existentes, cazare en época de veda o excediere el número de piezas permitidas, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 330B~~A~~.** ***Caza ilegal.*** El que sin permiso de autoridad competente o con **incumplimiento de ~~infringiendo~~** las normas **vigentes ~~existentes~~**, cazare en época de veda o excediere el número de piezas permitidas, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá quien realice caza deportiva.	En la misma pena incurrirá quien realice caza deportiva.
Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ochenta y cuatro (84) a ciento ochenta (180) meses y multa de diecisiete mil (17.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ochenta y cuatro (84) a ciento ochenta (180) meses y multa de diecisiete mil (17.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.	La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

TEXTO RADICADO	TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
Artículo 330B. ***Pesca ilegal.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese, envase o almacene ejemplares o productos de especies protegidas, vedadas o en peligro de extinción, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la misma pena incurrirá el que exceda el número de piezas autorizadas o de tallas menores a las permitidas, las comercie, o utilice instrumentos no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente para cualquier especie. Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de cuarenta y cuatro mil (44.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en zonas o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva, se construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ríos, ciénagas, lagunas, caños y canales o con la conducta se desequen, varíen o bajen su nivel, o se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.	**Artículo 330C~~B~~.** ***Pesca ilegal.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese, envase o almacene ejemplares o productos de especies protegidas, vedadas**, prohibidas** o en peligro de extinción, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la misma pena incurrirá el que exceda el número **de individuos o** de piezas autorizadas**, ~~o~~ comercialice por debajo** de **las** tallas ~~**menores a las**~~ permitidas, ~~**las comercie,**~~ o utilice instrumentos**, aparejos y artes de pesca** no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente para cualquier especie. Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de cuarenta y cuatro mil (44.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en **zona protegida o prohibida, área de reserva o** zonas o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva, se construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ríos, ciénagas, lagunas, caños y canales o con la conducta se desequen, varíen o bajen su nivel, o se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat. **Artículo 330D.** ***Aleteo*****. El que cercene aletas de tiburón, las retenga y descarte el resto del cuerpo al mar, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.** **Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.** **La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en zonas protegidas o prohibidas, áreas de reserva o zonas o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de aparejos y artes de pesca prohibidos o no autorizados, venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva, se construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ríos, ciénagas, lagunas, caños y canales o con la conducta se desequen, varíen o bajen su nivel, o se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.**

TEXTO RADICADO	TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
Artículo 331. ***Aprovechamiento ilícito de los recursos de la flora.*** El que sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, adquiera, recolecte, extraiga, corte, tale, arranque, posea, destruya, transporte, trafique, comercie, aproveche o se beneficie de las especies de la flora silvestre o acuática, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en zonas o áreas de reserva, en período de producción de semillas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.	**Artículo 331.** ***Aprovechamiento ilícito de los recursos de la flora.*** El que sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, adquiera, recolecte, extraiga, corte, tale, arranque, posea, destruya, transporte, trafique, comercie, aproveche o se beneficie de las especies de la flora silvestre o acuática, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en **reserva climática,** zonas o áreas de reserva, en período de producción de semillas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.
Artículo 331A. ***Deforestación*****.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, tale, queme, corte o destruya, en todo o en parte bosques naturales, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de treinta y siete mil (37.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se altere las aguas, se ocasione erosión del suelo, se modifique el régimen climático, se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.	**Artículo 331A.** ***Deforestación*****.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la**s** normas vigentes, tale, queme, corte o destruya, en todo o en parte bosques naturales, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de treinta y siete mil (37.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, **reserva climática,** ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se altere las aguas, se ocasione erosión del suelo, se modifique el régimen climático, se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.
Artículo 331B. ***Promoción y financiación de la Deforestación.*** El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte o destrucción, en todo o en parte de bosques naturales, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 331B.** ***Promoción y financiación de la Deforestación.*** El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte o destrucción, en todo o en parte de bosques naturales, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

TEXTO RADICADO	TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se altere las aguas, se ocasione erosión del suelo, se modifique el régimen climático, se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.	La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, **reserva climática,** ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se altere las aguas, se ocasione erosión del suelo, se modifique el régimen climático, se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.
Artículo 332. ***Manejo ilícito de especies exóticas.*** El que introduzca, trasplante, manipule, experimente, mantenga, adquiera, inocule, libere o propague especies silvestres exóticas o invasoras, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento a ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 332.** ***Manejo ilícito de especies exóticas.*** El que **sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes** introduzca, trasplante, manipule, experimente, mantenga, **comercie** ~~**adquiera,**~~ inocule, libere o propague especies silvestres exóticas o invasoras, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de trece mil (13.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de trece mil (13.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
Artículo 332A. ***Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normas vigentes importe, introduzca, comercialice, exporte, manipule, experimente, libere, inocule, o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos moléculas, sustancias o elementos que constituyan un riesgo o pongan en peligro la salud humana, el ambiente o la existencia de los recursos de la fauna, de la flora o biológicos de las aguas, o alteren perjudicialmente sus poblaciones incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 332A.** ***Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la**s** normas vigentes importe, introduzca, comercialice, exporte, manipule, experimente, libere, inocule, o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos moléculas, sustancias o elementos que constituyan un riesgo o pongan en peligro la salud humana, el ambiente o la existencia de los recursos de la fauna, de la flora o biológicos de las aguas, o alteren perjudicialmente sus poblaciones incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de diecisiete mil (17.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de diecisiete mil (17.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
Si se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad.	Si se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad.

TEXTO RADICADO	TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
CAPÍTULO III **DE LOS DELITOS CONTRA LA BIODIVERSIDAD GENÉTICA**	**CAPÍTULO III** **DE LOS DELITOS CONTRA LA BIODIVERSIDAD GENÉTICA**
Artículo 333. ***Aprovechamiento ilícito de recursos genéticos de la biodiversidad.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, exporte, mantenga, trafique, comercie, aproveche, explore, valorice, transforme o se beneficie a cualquier título de los recursos genéticos de la flora o la fauna, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. El que promueva, financie, dirija, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en este artículo, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 333.** ***Aprovechamiento ilícito de recursos genéticos de la biodiversidad.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, exporte, mantenga, trafique, comercie, aproveche, explore, valorice, transforme o se beneficie a cualquier título de los recursos genéticos de la flora o la fauna, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. El que promueva, financie, dirija, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en este artículo, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
CAPÍTULO IV **DE LOS DELITOS CONTRA EL HÁBITAT Y EL PAISAJE NATURAL**	**CAPÍTULO IV** **DE LOS DELITOS CONTRA EL HÁBITAT Y EL PAISAJE NATURAL**
Artículo 334. ***Destrucción o alteración de hábitat.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes destruya o altere hábitat de especies de la flora o de la fauna, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente: Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	**Artículo 334.** ***Destrucción o alteración de hábitat.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes destruya o altere hábitat de especies de la flora o de la fauna, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente: Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
Artículo 334A. ***Alteración del paisaje.*** El que sin permiso de autoridad competente con incumplimiento de las normas vigentes, altere el recurso del paisaje urbano o rural, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de trece mil (13.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	**Artículo 334A.** ***Alteración del paisaje.*** El que sin permiso de autoridad competente con incumplimiento de las normas vigentes, altere el recurso del paisaje urbano o rural, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de trece mil (13.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
CAPÍTULO V **DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL**	**CAPÍTULO V** **DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL**
Artículo 335. ***Contaminación ambiental.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes provoque, contamine o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, disposiciones o ruidos en el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, o demás recursos naturales incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cincuenta y cinco (55) a ciento doce (112) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 335.** ***Contaminación ambiental.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes provoque, contamine o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, disposiciones o ruidos en el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, o demás recursos naturales incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cincuenta y cinco (55) a ciento doce (112) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

TEXTO RADICADO	TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el presente artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, concurra alguna de las siguientes circunstancias:	La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el presente artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.	1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.
2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por las normas vigentes o haya infringido más de dos parámetros.	2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por las normas vigentes o haya infringido más de dos parámetros.
3. Cuando la contaminación, descarga, disposición o vertimiento se realice en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas.	3. Cuando la contaminación, descarga, disposición o vertimiento se realice en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas.
4. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, emisiones o disposiciones.	4. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, emisiones o disposiciones.
5. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.	5. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.
6. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de vigilancia y control de la autoridad ambiental.	6. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de vigilancia y control de la autoridad ambiental.
7. El perjuicio o alteración ocasionados adquieran un carácter catastrófico o irreversible.	7. El perjuicio o alteración ocasionados adquieran un carácter catastrófico o irreversible.
Artículo 335A. ***Contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes contamine, almacene, transporte, vierta o disponga inadecuadamente, residuo sólido peligroso incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 335A.** ***Contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes contamine, almacene, transporte, vierta o disponga inadecuadamente, residuo sólido peligroso incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el presente artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, concurra alguna de las siguientes circunstancias:	La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el presente artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.	1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.
2. Cuando la descarga o disposición se realice en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas.	2. Cuando la descarga o disposición se realice en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas.

TEXTO RADICADO	TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente la descarga o disposición.	3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente la descarga o disposición.
4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.	4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.
5. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de vigilancia y control de la autoridad ambiental.	5. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de vigilancia y control de la autoridad ambiental.
6. El perjuicio o alteración ocasionados adquieran un carácter catastrófico o irreversible.	6. El perjuicio o alteración ocasionados adquieran un carácter catastrófico o irreversible.
Artículo 335B. ***Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo.*** El que contamine directa o indirectamente la atm**ó**sfera, el suelo, el subsuelo o las aguas como consecuencia de la actividad de extracción, excavación, exploración, construcción, inyección, dep**ó**sito, montaje, explotación, beneficio, transformación o transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 335B.** ***Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo.*** El que contamine directa o indirectamente la atm**ó**sfera, el suelo, el subsuelo o las aguas como consecuencia de la actividad de extracción, excavación, exploración, construcción, inyección, dep**ó**sito, montaje, explotación, beneficio, transformación o transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
Si la conducta se realizare como consecuencia de la minería a cielo abierto la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad de la pena.	Si la conducta se realizare como consecuencia de la minería a cielo abierto la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad de la pena.
Artículo 335C. ***Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, realice experimentos, con especies, agentes biológicos o bioquímicos, que constituyan, generen o pongan en peligro o riesgo la salud humana, el ambiente o la existencia de los recursos de la fauna, la flora o biológicos de las aguas, o altere sus poblaciones, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 335C.** ***Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, realice experimentos, con especies, agentes biológicos o bioquímicos, que constituyan, generen o pongan en peligro o riesgo la salud humana, el ambiente o la existencia de los recursos de la fauna, la flora o biológicos de las aguas, o altere sus poblaciones, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de treinta y siete mil (37.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338	Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de treinta y siete mil (37.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

TEXTO RADICADO	TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
~~**Artículo 335D.** ***Fabricación, importación, exportación, tráfico o uso de plásticos prohibidos.*** **El que fabrique, trafique, importe, exporte, distribuya, comercialice, transporte, almacene, financie, ofrezca, adquiera, suministre a cualquier título o use elementos de plástico prohibidos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.**~~	~~**Artículo 335D.** ***Fabricación, importación, exportación, tráfico o uso de plásticos prohibidos*****. El que fabrique, trafique, importe, exporte, distribuya, comercialice, transporte, almacene, financie, ofrezca, adquiera, suministre a cualquier título o use elementos de plástico prohibidos bolsas utilizadas para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías, distribuidas en los puntos de pago; bolsas plásticas para embalar periódicos, revistas y facturas; bolsas utilizadas en las lavanderías para empacar ropa lavada; rollos de película extensible para el empaque de alimentos a granel, excepto los cárnicos; rollos de bolsas vacías para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías o llevar alimentos, excepto los cárnicos; rollos de película extensible y de burbuja utilizados para proteger objetos durante las mudanzas dentro del territorio nacional; envases y recipientes para contener o llevar alimentos preparados de consumo inmediato; bolsas para contener líquidos; platos, bandejas, cubiertos (cuchillos, tenedores, cucharas), vasos y guantes para comer; mezcladores y pitillos para bebidas y soportes plásticos para las bombas de inflar; soportes plásticos de los Copitos de Algodón o hisopos flexibles con puntas de Algodón incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.**~~ ~~**Las sanciones previstas en este artículo, no aplicarán sobre aquellos plásticos de un solo uso diseñados para propósitos médicos o de salud pública, por razones de asepsia e higiene o contener sustancias químicas que presentan riesgo a la salud humana en su manipulación.**~~
Artículo 335E. ***Aprovechamiento ilícito de residuos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, recoja, transporte, valorice, transforme, elimine o aproveche residuos sólidos o Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 335~~E~~D.** ***Aprovechamiento ilícito de residuos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, recoja, transporte, valorice, transforme, elimine o aproveche residuos sólidos o Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
CAPÍTULO VI **DE LA INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA**	**CAPÍTULO VI** **DE LA INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA**
Artículo 336. ***Invasión de áreas de especial importancia ecológica.*** El que invada, permanezca, así sea de manera temporal, o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en áreas de reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, definidos en la ley o reglamento, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 336.** ***Invasión de áreas de especial importancia ecológica.*** El que invada, permanezca, así sea de manera temporal, o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en áreas de reserva forestal, **reserva climática,** zonas de nacimientos hídricos, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, definidos en la ley o reglamento, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

TEXTO RADICADO	TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente.	La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente.
Artículo 336A. ***Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica.*** El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 336A.** ***Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica.*** El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente.	La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente.
CAPÍTULO VII **DE LA DESTINACIÓN ILEGAL DE TIERRAS**	**CAPÍTULO VII** **DE LA DESTINACIÓN ILEGAL DE TIERRAS**
Artículo 337. ***Destinación ilegal de tierras establecidas.*** El que utilice o destine con uso diferente para el cual fueron definidas las tierras establecidas, declaradas, tituladas o delimitadas por autoridad competente, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 337.** ***Destinación ilegal de tierras establecidas.*** El que utilice o destine con uso diferente para el cual fueron definidas las tierras establecidas, declaradas, tituladas o delimitadas por autoridad competente, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá quien use o destine tierras sobre las cuales se hubiese cometido deforestación para fines distintos a la resiembra o restauración.	En la misma pena incurrirá quien use o destine tierras sobre las cuales se hubiese cometido deforestación para fines distintos a la resiembra o restauración.
Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se impondrá prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa de trescientos (300) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se impondrá prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa de trescientos (300) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de once mil (11.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de once mil (11.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

TEXTO RADICADO	TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
CAPÍTULO VIII **IMPACTO AMBIENTAL (IA)**	**CAPÍTULO VIII** **IMPACTO AMBIENTAL (IA)**
Artículo 338. ***Impacto Ambiental (IA).*** Cuando las conductas del presente título tengan como resultado un Impacto Ambiental (IA), el ámbito punitivo de movilidad de la pena de prisión y de multa se dividirá en tercios, así: uno mínimo, uno medio y uno máximo.	**Artículo 338.** ***Impacto Ambiental (IA).*** Cuando las conductas del presente título tengan como resultado un Impacto Ambiental (IA), el ámbito punitivo de movilidad de la pena de prisión y de multa se dividirá en tercios, así: uno mínimo, uno medio y uno máximo.
La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio mínimo cuando la afectación tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) que no pase de cincuenta (50) IA.	La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio mínimo cuando la afectación tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) que no pase de cincuenta (50) IA.
La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio medio cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental superior a cincuenta (50) IA sin exceder de setenta y cinco (75) IA.	La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio medio cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental superior a cincuenta (50) IA sin exceder de setenta y cinco (75) IA.
La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio máximo cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental que pasare de setenta y cinco (75) IA.	La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio máximo cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental que pasare de setenta y cinco (75) IA.
CAPÍTULO IX **DISPOSICIONES COMUNES**	**CAPÍTULO IX** **DISPOSICIONES COMUNES**
Artículo 338A. ***Circunstancias de agravación punitiva.*** Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán a la mitad cuando:	**Artículo 338A.** Circunstancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán a la mitad cuando:
1) Se afecten ecosistemas estratégicos que hagan parte de las áreas protegidas del Sistema Nacional, Regional o Local.	1) Se afecten ecosistemas estratégicos que hagan parte de las áreas protegidas del Sistema Nacional, Regional o Local.
2) Cuando el daño ambiental sea consecuencia de la acción u omisión de quienes ejercen funciones de vigilancia y control.	2) Cuando el daño ambiental sea consecuencia de la acción u omisión de quienes ejercen funciones de vigilancia y control.
3) Se pongan en peligro la salud humana, las especies de flora, fauna o su hábitat.	3) Se pongan en peligro la salud humana, las especies de flora, fauna o su hábitat.
	4) Cuando se genere pérdida de biodiversidad.
Artículo 338B. ***Modalidad culposa.*** Si por culpa se ocasionare alguna de las conductas descritas en este título, en los casos en que ello sea posible según su configuración estructural, la pena correspondiente se reducirá a la mitad.	**Artículo 338B.** ***Modalidad culposa.*** Si por culpa se ocasionare alguna de las conductas descritas en este título, en los casos en que ello sea posible según su configuración estructural, la pena correspondiente se reducirá a la mitad.
Artículo 338C. ***Extinción de dominio.*** Los bienes muebles e inmuebles empleados para el desarrollo de las conductas descritas en este título serán sometidos a extinción de dominio en los términos de la Ley 1708 de 2014.	**Artículo 338C.** ***Extinción de dominio.*** Los bienes muebles e inmuebles empleados para el desarrollo de las conductas descritas en este título serán sometidos a extinción de dominio en los términos de la Ley 1708 de 2014.
Tratándose de animales, estos serán puestos a decomiso y disposición de la autoridad competente.	Tratándose de animales, estos serán puestos a decomiso y disposición de la autoridad competente.
Lo previsto en el presente artículo no aplicará frente a los delitos de depósito o inyección de sustancias en el suelo (Art. 329A C.P.), alteración del paisaje (Art. 334A C.P.), fabricación, importación, exportación, tráfico o uso de plásticos prohibidos (Art. 335D C.P.), aprovechamiento ilícito de residuos (Art. 335E C.P.) e invasión de áreas de especial importancia ecológica (Art. 336 C.P.).	Lo previsto en el presente artículo no aplicará frente a los delitos de depósito o inyección de sustancias en el suelo (Art. 329A C.P.), alteración del paisaje (Art. 334A C.P.), fabricación, importación, exportación, tráfico o uso de plásticos prohibidos (Art. 335D C.P.), aprovechamiento ilícito de residuos (Art. 335E C.P.) e invasión de áreas de especial importancia ecológica (Art. 336 C.P.).

TEXTO RADICADO	TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
Artículo 339. ***Medida Cautelar.*** El juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.	**Artículo 339.** ***Medida Cautelar.*** El juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.
Artículo 2°. ***Reglamentación del Impacto Ambiental.*** El Gobierno nacional en un término de tres (3) meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley, expedirá la reglamentación sobre el método para determinar el daño ambiental según el Impacto Ambiental (IA) en los términos del artículo primero.	Se mantiene igual.
Artículo NUEVO.	**Artículo 3°.** ***Pedagogía sobre el ambiente*****. Los establecimientos educativos de educación básica, media y universitaria, incluirán en su Proyecto Educativo Institucional, una cátedra ambiental que busque la compresión, el fomento y la participación ciudadana para generar conciencia ambiental sobre el buen uso de los recursos naturales, las prácticas que son contrarias a la sostenibilidad, la importancia de las áreas de especial importancia ecológica y las regulaciones y leyes sobre la materia.** **Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación promoverán programas de formación docente para el desarrollo de las mencionadas estrategias.**
Artículo 3°. ***Vigencia.*** La presente ley entrará en vigencia seis (6) meses después de la fecha de su promulgación y deroga el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000.	**Artículo 4~~3°~~.** ***Vigencia.*** La presente ley entrará en vigencia seis (6) meses después de la fecha de su promulgación y deroga el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000.

VII. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 283 DE 2019 CÁMARA

por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000".

El Congreso de la República

DECRETA:

Artículo 1°. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:

TÍTULO XI

DE LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTE

CAPÍTULO I

DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS DEL AGUA Y DEL SUELO

Artículo 328. ***Aprovechamiento ilícito de las aguas y de sus recursos biológicos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, use, explore, aproveche o se beneficie de las aguas o de los especímenes, productos o partes de los recursos hidrobiológicos, biológicos o pesqueros de las aguas y del suelo o el subsuelo del mar territorial o de la zona económica de dominio continental e insular de la República, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de veinticinco mil (25.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se desvíe, destruya, inutilice o haga desaparecer los cuerpos hídricos, sus recursos hidrobiológicos o pesqueros.

Artículo 328A. ***Destrucción de coral.*** El que destruya, inutilice, altere, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe arrecife coralino, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de quinientos (500) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se desvíe, destruya, inutilice o haga desaparecer los cuerpos hídricos o sus recursos hidrobiológicos.

Artículo 329. ***Aprovechamiento ilícito de los recursos de la tierra, del suelo y del subsuelo.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, trafique, comercie, explore, aproveche o se beneficie de los recursos naturales de la tierra, del suelo o del subsuelo o provoque o realice directa o indirectamente extracciones, excavaciones, aterramientos o vibraciones en el suelo o el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de veintiséis mil (26.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.

Artículo 329A. ***Depósito o inyección de sustancias en el suelo.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes realice inyección o depósito de sustancias que generen daños en el ambiente, en el suelo o en el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente:

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.

Artículo 329B. ***Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes excave, explote, explore o extraiga yacimiento minero, arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se realice a través de minería a cielo abierto, o con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.

Artículo 329C. ***Fracking.*** El que realice actividades de explotación y aprovechamiento del suelo o del subsuelo a través del método de fractura hidráulica, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de treinta y cinco mil (35.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales o altere o destruya acuíferos.

CAPÍTULO II

DE LOS DELITOS CONTRA LA BIODIVERSIDAD DE LA FAUNA Y DE LA FLORA

Artículo 330. ***Aprovechamiento ilícito de los recursos de la fauna.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de

las normas vigentes se apropie, capture, extraiga, transporte, mantenga, comercie, aproveche, explote o se beneficie de la fauna, o realice actividades que impidan o dificulten su reproducción, crecimiento o migración incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, prohibidas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

Artículo 330A. ***Tráfico de fauna.*** El que trafique o que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes adquiera especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas o invasoras incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de trescientos (300) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

Artículo 330B. ***Caza ilegal*****.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, cazare en época de veda o excediere el número de piezas permitidas, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá quien realice caza deportiva.

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ochenta y cuatro (84) a ciento ochenta (180) meses y multa de diecisiete mil (17.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

Artículo 330C. ***Pesca ilegal*****.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese, envase o almacene ejemplares o productos de especies protegidas, vedadas, prohibidas o en peligro de extinción, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que exceda el número de individuos o de piezas autorizadas, comercialice por debajo de las tallas permitidas, o utilice instrumentos, aparejos y artes de pesca no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente para cualquier especie.

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de cuarenta y cuatro mil (44.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en zona protegida o prohibida, área de reserva o zonas o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva, se construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ríos, ciénagas, lagunas, caños y canales o con la conducta se desequen, varíen o bajen su nivel, o se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

Artículo 330D. ***Aleteo.*** El que cercene aletas de tiburón, las retenga y descarte el resto del cuerpo al mar, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en zonas protegidas o prohibidas, áreas de reserva o zonas o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de aparejos y artes de pesca prohibidos o no autorizados, venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva, se construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ríos, ciénagas, lagunas, caños y canales o con la conducta se desequen, varíen o bajen su nivel, o se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

Artículo 331. ***Aprovechamiento ilícito de los recursos de la flora.*** El que sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, adquiera, recolecte, extraiga, corte, tale, arranque, posea, destruya, transporte, trafique, comercie, aproveche o se beneficie de las especies de la flora silvestre o acuática, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva climática, zonas o áreas de reserva, en período de producción de semillas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

Artículo 331A. ***Deforestación.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, tale, queme, corte o destruya, en todo o en parte bosques naturales, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de treinta y siete mil (37.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, reserva climática, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se altere las aguas, se ocasione erosión del suelo, se modifique el régimen climático, se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

Artículo 331B. ***Promoción y financiación de la Deforestación.*** El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte o destrucción, en todo o en parte de bosques naturales, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, reserva climática, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se altere las aguas, se ocasione erosión del suelo, se modifique el régimen climático, se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

Artículo 332. ***Manejo ilícito de especies exóticas.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes introduzca, trasplante, manipule, experimente, mantenga, comercie, inocule, libere o propague especies silvestres exóticas o invasoras, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y

cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de trece mil (13.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

Artículo 332A. ***Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes importe, introduzca, comercialice, exporte, manipule, experimente, libere, inocule, o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos moléculas, sustancias o elementos que constituyan un riesgo o pongan en peligro la salud humana, el ambiente o la existencia de los recursos de la fauna, de la flora o biológicos de las aguas, o alteren perjudicialmente sus poblaciones incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de diecisiete mil (17.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

Si se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad.

CAPÍTULO III

DE LOS DELITOS CONTRA LA BIODIVERSIDAD GENÉTICA

Artículo 333. ***Aprovechamiento ilícito de recursos genéticos de la biodiversidad.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, exporte, mantenga, trafique, comercie, aproveche, explore, valorice, transforme o se beneficie a cualquier título de los recursos genéticos de la flora o la fauna, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El que promueva, financie, dirija, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en este artículo, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO IV

DE LOS DELITOS CONTRA EL HÁBITAT Y EL PAISAJE NATURAL

Artículo 334. ***Destrucción o alteración de hábitat.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes destruya o altere hábitat de especies de la flora o de la fauna, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente:

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

Artículo 334A. ***Alteración del paisaje.*** El que sin permiso de autoridad competente con incumplimiento de las normas vigentes, altere el recurso del paisaje urbano o rural, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de trece mil (13.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

CAPÍTULO V

DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Artículo 335. ***Contaminación ambiental.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes provoque, contamine o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, disposiciones o ruidos en el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, o demás recursos naturales incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cincuenta y cinco (55) a ciento doce (112) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el presente artículo, sin perjuicio

de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.

2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por las normas vigentes o haya infringido más de dos parámetros.

3. Cuando la contaminación, descarga, disposición o vertimiento se realice en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas.

4. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, emisiones o disposiciones.

5. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.

6. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de vigilancia y control de la autoridad ambiental.

7. El perjuicio o alteración ocasionados adquieran un carácter catastrófico o irreversible.

Artículo 335A. ***Contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes contamine, almacene, transporte, vierta o disponga inadecuadamente, residuo sólido peligroso incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el presente artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.

2. Cuando la descarga o disposición se realice en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas.

3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente la descarga o disposición.

4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.

5. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de vigilancia y control de la autoridad ambiental.

6. El perjuicio o alteración ocasionados adquieran un carácter catastrófico o irreversible.

Artículo 335B. ***Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo.*** El que contamine directa o indirectamente la atm**ó**sfera, el suelo, el subsuelo o las aguas como consecuencia de la actividad de extracción, excavación, exploración, construcción, inyección, dep**ó**sito, montaje, explotación, beneficio, transformación o transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

Si la conducta se realizare como consecuencia de la minería a cielo abierto la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad de la pena.

Artículo 335C. ***Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, realice experimentos, con especies, agentes biológicos o bioquímicos, que constituyan, generen o pongan en peligro o riesgo la salud humana, el ambiente o la existencia de los recursos de la fauna, la flora o biológicos de las aguas, o altere sus poblaciones, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de treinta y siete mil (37.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

Artículo 335D. ***Aprovechamiento ilícito de residuos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas

vigentes se apropie, recoja, transporte, valorice, transforme, elimine o aproveche residuos sólidos o Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO VI.

DE LA INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Artículo 336. ***Invasión de áreas de especial importancia ecológica.*** El que invada, permanezca, así sea de manera temporal, o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en áreas de reserva forestal, reserva climática, zonas de nacimientos hídricos, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, definidos en la ley o reglamento, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente.

Artículo 336A. ***Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica.*** El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente.

CAPÍTULO VII.

DE LA DESTINACIÓN ILEGAL DE TIERRAS

Artículo 337. ***Destinación ilegal de tierras establecidas.*** El que utilice o destine con uso diferente para el cual fueron definidas las tierras establecidas, declaradas, tituladas o delimitadas por autoridad competente, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá quien use o destine tierras sobre las cuales se hubiese cometido deforestación para fines distintos a la resiembra o restauración.

Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se impondrá prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa de trescientos (300) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de once mil (11.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

CAPÍTULO VIII.

IMPACTO AMBIENTAL (IA)

Artículo 338. ***Impacto Ambiental (IA).*** Cuando las conductas del presente título tengan como resultado un Impacto Ambiental (IA), el ámbito punitivo de movilidad de la pena de prisión y de multa se dividirá en tercios, así: uno mínimo, uno medio y uno máximo.

La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio mínimo cuando la afectación tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) que no pase de cincuenta (50) IA.

La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio medio cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental superior a cincuenta (50) IA sin exceder de setenta y cinco (75) IA.

La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio máximo cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental que pasare de setenta y cinco (75) IA.

CAPÍTULO IX.

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 338A. ***Circunstancias de agravación punitiva.*** Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán a la mitad cuando:

1) Se afecten ecosistemas estratégicos que hagan parte de las áreas protegidas del Sistema Nacional, Regional o Local.

2) Cuando el daño ambiental sea consecuencia de la acción u omisión de quienes ejercen funciones de vigilancia y control.

3) Se pongan en peligro la salud humana, las especies de flora, fauna o su hábitat.

4) Cuando se genere pérdida de biodiversidad.

Artículo 338B. ***Modalidad culposa.*** Si por culpa se ocasionare alguna de las conductas descritas en este título, en los casos en que ello sea posible según su configuración estructural, la pena correspondiente se reducirá a la mitad.

Artículo 338C. ***Extinción de dominio.*** Los bienes muebles e inmuebles empleados para el desarrollo de las conductas descritas en este título serán sometidos a extinción de dominio en los términos de la Ley 1708 de 2014.

Tratándose de animales, estos serán puestos a decomiso y disposición de la autoridad competente.

Lo previsto en el presente artículo no aplicará frente a los delitos de depósito o inyección de sustancias en el suelo (Art. 329A C.P.), alteración del paisaje (Art. 334A C.P.), fabricación, importación, exportación, tráfico o uso de plásticos prohibidos (Art. 335D C.P.), aprovechamiento ilícito de residuos (Art. 335E C.P.) e invasión de áreas de especial importancia ecológica (Art. 336 C.P.).

Artículo 339. ***Medida Cautelar.*** El juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.

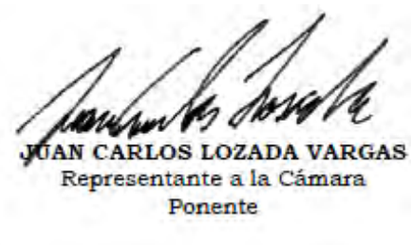
Artículo 2°. ***Reglamentación del Impacto Ambiental.*** El Gobierno nacional en un término de tres (3) meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley, expedirá la reglamentación sobre el método para determinar el daño ambiental según el Impacto Ambiental (IA) en los términos del artículo primero.

Artículo 3°. ***Pedagogía sobre el ambiente.*** Los establecimientos educativos de educación básica, media y universitaria, incluirán en su Proyecto Educativo Institucional, una cátedra ambiental que busque la compresión, el fomento y la participación ciudadana para generar conciencia ambiental sobre el buen uso de los recursos naturales, las prácticas que son contrarias a la sostenibilidad, la importancia de las áreas de especial importancia ecológica y las regulaciones y leyes sobre la materia.

Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación promoverán programas de formación docente para el desarrollo de las mencionadas estrategias.

Artículo 4°. ***Vigencia.*** La presente ley entrará en vigencia seis (6) meses después de la fecha de su promulgación y deroga el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000.

Sin otro particular,



JUAN CARLOS LOZADA VARGAS
Representante a la Cámara
Ponente

PONENCIAS

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 174 DE 2018 SENADO, 218 DE 2019 CÁMARA

por la cual se modifica la Ley 1335 de 2009.

Bogotá, D. C., 11 de mayo de 2020

Honorable Representante

NORMA HURTADO

Presidente

Comisión Séptima Constitucional Permanente

Cámara de Representantes

Referencia: Informe de ponencia para primer debate del Proyecto de ley número 174 de 2018 Senado, 218 de 2019 Cámara, *por la cual se modifica la Ley 1335 de 2009.*

Respetada Presidenta:

En cumplimiento del encargo hecho por la honorable Mesa Directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y de conformidad con lo establecido en el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, procedo a rendir informe de ponencia para primer debate del proyecto de ley de la referencia. El Informe de Ponencia se rinde en los siguientes términos:

I. TRÁMITES DE LA INICIATIVA

El Proyecto de ley número 174 de 2018 Senado, 218 de 2019 Cámara, *por la cual se modifica la Ley 1335 de 2009* fue radicado por el honorable Senador José David Name Cardozo el día 05 de octubre de 2018 en la Secretaría General del Senado de la República y fue publicado en la ***Gaceta del Congreso*** número 814 de 2018.

El 15 de mayo de 2019, la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República aprobó el texto propuesto para primer debate, publicado en la ***Gaceta del Congreso*** número 1064 de 2018. Asimismo, el día 26 de agosto de 2019, la Plenaria del Senado de la República ratifica la decisión tomada en la Comisión Séptima, afirmando el texto propuesto para segundo debate publicado en la ***Gaceta del Congreso*** número 401 de 2019.

Finalmente, el día 8 de octubre de 2019 son designados ponentes en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes los honorables Representantes Norma Hurtado Sánchez, como Coordinadora; y a Henry Fernando Correal Herrera y Mauricio Andrés Toro Orjuela como ponentes.

II. OBJETO DE LA INICIATIVA

El proyecto de ley que cuenta con 6 artículos tiene como finalidad que los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN) y los Productos de Tabaco Calentado (PTC) estén sujetos a las medidas normativas que se aplican a todos los demás productos de tabaco contenidas en la Ley 1335 de 2009 que dicta "*Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población colombiana*" y que principalmente busca, entre otras cosas, impedir la iniciación de no fumadores, prohibir su uso en interiores y prohibir su venta y distribución a menores.

III. JUSTIFICACIÓN DEL AUTOR

Según el autor de la iniciativa, todas las formas de consumo de tabaco son nocivas, incluidos los nuevos sistemas electrónicos de administración de nicotina. El tabaco es intrínsecamente tóxico y contiene carcinógenos, incluso en su estado natural. Por lo tanto, estos nuevos sistemas de fumado y vapeo deberían estar sujetos a las medidas normativas y reglamentarias aplicadas a todos los demás productos de tabaco.

Por lo anterior, menciona el autor, resulta conveniente incluir los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN) y los Productos de Tabaco Calentado (PTC), dentro de las prohibiciones generales contenidas en la Ley 1335 de 2009, que se dirigen a:

- Impedir la promoción y la iniciación de no fumadores, especialmente menores de edad.
- Prohibir su uso en interiores, especialmente en los que está prohibido fumar,
- Prohibir toda forma de publicidad, promoción y patrocinio,
- Prohibir su venta y distribución a menores,
- Prohibir su posesión entre menores.

Esta adición de la normatividad actual debe realizarse lo antes posible dado que los productos aquí reseñados son de rápida y fácil comercialización por la forma tan llamativa e inofensiva como son presentados al público regular, que en su mayoría desconoce las reales implicaciones de su consumo.

IV. AUDIENCIA PÚBLICA

Mediante Proposición número 24, presentada y aprobada el 7 de octubre de 2019 en sesión de la Comisión Séptima Constitucional Permanente, y con el fin de oír exposiciones de diferentes actores relevantes en la discusión de este proyecto de ley, se convocó a Audiencia Pública para el miércoles 13 de noviembre de 2019. A la misma fueron invitadas entidades del Gobierno nacional, del gremio del tabaco, organizaciones de la sociedad civil y los ponentes y autores de las iniciativas 057 de 2019 Cámara y 174 de 2018 Senado, 218 de 2019 Cámara:

- Ministerio de Salud
- Ministerio de Comercio
- Invima
- Fundación Anáas - Tejiendo Bienestar
- Liga contra el Cáncer
- Fenalco
- Red Papaz
- Asociación de Vapeadores
- OMS
- Asociación Colombiana de Medicina Familiar
- ATS. Sociedad Colombia de Neumología y medicina interna
- Japan Tobacco Internacional
- British American Tobacco
- Philip Morris Internacional

Conforme a su orden de intervención, se presentan a continuación las principales conclusiones:

Invima

- El Invima ha estudiado en conjunto con el Ministerio de Salud durante varios años, este tema de los cigarrillos electrónicos o de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, por su impacto en la salud pública.
- Desde el 2010 lo estudió la Comisión revisora que es un órgano asesor de cada una de las direcciones misionales, lo estudió tanto la Dirección de Medicamento, como la dirección de Dispositivos médicos y en su momento conceptuó que estos sistemas no son clasificados o no podrían ser clasificados ni como un medicamento, porque no tenían todo el soporte científico para soportar que, si disminuían o si podían disminuir el consumo de cigarrillo tradicional, ni como un dispositivo médico.
- Por el impacto en la salud pública, como Invima se emite un primer concepto en el 2010 en donde decimos que este tipo de productos, no son

clasificados como medicamento ni como dispositivo médico, por lo tanto, no requiere de la autorización de comercialización que emite el Invima que se llama Registro Sanitario.

• En el 2011 emitieron una alerta sanitaria de los posibles eventos adversos.

• Recientemente hay dos actas de la comisión revisora de dispositivos médicos, tanto como de medicamentos diciendo este concepto, la dirección de dispositivos médicos en un análisis profundo epidemiológico.

• El Invima en conjunto con el Ministerio de Salud, envió el concepto técnico a la oficina jurídica, la oficina jurídica del Invima este año emitió el boletín institucional al respecto número 82 y es muy importante que regulen por su impacto negativo en la salud pública, porque también desde el Invima se realizó el monitoreo de todos los eventos adversos y está siendo comprobado que tiene incidencias negativas sobre la salud pública.

Fundación Anáas - Tejiendo Bienestar

• Mencionaron que el núcleo del negocio en este mercado continúa siendo la adicción a la nicotina, que es uno de los negocios más lucrativos en el mundo, pero también uno de los más costosos socialmente. Dijeron que esta premisa hay que tenerla clara ya que el terreno fértil para el desarrollo de la adicción a la nicotina es el cerebro de los menores de 25 años.

• Expusieron que las compañías tabacaleras realizan una diversidad de actividades de mercadeo que incluyen prácticas tradicionales de publicidad, promoción y patrocinio y, nuevas formas de mercadeo digital. Según ellos, estas actividades tienen el potencial de afectar poblaciones claves tales como jóvenes y mujeres, especialmente en países de ingresos bajos y medios que son particularmente susceptibles a estos esfuerzos.

• Dijeron también que el peso de la evidencia de múltiples tipos de estudios realizados por investigadores de diversas disciplinas, utilizando datos de muchos países, indica que existe una relación causal entre el mercadeo realizado por las compañías tabacaleras y el uso de tabaco, incluyendo la iniciación y la continuación en el uso de tabaco por parte de jóvenes.

• Mencionaron que, en países de ingresos altos, prohibiciones amplias de las actividades de mercadeo de las compañías de tabaco son efectivas para reducir el uso de tabaco, pero prohibiciones parciales tienen muy poco o ningún efecto.

• Finalmente, expusieron que las prohibiciones amplias en la publicidad, promoción y patrocinio en países de ingresos medios y bajos conducen a mayores reducciones en el uso de tabaco que en los países ricos.

• Por todo lo anterior, propusieron que, teniendo en cuenta que para corregir la falla de simetría de la información hay dos instrumentos de eficacia probados y sobre los que Colombia ya ha adquirido experiencia de implementación, se debe insistir en la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio; por cierto, una medida pionera, el país fue pionero en la región en implementar esta medida. Y segundo, se debe hacer especial hincapié en las advertencias sanitarias.

• En conclusión, para la Fundación Anaás, cualquier intento de regulación de los SEAN debe incorporar una prohibición total a la publicidad, promoción y patrocinio.

Ministerio de Comercio

• Comentaron que respecto a la regulación de estos productos y dispositivos el Ministerio de Comercio se ha pronunciado reiteradamente sobre la necesidad de que exista regulación clara soportada con evidencia científica y con estudios que permitan que tanto a los consumidores como a las autoridades tomar decisiones al respecto.

• Dijeron que la reglamentación de estos productos debe cumplir con lo contemplado en el Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio de la OMC y lo señalado en la decisión 827 de la Comisión Andina, lo estipulado en los tratados internos suscritos por Colombia, así como lo indicado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, modificado por el Decreto 1595 de 2015, relacionado con las buenas prácticas regulatorias.

• Finalmente mencionaron que, dadas las implicaciones económicas de la actividad regulatoria, una eventual regulación debería cumplir con los siguientes aspectos:

1. Proteger la salud de los consumidores.

2. Ser modernos, abiertos y trasparentes, generando mecanismos de accesibilidad al público y las partes interesadas.

3. La adopción de decisiones en materia de reglamentación debe basarse en datos empíricos, es decir un análisis de costo – beneficio y una evaluación de riesgo.

4. Se debe respaldar en una economía equitativa y competitiva, donde su finalidad debe ser el apoyo y promoción del crecimiento económico inclusivo, el espíritu empresarial y la innovación en beneficio de los consumidores y las empresas.

Liga contra el Cáncer

• Resaltaron la importancia de esta discusión. A su modo de entender, con esta ley se está decidiendo sobre algo que tiene gran incidencia en la salud pública, especialmente en lo jóvenes.

• Mencionaron que en los Vapeadores hay una sustancia llamada nicotina, y que hay estudios que demuestran que es más adictiva que la cocaína.

• Finalmente, expusieron que, en EEUU, hay estudios que demuestran que 3.5 millones de adolescentes que hoy en día están utilizando los

Vapeadores (cigarrillos electrónicos) estarían siendo fumadores.

Fenalco

• En primer lugar, advirtieron que deben haber dos legislaciones separadas y que efectivamente se deben reglamentar los vapeadores ya que este tipo de dispositivos no contiene tabaco ni derivados del tabaco y no deben incluirse en la reglamentación del tabaco.

• Mencionaron que tienen una preocupación y es que al existir una sola norma (Ley 1335), no se tomen acciones diferenciadas.

• Expusieron que en la reglamentación se debe contemplar la estricta prohibición para menores de edad y se deben definir unos parámetros de calidad para estos productos.

• Dijeron que estos vapeadores son mucho menos nocivos que el tabaco y pueden usarse para bajar el consumo del tabaco.

• Concluyeron diciendo que una presión excesiva para reglamentar los vapeadores, puede llevar a unos canales de contrabando y de ilegalidad, que quedan por fuera de la reglamentación.

• Por todo lo anterior, proponen:

1. Que se separe la regulación de los cigarrillos electrónicos y el tabaco.

2. Prohibición para menores de edad.

3. Evitar una reglamentación prohibitiva, excesiva e incumplible y el consumo informal.

Red Papaz

• Mencionaron que el 15% de los niños, niñas y adolescentes según la encuesta de tabaquismo del 2016, estaban consumiendo cigarrillos electrónicos. Por su parte, en el estudio de población universitaria, el rango de edad donde había un mayor porcentaje de personas consumiendo estos dispositivos eran menores de 18 años.

• Expusieron que las tácticas de mercadeo que se utilizan en los cigarrillos convencionales, se están utilizando en los cigarrillos electrónicos, en lo relativo a la publicidad y por ende, no se está cumpliendo lo regulado por la Ley de Tabaco 1335, sobre publicidad, promoción y patrocinio de dispositivos de tabaco calentado.

Asociación de Vapeadores

Expusieron que es pertinente una regulación independiente, adecuada y justa para el vapeo en el país. Saben que no es un producto libre de riesgos y debe ser dirigido únicamente a adultos que lo vean como alternativa para dejar de fumar.

• Mencionaron que el debate legislativo se debe basar en evidencia científica que sustente los motivos, por los cuales es necesaria la normatividad diferente a los del producto de tabaco y su vez propenda por la protección de los consumidores, comerciantes y no consumidores.

• Finalmente, concluyeron presentando los principales puntos que la Asociación de Vapeadores considera que deberían ser contemplados en la regulación de estos productos:

1. Facilitar a los fumadores adultos para que tengan la posibilidad de sustituir el cigarrillo – tabaco convencional por los vaporizadores y al mismo tiempo reglamentar la prohibición de venta y consumo de dichos productos vaporizadores a menores de edad. Así mismo debe prohibirse el uso de los mismos a adultos no fumadores y mujeres embarazadas

2. Diferenciarse al vaporizador del cigarrillo convencional (por combustión). Y no aplicar regulación alguna a ambos productos en la misma categoría de productos de tabaco.

3. Debe legislarse sobre el marco regulatorio de reducción del daño.

4. La legislación de dichos productos debe basarse en las particularidades de estos productos de consumo de uso exclusivo para adultos.

5. Y la reglamentación debe tener en cuenta el control, calidad y estándares de seguridad apropiados al producto de consumo. (cartas técnicas, líquidos, etc.).

OMS

• Mencionaron que el gobierno de Colombia ratificó el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y tiene la obligación de cumplir el convenio. Es un tratado de salud pública de carácter vinculante.

• Expusieron que durante los últimos años están apareciendo en el mercado una serie de productos nuevos que contiene tabaco o que liberan nicotina y que se pueden clasificar en:

○ Productos de Tabaco Calentado (HTP)

○ Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN)

○ Sistemas Electrónicos Sin Nicotina (SESN).

Para la OMS, los productos en mención son fabricados por grandes tabacales, que han invadido los mercados de todo el mundo, por el vacío regulatorio, utilizando publicidad muy parecida a la usada para los cigarrillos convencionales, antes de que existieran restricciones en la publicidad.

• Dijeron que existe evidencia que los cigarrillos electrónicos son una puerta de entrada al cigarrillo convencional una vez establecida la dependencia a la nicotina y que permitir que estos productos entren en los mercados nacionales y no reglamentarlos pone en peligro la salud de la población.

• Mostraron cómo la conferencia de las partes en el convenio marco de la OMS para el control del tabaco ha adoptado una serie de decisiones que pueden orientar a la actuación de las partes para llegar al establecimiento de un marco reglamentario para los productos con nicotina y tabaco.

• En el caso de los productos de tabaco calentados en el preámbulo de la decisión del Convenio 822, las partes del Convenio reconocieron que los productos de tabaco calentado son productos de tabaco, por lo que están sujetos a las disposiciones del marco del Convenio Marco de la OMS y a la legislación y regulación existente en cada país referente al tabaco.

• Dado lo anterior, proponen que en la reglamentación se especifique que estos productos responden a un esquema de tres constituyentes:

1. Producto de tabaco
2. Dispositivo electrónico de calentamiento
3. Dispositivo de carga de la batería.

Como consecuencia de esta constitución el dispositivo electrónico de calentamiento junto con el cigarrillo o cápsula de tabaco componen una unidad funcional única, haciendo imposible su funcionamiento de manera independiente. Por lo tanto, es importante que los 3 componentes están sujetos a la legislación o regulación existente referente al tabaco.

• Mencionaron que, en el caso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina y sistemas similares sin nicotina, la conferencia de las partes en su Séptima Sesión invitó a las partes a que apliquen medidas regulatorias para prohibir o restringir la fabricación, importación, distribución, presentación, venta y uso de estos productos según corresponda a su legislación nacional y sus objetivos en materia de salud pública.

• Expusieron cómo los países que no hayan optado por la prohibición, es decir que busquen regular estos productos de alguna forma, deben cumplir con los siguientes objetivos:

○ Objetivo 1. Prevenir la iniciación de estos productos de no fumadores y para esto es necesario prohibir la venta o distribución a menores. Prohibir la publicidad, promoción y patrocinio. Aumentar impuestos para disminuir su accesibilidad. Prohibir el uso de aromatizantes atractivos para los jóvenes, regular los lugares y los canales de venta y tomar medidas contra el comercio ilícito de estos productos.

○ Objetivo 2. Minimizar en la medida de lo posible los potenciales riesgos para la salud de los usuarios, en ese sentido comprobar la seguridad de los aromatizantes y sus componentes. Establecer la necesidad de que los fabricantes comuniquen el contenido de los productos a las autoridades competentes. Establecer normas de etiquetado adecuado de los productos y soluciones líquidas. Exigir a los fabricantes que supervisen los efectos adversos de estos productos.

○ Objetivo 3. Evitar que se hagan reclamos sanitarios no comprobados sobre estos productos. Prohibir las declaraciones implícitas o explícitas sobre su eficacia como alivio para dejar de fumar, su idoneidad, su carácter no adictivo.

• Finalmente, concluyeron diciendo que estos productos conllevan riesgos demostrados para la salud individual y pública y que estos son una estrategia de la industria del tabaco para mantener o aumentar la población adicta a la nicotina y que para el caso de Colombia, si se opta por regularlos en vez de prohibirlos, se debería proponer modificar el objeto de la Ley 1335, para que abarque también en todos sus artículos productos de tabaco novedosos y emergentes, tales como productos de tabaco calentado, sus dispositivos además de sistemas electrónicos de administraciones de nicotina, sistemas electrónicos sin nicotina o cualquier otro producto que pueda surgir en un futuro.

Asociación Colombiana de Medicina Familiar

• Empezaron su exposición mencionando que el tabaquismo no es un hábito, sino una adición, es una enfermedad crónica. Que la nicotina es una sustancia psicoactiva altamente adictiva y que se encuentra como una de las tres principales sustancias psicoactivas, con mayor poder al lado de la heroína y cocaína. Expusieron que la nicotina cuando es inhalada, pasa por detrás de los pulmones y llega directamente al cerebro. Entre 8 y 10 segundos después se genera una sensación de placer.

• Mencionaron que una cosa son los sustitutos de la nicotina para dejar de fumar y otra cosa son los cigarrillos sean electrónicos o de combustión. Cada vez que una persona fuma o vapea llega esa nicotina al cerebro y se libera dopamina y se genera placer, lo que precipita el inicio del consumo, generando una tolerancia y aumentando el consumo. El grado de adicción depende de la concentración de la nicotina.

• Dijeron que para el año 2017, 14 países tenían regulación con relación a la concentración máxima de nicotina de 20 mg x ml.

• Expusieron también que los saborizantes más apetecidos según estadísticas: menta, mango, frutas y mentol y que estos tienen efectos de cierre de los vasos sanguíneos, efectos citotóxicos en las celdas respiratorias.

• Finalmente presentaron un Informe del estatuto de salud pública del Reino Unido en donde se mostraba que por cada adulto que acompañó el uso de cigarrillos electrónicos para dejar de fumar se generaron 89 nuevos casos de adolescentes y adultos jóvenes que utilizaron los cigarrillos electrónicos, más adelante terminaron como fumadores.

• Dado lo anterior, propusieron que los cigarrillos electrónicos deben ser regulados como sustitutos o imitadores del tabaco, y que deben ser regulados con relación a sus concentraciones máximas y saborizantes.

ATS. Sociedad Colombia de Neumología y Medicina Interna

• Según ellos, el cigarrillo se ha convertido en uno de los elementos principales de causas de mortalidad y enfermedades en el mundo. Por ello, mencionan que se deben tener en cuenta los elementos de reducción de daño: los cigarrillos tienen unos elementos de salud nocivos.

• Mencionaron que existe una publicación oficial de la Sociedad Europea de Neumología donde se deja claro que no se puede aplicar a esta epidemia de los cigarrillos electrónicos el tema de menor riesgo, de reducción de daño o de no peligro. Para ellos, menor riesgo no es sinónimo de ausencia de riesgo y por eso, se debe regular como imitadores de cigarrillos, porque producen el mismo daño y producen una función similar.

• Mencionaron que existe otra publicación de la Sociedad Española de Neumología en donde se muestra que los productos para recalentar tabaco tienen sustancias tóxicas y causan cáncer. Según ellos, el contenido del humo de los Iqos, incluye componentes volátiles órganos e hidrocarburos aromáticos que causan un efecto pulmonar, incrementando la resistencia en las vías periféricas y causando un desgaste pulmonar (EPOC).

Japan Tobacco Internacional

• Mencionaron que, como compañía, quieren que estos productos sean regulados, pero con base en evidencia científica suficiente y con ejemplo internacional.

• Mencionaron que los productos de riesgos reducido, son aquellos con potencial para minimizar los peligros asociados al hábito de fumar y que los consumidores deben tener la libertad para escoger qué productos de riesgo producido pueden consumir, pero basados en información precisa. Por eso, lo que se requiere es un ámbito normativo y regulatorio cuidadosamente diseñado.

• Consideraron que los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado son productos de riesgo reducido y que estos productos y los cigarrillos electrónicos son productos de consumo que no contiene tabaco, sino que más bien calientan un líquido para generar un vapor que se puede inhalar. Además, a diferencia de los cigarrillos convencionales, estos no generan combustión.

• Mencionaron que existe un consenso entre algunos informes públicos de Public Health England, Royal College of Psychiatrists, Action on Smoking and Health y Health Canada que indican que la ausencia de un proceso de combustión en los productos de riesgo reducidos los convierte en una opción posiblemente menos dañina para los consumidores adultos. Gracias a ello concluyen que los cigarrillos electrónicos no son una puerta de entrada al consumo de cigarrillos y que el cigarrillo electrónico no genera la normalización del consumo de cigarrillos.

• Finalmente, expusieron que por el bien de salud pública, se debe fomentar el uso del cigarrillo electrónico ya que este es (en un 95% aproximadamente) menos nocivo que el tabaco tradicional o convencional.

• Dado lo anterior, proponen que el marco regulatorio se base en un modelo independiente, proporcional, razonable y diferenciado para los productos de riesgo reducido, que tenga certidumbre jurídica y que no se genere competencia desleal.

British América Tobacco

• Expusieron que los productos de vapeo y de tabaco calentado son una generación de productos que proviene de la industria del tabaco, que tiene unos intereses establecidos y definidos por la sociedad y con los cuales la sociedad ha aceptado convivir.

• Presentaron su postura frente a la necesidad de requerir una regulación mencionando que los casos en EEUU., donde murieron personas (debido a que le agregaron a los dispositivos de vapeo acetato de Vitamina E con THC) son el producto de la falta de regulación.

• Por ello, proponen que se debe evitar la desinformación por falta de regulación y que ellos apoyan una regulación balanceada y que responda a un debate informado.

• Finalmente, mencionaron que se debería buscar una regulación diferente al del cigarrillo tradicional.

Philip Morris Internacional

• Dijeron que la carga que el tabaquismo genera en la salud pública de Colombia y Latinoamérica, es un debate de gran importancia y por eso, resaltan la importancia de las políticas de reducción de daño en tabaco como complemento de las políticas de control, que hoy en día se basan en la prevención de la iniciación y promoción de cesación del hábito de fumar. Mencionan la importancia del rol que juegan los productos de riesgos reducidos para aquellos adultos fumadores que a pesar de arduos esfuerzos van a continuar fumando.

• Expusieron que para nadie es un secreto que fumar cigarrillo se relaciona directamente con un alto riesgo de enfermedades graves, enfermedades cardiovasculares, el cáncer pero también que los adultos que van a continuar fumando, necesitan una alternativa menos riesgosa que el cigarrillo convencional y en eso se basan las políticas de reducción del daño.

Representante Neyla Ruiz Correa, autora del Proyecto 057 de 2019 Cámara

• Mencionó que es importante escuchar los aportes, es importante para consolidar esta iniciativa.

• Dijo que es preocupante escuchar las estadísticas de los niños y jóvenes, como la expuesta por la Sociedad Colombiana de Medicina que dice que el estimado está en que por 1 adulto fumador que se trata de recuperar, estamos generando que 81 nuevas personas inicien el consumo de tabaco o este tipo de dispositivos.

• Finalmente, concluyó diciendo que su postura es que la regulación de estos sistemas electrónicos debe hacerse independientemente, es decir, en una regulación diferente a la ley del tabaco,

porque este tipo de dispositivos no tienen las mismas características que el tabaco convencional.

Ministerio de Salud y Protección Social

• Mencionaron que el progreso de Colombia en la lucha por el tabaquismo y las consecuencias en salud pública ha sido muy importante y que esto ha llevado a una construcción social y cambio de la cultura en lo referente a este tema. Pero que aún falta la regulación de este tipo de dispositivos.

• Expusieron que se ha penetrado el mercado con singular rapidez con multiplicidad de productos y ciertos riesgos que se van descubriendo y que, por eso, consideran que estos son productos que deben ser regulados, de manera pronta como productos sucedáneos e imitadores del tabaco.

V. MARCO LEGAL

El proyecto presentado a consideración del Congreso de la República encuentra sustento jurídico en la normatividad que se relaciona a continuación:

Constitución política de Colombia

• **Artículo 44.** Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión (…) Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás".

• **Artículo 49.** La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

• **Artículo 78.** La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. **Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios** (negrilla subrayada fuera de texto).

• **Artículo 79**. *Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.* La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica.

Legislación Colombiana

• **Ley 1335 de 2009:** El objeto de esta ley es contribuir a garantizar los derechos a la salud de los habitantes del territorio nacional, especialmente la de los menores de 18 años de edad y la población no fumadora, regulando el consumo, venta, publicidad y promoción de los cigarrillos, tabaco y sus derivados, así como la creación de programas de salud y educación tendientes a contribuir a la disminución de su consumo, abandono de la dependencia del tabaco del fumador y se establecen las sanciones correspondientes a quienes contravengan las disposiciones de esta ley.

• **Ley 1751 de 2015:** El artículo 2° de la ley reitera el **carácter fundamental del derecho a la salud** indicando que es autónomo e irrenunciable en lo individual y colectivo.

Jurisprudencia

• La Corte Constitucional en Sentencia T-184 de 2011, manifestó: *"Esta Corporación ha establecido en su jurisprudencia que* ***la salud es un derecho fundamental****. Por tanto, es obligación del Estado y de los particulares comprometidos con la prestación del servicio público de salud, desarrollar un conjunto de tareas, actividades o actuaciones encaminadas a garantizar el debido amparo de este derecho. El derecho fundamental a la salud, ha sido definido como "la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser." Esta concepción responde a la necesidad de abarcar las esferas mentales y corporales de las personas, en consecuencia, garantizar al individuo una vida en condiciones dignas, teniendo en cuenta que la salud es un derecho indispensable para el ejercicio de las demás garantías fundamentales".*

Normatividad relacionada

• **Resolución 1841 de 2013.** Por la cual se adopta el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, documento en el cual se plantean las metas y estrategias para atender los problemas y necesidades de salud relacionadas con las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo, como el tabaquismo. Entre las metas, asociadas se encuentran el disminuir la prevalencia y la oferta del consumo de tabaco e incrementar los servicios cesación del tabaquismo en el territorio nacional.

• **Resolución 3202 de 2016.** Por la cual se adopta el Manual Metodológico para la elaboración e implementación de las Rutas Integrales de Atención (RIA) en salud. En este documento se define como obligatoria, la Ruta de trastornos asociados al consumo de sustancias psicoactivas, en la cual se encuentran incluidas las intervenciones para la cesación del consumo de tabaco.

Instrumentos Internacionales

• **El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT OMS)** El CMCT OMS es el primer tratado negociado bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud basado en pruebas que reafirma el derecho de todas las personas al máximo nivel de salud posible. Este convenio surge como respuesta a la epidemia de tabaquismo en el mundo que se ha visto favorecida por diversos factores complejos con efectos transfronterizos, entre ellos la liberalización del comercio y las inversiones extranjeras directas. Otros factores tales como la comercialización a nivel mundial, la publicidad transnacional del tabaco, la promoción y el patrocinio, así como el tráfico internacional de cigarrillos de contrabando y falsificados también han contribuido al aumento del tabaquismo.

En el preámbulo, se declara que las Partes que participan en dicho Convenio deben estar determinadas a dar prioridad a la protección de la salud pública y en ese sentido, establecen la importancia de las estrategias de reducción de la demanda, además de cuestiones relacionadas con el suministro. De hecho, en la última Conferencia de las Partes en el marco del Convenio de la OMS para el Control del Tabaco que se llevó a cabo en Ginebra Suiza, se instó a los Estados a regular el mercado de los SEAN/SESN

[1], librando distintas acciones, tales como la adopción de decisiones sobre la clasificación de los productos, la identificación de los ámbitos normativos conexos y la elección de los mecanismos de reglamentación más adecuados.

Y a pesar de los debates que se han mantenido en los 10 últimos años sobre los posibles enfoques para reglamentar los SEAN, sigue concurriendo un elevado número de países que aún no regulan esos productos, lo que conlleva a posibles consecuencias para el aumento del consumo del tabaco, los efectos en las medidas actuales de control del tabaco, declaraciones equívocas sobre salud y estrategias engañosas de mercado, y en última instancia la ausencia de información adecuada para los consumidores.

VI. SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ADMINISTRACIÓN DE NICOTINA, SISTEMAS ELECTRÓNICOS SIN NICOTINA Y PRODUCTOS DE TABACO CALENTADO

El cigarrillo electrónico es un dispositivo que fue inventado y patentado en China en el 2003. A partir de 2007, entró al mercado con distintas denominaciones, tales como "vaporizador electrónico", e-Cig y e-Cigar. Según recopilaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) los Sistemas Electrónicos Con o Sin Administración de Nicotina SEAN/SESN son definidos como dispositivos que liberan un aerosol mediante el calentamiento de una solución liquida que los consumidores inhalan[2]. Usualmente, estos aparatos constan de unas pequeñas baterías recargables, un atomizador y un depósito o cartucho con el líquido que se convertirá en vapor.

Los principales ingredientes de la solución inhalada son el propilenglicol[3] con o sin glicerol, aromatizantes y en algunos casos nicotina. Actualmente, existen diferentes prototipos de estos sistemas, siendo los cigarrillos electrónicos los más usados, contando con formas variadas que van desde las convencionales como cigarrillos, hasta otras formas como bolígrafos, lápices USB, y dispositivos cilíndricos o prismáticos más grandes.

Ahora bien, en esta ponencia, se pretenden regular no solo los SEAN sino también los SESN (Sistemas Electrónicos Sin Nicotina) que en la práctica comparten las mismas características de los SEAN, con una única diferencia que radica en que sus cartuchos no contienen nicotina sino otras sustancias químicas y saborizantes. No obstante, ambos sistemas se constituyen como sistemas electrónicos de inhalación de vapor.

Adicionalmente, la ponencia incluye en su regulación a los Productos de Tabaco Calentado-(PTC), refiriéndose a los productos de tabaco que producen aerosoles con nicotina, contienen aditivos no tabáquicos y suelen estar aromatizados. Los PTC permiten imitar el hábito de fumar cigarrillos convencionales, y algunos utilizan cigarrillos diseñados específicamente para contener el tabaco que se calienta. Para producir el vapor nicotinado, los PTC calientan el tabaco hasta 350°C (menos que los 600°C de los cigarrillos convencionales) mediante sistemas de calentamiento alimentados por pilas. El sistema de calentamiento incorporado en un dispositivo puede ser una fuente de calor externa para vaporizar la nicotina de un cigarrillo específicamente diseñado (por ejemplo, iQOS y Glo), o una cámara de calentamiento sellada para vaporizar directamente la nicotina de la hoja de tabaco (por ejemplo, Ploom y Pax)[4]. El dispositivo de

---

1 Informe sobre los progresos normativos y de mercado en materia de sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) y sistemas electrónicos sin nicotina (SESN). Ginebra: 2018. Disponible en: https://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_10_SP.pdf

2 Sistemas electrónicos de administración de nicotina. Informe de la OMS. Sexta reunión Moscú (Federación de Rusia), 13 a 18 de octubre de 2014. Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/147671/FCTC_COP6%289%29-sp.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3 El propilenglicol es la sustancia principal que contiene el líquido con el que se cargan los cigarrillos electrónicos, y al igual que ocurre con la glicerina se consideran sustancias seguras cuando se ingieren oralmente, pero no se tienen datos suficientes sobre sus efectos cuando se administra vía inhalación y durante un tiempo prolongado. Algunos estudios señalan que el propilenglicol inhalado de manera prolongada causa irritación en los ojos, la garganta y las vías aéreas (Wieslander, Norback, Lindgren, 2001).

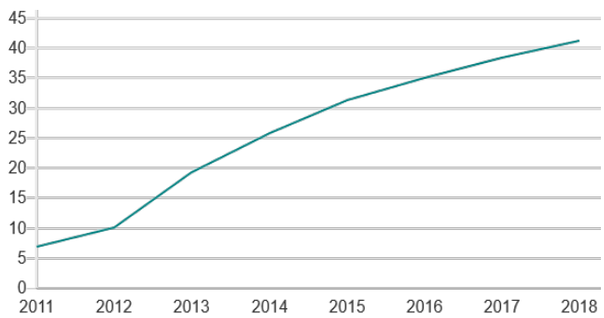
4 Organización Mundial de la Salud. Nota informativa sobre Productos de Tabaco Calentado. Disponible en: https://www.who.int/tobacco/publications/prod_

calentamiento se debe cargar, y el usuario succiona a intervalos a través de la boquilla, para inhalar el aerosol por la boca, que es la vía de entrada en el organismo.

Los SEAN y SESN en el mercado

En el mercado mundial se estimó que durante el 2015 los SEAN/SESN representaron cerca de 10.000 millones de dólares de los Estados Unidos. Aproximadamente el 56% de esta cifra correspondió a los Estados Unidos y el 12%, al Reino Unido. Otro 21% del mercado se dividió entre Alemania, China, Francia, Italia y Polonia (entre el 3% y el 5% cada uno). Pese a distintos estudios, aún no hay claridad frente a las proyecciones de venta de este producto[5].

Sin embargo, según datos de la BBC de Londres el mercado de los SEAN/SESN ha aumentado vertiginosamente, pasando de seis millones en 2011 a cuarenta millones en 2018 a nivel mundial, tal como consta en la siguiente gráfica:



Fuente: BBC News Mundo[6]

Los SEAN/SESN/PTC y sus riesgos para la salud.

La toxicidad de los cigarrillos electrónicos en comparación con los de tabaco ha sido investigada por Vardavas, Anagnostopoulos, Kougias, Evangelopoulou, Connolly y Behrakis (2012). Estos autores estudiaron en fumadores adultos sanos el impacto de los mismos sobre la función pulmonar y el nivel de ácido nítrico exhalado tenía fumar un cigarrillo electrónico ab libitum durante 5 minutos, observando que los efectos fisiológicos adversos a corto plazo de fumar un cigarrillo electrónico son similares a algunos de los efectos encontrados con el tabaco.

Sin embargo, como los investigadores mencionan, se desconocen todavía sus efectos a largo plazo sobre la salud, los cuales podrían ser potencialmente adversos (Vardavas et ál., 2012). Cabe señalar que las variaciones en la ingeniería de los cigarrillos electrónicos y la forma en que se usan pueden llevar a diferencias en la cantidad de nicotina que inhala el fumador y en sus riesgos potenciales (Brown y Cheng, 2014).

Según datos de la OMS el uso típico de SEAN/SESN no adulterados produce un aerosol que normalmente contiene glicoles, aldehídos, compuestos orgánicos volátiles (COV), hidrocarburos aromáticos policíclicos, nitrosaminas específicas del tabaco (TSNA, por sus siglas en inglés), metales, partículas de silicato y otros componentes. Los dicarbonilos (glioxal, metilglioxal, diacetilo) e hidroxicarbonilos (acetol) también se consideran compuestos importantes del aerosol. Muchos de estos componentes son sustancias tóxicas, con efectos sobre la salud conocidos, que inducen una variedad de cambios patológicos significativos. Un estudio reciente (2017), realizado por el Médico Rodrigo Córdoba, revela los efectos de cada uno de los componentes que se encuentran presentes en los cigarrillos electrónicos[7]:

Tabla 1 Componentes habituales de los cigarrillos electrónicos

	Cantidad	Observaciones
Reconocidos por los fabricantes		
Nicotina	0-36 mg por ml. La dosis media es de 20 mg, que equivale a 20 o más cigarrillos. Variabilidad de dosis entre marcas y dentro de la misma marca	Responsable de adicción, efectos cardiovasculares (aumento de la frecuencia cardiaca) y metabolismo
Propilenglicol	Variable	Es un propelente con efectos irritantes en las mucosas y el árbol respiratorio
Glicerina	Variable	Responsable de casos de neumonía lipoidea
No reconocidos por los fabricantes		
N-nitrosaminas	Trazas	Carcinógeno a largo plazo detectado en dosis 500 veces menor que la de los cigarrillos convencionales
Metales pesados (plomo, níquel y cromo) y partículas de silicatos	Trazas	Posibles contaminantes liberados de la microrresistencia eléctrica
Anabasina, miosmina y b-nicotirina	Trazas	Derivados de la nicotina observados en el humo de tabaco

Fuente: Rodrigo Córdoba.

Adicionalmente, y en la actualidad los SEAN/SESN/PTC son ofrecidos como ayuda a la cesación del consumo de tabaco, no obstante, los estudios científicos sobre la eficacia de los SEAN/SESN/PTC para ayudar a dejar de fumar son escasos y dan pie a una certidumbre baja, por lo que es difícil extraer conclusiones convincentes. En el año 2014 se llevó a cabo un estudio[8], basado en dos ensayos clínicos, en el cual se concluyó que, si bien todos los SEAN analizados demostraron una eficacia similar, aunque baja, para favorecer el abandono del tabaco, la calidad general de las pruebas era escasa . En esa misma línea de investigación, un estudio realizado por la OMS llegó a conclusiones similares respecto a la eficacia y la calidad de las pruebas de los ensayos clínicos aleatorizados[9].

Vale la pena aclarar que el hecho que los SESN no contengan nicotina, no significa que no representen un riesgo para la salud. Los ingredientes de un cigarrillo electrónico, como el propilenglicol y los agentes

regulation/heated-tobacco-products/es/

5 Sistemas electrónicos de administración de nicotina. Informe de la OMS. Séptima reunión Delhi (India), 7 a 12 de noviembre de 2016. Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Disponible en: https://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_11_ES.pdf

6 BBC New Mundo (4 de junio de 2018). Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-44323500

7 Córdoba, Rodrigo (2014). El desafío de los cigarrillos electrónicos. Science Direct (6) pp. 307-312. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.aprim.2014.01.002

8 McRobbie H, Bullen C, Hartmann-Boyce J, Hajek P. Electronic cigarettes for smoking cessation and reduction. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2014.

9 GRADE Working Group. Grading quality of evidence and strength of recommendations. BMJ. 2004;328(7454):1490-0.

saborizantes, inflaman el sistema respiratorio, que provoca el desarrollo enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Muchos saborizantes químicos, como diacetil, 2,3-pentanodiona, acetoína y cinamaldehído, utilizados para crear sabores como *Hot Cinnamon Candies*, *Banana Pudding*, sandía, granada y *Cherry Crush*, provocan una serie de enfermedades respiratorias graves, lo que ha planteado preocupaciones acerca de posibles efectos cancerígenos[10]. Sin embargo, las pruebas científicas aún son consideradas insuficientes en el mundo médico, razón por la cual no se han logrado plasmar datos concluyentes. Por consiguiente, se necesitarán otros estudios para fundamentar las afirmaciones de riesgo/daño reducido.

En esa misma línea de investigación, la OMS ha señalado que no existen pruebas científicas que demuestren que los PTC sean menos nocivos que los cigarrillos convencionales. Algunos estudios financiados por la industria tabacalera afirman que hay importantes reducciones en la formación y exposición de elementos nocivos y potencialmente nocivos, con respecto a los cigarrillos comunes. No obstante, hasta el momento no se tiene conocimiento de pruebas científicas que sugieran que la menor exposición a esos productos se traduzca en menor riesgo para las personas.

VII. EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Las experiencias comparadas pueden brindar herramientas para fortalecer nuestro ordenamiento jurídico, de ahí surge la necesidad de realizar una revisión a nivel internacional de la legislación con respecto a la regulación de Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina y Sistemas Electrónicos Sin Nicotina -SEAN/SESN-. Como resultado, se puede observar que estos productos no disponían de una regulación específica, no obstante, desde algunos años hacia atrás, se han comenzado a tomar las medidas para abordarlos, diversas sociedades científicas e iniciativas gubernamentales se han posicionado sobre la necesidad de su regulación, los potenciales riesgos para la salud y posibilidad de puerta de entrada para el consumo de tabaco en jóvenes.

En 2016, Estados Unidos, en cabeza de la FDA amplió su regulación para todos los productos de tabaco, incluyendo los cigarrillos electrónicos, los puros y el tabaco para pipas tanto normales como de agua (narguiles o hookas), en aras de mejorar la salud pública. En este caso, la nueva regulación, prohíbe su venta a menores de 18 años y su distribución en máquinas expendedoras (excepto en establecimientos exclusivamente para adultos). Adicionalmente, los fabricantes deberán demostrar que sus productos cumplen con la norma de salud pública correspondiente para poder otorgarles la autorización de comercialización[11].

En América Latina, la legislación con respecto a los cigarrillos electrónicos ha avanzado hacía un enfoque prohibicionista. En Brasil, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) prohibió no solo su venta, sino también la fabricación de estos productos. Normatividad similar a la que adoptó Uruguay hace aproximadamente 10 años. En Panamá, la importación, distribución y venta del Cigarrillo Electrónico está prohibida desde 2009 sobre la base de las conclusiones de la FDA en su contra.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina (ANMAT) recomendó no utilizar estos dispositivos, que se ofrecen como sustitutos para dejar de fumar, y aclaró que tampoco ha autorizado su importación. Por su parte, el Ministerio de Salud de Venezuela, en cabeza del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria prohibió la venta, promoción y comercialización de cigarrillos electrónicos en dicho país.

De otro lado, la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril de 2014 incluye medidas sobre los cigarrillos electrónicos instando a los Estados miembros a legislar en materia de fabricación, presentación y venta de los SEAN/SESN[12].

Ahora, de lo anterior, se destaca que la regulación implementada en algunos países prohíbe toda la cadena de comercialización, incluyendo los aspectos relacionados con la promoción, publicidad y patrocinio de estos productos en atención al llamado de la OMS de no promover directa o indirectamente un producto de tabaco o el uso de tabaco. Asunto que podría ser tema de discusión durante el respectivo trámite en el Congreso de la República.

Finalmente, y en relación a la revisión de literatura, un estudio realizado por tres instituciones de Salud en el país[13], se encargó de hacer un análisis integrativo de las regulaciones y tipo de clasificación de estos dispositivos en el ámbito mundial, identificando cuatro opciones de política pública para intervenir estos sistemas:

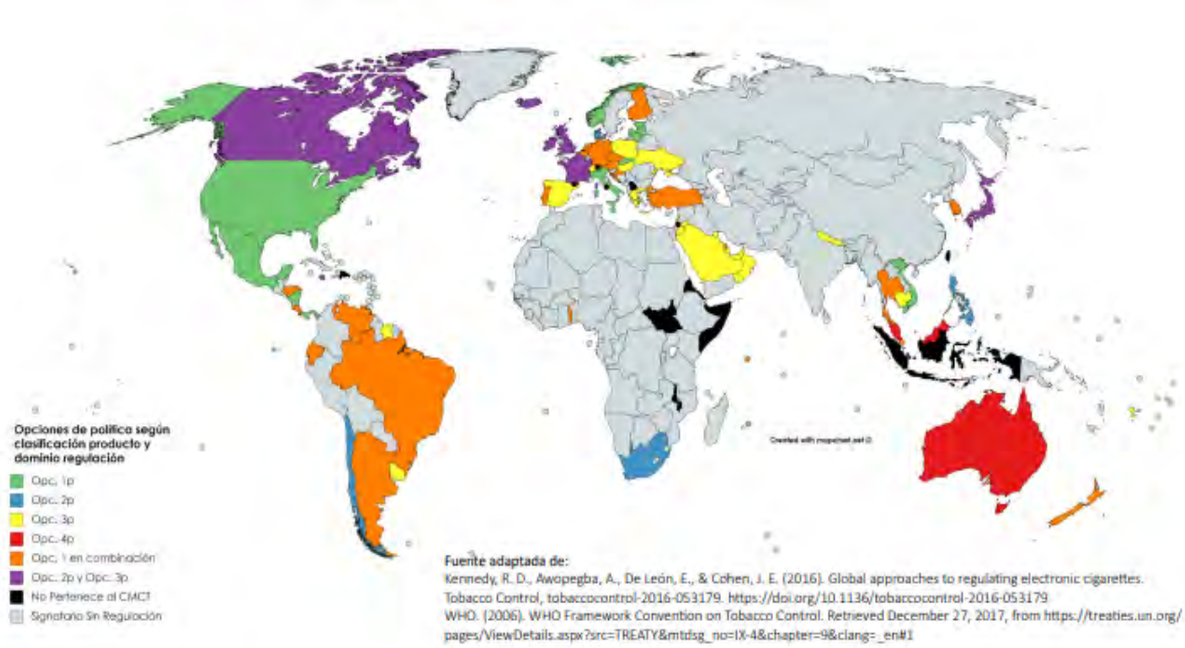
---

10 Williams M, Villarreal A, Bozhilov K, Lin S, Talbot P (2013) Metal and Silicate Particles Including Nanoparticles Are Present in Electronic Cigarette Cartomizer Fluid and Aerosol. PLoS ONE 8(3): e57987. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0057987

11 US Food And Drug-FDA. How FDA is Regulating E-Cigarettes. Retrieved from: https://www.fda.gov/news-events/fda-voices-perspectives-fda-leadership-and-experts/how-fda-regulating-e-cigarettes

12 Diario Oficial de la Unión Europea. Directiva 2014/40/UE. Disponible en: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/docs/dir_201440_es.pdf

13 Pulido AC, Pinzón DC, Rodríguez NI, Sandoval C, Pinzón CE, Díaz MH, Mejía A, Santacruz JC, Calderón J. Opciones en Colombia para la regulación del uso de los sistemas electrónicos con o sin dispensación de nicotina y similares: un resumen de evidencias para política (policy brief). Bogotá, D.C.: Cardiecol, Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - IETS y Fundación Colombiana del Corazón; 2018 Disponible en: http://www.iets.org.co/Archivos/3/Policy_brief_version_completa.pdf



Clasificación según tipo de regulación, basados en la clasificación del producto (sucedáneo del tabaco, medicamento, producto de consumo, veneno) y el dominio de regulación (restricciones, empaquetado, entre otros).
Opción de política (Opc) 1: Regulación de los SEAN y similares como productos sucedáneos del tabaco.
Opción de política (Opc) 2: Regulación de los SEAN y similares como medicamento para la cesación tabáquica.
Opción de política (Opc) 3: Regulación específica para SEAN y similares como producto de consumo humano.
Opción de política (Opc) 4: Prohibición total para la fabricación, exportación, importación, comercialización, uso, consumo, publicidad, promoción o patrocinio de los SEAN y similares.
Opción (Opc) 1 en combinación: Regulación combinada entre opción 1 y opción 2 y/o 3
p: Cumplimiento parcial de la opción de política.
No pertenece al CMCT: 14 países no han firmado el Convenio Marco para el Control del Tabaco- CMCT.
Signatarios sin regulación: A julio de 2017, 119 países que han firmado el CMCT no cuentan con regulación de SEAN y similares.

Fuente: Elaborado por Pulido AC, Pinzón DC, Rodríguez NI, Sandoval C, Pinzón CE, Díaz MH, Mejía A, Santacruz JC, Calderón J.

Finalmente, se presentan las principales conclusiones de importantes estudios realizados a los Productos de vapeo (SEAN/SSSN) por parte de reconocidas entidades de Salud Pública y centros de investigación en el Reino Unido y Estados Unidos, en los cuales se destaca que:

• Los productos de vapeo **son dispositivos fundamentalmente distintos** a los cigarrillos convencionales combustibles.

• Se estima que el uso de productos de vapeo es **95% menos riesgoso** que el consumo de cigarrillo convencional combustible.

• Los productos de vapeo **NO representan una puerta de entrada** para el consumo de Tabaco en jóvenes, por el contario se presentan como una efectiva alternativa para la reducción del consumo de cigarrillo convencional.

Entidad	Concepto	Fecha de la referencia
Public Health England (PHE)	• "(…) Los v*apeadores son actualmente el dispositivo más común utilizado para dejar de fumar en Inglaterra (…) la proporción de vapeadores que fumaban tabaco ha descendido y la proporción de exfumadores ha aumentado (…) esto sugiere que para muchos fumadores, el uso dual (vapear a la vez que fumar) es una etapa en el proceso de ser libres de cigarrillo y posteriormente libres de nicotina (…)".* • "(…) *De acuerdo con el Profesor John Newton, Director de Health Improvement en PHE, los vapeadores son **95% menos riesgosos** para sus consumidores y de riesgo insignificante para los transeúntes. Sin embargo, más de la mitad de los fumadores creen falsamente que el vapeo es tan dañino como fumar o simplemente no lo sabe* (…)".	4 de octubre de 2018 Tobacco Commissioning support 2019 to 2020: principles and indicator -GOV.UK

Entidad	Concepto	Fecha de la referencia
	• "(…) *Vapear posee tan solo una pequeña fracción de los riesgos asociados a fumar y cambiar el hábito de fumar por vapear conlleva beneficios para la salud* (…)". • "(…) *El uso de vapeadores está relacionado con la mejora en las tasas de éxito en reducción de consumo de cigarrillo* (…)". • "(…) ***La evidencia NO soporta la preocupación sobre el papel de los vapeadores como puerta de entrada al consumo de cigarrillo en jóvenes**, al contrario, su consumo está asociado con la reducción de consumo de tabaco en jóvenes.*"	6 de febrero de 2018 PHE publishes independent expert e-cigarette evidence review
ASH (Action on Smoking and Health)	• "(…) *Entre 2017 y 2018 una mayor proporción del público encuestado identifica correctamente que los vapeadores son menos riesgosos que fumar (…).*"	8 de mayo de 2018 Use of e-cigarettes among adults in Great Britain.
CÁNCER RESEARCH UK	• La Profesora Linda Bauld Líder en Behavioural Research for Cancer Prevention, Cancer Research UK, afirma que: "(…) *Se ha expresado preocupación por el uso de productos de vapeo que llevará a los jóvenes a fumar. Pero en el Reino Unido, la investigación muestra claramente que el uso regular de vapeadores entre los jóvenes que nunca han fumado sigue siendo insignificante, menos del 1%, y el consumo de tabaco entre los jóvenes sigue disminuyendo a un ritmo alentador. Tenemos que seguir de cerca estas tendencias, pero hasta ahora **los datos sugieren que los productos de vapeo No están actuando como una ruta para fumar regularmente entre los jóvenes*** (…)".	2 de marzo de 2018 E-cigarettes and heated tobacco products: evidence review
US National Academies on Sciences, Engineering and Medicine	"(…) *Basados en la evidencia disponible, los vapeadores son mucho menos riesgosos en comparación con los cigarrillos de tabaco convencionales* (…)".	23 de enero de 2018 US National Academies on Sciences, Engineering and Medicine report on e-cigarettes.
King's College London	• La profesora Ann McNeil, experta en adicción al tabaco señaló: "(…) *La gente fuma por la nicotina, pero contrariamente a lo que la gran mayoría cree, la nicotina causa poco o ningún daño. El humo tóxico es el culpable y es la causa abrumadora de todas las enfermedades y muertes relacionadas con el tabaco. Ahora hay una mayor variedad de formas alternativas de obtener nicotina que nunca, incluyendo chicle de nicotina, aerosol nasal, pastillas y cigarrillos electrónicos (…)".*	29 de agosto de 2017 Young People's Use of e-cigarettes across the United Kingdom: Findings from Five Surveys 2015-2017
Royal College of Physicians (RCP)	• "(…) **Los v*apeadores son efectivos cuando se emplean por fumadores con el objetivo de dejar de fumar*** (…)". • "(…) *El riesgo para la salud de inhalar vapor por largo tiempo proveniente de los vapeadores no excede el 5% del riesgo relativo a fumar tabaco* (…)". • "(…) *Desarrollos tecnológicos y mejoras en los estándares de producción podrían llegar a reducir el riesgo de los vapeadores* (…)". • "(…) *Para el interés de la salud pública, es importante promover el uso de vapeadores y otros productos de nicotina sin tabaco masivamente como un sustituto del cigarrillo en Reino Unido* (…)" .	28 de abril de 2016 Nicotine without smoke: tobacco harm reduction
Ministry of Health New Zealand	• "(…) *La evidencia sugiere que el riesgo asociado a los productos de vapeo es mucho más bajo que con respecto al cigarrillo. Por lo cual se espera que los riesgos de salud de los fumadores que cambien hacia productos de vapeo se reduzcan significativamente* (...)".	Junio de 2018 Vaping information for stop smoking services

Entidad	Concepto	Fecha de la referencia
University College London	• "(…) *El uso de productos de vapeo y vareniclina están asociados con mayores tasas de abstinencia después de un intento de dejar de fumar en Inglaterra* (…)". • Los usuarios de productos de vapeo tienen un 95% más de probabilidades de tener éxito en dejar de fumar que aquellos que no usan estos productos. (OR=1.95, 95%IC:1.69-2.24).	Mayo de 2019 Moderators of real-world effectiveness of smoking cessation aids: a population study. Link Digital

VIII. PLIEGO DE MODIFICACIONES

Considerando los argumentos expuestos es necesario realizar modificaciones al articulado en aras de una regulación completa e integral del objeto tratado.

Texto aprobado en segundo debate Plenaria de Senado	Texto propuesto para debate en Comisión Séptima Cámara
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 21 de la Ley 1335 de 2009, el cual quedará así: "**Artículo 21.** ***Definiciones***. Para efectos de esta ley, adóptense las siguientes definiciones: Área cerrada: Todo espacio cubierto por un techo y confinado por paredes, independientemente del material utilizado para el techo, las paredes o los muros y de que la estructura sea permanente o temporal.	Sin modificación
	Aerosol: Sustancia generada por la atomización de una solución líquida en diferentes concentraciones o producida por el calentamiento de tabaco sin combustión.
Humo de tabaco ajeno o humo de tabaco ambiental: El humo que se desprende del extremo ardiente de un cigarrillo, tabaco y/o sus derivados generalmente en combinación con el humo exhalado por el fumador. Para efectos de aplicación de la presente ley, entiéndase como humo de tabaco ajeno o humo de tabaco ambiental, el humo, vapor, aerosol o subproducto del calentamiento, combustión o aspersión derivado del consumo de cigarrillos, tabaco y sus derivados.	Humo de tabaco ajeno o humo de tabaco ambiental: El humo que se desprende del extremo ardiente de un cigarrillo, tabaco y/o sus derivados generalmente en combinación con el humo exhalado por el fumador. Para efectos de aplicación de la presente ley, entiéndase como humo de tabaco ajeno o humo de tabaco ambiental, el humo, vapor, aerosol o subproducto del calentamiento, combustión o aspersión derivado del consumo de cigarrillos, tabaco y sus derivados, **así como los derivados de sus sucedáneos o imitadores.**
Fumar: El hecho de estar en posición de control de cigarrillos, tabaco y/o sus derivados encendido independientemente de que el humo se esté inhalando o exhalando en forma activa.	Sin modificación
Lugar de trabajo: Todos los lugares utilizados por las personas durante su empleo o trabajo incluyendo todos los lugares conexos o anexos y vehículos que los trabajadores utilizan en el desempeño de su labor. Esta definición abarca aquellos lugares que son residencia para unas personas y lugar de trabajo para otras.	Sin modificación
Lugares públicos: Todos los lugares accesibles al público en general, o lugares de uso colectivo, independientemente de quien sea su propietario o del derecho de acceso a los mismos.	Sin modificación
Transporte público: Todo vehículo utilizado para transportar al público, generalmente con fines comerciales o para obtener una remuneración. Incluye a los taxis.	Sin modificación

Texto aprobado en segundo debate Plenaria de Senado	Texto propuesto para debate en Comisión Séptima Cámara
Cigarrillos, tabaco y sus derivados: Para efectos de aplicación de la presente ley, entiéndase como Cigarrillo, tabaco y sus derivados, adicionalmente a los convencionales y los que requieren combustión para su consumo, los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), los Cigarrillos Electrón Productos de Tabaco Calentado (PTC).”	Cigarrillos, tabaco y sus derivados: Para efectos de aplicación de la presente ley, entiéndase como Cigarrillo, tabaco y sus derivados, adicionalmente a los convencionales y los que requieren combustión para su consumo, los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), los Cigarrillos Electrón Productos de Tabaco Calentado (PTC), **los dispositivos electrónicos para su consumo, y en general todos los sucedáneos o imitadores.**
	Productos de Tabaco Calentado (PTC): son productos de tabaco que producen aerosoles que contienen nicotina y productos químicos al calentar el tabaco o al activar un dispositivo que contiene el tabaco. Entiéndase como tales tanto al producto de tabaco como al dispositivo electrónico que se calienta.
	Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN): Son los dispositivos electrónicos y los productos con nicotina (SEAN) o sin nicotina (SSSN) que generan un aerosol o vapor disueltos en sustancias líquidas, mediante el calentamiento de una solución.
	Vapear: Acto de inhalar aerosol o vapor por la boca, usualmente de un dispositivo electrónico operado por batería, como un cigarrillo electrónico o vaporizador, que se calienta y genera emisiones en forma de aerosol o vapor de un líquido o un sólido.
	Vapor: Aquella emisión producida e inhalada al calentar un líquido de SEAN o SSSN, o tabaco, o la activación de un dispositivo que contiene el líquido o tabaco y succionar. Los líquidos pueden o no contener nicotina.
Parágrafo. El Gobierno nacional a través del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, rendirá un informe técnico-científico a las Comisiones Séptimas del Congreso de la República, sobre los riesgos o ventajas a la salud pública de los productos de tabaco, cigarrillos y sus derivados, Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos, Productos de Tabaco Calentado (PTC) y los demás dispositivos utilizados para su uso. En un tiempo no mayor a 1 año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.	Sin modificación
	Parágrafo 2°. Para efectos de la presente ley, cuando se utilice la expresión Control de Tabaco entiéndase como Control de Tabaco y Consumo con y sin Nicotina en Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), y en general todos los sucedáneos o imitadores.
Artículo 2°. Modifíquese y adiciónese un parágrafo nuevo al artículo 2° de la Ley 1335 de 2009, el cual quedará de la siguiente manera: “**Artículo 2°.** ***Prohibición de vender productos de tabaco a menores de edad***. Se prohíbe a toda persona natural o jurídica la venta, directa e indirecta, de productos de tabaco, cigarrillos y sus derivados, en cualquiera de sus presentaciones, a menores de dieciocho (18) años. En caso de duda, soliciten que cada comprador de tabaco demuestre que ha alcanzado la mayoría de edad.	Sin modificación

Texto aprobado en segundo debate Plenaria de Senado	Texto propuesto para debate en Comisión Séptima Cámara
Parágrafo 1°. Es obligación de los vendedores y expendedores de productos de tabaco y sus derivados indicar bajo un anuncio claro y destacado al interior de su local, establecimiento o punto de venta la prohibición de la venta de productos de tabaco a menores de edad. Este anuncio en ningún caso hará mención a marcas, empresas o fundaciones de empresas tabacaleras; ni empleará logotipos, símbolos, juegos de colores, que permitan identificar alguna de ellas.	Sin modificación
Parágrafo 2°. Las autoridades competentes realizarán procedimientos de inspección, vigilancia y control a los puntos de venta, local, o establecimientos con el fin de garantizar el cumplimiento de esta disposición.	**Parágrafo 2°.** Las autoridades competentes realizarán procedimientos de inspección, vigilancia y control a los puntos de venta, local, o establecimientos con el fin de garantizar el cumplimiento de esta disposición, **así como a los canales de comercio electrónico y las plataformas digitales**.
Parágrafo 3°. Se prohíbe el uso de máquinas expendedoras o dispensadores mecánicos de productos de tabaco, cigarrillos y sus derivados en lugares y puntos de venta en los cuales hay libre acceso de los menores de edad. Se debe garantizar que los productos de tabaco no sean accesibles desde los estantes al público sin ningún tipo de control.	Sin modificación
Parágrafo 4°. A partir de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley, el Gobierno nacional deberá reglamentar lo concerniente a la venta por Internet de cigarrillo, tabaco y sus derivados. De tal forma que se evite el acceso a estos productos por parte de los menores de edad.	**Parágrafo 4°.** ~~A partir de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley, el Gobierno nacional deberá reglamentar lo concerniente a la venta por Internet de cigarrillo, tabaco y sus derivados. De tal forma que se evite el acceso a estos productos por parte de los menores de edad.~~ **La Superintendencia de Industria y Comercio vigilará el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo por parte de los canales de comercio electrónico y las plataformas digitales.**
	Parágrafo 5°. Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable de igual manera a los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), Productos de Tabaco Calentado (PTC), sucedáneos o imitadores.
Artículo 3°. Modifíquese y adiciónense dos parágrafos nuevos al artículo 5º de la Ley 1335 de 2009, el cual quedará de la siguiente manera: **"Artículo 5°.** ***Políticas de salud pública antitabaquismo.*** Los Ministerios de la Protección Social y de Educación Nacional formularán, aplicarán, actualizarán periódicamente y revisarán estrategias, planes y programas nacionales multisectoriales integrales de control del tabaquismo, de cigarrillos y sus derivados en los menores de edad y a la población en general, fumadora o no fumadora, correspondientes a la política de salud pública que se haya estipulado e implementarán estrategias para propender por el abandono del consumo de tabaco, de cigarrillos y sus derivados; así como la investigación y divulgación sobre sus efectos. El Ministerio de la Protección Social diseñará e incorporará dentro del Plan Nacional de Salud Pública, las estrategias y acciones para identificar y promover la atención y demanda de servicios de rehabilitación, cesación y curación de la población fumadora enferma por causas asociadas al tabaquismo.	Sin modificación

Texto aprobado en segundo debate Plenaria de Senado	Texto propuesto para debate en Comisión Séptima Cámara
Parágrafo 1°. El Instituto Nacional de Salud llevará a cabo el monitoreo y seguimiento sobre el impacto en la salud de los consumidores activos y consumidores pasivos, sobre el uso de productos de tabaco, cigarrillos y sus derivados, Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos, Productos de Tabaco Calentado (PTC) y los demás dispositivos utilizados para su uso. De los datos que resulten del monitoreo y seguimiento deberá rendir informe semestral el cual será difundido por diferentes medios de comunicación y estará disponible en todo momento para fácil acceso al público en la página oficial de la entidad.	Sin modificación
Parágrafo 2°. La Superintendencia de Industria y Comercio llevará a cabo el control y seguimiento de la venta, comercialización y distribución de los productos de tabaco, cigarrillos y sus derivados, Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos, Productos de Tabaco Calentado (PTC) y los demás dispositivos utilizados para su uso. El informe que lleven a cabo las entidades será difundido por diferentes medios de comunicación y estará disponible en todo momento para fácil acceso al público en la página oficial de las entidades.	~~**Parágrafo 2°. La Superintendencia de Industria y Comercio llevará a cabo el control y seguimiento de la venta, comercialización y distribución de los productos de tabaco, cigarrillos y sus derivados, Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos, Productos de Tabaco Calentado (PTC) y los demás dispositivos utilizados para su uso. El informe que lleven a cabo las entidades será difundido por diferentes medios de comunicación y estará disponible en todo momento para fácil acceso al público en la página oficial de las entidades.**~~
Artículo 4°. Modifíquese y adiciónese un literal nuevo al artículo 19 de la Ley 1335 de 2009, el cual quedará de la siguiente manera: "**Artículo 19. *Prohibición al consumo de tabaco y sus derivados.*** Prohíbase el consumo de cigarrillos, tabaco y sus derivados, en los lugares señalados en el presente artículo. En las áreas cerradas de los lugares de trabajo y/o de los lugares públicos, tales como: Bares, restaurantes, centros comerciales, tiendas, ferias, festivales, parques, estadios, cafeterías, discotecas, cibercafés, hoteles, ferias, pubs, casinos, zonas comunales y áreas de espera, donde se realicen eventos de manera masiva, entre otras	Sin modificación
a) Las entidades de salud.	Sin modificación
b) Las instituciones de educación formal y no formal, en todos sus niveles.	Sin modificación
c) Museos y bibliotecas.	Sin modificación
d) Los establecimientos donde se atienden a menores de edad.	Sin modificación
e) Los medios de transporte de servicio público, oficial, escolar, mixto y privado.	Sin modificación
f) Entidades públicas y privadas destinadas para cualquier tipo de actividad industrial, comercial o de servicios, incluidas sus áreas de atención al público y salas de espera.	Sin modificación
g) Áreas en donde el consumo de productos de tabaco generen un alto riesgo de combustión por la presencia de materiales inflamables, tal como estaciones de gasolina, sitios de almacenamiento de combustibles o materiales explosivos o similares.	Sin modificación
h) Espacios deportivos y culturales.	Sin modificación
i) Zonas comunes de que trata el artículo 19 de la Ley 675 de 2001, que contempla el Régimen de Propiedad Horizontal, excluyendo de estos los bienes comunes de uso exclusivo.	Sin modificación

Texto aprobado en segundo debate Plenaria de Senado	Texto propuesto para debate en Comisión Séptima Cámara
Parágrafo. Las autoridades sanitarias vigilarán el cumplimiento de este artículo, en coordinación con las autoridades de policía y demás autoridades de control.	Sin modificación
Artículo 5°. Adiciónese un parágrafo nuevo al artículo 34 a la Ley 1335 de 2009, de la siguiente manera: **Artículo 34.** ***Plazo para implementar la advertencia de salud en la publicidad, las cajetillas y empaques.*** De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 y siguientes de esta ley, se concede a las compañías productoras, importadoras, distribuidoras y comercializadoras, un plazo de un año, contado a partir de la fecha de promulgación de esta ley, para adecuar la publicidad, cajetillas o empaques con la advertencia de salud y para agotar los inventarios. Cumplido este plazo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), hará la verificación en puerto de conformidad con su competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio hará la verificación y control una vez se encuentre en el mercado nacional, las autoridades competentes, velarán porque todos los productos cumplan con lo dispuesto en el presente artículo, como requisito para los efectos del levante de la mercancía.	Sin modificación
Parágrafo 1°. Se concede a las compañías productoras, importadoras, distribuidoras y comercializadoras de administración de Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado y los demás dispositivos utilizados para su uso, un plazo de un año, contado a partir de la fecha de promulgación de esta ley, para adecuar la publicidad, cajetillas o empaques con la advertencia de salud y para agotar los inventarios. Cumplido este plazo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) hará la verificación en puerto de conformidad con su competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio hará la verificación y control una vez se encuentre en el mercado nacional, las autoridades competentes, velarán porque todos los productos cumplan con lo dispuesto en el presente artículo, como requisito para los efectos del levante de la mercancía.	Sin modificación
	Artículo 6°. Adiciónese un parágrafo al artículo 13 de la Ley 1335 de 2009, el cual quedará así: **"Parágrafo 3°.** ***Implementación de empaquetado neutro.*** **El Gobierno nacional mediante las entidades que resulten competentes, diseñará e implementará en el plazo de tres (3) años siguientes a la promulgación de la presente ley, la reglamentación necesaria para la adopción del "empaquetado neutro" en concordancia con las Directrices para la aplicación de los artículos 11 y 13 del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco"**
Artículo 6°. *Vigencia y derogatoria.* La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las normas que le sean contrarias	**Artículo 67°.** *Vigencia y derogatoria.* La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

IX. PROPOSICIÓN

Con base en las anteriores consideraciones, solicito a los honorables Representantes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes dar primer debate al Proyecto de ley número 174 de 2018 Senado, 218 de 2019 Cámara, *por la cual se modifica la Ley 1335 de 2009*, con el pliego de modificaciones y el texto propuesto a continuación.

Cordialmente,



MAURICIO TORO ORJUELA
Ponente

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 174 DE 2018 SENADO, 218 DE 2019 CÁMARA

por la cual se modifica la Ley 1335 de 2009.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 21 de la Ley 1335 de 2009, el cual quedará así:

"**Artículo 21.** ***Definiciones***. Para efectos de esta ley, adóptense las siguientes definiciones:

Aerosol: Sustancia generada por la atomización de una solución líquida en diferentes concentraciones o producida por el calentamiento de tabaco sin combustión.

Área cerrada: Todo espacio cubierto por un techo y confinado por paredes, independientemente del material utilizado para el techo, las paredes o los muros y de que la estructura sea permanente o temporal.

Humo de tabaco ajeno o humo de tabaco ambiental: El humo que se desprende del extremo ardiente de un cigarrillo, tabaco y/o sus derivados generalmente en combinación con el humo exhalado por el fumador. Para efectos de aplicación de la presente ley, entiéndase como humo de tabaco ajeno o humo de tabaco ambiental, el humo, vapor, aerosol o subproducto del calentamiento, combustión o aspersión derivado del consumo de cigarrillos, tabaco y sus derivados, así como los derivados de sus sucedáneos o imitadores.

Fumar: El hecho de estar en posición de control de cigarrillos, tabaco y/o sus derivados encendido independientemente de que el humo se esté inhalando o exhalando en forma activa.

Lugar de trabajo: Todos los lugares utilizados por las personas durante su empleo o trabajo incluyendo todos los lugares conexos o anexos y vehículos que los trabajadores utilizan en el desempeño de su labor. Esta definición abarca aquellos lugares que son residencia para unas personas y lugar de trabajo para otras.

Lugares públicos: Todos los lugares accesibles al público en general, o lugares de uso colectivo, independientemente de quien sea su propietario o del derecho de acceso a los mismos.

Transporte público: Todo vehículo utilizado para transportar al público, generalmente con fines comerciales o para obtener una remuneración. Incluye a los taxis.

Cigarrillos, tabaco y sus derivados: Para efectos de aplicación de la presente ley, entiéndase como Cigarrillo, tabaco y sus derivados, adicionalmente a los convencionales y los que requieren combustión para su consumo, los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), los Cigarrillos Electrónicos Productos de Tabaco Calentado (PTC), los dispositivos electrónicos para su consumo, y en general todos los sucedáneos o imitadores".

Productos de Tabaco Calentado (PTC): son productos de tabaco que producen aerosoles que contienen nicotina y productos químicos al calentar el tabaco o al activar un dispositivo que contiene el tabaco. Entiéndase como tales tanto al producto de tabaco como al dispositivo electrónico que se calienta.

Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN): Son los dispositivos electrónicos y los productos con nicotina (SEAN) o sin nicotina (SSSN) que generan un aerosol o vapor disueltos en sustancias líquidas, mediante el calentamiento de una solución.

Vapear: Acto de inhalar aerosol o vapor por la boca, usualmente de un dispositivo electrónico operado por batería, como un cigarrillo electrónico o vaporizador, que se calienta y genera emisiones en forma de aerosol o vapor de un líquido o un sólido.

Vapor: Aquella emisión producida e inhalada al calentar un líquido de SEAN o SSSN, o tabaco, o la activación de un dispositivo que contiene el líquido o tabaco y succionar. Los líquidos pueden o no contener nicotina.

Parágrafo 1°. El Gobierno nacional a través del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, rendirá un informe técnico-científico a las Comisiones Séptimas del Congreso de la República, sobre los riesgos o ventajas a la salud pública de los productos de tabaco, cigarrillos y sus derivados, Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos, Productos de Tabaco Calentado (PTC) y los demás dispositivos utilizados para su uso. En un tiempo no mayor a 1 año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 2°: Para efectos de la presente ley, cuando se utilice la expresión Control de Tabaco entiéndase como Control de Tabaco y Consumo con y sin Nicotina en Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y Sistemas

Similares Sin Nicotina (SSSN), y en general todos los sucedáneos o imitadores.

Artículo 2°. Modifíquese y adiciónese un parágrafo nuevo al artículo 2° de la Ley 1335 de 2009, el cual quedará de la siguiente manera:

"**Artículo 2°.** ***Prohibición de vender productos de tabaco a menores de edad***. Se prohíbe a toda persona natural o jurídica la venta, directa e indirecta, de productos de tabaco, cigarrillos y sus derivados, en cualquiera de sus presentaciones, a menores de dieciocho (18) años. En caso de duda, soliciten que cada comprador de tabaco demuestre que ha alcanzado la mayoría de edad.

Parágrafo 1°. Es obligación de los vendedores y expendedores de productos de tabaco y sus derivados indicar bajo un anuncio claro y destacado al interior de su local, establecimiento o punto de venta la prohibición de la venta de productos de tabaco a menores de edad.

Este anuncio en ningún caso hará mención a marcas, empresas o fundaciones de empresas tabacaleras; ni empleará logotipos, símbolos, juegos de colores, que permitan identificar alguna de ellas.

Parágrafo 2°. Las autoridades competentes realizarán procedimientos de inspección, vigilancia y control a los puntos de venta, local, o establecimientos con el fin de garantizar el cumplimiento de esta disposición, así como a los canales de comercio electrónico y las plataformas digitales.

Parágrafo 3°. Se prohíbe el uso de máquinas expendedoras o dispensadores mecánicos de productos de tabaco, cigarrillos y sus derivados en lugares y puntos de venta en los cuales hay libre acceso de los menores de edad. Se debe garantizar que los productos de tabaco no sean accesibles desde los estantes al público sin ningún tipo de control.

Parágrafo 4°. La Superintendencia de Industria y Comercio vigilará el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo por parte de los canales de comercio electrónico y las plataformas digitales.

Parágrafo 5°. Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable de igual manera a los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), Productos de Tabaco Calentado (PTC), sucedáneos o imitadores".

Artículo 3°. Modifíquese y adiciónense dos parágrafos nuevos al artículo 5° de la Ley 1335 de 2009, el cual quedará de la siguiente manera:

"Artículo 5°. ***Políticas de salud pública antitabaquismo.*** Los Ministerios de la Protección Social y de Educación Nacional formularán, aplicarán, actualizarán periódicamente y revisarán estrategias, planes y programas nacionales multisectoriales integrales de control del tabaquismo, de cigarrillos y sus derivados en los menores de edad y a la población en general, fumadora o no fumadora, correspondientes a la política de salud pública que se haya estipulado e implementarán estrategias para propender por el abandono del consumo de tabaco, de cigarrillos y sus derivados; así como la investigación y divulgación sobre sus efectos.

El Ministerio de la Protección Social diseñará e incorporará dentro del Plan Nacional de Salud Pública, las estrategias y acciones para identificar y promover la atención y demanda de servicios de rehabilitación, cesación y curación de la población fumadora enferma por causas asociadas al tabaquismo.

Parágrafo 1°. El Instituto Nacional de Salud llevará a cabo el monitoreo y seguimiento sobre el impacto en la salud de los consumidores activos y consumidores pasivos, sobre el uso de productos de tabaco, cigarrillos y sus derivados, Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos, Productos de Tabaco Calentado (PTC) y los demás dispositivos utilizados para su uso. De los datos que resulten del monitoreo y seguimiento deberá rendir informe semestral el cual será difundido por diferentes medios de comunicación y estará disponible en todo momento para fácil acceso al público en la página oficial de la entidad".

Artículo 4°. Modifíquese y adiciónese un literal nuevo al artículo 19 de la Ley 1335 de 2009, el cual quedará de la siguiente manera:

"**Artículo 19.** ***Prohibición al consumo de tabaco y sus derivados.*** Prohíbase el consumo de cigarrillos, tabaco y sus derivados, en los lugares señalados en el presente artículo.

En las áreas cerradas de los lugares de trabajo y/o de los lugares públicos, tales como: Bares, restaurantes, centros comerciales, tiendas, ferias, festivales, parques, estadios, cafeterías, discotecas, cibercafés, hoteles, ferias, pubs, casinos, zonas comunales y áreas de espera, donde se realicen eventos de manera masiva, entre otras.

a) Las entidades de salud.

b) Las instituciones de educación formal y no formal, en todos sus niveles.

c) Museos y bibliotecas.

d) Los establecimientos donde se atienden a menores de edad.

e) Los medios de transporte de servicio público, oficial, escolar, mixto y privado.

f) Entidades públicas y privadas destinadas para cualquier tipo de actividad industrial, comercial o de servicios, incluidas sus áreas de atención al público y salas de espera.

g) Áreas en donde el consumo de productos de tabaco generen un alto riesgo de combustión por la presencia de materiales inflamables, tal como estaciones de gasolina, sitios de almacenamiento de combustibles o materiales explosivos o similares.

h) Espacios deportivos y culturales.

i) Zonas comunes de que trata el artículo 19 de la Ley 675 de 2001, que contempla el Régimen de Propiedad Horizontal, excluyendo de estos los bienes comunes de uso exclusivo.

Parágrafo. Las autoridades sanitarias vigilarán el cumplimiento de este artículo, en coordinación con las autoridades de policía y demás autoridades de control."

Artículo 5°. Adiciónese un parágrafo nuevo al artículo 34 a la Ley 1335 de 2009, de la siguiente manera:

"Artículo 34. ***Plazo para implementar la advertencia de salud en la publicidad, las cajetillas y empaques.*** De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 y siguientes de esta ley, se concede a las compañías productoras, importadoras, distribuidoras y comercializadoras, un plazo de un año, contado a partir de la fecha de promulgación de esta ley, para adecuar la publicidad, cajetillas o empaques con la advertencia de salud y para agotar los inventarios.

Cumplido este plazo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), hará la verificación en puerto de conformidad con su competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio hará la verificación y control una vez se encuentre en el mercado nacional, las autoridades competentes, velarán porque todos los productos cumplan con lo dispuesto en el presente artículo, como requisito para los efectos del levante de la mercancía.

Parágrafo 1°. Se concede a las compañías productoras, importadoras, distribuidoras y comercializadoras de administración de Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado y los demás dispositivos utilizados para su uso, un plazo de un año, contado a partir de la fecha de promulgación de esta ley, para adecuar la publicidad, cajetillas o empaques con la advertencia de salud y para agotar los inventarios.

Cumplido este plazo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) hará la verificación en puerto de conformidad con su competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio hará la verificación y control una vez se encuentre en el mercado nacional, las autoridades competentes, velarán porque todos los productos cumplan con lo dispuesto en el presente artículo, como requisito para los efectos del levante de la mercancía."

Artículo 6°. Adiciónese un parágrafo al artículo 13 de la Ley 1335 de 2009, el cual quedará así:

"Parágrafo 3°. ***Implementación de empaquetado neutro.*** El Gobierno nacional mediante las entidades que resulten competentes, diseñará e implementará en el plazo de tres (3) años siguientes a la promulgación de la presente ley, la reglamentación necesaria para la adopción del "empaquetado neutro" en concordancia con las Directrices para la aplicación de los artículos 11 y 13 del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco".

Artículo 7°. *Vigencia y derogatoria.* La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

Cordialmente,



MAURICIO TORO ORJUELA
Ponente

CONTENIDO

Gaceta número 205 - miércoles 13 de mayo de 2020

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Págs.

ENMIENDAS

Enmienda informe de ponencia texto propuesto para primer debate al proyecto de ley número 283 de 2019 Cámara, por medio del cual se sustituye el título xi, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000..... 1

PONENCIAS

Informe de ponencia texto propuesto para primer debate al proyecto de ley número 174 de 2018 senado, 218 de 2019 Cámara, por la cual se modifica la Ley 1335 de 2009..... 23

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2020

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXIX - Nº 513 | Bogotá, D. C., martes, 14 de julio de 2020 | EDICIÓN DE 45 PÁGINAS

DIRECTORES: GREGORIO ELJACH PACHECO, SECRETARIO GENERAL DEL SENADO, www.secretariasenado.gov.co; JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO, SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA, www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

ACTAS DE COMISIÓN

COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE

ACTA NÚMERO 53 DE 2020

(junio 12)

Legislatura 2019-2020

Sesiones Ordinarias Remotas

En Bogotá, D. C., el día viernes 12 de junio de 2020, siendo las 10:46 a. m., se reunieron los miembros de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes por la plataforma de Hangouts Meet de Google, previa citación. Presidida la sesión por el honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas.

La señora Secretaria de la Comisión Primera Constitucional Permanente, doctora Amparo Yaneth Calderón Perdomo, procede con el llamado a lista y verificación del quórum (como primer punto del orden del día).

Presidente:

Sírvase, con ese espectacular cuadro de frutas en relieve, llamar a lista para ver si tenemos quórum.

Secretaria:

Sí, señor Presidente. Siendo las 10:46 de la mañana, procedo con el llamado a lista y esperando, señor Presidente, que sea yo creería que la última lesión de esta legislatura.

Presidente:

Doctora Amparo Yaneth Calderón, no alborote el avispero, esta no será la última sesión, es más, puede que ni siquiera sea la penúltima. Llame a lista, Secretaria.

Secretaria:

Así se hará, señor Presidente.

Contestaron los siguientes honorables Representantes:

Albán Urbano Luis Alberto
Arias Betancur Erwin
Asprilla Reyes Inti Raúl
Burgos Lugo Jorge Enrique
Calle Aguas Andrés David
Córdoba Manyoma Nilton
Deluque Zuleta Alfredo Rafael
Díaz Lozano Élbert
Estupiñán Calvache Hernán Gustavo
Goebertus Estrada Juanita María
González García Harry Giovanny
Hoyos García John Jairo
León León Buenaventura
López Jiménez José Daniel
Lorduy Maldonado César Augusto
Lozada Vargas Juan Carlos
Matiz Vargas Adriana Magali
Méndez Hernández Jorge
Navas Talero Carlos Germán
Padilla Orozco José Gustavo
Peinado Ramírez Julián
Prada Artunduaga Álvaro Hernán
Pulido Novoa David Ernesto
Rodríguez Contreras Jaime
Rodríguez Rodríguez Édward David
Sánchez León Óscar Hernán
Santos García Gabriel
Tamayo Marulanda Jorge Eliécer

Triana Quintero Julio César

Uscátegui Pastrana José Jaime

Vega Pérez Alejandro Alberto

Wills Ospina Juan Carlos

Con excusa adjunta el honorable Representante:

Daza Iguarán Juan Manuel

Honorable Representante Adriana Magali Matiz Vargas:

Presidente, pedirle permiso por favor dos horitas, me reintegro nuevamente a la plataforma que estoy pendiente de un tema fundamental acá en mi ciudad. Gracias.

Presidente:

Querida Vicepresidenta, pues entonces le tocará asumir al doctor Albán, porque el primer punto del orden del día es un proyecto mío, así que yo me tendré que bajar. Entonces claro que la excuso, pero tendrá que asumir el Representante Albán.

Honorable Representante Adriana Magali Matiz Vargas:

Me demoro menos tiempo, lo antes posible estoy en la plataforma. Gracias.

Secretaria:

Señor Presidente, la Secretaria le informa que se ha registrado quórum decisorio, puede usted dar la instrucción para leer el Orden del Día.

Presidente:

Secretaria, antes de leer el orden del día me solicitan varios Congresistas dejar constancias, luego voy a abrir unos minutos para constancias, a las 11:00 de la mañana, en 5 minutos, cerraré el registro para constancias. Tiene la palabra el Representante Erwin Arias.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Erwin Arias Betancur:

Muchas gracias, señor Presidente, y comenzar con un saludo a todos los colegas. Es una constancia desde la Comisión Primera de la Cámara, quiero pedirle al Presidente de la República, al señor Ministro de Salud que agilicen los protocolos para que puedan reabrirse los templos religiosos. Nosotros, los cristianos católicos, necesitamos ir al templo; el pueblo cristiano católico tiene en su rutina de vida ir a la iglesia a recibir la eucaristía, así como las otras religiones también se congregan y son ya casi tres meses que se les ha prohibido, o nos han prohibido reunirnos y congregarnos como pueblo cristiano. Yo quiero pedirle, señor Presidente de la República, señores Ministros, esto hace parte de la salud del pueblo. La religión, nuestra congregación, la guía espiritual, hace parte de la salud mental y la salud del pueblo colombiano. Entonces de manera que le solicitamos que con todos los protocolos permita abrir todas las iglesias de Colombia. Muchas gracias, Presidente y colegas.

Presidente:

Gracias, Representante Erwin Arias. Tiene la palabra, ¿quién me habló?

Honorable Representante Gabriel Santos García:

Presidente, es que me dicen que no está en vivo la sesión, me están escribiendo que algunas personas desde Youtube no se puede ver, que estaban pendientes del orden del día, no sé si haya algo que se pueda revisar.

Presidente:

Amparito, por favor consultar este tema que plantea el Representante Gabriel Santos con Javier porque yo aquí veo que dice que estamos en vivo y que estamos grabando, pero a lo mejor debe ser algún problema de transmisión de Youtube. Preguntémosle a Javier mientras le doy la palabra para una constancia al Representante Óscar Sánchez León desde la bella pero a veces fría ciudad de Facatativá.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Óscar Hernán Sánchez León:

Gracias, Presidente. No, solamente, Presidente, para dejar la constancia de que con su venia me debo de retirar de la plataforma, regresaré una vez termine una actividad que tengo aplazada toda la semana y por la misma agenda no la había podido realizar, señor Presidente. Gracias

Presidente:

Perfecto, Representante Óscar Sánchez. Tiene la palabra para una constancia el Representante Luis Alberto Albán Urbano desde la bella ciudad de Cali. Representante Albán.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Luis Alberto Albán Urbano:

Muchas gracias, señor Presidente. Es una constancia para hacer pública la situación calamitosa que están viviendo compañeras y compañeros firmantes de la paz en el espacio territorial de Monterredondo, en Miranda, Cauca, porque a los líderes comunales, presionados por las amenazas y hechos violentos de grupos al margen de la ley, les han quitado su respaldo y les han solicitado que se vayan de ese territorio donde están viviendo actualmente, donde funciona el espacio territorial. No queremos que se repita lo que viene ocurriendo en Ituango, donde los compañeros allá quedaron desprotegidos y ya se han presentado varios asesinatos; exigimos al Gobierno nacional, a la fuerza pública, a todas las instituciones que tienen que ver con esta situación, que se solucione prontamente y se den garantías de vida y garantías de permanencia o por lo menos dé soluciones a estos compañeros firmantes de la paz. Muchas gracias.

Presidente:

Muchas gracias, Representante Albán. No tengo más inscritos para dejar constancias; por lo tanto, Secretaria, sírvase leer el orden del día.

Secretaria:

Señor Presidente, estaba hablando con Javier, pido permiso a su señoría para que les pueda explicar a los honorables Congresistas qué está pasando, él dice que estamos grabando sin problema, que tenemos problemas única y exclusivamente con Youtube en directo, pero pues el video se está grabando, estas sesiones, estamos mirando sin plataforma, pero si usted prefiere, señor Presidente, para que él les haga una explicación más técnica, le digo a Javier que les pueda responder.

Presidente:

Por favor, Secretaria, para que le quede claro.

Secretaria:

Listo, doctor. Ya en un segundo Javier le responde por la plataforma. Como él es el que maneja la plataforma, entonces está haciendo otras cosas, pero ya está entrando a la plataforma para explicarles.

La Presidencia concede el uso de la palabra al señor Javier Eduardo Figueroa Pulido, funcionario de la Comisión Primera:

Buenos días, honorables Representantes. La grabación está bien y se está sosteniendo, la transmisión en directo con los asesores en el grupo de UTL, yo les envío la transmisión en directo de la plataforma, simplemente que esa transmisión que estamos en directo la permite ver con el dominio de @camara.gov.co. El único inconveniente que tengo en el momento es con la plataforma de Youtube, la transmisión que se enlaza a la plataforma de Youtube, pero cuando suceden estos inconvenientes como nos sucedió la vez pasada, esta es la segunda vez que nos sucede, yo quito el video de la transmisión de Youtube que queda depositada en el disco de Youtube y monto el video completo de la grabación para que no tengamos ningún inconveniente, al igual las grabaciones de las sesiones Canal Congreso, también tiene conocimiento para transmitirlas en diferido. Entonces no hay ningún inconveniente con la transmisión, con la grabación para el desarrollo de la sesión, no hay ningún inconveniente, el único problema que tengo en este momento es con la señal que estoy emitiendo hacia afuera en la plataforma de Youtube. Por lo tanto, la sesión puede seguir normal; yo soluciono eso en unos cinco minutos, espero, porque eso me pasó la vez pasada con el servidor de Youtube y continuamos, no hay ningún problema. La persona que necesite el video, con mucho gusto al final de la sesión yo reenvío el video completo que se monta en la plataforma de Youtube.

Presidente:

Perfecto, Javier. Luego bueno, pues esto es, desde que se esté transmitiendo por la página del Congreso, no tenemos problema en términos de la publicidad. Por otro lado, pues nuestras sesiones presenciales no siempre son transmitidas, de hecho, son simplemente retransmitidas, pocas veces estamos nosotros en vivo desde las Comisiones, se graba en Comisiones y después el Canal del Congreso las retransmite, luego estamos pues en este momento hasta mejor que en la presencialidad porque por lo menos en este momento desde la página de la Cámara de Representantes se está transmitiendo. Entonces creo que podemos continuar, queridos compañeros, así que, doctora Amparo Yaneth Calderón, ¿terminó de leer el orden del día?

Secretaria:

Señor Presidente, no me ha dado la instrucción de leerlo.

Presidente:

Ah, di la instrucción justo antes de que el doctor Gabriel Santos nos requiriera para este tema. Así que sírvase entonces leer el orden del día, Secretaria.

Secretaria:

Sí, señor Presidente.

HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL

LEGISLATURA 2019-2020

SESIÓN REMOTA

(Artículo 2° de la Resolución Mesa Directiva de la Cámara de Representantes 0777 del 06 de abril de 2020)

ORDEN DEL DÍA

Viernes 12 de junio de 2020

10:30 a. m.

I

Llamado a lista y verificación del quórum

II

Discusión y votación de proyectos en primer debate

1. **Proyecto de ley número 283 de 2019 Cámara,** *por medio del cual se sustituye el título XI, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente", de la Ley 599 del 2000".*

Autor: honorable Representante *Juan Carlos Lozada Vargas.*

Ponente: honorable Representante *Juan Carlos Lozada Vargas.*

Proyecto publicado, ***Gaceta del Congreso*** número 1083 de 2019.

Ponencia Primer Debate. ***Gaceta del Congreso*** número 162 de 2020.

Enmienda a la ponencia primer debate ***Gaceta del Congreso*** número 205 de 2020.

2. **Proyecto de ley número 302 de 2019 Cámara,** *por el cual se adoptan medidas de lucha contra el dopaje en el deporte.*

Autores: Ministro del Deporte, doctor *Ernesto Lucena Barrero,* y el honorable Representante *Mauricio Parodi Díaz.*

Ponentes: Honorables Representantes *Margarita María Restrepo Arango* -C-, *Óscar Hernán Sánchez León* -C-, *Jorge Méndez Hernández, John Jairo Hoyos García, Juan Carlos Wills Ospina* y *Luis Alberto Albán Urbano.*

Proyectos publicados, ***Gaceta del Congreso*** número 1135 de 2019.

Ponencia Primer Debate, ***Gaceta del Congreso*** número 256 de 2020.

3. **Proyecto de ley número 112 de 2019 Cámara,** *por medio del cual se reglamenta la aspersión de sustancias tóxicas o probablemente tóxicas en el marco de la lucha contra los cultivos de uso ilícito.*

Autores: Honorables Representantes *Carlos Adolfo Ardila Espinosa, Ángel María Gaitán Pulido, Julián Peinado Ramírez, Neyla Ruiz Correa, David Ricardo Racero Mayorca, David Ernesto Pulido Novoa, Felipe Andrés Muñoz Delgado, Diego Patiño Amariles, John Jairo Cárdenas Morán, Carlos Julio Bonilla Soto, Juan Carlos Lozada Vargas, John Jairo Roldán Avendaño, José Daniel López Jiménez, Harry Giovanny González García, Andrés David Calle Aguas, Silvio José Carrasquilla Torres, Elizabeth Jay-Pang Díaz, Édgar Alfonso Gómez Román, Henry Fernando Correal Herrera, Alejandro Alberto Vega Pérez, Luciano Grisales Londoño.*

Ponente: honorable Representante *Julián Peinado Ramírez.*

Proyecto publicado, ***Gaceta del Congreso*** número 700 de 2019.

Ponencia Primer debate, ***Gaceta del Congreso*** número 236 de 2020.

III

Anuncio de proyectos

(Artículo 8° Acto Legislativo 1 de 2003)

IV

Lo que propongan los honorables Representantes

El Presidente,

Juan Carlos Lozada Vargas.

La Vicepresidente,

Adriana Magali Matiz Vargas.

La Secretaria,

Amparo Yaneth Calderón Perdomo.

La Subsecretaria,

Dora Sonia Cortés Castillo.

Señor Presidente, ha sido leído el orden del día. Señor Presidente, puede usted ponerlo en consideración y votación.

Presidente:

Se abre la discusión sobre el orden del día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Llame a lista, Secretaria, para votar el Orden del Día.

En el transcurso de la sesión ingresó a la plataforma la honorable Representante:

Restrepo Arango Margarita María

Secretaria:

Sí, señor Presidente. Llamo a lista para la votación del orden del día.

Honorables Representantes:

Albán Urbano Luis Alberto	Sí
Arias Betancur Erwin	Sí
Asprilla Reyes Inti Raúl	Sí
Burgos Lugo Jorge Enrique	No votó
Calle Aguas Andrés David	No votó
Córdoba Manyoma Nilton	Sí
Daza Iguarán Juan Manuel	Excusa
Deluque Zuleta Alfredo Rafael	Sí
Díaz Lozano Élbert	Sí
Estupiñán Calvache Hernán Gustavo	Sí
Goebertus Estrada Juanita María	Sí
González García Harry Giovanny	Sí
Hoyos García John Jairo	Sí
León León Buenaventura	Sí
López Jiménez José Daniel	Sí
Lorduy Maldonado César Augusto	Sí
Lozada Vargas Juan Carlos	Sí
Matiz Vargas Adriana Magali	No votó
Méndez Hernández Jorge	Sí
Navas Talero Carlos Germán	Sí
Padilla Orozco José Gustavo	Sí
Peinado Ramírez Julián	Sí
Prada Artunduaga Álvaro Hernán	Sí
Pulido Novoa David Ernesto	Sí
Restrepo Arango Margarita María	Sí
Reyes Kuri Juan Fernando	No votó
Rodríguez Contreras Jaime	Sí
Rodríguez Rodríguez Édward David	Sí
Sánchez León Óscar Hernán	Sí
Santos García Gabriel	Sí
Tamayo Marulanda Jorge Eliécer	Sí
Triana Quintero Julio César	Sí
Uscátegui Pastrana José Jaime	Sí
Vallejo Chujfi Gabriel Jaime	No votó
Vega Pérez Alejandro Alberto	Sí
Villamizar Meneses Óscar Leonardo	No votó
Wills Ospina Juan Carlos	Sí

Presidente, puede usted cerrar la votación.

Presidente:

Se cierra la votación. Anuncie el resultado, Secretaria.

Secretaria:

Señor Presidente, han votado treinta (30) honorables Representantes, todos de manera afirmativa, así que el orden del día ha sido aprobado. Señor Presidente, Primer punto.

Presidente:

Primer punto del orden del día, Secretaria.

Secretaria:

Sí señor Presidente. Discusión y votación de proyectos en primer debate:

Primero: **Proyecto de ley número 283 de 2019 Cámara,** *por medio del cual se sustituye el título*

XI, 'de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente', de la Ley 599 del 2000". Autor: el honorable Representante *Juan Carlos Lozada Vargas*. Ponente único, Representante *Juan Carlos Lozada Vargas*. Proyecto publicado en la ***Gaceta del Congreso*** número 1083 del 2019. Ponencia para primer debate en la ***Gaceta del Congreso*** número 162 de 2020. Enmienda a la ponencia publicada en la ***Gaceta del Congreso*** número 205 del 2020. Informe de la Subcomisión presentado ayer en la tarde y enviado a todos los correos de los honorables Congresistas y ruego a Aura Esther si no lo ha hecho, que por favor lo suba al chat de proposiciones de Comisión para que todos lo tengan en su celular el informe de la Subcomisión.

Señor Presidente, esto es lo que debemos dar informe de la Secretaría, este proyecto ya ha sido aprobada la proposición con que termina el informe de ponencia, ya se evacuaron los impedimentos, así que se nombró una subcomisión para discutir las proposiciones, que eran hasta el día de la discusión setenta proposiciones. En el transcurso de la semana llegaron otras proposiciones del doctor Buenaventura León y de algunos otros Representantes, las cuales fueron allegadas a los correos de los honorables Representantes que integraban la Subcomisión; el informe de subcomisión se recibió ayer en las horas de la tarde, se envió a todos los correos. Ese es el informe que debe dar la Secretaría, señor Presidente.

La Subcomisión ha presentado un articulado que será el sustitutivo, me imagino, estoy revisando acá este informe y, Presidente, pues me imagino que son proposiciones sustitutivas.

Presidente:

Me bajo de la Presidencia, asumirá el primero en la lista puesto que la Vicepresidenta ha pedido permiso unos minutos para ausentarse, razón por la cual debe asumir la Presidencia quien esté primero en la lista, así que creo que es el Representante Albán, así que yo dejo la Presidencia mientras dure el debate de mi proyecto.

Secretaria:

Así se hará, señor Presidente. Una pregunta, doctor Juan Carlos Lozada, ¿este texto acordado que ustedes envían es la sustitutiva a cada uno de los artículos? Porque veo que vienen todos los artículos modificados, ¿son sustitutivas? ¿Es así, honorable Representante?

Honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas:

Esa es la proposición sustitutiva.

Secretaria:

Así se hará y entonces será lo que se pondrá como primera medida en cada artículo a la hora de votar. Señor doctor Albán, en su calidad de Presidente que asume en este instante la Presidencia de la Comisión por orden Alfabético, así lo establece la Ley 5ª, ese es el informe que tiene que dar la Secretaría, así que la recomendación sería, doctor Albán, que explique el doctor Juan Carlos y si alguno de la subcomisión a bien lo tiene, explicar el informe de la subcomisión para empezar la votación del articulado.

Preside la sesión el honorable Representante Luis Alberto Albán Urbano.

Presidente:

Muchas gracias, señora Secretaria. Entonces vamos a proceder de acuerdo a la ley, entonces ponemos en discusión el informe de la subcomisión. Tienen la palabra los honorables Representantes miembros de la Comisión, empezando por el autor del proyecto, que participó de esa Comisión, Juan Carlos Lozada. Si alguno más o alguna más quiere la palabra, por favor entonces se inscriben en el chat. Perdón un momentico, veo aquí una Moción de Orden de José Daniel López; José Daniel, un minuto para su moción de orden.

Honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas:

Presidente, discúlpeme, el Representante José Daniel López me había pedido permiso cuando estaba yo en la Presidencia para retirarse.

Presidente:

Víctor, por favor dale sonido al Representante Juan Carlos Lozada.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas:

Ahora me tocó padecer al doctor Víctor, que soy el único que no lo padece aquí cuando estoy en la Presidencia. Muy bien, Víctor, ese es su trabajo, muy bien. No, estaba diciendo, Presidente, que el Representante José Daniel López me había pedido a mí permiso para retirarse de la plataforma por motivos de agenda durante unos minutos y yo le concedí el permiso.

Presidente:

Bueno, entonces tiene la palabra Juan Carlos Lozada como parte de la subcomisión y como autor del proyecto. Tiene diez minutos para empezar.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas:

Muchísimas gracias, Presidente. No, aquí voy a tratar de ser lo más breve posible; ustedes conocen bien el proyecto y creo que mis explicaciones van a ser satisfactorias pues porque la subcomisión estuvimos reunidos casi dos horas y media mirando artículo por artículo, proposición por proposición y hemos llegado a un consenso y la proposición sustitutiva que le presentamos aquí a la Comisión está firmada por absolutamente todos, así que a mí me da eso mucha alegría porque creo que el proyecto va a poder avanzar sin mayores contratiempo y sobre todo si lo permite el doctor Lorduy.

Al proyecto se le presentaron un total de setenta y cinco proposiciones, Presidente, de las cuales aceptamos cincuenta y dos proposiciones; por supuesto, las que no aceptamos eran las que pretendían eliminar todos los artículos del proyecto,

que eran las proposiciones del Representante Lorduy. Aceptamos algunas, por ejemplo, Representante César, aceptamos con el doctor Erwin Arias, en aras de avanzar en este tema y de mirar una reformulación de ese artículo para la ponencia de segundo debate el tema del paisaje, que a usted tanto le preocupa; ese artículo quedó eliminado en esta proposición Sustitutiva. Por otro lado, que era una digamos de las reiteradas proposiciones que se habían presentado al articulado, retiramos el criterio del impacto ambiental para la tasación de la pena, doctor Rodríguez, que ese a usted le preocupaba altamente igual que a otros Representantes.

El doctor Buenaventura León, quien estuvo muy acucioso durante todo el tiempo en la subcomisión, también nos señaló que seguramente la Comisión quedaría mucho más tranquila si retirábamos todas las expresiones que tienen que ver con "impacto ambiental" y lo dejábamos como está el actual título XI, que es con el "daño ambiental", y así quedó en todo el proyecto y por lo tanto les hicimos modificaciones a todos los artículos que traían el tema del "impacto ambiental" como forma de tasar la pena, eso fue retirado. Por supuesto, también dejamos los artículos como estaban en el código original, con una norma en blanco que tiene que ver cuando no se cumpla con los permisos, cuando no se cumpla con las licencias, cuando no se cumpla con la legislación ambiental vigente, razón por la cual negamos las proposiciones de supresión de las expresiones "cuando no se cumpla con", que nos pedía el Representante Méndez, quien además es parte de la subcomisión y estuvo de acuerdo con dejar esas proposiciones por fuera de la proposición sustitutiva, luego ahí tenemos un gran consenso entre esas tres cosas, pues era un número muy importante de las proposiciones.

Por otro lado, uno de los cambios fundamentales que le hemos hecho al proyecto es que aceptamos, perdón, voy a terminar de decir lo que negamos y ya les diré lo que aceptamos, mejor dicho, lo que retiramos en realidad del proyecto, retiramos también el artículo del prohibición o de penalización del *fracking*, que para mí es un dolor, yo lo debo decir, a mí me hubiera gustado que esto se discutiera aquí. Yo metí al *fracking* en este proyecto justamente para que el Congreso debatiera este tema porque desgraciadamente en la Comisión Quinta del Senado de la República, con todo tipo de artimañas, hundieron en un año el proyecto de prohibición del *fracking* del que soy coautor con algunos de ustedes aquí y con otros Senadores y entonces, aprovechando la oportunidad de debatir este proyecto en la Comisión Primera, yo pensaba que era fundamental discutir el tema del *fracking* aquí, pero sé que este es un tema que genera enormes discordias y yo no tengo ningunas ganas de aquí volver esto un show mediático con respecto al *fracking*.

Sino que yo de verdad, de manera legítima, de manera sincera, creo que la gran mayoría de los delitos nuevos que estamos consignando en el Código Penal son absolutamente necesarios; y si el *fracking* iba a ser la piedra en el zapato para que nuestro Código Penal mejore en términos de los delitos ambientales, pues yo prefiero dar ese debate de manera separada a este proyecto de delitos ambientales y estoy listo para radicar este próximo 20 de julio el proyecto que nos hundieron en el Senado de la República; esta vez lo radicaremos por la Cámara de Representantes porque yo no tendré más consideración con aquellos tercos que creen que por el Senado de la República las cosas se mueven rápido. La Cámara de Representantes ha dado muestras de que no les rehúye a los debates y que aunque sean difíciles, la Cámara los da; el Senado con muchas artimañas ha hundido muchos proyectos de este estilo en la Comisión Quinta del Senado. Así que yo presentaré mi proyecto por fuera de esta Comisión, lo volveré a llevar a la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y sacaré y acepté que no discutamos el tema del *fracking* en el contexto de este proyecto; esto lo discutí no solamente con los miembros de la subcomisión, como la doctora Goebertus y demás, sino que lo hablé con varios de ustedes y me pareció que en aras de avanzar pues esta era una gran piedra en el zapato.

Por otro lado, aceptamos algunos artículos nuevos, en concreto un artículo del Representante Buenaventura León que me parece que enriquece enormemente el proyecto y lo que hace es que las multas que se impongan por causa de los delitos ambientales vayan directamente a programas que tengan que ver con medio ambiente, que no se vayan a ir al Consejo Superior de la Judicatura, sino que estas multas tengan una destinación específica para temas de medio ambiente, pedagogía en medio ambiente y demás. Aceptamos una proposición del Representante Méndez que él le había hecho al delito de daño en coral; el Representante Méndez hizo una proposición tan buena que a nosotros nos pareció que debería ser un delito autónomo en sí mismo que es el delito de tráfico de coral y creo que él conoce muy bien este tema puesto que es una de las problemáticas grandes del mar Caribe, de donde él proviene, y nosotros aceptamos esa proposición.

Aceptamos una proposición muy importante de la doctora Juanita María Goebertus, Secretaria, a la cual yo añado mi firma a esa proposición de la doctora Juanita Goebertus con su permiso, era una proposición que yo de hecho también venía trabajando con una ONG que nos ha mostrado la gravedad de las cifras de deforestación en el país en este primer tramo de los años. Si ustedes leyeron, doctor Lorduy, en el periódico *El Espectador* hace apenas unos días, más de lo que se deforestó en el año 2009 se deforestó en los primeros cuatro meses de este año, es realmente una situación catastrófica lo que está viviendo la Amazonia colombiana en este principio de año y tiene que ver con el tema de la apropiación de baldíos del Estado, que hoy no es un delito en Colombia y por lo tanto cualquiera va y se apropia de las tierras del Estado y después no tiene ninguna consecuencia, le son titulados y hasta ahí llegó el problema. Yo creo que la doctora Goebertus

tiene absolutamente toda la razón y hemos avalado esa proposición.

Entonces creo que ahí toqué digamos los elementos centrales del trabajo que hizo la subcomisión. Si ustedes tienen preguntas sobre alguna de sus proposiciones de manera específica, las podemos contestar; sin embargo, creo que ahí estaba en lo que acabo de mencionar el grueso de las proposiciones y el grueso del debate. El doctor Erwin Arias, que a mí me gustaría escucharlo, a él y al doctor Buenaventura León y por supuesto al doctor Deluque y a todos los demás miembros de la subcomisión, pero algunos de ellos me gustaría que intervinieran porque la verdad que ayer se hizo un trabajo muy juicioso. Doctor Albán, no le pido que intervenga usted porque es el Presidente de la Comisión en este momento, también miembro de la subcomisión, pero hicimos un trabajo arduo, un trabajo difícil, tuvimos hasta encontrones y demás, ahí está grabada la sesión, pero al final logramos un acuerdo y yo creo que de cara a llevar esto a la plenaria de la Cámara, esta proposición sustitutiva debería dejarlos a ustedes muchísimo más tranquilos porque acogimos realmente pues más del 70% de las proposiciones, las que no acogimos fueron además con venia prácticamente todas, no voy a hablar por el Representante Lorduy, que en otro momento tal vez en una conversación privada antes del debate de la vez pasada, estábamos explorando la posibilidad de que las dejara como constancia.

Pero por ejemplo, el Representante Méndez no tuvo problema con que esas quedaran como constancia, algunas del Representante Vallejo no tuvo ningún problema en firmar la proposición, a pesar de que algunas de esas no fueron aceptadas, muchas de él fueron aceptadas otras fueron digamos aceptadas de manera parcial, pero grosso modo, cierto, aceptamos tres artículos nuevos muy importantes, aceptamos quitar el tema de la licencia ambiental para tasar la pena y volvimos al concepto de daño con la graduación de los cuartos que trae el Código Penal, sacamos el delito de *fracking*, el delito…

Presidente:

Por favor tres minutos más para que concluya, Juan Carlos.

Continúa con el uso de la palabra el honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas:

Muchas gracias, Presidente. Entonces hubo otro delito que también se eliminó; ahora, en toda esta maraña de cosas, no lo tengo presente, pero ya les voy a decir si me dan unos instantes, hubo otro que se eliminó que fue uno de los que pidió el Representante Lorduy y de los que pidió además el Representante Erwin Arias también, quería que se eliminara un artículo. Hubo también un artículo nuevo, perdónenme ustedes, no puedo dejar por fuera al Representante Édward Rodríguez, a quien debo hacerle un enorme reconocimiento porque Édward Rodríguez había presentado hace ya un tiempo también una reforma al capítulo de delitos ambientales del Código Penal y ahí le incluimos también el artículo nuevo de ecocidio, que yo creo que es una muy buena proposición del Representante Édward Rodríguez.

Luego, Representante Lorduy, Representante Vallejo, ustedes que han sido pues los Representantes con más dudas, yo espero que este informe de la subcomisión los deje tranquilos porque hemos aceptado prácticamente todo lo que nos han propuesto, hemos mejorado la redacción del proyecto bastante y creo que este proyecto debería pasar no solamente a la plenaria de la Cámara, sino que podríamos hacerlo de manera muy rápida y votar en bloque todos los artículos con las proposiciones sustitutivas, Presidente, si mis compañeros lo tienen a bien. Muchísimas gracias a todos y a todas.

Presidente:

Bien, Juan Carlos. Entonces tienen la palabra los integrantes de la subcomisión en primer lugar. Hasta ahora aquí tengo a David y se alista Harry y después Erwin. Tiene la palabra David, vamos a dar cinco minutos para cada uno de manera inicial, entonces David Ernesto Pulido, Harry Giovanny González y Erwin Arias.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante David Ernesto Pulido Novoa:

Gracias, Presidente. Realmente pues yo no hacía parte de la subcomisión, pero sí ya una vez revisado todo el informe y escuchadas las aclaraciones que hace el autor del proyecto es más para una precisión sobre una parte de lo que se denomina aquí artículo 331A, que es el que habla de la deforestación en el inciso final, donde se habla de la tala o quema ilegal de árboles, y cuando se habla es un tema de agravante cuando se haga en la cuenca del Amazonas, o en la Sierra Nevada de Santa Marta, del Chocó. Aquí me detengo en ese particular, cuando se habla de la cuenca del Amazonas, ahí debe ser un tema digamos que no sé si definirlo mejor o incorporar un área más, ¿por qué? Porque por ejemplo el río Guaviare está en el departamento del Guaviare y todo mundo supondría que hace parte de la cuenca del Amazonas, pues no hace parte de la cuenca del Amazonas, sino de la cuenca del Orinoco, porque el río Guaviare desemboca es en el río Orinoco.

Y muchos afluentes de este río Guaviare están en la parte norte del departamento, que es una zona bisagra, como nosotros le decimos, una zona bisagra en la medida que es donde finaliza la Orinoquia, finalizan las llanuras naturales, en el norte del departamento, en la parte del municipio de San José y más hacia el sur, centro sur del departamento, comienza realmente la Amazonía colombiana, específicamente en el municipio de El Retorno, donde todos esos afluentes hídricos marcan digamos que el nacimiento o el límite fronterizo de esa Amazonía porque todos esos afluentes sí se dirigen por el sur y van a llegar en definitiva al río Amazonas o a toda esta vertiente amazónica. Adicionalmente, lo que tiene que ver por ejemplo con la zona de

manejo especial de La Macarena. Ahí también hay que tener presente que todos esos afluentes y toda esa biodiversidad que tiene La Macarena se incorpora es desde el Guayabero a esa zona del norte del Guaviare y por el río Guaviare habría partes de la Orinoquia, entonces estaría quedando por fuera.

Es simplemente esa aclaración; por lo demás, creo que se han resuelto muchas dudas y seguramente, Juan Carlos, que para la Plenaria sí trataré de hacer de pronto algún aporte adicional, ya con tiempo, pero debemos el día de hoy aprobar este informe y sacar este proyecto adelante. Muchas gracias, Presidente.

Honorable Representante Adriana Magali Matiz Vargas:

Doctor Albán, ya estoy aquí presente en la sesión, quiero agradecerle de manera infinita por habernos reemplazado durante este tiempo. Este proyecto realmente es muy importante y para mí es muy importante entonces por eso salí muy rápido de mi reunión para estar aquí presente. Muchas gracias, doctor Albán. Tiene la interpelación el doctor Juan Carlos Lozada.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas:

Representante Pulido, me encanta que usted haga esa aclaración porque creo que ese es uno de los temas que podríamos mejorar en la ponencia de segundo debate e informarle que eso proviene de una proposición del Representante Gabriel Jaime Vallejo, que incluyó como agravante cuando la deforestación se haga en la cuenca amazónica y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Nosotros le agregamos el Chocó, Representante Nilton Córdoba, pues porque ahí digamos es uno de los lugares más megadiversos que hay en este planeta entero y tenemos que cuidar nuestro Tapón del Darién. Pero yo creo que la definición amazónica que habíamos a lo mejor adoptado, Representante Pulido, gracias a usted y a el Representante Vega y al Representante Rodríguez, digamos que en el proyecto de acto legislativo de la Amazonía, podríamos ver si podemos redefinir eso de esa manera para que la agravante digamos de alguna manera incluyera no solamente la cuenca de la Amazonía sino a la región amazónica como tal, que es la que más debemos defender hoy. Entonces eso lo podríamos estudiar para la ponencia de segundo debate, Representante Pulido, y espero contar con su asistencia para este artículo. Muchísimas gracias.

Presidente:

Tiene la palabra por cinco minutos el Representante Harry González.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Harry Giovanny González García:

Gracias, Presidenta. Muy buenos días. Un saludo especial a todos y a todas. Yo quiero reconocer el esfuerzo del doctor Juan Carlos Lozada con esta importante iniciativa y el trabajo tan acucioso de los miembros de la subcomisión. Yo voy a acompañar, quiero dejar una constancia, querida Presidenta, que voy a acompañar la aprobación en bloque si fuera posible del informe presentado por el doctor Juan Carlos Lozada y los miembros de la subcomisión que yo suscribí, pero sí le voy a pedir respetuosamente al doctor Juan Carlos que este proyecto de ley sea objeto de una audiencia pública antes de discutirse en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Yo quisiera que pudiéramos escuchar a la gente que se pueda ver afectada por las decisiones que tomemos acá y especialmente en los temas que veo yo que tengan interés con mi región, con la Amazonía colombiana. El problema de la deforestación cada que intento comprenderlo con mayor profundidad es un problema de carácter económico y yo sinceramente creo que, digamos, metiendo gente a la cárcel porque deforestan la Amazonía y ahorita además en una circunstancias de agravante punitivo, no va a ser la solución a la problemática social que ha generado a que se deforeste en esa región del país. Querido Juan Carlos y plenaria, ¿cómo le pedimos a la gente que entienda sobre la deforestación en los parques naturales nacionales que tienen presencia en el departamento del Caquetá cuando ni siquiera hay una oficina de parques en esos territorios, parques naturales nacionales? Cuando la Directora, la querida doctora Miranda, la Directora de Parques Naturales Nacionales, en febrero fue conmigo por primera vez, una funcionaria que hace parte de tres gobiernos fue por primera a San Juan de Lozada, que es área de foco deforestación en Colombia, ahí en los límites entre Caquetá y el departamento del Meta, una funcionaria que lleva tres gobiernos, doce años, y por primera vez iba a un centro poblado que ha sido afectado por la deforestación, cómo le vamos a pedir a la gente orientación sobre la deforestación cuando las corporaciones ambientales tienen esas limitaciones, como Corpoamazonia o como la Corporación Ambiental del Sur del Meta o como la Corporación Ambiental la CDA, que hace parte en el Guaviare.

Cómo vamos a orientar a la gente sobre la tenencia de tierra, sobre el problema de los baldíos, cuando la Agencia Nacional de Tierras tan solo hace dos años llegó al departamento del Caquetá y en el diseño institucional, perdón la Agencia de Restitución de Tierras, apenas hace dos años llegó a Caquetá y la Agencia de Tierras, que creó el Gobierno del Presidente Santos, en lugar de fortalecerse para el departamento del Caquetá, le cerraron la oficina, ahora dependemos del departamento del Huila. Un departamento como el Caquetá, que tiene tanto territorio de baldíos, que permanentemente están siendo objeto de presión por deforestación, aparte de la presión social que se generó hace cuarenta o cincuenta años, cuando le dijeron a la gente vaya tumbe monte y hágase a una finca en el territorio del departamento del Caquetá.

Entonces a la gente yo creo que hay que escucharla. Además de las inquietudes que planteé la vez anterior, que tiene que ver con la política

criminal en Colombia, de verdad, a mí me preocupa que nosotros sigamos insistiendo en que hay que meter a la cárcel a la gente para solucionar problemas sociales de Colombia, especialmente con ese hacinamiento que tiene nuestro sistema carcelario y con los problemas que eso ha generado. Yo sí quisiera que más adelante en este proyecto podamos a estudiar a fondo el impacto que tenga en la política carcelaria y en la política criminal del país.

Y un último punto es sobre ese artículo de minería porque pues una cosa es lo que uno piensa acá en Bogotá y otra es la realidad del país allá donde estaban las FARC antes en los límites entre el Caquetá y el departamento del Meta, hay tres mil kilómetros de red terciaria de vías; Juan Carlos, en San Vicente del Caguán ni siquiera cien kilómetros los ha construido el Estado colombiano. Todo ha sido un esfuerzo de las comunidades, pues las comunidades allá tiene peajes, hacen recaudación de fondos de esos peajes para hacerles mantenimiento a esas vías, que tienen mejor mantenimiento que cualquier vía terciaria de Cundinamarca; pero ese esfuerzo es de las comunidades y el mantenimiento incluye ir a sacar arena de fuentes donde haya material de arrastre y lógico que eso no le piden permiso a nadie, y entonces qué tal darle la orden a la Fiscalía General de la Nación que metan a la cárcel a la gente porque está reemplazando al Estado colombiano, porque este Estado centralista, sin vergüenza, descarado que nos dejó solos a los caqueteños durante toda nuestra vida institucional no ha hecho las inversiones que requeríamos y la respuesta del Estado y del Congreso de la República va a ser si usted quiere arreglar su vía allá, campesino de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, va y saca material de arrastre, arena de una fuente cualquiera que sea, lo que le vamos a hacer es mandarle la Fiscalía, no me parece que eso sea correcto, ese no es el mensaje que están esperando esos habitantes que también son caqueteños.

Yo entiendo la buena disposición de este proyecto, lo acompaño, Juan Carlos, en toda la lucha que usted ha dado para garantizar que nuestros recursos naturales no tengan el deterioro que actualmente tienen, pero esto tenemos que estudiarlo a profundidad. Por eso me agradó mucho que en las reuniones de la subcomisión usted manifestó que no quiere sacar esto a las carreras, sino que quiere que este proyecto tenga todo un proceso de discusión nacional para que si es aprobada esta ley, realmente logre el propósito que es preservar y no termine siendo una causal más de presión social y de conflictividad en regiones que estamos esperando la mano amiga del Estado colombiano. Muchas gracias, querida Presidenta.

Presidente:

Gracias a usted, honorable Representante Harry González. Quiero darle ahorita la palabra al doctor Erwin Arias, cinco minutos, doctor Erwin.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Erwin Arias Betancur:

Muchas gracias, Presidenta y compañeros. Yo aplaudo, celebro la actitud del señor autor de este proyecto de ley, compañero doctor Juan Carlos Lozada. El ser parte de la subcomisión es muy importante y pudimos creo que hacer un filtro de muchas proposiciones que sé que ahora se van a traer a colación seguramente, pero Juan Carlos ha tenido una actitud conciliadora pero propositiva para que este proyecto se convierta en ley de la república. Sin lugar a dudas no soy un promotor de sacar el *fracking* de esta discusión, creo que el país debe dar las discusiones, siempre he dicho hay que dar los debates, en este momento histórico que nos ha dejado esta pandemia un mensaje claro, que nos estamos comiendo el mundo, estamos acabando la naturaleza, estamos destrozando el medio ambiente y que cuando el hombre para, el mundo respira, pues también tenemos que cuestionarnos y tenemos que legislar, endurecer las restricciones para proteger el medio ambiente.

Pero tenemos también que tener en cuenta la realidad que somos un país desordenado, somos un país que hemos crecido de forma desordenada, que hemos abandonado el pueblo, que hemos abandonado el campo y que creemos que esto se legisla y se mira solo desde Bogotá. Es un país centralista y que por ese afán centralista no se han tenido en cuenta una cantidad de criterios, de matices que suceden en el mundo rural. Esa Colombia rural que hoy componen alrededor de once millones de colombianos, el 26% de la población según el DANE el último censo, vive en la zona rural, pues tiene que compaginar con lo que vamos nosotros a legislar y a extremar como medida con la realidad porque no podemos dejar de legislar con fortaleza así como lo hicimos con la cadena perpetua, la cadena perpetua va a obligar a que el Gobierno inicie una cantidad de reformas, pues así esperamos en esta, Juan Carlos, que una vez tengamos estos delitos incluidos en el derecho penal, el Gobierno, el Ministerio del Medio Ambiente, las corporaciones autónomas tengan que hacer un proceso social, un proceso administrativo para adecuar. En este país los colombianos no son propietarios, ese es el principal problema, el problema de la tierra, la tierra es de unos pocos, pero a la vez en los que son los más vulnerables y tienen tierra no es de ellos, porque ni título tienen.

Entonces este es un proyecto de ley que nos invita a un debate importantísimo, pero que a la vez es de mucho cuidado, por eso no nos podemos desesperar; yo sé que va a haber mucho debate ahora e irá a haber en la Cámara y para eso estamos, para ir apoyando. Yo, en el nombre de esa Colombia rural, hablo en nombre de esos campesinos; yo aquí no estoy defendiendo las multinacionales mineras, ni a los grandes terratenientes, ni los ladrones de tierras, no, son los campesinos que utilizan la tierra para vivir, esa Colombia rural que hoy no tiene la cobertura en agua potable, tan solo aproximándonos al 60% de cobertura de agua, el sistema de acueducto

que tiene el pueblo colombiano, el sistema rural es solucionen como ustedes puedan; no sabemos cómo vive un campesino, de dónde toma agua potable en pleno siglo XXI y entonces a la hora de regular, tenemos que tener en cuenta esas consideraciones.

¿Cómo se está usando la tierra en Colombia? Es un debate muy profundo. ¿Cómo se está usando la tierra y con qué fines y por qué? Y dónde está el Estado, entregando las herramientas para que el campesino pueda utilizar la tierra, mientras la seguridad alimentaria no sea un principio de seguridad nacional, mientras la soberanía alimentaria no sea un elemento principal en nuestra legislación, en nuestros gobiernos, vamos a tener abandonadas las tierras y por eso van a aparecer miles de delitos. No es que la tierra no sea fértil, no es que la tierra la dejemos inservible, inútil, es que no hay con qué inyectar los recursos para que los campesinos puedan producir, para que los campesinos puedan vivir y mantener las ciudades.

Por eso, compañeros, se hizo un buen trabajo en esta subcomisión, se sacaron los temas que nos dividían, que nos alejaban de una posible discusión; hemos protegido al campesinado, hemos protegido a la Colombia rural aceptando muy bien las bases. Miren, si bien es cierto, en derecho penal tenemos que tener el principio de la *ultima ratio,* que es la menor intervención en el derecho penal, que solo se debate sobre los temas principales. En este proyecto se crean delitos, se crean conductas, se tipifican conductas como nuevos delitos y eso no es malo, eso es muy bueno, pero tenemos que ser muy claros, tenemos que ser muy cuidadosos porque el tema de las normas en blanco es ese.

Yo quiero felicitar al señor autor de este proyecto, a su equipo de trabajo, doctor Juan Carlos Lozada; a la subcomisión, que hemos trabajado en el mejoramiento de este proyecto de ley. Este es el debate que espera Colombia, o sea, tenemos que fijarnos ya en poner límites en cómo estamos aprovechando o utilizando los recursos naturales. El medio ambiente hoy tiene que estar como prioridad en las agendas del Gobierno y hablar de delitos penales, de delitos ambientales en este momento, es poner al medio ambiente de primero en la agenda de este Gobierno y de esta nación, por supuesto tenemos que defender a los campesinos y a la Colombia rural, que al final son ellos los que van a ser destinatarios de esta norma que aquí nosotros estemos creando. Muchas gracias, señora Presidenta, y nuevamente felicitaciones al doctor Juan Carlos Lozada.

Presidente:

Muchas gracias, Representante Erwin. Le voy a dar la palabra al doctor Buenaventura León. Cinco minutos, doctor Buenaventura.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Buenaventura León León:

Gracias, querida Presidenta. Yo quiero ofrecer hoy un testimonio de excepción porque hice parte de la comisión que la Presidenta designó para estudiar tanto el proyecto como las distintas proposiciones que se habían radicado. Se hizo un ejercicio muy propositivo, muy constructivo, muy abierto y creo que el proyecto indudablemente hoy tiene unas condiciones de tranquilidad y por supuesto un espíritu ambientalista que nos permite ver el presente y el futuro con optimismo.

El proyecto tiene una gran conveniencia; actualizar los tipos penales vigentes en materia de explotación, de contaminación, de destrucción tanto de los recursos naturales como de la biodiversidad del país es una necesidad. Recordar y ayer en el debate en la subcomisión registramos que estamos ante unas normas en blanco, por eso cada vez que discutíamos un tema, nos remitíamos a las normas ambientales y con esa remisión a las normas ambientales, quedamos con la tranquilidad de que con este proyecto no estamos afectando especialmente a nuestros campesinos, que era una de nuestras grandes preocupaciones. Queda claro el tema de la deforestación dentro de esa remisión a normas ambientales por la definición de bosque natural; se han modificado algunos verbos rectores que nos preocupaban. Igualmente, tal vez de la parte más importante del proyecto, en todos los artículos, se cambió la palabra "impacto ambiental", que no generaba preocupaciones, por el tema de "daño ambiental" y por supuesto este proyecto tendrá la posibilidad de seguirse mejorando. Habrá que mirar si la palabra "daño ambiental" es suficiente o para tener más tranquilidad, apreciado Juan Carlos, mi reconocimiento a usted por su trabajo y su liderazgo, si nos toca hablar de "daño ambiental grave" o si solamente con la palabra "daño ambiental" es suficiente.

También propusimos, porque fuimos propositivos, de que hoy los recursos que se imponen por este tipo de multas van para el Consejo Superior de la Judicatura a una bolsa común, que los recursos por multas contra este tipo de delitos vayan a un fondo especial para trabajar el tema de reforestación. Y reconocer la gallardía del autor y ponente de este proyecto para no tocar una de las fuentes principales, una las fuentes de recursos, de ingresos más importantes de la Nación, por supuesto, Juan Carlos, con controles administrativos, como lo ha dicho el Consejo de Estado, porque esta fuente de ingresos le ha representado a la Nación por ejemplo en el año 2019 dieciséis billones, exportaciones corresponden casi a un 40% de nuestras exportaciones, dieciséis billones de dólares y son los que nos dan la suficiencia energética, de gas, de diésel, de combustible.

Y finalmente, algo que es fundamental mantener en el proyecto y casi que trabajarlo como punto de honor, a pesar de las propuestas del Representante Méndez, a quien también debo reconocer, y a Erwin y a toda la Comisión, el trabajo que se realizó en el día de ayer para encontrar estos consensos, es mantener en todos los tipos penales que la conducta solamente se infringe con ocasión del incumplimiento de normas vigentes o sin permiso de autoridad competente. Esos dos elementos son

fundamentales para tener la tranquilidad de que a un campesino, que a una persona o a cualquier ser humano con cualquier conducta que podamos tener pueda estar inmerso en una investigación penal. En ese orden de ideas, Presidente, yo invito a la Comisión, yo que tenía dudas iniciales, hoy tengo la tranquilidad y los invito a que aprobemos el informe de la subcomisión, ojalá si se puede votar de manera íntegra o si lo quieren hacer por artículo, pero creo que en este informe lo podríamos votar en su totalidad y en ese orden de ideas, dar un aval en la Comisión Primera para que pueda continuar su curso en la Plenaria. Gracias, Presidente.

Presidente:

Muchas gracias a usted, doctor Buenaventura. Tiene la palabra por cinco minutos el Representante Jaime Rodríguez.

En el transcurso de la sesión ingresaron a la plataforma los honorables Representantes

Reyes Kuri Juan Fernando

Vallejo Chujfi Gabriel Jaime

Villamizar Meneses Óscar Leonardo

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Jaime Rodríguez Contreras:

Gracias, Presidenta. Yo también me siento complacido con lo que hizo la Comisión; el Proyecto que presentó el doctor Juan Carlos es un proyecto importante, que se requiere, que se necesita. Yo siempre he expresado que las normas están, pero que no se cumplen; siempre he dado el ejemplo de lo que estamos viviendo aquí en el Meta en la Región de La Macarena, por eso siempre digo que ojalá todos se montaran a un avión y sobrevolaran esta zona y se dieran cuenta el daño ambiental que ha venido haciendo la gente, los grandes inversionistas que tienen interés de volver esa zona ganadera y que eso le ha considerado un gran perjuicio a la comunidad, a la región, al mundo. Ustedes saben que es una zona de protección, pero que las normas no se cumplen, que Cormacarena, que es la encargada de esto, de proteger esta región, de protegerla ambientalmente, nunca lo hace y que día a día vemos la deforestación, el daño que está haciendo.

Pero también el proyecto de ley, yo le decía al doctor Juan Carlos que me preocupaban los pequeños agricultores, los que tienen parcelas, los minifundistas, porque es gente que requiere del agua y que no tiene la capacidad económica para contratar estudios para poder pedir los permisos, las licencias de las corporaciones y lo mismo en la pesca, porque los campesinos que viven alrededor de los ríos pues sacan el pescado de subsistencia y que por alguna razón y todos conocemos que se cometen abusos, la policía, las entidades ambientales a quien van y le pegan por mostrar resultados no es a los grandes, porque a los grandes los transan, sino es a los pequeños, terminan metiendo presos a los campesinos porque están sacando el agua sin el permiso, porque están pescando, porque, como lo dijo un colega, Harry, van y sacan balastro para poder arreglar la vía, para poder construir su vivienda y esos en últimas son los que terminan pagando y los grandes se transan y transan y todos conocemos la corrupción que hay en las corporaciones ambientales, que hay a veces en la Justicia, o a veces no, siempre, en la justicia, y que eso es lo que tenemos que evitar. Que a pesar de que se le pueda poner más penas pero como lo decía el doctor, han dicho algunos colegas, si no se cumple, no hay eficacia en el cumplimiento de estas penas, pues todo el mundo se ríe y queda solamente en el Código Penal, queda como un instrumento, pero que no se cumple ninguna acción para evitar estos desastres ambientales.

Sin embargo, hay que intentar las cosas siempre, por eso me complace y por eso felicito a Juan Carlos su interés, yo lo he acompañado en muchas iniciativas ambientales, me gusta esta, pero también quiero que en la ponencia y voy a respaldar el informe porque me parece que el estudio que hizo la subcomisión es un estudio juicioso, pero que hay que mejorar todos los días para sacar un proyecto, sacar una ley que de verdad no vaya a perjudicar a los pequeños. Y te quiero decir que nosotros necesitamos revisar estos temas, sobre todo lo de los pequeños agricultores, lo de los campesinos, como le dije, los que tienen una pequeña parcela. De resto, cuenten con el apoyo, voy a respaldar el proyecto de ley, no me preocupa más sino que los grandes mantengan esa deforestación y no se haga absolutamente nada porque ya no es el problema de normas, el problema son de los seres humanos que ocupan cargos en las corporaciones, que ocupan cargos en la Fiscalía, en los juzgados y no ejecuten el Código Penal. Muchas gracias, señora Presidenta.

Presidente:

Muchas gracias, Representante Jaime Rodríguez. Tiene la palabra Óscar Villamizar por cinco minutos.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Óscar Leonardo Villamizar Meneses:

Muchas gracias, querida Presidenta. Un saludo especial para todos los compañeros. Estuve muy atento a este proyecto, debo decir que es un proyecto que me gusta mucho, creo que el tema ambiental debe seguir siendo una prioridad no solo en este Gobierno, sino para el país y en todos los gobiernos venideros, máximo esta situación que estamos viviendo aquí. Este informe de subcomisión, a los que les agradezco a todos mis compañeros que participaron en esta subcomisión, porque pudieron aclararnos y solventar algunas preocupaciones que teníamos frente algunos temas importantes; el cambio de la palabra "impacto" por la palabra "daño ambiental" nos genera a nosotros un poco de tranquilidad. También en esas expresiones que tenía el doctor Buenaventura León habrá que revisar cuándo se va a verificar que sea un daño grave al medio ambiente y que tendrá que tenerse por supuesto más en cuenta.

Por lo demás, creo que aquí estamos defendiendo el medio ambiente sin vulnerar ningún tipo de población y obviamente también generándole la tranquilidad para que el desarrollo económico de las regiones y sobre todo, como lo decida el doctor Rodríguez, de esos pequeños parceleros y de esos pequeños campesinos que se dedican al agro colombiano, que les toca tan difícil, no sean después los mayores perjudicados. Muchas gracias, Presidenta.

Presidente:

Muchas gracias, doctor Villamizar. Ya no tenemos más intervenciones, entonces vamos a hacer lo siguiente, Secretaria: vamos a poner en consideración, ya habíamos votado el informe de ponencia, entonces vamos a poner en consideración el bloque de los artículos como los presentó en el informe de la subcomisión. Entonces pongo en consideración los artículos tal y como los presentó la subcomisión, están en consideración, se cierra la discusión, sírvase llamar a lista, señora Secretaria.

Secretaria:

Sí, señora Presidenta. Quiero antes de llamar a lista y si usted me lo permite, dejar la siguiente constancia, señora Presidenta.

Presidente:

Perdóneme, Amparito, un momentico que me está aquí pidiendo la palabra el doctor Édward Rodríguez.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Édward David Rodríguez Rodríguez:

Presidenta, muchas gracias. Sencillamente para decir que esto es un avance que esperamos construir sobre la diferencia y creo que por primera vez traer un artículo de la Corte Penal Internacional donde se ha sancionado a personas por crímenes muy graves contra el medio ambiente, denominado ecocidio, es un gran avance. De tal manera que yo celebro esto, vamos a seguir trabajando para que protejamos el medio ambiente, que es una de las cosas que más me apasiona en la vida. Es solamente eso, Presidenta, y apoyar pues el informe de ponencia que enbuenahora se modificó, que enbuenahora se llegó a consensos y que enbuenahora va a permitir que esta ley no se quede en el papel, sino que realmente sea aplicable para que entendamos todos que así como hoy la naturaleza nos hace un llamado a cuidarla, a protegerla, pues también ese llamado es para que las futuras generaciones sepan que nosotros como Congresistas marcamos la historia y dimos un mandato exclusivo y ese mandato es proteger el medio ambiente. Gracias, señora Presidenta.

Presidente:

Gracias, Édward. Doctor Alfredo, tiene usted un minuto.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Alfredo Rafael Deluque Zuleta:

Gracias, Presidenta. Solamente quería intervenir para mencionar lo importante que son las subcomisiones para este tipo de proyectos. Este proyecto era un proyecto que generaba algunos inconvenientes a algunos compañeros y desde algunas interpretaciones por eso tenía tantas proposiciones, pero por ser un proyecto muy importante, en el cual todos estamos de acuerdo en lo fundamental que es proteger el medio ambiente y criminalizar y/o penalizar más bien a todos esos criminales que están valiéndose de ciertas circunstancias para cometer unos delitos que nos van a costar en el futuro. Yo solo quería resaltar eso porque en el pasado pues hemos aceptado seguir adelante con proyectos sin hacer estas subcomisiones y miren lo bueno que es hacerlas, miren lo bien que resultan, bueno, aparte de una que otra discusioncita ahí entre nosotros como amigos, pero para futuro hagámoslo así también, sigámoslo haciendo; no aplacemos esas subcomisiones, no dejemos eso para segundo debate, como lo estábamos haciendo antes, y van a ver que nos queda mejor un proyecto para que en la plenaria salgamos todos los miembros de la Comisión Primera a defenderlo. Gracias, señora Presidenta.

Presidente:

Totalmente de acuerdo con usted, doctor Alfredo. Amparito, continuemos por favor.

Secretaria:

Sí, señora Presidenta. Quería decir que antes de llamar a lista, discúlpeme, señora Presidenta, dejo la siguiente constancia. Este informe de subcomisión radicado ayer en horas de la tarde fue enviado a todos los correos de los honorables Representantes, se subió a la página web de la Comisión y además se publicó muy temprano en el chat de proposiciones para que fuera de conocimiento de todos los honorables Representantes con la finalidad de cumplir el principio de publicidad, honorables Representantes.

Llamo a lista para la votación del articulado que propone el informe de la subcomisión, el artículo 1 comprende los artículos 328, que modifica los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente; capítulo 1, de los delitos contra los recursos del agua y del suelo, artículo 328, artículo 328A, artículo 328B, artículo 329, 329A, 329B. El capítulo 2º, de los delitos contra la biodiversidad de la fauna y de la flora artículo 330, artículo 330A, artículo 330B, artículo 330C, artículo 330D, artículo 331, 331A, 331B, 332, 332A, 333, 334, 334A, 334B, 335, 335A, 335B, 335C. Capitulo 6º, de la invasión de áreas de especial importancia ecológica, 336, 336A. Capítulo 7º, de la destinación ilegal de tierras, 337, 337A. Disposiciones comunes, 338, 338A, 338B y 339, luego el artículo 2º, el artículo 3º, el artículo 4º y el artículo 5º, que es la Vigencia. Con estas modificaciones propuestas en el informe

de la subcomisión, llamo a lista para la votación del articulado en bloque con la constancia además que no hay proposiciones al informe de la subcomisión.

Honorables Representantes:

Albán Urbano Luis Alberto	Sí
Arias Betancur Erwin	Sí
Asprilla Reyes Inti Raúl	Sí
Burgos Lugo Jorge Enrique	No votó
Calle Aguas Andrés David	No votó
Córdoba Manyoma Nilton	Sí
Daza Iguarán Juan Manuel	Sí
Deluque Zuleta Alfredo Rafael	Sí
Díaz Lozano Élbert	Sí
Estupiñán Calvache Hernán Gustavo	Sí
Goebertus Estrada Juanita María	Sí
González García Harry Giovanny	Sí
Hoyos García John Jairo	Sí
León León Buenaventura	Sí
López Jiménez José Daniel	No votó
Lorduy Maldonado César Augusto	Sí
Lozada Vargas Juan Carlos	Sí
Matiz Vargas Adriana Magali	Sí
Méndez Hernández Jorge	Sí
Navas Talero Carlos Germán	Sí
Padilla Orozco José Gustavo	Sí
Peinado Ramírez Julián	Sí
Prada Artunduaga Álvaro Hernán	Sí
Pulido Novoa David Ernesto	Sí
Restrepo Arango Margarita María	Sí
Reyes Kuri Juan Fernando	Sí
Rodríguez Contreras Jaime	Sí
Rodríguez Rodríguez Édward David	Sí
Sánchez León Óscar Hernán	No votó
Santos García Gabriel	Sí
Tamayo Marulanda Jorge Eliécer	Sí
Triana Quintero Julio César	Sí
Uscátegui Pastrana José Jaime	Sí
Vallejo Chujfi Gabriel Jaime	Sí
Vega Pérez Alejandro Alberto	Sí
Villamizar Meneses Óscar Leonardo	Sí
Wills Ospina Juan Carlos	Sí

Señora Presidenta, puede usted cerrar la votación.

Presidente:

Querida Secretaria, cierre la votación y anuncie el resultado por favor.

Secretaria:

Señora Presidenta, han votado treinta y tres (33) honorables Representantes el articulado en bloque como fue presentado en el informe de la subcomisión para este proyecto de ley número 283, así que ha sido aprobado el articulado, señora Presidenta, con treinta y tres (33) votos. Título y pregunta.

Presidente:

Está en discusión título y pregunta, se cierra la discusión. Señora Secretaria, sírvase llamar a lista.

Secretaria:

Presidenta, no he leído el título, por favor déjame leer el título, Presidenta. "Por medio del cual se sustituye el título XI, 'de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente' de la Ley 599 del 2000", y se dictan otras disposiciones". Ha sido leído el título y pregunto por instrucciones suyas, señora Presidenta, si quieren que este proyecto de ley pase a la plenaria de la Cámara y se convierta en ley de la república? Ahora sí lo puede poner en consideración y votación, Presidenta.

Presidente:

Está en consideración, se cierra la discusión. Sírvase llamar a lista, señora Secretaria.

Secretaria:

Sí, señora. Llamo a lista para la votación del título y pregunta.

Honorables Representantes:

Albán Urbano Luis Alberto	Sí
Arias Betancur Erwin	Sí
Asprilla Reyes Inti Raúl	Sí
Burgos Lugo Jorge Enrique	No votó
Calle Aguas Andrés David	No votó
Córdoba Manyoma Nilton	Sí
Daza Iguarán Juan Manuel	Sí
Deluque Zuleta Alfredo Rafael	Sí
Díaz Lozano Élbert	Sí
Estupiñán Calvache Hernán Gustavo	Sí
Goebertus Estrada Juanita María	Sí
González García Harry Giovanny	Sí
Hoyos García John Jairo	Sí
León León Buenaventura	Sí
López Jiménez José Daniel	No votó
Lorduy Maldonado César Augusto	Sí
Lozada Vargas Juan Carlos	Sí
Matiz Vargas Adriana Magali	Sí
Méndez Hernández Jorge	Sí
Navas Talero Carlos Germán	Sí
Padilla Orozco José Gustavo	Sí
Peinado Ramírez Julián	Sí
Prada Artunduaga Álvaro Hernán	Sí
Pulido Novoa David Ernesto	Sí
Restrepo Arango Margarita María	Sí
Reyes Kuri Juan Fernando	Sí
Rodríguez Contreras Jaime	Sí
Rodríguez Rodríguez Édward David	Sí
Sánchez León Óscar Hernán	No votó
Santos García Gabriel	Sí
Tamayo Marulanda Jorge Eliécer	Sí
Triana Quintero Julio César	Sí
Uscátegui Pastrana José Jaime	Sí
Vallejo Chujfi Gabriel Jaime	Sí
Vega Pérez Alejandro Alberto	Sí
Villamizar Meneses Óscar Leonardo	Sí
Wills Ospina Juan Carlos	Sí

El único que me ha dicho que tiene problemas de conectividad es el doctor Óscar Villamizar. Por videollamada: doctor Óscar, ¿cómo vota? Vota sí, aquí lo pueden ver todos que es el doctor Óscar, está votando sí al título y pregunta. Gracias, doctor Óscar. Señora Presidenta, puede usted cerrar la votación.

Presidente:

Querida Secretaria, cierre la votación y anuncie el resultado.

Secretaria:

Señora Presidenta, han votado treinta y tres (33) honorables Representantes, todos de manera

afirmativa, así que el título y pregunta han sido aprobados. Ponentes.

Presidente:

Amparito, vamos a asignar los siguientes ponentes para el segundo debate: el doctor Juan Carlos Lozada por el Partido Liberal, el doctor Buenaventura León por el Partido Conservador, el doctor Édward Rodríguez por el Centro Democrático, Erwin Arias por Cambio Radical, Juanita Goebertus por el Partido Verde, el doctor Germán Navas por el Polo, el doctor Albán por FARC y el doctor Burgos por el Partido de la U.

Secretaria:

Así se hará; el doctor Juan Carlos será el coordinador, ¿no doctora?

Presidente:

Sí, señora.

Secretaria:

Así se hará, señora Presidenta, y quedan notificados los doctores Juan Carlos Lozada, Buenaventura León, Édward Rodríguez, Erwin Arias, Juanita Goebertus, Germán Navas, Luis Alberto Albán y Jorge Burgos como ponentes para segundo debate de este proyecto de ley.

Preside la Sesión el honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas.

Presidente:

Siguiente punto, Secretaria.

Secretaria:

Siguiente punto, señora Presidenta, es el **Proyecto de ley número 302 de 2019 Cámara,** *por el cual se adoptan medidas de lucha contra el dopaje en el deporte*. Autores: el Ministro del Deporte, doctor *Ernesto Lucena Barrero,* y el honorable Representante *Mauricio Parodi Díaz*. Ponentes: Los honorables Representantes *Margarita María Restrepo* -C-, *Óscar Hernán Sánchez León* -C-, *Jorge Méndez Hernández, John Jairo Hoyos, Juan Carlos Wills* y *Luis Alberto Albán.* Proyecto publicado en la ***Gaceta del Congreso*** número 1135 de 2019. Ponencia para primer debate, publicada en la ***Gaceta del Congreso*** número 256 de 2020.

Ha sido leído el siguiente punto del orden del día, señor Presidente. Manifestar a usted y a los honorables Representantes que de este proyecto de ley acaba de llegar un concepto, es un concepto, señor Presidente, del Proyecto de ley número 302 de 2019 Cámara, *por el cual se adoptan medidas de lucha contra el dopaje en el deporte.* Lo manda el señor Ministro de Hacienda, el doctor Juan Alberto Londoño Martínez, Viceministro General. Ha llegado ahora en horas de la mañana, lo he enviado a los correos, ya pido que lo manden al tema de proposiciones si usted a bien lo tiene, Presidente. Leo la parte final.

Presidente:

Sí. Antes de continuar con el siguiente punto, simplemente agradecerles a todos mis compañeros por el apoyo que me han brindado en sacar este proyecto adelante y llevarlo a la Cámara de Representantes; agradecerle enormemente a la Vicepresidenta, Adriana Magali Matiz, por nombrarme Presidente en la comisión de ponentes; agradecerle al doctor Albán por el cachito que le tocó hoy presidir la sesión en la sesión, muchísimas gracias a los dos; muchas gracias, compañeros. Ahora sí continuemos con el orden del día, Secretaria. Entonces sírvase leer el documento al que hace referencia.

Secretaria:

Sí, señor Presidente. En la parte final dice el concepto del Ministerio de Hacienda: "Por todo lo expuesto, este Ministerio se abstiene de emitir concepto favorable sobre esta iniciativa desde el punto de vista presupuestal toda vez que no se cuenta con la proyección de los costos anuales que implicaría la aprobación de la presente iniciativa, los cuales no se encuentran explícitos en la exposición de motivos ni en el texto del articulado. En todo caso, se manifiesta la disposición de colaborar con la actividad legislativa dentro de los parámetros constitucionales y legales de disciplina fiscal vigente".

Cordial saludo,

Juan Alberto Londoño Martínez

Viceministro General.

Esa es la conclusión del concepto, señor Presidente. El concepto lo he enviado a los correos y también le pido a Esther que lo envíe al chat de proposiciones porque llegó ahorita en el transcurso de la sesión, señor Presidente, llegó este concepto. Por eso lo estoy mencionado y lo que corresponde, señor Presidente, sería leer la proposición con que termina el informe de ponencia.

Presidente:

Gracias, Secretaria. Secretaria, quiero pedirle el favor, me informan que el señor Ministro quiere ingresar a la sesión para intervenir sobre el proyecto, por favor autorizar al señor Ministro Lucena o mandarle el *link* para que pueda ingresar a la sesión puesto que este es un proyecto de autoría del Ministerio del Deporte y por supuesto que el Ministro quiere intervenir y aquí nosotros le damos la bienvenida muy cordial al Ministro Lucena. ¿Usted ya leyó el informe con que termina la ponencia, Secretaria?

Secretaria:

No, señor Presidente. Debo leerlo.

Presidente:

Lea el informe con el que termina la ponencia, doctora Amparo.

Secretaria:

Sí, señor Presidente. Leo la proposición con que termina el informe de ponencia.

Proposición

Considerando los argumentos expuestos, presentamos ponencia positiva y solicitar a los

honorables Representantes que integran la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dar primer debate al proyecto de ley número 302 de 2019 Cámara, *por el cual se adoptan medidas de lucha contra el dopaje en el deporte*. Firman los honorables Representantes *Margarita María Restrepo, Óscar Sánchez, Jorge Méndez, John Jairo Hoyos, Juan Carlos Wills* y *Luis Alberto Albán.* Ha sido leído el informe de la subcomisión, señor Presidente. Este proyecto consta de veintidós artículos incluida la vigencia.

Presidente:

Perfecto, pregunto si el señor Ministro ya está conectado a la plataforma. Entonces vamos a darle la palabra al coordinador ponente por espacio de quince minutos iniciales, Secretaria.

Secretaria:

La doctora Margarita es la ponente coordinadora, Margarita María Restrepo.

Presidente:

Doctora Margarita Restrepo, tiene la palabra por quince minutos.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Representante Margarita María Restrepo Arango:

Muchísimas gracias, Presidente. Bueno, quiero decirles que este es un proyecto de ley que tiene por objetivo establecer un marco legal que fortalezca la institucionalidad en la lucha contra el dopaje en el deporte. Hemos tenido incidentes muy desafortunados tanto a nivel internacional como nacional y se cuenta con unas normas que están dispuestas por la Agencia Mundial Antidopaje, entonces lo que el proyecto busca es la protección de la salud de los deportistas y propender por la legalidad y la transparencia del deporte. Teniendo en cuenta todo ese tema, todas esas normas de las que habla la Agencia Mundial Antidopaje, con la firma de este convenio, cuando Colombia firmó y luego ratificó su firma se produjo un cambio esencial en la lucha contra la conducta antideportiva, contra la conducta del dopaje en Colombia, y fue ampliado a un rango normativo nacional en la materia y es considerado hoy por hoy un grave riesgo para los bienes jurídicos protegidos, que en este caso son la salud de los deportistas, el juego limpio y la dimensión ética que este juego implica, que el deporte en sí implica.

Por todas estas razones y comparándolo con el Código Mundial Antidopaje con la legislación nacional, se ha visto la necesidad de modificar la Ley 49 de 1993 ya que la Convención atribuye a los Estados firmantes unos compromisos en materia de lucha contra el dopaje. Uno de sus compromisos es precisamente garantizar la eficiencia del Código Antidopaje; en esa misma línea, el proyecto acoge criterios claros que permiten que sea el Ministerio del Deporte como el representante del Estado en la lucha antidopaje dirigir todos los esfuerzos necesarios a garantizar a quienes tienen en sus manos la dimensión final de la materia. Estas personas, el Ministerio debe garantizar que sean personas idóneas, que sean personas independientes y que sean personas ágiles. Con este fin, el texto contempla la creación de un tribunal disciplinario antidopaje formado por dos salas; cada una de esas salas va a tener tres miembros, y de esos tres miembros dos van a ser personas formadas jurídicamente: dos abogados y uno va a ser un profesional de la salud especialista en medicina deportiva. ¿Quiénes los van a elegir? Los van a elegir a estos miembros de estas dos salas el Ministerio del Deporte, el Ministro del Deporte, el Presidente del Comité Olímpico y el Presidente del Comité Paralímpico.

Bueno, teniendo claro esto, nosotros dentro del texto inicial, al texto original le hicimos algunas modificaciones. En el artículo 9° de este texto se establecían aquí las inhabilidades para ser miembro del tribunal disciplinario antidopaje con el fin de garantizar independencia e idoneidad de los miembros de la corporación. Aquí se hablaba de la interdicción judicial, se hablaba de que no fueran personas que hubieran sido condenadas por delitos contra la administración judicial o que hayan sido privados por la libertad por cualquier tipo de delito, a excepción de los culposos y de los delitos políticos. Además, personas que se encontraran suspendidas en el ejercicio de su profesión o que hubieran sido excluidos de ella, ciudadanos que hubieran sido sancionados disciplinaria o administrativamente o fiscalmente. Los integrantes de órgano administrativo de control de comisiones de juzgamientos de otros deportistas, los médicos que presentaran servicios o que hubieran prestado servicios a deportistas federados dentro del año inmediatamente anterior a la selección al ingreso a estas salas o a este tribunal disciplinario antidopaje.

Entonces respecto a esto, aquí decidimos cambiar la ubicación de las causales de inhabilidad para el parágrafo del artículo 7° para poder respetar la unidad de materia dentro de los apartados del proyecto y además eliminamos el punto que establecía la causal de interdicción judicial porque acuérdense que esta fue derogada en el 2019 del ordenamiento jurídico nacional. Entonces eso, se tomó esa decisión de sacar la interdicción. También en el artículo 9° se estableció que los miembros del tribunal debían firmar un acuerdo de confidencialidad y conflicto de intereses y las formas de decidir sobre los impedimentos y las Recusaciones. Aquí esto también lo adicionamos, fue que decidimos modificar dos cosas, la primera fue que los miembros del tribunal por su labor jurisdiccional debían manifestar sus conflictos de intereses de acuerdo con lo establecido con la Ley 2013 del 2019, y lo segundo fue que los impedimentos y las recusaciones de los miembros de la sala, del resultar, se debían definir con el tribunal en pleno para poder agilizar el trámite.

También en el artículo 3º se estableció el procedimiento del tribunal cuando se presuma que hay infracciones contra las normas antidopaje. Aquí suprimimos los artículos 12, 13, 14 y 16 para

proponer nueve artículos nuevos, con los que se busca garantizar de manera efectiva el principio del debido proceso y la especificación de la fase de cada uno de los términos de los procesos legalmente establecidos para celebrar las respectivas audiencias, las prácticas de las pruebas y para propender también un artículo específico que se acoja como a los plazos descritos y a la acción disciplinaria. Este proyecto de ley es de suma importancia para Colombia porque busca dos cosas que son fundamentales: primero proteger la salud de los deportistas y segundo proteger y propender por la legalidad y la transparencia en el deporte, generando una cultura de juego limpio.

Nosotros, Colombia ha tenido el orgullo, la satisfacción de tener grandes glorias en el deporte; Colombia es reconocido por la eficiencia y por el gran rendimiento de muchos deportistas, incluso hay estudios que demuestran y que georreferencian de acuerdo al fenotipo y al genotipo de nuestros deportistas como unos superdeportistas, sobre todo en ciertos deportes, como es el basquetbol, como es el levantamiento de pesas, como es el atletismo, el ciclismo, nuestro deporte nacional, y resulta que en ocasiones incluso por hábitos que en algún momento fueron culturales hemos llegado a recibir o a ser amonestados o recibir llamamientos de atención; lo que no queremos es esto. Entonces esta ley va a garantizar que esos deportistas, que es un gran potencial que tiene Colombia, tengan un mejor rendimiento y además de eso nos va a permitir expandir lo que representa el deporte en realidad fomentando una cultura de legalidad.

Yo personalmente pienso que hay dos disciplinas que son esenciales para el ser humano, para uno facilitar o fomentar el crecimiento y el desarrollo de un buen ser humano. Una es el arte porque definitivamente el arte nos hace más sensibles, nos hace más humanos y más capaces de entender al otro, de ponernos en el zapato del otro, y el otro es el deporte porque el deporte nos da disciplina, nos da espíritu de competencia, de superación. Entonces yo sí creo que este proyecto de ley no solamente tiene grandes beneficios deportivos, sino que también tiene un gran beneficio social. Por eso le pido a esta Comisión que nos acompañe con el voto positivo a este proyecto de ley porque a mi manera de ver es un proyecto de ley muy necesario y es un proyecto de ley que es un gana-gana para todos los colombianos. Muchísimas gracias, Presidente.

Secretaria:

Señor Presidente, doctora Adriana, el doctor Juan Carlos no está, quiero avisarles a usted y a los demás integrantes que está conectado el señor Ministro del Deporte y la señora Viceministra, la doctora Lina Barrera, y el doctor Lucena están conectados en la plataforma para el trámite de este proyecto.

Sí, señor. ¿Doctora Adriana? ¿Señor Presidente? Representante Albán, ¿le podría dar usted la palabra al doctor Óscar Sánchez en su calidad de ponente coordinador de este proyecto? ¿Luis Alberto Albán? Ya llegó el Presidente. Presidente, ya está el doctor Óscar Sánchez, ponente coordinador también de este proyecto, por favor está pidiendo la palabra.

Presidente:

Claro que sí. Representante Óscar Hernán Sánchez León, tiene la palabra por quince minutos desde su morada en la bella Facatativá.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Óscar Hernán Sánchez León:

Gracias Presidente. Con los buenos días nuevamente, o tardes, ya a todos los compañeros, al señor Ministro y Viceministra del Deporte que nos acompaña y por supuesto Margarita, hizo toda la exposición de la parte normativa de este Proyecto de ley número 302, donde se adoptan las medidas de lucha contra el dopaje en el deporte. Por supuesto, en la elaboración de la ponencia y la importancia que tiene el proyecto para cada una de las disciplinas a nivel deportivo, pues se busca establecer ese marco normativo que hoy busca fortalecer la institucionalidad en la lucha contra el dopaje en el deporte.

Y, por supuesto, esto tiende a darle cumplimiento a las normas dispuestas en la Agencia Nacional de Antidopaje, que lo que busca, y lo ratifico, es la protección de la salud de los deportistas. Y por supuesto, proponer por la legalidad y la transparencia en el ámbito deportivo, el crear el Tribunal de Expertos Disciplinarios de Antidopaje, pues ese órgano es el encargado de juzgar y decidir las posibles infracciones descritas en el Código Mundial del Antidopaje vigente. ¿Qué creemos nosotros y que vemos la importancia del proyecto? Por supuesto, en primer lugar, darle cumplimiento a cuando Colombia aprobó la Convención Internacional contra el Dopaje del Deporte en el año 2008, es ratificar, al suscribirlo, ratifica, como bien lo manifestó la doctora Margarita, pues los compromisos internacionales en la lucha contra el dopaje, entre los que se encuentra el garantizar la eficacia del Código Mundial de Antidopaje y, por supuesto, la Ley 49 de 1993, por la cual se establece el régimen disciplinario del deporte y nos da las garantías a través de las disposiciones establecidas en dicho Código.

Este proyecto, además de adoptar el Código en materia de sanciones de aquellas sustancias prohibidas y procedimientos específicos empleados, por ello, es necesario, reiteramos la creación del tribunal en nuestro ordenamiento interno, el cual pues debe aplicar las disposiciones del Código Mundial de Deporte como anteriormente lo manifestaba, con lo cual Colombia, pues no cuenta en el momento. Yo creo que, es bien importante avanzar en esta herramienta jurídica en este Código, que es el documento central para armonizar las políticas, las normas, los reglamentos de antidopaje dentro de las organizaciones deportivas y dentro de las autoridades públicas, por supuesto, de todo el mundo donde rige a nivel internacional esta

Convención. Nos corresponde a través de este proyecto de ley, la creación de ese tribunal, acorde con el Código Mundial Antidopaje que trabaja en conjunto varias normas pues destinadas a lograr la armonización entre las organizaciones de antidopaje en las áreas técnicas, las sustancias prohibidas, las pruebas de investigación, los mismos laboratorios. Por supuesto, la protección de privacidad e información personal, cumplimiento con el Código por los signatarios y algo muy importante, es una exigencia que hoy tenemos a nivel de la Agencia Mundial del Dopaje.

Y tendremos también la oportunidad, de ser aprobado este proyecto de ley, pues también permite la recertificación del laboratorio de dopaje que existe en el país, el cual, en la auditoría realizada por la Agencia Mundial de Antidopaje, puntualizó en la necesidad de tener la norma que hoy estamos discutiendo. Ese laboratorio es uno de los mejores de la región y que permite pues darle muchísima más institucionalidad con esta norma, somos uno de los pocos países que en la región, en Latinoamérica tienen el laboratorio para hacer esta clase de pruebas. Por supuesto, también reconocidos a nivel internacional, el pasado 4 de junio la Organización Nacional de Antidopaje de Colombia (ONAD) recibió la certificación de la Agencia Nacional de Antidopaje, la cual destacó los esfuerzos que viene haciendo el Gobierno, para estar en los estándares internacionales y dar las garantías para la protección del deporte limpio. Nosotros consideramos, que esta herramienta jurídica que hoy se busca estructurar en este Código, que establece tres capítulos y que por supuesto busca que en cada uno de ellos se dé la reglamentación de dicho tribunal y de las funciones que debe cumplir, totalmente acordes con todo el proceso internacional para que seamos avalados y podamos tener esa herramienta al servicio del deporte del país.

Invitamos a los compañeros, creo que hay dos o tres proposiciones que fueron presentadas, los invitamos para que nos acojan este proyecto de ley que beneficia las disciplinas deportivas del país y que le da una institucionalidad a nivel internacional, permitiendo cada día por supuesto el bienestar en la salud de los deportistas y el juego limpio. En ese orden de ideas, señor Presidente, honorables Representantes, presentamos esta ponencia conjunta con la doctora Margarita, pidiéndoles a ustedes que nos den la oportunidad de avanzar a nivel del trámite legislativo de este proyecto. Mil gracias señor Presidente.

Presidente:

Representante Óscar Sánchez, ¿terminó su intervención?

Secretaria:

Sí señor.

Presidente:

Perfecto. ¿Está el señor Ministro en la plataforma?

Secretaria:

Sí señor, está el señor Ministro y la señora Viceministra, la doctora Lina. Presidente, los demás ponentes de este proyecto son el doctor Jorge Méndez, el doctor John Jairo, el doctor Juan Carlos Wills y Luis Alberto Albán. No sé si ellos han pedido la palabra en su calidad de ponentes.

Presidente:

Me han pedido la palabra los Representantes Buenaventura León León, solamente me ha pedido la palabra el Representante Buenaventura León, yo le voy a dar la... ¿El Representante Buenaventura es ponente o no?

Secretaria:

No señor.

Presidente:

Entonces, el Representante Buenaventura, que es un sabio, tiene mucha paciencia. Vamos a darle la palabra al señor Ministro y escucharemos después a los Congresistas que se inscriban, hasta el momento tengo solamente al Representante Buenaventura León. Ministro Lucena, bienvenido de nuevo a la Comisión Primera, para nosotros es un gusto tenerlo, tiene la palabra por quince minutos iniciales, Ministro.

La Presidencia concede el uso de la palabra al doctor Ernesto Lucena Barrero, Ministro del Deporte:

Muchas gracias Presidente Lozada, un abrazo para usted, para toda esta Comisión, para los ponentes. Decirles que siempre es grato poder compartir con ustedes los proyectos que tenemos en el Ministerio del Deporte y decir de antemano que me gusta mucho la exposición que ha hecho la doctora Margarita, la exposición que ha hecho el doctor Óscar, veo que han estudiado juiciosamente todos los antecedentes en el tema antidopaje y por qué la necesidad de este momento y de la aprobación por parte de esta Comisión de este proyecto de ley.

Yo quisiera decir lo siguiente, todos sabemos que Colombia es una potencia deportiva, ha sido una potencia deportiva y por eso nosotros nos hemos atrevido desde que llegamos a Coldeportes y hoy en ese tránsito a Ministerio, decir que Colombia es una tierra de atletas. Pero además hacer la siguiente reflexión, desde que llegamos, como bien lo decíamos, hemos tratado de recertificar ese laboratorio antidopaje, que es una de las partes fundamentales en esa lucha de la corrupción del deporte hoy. La corrupción del deporte se ve en muchas aristas, pero muchas pocas veces se le pone atención a la incidencia que tiene el dopaje en todo ese tejido social, desde que los niños y niñas se les incentiva a buscar el alto rendimiento. Y por eso quiero detenerme acá un segundo a hablar de la pedagogía que intrínsecamente empieza a hacer este tipo de proyectos de ley en la sociedad colombiana. Nosotros por un lado queremos fortalecer la ley penal, por otro lado queremos recertificar el laboratorio antidopaje y por supuesto también crear un tribunal

especial que evite los conflictos de interés que en otros países se han presentado en el pasado y sobre los cuales recae mucha de la responsabilidad de lo que hoy sucede en el mundo del dopaje.

El mundo del dopaje es un mundo oscuro, es un mundo complejo, es un mundo difícil que va llevando a los jóvenes que sienten que tienen esa necesidad de llegar al alto rendimiento, a ser campeones mundiales, medallistas olímpicos, a coger ese camino corto, como se dice en el argot popular, y ese camino corto que a veces…

Presidente:

Ministro, no se le escucharon los últimos dos minutos de su intervención, un minuto por favor. Así que retome por favor, Ministro.

Continúa con el uso de la palabra el doctor Ernesto Lucena Barrero, Ministro del Deporte:

Entonces, decía que estas personas que son las que pretendemos que se eduquen dentro del deporte, no pueden tener ese tipo de influencias, o no deben tenerlas y toda esta estructura que estamos organizando, lo que busca precisamente es eso, fortalecer el Sistema Nacional Antidopaje. Por otro lado, fortalecer también el laboratorio antidopaje, y aquí es muy importante que esta Comisión entienda que son dos plataformas aparte, independientes, pero que buscan al final un mismo objetivo y es, castigar fuertemente lo que produce el dopaje en una sociedad. Ustedes habrán visto lo que ha sucedido en Rusia hace muchos años y lo que eso llevó para los próximos juegos olímpicos, lo que ha sucedido en el ciclismo nacional.

El ciclismo nacional, es muy importante como disciplina deportiva, los logros que hemos conseguido, tal vez pocos deportes en el país han representado lo que ha hecho el ciclismo para nuestro país, pero tristemente hay que decir, también somos uno de los países con mayores casos de dopaje sobre el planeta en la disciplina del ciclismo. Por esa razón, crear un Tribunal Nacional Antidopaje siendo coherentes con toda la normatividad internacional, con todo lo que ha ratificado durante los últimos años Colombia, pues se vuelve perentorio y se vuelve importante. Un tribunal, repito, que además es importante porque va a permitir que no existan conflictos de interés dentro de las federaciones que hoy a su cargo tienen esas, de la mano de la Organización Nacional Antidopaje, esa estructura de vigilar a sus deportistas, y por eso este tribunal que, además, costo-beneficio, aquí hay que decirlo, costo-beneficio es muy importante para Colombia, porque no es un tribunal que le va a generar grandes costos al Ministerio.

Nosotros hemos previsto dentro de la parte económica del Ministerio, tener esos recursos allí, por eso el impacto fiscal no es mayor y sobre esa base tener un tribunal que permita tener los derroteros que necesita la Organización Nacional Antidopaje, y por otro lado también tomar las decisiones coherentes con un país que tiene por supuesto todas las alternativas deportivas para buscar un nuevo enfoque.

Y con esto cierro querido Presidente, esta pandemia nos ha enseñado varias cosas, y la primera de ellas es, que el deporte necesita buscar este enfoque social, ese enfoque pedagógico. Y qué bueno que un proyecto de estos, nos permita seguir siendo educadores en disciplinas deportivas, porque al final cuando uno ya tiene que llegar a un Tribunal Antidopaje, es porque seguramente alguna de sus acciones lo han llevado allí, pero estos tribunales al final también van a generar precedentes, precedentes jurídicos, precedentes técnicos que nos van a permitir seguir trabajando con la Organización Nacional Antidopaje, para llegar a todos esos niños y niñas de Colombia, a esos jóvenes para educarlos. El dopaje no se ataca cuando la persona es de alto rendimiento, el dopaje se arranca y se ataca desde casa.

Entonces, la invitación, muy respetuosa a esta Comisión que, además repito, aplaudo la manera como los ponentes han tomado en serio este caso para nuestro país, es que le den voto favorable y que nosotros podamos seguir durante todo este año consiguiendo las normatividades necesarias para el antidopaje en Colombia. Y repito, por un lado vamos bien por la recertificación del laboratorio, por los problemas del Covid será hasta el otro año que tengamos esa recertificación, pero también decirles que esa labor que han hecho todos los miembros de la Organización Nacional Antidopaje, hoy nos pone trabajando en equipo al Congreso de la República y al Ministerio, para poder sacar adelante este proyecto que es de suma importancia para nuestros deportistas, para nuestros entrenadores y que ese mensaje sea rotundo en cooperación conjunta entre nosotros. Muchísimas gracias señor Presidente.

Presidente:

Muchísimas gracias Ministro. Entonces, le voy a dar la palabra al Representante Buenaventura León, por cinco minutos.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Buenaventura León León:

Gracias señor Presidente. Yo celebro esta iniciativa, a su autor y por supuesto al señor Ministro, con un saludo muy fraternal a la Viceministra y excompañera nuestra del Congreso, a la doctora Lina, y también la exposición que ha hecho tanto la doctora Margarita como el doctor Óscar Sánchez, en calidad de coordinadores ponentes. Creo que el país estaba en mora de tramitar una iniciativa de este calado, de las medidas contra el dopaje en el deporte y este proyecto que busca establecer un marco legal para fortalecer la institucionalidad en la lucha contra el dopaje en el deporte acorde con la Agencia Mundial Antidopaje, tiene un enfoque que me parece que es el enfoque que se le debe dar, un enfoque de salud médico a los deportistas y de legalidad y transparencia como lo dijo la doctora Margarita.

Tengo un par de preguntas, este proyecto crea el Tribunal de Expertos Disciplinarios Antidopaje, encargados de juzgar y decidir sobre las infracciones al Código Mundial Antidopaje, que como lo acaba de expresar el Ministro, busca solucionar uno de los problemas que tenemos, en la actividad del deporte con ocasión de ese rótulo que tenemos que Colombia es uno de los países con más casos activos de dopaje. Pero insistir, en que la iniciativa no solamente debe ser, apreciado Óscar, sancionatoria, debemos ocuparnos de la parte preventiva. Es importante, Ministro, conocer cuál es la situación real del laboratorio para el contrato de dopaje que tiene Coldeportes u hoy el Ministerio del Deporte, entiendo que se encuentra suspendido, para mí es fundamental conocer eso en esta sesión.

Por supuesto que necesitamos de la ley, Colombia ratificó el convenio con la Unesco en tema de antidopaje, reconociendo el riesgo de salud, el juego limpio, la dimensión ética, que busca ante todo garantizar la eficacia del Código Antidopaje. Preguntas: dice que se crea un tribunal como un órgano independiente, yo quiero preguntarle tanto a los ponentes como al Ministro, ¿independiente de qué? O es un órgano más bien autónomo, si va a estar adscrito o no al Ministerio del Deporte, es decir, ¿cuál es su naturaleza? Y, por supuesto, entiendo lo del marco de su competencia que es solo por infracciones al Código, entiendo que habrá la doble instancia que me parece importante y su integración, tres miembros: dos abogados y un médico, se habla en el proyecto de ley escogidos por sorteo. ¿Pues cómo le va a hacer ese sorteo? Esa es otra de las preguntas, ese sorteo va a ser de una lista de elegibles, ¿cómo se va a construir esa lista de elegibles? Y esa escogencia entiendo, de acuerdo al proyecto es por cada cuatro años, escogidos en ese sorteo por el Presidente del Comité Olímpico y el Ministro del Deporte.

Entonces, con esos dos o tres interrogantes, pero, por supuesto, anunciar mi voto positivo y yo creo que este proyecto viene a complementar una iniciativa que ya habíamos aprobado también aquí en Comisión y que hizo eso curso en la Plenaria de la Cámara, donde se modificó el Código Penal frente al tema de antidopaje. Gracias Presidente.

Presidente:

Perdón, tenía el micrófono cerrado o abierto no sé, ¿me escucharon? Tiene la palabra el Representante Jorge Méndez. Muchas gracias Representante Buenaventura. Representante Jorge tiene la palabra por cinco minutos.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Jorge Méndez Hernández:

Gracias Presidente. ¿Me escucha Presidente?

Presidente:

Lo escucho, cinco minutos.

Continúa con el uso de la palabra el honorable Representante Jorge Méndez Hernández:

Gracias señor Presidente, le agradezco mucho al doctor Lucena y a nuestra Viceministra que se encuentran presentes en la sesión, un saludo a los coordinadores ponentes quienes han liderado este proyecto de manera realmente eficaz. Solamente solicitar a los compañeros el apoyo para el mismo, creo que ya han manifestado la importancia de este proyecto, en avanzar en la institucionalidad frente a esa lucha contra el dopaje. No es posible que hoy Colombia sea el país, no uno de los que más casos tiene, el país con más casos de dopaje en la Unión Ciclística Internacional, tenemos dieciocho casos, seguidos por Costa Rica con quince y en la sola Federación Colombiana tenemos veintiséis casos, lo cual nos pone a nosotros con cuarenta y dos ciclistas de alto rendimiento y con resultados positivos en dopaje, realmente no solo es vergonzoso, sino preocupante, por el mensaje que se manda a las nuevas generaciones.

Por eso, es fundamental que sigamos avanzando, y con este proyecto, sé que con la creación del tribunal y la organización se avanza mucho en la institucionalidad y en la lucha contra este flagelo que llamamos el dopaje. También, es importante que sea recibido ya el concepto de, Ministerio de Hacienda favorable para este proyecto como lo habían solicitado y pedirle a los coordinadores ponentes que nos sentemos nuevamente a revisar una propuesta que habíamos presentado para la próxima ponencia y es, lo que tiene que ver con una acción adicional a quienes resulten positivos en las pruebas de antidopaje y es, que precisamente muchas de estas personas truncan las oportunidades a la cual aspiran otros jóvenes o deportistas de alto rendimiento, porque los cupos son limitados y reciben unos recursos, unos auxilios importantes por parte del Estado para su formación y terminan tirándolos a la borda, por iniciar prácticas de dopaje.

¿Qué sucede con estos recursos que estas personas han recibido y que le han impedido a otros poder acceder a ellos? Creo que sería importante que hubiese un tipo de sanción en la devolución de estos recursos, para poder seguir financiando a deportistas que realmente se están esforzando por salir adelante en esto. Creo que, nos parece muy importante esta conformación del tribunal, y sobre todo la doble instancia, porque va de la mano con la Constitución de nuestro país y que permite precisamente que haya un juzgamiento y una decisión de manera transparente y objetiva, y es precisamente que quienes efectivamente cometen estos actos, sean sancionados y los que de pronto por condiciones de biogenética tengan alguna situación particular, pueda ser este analizado por este tribunal y permita que pueda ser exonerado en el caso que no lo tengan. Pero lo más importante de este proyecto, es que estamos avanzando en esa lucha contra el dopaje y que ojalá podamos salir pronto de esa deshonrosa lista en la que nos encontramos como el país con más casos de dopaje en el mundo, especialmente en

el ciclismo, que es un deporte que otrora ha brindado grandes glorias a nuestro país, grandes felicidades y hoy está manchado precisamente por personas que creen que por el camino fácil del dopaje se puede llegar más rápido.

Entonces, solamente pedirles el acompañamiento para este proyecto a todos los miembros de esta Comisión y felicitar al Ministro, a mi compañero de partido, Cambio Radical, el doctor Parodi, quien es coautor de este proyecto y a los ponentes por la magistral exposición que hicieron del mismo. Muchas gracias señor Presidente.

Presidente:

Muchas gracias Representante Jorge Méndez, por su excelente intervención, simplemente decir que, el ciclismo no es de otrora, ¡por Dios¡, acabamos de ganar hace poco el Tour de Francia por primera vez, doctor Méndez, estamos en plena actualidad del ciclismo colombiano. Tiene la palabra la doctora Adriana Magali Matiz.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Representante Adriana Magali Matiz Vargas:

Gracias Presidente. Un saludo muy especial al señor Ministro, por supuesto a nuestra Viceministra, la doctora Lina, quien ha estado muy atenta de este proyecto. Yo simplemente tengo dos cositas para decir, una sin duda alguna considero supremamente importante esta iniciativa a través de la cual se crea el Tribunal Disciplinario Antidopaje, como quiera que, si bien hoy los organismos deportivos cuentan con comisiones disciplinarias, pues resulta necesario crear un organismo autónomo, un organismo que tenga no solamente los conocimientos jurídicos, sino también los conocimientos técnicos en este campo específico del dopaje en el deporte, como quiera que con ello pues obviamente se va a entrar a garantizar la idoneidad de quienes van a realizar esa función de juzgamiento.

Pero tengo una pregunta en relación al inciso 1º del artículo 3º, mi pregunta es en el siguiente sentido, en ese inciso del artículo 3º se dispone que el Ministerio contará con una Organización Nacional Antidopaje, a la cual se le van a asignar unas funciones, no obstante, se desconoce quiénes son los que van a integrar esa Organización Nacional Antidopaje y hago esa pregunta, en razón a que si bien es cierto a través del Decreto 1085 del año 2015, se dispuso que Coldeportes sería la entidad reconocida por la Agencia Mundial Antidopaje, como la Organización Antidopaje de Colombia y con la expedición de la Ley 1967 de 2019 que nosotros sacamos en el Congreso para crear el Ministerio del Deporte, pues se pasan esas funciones al Ministerio. Considero que es importante que se precise la naturaleza de, hoy quién va a liderar la Organización Antidopaje de Colombia, porque el inciso genera confusión, al señalar que el Ministerio contará con una Organización Nacional Antidopaje, como si la misma tuviera que ser creada.

Entonces, yo sí quisiera saber si es que tiene que ser creada o cómo va a funcionar el tema de la Organización Antidopaje en Colombia. Y en segundo lugar, quisiera hacer una pregunta relacionada precisamente con el concepto que dan del Ministerio de Hacienda, que lo acabo de mirar y ahí el Ministerio de Hacienda dice, que no se ha indicado los recursos que se requieren obviamente para que entre a funcionar el tribunal. Es decir, de dónde van a salir los recursos para cubrir esos gastos de salarios de los magistrados y del personal de apoyo que se requiere. Yo sé que todavía tenemos tiempo para tener ese concepto, pero sería muy importante que existiera claridad en torno a ese tema, para cuando vayamos a llevar este Proyecto tan importante a la Plenaria de la Cámara de Representantes.

Simplemente esas dos preguntas, decir, que sin duda alguna apoyaremos esta iniciativa tan importante para el deporte y sobre todo que se van a brindar muchísimas garantías en esa etapa de juzgamiento que se va a realizar. Gracias Presidente.

Presidente:

Muchísimas gracias querida Vicepresidenta Adriana Magali Matiz. Tiene la palabra el maestro, gran maestro de nuestra Comisión, el doctor Germán Navas Talero. Querido Germán, cinco minutos para su intervención, maestro.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Carlos Germán Navas Talero:

No hay necesidad de que sea tan largo y no me gusta hablar largo, yo tengo capacidad de síntesis. Mire, yo he visto que ustedes proponen la creación de un tribunal compuesto por un médico y dos abogados. Yo me pregunto y ¿por qué no incluyen ahí en vez de dos abogados, un psicólogo, un médico y un abogado? Porque si hay quien puede entender unos fenómenos que se presentan a veces en la necesidad de un dopaje, pues puede ser un psicólogo, me gustaría a mí, yo no soy ni médico, ni soy psicólogo, soy simplemente abogado, pero creo que quedaría mejor conformado ahí.

Porque le quiero contar al doctor Lozada, el doping que he usado en mi vida es el aguardiente y cuando llevábamos en un rally a las 3:00 de la mañana por allá en un páramo después de, eran rallys de quince horas, uno sí sacaba su cantimplora y se metía sus aguardienticos pal´ frio. Obviamente, lo estoy contando ahora porque cualquier falta ya prescribió. Pero imagínese usted metido dentro de un carro 3:00 de la mañana viniendo por allá de Cúcuta, muerto de frío en el páramo ese, pues un aguardientico no caía mal, no era por doping, era para el frío. Hasta luego.

Presidente:

Muchas gracias Representante Germán Navas, y si bien en la bella Isla de San Andrés, no hace frío, me parece que al doctor Jorge Méndez le ha caído en gracia eso de unos guaritos después de la actividad deportiva. No tengo más inscritos para intervenir. ¿Alguien me está hablando?

Secretaria:

Señor Presidente y honorables Representantes, acabamos de ser notificados señor Presidente y honorables Representantes de la Resolución número 0950 del 2020, junio 11 del 2020, tiene fecha de ayer, pero la recibimos ahorita en la cual la Mesa Directiva nos notifica de la nueva integración de la doctora Ángela María Robledo, ya me he comunicado con la doctora Ángela María Robledo señor Presidente, ella ya está en la plataforma.

Entonces para que usted y los integrantes de la Comisión sepan, yo creería que la doctora Ángela María quiere hacer alguna intervención, señor Presidente.

Presidente:

Muchísimas gracias doctora Amparo Yaneth Calderón. Doctora Ángela María Robledo, bienvenida a la Comisión Primera de nuevo. Nos da mucho gusto tenerla aquí de vuelta, nos complace muchísimo que su litigio en el Consejo de Estado haya salido a su favor y que usted pueda regresar a la Corporación, la hemos extrañado y desgraciadamente vuelve usted al final de la Legislatura en la que me correspondió a mí la Presidencia, así que no tuve el honor y el gusto de darle sus múltiples mociones de orden, la palabra para sus intervenciones.

Pero estamos realmente muy contentos por su regreso y si usted quiere expresar aquí unas palabras, sus primeras palabras de regreso, doctora Ángela María Robledo, bienvenida. Tiene la palabra doctora Ángela María Robledo.

Secretaria:

Qué pena señor Presidente, pero me está escribiendo la doctora Ángela María, me está diciendo que se conectó, se le cayó la señal, que va a volver a intentar conectarse.

Presidente:

Doctora Amparo Yaneth Calderón, ya la vemos a la doctora Ángela María Robledo, se ve que está desde un celular, ahí la vemos mucho mejor doctora Ángela María Robledo, aquí nosotros que llevamos ya varios meses en la virtualidad, tenemos más cancha a la hora de cuadrar la cámara, a usted le va a tocar hacer un curso rápido. Doctora Ángela María Robledo, bienvenida de nuevo a su Comisión Primera, tiene la palabra para reintegrarse a la Comisión. Debe abrir el micrófono doctora Ángela María, no se preocupe, tenemos la paciencia mientras usted aprende a manejar esta plataforma.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Representante Ángela María Robledo Gómez:

Bueno, gracias, gracias Presidente. Bueno, me acaban de notificar, quince meses de lucha jurídica, claramente quedó establecido que Carlos Cuenca me debió haber posesionado el 10 de marzo cuando mi tutela fue amparada, pero, bueno, esto ha sido un debate, una tensión y un trabajo bastante fuerte, pero estoy muy contenta de regresar. Les digo que, pues acabo de ser notificada, me acaba de llegar el Orden del Día, entonces hablaba con Amparo que, pues estaré muy atenta ya para más adelante, para poder participar en los debates y en todo esto y decirles que me alegra mucho regresar al Congreso y pues regresar a representar estos ocho millones cien mil votos de la Colombia Humana y decir también que creo que es un fallo muy bonito, porque se reconoce la integralidad y el espíritu de esa curul de la paz, de esa curul de la Oposición.

Entonces, eso era lo que quería decir estimado Presidente Juan Carlos, un saludo a los compañeros y las compañeras de la Comisión Primera y no sé si va haber sesión mañana para estar muy atenta o cómo vamos de nuevo ya a vincularnos a esta tarea como dices tú, me tocará aprender. Yo me he vuelto una experta en Zoom, en Instagram, en Facebook, en muchas, este Meet no lo había explorado, pero hemos tenido que aprender y ha sido también un aprendizaje bien interesante.

Presidente:

Doctora Ángela María Robledo, empezó usted abriendo un debate sanguinario en esta Comisión sobre sí debemos o no sesionar mañana, creo que usted puede ver por la seriedad con que han mirado los compañeros, mire hasta Germán me está haciendo mala cara, eso no sucede casi nunca. Pero la verdad doctora Ángela María que han sido extenuantes las jornadas de trabajo a través de la virtualidad, porque estamos sesionando ya no dos veces a la semana como solía hacerse antes de que usted se fuera del Congreso, si no que estamos sesionando prácticamente cinco días a la semana.

Hubo una semana que sesionamos seis días de lunes a sábado y las jornadas son hasta las 12:00 de la noche todos los días, ya usted se irá acostumbrando así sea, para las últimas sesiones de la Corporación. Lo que tengo pensado es, o citamos mañana y no citamos el lunes, o citamos el lunes y no citamos mañana. El lunes es festivo también es impajaritable que citemos durante este fin de semana porque la Plenaria se tomará el resto de los días que nos quedan de sesiones ordinarias, a partir del martes a las 2:00 de la tarde y todavía tenemos aquí bastantes iniciativas y además un debate de control político pendiente. Entonces, abre usted un debate interesante que cerraremos al final de la sesión. Bienvenida doctora Ángela María Robledo.

Continuamos con el debate, entonces, ¿ya somos treinta y ocho Representantes a la Cámara doctora Amparo Yaneth Calderón? Somos treinta y ocho ahora con la doctora Ángela María, ¿no? Bueno, a mí me da lástima que la doctora Ángela María se haya perdido toda mi Presidencia, porque la verdad, qué bueno tuvimos muchas dificultades aquí con esto de la virtualidad, pero esta Comisión Primera, doctora Ángela María, dio el ejemplo de responsabilidad con el país. Fuimos los primeros en hacer sesiones informales virtuales, fuimos los primeros en hacer una sesión formal virtual, fuimos los primeros en hacer debates de control político formales, fuimos los primeros en votar proyectos de ley y de acto

legislativo que además le impusieron de alguna manera una agenda al Congreso de la República.

Así que, yo me siento muy orgulloso de haber podido estar aquí en esta Mesa Directiva con Adriana Magali Matiz, con una Comisión Primera que le dio ejemplo a Colombia durante estos meses de tanta dificultad que ha tenido el Congreso de la República. Entonces, ya no tengo a nadie más que me haya solicitado la palabra, razón por la cual le voy a dar de nuevo la palabra, bien sea al Ministro o a los ponentes como quieran responder a las inquietudes que aquí han planteado el doctor Buenaventura, la doctora Adriana Magali Matiz, el doctor Méndez y los demás intervinientes en el debate. Así que no sé, Ministro, si usted quiera responder a las preguntas, no sé si lo quieran hacer coordinadores ponentes, ¿por favor díganme quién quiere intervenir?

Doctor Ernesto Lucena Barrero, Ministro del Deporte:

Presidente buenas tardes, si me permite tres comentarios.

Presidente:

Tiene la palabra Ministro. Tiene el micrófono cerrado, Ministro, por favor abrirlo y tiene usted diez minutos iniciales para hacer su intervención.

La Presidencia concede el uso de la palabra al doctor Ernesto Lucena Barrero, Ministro del Deporte:

Gracias Presidente. Dándole la bienvenida también a la doctora Robledo, nuevamente a su Comisión. Quisiera hacer unas observaciones sobre cuestiones muy puntuales, el primero es sobre lo que decía el Representante Buenaventura León, creo que el laboratorio y contar rápidamente qué hemos hecho. Cuando llegamos nosotros a Coldeportes, se había tomado la decisión, digamos de no invertirle, lo que necesitaba en su momento dicho laboratorio y por esa razón fuimos descertificados.

Cuando llegamos a dirigir Coldeportes, yo como deportista que fui en su momento de alto rendimiento y habiendo pasado por muchas pruebas antidopaje, entendí la necesidad de que esto fuera recertificado, no es un proceso fácil, es un proceso que ya lleva más de dos años y quiero contarle la noticia doctor Buenaventura, yo creo que íbamos a ser recertificados en julio, máximo agosto de este año, desafortunadamente por el tema del Covid-19 se presentaron dificultades para que nos siguieran haciendo los exámenes y las veedurías que necesitaba la WADA, la Asociación Mundial Antidopaje sobre laboratorio, y fueron postergadas para finales de este año e inicios del otro, pero aspiro positivamente a que ese laboratorio sea recertificado muy pronto y esa será una gran noticia para Colombia. El Ministerio ha impuesto los recursos que se necesitan para volverlo a tener y sobre esa base tener ese laboratorio nuevamente, que tanto beneficio le da, no solo a nuestros deportistas sino también a la investigación científica en el deporte y en las sustancias prohibidas.

Así que, ahí vamos por buen camino, lastimosamente por el tema del Covid se han aplazado los exámenes que se han hecho para el laboratorio, pero le quiero contar que vamos por buen camino. Frente al tribunal, el tribunal es un ente independiente, el tribunal es un ente que además, como lo dice el Código Mundial Antidopaje, tiene que estar ajeno a esos conflictos de interés que se puedan generar dentro de las federaciones, porque muchas veces se es juez y parte cuando uno como Presidente de Federación tiene que mirar el caso de uno de sus deportistas. Entonces, en buen momento esos tribunales se crean para que personas exógenas, personas ajenas a ese, perdóneme la expresión, *intríngulis* del deporte, puedan dar las sanciones en su momento que se necesitan y esto lo uno un poco también a la pregunta del doctor Méndez y es la siguiente, claro que sí, el tribunal hace parte del Sistema Nacional del Deporte, hace parte del Ministerio como tal y, por supuesto, y eso lo uno también con la intervención de la doctora Adriana Magali, y es que, claro, los recursos serán parte del presupuesto del Ministerio.

Nosotros hemos mirado con el doctor Orlando Reyes, que esa podrá ser una cifra alrededor de los ciento cincuenta a doscientos millones de pesos al año lo que le cuesta ese tribunal al Ministerio. Y por otro lado, la Organización Mundial Antidopaje, es un órgano que ya existe, que depende directamente del Ministro y por eso repito, el doctor Orlando Reyes, que está también en esta sesión acompañándonos, es el Director hoy de esa Organización Nacional Antidopaje con un grupo disciplinario y con un grupo interno de trabajo muy interesante, donde está la doctora Isabel Cristina y muchos miembros más, que llevan años trabajando en esto. Entonces, para tranquilidad doctora Adriana Magali, eso ya existe, viene funcionando, quiero aprovechar para felicitarlos a ellos acá ,frente a ustedes, por toda la capacitación que hacen a nivel nacional, y eso es parte de lo que hemos dicho, no es solo la sanción, también es la parte pedagógica.

Estoy de acuerdo con una de las proposiciones que me han hecho llegar en los últimos minutos y es que deberíamos tener una convocatoria pública, por supuesto para que esos cargos fueran nombrados y por supuesto que sean las personas idóneas, tanto en derecho como en medicina, y aquí lo uno con lo del doctor Germán Navas, y me parece interesante por qué no, que esa persona también tenga un perfil de psicología del deporte, porque al final hemos trabajado muchísimo, incluso el doctor Lozada, Presidente de esta Comisión, lo sabe, he venido trabajando muchísimo en lo que tiene que ver con la parte del cerebro y la actuación de los deportistas de alto rendimiento frente a este tipo de conductas. Así que es una proposición que puede, o por lo menos una iniciativa que puede ser bien recibida y por supuesto, que hagamos una convocatoria pública muy seria para que las personas que sepan de estas materias puedan llegar.

Y decía el doctor Méndez, algo importante sobre lo cual habría que reflexionar en esta Comisión, sobre la devolución de los recursos de los deportistas cuando son encontrados con temas de dopaje. Es difícil poder, yo como Ministro, hoy dar una explicación certera, tenemos un caso muy reciente, el caso de tres pesistas colombianos que fueron encontrados con analítico adverso. Analítico adverso, es un positivo de dopaje y eso inmediatamente genera la suspensión de ellos frente a lo que tenemos nosotros conocido como la resolución atleta excelencia, esa resolución atleta excelencia es la que les da a ellos unos recursos mensuales, para poder subsistir. Hay deportes, quisiera decirlo y ustedes saben que esto se maneja como en todas las disciplinas deportivas, donde de pronto quitarle esos recursos, al deportista no lo afecta tanto, pero hay otras disciplinas deportivas, donde quitar estos recursos es casi quitarle el sustento diario a una familia. Entonces, es muy importante esa observación doctor Méndez, porque también existe una ponderación al interior de cada disciplina deportiva, no se puede comparar por ejemplo, las pesas con el tenis o las pesas con el ciclismo, hay deportes definitivamente donde uno podría pensar que la persona si se le quitan esos recursos lo que está haciéndole es más gravosa su situación y sí los tiene que devolver, seguramente no tendrá con qué hacerlo.

Entonces, es buena la reflexión, pero también dejarlo en el aire que lo pensemos muy bien, cuáles podrían ser esas sanciones pecuniarias para los atletas, si es que vamos a pensar más adelante en tenerlas. Me decían también y quiero cerrar con esto, este proyecto de ley más allá del eje sancionatorio y vuelvo a lo que decía el doctor Buenaventura León, tenemos que llevarlo a ser un eje pedagógico en Colombia. Yo llevo un año y medio como Director de Coldeportes y menos de ocho meses como Ministro y les puedo ratificar a ustedes, que Colombia tiene un talento impresionante, pero ese talento tiene que ir acompañado de pedagogía. Pedagogía frente a la lucha contra el dopaje, el dopaje es el camino corto, una frase que he acuñado es: *"Da el éxito por un día, pero el fracaso para toda la vida"*, y si nosotros somos coherentes, somos vehementes con atacar la lucha antidopaje aprobando este estilo de proyectos, estoy seguro de que vamos a tener muchos y muchos niños y niñas de Colombia, que van a querer estar y que seguramente nos van a dar grandes triunfos.

Así que, yo creo que por ahí vamos muy bien y en buen camino y decirle al doctor Germán Navas, que no se preocupe que el aguardiente no es una sustancia prohibida y que esas acciones ya quedaron prescritas.

Presidente:

Esa, sí que es una excelente noticia para casi todos los deportistas de nuestra Comisión, doctor Alejandro Vega que el güarito no está en la lista de dopaje doctor Buenaventura León y doctor Jaime Rodríguez, profesionales de antaño de ese viejo deporte colombiano de empinar el codo, un abrazo para ustedes. Yo fui campeón de eso también hace unos años y afortunadamente ya estoy dedicado a otros deportes. Perfecto, entonces, no habiendo más intervenciones, si a bien lo tienen el doctor Óscar Sánchez y la doctora Margarita Restrepo, o si ellos quisieran intervenir me lo manifiestan, si no procederemos a votar en informe de la ponencia. Secretaria Amparo Yaneth Calderón, llame a lista para votar el informe con que termina la ponencia.

Secretaria:

Sí señor Presidente. Señor Presidente, tengo entendido que la doctora Ángela María manifestó que no iba a participar de la votación hoy, ¿o la debo llamar a ella para votar?

Presidente:

Es como ella prefiera, Secretaria, pero estando ella en la Comisión tiene por supuesto el derecho al voto. Así que usted la puede llamar a lista, si ella no quiere participar es absolutamente comprensible, pero estando ya en la Comisión de manera formal debe usted llamarla a la lista.

Llame a lista Secretaria para votar.

Secretaria:

Sí señor Presidente. Llamo a lista para la votación de la proposición con que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley número 302 del 2019 Cámara.

Honorables Representantes:

Albán Urbano Luis Alberto	Sí
Arias Betancur Erwin	Sí
Asprilla Reyes Inti Raúl	Sí
Burgos Lugo Jorge Enrique	Sí
Calle Aguas Andrés David	Sí
Córdoba Manyoma Nilton	Sí
Daza Iguarán Juan Manuel	Sí
Deluque Zuleta Alfredo Rafael	Sí
Díaz Lozano Élbert	Sí
Estupiñán Calvache Hernán Gustavo	Sí
Goebertus Estrada Juanita María	Sí
González García Harry Giovanny	Sí
Hoyos García John Jairo	Sí
León León Buenaventura	Sí
López Jiménez José Daniel	No votó
Lorduy Maldonado César Augusto	Sí
Lozada Vargas Juan Carlos	Sí
Matiz Vargas Adriana Magali	Sí
Méndez Hernández Jorge	Sí
Navas Talero Carlos Germán	Sí
Padilla Orozco Jose Gustavo	Sí
Peinado Ramírez Julián	Sí
Prada Artunduaga Álvaro Hernán	Sí
Pulido Novoa David Ernesto	Sí
Restrepo Arango Margarita María	Sí
Reyes Kuri Juan Fernando	Sí
Robledo Gómez Ángela María	No votó
Rodríguez Contreras Jaime	Sí
Rodríguez Rodríguez Édward David	Sí
Sánchez León Óscar Hernán	Sí
Santos García Gabriel	Sí
Tamayo Marulanda Jorge Eliécer	Sí
Triana Quintero Julio César	No votó
Uscátegui Pastrana José Jaime	Sí

Vallejo Chujfi Gabriel Jaime	Sí
Vega Pérez Alejandro Alberto	Sí
Villamizar Meneses Óscar Leonardo	Sí
Wills Ospina Juan Carlos	Sí

Honorable Representante Ángela María Robledo Gómez:

No puedo votar porque no conozco el proyecto, que quede la constancia por favor. No conozco el proyecto porque no estaba en el Congreso, me acaban de reintegrar.

Secretaria:

Aquí queda la constancia doctora Ángela María.

Presidente, usted puede cerrar la votación.

Presidente:

Estaba esperando al doctor Prada, Amparito. Doctora Amparo Yaneth Calderón, se cierra la votación, anuncie el resultado.

Secretaria:

Señor Presidente, han votado treinta y cinco (35) honorables Representantes, todos de manera afirmativa, en consecuencia la proposición con que termina el informe de ponencia ha sido **aprobada**. Articulado.

Presidente:

Sí doctora Amparo Yaneth Calderón, entonces, vamos a pasar a la discusión del articulado. Sírvase, Secretaria decirnos cuántos artículos tiene el proyecto, cuántos de ellos y cuántas proposiciones tienen los artículos, para ir avanzando en la votación doctora Amparo Yaneth Calderón.

Secretaria:

Señor Presidente, está pidiendo la palabra el doctor Óscar Sánchez, ponente coordinador.

Presidente:

El Representante Óscar Sánchez, ¿quiere la palabra?

Secretaria:

No doctor, era un mensaje.

Presidente:

Representante Óscar Sánchez, tiene la palabra por dos minutos.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Óscar Hernán Sánchez León:

Simplemente, tengo conocimiento que se han radicado cuatro proposiciones, una proposición en cabeza del doctor Daniel, que manifiesta el tema de equidad de género dentro de la terna o las tres personas que conforman el comité. También el doctor Tamayo, manifiesta sobre en unos apartes del artículo 7º se habla de la convocatoria pública y posteriormente le da esas facultades al Comité, por supuesto tendremos que entrar a revisar técnicamente en ese proyecto. El doctor Vallejo, también presentó proposición, dos de ellas pues son de redacción o de forma, una es del tema si es concurso público o es convocatoria, que también tenemos que buscar el acercamiento y que ustedes me lo permiten con las personas que están liderando el tema desde el Ministerio.

Yo quería era tomar la palabra, no he podido hablar con la doctora Margarita, pero me está escuchando, sí les pedimos a ustedes honorables Representantes pudiéramos dejar como constancias esas proposiciones con el compromiso nuestro y, por supuesto, escucharé a la doctora Margarita, de tenerlas para el informe de ponencia para Plenaria y poder darle trámite al proyecto. En vista de que es un proyecto netamente técnico en la parte deportiva y sí buscar ese fortalecimiento con las proposiciones que ustedes han presentado y poderlo mejorar. Era en ese sentido señor Presidente, con el mayor respeto y cordial saludo los compañeros que han presentado proposición.

Presidente:

Se le escucha muy mal doctora Amparo Yaneth Calderón, se le entrecortó totalmente su intervención doctora Amparo Yaneth, por favor vuelva a repetirla.

Secretaria:

Señor Presidente y honorables Representantes, especialmente el doctor Óscar y doctora Margarita. Vea, este proyecto tiene proposición del doctor José Daniel, del doctor Tamayo y del doctor Gabriel Vallejo al artículo 7º, del doctor Alfredo Deluque al artículo 7º, y hay proposiciones del doctor Gabriel Vallejo al artículo 9º y al artículo 19, y me están diciendo que está radicando otra proposición el doctor Deluque, para que lo tengan claro que no solamente doctor Óscar, el doctor Vallejo también tiene proposiciones a este proyecto.

Presidente:

Vamos a darle la palabra a la coordinadora ponente, la doctora Margarita Restrepo. Tiene la palabra por dos minutos doctora Margarita.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Representante Margarita María Restrepo Arango:

Muchísimas gracias Presidente. Yo había hablado, había chateado con el doctor Óscar, porque tenía conocimiento de dos proposiciones que eran dirigidas al artículo 7° para que las aprobáramos, él está de acuerdo como lo acaba de expresar. Pero, entonces sí tendríamos que ver las otras proposiciones que se han radicado o si nuestros compañeros están dispuestos a dejarlas como constancias. Pero lo que se ha hablado aquí yo pienso que hay un consenso generalizado del proyecto y los aportes que se hicieron a través de proposiciones o que hizo el doctor Navas Talero, pues son sumamente valiosos.

Presidente:

Muchísimas gracias doctora Margarita Restrepo. Entonces, a lo que voy a proceder querida Secretaria Amparo Yaneth Calderón, es a preguntarle a los Representantes que han presentado proposiciones, si las dejan como constancia, como lo piden los coordinadores ponentes. El doctor Vallejo, ha

manifestado en el chat que deja sus proposiciones como constancia, pero que quieren que estas sean leídas, a eso procederá por supuesto la doctora Amparo Yaneth Calderón.

Le pregunto entonces al doctor Deluque, si quiere dejar sus proposiciones como constancia. Me pide la palabra el Representante José Daniel López, quien es autor de proposiciones, por eso tiene la palabra por dos minutos. Representante José Daniel López.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante José Daniel López Jiménez:

Gracias querido Presidente. Primero dejo constancia de que me reintegro, saludo el regreso de la doctora Ángela María Robledo, sé que tendremos coincidencias, seguramente más discrepancias que coincidencias, pero yo creo que de ella aprendemos todos los días y es una ganancia enorme para la Comisión Primera de la Cámara tenerla de vuelta, enhorabuena y bienvenida doctora Ángela María.

Presidente, aterrizo al tema, me excuso porque hasta ahora me reintegro, razón por la cual no pude votar el informe de ponencia de este proyecto de ley, celebro que haya sido aprobado el informe de ponencia, creo que es apenas natural que la creación del Ministerio del Deporte aprobada en esta Comisión, idea que surge en el Gobierno pasado y que acertadamente este Gobierno decide continuar y llevar a feliz término, pues es apenas natural que la creación de este Ministerio sea seguida por el desarrollo de un diseño institucional mucho más robusto y mucho más complejo en el buen sentido, para tratar temas prioritarios como es el de la lucha contra el dopaje. Así que, respaldo este proyecto de ley y simplemente lo que quisiera es mejorarlo, incluyendo enfoque de género en la composición de las salas del tribunal disciplinario, cada una de esas salas tiene tres integrantes para un total de seis integrantes, lo que nosotros planteamos en esta proposición, es que de esos tres integrantes que hay en cada sala, al menos haya uno de cada género.

Aunque en el deporte hay machismo, sin duda el deporte es terreno fértil para la participación de mujeres y de hombres, muchas de las grandes glorias deportivas de este país son mujeres, muchos de los participantes en términos estadísticos de los procesos formativos son mujeres, entrenadoras y pues esa visión de equidad de género debe verse reflejada en la composición del tribunal y es en ese sentido que le diría al señor Ministro y a los coordinadores ponentes, que va mi proposición. He hablado con el doctor Óscar Sánchez, quien me ha pedido dejar la proposición como constancia, con el compromiso de incluirla en el segundo debate en unos términos que me explica el doctor Óscar, sean acordes digamos a cómo piensan redactar la ponencia para segundo debate, no tengo ningún inconveniente en dejarla como constancia para facilitar el trámite del proyecto de ley en cuya conveniencia, como ya dije, creo firmemente, pero sí insistiría en que entiendo como un compromiso, y por favor, si no es así, que la doctora Margarita o el doctor Óscar lo manifiesten que a partir del segundo debate, el tribunal disciplinario y sus dos salas tendrán al menos la composición de una persona de cada género.

Ese es el sentido la proposición, Presidente, aceptando la invitación del doctor Óscar Sánchez, la cual agradezco, la dejo como constancia, bajo la claridad del compromiso que acá he expresado públicamente. Muchas gracias.

Presidente:

Muchísimas gracias Representante José Daniel López, manifiesta dejar sus proposiciones como constancia. Así que, las proposiciones del Representante López y del Representante Vallejo quedan como constancia.

Pide la palabra el Representante Jaime Rodríguez Contreras. Representante Jaime tiene la palabra por dos minutos.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Jaime Rodríguez Contreras:

Sí Presidente, es para hacer una claridad sobre el tema del doctor José Daniel, lo que él plantea no es tan fácil por cuanto el origen de cada uno de los delegados es individual y no es el mismo, es diferente, si un solo, si fueran los médicos los que tuvieran que elegir, dos médicos uno diría la pareja. Pero, como lo plantea el articulado, el origen del tribunal viene de diferentes sectores que no le va permitir cumplirlo, con lo que quiere el doctor José Daniel. Entonces, para hacer esa observación porque vamos a poner en problemas a los ponentes sobre ese tema. Gracias.

Presidente:

Muchas gracias doctor Rodríguez. El doctor José Daniel ya ha manifestado que la deja como constancia, obviamente con el compromiso de que para segundo debate se discuta el mecanismo a través del cual su proposición podría hacerse realidad. Entonces, Secretaria, arranquemos de una vez por los artículos que no tienen proposición, vamos a someter a consideración y votación de la Corporación los artículos que no tienen proposiciones.

Tiene la palabra la doctora Amparo Yaneth Calderón, para decirnos qué artículos no tienen proposiciones, abrir su discusión y pasar a la votación doctora Amparo. ¿Doctora Amparo Yaneth Calderón, ya nos declaramos en sesión permanente? ¿Sería bueno declararnos en sesión permanente, no?

Secretaria:

Todavía falta, Presidente, faltan treinta y siete minutos, podemos hacerlo media hora antes. Señor Presidente, mire, el doctor José Daniel dice que deja su proposición como constancia, la de él era al artículo 7º, el doctor Vallejo también dijo que las dejaba como constancia, una era al 7º, y otra era al artículo 9º y otra al 19. Luego las leeré, alguien pidió que hiciera la lectura. Pero Presidente, sigue teniendo proposiciones el artículo 7º, dos, son dos

proposiciones, le quiero pedir al doctor Alfredo Deluque, porque hay dos proposiciones de él al artículo 7º, dos proposiciones de Alfredo Deluque al 7º, y una del doctor Jorge Eliécer Tamayo.

En ese sentido, señor Presidente, el único que tendría proposición sería el artículo 7º, entonces usted podría poner en consideración y votación los artículos del 1 al 20 con excepción del 7º, de la ponencia que tiene proposición.

Presidente:

Vamos a ver si podemos someter a consideración, dependiendo del doctor Deluque y del doctor Tamayo. Doctor Tamayo, yo supongo que usted está en Bancada de la U, porque a su derecha me parece ver al doctor Élbert Díaz, no estoy seguro de si tiene usted a su derecha al doctor Élbert Díaz, es una persona muy parecida al doctor Élbert Díaz, pero por la máscara no lo puedo identificar. Le pregunto doctor Tamayo, ¿si usted tiene a bien dejar las proposiciones como constancia, o quiere que se discutan las proposiciones del artículo 7º? Tiene la palabra por dos minutos Representante Jorge Eliécer Tamayo.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Jorge Eliécer Tamayo Marulanda:

Un saludo pues a todos. A ver, lo que he hablado con los ponentes, es que ellos estarían de acuerdo, en mi posición estarían de acuerdo en la eliminación de mi proposición de eliminación y en el componente a la conformación y una segunda revisión que haría el Ministerio sobre una selección y que no sea de manera directa y que los méritos, entonces, ellos estén de acuerdo con esa decisión. En ese evento si así es, yo no tengo ningún problema de dejarla como constancia para que ellos la asuman en la ponencia para segundo debate.

Presidente:

Perfecto, deja la proposición como constancia el Representante Tamayo. Representante Alfredo Rafael Deluque Zuleta.

Secretaria:

Señor Presidente, yo quiero pedir una interpelación, no estoy escuchando.

Presidente:

Tranquila, el Representante Jorge Eliécer Tamayo ha dicho que deja la proposición como constancia, entonces solamente nos falta el Representante Deluque si la quiere someter, entonces, sometemos el resto de los artículos. Representante Alfredo Rafael Deluque, por dos minutos.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Alfredo Rafael Deluque Zuleta:

Qué pena, pero me tuve que desconectar porque no tenía buena señal. Entiendo que los Representantes han presentado una proposición por el concurso de méritos y que una de las tres personas en el Comité sea mujer. Yo entonces dejaría la proposición como constancia en ese sentido.

Presidente:

Perfecto Representante Deluque, con el compromiso de que los ponentes van a revisar y a discutir con cada uno de los autores de estas proposiciones a lo que ellas refieren para el segundo debate, vamos a dejarlas todas como constancia. El Representante José Daniel López se puede herniar aquí si no le doy el derecho a la réplica, así que por cuidar su buena salud. Representante, tiene derecho a réplica por un minuto.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante José Daniel López Jiménez:

No, no Presidente, ya no es necesario le acababa de escribir en el chat que ya no era necesaria y a propósito de la intervención del doctor Jaime Rodríguez, pero más bien avancemos. Gracias.

Presidente:

Excelente Representante López. Entonces querida Secretaria Amparo Yaneth Calderón, lea las proposiciones para que tengan la consecutividad necesaria y después de eso pasaremos a votar. Lea todas las proposiciones.

Secretaria:

Sí señor Presidente. Son varias proposiciones, así que me tendrán que tener un poco de paciencia.

Proposición:

Artículo 7°. *Integración*. Las Salas del Tribunal Disciplinario Antidopaje estarán integradas cada una por tres (3) miembros: dos (2) profesionales del derecho y un (1) médico especialista en medicina del deporte.

Como mecanismo de conformación de las salas, los miembros designados saldrán de convocatoria pública previamente establecida, conjuntamente, por los Presidentes del Comité Olímpico y Paralímpico Colombiano y la Asociación Colombiana de Medicina del Deporte (Amedco). Todos los miembros deberán acreditar experiencia relacionada en el sector del deporte.

Los miembros abogados serán propuestos por los Comités Olímpico y Paralímpico Colombiano y los miembros médicos serán propuestos por la Asociación Colombiana de Medicina del Deporte (Amedco).

Los miembros del Tribunal Disciplinario Antidopaje, serán escogidos para un periodo de cuatro (4) años. Los integrantes del Tribunal Disciplinario Antidopaje, expedirán su reglamento de funcionamiento, en el cual se darán su propia organización administrativa, eligiendo para el efecto los presidentes de las salas y el presidente de la Corporación.

Parágrafo 1°. En cada una de las Salas del Tribunal Disciplinario Antidopaje, deberá haber como mínimo un miembro de cada género.

Parágrafo 2°. No podrán ser elegidos miembros del Tribunal Disciplinario Antidopaje:

1. Quien hubiere sido condenados por delitos contra la administración pública, la administración de justicia o la fe pública, o condenados a pena privativa de la libertad por cualquier delito, exceptuados los culposos y los políticos.
2. Quien se encuentre suspendido en el ejercicio de su profesión o se hallen excluidos de ella.
3. Los ciudadanos que hubieren sido sancionados disciplinaria, administrativa o fiscalmente por autoridades públicas o por infringir las normas antidopaje.
4. Quienes hayan integrado órganos de administración, de control, comisión técnica y comisión de juzgamiento de los organismos deportivos, en los dos (2) años anteriores al ejercicio del cargo.
5. Los médicos que presten o hayan prestado servicios a deportistas federados, dentro de los dos (2) años anteriores al ejercicio del cargo.

Cordialmente,

José Daniel López.

Esa es la proposición del doctor José Daniel López. La del doctor Alfredo Deluque, es al inciso 2º del artículo y le agrega la expresión "saldrán de convocatoria pública para concurso de méritos". Esa es la modificación, una de las proposiciones del doctor Alfredo Deluque.

El doctor Tamayo, presenta al inciso 3º del parágrafo del artículo 7º, "los miembros abogados serán propuestos", eso lo elimina y deja el resto del artículo como viene.

El doctor Gabriel Jaime Vallejo, en el inciso 2º lo deja de la siguiente manera:

Proposición:

Como mecanismo de conformación de las salas, los miembros designados saldrán de un concurso de méritos previamente establecido conjuntamente por los presidentes del Comité Olímpico y Paralímpico Colombiano y la Asociación Colombiana de Medicina del Deporte de Colombia (Amedco).

Todos los miembros deberán acreditar experiencia relacionada en el sector del deporte.

Y al inciso 3º le hace la siguiente modificación:

Los miembros abogados serán propuestos por los Comités Olímpico y Paralímpico Colombiano y los miembros médicos serán propuestos por la Asociación de Medicina del Deporte de Colombia (Amedco).

En el numeral 1 lo deja de la siguiente manera:

Quien hubiere sido condenado por delitos contra la administración pública, contra la eficaz y recta impartición de justicia, o contra la fe pública, o condenados a pena privativa de la libertad por cualquier delito, exceptuados los culposos y los políticos.

Esas son las modificaciones del doctor Vallejo, a ese artículo 7º.

Otra proposición de Alfredo Deluque, es al inciso 3º que lo deja de la siguiente manera:

El miembro abogado será propuesto por los Comités Olímpico y Paralímpico Colombiano y los miembros psicólogo y médico especialista en medicina del deporte serán propuestos por la Asociación Colombiana de Medicina del Deporte (Amedco).

Esa es la otra modificación que hace el doctor Alfredo Deluque a ese artículo. El doctor Gabriel Vallejo hace la siguiente modificación al artículo 9º y lo manifiesta que debe quedar así:

Modifíquese el artículo 91 de la Ley 30 de 1986, el cual quedará así: Artículo 9°. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación para los miembros del Tribunal Disciplinario Antidopaje.

Los miembros del tribunal deberán manifestar los conflictos de interés de acuerdo con lo establecido en la Ley 2003 del 2019.

Parágrafo 1°. Los impedimentos y recusaciones de los miembros de las salas serán resueltos por el tribunal en pleno.

Parágrafo 2°. En caso de ser aceptado el impedimento y/o recusación de alguno de los integrantes de las salas, el presidente del tribunal designará su reemplazo, el cual debe ser seleccionado de la lista de elegibles previamente constituida, siguiendo el estricto orden de la lista.

Esa es al artículo 9º, la proposición del doctor Vallejo y al artículo 19 el doctor Vallejo, propone que el 2º inciso quede así:

Frente a los autos interlocutorios procederá del recurso de reposición, y en subsidio el de apelación.

El siguiente inciso lo deja:

Los demás autos solo serán susceptibles de recurso de reposición. Esa es al artículo 19.

Señor Presidente, he dado lectura de las modificaciones del artículo 7º, 9º y 19 propuesta por los honorables Representantes. Así que habiendo dado lectura a las proposiciones y habiéndolas dejado como constancia, usted puede poner en consideración y votación el Articulado como viene en la ponencia. Está pidiendo la palabra el doctor Gabriel Vallejo.

Presidente:

Doctora Amparo Yaneth Calderón, he visto la petición del doctor Vallejo, me pide intervenir un minuto. Por supuesto Representante Vallejo, tiene usted dos minutos para su intervención.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Gabriel Jaime Vallejo Chujfi:

Presidente, muy buenas tardes a usted, a los miembros de la Comisión, al señor Ministro, a los

compañeros del Gobierno nacional. Igualmente reconocer la presencia de la doctora Ángela María Robledo en la Comisión.

Presidente no, yo lo que quiero es dejar un mensaje, accedí por supuesto a dejar mis proposiciones como constancia en aras de, digamos, algunas son de forma, la gran mayoría, solamente hay una de fondo. Pero quiero que quede esta constancia y es la necesidad de que la integración de este tribunal, realmente sea por concurso de méritos. Yo creo que nosotros, este país ha aprendido, a un costo muy alto, la lección de elegir funcionarios sea de la Administración de Justicia, sea de los órganos de control, cuando no es por concurso de méritos. Si aquí hay algo que necesitamos garantizar por encima de cualquier cosa, es la independencia.

Yo quisiera pedirles a los ponentes, por supuesto al Gobierno nacional de que trabajáramos en ese sentido, tenemos la obligación hoy con este país, con los deportistas de Colombia, de tener un tribunal independiente y la única manera de hacerlo no es con convocatoria pública, con todo respeto lo digo, la única manera de hacerlo es garantizando un concurso de méritos. Yo quisiera dejar esa constancia histórica, Presidente y compañeros, porque las elecciones cuando no se… sobre todo en este tipo de organismo no se realiza respetando el concurso de méritos, se corre el altísimo riesgo de no garantizar la independencia, y un tribunal de esta naturaleza si no es independiente, prácticamente se desnaturaliza. Esa era mi intervención, le pediría entonces a los ponentes y autores del proyecto que revisaran bien el tema para el segundo debate. Gracias Presidente.

Presidente:

Muchas gracias Representante Gabriel Jaime Vallejo. Hace un día muy oscuro en la ciudad de Bogotá, me tuve que levantar a prender las luces porque la verdad que, está muy oscuro aquí este tema, no es como en Barranquilla doctor Lorduy. Entonces, Secretaria, habiendo dejado estas constancias, vamos a proceder a abrir la discusión sobre los artículos a votar que son todos los artículos del proyecto, se abre su discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Llame a lista ya, Secretaria, para votar los artículos como vienen en la ponencia.

Secretaria:

Así se hará señor Presidente. Llamo a lista para la votación del articulado propuesto en la ponencia, que contempla veintidós artículos, incluida la vigencia.

Honorables Representantes:

Albán Urbano Luis Alberto	Sí
Arias Betancur Erwin	Sí
Asprilla Reyes Inti Raúl	Sí
Burgos Lugo Jorge Enrique	Sí
Calle Aguas Andrés David	Sí
Córdoba Manyoma Nilton	Sí
Daza Iguarán Juan Manuel	Sí
Deluque Zuleta Alfredo Rafael	Sí
Díaz Lozano Élbert	Sí
Estupiñán Calvache Hernán Gustavo	Sí
Goebertus Estrada Juanita María	Sí
González García Harry Giovanny	Sí
Hoyos García John Jairo	Sí
León León Buenaventura	Sí
López Jiménez José Daniel	Sí
Lorduy Maldonado César Augusto	Sí
Lozada Vargas Juan Carlos	Sí
Matiz Vargas Adriana Magali	Sí
Méndez Hernández Jorge	Sí
Navas Talero Carlos Germán	Sí
Padilla Orozco Jose Gustavo	Sí
Peinado Ramírez Julián	Sí
Prada Artunduaga Álvaro Hernán	Sí
Pulido Novoa David Ernesto	Sí
Restrepo Arango Margarita María	Sí
Reyes Kuri Juan Fernando	Sí
Robledo Gómez Ángela María	No votó
Rodríguez Contreras Jaime	Sí
Rodríguez Rodríguez Édward David	Sí
Sánchez León Óscar Hernán	Sí
Santos García Gabriel	Sí
Tamayo Marulanda Jorge Eliecer	Sí
Triana Quintero Julio César	No votó
Uscátegui Pastrana José Jaime	Sí
Vallejo Chujfi Gabriel Jaime	Sí
Vega Pérez Alejandro Alberto	Sí
Villamizar Meneses Óscar Leonardo	Sí
Wills Ospina Juan Carlos	Sí

Honorable Representante Ángela María Robledo Gómez:

Igual, me abstengo de votar porque no conocía el proyecto, estoy estudiando el otro.

Secretaria:

Claro que sí doctora Ángela María.

Señor Presidente puede usted cerrar la votación.

Presidente:

Se cierra la votación, anuncie el resultado Secretaria.

Secretaria:

Presidente, han votado treinta y seis (36) honorables Representantes, todos de manera afirmativa el articulado. Así que ha sido **aprobado**. Título y pregunta.

Presidente:

Título y pregunta, Secretaria.

Secretaria:

Sí señor Presidente. Leo el título que dice de la siguiente manera:

"Por el cual se adoptan medidas de lucha contra el dopaje en el deporte".

Ha sido leído el título y pregunto a la Comisión, por instrucciones suyas señor Presidente, si quieren que este proyecto de ley pase a la Plenaria de la Cámara y se convierte en ley de la República

Presidente:

Llame a lista Secretaria.

Secretaria:

Sí señor Presidente.

Honorables Representantes:

Albán Urbano Luis Alberto	Sí
Arias Betancur Erwin	Sí
Asprilla Reyes Inti Raúl	Sí
Burgos Lugo Jorge Enrique	No votó
Calle Aguas Andrés David	Sí
Córdoba Manyoma Nilton	Sí
Daza Iguarán Juan Manuel	Sí
Deluque Zuleta Alfredo Rafael	Sí
Díaz Lozano Élbert	Sí
Estupiñán Calvache Hernán Gustavo	Sí
Goebertus Estrada Juanita María	Sí
González García Harry Giovanny	Sí
Hoyos García John Jairo	Sí
León León Buenaventura	Sí
López Jiménez José Daniel	Sí
Lorduy Maldonado César Augusto	Sí
Lozada Vargas Juan Carlos	Sí
Matiz Vargas Adriana Magali	Sí
Méndez Hernández Jorge	Sí
Navas Talero Carlos Germán	Sí
Padilla Orozco Jose Gustavo	Sí
Peinado Ramírez Julián	Sí
Prada Artunduaga Álvaro Hernán	Sí
Pulido Novoa David Ernesto	Sí
Restrepo Arango Margarita María	Sí
Reyes Kuri Juan Fernando	Sí
Robledo Gómez Ángela María	Se abstiene
Rodríguez Contreras Jaime	Sí
Rodríguez Rodríguez Édward David	Sí
Sánchez León Óscar Hernán	Sí
Santos García Gabriel	Sí
Tamayo Marulanda Jorge Eliécer	Sí
Triana Quintero Julio César	No votó
Uscátegui Pastrana José Jaime	Sí
Vallejo Chujfi Gabriel Jaime	Sí
Vega Pérez Alejandro Alberto	No votó
Villamizar Meneses Óscar Leonardo	No votó
Wills Ospina Juan Carlos	No votó

Presidente, puede usted cerrar la votación.

Presidente:

Se cierra la votación, anuncie el resultado Secretaria.

Secretaria:

Presidente, han votado treinta y dos (32) honorables Representantes, todos de manera afirmativa, en consecuencia, el título y la pregunta han sido **aprobados**. Presidente, debemos pedir la sesión permanente.

Presidente:

Secretaria, ¿cuánto tiempo nos falta para la sesión permanente?

Secretaria:

Nos faltan quince minutos.

Presidente:

No hay necesidad de declarar la sesión permanente. Secretaria voy a darle la palabra al ponente que quiere dar agradecimientos y después. Mismos ponentes.

Secretaria:

Ponentes los mismos, así que quedan notificados la doctora Margarita y el doctor Óscar Sánchez como ponentes coordinadores, y los demás ponentes que son el doctor Jorge Méndez, John Jairo Hoyos, Juan Carlos Wills y Luis Alberto Albán, con la constancia de que el Partido Verde, la doctora Juanita renunció en la primera ponencia, se le aceptó la renuncia, la Mesa, por eso no hay del Partido Verde en esta ponencia para primer debate, el doctor Navas igual también lo manifestó y hay constancia en el acta.

Presidente:

Perfecto. Señor Ministro del Deporte, tiene usted la palabra.

La Presidencia concede el uso de la palabra al doctor Ernesto Lucena Barrero, Ministro del Deporte:

Gracias Presidente. También una gratitud infinita a nuestra Vicepresidenta, la doctora Adriana Magali, a todos los ponentes, en especial a esos que intervinieron hoy como la doctora Margarita, el doctor Óscar, a todas las preguntas que se nos hicieron y que ojalá de la mejor manera hayamos podido resolver. Y por supuesto, creo que hoy se sigue marcando un hito en el deporte de Colombia de la mano del Congreso de la República, de la mano de esta Comisión Primera.

Me siento muy orgulloso como colombiano, como exdeportista que estemos dando esa lucha frontal, ese mensaje frontal contra el dopaje. Así que le debo un agradecimiento infinito a todos ustedes y en nombre de los deportistas, decirle a la doctora Amparo también muchísimas gracias por esa difícil gestión que tiene usted, pero que siempre a bien tiene sacar adelante los proyectos. Y una cosa más, Presidente, que me gustaría tomar la vocería de todos hoy acá como colombianos, para pedir sus oraciones y sus bendiciones por la hija de nuestro golfista, de nuestro querido golfista Camilo Villegas, está pasando momentos difíciles ella, pero él como papá sacando lo mejor de un colombiano en el exterior, en un torneo de golf, nos ha dado a conocer esas dificultades que ha tenido en los últimos dos meses, ponerlo en las oraciones del Congreso de la República, del Ministerio del Deporte y de todos los colombianos, es una persona muy cercana y que hoy necesita mucho de esta energía de todos nosotros. Muchas gracias Presidente, seguimos adelante luchando por el deporte colombiano.

Presidente:

Entonces, tiene dos minutos la palabra la doctora Margarita María Restrepo. Muchas gracias señor Ministro del Deporte.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Representante Margarita María Restrepo Arango:

Gracias Presidente. No, mis palabras son en el mismo sentido del Ministro, agradecer a la Comisión, tengo la convicción, la certeza de que este es un proyecto que va a impactar positivamente a

toda la sociedad colombiana, que desde el Congreso de la República estamos mandando un mensaje claro a todos los colombianos de lo importante que es para cada uno de nosotros generar espacios y generar leyes que propicien un juego limpio, no solamente a nivel deportivo sino en toda la sociedad. Muchísimas gracias a cada uno de los compañeros, y bueno, esperemos que siga su trámite este proyecto.

Presidente:

Muchísimas gracias Representante Margarita Restrepo. Señora Secretaria anuncie proyectos.

Secretaria:

Sí señor Presidente, por instrucciones suyas anuncio los proyectos que se discutirán y votarán en la próxima sesión.

- **Proyecto de ley número 112 de 2019 Cámara,** *por medio del cual se reglamenta la aspersión de sustancias tóxicas o probablemente tóxicas en el marco de la lucha contra los cultivos de uso ilícito.*
- **Proyecto de ley número 350 de 2020 Cámara,** *por medio del cual se modifica y amplía el Decreto Presidencial 546 del 14 de abril de 2020 y se dictan otras disposiciones*.
- **Proyecto de ley número 323 de 2020 Cámara,** *por medio del cual se modifican los artículos 1823 y 1824 del Decreto 410 de 1971.*
- **Proyecto de ley número 230 de 2019 Cámara,** *por medio de la cual se crea la categoría especial de campesino o campesina, se expiden normas para su protección, con enfoque diferencial y se dictan otras disposiciones.*
- **Proyecto de ley número 243 de 2019 Cámara, 044 de 2018 Senado,** *por medio de la cual se modifican algunas disposiciones relacionadas con el reconocimiento de los hijos extramatrimoniales.*
- **Proyecto de ley número 115 de 2019 Cámara,** *por la cual se dictan normas para fortalecer la resocialización de los reclusos en Colombia y se dictan otras disposiciones,* **acumulado con el Proyecto de ley número 100 de 2019 Cámara,** *por medio de la cual se modifica la Ley 65 de 1993 - Código Penitenciario y Carcelario y se dictan otras disposiciones*, **acumulado con el Proyecto de ley número 121 de 2019 Cámara**, *por medio del cual se modifican algunas disposiciones de la Ley 65 de 1993 "Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario".*
- **Proyecto de ley número 198 de 2019 Cámara,** *por medio del cual se realizan cambios al artículo 81 del Código Nacional de Policía y Convivencia y se introduce un término prudencial para la realización de acciones preventivas en caso de vía de hecho que pretendan perturbar la posesión.*
- **Proyecto de Ley Estatutaria número 072 de 2019 Cámara,** *por la cual se crean los Consejos Ambientales Municipales, se modifica la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones.*
- **Proyecto de ley número 039 de 2019 Cámara,** *por medio del cual se establecen condiciones de transparencia y acceso a la información de la actividad congresional*.
- **Proyecto de Ley Orgánica número 053 de 2019 Cámara,** *por medio de la cual se modifica el artículo 333 de la Ley 5ª de 1992.*
- **Proyecto de Ley Orgánica número 193 de 2019 Cámara,** *por medio de la cual se adoptan medidas para profesionalizar las Unidades de Trabajo Legislativo de los Congresistas y se dictan otras disposiciones.*
- **Proyecto de ley número 101 de 2019 Cámara,** *por medio de la cual se modifican los artículos 206 y 207 de la Ley 1098 de 2006 y se dictan otras disposiciones*.
- **Proyecto de ley número 099 de 2019 Cámara,** *por medio de la cual se establecen medidas en favor de la protección de la integridad, libertad y formación sexuales de niños, niñas y adolescentes y se dictan otras disposiciones.*
- **Proyecto de ley número 004 de 2019 Cámara,** *por medio de la cual se prohíbe el porte y consumo de sustancias alcohólicas y alucinógenas o prohibidas, en lugares públicos educativos y recreativos, donde se encuentren presentes menores de edad*.
- **Proyecto de ley número 227 de 2019 Cámara,** *por medio de la cual se modifican los artículos 241, 242, 242A y 243 de la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones*.
- **Proyecto de Ley Estatutaria número 009 de 2019 Cámara,** *por medio de la cual se modifica la Ley Estatutaria 1266 de 2008*. **Acumulado con el Proyecto de Ley Estatutaria número 075 de 2019 Cámara,** *por medio de la cual se genera un alivio al sector agropecuario, para el pequeño productor, jóvenes y mujeres rurales*.
- **Proyecto de Ley Orgánica número 279 de 2019 Cámara,** *por medio de la cual se crea el cargo de Secretario de la Comisión de Acreditación Documental, se modifica y adiciona la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones.*

- **Proyecto de ley número 096 de 2019 Cámara,** *por medio de la cual se modifican algunos aspectos del Estatuto General de Contratación y la ejecución presupuestal, e introducir herramientas que permiten fortalecer la lucha contra la corrupción*.
- **Proyecto de ley número 266 de 2019 Cámara,** *por la cual se expide el Código Nacional de Protección y Bienestar Animal.*
- **Proyecto de Acto Legislativo número 333 de 2020 Cámara,** *por medio del cual se modifican los artículos 171 y 176 de la Constitución Política y otras disposiciones*.
- **Proyecto de Ley Estatutaria número 337 de 2020 Cámara,** *por medio de la cual se promueve el acceso a la educación superior gratuita, de personas con discapacidad*.
- **Proyecto de ley número 008 de 2019 Cámara,** *por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de análisis e incentivos de actos para combatir y prevenir la corrupción* – "Ley Pedro Pascasio Martínez".
- **Proyecto de ley número 046 de 2019 Cámara,** *por medio de la cual se establece una excepción al régimen de incompatibilidades de los concejales y se promueve la profesionalización.*
- **Proyecto de ley número 027 de 2019 Cámara,** *por medio de la cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015.*

Han sido leídos, señor Presidente, todos los proyectos que están en la Comisión y que tienen ponencia, tal como ha dado usted la instrucción señor Presidente.

Presidente:

Queridos compañeros, como pueden ver, hemos anunciado absolutamente todos los proyectos de los cuales tenemos ponencia radicada, no son pocos. Razón por la cual, si yo no fuera tan democrático como lo soy, doctor Lorduy, citaría sábado y lunes, sin embargo, como soy muy democrático y veo la cara de absoluta y poca complacencia del doctor José Daniel López, entonces, y del doctor Lorduy que muestra su video de lado a lado de manera insistente y permanente y no para, voy a citar entonces para el lunes, pero voy a citar a las 8:00 de la mañana el lunes, con el compromiso de que tenemos que agotar el Orden del Día, porque de otra manera compañeros, nos quedarían faltando cosas muy importantes por discutir.

Así que, yo les voy a pedir que el lunes nos comprometamos a que si nos toca ir hasta altas horas lo hagamos, es la última sesión de Proyectos de la Comisión Primera. Razón por la cual, yo sí les quiero pedir compañeros su colaboración para que podamos sacar adelante la mayor cantidad de proyectos posibles, no será fácil armar ese Orden del Día. Así que yo les pido, la mayor solidaridad con los proyectos de los compañeros que me han insistido durante tanto tiempo que podamos discutir sus proyectos, así que bueno.

Queridos compañeros, nos vemos este próximo lunes festivo a las 8:00 de la mañana para discusión de proyectos y el martes tendremos el último debate de control político que también será citado a las 8:00 de la mañana, porque no tendremos sino hasta las 2:00 de la tarde que empezará la plenaria, el debate sobre el CoronApp, citado por la Representante Juanita María Goebertus.

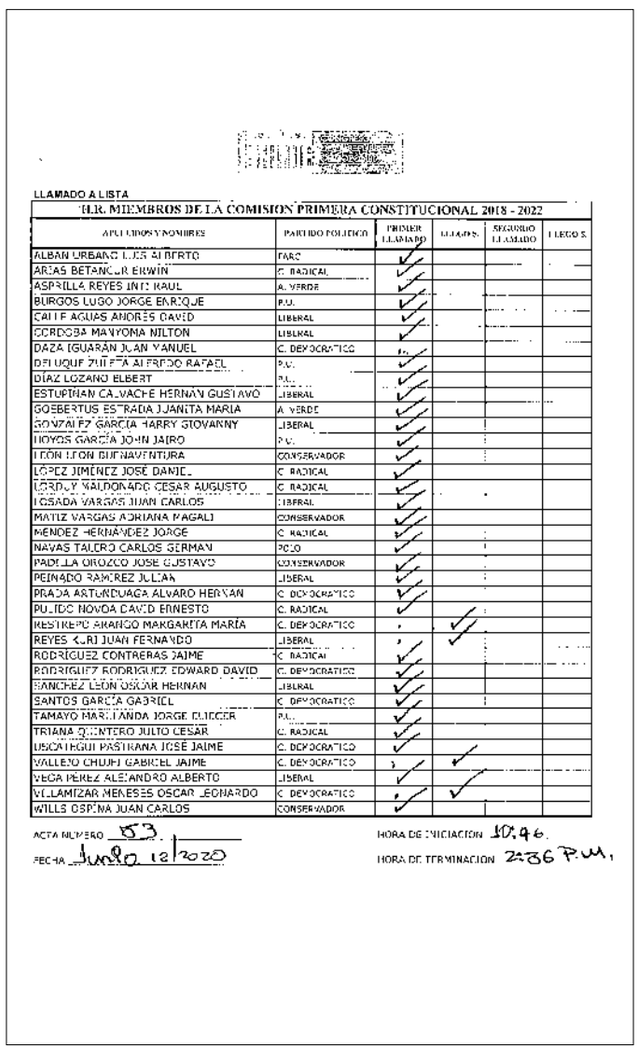
Les mando un abrazo a todos y nos vemos lunes 8:00 de la mañana, Secretaria.

¡Se levanta la sesión!

Secretaria:

Así se ha hecho señor Presidente, se ha levantado la sesión siendo las 2:36 de la tarde y se ha convocado para el día lunes a las 8:00 de la mañana, para discusión y votación de proyectos, martes hay control político.

Anexos: Cincuenta y cuatro (54) folios.



LLAMADO A LISTA

H.R. MIEMBROS DE LA COMISION PRIMERA CONSTITUCIONAL 2018 - 2022

APELLIDOS Y NOMBRES	PARTIDO POLITICO	PRIMER LLAMADO	LLEGO EN:	SEGUNDO LLAMADO	LLEGO S.
ALBAN URBANO LUIS ALBERTO	FARC	✓			
ARIAS BETANCUR ERWIN	C. RADICAL	✓			
ASPRILLA REYES JHON RAUL	A. VERDE	✓			
BURGOS LUGO JORGE ENRIQUE	P.U.	✓			
CALLE AGUAS ANDRES DAVID	LIBERAL	✓			
CORDOBA MANYOMA NILTON	LIBERAL	✓			
DAZA IGUARAN JUAN MANUEL	C. DEMOCRATICO	✓			
DELUQUE ZULETA ALFREDO RAFAEL	P.U.	✓			
DIAZ LOZANO ELBERT	P.U.	✓			
ESTUPIÑAN CALVACHE HERNAN GUSTAVO	LIBERAL	✓			
GOEBERTUS ESTRADA JUANITA MARIA	A. VERDE	✓			
GONZALEZ GARCIA HARRY GIOVANNY	LIBERAL	✓			
HOYOS GARCIA JOHN JAIRO	P.U.	✓			
LEON LEON BUENAVENTURA	CONSERVADOR	✓			
LOPEZ JIMENEZ JOSE DANIEL	C. RADICAL	✓			
LORDUY VALDONADO CESAR AUGUSTO	C. RADICAL	✓			
OSSADA VARGAS JUAN CARLOS	LIBERAL	✓			
MATIZ VARGAS ADRIANA PAGALI	CONSERVADOR	✓			
MENDEZ HERNANDEZ JORGE	C. RADICAL	✓			
NAVAS TALERO CARLOS GERMAN	POLO	✓			
PADILLA OROZCO JOSE GUSTAVO	CONSERVADOR	✓			
PEINADO RAMIREZ JULIAN	LIBERAL	✓			
PRADA ARTUNDUAGA ALVARO HERVAN	C. DEMOCRATICO	✓			
PULIDO NOVOA DAVID ERNESTO	C. RADICAL	✓			
RESTREPO AMANGO MARGARITA MARIA	C. DEMOCRATICO	✓	✓		
REYES KURI JUAN FERNANDO	LIBERAL	✓	✓		
RODRIGUEZ CONTRERAS JAIME	C. RADICAL	✓			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDWARD DAVID	C. DEMOCRATICO	✓			
SANCHEZ LEON OSCAR HERNAN	LIBERAL	✓			
SANTOS GARCIA GABRIEL	C. DEMOCRATICO	✓			
TAMAYO MARULANDA JORGE ELIECER	P.U.	✓			
TRIANA QUINTERO JULIO CESAR	C. RADICAL	✓			
USCATEGUI PASTRANA JOSE JAIME	C. DEMOCRATICO	✓			
VALLEJO CHUJFI GABRIEL JAIME	C. DEMOCRATICO	✓	✓		
VEGA PEREZ ALEJANDRO ALBERTO	LIBERAL	✓			
VILLAMIZAR MENESES OSCAR LEONARDO	C. DEMOCRATICO	✓	✓		
WILLS OSPINA JUAN CARLOS	CONSERVADOR	✓			

ACTA NUMERO 53.

FECHA Junio 12/2020

HORA DE INICIACION 10:46.

HORA DE TERMINACION 2:36 P.M.

LISTADO DE VOTACION

Jordan del Río

H.R. MIEMBROS DE LA COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL 2018 - 2022							
APELLIDOS Y NOMBRES	PARTIDO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ALBAN URBANO LUIS ALBERTO	FARC	X					
ARIAS BETANCURT ERWIN	C. RADICAL	X					
ASPRILLA REYES INT. RAUL	A. VERDE	X					
BURGOS LUGO JORGE ENRIQUE	P.U						
CALLE AGUAS ANDRES DAVID	LIBERAL						
CORDOBA MANYOMA NILTON	LIBERAL	X					
DAZA IGUARAN JUAN MANUEL	C. DEMOCRATICO						
DELUQUE ZULETA ALFREDO RAFAEL	P.U.	X					
DIAZ LOZANO ELIBERT	P U	X					
ESTUPIÑAN CALVACHE HERNÁN GUSTAVO	LIBERAL	X					
GOEBERTUS ESTRADA JUANITA MARÍA	A. VERDE	X					
GONZALEZ GARCIA HARRY GIOVANNY	LIBERAL	X					
HOYOS GARCÍA JOHN JAIRO	P.U.	X					
LEÓN LEÓN BUENAVENTURA	CONSERVADOR	X					
LÓPEZ JIMÉNEZ JOSE DANIEL	C. RADICAL	X					
LORDUY MALDONADO CESAR AUGUSTO	C. RADICAL	X					
LOSADA VARGAS JUAN CARLOS	LIBERAL	X					
MATIZ VARGAS ADRIANA MAGALI	CONSERVADOR						
MENDEZ HERNÁNDEZ JORGE	C. RADICAL	X					
NAVAS TALERO CARLOS GERMAN	POLO	X					
PADILLA OROZCO JOSE GUSTAVO	CONSERVADOR	X					
PEINADO RAMIREZ JULIAN	LIBERAL	X					
PRADA ARTUNDUAGA ALVARO HERNAN	C. DEMOCRATICO	X					
PULIDO NOVOA DAVID ERNESTO	C. RADICAL	X					
RESTREPO ARANGO MARGARITA MARÍA	C. DEMOCRATICO	X					
REYES KURI JUAN FERNANDO	LIBERAL						
RODRÍGUEZ CONTRERAS JAIME	C. RADICAL	X					
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDWARD DAVID	C. DEMOCRATICO	X					
SANCHEZ LEON OSCAR HERNAN	LIBERAL	X					
SANTOS GARCÍA GABRIEL	C. DEMOCRATICO	X					
TAMAYO MARULANDA JORGE ELIECER	P U	X					
TRIANA QUINTERO JULIO CESAR	C. RADICAL	X					
USCATEGUI PASTRANA JOSE JAIME	C. DEMOCRATICO	X					
VALLEJO CHUSPI GABRIEL JAIME	C. DEMOCRATICO						
VEGA PÉREZ ALEJANDRO ALBERTO	LIBERAL	X					
VILLAMIZAR MENESES OSCAR LEONARDO	C. DEMOCRATICO						
WILLS OSPINA JUAN CARLOS	CONSERVADOR	X					
	TOTAL	30					

FECHA Julio 12/2020

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

Ya se había iniciado la sesión Julio 12/2020 Acta 53 Hora:

RESOLUCION MD Nº 0950 DE 2020
(Junio 11 de 2020)

"POR LA CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA DECISIÓN JUDICIAL"

LA MESA DIRECTIVA DE LA H. CAMARA DE REPRESENTANTES

En uso de sus facultades legales y constitucionales,

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Nacional Electoral mediante Resolución 1595 del 19 de julio de 2018, declaró que la doctora ÁNGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ identificada con la cédula de ciudadanía número 24.313.244, tiene el derecho personal a ocupar una curul en la Cámara de Representantes durante el período constitucional 2018-2022 y en consecuencia ordenó la expedición de la respectiva credencial.

Que la doctora Ángela María Robledo Gómez, tomó posesión como Representante a la Cámara para el período constitucional 2018-2022, el 20 de julio de 2018, según consta en la Gaceta del Congreso Nº 638 de 2018.

Que la Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado, doctora Ethel Sariah Mariño Mesa, mediante oficio Nº 2019-225 del 16 de mayo de 2019, comunica al Presidente de la Cámara de Representantes, lo siguiente:

> *"...Me permito comunicarle para lo de su competencia, que en el medio de control de nulidad electoral acumulado interpuesto por Juan Carlos Calderón España y otros contra el acto de elección de la señora Ángela María Robledo Gómez como Representante a la Cámara para el período constitucional 2018-2022, la sala de decisión de la Sección Quinta de esta corporación dispuso mediante providencia del 25 de abril "Declarase la nulidad de la Resolución 1595 de julio 19 de 2018 expedida por el Consejo Nacional Electoral, mediante la cual declaró que la señora Ángela María Robledo Gómez tiene el derecho personal a ocupar una curul en la Cámara de Representantes durante el período constitucional 2018-2022. SEGUNDO: En consecuencia, cancélase la credencial que la acredita como congresista, la cual se hará efectiva a la ejecutoria de la sentencia. TERCERO: Comuníquese esta decisión al presidente de la Cámara de Representantes".*
>
> *Para esto, se envía copia del fallo del 25 de abril, del salvamento de voto a la sentencia suscrito por la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, del auto del 9 de mayo que aclaro el numeral tercero de la sentencia y el salvamento de voto a esta providencia suscrito por la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez en un total de 59 folios.*
>
> *Se informa que las anteriores providencias fueron debidamente notificadas y quedaron legalmente ejecutoriadas el 15 de mayo de 2019 a las 5:00 de la tarde...".*

Que la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, mediante Resolución MD Nº 1207 del 04 de junio de 2019, acató el fallo proferido el 26 de abril de 2019 por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso electoral número 11001-03-28-000-2018-00074 (Acumulado), declarando la falta absoluta de la Representante a la Cámara, doctora ÁNGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ y se abstuvo de proveer su reemplazo en virtud de lo dispuesto por el Consejo de Estado, de conformidad con los artículos 134 constitucional y 278 de la Ley 5ª de 1992.

Que la Sección Segunda –Subsección A del Consejo de Estado, en sede de tutela –Radicación 11001-03-15-000-2019-03079-01-, decidió la impugnación presentada por la doctora ÁNGELA

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

CONTINUACION DE LA RESOLUCION MD Nº **0950** DE 2020
(Junio 11 de 2020)

"POR LA CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNAS DECISIÓNES JUDICIALES"

MARÍA ROBLEDO GÓMEZ en contra de la sentencia del 12 de diciembre de 2019 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, resolviendo mediante providencia del 10 de marzo de 2020, lo siguiente:

(***)

***Primero**: Se revoca la sentencia del 12 de diciembre de 2019 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar, se ampara el derecho fundamental autónomo de la oposición política invocado en la ciudadana Ángela María Robledo Gómez en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado. En consecuencia, se deja sin efectos la providencia proferida el 25 de abril de 2019 por la Sección Quinta del Consejo de Estado (expediente 2018-00074-00).*

***Segundo**: Se ordena a la Sección Quinta del Consejo de Estado que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, profiera una nueva decisión en la que tiene las siguientes opciones:*

1) Emitir la providencia de cumplimiento del fallo de tutela bajó los argumentos aquí expuestos, en especial, en lo relativo a la consagración del derecho fundamental autónomo de la oposición y su correspondiente limitación a la interpretación extensiva de la doble militancia como causal de inelegibilidad para los cargos de presidente y vicepresidente de la República.

2) De persistir la decisión de aplicar a estos casos el artículo 107 constitucional, le corresponde estudiar la figura de la jurisprudencia anunciada electoral, pero sin aplicarla a la elección de la ciudadana Ángela María Robledo Gómez, no porque se trate de un cambio abrupto de jurisprudencia, sino como advertencia de las reglas claras de juego ante futuras elecciones en donde se materialice la asignación de las curules a la segunda votación en la elección presidencial y vicepresidencial.

(***)

Que en cumplimiento de esta orden, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió nueva sentencia de nulidad electoral dentro del expediente con radicado 11001-03-28-000-2018-00074-00 el 2 de abril de 2020 siendo notificada a las partes el día 11 de mayo de 2020. No obstante, la previa ejecutoria de esta providencia, como requisito para su cumplimiento, a la fecha no se ha surtido debido a la suspensión de términos que impera en el Consejo de Estado, según lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en Acuerdo PCSJA20-11567 de junio 5 (cinco) del presente *"Por medio del cual se adoptan medidas para el levantamiento de los términos judiciales y se dictan otras disposiciones por motivos de salubridad pública y fuerza mayor"*, suspensión de términos vigente a la fecha y presente en los precedentes Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528, PCSJA20- 11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549 y PCSJA20-11556 dictados desde el 31 de marzo a la fecha.

Que, no obstante lo anterior, el 10 de junio de 2020, fue radicado en el correo electrónico de la Presidencia de la Cámara de Representantes (presidencia@camara.gov.co) OFICIO Nº T92220 MACM (junio 09 de 2020) proveniente de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., por medio del cual notifica al señor Presidente de la Cámara de Representantes el fallo del 8 de junio de 2020, en el cual se resuelve CONCEDER una acción de tutela pretendida por la doctora ÁNGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ. Cabe aclarar que no hay registro en el correo electrónico de la Presidencia de la Cámara de Representantes (presidencia@camara.gov.co) de notificaciones de las actuaciones realizadas por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. en el procedimiento de dicha acción de tutela antes del fallo en comento.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

CONTINUACION DE LA RESOLUCION MD Nº **0950** DE 2020
(Junio 11 de 2020)

"POR LA CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNAS DECISIÓNES JUDICIALES"

Que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., mediante fallo de tutela radicado Nº 11001220400020200152 7-00 del 8 de junio de la presente anualidad, resolvió lo siguiente:

(***)

PRIMERO: conceder la presente acción de tutela para la protección de los derechos constitucionales fundamentales al trabajo, de acceso a los cargos públicos y a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político a favor de la ÁNGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ.

SEGUNDO: ordenar al presidente de la Cámara de Representantes que, en el término máximo de 48 horas, reintegre a ÁNGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ a su cargo de representante de dicha corporación.

TERCERO: ordenarle el presidente de la Cámara de Representantes que, vencido el término concedido en el numeral anterior, informe al magistrado sustanciador sobre el cumplimiento de lo dispuesto en este fallo.

CUARTO: si no fuere impugnada esta sentencia, remitir el expediente con destino a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

(***)

El artículo 34-1 de la ley 734 de 2002 -Código Disciplinario Único-, establece como unos de los deberes de todo servidor público, cumplir y hacer que se cumplan las decisiones judiciales y disciplinarias.

El anterior dispositivo legal no establece nada distinto al necesario respeto y acatamiento de las decisiones judiciales, obligación que en los funcionarios públicos, son expresión material del derecho a la administración de justicia que resulta ser un principio fundante del Estado de Derecho.

Al respecto, el máximo órgano constitucional ha señalado: *"Cuando el obligado a acatar un fallo lo desconoce, no sólo viola los derechos que con la providencia han sido protegidos, sino que se interpone en el libre acceso a la administración de justicia, en cuanto la hace imposible, frustrando así uno de los cometidos básicos del orden jurídico y truncando las posibilidades de llevar a feliz término el proceso tramitado. Por ello es responsable y debe ser sancionado..."*[1]. En posterior pronunciamiento reiteró esta misma línea: *"Todos los funcionarios estatales, desde el más encumbrado hasta el más humilde, y todas las personas, públicas y privadas, tienen el deber de acatar los fallos judiciales, sin entrar a evaluar si ellos son convenientes u oportunos. Basta saber que han sido proferidos por el juez competente para que a ellos se deba respeto y para que quienes se encuentran vinculados por sus resoluciones contraigan la obligación perentoria e inexcusable de cumplirlos, máxime si están relacionados con el imperio de las garantías constitucionales*[2]*".*

Así las cosas, existe plena claridad sobre el deber de cumplir las decisiones judiciales por parte de los servidores públicos, como base mínima de coherencia y armonía entre las diferentes ramas del poder.

Que por lo anterior, los dignatarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes guardan observancia de la disposición constitucional consagrada en el artículo 136-1, el cual prohíbe al

[1] Corte Constitucional. Sentencia No. T-368/94. MP Hernando Herrera Vergara.
[2] Corte Constitucional. Sentencia T-262 de 1997. M. P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

CONTINUACION DE LA RESOLUCION MD Nº **0950** DE 2020
(Junio 11 de 2020)

"POR LA CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNAS DECISIÓNES JUDICIALES"

Congreso y a cada una de sus Cámaras: *"...1. Inmiscuirse, por medio de resoluciones o de leyes, en asuntos de competencia privativa de otras autoridades..."*.

En ese orden, la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes procede al cumplimiento cabal de la decisión judicial proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., antes referidas, adoptando las siguientes decisiones administrativas:

1) Dejar sin efectos la Resolución MD Nº 1207 de 04 de junio de 2017, por medio de la cual se acató el fallo proferido el 26 de abril de 2019 por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso electoral número 11001-03-28-000-2018-00074 (Acumulado), declarando la falta absoluta de la Representante a la Cámara, doctora ÁNGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ y se abstuvo de proveer su reemplazo en virtud de lo dispuesto por el Consejo de Estado, de conformidad con los artículos 134 constitucional y 278 de la Ley 5ª de 1992. Lo anterior en virtud de la decisión proferida por la Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado (Radicado 2019-03079-01- marzo 10 de 2020).

2) Reintegrar a la doctora ÁNGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ al ejercicio de sus funciones congresuales como Representante a la Cámara, de conformidad con la Resolución Nº 1595 de julio 19 de 2018, expedida por el Consejo Nacional Electoral.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Dejar sin efectos la Resolución MD Nº 1207 de junio 04 de 2019, en cumplimiento de las decisiones judiciales proferidas por la Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado (Radicado 2019-03079-01- marzo 10 de 2020) y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. (Radicado 2020-01527-00 - junio 08 de 2020), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Reintegrar a la doctora **ÁNGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ** al ejercicio de sus funciones congresuales como Representante a la Cámara, de conformidad con la Resolución Nº 1595 de julio 19 de 2018, expedida por el Consejo Nacional Electoral. Lo anterior en cumplimiento del fallo de tutela proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. (Radicado 2020-01527-00 - junio 08 de 2020).

ARTICULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., a la Sección Quinta del Consejo de Estado, al Ministerio del Interior, al Consejo Nacional Electoral y al Senado de la República para los fines legales que correspondan.

ARTICULO CUARTO: Envíese copia de la presente Resolución a la Comisión Primera Constitucional, Dirección Administrativa, Oficina Coordinadora del Control Interno, Divisiones de Personal y Servicios, Oficina de Planeación y Sistemas, Secciones de Registro y Control, Pagaduría, Suministros y a la Subsecretaría General de esta Corporación.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

CONTINUACION DE LA RESOLUCION MD Nº **0950** DE 2020
(Junio 11 de 2020)

"POR LA CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNAS DECISIÓNES JUDICIALES"

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra la misma no procede recurso alguno por tratarse de un acto de ejecución (art. 75 C.P.A.C.A.).

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., al día once (11) del mes de junio de 2.020.

CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX
Presidente

OSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES
Primer Vicepresidente

MARÍA JOSE PIZARRO RODRIGUEZ
Segunda Vicepresidenta

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
Secretario General

Proyectó: HERYES TAFUR VÁSQUEZ
Secretaria General de la Cámara de Representantes.
JULIO ALVARADO
Apoyo Jurídico Presidencia de la Cámara de Representantes.

P.L 283/19

LISTADO DE VOTACIÓN

H.R. SIERMBROS DE LA COMISION PRIMERA CONSTITUCIONAL 2018 - 2022							
APELLIDOS Y NOMBRES	PARTIDO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ALBAN URBANO LUIS ALBERTO	FARC	X		X			
ARIAS BETANCURT ERWIN	C. RADICAL	X		X			
ASPRILLA REYES ANTI RAUL	A. VERDE	X		X			
BURGOS LUGO JORGE ENRIQUE	P.U.	X		X			
CALLE AGUAS ANDRÉS DAVID	LIBERAL	X		X			
CORDOBA MANYOMA NILTON	LIBERAL	X		X			
DAZA IGUARAN JUAN MANUEL	C. DEMOCRATICO	X		X			
DELUQUE ZULETA ALFREDO RAFAEL	P.U.	X		X			
DIAZ GRANADO ELBERT	P.U.	X		X			
ESTUPIÑAN CALVACHE HERNÁN GUSTAVO	LIBERAL	X		X			
GUEBERTUS ESTRADA JUANITA MARÍA	A. VERDE	X		X			
GONZALEZ GARCIA HANKY GIOVANNY	LIBERAL	X		X			
HOYOS GARCIA JOHN JAIRO	P.U.	X		X			
LEÓN LEÓN BUENAVENTURA	CONSERVADOR	X		X			
LOPEZ JIMENEZ JOSE DANIEL	C. RADICAL	X		X			
LORDUY MALDONADO CESAR AUGUSTO	C. RADICAL	X		X			
LOSADA VARGAS JUAN CARLOS	LIBERAL	X		X			
MAFUT VARGAS ADRIANA MAGALI	CONSERVADOR	X		X			
MENDEZ HERNANDEZ JORGE	C. RADICAL	X		X			
NAVAS TALERO CARLOS GERMAN	POLO	X		X			
PADILLA OROZCO JOSE GUSTAVO	CONSERVADOR	X		X			
PETRADO RAMIREZ JULIAN	LIBERAL	X		X			
PRADA ARTUNDUAGA ALVARO HERNAN	C. DEMOCRATICO	X		X			
PULIDO NOVOA DAVID ERNESTO	C. RADICAL	X		X			
RESTREPO ARANGO MARGARITA MARIA	C. DEMOCRATICO	X		X			
REYES KURI JUAN FERNANDO	LIBERAL	X		X			
RODRÍGUEZ CONTRERAS JAIME	C. RADICAL	X		X			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HOWARD DAVID	C. DEMOCRATICO	X		X			
SANCHEZ LEON OSCAR HERNAN	LIBERAL	X		X			
SANTOS GARCÍA GABRIEL	C. DEMOCRATICO	X		X			
TAMAYO MARULANDA JORGE ELIECER	P.U.	X		X			
TRIANA QUINTERO JULIO CESAR	C. RADICAL	X		X			
USCATEGUI PASTRANA JOSE JAIME	C. DEMOCRATICO	X		X			
VALLEJO CHUJFI GABRIEL JAIME	C. DEMOCRATICO	X		X			
VEGA PEREZ ALEJANDRO ALBERTO	LIBERAL	X		X			
VILLAMIZAR MENESES OSCAR LEONARDO	C. DEMOCRATICO	X		X			
WILLS OSPINA JUAN CARLOS	CONSERVADOR	X		X			
	TOTAL	33		33			

FECHA Julio 12/2020
Acta 53

Ponente.

ANDI MÁS PAÍS

Junio 12/2020 Acta 53

DOCUMENTO

Proyecto de Ley No. 283 de 2019 de Cámara "Por medio del cual se sustituye el título XI de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente de la Ley 599 de 2000"

Con ocasión de proyecto de ley que actualmente cursa en la comisión I de la Cámara de Representantes y sobre la cual ya se radicó ponencia positiva, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) se permite presentar las siguientes consideraciones con el fin de que respetuosamente sean tenidas en cuenta dentro de la discusión de la iniciativa legislativa de la referencia:

I. El Derecho Penal es la *última ratio* en la que el Estado despliega su máximo poder coercitivo para castigar severamente las conductas que afectan la estabilidad de la sociedad y los derechos más importantes de sus habitantes.

La Corte Constitucional ha sido reiterativa en desarrollar el principio en virtud del cual las sanciones penales deben ser las últimas y más extremas medidas a utilizar por parte del ordenamiento jurídico para prevenir o sancionar determinada conducta.

En materia de legalidad es importante señalar que muchos de los tipos penales propuestos no cumplen con los requisitos mínimos de la tipicidad; principio que resguarda el debido proceso y que exige que las normas penales establezcan clara e inequívocamente las conductas con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dan lugar a la sanción.

Es importante precisar que las sanciones penales no pueden corresponder a conductas o elementos indeterminados como la conducta que se relaciona en el artículo 335 correspondiente a la Contaminación ambiental: *"el que (...) contamine o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, disposiciones o ruidos en el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, o demás recursos naturales incurrirá"*.

Es por esto que con este tipo penal se considera que no hay claridad con respecto a la conducta punible, toda vez que el artículo propuesto incluye expresiones sujetas a la interpretación y la subjetividad del juzgador.

ANDI MÁS PAÍS

DOCUMENTO

Frente a este punto es necesario señalar que pueden presentarse casos en los que una actividad ilícita se encuentre, debido a circunstancias excepcionales por fuera de los parámetros establecidos en la reglamentación ambiental. Con lo cual, bajo el entendido que todas las actividades humanas están sujetas a errores, debería permitirse, antes de constituirse en un hecho punible, la posibilidad de corregir o contrarrestar la situación. En ese sentido, por ser el proceso penal, la "ultima ratio", se debería determinar que sólo en los casos en los que no se corrija, o cuando se realice la actividad sin autorización, esta conducta sea punible.

Además, dentro del análisis también se debe considerar que se está sancionando penalmente actividades que en algunos casos no tienen norma de referencia para determinar su incumplimiento.

Así las cosas, las autoridades ambientales, las licencias y los permisos ambientales han permitido un mínimo grado de impacto ambiental cuando sus consecuencias son tolerables y manejadas conforme protocolos, medidas técnicas y compensaciones adecuadas, sin que ello se configure en un delito.

ii. No se considera proporcional ni jurídicamente viable establecer el impacto ambiental como elemento para imponer una sanción penal.

El Estudio de Impacto Ambiental que se requiere para la obtención de la licencia ambiental ha sido definido como *"el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que se requiera licencia ambiental de acuerdo con la ley y este reglamento. Este estudio deberá corresponder en su contenido y profundidad a las características y entorno del proyecto, obra o actividad[1]"*.

Este estudio busca tener información del medio biótico, físico y social de manera previa al proyecto y con base en sus resultados se establecen las medidas de manejo que permitan la mitigación y compensación de los impactos.

Ahora bien, en el caso de la industria petrolera no toda la infraestructura cuenta con estudios de impacto ambiental que permitan determinar cómo

[1] Tomado de la página de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, http://portal.anla.gov.co/estudio-impacto-ambiental

ANDI MÁS PAÍS

DOCUMENTO

se encontraba el área antes del proyecto. Así mismo, en Colombia diferentes industrias no requieren de licencia ambiental y por lo tanto no tienen obligación de presentar un estudio de este tipo. Por lo anterior, al incluir el Impacto ambiental como un elemento para la agravación de la pena, se podría llegar a una decisión basada en un estudio de impacto ambiental que no incluya información previa al proyecto que permita comparar y determinar el verdadero impacto generado por el sujeto objeto de la investigación penal. Lo anterior, con varios agravantes dentro de los que se destaca que en un mismo territorio pueden confluir varias actividades y los impactos pueden ser acumulativos. Por lo tanto, un estudio de impacto ambiental que busque determinar la comisión de un delito, podría no tener en cuenta dicha circunstancia y considerar que si se configuró, sin tener en cuenta la totalidad de intervinientes en el territorio.

Conclusión:

Por las razones anteriormente expuestas, consideramos inconveniente la aprobación del proyecto de ley y, en consecuencia, solicitamos el **ARCHIVO** del mismo.

Cordialmente,

Alberto Echavarría Saldarriaga
Vicepresidente de Asuntos Jurídicos

Bogotá, Junio 12 de 2020

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

Bogotá D.C., 11 de junio de 2020

Honorable Representante
JUAN CARLOS LOZADA VARGAS
Presidente
Comisión Primera Constitucional
Cámara de Representantes
Ciudad.

Aprobado 12/2020. Junio Ader 53

Ref: Informe Subcomisión – Estudio proposiciones Py de Ley No 283 de 2019 Cámara.

Respetado señor Presidente:

En cumplimiento de la honrosa designación que nos ha hecho la Mesa Directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para el estudio de las proposiciones presentadas al Proyecto de Ley número 283 de 2019 Cámara, *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000"*, los firmantes, nos permitimos rendir el siguiente Informe.

Para el proyecto de Ley 283 de 2019, *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000"*, se recibieron un total de **setenta y cinco (75) proposiciones** por parte de los Honorables Representantes de la Comisión Primera, así:

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

AUTOR	No PROP	AVALADAS TOTAL O PARCIALMENTE	NO AVALADAS	SUSTENTO NO AVALADAS
ERWIN ARIAS	3	AVALADAS: [3] [1] PARCIALMENTE AL ARTÍCULO 1 QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 328, 328A, 329, 329A, 329B, 329C, 330, 330A, 330B, 330C, 330D, 331, 331A, 331B, 332, 334, 334A, 355, 335A, 335B, 335C, 335D, 336, 336A, 337 Y 338. [1] AL ARTÍCULO 330B [1] AL ARTÍCULO 338.		
INTI ASPRILLA	2	AVALADAS: [1] [1] PARCIALMENTE AL ARTÍCULO 338D.	NO AVALADAS: [1] [1] AL ARTÍCULO 330.	LA MODIFICACIÓN PODRÍA GENERAR UN PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD A AQUELLOS CIUDADANOS QUE YA HAN SIDO JUZGADOS Y CONDENADOS POR EL DELITO AL DÍA DE HOY.
JORGE BURGOS	1		NO AVALADAS: [1] [1] AL ARTÍCULO 329A.	NO SE PROPONE UNA MODIFICACIÓN TAXATIVA AL ARTICULADO.
ALFREDO DELUQUE	3	AVALADAS: [2] [1] PARCIALMENTE AL ARTÍCULO 1 QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 328, 328A, 329, 329A, 329B, 329C, 330, 330A, 330D, 330C, 330D, 331, 331A, 331B, 332, 332A, 334, 334A, 355, 335A, 335B, 335C, 335D, 336, 336A, 337 Y 338 (1) AL ARTÍCULO 3.	NO AVALADAS: [1] (1) AL ARTÍCULO 330A.	POR ESTRICTA LEGALIDAD Y TIPICIDAD SE DEBE DEJAR CLARO QUE LA CONDUCTA QUE SE PENALIZA ES SOLO AQUELLA QUE CAUSE DAÑO DEL PERMISO. SI SE ELIMINA, SE PODRÍA PERSEGUIR INCLUSO LAS ACTIVIDADES LICITAS EXISTE EL COMERCIO LEGAL DE ANIMALES SILVESTRES BAJO LA CONVENCIÓN CITES.

Capitolio Nacional, Calle 10 No 7-50

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

JUANITA GOEBERTUS	1	**AVALADAS: [1]** **(1)** ARTÍCULO NUEVO		
BUENAVENTURA LEÓN	9	**AVALADAS: [9]** **(1) PARCIALMENTE** AL ARTÍCULO 328. **(1) PARCIALMENTE** AL ARTÍCULO 329. **(1) PARCIALMENTE** AL ARTÍCULO 329A. **(1) PARCIALMENTE** AL ARTÍCULO 329B. **(1) PARCIALMENTE** AL ARTÍCULO 335. **(1) PARCIALMENTE** AL ARTÍCULO 335D. **(1) PARCIALMENTE** AL ARTÍCULO 338. **(1) PARCIALMENTE** AL ARTÍCULO 2. **(1)** ARTÍCULO NUEVO.		
CESAR LORDUY	29	**AVALADAS: (17)** **(1)** AL ARTÍCULO 2, **(1)** AL ARTÍCULO 329 **(1)** AL ARTÍCULO 329C **(1)** AL ARTÍCULO 330B **(1)** AL ARTÍCULO 330C. **(1)** AL ARTÍCULO 332. **(1)** AL ARTÍCULO 332A. **(1)** AL ARTÍCULO 334A **(1)** AL ARTÍCULO 335. **(1)** AL ARTÍCULO 338A. **(1)** AL ARTÍCULO 338B **(1)** AL ARTÍCULO 338C. **(1)** AL ARTÍCULO 357. **(1)** AL ARTÍCULO 328. **(1)** AL ARTÍCULO 338C.	**NO AVALADAS: (12)** **(1)** AL ARTÍCULO 328. **(1)** AL ARTÍCULO 328A ELIMINANDO EL DELITO DE **DESTRUCCIÓN DE CORAL.** **(1)** AL ARTÍCULO 329A ELIMINANDO EL DELITO DE **DEPÓSITO O INYECCIÓN DE SUSTANCIAS EN EL SUELO** **(1)** AL ARTÍCULO 329B ELIMINANDO EL DELITO DE **EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE YACIMIENTO MINERO Y OTROS MATERIALES.** **(1)** AL ARTÍCULO 330 ELIMINANDO EL DELITO DE **APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LOS RECURSOS DE LA FAUNA.** **(1)** AL ARTÍCULO 330A ELIMINANDO EL DELITO DE **TRÁFICO DE FAUNA.** **(1)** AL ARTÍCULO 330D ELIMINANDO EL DELITO **DE ALETEO.** **(1)** AL ARTÍCULO 331 ELIMINANDO EL DELITO DE **APROVECHAMIENTO**	NO SE ACEPTA POR CUANTO SU COMISIÓN GENERA AFECTACIONES GRAVES AL DERECHO CONSTITUCIONAL DE LOS COLOMBIANOS A UN AMBIENTE SANO LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE YACIMIENTO MINERO Y OTROS MATERIALES ESTÁ TIPIFICADA EN EL ACTUAL CÓDIGO PENAL EN EL ARTÍCULO 338. ELIMINARLO GENERARÍA UN PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD.

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

			ILÍCITO DE LOS RECURSOS DE LA FLORA. **(1)** AL ARTÍCULO 331-A ELIMINANDO EL DELITO DE **DEFORESTACIÓN.** **(1)** AL ARTÍCULO 331B ELIMINANDO EL DELITO DE **PROMOCIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA DEFORESTACIÓN.** **(1)** AL ARTÍCULO 333 ELIMINANDO EL DELITO DE **APROVECHAMIENTO DE RECURSOS GENÉTICOS DE LA BIODIVERSIDAD.** **(1)** AL ARTÍCULO 334 ELIMINANDO EL DELITO DE **DESTRUCCIÓN O ALTERACIÓN DE HÁBITAT.**	
ADRIANA MATIZ	2	**AVALADAS: [2]** **(1)** AL ARTÍCULO 328A. **(1)** AL ARTÍCULO 335D.		
JORGE MÉNDEZ	18	**AVALADAS: [7]** **(1)** AL ARTÍCULO 1 QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 330, 330A, 330B, 330C, 330D, 331, 331A, 331B. **(1)** AL ARTÍCULO 1 QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 329A, 329B, 329C Y CREA 1 ARTÍCULO NUEVO 329D. **(1)** AL ARTÍCULO 328A. **(1)** AL ARTÍCULO 330 **(1)** AL ARTÍCULO 330D. **(1)** AL ARTÍCULO 338B. **(1)** AL ARTÍCULO 2.	**NO AVALADAS: [6]** **(1)** AL ARTÍCULO 1 QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 328, 329, 329A, 329B, 330, 330A, 330B, 330C, 331, 331A, 333, 333A 333, 334, 334A, 335, 335A, 335C Y 335D. **(1)** AL ARTÍCULO 329A ELIMINANDO EL DELITO DE **DEPÓSITO O INYECCIÓN DE SUSTANCIAS EN EL SUELO.** **(1)** AL ARTÍCULO 337 ELIMINANDO EL DELITO DE **DESTINACIÓN ILEGAL DE TIERRAS ESTABLECIDAS.** **(1)** AL ARTÍCULO 338G ELIMINANDO LA **EXTINCIÓN DE DOMINIO.** **(1)** AL ARTÍCULO 339 ELIMINANDO LA **MEDIDA CAUTELAR.** **(1)** AL ARTÍCULO 3 ELIMINANDO LA **PEDAGOGÍA SOBRE EL AMBIENTE.**	POR ESTRICTA LEGALIDAD Y TIPICIDAD SE DEBE DEJAR CLARO QUE LA CONDUCTA QUE SE PENALIZA ES SOLO AQUELLA QUE CARECE DEL PERMISO. SI SE QUITA, SE PODRÍA PERSEGUIR INCLUSO LAS ACTIVIDADES LÍCITAS. NO ES DE RECIBO ELIMINAR LOS NUEVOS DELITOS PROPUESTOS POR LA PONENCIA, TODA VEZ QUE SU COMISIÓN GENERA AFECTACIONES GRAVES AL DERECHO CONSTITUCIONAL DE LOS COLOMBIANOS A UN AMBIENTE SANO.

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

GERMAN NAVAS	1	**AVALADAS: [1]** **(1)** AL NOMBRE DEL TÍTULO XI		
ÁLVARO PRADA	4	**AVALADAS: [3]** **(1)** AL ARTÍCULO 328 **(1)** AL ARTÍCULO 334A **(1)** AL ARTÍCULO 338	**NO AVALADAS: [1]** **(1)** AL ARTÍCULO 329A ELIMINANDO EL **DELITO DE DEPÓSITO O INYECCIÓN DE SUSTANCIAS EN EL SUELO.**	NO ES DE RECIBO ELIMINAR LOS NUEVOS DELITOS PROPUESTOS POR LA PONENCIA, TODA VEZ QUE SU COMISIÓN GENERA AFECTACIONES GRAVES AL DERECHO CONSTITUCIONAL DE LOS COLOMBIANOS A UN AMBIENTE SANO.
EDWARD RODRÍGUEZ	4	**AVALADAS: [3]** **(1) PARCIALMENTE** AL ARTÍCULO 338B **(1)** ARTÍCULO NUEVO **(1) PARCIALMENTE** AL ARTÍCULO 1 ELIMINANDO LOS ARTÍCULOS 329, 329A, 329B Y 329C ELIMINANDO LOS DELITOS DE **APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LOS RECURSOS DE LA TIERRA, DEL SUELO Y DEL SUBSUELO, DEPÓSITO O INYECCIÓN DE SUSTANCIAS EN EL SUELO, EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE YACIMIENTO MINERO Y OTROS MATERIALES Y FRACKING**	**NO AVALADAS: [1]** **(1)** AL ARTÍCULO 338	
OMAR DARTOS	1	**AVALADAS: [1]** **(1)** AL ARTÍCULO 329C		
GABRIEL VALLEJO	1	**AVALADAS: 1** **(1) PARCIALMENTE** AL ARTÍCULO 1 QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 328, 328A, 329, 329A, 329B, 329C, 330, 330A, 330B, 330C, 330D, 331, 331A, 331B, 332, 332A, 334,		

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

		334A, 335, 335A, 335B, 335C, 335D, 336, 336A, 337, 338, 338A, 338B Y 339C.		
JUAN CARLOS WILLS	1	**AVALADAS: [1]** **(1)** AL ARTÍCULO 329C		

Sobre la base del análisis integral de las proposiciones, las modificaciones aceptadas y realizadas, entre ellas la supresión del concepto de Impacto Ambiental (IA), como criterio para determinar la sanción a imponer, y la creación de nuevos artículos se hizo necesario traer al proyecto dos (2) artículos vigentes del Código Penal con modificaciones, a saber: el **Artículo 58** (Circunstancias de mayor punibilidad) y el **Artículo 331** (Daños en los recursos naturales).

Respecto a las proposiciones de eliminar los delitos nuevos, de: a) Destrucción de Coral (Art. 328A), b) Depósito o inyección de sustancias en el suelo (Art. 329A), c) Aprovechamiento ilícito de los recursos de la Fauna (Art. 330), d) Tráfico de Fauna (Art. 330A), e) Aleteo (Art. 330D), f) Aprovechamiento ilícito de los recursos de la Flora (Art. 331), g) Deforestación (Art. 331A), h) Promoción y financiación de la Deforestación (Art. 331B), i) Aprovechamiento de recursos genéticos de la biodiversidad (Art. 333), j) Destrucción o alteración de hábitat (Art. 334), k) Alteración al Paisaje (Art. 334A), no fueron aceptadas. Se **acogieron cincuenta (52) proposiciones con modificaciones parciales** sobre este articulado, ajustando su contenido.

El detalle de cada proposición, por artículo y autor, puede ser consultado en el documento "*COMISIÓN ACCIDENTAL PL 283 – ANÁLISIS DE PROPOSICIONES*" adjunto. Con en base en todo lo anterior, se propone el siguiente texto de articulado para ser discutido y votado en Comisión, así:

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

TEXTO ACORDADO

PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 283 DE 2019 CÁMARA "Por medio del cual se sustituye el Título XI, *"De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente"* de la ley 599 del 2000 ***y se dictan otras disposiciones***".

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

ARTÍCULO 1o. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:

"TÍTULO XI.
DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO I.
DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS DEL AGUA Y DEL SUELO

ARTÍCULO 328. Aprovechamiento ilícito de las aguas y de sus recursos biológicos. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, use, explore, aproveche o se beneficie de las aguas o de los especímenes, productos o partes de los recursos hidrobiológicos, biológicos o pesqueros de las aguas y del suelo o el subsuelo del mar territorial o de la zona económica de dominio continental e insular de la República, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de ciento treinta y*

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental grave o ecocida, la prisión será de ciento ochenta (180) a doscientos setenta (270) meses y multa de veinticinco mil (25.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 328.~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se desvíe, destruya, inutilice o haga desaparecer los cuerpos hídricos, sus recursos hidrobiológicos o pesqueros.

ARTÍCULO 328A. Destrucción de coral. *El que destruya, inutilice, altere,* ***sustraiga total o parcialmente,*** *haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe arrecife coralino, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de quinientos (500) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental grave o ecocida, la prisión será de ciento ochenta (180) a doscientos setenta (270) meses y multa de quinientos (500) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 328.~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se desvíe, destruya, inutilice o haga desaparecer los cuerpos hídricos o sus recursos hidrobiológicos ***o mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna.***

ARTÍCULO 328B. Comercio ilícito de coral. El que con incumplimiento de las normas vigentes trafique, comercie o adquiera coral, productos o partes de este, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

multa de trescientos (300) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~ARTÍCULO 329. Aprovechamiento ilícito de los recursos de la tierra, del suelo y sus componentes. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes realice arroje, introduzca, extraiga, explore, trafique, comercie, transporte o suministre a cualquier título los componentes primarios de la tierra, del suelo o del subsuelo o provoque o realice disparos o vibraciones en el suelo o el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de ciento ocho (108) a ciento sesenta y dos (162) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.~~

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental grave o ecocida, la prisión será de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 328.~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se desvíe, destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.

ARTÍCULO 329. Destrucción del suelo. El que destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de quinientos (500) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental grave o ecocida, la prisión será de ciento ochenta (180) a doscientos setenta (270) meses y multa de quinientos (500) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 328.~~

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

~~(252) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta~~

ARTÍCULO 329A. Depósito o inyección de sustancias en el suelo. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes realice inyección o depósito de sustancias que generen daños en el ambiente, en el suelo o en el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en* ~~la~~ *prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes,* ~~de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 328.~~

~~La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se desvíe, destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.~~

ARTÍCULO 329B. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes excave, explote, explore o extraiga yacimiento minero, arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental grave o ecocida, la prisión será de ciento ochenta (180) a doscientos setenta (270) meses y multa de quinientos (500) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 328.~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se realice a través de minería a cielo abierto ~~o con la~~

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el nido, [illegible]

[illegible] del método de fractura hidráulica, incurrirá, sin perjuicio de las [illegible] mayores y multa de [illegible] mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental [illegible] de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de [illegible] mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa [illegible]

CAPÍTULO II.
DE LOS DELITOS CONTRA LA BIODIVERSIDAD DE LA FAUNA Y DE LA FLORA

ARTÍCULO 330. Aprovechamiento ilícito de los recursos de la fauna. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, capture, extraiga, transporte, mantenga, comercie, aproveche, explote o se beneficie de la fauna, o realice actividades que impidan o dificulten su reproducción, crecimiento o migración incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental [illegible]

Capitolio Nacional, Calle 10 No 7-50

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

[illegible] de noventa y seis (96) a doscientos ocho (208) meses y multa de [illegible] mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa ***en zona protegida o prohibida, área de reserva,*** *en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, prohibidas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.*

ARTÍCULO 330A. Tráfico de fauna. *El que trafique o trafique sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes* ***trafique o*** *adquiera especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas o invasoras incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de trescientos (300) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental [illegible] de ciento ocho (108) a doscientos (200) meses y multa de [illegible] mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 330B. Caza ilegal. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, cazare en*

Capitolio Nacional, Calle 10 No 7-50

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

época de veda o excediere el número de piezas permitidas, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá quien realice esta depredación.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental [illegible] de sesenta y ocho (68) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de [illegible] mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa ***en zona protegida o prohibida, área de reserva, en época de veda,*** *en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.*

ARTÍCULO 330C. Pesca ilegal. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese, envase o almacene ejemplares o productos de especies protegidas, vedadas, prohibidas o en peligro de extinción, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

En la misma pena incurrirá el que exceda el número de individuos o de piezas autorizadas, comercialice por debajo de las tallas permitidas, o utilice instrumentos, aparejos y artes de pesca no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente para cualquier especie.

Capitolio Nacional, Calle 10 No 7-50

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental [illegible] de noventa y seis (96) a doscientos ocho (208) meses y multa de [illegible] mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en zona protegida o prohibida, área de reserva o zonas o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva, se construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ríos, ciénagas, lagunas, caños y canales o con la conducta se desequen, varíen o bajen su nivel, o se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 330D. Aleteo. *El que cercene aletas de tiburón, las retenga y descarte el resto del cuerpo al mar, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental [illegible] de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de [illegible] mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en zonas protegidas o prohibidas, áreas de reserva o zonas o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de aparejos y artes de pesca prohibidos o no autorizados, venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables [illegible] *se construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de*

Capitolio Nacional, Calle 10 No 7-50

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

los peces en los mares, ríos, ciénagas, lagunas, caños y canales o con la conducta se deseguen, varíen o bajen su nivel, o se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 331. Aprovechamiento ilícito de los recursos de la flora. *El que sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, adquiera, recolecte, extraiga, corte, tale, arranque, posea, destruya, transporte, trafique, comercie, aproveche o se beneficie de las especies de la flora silvestre o acuática, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental y/o social, o sobre los ecosistemas, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 333.~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva climática, zonas o áreas de reserva, en período de producción de semillas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 331A. Deforestación. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, tale, queme, corte o destruya, en todo o en parte bosques naturales, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental y/o social, o sobre los ecosistemas, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos diecisiete (217) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 333.~~

Capitolio Nacional, Calle 10 No 7-50

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

~~salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 333.~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, reserva climática, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se altere las aguas, se ocasione erosión del suelo, se modifique el régimen climático, se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

Cuando la tala o la quema ilegal de árboles o la deforestación se produzcan en la cuenca del Amazonas, en la Sierra Nevada de Santa Marta o en el Chocó, el delito se aumentará al doble de la pena prevista en el presente artículo.

ARTÍCULO 331B. Promoción y financiación de la Deforestación. *El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte o destrucción, en todo o en parte de bosques naturales, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental y/o social, o sobre los ecosistemas, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos diecisiete (217) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 333.~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, reserva climática, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se altere las aguas, se ocasione erosión del suelo, se modifique el régimen climático, se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

Capitolio Nacional, Calle 10 No 7-50

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

ARTÍCULO 332. Manejo ilícito de especies exóticas. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes introduzca, trasplante, manipule, experimente, mantenga, comercie, inocule, libere o propague especies silvestres exóticas o invasoras, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento a ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental y/o social, o sobre los ecosistemas, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos diecisiete (217) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 333.~~

ARTÍCULO 332A. Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes importe, introduzca, comercialice, exporte, manipule, experimente, libere, inocule, o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos moléculas, sustancias o elementos que constituyan un riesgo o pongan en peligro la salud humana, el ambiente o la existencia de los recursos de la fauna, de la flora o biológicos de las aguas, o alteren perjudicialmente sus poblaciones incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental y/o social, o sobre los ecosistemas, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos diecisiete (217) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 333.~~

Si se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad.

Capitolio Nacional, Calle 10 No 7-50

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

CAPÍTULO III.
DE LOS DELITOS CONTRA LA BIODIVERSIDAD GENÉTICA

ARTÍCULO 333. Aprovechamiento ilícito de recursos genéticos de la biodiversidad. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, exporte, mantenga, trafique, comercie, aproveche, explore, valorice, transforme o se beneficie a cualquier título de los recursos genéticos de la flora o la fauna, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

El que promueva, financie, dirija, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en este artículo, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO IV.
DE LOS DELITOS CONTRA EL HÁBITAT Y EL PAISAJE NATURAL

ARTÍCULO 334. Ecocidio. El que con incumplimiento de la normatividad existente ocasione daño extenso, destrucción parcial o total, o la perdida de uno o más ecosistemas de un territorio específico, con grave afectación para la población de modo que el usufructo pacífico de los habitantes de dicho territorio quede severamente afectado, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las penas se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando:

1. La conducta se realice con fines terroristas.

2. La conducta se realice en parques naturales, zonas de reserva campesina, territorios ancestrales, reserva forestal, zonas de

Capitolio Nacional, Calle 10 No 7-50

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

nacimientos hídricos, reserva climática, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas y/o de importancia ecológica.

PARÁGRAFO: A la misma sanción estará sujeto el propietario de la maquinaria utilizada para perpetrar el acto y el representante legal de la empresa que ocasione la conducta a través de sus operadores siempre que este supiera para los fines que se utilizaría y hubiese tomado las medidas de prevención necesarias para que ocurriere el ecocidio con su maquinaria.

ARTÍCULO 334A. Destrucción o alteración de hábitat. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes destruya o altere hábitat de especies de la flora o de la fauna, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en* ~~la pena establecida en el inciso siguiente:~~

~~El la conducta incurra como consecuencia un impacto ambiental que genere o signifique la destrucción grave de un~~ *prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes,* ~~de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 335.~~

ARTICULO 334B. Daños en los recursos naturales. El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título, o a los que estén asociados con estos, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

~~ARTÍCULO 335. Contaminación del paisaje. El que sin permiso de autoridad competente con incumplimiento de las normas vigentes, provoque, contamine o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, disposiciones o ruidos en el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, o demás recursos naturales incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cincuenta y cinco (55) a ciento doce (112) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.~~

~~Si la conducta incurra como consecuencia un impacto ambiental que genere o signifique la destrucción grave de un ecosistema, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de ciento cuarenta y seis (146) a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 335.~~

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

~~Si la conducta incurra como consecuencia un impacto ambiental que genere o signifique la destrucción grave de un ecosistema, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de ciento cuarenta y seis (146) a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 335.~~

CAPÍTULO V.
DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

ARTÍCULO 335. Contaminación ambiental. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes provoque, contamine o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, disposiciones o ruidos en el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, o demás recursos naturales incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cincuenta y cinco (55) a ciento doce (112) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

~~Si la conducta incurra como consecuencia un impacto ambiental que genere o signifique la destrucción grave de un ecosistema, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de ciento cuarenta y seis (146) a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 335.~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el presente artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.
2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por las normas vigentes o haya infringido más de dos parámetros.
3. Cuando la contaminación, descarga, disposición o vertimiento se realice en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas.

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

4. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, emisiones o disposiciones.
5. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.
6. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de vigilancia y control de la autoridad ambiental.
7. El perjuicio o alteración ocasionados adquieran un carácter catastrófico o irreversible.

ARTÍCULO 335A. Contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes contamine, almacene, transporte, vierta o disponga inadecuadamente, residuo sólido peligroso incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

~~Si la conducta incurra como consecuencia un impacto ambiental que genere o signifique la destrucción grave de un ecosistema, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de ciento cincuenta y seis (156) a trescientos veinte (320) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 335.~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el presente artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.
2. Cuando la descarga o disposición se realice en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas.
3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente la descarga o disposición.

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.
5. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de vigilancia y control de la autoridad ambiental
6. El perjuicio o alteración ocasionados adquieran un carácter catastrófico o irreversible.

ARTÍCULO 335B. Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo. *El que contamine directa o indirectamente la atmosfera, el suelo, el subsuelo o las aguas como consecuencia de la actividad de extracción, excavación, exploración, construcción, inyección, deposito, montaje, explotación, beneficio, transformación o transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

~~Si la conducta incurra como consecuencia un impacto ambiental que genere o signifique la destrucción grave de un ecosistema, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de ciento cincuenta y seis (156) a trescientos veinte (320) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 335.~~

Si la conducta se realizare como consecuencia de la minería a cielo abierto la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad de la pena.

ARTÍCULO 335C. Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, realice experimentos, con especies, agentes biológicos o bioquímicos, que constituyan, generen o pongan en peligro o riesgo la salud humana, el ambiente o la existencia de los recursos de la fauna, la flora o biológicos de las aguas, o altere sus poblaciones, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento*

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~*Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental* [illegible] *de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y* [illegible] *dispuesto en el artículo 333.*~~

~~***ARTÍCULO 335D. Aprovechamiento ilícito de residuos.*** *El que sin* [illegible] *normas vigentes se apropie, recoja, transporte, valorice,* [illegible] *de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión* [illegible] *setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos* [illegible]~~

CAPÍTULO VI.
DE LA INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA

ARTÍCULO 336. Invasión de áreas de especial importancia ecológica. *El que invada, permanezca, así sea de manera temporal, o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en áreas de reserva forestal, reserva climática, zonas de nacimientos hídricos, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, definidos en la ley o reglamento, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

~~*Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental* [illegible] *de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta mil* [illegible]~~

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

~~*mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto* [illegible]~~

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente.

ARTÍCULO 336A. Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica. *El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

~~*Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental* [illegible] *de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho* [illegible] *de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 333.*~~

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente.

CAPÍTULO VII.
DE LA DESTINACIÓN ILEGAL DE TIERRAS

ARTÍCULO 337. Destinación ilegal de tierras establecidas. *El que utilice o destine con uso diferente para el cual fueron definidas las tierras establecidas, declaradas, tituladas o delimitadas por autoridad competente, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

En la misma pena incurrirá quien use o destine tierras sobre las cuales se hubiese cometido deforestación para fines distintos a la resiembra o restauración.

Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se impondrá prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa de trescientos (300) a treinta mil (30,000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~*Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental* [illegible] *en el artículo 333.*~~

Artículo 337A. Apropiación ilegal de los baldíos de la nación. El que promueva, financie, ordene, dirija, o suministre medios para la apropiación de baldíos de la nación sin cumplimiento de los requisitos legales con el fin de realizar actividades agroindustriales incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los bienes muebles, inmuebles o semovientes encontrados en los baldíos ilegalmente apropiados.

~~*Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental* [illegible] *de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho* [illegible] *de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 333.*~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en connivencia con grupos armados ilegales o cuando la actividad, además de los fines agroindustriales, constituya la conducta del artículo 323 de lavado de activos.

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

CAPÍTULO VIII.
~~*IMPACTO AMBIENTAL (IA)*~~

~~[illegible]~~

~~*La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio* [illegible] *Impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) que no* [illegible]~~

~~[illegible]~~

~~*La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio* [illegible]~~

~~*CAPÍTULO IX.*~~
DISPOSICIONES COMUNES

ARTÍCULO 338A. Circunstancias de agravación punitiva. *Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán a la mitad cuando:*

1) Se afecten ecosistemas estratégicos que hagan parte de las áreas protegidas del Sistema Nacional, Regional o Local.
2) ~~Cuando~~ El daño ambiental sea consecuencia de la acción u omisión de quienes ejercen funciones de vigilancia y control.
3) Se pongan en peligro la salud humana, las especies de flora, fauna o su hábitat.
4) ~~Cuando~~ Se genere pérdida de biodiversidad.
*5) **Los delitos previstos en este Título ocasionen daño ambiental.***

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

ARTÍCULO 338A. Modalidad culposa. *Si por culpa se ocasionare alguna de las conductas descritas en este título, en los casos en que ello sea posible según su configuración estructural, la pena correspondiente se* ***podrá reducir hasta la mitad, salvo en los eventos en que se hubiere producido algún grado de daño ambiental.***

ARTÍCULO 338B. Extinción de dominio. *Los bienes muebles e inmuebles empleados para el desarrollo de las conductas descritas en este título serán sometidos a extinción de dominio en los términos de la Ley 1708 de 2014.*

Tratándose de animales, estos serán puestos a decomiso y disposición de la autoridad competente.

[illegible]

ARTÍCULO 339. Medida Cautelar. *El juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental."*

[illegible]

Capitolio Nacional, Calle 10 No 7-50

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

ARTÍCULO 2° Modifíquese el numeral 14 del artículo 58 de la ley 599 del 2000 el cual quedará así:

"[...]

14. Cuando se produjere un daño ambiental grave o crítico, se genere pérdida de biodiversidad, modificación irreversible de ecosistemas naturales o se destruya, inutilice o haga desaparecer un recurso natural."

ARTÍCULO 3°. Pedagogía sobre el ambiente. Los establecimientos educativos de educación básica, media y universitaria podrán incluirán en su Proyecto Educativo Institucional, una catedra ambiental que busque la compresión, el fomento y la participación ciudadana para generar conciencia ambiental sobre el buen uso de los recursos naturales, las practicas que son contrarias a la sostenibilidad, la importancia de las áreas de especial importancia ecológica y las regulaciones y leyes sobre la materia.

Las universidades atendiendo su autonomía igualmente podrán considerar incluir dicho proyecto de formación.

PARÁGRAFO. El Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación promoverán programas de formación docente para el desarrollo de las mencionadas estrategias.

ARTÍCULO 4°. Los recursos provenientes de las multas establecidas en el presente título, se destinaran a la Subcuenta de apoyo a la gestión ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y se destinarán al financiamiento de proyectos, planes, programas y actividades que procuren reparar o mitigar el impacto ambiental negativo, que se generó en virtud de los delitos contra el ambiente.

ARTÍCULO 5°. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia seis (6) meses después de la fecha de su promulgación y deroga el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos

Capitolio Nacional, Calle 10 No 7-50

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000.

En este sentido se rinde el informe de la subcomisión.

Cordialmente

JUAN CARLOS LOZADA VARGAS –C	**HARRY GIOVANNY GONZALEZ**
BUENAVENTURA LEÓN LEÓN	**JUAN CARLOS WILLS OSPINA**
ERWIN ARIAS BETANCUR	**JORGE MENDEZ HERNANDEZ**

Capitolio Nacional, Calle 10 No 7-50

INFORME DE SUBCOMISIÓN
Proyecto de Ley No 283 de 2019 - Cámara.

JORGE ENRIQUE BURGOS LUGO	**ALFREDO RAFAEL DELUQUE**
GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI	**EDWARD DAVID RODRIGUEZ**
JUANITA MARÍA GOEBERTUS	**CARLOS GERMÁN NAVAS TALERO**
LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO	

Capitolio Nacional, Calle 10 No 7-50

P.L 302/19

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

P.L 302/19. Aprobado 12 Antecedente Título y Pregu

LISTADO DE VOTACION

H.R. MIEMBROS DE LA COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL 2018 - 2022

APELLIDOS Y NOMBRES	PARTIDO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ALDAN URBANO LUIS ALBERTO	FARC	X		X		X			
ARIAS BETANCURT ERWIN	C. RADICAL	X		X		X			
ASPRILLA REYES INTI RAUL	A. VERDE	X		X		X			
BURGOS LUGO JORGE ENRIQUE	P.U	X		X		X			
CALLE AGUAS ANDRES DAVID	LIBERAL	X		X		X			
CORDOBA MANYOMA NILTON	LIBERAL	X		X		X			
DAZA IGUARAN JUAN MANUEL	C. DEMOCRATICO	X		X		X			
DELUQUE ZULETA ALFREDO RAFAEL	P.U	X		X		X			
DIAZ LOZANO ELBERT	P.U.	X		X		X			
ESTUPIÑAN CALVACHE HERNAN GUSTAVO	LIBERAL	X		X		X			
GOEBERTUS ESTRADA JUANITA MARIA	A. VERDE	X		X		X			
GONZALEZ GARCIA HARRY GIOVANNY	LIBERAL	X		X		X			
HOYOS GARCIA JOHN JAIRO	P.U.	X		X		X			
LEON LEON GUINAVENTURA	CONSERVADOR	X		X		X			
LOPEZ JIMENEZ JOSE DANIEL	C. RADICAL			X		X			
LOZADA MALDONADO CESAR AUGUSTO	C. RADICAL	X		X		X			
LOSADA VARGAS JUAN CARLOS	LIBERAL	X		X		X			
MATIZ VARGAS ADRIANA MAGALI	CONSERVADOR	X		X		X			
MENDEZ HERNANDEZ JORGE	C. RADICAL	X		X		X			
NAVAS TALERO CARLOS GERMAN	P.U.D	X		X		X			
PADILLA OROZCO JOSE GUSTAVO	CONSERVADOR	X		X		X			
PINTO HERNANDEZ JULIAN	LIBERAL	X		X		X			
PRADA ARTUNDUAGA ALVARO HERNAN	C. DEMOCRATICO	X		X		X			
PULIDO NOVOA DAVID ERNESTO	C. RADICAL	X		X		X			
RESTREPO ARANGO MARGARITA MARIA	C. DEMOCRATICO	X		X		X			
REYES KURI JUAN FERNANDO	LIBERAL	X		X		X			
ROBLEDO GOMEZ ANGELA MARIA	C. HUMANA	No Votó		No Votó		No Votó			
RODRIGUEZ CONTRERAS JAIME	C. RADICAL	X		X		X			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDWARD DAVID	C. DEMOCRATICO	X		X		X			
SANCHEZ LEON OSCAR HERNAN	LIBERAL	X		X		X			
SANTOS GARCIA GABRIEL	C. DEMOCRATICO	X		X		X			
TAMAYO MARULANDA JORGE ELIECER	P.U.	X		X		X			
TRIANA QUINTERO JULIO CESAR	C. RADICAL								
USCATEGUI PASTRANA JOSE JAIME	C. DEMOCRATICO	X		X		X			
VALLEJO CHUJFI GABRIEL JAIME	C. DEMOCRATICO	X		X		X			
VEGA PEREZ ALEJANDRO ALBERTO	LIBERAL	X		X		X			
VILLAMIZAR MENESES OSCAR LEONARDO	C. DEMOCRATICO	X		X		X			
WILLS OSPINA JUAN CARLOS	CONSERVADOR	X		X		X			
	TOTAL	30		30		30			

FECHA Junio 12/2020
Acta 53

Ponente: Los Mismos

José Daniel López
#AccionesQueSeNot

Bogotá D.C., 08 de junio de 2020

Actas 53 Constancia junio 12

Señor
JUAN CARLOS LOSADA
Presidente
COMISIÓN PRIMERA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
Ciudad

Asunto: Proposición para adicionar un parágrafo al artículo 7 del Proyecto de Ley 302 de 2019 Cámara "Por el cual se adoptan medidas de lucha contra el dopaje en el deporte".

Respetado Señor Presidente:

Con fundamento en lo contemplado en la Ley 5ª de 1992 y las normas concordantes, presento proposición para adicionar un parágrafo al artículo 7 del Proyecto de Ley 302 de 2019 Cámara "Por el cual se adoptan medidas de lucha contra el dopaje en el deporte", el cual quedará así:

ARTÍCULO 7°. INTEGRACIÓN. Las Salas del Tribunal Disciplinario Antidopaje estarán integradas cada una por tres (3) miembros: dos (2) profesionales del derecho y un (1) médico especialista en medicina del deporte.

Como mecanismo de conformación de las salas, los miembros designados saldrán de convocatoria publica previamente establecida, conjuntamente, por los Presidentes del Comité Olímpico y Paralímpico Colombiano y la Asociación Colombiana de Medicina del Deporte – AMEDCO -. Todos los miembros deberán acreditar experiencia relacionada en el Sector del Deporte.

Los miembros abogados serán propuestos por los Comités Olímpico y Paralímpico Colombiano y los miembros médicos serán propuestos por la Asociación Colombiana de Medicina del Deporte – AMEDCO -.

Los miembros del Tribunal Disciplinario Antidopaje, serán escogidos para un periodo de cuatro (4) años.

José Daniel López
#AccionesQueSe

Los integrantes del Tribunal Disciplinario Antidopaje, expedirán su reglamento de funcionamiento, en el cual se darán su propia organización administrativa, eligiendo para el efecto los presidentes de las salas y el presidente de la Corporación.

PARAGRAFO 1: En cada una de las Salas del Tribunal Disciplinario Antidopaje deberá haber como mínimo un miembro de cada género.

PARAGRAFO 2: No podrán ser elegidos miembros del Tribunal Disciplinario Antidopaje:

1. Quien hubiere sido condenados por delitos contra la administración pública, la administración de justicia o la fe pública, o condenados a pena privativa de la libertad por cualquier delito, exceptuados los culposos y los políticos.

2. Quien se encuentre suspendido en el ejercicio de su profesión o se hallen excluidos de ella.

3. Los ciudadanos que hubieren sido sancionados disciplinaria, administrativa o fiscalmente por autoridades públicas o por infringir las normas antidopaje.

4. Quienes hayan integrado órganos de administración, de control, comisión técnica y comisión de juzgamiento de los organismos deportivos, en los dos (2) años anteriores al ejercicio del cargo

5. Los médicos que presten o hayan prestado servicios a deportistas federados, dentro de los dos (2) años anteriores al ejercicio del cargo.

Cordialmente,

JOSÉ DANIEL LÓPEZ
Representante a la Cámara por Bogotá

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

Constancia junio 12 Actas 53

PROPOSICIÓN

MODIFIQUESE el **INCISO SEGUNDO** del **ARTICULO 7** del **Proyecto de Ley No. 302 de 2019 Cámara "Por el cual se adoptan medidas de lucha contra el dopaje en el deporte"**, el cual quedará así:

ARTÍCULO 7°. INTEGRACIÓN. Las Salas del Tribunal Disciplinario Antidopaje, estarán integradas cada una por tres (3) miembros: dos (2) profesionales del derecho y un (1) médico especialista en medicina del deporte.

(...)

Como mecanismo de conformación de las salas, los miembros designados saldrán de **convocatoria pública para concurso de mérito**, previamente establecida, conjuntamente, por los Presidentes del Comité Olímpico y Paralímpico Colombiano y la Asociación Colombiana de Medicina del Deporte – AMEDCO -. Todos los miembros deberán acreditar experiencia relacionada en el Sector del Deporte.

(...)

ALFREDO DELUQUE ZULETA
REPRESENTANTE A LA CÁMARA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

PROPOSICIÓN

Elimínense el inciso tercero (3°) del artículo 7° del Proyecto de Ley N° 302 de 2019 Cámara **"Por el cual se adoptan medidas de lucha contra el dopaje en el deporte"**, el cual quedará así:

ARTÍCULO 7°. INTEGRACIÓN. Las Salas del Tribunal Disciplinario Antidopaje, estarán integradas cada una por tres (3) miembros: dos (2) profesionales del derecho y un (1) médico especialista en medicina del deporte.

Como mecanismo de conformación de las salas, los miembros designados saldrán de convocatoria pública previamente establecida, conjuntamente, por los Presidentes del Comité Olímpico y Paralímpico Colombiano y la Asociación Colombiana de Medicina del Deporte – AMEDCO -. Todos los miembros deberán acreditar experiencia relacionada en el Sector del Deporte.

Los miembros abogados serán propuestos por los Comités Olímpico y Paralímpico Colombiano y los miembros médicos serán propuestos por la Asociación Colombiana de Medicina del Deporte – AMEDCO -.

Los miembros del Tribunal Disciplinario Antidopaje, serán escogidos para un periodo de cuatro (4) años.

Los integrantes del Tribunal Disciplinario Antidopaje, expedirán su reglamento de funcionamiento, en el cual se darán su propia organización administrativa, eligiendo para el efecto los presidentes de las salas y el presidente de la Corporación.

PARAGRAFO: No podrán ser elegidos miembros del Tribunal Disciplinario Antidopaje:

1. Quien hubiere sido condenados por delitos contra la administración pública, la administración de justicia o la fe pública, o condenados a pena privativa de la libertad por cualquier delito, exceptuados los culposos y los políticos.
2. Quien se encuentre suspendido en el ejercicio de su profesión o se hallen excluidos de ella.
3. Los ciudadanos que hubieren sido sancionados disciplinaria, administrativa o fiscalmente por autoridades públicas o por infringir las normas antidopaje.
4. Quienes hayan integrado órganos de administración, de control, comisión técnica y comisión de juzgamiento de los organismos deportivos, en los dos (2) años anteriores al ejercicio del cargo
5. Los médicos que presten o hayan prestado servicios a deportistas federados, dentro de los dos (2) años anteriores al ejercicio del cargo.

JORGE ELIÉCER TAMAYO MARULANDA
Representante a la Cámara

PROPOSICIÓN MODIFICATIVA

Modifíquese el artículo 7 del Proyecto de Ley No. 302 de 2019 Cámara **"Por el cual se adoptan medidas de lucha contra el dopaje en el deporte"**, para que quede así:

ARTÍCULO 7°. INTEGRACIÓN. Las Salas del Tribunal Disciplinario Antidopaje, estarán integradas cada una por tres (3) miembros: dos (2) profesionales del derecho y un (1) médico especialista en medicina del deporte.

Como mecanismo de conformación de las salas, los miembros designados saldrán de **un** ~~convocatoria pública~~ **concurso de méritos** previamente establecida**s**, conjuntamente, por los Presidentes del Comité Olímpico y Paralímpico Colombiano y la Asociación ~~Colombiana~~ de Medicina del Deporte **de Colombia** – AMEDCO -. Todos los miembros deberán acreditar experiencia relacionada en el Sector del Deporte.

Los miembros abogados serán propuestos por los Comités Olímpico y Paralímpico Colombiano y los miembros médicos serán propuestos por la Asociación Colombiana de Medicina del Deporte **de Colombia** – AMEDCO -.

Los miembros del Tribunal Disciplinario Antidopaje, serán escogidos para un periodo de cuatro (4) años.

Los integrantes del Tribunal Disciplinario Antidopaje, expedirán su reglamento de funcionamiento, en el cual se darán su propia organización administrativa, eligiendo para el efecto los presidentes de las salas y el presidente de la Corporación.

PARAGRAFO: No podrán ser elegidos miembros del Tribunal Disciplinario Antidopaje:

1. Quien hubiere sido condenados por delitos contra la administración pública, **contra** la ~~administración de justicia~~ **la eficaz y recta impartición de justicia,** o **contra** la fe pública, o condenados a pena privativa de la libertad por cualquier delito, exceptuados los culposos y los políticos.
2. Quien se encuentre suspendido en el ejercicio de su profesión o se hallen excluidos de ella.
3. Los ciudadanos que hubieren sido sancionados disciplinaria, administrativa o fiscalmente por autoridades públicas o por infringir las normas antidopaje.
4. Quienes hayan integrado órganos de administración, de control, comisión técnica y comisión de juzgamiento de los organismos deportivos, en los dos (2) años anteriores al ejercicio del cargo
5. Los médicos que presten o hayan prestado servicios a deportistas federados, dentro de los dos (2) años anteriores al ejercicio del cargo.

GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI
Representante a la Cámara por Risaralda
Partido Centro Democrático

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

PROPOSICIÓN

MODIFIQUESE el **ARTICULO 7** del **Proyecto de Ley No. 302 de 2019 Cámara "Por el cual se adoptan medidas de lucha contra el dopaje en el deporte"**, el cual quedará así:

ARTÍCULO 7°. INTEGRACIÓN. Las Salas del Tribunal Disciplinario Antidopaje, estarán integradas cada una por tres (3) miembros: **un (1) profesionales del derecho, (1) psicólogo y** un (1) médico especialista en medicina del deporte.

Como mecanismo de conformación de las salas, los miembros designados saldrán de **convocatoria pública** previamente establecida, conjuntamente, por los Presidentes del Comité Olímpico y Paralímpico Colombiano y la Asociación Colombiana de Medicina del Deporte – AMEDCO -. Todos los miembros deberán acreditar experiencia relacionada en el Sector del Deporte.

El miembro abogado será propuesto por los Comités Olímpico y Paralímpico Colombiano y los miembros **psicólogo y médico especialista en medicina del deporte** serán propuestos por la Asociación Colombiana de Medicina del Deporte – AMEDCO -.

Los miembros del Tribunal Disciplinario Antidopaje, serán escogidos para un periodo de cuatro (4) años.

Los integrantes del Tribunal Disciplinario Antidopaje, expedirán su reglamento de funcionamiento, en el cual se darán su propia organización administrativa, eligiendo para el efecto los presidentes de las salas y el presidente de la Corporación.

PARAGRAFO: No podrán ser elegidos miembros del Tribunal Disciplinario Antidopaje:

1. Quien hubiere sido condenados por delitos contra la administración pública, la administración de justicia o la fe pública, o condenados a pena privativa de la libertad por cualquier delito, exceptuados los culposos y los políticos.
2. Quien se encuentre suspendido en el ejercicio de su profesión o se hallen excluidos de ella.
3. Los ciudadanos que hubieren sido sancionados disciplinaria, administrativa o fiscalmente por autoridades públicas o por infringir las normas antidopaje.
4. Quienes hayan integrado órganos de administración, de control, comisión técnica y comisión de juzgamiento de los organismos deportivos, en los dos (2) años anteriores al ejercicio del cargo
5. Los médicos que presten o hayan prestado servicios a deportistas federados, dentro de los dos (2) años anteriores al ejercicio del cargo.

ALFREDO DELUQUE ZULETA
REPRESENTANTE A LA CÁMARA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIR

Página 1 de 1

GABRIEL VALLEJO CHUJFI

PROPOSICIÓN MODIFICATIVA

Modifíquese el artículo 9 del Proyecto de Ley No. 302 de 2019 Cámara **"Por el cual se adoptan medidas de lucha contra el dopaje en el deporte"**, para que quede así:

Artículo 9. Modifíquese el artículo 91 de la Ley 30 de 1986, el cual quedara así:

ARTÍCULO 9°- CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN PARA LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO ANTIDOPAJE. Los miembros del Tribunal deberán manifestar los conflictos de interés de acuerdo con lo establecido en la Ley 2013 del 2019.

PARAGRAFO 1. Los impedimentos y recusaciones de los miembros de las Salas serán resueltos por el Tribunal en pleno.

PARAGRAFO 2. En caso de ser aceptado el impedimento y/o recusación de alguno de los integrantes de las salas, el presidente del Tribunal designará su reemplazo, el cual debe ser seleccionado de la lista de elegibles previamente constituida, ~~mediante sorteo~~ **siguiendo el estricto orden de la lista.**

GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI
Representante a la Cámara por Risaralda
Partido Centro Democrático

GABRIEL VALLEJO CHUJFI

PROPOSICIÓN MODIFICATIVA

Modifíquese el artículo 19 del Proyecto de Ley No. 302 de 2019 Cámara **"Por el cual se adoptan medidas de lucha contra el dopaje en el deporte"**, para que quede así:

ARTICULO 19°. RECURSOS. Contra las sentencias expedidas por la Sala Disciplinaria del Tribunal Disciplinario Antidopaje, procederá el recurso de apelación ante la Sala de apelación, o cuando la presunta infracción recaiga sobre un deportista de nivel Internacional, ante el Tribunal Arbitral del Deporte, de conformidad con lo establecido por su federación internacional.

Frente a los autos interlocutorios procederán los **el** recursos de ~~apelación~~ **reposición, y** en subsidio **el** de apelación.

Los demás autos solo serán susceptibles del recurso de reposición.

GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI
Representante a la Cámara por Risaralda
Partido Centro Democrático

El empleo es de todos
Min. Hacienda

2. Despacho del Viceministro General

1.1. Oficina Asesora de Jurídica

Radicado: 2-2020-025307
Bogotá D.C., 11 de junio de 2020 22:49

Honorable Congresista
JUAN CARLOS LOSADA VARGAS
Presidente Comisión Primera Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Carrera 7 Nro. 8-68

Radicado entrada
No. Expediente 22779/2020/OFI

Asunto: Comentarios al texto propuesto en primer debate del Proyecto de Ley No. 302 de 2019 Cámara "por el cual se adoptan medidas de lucha contra el dopaje en el deporte."

Respetado Presidente,

De manera atenta se presentan los comentarios y consideraciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al texto propuesto en primer debate del Proyecto de Ley del asunto en los siguientes términos:

El proyecto de Ley, de iniciativa parlamentaria, de acuerdo con lo contemplado en su artículo 1°, tiene por objeto *"establecer disposiciones que permitan luchar contra el dopaje en el deporte, de conformidad con los parámetros y los estándares de la Agencia Mundial Antidopaje, consagrados en el Código Mundial Antidopaje vigente, buscando la protección de la salud de los deportistas y la preservación del juego limpio."*

Para cumplir con el objeto propuesto, a través del artículo 5° del Proyecto de ley, se propone la creación del *"Tribunal Disciplinario Antidopaje, como un organo independiente de disciplina en la materia, el cual se encargará de juzgar y decidir sobre las posibles infracciones descritas en el Código Mundial Antidopaje y la normatividad nacional vigente, que se presenten en el deporte aficionado, y profesional, convencional y paralímpico."*

En este sentido, sea lo primero señalar que la pretendida modificaría lo dispuesto en el Decreto 1085 de 2015[1], unico reglamentario del Sector Deporte, que ha definido que es el Ministerio del Deporte (antiguo Coldeportes) la entidad reconocida por la Agencia Mundial Antidopaje como la Organización Antidopaje de Colombia responsable por hacer cumplir las normas y directrices de la materia.

[1] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Deporte.





Continuación oficio Página 2 de 2

En este sentido, sería necesario que el citado Ministerio estime si con los recursos que actualmente destina para tal fin podría financiar la puesta en marcha y funcionamiento del nuevo Tribunal pretendido, o en caso contrario, que presente el detalle de los costos que ello implicaría, pues actualmente no se tienen recursos proyectados para tal fin, y tampoco se cuenta con el detalle de requerimientos técnicos, humanos y financieros que permitieran estimar su costo.

Así las cosas, es pertinente reiterar que de acuerdo a la Directiva Presidencial 06 de 2018[2], todo proyecto de Ley de iniciativa o que cuente con respaldo gubernamental y que ocasione impacto fiscal, debe contener en su exposición de motivos de forma explícita la estimación de dicho impacto, así como ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, de acuerdo a lo establecido en la Ley 819 de 2003[3].

Al respecto, se considera que deben precisarse las fuentes de financiación con las cuales se atenderán cada uno de los gastos asociados a la realización de las acciones contempladas en el Proyecto de Ley, pues en caso contrario, se generarían costos fiscales que no se encuentran previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, ni en el Marco de Gasto de los Sectores, en los términos ordenados en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, como lo son: i) hacer explícita su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, ii) incluir expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas, los costos fiscales. iii) los gastos de funcionamiento asociado a la creación del Tribunal Disciplinario Anticopaja propuesto, el cual a su vez debe contar con un personal indeterminado para su operatividad.

Por todo lo expuesto, este Ministerio se abstiene de emitir concepto favorable sobre esta iniciativa desde el punto de vista presupuestal, toda vez que no se cuenta con la proyección de los costos anuales que implicaría la aprobación de la presente Iniciativa, los cuales no se encuentran explícitos en la exposición de motivos ni en el texto del articulado. En todo caso, se manifiesta la disposición de colaborar con la actividad legislativa dentro de los parámetros constitucionales y legales de disciplina fiscal vigente.

Cordial saludo,

JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ
Viceministro General

[2] Proyectos de Actos Legislativos, de Ley y de Decretos Reglamentarios – Trámite previo
[3] Por la cual se establecen normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.

JUAN CARLOS LOZADA VARGAS
Presidente

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
Vicepresidente

AMPARO Y. CALDERÓN PERDOMO
Secretaria

DORA SONIA CORTÉS CASTILLO
Subsecretaria

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2020

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

I S S N 0 1 2 3 - 9 0 6 6

AÑO XXIX - Nº 512 | Bogotá, D. C., martes, 14 de julio de 2020 | EDICIÓN DE 91 PÁGINAS

DIRECTORES: GREGORIO ELJACH PACHECO, SECRETARIO GENERAL DEL SENADO, www.secretariasenado.gov.co; JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO, SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA, www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

ACTAS DE COMISIÓN

COMISIÓN PRIMERA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

ACTA NÚMERO 51 DE 2020

(junio 8)

Legislatura 2019-2020

Sesiones Ordinarias Remotas

En Bogotá, D. C., el día lunes 8 de junio de 2020, siendo las 10:25 a. m. de la mañana, se reunieron los miembros de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, por la plataforma de Hangouts Meet de Google, previa citación. Fue presidida la Sesión por el honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas.

La señora Secretaria de la Comisión Primera Constitucional Permanente, doctora Amparo Yaneth Calderón Perdomo, procede con el llamado a lista y verificación del Quórum (como primer punto del Orden del Día)

Presidente:

Buenos días, llame a lista Secretaria.

Secretaria:

Muy buenos días honorables, voy a llamar a lista siendo las 10:25 de la mañana, hoy junio 8 de 2020.

Contestaron los siguientes honorables Representantes:

Honorables Representantes:

Albán Urbano Luis Alberto

Arias Betancur Erwin

Burgos Lugo Jorge Enrique

Calle Aguas Andrés David

Córdoba Manyoma Nilton

Daza Iguarán Juan Manuel

Deluque Zuleta Alfredo Rafael

Díaz Lozano Élbert

Estupiñán Calvache Hernán Gustavo

Goebertus Estrada Juanita María

León León Buenaventura

López Jiménez José Daniel

Lorduy Maldonado César Augusto

Lozada Vargas Juan Carlos

Matiz Vargas Adriana Magali

Méndez Hernández Jorge

Navas Talero Carlos Germán

Padilla Orozco José Gustavo

Prada Artunduaga Álvaro Hernán

Pulido Novoa David Ernesto

Restrepo Arango Margarita María

Reyes Kuri Juan Fernando

Rodríguez Contreras Jaime

Rodríguez Rodríguez Édward David

Sánchez León Óscar Hernán

Santos García Gabriel

Tamayo Marulanda Jorge Eliécer

Triana Quintero Julio César

Uscátegui Pastrana José Jaime

Vallejo Chujfi Gabriel Jaime

Vega Pérez Alejandro Alberto

Wills Ospina Juan Carlos

Con excusa adjunta el honorable Representante:

Asprilla Reyes Inti Raúl

Señor Presidente, la Secretaría le informa que se ha registrado Quórum Decisorio, puede usted

ordenar la lectura del Orden del Día y de una vez le manifiesto a usted, que hay solicitudes de modificación del Orden del Día. Señor Presidente, ¿me puede dar la instrucción para la lectura del Orden del Día?

Presidente:

Secretaria ¿Tenemos Quórum Decisorio?

Secretaria:

Sí señor Presidente, hay Quórum Decisorio, puede usted ordenar la lectura del Orden del Día.

Presidente:

Lea el Orden del Día Secretaria.

Secretaria:

Sí señor Presidente.

HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL

Legislatura 2019-2020

SESIÓN REMOTA

(Artículo 2° de la Resolución Mesa Directiva de la Cámara de Representantes 0777 del 6 de abril de 2020)

ORDEN DEL DÍA

Lunes ocho (8) de junio de 2020

10:00 a. m.

I

Llamado a lista y verificación del Quórum

II

Discusión y votación de Proyectos en Primer Debate

1. **Proyecto de ley número 283 de 2019 Cámara,** *por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000*.

Autor: honorable Representante *Juan Carlos Lozada Vargas.*

Ponente: honorable Representante *Juan Carlos Lozada Vargas*.

Proyecto publicado, ***Gaceta del Congreso*** número 1083 de 2019

Ponencia Primer Debate, ***Gaceta del Congreso*** número 162 de 2020

Enmienda a la Ponencia Primer Debate ***Gaceta del Congreso*** número 205 de 2020

2. **Proyecto de ley número 112 de 2019 Cámara,** *por medio del cual se reglamenta la aspersión de sustancias tóxicas o probablemente tóxicas en el marco de la lucha contra los cultivos de uso ilícito.*

Autores: honorables Representantes *Carlos Adolfo Ardila Espinosa, Ángel María Gaitán Pulido, Julián Peinado Ramírez, Neyla Ruiz Correa, David Ricardo Racero Mayorca, David Ernesto Pulido Novoa, Felipe Andrés Muñoz Delgado, Diego Patiño Amariles, John Jairo Cárdenas Morán, Carlos Julio Bonilla Soto, Juan Carlos Lozada Vargas, John Jairo Roldán Avendaño, José Daniel López Jiménez, Harry Giovanny González García, Andrés David Calle Aguas, Silvio José Carrasquilla Torres, Elizabeth Jay-Pang Díaz,* Édgar *Alfonso Gómez Román, Henry Fernando Correal Herrera, Alejandro Alberto Vega Pérez, Luciano Grisales Londoño*.

Ponente: honorable Representante *Julián Peinado Ramírez.*

Proyecto publicado, ***Gaceta del Congreso*** número 700 de 2019

Ponencia Primer debate. ***Gaceta del Congreso*** número 236 de 2020

3. **Proyecto de ley número 302 de 2019 Cámara,** *por el cual se adoptan medidas de lucha contra el dopaje en el deporte*.

Autores: Ministro del Deporte, doctor *Ernesto Lucena Barrero* y el honorable Representante *Mauricio Parodi Díaz*.

Ponentes: honorables Representantes *Margarita María Restrepo Arango* –C–, Óscar *Hernán Sánchez León* –C–, *Jorge Méndez Hernández, John Jairo Hoyos García, Juan Carlos Wills Ospina* y *Luis Alberto Albán Urbano*.

Proyectos publicados, ***Gaceta del Congreso*** número 1135 de 2019.

Ponencia Primer Debate. ***Gaceta del Congreso*** número 256 de 2020.

III

Anuncio de proyectos

(Artículo 8° Acto Legislativo 1 de 2003)

IV

Lo que propongan los honorables Representantes

El Presidente,

Juan Carlos Lozada Vargas.

La Vicepresidente,

Adriana Magali Matiz Vargas.

La Secretaria,

Amparo Yaneth Calderón Perdomo.

La Subsecretaria,

Dora Sonia Cortés Castillo.

Señor Presidente ha sido leído el Orden del Día, y manifiesto a usted que hay dos solicitudes de modificaciones al Orden del Día, si usted a bien lo tiene puedo leerlas.

Presidente:

Lea las modificaciones del Orden del Día Secretaria.

En el transcurso de la Sesión ingresó a la plataforma el honorable Representante:

Peinado Ramírez Julián

Secretaria:

Sí señor Presidente, con la constancia de que el doctor Julián Peinado ya ha hecho presencia en la plataforma lo registro en la asistencia. Presidente la primera fue radicada y citada para el día lunes 8 de junio de 2020 en el siguiente sentido, para pasar a segundo punto del Orden del Día el Proyecto de ley número 302 de 2019 Cámara, *por el cual se adoptan medidas de lucha contra el dopaje en el deporte*. Atentamente Juan Carlos Wills. Segundo Proyecto que está en el Orden del Día es el 112 de aspersión aérea, el doctor Lozada está pidiendo que pase de tercero en el Orden del Día y quede segundo el que está de tercero.

La siguiente proposición es: proposición de aplazamiento dice:

Proposición

Por medio de la presente se solicita a los honorables Representantes de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el aplazamiento del Proyecto de ley número 112 de 2019 Cámara, *por medio del cual se reglamenta la aspersión de sustancias tóxicas o probablemente tóxicas en el marco de la lucha contra los cultivos de uso ilícito*. En el entendido de que es necesario contar con el concepto de la Dirección de Políticas de Drogas y Actividades relacionados del Ministerio de Defensa, de la Dirección de Consulta previa del Ministerio del Interior, como también con el concepto del Consejo Nacional de Estupefacientes a efectos de contar con mayores elementos técnicos y jurídicos al momento de adoptar una decisión ante un proyecto que tiene gran impacto para las políticas relacionadas con la lucha contra cultivos ilícitos y el narcotráfico en el país. Está suscrita por Juan Manuel Daza.

Doctor Juan Manuel solicita que se aplace la discusión de este proyecto que está en el segundo punto del Orden del Día. Y yo no sé si debo leer esta Proposición señor Presidente, pues no es una modificación al Orden del Día pero sí tiene que ver con el primer punto del Orden del Día y dice de la siguiente manera:

Proposición

En mi condición de Representante a la Cámara de manera atenta solicito a la Mesa Directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, invítese a la discusión del Proyecto de ley número 283 de 2019 Cámara, *por medio del cual se sustituye el Título XI, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente", de la Ley 599 del 2000*, al Fiscal General de la Nación doctor Francisco Barbosa, a la Ministra de Justicia doctora Margarita Cabello y a la Presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia doctora Patricia Salazar, con el fin de conocer su opinión frente a la conveniencia del presente proyecto. Atentamente, *Harry Giovanny González*.

Presidente pues ese sería el primer punto, pero no está pidiendo ninguna modificación del Orden del Día, pero se solicita que se invite a esas personas, no sé si el doctor Harry.

Presidente:

Doctora Amparo Yaneth Calderón, entonces estamos en la discusión del Orden del Día, hay unas Proposiciones de modificación del Orden del Día, hay una Proposición de Aplazamiento de uno de los puntos del Orden del Día y hay una solicitud de convocar a funcionarios para la discusión de un proyecto, sobre todo esto abro de una vez el registro para que los honorables Congresistas intervengan. Tiene la palabra por dos minutos el Representante Germán Navas Talero.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Carlos Germán Navas Talero:

Este es un proyecto verdaderamente interesante, porque se mete en algo que el mundo está haciendo en la protección del medio ambiente. Entonces, yo no veo necesidad en la presencia necesaria de estos que ustedes citan, porque de todas maneras implicaría una modificación del Orden del Día, ¿para qué los citan después de aprobado? Si quieren después, antes de la Plenaria pero ahoritica no; yo no creo que el actual Fiscal sepa mucho de medio ambiente, no tengo idea de que haya hecho curso sobre esa cuestión y esto es de la autonomía. Aquí estamos defendiendo el medio ambiente, si usted me dice que está invitando a un ecologista está bien, pero es que esto no es de penalistas, esto para esta situación es de personas que valoren exactamente el medio ambiente y los recursos naturales, yo no considero que se necesite y sí incide en el Orden del Día, porque ¿Para qué los citaría después de aprobado? Gracias.

En el transcurso de la Sesión ingresaron a la plataforma los honorables Representantes:

González García Harry Giovanny

Hoyos García John Jairo

Villamizar Meneses Óscar Leonardo

Presidente:

Gracias Representante Germán Navas Talero. De hecho, le señalo a la Comisión que el Fiscal General de la Nación quiere participar en el debate de este proyecto y ha dicho que se conectará a las 11:00 de la mañana. Luego si el Representante Harry González quiere escuchar al Fiscal, va a tener la oportunidad de hacerlo, porque el Fiscal quiere dar su opinión sobre este proyecto; así me lo ha expresado y por supuesto yo le he dicho que, si quiere asistir a la Comisión, lo puede hacer porque aquí siempre serán bienvenidos todos los funcionarios de todo rango y todo nivel que quieran venir a participar. Entonces Representante, espéreme un segundo para no cometer aquí un error, discúlpeme a veces después se me olvida mirar el chat entonces quedo mal. El doctor Albán me pide la palabra para una constancia, se la daré una vez aprobado el Orden del Día, el doctor Harry dice que deja constancia de su presencia y también me pide la palabra, pero primero se la daré al doctor Juan Manuel Daza. Tiene usted la palabra por dos minutos para referirse al Orden del Día doctor Daza.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Juan Manuel Daza Iguarán:

Presidente muchas gracias. Yo tal cual lo conversé telefónicamente con usted, tenía dos Proposiciones hoy al final sólo radiqué una, la otra la conversé con usted, la que quedó radicada pide el aplazamiento del proyecto de ley de Aspersión y lo pide no por capricho, sino porque considero que es importante tener unos conceptos que ahí pido que la Secretaría los pida a las distintas entidades, para poder tener todos los elementos de juicio a la hora de discutir y, en caso tal, aprobar este proyecto importante. Eso era lo que quería dejar en constancia, la Secretaria anunció que yo había pasado la Proposición de aplazamiento del segundo punto del Orden del Día y la razón es esa, pedirles unos conceptos al Consejo Nacional de Estupefacientes, al Ministerio de Defensa, a la Corte Constitucional y a otras entidades, que deben manifestarse para nosotros tener todos los elementos de juicio a la hora de tomar esa decisión. Gracias Presidente.

Presidente:

Muchas gracias Representante Daza, simplemente recordar que la Corte Constitucional no da conceptos, de resto usted está en su derecho de pedir los conceptos que usted a bien tenga para la discusión de los Proyectos, por supuesto que sí Representante Daza. Tiene la palabra el Representante Harry Giovanny González.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Harry Giovanny González García:

Presidente gracias, disculpándome con usted por el retraso, es que estábamos en una reunión con el Representante Peinado, de la Subcomisión que se creó para el Proyecto de Prohibición de Castigo Físico. Sobre la proposición, pues Presidente no, muy valioso que el Fiscal nos acompañe el día de hoy, si está confirmada la asistencia del Fiscal General de la Nación, yo evidentemente tendría que retirar la proposición, porque el propósito de la misma es escucharlo a él y sí le pediría a su señoría, que en el trámite del Proyecto, conozcamos la opinión de la Ministra de Justicia y de la Presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema, yo creo que eso es conveniente, la situación del país es bien particular y en este momento la opinión de quienes administran la Política Criminal del Estado colombiano en un proyecto que tiene tanto impacto en materia penal, yo creo que es más que conveniente. Pero evidentemente Juan Carlos, si está el Fiscal en esta Sesión, retiro la proposición. Muchas gracias Presidente.

Presidente:

Representante Harry, pues a mí me ha manifestado el Fiscal General de la Nación que se conectará a las 11:00 de la mañana, para estar aquí durante la discusión del Proyecto de Delitos Ambientales y pues esperemos que venga. De otra manera pues yo no le puedo garantizar que venga, me ha manifestado que va a venir, porque usted que sabe que al Fiscal se le presente algún inconveniente, pero este Fiscal ha estado dispuesto a venir a esta Comisión todas las veces; ya lo hizo con el proyecto que hoy se discutirá en Senado de la República y que además celebré el editorial de *El Espectador* este fin de semana sobre Cadena Perpetua, está el Fiscal en este momento en Comisión Primera de Senado en ese tema.

El Fiscal ya ha dicho que vendrá también para el debate de la Ley Pedro Pascasio y también ha manifestado querer participar de este. Así que pues a mí me parece muy bien que el Fiscal quiera participar en Comisión Primera de Cámara, yo no conozco ningún Fiscal que haya participado aquí tantas veces, hay que decirlo doctor Harry González. Tiene la palabra el doctor Carlos Alfonso Ardila Espinosa, nuestro invitado de la Comisión Segunda, Representante Liberal del Putumayo y Autor de uno de los Proyectos que está en discusión en este momento.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Carlos Alfonso Ardila Espinosa:

Muchas gracias Presidente, un cordial saludo a los compañeros de la Comisión Primera. En relación a la Proposición que radica el Representante Daza, vale la pena informar lo siguiente, lo primero es que este es un proyecto que lleva meses ya en discusión, hace varios meses se presentó, es un proyecto que ha tenido oportunidad de ser discutido en diferentes Audiencias Públicas, lo hemos consultado con Gobierno, con los diferentes Ministerios y ellos han tenido la oportunidad de intervenir en el mismo, si así lo hubiesen querido y este debate en la Comisión pues es un escenario para ello Daza, para que acudan a esta instancia y la puedan socializar las preocupaciones que tengan y demás en relación a Gobierno. Ninguno de los conceptos que se enuncian resultan obligatorios para el trámite de este proyecto de ley, no son requisito *sine qua non* para poder adelantar el debate del mismo, estamos en ello, en un debate y fuera importante que el Ejecutivo hiciera presencia para debatir las inquietudes que motivan válidamente tu proposición.

Y en relación a la Corte, la Corte Constitucional ha expresado los mínimos en la Sentencia T-236 y en el Auto que le hiciera seguimiento a la misma, entonces la posición de la Corte la podemos conocer bien sea en el Auto de Seguimiento, o si queremos mayor detalle, lo podríamos encontrar en la Sentencia 236, pediría con toda atención a los colegas e imploraría al colega Daza, que nos permitiera adelantar el trámite dado el tiempo, estamos ya ad portas de terminar esta legislatura y este proyecto no ha tenido oportunidad de ser debatido. Entonces, permítanme Representantes y permítame al Autor de la Proposición, pedirles que nos permitan adelantar el trámite de este importante proyecto. Mil gracias.

Presidente:

Muchas gracias Representante Ardila. Tiene la palabra el Representante Édward Rodríguez.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Édward **David Rodríguez Rodríguez:**

Presidente gracias. Mire, sencillamente esta iniciativa nosotros habíamos presentado algo similar y entiendo que el Ministerio de Minas en el año 2016-2017 el Presidente de la República.

Presidente:

¿Qué le pasó al doctor Édward Rodríguez? Parece que lo sacó la plataforma mientras estaba interviniendo, doctor Édward. Es posible que el doctor Édward Rodríguez haya oprimido el botón que no era o alguna cosa de ese estilo le debió haber sucedido al doctor Édward Rodríguez. Le doy la palabra al doctor Élbert. Ah, siga doctor Édward.

Continúa con el uso de la palabra el honorable Representante Édward **David Rodríguez Rodríguez:**

Presidente estaba diciendo que esta iniciativa nosotros la abordamos también durante el 2016-2017; de hecho la primera reunión de Bancada del Centro Democrático, el Presidente pidió que trabajáramos este tema de delitos ambientales, veo que usted tiene una iniciativa, entiendo y hemos venido trabajando con el Ministerio de Minas otra iniciativa que muy seguramente van a concurrir y sería importante también citar a la Ministra de Minas, porque pues ellos han venido trabajando durante mucho tiempo esta iniciativa, de hecho esta iniciativa se iba a presentar en el mes de marzo, pero pues con ocasión de lo de la pandemia no se presentó. Entonces, Presidente mi invitación es a que trabajemos unidos y que miremos varios temas que nosotros teníamos, como le digo en el 2016-2017 el entonces Representante y hoy Senador Presidente de la Comisión Primera, había presentado la iniciativa y la idea es trabajar Juan Carlos, unidos para sacar un buen proyecto de ley Muchas.

Presidente:

Muchas gracias doctor Édward Rodríguez, por supuesto yo he estado en comunicación también con el Ministerio de Minas, por supuesto que este proyecto que yo radiqué va mucho más allá del tema de Minas, razón por la cual pues ojalá que el Ministerio de Minas se articule con esta iniciativa que excede el tema de minas en Colombia y trata muchísimos otros temas ambientales y que para el tema de minas, concretamente para el tema minero y energético pues trabajemos de la mano, yo estoy absolutamente doctor Édward Rodríguez. Tiene la palabra el Representante Élbert Díaz Lozano.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Élbert Díaz Lozano:

Gracias señor Presidente, un saludo para todos. En el mismo sentido del Representante Édward Rodríguez va mi intervención, es decir, me parece a mí que es vital e importante conocer la opinión del Ministerio de Minas e inclusive del mismo Ministerio de Ambiente, a efectos de saber qué están pensando ellos sobre este proyecto que tiene un fondo bien importante. Eso sería lo que quería manifestarle señor Presidente.

Presidente:

Muchísimas gracias Representante Élbert Díaz. Tiene entonces la palabra el Representante Julián Peinado.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Julián Peinado Ramírez:

Gracias Presidente, un saludo especial a los colegas y a quienes nos acompañan. Quiero pronunciarme sobre la solicitud de aplazamiento realizada por el doctor Daza, quiero recordarle al doctor Daza que la Ponencia ya cuenta con valiosos insumos de una Audiencia Pública bastante nutrida, celebrada el día 15 de abril de 2020, allí participaron la Universidad de Antioquia, la Universidad de los Andes, Corpoamazonia, los miembros del Gobierno nacional en diferentes Ministerios, Justicia, Defensa, Minambiente, Minsalud, Mininterior, participaron las Fuerzas Militares, participó la Procuraduría General de la Nación. Esto para decir que la Ponencia viene con suficientes elementos para someterse a la discusión, consideramos dichas solicitudes ya han sido realizadas por parte de los Ponentes, de manera reiterada para que esta sección del Gobierno nacional se vincule y también manifieste sus necesidades, sus inquietudes y les hemos dado plenas garantías para que así lo hagan, o sea que espero también que no se aplace el debate.

De tal manera que, con los elementos que yo sé que todos de manera juiciosa estudiaron en la Ponencia doctor Daza, vamos a tener suficientes elementos para el debate independiente de la decisión que tomemos y reforzar o por lo menos ratificar decía el doctor Ardila, y es que en efecto aquí lo que se está trayendo a colación es lo que ya dijo la Corte Constitucional, frente a los verdaderos riesgos y cuál sería la metodología para lo mismo, motivo por el cual considero dicho debate no debe ser aplazado. Muchas gracias señor Presidente.

Presidente:

Muchas gracias Representante Julián Peinado. Tiene la palabra la Representante Juanita María Goebertus.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Representante Juanita María Goebertus Estrada:

Gracias Presidente, un saludo nuevamente a todos los colegas. Simplemente insistir en que estamos en la discusión del Orden del Día, yo creo que conceptos podemos requerir para ambos Proyectos y hay tiempo para hacerlo más adelante, pero no creo que ninguno de los dos escenarios ni en el Proyecto de Delitos Ambientales, ni por supuesto en el Proyecto de prohibición y digamos regulación del uso de la aspersión que como ya decía el Representante Peinado, además ya tuvimos una Audiencia Pública, el argumento para aplazar su discusión dejándolo por supuesto prácticamente sin tiempo en el fin de

este período legislativo, pues sea que no tenemos un concepto adicional de los funcionarios de Gobierno.

Yo sí creo que lo mínimo en nuestra función Congresional, es dar el debate y los funcionarios de Gobierno en algunos escenarios han pronunciado, en otros no, han tenido tiempo para hacerlo, tendrán otro tiempo hacia adelante, pero sí creo que no podríamos volver regla en esta comisión que, si no hay conceptos de distintos funcionarios de Gobierno, aplacemos la discusión. Entonces, invito a mis colegas a que pasemos de la discusión del Orden del Día lo antes posible y debatamos ambos Proyectos que creo que tenemos insumos para hacerlo y tendremos más tiempo en el siguiente debate para tener aún más insumos. Gracias Presidente.

Presidente:

Muchas gracias Representante Juanita María Goebertus. Secretaria el Representante Harry González ha dicho que retira su Proposición puesto que el Fiscal General de la Nación va a intervenir. Entonces, nos quedan dos Proposiciones, una en el sentido de cambiar el Orden del Día pasando el punto 3 al punto 2 del Orden del Día y la otra Proposición es una Proposición de Aplazamiento del punto número 2 ¿Es correcto lo que acabo de expresar, querida Secretaria? Entonces, me parece que la Proposición de Aplazamiento se puede considerar en el momento en que entremos en discusión en el punto, en cambio la Proposición de modificación del Orden del Día debe ser sometida en este momento. ¿Es correcto lo que digo, querida Secretaria?

Secretaria:

Sí puede hacerlo así Presidente.

Presidente:

Así es, entonces la Proposición de Aplazamiento la dejaremos para cuando se debata el Proyecto y vamos a someter a consideración entonces la Proposición de modificación del Orden del Día. Llame a lista Secretaria para votar la proposición de modificación del Orden del Día que pasaría el punto número 3 al punto número 2 y el punto número 2 al punto número tres, si votan Sí, se modificará el Orden del Día, si votan No, quedará como está planteado por la Mesa Directiva. Llame a lista Secretaria.

Secretaria:

Así se hará señor Presidente, llamo a lista para la modificación de la Proposición del doctor Juan Carlos Wills, la del doctor Juan Manuel Daza, se dejará para cuando se llegue al punto del proyecto.

Honorables Representantes:

Albán Urbano Luis Alberto	No
Arias Betancur Erwin	Sí
Asprilla Reyes Inti Raúl	Excusa
Burgos Lugo Jorge Enrique	Sí
Calle Aguas Andrés David	No
Córdoba Manyoma Nilton	No
Daza Iguarán Juan Manuel	Sí
Deluque Zuleta Alfredo Rafael	No
Díaz Lozano Élbert	Sí
Estupiñán Calvache Hernán Gustavo	No
Goebertus Estrada Juanita María	No
González García Harry Giovanny	No
Hoyos García John Jairo	No
León León Buenaventura	Sí
López Jiménez José Daniel	No
Lorduy Maldonado César Augusto	No
Lozada Vargas Juan Carlos	No
Matiz Vargas Adriana Magali	Sí
Méndez Hernández Jorge	Sí
Navas Talero Carlos Germán	No
Padilla Orozco José Gustavo	Sí
Peinado Ramírez Julián	No
Prada Artunduaga Álvaro Hernán	Sí
Pulido Novoa David Ernesto	No
Restrepo Arango Margarita María	Sí
Reyes Kuri Juan Fernando	No
Rodríguez Contreras Jaime	No
Rodríguez Rodríguez Édward David	No votó
Sánchez León Óscar Hernán	No
Santos García Gabriel	Sí
Tamayo Marulanda Jorge Eliécer	Sí
Triana Quintero Julio César	No
Uscátegui Pastrana José Jaime	Sí
Vallejo Chujfi Gabriel Jaime	Sí
Vega Pérez Alejandro Alberto	No
Villamizar Meneses Óscar Leonardo	Sí
Wills Ospina Juan Carlos	Sí

Presidente puede usted cerrar la votación, solo falta el doctor Inti que tiene una excusa médica.

Presidente:

Se cierra la votación, anuncie el resultado Secretaria.

Secretaria:

Perdóneme señor Presidente, que el doctor Buenaventura yo me lo salté, no escuché su voto, yo pido disculpas porque no ha votado y el doctor Buenaventura está, ¿Cómo vota doctor Buenaventura?

Honorable Representante Buenaventura León León:

Sí, excúseme es que no me abría el micrófono para votar Sí Amparito, excúsenme.

Secretaria:

Vota Sí el doctor Buenaventura. Bueno ya está cerrada la votación Presidente. Entonces, han votado treinta y cinco (35) honorables Representantes, diecinueve (19) por el No y dieciséis (16) por Sí; en consecuencia, ha sido negada la Proposición de

cambiar el segundo punto a tercer punto. Presidente en esa idea, usted manifestó al inicio que si no era aprobado quedaría el Orden del Día como estaba, entonces queda el Orden del Día, puede ponerlo en consideración y votación de manera ordinaria existiendo el Quórum suficiente.

Presidente:

¿Desea la Comisión aprobar el Orden del Día como fue leído inicialmente por la secretaria? Si alguien quiere cambiarlo o dice no entonces manifiéstelo o se considerará aprobado.

Secretaria:

Ya verifico en el chat señor Presidente, regáleme unos minutos por favor, no hay ninguna manifestación con relación al Orden del Día. Presidente no hay ninguna manifestación, ha sido aprobado el Orden del Día como fue propuesto por la Mesa Directiva señor Presidente. Primer punto.

Presidente:

Primer punto del Orden del Día Secretaria. Antes del primer punto del Orden del Día Secretaria, le voy a dar una constancia de tres minutos al Representante Luis Alberto Albán, dándole además la bienvenida al Señor Fiscal General de la Nación que ya se encuentra en la Sesión. Representante Albán tiene tres minutos.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Luis Alberto Albán Urbano:

Muchas gracias señor Presidente, seguramente no voy a gastar tanto. Nosotros los firmantes de la Paz, nuestros familiares nos encontramos sin garantías para la vida, van ciento noventa y nueve firmantes asesinados y ya decenas de familiares también. El último caso se presentó en el municipio de Ituango en Antioquia, donde fueron asesinados el hijo y el primo de firmantes de la Paz, Camilo Sucerquita hijo de Nurida Sucerquita y Carlos Barrera primo de otro firmante de Paz, ambos menores de edad, asesinados junto al conductor del bus Escalera que los movilizaba.

Nosotros decimos desde la Bancada de Farc que es inaceptable, que mientras las Agencias del Gobierno presentan una visión ficticia de la implementación, la realidad sea muy distinta y nos desmienten. Decimos que el Gobierno nacional es responsable por acción y omisión, un agravante, en Ituango hace más de cuatro meses el propio Gobierno se declaró incapaz de garantizar la vida de los firmantes de Paz que están en ese espacio territorial, no sabemos si es incapacidad o solamente es falta de voluntad, la verdad es que no pueden garantizar la vida de esos compañeros y compañeras. Es hora de que el Gobierno de Duque pare con el genocidio, es hora de que avancemos en la implementación del Acuerdo y acabemos con la estigmatización. Muchas gracias.

Presidente:

Muchas gracias Representante Luis Alberto Albán Urbano, desde la bella ciudad de Cali. Ahora sí Secretaria sírvase leer, aunque no sé si alguien más me había pedido una constancia, perdónenme ustedes, me parece que me había pedido una constancia, ya les voy a dar las constancias discúlpeme usted, le voy a dar la constancia al Representante Méndez, al Representante Manyoma y leeremos el primer punto del Orden del Día. Representante Méndez tiene la palabra para una constancia, me la había pedido él después del doctor Albán, sigue el doctor Córdoba Manyoma, luego el doctor Prada. Tiene la palabra ahora sí para su constancia, Representante Jorge Méndez Hernández desde la bella Isla de San Andrés.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Jorge Méndez Hernández:

Gracias mi Presidente, solo para solicitarle un permiso, ausentarme a la Sesión que está adelantando el Frente Parlamentario contra el Hambre, el cual tengo que sustentar una Ponencia, me demoro pienso que media hora con su venia señor Presidente.

Presidente:

Tiene usted permiso de retirarse a su Sesión. Tiene la palabra entonces, el Representante Nilton Córdoba Manyoma, por tres minutos para su constancia.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Nilton Córdoba Manyoma:

Presidente muchas gracias y con los buenos días a todas y todos los compañeros de la Comisión Primera. Presidente solo para dejar una constancia de la preocupación que nos asiste hoy a los chocoanos hombres y mujeres, por digamos la postura que ha asumido el Gobierno nacional frente al departamento. Para nadie es un secreto que nuestro Gobernador fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación y primero que todo, el Gobierno nacional se demoró más de ocho días en encargar la persona que lo reemplazará y, en segundo lugar, pues nos traen a alguien que si bien es cierto es negro, que si bien es cierto es chocoano, es una persona que está desvinculada del departamento del Chocó hace más de veinte años. Y algo que sucede muy recientemente con el Gobernador de Antioquia, donde lamento la situación que está viviendo por cierto el Gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, se da la suspensión del Gobernador de Antioquia y en menos de cuarenta y ocho horas el señor Presidente encarga en el departamento de Antioquia a una persona del Gabinete del señor Gobernador de Antioquia, entonces observa uno allí la discriminación y el interés del Partido de Gobierno, de querer manipular esos encargos en las diferentes regiones de este país.

Además de eso señor Presidente y compañeros, se está yo diría retomando el intervencionismo que se dio en el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez de las entidades, que son intervencionismos que nada bien les hacen a las entidades territoriales; iniciaron por Santa Marta en el departamento de Magdalena, donde intervinieron el Hospital

Departamental de una manera yo diría exabrupta, sin darle oportunidad al nuevo Alcalde de que pudiera yo diría emprender acciones que permitan corregir algunos vicios que se vienen dando, y la información que se tiene es que muy prontamente van a intervenir el Hospital San Francisco de Asís de segundo nivel en el departamento del Chocó. Lo entiende la mayoría de chocoanos como una forma del Gobierno nacional de tener injerencia política en los territorios donde no tuvieron la posibilidad de ganar en las urnas. Yo quiero, en nombre de los chocoanos y chocoanas, dejar esta constancia y manifestar nuestra preocupación por la actitud asumida por el Gobierno nacional. Muchas gracias Presidente.

Presidente:

Gracias Representante Nilton Córdoba Manyoma por su constancia. Tiene la palabra el Representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga, por tres minutos para su constancia.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga:

Gracias Presidente. La verdad es que las constancias de algunos de los integrantes de la Comisión me obligan a hacer una afirmación, voy a comenzar por la última. El Gobierno nacional ha intervenido en Santa Marta y en otros hospitales del país donde hay corrupción, donde se tratan de robar la plata de la salud de los colombianos y ese debe ser el compromiso de la administración pública, defender no los intereses de quienes tienen a su cargo las administraciones de los hospitales, sino el interés primordial de prevalecer el derecho que tienen los colombianos de que los atiendan bien, de que la medicina se les entregue inmediatamente, de que les den una atención adecuada y no jueguen con la salud, más en este momento de pandemia.

Y el segundo caso, es lo que dijo el integrante de las Farc, yo respeto mucho el dolor que pueda tener de quienes por supuesto han fallecido y participaron en ellos como grupo y se sometieron al Acuerdo que hicieron el Gobierno anterior. No compartimos para nada lo que está sucediendo por supuesto; rechazamos el homicidio en cabeza de quien sea el responsable y por supuesto de quien sea la víctima. Pero no es cierto y no puede crearse un manto de duda sobre el Estado colombiano sobre una especie de crimen que estuviese gestionándose desde el Gobierno nacional; no puedo permitirlo. En el Putumayo, todos los organismos de seguridad en un consejo de seguridad donde estaba la Fiscalía y donde hacen parte también las entidades por supuesto territoriales nos decían cómo el enfrentamiento del Frente 48 de las Farc y el Frente 1° de las Farc o lo que antes era el que así se llamaba por el control territorial del narcotráfico y la minería ilegal estaba dejando exintegrantes de las Farc muertos y lo mismo está ocurriendo en el departamento del Huila; pongo el caso de Algeciras. Me entrevisté con una persona de Naciones Unidas del PNUD y le hacía esta misma pregunta, porque tenemos información de la Fiscalía y de los organismos de seguridad de que es entre las diferentes fuerzas que hay, llamémoslo así, exintegrantes de las Farc donde están ejerciendo un control o una amenaza para que se callen algunas denuncias que piensan hacer o que han comenzado a realizar. Esto no puede quedar simplemente como una afirmación de un integrante de la Comisión Primera. Por eso me veo en la obligación.

Presidente:

Representante Prada, se le agotó el tiempo, se le apagó el micrófono, razón por la cual le pido Representante Prada. Entonces, le pido que abra el micrófono y termine su intervención en un minuto.

Continúa con el uso de la palabra el honorable Representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga:

Presidente, lo que decía básicamente es que no podemos permitir que quede una afirmación, acusando al Gobierno o acusando al Estado, de unos homicidios donde no tiene ninguna responsabilidad. Lo que sí debe hacer es garantizar la seguridad en todo el territorio nacional incluido a estos señores que se sometieron a un proceso y que habían firmado un acuerdo; a ellos también le corresponde al Estado prestarles seguridad. Pero también hay que decir que es la disputa entre las antiguas Farc la que está generando homicidios entre ellos mismos, porque así lo reconocen los líderes, llamados líderes sociales en Algeciras o en el Putumayo o donde están siendo atacados, unos por callarlos para que no denuncien y otros por el conflicto de la lucha territorial para control de narcotráfico y de minería ilegal, entre algunos frentes u hoy equipos de lo que antes eran denominados las Farc. Aquí hay un grupo que domina Gentil Duarte, hay otro grupo que domina Iván Márquez, El Paisa y Santrich y hay otro grupo que domina.

Presidente:

Representantes Prada se le ha agotado el tiempo, a mí no me gusta que los Representantes queden sin la posibilidad de expresar sus ideas, usted entenderá que también tengo que continuar con el Orden del Día, pero le doy treinta segundos para que cierre la intervención Representante Prada.

Continúa con el uso de la palabra el honorable Representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga:

Gracias Presidente. Lo que no puede quedar en el ambiente es, una parte de la información para que la opinión pública se haga la propia opinión, aquí lo que tenemos es que entregar toda la información que tenemos y por eso vale la pena decir que los organismos de seguridad, los líderes sociales y en el terreno, están diciendo que son las propias Farc o lo que antes eran las Farc, unos en la intención de vivir tranquilamente después de haber firmado un Acuerdo con el Gobierno Santos y otros para perturbarles esa intención, amenazarlos, bien sea para que no hablen o bien sea por el control territorial. Gracias Presidente.

Presidente:

Gracias Representante Álvaro Hernán Prada. Me pide un Derecho a Réplica a su intervención doctor Prada el Representante Luis Alberto Albán. Representante Albán tiene un minuto y medio para su Réplica, ya que al Representante Prada le dejé extender su intervención casi dos minutos más, un minuto y medio para que haga su Réplica doctor Albán.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Luis Alberto Albán Urbano:

Muchas gracias, es muy sencillo. En primer lugar, nosotros desde la legalidad en que estamos producto del Acuerdo y nuestro compromiso con la Paz, lo único que exigimos es que el Estado a través de su Gobierno, que en este caso es del Presidente Duque, garantice la vida de los ciudadanos colombianos hombres y mujeres, eso es lo que estamos reclamando, sino no lo hace es por acción o por omisión responsable. En segundo lugar, seguramente habrá eso que habla el Representante Prada, sí, pero también habrá que preguntar por el asesinato de Dímar Torres en el Catatumbo por ejemplo; esos son temas que igual recalco. Nosotros ahora Partido Político legal, integrado por personas que están en la legalidad, decimos los organismos encargados deben de dar las respuestas y no nos ponemos en esa discusión, en esa especulación, decimos que se nos garantice la vida y eso es lo que sentimos que no hay. Muchas gracias.

Presidente:

Muchísimas gracias por su Réplica Representante Albán. Entonces Secretaria, terminadas las constancias vamos a dar inicio con el primer punto del Orden del Día. Sírvase leer el primer punto del Orden del Día Secretaria y yo me retiro de la Presidencia, para hacer mi Ponencia sobre ese primer punto del Orden del Día y queda como Presidenta nuestra querida Vicepresidenta la doctora Adriana Magali Matiz, a quien yo le agradezco profundamente que esté aquí, porque además es Presidenta de la Comisión de la Mujer y le ha tocado hoy multiplicarse para poder estar en el debate de Control Político citado por la Comisión de la Mujer y para cumplir a cabalidad con sus funciones de Vicepresidenta de la Comisión Primera, merece un aplauso la doctora Adriana Magali Matiz que siempre da ejemplo de eficiencia y eficacia. Muchas gracias y me retiro entonces de la Presidencia.

Preside la Sesión la honorable Representante Adriana Magali Matiz Vargas:

Presidente:

Amparito, sírvete dar lectura del primer punto del Orden del Día por favor.

Secretaria:

Sí, señora Presidenta. Segundo: Discusión y votación de Proyectos en Primer Debate:

Primero: Proyecto de ley número 283 de 2019 Cámara, *por medio del cual se sustituye el Título XI, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000*.

Autor el honorable Representante *Juan Carlos Lozada Vargas*.

Ponente el honorable Representante *Juan Carlos Lozada Vargas*.

Proyecto publicado en la ***Gaceta del Congreso*** número 1083 del 2019.

Ponencia para Primer Debate en la ***Gaceta del Congreso*** número 162 de 2020.

Con Enmienda a la Ponencia en la ***Gaceta del Congreso*** número 205 del 2020.

Señora Presidenta ha sido leído el primer punto del Orden del Día; si usted a bien lo tiene, leo la Proposición con que termina el Informe de Ponencia y luego manifestaré que hay unos Impedimentos.

Presidente:

Querida Secretaria por favor, lea la Proposición con la que termina el Informe de Ponencia.

Secretaria:

Sí señora Presidenta.

Proposición

Con fundamento en las anteriores consideraciones, presento Ponencia positiva con modificaciones al texto radicado, y, en consecuencia, solicito a los honorables Representantes que integran la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dar Primer Debate al Proyecto de ley número 283 de 2019 Cámara, *por medio del cual se sustituye el Título XI, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000*, de su enmienda. Cordialmente Juan Carlos Lozada Vargas. Ha sido leída la proposición, señora Presidenta, y manifestar a usted que hay dos Impedimentos presentados.

Presidente:

Amparito, dar lectura a los Impedimentos presentados por favor.

Secretaria:

Sí señora Presidenta, igualmente permítame antes de leer los dos Impedimentos, manifestar a usted y a los honorables Representantes que hay dos conceptos, uno del Ministerio de Hacienda y otro del Comité Internacional Geneve, suscrito por Mulán Giovannini, jefa de delegación, hay sobre este proyecto, los he enviado al Ponente y a los demás integrantes. Presidenta el primer Impedimento radicado es el del Representante David Pulido, solicito al Representante David retirarse de la plataforma, en tanto la Comisión decida sobre su Impedimento.

Impedimento

El suscrito Representante a la Cámara, dejo constancia sobre la existencia de mi Impedimento para participar en el debate y votación del Proyecto de ley número 283 de 2019 Cámara, *por medio del*

cual se sustituye el Título XI, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000.

Por considerar que: existe un posible conflicto de intereses de conformidad con lo establecido en la Ley 2003 de 2019, que modificó la Ley 5ª de 1992, ya que, con el trámite y aprobación del presente proyecto de ley, ya que mi cónyuge ejerce actividades agropecuarias, así como también parientes dentro del primer grado de consanguinidad, que en la actualidad son propietarios de un predio rural. Para constancia se firma como aparece y se radica en la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes. David Ernesto Pulido Novoa. Ha sido leído el Impedimento señora Presidenta.

Presidente:

Gracias Amparito, se abre la discusión del Impedimento presentado por el doctor David Pulido, anuncio que se va a cerrar. Sírvase llamar a lista señora Secretaria. Doctor Juan Carlos por favor prender el micrófono.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Juan Carlos Wills Ospina:

Perdón Presidenta la indisciplina excúseme. Querida Amparito es que no, ¿Entendí bien que el Impedimento es porque tiene un predio rural, él o la familia?

Secretaria:

Los familiares.

Continúa con el uso de la palabra el honorable Representante Juan Carlos Wills Ospina:

¿Pero por tener un predio rural? O porque tiene explotación minera en un predio rural, ¿O sea solo dice porque tiene un predio rural?

Secretaria:

Si quiere vuelvo y lo leo. Por favor pongan atención. Existe un posible conflicto de intereses de conformidad con lo establecido en la Ley 2003 de 2019, que modificó la Ley 5ª de 1992, ya que, con el trámite y aprobación del presente proyecto de ley, ya que mi cónyuge ejerce actividades agropecuarias, así como también parientes dentro del primer grado de consanguinidad que en la actualidad son propietarios de un predio rural. Esa es la motivación.

Presidente:

Con esa claridad. Doctor Navas tiene la palabra.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Carlos Germán Navas Talero:

Usted ya que está sentada ahí, que le explique él exactamente en qué consiste su interés directo o indirecto ahí, porque es que no podemos seguir dándole el gusto a la ignorancia, que nos explique, si él nos muestra efectivamente que con esta Ley se va a beneficiar o a perjudicar no habría inconveniente, pónganle seriedad doctora es que esto ya da es vergüenza. Gracias.

Presidente:

Me parece acertada esa afirmación que hace el doctor Navas, le voy a dar la palabra al doctor Édward y Amparito por favor comunícale a David Pulido que vuelva a ingresar a la plataforma, para dar explicación acerca del Impedimento que presentó. Doctor Édward Rodríguez. Perdón una Moción de Orden de Álvaro Hernán.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga:

Estimada Presidente, hace unos días sugerí que la Comisión Primera designara una Subcomisión para que rindiera un informe sobre lo que significan los Impedimentos; ahí surgieron otra clase de intervenciones, pero eso digamos no quedó en nada. Lo cierto es que hay una preocupación generalizada, en el Congreso de la República por los Impedimentos y, entre otras cosas, esa preocupación tiene responsabilidad en todos nosotros, porque vamos creando una especie de costumbre donde nos vamos declarando Impedidos por casi todo.

Pero también hay responsabilidad de algunos compañeros en el Congreso de la República, que se han dedicado a denunciar penalmente o disciplinariamente o buscar quitarles la curul a quienes la ganaron en el ejercicio democrático, mediante demandas por precisamente encontrarlos en un régimen de inhabilidad o incompatibilidad. Entonces, yo no creo que sea responsabilidad ahora de quien presente un Impedimento de buena voluntad, sino que asumamos el compromiso como Comisión de entregar un informe donde podamos estar más tranquilos todos. Gracias Presidenta.

Presidente:

Gracias doctor Álvaro Hernán. Édward Rodríguez, tienes el uso de la palabra.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Édward **David Rodríguez Rodríguez:**

Gracias Presidente, no en el mismo sentido, porque de ser así, pues yo creo que todos, o de interpretar como se está interpretando, absolutamente todos vamos a tener que declararnos Impedidos, tenemos no sé, o sea si se miran los artículos del doctor Juan Carlos, hay unos Artículos que sí prestan a una interpretación donde si uno siembra algo, cualquier cosa está maltratando la tierra y por lo tanto pues incurriendo en un posible delito. Yo creo que hay que mirar muy bien, cuál es el alcance, porque no, o sea no le veo por qué nos tenemos que declarar Impedidos en muchas cosas, era eso Presidente. Gracias.

Presidente:

Gracias doctor Édward. ¿Amparito le avisaste a David Pulido que ingresara a la plataforma? ¿Doctor David Pulido?

Secretaria:

Pero no ha ingresado.

Presidente:

Sometamos a votación el Impedimento que presentó, Amparito llame a lista por favor, quiero avisar que el Representante Inti Asprilla, perdónenme un momentico y por favor me piden la palabra por el chat, les agradezco inmensamente que tengamos mucho orden en esta Sesión además es un proyecto controvertido entonces, por favor mucho orden. Amparito para que quede en el Acta, al Representante Inti Asprilla le acaban de diagnosticar otitis, le dieron dos días de incapacidad, razón por la cual no podrá asistir ni a esta Sesión ni a la que tengamos el día de mañana. Entonces para que quede ahí registrado, él hará llegar la incapacidad correspondiente. Me pide la palabra el doctor José Daniel López.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante José Daniel López Jiménez:

Gracias Presidenta. Es que digamos, fue esta misma Comisión la que tramitó, yo parezco ya un radio viejo con este cuento, pero es que esta Comisión tramitó y aprobó, las dos Cámaras hicieron lo propio, la Ley 2003 de 2019. La Ley 2003 de 2019 en nuestra hechura es absolutamente clara en que solamente se presente un conflicto de interés cuando este tiene características de ser particular, actual y directo, y sobre todo ahí es importante ahondar en el concepto de particular, que indica que el conflicto de interés no se presenta por el simple hecho de que un proyecto de Ley eventualmente beneficie al Congresista, sino que lo beneficie de manera particular y diferenciada, con respecto al resto de la población, y el mismo artículo 1° de la Ley 2003 de 2019 dice que, cuando los beneficios o las cargas derivadas de un proyecto de ley afectan de igual manera al Congresista o a sus familiares que al resto de la población, no hay lugar a conflicto de intereses.

Entonces, creo que si bien puede someter el doctor Pulido como cualquier Representante está en todo su derecho de presentar Impedimentos, pues sería una equivocación que esta Comisión se quedara estancada en esa discusión, cuando nosotros mismos produjimos normas que resuelven del todo estas dudas que acá surgen. Gracias Presidenta.

Presidente:

Tiene usted toda la razón doctor José Daniel, yo creo que la Ley 2003 de 2019 es bastante clara en torno al tema de esos Impedimentos, pero Amparito sometamos a votación el Impedimento presentado por el honorable Representante David Pulido, llame a lista por favor.

Secretaria:

Sí señora Presidente y honorables Congresistas, llamo a lista para la votación del Impedimento del Representante David Pulido.

Honorables Representantes:

Albán Urbano Luis Alberto	Sí
Arias Betancur Erwin	Sí
Asprilla Reyes Inti Raúl	Excusa
Burgos Lugo Jorge Enrique	No
Calle Aguas Andrés David	No
Córdoba Manyoma Nilton	No
Daza Iguarán Juan Manuel	No
Deluque Zuleta Alfredo Rafael	No
Díaz Lozano Élbert	No
Estupiñán Calvache Hernán Gustavo	No
Goebertus Estrada Juanita María	No
González García Harry Giovanny	No
Hoyos García John Jairo	No
León León Buenaventura	Sí
López Jiménez José Daniel	No
Lorduy Maldonado César Augusto	No
Lozada Vargas Juan Carlos	No
Matiz Vargas Adriana Magali	No
Méndez Hernández Jorge	No votó
Navas Talero Carlos Germán	No
Padilla Orozco José Gustavo	No
Peinado Ramírez Julián	No
Prada Artunduaga Álvaro Hernán	No
Pulido Novoa David Ernesto	Fuera de la plataforma
Restrepo Arango Margarita María	No
Reyes Kuri Juan Fernando	No
Rodríguez Contreras Jaime	No
Rodríguez Rodríguez Édward David	No
Sánchez León Óscar Hernán	No votó
Santos García Gabriel	No
Tamayo Marulanda Jorge Eliécer	No
Triana Quintero Julio César	No
Uscátegui Pastrana José Jaime	No
Vallejo Chujfi Gabriel Jaime	No
Vega Pérez Alejandro Alberto	No
Villamizar Meneses Óscar Leonardo	No
Wills Ospina Juan Carlos	No

Presidenta puede usted cerrar la votación.

Presidente:

Cierre la votación querida Secretaria y anuncie el resultado.

Secretaria:

Señora Presidente han votado treinta y tres (33) honorables Representantes, treinta (30) por el No y tres (3) por el Sí; en consecuencia, ha sido Negado el Impedimento del doctor Pulido.

Presidente:

Por favor avisar al doctor Pulido para que ingrese de nuevo a la plataforma. Siguiente Impedimento querida Secretaria. Doctor Lozada.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas:

Es que no sé si fue que no le entendí a la doctora Amparo Yaneth Calderón, pero dijo que habían votado treinta y dos honorables Representantes, treinta por el Sí, tres por el No, no me dan las cuentas.

Presidente:

treinta y tres.

Honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas:

Ah okey, entonces yo entendí mal. Gracias Presidenta.

Presidente:

Siguiente Impedimento querida Secretaria.

Secretaria:

El siguiente Impedimento es el del Representante Álvaro Hernán Prada que dice de la siguiente manera, ruego al doctor Álvaro Hernán que se quede por si hay algún tema de explicación, si no se ha retirado.

Impedimento

Respetado señor Presidente: Para que sea decidido por Comisión Primera de la Cámara de Representantes, me permito presentar a consideración mi Impedimento frente a la discusión y votación del Proyecto de ley número 283 de 2019 Cámara, *por medio del cual se sustituye el Título XI, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000*.

Lo anterior, debido a que soy propietario de un predio rural y ejerzo actividades agropecuarias y, con la discusión del presente proyecto, puede existir un posible conflicto de intereses. Conforme a lo establecido en los artículos 286, 291 y 292 de la Ley 5ª de 1992, informo lo pertinente para que se imparta el trámite respectivo. Cordialmente Álvaro Hernán Prada Artunduaga.

Ha sido leído el Impedimento, dice que es propietario de un predio rural y ejerce actividades agropecuarias.

Presidente:

¿El doctor Álvaro Hernán está en la plataforma?

Secretaria:

No lo veo doctora Adriana, parece que ya se retiró.

Presidente:

Bueno, se abre la discusión del Impedimento. Anuncio que se va a cerrar, sírvase llamar a lista señora Secretaria.

Secretaria:

Sí señora Presidenta:

Honorables Representantes:

Albán Urbano Luis Alberto	Sí
Arias Betancur Erwin	Sí
Asprilla Reyes Inti Raúl	Excusa
Burgos Lugo Jorge Enrique	No
Calle Aguas Andrés David	No
Córdoba Manyoma Nilton	No
Daza Iguarán Juan Manuel	No
Deluque Zuleta Alfredo Rafael	No
Díaz Lozano Élbert	No
Estupiñán Calvache Hernán Gustavo	No
Goebertus Estrada Juanita María	No
González García Harry Giovanny	No
Hoyos García John Jairo	No
León León Buenaventura	Sí
López Jiménez José Daniel	No
Lorduy Maldonado César Augusto	No
Lozada Vargas Juan Carlos	No
Matiz Vargas Adriana Magali	No
Méndez Hernández Jorge	No votó
Navas Talero Carlos Germán	No
Padilla Orozco José Gustavo	No
Peinado Ramírez Julián	No
Prada Artunduaga Álvaro Hernán	Fuera de la plataforma
Pulido Novoa David Ernesto	No
Restrepo Arango Margarita María	No votó
Reyes Kuri Juan Fernando	No
Rodríguez Contreras Jaime	No
Rodríguez Rodríguez Édward David	No
Sánchez León Óscar Hernán	No votó
Santos García Gabriel	No
Tamayo Marulanda Jorge Eliécer	No
Triana Quintero Julio César	No
Uscátegui Pastrana José Jaime	No
Vallejo Chujfi Gabriel Jaime	No
Vega Pérez Alejandro Alberto	No
Villamizar Meneses Óscar Leonardo	No
Wills Ospina Juan Carlos	No

Vuelvo y llamo a la doctora Margarita Restrepo, tiene problemas de conectividad, voy a tratar de marcarle. No contesta, señora Presidenta puede usted cerrar la votación.

Presidente:

Cierre la votación querida Secretaria y anuncie el resultado.

Secretaria:

Presidenta han votado treinta y dos (32) honorables Representantes, veintinueve (29) por el No y tres (3) por el Sí; en consecuencia, ha sido Negado el Impedimento del doctor Álvaro Hernán Prada. Han llegado Presidenta dos Impedimentos más, el siguiente es el del doctor Andrés Calle, le ruego al doctor Andrés que se quede en la plataforma

hasta cuando vaya a ser la votación, por si hay alguna explicación.

Impedimento

Asunto: Impedimento honorable Representante Andrés David Calle Aguas, discusión Proyecto de ley número 283 de 2019 Cámara, *por medio del cual se sustituye el Título XI, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000*.

De manera atenta, por medio de la presente, me permito presentar Impedimento en relación con la discusión del proyecto de la referencia. Lo anterior, debido a que mis familiares y yo contamos con predios rurales y nos relacionamos con actividades agropecuarias. Está suscrita por el doctor Andrés David Calle.

Presidente:

Doctor Andrés Calle, un minuto para que explique su Impedimento, por favor.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Andrés David Calle Aguas:

Gracias Presidenta. No, simplemente que mis familiares y yo contamos con predios rurales que se dedican a la ganadería y a la agricultura; igual como hoy está redactado el proyecto de ley, podría interpretarse como un perjuicio a la actividad que desempeñamos, en la redacción que hoy se tiene. Entonces simplemente esto, pongo en consideración mi Impedimento.

Presidente:

Está en consideración el Impedimento del honorable Representante Andrés Calle. Anuncio que se va a cerrar, sírvase llamar a lista señora Secretaria.

Secretaria:

Doctor Andrés por favor se retira de la plataforma mientras la Comisión decide sobre su Impedimento.

Honorables Representantes:

Albán Urbano Luis Alberto	Sí
Arias Betancur Erwin	Sí
Asprilla Reyes Inti Raúl	Excusa
Burgos Lugo Jorge Enrique	No
Calle Aguas Andrés David	Fuera de la plataforma
Córdoba Manyoma Nilton	No
Daza Iguarán Juan Manuel	No
Deluque Zuleta Alfredo Rafael	No
Díaz Lozano Élbert	No
Estupiñán Calvache Hernán Gustavo	No
Goebertus Estrada Juanita María	Sí
González García Harry Giovanny	No
Hoyos García John Jairo	No
León León Buenaventura	Sí
López Jiménez José Daniel	No
Lorduy Maldonado César Augusto	No
Lozada Vargas Juan Carlos	No
Matiz Vargas Adriana Magali	No
Méndez Hernández Jorge	No votó
Navas Talero Carlos Germán	Sí
Padilla Orozco José Gustavo	No
Peinado Ramírez Julián	No
Prada Artunduaga Álvaro Hernán	No
Pulido Novoa David Ernesto	Sí
Restrepo Arango Margarita María	No
Reyes Kuri Juan Fernando	Sí
Rodríguez Contreras Jaime	No
Rodríguez Rodríguez Édward David	No
Sánchez León Óscar Hernán	No votó
Santos García Gabriel	No
Tamayo Marulanda Jorge Eliécer	No
Triana Quintero Julio César	No
Uscátegui Pastrana José Jaime	No
Vallejo Chujfi Gabriel Jaime	No
Vega Pérez Alejandro Alberto	No
Villamizar Meneses Óscar Leonardo	No
Wills Ospina Juan Carlos	No

Presidenta, puede usted cerrar la votación.

Presidente:

Secretaria cierre la votación y anuncie el resultado por favor.

Secretaria:

Señora Presidente han votado treinta y tres (33) honorables Representantes, siete (7) por el Sí y veintiséis (26) por el No; en consecuencia, ha sido Negado el Impedimento del doctor Andrés Calle. El siguiente Impedimento señora Presidenta.

Presidente:

Por favor avisar a Andrés Calle, para que vuelva a ingresar a la plataforma Secretaria y vamos con el siguiente Impedimento.

Secretaria:

Así se hará señora Presidenta. Sí, señora Presidenta, el siguiente Impedimento dice de la siguiente manera.

Impedimento: Conforme a los artículos 286 y 291 de la Ley 5ª de 1992, me declaro Impedido ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para participar en la discusión y votación del Proyecto de ley 283 de 2019 Cámara, *por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000*, toda vez que poseo una finca en donde desarrollo actividades agrícolas y ganaderas de pequeña escala, y poseo permiso de la autoridad ambiental para la tala de algunos árboles que generan riesgo por su estado; y con la aprobación de este proyecto podría verme afectado. Jorge Eliecer

Tamayo Marulanda. Ha sido leído el Impedimento señora Presidenta.

Presidente:

En consideración el Impedimento presentado por el doctor Tamayo, ¿Ya se le avisó que se retirara de la plataforma Secretaria?

Secretaria:

No doctora por si hay alguna explicación, no le dije que se retirara.

Presidente:

Doctor Tamayo: Una explicación de su Impedimento, un minuto por favor.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Jorge Eliécer Tamayo Marulanda:

No, Presidenta, es totalmente clara la proposición; no considero dar una explicación adicional.

Presidente:

En consideración el Impedimento del doctor Tamayo. Doctor Tamayo, por favor se retira de la plataforma. Está en consideración, anuncio que se va a cerrar, Secretaria por favor llame a lista.

Secretaria:

Señora Presidenta llamo a lista, con la constancia de que el doctor Tamayo se retira de la plataforma para la discusión y votación de su Impedimento.

Honorables Representantes:

Albán Urbano Luis Alberto	Sí
Arias Betancur Erwin	Sí
Asprilla Reyes Inti Raúl	Excusa
Burgos Lugo Jorge Enrique	No
Calle Aguas Andrés David	No
Córdoba Manyoma Nilton	No
Daza Iguarán Juan Manuel	No
Deluque Zuleta Alfredo Rafael	No
Díaz Lozano Élbert	No
Estupiñán Calvache Hernán Gustavo	No
Goebertus Estrada Juanita María	Sí
González García Harry Giovanny	No
Hoyos García John Jairo	No votó
León León Buenaventura	Sí
López Jiménez José Daniel	No
Lorduy Maldonado César Augusto	No
Lozada Vargas Juan Carlos	Sí
Matiz Vargas Adriana Magali	No
Méndez Hernández Jorge	No votó
Navas Talero Carlos Germán	Sí
Padilla Orozco José Gustavo	No
Peinado Ramírez Julián	No
Prada Artunduaga Álvaro Hernán	No
Pulido Novoa David Ernesto	Sí
Restrepo Arango Margarita María	No
Reyes Kuri Juan Fernando	Sí
Rodríguez Contreras Jaime	No
Rodríguez Rodríguez Édward David	No
Sánchez León Óscar Hernán	No votó
Santos García Gabriel	No votó
Tamayo Marulanda Jorge Eliécer	Fuera de la plataforma
Triana Quintero Julio César	No
Uscátegui Pastrana José Jaime	No
Vallejo Chujfi Gabriel Jaime	No
Vega Pérez Alejandro Alberto	No
Villamizar Meneses Óscar Leonardo	No votó
Wills Ospina Juan Carlos	No

Presidenta puede cerrar la votación.

Presidente:

Cierre la votación Secretaria y anuncie el resultado por favor.

Secretaria:

Señora Presidente han votado treinta (30) honorables Representantes, ocho (8) por el Sí y veintidós (22) por el No; en consecuencia, ha sido Negado el Impedimento del doctor Jorge Eliécer Tamayo. Ya le digo que se reintegre a la Sesión. Siguiente Impedimento, Presidenta hay más Impedimentos todavía y siguen radicando.

Presidente:

Siguiente Impedimento Secretaria, sírvase dar lectura.

Secretaria:

El siguiente Impedimento doctora es del honorable Representante Julio César Triana.

Impedimento

Referencia: Solicitud de Impedimento al Proyecto de ley número 283 de 2019 – Delitos Recursos Naturales. Por medio del presente muy comedidamente me permito solicitar Impedimento, en virtud del artículo 286 de la Sección 4ª del Capítulo Undécimo de la Ley 5ª de 1992, que al tenor señala: "Todo Congresista, cuando exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas". Es así como manifiesto soy propietario de una propiedad rural y podría existir por ello un interés directo que la ley prevé, y solicito se me declare Impedido para participar en el debate del Proyecto de ley número 283 de 2019, *por medio del cual se sustituye el Título XI, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000*.

Cordialmente, *Julio César Triana*.

Ha sido leído el Impedimento del doctor Triana, doctora Adriana Magali.

Presidente:

Gracias Amparito. Doctor Julio César Triana, un minuto para que explique su Impedimento por favor.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Julio César Triana Quintero:

Miren, Presidenta y colegas, dentro de las actividades que yo registré en el Congreso de la República, como la segunda actividad a la que me dedico es la agricultura, tengo un predio rural en el que cultivo café y tengo un pequeño cultivo de aguacate. No acaté las sugerencias de Petro, el aguacate lo tenía ya sembrado con anterioridad, pero este proyecto además toca una serie de limitaciones a mi parecer de quienes explotamos o desarrollamos actividades agrícolas. Entiendo perfectamente que la norma penal es de aplicación general, indeterminada y seguramente no hay, pero en un país donde hay una enfermedad llamada demanditis aguda, es mejor dejar la claridad de este hecho. Gracias Presidenta.

Presidente:

Muchas gracias doctor Triana. Se abre la discusión del Impedimento del doctor Triana, anuncio que se va a cerrar, se cierra, sírvase llamar a lista Secretaria.

Secretaria:

Sí señora Presidenta, llamo a lista para el Impedimento del doctor Julio César Triana.

Honorables Representantes:

Albán Urbano Luis Alberto	Sí
Arias Betancur Erwin	Sí
Asprilla Reyes Inti Raúl	Excusa
Burgos Lugo Jorge Enrique	No
Calle Aguas Andrés David	No
Córdoba Manyoma Nilton	No
Daza Iguarán Juan Manuel	No votó
Deluque Zuleta Alfredo Rafael	No
Díaz Lozano Élbert	No
Estupiñán Calvache Hernán Gustavo	No
Goebertus Estrada Juanita María	No
González García Harry Giovanny	No
Hoyos García John Jairo	No votó
León León Buenaventura	Sí
López Jiménez José Daniel	No
Lorduy Maldonado César Augusto	No
Lozada Vargas Juan Carlos	No
Matiz Vargas Adriana Magali	No
Méndez Hernández Jorge	No
Navas Talero Carlos Germán	Sí
Padilla Orozco José Gustavo	No
Peinado Ramírez Julián	No
Prada Artunduaga Álvaro Hernán	No
Pulido Novoa David Ernesto	Sí
Restrepo Arango Margarita María	No
Reyes Kuri Juan Fernando	Sí
Rodríguez Contreras Jaime	No
Rodríguez Rodríguez Édward David	No
Sánchez León Óscar Hernán	No votó
Santos García Gabriel	No
Tamayo Marulanda Jorge Eliécer	No
Triana Quintero Julio César	Fuera de la plataforma
Uscátegui Pastrana José Jaime	No
Vallejo Chujfi Gabriel Jaime	No
Vega Pérez Alejandro Alberto	No
Villamizar Meneses Óscar Leonardo	No
Wills Ospina Juan Carlos	No

Presidenta puede usted cerrar la votación.

Presidente:

Querida Secretaria cierre la votación y anuncie el resultado por favor.

Secretaria:

Presidenta han votado treinta y dos (32) honorables Representantes, seis (6) por el Sí y veintiséis (26) por el No; en consecuencia, ha sido Negado el Impedimento del doctor Julio César Triana.

Presidente:

Por favor avisar al doctor Julio César Triana para que se reintegre a la plataforma y siguiente Impedimento.

Secretaria:

El siguiente Impedimento doctora Adriana es el siguiente, es del doctor Erwin Arias.

Impedimento

De manera atenta y de conformidad con lo establecido en los artículos 286 y 291 de la Ley 5ª de 1992 y las demás normas concordantes, me permito presentar Impedimento para participar en el debate y votación del Proyecto de ley número 283 de 2019 Cámara, *por medio del cual se sustituye el Título XI, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000*, toda vez que en la actualidad mi familia desarrolla actividades comerciales relacionadas con el sector agropecuario y el sector minero que podrían beneficiar o perjudicar con la aprobación del presente articulado, Erwin Arias Betancur. Ha sido leído el Impedimento del doctor Erwin Arias señora Presidenta.

Presidente:

Se abre la discusión del Impedimento del doctor Erwin Arias, anuncio que se va a cerrar, se cierra. Señora Secretaria por favor llame a lista.

Secretaria:

Llamo a lista con la constancia de que el honorable Representante Erwin Arias se ha retirado de la plataforma.

Honorables Representantes:

Albán Urbano Luis Alberto	Sí
Arias Betancur Erwin	Fuera de la plataforma
Asprilla Reyes Inti Raúl	Excusa
Burgos Lugo Jorge Enrique	No
Calle Aguas Andrés David	No votó
Córdoba Manyoma Nilton	No
Daza Iguarán Juan Manuel	No votó
Deluque Zuleta Alfredo Rafael	No
Díaz Lozano Élbert	No
Estupiñán Calvache Hernán Gustavo	No
Goebertus Estrada Juanita María	Sí
González García Harry Giovanny	No
Hoyos García John Jairo	No
León León Buenaventura	Sí
López Jiménez José Daniel	No
Lorduy Maldonado César Augusto	No
Lozada Vargas Juan Carlos	No
Matiz Vargas Adriana Magali	No
Méndez Hernández Jorge	No
Navas Talero Carlos Germán	No
Padilla Orozco José Gustavo	No
Peinado Ramírez Julián	No
Prada Artunduaga Álvaro Hernán	No
Pulido Novoa David Ernesto	Sí
Restrepo Arango Margarita María	No
Reyes Kuri Juan Fernando	Sí
Rodríguez Contreras Jaime	No
Rodríguez Rodríguez Édward David	No votó
Sánchez León Óscar Hernán	No votó
Santos García Gabriel	No
Tamayo Marulanda Jorge Eliécer	No
Triana Quintero Julio César	No
Uscátegui Pastrana José Jaime	No
Vallejo Chujfi Gabriel Jaime	No
Vega Pérez Alejandro Alberto	No
Villamizar Meneses Óscar Leonardo	No votó
Wills Ospina Juan Carlos	No

Presidenta he tratado de llamar a algunos, no contestan las videollamadas tampoco, puede usted cerrar la votación.

Presidente:

Cierre la votación Secretaria y anuncie el resultado por favor.

Secretaria:

Señora Presidenta han contestado treinta (30) honorables Representantes, veinticinco (25) por el No y cinco (5) por el Sí; en consecuencia, ha sido Negado el Impedimento del doctor Erwin Arias.

Presidente:

Por favor comunicarle al doctor Erwin Arias para que se reintegre a la Sesión. Siguiente Impedimento Secretaria.

Secretaria:

Sí señora Presidenta, el siguiente Impedimento es del doctor Jorge Enrique Burgos Lugo, ruego se retire.

Impedimento

Por medio de la presente me declaro Impedido para votar, discutir y aprobar el Proyecto de ley número 283 de 2019 Cámara, *por medio del cual se sustituye el Título XI de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente de la Ley 599 de 2000*, justificando que en la actualidad tengo predios rurales y mi actividad particular es la ganadería y agricultura. Ha sido leído el Impedimento señora Presidenta.

Presidente:

Se abre la discusión del Impedimento presentado por Jorge Enrique Burgos. Doctor Burgos le pido por favor que se retire de la plataforma. Se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión, llame a lista Secretaria.

Secretaria:

Así se hará señora Presidenta. Llamo a lista para la votación.

Honorables Representantes:

Albán Urbano Luis Alberto	Sí
Arias Betancur Erwin	Sí
Asprilla Reyes Inti Raúl	Excusa
Burgos Lugo Jorge Enrique	Fuera de la plataforma
Calle Aguas Andrés David	No votó
Córdoba Manyoma Nilton	No
Daza Iguarán Juan Manuel	No votó
Deluque Zuleta Alfredo Rafael	No
Díaz Lozano Élbert	No
Estupiñán Calvache Hernán Gustavo	No
Goebertus Estrada Juanita María	No
González García Harry Giovanny	No
Hoyos García John Jairo	No
León León Buenaventura	Sí
López Jiménez José Daniel	No
Lorduy Maldonado César Augusto	No
Lozada Vargas Juan Carlos	No
Matiz Vargas Adriana Magali	No
Méndez Hernández Jorge	No

Navas Talero Carlos Germán	No
Padilla Orozco José Gustavo	No
Peinado Ramírez Julián	No
Prada Artunduaga Álvaro Hernán	No
Pulido Novoa David Ernesto	Sí
Restrepo Arango Margarita María	No
Reyes Kuri Juan Fernando	Sí
Rodríguez Contreras Jaime	No
Rodríguez Rodríguez Édward David	No votó
Sánchez León Óscar Hernán	No votó
Santos García Gabriel	No
Tamayo Marulanda Jorge Eliécer	No
Triana Quintero Julio César	No
Uscátegui Pastrana José Jaime	No
Vallejo Chujfi Gabriel Jaime	No
Vega Pérez Alejandro Alberto	No
Villamizar Meneses Óscar Leonardo	No votó
Wills Ospina Juan Carlos	No

Señora Presidenta puede cerrar la votación.

Presidente:

Secretaria cierre la votación, sírvase anunciar el resultado Secretaria.

Secretaria:

Han votado treinta (30) honorables Representantes, cinco (5) por el Sí y veinticinco (25) por el No; en consecuencia, ha sido Negado el Impedimento del doctor Burgos.

Presidente:

Amparito, avisémosle al doctor Burgos para que se reintegre a la Sesión y siguiente Impedimento.

Secretaria:

Siguiente y último Impedimento señora Presidenta.

Impedimento

Con el fin de atender los deberes de los Congresistas, especialmente el consagrado en el artículo 268 numeral 7° de la Ley 5ª de 1992, me declaro Impedido para participar en la discusión y votación del Proyecto de ley número 283 de 2019 Cámara, *por medio del cual se sustituye el Título XI "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000*, toda vez que poseo predios dedicados a la actividad agrícola y acciones en Ecopetrol. Atentamente Juan Fernando Reyes Kuri. Dejo la constancia de que el Representante Kuri se retira de la plataforma.

Presidente:

Se abre la discusión para el Impedimento del doctor Juan Fernando Reyes, anuncio que se va a cerrar, se cierra. Llame a lista Secretaria.

Secretaria:

Llamo a lista Presidenta.

Honorables Representantes:

Albán Urbano Luis Alberto	Sí
Arias Betancur Erwin	Sí
Asprilla Reyes Inti Raúl	Excusa
Burgos Lugo Jorge Enrique	No
Calle Aguas Andrés David	No
Córdoba Manyoma Nilton	No
Daza Iguarán Juan Manuel	No
Deluque Zuleta Alfredo Rafael	No
Díaz Lozano Élbert	No
Estupiñán Calvache Hernán Gustavo	No
Goebertus Estrada Juanita María	Sí
González García Harry Giovanny	No
Hoyos García John Jairo	No
León León Buenaventura	Sí
López Jiménez José Daniel	No
Lorduy Maldonado César Augusto	No
Lozada Vargas Juan Carlos	No
Matiz Vargas Adriana Magali	No
Méndez Hernández Jorge	No
Navas Talero Carlos Germán	No
Padilla Orozco José Gustavo	No
Peinado Ramírez Julián	No
Prada Artunduaga Álvaro Hernán	No
Pulido Novoa David Ernesto	No votó
Restrepo Arango Margarita María	No
Reyes Kuri Juan Fernando	Fuera de la plataforma
Rodríguez Contreras Jaime	No
Rodríguez Rodríguez Édward David	No votó
Sánchez León Óscar Hernán	No votó
Santos García Gabriel	No
Tamayo Marulanda Jorge Eliécer	No
Triana Quintero Julio César	No
Uscátegui Pastrana José Jaime	No
Vallejo Chujfi Gabriel Jaime	No
Vega Pérez Alejandro Alberto	No
Villamizar Meneses Óscar Leonardo	No votó
Wills Ospina Juan Carlos	No

Puede cerrar la votación señora Presidenta.

Presidente:

Cierre la votación querida Secretaria y anuncie el resultado.

Secretaria:

Señora Presidenta han votado treinta y dos (32) honorables Representantes, veintisiete (27) por el No y cinco (5) por el Sí; en consecuencia, ha sido Negado el Impedimento del Representante Juan Fernando Reyes Kuri. Señora Presidenta manifestarles a usted

y a los integrantes de la Comisión que no hay más Impedimentos al proyecto.

Presidente:

Querida Secretaria enteremos al doctor para que se reintegre nuevamente a la sesión. Quiero que me certifique si el señor Fiscal General de la Nación se encuentra presente en esta Sesión.

Secretaria:

Ya reviso doctora Adriana Magali, sé que sí se había conectado, pero no sé si todavía está, ayúdame William por favor.

Presidente:

Doctor Juan Carlos Lozada, por favor me confirma si el señor Fiscal General de la Nación se encuentra en la plataforma. ¿Sabe usted?

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas:

El señor Fiscal General de la Nación se tuvo que retirar porque estuvo esperando pues desde las 10:00 de la mañana y ya son las 12.42, entonces me pide que se excusa que él mañana nos va a hacer llegar por escrito su concepto del proyecto y que por tal motivo pues pide disculpas pero se tuvo que retirar a una reunión que tenía programada.

Presidente:

Continuemos entonces señora Secretaria.

Secretaria:

Ya se leyó la proposición con que termina el Informe de Ponencia, ya se votaron todos los Impedimentos, lo que corresponde es poner en consideración y votación la proposición con que termina el Informe de la Ponencia señora Presidenta.

Presidente:

Doctor Juan Carlos Lozada, ¿Cuánto tiempo necesita usted doctor Juan Carlos? ¿Cuánto tiempo necesita para hacer la exposición del Proyecto?

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas:

Presidenta, pues yo esperaré no demorarme más de veinte o veinticinco minutos máximo, Presidenta.

Presidente:

Treinta minutos doctor Juan Carlos Lozada, teniendo en cuenta la complejidad y la importancia de este proyecto, por favor.

Continúa con el uso de la palabra el honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas:

Muchísimas gracias Presidenta Adriana Magali Matiz, veo que ha aprendido usted de mi generosidad con el tiempo, cosa que celebro. Bueno primero que todo, saludar y agradecer a todos los compañeros de la Comisión Primera por haber permitido que este debate se diera hoy aquí. Yo creo que es un tema de fundamental importancia para el país, esto no es un tema menor, este tema del medio ambiente nos ocupará querida Presidenta, durante los próximos treinta o cuarenta años. Yo le quiero contar que muy posiblemente este es el tema del futuro en nuestra Nación, pero también en el mundo entero y a mí me gustaría empezar haciendo una contextualización de por qué es fundamental empezar a tomar medidas en términos ambientales, de manera mucho más estricta y si se quiere de manera mucho más férrea en un país como Colombia.

Presidenta, la situación ambiental de este planeta es de una extremísima gravedad, es que esto no se trata aquí de hacer ningún tipo de pronóstico maléfico, ni de hacer aquí teorías de la conspiración, ni mucho menos se trata de generar aquí pánico o una situación digamos, casi que apocalíptica. No, aquí lo que hay es una realidad que es absolutamente innegable, una situación del ambiente de nuestro planeta que nunca había estado en una situación más crítica que ahora, y que desgraciadamente si no tomamos medidas y correctivos a tiempo en términos de la defensa, la protección, la conservación del ambiente en nuestro país y en el mundo de manera urgente, posiblemente cuando el mundo nos obligue a hacerlo será ya demasiado tarde Presidenta.

Este planeta tiene un enemigo mortal hoy, un enemigo mortal y se llama el tiempo querida Presidenta y compañeros. Naciones Unidas ha dicho que nos restan apenas diez años doctor Élbert Díaz, diez, esto lo dijo hace ya más de un año; luego es menos de diez años para que lleguemos a lo que han denominado el punto de no retorno ambiental. Es decir, que dentro de nueve años u ocho años y algo, si nosotros no somos capaces de revertir el fatídico daño ambiental que le hemos causado a este planeta, vamos a llegar a un punto en el que la dinámica ambiental del planeta nos llevará a terribles y muy graves calamidades. Fíjese usted dice el IPCC que, si en los próximos diez años no somos capaces de reducir a cero la emisión de gases de efecto invernadero, básicamente no lograremos que este planeta no pase del promedio de 1.5° en aumento de la temperatura y cuando eso suceda doctor Nilton Córdoba, será cuestión de apenas unos años para que la subida del nivel del mar arrase básicamente, prácticamente todas las poblaciones costeras de este planeta.

Es que aquí no estamos hablando de nada menos que eso, y puede que eso a ustedes les suene a película de ficción, puede que a ustedes les suene eso a película de Hollywood, nosotros ya en este momento estamos viendo las consecuencias nefastas de la acción humana sobre el clima y ustedes lo pueden ver cómo la temperatura aumenta de manera dramática en muchos sectores del planeta y durante los inviernos decrece a temperaturas realmente calamitosas. La amplitud térmica del planeta, es decir, la diferencia entre la temperatura más alta y la temperatura más baja, no para de crecer todos los años en este planeta; lo que le hemos hecho a nuestro planeta hasta ahora es realmente una vergüenza para la especie humana, y hoy nos corresponde a nosotros tomar medidas con respecto a esto, queridos compañeros, porque de otra manera

seremos la generación que les tendrá que explicar a nuestros hijos y a nuestros nietos que no fuimos capaces de heredarles un planeta medianamente sostenible.

Y fíjense, Colombia en este concierto de calamidad, de absoluta crisis climática, es que ya ni siquiera podemos hablar de calentamiento global, ya ni siquiera podemos hablar de cambio climático; lo que estamos viviendo es la posibilidad misma de la sexta extinción masiva de las especies sobre este planeta, pero esta vez generada por una sola especie que es la especie humana, que desgraciadamente no ha tenido en consideración la sostenibilidad de este planeta en términos de su productividad, en términos de su actividad económica, en términos de la conciencia que tenemos que generar como sociedad. Colombia juega un rol fundamental en el concierto internacional en esta materia, porque resulta que Colombia es el segundo país con la mayor tasa de biodiversidad de este planeta; entonces a mayor poder, mayor responsabilidad, a mayor riqueza ambiental mayor responsabilidad de cuidado, mayor responsabilidad de conservación y de preservación de esa naturaleza querida Presidenta y compañeros.

Colombia tiene prácticamente la misma tasa de biodiversidad que el Brasil en un territorio cinco veces más pequeño que nuestro vecino, eso quiere decir que somos el primer país con mayor tasa de biodiversidad por cada cien mil kilómetros cuadrados del planeta entero, razón por la cual, a nosotros digamos esta riqueza nos obliga a tener mucho más cuidado, a ser ejemplo para el mundo de conservación y de preservación de la naturaleza, y desgraciadamente hoy por hoy, eso no es lo que hemos hecho. Tenemos doscientas mil hectáreas de bosque nativo deforestado al año y, como lo decía el doctor Rodrigo Botero, de Conservación y Desarrollo, en su artículo en *El País* de España –de esto dejé constancia en la Plenaria hace unos días, compañeros–, solamente en los cuatro primeros meses de este año, es decir, en plena pandemia hemos deforestado exactamente esas mismas doscientas mil hectáreas que deforestábamos apenas en el año 2019, lo que quiere decir que la situación de este año va a ser posiblemente la debacle más grande en términos de deforestación de la historia de Colombia.

El Representante Pulido lo sabe muy bien, porque su departamento es uno de los más afectados por esta demencia, por bandas absolutamente criminales, no hay otra forma de describirlas; es que lo que demuestra que en cuatro meses sean capaces de deforestar lo que en Colombia se deforesta en un año es que hay unos esfuerzos que están coordinados, que hay unas mafias, unos delincuentes que detrás de esa deforestación anual comprenden los ritmos, comprenden las maneras, comprenden los momentos en que esto se debe hacer, para terminar acaparando tierras en favor de bandas delincuenciales, que al final terminan ellas siendo tituladas por esos terrenos en nuestro país, y que utilizan esa deforestación y meter unas vacas y una palma africana ilegal y una coca, para después terminar uniendo varios predios y haciéndose titular un número muy importante de tierras.

Esa es la dinámica de la deforestación en nuestro país, principal problema ambiental de nuestra Nación que aquí queremos ponerle digamos, una talanquera creando el Delito de Deforestación y por supuesto el delito de financiación a la deforestación, porque no son esos pequeños campesinos que terminan tumbando unos cuantos árboles para tener el Pancoger querido Representante Triana, no son esos. Lo que pasa es que detrás de ellos hay todos unos clanes delincuenciales que terminan financiando a esos pequeños campesinos, para que tumben esos predios para que después les titulen a ellos, no son los beneficiados. Los beneficiados de la deforestación en Colombia no son los pequeños campesinos; son grandes terratenientes acaparadores de tierras, a eso le tenemos que poner fin en Colombia. Queridos Representantes, somos el primer contribuyente a la polución marina del mar Caribe colombiano, por ejemplo. Definitivamente somos uno de los países que está acabando su recurso hídrico de manera más pronunciada. Hace apenas algunos años estábamos entre los cinco países con la riqueza hídrica más grande; hoy estamos tristemente casi llegando al, el límite de ser uno de los veinte países, es decir, hemos reculado terriblemente en nuestra riqueza hídrica.

Esto es de lo más lamentable, sabiendo que el futuro de este planeta, un planeta donde menos del 1% del agua es potable, es justamente la posibilidad de tener agua y que eso constituye una enorme riqueza para el futuro de este país. Nuestro modelo de desarrollo es un modelo de desarrollo depredador, que hoy ha vuelto a nuestro país uno de los principales países en perder biomasa en el planeta. Creo que hace un par de días salió un estudio que dice que estamos en el puesto séptimo en términos de deforestación; somos el tercer país que más deforesta en el mundo, después de Brasil e Indonesia. Y por supuesto que el cuidado del agua, el cuidado de las especies, ustedes pueden creer, queridos Representantes, que el segundo negocio ilegal más lucrativo de este planeta después del narcotráfico es el tráfico de fauna silvestre. El tráfico de fauna silvestre vale millones y millones de dólares, y Colombia es el segundo país que más fauna silvestre trafica, o el país a partir del cual se trafica fauna silvestre, el segundo después de Brasil es Colombia.

Luego a nosotros nos tiene es que dar vergüenza que Colombia hoy sea el epicentro de los dos negocios ilegales más lucrativos del mundo: el narcotráfico por un lado y por otro lado el tráfico de fauna silvestre. Solamente el año pasado, doctor Élbert Díaz, incautó la Policía más de veinticuatro mil especies de animales, veinticuatro mil animales, y le quiero decir que, según los cálculos de la Policía Nacional, eso no corresponderá ni siquiera al 10% de todo el tráfico de fauna silvestre al interior de nuestro país. Haga los cálculos. Hagan los cálculos compañeros de lo que esto significa en

pérdida de especies nativas de nuestro país, es una cosa realmente de una gravedad inconmensurable lo que estamos viviendom querida Presidenta y compañeros.

Por esta razón, ustedes han visto que casi que toda mi agenda legislativa, bueno yo he presentado Proyectos en otros sentidos, aquí logramos sacar adelante la Segunda Vuelta para la elección del Alcalde Mayor de Bogotá, hemos logrado poner el tema de los plásticos de un solo uso, por un lado, el tema de las leyes en favor de los animales, por otro. Pero para defender de manera integral al ambiente, estamos necesitando medidas que sean realmente contundentes y que, digamos, tengan la menor flexibilidad posible en esta materia porque los daños por pequeños que parezcan en alguna u otra región del país cuando se van sumando los unos a los otros, terminan constituyendo una debacle ambiental sin precedentes. Es ahora o nunca que nosotros le tenemos que decir a nuestra sociedad si estamos listos para combatir este fenómeno de la crisis climática y del holocausto ambiental en el que estamos sumiendo a este planeta.

Es ahora o nunca que el Congreso de la República le tiene que contar a la ciudadanía de Colombia si se está alineando con este tema del medio ambiente, que yo creo y estoy prácticamente seguro porque lo vivo todos los días, es sin duda alguna el tema central que les importa a las nuevas generaciones en términos de la política de un país. Queridos compañeros, es ahora o nunca y yo sé que aquí hay temas muy polémicos, porque tocan sectores productivos o creen que tocan sectores productivos; por lo menos hay uno que está muy directo aquí que es el tema del *fracking*, que seguramente tendremos que dar el debate. Yo entiendo perfectamente los argumentos de muchos de ustedes que tienen que ver con la necesidad de un país que no se puede quedar sin energía, que no puede importar y demás, pero yo les pido que miren las consecuencias ambientales que el *fracking* puede traer a un país como Colombia.

Pero si en el *fracking* no somos capaces de ponernos de acuerdo, aquí hay un montón de medidas que son esenciales para la preservación y la conservación de nuestro país y que quienes atenten contra el medio ambiente en Colombia tengan que pagar realmente lo que esto le implica a nuestro país. Yo quiero cerrar esta primera parte de la intervención querida Presidenta, antes de mostrar un video, recordándoles las palabras, doctor Buenaventura León me las recordaba usted este fin de semana, del Papa Francisco la semana pasada. El Papa Francisco ha dicho que la causa primigenia y primordial de esta crisis del Coronavirus que estamos viviendo hoy es justamente el daño inconmensurable que le hemos hecho a este planeta, y, si bien el Papa Francisco no es un científico de primer nivel, no puede tener más razón. Está prácticamente comprobado que es por el tráfico de fauna silvestre, como se han generado todas las últimas pandemias de este planeta: el SIDA, la Gripe Española, el Ébola, todos provienen de enfermedades zoonóticas.

¿Será que no tenemos que cambiar hoy cuanto antes, nuestra relación con el planeta y convertir al medio ambiente en la causa principal, como sociedad de salvaguarda de nuestro mundo? Es que hoy ya no solamente hemos puesto en riesgo la vida de las demás especies que cohabitan con nosotros querida Adriana Magali Matiz Presidenta hoy de esta Comisión. Desde 1970 hasta la fecha, han desaparecido el 60% de las especies de este planeta, lo dice WWF; pueden constatarlo, no digo mentiras. Desde el año 1970 a la fecha, este planeta perdió el 60% de sus especies de fauna y de flora; estamos llevando a este planeta a la destrucción total. Yo queridos compañeros y televidentes, gente que nos ve, yo no voy a ser cómplice de esto, yo sí quiero poder mirar, cuando me consiga una novia Presidenta y pueda casarme y tener hijos, a mis hijos y a mis nietos, yo sí los quiero poder mirar a los ojos y decirles que yo di todo de mí, que hice absolutamente todo lo que estuvo en mis manos, así me dijeran que soy un radical, así me digan que soy un ultraambientalista, lo que me quieran decir, a mí eso no me importa, porque si por algo vale la pena luchar hoy en día Presidenta y compañeros, es por la salvaguarda de nuestro mundo, no es menos que esto de lo que se trata la labor que yo vine a hacer a este Congreso y este proyecto es una parte de ello.

Así que yo les quiero hacer un llamado antes de entrar a explicar de qué se trata de manera digamos, precisa el articulado que hoy pongo a consideración de ustedes, que no pierdan ni por un solo segundo de vista de lo que se trata esto y que esto seguramente no va a arreglar todos los problemas ambientales del país, que tendremos que hacer muchas leyes y asegurarnos como Congreso de la República de que se cumplan, que la Fiscalía General de la Nación pueda tener un equipo y un cuerpo especializado en temas ambientales robusto, para que no sigan deforestando, para que no sigan acabando nuestros ríos, para que no sigan talando nuestras selvas, para que no sigan incendiándosenos bosques de nuestro país en el Guaviare, en el Guainía, en el Vichada. Sabían ustedes que la Región Andina de nuestro país corresponde al 18% de la deforestación del país todavía hoy, para que podamos cuidar nuestros mares, para que podamos cuidar el recurso hídrico, que será la base de la posibilidad de la vida sobre este planeta de aquí en adelante. Por eso, yo agradezco las palabras del maestro Germán Navas Talero que dice que este no es un proyecto para abogados, que este es un proyecto para ambientalistas, que este es un proyecto para aquellos que quieren cuidar el medio ambiente y por supuesto que hay que hacerlo a través de las reglas del derecho penal, yo no soy penalista, no soy abogado, pero aquí estoy con un equipo de penalistas que me ayudaron enormemente y a quienes les hago un enorme reconocimiento, por haber redactado un proyecto que yo creo que le cumple las expectativas del país en términos de la mano dura que tenemos que tener con aquellos que están depredando nuestro mundo.

Las cosas son de una tal gravedad que yo no soy capaz de decirlas en palabras y cualquier cosa que yo dijera aquí querida Presidenta y compañeros sería poco, comparado a lo que le estamos haciendo a nuestra madre naturaleza, a nuestra madre tierra en este país, que repito, es el más biodiverso del mundo y por eso tenemos mayor responsabilidad. Por eso quise hacer un video muy corto que dura dos minutos Presidenta, yo le pido que me autorice para poder compartir ese video aquí con ustedes y entraré a hacer mi presentación puntual sobre los temas del proyecto y en eso no me demoraré mucho tiempo Presidenta. (VIDEO).

Presidenta yo les pido disculpas a los compañeros si las imágenes que vieron son demasiado fuertes, yo sé que la imagen del tiburón es desgarradora, pero eso es lo que está sucediendo en nuestro país, aleteo por todos lados. Ustedes habrán visto las cifras de lo que costó, de lo que exportamos de manera ilegal a China en aletas de tiburón y a nosotros nos habían dicho que esa regulación del Ministerio de Agricultura no era para eso, que ponerle una tasa al tonelaje de la aleta de tiburón en Colombia nada tenía que ver con ningún comercio ilegal y ahí están los barcos donde desgraciadamente comprobamos que no era así, con toneladas y toneladas de aletas de tiburón. Ahí vieron las imágenes de la deforestación, en su departamento doctor Pulido, en el Departamento del Caquetá, el departamento más deforestado de nuestro país, ahí vieron lo que puede suceder cuando ocurre de manera involuntaria por supuesto, una tragedia como la de Lizama y la espantosa contaminación que esto ocasionó y la muy lenta, prácticamente inexistente respuesta inmediata de nuestro Estado. Porque no tenemos la capacidad ni institucional ni técnica para responder a una desgracia o una tragedia de esas magnitudes.

Esa es una de las razones por las cuales la Contraloría General de la Nación ha hecho ya cuatro notas de advertencia, diciéndole al Gobierno nacional que en Colombia es imposible hacer *fracking*, no sé si esto lo tendrá en cuenta la Comisión, pero quise dejar este video para que las palabras también tengan imágenes, para que vean que esto no es un discurso, que esta es la realidad que vive la naturaleza hoy en todos los rincones de nuestro país.

Entonces, ahora me voy a permitir poner una presentación y entrar a explicar de manera mucho más precisa de qué trata este proyecto, que lo que pretende queridos compañeros, no es otra cosa que sustituir de manera integral el Capítulo de Delitos Ambientales del Código Penal, el Título de Delitos Ambientales del Código Penal, Título XI de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. En Colombia, la Constitución de 1991 estableció en su artículo 79, que los colombianos tenemos el derecho a gozar de un medio ambiente sano; este mismo artículo estableció un deber del Estado de proteger la diversidad y la integridad del ambiente y bajo este postulado fue que se determinó prohibir y sancionar conductas que atentan contra los recursos naturales del país. Esa es la razón de existir justamente de este Título XI, pero además el artículo 80 de la Constitución Nacional dice en su Inciso 2°, además deberá prevenir y controlar los factores a cargo del Estado, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados, eso nos corresponde a nosotros aquí compañeros.

Hoy nuestro Código Penal cuenta con trece tipos penales para combatir el detrimento de nuestro medio ambiente, son trece que están ahí, ustedes ¿Se está viendo la presentación? Perdón pregunto, Presidenta o Secretaria, ¿se ve la presentación? Ahí están los trece tipos penales que tiene hoy nuestro Código Penal, yo no los voy a leer porque ustedes los están viendo ahí, pero sí me gustaría decir que, sin embargo, ante las nuevas dinámicas, ustedes me preguntarán, pero si esto está, digamos ya hay penalización en trece casos, de digamos delitos contra el ambiente, ¿Por qué hacer esta Reforma? Yo sí les quiero decir que las dinámicas sociales y políticas, pero además las dinámicas económicas que afronta nuestro planeta hoy, como lo dije en mi introducción, hacen absolutamente necesario que podamos robustecer la lucha contra la alteración y la destrucción del ambiente y por eso necesitamos actualizar nuestros tipos penales, que claramente como lo muestran las cifras del video al final han sido absolutamente ineficaces y no proporcionales. Tenemos que establecer conductas que, a pesar de no encontrarse tipificadas, producen un impacto ambiental terriblemente negativo en la biodiversidad del país.

La finalidad entonces principal de este proyecto es substituir el artículo que reza “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, del Código Penal, Ley 599 del 2000, para en primer lugar, reordenar de acuerdo con un tema o materia los actuales tipos penales, agrupándolos en categorías a fines. Si ustedes leen esos delitos como están, no tienen ninguna lógica el uno con el otro; están mal agrupados; no hay una coherencia temática. Nosotros hemos querido reordenarlos, para que al juez de la República le quede muy claro que tienen unas temáticas y, por lo tanto, están agrupados esos tipos penales con alguna lógica.

Modificar la redacción de los tipos penales vigentes incluyendo algunos verbos rectores nuevos y eventos en los que se podrá, en los que se impondrá una pena superior al considerarse más gravosos de acuerdo con el impacto ambiental, y yo sé que aquí va a haber digamos un debate en esta Comisión, pero lo voy a entrar a explicar un poco más adelante. Es evidente que no es lo mismo cortar una hectárea de bosque nativo, que deforestar cien mil hectáreas de bosque nativo. Eso tiene un impacto ambiental enteramente distinto y nos parece a nosotros que la pena debe tener, en la pena se debe ver reflejado el impacto ambiental de la conducta. Eliminar tipos penales que por supuesto, con la creación de los

nuevos que estamos imponiendo aquí, configurarían un *non bis in idem* y por lo tanto no tendría sentido dejarlos; por eso estamos restando tres tipos penales al Capítulo.

Incluir tipos penales nuevos en aras de establecer una política criminal efectiva acorde a la Constitución a ese artículo 79 y artículo 80, que dé alcance al derecho constitucional de conservación y protección del ambiente. La quinta cosa que queremos hacer es crear unas disposiciones comunes a todo el Título. El sexto punto de este proyecto sería incorporar la valoración de impacto ambiental como metodología para determinar la sanción a aplicar, repito esto lo voy a explicar de manera más detallada adelante, pero así como cuando el Ministerio de Ambiente tiene que dar una licencia ambiental y tiene que medir los impactos de una determinada actividad, de la misma manera se puede medir cuál fue el daño efectivo que se le hizo a un ecosistema cuando hubo un delito contra el ambiente y esa consideración debe ser claramente tenida en cuenta por el juez, a la hora de dictaminar una pena.

Unificar y dar coherencia a los mínimos y máximos de las penas de prisión y de multa en materia ambiental, es otra de las propuestas que aquí presentamos ante la Comisión Primera. Entonces, este proyecto está proponiendo incorporar diecisiete nuevos tipos penales, en aras de actualizar la normativa vigente frente a las nuevas dinámicas ilícitas de aprovechamiento ilegal de recursos naturales y daño al medio ambiente, valorando el ejemplo de los Códigos Penales de Perú, Ecuador y España que son muy claros en ello. Esta mañana se lo explicaba yo a mi compañero y amigo el Representante César Lorduy, ya hay Legislación internacional que nos permite si se quiere justificar, disolver.

Presidente:

Creo que fui amplia en el tiempo y ni así alcanzó doctor Juan Carlos Lozada. Quince minutos más para el doctor Juan Carlos por favor, don Víctor. Gracias.

Continúa con el uso de la palabra el honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas:

Qué enorme amplitud Presidenta, le agradezco en el alma, muchísimas gracias. Entonces, esos diecisiete nuevos tipos penales están en la diapositiva que ustedes pueden ver, aprovechamiento ilícito de las aguas y sus recursos, el daño en coral, ustedes vieron en 2.800 más de 2.800 kilómetros de coral, 60% de ellos hoy en riesgo de desaparecer, aprovechamiento ilícito de los recursos de la tierra del suelo y del subsuelo, depósito o inyección de sustancias en el suelo, esto es de una enorme gravedad. El *fracking* que yo sé que será uno de los temas más polémicos de todo el Proyecto aquí, aprovechamiento ilícito de los recursos de la fauna, tráfico de fauna, aleteo, aprovechamiento ilícito de los recursos de la flora, deforestación, promoción y financiación de la deforestación, aprovechamiento ilícito de los recursos genéticos de la biodiversidad, destrucción o alteración de hábitat, alteración del paisaje, aprovechamiento ilícito de residuos, financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica, destinación ilegal de tierras establecidas.

Y por otro lado, el proyecto conserva diez tipos penales que hemos modificado de los trece que ya tenía el Código Penal, nosotros suprimimos tres y dejamos diez que hemos modificado además de los diecisiete que les acabo de leer, que le estamos sumando a este Título. ¿Cuáles son esos que hemos modificado? El manejo y uso ilícito de organismos, microrganismos y elementos genéticamente modificados, manejo ilícito de especies exóticas, contaminación ambiental, contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o de hidrocarburo, que algunos de ustedes han presentado proposiciones para eliminar, cuando es uno de los delitos que ya existe en el Código Penal, les quiero recordar eso a quienes presentaron proposiciones en ese sentido; experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o químicos, ilícita actividad de pesca, caza ilegal (hay algunas Proposiciones que quieren sacar del proyecto de la caza deportiva; les quiero recordar a quienes presentaron esas proposiciones que esto es por mandato de la Corte Constitucional); invasión de áreas de especial importancia ecológica y el ultimo de esos delitos que conservamos haciéndole modificaciones es la explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.

Entonces, ¿cuáles son los tres delitos que pretendemos eliminar?, son los siguientes: ilícito aprovechamiento de recursos naturales renovables, que nos parece que era un delito demasiado amplio, poco preciso, en el que se trata de la misma manera a temas que son absolutamente diferentes y que no pueden ser tratados bajo el mismo paraguas. Por eso ese delito de ilícito de aprovechamiento de recursos renovables, nosotros lo hemos convertido en cinco delitos: aprovechamiento ilícito de aguas y sus recursos hidrobiológicos, aprovechamiento ilícito de recursos de la tierra, el suelo y el subsuelo, aprovechamiento ilícito de los recursos de la fauna, aprovechamiento ilícito de los recursos de la flora y aprovechamiento ilícito de los recursos genéticos de la biodiversidad.

El otro, querido Representante Germán Navas, que estamos eliminando, es la violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de recursos, puesto que en definitiva quien cometa el delito en nuestro país tiene que ser juzgado más allá de cuál es su nacionalidad. Eso es un delito que estaba antes. De hecho, el otro Capítulo del Código Penal, la última Reforma si no estoy mal del año 2011, me corregirá el Maestro Navas, llevó este delito al Capítulo de Delitos Ambientales. A nosotros nos parece que este tipo penal resulta hoy inocuo, puesto que quien cometa el delito en Colombia sea él extranjero o

nacional tiene que ser juzgado de la misma manera. Y el otro delito que estamos suprimiendo es el daño en los recursos naturales, ya que este tipo penal solo se reduce a proteger recursos biológicos, excluyendo los daños que pueden producirse al suelo, a los recursos geotérmicos o al daño en el paisaje, y de esa manera creo que no tiene sentido mantener este delito, puesto que ya estamos aquí poniendo delitos que son mucho más específicos.

¿Cómo proponemos el nuevo orden del Capítulo de Delitos Ambientales del Código Penal? Pues hemos creado nueve títulos que agrupan los tipos penales de una manera ordenada y lógica entre ellos, para digamos realizar una especie de categorización por temas si se quiere y que tenga una coherencia en términos de lo que se protege, de los recursos naturales por proteger. Entonces, quedaría como Capítulo Primero de los Delitos contra los Recursos del Agua y del Suelo, que estaría compuesto por seis tipos penales que abordarán lo pertinente sobre el aprovechamiento de los recursos del agua, del suelo, los yacimientos mineros y otros. El segundo Capítulo de los Delitos contra la Biodiversidad Fáunica y de la Flora, que ese estaría compuesto por diez tipos penales que abordan lo pertinente sobre el aprovechamiento de los recursos de fauna y flora, así como el tema de la caza y la pesca ilegal y además también el tema de la deforestación.

El Capítulo tercero, de los Recursos contra la Biodiversidad Genética, está compuesto por un tipo penal que aborda lo pertinente al tema del aprovechamiento de los recursos genéticos de la biodiversidad. El Capítulo cuarto sería el Capítulo de los Delitos contra el Hábitat y el Paisaje Natural, compuesto por dos tipos penales, y dando alcance al Código de Recursos Naturales, la Ley 99 del 93. Estas Normas abordarán lo pertinente sobre la alteración o destrucción de los diferentes hábitats y la alteración del recurso, digamos, natural paisajístico.

El Capítulo quinto trataría de la Contaminación Ambiental, estaría compuesto por cinco delitos, por cinco tipos penales que abordan lo pertinente sobre los diferentes tipos de contaminación, así como de los elementos contaminantes. El Capítulo sexto trata de la Invasión de Áreas de Especial Importancia Ecológica, está compuesto por dos tipos penales que abordan lo pertinente sobre la invasión de áreas de reserva forestal, zona de nacimientos hídricos, ecosistemas protegidos o áreas protegidas entre otras y su financiación, que esto es fundamental. De la destinación ilegal de tierras se ocupará el Cap*ítulo* séptimo, compuesto por un tipo penal, sé que aquí hay proposición muy interesante y que me parece muy acertada de la Representante Juanita Goebertus, este capítulo abordará lo pertinente sobre la destinación ilegal de áreas de reserva forestal, ecosistemas estratégicos entre otras, para un uso diferente al determinado por la ley.

Creo que la proposición de la doctora Juanita Goebertus versa sobre el tema de baldíos en Colombia, que es increíble que no sea un delito apropiarse de las tierras del Estado. El Capítulo octavo trata del tema del impacto ambiental, por supuesto y aquí, pues me voy a detener en unos instantes. El Capítulo noveno trata de las disposiciones comunes a los Capítulos anteriores, compuesto por cuatro tipos penales que abordarán lo pertinente respecto a las circunstancias de agravación punitiva, la modalidad culposa y la procedencia de las medidas cautelares. Sin embargo, a quien está moviendo las diapositivas, si pudiera devolverse a la diapositiva del Capítulo octavo, le agradecería porque creo que aquí es muy importante esto, puesto que la pena cuando la imponga el juez, debe tener en cuenta el impacto ambiental que la conducta generó porque vuelvo y digo, usted puede deforestar eso ya es la conducta, pero si usted deforestó en plena Selva Amazónica y eso tuvo como consecuencia la muerte de especies de aves por ejemplo, si eso tuvo como consecuencia que se secara un río, si eso tuvo como consecuencia la pérdida de otros animales, si eso tuvo como consecuencia la destrucción de un corredor digamos, de conectividad ecológica entre una zona y otra, pues el impacto ambiental no solamente puede ser medido por cuál es el área deforestada o porque haya cometido esa deforestación.

Sino que ese impacto ambiental puede ser muchísimo mayor, y por eso nosotros hemos planteado la necesidad, de que el juez tenga en cuenta ese impacto ambiental a la hora de graduar la pena. Esto sin perjuicio de los agravantes por supuesto que puede tener una conducta como la deforestación, por ejemplo, si no simplemente para imponer la magnitud de la pena hay que entender la magnitud del daño y por eso nosotros hemos formulado este sistema, que es un sistema digamos parecido a los sistemas que tiene el Ministerio de Medio Ambiente para determinar el riesgo de una cierta actividad a la hora de dar una licencia ambiental en nuestro país. Entonces, quería dejar esa claridad porque sé que ahí hay muchísimas preguntas sobre este tema.

Entonces, digamos Presidenta para terminar, ya que usted ha sido tan generosa con el tiempo y creo que he explicado aquí que de los trece tipos penales que tenía ya el Titulo once, nosotros eliminamos tres, dejamos diez a los que les hemos hecho modificaciones y estamos sumando diecisiete más y que evidentemente, las penas tienen que tener las sanciones o multas deben depender de una valoración de impacto ambiental ocasionado por el delito y por supuesto que aquí hay unas disposiciones comunes que, yo creo que todos ustedes, pues son muy simples en realidad, estamos dando también la posibilidad de que haya también extinción de dominio para que todos aquellos que cometan un delito y utilicen un montón de bienes y de digamos, de maquinaria y un montón de recursos para cometer este ilícito, pues que se les pueda hacer extinción de dominio de todo ello.

Y por supuesto, está el tema de la agravación punitiva, todas las penas de cualquiera de los delitos en contra de los recursos naturales y el ambiente,

se aumentan a la mitad cuando con su comisión se afectan los ecosistemas naturales calificados como estratégicos, se ponga en peligro la salud humana, las especies de la flora, la fauna o su hábitat sea consecuencia de la acción o la omisión de quienes ejercen funciones de control y vigilancia o se genere pérdida de biodiversidad, esos son los cuatro agravantes que tiene esta ley. Entonces compañeros, yo no creo que este proyecto vaya a solucionar el gravísimo problema ambiental de nuestro país, pero creo que le va a dar unas herramientas muy grandes a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces de la República para, digamos, ser verdaderamente estrictos con aquellos criminales que pretenden destruir la naturaleza y el derecho más colectivo de los derechos consagrados en la Constitución de 1991, que es nuestro derecho a un ambiente sano, este es un derecho de cuarta generación, es un derecho que no solamente tenemos nosotros quienes estamos en el presente en el planeta, es el derecho de las futuras generaciones, es el derecho de nuestros hijos, de nuestros nietos, el nuestro propio, que nos ha tocado vivir en un mundo realmente cambiante en esta materia y desgraciadamente cambiante para mal, estamos generando un infierno cuando las pasadas generaciones, a nosotros, nos entregaron un paraíso.

Yo quiero invitarlos compañeros, que dentro de lo racional, yo sé que aquí hay gente que tiene preocupaciones y demás, yo quiero dejarles antes de que usted abra las intervenciones a nuestros compañeros, Presidenta, la noción de que quien les habla está en total disposición de acoger proposiciones, de hecho ya hay varias proposiciones que me parecen magnificas, lo dije aquí, me gusta la proposición de la doctora Goebertus, me gustan las proposiciones, varias de las proposiciones del doctor Méndez, que de hecho lo hace para ser más estricto aún en los temas que tienen que ver con el mar hoy en el Día Internacional de los Océanos, la defensa de los corales es un tema que es fundamental.

Por supuesto, que habrá algunos puntos en los que no nos podremos poner de acuerdo, pero yo les quiero decir que con todo el respeto del mundo, estoy aquí listo para dar el Debate, para acoger la mayor cantidad de Proposiciones que se pueda porque creo que la Comisión Primera, le tiene que mandar un mensaje al país de que así como ha tenido responsabilidad en tantos otros proyectos y que hemos hecho construcción colectiva aquí a varias manos, con la escritura de un número muy importante de proposiciones por parte de quienes no son ni autores ni ponentes, sino que aquí siempre los Proyectos salen enriquecidos, fortalecidos, que aquí siempre hay debate y que siempre todos ustedes legislan en pro del beneficio colectivo del país, pues que yo estoy abierto a que aquí hagamos un Debate respetuoso, abierto, que ojalá termine en la aprobación de un proyecto que, yo creo sería un enorme mensaje para el país más rico en fauna y flora por cada cien mil kilómetros cuadrados del mundo, que se llama este paraíso en el que nos tocó nacer, nuestra querida Colombia a la que desgraciadamente estamos destruyendo de maneras infames e inefables y que este proyecto es un grano de arena para ponerle freno a todos esos aquellos delincuentes que pretenden negarnos el derecho más colectivo de todos los derechos. Muchísimas gracias, querida Presidenta, Adriana Magali Matiz y compañeros.

Presidente:

Muchas gracias a usted doctor Juan Carlos Lozada, excelente presentación, concreta, precisa con mucha claridad. Y yo también quiero aclarar al respecto que, este es un tema en el cual el Legislador y ninguno, ni los miembros de esta Comisión, ni ninguno de los Congresistas, es ajeno a tan mayúsculo problema que usted acá expuso, doctor Lozada, que requiere sin duda alguna ser abordado debido al riesgo en que se encuentra, no solo la vida de las especies de la flora y la fauna, sino también la vida de los seres humanos, por la correlación de dependencia. Es por esto, por lo que es una prioridad abordar un tema tan importante como este, en este caso legislando en procura del medio ambiente.

Vamos a ordenar aquí el Debate de la Ponencia, me han solicitado la palabra el doctor David Pulido, el doctor Buenaventura León, el doctor Germán Navas, el doctor Lorduy, entonces voy a darles la palabra a Julio César Triana y a Nilton Córdoba, son las personas que tengo en este momento registradas. Voy a darle cinco minutos a cada una de las personas que me la solicitaron, creo que es un tema que requiere un amplio debate y vamos a dar cinco minutos para que cada uno realice la intervención. Entonces tiene la palabra doctor David Pulido.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante David Ernesto Pulido Novoa:

Gracias, señora Presidenta. Un saludo cordial para el Autor y Ponente de este proyecto. Desde ya, pues dejando de manifiesto que mi voluntad también por defender el medio ambiente y conocedor de esos hechos y de esa exposición que hace usted, pues obviamente me es innegable, yo soy de uno de los departamentos más deforestados del país, desafortunadamente, con unos hechos históricos que nos han llevado a eso, que me podría aquí demorar, tal vez horas, tratando de explicar desde cuándo y cómo comenzó esa afectación ambiental en mi departamento. Entre otras cosas, por procesos de colonización auspiciados por el mismo Estado por allá en los años 50 a comienzos de los años 60, cuando producto de la violencia también y queriendo más bien menguar esa gran migración de población que venía del llamado Tolima grande, en esa época y por el Ariari llegaron al sur del Meta y al Guaviare.

Y también con un mensaje que en esa época salía por parte de los medios de comunicaciones radiales, que era “Tierras sin hombres, para hombres sin

tierra", con ese mensaje que sonaba en la emisora, La Voz del Llano, es que llegó mucha gente e inició esos procesos de deforestación, vuelvo y lo digo en esa época auspiciados por el Estado. Hoy en día la realidad es otra, es una realidad en donde ya no es esa necesidad para quienes huyen de la violencia y esa necesidad para los desposeídos de tierras, hoy en día es una realidad en donde se aborda, es la ambición por factores económicos e ilegales los que han llevado a que se deteriore de manera tajante nuestro medio ambiente.

Por supuesto, que estoy de acuerdo con el objetivo de este proyecto de ley, es necesario actualizar varios de los tipos penales que trae este Título de nuestro Código Penal, por supuesto la realidad ya no es la misma como lo estoy tratando de explicar a como era hace diez años, veinte años, treinta años, es otra hoy en día y requiere una actualización. Desde ya manifiesto que daré mi voto positivo a la Ponencia, doctor Juan Carlos, no sin antes expresar que sí tengo varias inquietudes y dudas, respecto ya en lo que tiene que ver no solamente con la creación de nuevos tipos penales, sino con la redacción tal vez de algunos. Yo no he radicado todavía las proposiciones que yo tenía, quería ver la exposición, también por supuesto conocer algunos conceptos no solamente vistos desde la perspectiva ambiental que son importantes, porque es lo que nos permite mejorar la redacción, mejorar las definiciones de esos nuevos tipos penales. Sino también, por supuesto, el concepto de quienes tienen técnica en materia política criminal para lo que tiene que ver con los fines de los tipos penales, cual es el de primero o en primera instancia prevenir la comisión de estos delitos.

Pero por supuesto, también sancionar a quienes incurren en esos tipos penales o en esos delitos, es por esto que estaremos atentos. Yo sé que usted pidió muy diligentemente y en tiempo, el concepto al Consejo de Política Criminal, seguramente habrá que buscar es que se trámite y se ponga rápido también porque es allí donde llegan las personas que a veces se quieren escuchar aquí en la Comisión, allí tiene asiento con voz y voto el Fiscal General, el Defensor del Pueblo, el Procurador General, varios Congresistas de esta Cámara y del Senado de la República también y varios técnicos, que seguramente ayudarían a minar ya la minucia de cada uno de esos tipos penales. Por eso, sí seguramente habrá que abordar con más detenimiento, aquí ya se y he visto ahoritica de los correos, hay un montón de Proposiciones de varios Representantes, ¿pero estoy seguro de que todos con la intención es de qué? De apoyar la defensa del medio ambiente y de apoyar también el castigo a quienes deterioran nuestro medio ambiente.

El departamento mío, el departamento del Caquetá, el sur del Meta, ya no aguantan un tiempo prolongado más sin que se ejerzan y se inicien actividades puntuales. Bien lo decía usted ahorita, a mí se me hizo una exposición, por ejemplo, de un proyecto que no ha sido radicado, pero seguramente creo que va a ser radicado y es el de la Reforma a la Fiscalía y ahí se traía, como se tiene la intención de crear una unidad especial, una Delegada especial para delitos de medio ambiente, en donde desde ya será bueno pensar que también muchas de esas unidades queden allá en los territorios donde más se afecta el medio ambiente. Aquí hay un sinnúmero de temas, no solamente hablo para delitos que se configurarían mucho en la Selva amazónica o en la Orinoquia, también encuentra uno en estos tipos penales, en el proyecto de ley, pues delitos que obviamente se generarán o tendrán configuración los océanos, ya hablo aquí de las costas y de otros ecosistemas de nuestro país.

Entonces por eso, doctor Juan Carlos, usted como Autor y Ponente, yo desde ya sí anunciando mi voto positivo a la Ponencia, quiero que tenga muy detenidamente en cuenta, todas y cada una de las Proposiciones que lo buscan no es ni limitar, ni coartar su Proyecto, sino más bien complementarlo, mejorarlo, no solamente con las opiniones…

Presidente:

Doctor Pulido, se acabaron los cinco minutos. treinta segundos para que termine por favor.

Continúa con el uso de la palabra el honorable Representante David Ernesto Pulido Novoa:

Gracias Presidenta, aquí cierro mi intervención. Simplemente para manifestar mi voto positivo, pero sí dejando claro que se tendrá que tener en cuenta por parte de usted, doctor Juan Carlos, cada una de las observaciones de todos, porque de eso dependerá que el proyecto no se quede por el camino. Muchas gracias, señora Presidenta y a usted también doctor Juan Carlos.

Presidente:

Gracias doctor David Pulido. Tiene la palabra el honorable Representante Buenaventura León.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Buenaventura León León:

Gracias apreciada Presidenta. Una feliz coincidencia, estamos hoy discutiendo esta iniciativa como lo expresó el Ponente y Autor, en el Día Mundial de los Océanos, los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, una propuesta noble, una propuesta altruista. Pero aquí mi primera consideración, no olvidemos que estamos modificando el Código Penal, entonces tenemos que combinar el concepto de los ambientalistas, pero también el concepto de los penalistas. Aquí estamos haciendo unas adecuaciones típicas, es decir unos delitos.

El proyecto como ya lo explicó el Ponente, tiene por objeto contemplar nuevos tipos penales, ajustar verbos rectores y tiene un tema sanción por impacto ambiental y esa es una de mis principales preocupaciones, cualquier impacto apreciado Juan Carlos, no sé, veo que en el Proyecto se cambia

la palabra daño, que es fundamental en la actual normatividad por impacto, un campesino puede trozar un árbol y puede causar un impacto. Y por supuesto, esa mirada a la Oceanía que yo la comparto, pero hay que mirar también el resto del país, las situaciones de cada país. Cuando uno tiene la oportunidad de estudiar un proyecto de ley, lo primero que hay que analizar es, si tiene su soporte constitucional y bien lo expresó el Ponente, el artículo 79 de la ley de leyes nos consagra el derecho de toda persona a tener un ambiente sano, la participación ciudadana y la obligación estatal de proteger la diversidad y el medio ambiente, conservar las áreas de importancia ecológica.

Ya lo mencionó el Ponente, la Legislación actual, el Código Penal, los delitos ampliados por la Ley 890, ampliados por la Ley 1453, hoy tenemos trece tipos penales con algunas modalidades culposas. Algunas observaciones a la normatividad actual que ameritan los ajustes, el Código Penal actual ha quedado corto para prevenir el comportamiento que atenta contra el ambiente y los recursos naturales. Segunda pregunta para el Ponente, en la actual normatividad, los delitos ambientales son normas en blanco, pregunta, el articulado propuesto a este proyecto de ley. Mantenemos o no mantenemos los tipos en blanco, debemos remitirnos o no, a las disposiciones del Ministerio del Ambiente de las Corporaciones. Ya lo mencionó usted, los tipos penales suprimidos y por supuesto dentro de los tipos penales adicionados, el aprovechamiento ilícito de las aguas, uno preguntaría acá a un campesino que coloca una manguerita, ¿Cometió un delito? El aprovechamiento ilícito de la tierra, del suelo, del subsuelo lo veo en una redacción muy compleja, el fracking que por supuesto será un tema de amplio debate.

El tema de la deforestación, si yo corto un árbol, ¿Estoy inmerso en el delito? La destrucción y la alteración del hábitat. El hábitat es un tema muy amplio y me parece que no está técnicamente ubicado dentro del tema penal. Por supuesto, de acuerdo con el uso de plásticos prohibidos. El destinatario ilegal de tierras establecidas, hay que tener la claridad en ese concepto, porque tierras establecidas, se puede entender que son unas tierras donde se desarrolla cualquier actividad. Yo veo algunas conveniencias del Proyecto claro que sí, actualizar los tipos penales con dinámicas de explotación, de contaminación, de destrucción tanto de los recursos como de la biodiversidad del país, acorde con el desarrollo humano, con el planeta se dosifica el impacto ambiental, pero también quiero transmitir unas preocupaciones y más que preocupaciones aclaraciones. Varias de ellas y en ellas nos vamos a detener en el articulado, ¿Qué pasa con las actividades de los pequeños mineros? La gran mayoría sin legalizar, a pesar de que este Congreso, le ha dado muchas oportunidades la posibilidad hasta amnistías para que nuestros pequeños mineros se legalicen, pero no sé si es la norma o si son ellos, bueno no sé qué es lo que ha pasado.

Entonces, por su explotación pequeña, ¿Van a incurrir en delitos? Porque la pequeña minería también va a generar impactos y ahí…

Presidente:

Doctor Buenaventura, se acabó el tiempo, treinta segundos para que culmine su intervención y eso que he sido amplia, Cinco minutos para cada uno y no alcanzan, ¿no?

Continúa con el uso de la palabra el honorable Representante Buenaventura León León:

Presidenta, este es un tema de no poca monta que genera y requiere uno, de unos grandes espacios. Preocupaciones con el sector campesino, la tala de un árbol con, indudablemente que hay un impacto ambiental, no deja de ser un impacto y no quitar la palabra daño, muchas actividades generan impacto ambiental, pero tienen plan de manejo, el tema de paisajes que lo contempla el proyecto de ley, allí hay restauración, la explotación ilícita de materiales, de minerales todo tipo. Es decir, aquí se exige, no sé si un daño y me preocupa.

Vuelvo a reiterar mi preocupación por los tipos penales en blanco, hasta dónde podemos avanzar en esta norma penal, dejando por fuera el tema técnico. Aquí vamos a hacer una remisión o no, o queda a interpretación del operador judicial y un tema también de preocupación que es el de la libertad probatoria que desaparece en el proyecto.

Presidente:

Treinta segundos doctor Buenaventura.

Continúa con el uso de la palabra el honorable Representante Buenaventura León León:

Gracias Presidenta. Finalmente, el del tema de la libertad probatoria, entiendo que desaparece en el proyecto por una tarifa legal y recordemos que estamos en un sistema penal acusatorio. Y por supuesto, más adelante ya en el tema de fracking, que también nos preocupa profundamente y es el sector hidrocarburos es uno de los motores de la economía, elevarlo a la categoría de delito no solamente por los ingresos sino más adelante, pues me reservo una intervención, sé que han presentado una Proposición para quitar este artículo, pero allí hay unos argumentos que me parecen muy válidos y preocupantes por la autosuficiencia energética, por el tema de gas, de diésel, de gasolina del país, es la economía del país, los ingresos, las regalías, los recursos con que se atienden los programas sociales del Estado, pero más adelante haré una intervención.

Presidente:

Muchas gracias doctor Buenaventura. Doctor Germán Navas, tiene cinco minutos para su intervención.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Carlos Germán Navas Talero:

Muchas gracias Presidenta. Miré con detenimiento la intervención que hizo el amigo Juan

Carlos Lozada, me pareció llamativa, interesante, buena. Desde ahora le estoy criticando y ya se lo dije yo a él, que haya modificado *nomen iuris* del Título, el Título en este momento se llama de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Yo no veo por qué lo modifica para decir únicamente delitos contra medio ambiente, los recursos naturales. No sobraba esa especificación, de que sea el recurso natural y el medio ambiente.

Yo le pediría al doctor que lo deje tal y como estaba en el Título XI, no hay razón para lo cual le quitemos, porque una cosa es el medio ambiente y otra cosa el recurso natural, cuando yo afecto el recurso natural estoy afectando el medio ambiente. Entonces, no es una expresión que sobre ahí. Obviamente en este tipo de delitos, hay que recurrir necesariamente a la figura de la norma penal en blanco, porque entonces tendríamos que nosotros inventar un Código Penal, especificando todas las medidas que debe respetar el posible infractor. De manera que, es fastidiosa la norma penal en blanco, pero ¿Cómo más la reglamentamos? Yo digo, el que destroza los recursos naturales, cortar leña entonces me toca decir, con la violación de la táca táca. Es necesario, no hay manera de sacarle el cuerpo a esto porque entonces tendrían que entrar a la casuística y no acabarían nunca.

Yo, por eso considero que lamentablemente así no nos haya gustado, pero es una norma con la venia del doctor Buenaventura, hay que usarla porque si miramos en el vigente dice, el que, con incumplimiento de la normatividad existente, obviamente hay que mirar qué Normas hay, para decir estas conductas son punibles. Entonces, si ponemos matar cucarachas no es delito, ¿Por qué no es delito? Porque nadie prohíbe matar cucarachas, no hay ninguna norma de carácter administrativo y está bien, si usted doctor Lozada, recurrió al mecanismo que hay para este tipo de situaciones, de lo contrario si usted dice, ese delito de dar la muerte a cualquier ser vivo, pues entonces cucarachas, pulgas. Usted recurrió a los mecanismos que el derecho penal admite, que son las Normas penales en blanco. Como también se usa en Código Penal las Normas incompletas, que traen la sanción, en caso de las lesiones personales son Normas incompletas en una parte viene la descripción de la conducta y en la otra las sanciones según la gravedad.

A mí no me disgusta, doctor Juan Carlos, realmente lo alabo que se haya preocupado por esto en un mundo donde la gente no piensa si no en la productividad, yo sé que a muchos de ustedes les preocupa el problema del fracking, porque piensan es en la parte económica. El doctor Lozada, llega a lo que nos gusta a los ambientalistas, a nosotros nos gusta cuidar la naturaleza. Yo les cuento, yo he sembrado cerca de Chocontá, más o menos unos quinientos árboles en un lotecito que le regalé a mi nieto y cada vez que puedo siembro un arbolito, prefiero sacrificar el posible lucro que produciría esa tierra si le meto papa y digo no, pues que el resto le meta papa y nosotros nos hemos dedicado con mi nieto, a meterle arbolitos y si usted ve algo verde en esa zona en los Altos de Chocontá, vera eso se debe a personas como que en paz descanse, Manuel Avello y Germán Navas que se dedicaron a sembrar arbolitos. Entonces, eso es lo que uno tiene que cuidar, no quiero agregar más, yo quiero ver qué criticas le hacen, pero lo que a mi atañe lo veo bien hecho desde el punto de vista penal, bien construido, no vine a criticar una cosa que debe a alabarse y a que todo el mundo descuida el medio ambiente, todos les sacan el jugo a los recursos naturales, pero nadie quiere cuidarlos.

Lo felicito, doctor Lozada, y solicito que me deje el Titulo como está actualmente o sea contra los recursos naturales y medio ambiente, lo demás voy a escuchar. Lo que pasa es que aquí hay muchos intereses, aquí hay gente que tienen mucha, mucha riqueza forestal, entonces quieren que solo el poder de ellos les permita explotarla como quieren, ya lo vimos cuando nos iban derrotando, cuando queríamos que no se explotara económicamente la selva y lo que pasó esa vez. Pero en todo caso cuente con mi voto, las observaciones que se hagan las aceptaría, le pido únicamente ese cambio y lo felicito doctor.

Presidente:

Doctor Germán Navas, muchas gracias. Tiene la palabra el doctor César Lorduy.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante César Augusto Lorduy Maldonado:

Gracias Presidenta. Yo quiero en primer lugar felicitar al doctor Lozada, porque ha hecho un trabajo intelectual que independientemente de que estemos de acuerdo o no de acuerdo, es un trabajo intelectual que hay que valorar. Es un trabajo intelectual con elementos de referencia, concordantes o no concordantes, con la situación del país o simple y llanamente que son respuestas a una gran cantidad de expectativas de como el considera que debe comportarse el mundo y en especial Colombia, con relación a los recursos naturales.

Es una preocupación en términos ambientales que compartimos, pero digamos que aquí nos han presentado un proyecto e independientemente de que pudiéramos tener elementos comunes con relación a las preocupaciones, y de cómo deben resolverse las preocupaciones, cuando uno aterriza en el proyecto encuentra elementos concordantes, pero hay unos elementos supremamente preocupantes. He tenido la oportunidad de recibir sus llamadas telefónicas gentiles cosa que les agradezco, hemos conversado por horas sobre algunas particularidades del proyecto, que yo me voy a permitir expresar. La primera, yo creo que por la parte de aumentar las penas así sea creando nuevos delitos, uno no puede imaginarse que todo tipo penal viejo o nuevo, no puede ser excarcelable, es decir ni siquiera los delitos sexuales por los que últimamente he tenido que lidiar, como

consecuencias de las diferentes obligaciones que me ha impuesto el mismo doctor Lozada. Entonces, yo creo que ahí hay una consideración, si ustedes miran las penas creo que nada más hay un solo delito menor con una pena mínima menor a cuatro años y eso hace que el delito no sea excarcelable y cuando digo eso, me refiero a no sé, a la cortada de un arbolito o al aprovechamiento de un recurso hídrico en determinadas condiciones.

El segundo elemento, es que pasamos con la conceptualización que está en el proyecto, pasamos de hacer del daño ambiental, el presupuesto para la configuración del tipo penal y lo cambiamos por impacto ambiental y el doctor Lozada, lo sabe eso es supremamente peligroso. Es decir, bajo esa teoría tenemos que criminalizar absolutamente a todo el mundo en Colombia, en especial a todos los que de alguna manera u otra se relacionan con el Sector Agropecuario, preocupante, novedoso sí, medible también, pero de allí a que simple y llanamente tengamos que ver en términos de impacto, me parece que eso es supremamente peligroso. Segunda línea roja, que yo invito a la Comisión a que lo pensemos con detenimiento.

Tercera línea o tercer punto que me preocupa inmensamente, es el termino paisaje, es decir no definido entre otras cosas, no hay permiso para aprovechamiento del paisaje, no hay concesión para aprovechamiento del paisaje, no hay licencia para aprovechamiento del paisaje, no hay un instrumento administrativo que le permita a las personas decir aprovecho el paisaje. Que tiene un valor el paisaje sí, pero con bastante relatividad y a juicio de alguien, de pronto hasta desconociendo las normas ambientales, el concepto paisaje transversal en todos los diecisiete delitos que se plantean en el proyecto, se constituyen en un elemento peligroso.

Que eso pueda ser solucionable, sí, he conversado con el doctor Lozada, todo es conversable, es posible que nos pongamos de acuerdo, pero sí es mi obligación moral decirle a la Comisión que ahí hay tres elementos independientemente de que hayas tomado el artículo 328 del Código Penal y lo hayas desglosado de la manera como quieras desglosarlo, bueno está bien. Si lo quieres desglosar por recursos hidrobiológicos, si lo quieres desglosar por fauna, si lo quieres desglosar por flora. Así entre otras cosas, esa es la estructura del Código de Recursos Naturales, flora, fauna, recursos hidrológicos, caza y pesca. Pero eso también genera la particularidad de que…

Presidente:

Doctor Lorduy, treinta segundos para que culmine su intervención por favor.

Continúa con el uso de la palabra el honorable Representante César Augusto Lorduy Maldonado:

Entonces, yo para hacerle caso a la Presidenta, como es lógico, yo estoy sumado a que podamos encontrar unos elementos concordantes, entre ellos el hecho de que no se le puede negar a este país, su posibilidad de crecer en términos de recursos energéticos. Muchas gracias Presidenta.

Presidente:

Muchas gracias doctor Lorduy. Tiene la palabra Julio César Triana y se alista Nilton Córdoba.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Julio Cesar Triana Quintero:

Muchas gracias Presidenta y muchas gracias a todos, un atento saludo. Yo tuve la oportunidad de hablar con el doctor Juan Carlos también, me parece que este es un proyecto importante y por supuesto, todo lo que podamos hacer por el medio ambiente lo vamos a hacer. En días pasados así lo demostramos en la Plenaria, apoyando el Proyecto de Reforma Constitucional de Protección de nuestra Amazonía, pero es mi deber, es mi deber y yo no soy hacendado, quiero aclarar, es mi deber hablar a nombre de miles, miles de pequeños productores agropecuarios, que pueden sentir preocupación por este proyecto que se está tramitando. Es sin duda alguna y no lo podemos desconocer, que aquí hay unos artículos que van a generar de entrada, restricciones a la actividad agrícola en el país, uno pudiera pensar que, con el endurecimiento de estos tipos penales, se estaría criminalizando la labor productiva a los campesinos. Muchos campesinos pueden terminar siendo objeto de las peores denuncias y, es más, estos artículos en su mayoría, doctor Juan Carlos, que es mi preocupación, se convierten en no excarcelables, se les aumenta la pena tal, que no van a ser excarcelables, va a ser más fácil que un abogado saque a un narcotraficante de la cárcel que a un campesino, en Colombia.

Mire, yo tengo dudas, doctor Juan Carlos, y se lo digo con sinceridad, el tema de los paisajes, cuando hablamos de paisajes yo digo, cuáles son los paisajes a los que nos referimos, cuál es la alteración al paisaje, quién tiene esa definición de paisaje en materia agrícola, construir una cabaña en una finca cafetera, ¿Es alterar el paisaje? Cuando hablamos de destrucción o alteración del hábitat, con sinceridad lo digo, cuando vamos a sembrar café o vamos a sembrar aguacate o cualquier otra actividad, pues seguramente vamos a alterar el hábitat de nuestra tierra, de la finca, en fin. El aprovechamiento ilícito de las aguas y de los recursos biológicos, se convierten en una dura pena, el aprovechamiento ilícito, todos estos que son conductas repudiables, deben servir es para que sea el Estado el que deba liderar la más dura batalla para capacitar a nuestros campesinos.

Nosotros tenemos entidades como el ICA, incluso el Ministerio de Agricultura que poco hace en la orientación a los pequeños y medianos agricultores, crear nuevos delitos puede generar, de verdad lo digo, Juan Carlos, y aquí vamos seguramente a apoyar este proyecto, pero puede generar no sólo

temor, sino confusión en aquel productor agrícola. Nosotros teníamos unos delitos creo que era el 328 y el 331, vale la pena preguntarnos, señores parlamentarios, maestro Navas, preguntarnos si lo que ocurría era la inoperancia y la no aplicación de las normas vigentes, recordemos, es que no podemos llegar a convertir el derecho penal en la única instancia para atender un problema social de tales magnitudes. La Ley 99 de 1993, Sistema Nacional Ambiental, creó una serie de sanciones y restricciones. ¿Cuáles de ellas se aplican, señores congresistas? ¿Nuestras autoridades las están aplicando? Yo tengo esa preocupación y quiero registrarla porque es posible que al final de este debate con la aprobación de esta norma, doctora Magali, quienes somos de zonas cafeteras, quienes vivimos del pequeño cafetero y agricultor, de pronto terminemos mandando el más intimidatorio mensaje al productor agrícola.

Yo sí pido, seguramente que este proyecto como usted lo advirtió, doctor Juan Carlos, tenga varios ponentes para segundo debate puedan revisar muy bien la carga punitiva que aquí se crea y puedan revisar muy bien las actividades que, de verdad, ruego me excusen, pero pueden terminar siendo interpretadas por las familias campesinas como una criminalización de la actividad agrícola. Yo soy hijo de hombre y padre campesino no soy hacendado, doctor Navas, tenemos un par de pedazos…

Presidente:

Doctor Julio César Triana, treinta segundos para que culmine por favor. Encienda el micrófono.

Continúa con el uso de la palabra el honorable Representante Julio Cesar Triana Quintero:

Quería finalizar diciendo que yo soy hijo de madre y padre campesinos, por eso valoro lo que se pueda hacer por nuestra agua, por nuestro medio ambiente, pero también como soy de origen campesino no hacendado, aclaro, como soy de origen campesino sé la rigurosidad y lo que exige adelantar la actividad agrícola en Colombia. Compañeros, no vayamos a mandar hoy un mensaje intimidatorio a una de las actividades más complejas en este país, que es la actividad agrícola. Mil gracias.

Honorable Representante Carlos Germán Navas Talero:

Moción de Réplica, doctora.

Presidente:

Doctor Germán Navas, un minuto para su Réplica.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Carlos Germán Navas Talero:

Sin ánimo de polemizar con el gran amigo del Huila. Mire, es que precisamente esa es la ventaja de que estas sean normas penales en blanco, porque sea la autoridad administrativa la que nos va a indicar hasta dónde hay o no un daño, porque si ustedes miran el actual, el actual dice; *el que con el cumplimiento de la normatividad existente se apropie e introduzca*. Entonces, esas normas son las que van a decir, cuándo se considera que se ha introducido, cuándo se considera que se ha hecho daño, eso tendrá que hacerlo la CAR, el ICA todo eso, porque a muchos el derecho penal nos importa describir un tipo. Pero ya, cómo se llega al tipo si es de la autoridad administrativa, por eso yo alabo el hecho de que sea una norma penal en blanco.

Entonces, esas dudas que tiene mi amigo Julio Cesar se disiparán, en el momento en que el Gobierno o la autoridad competente determine cuándo se puede cortar un árbol y cuándo no se puede cortar un árbol, que no sería materia de nosotros aquí en el campo del derecho penal, pero su observación es juiciosa. El que tiene que ser cuidadoso no es el Legislador, en este caso el que tiene que ser…

Presidente:

Doctor Navas, treinta segunditos, por favor prenda el micrófono. ¿Doctor Navas?

Honorable Representante Julio César Triana Quintero:

Muchas gracias por sus comentarios, doctor Navas.

Presidente:

Nilton Córdoba, continúa con el uso de la palabra y se prepara la doctora Juanita Goebertus.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Nilton Córdoba Manyoma:

Muchas gracias querida Presidenta. La verdad es que, felicitar a Juan Carlos Lozada, por la ayuda y el trabajo juicioso con que ha avanzado en este proyecto. Para nadie es un secreto que el departamento del Chocó, es uno de los departamentos del país y yo diría una de las zonas del mundo donde tenemos mayor biodiversidad. Pero también, tenemos uno de los departamentos más deforestados de este país. Por allá en el año 2018, junto al Guaviare fuimos los departamentos pioneros en deforestación por diversas actividades.

En el departamento del Chocó la deforestación, por ejemplo, por el tema industrial o sea ganadería ha sido muy poca, acá la deforestación ha sido más por la tala de árboles maderables con fines sí, por supuesto económicos, y por la siembra de cultivos ilícitos. Yo creería y en buen momento, doctor Juan Carlos, y compañeros, la Comisión se encarga de estudiar y posiblemente convertir en Ley de la República este proyecto. Sin embrago, al igual que muchos compañeros como es el caso de Triana, a mí me deja algunas preocupaciones. Por ejemplo, el artículo 79 de la Constitución, claro, semántico, pero tenemos que ser armónicos, Juan Carlos, y demás compañeros, en la medida que no solamente podemos convertirnos en conservacionistas sino también que le generemos a esos departamentos

donde tenemos la mayor biodiversidad del país, las condiciones para que su gente pueda conseguir un desarrollo sostenible.

Y allí tendríamos que empezar a revisar el proyecto, Juan Carlos, de tal manera que no solamente estemos mandando o normando para que se cuide la biodiversidad, se cuiden los bosques, se cuide en términos generales todo el medio ambiente, pero no le generemos a quienes habitan en esos sectores, la posibilidad de tener un desarrollo armónico como lo tienen otras regiones del país. En segundo lugar, mi preocupación también porque aquí estamos hablando de tipificar, simplemente tipificar, pero aquí quiero yo diría hacer apología a algo que ha hablado el doctor Tamayo, y es que nosotros no podemos solamente quedarnos en la tipificación o sea en la elasticidad en penalizar, sino en la educación, y yo no veo en ninguna parte del proyecto, Juan Carlos, que nosotros demos la posibilidad de que se pueda educar a la gente y que incluso haya una cátedra desde la primaria para que nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros paisanos, nuestros coterráneo, puedan empezar a ver qué cuidar el medio ambiente no solamente les puede traer una sanción penal sino que es un deber, es un compromiso de cada uno de quienes habitamos este país.

Entonces, a mí me deja la preocupación departamentos como el Chocó, y uno escucha en el proyecto o lee en el proyecto, quien ejerza una actividad ilícita, resulta ser que en el departamento del Chocó los mineros informales ejercen actividad minera ilícitamente y pueden producir menos daños que aquellas multinacionales, que aquellas empresas industriales que ejercen ese tipo de actividad con permiso o con, diría yo con, sí con permisos por parte de las autoridades ambientales. Entonces, aquí sería esto prácticamente decirle a quienes habitan o a quienes ejercen este tipo de práctica y no solamente a los mineros, sino también la agricultura en el departamento del Chocó, en su gran mayoría es una agricultura de subsistencia y donde normalmente la gente no tiene un permiso siquiera para realizar su actividad, no tiene una tierra incluso legalizada, ¿Entonces, se le iría a penalizar a esta gente porque esté ejerciendo esta actividad?

Yo creería y con el respeto y por supuesto reconociendo aquí la decanatura del doctor Germán Navas, que dejar esto así, yo diría abierto esto así, yo diría a la disposición de quienes van a arreglar esta situación llámese las autoridades administrativas, es muy peligroso hacía futuro a cualquier campesino, a cualquier minero, pequeño minero se le venga a penalizar por estar realizando una labor simple y llanamente de subsistencia, para poder sacar a su familia adelante. Entonces yo creo, Juan Carlos y compañeros, de hecho, no he presentado mí…

Presidente:

Nilton, treinta segundos para que culmines. Nilton, enciende el micrófono, treinta segundos.

Continúa con el uso de la palabra el honorable Representante Nilton Córdoba Manyoma:

Yo creo que nos va a tocar revisar uno a uno los artículos del Proyecto, de tal manera que podamos contribuir a que el medio ambiente no se deteriore de la manera que se ha venido deteriorando, pero que tampoco vamos a penalizar a personas que efectivamente no merecen ser penalizadas. Yo de antemano, anuncio mi voto positivo a la Ponencia de este proyecto. Sin embargo, me quedan, repito, algunas preocupaciones por la redacción de algunos artículos. Muchas gracias Presidenta.

Presidente:

Muy bien Nilton. Tiene la palabra la doctora Juanita Goebertus.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Representante Juanita María Goebertus Estrada:

Presidenta, creo que…

Honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas:

Intervención de un segundo al Representante Nilton Córdoba.

Presidente:

¿Cómo Juan Carlos?

Honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas:

Una intervención de treinta segundos al Representante Córdoba.

Presidente:

Ok, dale.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas:

Representante Nilton, mire yo creo que a las inquietudes que manifestó el representante Julio César Triana, me parece que mi compañero, Germán Navas Talero, le respondió con suficiencia y es que evidentemente será quienes no cumplan la normatividad ambiental, quienes serán sujetos de este tipo penal. Luego, eso no va a poner de ninguna manera en ningún peligro, a los campesinos que cumplan con las reglas en todas partes del país, esto no tiene nada que ver con los campesinos, en ningún lado los estamos metiendo, antes hacerles un reconocimiento enorme a los campesinos de todo el país, que en muchos casos cuidan más los recursos naturales y el medio ambiente que cualquier otra comunidad.

Y doctor Nilton, su preocupación en términos del tema pedagógico en el artículo 3º, justamente nosotros estamos estableciendo que todos los centros educativos del país tienen que hacer cátedra ambiental, tanto en…

Presidente:

Doctor Lozada, treinta segundos.

Continúa con el uso de la palabra el honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas:

Sí, le estaba diciendo al doctor Nilton, que justamente el artículo 3º que trata sobre pedagogía sobre el ambiente así está titulado, obliga a que todas las instituciones educativas del país tanto primaria, básica, media, universitaria en todo los estadios de la educación, tengan que hacer cátedra ambiental y la última precisión que tiene que ver con algo que dijo el representante Buenaventura León, sobre el tema de plásticos, yo le hice una enmienda al texto y saqué el tema de los plásticos porque me parecía que no era correcto al final después de mucha discusión con mi equipo y reflexión, retiramos el tema de plásticos del proyecto, eso ya está retirado en la última versión de la Ponencia, representante. Muchas gracias.

Presidente:

Doctora Juanita Goebertus, cinco minutos.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Representante Juanita María Goebertus Estrada:

Gracias Presidenta. Un saludo a todos mis colegas. En primer lugar, por supuesto anuncio mi voto positivo a este proyecto, creo que con suficiencia el autor y ponente ha descrito lo que significa en esta coyuntura, además de pandemia, tomar todas las medidas necesarias para proteger nuestra biodiversidad, no sólo en lógica digamos, conservacionista sino en lógica también de los fines y de esos digamos, servicios ecosistémicos que presta nuestra biodiversidad. Pero además y de manera muy significativa, lo que implica también en términos de costos económicos el agua, la producción de energía, todo esto está en riesgo si no nos tomamos en serio nuestra biodiversidad.

Entonces, por supuesto apoyo este proyecto, dicho eso y me sumo a algunas de las palabras de mis colegas, en este tema como en muchos otros y lo he dicho varias veces en esta Comisión, yo creo que en ocasiones pensamos que el derecho penal es la solución para resolver problemas que tienen causas mucho más estructurales. Algunos de los problemas digamos que surgen inmediatamente al pensar en esto, tienen que ver, por ejemplo, y el Representante Pulido lo decía, con las capacidades institucionales que hay en el tipo de lugares donde se está produciendo el grueso de la deforestación. Recientemente antes de la pandemia tuve la oportunidad de hacer una visita al Guaviare justamente, me reunía con muchos de los comandantes militares que tienen a su cargo la Operación Artemisa y nos decían, estamos llegándole a unos campesinos que no tienen de qué vivir, que no tienen oportunidades económicas, digamos, con la mano dura de una operación militar en contra de la deforestación, que tiene una finalidad deseable por supuesto y eran los mismos militares diciendo, esto nos está rompiendo la confianza con las comunidades a las que no les estamos ofreciendo tampoco, digamos, la alternativa porque llega la mano dura no, la operación militar o llega la mano dura en términos de la capacidad penal, pero no así las alternativas por ejemplo, en términos de ecoturismo, por ejemplo, en términos de venta de servicios ambientales.

Uno de los datos que a mí más me aterra y quizá lo he mencionado varias veces, es que el grueso de la deforestación es más del 76% de la deforestación en el país se concentra en esos ciento setenta municipios PDET, y si uno va y mira la capacidad de justicia en estos municipios, encuentra que el 80% no tiene policía judicial y que el 35% no tiene fiscales. Es decir, ahí hay Juan un reto muy grande de quienes son los que van a, digamos, a aplicar estas normas a nivel local y yo creo que es algo que tenemos que mirar. Lo decía el Presidente en su primera intervención y yo creo que en eso hay que hacer mucho énfasis, lograr focalizar los esfuerzos de investigación penal en las grandes estructuras y no simplemente en el pequeño, digamos productor o en el campesino, es muy importante porque si no de nuevo, pues el que está detrás, el que se lucra queda completamente en la impunidad y quienes están directamente en el ejercicio, muchas veces de la deforestación en muchas ocasiones porque no tienen otra alternativa.

Presidente:

Perdón doctora Juanita, es que debemos declarar la Sesión Permanente. Entonces le pregunto a la Comisión si ¿Quiere declararse en Sesión Permanente? Si alguien no está de acuerdo puede escribirlo en el chat.

Secretaria:

Ya estoy revisando en el chat, señora Presidenta. No tengo, Presidenta, ninguna manifestación de la Sesión Permanente, así que ha sido aprobada la Sesión Permanente con el suficiente Quórum en la plataforma, señora Presidenta.

Presidente:

Gracias Amparito. Qué pena doctora Juanita sigue por favor, tres minutos.

Continúa con el uso de la palabra la honorable Representante Juanita María Goebertus Estrada:

Gracias Presidenta. Voy a tratar de ser más breve que eso. Entonces, digamos ahí hay elementos que me llevan a señalar y creo que otros colegas lo han dicho, Presidente, que sería muy importante que hacia el segundo debate haya algunos ajustes en términos de verificar donde realmente es necesario el derecho penal, donde de pronto podemos tener una discusión que se resuelve a través de otros mecanismos regulatorios o de otro tipo de prohibiciones o sanciones, pero no necesariamente el derecho penal, donde hay que hacer ajustes y yo creo que son cosas digamos ya del detalle, pero sí creo que el reto real, es que esto vaya de la mano de un fortalecimiento de la capacidad de administración de justicia local, de la capacidad, por ejemplo, de monitoreo a través de radares para poder monitorear de manera más ágil lo

que está sucediendo en términos de deforestación y no simplemente a través del derecho punitivo.

Dicho esto, he radicado una proposición que el Presidente advertía en su exposición y que me gusta poner en consideración de mis colegas, una de las principales dinámicas que se está viendo justamente en parques como La Macarena, en Picachos entre otros, es apoderamiento ilegal de baldíos digamos, que se hace a través de una dinámica de deforestación, algunas de las cifras que me daban recientemente es entre trescientas y trescientas cincuenta mil hectáreas de tierra al año deforestadas con fines de apoderarse esa tierra que es baldío, si en ese sentido poder incorporar dentro de este título el delito de apoderamiento ilegal de baldíos con estos fines, yo creo que sería muy importante hacer un avance, insisto de la mano de las mismas críticas que acabo de hacer, ese delito tampoco sirve si no tenemos las capacidades de judicialización.

Apoyo este proyecto, lo entiendo sin embargo, Presidente, como parte de una estrategia más amplia, nada hacemos si digamos, si la punta de lanza de la lucha en la protección de nuestra biodiversidad con fines de preservar los servicios ecosistémicos, con fines de producción económica porque francamente el servicio ecosistémico es cuantificable en términos económicos, está no es una tensión simplemente entre desarrollo ambiental y desarrollo económico, es reconocer realmente una lógica existencial y de crecimiento en esa biodiversidad, pero eso depende de muchas otras medidas y que no nos quedemos solamente en las medidas penales, que son las que usualmente trabajamos en este Congreso de la República. Con esas claridades y con esa proposición presentada, por supuesto votaré a favor de la Ponencia y espero Presidente que para el Segundo Debate podamos incorporar algunos otros elementos. Muchas gracias Presidenta.

Presidente:

Muchas gracias doctora Juanita. Tiene la palabra el doctor Gabriel Vallejo.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Gabriel Jaime Vallejo Chujfi:

Muchas gracias, señora Presidente. Buenas tardes para usted, para todos los compañeros de la Comisión, para todos los colombianos que nos acompañan. Yo quiero empezar por decir, ahorita decía el doctor Navas, que había Congresistas que posiblemente tenían intereses en este proyecto y yo le tengo que decir a los colombianos, que yo sí tengo un interés directo en este proyecto, y es el interés directo de defender a miles o millones de campesinos de este país y asegurarle que mediante el trabajo legislativo no vayamos a amenazar su actividad.

Yo leí varias veces el proyecto doctor Juan Carlos, y tengo que decírselo que tengo una mezcla de emociones, una yo entiendo perfectamente y creo que quizás es el momento en que el país haga una revisión de la tipificación de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, creo que es necesario hacer esa revisión. Pero por el otro lado, tengo que confesarle doctor Juan Carlos que el proyecto como está planteado no me gusta, se lo tengo que decir con franqueza, porque creo que con el proyecto, desafortunadamente se puede tener un objetivo loable, porque además sé de su lucha y batalla por defender lo que el Papa Francisco denomina nuestra casa común, pero tengo que decirle que este proyecto cuando lo leo, simplemente llegó a la conclusión de que vamos a criminalizar a la cadena más débil del eslabón de los daños ambientales.

Y yo no puedo, digamos por mi condición de Congresista, como Representante de una tierra cafetera, pues acompañar semejante, digamos, despropósito en el sentido estricto de la palabra. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando yo escucho las intervenciones de algunos, en donde recargamos en la autoridad ambiental, casi que la demostración del daño ambiental, pues simplemente se me va la imagen doctor Julio César, doctora Adriana, de ese campesino que corta tres o cuatro o cinco guaduas para arreglar su vivienda, y que hoy las autoridades ambientales los multa por cortar esas guaguas. Entonces, la gran pregunta que me hago doctor Juan Carlos, es cómo lograr realmente tutelar un bien jurídico tan importante como los bosques, como nuestros recursos hídricos, como nuestros recursos oceánicos por supuesto, ¿Pero sin criminalizar al eslabón más débil? Ha sido un fracaso, se lo digo con toda sinceridad, ha sido un fracaso la lucha en contra de esas bandas criminales de narcotraficantes, de colonos invasores que arrasan la tierra, ha sido un fracaso a pesar de tener hoy la tipificación. Doctor Nilton, qué le vamos a decir a esos pequeños mineros de subsistencia del Chocó o de aquí de Irrá en Risaralda, porque con un proyecto de ley prácticamente les estamos poniendo unas esposas en sus muñecas.

Yo creo doctor Juan Carlos, y repito, voy a acompañar la Ponencia bajo el entendido de que debemos revisar a fondo este proyecto de ley, porque creo que es el momento de revisar nuestro capítulo de delitos ambientales, pero decirle que este proyecto de ley y quiero dejar esa constancia queridos compañeros, este proyecto de ley criminaliza la actividad agropecuaria en Colombia, especialmente la del pequeño campesino. Nosotros no podemos, bajo una óptica mal llamada conservacionista acabar con la actividad del pequeño campesino. Por eso mi invitación, doctor Juan Carlos, se lo dije ahora es que conformemos una Subcomisión, por supuesto hoy quisiera que esa Proposición se votara después de puesta en consideración la Ponencia, una subcomisión integrada por todos los Partidos, que revisáramos y escucháramos por supuesto al Fiscal General de la Nación, a los Ministerios, a

la Academia, aquí estamos hablando de palabras mayores en el debate.

Presidente:

Doctor Vallejo, treinta segundos para que culmine su intervención por favor.

Continúa con el uso de la palabra el honorable Representante Gabriel Jaime Vallejo Chujfi:

Muchas gracias Presidenta. No, básicamente ya estaba terminando, es decirle que creo que me parece muy importante revisar este proyecto con lupa doctor Juan Carlos, yo le pido ese favor, entendiendo además la intención que usted tiene y lo que lo motiva a sacar adelante este proyecto de ley. Muchas gracias.

Presidente:

Muchas gracias doctor Vallejo, el doctor Jorge Méndez, tiene el uso de la palabra.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Jorge Méndez Hernández:

Muchas gracias mí querida Presidenta. Yo tengo que decirle al doctor Juan Carlos, que este proyecto a mí me gusta mucho, como representante del departamento Archipiélago, reserva mundial de la Biósfera Seaflower, tengo que brindar mi apoyo irrestricto al mismo porque estábamos en hora de establecer una nueva legislación que permita una mayor protección a los recursos naturales y cuente desde ya con mi voto. Y es un proyecto al que le he dedicado bastante tiempo en revisar todos y cada uno de los artículos y por eso creo que es el Proyecto al que más Proposiciones he presentado en los últimos meses, hemos presentado trece de las cuales una involucra cinco más, estamos hablando de dieciocho Proposiciones más o menos, para trabajar sobre todos los artículos, pero son bastante ambiciosos y en ese deseo que tiene el doctor Juan Carlos y que todos nos unimos, que es el de la protección del medio ambiente, con ese ímpetu que el doctor Juan Carlos Lozada, le pone a su trabajo, siento que también podemos irnos en algunos casos al otro extremo y es por eso que he solicitado también aquí la eliminación de algunos artículos, la creación de unos nuevos y la corrección de otros para que realmente esté a tono con la realidad de nuestro país y que tenga el impacto que buscamos, que es la protección del medio ambiente, pero también sin irnos a sobrepasar diría yo a exceder, en las sanciones que en algunos casos aquí se está viendo.

Entonces, voy a entrar así solo a mencionar por encima algunos del sentido de lo que buscamos con estas Proposiciones, la primera que he presentado precisamente para evitar el comercio ilícito de corales que no estaba contemplado como un tipo penal y efectivamente tenemos que hacerlo así porque hay que proteger los corales y arrecifes de coral qué es en este momento lo que da vida a la reserva de la Biosfera Seaflower en las Islas. También, he pedido que se retire de los artículos, de algunos artículos la circunstancia de agravación que tiene y la constituyamos como una nueva conducta atípica en caso de la destrucción del suelo sí, también que el artículo 29 que habla del depósito o inyección de sustancias en el suelo sea eliminado porque ya está contemplado en el artículo 335, como contaminación ambiental.

Pero algo muy importante y es que hay que tener en cuenta que si bien viene redactado en el Código Penal actualmente, es lo que tiene que ver con el término sin permiso de autoridad competente, aquí yo creo que tenemos que ser bastante cuidadosos y corregir ese yerro que trae la Ley 599 y es que, o la conducta está prohibida por ley, es ilícita o, dejamos la puerta para que la autoridad otorgue un permiso para practicar esta conducta que ya es ilícita, hablo por ejemplo, de conductas como el tráfico de fauna, depósito e inyección de sustancias en el suelo, la deforestación. Si la conducta ya está prohibida por ley, mal haríamos nosotros en permitir que quede esa puerta para que las autoridades departamentales, territoriales autoricen a violar esa misma ley, yo creo que aquí tenemos que ser bastante estrictos y si está prohibido por la ley, está prohibido por la ley, bajo ninguna circunstancia la autoridad podrá permitir que se cometan estas conductas típicas y allí está de alguna manera, cómo está redactada hay que sustraer ese término. También lo que tiene que ver con la redacción del artículo 3º, que habla sobre la pedagogía, sobre el ambiente, ese dato contemplado por el Gobierno nacional, esto hay que retirarlo.

Me parece demasiado, excesivamente drástico el de la destinación ilegal de tierras establecidas, es decir si eso pienso que debería estar inmerso más en el derecho civil o el derecho administrativo y no llevarlo al derecho penal. Si a mí me dieron un permiso, al ciudadano le dieron un permiso para de acuerdo con el POT, para vivienda de tipo, no sé de dos pisos o vivienda rural y yo lo convierto en un establecimiento de comercio, esto está violando Normas administrativas y de pronto del marco civil, pero no convertir esto en un delito excarcelable como ya se ha mencionado aquí. La modalidad culposa que establece el artículo 338B, como atenuante hay que ser modificada, porque aquí establece que sería el 50% para todas las conductas y realmente no, porque hay que analizar de manera detallada, de manera individual el aleteo de un tiburón versus el vertimiento de sustancias peligrosas en el suelo. Entonces, creo que cada conducta debe ser revisada de manera particular y aquí no habría ese lugar, a que todas las conductas si se demuestra en la modalidad culposa tendrían una rebaja del 50%, diría yo hasta el 50% de ser el caso.

No estoy de acuerdo en lo absoluto con el artículo 338C que habla de la extinción de dominio, creo que estaríamos abriendo una puerta inmensa también para violar los derechos de miles de campesinos en este caso. Si el campesino utilizó el agua para su riego y ha sido condenado, ¿entonces extingámosle

la finca o la propiedad que tenga? Creo que ahí estaríamos nosotros siendo extremadamente drásticos y creo que esto no habría lugar, sumado al hecho de lo inoperante qué es la Sociedad de Activos Especiales, ya todos sabemos porque en varios debates lo hemos mencionado, el caos que se ha generado con el tema de los bienes extintos a través de la Ley 1708 a los narcotraficantes, ahora extinguirle bienes a campesinos o a quienes infrinjan la ley, creo que realmente eso está fuera de lugar y en ese sí creo que es importante que sea retirado.

Y en el artículo 338ª, donde el autor y ponente establece circunstancias de agravación, creo que hay que retirarlo porque estaríamos violando el derecho constitucional a la *non bis in ídem*, toda vez que en cada artículo que se ha mencionado, ya está establecido circunstancias de agravación. Entonces, ¿Creamos un artículo 338 solo para agravación? Estaríamos agravando dos veces la pena y eso va en contra del derecho penal y de la Constitución. Entonces, más o menos son algunos de los apartes que he venido mencionando, estoy totalmente de acuerdo con el proyecto doctor Juan Carlos, cuente con mi apoyo para sacarlo adelante, si hay que crear la Subcomisión o de alguna manera van a crear una Ponencia conjunta, pido me tengan en cuenta para la misma, por lo que le manifiesto como miembro del departamento reserva mundial Seaflower de biosfera y tan derecho penal al que tengo. Entonces, de esa manera, señor Presidente, le quiero manifestar mis observaciones al mismo y anunciar mi voto positivo para este proyecto.

Presidente:

Muchas gracias Representante Jorge Méndez. Tiene la palabra el Representante Albán y se prepara Harry González.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Luis Alberto Albán Urbano:

Muchas gracias Presidenta. Con el saludo para quienes nos escuchan. Es muy concreta la intervención en torno a este proyecto, que saludo porque va encaminado a preservar la vida, es que cuidar el medio ambiente, garantizar la explotación sostenible de nuestros recursos, tiene directa implicación con la vida. Nosotros no nos puede dar miedo afrontar las realidades del cambio, por ejemplo, en los combustibles fósiles, eso en algún momento se va a acabar y no podemos estrujar la tierra como se pretende con el fracking, para sacar las últimas gotas que al final tampoco van a resolver, los problemas que viven nuestras sociedades.

Igual, tenemos que tener claro que siempre está la defensa de los campesinos de manera real, de verdad, porque la sociedad sabe que es por el trabajo de los campesinos que hay comida, pero eso no se nos puede olvidar cuando hacemos, por ejemplo, los tratados de libre comercio o cuándo garantizamos protección a los productos que se importan contra la producción nacional, esas son todas cosas que tienen que ver insisto, con el tema de la vida. En ese sentido, no podemos esconder la supuesta defensa del campesino para hacernos los de la vista gorda con aquellos terratenientes, aquellos latifundistas, aquellos mafiosos que se están apoderando de nuestra tierra, de la Amazonía, de la Orinoquia, pero que además la están deforestando y están generando graves consecuencias, no solamente para Colombia sino para la humanidad. Yo creo que el proyecto sí, seguramente hay algunos detalles que hay que pulir, pero me parece que debemos de apoyarlo, de mi parte cuenta con mi voto y con la disposición para la discusión de algunos detalles en el Articulado. Muchas gracias.

Presidente:

Muchas gracias a usted doctor Albán. Tiene la palabra Harry González.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Harry Giovanny González García:

Gracias apreciada Presidente. Muy buenas tardes a todos, querido Juan Carlos felicitarlo por esta iniciativa tan importante, que me parece a mí concluye un esfuerzo legislativo que usted viene adelantado desde hace varios años, en promover Normas que garanticen la protección del medio ambiente y los recursos naturales en Colombia. Y en ese sentido, yo anuncio mi voto positivo a la Ponencia, pero respecto al articulado tengo varias inquietudes y voy a insistir respetuosamente querida Presidente, en que se puede hacer un diálogo en esta comisión con actores de interés sobre este proyecto de ley, especialmente el Fiscal General de la Nación, la señora Ministra de Justicia y la Presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ¿Por qué? Porque yo creo que en esta Comisión tenemos que ponderar nuestras responsabilidades, este es un proyecto de ley bastante complejo que, entre otros, está creando alrededor de catorce nuevos tipos penales, aparte de los que está actualizando, es decir esta es una mini reforma al Código Penal en estas materias.

Y en ese sentido, un país que tiene más del 50% de hacinamiento carcelario, un país donde alrededor de más de mil personas tienen COVID-19 y son personas privadas de la libertad, un país que ese COVID-19 le llegó a algunas regiones de Colombia especialmente por las dificultades que tienen las cárceles como en Villavicencio o incluso el caso de Florencia, donde la Cárcel Heliconias, son más del 50% de personas que tenemos de contagio con COVID-19 o incluso en Ibagué, donde la cárcel de allá ha tenido muchas dificultades, también en la de Picaleña, tal vez, esto tiene que hacernos reflexionar, porque nosotros no podemos tramitar normas desde el punto de vista penal, sin siquiera atender cuál es la situación de las personas privadas de la libertad en nuestro país y especialmente cuando este Articulado en muchos de sus aspectos, está creando unos tipos penales que obligarían a la privación de la libertad

a muchos ciudadanos en Colombia que violen estas normas.

El segundo aspecto que yo sí necesito entender con estos funcionarios del Gobierno nacional, es si aquí tenemos algo de populismo punitivo, porque yo no creo que para algunas cosas hay populismo punitivo como es la prisión perpetua revisable y para otras no hay populismo punitivo. No, yo creo que tenemos que encontrar un punto intermedio que nos oriente sobre si es verdad que nosotros especialmente en esta Comisión Primera, nos estamos equivocando queriendo resolver todos los problemas sociales, económicos y ahora ambientales del país metiendo a la gente a la cárcel, esa es la reflexión de lo que quieren los ciudadanos hoy en día en nuestra Colombia y es esa la única alternativa que queremos buscar que sea la mano fuerte del Estado, en este caso esa mano que amenaza con meterlo a usted a la cárcel y no otras alternativas de política pública. Yo creo que esa reflexión hay que hacerla y por eso, me parece a mí que incluso la discusión se debe dar con los académicos, los amigos de la doctora Juanita, del Profesor Germán Navas Talero, allá un excelente libro de profesoras del Externado de Colombia que el profesor Navas, tuvo la oportunidad de compartir con nosotros, es un buen libro para aplicar en esta norma, esas profesoras del Externado de Colombia, habría que invitarlas a la Plenaria de esta Comisión Primera, para que nos desarrollen de manera más suavecita a cada uno de los miembros de esta Comisión, si este tipo de normas realmente tienen un componente de populismo punitivo e incluso creo que hay una falla en este proyecto de ley y es que no tiene audiencia pública, lo cual también limita nuestra reflexión.

Lamentablemente este proyecto no alcanzó a tener audiencia pública y por eso se ve uno forzado a invitar, a promover que se inviten a funcionarios o actores académicos e incluso con lo dicho con algunos compañeros, yo diría que tenemos que escuchar, incluso a organizaciones sociales. Yo sí quiero invitar a las organizaciones sociales del departamento del Caquetá, que hacen presencia en los límites entre el departamento del Caquetá, del Meta y el Guaviare a ver ellos qué piensan de estas normativas que vamos a implementar acá. Porque para mí, a mí sí me queda muy difícil que una votación mía, promueva que metan a la cárcel a campesinos del departamento del Caquetá, que habitan hace 40 años Parques Naturales como Picachos o Tinigua y que vienen desarrollando problemas sociales relacionados con la deforestación y que el mensaje en lugar de ser propositivo de parte del Estado colombiano decirles, venga solucionemos este problema, miremos la forma de mejorar la economía de ustedes, adecuemos el modelo de desarrollo para el territorio de la Amazonía colombiana, el mensaje sea vamos a meterlos a la cárcel y les vamos a incrementar las penas.

Hoy a esos campesinos los dejan libres, Juanita, recuerde usted que en último operativo que hizo Artemisa, quedaron libres los cuatro campesinos que habían sido capturados.

Presidente:

Harry, treinta segundos para que culmines la intervención, por favor.

Continúa con el uso de la palabra el honorable Representante Harry Giovanny González García:

Gracias querida Presidenta. Gastándonos millones de pesos de los impuestos de todos los colombianos llevando a nuestro Ejército en helicópteros y demás, a capturar cuatro campesinos, cuatro que al otro día la Fiscalía lo dejó libres. Campesinos que no tendrían por qué haber sido capturados, y yo no quisiera que con estas leyes que, si se llegan a aprobar, terminemos es capturando a esos campesinos que lo que están buscando es una alternativa de sustento y utilizando nuestro Ejército, que debería estar persiguiendo a los vagabundos de las disidencias de las Farc o a los paramilitares, o a los que matan líderes sociales, utilizándolos disque para confrontar campesinos en Colombia, eso yo no lo voy a permitir. Por eso mi voto está sujeto a la Comisión y a que se citen a estos funcionarios a la Plenaria de la Comisión Primera. Gracias querida Presidenta.

Presidente:

Muy bien doctor Harry González, nos hace falta el doctor Alfredo Deluque, quien tiene cinco minutos y se alista Edward Rodríguez y Juan Carlos Wills y terminaríamos las intervenciones para el Informe de Ponencia. Doctor Alfredo.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Alfredo Rafael Deluque Zuleta:

Gracias señora Presidenta, un gusto saludarla hoy y a todos los compañeros también. Indudablemente un proyecto muy importante, un proyecto que yo tengo que decirle al Representante Lozada, a nuestro Presidente que, se trata de una materia que no está exagerando, el planeta está rumbo a la extinción como vamos actualmente. Que de hecho si queremos ser más drásticos, algunos de los grandes científicos del mundo dicen que la única opción que tenemos los humanos para sobrevivir, es que salgamos del planeta tierra en algún momento y conquistemos las estrellas, aunque parezca muy absurdo en estos momentos decirlo, pero es así.

El proyecto, es un proyecto oportuno pero yo creo que para entrar en materia, que hay que tener en cuenta ciertas circunstancias en nuestro país que son necesarias para que un proyecto como estos, sea exitoso y no se convierta en un proyecto como lo han repetido muchos de mis compañeros, que persiga a personas que realmente no están cometiendo esos delitos graves o esos actos inconscientes sobre el medio ambiente, que nos van a llevar muy seguramente a una posición muy, muy, muy dificultosa en los próximos años. Y yo ante

eso, quiero decirles que, al Representante Lozada, lástima que se paró, no lo veo ahí en la cámara, porque yo quisiera que él me escuchara, pero lo vi que se paró con el teléfono.

Que es un proyecto que tenemos que ajustar, hay que ajustarlo yo tengo unas proposiciones, que lo que van encaminadas estas proposiciones simplemente es a que a ese, por ejemplo, indígena Wayuú que cocina con carbón vegetal que ellos mismos hacen, después de haber podado los árboles que existen alrededor o de algunos árboles que existen alrededor en su ranchería, en su territorio ancestral y que con ellos cocinan, por ejemplo, no lo vayan a perseguir. Que aquellas personas, por ejemplo, que están agremiadas en estos momentos los paleros que trabajan en algunos ríos del departamento por ejemplo, de La Guajira para ser exactos, que están incluso asociados y agremiados en asociaciones que van rumbo a la legalidad y que están haciendo programas de legalidad muy importantes con el Ministerio de Minas y Energía, no se vayan a ver afectados con este tipo de proyecto, que seamos específicos para que no creemos unos delitos que después queden incluso en el aire y que no puedan ser aplicados porque sencillamente no tienen donde caer por decirlo así, la conducta punible exactamente.

Yo quiero que este proyecto, sea un proyecto que proteja al medio ambiente, pero además que vaya en consonancia con lo que está sucediendo en el país y que tenga en cuenta que muchos mineros artesanales, muchas personas que en estos momentos están trabajando y devengando sus recursos de eso, están trabajando incluso con el Ministerio en el camino de la legalidad, han venido trabajando por varios Gobiernos con esto y nosotros hoy cuando ellos van avanzando hacia la legalidad, no podemos tirarle una piedra a ese propósito y simplemente decir, que no, que no vamos para la legalidad sino que por ejemplo, ahora se va a convertir en delito temas, que son hoy bien sabidos, pero que ellos lo necesitan para su subsistencia.

Necesitamos armonizar el proyecto de ley con esas circunstancias y yo sé que el Representante Lozada, lo entiende, lo va a entender, él es una persona razonable como pocas diría yo y que podemos nosotros llegar a unos acuerdos importantes sobre este proyecto, porque de verdad tiene un buen fin y una buena filosofía que hay que aprender, no solamente para el tema de delitos ambientales y no sobre los delitos que se cometan, perdón sobre nuestro cuidado con el medio ambiente. Hay un tema muy importante que no puedo dejar de mencionarlo, ayer se lo comenté a, creo que al Representante Lozada, que hablé con él, pero yo creo que nosotros también como Comisión y lo he repetido y en los tres últimos proyectos que hemos hablado de comisión de delitos, es que nosotros como Comisión, debemos también tener clara cuál va a ser la política punitiva que vamos a adoptar en el país, la política criminal que vamos a adoptar en el país, para que nuestros Proyectos salgan todos concordantes el uno con el otro y no tengamos un proyecto por ejemplo, que vaya en favor por decirlo así, de la criminalización de los delitos y otros proyectos por ejemplo que vayan. Perdón con la dosificación de una pena alta y otros con la dosificación de una pena baja pero efectiva. Todas esas cosas yo creo que pueden ser materia de discusión en el próximo ya semestre, con el fin de que podamos nosotros avanzar en ello con ayuda de las personas que hacen parte del Consejo de Política Criminal de esta Comisión, que yo sé que allá están haciendo un trabajo muy importante.

Y temas sencillos también dentro del proyecto, Representante Lozada, por ejemplo, qué ha dicho la Corte Constitucional en muchas ocasiones que nosotros no podemos, por ejemplo, obligar a una universidad que tenga determinada materia dentro de su pénsum, porque eso iría en contra de la autonomía universitaria, hemos intentado en varios Proyectos hacerlo y nos ha sido imposible debido a precisamente, por muy altruista que sea la materia, nos ha sido imposible debido a esas decisiones que ha habido de la Corte Constitucional, y que yo creo que también debemos armonizar en este proyecto.

Yo tengo unas proposiciones allí que van encaminadas solamente a lo que yo estoy narrando en este momento, y que yo creo que podemos nosotros tratar de avanzar con ellas, con otras que han presentado otros amigos de la Comisión, con el fin de que este proyecto sea un proyecto enriquecido o efectivo y que después de un año, dos años, tres años usted Representante Lozada, salga a decirle a la comunidad en general, ambientalista y no ambientalista del país, que su proyecto…

Presidente:

Treinta segundos.

Continúa con el uso de la palabra el honorable Representante Alfredo Rafael Deluque Zuleta:

Que su proyecto sirvió para bajar la criminalidad, en este sentido en el país. Muchas gracias señora Presidenta, muy bonitos sus aretes hoy, por cierto.

Presidente:

Doctor Edward Rodríguez, tiene usted el uso de la palabra.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Edward David Rodríguez Rodríguez:

No, Presidente, yo simplemente quiero decir, que este proyecto es un proyecto que recoge muchas de las iniciativas o muchos de los argumentos que nosotros presentamos, con ocasión de la problemática que se viene viviendo en el país. Miren, en Cidenal uno de los temas que nosotros tratamos por todo el país, cuando estuvimos recorriéndolo en el 2015, era la problemática ambiental, toda vez que hay cráteres y que las organizaciones criminales se están nutriendo de la minería ilegal. Y en ese orden de ideas, nosotros empezamos a hacer una investigación y encontramos en esa investigación varias cosas, entre otras que la Policía con las herramientas que hoy tiene no puede

actuar, no puede actuar porque definitivamente lo que ahí sí, "Hecha la ley, hecha la trampa". Lo que hacen es, que tratan de, por ejemplo, incautar maquinaria, a la hora de incautar maquinaria la pasan de un predio a otro y sencillamente no están sirviendo los instrumentos.

Pero, no obstante, también en los municipios hay una clara amenaza porque estos criminales lo que hacen es, si llegan a incautar por ejemplo oro, la actual legislación lo que permite es que ese oro se tenga que llevar ante la autoridad, ¿Quién es la autoridad? Pues el alcalde y ese alcalde, desafortunadamente hoy no tiene ni el poder, ni la injerencia como para mantener ese oro ahí. De hecho, hay muchas preguntas que nos hacíamos: ¿Qué pasa con el oro? ¿Cómo lo ponen? Y lo que digamos que la praxis, determina que se lo llevan al alcalde y al otro día estos mineros ilegales, criminales, lo que hacen es amenazar al Alcalde y a sus familias de tal manera que los alcaldes mismos dicen, no yo no puedo quedarme con ese oro que tienen acá o con esas maquinarias, porque hay organizaciones, estructuras criminales que se nutren de eso y que tienen cooptado no solo los terrenos, sino también las administraciones, la clase política y una serie de cosas que nos parece preocupante y esos son los hoy llamados disidentes también o mal llamados disidentes, porque simplemente son organizaciones criminales con exparamilitares que, para eso sí, se juntan y trabajan en conjunto.

Y nuevamente queda claro que aquí no hay ninguna ideología, la única ideología es atacar el medio ambiente. Por eso, nosotros presentamos en ese momento el Proyecto de ley número 111 que el Gobierno nacional, el entonces del Presidente Juan Manuel Santos, también presentó un proyecto de ley que fue acumulado en Comisión Primera de Senado, pero que desafortunadamente nunca le dieron un trámite. Pero con ocasión a esto, también quiero decirles, queridos colegas que, en el mes de agosto del año 2018, en la primera reunión que tuvo el Presidente Iván Duque con la Bancada. Nosotros empezamos o fue una instrucción del Presidente Iván Duque, radicar el mismo proyecto, sin embargo, empezamos a trabajar con la Ministra y por múltiples factores, pero además lo digo también molesto y mi molestia ante el Gobierno, nunca radicamos ese proyecto de ley, ese proyecto de ley que hoy, pues también Juan Carlos lo ha presentado y que ojalá hubiésemos podido recoger las buenas ideas de Juan Carlos, las buenas ideas del Gobierno nacional y las ideas que nosotros habíamos promovido.

De tal manera que Juan Carlos, cuente con nosotros siempre y cuando, siempre y cuando adecuemos también la tipología, porque como está, sí genera muchas preocupaciones, entre otras yo le presente tres preocupaciones una, y es que como está un artículo básicamente deja que cualquier campesino sea judicializado, inclusive hasta por echar abono. Hay que adecuar eso, hay que aclarar eso y hay que entender Juan Carlos, que aquí lo que tenemos que ir es tras las organizaciones criminales y en eso, yo creo que podemos trabajar conjuntamente. El segundo, es un tema que yo cogí de la legislación mundial, de hecho, este delito está tipificado y fue digamos que, recopilado de la Legislación internacional con ocasión de la Corte Penal Internacional, que en muchos países se ha definido las graves agresiones al medio ambiente como ecocidios y por esto también la Corte Penal Internacional ha tomado medidas y promovió o está hoy en el Estatuto de Roma el ecocidio como tal. De tal manera que Juan Carlos, yo le pido que lo recojamos, es un claro mensaje contra esas organizaciones criminales, claro mensaje con aquellos que también suelen acabar con el medio ambiente y sin importar generan graves derrames de crudo y nosotros lo que tenemos que atacar es a los ilegales, a los que no respetan el medio ambiente.

Por eso, esa es otra de las Proposiciones que tenemos y le pediría a Juan Carlos que la estudiáramos, si es esa Subcomisión me parece maravilloso, pero creo que hay que mandarle un mensaje claro al país y es que "el que la hace la paga".

Presidente:

Treinta segundos, doctor Edward, por favor. Quedaste en "el que la hace la paga".

Continúa con el uso de la palabra el honorable Representante Edward David Rodríguez Rodríguez:

Y también el mensaje tiene que ser, que el que atenta contra el medio ambiente con organizaciones criminales, armadas que manejan territorios, pues esas personas también van a ir a la cárcel. De tal manera, que es un mensaje a las futuras generaciones, pero también contundente para que preservemos el medio ambiente y por eso es necesario adecuar el Proyecto. Gracias, señora Presidente.

Presidente:

Gracias doctor Edward. Tiene la palabra Juan Carlos Wills, por cinco minutos.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Juan Carlos Wills Ospina:

Gracias Presidenta, yo creo que yo no me voy a tardar tanto. Han hablado suficiente mis colegas a profundidad del proyecto, quiero manifestar también que, pues que evidentemente veo todo el ánimo positivo para que esta Ponencia salga adelante, con muchísimas inquietudes. Yo también querido doctor Juan Carlos, lo hablamos por teléfono, también tengo bastantes inquietudes en el contenido del proyecto de ley, pero por supuesto que en el fondo comparto el ánimo proteccionista que hay, todos yo creo aquí estamos en total sintonía, de que ese ánimo proteccionista a nuestras generaciones futuras, además, pues es lo más importante creo que es el legado que le podemos dejar como Comisión Primera a nuestros hijos, a las demás generaciones.

Y evidentemente sí, pues ya incluso cuando arrancamos la discusión de este proyecto querida Presidenta. Amparito confirmó que habían incluso más de cien Proposiciones, más me imagino las otras tantas que habrán presentado durante la discusión de la presentación de la Ponencia y pues realmente, esto lo que amerita es que haya una discusión profunda por parte de alguna comisión, la que quieran nombrar. Yo tengo digamos, bastantes inquietudes en varios artículos, los comentaré cuando llegue el momento de la discusión. Querido doctor Lozada, votaré positivo la Ponencia, con el compromiso evidentemente de que esta discusión vaya un poco más profunda. Sí me parece delicado que de pronto como se ha dicho acá, a un campesino le cambie el curso, hace una canal de un agua de un río para regar sus cultivos y tenga alguna responsabilidad penal por el simple hecho de hacer una actitud como esta, de tener una acción como está.

Me parece que en la acción punitiva desde el punto uno hasta el punto veinticuatro en el daño ambiental, pues sea punitiva en su totalidad, es decir se termina la responsabilidad administrativa, el que haga un daño entonces, pues yo creo que si nosotros lo que queremos acá en las discusiones que se han dado entre otras, excúsenme que traiga colación el tema de la Cadena Perpetua, porque una de las justificaciones de la Cadena Perpetua, era que nosotros queríamos meterle cárcel a todo y pues evidentemente, este proyecto de ley por mínimo que sea el impacto ambiental, lo que hace es una sanción penal, que yo creo que cuando el impacto ambiental es mínimo, pues debería tener una responsabilidad administrativa y pensar en que hayan, pues obviamente responsabilidades administrativas cuando los impactos sean mínimos.

Bueno, diferentes inquietudes que se tienen al respecto querida Presidenta, y ya con esto finalizo diciéndole que voy a acompañar la Ponencia positiva, voy a votar positivo esa Ponencia y evidentemente pedir nuevamente también acá, que se cree una comisión accidental para que estudie la cantidad de Proposiciones que haya, también me ofreció como voluntario ahí a ser parte de esa Comisión. Gracias Presidenta.

Presidente:

Muchas gracias doctor Juan Carlos Wills, por el uso del tiempo. Tiene la palabra el último Representante que va a intervenir que es el doctor Hoyos, cinco minutos para su intervención doctor John Jairo Hoyos. Se cambió el doctor John Jairo Hoyos y todo para su intervención.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante John Jairo Hoyos García:

Gracias querida Presidenta. Permítame tengo un problema aquí con la tecnología. Bueno, queridos compañeros un saludo y un abrazo grande para todos, hacerles una corta reflexión a todos sobre este proyecto que ha traído Juan Carlos Lozada. Que quiero apuntar como visionario de la situación de Colombia y de la gran apuesta que debemos hacer por reflexionar y avanzar en medidas concretas, para proteger nuestro presente y nuestro futuro y les traigo tres elementos sólo para su reflexión. El primero, en 1979 la China, uno de los países más poblados del mundo, toma la decisión de sacar una ley muy fuerte que se llama la "Ley del Hijo Único" y es que, a partir de esa fecha, los ciudadanos de China sólo podrían tener un único hijo, esta decisión la toma China debido a la enorme presión que genera sobre sus recursos naturales, la sobrepoblación de dicho país que llega a ser un quinto de la población de todo el planeta.

Una segunda reflexión que los invito a hacer, tiene que ver con el Día Mundial del Agua, la Unicef manifiesta que al día mil niños mueren por falta de agua. Es una situación que nosotros sufrimos también, de manera muy especial en nuestra Guajira, que es uno de los sectores más afectados por la falta de agua. Y una tercera reflexión, que tiene que ver con la situación en Argentina, donde se habla de la tierra de los niños envenenados, donde se ven malformaciones genéticas y niños que nacen en situaciones muy difíciles, para poder llevar una vida normal debido al envenenamiento de las fuentes de agua, por diferentes materiales como el plomo, como el mercurio, situación que empezamos a ver en nuestro país.

Así que hoy debemos reflexionar con enorme cuidado, si es el momento de abordar con total compromiso y seriedad nuestra apuesta por el presente y futuro, o si vamos a esperar a tener que tomar medidas desesperadas como las que se han tomado en China, en Argentina, países de África, no esperemos, demos esta discusión ya, avancemos en tomar las medidas aceptadas. Lo acompaño en ese propósito doctor Lozada y cuente con mi respaldo para este proyecto. Gracias compañeros.

Presidente:

Muchas gracias doctor John Jairo Hoyos. Bueno teniendo en cuenta que hubo una muy buena participación de todos los Representantes, quienes dieron sus aportes vamos a proceder a realizar la votación de la Proposición con la que culmina el Informe de Ponencia. Entonces, pongo en consideración la Proposición con la que termina el Informe de Ponencia, está en consideración, anuncio que va a cerrarse, se cierra. Señora Secretaria sírvase llamar a lista para votación.

Secretaria:

Si señora Presidenta. Llamo a lista para la votación de la Proposición con que termina el Informe de Ponencia.

Honorables Representantes:

Albán Urbano Luis Alberto	Si
Arias Betancur Erwin	Si
Asprilla Reyes Inti Raúl	Excusa

Burgos Lugo Jorge Enrique	Si
Calle Aguas Andrés David	Si
Córdoba Manyoma Nilton	Si
Daza Iguarán Juan Manuel	Si
Deluque Zuleta Alfredo Rafael	Si
Díaz Lozano Elbert	Si
Estupiñán Calvache Hernán Gustavo	Si
Goebertus Estrada Juanita María	Si
González García Harry Giovanny	Si
Hoyos García John Jairo	Si
León León Buenaventura	Si
López Jiménez José Daniel	Si
Lorduy Maldonado César Augusto	Si
Lozada Vargas Juan Carlos	Si
Matiz Vargas Adriana Magali	Si
Méndez Hernández Jorge	Si
Navas Talero Carlos Germán	Si
Padilla Orozco Jose Gustavo	Si
Peinado Ramírez Julián	Si
Prada Artunduaga Álvaro Hernán	No Votó
Pulido Novoa David Ernesto	Si
Restrepo Arango Margarita María	Si
Reyes Kuri Juan Fernando	Si
Rodríguez Contreras Jaime	Si
Rodríguez Rodríguez Edward David	Si
Sánchez León Oscar Hernán	No Votó
Santos García Gabriel	Si
Tamayo Marulanda Jorge Eliecer	Si
Triana Quintero Julio César	Si
Uscátegui Pastrana José Jaime	Si
Vallejo Chujfi Gabriel Jaime	Si
Vega Pérez Alejandro Alberto	Si
Villamizar Meneses Oscar Leonardo	Si
Wills Ospina Juan Carlos	Si

Presidenta, puede usted cerrar la votación.

Presidente:

Se cierra la votación, sírvase señora Secretaria anunciar el resultado.

Secretaria:

Presidenta, han votado treinta y cuatro (34) honorables Representantes, todos de manera afirmativa, en consecuencia, ha sido aprobada la Proposición con que termina el Informe de la Ponencia.

Presidente:

Doctor Juan Carlos Lozada, se acabó de aprobar el Informe de la Ponencia, vamos a pasar al Articulado, tenemos sesenta y siete Proposiciones que se presentaron al articulado, ya me confirma eso nuestra Secretaria, una sola Proposición modifica casi todos los treinta y dos subartículos. Así que, quiero que me certifique la señora Secretaria cuántas Proposiciones hay a esta hora en relación al Articulado de este proyecto y procedo a darle la palabra al doctor Juan Carlos Lozada.

Secretaria:

Señora Presidenta. Primero que todo hay una proposición del doctor Vallejo, que está solicitando el aplazamiento de este proyecto, el aplazamiento no, que se nombre una Subcomisión para el estudio de todas las Proposiciones. Con relación a las Proposiciones señora Presidenta, hay más de sesenta y siete Proposiciones porque por decir algo, el doctor Erwin en una Proposición solicita en una sola, solicita que se modifique casi la totalidad de los subartículos, igual que el doctor Lorduy, igual que el doctor Méndez, por ejemplo, Méndez en una Proposición solicita que se modifiquen diez artículos del artículo primero que trae los subartículos. Entonces, hay sesenta y siete Proposiciones, pero esas sesenta y siete podría yo decir que son más de cien modificaciones. Por ejemplo, al artículo 328, hay Proposiciones de Lorduy, de Méndez, de Vallejo y de Arias, del 328 hay de Lorduy, Vallejo y Arias, del 328B de Méndez, del 329 de Lorduy, de Edward, de Tamayo, Elbert, Adriana, Méndez, Vallejo y Arias y así sucesivamente del 329A, de todos los artículos. En el artículo 2º, el artículo 2º tiene Proposición de Lorduy, de Méndez y de Deluque, del artículo 3º tiene Proposición de Méndez y de Deluque.

Hay artículos nuevos dos, han radicado Proposiciones los Representantes Erwin Arias, Juan Carlos Wills, Jorge Méndez, César Lorduy, Adriana Magali Matiz, Edward David Rodríguez, Gabriel Santos, Buenaventura León, Juanita Goebertus, Inti Asprilla, Deluque, Jorge Eliecer Tamayo y Elbert Díaz, Gabriel Vallejo. Entonces, doctora ese es el informe de la Secretaria para dar a usted y a los demás Congresistas, el doctor Juan Carlos nos indicará como único Ponente, cómo podemos proceder, pero lo que primero se debe hacer honorables Representantes y señora Presidenta, es poner en consideración la proposición del doctor Vallejo, que ha solicitado que se nombre una Subcomisión.

Presidente:

Voy a darle la palabra al doctor Juan Carlos Lozada y ya digo qué vamos a hacer Amparito.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas:

Muchas gracias. Comenzar agradeciéndole a todos los compañeros por haber votado de manera unánime este proyecto de ley, porque eso lo que muestra es que creo que la finalidad de esta Comisión, de todos quienes coincidimos con la finalidad del Proyecto y, es decir, debemos ser un poco más estrictos en el Código Penal y en temas

ambientales. Hay un informe con respecto a los artículos y por supuesto a la especificidad.

Honorable Representante Edward David Rodríguez Rodríguez:

Presidente una Moción de Orden, qué pena Presidente, tienen un micrófono abierto y no se le escucha.

Presidente:

Amparito, por favor cierras el micrófono. Gracias doctor Edward ya, estaba tratando de silenciarlo sí.

Continúa con el uso de la palabra el honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas:

Gracias Presidenta. Digamos aquí tenemos digamos dos caminos y yo les quiero hacer la siguiente sugerencia en especial, digamos al doctor Vallejo, al doctor Lorduy y al doctor Erwin Arias, a varios de los que han digamos presentado Proposiciones que modifican la totalidad del Articulado o a quien ha presentado la Proposición para nombrar la Subcomisión. Digamos, aquí tenemos dos vías podemos nombrar la Subcomisión y reunirnos esta misma semana para que podamos sacarlo adelante el viernes o el lunes, o podríamos si ustedes lo tienen a bien con mi compromiso, así como lo hicimos con el doctor Edward Rodríguez, con quien esta Comisión tuvo una enorme amplitud en su proyecto del que hace la paga, que excepto la proposición que elimina el fracking, que creo que es la proposición que digamos, es el artículo que más preocupaciones entendí que genera aquí, de hecho, fue la primera Proposición presentada por el Representante Juan Carlos Wills, creo que ustedes vieron que yo hice una ronda de llamadas todo el fin de semana, aunque este es un proyecto que de verdad es de mi corazón, porque yo de verdad creo que aquí se defiende el futuro de nuestra vida.

Entonces, yo les plantearía a ustedes que confíen en que yo me voy a sentar con cada uno de ustedes a llegar a acuerdos, con todos los que tienen Proposiciones para el Segundo Debate y le rogaría Presidenta si es que mi proposición digamos, lo que estoy proponiendo aquí lo avalara el Representante Vallejo y demás. Yo le pediría que nombrara una Comisión de Ponentes, que no fuera yo único Ponente, sino que nombrara una Comisión de Ponentes para el Segundo Debate, cuestión que todos los Partidos Políticos tengan las garantías de que van a participar en la conformación de una Ponencia, o que pueden presentar Ponencia alternativa, o que pueden presentar Ponencia de Archivo, o que pueden hacer digamos como a bien lo tengan, pero que nos permitieran avanzar con este proyecto al Segundo debate hoy discutiendo la proposición del fracking en la que por supuesto yo entiendo que no vamos a llegar aquí a consensos y digamos, yo no cederé en el tema de fracking, y entiendo que por lo que yo he podido medir, la mayoría de la Comisión no está de acuerdo con el crear el tipo penal de *fracking*.

Entonces, si ustedes tuvieran a bien confiar en que, a través de una Comisión de Ponentes, obviamente nombrándome a mi Coordinador Ponente y sugeriría a alguien del Centro Democrático o de Cambio Radical, puesto que yo no, por ser mi propio proyecto, yo no puedo nombrar esa Comisión de Ponentes, me sentiría impedido moralmente para hacerlo, yo le rogaría a la señora Vicepresidenta que hiciera esa tarea. Entonces, yo lo que le pido es que ustedes tengan la confianza en que yo me voy a sentar a mejorar esta redacción, al punto que la inmensa mayoría de ustedes queden tranquilos con que aquí de ninguna manera estamos criminalizando al campesinado, de que aquí de ninguna manera estamos criminalizando a la gente que digamos tiene que hacer algún tipo de obra en su propio predio, en temas de aguas y demás para que podamos avanzar.

Presidente:

Perdón. ¿Quién tiene abierto un micrófono, que es que no nos deja escuchar lo que dice el doctor Juan Carlos Lozada, por favor?

Continúa con el uso de la palabra el honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas:

Que podamos discutir esto de manera amplia, a mí me gustaría poderle hacer a esto unas audiencias públicas, generar unos foros. Estaba hablando ahorita con el Representante Erwin Arias, esto sería bueno poder hacerlo también de manera regional para escuchar a las comunidades mineras, campesinas de las regiones. Yo la verdad no tengo tampoco afán de que esto se vuelva Ley de la República pasado mañana, pero digamos que casi como que mi legado de Presidente, para mí sería muy importante que esto pudiera salir de mi Comisión, es el único proyecto que yo discutir en todo este año que es de mi autoría.

Entonces, si ustedes tuvieran a bien tener la misma confianza que tuvieron con el Representante Edward Rodríguez, yo se los agradecería, sino Presidenta bueno habrá que nombrar la Comisión de Ponentes, la Comisión Accidental para estudiar las Proposiciones, a lo que también me acojo de buena gana y ponernos a trabajar cuanto antes, ratificándoles a todos, la gratitud por la aprobación del Informe de la Ponencia. Gracias Presidenta.

Presidente:

Gracias doctor Juan Carlos. Lo que sí queda claro es que, los últimos debates de estos Proyectos, han despertado sentimientos en varios Congresistas que no conocíamos que tenían en su corazón por favor. Yo quiero aclarar una cosa doctor Juan Carlos, además y es que no es sólo el artículo de fracking y esto para que no se vaya a satanizar el debate tan juicioso que se ha dado desde esta Comisión. Acá hay Proposiciones a todos los artículos de este proyecto, son trece Representantes los que presentaron Proposiciones, sesenta y siete Proposiciones que como dice Amparito podían ser incluso, hasta más

de cien por qué una sola modifica los treinta y dos sub artículos.

Entonces, eso para que quede claro. Doctor Lorduy tiene usted el uso de la palabra por dos minutos.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante César Augusto Lorduy Maldonado:

Muchas gracias. Yo lo que creo es que, nosotros hemos venido funcionando en la Comisión Primera, dándole una respuesta a los Proyectos, que cuando hay un número indeterminado de Proposiciones como las tiene este, se reúne una subcomisión y utilizando las palabras del doctor Buenaventura, utilizando la cortesía Parlamentaria y toda una serie de aspectos, se termina tratando de concertar un Articulado. Ese es un primer escenario al que todos hemos estado acostumbrados aquí y hay otro escenario y es, una subcomisión que fundamentalmente sería unos Ponentes o unos Ponentes adicionales al doctor Lozada, inclusive con funciones de Coordinación de Ponentes, que estarían encargados no de hacer ese trabajo ahora, sino de hacer ese trabajo con las perspectivas de la Plenaria y en el camino hacer las audiencias públicas y escuchar a las autoridades correspondientes.

Yo creo que tenemos esas dos propuestas y yo creería que la Comisión debería decidir entre una propuesta y la otra propuesta. Presidente, entonces yo le solicito a usted en el caso de que sea así, yo espero el pronunciamiento de los demás colegas a ver si concertamos, si no hay necesidad de una votación, cuál de las dos vías escogemos, de tal manera que el Proyecto siga adelante. El mismo doctor Lozada, decía que, con respecto a la primera alternativa de una subcomisión relacionada con las proposiciones, él no tenía inconveniente de que nos pudiéramos reunir de aquí al viernes, de aquí al jueves, de aquí al lunes etc., etc., y pudiéramos llegar a un acuerdo. Muchas gracias Presidenta.

Presidente:

Muchas gracias doctor Lorduy. Doctor Erwin Arias, me está pidiendo la palabra para el tema.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Erwin Arias Betancur:

Muchas gracias señora Presidenta. Es que el doctor Juan Carlos Lozada, me nombró porque tuvimos una conversación y yo también quiero que no se llegue en este Debate a hablar solo del fracking, porque yo no estoy a favor del fracking, no estoy a favor del tráfico de fauna silvestre, no estoy a favor de la caza. Pero hoy estoy hablando en más del 26% de la población colombiana vive en zona rural, más de once millones de colombianos son del campo y cómo le decía en algunos mensajes a Juan Carlos, aquí no podemos criminalizar a esos campesinos abandonados que no tienen agua potable y que toman el agua de los nacimientos naturales.

Y quizás a veces nuestros campesinos protegen más que, la misma ciudad, que el mismo depredador de la industria y de las empresas. Por eso yo quiero que sí creemos una subcomisión para que estas sesenta y siete proposiciones sean evaluadas y luego entonces, como lo decíamos con Juan Carlos, podíamos pasar esto a un Debate de Plenaria. Gracias Presidenta.

Presidente:

Muchas gracias doctor Erwin. Tiene la palabra Buenaventura León.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Buenaventura León León:

Gracias Presidenta. Yo quiero proponer como un tema intermedio, yo quisiera proponer la creación de la subcomisión y que el miércoles este proyecto lo tuviéramos nuevamente acá para Primer Debate ya el Articulado. Porque como tú lo dijiste Presidenta no solamente Juan Carlos, se trata del fracking, aquí hay unos temas que nos preocupan desde el punto de vista técnico. Y creo que sí debe haber una revisión porque, pues casi setenta Proposiciones, yo los invitaría a que pudieran hacer una subcomisión y que el miércoles estuviera este proyecto en el primer punto del Orden del Día y lo debatimos, ya que, si de esas setenta Proposiciones por lo menos se reducen a cinco, diez, quince es un gran avance.

Y creo que aquí se trata de buscar consensos, la aprobación de la Ponencia nos indica que aquí hay una voluntad de la Comisión Primera de sacar este proyecto adelante, coincido con la Presidenta que no solamente se trata de fracking, aquí hay unos temas técnicos que nos preocupan el tema de daño, el tema de impacto ambiental por supuesto que no vayamos a generar más problemas y que a los campesinos por talar un árbol nos los involucren en procesos penales. Entonces Presidenta, es crear una comisión que ojalá pueda trabajar el día de mañana, esta tarde y el miércoles nos volveríamos a ver para debatir ya el Articulado. Gracias Presidenta.

Presidente:

Pues, yo sí creo que tener un informe para el miércoles es bastante complejo y sobre todo con esa cantidad de Proposiciones que hay y que hay otros Proyectos en los cuales también se han creado subcomisiones y están pendientes los informes que se deben entregar sobre los mismos. Yo voy a darle la palabra al doctor Julio César Triana y voy a poner en consideración la Proposición que presentó el honorable Representante Vallejo, de que se conforme la subcomisión y esa subcomisión, sí le propondría mejor que hiciéramos un estudio muy juicioso y que el próximo lunes que es festivo que la verdad en esta cuarentena, pues pienso yo que, o en mi concepto, no es mucha la diferencia con el día hábil, pensaría yo que sí podría haber era un compromiso de esta Comisión de que el próximo lunes se entrara a debatir

este proyecto, si lo considera bien la Comisión, por supuesto.

Entonces, voy a darle la palabra al doctor Julio César Triana y posteriormente, doctor Vallejo déjeme colocamos la Proposición en consideración, sí, le voy a dar la palabra a Julio César Triana.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Julio César Triana Quintero:

No, Presidenta en ese mismo sentido digamos, poner a consideración la propuesta de la subcomisión y ojalá que esta misma subcomisión, pues sean los Ponentes para llevar este proyecto a Plenaria. Pero, yo sí quiero Presidenta Adriana, a mayor amistad, mayor sinceridad. Puede pasar que salgamos de aquí alguien a escribir en un Twitter que sé que no va a pasar seguramente, pero puede ocurrir que nos opusimos al fracking, todo lo contrario, si hay un tema que nos una a todos los miembros de esta Comisión, es la oposición al fracking, aquí hay que dejar claridad, que quienes hemos hecho reparos respetuosos a este proyecto bienintencionado del doctor Lozada, lo hacemos protegiendo esencialmente la pequeña minería y la actividad agrícola en Colombia.

Acuérdense que muchas veces hemos sido víctimas de los muros de la infamia, entonces me anticipo ante cualquier muro de infamia y hago esa claridad. La invito Presidenta, a que conforme la subcomisión una vez votemos la Proposición y ojalá esos mismos miembros sean designados luego Ponentes para tener un buen hilo conductor de este importante proyecto. Gracias Presidenta.

Presidente:

Doctor Juan Carlos Lozada, no te mencionaron, ¿Por qué quieres Réplica?

Honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas:

No, Presidenta, me han mencionado todos, pero al doctor Triana me gustaría hacerle una amistosa Réplica.

Presidente:

Dale, un minuto para que avancemos.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas:

Doctor Triana, cuando yo digo que, si ustedes como Comisión tuvieran a bien confiar en que, para el Segundo Debate, yo voy a tener toda la disposición de escuchar absolutamente todas las propuestas que ustedes le quieran hacer a este proyecto y que podamos llegar a acuerdos. Además de eso, nombrando una Comisión de Ponentes, justamente para no tener que durante esta semana, tener que volver a debatir este proyecto y demás mientras que creo que la aprobación, si ustedes lo tuvieran a bien dejando sus proposiciones como constancia, pues le haría bien al proyecto y podríamos hacer lo mismo que vamos a hacer en dos, tres días tendríamos mucho más tiempo para concentrarlo de aquí al Segundo Debate con las garantías de que donde no nos pongamos de acuerdo, habrá Ponencias alternativas y pues para mí sería mucho mejor, entendiendo y ahí fue donde mencioné lo del fracking, no quiero de ninguna manera minimizar que hay proposiciones a muchos artículos, doctor Lorduy básicamente, pues le puso una Proposición a cada palabra del artículo del Proyecto.

Presidente:

Treinta segundos, doctor Juan Carlos para que avancemos.

Continúa con el uso de la palabra el honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas:

Pero tiene sentido en que, en mis conversaciones privadas con cada uno de ustedes, que con usted la tuve digamos y muy larga y muy beneficiosa para nosotros, tanto para el proyecto como para el entendimiento de las razones por las cuales ustedes tienen preocupaciones, pues básicamente lo que entendí de casi todos con quién hablé, es que ahí digamos que el fracking es un tema demasiado neurálgico. Y entonces por eso proponía que, si ustedes acogían mi propuesta de dejar todas las proposiciones como constancia, debatiéramos la del fracking, y las demás se van a debatir en futuros debates y ya está, eso es básicamente lo que dije no por minimizar el resto.

Presidente:

Gracias doctor Juan Carlos Lozada. Amparito pongamos en consideración la Proposición que presentó el doctor Vallejo, entonces sírvase llamar a lista por favor.

Honorable Representante César Augusto Lorduy Maldonado:

Presidenta, sería tan amable de repetir qué dice la proposición del doctor Vallejo.

Presidente:

Amparito, claro que sí doctor Lorduy, démosle lectura a la proposición del doctor Vallejo y de una vez llamamos a lista para la votación correspondiente. Creo que hoy no está la auxiliar técnica de Amparito. Lo volviste a cerrar Amparito.

Secretaria:

Señora Presidenta y honorables Representantes, me permito leer la Proposición del honorable Representante Gabriel Jaime Vallejo.

Proposición

Teniendo en cuenta el gran número de proposiciones radicadas y dada la transcendencia del Proyecto de ley número 283 del 2019 Cámara, *por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente de la Ley 599 del 2000*, se solicita a los honorables Representantes de la Comisión Primera de la Cámara, la conformación de una subcomisión integrada por miembros de todos los Partidos

Políticos, a efectos de revisar las Proposiciones presentadas, lograr un mayor consenso y así digerir el contenido del mismo. Suscrita por el Representante Vallejo.

Señora Presidenta, puede usted poner en consideración y votación.

Presidente:

Está en consideración la Proposición presentada por el doctor Vallejo. Doctor Harry González.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Harry Giovanny González García:

Gracias Presidenta. Sobre esta proposición, pues yo escuché bien al Autor del proyecto de ley, al doctor Juan Carlos Lozada, lo que observo es que el argumento de él es bastante fuerte y es darle confianza, así como se le dio confianza a nuestro compañero Edward Rodríguez, la semana anterior y él ha manifestado corregir, corregir no, acepta en esta negociación que es el dialogo de la Comisión, eliminar un tema, entendiendo que es el tema de fracking, en la discusión que se de en el Articulado.

En ese sentido, yo le pediría al doctor Vallejo, que revisara un poco a ver si podemos lograr que haya, pues un mismo criterio de colegaje porque, yo veo con Juan Carlos una sinceridad absoluta de que en la siguiente fase se pueda llegar con una revisión mucho más detallada de todo el Articulado. En ese sentido si la Representante la tiene, yo no la acompañaría, yo invitaría a que se avance en los términos que dijo el doctor Juan Carlos Lozada, y se conforme más bien una Comisión de Ponentes, que permita hacer una audiencia pública y que permita hacer un foro y que permita dar una discusión de cara al país sobre este tema que nos trae el día de hoy a la Comisión Primera. Gracias querida Presidenta.

Presidente:

Doctor Albán, un minuto para la palabra.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Luis Alberto Albán Urbano:

Es lo siguiente, o sea vamos a votar la proposición del doctor Vallejo, pero entonces se crea la subcomisión, yo creo que esa es la opción que debemos de presentar para poder tener una mejor decisión frente al voto y debe de ser creo yo, la propuesta que hace Juan Carlos Lozada, en el sentido de que se apruebe y quedan como constancias las proposiciones y luego esa Comisión de Ponentes, bueno ya como él lo explicó. Quiero decir sí en torno al fracking lo que yo entendí y estoy de acuerdo, es que en la Proposición del fracking se votaría más allá de toda la Comisión ya sea subcomisión o Comisión de Ponentes, se votaría la Comisión de fracking, porque el Autor y Ponente no está dispuesto a ceder en torno a esa Proposición, cosa que…

Presidente:

Doctor Lozada, tiene un minuto por favor.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas:

Muchas gracias Presidenta. No alcancé a escuchar la última parte del Representante Albán, pero me gustaría pedirle al doctor Gabriel Jaime Vallejo y a los demás compañeros que tienen Proposiciones, si me dan su voto de confianza y retiramos la Proposición para formular esta subcomisión y que podemos votar el articulado como viene con o sin fracking como ustedes decidan, pero que quedara aprobado hoy el proyecto y yo me comprometo a que esto lo vamos a discutir con el tiempo que amerite, antes de radicar una Ponencia de Segundo Debate para que todo el mundo quede tranquilo y contento. Eso realmente sería para mí un gran favor de la Comisión y por supuesto una gran responsabilidad, con el compromiso de sentarme casi que uno a uno de ustedes para mirar el tema de las proposiciones y llegar a redacciones digamos, que disipen las dudas, que disipen los miedos de que aquí estamos penalizando actividades agrícolas, que no es para nada mi intención de ninguna manera.

Luego me gustaría saber si…

Presidente:

Treinta segundos Lozada. Por favor apagan los micrófonos que se escucha mucha interferencia.

Continúa con el uso de la palabra al honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas:

Gracias. No simplemente que el Representante Vallejo, tuviera poder tener la confianza en que vamos a llegar a acuerdos de aquí al Segundo Debate, que retirara la Proposición de la subcomisión y que nos permitiera con el compromiso de la Comisión de Ponentes aprobarlo como viene y llegar creo que aquí todos ustedes saben que a mí me interesa sacar este proyecto adelante, que lo quiero hacer de la mano de todos ustedes que me han apoyado, que podemos subsanar los miedos que generen algunos artículos del Proyecto y avanzar. Muchas gracias Presidenta.

Honorable Representante Carlos Germán Navas Talero:

Una Moción de Orden Presidenta, con la venia de su merced.

Presidente:

Gracias doctor Juan Carlos Lozada. Tiene la palabra el doctor Navas, para una Moción de Orden.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Carlos Germán Navas Talero:

Presidenta, en situaciones como estas donde ha habido unanimidad de la aprobación, más no del Texto, se ha hecho que se aprueba el Texto como viene y se nombran unos nuevos Ponentes, que

con la facultad que tienen de presentar Pliego de Modificaciones, hacen todas las modificaciones y se presenta así para Plenaria. Es decir, porque ahí la autonomía va ser de los nuevos Ponentes con el que está actualmente y evitamos estas cosas que no tienen razón de ser, porque se ha hecho otras veces así en el Pliego de Modificaciones se admite, lo que tienen ustedes en este momento de proposiciones y como son ustedes mismos los que van a formar la Comisión, será esa la proposición que llega a Plenaria, creo yo, discúlpenme.

Presidente:

Gracias doctor Germán. Tenemos una proposición en la Mesa y debemos poner en consideración esa proposición, ya que el Autor de la proposición no ha hecho manifestación alguna de que la va a retirar. Está en consideración, se pone en consideración la Proposición que presentó, cierro la discusión. Llame a lista Secretaria.

Honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas:

Moción de Procedimiento, por favor.

Presidente:

Doctor Lozada.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas:

No, yo sí le pido así sea por cortesía parlamentaria, así sea porque no quiere retirarla, que el Representante Vallejo pues responda a mi inquietud, si el Representante Vallejo, cree que este proyecto tiene demasiadas dificultades de una complejidad demasiado grande, y que no puede confiar en la buena voluntad de quién les habla para llegar a unos acuerdos para el Segundo Debate, yo vuelvo y digo con alegría recibo también la subcomisión, no hay problema, pero que por lo menos el Representante Vallejo, contemple nuestro requerimiento. Gracias Presidenta.

Presidente:

Doctor Vallejo, tiene usted la palabra.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Gabriel Jaime Vallejo Chujfi:

Muchas gracias Presidenta. A ver, no, ni más faltaba, doctor Juan Carlos, que no haya la confianza, por supuesto la hay y toda frente a usted y lo que además la dignidad que usted ostenta, por supuesto, doctor Juan Carlos. Yo lo que quiero decirle y se lo decía a usted por teléfono, son varias cosas, mire es tanta la necesidad que tiene esta Comisión de revisar a fondo el Proyecto, que hay que mirar el número de Proposiciones. Es decir, hay que aceptar que este no es un proyecto menor, yo creo y por lo menos interpreto y quisiera que la Comisión en su autonomía, digamos, que analizara la posibilidad, porque es que aquí no son diez, ni veinte Proposiciones, estamos hablando de más de sesenta Proposiciones frente al tema del fracking.

Mire, yo creo que no es no es el tema de la discusión se los digo con absoluta claridad, cada cual tiene una Proposición frente al tema del fracking, ni siquiera eliminarlo sino mantener el delito, cuando el fracking se haga sin el requisito de la autoridad administrativa competente, por ejemplo. Entonces, yo le pido el favor Presidente con el aprecio y admiración que le tengo, que este es un proyecto supremamente importante, estamos hablando de prácticamente cambiar todo el título de los delitos ambientales en Colombia. Yo sí quisiera como Comisión Primera, se lo digo Presidente con todo respeto, yo sí quisiera que pudiéramos dedicarnos a estudiar y a revisar en detalle las Proposiciones, que pudiéramos sacar un muy buen Proyecto del Primer Debate y lo pudiéramos enriquecer en esa Comisión de Ponentes para el Segundo.

Pero no veo, vuelvo y se lo digo Presidente, la razón de ser de poderlo sacar rápido de la Comisión, sin dar el debate de manera responsable. Yo por eso…

Presidente:

Doctor Lozada, creo que es clara la respuesta del doctor Vallejo. Entonces, doctora Amparito por favor sírvase llamar a lista para votar la Proposición que presentó el honorable Representante Gabriel Vallejo. Y aquí para su tranquilidad, doctor Lozada, yo sí creo que la subcomisión debe a más tardar el lunes de la próxima semana, presentar ese informe y que debatamos este proyecto la otra semana, no se preocupe que de aquí no nos vamos el 20 de junio sin haber debatido este proyecto tan importante, que no es solamente de fracking, sino que tiene otros aspectos supremamente importantes y trascendentales en cada uno de los rincones de nuestra región. Amparito llame a lista por favor.

Secretaria:

Sí señora Presidenta. Llamo a lista para la votación de la Proposición del Representante Gabriel Jaime Vallejo, que solicita que se cree una subcomisión para el estudio de las Proposiciones del Proyecto de ley número 283 del 2019 Cámara.

Honorables Representantes:

Albán Urbano Luis Alberto	No
Arias Betancur Erwin	Si
Asprilla Reyes Inti Raúl	Excusa
Burgos Lugo Jorge Enrique	Si
Calle Aguas Andrés David	No
Córdoba Manyoma Nilton	No
Daza Iguarán Juan Manuel	Si
Deluque Zuleta Alfredo Rafael	Si
Díaz Lozano Elbert	Si
Estupiñán Calvache Hernán Gustavo	No

Goebertus Estrada Juanita María	No
González García Harry Giovanny	No
Hoyos García John Jairo	No
León León Buenaventura	Si
López Jiménez José Daniel	No Voto
Lorduy Maldonado César Augusto	Si
Lozada Vargas Juan Carlos	No
Matiz Vargas Adriana Magali	Si
Méndez Hernández Jorge	Si
Navas Talero Carlos Germán	No
Padilla Orozco Jose Gustavo	Si
Peinado Ramírez Julián	No
Prada Artunduaga Álvaro Hernán	Si
Pulido Novoa David Ernesto	Si
Restrepo Arango Margarita María	No Voto
Reyes Kuri Juan Fernando	No
Rodríguez Contreras Jaime	Si
Rodríguez Rodríguez Edward David	No
Sánchez León Oscar Hernán	No Voto
Santos García Gabriel	Si
Tamayo Marulanda Jorge Eliecer	Si
Triana Quintero Julio César	Si
Uscátegui Pastrana José Jaime	Si
Vallejo Chujfi Gabriel Jaime	Si
Vega Pérez Alejandro Alberto	No
Villamizar Meneses Oscar Leonardo	No Voto
Wills Ospina Juan Carlos	Si

Señora Presidenta, puede usted cerrar la votación.

Presidente:

Se cierra la votación, anuncie el resultado querida Secretaria.

Secretaria:

Señora Presidenta, han votado diecinueve (19) honorables por el Sí y trece (13) honorables por el No, para un total de treinta y dos (32) honorables Representantes. Ha sido Aprobada la proposición para crear una subcomisión presentada por el Representante Gabriel Jaime Vallejo.

Presidente:

Muy bien Secretaria. La subcomisión va a quedar conformada por los siguientes Representantes a la Cámara: Por el Partido Liberal el doctor Harry González y por supuesto Juan Carlos Lozada; por el Partido Conservador, el doctor Buenaventura León y Juan Carlos Wills; por Cambio Radical, el doctor Julio Cesar Triana y Jorge Méndez; por Centro Democrático, Gabriel Vallejo y Edward Rodríguez; por el Partido de la U, Alfredo Deluque y Jorge Burgos; por el Partido Verde, Juanita Goebertus y el doctor Germán Navas Talero.

Honorable Representante Julio Cesar Triana Quintero:

Señora Presidenta, discúlpeme.

Presidente:

Doctor Julio César.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Julio César Triana Quintero:

Señora Presidenta. Es que en la bancada habíamos acordado que en tal comisión estaría el doctor Erwin Arias, valoro mucho si atiendes el llamado de la bancada. Mil gracias.

Presidente:

¿O sea, sales tú y entra Erwin?

Honorable Representante Julio Cesar Triana Quintero:

Así es, habíamos acordado eso.

Presidente:

Entonces, Erwin Arias en lugar de Julio César Triana, Amparito y Jorge Méndez de Cambio Radical. Queda de esa manera conformada la Comisión.

Señora Secretaria sírvase realizar el anuncio de Proyectos para la próxima Comisión.

Honorable Representante Luis Alberto Albán Urbano:

Señora Presidenta, estoy pidiendo la palabra.

Presidente:

Sí doctor Albán, por supuesto qué pena.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Luis Alberto Albán Urbano:

Sí señora Presidenta. Lo único es para decirle que, en mi calidad de Representante del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, solicito hacer parte de esa Comisión.

Presidente:

Discúlpeme usted doctor lo tenía aquí anotado de primero y se me pasó nombrarlo, claro que sí Luis Alberto Albán.

Honorable Representante Luis Alberto Albán Urbano:

Bueno, muchas gracias.

Presidente:

Amparito, por favor anuncie proyectos para la próxima Sesión.

Secretaria:

Sí señora Presidenta. Anuncio por instrucciones los proyectos que se discutirán y votarán en la próxima Sesión.

- **Proyecto de ley número 283 de 2019 Cámara,** *por medio del cual se sustituye el Título XI, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente de la Ley 599 del 2000*.

- **Proyecto de ley número 112 de 2019 Cámara,** *por medio del cual se reglamenta la aspersión de sustancias tóxicas o probablemente tóxicas en el marco de la lucha contra los cultivos de uso ilícito.*
- **Proyecto de ley número 302 de 2019 Cámara,** *por el cual se adoptan medidas de lucha contra el dopaje en el deporte*.
- **Proyecto de ley número 198 de 2019 Cámara,** *por medio del cual se realizan cambios al artículo 81 del Código Nacional de Policía y Convivencia y se introduce un término prudencial para la realización de acciones preventivas en caso de vía de hecho que pretendan perturbar la posesión.*
- **Proyecto de ley número 039 de 2019 Cámara,** *por medio del cual se establecen condiciones de transparencia y acceso a la información de la actividad congresional*.
- **Proyecto de Ley Orgánica número 053 de 2019 Cámara**, *por medio de la cual se modifica el artículo 333 de la Ley 5ª de 1992*.
- **Proyecto de Ley Orgánica número 193 de 2019 Cámara,** *por medio de la cual se adoptan medidas para profesionalizar las Unidades de Trabajo Legislativo de los Congresistas y se dictan otras disposiciones*.
- **Proyecto de ley número 101 de 2019 Cámara,** *por medio de la cual se modifican los artículos 206 y 207 de la Ley 1098 de 2006 y se dictan otras disposiciones*.
- **Proyecto de ley número 099 de 2019 Cámara,** *por medio de la cual se establecen medidas en favor de la protección de la integridad, libertad y formación sexuales de niños, niñas y adolescentes y se dictan otras disposiciones.*
- **Proyecto de ley número 004 de 2019 Cámara,** *por medio de la cual se prohíbe el porte y consumo de sustancias alcohólicas y alucinógenas o prohibidas, en lugares públicos educativos y recreativos, donde se encuentren presentes menores de edad*.
- **Proyecto de ley número 227 de 2019 Cámara,** *por medio de la cual se modifican los artículos 241, 242, 242A y 243 de la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones*.
- **Proyecto de ley número 243 de 2019 Cámara, 044 de 2018 Senado,** *por medio de la cual se modifican algunas disposiciones relacionadas con el reconocimiento de los hijos extramatrimoniales*.
- **Proyecto de Ley Estatutaria número 009 de 2019 Cámara,** *por medio de la cual se modifica la Ley Estatutaria 1266 de 2008". Acumulado con el Proyecto de Ley Estatutaria número 075 de 2019 Cámara, por medio de la cual se genera un alivio al sector agropecuario, para el pequeño productor, jóvenes y mujeres rurales.*
- **Proyecto de Ley Orgánica número 279 de 2019 Cámara,** *por medio de la cual se crea el cargo de Secretario de la Comisión de Acreditación Documental, se modifica y adiciona la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones*.
- **Proyecto de ley número 288 de 2019 Cámara,** *por medio de la cual se crea el régimen especial de visitas entre abuelos y nietos*.
- **Proyecto de ley número 115 de 2019 Cámara,** *por la cual se dictan normas para fortalecer la resocialización de los reclusos en Colombia y se dictan otras disposiciones". Acumulado con el Proyecto de ley número 100 de 2019 Cámara, por medio de la cual se modifica la Ley 65 de 1993 - Código penitenciario y carcelario y se dictan otras disposiciones". Acumulado con el Proyecto de ley número 121 de 2019 Cámara, por medio del cual se modifican algunas disposiciones de la Ley 65 de 1993, por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario*.
- **Proyecto de ley número 096 de 2019 Cámara,** *por medio de la cual se modifica algunos aspectos del estatuto general de contratación y la ejecución presupuestal, e introducir herramientas que permiten fortalecer la lucha contra la corrupción*.
- **Proyecto de ley número 266 de 2019 Cámara,** *por la cual se expide el Código Nacional de Protección y Bienestar Animal*.
- **Proyecto de Acto Legislativo número 333 de 2020 Cámara,** *por medio del cual se modifica los artículos 171 y 176 de la Constitución Política y otras disposiciones*.

Han sido anunciados Presidenta, por instrucciones suyas los proyectos que se discutirán y votarán en la próxima Sesión que se cite para este trámite.

Presidente:

Muy bien Amparito, vamos a citar para el miércoles a las 9:00 de la mañana la próxima Sesión de la Comisión Primera Constitucional. Muchas gracias a todos por sus intervenciones, por su participación. Levante la Sesión, señora Secretaria.

Secretaria:

Así se hará señora Presidenta, manifestar que el día miércoles habrá Debate ya citado de Control Político y se ha levantado la Sesión siendo las 3:57 de la tarde y se ha convocado para el día miércoles 9:00 de la mañana a Debate de Control Político.

Anexos: Ciento setenta y nueve (179) folios.

LLAMADO A LISTA

H.R. MIEMBROS DE LA COMISION PRIMERA CONSTITUCIONAL 2018 - 2022

APELLIDOS Y NOMBRES	PARTIDO POLITICO	PRIMER LLAMADO	LLEGO S.	SEGUNDO LLAMADO	LLEGO S.
ALBAN URBANO LUIS ALBERTO	FARC	✓			
ARIAS BETANCUR ERWIN	C. RADICAL	✓			
ASPRILLA REYES INTI RAUL	A. VERDE	•			
BURGOS LUGO JORGE ENRIQUE	P.U.	✓			
CALLE AGUAS ANDRÉS DAVID	LIBERAL	✓			
CÓRDOBA MANYOMA NILTON	LIBERAL	•			
DAZA IGUARÁN JUAN MANUEL	C. DEMOCRATICO	✓			
DELUQUE ZULETA ALFREDO RAFAEL	P.U.	✓			
DÍAZ LOZANO ELBERT	P.U.	✓			
ESTUPIÑAN CALVACHE HERNAN GUSTAVO	LIBERAL	✓			
GOEBERTUS ESTRADA JUANITA MARÍA	A. VERDE	✓			
GONZALEZ GARCIA HARRY GIOVANNY	LIBERAL	•			
HOYOS GARCÍA JOHN JAIRO	P.U.	•			
LEÓN LEÓN BUENAVENTURA	CONSERVADOR	✓			
LÓPEZ JIMÉNEZ JOSÉ DANIEL	C. RADICAL	✓			
LORDUY MALDONADO CESAR AUGUSTO	C. RADICAL	✓			
LOSADA VARGAS JUAN CARLOS	LIBERAL	✓			
MATIZ VARGAS ADRIANA MAGALI	CONSERVADOR	✓			
MENDEZ HERNÁNDEZ JORGE	C. RADICAL	✓			
NAVAS TALERO CARLOS GERMAN	POLO	✓			
PADILLA OROZCO JOSE GUSTAVO	CONSERVADOR	✓			
PEINADO RAMIREZ JULIAN	LIBERAL	•	✓		
PRADA ARTUNDUAGA ALVARO HERNAN	C. DEMOCRATICO	✓			
PULIDO NOVOA DAVID ERNESTO	C. RADICAL	✓			
RESTREPO ARANGO MARGARITA MARÍA	C. DEMOCRATICO	✓			
REYES KURI JUAN FERNANDO	LIBERAL	✓			
RODRÍGUEZ CONTRERAS JAIME	C. RADICAL	✓			
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDWARD DAVID	C. DEMOCRATICO	✓			
SANCHEZ LEON OSCAR HERNAN	LIBERAL	✓			
SANTOS GARCÍA GABRIEL	C. DEMOCRATICO	✓			
TAMAYO MARULANDA JORGE ELIECER	P.U.	✓			
TRIANA QUINTERO JULIO CESAR	C. RADICAL	✓			
USCATEGUI PASTRANA JOSÉ JAIME	C. DEMOCRATICO	✓			
VALLEJO CHUJFI GABRIEL JAIME	C. DEMOCRATICO	✓			
VEGA PÉREZ ALEJANDRO ALBERTO	LIBERAL	✓			
VILLAMIZAR MENESES OSCAR LEONARDO	C. DEMOCRATICO	✓			
WILLS OSPINA JUAN CARLOS	CONSERVADOR	✓			

ACTA NUMERO 51

FECHA Junio 8/2020

HORA DE INICIACION 10:25 a.m.

HORA DE TERMINACION 3:37 p.m.

LISTADO DE VOTACION

Orden del día Modificado

H.R. MIEMBROS DE LA COMISION PRIMERA CONSTITUCIONAL 2018 - 2022

APELLIDOS Y NOMBRES	FILIAC.	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ALBAN URBANO LUIS ALBERTO	FARC		X						
ARIAS BETANCURT ERWIN	C. RADICAL	X							
ASPRILLA REYES INTI RAUL	A. VERDE								
BURGOS LUGO JORGE ENRIQUE	P.U.	X							
CALLE AGUAS ANDRÉS DAVID	LIBERAL		X						
CÓRDOBA MANYOMA NILTON	LIBERAL		X						
DAZA IGUARAN JUAN MANUEL	C. DEMOCRATICO	X							
DELUQUE ZULETA ALFREDO RAFAEL	P.U.		X						
DIAZ LOZANO ELBERT	P.U.	X							
ESTUPIÑAN CALVACHE HERNÁN GUSTAVO	LIBERAL		X						
GOEBERTUS ESTRADA JUANITA MARÍA	A. VERDE		X						
GONZÁLEZ GARCIA HARRY GIOVANNY	LIBERAL		X						
HOYOS GARCÍA JOHN JAIRO	P.U.		X						
LEÓN LEÓN BUENAVENTURA	CONSERVADOR	X							
LÓPEZ JIMÉNEZ JOSÉ DANIEL	C. RADICAL		X						
LORDUY MALDONADO CESAR AUGUSTO	C. RADICAL		X						
LOSADA VARGAS JUAN CARLOS	LIBERAL		X						
MATIZ VARGAS ADRIANA MAGALI	CONSERVADOR	X							
MENDEZ HERNÁNDEZ JORGE	C. RADICAL	X							
NAVAS TALERO CARLOS GERMAN	POLO		X						
PADILLA OROZCO JOSE GUSTAVO	CONSERVADOR	X							
PEINADO RAMIREZ JULIAN	LIBERAL		X						
PRADA ARTUNDUAGA ALVARO HERNAN	C. DEMOCRATICO	X							
PULIDO NOVOA DAVID ERNESTO	C. RADICAL		X						
RESTREPO ARANGO MARGARITA MARÍA	C. DEMOCRATICO	X							
REYES KURI JUAN FERNANDO	LIBERAL		X						
RODRÍGUEZ CONTRERAS JAIME	C. RADICAL		X						
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDWARD DAVID	C. DEMOCRATICO								
SANCHEZ LEON OSCAR HERNAN	LIBERAL		X						
SANTOS GARCÍA GABRIEL	C. DEMOCRATICO	X	X						
TAMAYO MARULANDA JORGE ELIECER	P.U.	X							
TRIANA QUINTERO JULIO CESAR	C. RADICAL		X						
USCATEGUI PASTRANA JOSÉ JAIME	C. DEMOCRATICO	X							
VALLEJO CHUJFI GABRIEL JAIME	C. DEMOCRATICO	X							
VEGA PÉREZ ALEJANDRO ALBERTO	LIBERAL		X						
VILLAMIZAR MENESES OSCAR LEONARDO	C. DEMOCRATICO	X							
WILLS OSPINA JUAN CARLOS	CONSERVADOR	X							
	TOTAL	16	19						

FECHA Junio 8/2020

35

Aprobado con modificaciones propuesto

Negada Junio 8/2020

Junio 8 de 2020.

Doctor
JUAN CARLOS LOSADA VARGAS.
Presidente Comisión I
Cámara de Representantes.

PROPOSICIÓN

Modifíquese el orden del día de la sesión de la Comisión I, citada para el lunes 8 de mayo de 2020 en el siguiente sentido:

Pasar a segundo punto del orden del día el Proyecto de Ley N° 302/19C "Por el cual se adoptan medidas de lucha contra el dopaje en el deporte".

Atentamente,

JUAN CARLOS WILLS OSPINA
Representante

HARRY GONZALEZ

Bogotá D.C, 8 de junio de 2020

Retirada Junio 8/2020 10:45 a.m. Acta 51

Proposición

En mi condición de Representante a la Cámara, de manera atenta solicito a la Mesa Directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, invítese a la discusión del Proyecto de Ley No 283 de 2019 Cámara, "Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000", al Fiscal General de la Nación, Dr. Francisco Barbosa, a la Ministra de Justicia, Dra. Margarita Cabello Blanco y a la Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema Justicia, Dra. Patricia Salazar Cuéllar, con el fin de conocer su opinión frente a la conveniencia del presente proyecto.

Atentamente,

Harry Giovanny González García
Representante a la Cámara
Departamento del Caquetá

JMD
Juan Manuel Daza

PROPOSICIÓN DE APLAZAMIENTO

Por medio de la presente se solicita a los Honorables Representantes de la Comisión Primera de Cámara el aplazamiento del Proyecto de Ley número 112 de 2019 cámara *"Por medio del cual se reglamenta la aspersión de sustancias tóxicas o probablemente tóxicas en el marco de la lucha contra los cultivos de uso ilícito"*, en el entendido que es necesario contar con el concepto de la Dirección de Políticas de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Defensa, de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, como también con el concepto del Consejo Nacional de Estupefacientes, a efectos de contar con mayores elementos técnicos y jurídicos al momento de adoptar una decisión ante un proyecto de gran impacto para las políticas relacionadas con la lucha contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico en el país.

JUAN MANUEL DAZA IGUARÁN
Representante a la Cámara por Bogotá D.C.
Partido Centro Democrático

Bogotá, junio 08 de 2020.

Doctor:
JUAN CARLOS LOSADA
Presidente Comisión Primera
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad.

Referencia: Excusa médica para las sesiones 08 y 09 de junio de 2020.

Respetado Presidente:

INTI RAÚL ASPRILLA REYES, en mi calidad de Representante a la Cámara por Bogotá, me dirijo a usted con el fin de presentarle mi incapacidad medica, esto con el fin de excusarme y ausentarme a la sesiones programadas por la Comisión Primera, para los días 08 y 09 del mes y la presente anualidad. Lo anterior, para los efectos pertinentes.

Sin otro particular;

INTI RAÚL ASPRILLA REYES
Representante a la Cámara por Bogotá

Anexo:
Un (1) Folio. Incapacidad médica de dos (2) días, expedida por EMI, con diagnóstico de Otitis Aguda, firmada por el médico general Juan Córdoba Fernández.

Incapacidad M...

Consulta emi beneficios y emi especialistas en grupoemi.com

8/6/20 Bogotá

INTI Asprilla Reyes

V 80201740 Edad 38

265 Mod. 601

Empresa

otitis Aguda H650

Fecha Inic. 8 6 20 Fecha Fin. 9 6 20

2

dos días

Juan Sebastián Córdoba Fernández
Médico General
RM 1010136525
Universidad Antonio Nariño

Juan Sebastián Córdoba Fernández
Médico General
RM 1010136525
Universidad Antonio Nariño

SOLICITALE AL MÉDICO QUE TE ENVIE LA HISTORIA CLÍNICA

Bogotá, D.C, 3 de junio de 2020

Señor
JUAN CARLOS LOSADA VARGAS
Presidente
Comisión Primera
CÁMARA DE REPRESENTANTES
Ciudad

Respetado señor Presidente:

De manera atenta y de conformidad con el encargo hecho por la Mesa Directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, consistente en presentar un informe de subcomisión sobre las proposiciones al Proyecto de Ley No. 408 de 2019 Cámara, 060 de 2018 Senado, *"Por medio de la cual se adoptan disposiciones de fortalecimiento de seguridad ciudadana"*, nos permitimos informar que, de acuerdo a reunión sostenida el día 3 de junio de 2020, entre los miembros de la subcomisión y el señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa Delgado, nos abstendremos de presentar propuesta de articulado nuevo para el proyecto de ley en comento.

Lo anterior teniendo en cuenta que en la precitada reunión se acordó radicar una nueva iniciativa de ley el próximo 20 de julio del presente año, la cual se elaborará de manera conjunta entre miembros de la subcomisión, otros congresistas y la Fiscalía General de la Nación. Este proyecto de ley recogerá algunos artículos del Proyecto de Ley No. 408 de 2019 Cámara-060 de 2018 Senado, y otros artículos, acordes con la visión de política criminal que busca implementar la Fiscalía General de la Nación.

Cordialmente,

JOSÉ DANIEL LÓPEZ JIMÉNEZ -C- **HARRY GONZÁLEZ GARCÍA - C-**

JORGE ENRIQUE BURGOS LUGO

GABRIEL SANTOS GARCÍA

BUENAVENTURA LEÓN LEÓN

INTI RAÚL ASPRILLA REYES

CARLOS GERMAN NAVAS TALERO

LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO

JULIÁN PEINADO RAMÍREZ

ALFREDO DELUQUE ZULETA

EDWARD DAVID RODRÍGUEZ

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS

CESAR LORDUY MALDONADO

JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ

JUAN CARLOS LOSADA VARGAS

P.L. 283/19

LISTADO DE VOTACION

H.R. MIEMBROS DE LA COMISION PRIMERA CONSTITUCIONAL 2018 - 2022

APELLIDOS Y NOMBRES	FILIAC.	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ALBAN URBANO LUIS ALBERTO	FARC	X			X				
ARIAS BETANCURT ERWIN	C. RADICAL	X		X					
ASPRILLA REYES INTI RAUL	A. VERDE								
BURGOS LUGO JORGE ENRIQUE	P.U.	X		X					
CALLE AGUAS ANDRES DAVID	LIBERAL	X			X				
CORDOBA MANYOMA NILTON	LIBERAL	X			X				
DAZA IGUARAN JUAN MANUEL	C. DEMOCRATICO	X		X					
DELUQUE ZULETA ALFREDO RAFAEL	P.U.	X		X					
DIAZ LOZANO ELBERT	P.U.	X		X					
ESTUPIÑAN CALVACHE HERNAN GUSTAVO	LIBERAL	X			X				
GOEBERTUS ESTRADA JUANITA MARIA	A. VERDE	X			X				
GONZALEZ GARCIA HARRY GIOVANNY	LIBERAL	X			X				
HOYOS GARCIA JOHN JAIRO	P.U.	X			X				
LEON LEON BUENAVENTURA	CONSERVADOR	X		X					
LÓPEZ JIMÉNEZ JOSÉ DANIEL	C. RADICAL	X							
LORDUY MALDONADO CESAR AUGUSTO	C. RADICAL	X		X					
LOSADA VARGAS JUAN CARLOS	LIBERAL	X			X				
MATIZ VARGAS ADRIANA MAGALI	CONSERVADOR	X		X					
MENDEZ HERNANDEZ JORGE	C. RADICAL	X		X					
NAVAS TALERO CARLOS GERMAN	POLO	X			X				
PADILLA OROZCO JOSE GUSTAVO	CONSERVADOR	X		X					
PEINADO RAMIREZ JULIAN	LIBERAL	X			X				
PRADA ARTUNDUAGA ALVARO HERNAN	C. DEMOCRATICO			X					
PULIDO NOVOA DAVID ERNESTO	C. RADICAL	X		X					
RESTREPO ARANGO MARGARITA MARIA	C. DEMOCRATICO	X							
REYES KURI JUAN FERNANDO	LIBERAL	X			X				
RODRÍGUEZ CONTRERAS JAIME	C. RADICAL	X		X					
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDWARD DAVID	C. DEMOCRATICO	X			X				
SANCHEZ LEON OSCAR HERNAN	LIBERAL								
SANTOS GARCIA GABRIEL	C. DEMOCRATICO	X		X					
TAMAYO MARULANDA JORGE ELIECER	P.U.	X		X					
TRIANA QUINTERO JULIO CESAR	C. RADICAL	X		X					
USCATEGUI PASTRANA JOSE JAIME	C. DEMOCRATICO	X		X					
VALLEJO CHUJFI GABRIEL JAIME	C. DEMOCRATICO	X		X					
VEGA PÉREZ ALEJANDRO ALBERTO	LIBERAL	X			X				
VILLAMIZAR MENESES OSCAR LEONARDO	C. DEMOCRATICO	X							
WILLS OSPINA JUAN CARLOS	CONSERVADOR	X		X					
	TOTAL	31		19	13				

(32)

FECHA Julio 8/2020

Acta SI

GABRIEL VALLEJO CHUJFI

Aprobado Julio 8/2020 Acta SI

PROPOSICIÓN

Teniendo en cuenta el gran número de proposiciones radicadas y dada la trascendencia del Proyecto de Ley 283 de 2019C *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000*, se solicita a los Honorables Representantes de la Comisión Primera de Cámara, la conformación de una subcomisión integrada por miembros de todos los Partidos Políticos a efectos de revisar las proposiciones presentadas, lograr un mayor consenso y así mejorar el contenido del mismo.

GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI
Representante a la Cámara por Risaralda
Partido Centro Democrático

Albán.

Harry González-e

Buenaventura León

Jo Wills

Erwin Arias.

Jorge Mendez.

Vallejo

Burgos

Edward Rodríguez

Alfredo Deluque

Jaime Esbank

Germán Navas

LISTADO DE VOTACION

H.R. MIEMBROS DE LA COMISION PRIMERA CONSTITUCIONAL 2018 - 2022

APELLIDOS Y NOMBRES	FILIAC.	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ALBAN URBANO LUIS ALBERTO	FARC	X		X		X		X	
ARIAS BETANCURT ERWIN	C. RADICAL	X		●		X		X	
ASPRILLA REYES INTI RAUL	A. VERDE	/		/		/		/	
BURGOS LUGO JORGE ENRIQUE	P.U.		X		X	●			X
CALLE AGUAS ANDRÉS DAVID	LIBERAL		X		·				X
CÓRDOBA MANYOMA NILTON	LIBERAL		X		X		X		X
DAZA IGUARÁN JUAN MANUEL	C. DEMOCRATICO								X
DELUQUE ZULETA ALFREDO RAFAEL	P.U.		X		X		X		X
DÍAZ LOZANO ELBERT	P.U.		X		X		X		X
ESTUPIÑAN CALVACHE HERNÁN GUSTAVO	LIBERAL		X		X		X		X
GOEBERTUS ESTRADA JUANITA MARÍA	A. VERDE		X	X	/		X	X	
GONZALEZ GARCIA HARRY GIOVANNY	LIBERAL		X		X		X		X
HOYOS GARCÍA JOHN JAIRO	P.U.				X		X		X
LEÓN LEÓN BUENAVENTURA	CONSERVADOR	X		X		X		X	
LÓPEZ JIMÉNEZ JOSÉ DANIEL	C. RADICAL		X		X		X		X
LORDUY MALDONADO CESAR AUGUSTO	C. RADICAL		X		X		X		X
LOSADA VARGAS JUAN CARLOS	LIBERAL		X		X		X		X
MATIZ VARGAS ADRIANA MAGALI	CONSERVADOR		X		X		X		X
MENDEZ HERNÁNDEZ JORGE	C. RADICAL		X		X		X		X
NAVAS TALERO CARLOS GERMAN	POLO	X			X		X		X
PADILLA OROZCO JOSE GUSTAVO	CONSERVADOR		X		X		X		X
PEINADO RAMIREZ JULIAN	LIBERAL		X		X		X		X
PRADA ARTUNDUAGA ALVARO HERNAN	C. DEMOCRATICO		X		X		X		X
PULIDO NOVOA DAVID ERNESTO	C. RADICAL	X		X		X		X	
RESTREPO ARANGO MARGARITA MARÍA	C. DEMOCRATICO		X		X		X		X
REYES KURI JUAN FERNANDO	LIBERAL	X		X		X		●	
RODRÍGUEZ CONTRERAS JAIME	C. RADICAL		X		X		X		X
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDWARD DAVID	C. DEMOCRATICO		X						
SANCHEZ LEON OSCAR HERNAN	LIBERAL								
SANTOS GARCIA GABRIEL	C. DEMOCRATICO		X		X		X		X
TAMAYO MARULANDA JORGE ELIECER	P.U.		X		X		X		X
TRIANA QUINTERO JULIO CESAR	C. RADICAL	●			X		X		X
USCATEGUI PASTRANA JOSE JAIME	C. DEMOCRATICO		X		X		X		X
VALLEJO CHUJFI GABRIEL JAIME	C. DEMOCRATICO		X		X		X		X
VEGA PÉREZ ALEJANDRO ALBERTO	LIBERAL		X		X		X		X
VILLAMIZAR MENESES OSCAR LEONARDO	C. DEMOCRATICO		X		·		·		·
WILLS OSPINA JUAN CARLOS	CONSERVADOR		X		X		X		X
	TOTAL	6	26	5	25	5	25	5	27

FECHA _____

Negado Junio 8/2020 Acta SI

IMPEDIMENTO

Con el fin de atender los deberes de los congresistas, especialmente el consagrado en el artículo 268 numeral 7 de la ley 5ta de 1992, me declaro impedido para participar en la discusión y votación del al Proyecto de Ley número 283 de 2019 Cámara, *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000"*, toda vez que poseo predios dedicados a la actividad agrícola y acciones en Ecopetrol.

Atentamente,

JUAN FERNADO REYES KURI

Representante a la Cámara por el Valle del Cauca

Partido Liberal

Bogotá 8 de junio de 2020

Negado Junio 8/2020 Acta SI

IMPEDIMENTO

Por medio de la presente me declaro impedido para votar, discutir y aprobar el proyecto de ley número 283 de 2019 cámara por medio del cual se sustituye el título XI de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente de la ley 599 de 2000, justificando que en la actualidad tengo predios rurales y mi actividad particular es la ganadería y agricultura

Atentamente

Jorge Enrique Burgos Lugo
Representante a La Cámara Departamento de córdoba

Bogotá, 8 de junio de 2020

Negado Junio 8/2020 Acta SI

Señor
Juan Carlos Losada Vargas
Presidente Comisión Primera Cámara de Representantes
Ciudad

Referencia: Impedimento para participar en el debate y votación del Proyecto de Ley No. 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente "de la Ley 599 del 2000".

Respetado señor presidente

De manera atenta y de conformidad con lo establecido en los artículos 286 y 291 de la Ley 5 de 1992 y las demás normas concordantes, me permito presentar impedimento para participar en el debate y votación del Proyecto de Ley No. 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente "de la Ley 599 del 2000", toda vez que en la actualidad mi familia desarrolla actividades comerciales relacionadas con el sector agropecuario y el sector minero que podrían beneficiar o perjudicar con la aprobación del presente articulado.

Erwin Arias Betancur
Representante Departamento de Caldas.

Neiva – Huila abril 30 de 2020

Doctor
Juan Carlos Lozada
Presidente
Comisión Primera Constitucional
Cámara de Representantes

Referencias/ Solicitud de Impedimento al Proyecto de Ley 283 de 2019 – Delitos Recursos Naturales

Honorable Presidente;

Por medio del presente muy comedidamente me permito solicitar impedimento, en virtud del Artículo 286 de la Sección 4ª, del Capítulo Undécimo de la Ley 5 de 1992, que al tenor señala: "Todo Congresista, cuando exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas", es así como manifiesto soy propietario de un propiedad rural y podría existir por ello un interés directo que la ley prevé y solicito se me declare impedido para participar en el debate del Proyecto de Ley 283 de 2019: "Por medio del cual se sustituye el Título XL "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente "de la Ley 599 del 2000"

Cordialmente;

JULIO CESAR TRIANA QUINTERO
Representante a la Cámara
Departamento del Huila

LISTADO DE VOTACIÓN

H.R. MIEMBROS DE LA COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL 2018 - 2022

APELLIDOS Y NOMBRES	FILIAC.	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ALBAN URBANO LUIS ALBERTO	PARC.	X		X		X		X	
ARIAS BETANCURT ERWIN	C. RADICAL	X		X		X		X	
ASPRILLA REYES INTI RAUL	A. VERDE								
BURGOS LUGO JORGE ENRIQUE	P.U.		X		X		X		X
CALLE AGUAS ANDRÉS DAVID	LIBERAL		X		X				X
CORDOBA MANYOMA NILTON	LIBERAL		X		X		X		X
DAZA IGUARÁN JUAN MANUEL	C. DEMOCRATICO		X		X		X		X
DELUQUE ZULETA ALFREDO RAFAEL	P.U.		X		X		X		X
DÍAZ LOZANO ELBERT	P.U.		X		X		X		X
ESTUPIÑAN CALVACHE HERNÁN GUSTAVO	LIBERAL		X		X		X		X
GOEBERTUS ESTRADA JUANITA MARÍA	A. VERDE		X		X	X		X	
GONZALEZ GARCIA HARRY GIOVANNY	LIBERAL		X		X		X		X
HOYOS GARCÍA JOHN JAIRO	P.U.		X		X		X		
LEÓN LEÓN BUENAVENTURA	CONSERVADOR	X		X		X		X	
LÓPEZ JIMÉNEZ JOSÉ DANIEL	C. RADICAL		X		X		X		X
LORDUY MALDONADO CESAR AUGUSTO	C. RADICAL		X		X		X		X
LOSADA VARGAS JUAN CARLOS	LIBERAL		X		X		X	X	
MATIZ VARGAS ADRIANA MAGALI	CONSERVADOR		X		X		X		X
MENDEZ HERNANDEZ JORGE	C. RADICAL								
NAVAS TALERO CARLOS GERMAN	POLO		X		X	X		X	
PADILLA OROZCO JOSE GUSTAVO	CONSERVADOR		X		X		X		X
PEINADO RAMIREZ JULIAN	LIBERAL		X		X		X		X
PRADA ARTUNDUAGA ALVARO HERNAN	C. DEMOCRATICO		X				X		X
PULIDO NOVOA DAVID ERNESTO	C. RADICAL				X	X		X	
RESTREPO ARANGO MARGARITA MARÍA	C. DEMOCRATICO		X				X		X
REYES KURI JUAN FERNANDO	LIBERAL		X		X	X		X	
RODRÍGUEZ CONTRERAS JAIME	C. RADICAL		X		X		X		X
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDWARD DAVID	C. DEMOCRATICO		X		X		X		X
SANCHEZ LEON OSCAR HERNAN	LIBERAL								
SANTOS GARCÍA GABRIEL	C. DEMOCRATICO		X		X		X		
TAMAYO MARULANDA JORGE ELIECER	P.U.		X		X		X		
TRIANA QUINTERO JULIO CESAR	C. RADICAL		X		X		X		X
USCATEGUI PASTRANA JOSÉ JAIME	C. DEMOCRATICO		X		X		X		X
VALLEJO CHUJFI GABRIEL JAIME	C. DEMOCRATICO		X		X		X		X
VEGA PÉREZ ALEJANDRO ALBERTO	LIBERAL		X		X		X		X
VILLAMIZAR MENESES OSCAR LEONARDO	C. DEMOCRATICO		X		X		X		X
WILLS OSPINA JUAN CARLOS	CONSERVADOR		X		X		X		X
	TOTAL								

FECHA Junio 8/2020

(39) (32) (30) (29)

IMPEDIMENTO

Conforme al artículo 286 y 291de la Ley 5ª de 1992, me declaro impedido ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para participar en la discusión y votación del Proyecto de Ley 283 de 2019 Cámara **"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000"**; toda vez, que poseo una finca en donde desarrollo actividades agrícolas y ganaderas de pequeña escala, y poseo permiso de la autoridad ambiental para la tala de algunos árboles que generan riesgo por su estado; y con la aprobación de este proyecto podría verme afectado.

JORGE ELIÉCER TAMAYO MARULANDA
Representante a la Cámara
Departamento del Valle

Bogotá, 8 de junio de 2020

Doctor
JUAN CARLOS LOSADA VARGAS
Presidente
Comisión Primera
Cámara de Representantes
E.S.M.

ASUNTO: IMPEDIMENTO H.R. ANDRÉS DAVID CALLE AGUAS. DISCUSIÓN PROYECTO DE LEY NO. 283 DE 2019 CÁMARA "POR MEDIO DEL CUAL SE SUSTITUYE EL TÍTULO XI, "DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE "DE LA LEY 599 DEL 2000".

De manera atenta, por medio de la presente, me permito presentar impedimento en relación con la discusión del proyecto de la referencia. Lo anterior, debido a que mis familiares y yo, contamos con predios rurales, y nos relacionamos con actividades agropecuarias.

Cordialmente,

ANDRÉS DAVID CALLE AGUAS
Representante a la Cámara

Bogotá, D. C., 10 de junio de 2020

H. Representante
Juan Carlos Lozada
Presidente Comisión Primera Cámara de Representantes
Ciudad

Negado Acta SI Junio 8/2020

Asunto: Impedimento

Respetado Señor Presidente:

Para que sea decidido por Comisión Primera de la Cámara de Representantes, me permito presentar a consideración mi impedimento frente a la discusión y votación del **Proyecto de Ley No. 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente "de la Ley 599 del 2000"**

Lo anterior, debido a que soy propietario de predio rural y ejerzo actividades agropecuarias y con la discusión del presente proyecto puede existir un posible conflicto de intereses.

Conforme a lo establecido en los artículos 286, 291 y 292 de la Ley 5ª de 1992, informo lo pertinente para que se imparta el trámite respectivo.

Cordialmente,

ÁLVARO HERNÁN PRADA ARTUNDUAGA
Representante a la Cámara por el Huila

AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

Negado Acta SI Junio 8/2020

IMPEDIMENTO

El suscrito Representante a la Cámara, deja constancia sobre la existencia de mi impedimento para participar en el debate y votación del Proyecto de Ley 283 2019 CÁMARA, "Por medio del cual se sustituye el título XI, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000". Por considerar que:

Existe un posible conflicto de intereses de conformidad con lo establecido en la Ley 203 de 2019, que modifico la Ley 5° de 1992, ya que con el trámite y aprobación del Presente Proyecto de Ley, **ya que mi cónyuge ejerce actividades agropecuarias, así como también parientes dentro del primer grado de consanguinidad que en la actualidad son propietarios de un predio rural.**

Para constancia se firma como aparece y se radica en la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes

DAVID ERNESTO PULIDO NOVOA
Representante a la Cámara

El emprendimiento es de todos

Julio 8/2020 Acta SI

Radicado: 2-2020-023965
Bogotá D.C., 7 de junio de 2020 12:35

2. Despacho del Viceministro General

1.1 Oficina Asesora de Jurídica

Bogotá D.C.,

Honorable Congresista
JUAN CARLOS LOSADA VARGAS
Presidente Comisión Primera Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Carrera 7 No. 8 – 68
Ciudad.

Radicado entrada
No. Expediente 21588/2020/OFI

Asunto: Consideraciones al informe de ponencia para primer debate del Proyecto de Ley No. 283 de 2019 Cámara ?por medio del cual se sustituye el Título XI, ?De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente? de la Ley 599 del 2000.?

Respetado Presidente:

De manera atenta, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presenta los comentarios y consideraciones al informe de ponencia para primer debate del Proyecto de Ley del asunto, en los siguientes términos:

El Proyecto de Ley, de iniciativa parlamentaria, tiene por objeto sustituir el Título XI del Código Penal colombiano, con el fin de modificar el contenido normativo vigente e introducir nuevos tipos penales, para poder sancionar penalmente actividades que generen un impacto negativo sobre los recursos naturales y el medio ambiente.

En ese sentido, para el estudio adecuado del texto propuesto, es pertinente hacer algunas consideraciones generales sobre los derechos ambientales y la facultad sancionatoria del Estado, y posteriormente, realizar consideraciones específicas sobre el articulado para efectos de analizar el impacto fiscal y la conveniencia de la iniciativa bajo examen.

1. Consideraciones generales.

1.1. Balance entre los derechos económicos ambientales y sociales.

La Constitución Política de 1991 dispone en sus artículos 79 y 80, como deber del Estado, (i) proteger la diversidad e integridad del ambiente, (ii) conservar las áreas de especial importancia ecológica con el fin de garantizar el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, y (iii) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, debiendo prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
PBX: (571) 381 1700
Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C.

En esa medida, para el diseño de instrumentos que propenden por la mitigación y adaptación del cambio climático, la reducción de la contaminación ambiental y la protección y conservación de los recursos naturales, en aras de lograr la materialización de los derechos económicos ambientales y sociales, es necesaria la articulación con criterios de crecimiento y desarrollo económico.
Por lo tanto, el balance de estos dos pilares, por un lado, el crecimiento y desarrollo económico, y por otro, la lucha contra el cambio climático y la protección de los recursos naturales, constituye la premisa sobre la que se debería estructurar el accionar del Estado. Al respecto, la Corte Constitucional[1] en sentencia SU-095 de 2018 define el desarrollo sostenible de la siguiente manera:

> *"8. Desarrollo sostenible. Equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y la protección ambiental, bajo el supuesto de que las actuaciones presentes deben asegurar la posibilidad de aprovechamiento de los recursos en el porvenir, como un derecho de los ciudadanos y como un deber del Estado, en el sentido de que éste debe propugnar por "un desarrollo sin un aumento en el consumo de recursos que supere la capacidad de carga del medio ambiente."*

El desarrollo sostenible permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias, y además como lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para que haya desarrollo sostenible se deben garantizar las necesidades esenciales de los sectores más vulnerables de la población:

> *"(...) Esto implica que para la satisfacción de las necesidades actuales, debe efectuarse un ejercicio de planificación económica y de asunción de responsabilidad en materia ambiental en el modelo de desarrollo. Especial énfasis se ha puesto en la necesidad de garantizar las necesidades esenciales de los sectores menos favorecidos de la población; siendo así, conforme lo ha establecido esta Corporación, se hace más importante en países como los nuestros, donde la pobreza mayoritaria está unida a la escasez, pues no habrá desarrollo sostenible mientras casi la mitad de la población viva en niveles de extrema pobreza"[2].*

La Corte Constitucional en reiteradas sentencias ha señalado que el desarrollo sostenible tiene cuatro dimensiones: *"(i) la sostenibilidad ecológica, que exige que el desarrollo sea compatible con el mantenimiento de la diversidad biológica y los recursos biológicos, (ii) la sostenibilidad social, que pretenda que el desarrollo eleve el control que la gente tiene sobre sus vidas y se mantenga la identidad de la comunidad, (iii) la sostenibilidad cultural, que exige que el desarrollo sea compatible con la cultura y los valores de los pueblos afectados, y (iv) la sostenibilidad económica, que pretende que el desarrollo sea económicamente eficiente y sea equitativo dentro y entre generaciones."* Por lo tanto, el desarrollo sostenible debe propender por un equilibrio entre la libertad económica, el bienestar social y la preservación de los recursos naturales, con el fin de evitar que en abstracto uno prevalezca sobre el otro, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política[3].

1.2. El ejercicio de la facultad sancionatoria criminal debe operar cuando las demás alternativas de control han fallado.

[1] Corte Constitucional, Sentencia SU-095/2018. M.P Cristina Pardo Schlesinger.
[2] Corte Constitucional, Sentencia C-044 de 2017. MP. Diana Fajardo Rivera
[3] Sentencia T-574 del 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero, entre otras; T-348 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt, T-606 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y Sentencia C-644 de 2017. MP. Diana Fajardo Rivera.

El emprendimiento es de todos

Continuación oficio Página 3 de 12

La Corte Constitucional ha sostenido que *"(...) el derecho penal se enmarca en el principio de mínima intervención, según el cual, el ejercicio de la facultad sancionatoria criminal debe operar cuando las demás alternativas de control han fallado. Esta preceptiva significa que el Estado no está obligado a sancionar penalmente todas las conductas antisociales, pero tampoco puede tipificar las que no ofrecen un verdadero riesgo para los intereses de la comunidad o de los individuos; como también ha precisado que la decisión de criminalizar un comportamiento humano es la última de las decisiones posibles en el espectro de sanciones que el Estado está en capacidad jurídica de imponer, y entiende que la decisión de sancionar con una pena, que implica en su máxima drasticidad la pérdida de la libertad, es el recurso extremo al que puede acudir el Estado para reprimir un comportamiento que afecta los intereses sociales. En esta medida, la jurisprudencia legitima la descripción típica de las conductas sólo cuando se verifica una necesidad real de protección de los intereses de la comunidad. De allí que el derecho penal sea considerado por la jurisprudencia como la última ratio del derecho sancionatorio*[4].

Teniendo en cuenta el principio de última ratio en materia penal, para la protección de los derechos ambientales en el marco constitucional, se han identificado diferentes mecanismos para propiciar un cambio de comportamiento de los diversos agentes. En materia de gestión y política ambiental, los instrumentos más utilizados internacionalmente se pueden agrupar en las siguientes categorías[5]:

a. De comando y control: son de carácter regulatorio y establecen estándares o límites específicos que los distintos agentes deben cumplir.
b. Económicos: se basan en la utilización de incentivos económicos o de mercado para generar los comportamientos deseados.
c. De educación e información: buscan educar e informar a los diferentes actores de la sociedad sobre aspectos relevantes del medio ambiente, (como conductas ambientalmente beneficiosas o dañinas, efectos de la contaminación y los beneficios de la conservación, entre otros), y,
d. Voluntarios: son aquellos implementados por los sectores productivos, en los cuales, a través de acuerdos, elevan la protección del medio ambiente por sobre los niveles establecidos en las normas o estándares establecidos regulatoriamente.

Por lo anterior, siendo la criminalización de un comportamiento humano la última de las decisiones que debe adoptar el Estado, es importante evaluar (i) la necesidad de crear sanciones penales para prevenir conductas que atenten contra del medio ambiente, (ii) la posibilidad de modificar las conductas que pueden perjudicar el medio ambiente a través de otros mecanismos sancionatorios, y (iii) la posibilidad de generar incentivos para la protección de los recursos naturales.

2. Consideraciones específicas.

2.1. Comentarios frente a las modificaciones y adiciones previstas en el artículo 1º del Proyecto de Ley, que sustituye el Título XI "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente", Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, parte especial de los delitos en general de la Ley 599 de 2000.

[4] Corte Constitucional. Sentencia C-365/12. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[5] CEPAL. (2018). Guía Metodológica: instrumentos económicos para la gestión ambiental. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

2.1.1. Frente al aprovechamiento ilícito de las aguas y de sus recursos biológicos.

El artículo 1 del Proyecto de Ley modifica el artículo 328 del Código Penal para establecer lo siguiente:

> *"Artículo 328. Aprovechamiento ilícito de las aguas y de sus recursos biológicos. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, use, explore, aproveche o se beneficie de las aguas o de los especímenes, productos o partes de los recursos hidrobiológicos, biológicos o pesqueros de las aguas y del suelo o el subsuelo del mar territorial o de la zona económica de dominio continental o insular de la República, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*
> *Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de veintiséis mil (26.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 336.*
> *La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se deseve, destruya, inutilice o haga desaparecer los cuerpos hídricos, sus recursos hidrobiológicos o pesqueros."*

Es importante aclarar que no todo el aprovechamiento de las aguas es ilícito o debe requerir permisos de la autoridad ambiental, por lo tanto, se recomienda definir con mayor claridad los casos en que sería necesario solicitar un permiso ante la autoridad competente.

2.1.2. Frente a los daños producidos al arrecife coralino.

Con el fin de castigar una conducta que produzca la destrucción de corales en Colombia, el artículo 1 de la iniciativa en estudio pretende adicionar el artículo 328A al Código Penal para efectos de generar la correspondiente sanción, así:

> *"Artículo 328A. Destrucción de coral. El que destruya, inutilice, altere, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe arrecife coralino, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de quinientos (500) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*
> *Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 336.*
> *La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se desvíe, destruya, inutilice o haga desaparecer los cuerpos hídricos o sus recursos hidrobiológicos."*

Sobre la norma antes citada, se debe advertir que la única forma de destrucción de corales no es a través de procesos de origen antrópico sino se debe también a procesos de calentamiento global. La emisión de CO2 acidifica las aguas de los ríos o mares y esto está blanqueando o "matando" los arrecifes de coral. Por lo tanto, la aplicación específica de la norma tendiente a prevenir la destrucción de corales por parte del ser humano se vuelve compleja en la práctica.

Por su parte, el artículo 336 modificado por el artículo 1 del texto propuesto establece que *"(...) el que invada, permanezca, así sea de manera temporal, o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en áreas de reserva forestal, reserva climática, zonas de nacimientos hídricos, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, definidos en la ley o reglamento, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (...)."* (negritas fuera de texto)

Al respecto, el artículo 328A podría entrar en contradicción con el pretendido artículo 336, en la medida que el coral es un ecosistema estratégico del país, y por tanto, una misma acción (destrucción de coral) podría ser aplicada a dos artículos distintos con sanciones diferentes.

2.1.3. Frente a la explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.

El artículo 1 del Proyecto de Ley, pretende que a través del artículo 329B sea sancionable la conducta proveniente de la explotación ilícita de yacimientos mineros en los siguientes términos:

> *"Artículo 329B. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes excave, explote, explore o extraiga yacimiento minero, arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*
> *Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 336.*
> *La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se realice a través de minería a cielo abierto, o con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya aculíferos."*

En relación con esta disposición, se debe aclarar que el delito ambiental no debe estar relacionado con el aprovechamiento de los recursos, es decir, no es pertinente establecer que la configuración de un delito ambiental se genere por la realización de una actividad, sino por la contaminación que podría derivarse de la actividad. Además, en virtud del principio de libertad económica, no debería tipificarse la realización de una actividad sino las consecuencias negativas que esto podría producir.

2.1.4. Frente a las actividades de explotación y aprovechamiento del suelo o del subsuelo a través del método de fractura hidráulica.

El artículo 329C comprendido en el artículo 1º de la iniciativa en estudio establece lo siguiente:

> *"Artículo 329C. Fracking. El que realice actividades de explotación y aprovechamiento del suelo o del subsuelo a través del método de fractura hidráulica, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*
> *Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de treinta y cinco mil (35.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 336.*
> *La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales o altere o destruya aculíferos."*

La tipificación de esta conducta como un delito con la correspondiente asignación de la pena o sanción descrita, conlleva a un análisis jurídico-fiscal de este tipo de actividades en la actualidad, y además permite evidenciar aspectos macroeconómicos relevantes que, sin duda alguna, inciden en la toma de decisiones del Estado colombiano.

2.1.4.1. Análisis de la norma propuesta.

Sea lo primero decir que, la creación de este tipo de delitos no puede estar asociado con el aprovechamiento de los recursos, o una técnica específica, sino que esté relacionado con el daño ambiental que pueda producirse. Así las cosas, la tipificación del uso fuera de las normas de protección de los recursos naturales debería ser tipificado, pero no la actividad en sí misma.

Como se mencionó en el artículo anterior, en virtud del principio de libertad económica, no debería tipificarse una expresión de realización de una actividad, sino las consecuencias negativas en el ambiente que estas pudieran traer. Asimismo, se recomienda dar cumplimiento al principio de proporcionalidad en materia penal, del cual se desprende que no todos los delitos ambientales deberían ser llevados a prisión.

Por otra parte, es importante mencionar que este artículo, al día de hoy, no presentaría una afectación a las finanzas públicas de la Nación, toda vez que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente[6] el Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013[7] y la Resolución 90341 del 27 de marzo de 2014[8], por lo que actualmente no se están percibiendo ingresos provenientes de la fracturación hidráulica, comúnmente denominada "fracking". Sin embargo, es de gran importante señalar que, según lo consignado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019 *"(...) la fracturación hidráulica es una solución en el mediano plazo para garantizar la autosuficiencia energética en materia de crudo y gas en Colombia. Esta puede traer consigo impactos positivos sobre la economía del país y el desarrollo sostenible de las regiones, siempre y cuando se realice de acuerdo a la normatividad vigente y se dé una ejecución responsable de la actividad, que permita anticipar y mitigar posibles externalidades negativas"*[9].

Cabe aclarar que, a pesar de la suspensión provisional antes señalada, la Constitución Política de Colombia reconoce y permite la exploración y explotación de hidrocarburos en los artículos 334, 360 y 361; de la misma forma que se determinó en su artículo 332 que el Estado es el propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables de la Nación.

Asimismo, es importante mencionar que el Consejo de Estado mediante el Auto del 17 de septiembre del 2019, en el marco del desarrollo del proceso de nulidad simple contra el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014 estableció que: *"(...) si el Gobierno Nacional tiene interés en investigar, dilucidar y explorar acerca de la viabilidad del procedimiento de fracturación hidráulica para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales (YNC), podría adelantar los denominados Proyectos Piloto Integrales de Investigación, contenidos en el Capítulo (14) del Informe sobre efectos ambientales (bióticos, físicos y sociales) y económicos de la exploración de hidrocarburos en áreas con posible despliegue de técnicas de fracturamiento hidráulico de roca generadora mediante*

[6] Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado en sesión del 8 de noviembre del 2018 - MP. Ramiro Pazos Guerrero. Radicación 11001-03-26-000-2014-00114-00 (51.741).
[7] Por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.
[8] Por la cual se establecen especificaciones técnicas y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.
[9] Ministerio de Hacienda. Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019. http://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionedisk%2Fministerio%2FWCC_CLUSTER%2F...

perforación horizontal, presentado por la Comisión Interdisciplinaria Independiente que él mismo convocó, siempre y cuando se cumplan todas y cada una de las etapas fijadas en el mismo".

2.1.4.2. Análisis macroeconómico sobre la inclusión de actividades de explotación y aprovechamiento del suelo y subsuelo con el método de fractura hidráulica.

El sector de hidrocarburos es una importante fuente de recursos fiscales para el país y las entidades territoriales, a la vez que es una actividad económica relevante en términos de valor agregado y participación en las exportaciones del país. El sector de extracción de crudo se destaca por ser uno de los sectores más intensivos en capital y con mayor participación en el PIB nacional, contando con una participación de 3,4% del PIB en 2019. Adicionalmente, este sector tiene una importancia considerable dentro de las exportaciones del país. De manera ilustrativa, las exportaciones de petróleo y sus derivados han representado, en promedio entre 2015-2019, el 35% de las exportaciones totales del país.

Por otro lado, el sector petrolero genera recursos importantes para la consolidación fiscal del país, que se contabilizan como ingresos del Gobierno Nacional Central (GNC), pues la producción de hidrocarburos ha representado una fuente de ingresos importante para la Nación, ya que la participación de los ingresos petroleros sobre los ingresos del GNC fue en promedio 10% entre 2002-2019. En particular, los ingresos petroleros alcanzaron 3,5% del PIB en 2013, lo que representó una participación de 20% en los ingresos totales del GNC. Igualmente, el sector de hidrocarburos es la fuente principal de ingresos del Sistema General de Regalías (SGR), aportando cerca del 80% del total de ingresos, con un recaudo acumulado del Sistema que alcanzó los $71,6 billones al cierre de 2019, mostrando un recaudo promedio de $7,6 billones cada año (6,8% del PIB), recursos que han representado una fuente importante para financiar los proyectos de inversión de las entidades territoriales. En suma, el sector de hidrocarburos es una importante fuente de recursos fiscales para el país y las entidades territoriales, a la vez que es una actividad económica relevante en términos de valor agregado y participación en las exportaciones del país.

Uno de los desafíos que enfrenta Colombia en la actualidad es el de garantizar la seguridad y autosuficiencia energética del país, las reservas de hidrocarburos y gas han venido declinando consecutivamente y tienen un alcance limitado. Mientras que en 2013 las reservas remanentes de crudo se situaban en 2,445 MBPD, en 2019 las reservas remanentes se redujeron en 17% (2,036 MBPD). En este sentido, de acuerdo al Informe de Recursos y Reservas de la ANH, las reservas actuales de crudo se agotarían en el término de los próximos 6,3 años y las de gas se agotarían en 8 años, lo que implicaría importantes riesgos para la estabilidad macroeconómica del país, pues se perderían importantes recursos fiscales y el aporte económico del sector representado en ingresos por exportaciones e inversión extranjera directa.

En este sentido, es preciso explorar e identificar métodos de incorporación de recursos en el corto y mediano plazo. Uno de estos métodos es la explotación de yacimientos no convencionales (YNC) mediante fracturación hidráulica, mejor conocido como "fracking". Puntualmente, se estima un potencial adicional de reservas de alrededor de 7,500 millones (U.S. Energy Information Administration, 2015), es decir que estas reservas por lo menos triplicarían las reservas actuales extendiendo así la autosuficiencia energética de Colombia en el orden de 18 años. (Gráfico 1):

Gráfico 1: Reservas de Hidrocarburos y Vida media de las reservas.



Fuente: Ecopetrol, EIA, Asociación Colombiana de Petróleo. Para el potencial de YNC se tomó el promedio de las proyecciones realizadas por agencias especializadas (EIA).

En Colombia existen diferentes zonas con potencial de yacimientos no convencionales, en particular, las cuencas del Valle Medio del Magdalena (VMM) y Cesar-Ranchería presentan las mejores condiciones para el desarrollo de la actividad. Esto abarca cerca de 6 departamentos del país (Antioquia, Bolívar, Santander, Norte de Santander, Cesar) y más de 20 municipios. No obstante, en otras zonas del país, al menos en 7 cuencas, también existe un importante potencial tanto en petróleo como gas.

En el mediano plazo (alrededor del año 2030), la producción de YNC podría alcanzar niveles cercanos a los 550 mil barriles por día. En este sentido, dado el declive natural en la producción de los actuales campos, la producción de YNC supliría esta deficiencia, representando cerca del 45% de la producción total en el 2030, la cual podría ubicarse en niveles superiores al millón de barriles por día (Gráfico 2):

Gráfico 2: Proyección de producción de crudo (KBPD)



Fuente: Cálculos propios MHCP; ANH, ACP.

Es importante recalcar los posibles efectos macroeconómicos que tendría la explotación de todo el potencial de YNC de Colombia en términos de empleo, crecimiento e inversión extranjera. En primer lugar, el desarrollo de YNC implicaría un aumento en las exportaciones del orden de USD 17 mil millones, el 40,6% del total de las exportaciones en 2018. Además, se podrían obtener flujos de inversión extranjera directa del orden de USD 5 mil millones de acuerdo con el documento final de la Comisión Interdisciplinaria Independiente para estudiar el tema que adelantó el Ministerio de Minas y Energía de 2019[10]. Por otra parte, la Comisión de Expertos destaca que la producción de YNC impactaría positivamente el desarrollo económico y social de las regiones. En principio, se estima la creación de 35 mil nuevos empleos durante la etapa de explotación (cerca de 30 años). Esto como consecuencia de la mayor demanda por mano de obra y el encadenamiento productivo con otros sectores, especialmente con el sector agrícola y de transporte.

En términos del ingreso tributario y de regalías provenientes de YNC, el valor presente neto[11] de los ingresos correspondientes al potencial de los 7,500 barriles de petróleo por día (KBPD) ascienden a $434 billones, alrededor de 40,1% del PIB[12] de Colombia en 2019. De esta forma, con el aumento en los ingresos de las regiones por regalías, se espera un mayor porcentaje de inversión en infraestructura, salud, educación y sanidad, lo cual en últimas genera un mayor impacto en el crecimiento económico y empleo de las regiones (Comisión Interdisciplinaria Independiente, 2019).

En suma, la fracturación hidráulica permitiría en el mediano plazo garantizar la autosuficiencia energética en materia de crudo y gas en Colombia. Esta puede traer consigo impactos positivos sobre la economía del país y el desarrollo sostenible de las regiones, siempre y cuando, se realice de acuerdo a la normatividad y haya una ejecución responsable de la actividad que permita anticipar y mitigar posibles externalidades negativas. Por esta razón, cualquier limitación o restricción a la actividad afectaría negativamente la inversión pública y el desarrollo económico de las regiones.

Finalmente, se hace necesario tener en cuenta por parte del Congreso de la República el pronunciamiento que haga el Ministerio de Minas y Energía sobre las implicaciones a futuro que tendría esta norma, por ser esta entidad la encargada de la política pública en la materia y la rectora del sector energético.

2.1.5. Frente al ámbito punitivo del impacto ambiental.

El Impacto Ambiental (IA) de las conductas dentro del ámbito punitivo de movilidad de la pena de prisión y de multa se establecen en el artículo 338, así:

> *"Artículo 338. Impacto Ambiental (IA). Cuando las conductas del presente título tengan como resultado un Impacto Ambiental (IA), el ámbito punitivo de movilidad de la pena de prisión y de multa se dividirá en tercios, así: uno mínimo, uno medio y uno máximo.*
> *La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio mínimo cuando la afectación tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) que no pase de cincuenta (50) IA.*
> *La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio medio cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental superior a cincuenta (50) IA sin exceder de setenta y cinco (75) IA.*
> *La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio máximo cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental que pasare de setenta y cinco (75) IA."*

Al respecto, si bien el impacto ambiental se trata de definir en el artículo 338, se encuentra cierta ambigüedad que podría violar los principios de legalidad y tipicidad. En esa medida, la Corte Constitucional en sentencia C-365 de 2012 establece que *"(...) el legislador se encuentra obligado a determinar claramente en qué circunstancias una conducta resulta punible, y ello con el fin de que los destinatarios de la norma sepan a ciencia cierta cuándo responden por las conductas prohibidas por la ley. No puede dejarse al juez, en virtud de la imprecisión o vaguedad del texto respectivo, la posibilidad de remplazar la expresión del legislador, pues ello pondría en tela de juicio el principio de separación de las ramas del poder público, postulado esencial del Estado de Derecho."* (Subrayado fuera del original)

Por lo tanto, de acuerdo a la redacción actual, la determinación de impacto ambiental, las características que debe tener la categoría mínimo, medio o máximo, podría quedar a discreción del juez por la imprecisión de la definición de la norma, siendo esta clasificación una acción que podría determinarse de manera objetiva por parte las autoridades competentes.

2.1.6. Frente a las referencias que se hacen a la autoridad competente para el otorgamiento de permisos.

Se genera una preocupación evidente, por cuanto en el Proyecto de Ley no se señala cuál es la entidad competente para el otorgamiento de permisos en un gran número de artículos (a saber, artículos 328, 329, 329A, 330, 330A, 330B, 330C, 331, 332A, 334A, 335D, entre otros), y en esa medida, es conveniente determinar cuál será la autoridad responsable ya que son varias las entidades llamadas a responder. Asimismo, es importante decir que, condicionar todas las actividades a la existencia de permisos de las autoridades competentes, puede generar grandes costos administrativos sin que esto se traduzca en beneficios a favor de la protección y conservación del capital natural. En este sentido, se generan unos costos económicos muy altos que podrían ir en perjuicio de la aplicabilidad de la norma.

2.2. Comentarios frente a la creación de una cátedra ambiental prevista en el artículo 3° del Proyecto de Ley.

El artículo 3° del Proyecto de Ley pretende la creación de una cátedra ambiental, con el fin de generar conciencia ambiental en los estudiantes y el buen uso de los recursos naturales en los siguientes términos:

> *"Artículo 3°. Pedagogía sobre el ambiente. Los establecimientos educativos de educación básica, media y universitaria, incluirán en su Proyecto Educativo Institucional, una cátedra ambiental que busque la comprensión, el fomento y la participación ciudadana para generar conciencia ambiental sobre el buen uso de los recursos naturales, las prácticas que son contrarias a la sostenibilidad, la importancia de las áreas de especial importancia ecológica y las regulaciones y leyes sobre la materia.*
> *Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación promoverán programas de formación docente para el desarrollo de las mencionadas estrategias."*

Es pertinente aclarar que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en conceptos institucionales sobre otros proyectos de esta misma índole[13], ha manifestado que se opone a cualquier tipo de iniciativas que incorporen cátedras u otro tipo de enseñanzas puntuales, pues van en contravía de las propuestas curriculares contemporáneas y limiten la

10 Informe sobre efectos ambientales (físicos, químicos y sociales) y económicos de la exploración de hidrocarburos en áreas con posible despliegue de técnicas de fracturamiento hidráulico de roca generadora mediante perforación horizontal.
11 Valores constantes de 2020.
12 Se toma con referencia el PIB nominal de 2019.

13 Por ejemplo, sobre el Proyecto de Ley 125 de 2018 Cámara.

autonomía escolar otorgada en virtud de la Ley 115 de 1994[4], que les permite a las instituciones establecer su Proyecto Educativo Institucional (PEI) respectivo. Esto, teniendo en cuenta que la Ley puede señalar parámetros generales para la organización académica, pero no podría una iniciativa legislativa imponer contenidos específicos de enseñanza, ya que existe el riesgo de vulnerar lo consagrado en el artículo 77 de la Ley 115 de 1994, en el que se señala:

> *"Artículo 77. Autonomía escolar. Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley; adoptar algunas áreas a las necesidades y características regionales; adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional. (...)"*

Por su parte, sobre la modificación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de los establecimientos educativos universitarios, es pertinente decir que se podría desbordar el ordenamiento legal y constitucional, en particular violar lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política que garantiza la autonomía universitaria.

Adicionalmente, sobre el artículo 3 de la presente iniciativa se sugiere tener en cuenta lo expresado por el Ministerio de Educación Nacional sobre la materia, y en lo particular, el concepto que emita en relación con esta iniciativa legislativa por ser el ente rector en el sector de la educación.

3. Consideraciones finales.

En virtud de todo lo expuesto, esta Cartera Ministerial se abstiene de emitir concepto favorable y solicita el archivo de esta iniciativa al considerar que:

(i) No todo aprovechamiento de las aguas es ilícito ni se debe considerar delito;
(ii) El artículo 328A podría entrar en contradicción con el artículo 336 por cuanto el coral es un ecosistema estratégico del país, lo que podría conllevar a aplicar dos artículos distintos con sanciones diferentes;
(iii) En los delitos ambientales no debe tipificarse la realización de una actividad, sino las consecuencias negativas que las actividades podrían producir;
(iv) Si bien, al día de hoy no se están percibiendo ingresos provenientes de la fracturación hidráulica, el fracking es una solución en el mediano plazo para garantizar la autosuficiencia energética en materia de crudo y gas en Colombia;
(v) La configuración del fracking como delito ambiental, podría presentar una posible violación de la Constitución Política de Colombia, por cuanto la misma reconoce y permite la exploración y explotación de hidrocarburos en sus artículos 334, 360 y 361;
(vi) Cualquier limitación o restricción a la actividad de fracturación hidráulica afectaría negativamente la inversión pública y el desarrollo económico de las regiones;
(vii) La determinación del impacto ambiental podría quedar a discreción del juez por la imprecisión de la definición de la norma pretendida;
(viii) No se determina cuáles serán las entidades competentes llamadas a responder para el otorgamiento de los permisos;
(ix) El otorgamiento de permisos de las autoridades competentes puede generar grandes costos administrativos sin que esto se traduzca en beneficios a favor de la protección y conservación del capital natural;
(x) La creación de la cátedra ambiental está en contravía de las propuestas curriculares contemporáneas y limitan la autonomía escolar otorgada en virtud de la Ley 115 de 1994, y,
(xi) La modificación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de los establecimientos educativos universitarios producto de la creación de la cátedra ambiental, podría violar lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política que garantiza la autonomía universitaria.

[4] Por la cual se expide la ley general de educación.

En todo caso, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifiesta la disposición de colaborar con la actividad legislativa dentro de los parámetros constitucionales y legales de disciplina fiscal vigente.

Atentamente,

JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ
Viceministro General
[illegible]

Proyectó: Santiago Cano Arias.
Revisó: Andrea del Pilar Suárez Pinto
Con copia a:
Dra. Angelica Yuvelis Calderón Perdomo- Secretaria de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes

---

H.R JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Bogotá, D. C., 08 de junio de 2020

Doctor:
JUAN CARLOS LOSADA VARGAS
Presidente Comisión Primera Cámara De Representantes
Ciudad

Asunto: **Proposición de modificación**

Respetado Señor Presidente,

Con fundamento en lo contemplado en la ley 5ta de 1992 y normas concordantes, se presenta proposición ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, de modificación del artículo 2º del proyecto de ley número 283 DE 2019 CÁMARA *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000".*

El cual quedará de la siguiente forma:

ARTÍCULO 2º. *Reglamentación del Impacto Ambiental.* El Gobierno Nacional en un término de **un (1) año, contado** a partir de la promulgación de la presente ley, expedirá la reglamentación sobre el método para determinar el daño ambiental según el Impacto Ambiental (IA) en los términos del artículo primero

Atentamente,

JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
Representante a la Cámara, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Partido Cambio Radical.

Julio 8/2020 Acta 51

[illegible]
César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

ELIMÍNESE EL ARTÍCULO 2 del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. El cual quedara así:

~~**ARTÍCULO 2º. *Reglamentación del Impacto Ambiental.*** El Gobierno Nacional en un término de tres (3) meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley, expedirá la reglamentación sobre el método para determinar el daño ambiental según el Impacto Ambiental (IA) en los términos del artículo primero.~~

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

Julio 8/2020 Acta 51

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

PROPOSICIÓN

MODÍFIQUESE el artículo 2 del **PROYECTO DE LEY NÚMERO 283 DE 2019 CÁMARA** *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000".*

ARTÍCULO 2°. *Reglamentación del Impacto Ambiental.* El Gobierno Nacional en un término de un (1) año, contados a partir de la promulgación de la presente ley, expedirá la reglamentación sobre el método para determinar el daño ambiental según el Impacto Ambiental (IA) en los términos del artículo primero.

ALFREDO DELUQUE ZULETA
REPRESENTANTE A LA CÁMARA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Junio 8/2020
Acta SI

PROPOSICIÓN MODIFICATIVA

Modifíquese el artículo 2° del Proyecto de Ley No 283 de 2019 Cámara, "Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000", el cual quedara así:

ARTÍCULO 2°. *Reglamentación del ~~Impacto Ambiental~~* **Daño al medio ambiente.** El Gobierno Nacional en un término de ~~tres (3) meses~~ 1 año, contados a partir de la promulgación de la presente ley, expedirá la reglamentación sobre el método para determinar el **daño ambiental** ~~según el Impacto Ambiental (IA) daño en los términos del artículo primero.~~

BUENAVENTURA LEÓN LEÓN
Representante a la Cámara

Junio 8/2020
Acta SI

H.R JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Bogotá, D. C., 08 de junio de 2020

Doctor:
JUAN CARLOS LOSADA VARGAS
Presidente Comisión Primera Cámara De Representantes
Ciudad

Asunto: **Proposición de eliminación**

Respetado Señor Presidente,

Con fundamento en lo contemplado en la ley 5ta de 1992 y normas concordantes, se presenta proposición ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, de eliminación del artículo 3° del Proyecto de ley No. 283 DE 2019 CÁMARA *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000".*

El cual quedará de la siguiente forma:

~~**ARTÍCULO 3°. Pedagogía sobre el ambiente. Los establecimientos educativos de educación básica, media y universitaria, incluirán en su Proyecto Educativo Institucional, una catedra ambiental que busque la compresión, el fomento y la participación ciudadana para generar conciencia ambiental sobre el buen uso de los recursos naturales, las practicas que son contrarias a la sostenibilidad, la importancia de las áreas de especial importancia ecológica y las regulaciones y leyes sobre la materia.~~**

Elimínese el aparte tachado.

Atentamente,

JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
Representante a la Cámara, Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Partido Cambio Radical.

Acta SI

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

PROPOSICIÓN

MODIFIQUESE el artículo 3 del **PROYECTO DE LEY NÚMERO 283 DE 2019 CÁMARA** *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000".*, el cual quedará así:

ARTÍCULO 3°. *Pedagogía sobre el ambiente.* Los establecimientos educativos de educación básica, media **~~y universitaria~~** incluirán en su Proyecto Educativo Institucional, una catedra ambiental que busque la compresión, el fomento y la participación ciudadana para generar conciencia ambiental sobre el buen uso de los recursos naturales, las practicas que son contrarias a la sostenibilidad, la importancia de las áreas de especial importancia ecológica y las regulaciones y leyes sobre la materia.

Las universidades atendiendo su autonomía igualmente podrán considerar incluir dicho proyecto de formación.

PARÁGRAFO. El Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación promoverán programas de formación docente para el desarrollo de las mencionadas estrategias.

Junio 8/2020
Acta SI

ALFREDO DELUQUE ZULETA
REPRESENTANTE A LA CÁMARA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

EDWARD RODRIGUEZ
Representante a la Cámara

PROPOSICIÓN

Adiciónese un artículo nuevo al **Proyecto de ley Por medio del cual se sustituye el Título XI, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente "de la Ley 599 del 2000"** el cual quedará así:

ARTÍCULO NUEVO. Ecocidio. El que con incumplimiento de la normatividad existente ocasione daño extenso, destrucción parcial o total, o la perdida de uno o más ecosistemas de un territorio específico, con grave afectación para la población de modo que el usufructo pacífico de los habitantes de dicho territorio quede severamente afectado, incurrirá en prisión de ocho (8) a doce (12) años y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las penas se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando:

1. La conducta se realice con fines terroristas.

2. La conducta se realice en parques naturales, zonas de reserva campesina, territorios ancestrales, áreas protegidas y/o de importancia ecológica.

PARÁGRAFO: A la misma sanción estará sujeto el propietario de la maquinaria utilizada para perpetrar el acto y el representante legal de la empresa que ocasione la conducta a través de sus operadores siempre que este supiera para los fines que se utilizaría y hubiese tomado las medidas de prevención necesarias para que ocurriere el ecocidio con su maquinaria.

Justificación

Para enfrentar la Extracción Ilícita de Minerales se necesitan brindar herramientas jurídicas las autoridades que permitan prevenir y reaccionar contra esta actividad que explota a familias de escasos recursos mientras nutren las actividades delictivas y el terrorismo.

La proposición se enfoca en la lucha contra la Extracción Ilícita de Minerales ya que es tal la magnitud del problema que según expertos la minería ha superado el narcotráfico como fuente de financiamiento por la facilidad y la rentabilidad del negocio el cual represente menos riesgos que el narcotráfico:

Los últimos años el gobierno nacional ha intentado combatir la Extracción Ilícita de Minerales mediante la adopción de diferentes medidas entre ellas:

a. La adopción del Decreto 1970 de 2012 mediante el cual se adoptan medidas tendientes a legalizar los mineros que desarrollan la actividad en condiciones de informalidad.

b. La adopción del Decreto 2235 de 2012 mediante la cual se permite la destrucción de la maquinaria pesada incautada en operaciones contra la minería ilegal.

c. La adopción del Decreto 2261 de 2012 mediante el cual se establecía la obligación de que la maquinaria pesada contara con un sistema de posicionamiento global u otro dispositivo de monitoreo electrónico instalado de manera permanente.

d. Proyecto de ley 206 de 2012 C "por medio de la cual se modifican el Código Penal - Ley 599 de 2000, la Ley del Procedimiento Sancionatorio Ambiental - Ley 1333 de 2009 y el Código Nacional de Tránsito - Ley 769 de 2002, con el fin de adoptar medidas eficaces para la protección del medio ambiente y para combatir el desarrollo de actividades mineras sin los permisos y requisitos previstos en la ley." El cual fue archivado por tránsito de la legislatura contenía modificaciones legales relevantes para combatir la minería ilegal.

Esta proposición pretende castigar a aquellos que destruyen los ecosistemas poniendo en riesgo no solo la subsistencia del medio ambiente como un todo complejo y compuesto, sino que además atentan contra la subsistencia de comunidades que dependen de la preservación ambiental territorial.

De los honorables congresistas,

EDWARD DAVID RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR BOGOTÁ

PROPOSICIÓN ADITIVA

Adiciónese un artículo nuevo al Proyecto de Ley No 283 de 2019 Cámara, "Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000", el cual quedara así:

Artículo nuevo. Los recursos provenientes de las multas establecidas en el presente título, se destinaran a la Subcuenta de apoyo a la gestión ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y se destinarán al financiamiento de proyectos, planes, programas y actividades que procuren reparar o mitigar el impacto ambiental negativo, que se generó en virtud de los delitos contra el ambiente.

BUENAVENTURA LEÓN LEÓN
Representante a la Cámara

	la sostenibilidad, la importancia de las áreas de especial importancia ecológica y las regulaciones y leyes sobre la materia. Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación promoverán programas de formación docente para el desarrollo de los mencionados estándares.
ARTÍCULO 3o. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia seis (6) meses después de la fecha de su promulgación y deroga el título XI. "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único. Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente. artículos 328 a 339, del Libro II. PARTE ESPECIAL. DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000.	ARTÍCULO 03o. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia seis (6) meses después de la fecha de su promulgación y deroga el título XI. "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único. Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente. artículos 328 a 339, del Libro II. PARTE ESPECIAL. DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000.

9. PROPOSICIÓN.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, presento ponencia positiva con modificaciones al texto radicado y, en consecuencia, solicito a los Honorables Representantes que integran la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, dar Primer Debate al Proyecto Ley número 283 de 2019 Cámara *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000".*

Cordialmente,

JUAN CARLOS LOZADA VARGAS
Representante a la Cámara
Ponente

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

PROPOSICIÓN

MODÍFIQUESE la expresión **"IMPACTO"** por **"DAÑO"** en los artículos que conforman el **PROYECTO DE LEY NÚMERO 283 DE 2019 CÁMARA** *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000".*

ALFREDO DELUQUE ZULETA
REPRESENTANTE A LA CÁMARA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

MODIFÍQUESE EL ARTÍCULO 328 **"APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LAS Y DE SUS RECURSOS BIOLÓGICOS".** al que se refiere el Artículo 1° del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. El cual quedara así:

ARTÍCULO 328. ***Aprovechamiento ilícito de las de los recursos naturales renovables. aguas y de sus recursos biológicos.***

El que **sin permiso de autoridad competente** o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, **use**, explore, aproveche o se beneficie de especimenes, productos o partes de los recursos **fáunicos, forestales, floristicos, geneticos, hidrobiológicos, biológicos de las aguas o de los o pesqueros de las aguas y del suelo o el subsuelo del mar territorial o de la zona económica de dominio continental e insular de la República,** incurrirá, **sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar,** en prisión **de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168)** meses y multa de **ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000)** salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de veinticinco mil (25.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad **cuando con la conducta se desvíe, destruya, inutilice o haga desaparecer los cuerpos hídricos, sus recursos hidrobiológicos o pesqueros.**

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

H.R JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Bogotá, D. C., 08 de junio de 2020

Doctor:
JUAN CARLOS LOSADA VARGAS
Presidente Comisión Primera Cámara De Representantes
Ciudad

Asunto: **Proposición de modificación**

Respetado Señor Presidente,

Con fundamento en lo contemplado en la ley 5ta de 1992 y normas concordantes, se presenta proposición ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, de modificación del artículo 1° del Proyecto de ley No. 283 DE 2019 CÁMARA *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000"*, en los siguientes términos:

Elimínese la expresión **"sin permiso de autoridad competente o"** de los artículos 328, 329, 329A, 329B, 330, 330A, 330B, 330C, 330, 331, 331A, 332, 332A, 333, 334, 334A, 335, 335A, 335C y 335D.

Atentamente,

JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
Representante a la Cámara, Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Partido Cambio Radical.

PROPOSICIÓN MODIFICATIVA

Modifíquese el artículo 328 del artículo 1° del Proyecto de Ley No 283 de 2019 Cámara, "Por medio del cual se sustituye el Título XI. "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000", el cual quedara así:

ARTÍCULO 328. *Aprovechamiento ilícito de las aguas y de sus recursos biológicos.* El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, use, explore, aproveche o se beneficie de las aguas o de los especimenes, productos o partes de los recursos biológicos de las aguas y del suelo o el subsuelo del mar territorial o de la zona económica de dominio continental e insular de la República, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia ~~un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA~~ **daño al medio ambiente**, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de veinticinco mil (25.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se desvíe, destruya, inutilice o haga desaparecer los cuerpos hídricos o sus recursos biológicos.

BUENAVENTURA LEÓN LEÓN
Representante a la Cámara

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

ELIMÍNESE EL ARTÍCULO 328A "**DESTRUCCIÓN DE CORAL.**" al que se refiere el **Artículo 1°** del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. El cual quedara así:

~~**ARTÍCULO 328A.** Destrucción de coral. El que destruya, inutilice, altere, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe arrecife coralino, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de quinientos (500) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.~~

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

~~La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se deseque, destruya, inutilice o haga desaparecer los cuerpos hídricos o sus recursos hidrobiológicos.~~

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

H.R JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Bogotá, D. C., 08 de junio de 2020

Doctor:
JUAN CARLOS LOSADA VARGAS
Presidente Comisión Primera Cámara De Representantes
Ciudad

Asunto: **Proposición de modificación**

Respetado Señor Presidente,

Con fundamento en lo contemplado en la ley 5ta de 1992 y normas concordantes, se presenta proposición ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, de modificación del artículo 1° del Proyecto de ley No. 283 DE 2019 CÁMARA *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000".*

El cual quedará de la siguiente forma:

ARTÍCULO 1o. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:

[...]

ARTÍCULO 328B. Comercio ilícito de coral. El que con incumplimiento de las normas vigentes trafique, comercie o adquiera coral, productos o partes de este, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de trescientos (300) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Adiciónese el aparte en negrilla.

Atentamente,

JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
Representante a la Cámara, Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Partido Cambio Radical.

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

ELIMÍNESE EL ARTÍCULO 329 "**APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LOS RECURSOS DE LA TIERRA, DEL SUELO Y DEL SUBSUELO**" al que se refiere el **Artículo 1°** del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. El cual quedara así:

~~***ARTÍCULO 329. Aprovechamiento ilícito de los recursos de la tierra, del suelo y del subsuelo.*** *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, trafique, comercie, explore, aproveche o se beneficie de los recursos naturales de la tierra, del suelo o del subsuelo o provoque o realice directa o indirectamente extracciones, excavaciones, aterramientos o vibraciones en el suelo o el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*~~

~~*Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de veintiséis mil (26.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.*~~

~~*La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.*~~

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

EDWARD RODRIGUEZ

PROPOSICIÓN

Modifíquese el **Artículo 1° del del PL 283 de 2019 Cámara** "Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000", **eliminando los artículos 329, 329A, 329B y 329C**, así:

~~**ARTÍCULO 329. Aprovechamiento ilícito de los recursos de la tierra, del suelo y del subsuelo.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, trafique, comercie, explore, aproveche o se beneficie de los recursos naturales de la tierra, del suelo o del subsuelo o provoque o realice directa o indirectamente extracciones, excavaciones, aterramientos o vibraciones en el suelo o el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.~~

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de veintiséis mil (26.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

~~La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.~~

~~**ARTÍCULO 329A. Depósito o inyección de sustancias en el suelo.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes realice inyección o depósito de sustancias que generen daños en el ambiente, en el suelo o en el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente:~~

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

~~La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.~~

~~**ARTÍCULO 329B. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes excave, explote, explore o extraiga yacimiento minero, arena, material pétreo o de arrastre de los~~

EDWARD RODRIGUEZ

cauces y orillas de los ríos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se realice a través de minería a cielo abierto, o con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.

ARTÍCULO 329C. Fracking. El que realice actividades de explotación y aprovechamiento del suelo o del subsuelo a través del método de fractura hidráulica, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de treinta y cinco mil (35.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales o altere o destruya acuíferos.

Justificación

AFECTACIÓN AL SECTOR MINERO

Los artículos que se propone eliminar, de dejarse en el proyecto perjudicarían a los mineros de subsistencia, pues en su labor genera pequeños impactos que los conduciría a la cárcel y no se les daría la oportunidad de repararlos. Todos podríamos ir a la cárcel por generar un impacto ambiental por pequeño que sea. Es importante remitir a lo penal a quien genere un daño ambiental y no un impacto. La diferencia es que en el "daño" las condiciones no vuelven a ser las mismas de forma natural para restablecer.

Al negar la posibilidad a los pequeños mineros y mineros de subsistencia de desarrollar su actividad, por causar impactos ambientales, se estarían perdiendo alrededor de 300.000 empleos y en cambio, todas estas personas irían a la cárcel.

Hay más de 15.000 pequeños mineros que esperan entrar a la legalidad, y aquí hay una diferencia práctica enorme. No es lo mismo la minería ilegal, a la minería criminal, tipificar estas actividades no conduciría a una cesación de las actividades mineras en tránsito a la legalidad, sino que las volvería más riesgosas para los mineros que subsisten de este tipo de minería. Aquí es importante aclarar que como cualquier actividad productiva genera impactos en el ambiente y sería conducir a estos mineros a la cárcel como única medida. Algunos de los perjudicados serían:

- 124 áreas de Reserva Especial (ARE) delimitadas y declaradas, en 97 municipios de 21 departamentos.
- 170 Subcontratos de formalización Minera en 40 municipios de 10 departamentos o más de 1.300 solicitudes de legalización de minería tradicional en 496 municipios de 29 departamentos.
- Más de 50 contratos de operación, en 5 departamentos.

Otro inconveniente en el articulado es la falta de claridad en la descripción técnica de los artículos lo que genera conflicto e inseguridad jurídica en su aplicación. La ejecución de cualquier actividad genera un impacto ambiental, sin embargo, las actividades productivas licenciadas contemplan un plan de manejo o licencia ambiental para la remediación de los mismos.

Para el delito de explotación ilícita de minerales, busca tipificar el delito, a quien desarrolle la explotación sin el permiso de la autoridad competente, sin la necesidad de demostrar grave daño, pero contempla como agravante que se genere impacto ambiental, además:

- No tipifica la cadena de suministros, uso de mercurio, el beneficio, transporte ni la comercialización.
- No involucra los delitos ambientales como delitos fuentes de lavado de activos. o No tiene agravantes en explotación ilícita como financiamiento de terrorismo. o No contempla medidas restaurativas

Al referirse a alteración del paisaje, sin permiso, es necesario precisar que en el desarrollo de algunos proyectos mineros se altera el paisaje, y no existe un permiso específico para tal, pero sí es una consecuencia mitigable dentro del licenciamiento.

El proyecto elimina el artículo de violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de los recursos naturales. Es importante conservarlo, pues existen muchos extranjeros que se benefician de las riquezas del Estado sin contribuir al desarrollo y cumplimiento de las acciones sostenibles del país.

AFECTACIÓN SECTOR HIDROCARBUROS

El sector de hidrocarburos es uno de los motores de crecimiento de la economía colombiana, al atraer inversión extranjera directa, genera regalías, impuestos y contraprestaciones económicas a favor de la Nación, recursos que son necesarios para la reducción de la pobreza y el desarrollo territorial.

La importancia del sector de hidrocarburos se refleja en las principales variables macroeconómicas. Para 2019, el PIB del sector ascendió a $43 billones de pesos el cual equivale alrededor del 5% del total, en materia ingresos tributarios al Gobierno Nacional Central el aporte fue de 16 billones de pesos, en cuanto a regalías fue de $ 6,5 billones; exportaciones por 16 billones de dólares FOB, equivalentes al 40 % del total de exportaciones del país, y representó el 20% de la IED.

A pesar de la importancia que representa este sector para el país, actualmente se cuentan con unas reservas limitadas, tanto en materia de crudo como de gas. En los últimos años se ha observado una recuperación en las reservas de crudo las cuales para 2019 se ubicaron en 2.036 Millones de barriles (gráfico 1), lo cual nos brinda una autosuficiencia de 6,3 años. En materia de gas la tendencia ha sido opuesta, ya que en los últimos 3 años las reservas han bajado 0,8 TPC, lo cual equivale a una reducción de alrededor de 4 años de autosuficiencia.

Grafico 1. Reservas hidrocarburos



Fuente: ANH

Fuente: ANH

El Gobierno Nacional ha definido unas estrategias que permitan garantizar la autosuficiencia hidrocarburífera del país en el mediano y largo plazo. Entre ellas está el desarrollo de los hidrocarburos en yacimientos no convencionales el cual tiene un alto potencial de hidrocarburos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos ha definido que, de las 23 cuencas sedimentarias del país, 5 de ellas tienen un alto potencial para YNC las cuales son el i) Valle Medio del Magdalena, ii) Cesar-Ranchería, iii) Cordillera Oriental, iv) Catatumbo y v) Valle Superior del Magdalena.

Los resultados del estimado yet to find para el crudo en la cuenca del Valle Medio del Magdalena es de 4.573 Millones de barriles, siendo esta más importante en Colombia (Grafico 2). La sigue la cuenca Cesar – Ranchería con 2.450 Millones de barriles, la Cuenca Catatumbo con 595 Millones de barriles, la Cuenca Valle Superior del Magdalena con 448 Millones de barriles y por último la cuenca Cordillera Oriental con 168 Millones de barriles.

Gráfico 2. Recursos Prospectivos de Crudo de YNC en Colombia



Fuente: ANH

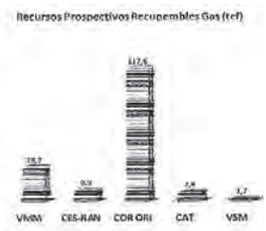
Fuente: ANH

En cuanto al gas, los resultados del estimado yet to find son aún más importante. Se estima que en la Cuenca Cordillera Oriental cuenta con recursos prospectivos recuperables de 117 tcf es la más importante en Colombia (Gráfico 3), seguida de la Cuenca Valle Medio del Magdalena con 29,7 tcf , 9,9 tcf en la Cuenca Cesar – Ranchería, 7,8 tcf en la Cuenca Catatumbo y de 1,7 tcf en la cuenca Valle Superior del Magdalena.

Gráfico 3. Recursos Prospectivos de Gas para el play YRG en Colombia



Fuente: ANH



Fuente: ANH

Para definir si es posible desarrollar esto yacimientos, se ha propuesto el desarrollo de los Proyectos Pilotos de Investigación Integral-PPII, los cuales permitirán establecer si la regulación y la capacidad institucional que se ha venido desarrollando el país es lo suficientemente robusta para permitir la aplicación de esta técnica de una manera adecuada y sostenible con el medio ambiente. Si estos PPII son aprobados por el comité evaluador se pasará a una fase de exploración y producción comercial de los YNC en el cual se verán los beneficios de esta actividad. De aprobar el PL 328 no sería posible que el país se beneficiara de estos recursos. Análisis al respecto señalan que:

- **Potencial de los YNC:** recursos estimados entre 10 y 20 Terapiés cúbicos de gas, y entre 5 y 10 mil millones de barriles de crudo que podrían más que triplicar las reservas actuales
- **Producción adicional**: estimamos alcanzar una producción con estos cuatro proyectos de **cerca de 450 mil barriles diarios adicionales.**
- **Inversión requerida:** Si la exploración demuestra que los proyectos son viables y **pasan a la etapa de desarrollo, la inversión podría alcanzar los 5 mil millones de dólares anuales**
- **Ingresos para la Nación y las regiones**: El aporte estimado de los YNC en los próximos 25 años totalizaría 36 mil millones de dólares (10 mil millones USD en regalías, 18 mil millones USD en impuestos, 6 mil millones USD en dividendos y 2 mil millones USD en derechos económicos)
- Los encadenamientos productivos generarían **ingresos fiscales adicionales para las regiones por ICA e impuestos a los combustibles de al menos 34 millones de dólares por año**
- **Generación de empleos:** Los YNC en su etapa de producción dejarían para el país 19.000 nuevos empleos directos estables, que sumados a los indirectos e inducidos totalizarían 68.000 nuevos empleos durante 25 años

Es importante resaltar que tomar la decisión de prohibir la exploración y producción comercial de los YNC, sería el de poner en riesgo la autosuficiencia energética en materia de gas natural y crudo.

- En materia de gas natural se estima que para 2022 habría un déficit de oferta local frente a la demanda de 46 MPCD, la cual para 2040 llegaría a 1.235 MPCD, es decir el 94% de la demanda esperada. Realizar estas importaciones para garantizar la disponibilidad del gas, **tendría un costo estimado de 2.994 millones de dólares.**
- Por su parte la Refinería de Barrancabermeja importa (5%) de su dieta y se prevé que estos volúmenes crecerán al 30% en 10 años y 90% en 20 años si no hay una incorporación de nuevos recursos. Por su parte Reficar importa el 15% de su dieta y en 10 años se proyecta que podría alcanzar al 40%. Para atender la dieta de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja en el año 2040, sería necesaria la importación de alrededor de 377 kbpd, **lo cual le representaría al país un costo de 3.013 millones de dólares.**
- Finalmente en materia de productos refinados (diésel, gasolina y jet), se importan alrededor de 40 kbpd , los cuales equivalen al 16% de la demanda nacional. Se estima que este valor se triplique, alcanzando los 130 mil bpd en 20 años, **esto tendría un costo cercano a los 8.794 millones de dólares.**

El total directo del costo asociado ascendería a 14.801 millones de dólares o alrededor de 59 billones de pesos debido a la necesidad de importar gas natural, petróleo y combustibles líquidos para abastecer la demanda nacional en los próximos 20 años. Adicionalmente a este costo se debería sumar el costo indirecto de recursos que no se recibirían, lo cual ascendería alrededor de 50 billones de dólares o cerca de 200 billones de pesos en los próximos 20 años.

Estos artículos tienen un contenido técnico que debe evaluarse de forma técnica y no debe el país cerrarse a conclusiones, menos de tipo penal sin tener en cuenta las consecuencias que esto podría tener para la subsistencia y desarrollo de la nación. Lo anterior no implica en ninguna circunstancia permitir el deterioro ambiental a cambio de estabilidad financiera, pero ver el problema solo bajo esas ópticas radicales implicaría negar la tecnificación y avance de los sectores mineros y de hidrocarburos. Y que se debe propender por tener conversaciones con todos los sectores involucrados, no alejarlos más penalizando actividades.

Sin otro particular,

EDWARD DAVID RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR BOGOTÁ D.C.

PROPOSICIÓN

Elimínense los artículos 329, 329A, 329B y 329C; incluidos en el Artículo 1° del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara ***"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000".***

JORGE ELIÉCER TAMAYO MARULANDA
Representante a la Cámara

ELBERT DÍAZ LOZANO
Representante a la Cámara

Junio 8/2020

ADRIANA MAGALI MATIZ
REPRESENTANTE A LA CÁMARA

PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN

PROYECTO DE LEY No. 283 DE 2019 CÁMARA

"Por medio del cual se sustituye el título xi, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000"

Modifíquese el artículo 329 del Proyecto de ley N. 283 de 2020 Cámara.

ARTÍCULO 329. *Destrucción de coral.* El que destruya, inutilice, altere, **sustraiga total o parcialmente,** haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe arrecife coralino, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de quinientos (500) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se desvíe, destruya, inutilice o haga desaparecer los cuerpos hídricos o sus recursos hidrobiológicos.

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
Representante a la Cámara por el Tolima

ADRIANA MAGALI MATIZ
REPRESENTANTE A LA CÁMARA

JUSTIFICACIÓN

Se propone incluir el verbo rector sustraer con las modalidades de total o parcialmente, debido a que es una practica común en contra de los corales la cual puede generar como consecuencia la destrucción del hábitat de los corales y la reducción de la biodiversidad.

H.R JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Bogotá, D. C., 08 de junio de 2020

Doctor:
JUAN CARLOS LOSADA VARGAS
Presidente Comisión Primera Cámara De Representantes
Ciudad

Asunto: **Proposición de modificación**

Respetado Señor Presidente,

Con fundamento en lo contemplado en la ley 5ta de 1992 y normas concordantes, se presenta proposición ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, de modificación del artículo 1º del proyecto de ley número 283 DE 2019 CÁMARA *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000".*

El cual quedará de la siguiente forma:

ARTÍCULO 1o. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:

[...]

ARTÍCULO 329. Aprovechamiento ilícito de los recursos de la tierra, del suelo y del subsuelo. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, trafique, comercie, explore, aproveche o se beneficie de los recursos naturales de la tierra, del suelo o del subsuelo o provoque o realice directa o indirectamente extracciones, excavaciones, aterramientos o vibraciones en el suelo o el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de veintiséis mil (26.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

~~La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.~~

Elimínese el aparte tachado.

Atentamente,

JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
Representante a la Cámara, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Partido Cambio Radical.

PROPOSICIÒN

ELIMINISE el artículo 329, al **proyecto de ley número 283 DE 2019 CÁMARA** *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000, el cual quedará así:*

ARTÍCULO 329. *~~Aprovechamiento ilícito de los recursos de la tierra, del suelo y del subsuelo.~~* ~~El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, trafique, comercie, explore, aproveche o se beneficie de los recursos naturales de la tierra, del suelo o del subsuelo o provoque o realice directa o indirectamente extracciones, excavaciones, aterramientos o vibraciones en el suelo o el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.~~

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de veintiséis mil (26.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

~~La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.~~

ÁLVARO HERNÁN PRADA ARTUNDUAGA
Representante a la Cámara por el Huila

PROPOSICIÓN MODIFICATIVA

Modifíquese el artículo 329 del artículo 1° del Proyecto de Ley No 283 de 2019 Cámara, "Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000", el cual quedara así:

ARTÍCULO 329. Aprovechamiento ilícito de los recursos de la tierra, del suelo y del subsuelo. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, trafique, comercie, explore, aproveche o se beneficie de los recursos naturales de la tierra, del suelo o del subsuelo o provoque o realice directa o indirectamente extracciones, excavaciones, alerramientos o vibraciones en el suelo o el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia ~~un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA~~ **daño al medio ambiente**, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de veintiséis mil (26.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer en suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.

BUENAVENTURA LEÓN LEÓN
Representante a la Cámara

Cra 7ª. N° 8 – 68 Piso 5° oficina 530 Edificio Nuevo Congreso

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

ELIMÍNESE EL ARTÍCULO 329A ***"DEPÓSITO O INYECCIÓN DE SUSTANCIAS EN EL SUELO"*** al que se refiere el **Artículo** 1° del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. El cual quedara así:

~~***ARTÍCULO 329A. Depósito o inyección de sustancias en el suelo.*** *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes realice inyección o depósito de sustancias que generen daños en el ambiente, en el suelo o en el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente:*~~

~~*Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.*~~

~~*La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.*~~

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

H.R JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Bogotá, D. C., 04 de junio de 2020

Doctor:
JUAN CARLOS LOSADA VARGAS
Presidente Comisión Primera Cámara De Representantes
Ciudad

Asunto: **Proposición de modificación**

Respetado Señor Presidente,

Con fundamento en lo contemplado en la ley 5ta de 1992 y normas concordantes, se presenta proposición ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, de modificación del artículo 1° del Proyecto de ley No. 283 DE 2019 CÁMARA *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000".*

El cual quedará de la siguiente forma:

ARTÍCULO 1o. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:

[...]

~~**ARTÍCULO 329A. Depósito o inyección de sustancias en el suelo. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes realice inyección o depósito de sustancias que generen daños en el ambiente, en el suelo o en el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente:**~~

~~**Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.**~~

~~**La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.**~~

Elimínese el aparte en tachado.

Atentamente,

JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
Representante a la Cámara, Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

PROPOSICIÒN

ELIMINISE el artículo 329 A, al **proyecto de ley número 283 DE 2019 CÁMARA** *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000, el cual quedará así:*

~~**ARTÍCULO 329A. *Depósito o inyección de sustancias en el suelo.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes realice inyección o depósito de sustancias que generen daños en el ambiente, en el suelo o en el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente:~~

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

~~La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.~~

Atentamente,

ÁLVARO HERNÁN PRADA ARTUNDUAGA
Representante a la Cámara por el Huila

PROPOSICIÓN
Proyecto de Ley No. 283 de 2019 cámara

Modifíquese el Artículo 329A del *Proyecto de Ley No. 283 de 2020 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000".*

"**ARTÍCULO 329A. *Depósito o inyección de sustancias en el suelo.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes realice inyección o depósito de sustancias que generen daños en el ambiente, en el suelo o en el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente:

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos".

Justificación:

La tipificación como la establece el artículo de la referencia, en las siguientes expresiones a saber: ¡El que! y ¡Depósito o inyección de sustancias en el suelo! Puede generar serios inconvenientes especialmente para el sector agropecuario, toda vez que, sin una excepción o claridad al respecto, se puede confundir el uso de fertilizantes y/o abonos como "*depósito o inyección de sustancias en el suelo*". Esto, considerando que en Colombia el empleo de fertilizantes y abonos químicos es más común que una cultura de utilización de fertilizantes y abonos biológicos, que no es de recibo por parte de la mayoría de los campesinos, ya sea por la falta de conocimiento e incentivo del competente (Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente), o por la garantía de producción que ofrecen los elementos químicos. Además, existe la posibilidad de toxicidad en las sustancias usadas en las plantaciones agrícolas mas comunes, no por libre arbitrio del campesino, si no debido a que las grandes industrias así los producen y comercializan, sin la regulación correspondiente.

En ese contexto y en los términos de la norma, se estaría en la facultad de judicializar al campesino que, de buena fe utilice sustancias para sus cultivos que puede resultar ser dañinas para el suelo, y que ciertamente no conoce. En tal virtud, sugiero considerar que esta situación interpretativa se puede presentar y que es necesario modificar, aclarar o incluso eliminar el artículo.

Por otra parte, si bien el capítulo capítulo I, de los delitos contra los recursos del agua y del suelo, es claro respecto de los recursos a proteger, es necesario precisar a quien hace referencia la expresión ¡El qué! del artículo 329A del Proyecto de Ley, a un campesino con escasamente una o dos hectáreas de tierra productiva o a un latifundista con grandes extensiones agrícolas u otro.

JORGE ENRIQUE BURGOS LUGO
Representante a la Cámara – Departamento de Córdoba

PROPOSICIÓN MODIFICATIVA

Modifíquese el artículo 329A del artículo 1° del Proyecto de Ley No 283 de 2019 Cámara, "Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000", el cual quedara así:

ARTÍCULO 329A. Depósito o inyección de sustancias en el suelo. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes realice inyección o depósito de sustancias que generen daños en el ambiente, en el suelo o en el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente:

Si la conducta tuviere como consecuencia ~~un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA~~ **daño al medio ambiente**, la pena será de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.

BUENAVENTURA LEÓN LEÓN
Representante a la Cámara

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

ELIMÍNESE EL ARTÍCULO 329B "***EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE YACIMIENTO MINERO Y OTROS MATERIALES***" el que se refiere el **Artículo 1°** del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000, El cual quedara así:

~~***ARTÍCULO 329B. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.*** *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes excave, explote, explore o extraiga yacimiento minero, arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.~~

~~*Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.*~~

~~*La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se realice a través de minería a cielo abierto, o con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.*~~

Cordialmente,

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

PROPOSICIÓN MODIFICATIVA

Modifíquese el artículo 329B del artículo 1º del Proyecto de Ley No 283 de 2019 Cámara, "Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000", el cual quedara así:

ARTÍCULO 329B. *Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.* El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes excave, explote, explore o extraiga yacimiento minero, arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos, **causando daño a los recursos naturales y al medio ambiente**, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia ~~un impacto ambiental (IA)~~ **daño al medio ambiente** igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se realice a través de minería a cielo abierto, o con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.

BUENAVENTURA LEÓN LEÓN
Representante a la Cámara

Junio 8/2020 Acepta SI

[redacted]

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

ELIMÍNESE EL ARTÍCULO 329C **"FRACKING"** al que se refiere el **Artículo 1º** del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. El cual quedara así:

~~***ARTÍCULO 329C. - Fracking.*** *El que realice actividades de explotación y aprovechamiento del suelo o del subsuelo a través del método de fractura hidráulica, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*~~
~~*Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de treinta y cinco mil (35.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.*~~

~~*La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales o altere o destruya acuíferos.*~~

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

Junio 8/2020 Acepta SI

[redacted]

PROPOSICIÓN

Eliminese el artículo 329C -Fracking- del Proyecto de Ley No. 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" De la Ley 599 del 2000. El cual quedara así:

TEXTO ORIGINAL	TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 329C. ***Fracking.*** El que realice actividades de explotación y aprovechamiento del suelo o del subsuelo a través del método de fractura hidráulica, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de treinta y cinco mil (35.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales o altere o destruya acuíferos.	~~**ARTÍCULO 329C.** ***Fracking.*** El que realice actividades de explotación y aprovechamiento del suelo o del subsuelo a través del método de fractura hidráulica, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.~~ ~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de treinta y cinco mil (35.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~ ~~La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales o altere o destruya acuíferos.~~

Junio 8/2020 Acepta SI

[redacted]

JUAN CARLOS WILLS OSPINA

REPRESENTANTE A LA CAMARA POR BOGOTÀ.

EXPOSICIÓN

Este articulo compromete fuentes de inversiones, afectando directamente las rentas nacionales, por lo que de conformidad con el artículo 154 de la Constitución Política y en concordancia con los numerales 3 y 11 del artículo 150 Constitucional, estas iniciativas legislativas están reservadas al Ejecutivo.

Junio 8/2020 Acepta SI

GABRIEL SANTOS GARCÍA
Representante a la Cámara por Bogotá

PROPOSICIÓN ELIMINATIVA

Elimínese el artículo 329C del artículo 1 del Proyecto de Ley No. 283 de 2019 Cámara ***"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000"*** el cual quedará así:

~~**ARTÍCULO 329C. Fracking.** El que realice actividades de explotación y aprovechamiento del suelo o del subsuelo a través del método de fractura hidráulica, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.~~

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de treinta y cinco mil (35.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

~~La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales o altere o destruya acuíferos.~~

Atentamente,

GABRIEL SANTOS GARCÍA
Representante a la Cámara

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

ELIMÍNESE EL ARTÍCULO 330 "**APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LOS RECURSOS DE LA FAUNA.**" al que se refiere el **Artículo 1°** del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. El cual quedara así:

~~ARTÍCULO 330. Aprovechamiento ilícito de los recursos de la fauna. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, capture, extraiga, transporte, mantenga, comercie, aproveche, explote o se beneficie de la fauna, o realice actividades que impidan o dificulten su reproducción, crecimiento o migración incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.~~

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

~~La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en periodo de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, prohibidas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.~~

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

H.R JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Bogotá, D. C., 08 de junio de 2020

Doctor:
JUAN CARLOS LOSADA VARGAS
Presidente Comisión Primera Cámara De Representantes
Ciudad

Asunto: **Proposición de modificación**

Respetado Señor Presidente,

Con fundamento en lo contemplado en la ley 5ta de 1992 y normas concordantes, se presenta proposición ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, de modificación del artículo 1° del Proyecto de ley No. 283 DE 2019 CÁMARA *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000"*, en los siguientes términos:

Elimínese la expresión **"o su hábitat"** del último párrafo de los artículos 330, 330A, 330B, 330C, 330D, 331, 331A y 331B

Atentamente,

JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
Representante a la Cámara, Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Partido Cambio Radical.

H.R JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Bogotá, D. C., 04 de junio de 2020

Doctor:
JUAN CARLOS LOSADA VARGAS
Presidente Comisión Primera Cámara De Representantes
Ciudad

Asunto: **Proposición de modificación**

Respetado Señor Presidente,

Con fundamento en lo contemplado en la ley 5ta de 1992 y normas concordantes, se presenta proposición ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, de modificación del artículo 1° del Proyecto de ley No. 283 DE 2019 CÁMARA *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000"*.

El cual quedará de la siguiente forma:

ARTÍCULO 1o. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:

[...]

ARTÍCULO 330. Aprovechamiento ilícito de los recursos de la fauna. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, capture, extraiga, transporte, mantenga, comercie, aproveche, explote o se beneficie de la fauna, o realice actividades que impidan o dificulten su reproducción, crecimiento o migración incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

[...]

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa **en zona protegida o prohibida, área de reserva, o zonas o áreas de veda,** en periodo de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, prohibidas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

Adiciónese el aparte en negrilla y subrayado.

Atentamente,

JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
Representante a la Cámara, Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

ELIMÍNESE EL ARTÍCULO 330A **"TRÁFICO DE FAUNA."** al que se refiere el **Artículo 1°** del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. El cual quedara así:

~~ARTÍCULO 330A. Tráfico de fauna. El que trafique o que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes adquiera especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas o invasoras incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de trescientos (300) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.~~

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

~~La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.~~

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

Hecho SI/ Junio 8/2020

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

PROPOSICIÓN

MODIFIQUESE el **artículo 330 A** , contenido en el **artículo 1 del PROYECTO DE LEY NÚMERO 283 DE 2019 CÁMARA** *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000"*., el cual quedará así:

ARTÍCULO 330A. ***Tráfico de fauna.*** El que trafique ~~o que sin permiso de autoridad competente o~~ **en** incumplimiento de las normas vigentes **y** adquiera especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas o invasoras incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de trescientos (300) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ALFREDO DELUQUE ZULETA
REPRESENTANTE A LA CÁMARA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Hecho SI/ Junio 8/2020

Proposición modificatoria

Modifíquese el artículo 330B del ***Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente "de la Ley 599 del 2000"****, el cual quedara de la siguiente manara:*

ARTÍCULO 330B. Caza ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, cazare en época de veda o excediere el número de piezas permitidas, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~En la misma pena incurrirá quien realice caza deportiva.~~

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ochenta y cuatro (84) a ciento ochenta (180) meses y multa de diecisiete mil (17.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

Erika Arias Betancur
Representante Departamento de Caldas.

Hecho SI/ Junio 8/2020

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

MODIFÍQUESE EL ARTÍCULO 330B **"CAZA ILEGAL".** al que se refiere el **Artículo 1°** del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. El cual quedara así:

ARTÍCULO 330B. ***Caza ilegal.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, cazare en época de veda o excediere el número de piezas permitidas, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá quien realice caza deportiva.

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ochenta y cuatro (84) a ciento ochenta (180) meses y multa de diecisiete mil (17.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

Junio 8/2020 Hecho SI

H.R JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Bogotá, D. C., 04 de junio de 2020

Doctor:
JUAN CARLOS LOSADA VARGAS
Presidente Comisión Primera Cámara De Representantes
Ciudad

Asunto: **Proposición de modificación**

Respetado Señor Presidente,

Con fundamento en lo contemplado en la ley 5ta de 1992 y normas concordantes, se presenta proposición ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, de modificación del artículo 1° del Proyecto de ley No. 283 DE 2019 CÁMARA *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000"*.

El cual quedará de la siguiente forma:

ARTÍCULO 1o. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:

[...]

ARTÍCULO 330B. Caza ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, cazare en época de veda o excediere el número de piezas permitidas, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

[...]

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en **zona protegida o prohibida, área de reserva o zonas o áreas de veda,** período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

Adiciónese el aparte en negrilla y subrayado.

Atentamente,

JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
Representante a la Cámara, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Partido Cambio Radical.

Junio 8 2020 Acta SI

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

MODIFÍQUESE EL ARTÍCULO 330C **"PESCA ILEGAL"**, al que se refiere el **Artículo 1°** del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. El cual quedara así:

ARTÍCULO 330C. *Pesca ilegal.* El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese, envase o almacene ejemplares o productos de especies protegidas, vedadas, en zonas prohibidas o en peligro de extinción, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que exceda el número de individuos o de piezas autorizadas, comercialice por debajo de las tallas permitidas, o utilice instrumentos, aparejos y artes de pesca no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente para cualquier especie.

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de cuarenta y cuatro mil (44.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en zona protegida o prohibida, área de reserva o zonas o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva, se construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ríos, ciénagas, lagunas, caños y canales o con la conducta se desequen, varíen o bajen su nivel, o se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

Junio 8 2020 Acta SI

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

ELIMÍNESE EL ARTÍCULO 330D **"ALETEO."** al que se refiere el **Artículo 1°** del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. El cual quedara así:

~~ARTÍCULO 330D. Aleteo. El que ocasione aletas de tiburón, las retenga y descarte el resto del cuerpo al mar, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.~~

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

~~La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en zonas protegidas o prohibidas, áreas de reserva o zonas o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de aparejos y artes de pesca prohibidos o no autorizados, venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva, se construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ríos, ciénagas, lagunas, caños y canales o con la conducta se desequen, varíen o bajen su nivel, o se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.~~

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Junio 8 2020 Acta SI

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

ELIMÍNESE EL ARTÍCULO 331 **"APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LOS RECURSOS DE LA FLORA."** al que se refiere el **Artículo 1°** del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. El cual quedara así:

~~ARTÍCULO 331. Aprovechamiento ilícito de los recursos de la flora. El que sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, adquiera, recolecte, extraiga, corte, tale, arranque, pesca, destruya, transporte, trafique, comercie, aproveche o se beneficie de las especies de la flora silvestre o acuática, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.~~

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

~~La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva climática, zonas o áreas de reserva, en período de producción de semillas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.~~

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

Junio 8 2020 Acta SI

[redacted]

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

ELIMÍNESE EL ARTÍCULO 331B **"PROMOCIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA DEFORESTACIÓN."** al que se refiere el **Artículo 1°** del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. El cual quedara así:

~~**ARTÍCULO 331A. Deforestación.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, tale, queme, corte o destruya, en todo o en parte bosques naturales, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.~~

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de treinta y siete mil (37.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

~~La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se someta en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, reserva climática, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se altere las aguas, se ocasione erosión del suelo, se modifique el régimen climático, se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.~~

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

[redacted]

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

JUSTIFICACIÓN

- En la ley (Código Penal), este tipo de delito está inmerso dentro del artículo 328 referente a ILICITO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, pues cada uno de los recursos forestales son un recurso natural renovable.
- Con base en ese artículo todos podríamos ir a la cárcel por generar un impacto ambiental por pequeño que sea. Es importante remitir a lo penal a quien genere un daño ambiental y no un impacto. La diferencia es que en el "daño" las condiciones no vuelven a ser las mismas de forma natural para restablecer.
- Este artículo busca sustituir el título de los delitos ambientales del Código Penal, y vincula todas las conductas a impactos ambientales como agravantes para cada una, penalizando absolutamente todo.
- Es necesario contar con el concepto previo emitido por el Consejo Superior de Política Criminal sobre este proyecto de ley, por incidir en la política criminal del país, tal como lo señala la Ley 65 de 1993.
- Existen contradicciones en la descripción técnica del artículo lo que genera conflicto e inseguridad jurídica en su aplicación.
- Toda ejecución de cualquier actividad genera un impacto ambiental, sin embargo, las actividades productivas licenciadas contemplan un plan de manejo o licencia ambiental para la remediación de los mismos. El solo impacto no puede generar acción penal.

[redacted]

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

ELIMÍNESE EL ARTÍCULO 331B **"PROMOCIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA DEFORESTACIÓN."** al que se refiere el **Artículo 1°** del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. El cual quedara así:

~~ARTÍCULO 331B. Promoción y financiación de la Deforestación. El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte o destrucción, en todo o en parte de bosques naturales, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.~~

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

~~La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, reserva climática, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se altere las aguas, se ocasione erosión del suelo, se modifique el régimen climático, se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.~~

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

COMISIÓN PRIMERA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
PROPOSICIÓN
PL 283 DE 2019- CÁMARA
JUNIO 8 DE 2020

Señor Presidente, le solicito que someta a consideración de la Comisión Primera la siguiente proposición para adicionar el artículo 1 del PL 283 de 2019-Cámara e incluir lo siguiente:

Artículo 331C. Apropiación ilegal de los baldíos de la nación. El que promueva, financie, ordene, dirija, o suministre medios para la apropiación de baldíos de la nación sin cumplimiento de los requisitos legales con el fin de realizar actividades agroindustriales incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los bienes muebles, inmuebles o semovientes encontrados en los baldíos ilegalmente apropiados.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en connivencia con grupos armados ilegales o cuando la actividad, además de los fines agroindustriales, constituya la conducta del artículo 323 de lavado de activos.

Juanita Goebertus Estrada
Representante a la Cámara

[redacted]

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

MODIFÍQUESE EL ARTÍCULO 332 **"MANEJO ILÍCITO DE ESPECIES EXÓTICAS"**, al que se refiere el **Artículo 1°** del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. El cual quedara así:

ARTÍCULO 332. ***Manejo ilícito de especies exóticas.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes introduzca, trasplante, manipule, experimente, mantenga, comercie, inocule, libere o propague especies silvestres exóticas o invasoras, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento a ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de trece mil (13.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

[redacted]

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

MODIFÍQUESE EL ARTÍCULO 332A **"MANEJO Y USO ILÍCITO DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS, MICROORGANISMOS Y SUSTANCIAS O ELEMENTOS PELIGROSOS."**, al que se refiere el Artículo 1° del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. El cual quedara así:

ARTÍCULO 332A. ***Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes importe, introduzca, comercialice, exporte, manipule, experimente, libere, inocule, o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos moléculas, sustancias o elementos que constituyan un riesgo o pongan en peligro la salud humana, el ambiente o la existencia de los recursos de la fauna, de la flora o biológicos de las aguas, o alteren perjudicialmente sus poblaciones incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de diecisiete mil (17.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

Si se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad.

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

[redacted]

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

ELIMÍNESE EL ARTÍCULO 333 **"APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE RECURSOS GENÉTICOS DE LA BIODIVERSIDAD"** al que se refiere el **Artículo 1°** del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. El cual quedara así:

~~***ARTÍCULO 333.*** *Aprovechamiento ilícito de recursos genéticos de la biodiversidad. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, exporte, mantenga, trafique, comercie, aproveche, explore, valorice, transforme o se beneficie a cualquier título de los recursos genéticos de la flora o la fauna, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.~~

~~*El que promueva, financie, dirija, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en este artículo, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*~~

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

[redacted]

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

ELIMÍNESE EL ARTÍCULO 334 **"DESTRUCCIÓN O ALTERACIÓN DE HÁBITAT"** al que se refiere el **Artículo 1°** del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. El cual quedara así:

~~**ARTÍCULO 334. Destrucción o alteración de hábitat.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes destruya o altere hábitat de especies de la flora o de la fauna, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente:~~

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

ELIMÍNESE EL ARTÍCULO 334A **"ALTERACIÓN DEL PAISAJE"** al que se refiere el **Artículo 1°** del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. El cual quedara así:

~~**ARTÍCULO 334A. Alteración del paisaje.** El que sin permiso de autoridad competente con incumplimiento de las normas vigentes, altere el recurso del paisaje urbano o rural, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.~~

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de trece mil (13.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

PROPOSICIÓN

ELIMINESE el articulo **334 A** contenido en el **artículo 1 del PROYECTO DE LEY NÚMERO 283 DE 2019 CÁMARA** *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000".*

~~**ARTÍCULO 334A. *Alteración del paisaje.*** El que sin permiso de autoridad competente con incumplimiento de las normas vigentes, altere el recurso del paisaje urbano o rural, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.~~

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de trece mil (13.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

ALFREDO DELUQUE ZULETA
REPRESENTANTE A LA CÁMARA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

PROPOSICIÒN

ELIMINISE el artículo 334 A, al **proyecto de ley número 283 DE 2019 CÁMARA** *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000, el cual quedará así:*

~~**ARTÍCULO 334A. *Alteración del paisaje.*** El que sin permiso de autoridad competente con incumplimiento de las normas vigentes, altere el recurso del paisaje urbano o rural, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.~~

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de trece mil (13.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

ÁLVARO HERNÁN PRADA ARTUNDUAGA
Representante a la Cámara por el Huila

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

MODIFÍQUESE EL ARTÍCULO 335 **"CONTAMINACIÓN AMBIENTAL."**. al que se refiere el **Artículo 1°** del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. El cual quedara así:

ARTÍCULO 335. *Contaminación ambiental.* El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes provoque, contamine o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, disposiciones o ruidos en el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, o demás recursos naturales incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cincuenta y cinco (55) a ciento doce (112) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el presente artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.
2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por las normas vigentes o haya infringido más de dos parámetros.
3. Cuando la contaminación, descarga, disposición o vertimiento se realice en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas.

4. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, emisiones o disposiciones.

5. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.

6. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de vigilancia y control de la autoridad ambiental.

7. El perjuicio o alteración ocasionados adquieran un carácter catastrófico o irreversible.

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

JUSTIFICACIÓN

- Con base en ese artículo todos podríamos ir a la cárcel por generar un impacto ambiental por pequeño que sea. Es importante remitir a lo penal a quien genere un daño ambiental y no un impacto. La diferencia es que en el "daño" las condiciones no vuelven a ser las mismas de forma natural para restablecer.

- Este artículo como todos los demás que están en el proyecto busca sustituir el título de delitos ambientales del Código Penal, y vincula todas las conductas a impactos ambientales como agravantes para cada una, penalizando absolutamente todo.

PROPOSICIÓN MODIFICATIVA

Modifíquese el artículo 335 del artículo 1º del Proyecto de Ley No 283 de 2019 Cámara, "Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000", el cual quedara así:

ARTÍCULO 335. *Contaminación ambiental.* El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes provoque, contamine o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, disposiciones o ruidos en el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, o demás recursos naturales incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cincuenta y cinco (55) a ciento doce (112) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia ~~un impacto ambiental (IA)~~ **daño al medio ambiente** igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el presente artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.

2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por las normas vigentes o haya infringido más de dos parámetros.

3. Cuando la contaminación, descarga, disposición o vertimiento se realice en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas.

4. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, emisiones o disposiciones.

Cra 7ª. N° 8 – 68 Piso 5° oficina 530 Edificio Nuevo Congreso
Teléfonos: 4325100 ext. 3639
E-mail: buenaventura.leon@hotmail.com

5. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.

6. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de vigilancia y control de la autoridad ambiental.

7. El perjuicio o alteración ocasionados adquieran un carácter catastrófico o irreversible.

BUENAVENTURA LEÓN LEÓN
Representante a la Cámara

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

MODIFÍQUESE EL ARTÍCULO 335A **"CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS."** al que se refiere el **Artículo 1°** del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000.
El cual quedara así:

ARTÍCULO 335A. ***Contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes contamine, almacene, transporte, vierta o disponga inadecuadamente, residuo sólido peligroso incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el presente artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.

2. Cuando la descarga o disposición se realice en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas.

3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente la descarga o disposición.

4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.

5. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de vigilancia y control de la autoridad ambiental.

6. El perjuicio o alteración ocasionados adquieran un carácter catastrófico o irreversible.

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

JUSTIFICACIÓN

- Con base en ese artículo todos podríamos ir a la cárcel por generar un impacto ambiental por pequeño que sea. Es importante remitir a lo penal a quien genere un daño ambiental y no un impacto. La diferencia es que en el "daño" las condiciones no vuelven a ser las mismas de forma natural para restablecer.
- Este artículo como todos los demás que están en el proyecto busca sustituir el título de delitos ambientales del Código Penal, y vincula todas las conductas a impactos ambientales como agravantes para cada una, penalizando absolutamente todo.
- Es necesario contar con el concepto previo emitido por el Consejo Superior de Política Criminal sobre este proyecto de ley, por incidir en la política criminal del país, tal como lo señala la Ley 65 de 1993.
- Existen contradicciones en la descripción técnica del artículo lo que genera conflicto e inseguridad jurídica en su aplicación.
- Toda ejecución de cualquier actividad genera un impacto ambiental, sin embargo, las actividades productivas licenciadas contemplan un plan de manejo o licencia ambiental para la remediación de los mismos. El solo impacto no puede generar acción penal.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

PROPOSICIÓN

ELIMINESE el artículo **335 A** contenido en el **artículo 1 del PROYECTO DE LEY NÚMERO 283 DE 2019 CÁMARA** *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000".*

~~**ARTÍCULO 335A.** ***Contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes contamine, almacene, transporte, vierta o deponga inadecuadamente, residuo sólido peligroso incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.~~

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

~~La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el presente artículo, sin perjuicio de los que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, concurra alguna de las siguientes circunstancias:~~

~~1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.~~
~~2. Cuando la descarga o disposición se realice en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas.~~
~~3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente la descarga o disposición.~~
~~4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.~~
~~5. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de vigilancia y control de la autoridad ambiental.~~
~~6. El perjuicio o alteración ocasionados adquieran un carácter catastrófico o irreversible.~~

Junio 8/2020

10000.

[redacted]

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

MODIFÍQUESE EL ARTÍCULO 335B **"CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTO MINERO O HIDROCARBURO.".** al que se refiere el **Artículo 1°** del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. El cual quedara así:

ARTÍCULO 335B. ***Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo.*** El que contamine directa o indirectamente la atmosfera, el suelo, el subsuelo o las aguas como consecuencia de la actividad de extracción, excavación, exploración, construcción, inyección, deposito, montaje, explotación, beneficio, transformación o transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

Si la conducta se realizare como consecuencia de la minería a cielo abierto la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad de la pena.

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

Junio 8/2020

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

[redacted]

PROPOSICIÓN MODIFICATIVA

Modifíquese el artículo 335B del artículo 1° del Proyecto de Ley No 283 de 2019 Cámara, "Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000", el cual quedara así:

ARTÍCULO 335B. *Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo.* El que contamine directa o indirectamente la atmosfera, el suelo, el subsuelo o las aguas como consecuencia de la actividad de extracción, excavación, exploración, construcción, inyección, deposito, montaje, explotación, beneficio, transformación o transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia ~~un impacto ambiental~~ **daño al medio ambiente** igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

Si la conducta se realizare como consecuencia de la minería a cielo abierto la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad de la pena.

BUENAVENTURA LEÓN LEÓN
Representante a la Cámara

Junio 8/2020

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

MODIFÍQUESE EL ARTÍCULO 335C **"EXPERIMENTACIÓN ILEGAL CON ESPECIES, AGENTES BIOLÓGICOS O BIOQUÍMICOS."** al que se refiere el **Artículo 1°** del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. El cual quedara así:

ARTÍCULO 335C. ***Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, realice experimentos, con especies, agentes biológicos o bioquímicos, que constituyan, generen o pongan en peligro o riesgo la salud humana, el ambiente o la existencia de los recursos de la fauna, la flora o biológicos de las aguas, o altere sus poblaciones, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de treinta y siete mil (37.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

Junio 8/2020

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

Modifíquese el artículo 1° Capítulo V del Proyecto de Ley No. 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente "de la Ley 599 del 2000", el cual quedará así:

Artículo 335D. Aprovechamiento ilícito de residuos. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, recoja, transporte, valorice, transforme, elimine o aproveche ~~residuos sólidos o~~ Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes

Sin otro particular;

INTI RAÚL ASPRILLA REYES
Representante a la Cámara por Bogotá.

Junio 8/2020

ADRIANA MAGALI MATIZ
REPRESENTANTE A LA CÁMARA

PROPOSICIÓN DE ELIMINACIÓN

PROYECTO DE LEY No. 283 DE 2019 CÁMARA

"Por medio del cual se sustituye el título xi, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000"

Eliminación del artículo 335E del Proyecto de ley N. 283 de 2020 Cámara.

~~**ARTÍCULO 335E. Aprovechamiento ilícito de residuos.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, recoja, transporte, valorice, transforme, elimine o aproveche residuos sólidos o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.~~

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
Representante a la Cámara por el Tolima

Junio 8/2020

ADRIANA MAGALI MATIZ
REPRESENTANTE A LA CÁMARA

JUSTIFICACIÓN

La creación de este tipo penal, pone en vilo la actividad de reciclaje como práctica común, puesto que la supedita a tramites para poder realizar esa labor. Hay que resaltar que a través del Decreto 596 de 2016, en el cual se establece el procedimiento de formalización de los recicladores, el proceso de formalización para las organizaciones de recicladores tiene una duración de cinco años contados a partir del momento en que se haga su registro ante la SuperServicios, en los cuales tiene que cumplir una serie de requisitos para superar las 8 fases que establece el Decreto.

No solo el proceso de formalización se vería gravemente afectado, sino también las personas que se dedican al reciclaje, que de por sí se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, puesto que no permitiría en algunos casos continuar con su proceso de formalización, sino que su conducta sin este requisito ya constituiría un delito.

Cesar Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

MODIFÍQUESE EL ARTÍCULO 336 **"INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA."** al que se refiere el **Artículo 1°** del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. El cual quedara así:

ARTÍCULO 336. ***Invasión de áreas de especial importancia ecológica.*** El que invada, permanezca, así sea de manera temporal, o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en áreas de reserva forestal, reserva climática, zonas de nacimientos hídricos, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, definidos en la ley o reglamento, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente.

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

Acta 51 Julio 6/20

¡AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA!

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

Modifíquese el artículo 1° del Proyecto de Ley No. 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente "de la Ley 599 del 2000", el cual quedará así:

Artículo 336. Invasión de áreas de especial importancia ecológica. El que invada, permanezca, ~~así sea de manera temporal~~, o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en áreas de reserva forestal, reserva climática, zonas de nacimientos hídricos, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, definidos en la ley o reglamento, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta tuviere como consecuencia un Impacto Ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente

Sin otro particular,

INTI RAÚL ASPRILLA REYES
Representante a la Cámara por Bogotá.

Acta 51

Cesar Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

MODIFÍQUESE EL ARTÍCULO 336A **"FINANCIACIÓN DE INVASIÓN A ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA."** al que se refiere el **Artículo 1°** del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. El cual quedara así:

ARTÍCULO 336A. ***Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica.*** El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente.

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

Acta 51/20 Julio 8

Cesar Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

MODIFÍQUESE EL ARTÍCULO 337 **"DESTINACIÓN ILEGAL DE TIERRAS ESTABLECIDAS."** al que se refiere el **Artículo 1°** del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. El cual quedara así:

ARTÍCULO 337. ***Destinación ilegal de tierras establecidas.*** El que utilice o destine con uso diferente para el cual fueron definidas las tierras establecidas, declaradas, tituladas o delimitadas por autoridad competente, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá quien use o destine tierras sobre las cuales se hubiese cometido deforestación para fines distintos a la resiembra o restauración.

Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se impondrá prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa de trescientos (300) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de once mil (11.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

Acta 51 Julio 8/20

H.R JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Bogotá, D. C., 08 de junio de 2020

Doctor:
JUAN CARLOS LOSADA VARGAS
Presidente Comisión Primera Cámara De Representantes
Ciudad

Asunto: **Proposición de modificación**

Respetado Señor Presidente,

Con fundamento en lo contemplado en la ley 5ta de 1992 y normas concordantes, se presenta proposición ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, de modificación del artículo 1° del proyecto de ley número 283 DE 2019 CÁMARA *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000".*

El cual quedará de la siguiente forma:

ARTÍCULO 1o. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:

[...]

~~**CAPÍTULO VII.**~~
~~**DE LA DESTINACIÓN ILEGAL DE TIERRAS**~~

~~**ARTÍCULO 337. *Destinación ilegal de tierras establecidos.*** El que utilice o destine con uso diferente para el cual fueron definidas las tierras establecidos, declaradas, tituladas o delimitadas por autoridad competente, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.~~
~~En la misma pena incurrirá quien use o destine tierras sobre las cuales se hubiese cometido deforestación para fines distintos a la resiembra o restauración.~~
~~Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se impondrá prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa de trescientos (300) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.~~

Actas!

H.R JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

~~Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de once mil (11.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.~~

Elimínese el aparte tachado.

Atentamente,

JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
Representante a la Cámara, Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Partido Cambio Radical.

Proposición eliminatoria

Eliminar 1 artículo 338 del ***Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente "de la Ley 599 del 2000"****, de la siguiente manera:*

~~**IMPACTO AMBIENTAL (IA)**~~

~~**ARTÍCULO 338. *Impacto Ambiental (IA).*** Cuando las conductas del presente título tengan como resultado un Impacto Ambiental (IA), el ámbito punitivo de movilidad de la pena de prisión y de multa se dividirá en tercios, así: uno mínimo, uno medio y uno máximo.~~

~~La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio mínimo cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) que no pase de cincuenta (50) IA.~~

~~La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio medio cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental superior a cincuenta (50) IA sin exceder de setenta y cinco (75) IA.~~

~~La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio máximo cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental que pasare de setenta y cinco (75) IA.~~

Erwin Arias Betancur
Representante Departamento de Caldas.

Actas! Junio 8/2020

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

ELIMÍNESE EL ARTÍCULO 338 "**IMPACTO AMBIENTAL (IA)**" al que se refiere el **Artículo 1°** del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. El cual quedara así:

~~**ARTÍCULO 338. Impacto Ambiental (IA).**~~ ~~Cuando las conductas del presente título tengan como resultado un Impacto Ambiental (IA), el ámbito punitivo de movilidad de la pena de prisión y de multa se dividirá en tercios, así: uno mínimo, uno medio y uno máximo.~~

~~La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio mínimo cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) que no pase de cincuenta (50) IA.~~

~~La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio medio cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental superior a cincuenta (50) IA sin exceder de setenta y cinco (75) IA.~~

~~La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio máximo cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental que pasare de setenta y cinco (75) IA.~~

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

Junio 8/2020 Actas!

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

JUSTIFICACIÓN

- Con base en ese artículo todos podríamos ir a la cárcel por generar un impacto ambiental por pequeño que sea. Es importante remitir a lo penal a quien genere un daño ambiental y no un impacto. La diferencia es que en el "daño" las condiciones no vuelven a ser las mismas de forma natural para restablecer.
- Este artículo busca sustituir el título de los delitos ambientales del Código Penal, y vincula todas las conductas a impactos ambientales como agravantes para cada una, penalizando absolutamente todo.
- Es necesario contar con el concepto previo emitido por el Consejo Superior de Política Criminal sobre este proyecto de ley, por incidir en la política criminal del país, tal como lo señala la Ley 65 de 1993.
- Existen contradicciones en la descripción técnica del artículo lo que genera conflicto e inseguridad jurídica en su aplicación.
- Toda ejecución de cualquier actividad genera un impacto ambiental, sin embargo, las actividades productivas licenciadas contemplan un plan de manejo o licencia ambiental para la remediación de los mismos. El solo impacto no puede generar acción penal.

EDWARD RODRIGUEZ
Representante a la Cámara

PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 338 del artículo 1 del **Proyecto de ley Por medio del cual se sustituye el Título XI, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente "de la Ley 599 del 2000"** el cual quedará así:

ARTÍCULO 338. ~~Impacto~~ **Daño** Ambiental (**IDA**). Cuando las conductas del presente título tengan como resultado un ~~Impacto~~ **Daño** Ambiental (**IDA**), el ámbito punitivo de movilidad de la pena de prisión y de multa se dividirá en tercios, así: uno mínimo, uno medio y uno máximo.

La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio mínimo cuando la afectación tuviere como consecuencia un **impacto Daño** ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) que no pase de cincuenta (50) IA.

La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio medio cuando la afectación tuviere como consecuencia un **impacto Daño** ambiental superior a cincuenta (50) **IDA** sin exceder de setenta y cinco (75) **IDA**.

La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio máximo cuando la afectación tuviere como consecuencia un **impacto Daño** ambiental que pasare de setenta y cinco (75) **IDA**.

Justificación:

Tener como causa de mayor punibilidad el impacto ambiental para las conductas que se pretenden tipificar es un error conceptual, ya que toda actividad humana tiene indefectiblemente un impacto en el medio ambiente, pero ello no siempre conlleva a que se genere un daño en el medio ambiente. Castigar el mero impacto ambiental no solo es una circunstancia difícil de medir, sino que se usa de manera errada la norma penal al hacer de esta no la última instancia, sino la única solución, visión incorrecta para tratar regular un tema como la protección al medio ambiente. Esta norma mezcla fundamentos del derecho ambiental en el derecho penal, la primera al ser una rama tan nueva sus fundamento político filosóficos son fundamentales para su desarrollo, y no es una vía ni elaborada ni correcta circunscribir su proceso de formación en Colombia a la tipificación penal, menos cuando se usan nociones tan amplias como "impacto ambiental" sin tener límites específicos de

Acta 51 Junio 8/2020

EDWARD RODRIGUEZ
Representante a la Cámara

aplicación o si quiera un concepto claro de lo que contiene la expresión "impacto ambiental", esto último es de especial relevancia, ya que va en contra de la claridad y suficiencia que exige el derecho penal en las descripciones típicas.

Sin otro particular,

EDWARD DAVID RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR BOGOTÁ D.C.

PROPOSICIÒN

ELIMINESE el artículo 338, al **proyecto de ley número 283 DE 2019 CÁMARA** *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000, de la siguiente manera:*

~~**ARTÍCULO 338. *Impacto Ambiental (IA).*** Cuando las conductas del presente título tengan como resultado un Impacto Ambiental (IA), el ámbito punitivo de movilidad de la pena de prisión y de multa se dividirá en tercios, así: uno mínimo, uno medio y uno máximo.~~

~~La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio mínimo cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) que no pase de cincuenta (50) IA.~~

~~La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio medio cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental superior a cincuenta (50) IA sin exceder de setenta y cinco (75) IA.~~

~~La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio máximo cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental que pasare de setenta y cinco (75) IA.~~

ÁLVARO HERNÁN PRADA ARTUNDUAGA
Representante a la Cámara por el Huila

Acta 51 Junio 8/2020

PROPOSICIÓN MODIFICATIVA

Modifíquese el artículo 338 del artículo 1º del Proyecto de Ley No 283 de 2019 Cámara, "Por medio del cual se sustituye el título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000", el cual quedara así:

ARTÍCULO 338. ~~*Impacto Ambiental (IA).*~~ **Daño al medio ambiente.** Cuando las conductas del presente título tengan como resultado ~~*un Impacto Ambiental (IA).*~~ **daño al medio ambiente**, el ámbito punitivo de movilidad de la pena de prisión y de multa se dividirá en tercios, así: uno mínimo, uno medio y uno máximo.

La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio mínimo cuando la afectación tuviere como consecuencia un ~~*Impacto Ambiental (IA)*~~ **daño al medio ambiente** igual o superior a veinticinco (25) que no pase de cincuenta (50) ~~*Impacto Ambiental (IA)*~~ **daño al medio ambiente**.

La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio medio cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental superior a cincuenta (50) IA sin exceder de setenta y cinco (75. ~~*Impacto Ambiental (IA)*~~ **daño al medio ambiente**.

La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio máximo cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental que pasare de setenta y cinco (75. ~~*Impacto Ambiental (IA)*~~ **daño al medio ambiente**.

BUENAVENTURA LEÓN LEÓN
Representante a la Cámara

Cra 7ª. N° 8 – 68 Piso 5° oficina 530 Edificio Nuevo Congreso
Teléfonos: 4325100 ext. 3639

Proposición modificatoria

Modifíquese el artículos 328, 328 A, 329, 329A, 329B, 329C, 330, 330A, 330B, 330C, 330D, 331, 331A, 331AB, 332, 334, 334A, 335, 335A, 335B, 335C, 335D, 336, 336A, 337 y 338 del ***Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente "de la Ley 599 del 2000"***, *por lo que se propone:*

Eliminar la siguiente circunstancia específica de agravación punitiva de los artículos 328, 328 A, 329, 329A, 329B, 329C, 330, 330A, 330B, 330C, 330D, 331, 331A, 331AB, 332, 334, 334A, 335, 335A, 335B, 335C, 335D, 336, 336A, 337 y 338 que establece generalmente: "~~*Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA. (...)*~~" y en su reemplazo adicionar un numeral 5º al artículo 338 al siguiente artículo:

ARTÍCULO 338A. *Circunstancias de agravación punitiva.* Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán a la mitad cuando:

1) Se afecten ecosistemas estratégicos que hagan parte de las áreas protegidas del Sistema Nacional, Regional o Local.
2) Cuando el daño ambiental sea consecuencia de la acción u omisión de quienes ejercen funciones de vigilancia y control.
3) Se pongan en peligro la salud humana, las especies de flora, fauna o su hábitat.

4) Cuando se genere pérdida de biodiversidad.

6) Cuando de los delitos previstos en este capítulo se ocasione un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA.

Erwin Arias Betancur
Representante Departamento de Caldas.

EDWARD RODRIGUEZ

PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 338B del artículo 1 del **Proyecto de ley Por medio del cual se sustituye el Título XI, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente "de la Ley 599 del 2000"** el cual quedará así:

ARTÍCULO 338B. Modalidad culposa. Si por culpa se ocasionare alguna de las conductas descritas en este título, en los casos en que ello sea posible según su configuración estructural, la pena correspondiente se reducirá a la mitad **siempre que la conducta hubiese producido algún grado de daño ambiental**

Justificación:

El Proyecto de ley en su articulado ha establecido que hay circunstancias por las cuales la conducta es más gravosa o es una circunstancia de mayor punibilidad. El impacto ambiental (IA) es uno de ellos quedando establecido como disposición común. Así las cosas, no puede aplicarse una lógica diferente en el caso de la modalidad culposa ya que esta deviene de una falta del deber objetico de cuidado, por lo que en principio no hay mayor reproche en la conducta y solo debería haberlo si esa falta de cuidado tuvo como consecuencia la producción de algún daño ambiental ya que de otra manera se estaría castigando una conducta sin verdadera antijuridicidad material. La razón por la que se debe preferir el daño ambiental sobre el impacto ambiental es que toda actividad humana impacta el medio ambiente, no hay forma de que no lo haga, por lo que se debe tener en cuenta el impacto en tanto daño, no en tanto mera acción humana.

De los honorables congresistas,

EDWARD DAVID RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR BOGOTÁ D.C.

H.R JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Bogotá, D. C., 08 de junio de 2020

Doctor:
JUAN CARLOS LOSADA VARGAS
Presidente Comisión Primera Cámara De Representantes
Ciudad

Asunto: **Proposición de modificación**

Respetado Señor Presidente,

Con fundamento en lo contemplado en la ley 5ta de 1992 y normas concordantes, se presenta proposición ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, de modificación del artículo 1º del proyecto de ley número 283 DE 2019 CÁMARA *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000".*

El cual quedará de la siguiente forma:

ARTÍCULO 1o. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:

[...]

ARTÍCULO 338B. *Modalidad culposa.* Si por culpa se ocasionare alguna de las conductas descritas en este título, en los casos en que ello sea posible según su configuración estructural, la pena correspondiente **se podría reducir hasta la mitad.**

Atentamente,

JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
Representante a la Cámara, Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Partido Cambio Radical.

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

MODIFÍQUESE EL ARTÍCULO 338C **"EXTINCIÓN DE DOMINIO."** al que se refiere el **Artículo 1°** del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara "Por medio del cual se sustituye el Título XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000. El cual quedará así:

ARTÍCULO 338C. ***Extinción de dominio.*** Los bienes muebles e inmuebles empleados para el desarrollo de las conductas descritas en este título serán sometidos a extinción de dominio en los términos de la Ley 1708 de 2014.

Tratándose de animales, estos serán puestos a decomiso y disposición de la autoridad competente.

~~Lo previsto en el presente artículo no aplicará frente a los delitos de depósito o inyección de sustancias en el suelo (Art. 329A C.P.), alteración del paisaje (Art. 334A C.P.), fabricación, importación, exportación, tráfico o uso de plásticos prohibidos (Art. 335D C.P.), aprovechamiento ilícito de residuos (Art. 335E C.P.) e invasión de áreas de especial importancia ecológica (Art. 336 C.P.).~~

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

Acta 51 Junio 8/2020

H.R JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Bogotá, D. C., 08 de junio de 2020

Doctor:
JUAN CARLOS LOSADA VARGAS
Presidente Comisión Primera Cámara De Representantes
Ciudad

Asunto: **Proposición de modificación**

Respetado Señor Presidente,

Con fundamento en lo contemplado en la ley 5ta de 1992 y normas concordantes, se presenta proposición ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, de modificación del artículo 1° del proyecto de ley número 283 DE 2019 CÁMARA *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000".*

El cual quedará de la siguiente forma:

ARTÍCULO 1o. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:

[...]

~~**ARTÍCULO 338C.** ***Extinción de dominio.*** Los bienes muebles e inmuebles empleados para el desarrollo de las conductas descritas en este título serán sometidos a extinción de dominio en los términos de la Ley 1708 de 2014.~~

~~Tratándose de animales, estos serán puestos a decomiso y disposición de la autoridad competente. Lo previsto en el presente artículo no aplicará frente a los delitos de depósito o inyección de sustancias en el suelo (Art. 329A C.P.), alteración del paisaje (Art. 334A C.P.), fabricación, importación, exportación, tráfico o uso de plásticos prohibidos (Art. 335D C.P.), aprovechamiento ilícito de residuos (Art. 335E C.P.) e invasión de áreas de especial importancia ecológica (Art. 336 C.P.).~~

Elimínese el aparte tachado

Atentamente,

JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
Representante a la Cámara, Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Partido Cambio Radical.

Acta 51

H.R JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Bogotá, D. C., 04 de junio de 2020

Doctor:
JUAN CARLOS LOSADA VARGAS
Presidente Comisión Primera Cámara De Representantes
Ciudad

Asunto: **Proposición de modificación**

Respetado Señor Presidente,

Con fundamento en lo contemplado en la ley 5ta de 1992 y normas concordantes, se presenta proposición ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, de modificación del artículo 1° del Proyecto de ley No. 283 DE 2019 CÁMARA *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000".*

El cual quedará de la siguiente forma:

ARTÍCULO 1o. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:

[...]

~~**ARTÍCULO 339. Medida Cautelar. El juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.~~**

Elimínese el aparte tachado.

Atentamente,

JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ
Representante a la Cámara, Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Partido Cambio Radical.

Acta 51 Junio 8/2020

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

ALFREDO DELUQUE ZULETA
REPRESENTANTE A LA CÁMARA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

PROPOSICIÓN

ELIMINESE el artículo **339** contenido en el **artículo 1 del PROYECTO DE LEY NÚMERO 283 DE 2019 CÁMARA** *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000".*

ARTÍCULO 339. ***Medida Cautelar.*** ~~El juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.~~

ALFREDO DELUQUE ZULETA
REPRESENTANTE A LA CÁMARA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Acta 51 Junio 8/2020

GABRIEL VALLEJO CHUJFI

PROPOSICIÓN MODIFICATIVA

Modifíquese el artículo 1 del Proyecto de Ley 283 de 2019C *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000"*, para que quede así:

ARTÍCULO 1o. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:

TÍTULO XI.
DE LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTE

CAPÍTULO I.
DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS DEL AGUA Y DEL SUELO

ARTÍCULO 328. ***Aprovechamiento ilícito de las aguas y de sus recursos biológicos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, use, explore, aproveche o se beneficie de las aguas o de los especímenes, productos o partes de los recursos hidrobiológicos, biológicos o pesqueros de las aguas y del suelo o el subsuelo del mar territorial o de la zona económica de dominio continental e insular de la República, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~**Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de veinticinco mil (25.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.**~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se desvíe, destruya, inutilice o haga desaparecer los cuerpos hídricos, sus recursos hidrobiológicos o pesqueros.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.

ARTÍCULO 329B. ***Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes excave, explote, explore o extraiga yacimiento minero, arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~**Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.**~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se realice a través de minería a cielo abierto, o con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.

ARTÍCULO 329C. ***Fracking.*** El que **sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes** realice actividades de explotación y aprovechamiento del suelo o del subsuelo a través del método de fractura hidráulica, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~**Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de treinta y cinco mil (35.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.**~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales o altere o destruya acuíferos.

CAPÍTULO II.
DE LOS DELITOS CONTRA LA BIODIVERSIDAD DE LA FAUNA Y DE LA FLORA

ARTÍCULO 328A. ***Destrucción de coral.*** El que destruya, inutilice, ~~altere~~, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe arrecife coralino, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de quinientos (500) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~**Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.**~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se desvíe, destruya, inutilice o haga desaparecer los cuerpos hídricos o sus recursos hidrobiológicos.

ARTÍCULO 329. ***Aprovechamiento ilícito de los recursos de la tierra, del suelo y del subsuelo.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, trafique, comercie, explore, aproveche o se beneficie de los recursos naturales ~~**de la tierra, del suelo o**~~ del subsuelo o provoque o realice directa o indirectamente extracciones, excavaciones, aterramientos o vibraciones en el suelo o el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~**Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de veintiséis mil (26.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.**~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.

ARTÍCULO 329A. ***Depósito o inyección de sustancias en el suelo.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes realice inyección o depósito de sustancias que generen daños en el ambiente, en el suelo o en el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente:

~~**Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.**~~

ARTÍCULO 330. ***Aprovechamiento ilícito de los recursos de la fauna.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, capture, extraiga, transporte, mantenga, comercie, aproveche, explote o se beneficie de la fauna, o realice actividades que impidan o dificulten su reproducción, crecimiento o migración incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~**Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.**~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, prohibidas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 330A. ***Tráfico de fauna.*** El que ~~**trafique o**~~ que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes**, trafique,** adquiera especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas o invasoras incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de trescientos (300) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~**Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.**~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 330B. ***Caza ilegal.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, cazare en época de veda o excediere el número de piezas permitidas, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses y

multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá quien realice caza deportiva.

~~**Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ochenta y cuatro (84) a ciento ochenta (180) meses y multa de diecisiete mil (17.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.**~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 330C. ***Pesca ilegal.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese, envase o almacene ejemplares o productos de especies protegidas, vedadas, prohibidas o en peligro de extinción, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que exceda el número de individuos o de piezas autorizadas, comercialice por debajo de las tallas permitidas, o utilice instrumentos, aparejos y artes de pesca no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente para cualquier especie.

~~**Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de cuarenta y cuatro mil (44.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.**~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en zona protegida o prohibida, área de reserva o zonas o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva, se construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ríos, ciénagas, lagunas, caños y canales o con la conducta se desequen, varíen o bajen su nivel, o se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 330D. ***Aleteo.*** El que cercene aletas de tiburón, las retenga y descarte el resto del cuerpo al mar, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~**Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.**~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en zonas protegidas o prohibidas, áreas de reserva o zonas o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de aparejos y artes de pesca prohibidos o no autorizados, venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos, **aparejos y artes de pesca prohibidos o no autorizados** ~~o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva,~~ se construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ríos, ciénagas, lagunas, caños y canales o con la conducta se desequen, varíen o bajen su nivel, o se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 331. ***Aprovechamiento ilícito de los recursos de la flora.*** El que sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, adquiera, recolecte, extraiga, corte, tale, arranque, posea, destruya, transporte, trafique, comercie, aproveche o se beneficie de las especies de la flora silvestre o acuática, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~**Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.**~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva climática, zonas o áreas de reserva, en período de producción de semillas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 331A. ***Deforestación.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, tale, queme, corte o destruya, en todo o en parte bosques naturales, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~**Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de treinta y siete mil (37.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.**~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, reserva climática, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se altere las aguas, se ocasione erosión del suelo, se modifique el régimen climático, se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

Cuando la tala o la quema ilegal de árboles o la deforestación se produzca en la cuenca del Amazonas y/o en la Sierra Nevada de Santa Marta, el delito se aumentará al doble de la pena prevista en el presente artículo.

ARTÍCULO 331B. ***Promoción y financiación de la Deforestación.*** El que **sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes** promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte o destrucción, en todo o en parte de bosques naturales, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~**Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.**~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, reserva climática, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se altere las aguas, se ocasione erosión del suelo, se modifique el régimen climático, se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 332. ***Manejo ilícito de especies exóticas.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes introduzca, trasplante, manipule, experimente, mantenga, comercie, inocule, libere o propague especies silvestres exóticas o invasoras, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento a ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~**Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de trece mil (13.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.**~~

ARTÍCULO 332A. ***Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes importe, introduzca, comercialice, exporte, manipule, experimente, libere, inocule, o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos moléculas, sustancias o elementos que constituyan un riesgo o pongan en peligro la salud humana, el ambiente o la existencia de los recursos de la fauna, de la flora o biológicos de las aguas, o alteren perjudicialmente sus poblaciones incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~**Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de diecisiete mil (17.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.**~~

Si se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad.

CAPÍTULO III.
DE LOS DELITOS CONTRA LA BIODIVERSIDAD GENÉTICA

ARTÍCULO 333. ***Aprovechamiento ilícito de recursos genéticos de la biodiversidad.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, exporte, mantenga, trafique, comercie, aproveche, explore, valorice, transforme o se beneficie a cualquier título de los recursos genéticos de la flora o la fauna, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El que promueva, financie, dirija, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en este artículo, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO IV.
DE LOS DELITOS CONTRA EL HÁBITAT Y EL PAISAJE NATURAL

ARTÍCULO 334. ***Destrucción o alteración de hábitat.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes destruya **~~o altere~~** hábitat de especies de la flora o de la fauna, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente:

~~**Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.**~~

~~**ARTÍCULO 334A.** ***Alteración del paisaje.*** **El que sin permiso de autoridad competente con incumplimiento de las normas vigentes, altere el recurso del paisaje urbano o rural, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.**~~

~~**Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de trece mil (13.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.**~~

CAPÍTULO V.
DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

ARTÍCULO 335. ***Contaminación ambiental.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes **~~provoque,~~** contamine **~~o realice directa e indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, disposiciones o ruidos en el aire,~~** la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, o demás recursos naturales incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cincuenta y cinco (55) a ciento doce (112) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~**Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.**~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el presente artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.
2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por las normas vigentes o haya infringido más de dos parámetros.
3. Cuando la contaminación, descarga, disposición o vertimiento se realice en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas.
4. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, emisiones o disposiciones.
5. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.
6. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de vigilancia y control de la autoridad ambiental.
7. El perjuicio o alteración ocasionados adquieran un carácter catastrófico o irreversible.

ARTÍCULO 335A. ***Contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes contamine, almacene, transporte, vierta o disponga inadecuadamente, residuo sólido peligroso incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~**Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.**~~

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el presente artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.
2. Cuando la descarga o disposición se realice en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas.
3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente la descarga o disposición.
4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.
5. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de vigilancia y control de la autoridad ambiental.
6. El perjuicio o alteración ocasionados adquieran un carácter catastrófico o irreversible.

ARTÍCULO 335B. ***Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo.*** El que **sin mediar autorización de autoridad competente** contamine directa o indirectamente la atmosfera, el suelo, el subsuelo o las aguas como consecuencia de la actividad de extracción, excavación, exploración, construcción, inyección, depósito, montaje, explotación, beneficio, transformación o transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~**Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.**~~

Si la conducta se realizare como consecuencia de la minería a cielo abierto la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad de la pena.

ARTÍCULO 335C. ***Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, realice experimentos, con especies, agentes biológicos o bioquímicos, que constituyan, generen o pongan en peligro o riesgo la salud humana, el ambiente o la existencia de los recursos de la fauna, la flora o biológicos de las aguas, o altere sus poblaciones, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

~~**Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de treinta y siete mil (37.000)**~~

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente.

CAPÍTULO VII.
DE LA DESTINACIÓN ILEGAL DE TIERRAS

~~**ARTÍCULO 337.** ***Destinación ilegal de tierras establecidas.*** **El que utilice o destine con uso diferente para el cual fueron definidas las tierras establecidas, declaradas, tituladas o delimitadas por autoridad competente, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.**~~

~~**En la misma pena incurrirá quien use o destine tierras sobre las cuales se hubiese cometido deforestación para fines distintos a la resiembra o restauración.**~~

~~**Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se impondrá prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa de trescientos (300) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.**~~

~~**Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de once mil (11.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.**~~

~~**CAPÍTULO VIII.**~~
~~**IMPACTO AMBIENTAL (IA)**~~

~~**ARTÍCULO 338.** ***Impacto Ambiental (IA).*** Cuando las conductas del presente título tengan como resultado un Impacto Ambiental (IA), el ámbito punitivo de movilidad de la pena de prisión y de multa se dividirá en tercios, así: uno mínimo, uno medio y uno máximo.~~

~~La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio mínimo cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) que no pase de cincuenta (50) IA.~~

~~La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio medio cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental superior a cincuenta (50) IA sin exceder de setenta y cinco (75) IA.~~

~~La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio máximo cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental que pasare de setenta y cinco (75) IA.~~

CAPÍTULO IX.
DISPOSICIONES COMUNES

ARTÍCULO 338A. ***Circunstancias de agravación punitiva.*** Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán a la mitad cuando:

1) Se afecten ecosistemas estratégicos que hagan parte de las áreas protegidas del Sistema Nacional, Regional o Local.
2) ~~Cuando el~~El daño ambiental sea consecuencia de la acción u omisión de quienes ejercen funciones de vigilancia y control.
3) Se pongan en peligro la salud humana, las especies de flora, fauna o su hábitat.
4) ~~Cuando s~~Se genere pérdida de biodiversidad.

ARTÍCULO 338B. ***Modalidad culposa.*** Si por culpa se ocasionare alguna de las conductas descritas en este título, ~~en los casos en que ello sea posible según su configuración estructural,~~ la pena correspondiente se reducirá a la mitad.

ARTÍCULO 338C. ***Extinción de dominio.*** Los bienes muebles e inmuebles empleados para el desarrollo de las conductas descritas en este título serán sometidos a extinción de dominio en los términos de la Ley 1708 de 2014.

Tratándose de animales, estos serán puestos a decomiso y disposición de la autoridad competente.

Lo previsto en el presente artículo no aplicará frente a los delitos de depósito o inyección de sustancias en el suelo (Art. 329A C.P.), ~~alteración del paisaje (Art. 334A C.P.), fabricación, importación, exportación, tráfico o uso de plásticos prohibidos (Art. 335D C.P.),~~ aprovechamiento ilícito de residuos (Art. 335E C.P.) e invasión de áreas de especial importancia ecológica (Art. 336 C.P.).

ARTÍCULO 339. ***Medida Cautelar.*** El juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.

GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI
Representante a la Cámara por Risaralda
Partido Centro Democrático

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

JUAN CARLOS LOZADA VARGAS
REPRESENTANTE A LA CÁMARA – BOGOTÁ

Bogotá D.C. 8 de mayo de 2020

Honorable Representante
JUAN CARLOS LOZADA VARGAS
Presidente
Comisión Primera Constitucional
Cámara de Representantes
Ciudad.

Ref: **ENMIENDA** Informe de Ponencia para primer debate al Proyecto de Ley No. 283 de 2019 Cámara.

Honorables Representantes:

Comedidamente me permito dar alcance al Informe de Ponencia para primer debate al Proyecto de Ley No 283 de 2019 Cámara, *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000"*, con el fin de presentar **ENMIENDA** a su articulado, en razón a que con posterioridad a su radicación, este despacho recibió sendas comunicaciones provenientes de de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA[1] y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP[2], las cuales contienen un conjunto de comentarios que, por considerarlos pertinentes, se ha estimado necesario acogerlos en una parte, de manera tal que exigen hacer ajustes al articulado propuesto, antes de que se dé el primer debate, de la siguiente manera:

En consecuencia, acojo las siguientes propuestas sobre el **ARTÍCULO 1°** que sustituye el Título XI, *"De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente"* Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000:

I. **SE MODIFICA el Artículo 328, el cual quedará así:**

ARTÍCULO 328. Aprovechamiento ilícito de las aguas y de sus recursos biológicos. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, use, explore, aproveche o se beneficie de las aguas o de los especímenes, productos o partes de los recursos hidrobiológicos, ~~o~~ biológicos* ***o pesqueros*** *de las aguas y del suelo o el subsuelo del mar territorial o de la zona económica de dominio continental e insular de la República, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de veinticinco mil (25.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se desvíe, destruya, inutilice o haga desaparecer los cuerpos hídricos, ~~o~~ sus recursos hidrobiológicos ***o pesqueros****. -* **(PROPUESTA AUNAP)**

II. **SE MODIFICA el Artículo 330, el cual quedará así:**

ARTÍCULO 330. Aprovechamiento ilícito de los recursos de la fauna. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, capture, extraiga, transporte, mantenga, comercie, aproveche, explote o se beneficie de la fauna, o realice actividades que impidan o dificulten su reproducción,* ***crecimiento*** *o migración incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, ***prohibidas,*** *protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat. -* **(Propuesta AUNAP)**

III. **SE MODIFICA el Artículo 330C, el cual quedará así:**

ARTÍCULO 330C. Pesca ilegal. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese, envase o almacene ejemplares o productos de especies protegidas, vedadas,* ***prohibidas*** *o en peligro de extinción, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

En la misma pena incurrirá el que exceda el número de ***individuos o*** *de piezas autorizadas,* ***o comercialice por debajo*** *de* ***las*** *tallas* ~~*menores a las*~~ *permitidas,* ~~*las comercie,*~~ *o utilice instrumentos,* ***aparejos y artes de pesca*** *no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente para cualquier especie.*

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de cuarenta y cuatro mil (44.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en ***zona protegida o prohibida, área de reserva o*** *zonas o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva, se construya obras o instale redes,*

[1] *Oficio radicado 2020065438-3-000, fechado el 28 de abril de 2020, suscrito por RODRIGO SUAREZ CASTAÑO, Director General ANLA.*
[2] *Oficio radicado S2020NC000405- fechado el 4 de mayo de 2020, suscrito por MIGUEL ANGEL ARDILA ARDILA, Jefe Oficina Asesora Jurídica AUNAP*

mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ríos, ciénagas, lagunas, caños y canales o con la conducta se desequen, varíen o bajen su nivel, o se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat. - **(Propuesta AUNAP)**

IV. SE MODIFICA el Artículo 330D, el cual quedará así:

ARTÍCULO 330D. Aleteo. *El que cercene,* ~~*retenga*~~ *aletas de tiburón,* ***las retenga*** *y descarte el resto del cuerpo al mar, incurrirá,' sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en zonas ***protegidas o prohibidas, áreas de reserva o zonas*** *o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de* ***aparejos y artes de pesca prohibidos o no autorizados,*** *venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva, se construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ríos, ciénagas, lagunas, caños y canales o con la conducta se desequen, varíen o bajen su nivel, o se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.* - **(Propuesta AUNAP)**

V. SE ELIMINA el Artículo 335D y en consecuencia cambia la numeración del Artículo 335E, el cual quedará:

ARTÍCULO 335ED. Aprovechamiento ilícito de residuos. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, recoja, transporte, valorice, transforme, elimine o aproveche residuos sólidos o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.* - **(Propuesta ANLA)**

VI. PLIEGO DE MODIFICACIONES

TEXTO RADICADO	TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
ARTÍCULO 1o. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:	**ARTÍCULO 1o.** Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:
TÍTULO XI. **DE LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTE**	**TÍTULO XI.** **DE LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTE**
CAPÍTULO I. **DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS DEL AGUA Y DEL SUELO**	**CAPÍTULO I.** **DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS DEL AGUA Y DEL SUELO**
ARTÍCULO 328. Aprovechamiento ilícito de las aguas y de sus recursos biológicos. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, use, explore, aproveche o se beneficie de las aguas o de los especímenes, productos o partes de los recursos biológicos de las aguas y del suelo o el subsuelo del mar territorial o de la zona económica de dominio continental o insular de la República, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de veinticinco mil (25.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se desvíe, destruya, inutilice o haga desaparecer los cuerpos hídricos o sus recursos biológicos	**ARTÍCULO 328. Aprovechamiento ilícito de las aguas y de sus recursos biológicos.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, use, explore, aproveche o se beneficie de las aguas o de los especímenes, productos o partes de los recursos hidrobiológicos, biológicos o pesqueros de las aguas y del suelo o el subsuelo del mar territorial o de la zona económica de dominio continental o insular de la República, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de veinticinco mil (25.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se desvíe, destruya, inutilice o haga desaparecer los cuerpos hídricos, o sus recursos hidrobiológicos o pesqueros. **ARTÍCULO 328A. Destrucción de coral.** El que destruya, inutilice, altere, haga desaparecer o de cualquier otro modo **daño arrecife coralino, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de quinientos (500) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.**
ARTÍCULO 329. Aprovechamiento ilícito de los recursos de la tierra, del suelo y del subsuelo. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, trafique, comercie, explore, aproveche o se beneficie de los recursos naturales de la tierra, del suelo o del subsuelo o provoque o realice directa o indirectamente extracciones, excavaciones, aterramientos o vibraciones en el suelo o el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de veintiséis mil (26.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.	**Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.** **La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se desvíe, destruya, inutilice o haga desaparecer los cuerpos hídricos o sus recursos hidrobiológicos.** **ARTÍCULO 329. Aprovechamiento ilícito de los recursos de la tierra, del suelo y del subsuelo.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, trafique, comercie, explore, aproveche o se beneficie de los recursos naturales de la tierra, del suelo o del subsuelo o provoque o realice directa o indirectamente extracciones, excavaciones, aterramientos o vibraciones en el suelo o el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de veintiséis mil (26.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
ARTÍCULO 329A. Depósito o inyección de sustancias en el suelo. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes realice inyección o depósito de sustancias que generen daños en el ambiente, en el suelo o en el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente: Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.	**ARTÍCULO 329A. Depósito o inyección de sustancias en el suelo.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes realice inyección o depósito de sustancias que generen daños en el ambiente, en el suelo o en el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente: Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.
ARTÍCULO 329B. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes	**ARTÍCULO 329B. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes
excave, explote, explore o extraiga yacimiento minero, arena, material pétreo o de arrastre de las cauces y orillas de los ríos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se realice a través de minería a cielo abierto, o con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos. **ARTÍCULO 329C. Fracking.** El que realice actividades de exploración y aprovechamiento del suelo o del subsuelo a través del método de fractura hidráulica, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de treinta y cinco mil (35.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales o altere o destruya acuíferos. **CAPÍTULO II.** **DE LOS DELITOS CONTRA LA BIODIVERSIDAD DE LA FAUNA Y DE LA FLORA** **ARTÍCULO 330. Aprovechamiento ilícito de los recursos de la fauna.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, capture, extraiga, transporte, mantenga, trafique, comercie, adquiera, aproveche, explote o se beneficie de la fauna, o realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216)	excave, explote, explore o extraiga yacimiento minero, arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se realice a través de minería a cielo abierto, o con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos. **ARTÍCULO 329C. Fracking.** El que realice actividades de exploración y aprovechamiento del suelo o del subsuelo a través del método de fractura hidráulica, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de treinta y cinco mil (35.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales o altere o destruya acuíferos. **CAPÍTULO II.** **DE LOS DELITOS CONTRA LA BIODIVERSIDAD DE LA FAUNA Y DE LA FLORA** **ARTÍCULO 330. Aprovechamiento ilícito de los recursos de la fauna.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, capture, extraiga, transporte, mantenga, **trafique**, comercie, **adquiera,** aproveche, explote o se beneficie de la fauna, o realice actividades que impidan o dificulten su reproducción, **cruzamiento** o migración incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216)

meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, **prohibidas**, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conductora se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 330A. Tráfico de fauna. El que trafique o que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes adquiera especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas o invasoras incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de seiscientos (600) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de trescientos (300) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veintiséis (26) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 330A. Caza ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o infringiendo las normas existentes, cazare en época de veda o excediere el número de piezas permitidas, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTÍCULO 330A. Caza ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o con **incumplimiento de infringiendo** las normas **vigentes existentes**, cazare en época de veda o excediere el número de piezas permitidas, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá quien realice caza deportiva.

En la misma pena incurrirá quien realice caza deportiva.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ochenta y cuatro (84) a ciento ochenta (180) meses y multa de diecisiete mil (17.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ochenta y cuatro (84) a ciento ochenta (180) meses y multa de diecisiete mil (17.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en zonas o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en zonas o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva, se construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ríos, ciénagas, lagunas, caños y canales o con la conducta se desequen, varíen o bajen su nivel, o se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 330B. Caza ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o con **incumplimiento de infringiendo** las normas **vigentes existentes**, cazare en zonas o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva, se construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ríos, ciénagas, lagunas, caños y canales o con la conducta se desequen, varíen o bajen su nivel, o se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 330C. Pesca ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese, envase o almacene ejemplares o productos de especies protegidas, vedadas, **prohibidas** o en peligro de extinción, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que exceda el número de **individuos o** de piezas autorizadas, **a comercialice por debajo de las tallas mínimas o las permitidas, las comercialice, o pesque** con instrumentos, **aparejos y artes de pesca** no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente para cualquier especie.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de cuarenta y cuatro mil (44.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en zonas o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva, se construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ríos, ciénagas, lagunas, caños y canales o con la conducta se desequen, varíen o bajen su nivel, o se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 330C. Pesca ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese, envase o almacene ejemplares o productos de especies protegidas, vedadas, **prohibidas** o en peligro de extinción, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que exceda el número de **individuos o** de piezas autorizadas, **a comercialice por debajo de las tallas mínimas o las permitidas, las comercialice, o pesque** con instrumentos, **aparejos y artes de pesca** no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente para cualquier especie.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de cuarenta y cuatro mil (44.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en **zona protegida o prohibida, área de reserva o** zonas o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva, se construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ríos, ciénagas, lagunas, caños y canales o con la conducta se desequen, varíen o bajen su nivel, o se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 330D. Aleteo. El que cercene aletas de tiburón, las retenga y descarte el resto del cuerpo al mar, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento noventa y ocho (198) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad

ARTÍCULO 331. Aprovechamiento ilícito de los recursos de la flora. El que sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, adquiera, recolecte, extraiga, corte, tale, arranque, pesca, destruya, transporte, trafique, comercie, aproveche o se beneficie de las especies de la flora silvestre o acuática, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTÍCULO 331. Aprovechamiento ilícito de los recursos de la flora. El que sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, adquiera, recolecte, extraiga, corte, tale, arranque, pesca, destruya, transporte, trafique, comercie, aproveche o se beneficie de las especies de la flora silvestre o acuática, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en zonas o áreas de reserva, en período de producción de semillas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en zonas o áreas de reserva, en período de producción de semillas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 331A. Deforestación. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, tale, queme, corte o destruya, en todo o en parte bosques naturales, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTÍCULO 331A. Deforestación. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, tale, queme, corte o destruya, en todo o en parte bosques naturales, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de treinta y siete mil (37.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de treinta y siete mil (37.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, **reserva climática,** ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se altere las aguas, se ocasione

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en **zonas protegidas o prohibidas, áreas de reserva o zonas o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva, se construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ríos, ciénagas, lagunas, caños y canales o con la conducta se desequen, varíen o bajen su nivel, o se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.**

ARTÍCULO 331. Aprovechamiento ilícito de los recursos de la flora. El que sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, adquiera, recolecte, extraiga, corte, tale, arranque, pesca, destruya, transporte, trafique, comercie, aproveche o se beneficie de las especies de la flora silvestre o acuática, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en **reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, reserva climática, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se altere las aguas, se ocasione erosión del suelo, se modifique el régimen climático, se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.**

ARTÍCULO 331A. Deforestación. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, tale, queme, corte o destruya, en todo o en parte bosques naturales, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de treinta y siete mil (37.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, **reserva climática,** ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se altere las aguas,

erosión del suelo, se modifique el régimen climático, se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 331B. Promoción y financiación de la Deforestación. El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte o destrucción, en todo o en parte de bosques naturales, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se altere las aguas, se ocasione erosión del suelo, se modifique el régimen climático, se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 331B. Promoción y financiación de la Deforestación. El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte o destrucción, en todo o en parte de bosques naturales, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, **reserva climática,** ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se altere las aguas, se ocasione erosión del suelo, se modifique el régimen climático, se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 332. Manejo ilícito de especies exóticas. El que introduzca, trasplante, manipule, experimente, mantenga, adquiera, mueble, libere o propague especies silvestres exóticas o invasoras, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTÍCULO 332. Manejo ilícito de especies exóticas. El que **sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes** introduzca, trasplante, manipule, experimente, mantenga, **comercie adquiera,** mueble, libere o propague especies silvestres exóticas o invasoras, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de trece mil (13.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de trece mil (13.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

ARTÍCULO 332A. Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos patógenos. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes importe, introduzca, comercialice, exporte, manipule, experimente, libere, inocule, o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos moléculas, sustancias o elementos que constituyan un riesgo o pongan en peligro la salud humana, el ambiente o la existencia de los recursos de la fauna, de la flora o biológicos de las aguas, o alteren perjudicialmente sus poblaciones incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTÍCULO 332A. Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos patógenos. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes importe, introduzca, comercialice, exporte, manipule, experimente, libere, inocule, o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos moléculas, sustancias o elementos que constituyan un riesgo o pongan en peligro la salud humana, el ambiente o la existencia de los recursos de la fauna, de la flora o biológicos de las aguas, o alteren perjudicialmente sus poblaciones incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de diecisiete mil (17.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

Si se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad.

CAPÍTULO III.
DE LOS DELITOS CONTRA LA BIODIVERSIDAD GENÉTICA

ARTÍCULO 333. Aprovechamiento ilícito de recursos genéticos de la biodiversidad. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, exporte, mantenga, trafique, comercie, aproveche, emplee, valorice, transforme o se beneficie a cualquier título de los recursos genéticos de la flora o la fauna, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El que promueva, financie, dirija, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en este artículo, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO IV.
DE LOS DELITOS CONTRA EL HÁBITAT Y EL PAISAJE NATURAL

ARTÍCULO 334. Destrucción o alteración de hábitat. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes destruya o altere hábitat de especies de la flora o de la fauna, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente:

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

ARTÍCULO 334A. Alteración del paisaje. El que sin permiso de autoridad competente con incumplimiento de las normas vigentes, altere el recurso del paisaje urbano o rural, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de trece mil (13.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

Si se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad.

CAPÍTULO III.
DE LOS DELITOS CONTRA LA BIODIVERSIDAD GENÉTICA

ARTÍCULO 333. Aprovechamiento ilícito de recursos genéticos de la biodiversidad. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, exporte, mantenga, trafique, comercie, aproveche, emplee, valorice, transforme o se beneficie a cualquier título de los recursos genéticos de la flora o la fauna, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El que promueva, financie, dirija, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en este artículo, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO IV.
DE LOS DELITOS CONTRA EL HÁBITAT Y EL PAISAJE NATURAL

ARTÍCULO 334. Destrucción o alteración de hábitat. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes destruya o altere hábitat de especies de la flora o de la fauna, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente:

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

ARTÍCULO 334A. Alteración del paisaje. El que sin permiso de autoridad competente con incumplimiento de las normas vigentes, altere el recurso del paisaje urbano o rural, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de trece mil (13.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el presente artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.
2. Cuando la descarga o disposición se realice en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas.
3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente la descarga o disposición.
4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.
5. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de vigilancia y control de la autoridad ambiental.
6. El perjuicio o alteración ocasionados adquieran un carácter catastrófico o irreversible.

ARTÍCULO 335B. Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo. El que contamine directa o indirectamente la atmosfera, el suelo, el subsuelo o las aguas como consecuencia de la actividad de extracción, excavación, exploración, construcción, inyección, depósito, montaje, explotación, beneficio, transformación o transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

Si la conducta se realizare como consecuencia de la minería a cielo abierto la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad de la pena.

ARTÍCULO 335C. Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bloquímicos. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, realice experimentos, con especies, agentes biológicos o bloquímicos, que constituyan, generen o pongan en peligro o riesgo la salud humana, el ambiente o la existencia de los recursos de la fauna, la flora o biológicos de las aguas, o altere sus poblaciones, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60)

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de diecisiete mil (17.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

Si se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad.

CAPÍTULO III.
DE LOS DELITOS CONTRA LA BIODIVERSIDAD GENÉTICA

ARTÍCULO 333. Aprovechamiento ilícito de recursos genéticos de la biodiversidad. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, exporte, mantenga, trafique, comercie, aproveche, emplee, valorice, transforme o se beneficie a cualquier título de los recursos genéticos de la flora o la fauna, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El que promueva, financie, dirija, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en este artículo, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO IV.
DE LOS DELITOS CONTRA EL HÁBITAT Y EL PAISAJE NATURAL

ARTÍCULO 334. Destrucción o alteración de hábitat. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes destruya o altere hábitat de especies de la flora o de la fauna, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente:

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

ARTÍCULO 334A. Alteración del paisaje. El que sin permiso de autoridad competente con incumplimiento de las normas vigentes, altere el recurso del paisaje urbano o rural, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de trece mil (13.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el presente artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.
2. Cuando la descarga o disposición se realice en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas.
3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente la descarga o disposición.
4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.
5. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de vigilancia y control de la autoridad ambiental.
6. El perjuicio o alteración ocasionados adquieran un carácter catastrófico o irreversible.

ARTÍCULO 335B. Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo. El que contamine directa o indirectamente la atmosfera, el suelo, el subsuelo o las aguas como consecuencia de la actividad de extracción, excavación, exploración, construcción, inyección, depósito, montaje, explotación, beneficio, transformación o transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

Si la conducta se realizare como consecuencia de la minería a cielo abierto la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad de la pena.

ARTÍCULO 335C. Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bloquímicos. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, realice experimentos, con especies, agentes biológicos o bloquímicos, que constituyan, generen o pongan en peligro o riesgo la salud humana, el ambiente o la existencia de los recursos de la fauna, la flora o biológicos de las aguas, o altere sus poblaciones, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60)

salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

CAPÍTULO V.
DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

ARTÍCULO 335. Contaminación ambiental. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes provoque, contamine o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, disposiciones o ruidos en el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, a demás recursos naturales incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cincuenta y cinco (55) a ciento doce (112) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el presente artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.
2. Cuando la descarga o disposición se realice en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas.
3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente la descarga o disposición.
4. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, emisiones o disposiciones.
5. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.
6. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de vigilancia y control de la autoridad ambiental.
7. El perjuicio o alteración ocasionados adquieran un carácter catastrófico o irreversible.

ARTÍCULO 335A. Contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes contamine, almacene, transporte, vierta o disponga inadecuadamente, residuo sólido peligroso incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de treinta y siete mil (37.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

~~ARTÍCULO 335D. Fabricación, importación, exportación, tráfico o uso de plásticos prohibidos. El que fabrique, trafique, importe, exporte, distribuya, comercialice, transporte, almacene, financie, ofrezca, adquiera, suministre o cualquier título o use elementos de plástico prohibidos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.~~

ARTÍCULO 335E. Aprovechamiento ilícito de residuos. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, recoja, transporte, valorice, transforme, elimine o aproveche residuos sólidos o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO VI.
DE LA INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA

ARTÍCULO 336. Invasión de áreas de especial importancia

salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

CAPÍTULO V.
DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

ARTÍCULO 335. Contaminación ambiental. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes provoque, contamine o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, disposiciones o ruidos en el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, a demás recursos naturales incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cincuenta y cinco (55) a ciento doce (112) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el presente artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.
2. Cuando la descarga o disposición se realice en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas.
3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente la descarga o disposición.
4. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, emisiones o disposiciones.
5. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.
6. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de vigilancia y control de la autoridad ambiental.
7. El perjuicio o alteración ocasionados adquieran un carácter catastrófico o irreversible.

ARTÍCULO 335A. Contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes contamine, almacene, transporte, vierta o disponga inadecuadamente, residuo sólido peligroso incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de treinta y siete mil (37.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

~~ARTÍCULO 335D. Fabricación, importación, exportación, tráfico o uso de plásticos prohibidos. El que fabrique, trafique, importe, exporte, distribuya, comercialice, transporte, almacene, financie, ofrezca, adquiera, suministre o cualquier título o use elementos de plástico prohibidos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.~~

ARTÍCULO 335E. Aprovechamiento ilícito de residuos. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, recoja, transporte, valorice, transforme, elimine o aproveche residuos sólidos o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO VI.
DE LA INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA

ARTÍCULO 336. Invasión de áreas de especial importancia

ecológica. El que invada, permanezca, así sea de manera temporal, o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en áreas de reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, definidos en la ley o reglamento, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	ecológica. El que invada, permanezca, así sea de manera temporal, o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en áreas de reserva forestal, **reserva climática**, zonas de nacimientos hídricos, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, definidos en la ley o reglamento, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente.	La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente.
ARTÍCULO 336A. Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica. El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**ARTÍCULO 336A. Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica.** El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente.	La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente.
CAPÍTULO VII. **DE LA DESTINACIÓN ILEGAL DE TIERRAS**	**CAPÍTULO VII.** **DE LA DESTINACIÓN ILEGAL DE TIERRAS**
ARTÍCULO 337. Destinación ilegal de tierras establecidas. El que utilice o destine con uso diferente para el cual fueron definidas las tierras establecidas, declaradas, tituladas o delimitadas por autoridad competente, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**ARTÍCULO 337. Destinación ilegal de tierras establecidas.** El que utilice o destine con uso diferente para el cual fueron definidas las tierras establecidas, declaradas, tituladas o delimitadas por autoridad competente, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá quien use o destine tierras sobre las cuales se hubiese cometido deforestación para fines distintos a la reforma o restauración.	En la misma pena incurrirá quien use o destine tierras sobre las cuales se hubiese cometido deforestación para fines distintos a la reforma o restauración.

Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se impondrá prisión de setenta y dos (72) a ciento ochenta y ocho (188) meses, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa de trescientos (300) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se impondrá prisión de setenta y dos (72) a ciento ochenta y ocho (188) meses, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa de trescientos (300) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de once mil (11.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.	Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de once mil (11.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.
CAPÍTULO VIII. **IMPACTO AMBIENTAL (IA)**	**CAPÍTULO VIII.** **IMPACTO AMBIENTAL (IA)**
ARTÍCULO 338. Impacto Ambiental (IA). Cuando las conductas del presente título tengan como resultado un impacto Ambiental (IA), el ámbito punitivo de movilidad de la pena de prisión y de multa se dividirá en tercios, así: uno mínimo, una media y una máxima.	**ARTÍCULO 338. Impacto Ambiental (IA).** Cuando las conductas del presente título tengan como resultado un impacto Ambiental (IA), el ámbito punitivo de movilidad de la pena de prisión y de multa se dividirá en tercios, así: uno mínimo, una media y una máxima.
La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio mínimo cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) que no pase de cincuenta (50) IA.	La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio mínimo cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) que no pase de cincuenta (50) IA.
La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio medio cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental superior a cincuenta (50) IA sin exceder de setenta y cinco (75) IA.	La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio medio cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental superior a cincuenta (50) IA sin exceder de setenta y cinco (75) IA.
La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio máximo cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental que pasare de setenta y cinco (75) IA.	La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio máximo cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental que pasare de setenta y cinco (75) IA.
CAPÍTULO IX. **DISPOSICIONES COMUNES**	**CAPÍTULO IX.** **DISPOSICIONES COMUNES**
ARTÍCULO 338A. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán a la mitad cuando:	**ARTÍCULO 338A. Circunstancias de agravación punitiva.** Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán a la mitad cuando:
1) Se afecten ecosistemas estratégicos que hagan parte de las áreas protegidas del Sistema Nacional, Regional o Local. 2) Cuando el daño ambiental sea consecuencia de la acción u omisión de quienes ejercen funciones de vigilancia y control. 3) Se pongan en peligro la salud humana, las especies de flora, fauna o su hábitat.	1) Se afecten ecosistemas estratégicos que hagan parte de las áreas protegidas del Sistema Nacional, Regional o Local. 2) Cuando el daño ambiental sea consecuencia de la acción u omisión de quienes ejercen funciones de vigilancia y control. 3) Se pongan en peligro la salud humana, las especies de flora, fauna o su hábitat. **4) Cuando se genere pérdida de biodiversidad.**
ARTÍCULO 338B. Modalidad culposa. Si por culpa se ocasionare alguna de las conductas descritas en este título, en los casos en que ello sea posible según su configuración estructural, la pena correspondiente se reducirá a la mitad.	**ARTÍCULO 338B. Modalidad culposa.** Si por culpa se ocasionare alguna de las conductas descritas en este título, en los casos en que ello sea posible según su configuración estructural, la pena correspondiente se reducirá a la mitad.
ARTÍCULO 338C. Extinción de dominio. Los bienes muebles	**ARTÍCULO 338C. Extinción de dominio.** Los bienes muebles

e inmuebles empleados para el desarrollo de las conductas descritas en este título serán sometidos a extinción de dominio en los términos de la Ley 1708 de 2014.	e inmuebles empleados para el desarrollo de las conductas descritas en este título serán sometidos a extinción de dominio en los términos de la Ley 1708 de 2014.
Tratándose de animales, estos serán puestos a decomiso y disposición de la autoridad competente.	Tratándose de animales, estos serán puestos a decomiso y disposición de la autoridad competente.
Lo previsto en el presente artículo no aplicará frente a los delitos de depósito o inyección de sustancias en el suelo (Art. 329A C.P.), alteración del paisaje (Art. 334A C.P.), fabricación, importación, exportación, tráfico o uso de plásticos prohibidos (Art. 335D C.P.), aprovechamiento ilícito de residuos (Art. 335E C.P.) e invasión de áreas de especial importancia ecológica (Art. 336 C.P.).	Lo previsto en el presente artículo no aplicará frente a los delitos de depósito o inyección de sustancias en el suelo (Art. 329A C.P.), alteración del paisaje (Art. 334A C.P.), fabricación, importación, exportación, tráfico o uso de plásticos prohibidos (Art. 335D C.P.), aprovechamiento ilícito de residuos (Art. 335E C.P.) e invasión de áreas de especial importancia ecológica (Art. 336 C.P.).
ARTÍCULO 339. Medida Cautelar. El juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.	**ARTÍCULO 339. Medida Cautelar.** El juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.
ARTÍCULO 2o. Reglamentación del Impacto Ambiental. El Gobierno Nacional en un término de tres (3) meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley, expedirá la reglamentación sobre el método para determinar el daño ambiental según el Impacto Ambiental (IA) en los términos del artículo primero.	Se mantiene igual.
ARTÍCULO NUEVO.	**ARTÍCULO 3o. Pedagogía sobre el ambiente. Los establecimientos educativos de educación básica, media y universitaria, incluirán en su Proyecto Educativo Institucional, una cátedra ambiental que busque la comprensión, el fomento y la participación ciudadana para generar conciencia ambiental sobre el buen uso de los recursos naturales, las prácticas que son contrarias a la sostenibilidad, la importancia de las áreas de especial importancia ecológica y las regulaciones y leyes sobre la materia.** **Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación promoverán programas de formación docente para el desarrollo de las mencionadas estrategias.**
ARTÍCULO 3o. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia seis (6) meses después de la fecha de su promulgación y deroga el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000.	**ARTÍCULO 4o. Vigencia.** La presente ley entrará en vigencia seis (6) meses después de la fecha de su promulgación y deroga el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000.

VII. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 283 DE 2019 CÁMARA

"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000".

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA:

ARTÍCULO 1o. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:

TÍTULO XI.
DE LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTE

CAPÍTULO I.
DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS DEL AGUA Y DEL SUELO

ARTÍCULO 328. ***Aprovechamiento ilícito de las aguas y de sus recursos biológicos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, use, explore, aproveche o se beneficie de las aguas o de los especímenes, productos o partes de los recursos hidrobiológicos, biológicos o pesqueros de las aguas y del suelo o el subsuelo del mar territorial o de la zona económica de dominio continental e insular de la República, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de veinticinco mil (25.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se desvíe, destruya, inutilice o haga desaparecer los cuerpos hídricos, sus recursos hidrobiológicos o pesqueros.

ARTÍCULO 328A. ***Destrucción de coral.*** El que destruya, inutilice, altere, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe arrecife coralino, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, en prisión de

noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de quinientos (500) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se desvíe, destruya, inutilice o haga desaparecer los cuerpos hídricos o sus recursos hidrobiológicos.

ARTÍCULO 329. ***Aprovechamiento ilícito de los recursos de la tierra, del suelo y del subsuelo.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, trafique, comercie, explore, aproveche o se beneficie de los recursos naturales de la tierra, del suelo o del subsuelo o provoque o realice directa o indirectamente extracciones, excavaciones, aterramientos o vibraciones en el suelo o el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de veintiséis mil (26.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.

ARTÍCULO 329A. ***Depósito o inyección de sustancias en el suelo.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes realice inyección o depósito de sustancias que generen daños en el ambiente, en el suelo o en el subsuelo, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente:

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.

ARTÍCULO 329B. ***Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes excave, explote, explore o extraiga yacimiento minero, arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se realice a través de minería a cielo abierto, o con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales, o altere o destruya acuíferos.

ARTÍCULO 329C. ***Fracking.*** El que realice actividades de explotación y aprovechamiento del suelo o del subsuelo a través del método de fractura hidráulica, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de treinta y cinco mil (35.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, subsuelo o sus recursos naturales o altere o destruya acuíferos.

CAPÍTULO II.
DE LOS DELITOS CONTRA LA BIODIVERSIDAD DE LA FAUNA Y DE LA FLORA

ARTÍCULO 330. ***Aprovechamiento ilícito de los recursos de la fauna.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, capture, extraiga, transporte, mantenga, comercie, aproveche, explote o se beneficie de la fauna, o realice actividades que impidan o dificulten su reproducción, crecimiento o migración incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, prohibidas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 330A. ***Tráfico de fauna.*** El que trafique o que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes adquiera especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas o invasoras incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de trescientos (300) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 330B. ***Caza ilegal.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, cazare en época de veda o excediere el número de piezas permitidas, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá quien realice caza deportiva.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ochenta y cuatro (84) a ciento ochenta (180) meses y multa de diecisiete mil (17.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en período de reproducción o crecimiento de las especies, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 330C. ***Pesca ilegal.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese, envase o almacene ejemplares o productos de especies protegidas, vedadas, prohibidas o en peligro de extinción, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que exceda el número de individuos o de piezas autorizadas, comercialice por debajo de las tallas permitidas, o utilice instrumentos, aparejos y artes de pesca no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente para cualquier especie.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de cuarenta y cuatro mil (44.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en zona protegida o prohibida, área de reserva o zonas o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva, se construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ríos, ciénagas, lagunas, caños y canales o con la conducta se desequen, varíen o bajen su nivel, o se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 330D. ***Aleteo.*** El que cercene aletas de tiburón, las retenga y descarte el resto del cuerpo al mar, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de cuarenta y cinco mil (45.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en zonas protegidas o prohibidas, áreas de reserva o zonas o áreas de veda, en período de reproducción o crecimiento de las especies, mediante el uso de aparejos y artes de pesca prohibidos o no autorizados, venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva, se construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ríos, ciénagas, lagunas, caños y canales o con la conducta se desequen, varíen o bajen su nivel, o se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 331. ***Aprovechamiento ilícito de los recursos de la flora.*** El que sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, adquiera, recolecte, extraiga, corte, tale, arranque, posea, destruya, transporte, trafique, comercie, aproveche o se beneficie de las especies de la flora silvestre o acuática, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva climática, zonas o áreas de reserva, en período de producción de semillas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de venenos, explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 331A. ***Deforestación.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, tale, queme, corte o destruya, en todo o en parte bosques naturales, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de treinta y siete mil (37.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, reserva climática, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se altere las aguas, se ocasione erosión del suelo, se modifique el régimen climático, se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 331B. ***Promoción y financiación de la Deforestación.*** El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte o destrucción, en todo o en parte de bosques naturales, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, reserva climática, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, sobre especies vedadas, protegidas o en peligro de extinción, mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas, o con la conducta se altere las aguas, se ocasione erosión del suelo, se modifique el régimen climático, se destruya o haga desaparecer las especies o su hábitat.

ARTÍCULO 332. ***Manejo ilícito de especies exóticas.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes introduzca, trasplante, manipule, experimente, mantenga, comercie, inocule, libere o propague especies silvestres exóticas o invasoras, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento a ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de trece mil (13.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

ARTÍCULO 332A. ***Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes importe, introduzca, comercialice, exporte, manipule, experimente, libere, inocule, o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos moléculas, sustancias o elementos que constituyan un riesgo o pongan en peligro la salud humana, el ambiente o la existencia de los recursos de la fauna, de la flora o biológicos de las aguas, o alteren perjudicialmente sus poblaciones incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de diecisiete mil (17.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

Si se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad.

CAPÍTULO III.
DE LOS DELITOS CONTRA LA BIODIVERSIDAD GENÉTICA

ARTÍCULO 333. ***Aprovechamiento ilícito de recursos genéticos de la biodiversidad.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normas vigentes se apropie, introduzca, explote, transporte, exporte, mantenga, trafique, comercie, aproveche, explore, valorice, transforme o se beneficie a cualquier título de los recursos genéticos de la flora o la fauna, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El que promueva, financie, dirija, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en este artículo, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO IV.
DE LOS DELITOS CONTRA EL HÁBITAT Y EL PAISAJE NATURAL

ARTÍCULO 334. ***Destrucción o alteración de hábitat.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes destruya o altere hábitat de especies de la flora o de la fauna, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en la pena establecida en el inciso siguiente:

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

ARTÍCULO 334A. ***Alteración del paisaje.*** El que sin permiso de autoridad competente con incumplimiento de las normas vigentes, altere el recurso del paisaje urbano o rural, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de trece mil (13.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

CAPÍTULO V.
DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

ARTÍCULO 335. ***Contaminación ambiental.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes provoque, contamine o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, disposiciones o ruidos en el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, o demás recursos naturales incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cincuenta y cinco (55) a ciento doce (112) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el presente artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.
2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por las normas vigentes o haya infringido más de dos parámetros.
3. Cuando la contaminación, descarga, disposición o vertimiento se realice en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas.
4. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, emisiones o disposiciones.
5. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.
6. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de vigilancia y control de la autoridad ambiental.
7. El perjuicio o alteración ocasionados adquieran un carácter catastrófico o irreversible.

ARTÍCULO 335A. ***Contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes contamine, almacene, transporte, vierta o disponga inadecuadamente, residuo sólido peligroso incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el presente artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.
2. Cuando la descarga o disposición se realice en reserva forestal, zonas de nacimientos hídricos, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas.
3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente la descarga o disposición.
4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.
5. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de vigilancia y control de la autoridad ambiental.
6. El perjuicio o alteración ocasionados adquieran un carácter catastrófico o irreversible.

ARTÍCULO 335B. ***Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo.*** El que contamine directa o indirectamente la atmosfera, el suelo, el subsuelo o las aguas como consecuencia de la actividad de extracción, excavación, exploración, construcción, inyección, deposito, montaje, explotación, beneficio, transformación o transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de noventa y seis (96) a ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos setenta y seis (276) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

Si la conducta se realizare como consecuencia de la minería a cielo abierto la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad de la pena.

ARTÍCULO 335C. ***Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes, realice experimentos, con especies, agentes biológicos o bioquímicos, que constituyan, generen o pongan en peligro o riesgo la salud humana, el ambiente o la existencia de los recursos de la fauna, la flora o biológicos de las aguas, o altere sus poblaciones, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de treinta y siete mil (37.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

ARTÍCULO 335D. ***Aprovechamiento ilícito de residuos.*** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de las normas vigentes se apropie, recoja, transporte, valorice, transforme, elimine o aproveche residuos sólidos o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO VI.
DE LA INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA

ARTÍCULO 336. ***Invasión de áreas de especial importancia ecológica.*** El que invada, permanezca, así sea de manera temporal, o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en áreas de reserva forestal, reserva climática, zonas de nacimientos hídricos, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva, ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, definidos en la ley o reglamento, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de cuarenta mil (40.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente.

ARTÍCULO 336A. ***Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica.*** El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de cuarenta y dos mil (42.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente.

CAPÍTULO VII.
DE LA DESTINACIÓN ILEGAL DE TIERRAS

ARTÍCULO 337. ***Destinación ilegal de tierras establecidas.*** El que utilice o destine con uso diferente para el cual fueron definidas las tierras establecidas, declaradas, tituladas o delimitadas por autoridad competente, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá quien use o destine tierras sobre las cuales se hubiese cometido deforestación para fines distintos a la resiembra o restauración.

Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se impondrá prisión de setenta y dos (72) a ciento sesenta y ocho (168) meses, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa de trescientos (300) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) IA, la pena será de prisión de ciento ocho (108) a doscientos cincuenta y dos (252) meses y multa de once mil (11.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338.

CAPÍTULO VIII.
IMPACTO AMBIENTAL (IA)

ARTÍCULO 338. ***Impacto Ambiental (IA).*** Cuando las conductas del presente título tengan como resultado un Impacto Ambiental (IA), el ámbito punitivo de movilidad de la pena de prisión y de multa se dividirá en tercios, así: uno mínimo, uno medio y uno máximo.

La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio mínimo cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental (IA) igual o superior a veinticinco (25) que no pase de cincuenta (50) IA.

La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio medio cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental superior a cincuenta (50) IA sin exceder de setenta y cinco (75) IA.

La pena de prisión y de multa será la correspondiente al tercio máximo cuando la afectación tuviere como consecuencia un impacto ambiental que pasare de setenta y cinco (75) IA.

CAPÍTULO IX.
DISPOSICIONES COMUNES

ARTÍCULO 338A. ***Circunstancias de agravación punitiva.*** Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán a la mitad cuando:

1) Se afecten ecosistemas estratégicos que hagan parte de las áreas protegidas del Sistema Nacional, Regional o Local.
2) Cuando el daño ambiental sea consecuencia de la acción u omisión de quienes ejercen funciones de vigilancia y control.
3) Se pongan en peligro la salud humana, las especies de flora, fauna o su hábitat.
4) Cuando se genere pérdida de biodiversidad.

ARTÍCULO 338B. ***Modalidad culposa.*** Si por culpa se ocasionare alguna de las conductas descritas en este título, en los casos en que ello sea posible según su configuración estructural, la pena correspondiente se reducirá a la mitad.

ARTÍCULO 338C. ***Extinción de dominio.*** Los bienes muebles e inmuebles empleados para el desarrollo de las conductas descritas en este título serán sometidos a extinción de dominio en los términos de la Ley 1708 de 2014.

Tratándose de animales, estos serán puestos a decomiso y disposición de la autoridad competente.

Lo previsto en el presente artículo no aplicará frente a los delitos de depósito o inyección de sustancias en el suelo (Art. 329A C.P.), alteración del paisaje (Art. 334A C.P.), fabricación, importación, exportación, tráfico o uso de plásticos prohibidos (Art. 335D C.P.), aprovechamiento ilícito de residuos (Art. 335E C.P.) e invasión de áreas de especial importancia ecológica (Art. 336 C.P.).

ARTÍCULO 339. ***Medida Cautelar.*** El juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.

ARTÍCULO 2°. ***Reglamentación del Impacto Ambiental.*** El Gobierno Nacional en un término de tres (3) meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley, expedirá la reglamentación sobre el método para determinar el daño ambiental según el Impacto Ambiental (IA) en los términos del artículo primero.

ARTÍCULO 3°. ***Pedagogía sobre el ambiente.*** Los establecimientos educativos de educación básica, media y universitaria, incluirán en su Proyecto Educativo Institucional, una cátedra ambiental que busque la compresión, el fomento y la participación ciudadana para generar conciencia ambiental sobre el buen uso de los recursos naturales, las practicas que son contrarias a la sostenibilidad, la importancia de las áreas de especial importancia ecológica y las regulaciones y leyes sobre la materia.

PARÁGRAFO. El Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación promoverán programas de formación docente para el desarrollo de las mencionadas estrategias.

ARTÍCULO 4°. ***Vigencia.*** La presente ley entrará en vigencia seis (6) meses después de la fecha de su promulgación y deroga el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000.

Sin otro particular,

JUAN CARLOS LOZADA VARGAS
Representante a la Cámara
Ponente

Presidente,
Juan Carlos Lozada Vargas

Vicepresidenta,
Adriana Magali Matiz Vargas

Secretaria,
Amparo Y. Calderón Perdomo

Subsecretaria,
Dora Sonia Cortés Castillo

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

I S S N 0 1 2 3 - 9 0 6 6

AÑO XXX - Nº 1127 Bogotá, D. C., martes, 31 de agosto de 2021 EDICIÓN DE 39 PÁGINAS

DIRECTORES: GREGORIO ELJACH PACHECO
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO
www.secretariasenado.gov.co

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA
www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

ACTAS DE COMISIÓN

COMISIÓN QUINTA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
CÁMARA DE REPRESENTANTES

ACTA NÚMERO 034 DE 2021

(mayo 4)

Sesión Ordinaria – Virtual

Legislatura 2020 – 2021

Hora: 8:18 a. m.

El día martes 4 de mayo de 2021, se reunieron de forma virtual los Honorables Representantes a la Cámara integrantes de la Comisión Quinta, para llevar a cabo la Sesión Ordinaria.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Señor Presidente, doctor Luciano.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Deme un segundo doctor Jaír, que estoy intentando entrar a la plataforma, ya.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Okey, perfecto.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Muy buenos días para todos, señor Secretario, vamos a dar inicio a la Sesión del día de hoy, verifiquemos entonces el quórum.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Con mucho gusto, señor Presidente, dejando entonces constancia de que siendo las 8:18 a. m., vamos a dar inicio a la Sesión de la Comisión Quinta de la Cámara.

En ese orden de ideas, señor Presidente, me permito informarles que en la plataforma se encuentran registrados los siguientes Honorables Representantes, tengo registrados 13 Honorables Representantes; son ellos los siguientes:

Alonso del Río

César Martínez

Ciro Fernández

Crisanto Pisso

Edwin Ballesteros

Flora Perdomo

Héctor Ortiz

José Caicedo

Karen Cure

Luciano Grisales

Nicolás Echeverry

Óscar Arango

Teresa Enríquez

En total 13 Honorables Representantes en la Plataforma.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

De manera directa está el Honorable Representante, Ángel María Gaitán Pulido, que por dificultades tecnológicas no se puede conectar a la plataforma.

En total, señor Presidente, 14 Honorables Representantes, hay Quórum Decisorio.

De manera manual: Honorable Representante Molano Piñeros Rubén Darío y Ortiz Zorro César Augusto.

En el transcurso de la Sesión Virtual se conectaron los siguientes Honorables Representantes:

Chica Correa Félix Alejandro

Espinal Ramírez Juan Fernando

Lozano de la Ossa Franklin del Cristo

Pachón Achury César Augusto

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Con quórum decisorio, señor Secretario, damos inicio a la Sesión, sírvase leer el Orden del Día.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Con mucho gusto, señor Presidente, como bien es sabido se canceló el debate que teníamos programado para hoy, fue comunicado oficialmente en el día de ayer, por lo tanto cambia el Orden del Día y es el siguiente:

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

COMISIÓN QUINTA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Legislatura 2020 – 2021 - Segundo periodo –

Plataforma Google MEET.

Orden del Día para la Sesión de hoy martes 4 de mayo del 2021, conforme a lo dispuesto en la Resolución número 1125 del 17 de julio del 2020, Por medio de la cual adiciona la Resolución número. 0777 del 6 de abril de 2020, cuyo objeto es la de "Adoptar decisiones y medidas necesarias y procedentes para lograr una eficiente labor legislativa, cuando por razones de la declaración de estado de emergencia, el ejercicio de las funciones de la Cámara de Representantes signifique grave riesgo para la salud o la vida de los Congresistas, Funcionarios y Trabajadores de la Corporación".

I

Llamado a lista y verificación del quórum.

II

Aprobación de las Actas de Sesión de la Legislatura 2020-2021:

- Acta número 030 de marzo 24 del 2021
- Acta número 031 de abril 14 del 2021

III

Anuncio Proyectos de ley.

IV

Negocios Sustanciados por la Presidencia.

V

Lo que propongan los Honorables Representantes.

Señor Presidente, está leído el Orden del Día.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Leído el Orden del Día lo ponemos a consideración, se abre su discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada, le pregunto a la Comisión si aprueba el Orden del Día leído.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Ha sido aprobado, señor Presidente.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Muchas gracias, señor Secretario.

Antes de pasar al segundo punto del Orden del Día quisiera hacer una observación con respecto a la postergación del debate de control político que citó el doctor Ciro Fernández, con respecto a la afectación al Sector Agropecuario, o más bien, lo referente al Sector Agropecuario dentro de la planteada anterior Reforma Tributaria. Por todos los sucesos por todos conocido fue postergado el debate; yo no sé si el doctor Ciro Fernández quiera hacer alguna observación respecto a esto.

Honorable Representante Ciro Fernández Núñez:

Gracias, señor Presidente. No pues debido a la situación que se está presentando ya el Gobierno como lo expresó usted Presidente, el Gobierno nacional retiró el Proyecto por el cual íbamos a hacer este importante debate y creíamos que ya no es necesario. Esperemos a ver qué es lo que va a pasar, esperemos la reunión de Gobierno con los diferentes Partidos, los diferentes Sectores, qué es lo que va a plantear con respecto a eso pues yo creo que sería necesario e importante por parte de la Comisión, después del diálogo y de lo que se plantee, pues ahí sí citar a las diferentes carteras nuestras, para ver cómo podemos nosotros ayudarles o a los sectores cómo podemos ayudarles para que no salgan afectados.

Es simplemente eso, Presidente, y por ende, creería que el debate que estaba planteado para el día de hoy no tiene fuerza y por eso tomamos la decisión de cancelarlo.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Muchas gracias, doctor Ciro.

Con eso entonces, señor Secretario, le damos paso al siguiente punto del Orden del Día.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Con mucho gusto, señor Presidente, había omitido aquí la presencia del Honorable Representante Rubén Darío Molano; entonces dejo constancia de que también se encuentra registrado. No sé si hay por ahí algún otro Representante que no se haya conectado a la plataforma y no lo haya nombrado, creo que no.

Honorable Representante José Edilberto Caicedo Sastoque:

¿Usted me nombró a mí, Secretario, perdóneme?

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Sí señor.

Honorable Representante José Edilberto Caicedo Sastoque:

Gracias.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Con mucho gusto.

Bueno aprobado el Orden del Día, señor Presidente, pasamos al siguiente punto, aprobación de las Actas de Sesión de la Legislatura 2020 – 2021, son ellas:

Las Actas números 030 y 031 de marzo 24 del 2021 y de abril 14 del 2021, respectivamente, ya fueron puestas en conocimiento de cada uno de los Honorables Representantes.

Señor Presidente, para someterlas a votación.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Bueno, publicadas y anunciadas las Actas anteriormente leídas por el Secretario, las ponemos en consideración, se abre su discusión, anuncio que se va a cerrar, le preguntó la Comisión si aprueban las Actas anteriormente leídas.

Honorable Representante Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán:

Con su venia, señor Presidente, para abstenerme de aprobar una de las Actas que radiqué la observación, ya que me encontraba con permiso Legislativo.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

¿En qué Acta se abstiene de votar Honorable Representante Echeverry?

Honorable Representante Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán:

Yo le radiqué ya Secretario la observación, es la 05, creo.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Okey permítame un segundo. Tengo la 030 y la 031, permítame un segundito.

Honorable Representante Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán:

Puedo votar la 031.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Okey, entonces se abstiene de votar la 030, señor Presidente, con esa constancia que deja el Representante Nicolás Echeverry, someta a votación, por favor.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Se somete a consideración, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada, le pregunto a la Comisión con la observación del doctor Nicolás, si aprueban las Actas anteriormente leídas.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Han sido aprobadas, señor Presidente.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Muchas gracias, señor Secretario.

Siguiente punto del Orden del Día.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Señor Presidente, Tercero. Anuncio de Proyectos de ley.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Señor Secretario, nosotros ya hemos estado a la expectativa de la radicación de las Ponencias, creo hoy se cierra digamos el término para la presentación de las Ponencias, tenemos Proyectos muy importantes allí, vamos, entonces, señor Secretario, a dar espera a que tengamos un número importante de Ponencias para anunciarlas, de tal forma que si es necesario mañana o pasado mañana antes de cualquier otra actividad, hablo de la Plenaria, de ser necesario convocaremos para el anuncio de Proyectos.

Pero el llamado de atención es a agilizar la presentación de las Ponencias para dar inicio a los debates que todos estamos esperando de proyectos muy interesantes, muy importantes para el país, que han sido radicados y ya han sido asignadas las Ponencias.

Entonces, señor Secretario, vamos a darle espera al término que hemos dado para la presentación de las Ponencias y vamos a citar posteriormente para el anuncio exclusivos de esos Proyectos.

Honorable Representante José Edilberto Caicedo Sastoque:

Presidente.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Tiene la palabra doctor Caicedo.

Honorable Representante José Edilberto Caicedo Sastoque:

Gracias, señor Presidente, con un saludo para usted, para todos los compañeros de la Comisión Quinta, para el Secretario y todo el equipo.

Sí primero pues lamentar que la situación de nuestro país esté en este momento con las dificultades que todos conocemos, obviamente que eso como lo dijo el Representante Rubén Darío Molano, es una bendición propia de un país Democrático donde la Constitución respalda la manifestación respetuosa, pacífica, de los ciudadanos y por supuesto, como todos lo han dicho, rechazar el vandalismo y las actitudes miserables de quienes han querido aprovechar estas movilizaciones y estas manifestaciones para acabar con todo el equipamiento urbano y con agredir a la estructura, la infraestructura de los municipios, eso me parece absolutamente grave.

Quiero dejar una constancia de una preocupación que hablábamos ahora al comienzo y es que tenemos muchos problemas con sólo tres días de bloqueos para el caso de Cundinamarca que estratégicamente ustedes saben que Cundinamarca es el corazón de Colombia y rodea la capital de la República y sin lugar a dudas –discúlpenme que estoy acá con los animales en la casa–, pues rodea a la capital de la República y eso tiene una afectación enorme para los departamentos circundantes en materia de suministro de alimentos para Cundinamarca, Boyacá, el Tolima, el Meta y digamos que la

preocupación enorme es que hay unas cifras de pérdidas en sólo estos tres, cuatro días, que son graves, más de 500.000 litros de leche represados donde desde el Gobierno departamental se les está pidiendo a los Alcaldes que se pueda distribuir a las familias vulnerables y votar lo que sobre, porque la leche es un elemento perecedero.

Y de hecho hay una manifestación que quiero hacerla extensiva aquí en la Comisión de ANALAC, donde ANALAC establece un comunicado y dice que urge desbloqueo de vías para la recolección y el transporte de leche, dice que la Asociación Nacional de Productores de Leche - ANALAC solicita a las Autoridades de Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Risaralda y Valle del Cauca gestionar con urgencia las condiciones necesarias para permitir el tránsito de carrotanques y vehículos encargados de la recolección de la leche, en las fincas para transportarla a las Plantas de Procesamiento. La falta de recolección afecta a cientos de pequeños productores que perderán su producción diaria, dado que la leche es altamente perecedera.

Y adicionalmente los acopios están a tope sin poder entregar la leche a las pasteurizadoras, llevamos 3 días de bloqueo en los departamentos mencionados, por lo que nos urge el restablecimiento de la movilidad para evitar mayores pérdidas para el Sector Lechero de estas regiones. Cabe mencionar que las fincas también están teniendo dificultades para recibir sus insumos de producción, tales como balanceados y medicamentos, entre otros; recordemos que la leche es un producto vital en la canasta familiar de todos los colombianos.

Agradecemos de antemano la oportuna gestión del Gobierno nacional y de las Autoridades Departamentales y Municipales, pues obviamente que aquí hacemos eco en la Comisión Quinta del comunicado que emite la Junta Directiva de ANALAC, porque hay una preocupación enorme en ese sentido.

También el Sector de Fenavi se pronunció, las cifras son sorprendentes, hay 19'560.000 aves que en este momento están en riesgo, 16'790.000 en riesgo de muerte por falta de alimento, hay 6'185.000 huevos represados hasta hoy, 8.975 toneladas de pollo represadas, 124.000 toneladas de alimento concentrado, bloqueado sin poder llevar a la granja. Los bloqueos cada día que pasa aumentan.

Con esto lo que quiero Honorables Representantes, es poner sobre la Mesa que evidentemente el sector agropecuario se está viendo muy afectado con estos bloqueos, este Congreso ha estado atento y presto a aportar lo que haya que aportar para que esto se solucione a la mayor brevedad posible. Creemos que sin duda alguna ese retiro de la Reforma es un primer paso para generar un diálogo nacional y para buscar una salida.

Yo como lo hice a través de un mensaje de Twitter, invité al país y a mi departamento a la unidad, a la reflexión, hay que dialogar en medio de las diferencias, hay que respetar las diferencias, pero hay que dialogar. A este país hay que sacarlo adelante con propuestas, es indudable que la Pandemia dejó un déficit en el mundo entero y todos los países a lo largo de estos meses han estado buscándole salidas a cubrir ese Déficit Fiscal y lo que nosotros queremos es buscar la salida menos traumática para el bolsillo de los colombianos. El Congreso no está en contra de la clase media, ni en contra de la gente, el Congreso está buscando que lo que aprobemos sea lo que realmente le convenga al pueblo colombiano; no podemos mandar una carga de profundidad contra la clase media que afecta sin lugar a duda también a los más pobres.

Hay que resolver el tema del ingreso solidario, hay que resolver el tema de la atención a la Colombia Mayor, a nuestros abuelos, hay que mirar cómo el tema de generación E de matrículas para nuestros muchachos de los estratos más bajos se pueda sostener, cómo el tema de familias en acción y los giros monetarios, pues la parte monetaria se pueda sostener porque estamos en una crisis terrible.

Entonces, dejar esa constancia, señor Presidente, porque el Congreso está atento, debe estar vigilante y debe estar proactivo en esta materia, evidentemente que esta es una decisión que debe estar superando el ámbito del Congreso que es quien tomará finalmente una decisión de una Reforma, pero que debe ser incluyente y que debe dar respuesta a esta gran convocatoria que se debe hacer desde Presidencia de la República y desde todos los Sectores, para garantizar que la Sociedad Civil, que los Gremios, que los Sindicatos, que los Partidos de Gobierno, que los Partidos Independientes, de Oposición, concluyamos sin populismos baratos, por supuesto, a dar una solución a este problema porque el país está en un momento difícil y creo yo que es nuestra responsabilidad dar una respuesta y es nuestra responsabilidad aportar desde lo que nos toca para construir una Reforma o unas Reformas que realmente sean las pertinentes, para que nuestro país salga adelante.

Quería dejar esa constancia, señor Presidente, frente a los hechos por los que atravesamos en este momento en nuestra Patria.

Gracias Presidente.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Muchas gracias a usted, doctor Caicedo.

Le voy a dar el uso de la palabra al Representante Juan Fernando Espinal.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Presidente, perdón; antes dejar una constancia de que también se encuentran ya haciendo presencia en la Sesión el Honorable Representante Félix Alejandro Chica, al igual que el Representante Juan Fernando Espinal Ramírez y yo no había mencionado al doctor César Augusto Ortiz Zorro que desde el inicio de la Sesión se encuentra conectado con nosotros.

Con esa constancia, señor Presidente, para proseguir entonces con la Sesión.

Honorable Representante Juan Fernando Espinal Ramírez:

Presidente, muy buenos días, qué pena que levanté la mano, pero era para que el Secretario registrara mi asistencia, estaba en una cita médica y acabo de salir, pero aquí estoy presente, señor Presidente.

Muchas gracias.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Gracias a usted doctor Espinal.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Tiene la palabra el Representante Óscar Arango.

Honorable Representante Óscar Camilo Arango Cárdenas:

Muchísimas gracias, compañeros y un saludo para todos.

Lo que decía ahora Caicedo es verdad, este tema de este paro ayer, yo veía las imágenes, veía unos vídeos que montaba el Gobernador del Meta, donde hombre están votando prácticamente la leche y la cantidad de comida que se está dañando por culpa del paro, yo creo que es importante que se tienen que crear esos corredores humanitarios para que la comida pase a las diferentes regiones.

Y otro tema que me parece delicadísimo es cómo los medios de una u otra forma, nosotros hacemos un trabajo legislativo y estamos en beneficio del pueblo, trabajamos para el pueblo, pero los medios nos tienen acabado. Yo veía un video anoche de este señor Beto Coral allá en Miami con esos señalamientos a compañeros de nosotros, a Ardila, a Carlos Cuenca, a Juan David y a todo mundo, o sea, como si fuéramos como unos mafiosos, y no, yo creo que los medios tienen que también colocarse un poco más de paciencia y saber qué es lo que van a publicar en los medios.

Twitter se ha vuelto un canal de amarillismo donde sólo atacan a los Congresistas, donde solo muestran muerte de un lado a otro, como tratan a la fuerza pública y no, eso tiene que parar, eso tienen que controlarlo, o sea, nos tienen prácticamente por el piso y nos siguen dando y nos siguen dando y lo único que hacemos es trabajar.

Hoy miraba otro Tweet de la reforma a la salud, eso hasta ahora lo están debatiendo en esas respectivas Comisiones y ya hay panfletos de nosotros por las redes como si nosotros ya estuviéramos votando eso y eso lo que llama es que la gente se caliente más, que le dé más rabia, que salga, que sigan destruyendo y eso no da para más y yo pienso que los medios también tienen que ayudar mucho y algunos periodistas para que esto no siga pasando.

Muchísimas gracias, Presidente.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Gracias a usted, doctor Arango.

No sé si hay alguno de los Representantes que quisiera hacer una intervención adicional.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Perdón, Presidente, quiero dejar también constancia de la presencia del Honorable Representante César Augusto Pachón Achury, que está conectado con nosotros.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Muchas gracias, Secretario.

Entonces, démosle paso al siguiente punto del Orden del Día.

Honorable Representante César Augusto Ortiz Zorro:

Presidente pido la palabra.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Qué pena doctor César Ortiz, tiene el uso de la palabra.

Honorable Representante César Augusto Ortiz Zorro:

Gracias, Presidente.

Presidente, también lamentamos mucho lo que está pasando en las calles, lamentamos mucho ver a los hijos de los pobres matándose con los hijos de los pobres, porque eso son nuestros policías, nuestros policías son hijos de la clase media-baja y los que están en las calles lamentablemente, queridos compañeros, son la mayoría de colombianos que están aguantando hambre, millones de colombianos están aguantando hambre, millones de colombianos. Hace poco miraba un video de una familia que lo único que le podía dar a su hijo era agua con una cebolla, poner a cocinar agua con una cebolla y echarle sal, y así están miles de colombianos en este país.

Que por culpa de este Gobierno, que por culpa, por culpa de todo lo que ha pasado en los últimos Gobiernos y aquí de pronto podremos decir cosas para salvarnos, el Congreso tiene una gran responsabilidad, compañeros, una gran responsabilidad. ¿En dónde están esas Reformas que necesita el país?, uno de los países con un número de leyes, conmemoraciones y un poco de leyes, cuando las Reformas que requiere el país son esa Reforma a la Salud que tanto necesita el país, que tanto quiere, que la salud no sea un negocio, esa Reforma al Sector Agropecuario que tanto están pidiendo los campesinos a través de marchas y que y de paros y que se las incumplen, la Reforma a la Justicia, la Reforma a la Educación, esas son las Reformas.

Y seamos honestos, el Congreso de la República se ha quedado corto en esas Reformas esenciales y sustanciales que requiere el país, por eso no nos molestemos, es el sentimiento de la gente, yo no quiero entrar digamos en juicio sobre quién es bueno y quién es malo, no, yo aquí conozco gente del Centro Democrático que respeto muchísimo y aprecio

muchísimo, en especial aquí a mis compañeros Rubén, Héctor, yo sé que son seres espectaculares, líderes espectaculares, como conozco líderes de izquierda también espectaculares; no quiero entrar en ese juicio. En el juicio que quiero entrar es que el Congreso de la República ha sido cómplice de lo que está pasando en este país, en todos los aspectos.

Miren de lo que tanto he molestado acá, de lo que tanto he molestado, compañeros, sobre el tema petrolero, esos grandes ingresos que le llegaban allá al presupuesto por un modelo bueno que teníamos, pues hombre hoy el presupuesto se ve desfinanciado, porque les regalamos la renta a las Petroleras y ni siquiera Nacionales, ¡a Multinacionales!, intereses de Multinacionales Extranjeras, y le quitamos un montón de ingresos al Presupuesto General de la Nación, y ¿quién tiene que pagar eso, quién tiene que asumir eso?, pues la clase media baja, porque no les van a poner los impuestos a los más ricos, lo dicen los grandes economistas del mundo que las grandes exenciones a los ricos a los poderosos no funcionó, eso quebró. Por eso hoy el Presidente Biden uno de los países más capitalistas del mundo definitivamente tomó la decisión de que hay que subir impuesto de renta a las grandes capitales y a las grandes sociedades, porque digamos y está demostrado que quién genera casi el 70 el 80% de la mano de obra, las pequeñas y medianas empresas.

Pero no contentos con estos grandes ricos, superricos, que aquí lo sabemos, o sea, aquí nos podemos decir mentiras los unos con los otros, allá en el fondo de nuestro corazón sabemos qué es lo que pasa en este país y entonces estos señores súper ricos se llevan sus capitales a Paraísos Fiscales para evadir y eludir y el Gobierno llama a la solidaridad a los más pobres y a la clase media, ¿por qué no llama a la solidaridad a los que se beneficiaron, a los que se han venido beneficiando con grandes exenciones y con grandes beneficios, más de 90 billones en exenciones y beneficios tributarios?

Si hay que solidarizarnos que se solidaricen, que nos solidaricemos los Congresistas, que nos solidaricemos los de grandes ingresos, que se solidaricen los grandes capitales, son tiempos difíciles, llamemos a la solidaridad a estos grandes empresarios, pero no podemos sobre el hambre, la miseria y la desgracia de la gran mayoría de colombianos, tenemos que poner la carga impositiva. Y ¿qué fórmulas económicas? ¡Sí hay, muchísimas fórmulas económicas para poder sacar este país de la pobreza y de la miseria!

Y sobre todo mis queridos compañeros, que ustedes son muy juiciosos, apalancar el sector productivo, no tiene sentido andar sacando créditos con la Banca Internacional para pagar intereses a la Banca Internacional. Hay que apalancar ese sector que tanto hemos defendido en esta Comisión, al Sector Agropecuario que genera millones de empleos, apalancar el aparato productivo para que eso genere millones de empleos y genere ingresos y medio equilibrar esa Balanza Comercial que es deficitaria en nuestro país.

Entonces compañeros, es un tema de reflexión, es un tema de humanidad, no es salir y decir que allá están unos vándalos, terroristas. Sí, rechazamos todos esos actos vandálicos, los que se aprovechan de esta situación para sacar réditos, los mismos políticos que se aprovechan para sacar réditos políticos. Esa reflexión es humana, es salir a la calle compañeros y ver que la gente está desesperada, que la gente está desempleada, que no hay cómo llevar comida a la casa, que hay gente que sólo come una vez al día y que con Reformas arbitrarias como esta le iban a quitar los tres pedazos de pan que podían llevar a su hogar. Es eso, es ponernos en los pantalones de la gente que nos eligió, los que nos dijeron por favor defiéndanos allá.

Ustedes conocen mis posiciones compañeros, yo no soy de arbitrariedades, de poner ideas arbitrariamente. Pero sí, yo llamo a la solidaridad a ponernos en los pantalones de los que están allá, allá afuera están los que están aguantando hambre, compañeros, y le perdieron el miedo al Covid, compañeros, le perdieron el miedo al Covid. ¿Saben a qué le tienen miedo los colombianos? A que sus hijos se les mueran de hambre, porque los índices hoy dicen cuántos son los niveles de desempleo, cuántos son los niveles de pobreza, a cuánto aumentó la pobreza en este país.

Entonces, queridos compañeros, yo lamento muchísimo porque se están matando nuestros jóvenes con nuestros jóvenes policías, yo sé que ningún policía quiere salir a pegarle un tiro o salir a pegarle un garrotazo a un ciudadano. ¡No! Ellos sufren lo que sufren todos los colombianos, que ven que sus hijos no pueden ir a una buena Universidad, que su hijo no puede ir a un buen Colegio, que no puede darle la alimentación que desea, ellos también lo sufren e injustamente tenemos que enfrentarnos en la calle.

Entonces, compañeros, yo a veces veo que se alteran algunos cuando le mandan sus riendazos al Congreso de la República, pero es que en el Congreso también recae gran responsabilidad, gran responsabilidad, porque aquí cualquier proyecto que se pasa, "ah, no tiene que ir avalado por el Gobierno, tiene que ir avalado por el Ministro y sino no es un buen proyecto".

Entonces, compañeros, un poco más de solidaridad con esa gente que está ya marchando allá, con esos jóvenes que tuvieron la valentía que no tuvieron nuestros padres, esos jóvenes allá son unos valientes que acaban de echar para atrás una Reforma que iba a acabar más con la clase media, la clase media trabajadora y con los más humildes de este país, esos jóvenes que están allá son valientes, que no tienen miedo y que están saliendo a luchar por una generación que se resignó. Nuestros jóvenes no se resignaron, nuestros jóvenes no son vándalos, no son terroristas, háganles seguimiento a los verdaderos terroristas, la Policía y el Ejército tiene grupos de inteligencia, háganles el seguimiento a esos terroristas y aplíqueles toda el peso de la ley,

pero no a los jóvenes a los que les está quitando el ojo, ni a los jóvenes que les están quitando la vida.

Muchas gracias, querido Presidente.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Gracias, doctor César Ortiz.

Tiene el uso de la palabra el Representante Rubén Darío Molano.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Excúseme, Presidente, antes quiero registrar la presencia del Representante Franklin del Cristo Lozano de la Ossa y con eso dejo constancia de que los 20 miembros que integran esta Comisión han registrado su asistencia, señor Presidente.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Presidente, muchísimas gracias.

Quiero entrar en la línea de la reflexión y de la autocrítica que se ha suscitado de la Comisión a propósito de todos los hechos que están rodeando al país en las actuales circunstancias, yo personalmente creo que nos hace falta esa reflexión a la que invita César y a la que señalaba José ahora en su intervención.

Pero yo quisiera referirme de manera específica un hecho que me causó mucha sorpresa, me dio mucha tristeza y es el tema del Proyecto de Reforma Tributaria, no nos lo dejaron discutir en el Congreso, no tuvimos derecho a opinar sobre ese Proyecto, y, en contrapeso de eso, en la otra cara de eso, salieron unos jefes políticos a decirle al Congreso de la República qué es lo que deben hacer, cómo es que deben actuar, no tuvimos la oportunidad de pronunciarnos sobre la Reforma Tributaria y mire usted la cantidad de cosas que se han dicho sobre la Reforma, porque el Congreso no opinó.

Yo tengo muchos reparos a ese discurso que dice que la Reforma les grava a los sectores populares y a los sectores medios, hay un balance en la reforma que había que mirar. Yo por ejemplo estuve mirando con detenimiento la Reforma y yo no había visto algo similar a eso, aumento al impuesto a los dividendos, ¿de quién son los dividendos?, ¿de los pobres?, ¿los pobres son los que tienen acciones en las grandes empresas? Dos, incremento y haber dejado permanente el Impuesto del Patrimonio a quienes tuvieran más de 5.000 millones de pesos de Patrimonio descontado su vivienda, máximo hasta 820 millones de pesos, ¿son los pobres los que tienen Impuestos, los que tienen patrimonios de 5.000 millones de pesos? Tres, gravamen del 10% a los ingresos de los Sectores Públicos y Privados que ganen más de diez millones de pesos, ¿son los pobres los que ganan más de 10 millones de pesos, y que van a contribuir con un impuesto del 10%?, ¿son los pobres los que van a gravar más eso?

Tarifa diferencial del Impuesto a la Renta, mentiras que íbamos a pagar impuestos a la renta de este año, el impuesto a la renta lo empezaban a pagar las personas naturales a partir del año 2023 y en el rango que estaba establecido pagaban una cuota de 0.2 de contribución, mientras que los ingresos más altos llegaban a pagar hasta 25, 26, 27 y hasta el 30% de Impuesto a la Renta, carreta que estábamos poniendo a tributar a todo el mundo, mentiras que íbamos a poner a tributar a la clase media, legítimas mentiras, y el Congreso ausente, callado, sin decir una sola palabra, sin hablar, sin pronunciarse, como borregos haciendo caso de lo que digan unos señores que se dedicaron a hacer política con la Reforma Tributaria y no le permitieron al Congreso su derecho más elemental, el más mínimo derecho que tiene a discutir los temas trascendentales y los temas importantes de este país.

Pero por si fuera poco hoy existe una sobre tarifa, un impuesto a la renta a las empresas del sector financiero especialmente a los Bancos del 10% sobre la renta, hoy existe esa tarifa, pagan el 30%, tres puntos más, están pagando hoy el 33%, la Reforma y en las discusiones que se han tenido se había propuesto que esa tarifa se extendiera a todo el Sector Financiero, a las Compañías de Seguro, a las Fiduciarias, a las Compañías de Financiamiento, y fuera de eso que se aumentara el 20% y se hiciera temporal por tres o cuatro años para que con esos recursos se financiarán los programas sociales de los pobres. ¿Eso es afectar la clase media?, ¿eso es afectar los pobres?, ¿es afectar los pobres replantear los subsidios de gas y energía para que lleguen efectivamente a los estratos 1, 2 y 3?, y no por estratos sino por niveles de ingreso?

Es afectar a los pobres que se haya por primera vez hecho una discusión sobre el IVA, que es el impuesto más regresivo que hay en Colombia señores, el impuesto más regresivo que hay en Colombia es el IVA, el señor Luis Carlos Sarmiento, el decil 10 de la población, el 9 y el 10 compran los productos de la canasta básica familiar con los mismos beneficios y el mismo tratamiento del IVA que tienen los sectores 1, 2 y 3, los deciles más pobres de la población, ¿les parece justo ese tratamiento del IVA a los pobres?, pero no, como aquí no se le reconoce nada al Gobierno, el año pasado se hicieron dos millones de devoluciones del IVA a los sectores populares y la Reforma buscaba que todos, sobre todos los deciles mayores pagaran el IVA, pagaran el IVA y a los pobres se les devolviera a través del mecanismo de la devolución, pero eso no lo creen en Colombia, porque como no lo recibimos nosotros creemos que eso no sucede en Colombia.

Vayan pregunten a los sectores populares que les ha llegado la devolución del IVA, el programa y el proyecto y la y el Proyecto Reforma planteaba devolución del IVA para cuatro millones de colombianos, cuatro millones de hogares y subía lo que se estaba devolviendo hoy a lo que se iba a devolver en estos dos años, ¿eso es afectar a las clases populares? Claro, había muchos yerros en la Reforma, lo reconozco, pero todas las

Reformas que llegan al Congreso, fruto de una discusión democrática, fruto del cumplimiento de las obligaciones del Congreso, terminan haciendo profundas modificaciones.

Yo estoy seguro de que no hubiéramos permitido nunca en este Congreso que les hubieran puesto IVA a los servicios funerarios, que les hubieran puesto IVA a los servicios públicos. Que además también es una mitología lo de los servicios públicos, porque miremos cómo funcionan hoy las cosas en los estratos 4, 5 y 6: Los estratos 5 y 6 hoy paga una sobretasa en la prestación de los servicios públicos del 20%, con la cual se financian los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 en electricidad y en gas, el 20% oigan bien y esa sobretasa también la paga el sector industrial y la paga el sector comercial. ¿qué fue lo que dijo la Reforma? Que les eliminaran las sobretasas a los estratos 5 y 6 y a los Sectores Industriales y Comerciales y que quedaran gravados con un IVA del 19%. ¿Por qué razón planteó eso la Reforma?, porque querían que los sectores industriales y comerciales pudieran descontar de su impuesto a la renta el IVA del 19%, cosa que no podían hacer con la sobretasa. Grave que hubieran intentado gravar los servicios públicos del estrato 4 que estaba en la mitad y ese sí ha sido afectado por la Pandemia. Pero eso con toda seguridad no hubiera pasado en el Congreso, eso nosotros hubiéramos podido actuar contra eso. Pero eso no tenía ninguna afectación en relación con los sectores populares.

Nos opusimos radicalmente muchos a que en el Sector Agropecuario se cambiara el régimen de exentos por el régimen de excluidos y le enviamos 1.000 informes al Gobierno diciéndole que eso aumentaba los precios de los alimentos básicos, perdía la competitividad el sector y terminaban afectados los sectores populares, pero qué tristeza que todos los que estudiamos, todos los que teníamos propuestas para modificar eso porque compartíamos la idea de que en el país hay que conseguir recursos para mantener los programas sociales, para evitar el deterioro de la pobreza que se está dando por efecto de la Pandemia, qué tristeza que el Gobierno, el Congreso les haya permitido algunos jefes dedicados a la politiquería y a posicionar sus fichas de cara a la elección del 2022, hubiéramos entregado nuestro derecho a discutir, a debatir y a producir una Reforma que le hubiera servido al pueblo colombiano en las actuales circunstancias.

Después no nos quejemos, después no digamos que nos tratan de vagos, después no digamos que nos tratan de vividores, porque nosotros mismos renunciamos al ejercicio de nuestros propios derechos a cuenta de preservar un statu quo de unos jefes de unos partidos que dedicados a la politiquería han impedido que el Congreso cumpla con una de las tareas más importantes en uno de los momentos más difíciles de este país, porque no se les olvide que la responsabilidad de todo lo que está pasando es una responsabilidad acumulada, histórica, de problemas que han envejecido mal en Colombia y que hoy están estallando y que fueron exacerbados, oigan bien, no por las políticas del Presidente Duque como están diciendo sino por los efectos de la Pandemia, señores, que es un fenómeno mundial, que es un fenómeno que ha afectado a todos los países, eso no se lo inventó Colombia, eso no se lo inventó este Gobierno.

O ¿les parece poco lo que significa paralizar la economía durante dos o tres meses y el frenazo que eso significa a la actividad económica y el impacto que eso tiene sobre los temas sociales? O ¿es que les parece que los datos que dio el DANE del 2019 sobre pobreza y pobreza extrema no son una consecuencia directa del efecto de la Pandemia? O ¿todavía van a decir que eso se lo inventó el actual Gobierno, o todavía van a decir que eso no es producto de un acumulado histórico de haber tratado mal los problemas que se han tratado en Colombia y de haber dejado envejecerlos mal envejecidos y sin ninguna posibilidad de resolución?

Íbamos a mantener Ingreso Solidario, que es un programa que se creó en este Gobierno, qué pena con todos, pero ese Programa se creó fue en este Gobierno, no se creó el otro, e iba el Programa directo a financiar 5 millones de hogares, 20 millones de personas, quedaban 8 millones de pobres sin atender, pero pasábamos de nada a 20, eso era lo que tenía que haber discutido el Congreso, eso era lo que debíamos saber todos, absolutamente todos reclamar como centro del debate para producir una Reforma que estoy absolutamente seguro de que el Congreso hubiera mejorado sustancialmente y hubiera interpretado de mejor manera la realidad.

Pero aquí mandan unos caciques que hacen política, que están dedicados a mirar a ver cómo posicionan sus fichas en el 2022 y poco, absolutamente poco les importa el pueblo, no me vengan con la carreta de que lo que estaban haciendo era defendiendo los intereses del pueblo, porque detrás de eso lo único que están defendiendo son sus intereses politiqueros y electorales que están buscando posicionar ya de cara al 2022.

Mucha hipocresía de todos esos Partidos Políticos y qué tristeza la de nuestro Congreso haberse silenciado y callado y guardado silencio en una de las circunstancias más difíciles por la que está atravesando nuestro país.

Mil gracias, Presidente.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Muchas gracias, doctor Rubén Darío.

Tiene el uso de la palabra el doctor Héctor Ángel Ortiz.

Honorable Representante Ángel María Gaitán Pulido:

Ángel María Gaitán, Presidente, si es tan amable.

Honorable Representante Héctor Ángel Ortiz Núñez:

Gracias, señor Presidente.

Tranquilo doctor Rubén Darío, tranquilo tome agüita. Es evidente que el trasfondo del Paro Nacional debe ser político, debe ser político porque yo pregunto, señor Presidente y colegas, si bien es cierto, como lo plantea muy acertadamente mi colega Ortiz Zorro, y así lo muestra el DANE, que las familias colombianas hoy si almuerzan no comen, si desayunan no almuerzan y al mismo tiempo de mi departamento miles y miles y miles de toneladas perdidas producto del famoso paro, ¿quién tiene la culpa?, ¿el Estado?, o nos ponemos a analizar realmente quién está detrás del Paro y cuando nosotros vemos que en el Paro aparecen personas con chalecos uniformados de Prensa, uniformados de Fuerza Pública, eso no sale de la noche a la mañana, queridos colegas, detrás de esto debe haber algunas organizaciones criminales quizá o gente que se organiza; porque como bien lo expresan mis colegas, ya están cansados de tantos problemas en el país.

Pero lo que uno no tolera es eso, que haya miles de toneladas de comidas de mi departamento, despensa de la capital y de la región del interior del país, y entonces nuestros paperos, doctor Pachón, pidiendo los 50.000 millones de subsidio ¿para qué?, para sacar sus productos y que se pierdan aquí en Gachancipá y en Tocancipá o devolverse, porque los vándalos no los dejan pasar hacia Bogotá, y la culpa es de Duque, porque presentó una Reforma Tributaria quizá tardía la retiró, el mismo Partido de Gobierno del cual hoy hago parte del Centro Democrático, en su momento le dijo de algunas cosas que no era conveniente incluirlas, pero que hoy después de presentar su retiro o solicitar el retiro por parte del Congreso no se ha dado, aún persisten los Paros.

Entonces, el Paro no era la Reforma Tributaria. Ya algún Parlamentario del Valle manifiesta que ya no es el Paro por la Reforma Tributaria, sino por la Salud. Entonces, es netamente político el Paro, y están utilizando estas herramientas que a mi modo de ver es irresponsable. Respeto las formas de lucha, claro, las respetamos, pero no es el momento, porque es que el país y el mundo están en pandemia. Pero estas personas que quieren utilizar esta forma de lucha para poder llegar al poder me parece que no están siendo consecuentes con la realidad de mi país.

Lo viví en Tunja el día de ayer, los taxistas en Tunja no sabían que el día domingo se había archivado el proyecto de las plataformas para modificar el Sistema de Transporte en Colombia, que se había hundido el día domingo, atípico claro, un domingo, pero se archivó y los taxistas estaban parados porque no podían permitir que el Gobierno nacional apoyara este tipo de proyectos, ¿qué le demuestra a uno?, que no hay conocimiento de quiénes están participando en el Paro.

Y tuve la oportunidad de acudir también a algunos muchachos para preguntar qué sabían de la Reforma Tributaria y la grave sorpresa es que no sabían, cuántas familias se han visto beneficiadas por ingreso solidario, cuántos de ellos podían verse beneficiados por la gratuidad de la educación de estratos 1, 2 y 3 y tampoco sabían cuánta plata se ha gastado el Gobierno nacional en Economía Naranja para generar empleo, entonces uno lo que puede concluir es que repito se respeta esa forma de lucha pero no es la manera más adecuada.

Esta Comisión la que tiene que ver con temas coyunturales como la parte agrícola, la seguridad alimentaria de nuestro país que está en riesgo en virtud a que ustedes lo han visto por los diferentes medios, doctor Caicedo, pollo, huevos, carne, ya está sufriendo el país de una insuficiencia alimentaria producto de los Paros y, repito, la Reforma Tributaria ya lo manifestó el Gobierno nacional, ¿qué sigue? Consenso, obvio no van a ser los 25 billones, pero entonces con qué vamos a alimentar a esas familias que han recibido el ingreso solidario, esas mipymes que han recibido el 40% en subsidio de la nómina, ¿eso no es pensar en lo social, o es que el Gobierno no manda los mensajes como deben ser?

Seremos nosotros de manera sensata quienes no son parte del Gobierno y quienes piensan diferente a este Gobierno, los que tenemos que ver desde nuestras regiones empezar a apaciguar a las personas y tratar de venderles una imagen diferente de lo que es el Congreso, bien lo decía el doctor Rubén Darío, es que ni siquiera nos permitieron quitarnos el Fuero de que ellos mismos que nos dieron los habitantes, quitarnos esa posibilidad y analizar la Reforma Tributaria, a quién se le ocurre que una persona como nosotros, lo más sensatos vayan en Pandemia a aprobar lo que se prendía aprobar por parte del Gobierno, ¿en qué va a terminar?, en qué en un consenso el Gobierno nacional va a tener que restringirse como lo está haciendo en el gasto público y muchas de esas familias quizá, ojo, muchas de esas familias que hasta la fecha de hoy han recibido el Ingreso Solidario van a ser marginada de hacerlo, porque los recursos no alcanzan con lo que se pretende hacer la Reforma Tributaria actual.

Habrá formas, también tiene razón el doctor Ortiz Zorro. Sí, quizás el Gobierno tiene que revisar las exenciones a las cuales las Empresas en Colombia se vieron favorecidas y a partir de este y el otro año que se veían beneficiadas para poder disminuir parte de las exenciones, pero eso se hace en este, en el escenario político que es el Congreso de la República.

Yo he dejado esas dos constancias, señor Presidente, para que con sensatez, con tranquilidad, actuemos desde las orillas diferentes con todo debido respeto de los partidos que son de oposición, yo celebro su sensatez doctor Ortiz Zorro, pero es que también uno ve a colegas de otros Partidos que actúan sin sentido frente a los temas, sin sentido y consideración de lo que está pasando realmente en el país, esperemos a ver qué pasa con la Reforma que no es de esta Comisión.

Pero yo quería doctor Grisales, dejar esta constancia en esos dos sentidos, muchas gracias.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Gracias a usted, Representante Héctor Ángel.

Tiene el uso de la palabra el Representante Ángel María Gaitán.

Honorable Representante Ángel María Gaitán Pulido:

Gracias, Presidente y un saludo especial para todos los compañeros.

A ver yo quiero hacer un comentario al respecto escuchando a mis compañeros, a César Ortiz, por supuesto, a mi gran amigo Rubén Darío Molano y escuchando ahorita a mi tocayo, que es triste y es muy lamentable lo que en nuestro país está pasando y lo que esperamos Dios quiera no vaya a pasar, mucho más allá de lo que hoy estamos viendo y lo que estamos escuchando y sencillamente aquí hay cosas que nos llevan a reflexionar absolutamente a todos, porque aquí hay situaciones que seguramente las desconoce no solamente el Gobierno sino todos los últimos Gobiernos quienes han gobernado este país desconocen tristemente la realidad de nuestro país, de la inmensa mayoría de los colombianos.

Esto no es un problema, yo lo he dicho, no es solamente este Gobierno. No; aquí fue la gota que rebosó la copa, pero yo coincido con lo que expresa mi compañero César Augusto Ortiz Zorro, y parcialmente con lo que expresa Rubén Darío. Miren, aquí hay cosas que a nosotros mismos se nos están olvidando, hoy haga, suceda lo que suceda hoy en este país, ni a este Gobierno como a los últimos Gobiernos de los últimos 30 años el pueblo colombiano les cree cada día menos y nos que cree cada día menos a la clase política, a todos, absolutamente a todos, el que se retire la Reforma tampoco no es ninguna solución, mucho menos que se vaya a presentar otra, porque la desconfianza cada día crece más total del pueblo colombiano hacia el Congreso de Colombia, hacia todo el Congreso, en un 98% del Congreso de Colombia y porque un poquito, ese poquito sector de Congreso desafortunadamente aprovecha esto para hacer populismo, entonces mire la situación tan delicada en que estamos.

Yo lo he expresado tal vez en estas Comisiones (y en algunas veces en la Plenaria) que el Congreso de Colombia se ha convertido en un apéndice del Ejecutivo y cada día más me convenzo más de eso. Las verdaderas Reformas que tiene que enfrentar el Congreso o que ha tenido que enfrentar este Congreso cada día se alejan más de esas verdaderas Reformas estructurales que necesita el país, en lo social, en lo económico, en lo político, las grandes Reformas a las Altas Cortes. Eso ahí están las Reformas a la salud, a la educación, las reformas al sector rural, que es el sector que hoy nos tiene y qué es el más afectado día a día cuando se generan todos estos Paros, a los pequeños y los medianos productores que tienen a este país y que le mostraron al mundo, no solamente a Colombia, sino al mundo, pero en el caso de nuestro país, hoy nos tienen a todos recibiendo los alimentos y también son los más perjudicados.

Y sencillamente aquí podemos rasgarnos las vestiduras todos y el tema no va a ser de que se presente otra Reforma concertada, ni siquiera eso, porque yo coincido en parte con lo que plantea Molano, muchas cosas importantes que han venido en la Reforma. Lo que pasa es que se acrecentó y llegó al extremo de la desconfianza frente al pueblo colombiano por parte de este Gobierno que le tocó echar la última gota frente a la situación del país, y el Congreso ni que decirlo. Es que yo pregunto ¿será que el Congreso de Colombia hoy goza de la admiración, del respeto, de la confianza y la credibilidad del pueblo colombiano? Nada. Entonces aquí cualquier cosa que haga el Congreso de Colombia que lo haga concertadamente en los mejores sanos propósitos como ustedes lo plantean, tocayo y Molano, desafortunadamente el pueblo colombiano no nos va a creer y no nos va a creer por todos los comportamientos de los últimos años, de los últimos 20, 30 años del Congreso y, entonces, el temor viene mucho más aún ahora para enfrentar las verdaderas soluciones a los problemas que tiene este país.

Y por eso esa bomba social que algunos quieren detonar y que hoy comienza a verse, por allá en sectores donde ni siquiera en el mismo Casanare donde decía Ortiz Zorro, donde la gente ni siquiera salía a manifestar y yo no sé pues seguramente son centros poblados muy pequeños, pero también se expresan por el abandono Estatal, por los temas aplazados en este país, que no han sido abordados ni por el Congreso ni por los últimos Gobiernos; entonces ahorita la situación es mucho más difícil y es mucho más difícil si se vuelve a presentar otra Reforma Tributaria. ¿Usted cree que le van a creer, nos van a creer al Congreso y le van a creer a este Gobierno de que son los que tenemos que abordarla, que somos los que tenemos que aprobarla y colocársela a los colombianos?, ¿nos van a creer?, el tema ahorita no es lo que se ha dejado de hacer, el tema ahorita no es de las bondades que traía la Reforma Tributaria, ahorita ya le metieron a esto el tema también y yo estoy de acuerdo, con la famosa Reforma a la Salud, delicado, y ahorita entonces van a traer otros temas como coyuntura para poder poner en cintura a este Gobierno y por supuesto, al Congreso de Colombia.

Yo no quiero ser ave de mal agüero pero lo que sí puedo decir es que el pueblo colombiano en su inmensa mayoría tiene la razón, cuando hablo del pueblo colombiano la clase media y baja tienen la razón, se mamó del Congreso de Colombia y así hagamos, Caicedo, todo lo que queramos hacer, así coloquemos nosotros y actuemos con el corazón en la mano y con el cerebro sintonizado, el pueblo colombiano no nos va a creer y le tocó a este Gobierno manejar esa bomba social que yo veo que está casi que explotando y cada día como que tiende a crecer más, Dios permita que no sea así.

Yo no sé qué pueda pasar pero hoy los Partidos Políticos que no representamos a unas inmensas mayorías para nada, lejos de la realidad de interpretar al pueblo colombiano, hoy sí que tenemos una encrucijada grande en el Congreso para enfrentarla y yo no sé quién tenga la fórmula mágica porque aquí va a tocar es involucrar otros sectores distintos de la misma clase política que es la que finalmente termina aprobando las Reformas en el Congreso y seguramente la salida de la mano del Gobierno, pero tendrán que ser otros los escenarios casi que de discusión para que se le traiga al Congreso y a este Gobierno, si el tema va a nacer del Congreso en pleno, del Gobierno en pleno, la situación yo la veo supremamente complicada, la desconfianza es total y por eso hagamos lo que tengamos que hacer yo veo difícilmente que el pueblo nos vaya a creer.

La verdad yo quiero sin tocar ningún tema puntual porque no quiero hacer referencia a ellos, pero lo que ha expresado César Ortiz Zorro, es la razón de nuestro país, desafortunadamente es la realidad de lo que está pasando en este país, y a ello sumado todo un tema de corrupción que toca a todos los niveles, pero todos los niveles, y toca todo el Aparato Público, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y toca todos los estamentos, todos, no se salva uno solo de la corrupción en este país, el tema de la evasión, y por eso aquí no sé quién tenga la fórmula mágica y ojalá tengamos la sabiduría para poder enfrentar los temas que hoy reclaman los colombianos y esperar que nuestro país no se vaya a desbordar, porque la inmensa mayoría del pueblo colombiano hoy sí que tiene más la razón.

Y hoy sí que el Congreso de Colombia seguramente nos tocó a este Congreso, pero ha sido reiterativo siempre en nuestros pronunciamientos de lo que el Congreso de Colombia ha dejado de hacer también en los últimos 30 años, igual que los últimos Gobiernos últimos 30 años y es una bomba de tiempo, esa bomba social y esa bomba en lo económico y por supuesto, en lo ambiental, la que hoy están reclamando muchos colombianos que salen a protestar y que apoyamos las protestas, lo que no apoyamos es el vandalismo tremendo, el terrorismo y la muerte los colombianos, de la policía, de los manifestantes, de las fechorías y de la destrucción de todo el Aparato Productivo de nuestro país, me parece muy triste, muy vergonzante, pero esa es la cara del país que desafortunadamente nosotros tenemos hoy que lo demostramos ante el mundo, tenemos, estamos enfrentados a las mayores dificultades y esperamos que podamos tener la sabiduría y la claridad para enfrentar los problemas.

Yo no hago alusión a ningún tema puntual tan solo de manera muy general, pero decirle, Presidente, que hoy nosotros tenemos una inmensa responsabilidad y que seguramente no nos van a escuchar, cualquier cosa que nosotros hoy planteemos en materia de solución tendrá que venir casi que concertada de otros sectores para que el Congreso ya se siente después a revisarla y a refrendarla y de la mano de este Gobierno, porque ni al Congreso de Colombia en su inmensa mayoría el pueblo colombiano no nos cree, al igual que este Gobierno el pueblo colombiano no le cree y por eso ese es el gran reto para buscar la salida concertada para las Reformas que necesita este país y las salidas inmediatas que reclama este país y que no se nos vaya a descomponer más de lo que hoy desafortunadamente está pasando en Colombia.

Yo quiero agradecerle, Presidente, estos minutos y sencillamente quería decir eso, expresarle a todo el pueblo colombiano que reclama hoy justicia, que reclama por una justicia, que reclama por solidaridad, es el pueblo colombiano. Aquí no tenemos que solidarizarnos nosotros mismos ante el Congreso, nos podemos solidarizarnos nosotros mismos frente al Gobierno. Es que tenemos que solidarizarnos es frente a millones de colombianos que hoy salen a reclamar porque necesitan, porque hemos sido todos inferiores a las soluciones que reclama el pueblo colombiano.

Y por eso podamos entre todos ser capaces de proponer la salida que reclaman la mayoría de los colombianos que hoy desafortunadamente nos señalan absolutamente por todo lo que pasa en este país, al primero que señalan es al Congreso, nosotros somos los responsables de todas las situaciones desafortunadas que pasan en este país, es el Congreso, y claro, en un Gobierno donde explotaron las cosas y en un Gobierno también que terminó diciéndole muchas mentiras con un Ministro totalmente errado y equivocado, donde pensaba que solamente aquí los únicos que tienen que beneficiarse eran los ricos de este país en su inmensa mayoría. Por eso cuando llegó la Reforma ya nadie les creyó y frente a este Gobierno ni mucho menos le va a pedir al Congreso.

Yo agradezco, Presidente, y esas eran mis palabras compañeros, un abrazo para todos, feliz día.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Muchas gracias, doctor Ángel María Gaitán.

Tiene el uso de la palabra el doctor Juan Fernando Espinal.

Honorable Representante Juan Fernando Espinal Ramírez:

Presidente, muy buenos días y un saludo muy especial para usted y para todos los miembros de la Comisión.

Yo quiero dejar hoy algunas reflexiones, la verdad no quería intervenir, pero después de escuchar algunas intervenciones creo que tengo el deber moral de exponer algunas reflexiones ante los colombianos, y bien lo decía el doctor Ángel Gaitán, no ante ustedes a quien respeto profundamente, a quien respeto profundamente ante los colombianos.

Lo primero es que desafortunadamente al Presidente Iván Duque le tocó bailar con la más fea, antes de él posesionarse como Presidente lo señalaban como responsable de la muerte de Líderes Sociales. Inmediatamente él ganó en la segunda vuelta, el Senador de la República Petro inmediatamente

convocó a su oposición a las calles y lo dijo, lo dijo claramente, en las calles nos vamos a ver y desde que ganó el Presidente Iván Duque hemos visto protesta tras protesta en las calles tratando de desestabilizar el Gobierno del Presidente Duque, señalándolo de manera infame de responsabilidades sumadas a lo largo de la historia de Colombia.

Y creo que no podemos tapar la realidad, no podemos negarnos a que hay dificultades sociales, que falta mucho en el país, pero también tenemos que resaltar que esta República durante 200 años ha sido ejemplo de resiliencia que ha logrado soportar al narcotráfico, las masacres en manos de las FARC que durante muchos años sembraron muerte y terror, que llegó el Presidente Juan Manuel Santos con su protesta de Paz, que firmó la Paz entre él y las FARC, porque también hay que recordarles a los colombianos que ganó el Plebiscito, ganó el No al Plebiscito, donde millones y millones de colombianos decíamos con ese acuerdo no estamos de acuerdo y ganó el No en el Plebiscito, así que la primera reflexión que yo hago es que hay problemas, hay dificultades, pero no podemos tampoco desconocer que a este Gobierno le tocó enfrentar un Estatuto de Oposición, 10 miembros de las FARC en el Congreso de la República con voz y con voto, además, una Oposición fortalecida llamando a las calles a desestabilizar el Estado colombiano y yo creo que eso no lo podemos desconocer.

Lo segundo es que creo que desde esta Comisión donde nos competen a nosotros temas en materia de agricultura, de estabilidad alimentaria, yo creo, Presidente, que deberíamos analizar de manera respetuosa, si están de acuerdo o los que estamos de acuerdo, un llamado a los Líderes del Paro, porque bienvenidas las manifestaciones, bienvenida la protesta, Presidente, pero lo que nosotros no podemos permitir es que bloqueen los Puertos, los Aeropuertos, nuestras vías, que se esté perdiendo el alimento en los camiones, que se descomponga la carne, que los floricultores no puedan trasladar sus productos a Bogotá para ser exportadas, que vemos el Sector Avicultor en el departamento del Valle del Cauca levantando la mano y reclamando apoyo, que nosotros no podemos seguir viendo cómo el Sector Lechero hoy está botando la leche por las alcantarillas porque no pueden sacar el producto, yo creo que eso es lo que nosotros queremos ver Presidente, colegas y colombianos.

Y, vuelvo y lo repito, bienvenida la protesta, bienvenida la manifestación, pero rechazamos de manera contundente el vandalismo y el terrorismo camuflado que está acabando con las Instituciones Públicas, con el Sector Privado, que están saqueando el Sector Comercial, a esos miles y miles de comerciantes que en medio de la Pandemia quieren sacar adelante su negocio y no quieren perder más empleo. Recordemos que hoy la pobreza está en niveles del 42% y nadie quería esto, señores Representantes. El Presidente Iván Duque no quería esto; ningún Presidente a nivel mundial quería ver hoy lo que estamos viviendo en materia económica.

Así que mi última reflexión es: Tenemos que estar unidos todos, absolutamente todos los colombianos independientemente de las intenciones políticas que se tengan, pero yo sí tengo que rechazar, Presidente, cómo vemos a Congresistas vía Twitter, vía videos, incendiando el país, incitando a incendiar el país. Yo creo que esa no es la manera de uno ganar en Democracia, esa no es la manera de uno tratar de desestabilizar un Estado y un Gobierno, pueden que haya deficiencias en el Gobierno, todos los Gobiernos lo han tenido, Presidente, puede que haya deficiencias, claro que sí, puede que falte mucho, claro que sí.

Pero llega el momento en que todos tenemos que estar más unidos que nunca desde el punto de vista Político, los Empresarios, la Academia, los Ciudadanos y rechazar los actos vandálicos, trabajar en una propuesta de Reforma Tributaria que beneficie a los más necesitados, que no aporree las clases medias, porque lo han dicho los empresarios más importantes del país a todos los colombianos, ellos están listos para ayudar y para aportar su granito de arena, y yo creo que hay algo elemental Presidente, este Congreso sí tiene el reto y es el reto también de enviar un mensaje de unión.

Yo rechazo profundamente el trino del Representante a la Cámara Sergio Marín, de las FARC, y lo voy a decir entre comillas, Presidente, Patria o Muerte, Socialismo o Muerte, Revolución Molecular Disipada o Muerte Entrópica Concentrada, Venceremos. A mí me preocupa mucho ese mensaje del Representante a la Cámara, esos no son los mensajes que nosotros tenemos que enviar desde este Congreso de la República a los colombianos, todo el rechazo a ese mensaje, ojalá la Fiscalía, el Comité de Ética del Congreso de la República lo investigue, lo sancione. Ese no es el mensaje Representante, creo que usted está equivocado, usted está en el recinto de la Democracia y no en el monte.

Gracias, Presidente.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Gracias, doctor Espinal.

Tiene el uso de la palabra el Representante Crisanto Pisso.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Doctor Pisso, doctor Crisanto.

Honorable Representante César Augusto Pachón Achury:

Presidente, yo le había pedido el uso de la palabra para que revise el chat, gracias.

Honorable Representante Crisanto Pisso Mazabuel:

Presidente.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Adelante doctor Crisanto Pisso

Honorable Representante Crisanto Pisso Mazabuel:

Presidente, muchas gracias, saludo a todos los compañeros, a usted, señor Presidente.

En la línea de los compañeros Representantes, lo que está sucediendo en el país y particularmente lo que sucede acá al suroccidente de Colombia, Nariño, Cauca, Valle, lo de Cali supremamente complicado, en Popayán están cerradas las vías hacia el sur y hacia el norte. Hay movilización desde la parte rural con una fuerte presencia campesina y lo que ha venido sucediendo en Popayán de verdad muy fuerte, sin que se haya logrado concertar con la gente para que en las manifestaciones no haya ataques a la Policía y más o menos ya se haya podido llegar como a algunos acuerdos.

Esto es muy complicado, los campesinos nuestros tienen suspendidos todos los envíos de leche, de productos perecederos y lo más complicado donde están las avícolas no está llegando alimento. Anoche en Cali se logró un acuerdo para permitir qué entre algo de combustible, se puedan movilizar algunas ambulancias, pero de verdad muy complejo.

Nosotros no creemos que militarizar al país sea una salida, eso no lo podemos permitir, yo creo que hay que avanzar hacia una reconciliación. El Presidente la tiene muy difícil y lo que manifiestan los compañeros de lo que está pasando en todo el país, esto no está fácil, esto está muy complejo, compañeros, aquí en Popayán se comienzan a mover ya guardias campesinas y guardias indígenas, este taponamiento va para largo y creemos que la solución debe ser concertar, hablar y tiene que abrirse el espacio, el Presidente de la Cámara ha decidido abrir el espacio en la Plenaria que va a haber mañana miércoles, yo creo que debe ser una solución y en el Congreso tenemos que abrir el espacio para oír a la gente**.**

Esto no puede ser simplemente el Congreso como se manifiesta en una nueva reforma, no, esto hay que oír a la gente, si no la oímos esto se nos sale de las manos y el Ejército no es la solución para para el país, militarizar a Colombia en estos momentos no, creo que la mejor pandemia, rezago, pobreza, hambre, no está fácil de resolver, esto tenemos que hacerlo concertadamente y creo que ahí tenemos mucho que ver en el Congreso.

Rubén Darío decía una cosa, perdimos la oportunidad de haber debatido en el Congreso el escenario de la democracia, debatir la Reforma, pero es que a ratos se empeñan en que eso tiene que salir del centro hacia a la periferia, no es tan fácil, acá hay un gran malestar, esto se va a complicar mucho más, Nariño sin gas, sin gasolina, Cauca sin comida, la comida, la leche, la papa, todo esto se está perdiendo y no hay cómo moverse, señor Presidente.

Así que la situación es bastante compleja y estamos prestos a darle la cara a la gente, a ayudar, yo creo que abrir el espacio en la Comisión al debate que esperábamos hoy para oír a los sectores rurales, para oír a los gremios, hay que hacerlo seguidamente y esperemos que podamos abrir, señor Presidente, el espacio donde podamos invitar a los gremios a oírlos, sus preocupaciones, señor Presidente, que no está fácil.

Muchas gracias, buen día.

Presidente, honorable representante Luciano Grisales Londoño:

Muchas gracias, doctor Crisanto.

Tiene el uso de la palabra el representante César Pachón.

El honorable representante César Augusto Pachón Achury:

Gracias, señor Presidente, un cordial saludo para la Mesa Directiva y para todos los compañeros y compañeras.

Bueno, estaba mirando, escuchando como los representantes del Centro Democrático justifican la masacre, justifican militarizar las ciudades, como los representantes del Centro Democrático justifican que un soldado, que un policía maten a un joven que no ha tenido las oportunidades, yo creo que nada de eso que ellos expusieron justifica el asesinato, todo el ataque que le han hecho a la protesta social, donde hemos visto ciudadanos que van caminando por un andén y les pegan un tiro las Fuerzas Militares o la fuerza de la policía, la verdad que nada de eso se justifica.

Les recuerdo señores que así no lo hayan aceptado y quieran hacer trizas un Acuerdo de Paz, aquí se firmó un Acuerdo de Paz y ustedes lo tienen que respetar y no lo quieren respetar, ustedes quieren ver es una guerra, quieren ver es grupos de subversivos secuestrando, quieren ver es grupos subversivos poniendo bombas, porque así es que ustedes crecen y se vuelven fuertes en el poder, pues les digo que no, la población colombiana no va a tomar armas simplemente va a salir a marchas pacíficas, es voluntad de ellos, aquí ningún congresista están llamándolos o impulsándolos, ustedes mismos se dan cuenta, incluso ayer en la rueda de prensa, el mismo senador Gustavo Petro le preguntaron que porque se había quedado callado en las redes sociales y es obvio, para que no digan que es que él está invitando o alguno de nosotros estamos invitando a la protesta social que llegue a otro límites**.**

Respetamos la protesta social y acompañamos la protesta social y hoy es un estallido social, es simplemente la mala ejecución de la política, el mal gobierno el que hoy hace que la gente salga, el que hoy hace que la gente reclame y no es solo la Reforma Tributaria, es por ejemplo la vacunación, se le autorizó desde el año pasado, ustedes mismos votaron, nosotros también votamos y le dijimos al Gobierno tiene el dinero vaya haga la negociación, le autorizamos todo ¿Y qué hizo?, se durmieron, ustedes señores del Centro Democrático, su Gobierno no ha sido efectivo con la vacunación, esa es la base de la reactivación económica, mientras ustedes señores del Centro Democrático si su Gobierno del Presidente Iván Duque, del exsenador

Uribe, no vacunan la gente cómo va a haber una reactivación económica.

Ahora, en que se justifican ustedes para una Reforma Tributaria, se justifican en que supuestamente hay un gasto social y un ingreso solidario, pero no sé si ustedes hayan revisado las bases de datos o hayan ingresado al programa de estas ayudas o de los que les dan la miseria que le devuelven con el IVA, con el mismo número de cédula aparecen varios nombres de personas, números de cédula que no existen, personas fallecidas, tienen un gasto exorbitante, por ejemplo, para la devolución del IVA casi un billón de pesos para entregar dos millones de pesos, a ustedes les parece justo eso, la verdad admítalo, este estallido social es debido a que ustedes no han gobernado bien, a que ustedes están gobernando mal, en que ustedes le están haciendo daño al país.

Entonces, no vengan aquí a justificarse que asesina a jóvenes los militares o los policías por orden de un expresidiario que da las órdenes en Twitter, al Presidente la República, no vengan aquí a justificarse, porque realmente no estamos de acuerdo en esta masacre que ustedes están llevando a cabo, este Gobierno tiene que pagar esa masacre, este Gobierno tiene que escuchar a todos los sectores sociales y este Congreso tiene que ayudar y apoyar en ese proceso, porque aquí no están diciendo reúnase con un partido o con otro, están diciendo tenga en cuenta lo que la población hoy les está pidiendo.

Hoy el Alcalde de Cali pedía unas Mesas de Diálogo y si es importante apoyar esas Mesas de Diálogo y que podamos realmente concertar y llegar a unos acuerdos y apoyar esos acuerdos que esas Mesas de Diálogo donde está la ciudadanía movilizada diga o proponga, porque es que hoy la agenda del país la está imponiendo la ciudadanía, porque ustedes, señores del Centro Democrático, no fueron capaces de desarrollar una agenda coherente, respetuosa y que funcione, que realmente le sirva la población en la situación que estamos, no vengan aquí a justificarse en temas de la Reforma Tributaria, donde ustedes, admítanlo, es un descaro ponerle IVA a un azadón, es un descaro decirle a la ciudadanía que es que no les van a cobrar el IVA a la canasta familiar pero sí se lo van a poner a todos los costos de producción.

Entonces, a los insumos agropecuarios los quieren grabar con un Impuesto verde del 8%, la maquinaria agrícola el 19%, quitarle el subsidio a la energía, a los distritos de riego para que produzcan alimentos, eso es un descaro, eso es la Reforma Tributaria que ustedes están proponiendo y a quién le va a llegar ese aumento en el costo de los alimentos, pues a la población que hoy no tiene con qué comprar.

Entonces, no le digan más mentiras a la población, por favor, replanten las cosas, tienen que gobernar para el pueblo, no para ustedes o para los empresarios, me duele ver hoy los peajes militarizados, ¿Qué están haciendo?, cuidando en la plática al señor Sarmiento Angulo, pero así sí cómo cuidan los peajes y le pone el Ejército a cuidar los peajes, si así cubrieran la vida o hicieran respetar la vida de los líderes sociales, eso sí les agradeceríamos, pero a los líderes sociales los dejan solos, a los líderes sociales hoy los están asesinando, y ustedes simplemente la Fuerza Pública la concentran en los peajes, en los bancos y demás y la verdad que no están respetando Derechos Humanos y no están haciendo las cosas bien, admítalo que este Gobierno es un fiasco, que este Gobierno no está dando resultados y que tienen que sentarse a replantear y tienen que aceptar muchas cosas de las que aquí hemos debatido.

Muchas gracias, Presidente.

Presidente, honorable representante Luciano Grisales Londoño:

Gracias, doctor César Pachón.

Tiene el uso de la palabra Rubén Darío Molano.

El honorable representante Rubén Darío Molano Piñeros:

Sin derecho a réplica, Presidente.

El honorable representante César Augusto Pachón Achury:

Señor Presidente, yo no nombré al doctor Rubén Darío en ningún momento.

El honorable representante Rubén Darío Molano Piñeros:

Muchas gracias, señor Presidente.

Le pido al señor Pachón que respete el uso de la palabra, que no está en su partido, está en la Comisión Quinta del Congreso, sea respetuoso.

El honorable representante César Augusto Pachón Achury:

Sea respetuoso usted.

El honorable representante Rubén Darío Molano Piñeros:

Presidente, por eso es que el Congreso está tan desprestigiado, cada vez que escuchado uno los discursos de estos populistas demagogos, mentirosos, que todo el tiempo tergiversan la realidad, es por eso que el pueblo colombiano no nos cree, porque con discursos de esa naturaleza, con discursos cargados de mentiras y de sesgos electoreros, es muy difícil construir un país, es muy difícil reformar, es muy difícil salir adelante.

Nadie dijo absolutamente nada de lo que este señor acaba de pronunciar, qué vergüenza tener que uno soportar un caballero de estos, que en la misma cara de nosotros nos endilga frases, palabras que no hemos dicho de frente y sin ningún reato, sin ninguna vergüenza, sin ponerse colorado, sale a decir esa sarta de mentiras que acaba de decir, ahí está buena parte de los problemas por los cuales la ciudadanía no le cree al Congreso, ninguno nos referimos a la situación de Orden Público, hicimos una referencia de manera categórica al lamentable papel del Congreso por cuenta de su ausencia en la discusión de la Reforma Tributaria y a la sarta de mentiras como la que acaba de decir este señor, que

se vienen diciendo en torno a la situación política del país, como no va uno a sentirse ofendido con las palabras de este caballero.

Mire señor Pachón, solo hay que leer un poquitico, solo hay que abrir los ojos un poquitico para darse cuenta de la realidad del país, que no es un capricho, tenemos un Déficit Fiscal de 105 billones de pesos, por supuesto, que eso usted no lo entiende, ni se lo dice a la gente, que tenemos el doble de gastos de lo que tuvimos antes de la pandemia, se cayeron los Recaudos Tributarios en el 12%, más de 15 billones de pesos menos de recaudo tributario por cuenta las medidas de confinamiento.

Entonces, la pregunta que uno podría hacerse, es el Presidente Duque está en el último año de su Gobierno, hubiera podido quedarse callado como cualquier sinvergüenza, hubiera podido emplear un discurso demagógico, populista y hacerse el loco y entregarle esa bomba de tiempo al que viene, porque no pierde nada, porque en Colombia no hay reelección, entonces no está cuidando su imagen, no está cuidando su futuro político, pero en lugar de eso actuó como un estadista, como un hombre responsable, diciéndole al país aquí hay un severo problema de financiamiento de las finanzas públicas y hay que atender con urgencia los problemas sociales que están afectando al país y por eso propuso una Reforma Tributaria.

Y esa no era la Reforma que iba a salir del Congreso, todos sabemos que las reformas que presenta el Gobierno salen trasquiladas, peluqueadas, fruto del debate democrático del Congreso, y a lo que nos hemos estado refiriendo aquí es que el Congreso se ausentó de eso, por cuenta del mandato de unos jefes políticos que impidieron que la Reforma llegara al sitio del debate, al sitio donde se discuten las iniciativas que tienen que ver con la democracia, que es el Congreso la República y en lugar de eso cayeron donde más les gusta, en el territorio que les gusta a los populistas, a los mentirosos, el de las redes sociales, para salir a decir cuántas sarta de mentiras como la que acabamos de escuchar de este caballero ahora, sin ningún límite en las redes sociales, sin ningún análisis, sin ninguna responsabilidad de ninguna naturaleza.

Sin tener en cuenta en consideración los gravísimos efectos que implicaría dejar al país, sin los recursos que se requieren para poder atender la gravísima circunstancia de un 42% de gente y de población colombiana en condición de pobreza, eso es lo que a lo mejor querían estos amigos, que nos quedáramos callados, que pasáramos de agache, que le entregáramos al próximo Presidente como el anterior le entregó un faltante de 20 billones en el Presupuesto, sin ningún inconveniente, sin ponerse colorado, sin decir una sola palabra, pasando de agache en las responsabilidades históricas, pues no.

El honorable representante César Augusto Pachón Achury:

¿Señor Presidente, eso era una réplica?

El honorable representante Rubén Darío Molano Piñeros:

Eso fue lo que nosotros justamente estamos evitando y lo hacemos con seriedad, lo hacemos con cifras, con datos, con hechos, no con populismos baratos, señor Pachón, usted permanente y sistemáticamente usa la mentira como un arma política y viene al Congreso a desfigurar el Congreso y a hablar mal del Congreso permanente y sistemáticamente, lo hace en sus reuniones privadas, lo hace en sus reuniones con los campesinos engañando permanentemente, denigrando del Congreso al que usted pertenece, al que usted devenga, del que usted obtiene las mismas prebendas que tenemos nosotros y el que pretende además, porque es tan bueno seguir perteneciendo a él no ahora en su condición de representante sino hacia el futuro en su condición de senador.

Para llegar al Congreso no se necesita mentir tanto, no hay que mentirle tanto a la gente, no hay que engañar tanto la gente, no hay que vestirse de ruana y simular ser campesino para engañar la gente, sino que hay que ser coherente con la realidad del país, no mienta, no mienta más señor Pachón, es absolutamente insoportable la cantidad de mentiras que permanente y sistemáticamente le dice usted al país y la cantidad de ofensas que permanentemente tiene contra sus compañeros del Congreso de la República y contra el Estado del cual usted hace parte, porque le recuerdo que usted hace parte del Poder Legislativo y usted devenga los mismos privilegios que se la pasa criticando por fuera, dígale a la gente que usted también es Congresista y que tiene exactamente los mismos privilegios, no sea mentiroso, haga política decentemente.

Gracias, señor Presidente.

Presidente, honorable representante Luciano Grisales Londoño:

Señor Secretario, terminada las intervenciones, démosle paso al siguiente punto del Orden del Día.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Con mucho gusto, señor Presidente, siguiente punto del Orden del Día.

IV

Negocios sustanciados por la Presidencia.

Señor Presidente, no tenemos negocios sustanciados en la Secretaría.

V

Lo que propongan los honorables representantes.

No hay proposiciones, ¿Doctora Martha, le han radicado proposiciones?

Subsecretaria, Martha Cecilia Moreno Dávila:

No jefe, hasta el momento no hay proposiciones radicadas.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Señor Presidente, no hay proposiciones, ese era el último punto del Orden del Día, en consecuencia, quedaría agotado el Orden del Día.

El honorable representante Ángel María Gaitán Pulido.

Presidente, excúseme le interrumpo, si es tan amable me regala el uso de la palabra.

Presidente, honorable representante Luciano Grisales Londoño:

Doctor Ángel María, ya terminamos el espacio para el uso de la palabra.

El honorable representante Ángel María Gaitán Pulido:

No, es para el tema de Proposiciones, es que yo en días pasados dejé una constancia que obviamente ya por escrito la estoy haciendo llegar a la Secretaría para que se envíe a la Contraloría General de la Republica, frente al debate que se dio del Impuesto al Carbono y que yo expresé algunas inquietudes.

Entonces, ese documento yo lo voy hacer llegar a la Secretaría de la Comisión Quinta, para que a través de la Secretaría sea remitido a la Contraloría General de la Nación, frente a lo que expresé en su momento.

Entonces, como estamos en proposiciones y varios y antes de que se agote, Presidente, yo quería dejar constancia porque lo voy a remitir con firma para que la Secretaría de la Comisión lo remita a la Contraloría General.

Muchas gracias, señor Presidente.

Presidente, honorable representante Luciano Grisales Londoño:

Con mucho gusto, doctor Ángel María, recepcionado el documento que usted va a enviar, haremos el respectivo trámite.

Terminado entonces el Orden del Día, damos por terminada la sesión, señor Secretario y estaremos atentos a la convocatoria para el anuncio de proyectos.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Con mucho gusto, señor Presidente.

Se deja constancia que siendo las 9:47 de la mañana, se levanta la sesión, con un feliz día para todos, Dios los bendiga.

LUCIANO GRISALES LONDOÑO
PRESIDENTE

JOSÉ EDILBERTO CAICEDO SASTOQUE
VICEPRESIDENTE

JAIR JOSE EBRATT DÍAZ
SECRETARIO

Acta No. 034 – mayo 04 de 2021 – Legislatura 2020-2021

	Comisión Quinta		
	Orden del Día Periodo Constitucional 2018-2022 Legislatura 2020-2021	CODIGO	I-M.C.1-FT
		VERSIÓN	01-2016
		PÁGINA	33 de 39

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO
CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN QUINTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE
LEGISLATURA 2020 - 2021
Del 20 de julio de 2020 al 20 de julio de 2021
(Segundo Periodo de Sesiones del 16 de marzo al 20 de junio de 2021)
Artículo 78 de la Ley 5 de 1992
Lugar: Plataforma MEET

ORDEN DEL DIA

Para la Sesión Ordinaria del día martes 04 de mayo de 2021
Hora. 08:00 A.M.

Conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 1125 del 17 de julio de 2020, por medio de la cual se adiciona la Resolución No. 0777 del 06 de abril de 2020, cuyo objeto es la de "...adoptar decisiones y medidas necesarias y procedentes para lograr una eficiente labor legislativa, cuando por razones de la declaración de un estado de Emergencia, el ejercicio de las funciones de la Cámara de Representantes signifique grave riesgo para la salud o la vida de los congresistas, funcionarios y trabajadores de la Corporación".

"La Mesa Directiva de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes informa que para esta sesión la presencia será virtual a través de la plataforma MEET, para lo cual se enviará invitación de conexión al correo de cada integrante de la Comisión".

I

Llamado a lista y verificación del Quórum

II

Aprobación de Actas de Sesión Legislatura 2020-2021:

- **Acta No. 030 de marzo 24 de 2021**
- **Acta No. 031 de abril 14 de 2021**

III

Anuncio Proyectos de Ley

IV

Negocios Sustanciados por la Presidencia

VI

Lo que propongan los Honorables Representantes

LUCIANO GRISALES LONDOÑO
PRESIDENTE

JOSÉ EDILBERTO CAICEDO SASTOQUE
VICEPRESIDENTE

JAIR JOSÉ EBRATT DIAZ
SECRETARIO

Acta No. 034 – mayo 04 de 2021 – Legislatura 2020-2021



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Bogotá D.C., abril 21 de 2021

Doctor
LUCIANO GRISALES LONDOÑO
PRESIDENTE COMISION QUINTA
H. CÁMARA DE REPRESENTANTES
CIUDAD

Referencia: CONSTANCIA

Respetado presidente:

De la manera más cordial me permito dirigirme a la Plenaria de esta Comisión para dejar constancia:

- **Que no voto, el ACTA No. 030 de 2021 de marzo 24 de 2021, ya que mediante Resolución MD 0474 del 17 de marzo de 2021, fui excusado de asistir a la Sesión de la Comisión.**

Cordialmente,

NICOLÁS ALBEIRO ECHEVERRY ALVARÁN
Representante a la Cámara
Departamento de Antioquia

Partido conservador
Oficina 301 B

* * *

COMISIÓN QUINTA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
CÁMARA DE REPRESENTANTES

ACTA NÚMERO 035 DE 2021

(mayo 10)

Sesión ordinaria – virtual

Legislatura 2020 – 2021

Hora: 9:29 a. m.

El día lunes 10 de mayo de 2021, se reunieron de forma virtual los honorables representantes a la Cámara integrantes de la Comisión Quinta, para llevar a cabo la Sesión ordinaria.

Presidente, honorable representante Luciano Grisales Londoño:

Señor Secretario, damos inicio a la Sesión del día de hoy, sírvase verificar el *quorum*.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Muy buenos días para todos para todas, con mucho gusto, señor Presidente, dejando constancia que son las 9:29 de la mañana, hora de inicio de esta Sesión, por problemas técnicos hemos tenido este retraso.

Le informo, señor Presidente, que en la plataforma están registrados 14 honorables representantes, son los siguientes:

Alonso del Río

Ángel María Gaitán

César Martínez

Ciro Fernández

Crisanto Pisso

Félix Chica

Flora Perdomo

Franklin Lozano

Héctor Ortiz

José Caicedo

Luciano Grisales

Nicolás Echeverry

Óscar Arango

Teresa Enríquez.

Son los que están registrados en la plataforma.

De manera manual están:

Rubén Darío Molano

César Augusto Pachón.

No sé si hay otro honorable representante que esté conectado.

El honorable representante César Augusto Ortiz Zorro:

Yo querido Secretario, yo estoy en el celular no he podido por plataforma.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Ah sí, perdón, disculpe, el doctor César Ortiz Zorro.

El honorable representante Crisanto Pisso Mazabuel:

Secretario, Crisanto Pisso.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Y doctor Pisso, yo lo mencioné en la plataforma, entonces estoy mencionando los que han tenido problema para conectarse en la plataforma, que repito el doctor Rubén Darío Molano, el doctor César Augusto Ortiz Zorro y el doctor César Augusto Pachón Achury.

Subsecretaria, Martha Cecilia Moreno Dávila:

Jefe y el doctor Juan Espinal.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Ah perdón, y el doctor Juan Espinal, gracias doctora Martha.

Subsecretaria, Martha Cecilia Moreno Dávila:

Sí doctor.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

En total 18 honorables representantes, se registra *quorum* decisorio, señor Presidente.

En el transcurso de la Sesión virtual se conectaron los siguientes honorables Representantes:

Ballesteros Archila Edwin Gilberto,

Cure Corcione Karen Violette.

Presidente, honorable representante Luciano Grisales Londoño:

Teniendo *quorum* decisorio, señor Secretario, démosle lectura al Orden del Día.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Con el mayor gusto.

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

COMISIÓN QUINTA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Legislatura 2020 - 2021,
Segundo período de sesiones

Plataforma Google MEET.

Orden del Día para la Sesión de hoy lunes 10 de mayo de 2021, conforme a lo dispuesto en la Resolución número 1125 del 17 de julio del 2020, por medio de la cual se adiciona la Resolución número 0777 del 6 de abril del 2020, cuyo objeto es la de "Adoptar decisiones y medidas necesarias y procedentes para lograr una eficiente labor legislativa, cuando por razones de la declaración de un estado de emergencia, el ejercicio de las funciones de la Cámara de representantes signifique grave riesgo para la salud o la vida de los congresistas, funcionarios y trabajadores de la Corporación".

I

Llamado a lista y verificación del quorum.

II

Aprobación del Acta número 032 de abril 20 de 2021.

III

Anuncio proyectos de ley.

IV

Negocios sustanciados por la Presidencia.

V

Lo que propongan los honorables representantes.

Leído el Orden del Día, señor Presidente.

Presidente, honorable representante Luciano Grisales Londoño:

Gracias, señor Secretario, entonces en consideración el Orden del Día leído, se abre su discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra su discusión, le preguntó a la Comisión si aprueba el Orden del Día leído.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Ha sido aprobado, señor Presidente.

Presidente, honorable representante Luciano Grisales Londoño:

Siguiente punto del Orden del Día.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

II

Aprobación del Acta número 032 de abril 20 del 2021

La cual ya fue puesta en conocimiento a cada uno de los honorables representantes, señor Presidente, para que la ponga en consideración.

Presidente, honorable representante Luciano Grisales Londoño:

Habiendo sido publicada y de conocimiento de todos los representantes, se pone en consideración el Acta mencionada, se abre su discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada, le preguntó a la Comisión si aprueba el Acta que ha sido publicada.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Ha sido aprobada, señor Presidente.

Presidente, honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Siguiente punto del Orden del Día, señor Secretario.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

III

Anuncio proyectos de ley

Señor Presidente, por orden suya y de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003 en su artículo 8, me permito anunciar los siguientes proyectos de ley, los cuales serán estudiados y discutidos en primer debate en la próxima Sesión que se convoque para discutir proyectos de ley.

La honorable Representante Karen Violette Cure Corcione:

Perdón, señor Secretario, por favor, es que he tenido problemas de comunicación con el internet, para que, por favor, no me he podido conectar en plataforma y me hagan mi registro de manera manual.

Gracias, señor Secretario.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Con mucho gusto, doctora Karen Cure, certifico su asistencia de la Sesión del día de hoy.

Los proyectos serían los siguientes:

1. **Proyecto de ley número 305 de 2020 Cámara,** *por el cual se modifica el artículo 45 de la Ley 99 de 1993.*

Ponente: *Crisanto Pisso Mazabuel.*

2. **Proyecto de ley número 328 de 2020 Cámara,** *por el cual se establecen estrategias de apoyos e incentivos para las entidades territoriales que implementen acciones tendientes a asegurar su territorio como libre de productos transgénicos.*

Ponente: El representante *César Augusto Pachón Achury*.

3. **Proyecto de ley número 327 de 2020 Cámara,** *por el cual se regulan las cooperativas agropecuarias y se dictan otras disposiciones.*

Ponente: El representante *Crisanto Pisso Mazabuel*.

4. **Proyecto de ley número 214 de 2020 Cámara,** *por medio del cual se regula la comercialización de la esmeralda y se reconoce como piedra preciosa y se dictan otras disposiciones.*

Ponente: El honorable Representante *Héctor Ángel Ortiz Núñez.*

Señor Presidente, esos son los proyectos que se anuncian para la próxima Sesión de la Comisión Quinta donde se vayan a discutir proyectos de ley.

Presidente, honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Gracias Secretario, voy a hacer unas apreciaciones antes de poner en consideración los proyectos que se están anunciando.

Dadas las circunstancias y la aprobación que se hizo de una proposición presentada en la Plenaria vamos a tener esta semana cierto grado de inactividad en las en las comisiones, lo que queremos es aprontar la mayor cantidad de ponencias posibles, ruego nuevamente a todos que aceleremos la presentación de las ponencias para tener un grupo importante, un número importante de proyectos, que sé que ya están asignadas las ponencias, pero no hemos recibido las mismas.

Y con una propuesta que se tiene de algunos compañeros que hemos hablado de forma interna sobre la actuar de la Comisión delante de las circunstancias actuales del país, pues podemos armar unas actividades que si bien las llevamos a unas audiencias, pero lo fundamental es tener anunciados los proyectos y muy probablemente que podamos dado el tiempo tan corto que nos queda para terminar esta legislatura, sesionar el viernes o muy probablemente los sábados, los sábados que nos quedan que son básicamente dos o tres y hacer aprobación de proyectos.

Entonces, la limitante de eso definitivamente son las ponencias y el anuncio de esas mismas ponencias, entonces esas dos cosas que podamos avanzar en esta semana, además de la proposición que yo sé que ahorita vamos a discutir con respecto a unas audiencias para escuchar sobre todo al sector agropecuario, a los gremios del sector agropecuario, con respecto a lo que está sucediendo actualmente en el país.

Entonces, señor Secretario, abrimos la discusión entonces para hacer anuncio de los proyectos.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Siguiente punto, sí señor ya estando anunciados los proyectos entonces seguimos con el Orden del Día, señor Presidente.

Presidente, honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Siguiente punto del Orden del Día, señor Secretario.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

IV

Negocios sustanciados por la Presidencia.

No hay negocios en la Secretaría.

V

Lo que propongan los honorables representantes.

Señor Presidente, está abierto el espacio entonces para las inquietudes que se habían planteado previamente.

El honorable Representante José Edilberto Caicedo Sastoque:

Pido la palabra, Presidente.

El honorable Representante Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán:

Presidente, con su venia, para ver si me permite retirarme a una audiencia.

Presidente, honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Claro está, doctor Nicolás.

El honorable Representante Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán:

Muy bien, ¿Franklin todo bien?

El honorable Representante Franklin del Cristo Lozano de la Ossa:

Excelente, buenísimo, muchas gracias.

Presidente, honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Le voy a dar el uso de la palabra al doctor José Edilberto Caicedo, antes advirtiéndole lo siguiente, todos estos sucesos que nos han llevado a una reacción de la comunidad, a una actitud de la Plenaria de la Cámara, también hacen prever que la Comisión tenga una posición muy marcada sobre lo que está sucediendo.

Hemos hablado con varios compañeros sobre la importancia de que la Comisión abra unos espacios importantes para el diálogo con el sector agropecuario, hay construida una Proposición que habla de solicitar al Gobierno y a los promotores del Paro, para construir unos canales que permitan el tránsito de los alimentos básicamente, el diálogo con los agricultores, el diálogo con los gremios en diferentes partes del país, acuden a la Comisión, siendo la Comisión la responsable del sector agropecuario, para que interactuemos, para que representemos de alguna forma sus inquietudes y por eso nos parece fundamental que inicialmente generemos una digamos Proposición para que los corredores que permitan la seguridad alimentaria se den en el país como un punto inicial de cualquier acuerdo.

Además de toda la insistencia que venimos haciendo para que se promueva desde las partes un diálogo, un diálogo formal y lleguemos lo más pronto posible a la resolución de todas estas situaciones, creo que la Comisión debe ser más propositiva y ahí

la presentación entonces también de unas audiencias en las que podamos escuchar a los agricultores.

Yo les voy a dar el uso de la palabra para que maduremos todas estas iniciativas y en esta semana podamos desde la Comisión atender todas esas inquietudes, sobre todo, insisto, del sector agropecuario, para que podamos de alguna forma coadyuvar a la resolución de este conflicto.

Tiene la palabra el doctor José Edilberto Caicedo.

El honorable Representante José Edilberto Caicedo Sastoque:

Gracias, Señor Presidente, con un afectuoso saludo a mis compañeros.

Solamente para dejar una constancia en apoyo a la comunidad de Cali, del Valle del Cauca en este momento tan difícil, creo que la situación del día de ayer, pues, sin lugar a dudas espanta y genera una angustia generalizada en el país y no es para menos por la situación tan desafortunada que se presentó, como en todos estos paros pierde toda la gente, pierde la Minga, pierde las comunidades de Cali y la situación realmente es bastante preocupante, el uso de armas de fuego de un lado y del otro lado, el uso de la violencia como como expresión de angustia, de intolerancia, desde donde venga tenemos que rechazarlo y yo debo dejar una constancia de rechazo a esas acciones.

Creo, sin lugar a dudas, que hay que garantizar la seguridad y la tranquilidad y el orden público, porque esa es una responsabilidad constitucional y legal del Estado, y evidentemente hay que hacerlo, creo que es muy importante que el Presidente haya enviado a los dos Ministros de Defensa y del Interior a Cali, y es muy importante que se esté reforzando el tema de la seguridad y de lograr la tranquilidad y la estabilidad en orden público en el municipio de Cali, en la ciudad de Cali, pero no es menos importante mandar mensajes claros y contundentes de una ruta de diálogo y de una ruta de comunicación entre las partes, eso es fundamental que no se rompa sino que más bien se consolide y se generen esos espacios para que por la vía del diálogo esto se pueda realmente superar.

Es innegable, como ya lo han dicho varios de los compañeros, que es un cúmulo de angustias, de situaciones, de preocupaciones de la gente, de soportar durante varios años unas condiciones muy difíciles en todos los frentes, en el empleo, en el acceso a la educación, en la ausencia de vivienda propia, en la angustia para el pago de servicios públicos y ahora con esta crisis tan terrible de la pandemia es evidente que en un año se genera un caldo de cultivo que explota, porque hay una situación muy grave que todos la sabemos y de hecho aquí lo hemos venido manifestado en toda nuestra actividad congresional en la Comisión Quinta y es nuestra defensa por los intereses de los pequeños productores, el campo es fundamental y nosotros hemos sido en eso unos defensores a ultranza, de garantizar que haya un país con mayor equidad y con mayor oportunidad para todos, y todo esto lo hemos hecho nosotros y lo hemos defendido nosotros.

Pero es innegable que aquí hay unas situaciones muy difíciles, que los jóvenes en su gran mayoría pues quieren ser interpretados, quieren ser escuchados, hay que saber, el Gobierno tiene que buscar un mecanismo de comunicación con los muchachos, de interpretación de la realidad de los muchachos, más allá de que una inmensa minoría de ellos pueda estar haciendo lo que no se debe hacer y que rechazamos y que lo hemos rechazado de plano, como el vandalismo y la gente lo ha hecho.

Ayer al entrar a los conjuntos residenciales, eso mandó una alarma de angustia en muchos sectores de la sociedad colombiana, entonces la gente se empieza a desesperar porque no puede salir a comprar, porque no puedes transitar entre un municipio y otro, porque le cerraron la 5ª, 7ª, las nuevas entradas de un municipio como en el caso de Zipaquirá, el Alcalde de Zipaquirá que ha estado en el ojo del huracán por una conversación que tuvo que fue descontextualizada, porque durante dos horas escuchó a todos los manifestantes en Zipaquirá, terminó en el ojo del huracán por, tal vez, porque no utilizó las mejores palabras, pero sin duda alguna que ha respetado la institucionalidad y lo que ha hecho es buscar que finalmente sino se desmovilizaban sino desbloqueaban por lo menos que haya una cultura básica de permitir que el oxígeno y que las vacunas y que la alimentación y el abastecimiento de Bogotá se dé.

Pero evidentemente hay una situación social que es grave, debo confesarte que anoche me gustó, digamos, la firmeza con que se habla de que por encima de las circunstancias dentro del marco de la Constitución y de la ley, nuestra Fuerza Pública tiene que actuar, tiene que actuar, sin superar y sin desmedirse en sus acciones sino estar dentro del marco de la ley, eso está bien, pero vi un énfasis, un énfasis en los dos ministros, me gustaría, cómo decírselo, un énfasis en los dos ministros de una posición un poco guerrerista y un poco, si me permiten la palabra, algo agresiva con la gente, claro, claro que la gente está preocupada y claro que la labor del Ministro de Defensa, sobre todo porque es él quien representa al señor Presidente en el Comando de toda la línea de las Fuerzas Armadas y se le puede escuchar bien al Ministro de la Defensa teniendo esta intervención, diciendo que desde su Cartera se está vigilando que la Policía y la Fuerza Pública cumpla su deber como la Constitución y la ley lo permiten, sin ningún desmán y hay que cuidar que eso no suceda.

Pero el señor Ministro del Interior tiene que estar orientando su discurso a una Mesa de Diálogo y a una concertación, porque es el Ministro del Gobierno y anoche la verdad me preocuparon los hechos de Cali, pero más me preocupó el tono, el tono de, un poco de los dos ministros, yo no sé quiénes pueden tener más acceso que yo a ellos, pero tuve la intención de escribirle al señor Ministro del Interior que tiene uno diálogos con él, pero preferí no hacerlo, pero

me preocupa un poco eso, que se mande un mensaje de confrontación o un mensaje de rigurosidad, cuando es evidente que hay que abrir un escenario para el diálogo y se tienen que mandar mensajes de que estamos dispuestos a dialogar, de que se están abriendo los canales, de que ayúdenme a encontrar cuáles son los mejores canales para comunicarnos, el Gobierno ha hecho un esfuerzo.

El señor Viceministro del Interior, anoche que tuve la posibilidad de hablar con él me dijo que hoy se desplazaban otros dos o tres ministros de Estado a la ciudad de Cali, que va estar el DPS, que van a estar, bueno, otros funcionarios del alto Gobierno, para tratar de buscar una salida desde la democracia y desde el diálogo y desde la concertación, me da miedo que la posición, digamos, que nos dejemos calentar o que quienes están allá al frente se dejen calentar por la situación y sus palabras o sus expresiones en lugar de conducir a tranquilizar el tema conduzcan a mayor confrontación.

Creo que esa es una invitación que yo quisiera hacer a los ministros de Estado que están hoy en Cali, porque toda nuestra solidaridad con esa ciudad y lo que pasó ayer allá eso no tiene la misma presentación, va a llegar al mundo entero los carros volteados, los carros quemados, pero no va a llegar a la comunidad internacional que hay una situación social y que el Gobierno también quiere conversar, entonces se tergiversa y se lleva al mundo internacional unas noticias descontextualizadas de lo que está pasando en Colombia.

Entonces, yo quiero invitar al Gobierno a que haga un énfasis muy fuerte en fortalecer los canales de diálogo, he hablado con varios alcaldes y me dicen que es que les preocupa porque pareciera que no hay comunicación con el Gobierno, por ejemplo, que la Ministra de Transporte pudiera estar resolviendo temas o siendo delegada del Gobierno para que resolviera un poco unos temas en las grandes autopistas a ver cómo se genera un canal de diálogo con los transportadores que tienen una agenda, entonces para tratar de decirles, venga, yo soy un canal para que lleguemos al Gobierno nacional y al señor Presidente de la República.

Entonces es como una invitación a que cumpliendo el Orden Constitucional que se debe cumplir, pues se cumpla también la otra cara de la moneda y es que hay que generar todos los espacios de diálogo, no podemos renunciar a los espacios de diálogo y de concertación para que esto termine bien y para que esto no termine polarizándose más de lo que está en este momento.

Es un poco mi preocupación y quería como dejar esa constancia aquí, señor Presidente, después de lo que vi ayer en la ciudad de Cali que me dejó enormemente preocupado.

Gracias, señor Presidente.

Presidente, honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Muchas gracias a usted, doctor Caicedo.

Tiene el uso de la palabra el doctor Héctor Ángel Ortiz.

El honorable Representante Héctor Ángel Ortiz Núñez:

Gracias, señor Presidente.

Pues es claro que todo lo expuesto lo hemos visto todos por diferentes medios, yo quiero hoy dejar una constancia en dos sentidos específicos, si me lo permiten, señor Presidente, uno, los medios de comunicación que hasta hace dos días de una u otra forma contribuían para que esto no llegara a que se hubiese una aparente calma como hoy ya lo sentimos, ¿Por qué teníamos que esperar?, así como el Presidente Duque aparentemente se demoró para retirar la Reforma, por qué los medios tenían que esperarse hasta hoy para decir que hacen una cadena nacional, todos los medios en Colombia, porque ya se dieron cuenta que no sólo se trata de un problema de Colombia sino de imagen internacional donde ya se está viendo que es que es Colombia la que está viéndose afectada.

Aquí no es solo la Canciller y yo celebro que los medios hayan entendido, pero también haciendo la salvedad, ¿Por qué esperaron hasta hoy para poder decir, sí a las marchas, sí a las protestas, no al bloqueo?, después de que miles y miles de empresarios de este país, después de la pandemia que vienen quebrados, se acaban de quebrar con los paros y los bloqueos exactamente, entonces es un llamado a que lo continúen haciendo, para decir que así como ellos que son los que manejan medios también que hablemos un poquito y entendamos que este es un problema de país que se resuelve entre todos.

La otra parte de la constancia, señor Presidente, apunta a una sugerencia para mis colegas, en el departamento de Boyacá si el doctor Pachón me está escuchando, estamos intentando a través de la Cámara de Comercio que todas las fuerzas vivas del departamento de Boyacá se unan, Verdes, Liberales, de Cambio, partidos de Gobierno, los que no son del Gobierno y los gremios que se vieron afectados a través del Paro y que tienen algunas inquietudes respecto a los temas, hoy, repito, quedó totalmente claro que el tema no era la Reforma y los políticos que utilizando mal esta situación se dieron cuenta que se les estaba devolviendo la procesión para la iglesia, empezaron a entender que esto tenía que vincularse a las demás fuerzas vivas de este país.

Hoy a las 9 de la mañana el Presidente Duque recibe al Comité del Paro, ayer lo hizo con los jóvenes, bien que atendió el llamado que le hiciera la bancada del Centro Democrático al Presidente Duque para que asistiera a Cali, porque era lo que la comunidad estaba pidiendo.

Entonces, yo creo que entre todos, entre todos, porque es que cuando se habla algunos congresistas creen que es que hablar mal del Congreso, hablar mal de un parlamentario u otro es él el que va a sacar fruto mañana, no, aquí si se acaba el Congreso se acaba es el Congreso, no el Congreso para Caicedo

o para Héctor Ángel o para Rubén Darío, aquí se acaba el Congreso para los Verdes y para todos, entonces empecemos a defender la institucionalidad que es lo que finalmente nosotros somos, pero contribuyendo, así como otras fuerzas, como el paro, como los docentes, como el clero, se reúnen con el señor Presidente, nosotros como Congreso como que nos da miedo, pero hagámoslo por una vía legítima.

Yo repito, es sugerirles ya para terminar que, en sus regiones, a través de una entidad que sea legítimamente reconocida por el pueblo pueda atender estos requerimientos de cada uno de los gremios y se los traslademos a la Cartera respectiva, si todos contribuimos para decirle que la Reforma Política o la Reforma a la Salud tiene algunos problemas, hombre, sugirámosles al Gobierno y al señor Ministro, que esos problemas son los que la gente está escuchando, porque hay EPS buenas, hay cuatro, cinco, seis, ocho buenas, pero hay 30 malas, pues, entonces hay que acabar las malas.

Entonces, doctor Zorro, no hay que generalizar, obvio la gente se está muriendo por el mismo sistema, pero es que nosotros también estamos en este país, tenemos cobertura del 100%, la Reforma a la Salud se necesita en Colombia, pero es que estamos perdiendo la legitimidad de que nos la lleven al Congreso que es el escenario legítimo para estudiarla, solo porque no estamos trabajando presionados.

Digamos que eso era mi constancia en esos dos sentidos, señor Presidente, muchas gracias.

Presidente, honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Muchas gracias, doctor Héctor Ángel.

Estamos tratando de construir un espacio en donde la Comisión Quinta se manifieste ante la situación actual, esas proposiciones y esas propuestas de audiencias con los gremios, una Proposición que vamos a enviar al Gobierno y a los promotores del Paro con respecto a los corredores para la seguridad alimentaria desde la Comisión, me parecen oportunos.

Yo voy a darle la palabra al doctor Ángel María Gaitán y después a la doctora Flora Perdomo, referente a la actitud que debe tomar la Comisión y qué actividades pudiéramos realizar para manifestarnos nosotros igual.

Tiene la palabra el doctor Ángel María Gaitán.

El honorable Representante Ángel María Gaitán Pulido:

Gracias, señor Presidente y un saludo especial a todos los compañeros.

A ver, mire, nosotros hoy yo interpretando lo que tanto Caicedo como el Presidente y seguramente todos queremos en la Comisión, es que aprovechemos este canal de la Comisión, lo primero para proponerle al Presidente de la Cámara porque mientras la Cámara esté sesionando todos los días y que obviamente se dejó claro que las Comisiones no van a actuar, entonces, toca concertar con el Presidente de la Cámara para que sea la Comisión Quinta otro escenario de interlocución para el diálogo válido con los temas propios de la Comisión, entonces quiero hacer mi aporte en ello, en los temas propios de la Comisión.

Hablar con todo el sector productivo de Colombia que tenga que ver con el sector rural, el ganadero, los lecheros, los agricultores, los arroceros, todos estos sectores importantes que son los que hoy traen los alimentos y que es donde están clamando hoy el pueblo, todos estos sectores porque haya una cadena humanitaria para poder pasar los alimentos a las ciudades, que nosotros traigamos también esos protagonistas de los del Paro acá a la Comisión y ellos expongan esas inquietudes para llevarlas también a la Plenaria y decir mire las propuestas que han surgido de estos sectores, porque así como se han despejado algunas regiones en Cundinamarca, lo decía Caicedo, de pronto aquí en el Tolima también se vienen despejando.

Pero es que eso es un tema del país, miren lo del Cauca cómo está, miren lo del Caquetá; hay muchas partes que están supremamente hoy atomizadas y entonces que nosotros podamos hacer ese tipo de interlocución como Comisión Quinta, para proponérselo no solamente al Presidente de la Cámara sino que le llegue también a las Mesas, a los de las Mesas del Paro, al mismo Presidente Duque y decirle mire este escenario también que se está dando, para que en concordancia con lo que la misma Presidencia viene adelantando se puedan también adicionar este otro tipo de ingredientes, de propuestas que se puedan dar para buscarle lo más pronto la salida a esta situación difícil, bajo el diálogo con los diferentes actores de hoy y los protagonistas hoy de esos diferentes sectores.

Que podamos escuchar a quiénes son competencia, vuelvo y repito, no es porque no sea la responsabilidad del Congreso y de la Comisión Quinta, pero sí de los temas propios de la Comisión, que es el sector, vuelvo y digo, de los productores de Colombia y que nosotros podamos llevarlos como un aliciente más a las Plenarias y llevarlos a conocer a los diálogos que tiene hoy el señor Presidente con esos directivos del Paro.

Pero mire, aquí también hay que, yo coincido con lo que ha dicho Caicedo, hay que pedirle al Gobierno también, señor Presidente y a los amigos del Gobierno, que esto hay que actuar con mucha humildad y con mucha sencillez, hoy el palo no está para cucharas, hoy el Gobierno no tiene la razón como no la tiene el Congreso, o así tengamos la razón es un problema de 40, 50 años que estalló hoy, entonces hay que bajarnos de ese desafío del Ministro de Defensa, del Ministro del Interior, que los ve uno como que no es que soy el Gobierno y nosotros mandamos y eso no le aporta absolutamente nada para distencionar el calor y sobre todo las emociones que tienen hoy desde los jóvenes en adelante, están enardecidos que no entienden y entonces llega un Ministro de Defensa desafiante y que ha sido muy

juicioso en cumplir órdenes, porque eso es lo que se ha visto, como le ha tocado al Ministro del Interior, cumplir órdenes y entonces vienen y hablan duro en el Congreso, van y hablan duro en los diferentes sectores y eso no le aporta absolutamente nada, pero nada es nada, a la situación que se está viviendo hoy.

En esto se tiene que decirle al Presidente y yo lo he dicho hasta en las Plenarias, con humildad, con sencillez, reconocer la situación que está viviendo el país, así estén actuando por emociones, porque no ni siquiera oye a los que usted escucha y en eso coincido también con Caicedo, la gente ni siquiera y lo que dice Ortiz Zorro, ni siquiera saben en qué consiste la Reforma a la Salud, no tienen ni siquiera claro las propuestas para plantearle al Gobierno, entonces, aquí tenemos que actuar todos, bajarnos del pedestal y escuchar, escuchar, porque es que el problema los Gobiernos no es solamente de este, lo que pasa es que en este estalló y se hizo más notorio, que jamás les ha gustado el diálogo.

Porque si uno se pone a mirar el comportamiento de los gobiernos, de este y de los últimos 20 o 30 años, no escuchan, no escuchan sino a sus propios, a su corrillo, a su aliado, no más y desconocen la realidad del pueblo colombiano, por eso hoy hay que bajarse de allá, hay que ser muy concertadores y eso hay que pedirle al Ministro de Defensa, que esto no es poniendo muertos, ni de parte y parte, ni de nada, porque hoy lo único que esas confrontaciones no generan sino muertos, derramamiento de sangre, eso es lo que se ha visto y hoy lo que necesitamos es dialogar, a no ser de que queramos que esto siga y se agite más de lo que se ha agitado y sencillamente no tengamos aportándole absolutamente nada.

Yo invito a que con humildad desde el señor Presidente hacia abajo y los señores Ministros del Interior y de Defensa, escuchen, escuchen a quienes hoy andan supremamente alborotados, supremamente descompuestos, vuelvo y les digo, por una bomba que estalló, una bomba social que estalló en este Gobierno que la hizo estallar y ya todos sabemos, por la Reforma Tributaria y por muchas cosas que se han dado, que se han venido dando desafortunadamente.

Hoy nosotros como Comisión Quinta, señor Presidente, abordemos los temas, invitemos a todo el Sector Productivo, invitemos de a dos o tres, al sector lechero, al sector cafetero, a los arroceros, cojamos por temas y hagamos esas audiencias para que con interlocutores también válidos de las Mesas, les puedan hablar a ellos y nosotros los escuchemos, para que le propongamos a la Plenaria de la Cámara y le propongamos al Presidente de la República, que éstas son las propuestas que han venido también manifestando miembros de que convocaron el Paro y de los diferentes sectores productivos de Colombia y ahí le hacemos un aporte como Comisión Quinta, abriendo otro canal de interlocución, de diálogo, pero no viniendo nosotros a decir, porque seguramente vendrán personas hasta muy bravas y nos van a juzgar a nosotros y nos van a decir que no servimos para nada y nosotros también tenemos que actuar ahí con mucha paciencia, con mucha tranquilidad.

Porque hoy nosotros no tenemos la razón desafortunadamente, por así decirlo y entonces también tenemos que llenarnos de mucha tolerancia y ser muy pacientes para escuchar a los que tenemos que escuchar, pero que recojamos de ellos sus inquietudes y se las hagamos llegar al Presidente de la República y, por supuesto, a la misma Presidente de la Cámara para decirle, mire queremos y venimos haciendo esto o queremos hacer esto, también como para aportarle un ingrediente más al diálogo y a la concertación, funciones propias de la Comisión, con temas propios de la Comisión y que me parece ayudaríamos o coadyuvaríamos al propósito acertado de que las Plenarias se escuchen a todo nivel, pero primero escuchando los primeros y luego sí a los que haya que escuchar en la parte institucional.

Muchas gracias, señor Presidente**.**

Presidente, honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Gracias, doctor Ángel María.

Tiene el uso de la palabra la doctora Flora Perdomo**.**

La honorable Representante Flora Perdomo Andrade:

Gracias Presidente, con el cordial saludo para todos los miembros, nuestros colegas de la Comisión Quinta, nuestro Secretario**.**

Yo más o menos en la misma línea de los planteamientos que han venido haciendo cada uno de ustedes, quiero recoger lo que está pasando, por ejemplo, en nuestra Región, aquí es necesario como usted lo venía diciendo Presidente al comienzo y como lo hemos hablado, hay que construir ese Corredor Vial necesariamente humanitario para que haya el desplazamiento de los carros para atender el sector salud, para atender lo de la Seguridad Alimentaria, yo creo que cada uno de nosotros vemos en nuestro municipio la situación tan difícil que viene ya pasando familias, nuestras galerías, todo esto desocupado, encareciendo se cada uno de los productos.

Entonces nuestro interés como Comisión y de hecho donde hemos venido trabajando y recojo lo que decía Ángel María, es buscar como Comisión qué podemos hacer para ese sector que nosotros estamos representando como Comisión y plantearle ese documento al Gobierno Nacional, a la misma Plenaria, aquí ustedes vienen hablando y voy en esa misma línea, de hacer esas Audiencias Públicas para recoger cada uno de los sectores agropecuarios, entonces miremos como los convocamos en estos días Presidente y compañeros, pero yo también quiero decirle que ese documento que recojamos, lo escuchen, se le lleve al Gobierno Nacional, pero también yo he visto cómo en algunos Departamentos hay unas experiencias como exitosas, se han ido abriendo esos espacios, esos Corredores.

Yo no sé hasta qué punto si lo están pasando en sus Departamentos, pero acá en el Huila yo veo, el fin de semana estuvimos muy atentos con el Representante Harry, para ver cómo conectábamos el Caquetá con el Huila, el señor Gobernador de allá, el colega Harry, llegaron hasta un municipio que conecta con el Caquetá que se llama Suaza, de aquí fue el señor Gobernador y su equipo a reunirse allí en Suaza, se abrió eso, pero seguimos que los siguientes municipios seguía cerrado ese Corredor, entonces mire que yo no encuentro a veces esos Líderes representativos que hablan unos en una parte, otros en otra, esto aquí es un caldo de cultivo para que todo el mundo hable y cada quién quiere hacer lo que quiere en su municipio, en su región, creyendo que él es el que representa este sector.

Sí, tristemente esto nos ha llevado a grandes reflexiones, muchos de ustedes lo decían, ¿qué estamos haciendo nosotros los Congresistas?, ¿qué ha hecho el Congreso?, ¿qué ha hecho el Gobierno?, ¿qué han hecho nuestros Gobernantes acá en lo que poco o mucho se pueda hacer?, veo importante, Presidente y colegas que podamos recoger ese documento como Comisión, que sería nuestro aporte para ese sector tan fundamental en el desarrollo de nuestro país y que todos defendemos, como es el sector agropecuario que ha sido afectado desde hace muchos años.

Yo no sé hasta qué punto pudiéramos mirar todos aquellos Proyectos de los cuales hemos venido hablando muchas veces y que no han hecho ese tránsito, ni en la Comisión y mucho menos después allí en las Plenarias, la necesidad de bajar los insumos, la necesidad de cantidades de temas fundamentales para apalancar el sector agropecuario, yo los invitaría a que volviéramos a mirar esos Proyectos necesarios aquí en el país para apoyar a nuestros campesinos, yo creo que este es un momento especial donde todo nos está llamando a la gran reflexión, pero sobre todo a la gran reflexión de ese diálogo abierto, a la gran reflexión de garantizar que haya ese mecanismo de comunicación e interpretación, como lo decía el doctor Caicedo, de los jóvenes, de todos los sectores.

Yo creo que acá tenemos una gran oportunidad, construyamos colegas esa agenda necesaria y qué si de pronto nosotros como Comisión hemos quedado cortos sea el momento de construirla y de plantearle al país a través de estos proyectos, a través de estas Audiencias, que salga un comunicado de aquí de nuestra Comisión, de todo esto que estamos diciendo que es necesario hacerlo desde la mirada que tienen todos los Líderes representativos de este sector, pero con el acompañamiento nuestro.

Yo les digo personalmente, aquí yo he tratado de escuchar, pero el descontento es general de toda la gente y con nosotros los Congresistas especialmente y eso de que yo sé que cada uno de ustedes en su región todos tratamos de trabajar, de escuchar, de ayudar, pero estos son años de historia en donde hoy estalló y nosotros tenemos que ponerle la cara al país y hacer unos planteamientos serios, organizados y muy relacionados en lo que nos corresponde en la Comisión Quinta.

Miremos a ver cómo tomamos estas otras experiencias regionales, qué Proyectos, vuelvo y reitero, podemos nosotros retomar, volverlos a estudiar, a revisar, yo personalmente he dicho no he aportado lo que tengo que hacer dentro de la misma Comisión, es el momento de hacerlo y entre todos construir ese nuevo escenario que los colombianos nos lo están pidiendo.

Entonces, yo los invitaría a ello, a que pudiéramos construir, Presidente, ese documento, ese comunicado hoy, y empezar a hacer todo ese trabajo que yo estoy segura que cada uno de nosotros en nuestras regiones queremos de que aquí esto salga bien, de que no continúe este caos, esta destrucción, yo sé que la gente se está expresando en esa forma porque de pronto la Pandemia los llevó a ellos también a estos momentos y todas estas Reformas que se vienen planteando, pero que muchas de ellas son necesarias para construir un mejor país, pero sobre todo para atender muchas de las necesidades de los colombianos.

Gracias Presidente y gracias colegas, por escucharme.

Honorable Representante César Augusto Ortiz Zorro:

Presidente, pido la palabra.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Muchas gracias, doctora Flora.

En el chat tengo la solicitud del doctor Rubén Darío Molano, inicialmente y claro, con todo gusto el doctor César Ortiz.

Tiene el uso de la palabra el doctor Rubén Darío Molano.

Honorable Representante Crisanto Pisso Mazabuel:

Presidente, pido la palabra también.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Igual el doctor Crisanto Pisso.

El doctor Rubén Darío Molano tiene el uso de la palabra.

Honorable Representante Rubén Darío Molano Piñeros:

Presidente, mil gracias. Yo creo Presidente, que hay ilustración suficiente de que estamos perdiendo todos, absolutamente todos en el marco de las actuales circunstancias.

El Presidente de la SAC emitió una comunicación diciendo cuál es la afectación del sector agropecuario y solo por traer a colación unos datos, pues aquí la situación es dramática, en 22 de los 32 Departamentos del país hay grandes afectaciones al sector agropecuario, grandes, en 22 Departamentos, eso significa pérdida de empleos, pérdida de cosechas, cierre de pequeñas y medianas

empresas en el sector agropecuario, que es un sector que ustedes conocen la importancia que tiene desde el punto de vista de su impacto en las regiones.

Es quizás cuando uno mira el sector agropecuario uno encuentra que es casi el eje del desarrollo económico en las regiones, en las ciudades no se siente tanto, pero en las regiones los impactos son enormes, ahí ha perdido el sector, lo hemos castigado como si no hubiera estado a la altura de las circunstancias en medio de la Pandemia, recuerdo mucho que todos tuvimos acuerdo para llamar los héroes en el marco de la Pandemia y hoy sin ninguna contemplación de ninguna naturaleza estamos llevando a una crisis profunda a un sector que entre otras cosas era el único que venía caminando bien.

Dos, son innumerables las afectaciones a la vida, a la propiedad, a los derechos de las personas que deja esta situación, voy a leer textualmente, Presidente, lo que dice el Director General de la Policía, han habido 1.900 manifestaciones, el ESMAD ha atendido 800 manifestaciones, es decir, ha habido 1.100 manifestaciones pacíficas, 800 manifestaciones donde ha habido necesidad de intervención del ESMAD y el resultado de todo lo que está pasando hoy sin maniqueísmos de ninguna naturaleza, sin buenos ni malos en un lado y en el otro, pues hay que decirlo con claridad, actos de violencia y de vandalismo son: 75 Instalaciones Policiacas afectadas, 21 CAI destruidos, 63 motos y carros destruidos de la Policía y vandalizados, 254 entre tiendas y comercios pequeños vandalizados, 199 vehículos de transporte público vandalizados, 31 vehículos de servicio público incinerados, 138 establecimientos de mediana superficie y gran superficie hurtados y algunos saqueados, 99 Bancos destruidos y vandalizados, 43 cajeros automáticos vandalizados, saqueados e incinerados, 97 estaciones de transporte público afectadas con vandalismo, 59 estructuras del Gobierno nacional, local y municipal vandalizadas, entre ellas dos totalmente destruidas, cámaras de seguridad, semáforos, motos de particulares destruidos, 27 peajes afectados, 10 Monumentos Culturales lesionados, más de 40 Civiles muertos, más de 800 Policías heridos, hay dolor, hay tragedia en las familias de los hogares más vulnerables de este país que son los que realmente están en la calle.

¿Necesitamos alguna evidencia más de que es necesario ponerle freno a esto?, ¿que es necesario actuar con responsabilidad?, yo creo que no, yo creo que hemos perdido todos, el país ha perdido, los colombianos han perdido, los organizadores del Paro han perdido, el Gobierno ha perdido, el Congreso ha perdido, los Partidos Políticos han perdido, la Sociedad Civil ha perdido, la Industria, la Agricultura, todos hemos perdido, el país ha perdido, hemos perdido prácticamente el norte, no sabemos ya si esto puede derivar incluso en una guerra civil como la que muestra ya alguno de los hechos que se están dando en Cali.

Nosotros podemos culpar a todo el que ustedes quieran, a todo el que ustedes quieran y podemos hacer todos los juicios de valor y con los acostumbrados sesgos políticos e ideológicos que manejamos, a salir a condenar o a salir a defender, pero eso en nada mejora la situación, ese es un diálogo de sordos, eso es un diálogo, esa es una cacofonía que la gente no entiende, porque la gente lo que está necesitando en este momento son soluciones.

Por eso yo quería solicitarle, Presidente, muy especialmente acogiendo lo que han dicho los compañeros, su iniciativa al inicio de esta Sesión, que hagamos cosas concretas, que le aportemos algo al país, nosotros no podemos seguir aquí devorándonos unos con otros, saliendo a hacer política unos con otros, cuando lo que está claro es que este es un Paro contra el Congreso de la República, en eso tenemos que ser absolutamente conscientes y cuando lo que ya se pone en tela de juicio hoy en Colombia es la misma viabilidad de sus Instituciones Democráticas y de sus valores Democráticos.

Yo personalmente, yo no sé cómo pensarán los demás, pero yo personalmente soy un convencido que a pesar de las enormes dificultades que tiene esta Democracia, que son muchas, que son severas, que son a veces injustificable, que a mí me producen enorme desasosiego, yo prefiero la Democracia a cualquier otro tipo de aventura en materia política, porque esas aventuras que se han dado en otras latitudes hoy tienen unas consecuencias que todos conocemos y que no es necesario explicar acá.

Entonces, yo propondría que la Comisión asumiera un papel protagónico, activo, categórico, por ejemplo, las Naciones Unidas tienen claro que es absolutamente un derecho humano fundamental respetar los Corredores Humanitarios para el suministro de alimentos, para el suministro de las medicinas, para el suministro de los combustibles, para el suministro del oxígeno, lo dice las Naciones Unidas, eso no lo dice el Representante Molano, lo dicen las Naciones Unidas y el Comité del Paro dijo, a propósito de la situación de Cali, que se debían respetar los Corredores Humanitarios, yo no sé si esos serán Corredores Humanitarios a mí no me gusta ese término porque parece que estuviéramos en una circunstancia de guerra y yo todavía creo que no hemos llegado a ese nivel afortunadamente, pero como quiera que sea, tanto los que están promoviendo el Paro, como los Organismos Internacionales, como la sociedad en general, nos están diciendo, señores por lo menos dejen circular los alimentos porque es que los ciudadanos que no están en el paro también tienen derechos, ¿o es qué no existe el derecho a la alimentación?, ¿o es qué no existe el derecho a la movilidad?, ¿o es qué no existe el derecho a la salud?, ¿o es qué no existe el derecho a la vida que está íntimamente ligado con el derecho a la salud? pregunto yo.

¿Es que los demás ciudadanos no tienen derechos en Colombia?, ¿el único y absoluto derecho que existe en Colombia es el derecho a la protesta?, es que ese derecho no tiene que tener algún tipo de relacionamiento con los demás derechos de los ciudadanos y con los demás derechos humanos

que poseen todos los ciudadanos que no quieren participar en la protesta legítimamente y que encuentran que hay otras maneras para resolver este asunto, yo creo que sí, y nosotros deberíamos exigir señor Presidente, tanto al Comité de Paro como al Gobierno Nacional, que se respeten esos canales humanitarios y se garantice el suministro, porque quedarnos quietos aquí simplemente escuchando a todos los Representantes de los diferentes sectores que están involucrados en este problema pues genera una inamovilidad y una inacción, que yo creo que no nos conduce a ningún lado, nos sigue condenando a un papel marginal al Congreso de la República que no deberíamos de ninguna manera seguir propiciando nosotros, porque eso va en detrimento de la imagen del Congreso y de nosotros.

Y yo quiero decirle a todos que muy a pesar de los errores del Congreso, muy a pesar de su falta de capacidad de autocrítica, de su falta de capacidad de reformarse, el Congreso es una Institución representativa de cualquier Democracia, en Colombia hay una tendencia facilista a darle al Congreso, incluso, nuestros propios compañeros que se sientan al lado de nosotros salen todos los días cuando pueden a pegarle al Congreso, en lugar de hacer un debate interno, en lugar de darnos digamos todos los elementos para poder hacer las transformaciones a que haya lugar, salimos a denigrar del Congreso, salimos a acabar de deslegitimarlo más, en la última encuesta de ciudadanía del Congreso el 85% de los colombianos tiene una imagen negativa del Congreso, oigan bien, el 85%, aquí hay algunos que creen que se van a salvar porque hablan mal del Congreso, están más equivocados, porque la ciudadanía tiene es una percepción de un Congreso incapaz, lleno de privilegios, desconectado de la realidad, que no interpreta ni sirve para solucionar los problemas de la realidad y eso nos va a afectar a todos sin importar si son de la derecha o de izquierda, Liberales, Conservadores, del Centro, eso va a ser duro para el Congreso hacia el futuro, no importa si no repetimos, no importa, pero la Institución tiene que preservarse, porque es una Institución que es un eje de la democracia.

Entonces Presidente, nosotros deberíamos tomar la iniciativa así como usted lo planteó al inicio de la reunión, hombre, escuchemos la gente, produzcamos unas comunicaciones a los señores del Paro, nosotros somos de la Comisión que maneja los temas agropecuarios, tenemos la información en la mano, digámosle, no se puede seguir afectando más el sector agropecuario de esa manera, van a quebrar la gente en el campo, bien mal que venía, bien abandonada que estaba, buenas dificultades que tenían y ahora le vamos a sumar esta como para acabar de destrozar a un sector que ha sido digamos de los más importantes para garantizar la tranquilidad de este país en el marco de una Pandemia como la que tenemos hoy.

Digámoselo a los señores del Paro, porque ellos también tienen que entender eso, ustedes creen hoy, les pregunto con el mayor respeto posible, que convocar como lo hicieron hoy a un nuevo Paro el 13 de mayo en el marco de las actuales circunstancias no es echarle gasolina a la candela, es que no ven las circunstancias por las que estamos pasando, van a seguir convocando más y más marchas para seguir insistiendo y para tratar de seguir engañando a los colombianos de que detrás del derecho a la protesta no existen otras cosas distintas.

Aquí lo dicen con total claridad, hoy lo sabemos con total claridad, que más allá del legítimo derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente, aquí hay bandas criminales financiando parte de esta actividad, aquí hay organizaciones del terror dedicadas a estos temas o sino no hay si no que mirar lo que está sucediendo en Cali para darse uno cuenta de ese tema y aquí en Bogotá lo hemos vivido y en Cundinamarca, aquí lo anotó José, en Zipaquirá, en Gachancipá donde murió el bebé de la señora que venía en la ambulancia a la cual le irrespetaron el derecho más elemental, el de mayor prevalencia que era el del bebé, eran unas bandolas de gente que incluso estaba pidiendo plata para que la gente pudiera pasar, llegó el ESMAD los retiraron y hoy la gente está pidiendo que el ESMAD no se vaya de los municipios donde se garantizó ese proceso.

Entonces, yo creo Presidente que nosotros debemos no sé cómo, con la ayuda de todos empezar a encontrar acciones protagónicas, que nos den digamos alguna utilidad, que no sea solamente el escenario de los discursos, el escenario del diálogo entre nosotros mismos, el escenario de las discusiones entre nosotros mismos sino que el Congreso empiece a tener una vocería y en el caso de nuestra Comisión, por lo menos de los sectores que representamos, solicitándole a los que están involucrados en esto que es absolutamente necesario respetar los derechos de esas personas que están allá, que no están involucradas en el Paro y que quieren seguir trabajando.

Yo propongo que hagamos eso como tarea fundamental de la Comisión en los días que vienen hacia adelante, porque me parece que por lo menos con eso podríamos hacer una mínima y un pequeño aporte a la solución de los difíciles problemas que vive este país.

Mil gracias, señor Presidente.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Muchas gracias, doctor Molano.

Tiene el uso de la palabra el doctor César Ortiz, para que después continúe el doctor Crisanto Pisso.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Perdón Presidente, quiero dejar constancia de la asistencia doctor Edwin Gilberto Ballesteros Archila, había tenido problemas y dificultades técnicas y no se había podido conectar, pero ya está con nosotros.

Muchas gracias.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Adelante, doctor César Ortiz.

Honorable Representante César Augusto Ortiz Zorro:

Presidente, muchas gracias.

Presidente, yo pienso que en este momento no hay lugar a egos, no hay lugar a la arrogancia sino debe haber lugar al diálogo, yo creo que el Presidente tiene que ir a Cali a dialogar, es común en nosotros los políticos en campaña ir a los sectores más remotos del país a hacer promesas y creo que debemos tener esa misma capacidad cuando estamos en el poder de tener esa misma humildad, de atender a los sectores que nos convocan.

Tuvo el Presidente que retirar una Reforma después de muertos, después de que se enfrentaran los colombianos en las calles y se maltrataran y se enfrentaran Policías y jóvenes, por el simple capricho de que no quiso retirar la Reforma en su momento y pienso que el Presidente hoy puede evitar una tragedia, el Presidente puede evitar una guerra en las calles si tiene la humildad de ir a escuchar a los sectores que lo están convocando, no a ir a un Consejo de Seguridad, me dijeron que hoy había asistido, que había estado en horas de ayer de 11 a 3 de la mañana, no sé si sea cierto, a un Consejo de Seguridad. Estamos en manos de la decisión que tome el Presidente Duque, de que en un acto de humildad acompañe y escuche a todos estos sectores que lo están solicitando.

Y yo comparto mucho con el doctor Rubén Darío, mire que a pesar de que estamos en posiciones distintas, yo pienso que y estoy muy preocupado digamos por prometer remedios infalibles a males que son bastante complejos, yo sí estoy preocupado por eso y eso va digamos para todos los que pretenden reelegirse ya sean los de la derecha o izquierda, haciendo promesas y voy a decir una palabra que no me gusta y que me la dicen a mí a diario por pertenecer al Partido Verde, por hacer promesas populistas, yo estoy preocupado, por ejemplo, cuál va a ser el nuevo texto de la Reforma Tributaria, cuando sabemos que estos grandes sectores digamos estos sectores poderosos del país, como el señor Sarmiento Angulo, los Santo Domingo, el Sector Financiero, el Sector Hidrocarburos, yo no sé hasta dónde estén ellos dispuestos a ceder en todos los beneficios que tienen, cuando sabemos que muchos de esos sectores y aquí no lo podemos negar y aquí no lo podemos tapar, que muchos de esos sectores financian Campañas Presidenciales, ponen Ministros, ponen Congresistas.

Yo no sé esa Reforma Tributaria cuál va a ser la solución, cuando sabemos que la Banca Internacional necesita ver de dónde están las fuentes de ingresos para el país para que paguen la deuda externa, entonces cuando conocemos la realidad, cuando sabemos que Colombia ya casi superó el 60% del PIB de deuda externa, cuando sabemos que las Calificadoras Internacionales están haciendo presión y la Banca Internacional y la OCDE, cuando sabemos que tenemos un país endeudado y qué tiene que pagar la deuda, cuando no hacemos nada para arreglar todo el tema de la evasión y la ilusión, por ejemplo, con esos Paraísos Fiscales que dice que Colombia tiene alrededor de 300 billones en Paraísos Fiscales, cuándo sabemos que el Hueco Fiscal se aproxima o ya está alrededor en los 90 mil millones, se aproxima a los 100 mil millones el Hueco Fiscal, el 10% del PIB, cuando sabemos que en exenciones y beneficios tributarios hay casi 90 billones de pesos de estos señores que se han beneficiado y que son los únicos que tienen las cifras en azules, entonces a mí me preocupa, que es lo que le vamos a plantear al pueblo colombiano, cuál es la respuesta que vamos a dar y si la vamos a respaldar.

Entonces, yo comparto mucho la posición de mi querido amigo Rubén, porque nosotros no podemos salir a respaldar propuestas que generen falsa expectativa y ahí sí vamos a tener que pagar las consecuencias todos.

Yo quisiera pedirle, señor Presidente, que con urgencia enviémosle desde la Comisión Quinta un comunicado al señor Presidente, solicitándole primero, que se siente con los sectores, que vaya a Cali, él puede evitar una tragedia, que vaya a Cali, señor Presidente, sin otra palabra que no me gusta, sin ser tibios, a nosotros nos toca asumir posiciones porque le digo con sinceridad, Presidente, yo a veces siento algo de impotencia cuando los grandes debates que se tienen que dar vivimos excusando a los Ministros, todo el tiempo, no el Ministro se enfermó, no el Ministro no puede venir, no va fulano de tal, no se puede hacer el debate, no se aplaza, aquí han estado aplazadas todas las Reformas sustanciales del país, y por eso el país hoy nos pone una Agenda a nosotros y en este Paro va a salir Reformas a la Salud, Reforma Agraria, Reforma a las Pensiones, Reforma Minero Energética, Reforma a la Educación, el pueblo va a exigir todas las Reformas, la Reforma Tributaria fue el Florero de Llorente, porque el Congreso no fue capaz, no fuimos capaces.

Entonces, señor Presidente, no me queda sino decirle que comparto las posiciones, la posición suya Presidente, de buscar ese diálogo, de ser interlocutores, de escuchar al sector agropecuario, pero que ojalá sea una posición seria la nuestra, una posición del lado de los agricultores, porque es que Audiencias, yo he escuchado muchísimas, Audiencias hemos convocado muchísimas, hemos escuchado a todos los sectores y ya sabemos cuál es el problema y sabemos cuál es la solución, pero nos quedamos flojos, nos quedamos cortos, débiles ante la solución.

Muchas gracias, Presidente.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Gracias doctor Ortiz.

Tiene el uso de la palabra el doctor Crisanto Pisso.

Honorable Representante Crisanto Pisso Mazabuel:

Presidente, muchas gracias. Brevemente, creo que lo que han dicho los compañeros tienen toda la razón, la situación no es fácil y particularmente en un departamento como el Cauca, que es un departamento primero azotado por la violencia y dónde ha sido un escenario del conflicto durante mucho tiempo, hay varios inconvenientes Presidente y compañeros, lo primero, es que hay unas marchas de campesinos que avanzan hacia la ciudad de Popayán, son los cultivadores o zonas donde hay cultivos ilícitos coca y marihuana, de Popayán a Cali hay más o menos unos 16 taponamientos y la intención de la gente es dialogar y creo que es la salida cómo lo están planteando los compañeros.

Popayán está sin combustible, los campesinos botando la leche, perdiéndose los productos, se han quebrado cantidad de compañeros campesinos que hacen un gran esfuerzo por sobrevivir, por cultivar, por producir y creo que eso nos tiene afectados a todos, el próximo miércoles la ciudad de Popayán tomando como ejemplo lo que sucedió en Cali, que nos preocupa enormemente, han decidido hacer un rechazo contra las Comunidades Indígenas del departamento, o sea, ya esto está encaminado a una guerra civil que no sabemos hacia dónde va a parar, creemos que hay una gran complicación y no hay una unidad del Comité de Paro, no sabemos con quién dialogar, no se sabe cuáles son los temas que se van a tocar, ni cómo poderlo solucionar.

La Iglesia, los Gremios, las Autoridades, los Políticos, estamos llamando a que nos reunamos para buscar una solución, lo primero es que sea abra, se destapone para poder darle combustible que en Popayán no hay combustible y está tapada la vía para Nariño, imagínense que tampoco Nariño tiene combustible, el tema de alimentos de los campesinos que no entran hoy, vemos a Pachón, que ha entrado los camiones a Bogotá y qué bueno démosle paso, abramos, quitemos los Paros para que llegue la comida, la marcha es legal nadie lo está cuestionando, las marchas son legales Constitucionalmente permitidas, pero no con el vandalismo que hay.

Yo creo que en esto no hay una solución a corto plazo sino nos sentamos, sino nos reunimos y sino dialogamos, aquí incluirnos todos, pero también los mismos medios que hoy se unen para decir no al taponamiento, agitan y desinforman y no son muy buenas las noticias que dan respecto a lo que está sucediendo en el país.

Hoy en Popayán, hoy en los municipios del departamento, en el Sur de Colombia, igual que está sucediendo en Cali, la presencia de grupos armados ilegales, el crecimiento de la guerrilla, el narcotráfico y asolada esta región, uno le diría al Presidente y doctor Luciano y compañeros, desde la Comisión Quinta insistirle al Presidente que se reúna de una vez con la gente que está en el Paro, esto tenemos que buscar una solución, lo está aclamando la ciudadanía y yo creo que es necesario no echarle más candela esto, si dejamos que siga de largo, Presidente, vamos a mantener muchos dolores de cabeza que lamentar.

Lo que va a suceder el miércoles en Popayán va a ser una noticia trágica, nosotros vemos que ya la gente que no tiene combustible, acá hay una modalidad que es el mototaxismo y es un número impresionante de gente que vive de esta actividad y ellos están ya en contra de las Comunidades Indígenas, Cauca tiene Comunidades Indígenas muy valiosas, importantes, de gente honesta y trabajadora, pero que a ratos también se dejan llevar y el Gobierno nacional se ha reunido en múltiples oportunidades con los Indígenas han llegado a Acuerdos, no sabemos, que sería bueno, que el Gobierno lo hiciera conocer si se han cumplido esos Acuerdos, se firmaron, si hay presupuestos, hay Acuerdos en todos los sentidos, pero quisiéramos saber nosotros si eso se está cumpliendo, que es bueno que la ciudadanía lo conozcan.

Presidente, yo estoy de acuerdo como lo manifiestan los compañeros, saquemos un comunicado de la Comisión, hagamos conocer que estamos nosotros que hemos tenido múltiples oportunidades, las reuniones en Audiencias Públicas con campesinos, con ambientales, con toda esta gente, démosle a conocer al Gobierno la importancia del Sector Agropecuario en una situación tan difícil, abramos los caminos, busquemos un diálogo que es lo más importante y desde la Comisión seamos puente para ello.

Señor Presidente, muchas gracias.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Muchas gracias, doctor Crisanto.

Con todo lo que se ha dicho y con la insistencia de todos del actuar desde la Comisión, me parece que como se ha dicho, la Comisión más que buscar culpables debe presentar y proponer, por eso entonces vamos a poner en consideración una proposición que ya había sido trabajada desde el inicio con respecto a los corredores de seguridad alimentaria, pero también acudir a una proposición que tiene como objeto escuchar como el punto de partida del diálogo, a los gremios y para eso me parece importante, entonces crear una Subcomisión que ordenada desde la Mesa Directiva y con la coordinación del doctor Caicedo, pueda interactuar con la Plenaria además sobre el sector agropecuario, digamos que es el sector que hoy, como lo han explicado varios, tienen muchísimas contingencias y siendo responsabilidad ese tema de la Comisión Quinta, me parece que la Comisión debe liderar desde el Congreso de la República esa interacción con el sector.

Entonces, en una Subcomisión, señor Secretario, que como lo explico dirigida por el Vicepresidente de la Comisión, el doctor José Edilberto Caicedo y con la participación del doctor Ciro Fernández, del doctor Rubén Darío Molano, del doctor César Ortiz

y del doctor Crisanto Pisso, además del doctor Félix Chica, podamos proponer una agenda que nos lleve inicialmente a decirle al Presidente de la Plenaria de la Cámara, el doctor Blanco, que la Comisión quiere ser muy activa en los diálogos con el sector agropecuario, construir la agenda de diálogo con el sector agropecuario, plantear además unos diálogos previos de la Comisión con esa misma agenda antes de llegar a la Plenaria y que el resultado de esos diálogos sean allegados a las Mesas entre el Gobierno nacional y los promotores del Paro, para que sean tenidos en cuenta como un aporte de la Comisión a ello.

Igualmente, como ya lo he repetido en varias ocasiones, vamos a poner en consideración desde la Comisión Quinta, la proposición para exigir y solicitar al Gobierno y a los promotores del Paro, la creación inmediata de los Corredores de Seguridad Alimentaria, yo no sé si alguien tenga otra propuesta adicional, esa Subcomisión se reunirá, planteará el tema de las Mesas de Diálogo desde la Comisión Quinta sobre todo con el Sector Agropecuario, planteará la agenda del sector agropecuario en la Plenaria de la Cámara, que sea una iniciativa de la Comisión para el diálogo del Sector Agropecuario con el Congreso de la República y con lo que pudiéramos llevar a las Mesas de Diálogo, pero definitivamente con todas las dificultades la Comisión Quinta tiene que ser activa en una situación tan calamitosa como la que estamos viviendo en este instante en el país.

Yo no sé si alguno de los compañeros tiene algo concreto como actividades puntuales para plantear a esta iniciativa desde la Comisión que intenta, como ya se ha dicho, poner a la Comisión a la altura de la situación.

No teniendo otras iniciativas, señor Secretario, pasemos al siguiente punto del Orden del Día y formalizamos el tema de la Subcomisión.

Honorable Representante César Augusto Pachón Achury:

Presidente, disculpe, no es para iniciativas, pero sí le había pedido ahí en el chat el uso de la palabra cómo lo hicieron mis compañeros, pero no es para de pronto sumar...

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Tranquilo, tiene el uso de la palabra Representante César Pachón.

Honorable Representante César Augusto Pachón Achury:

Gracias Presidente, un cordial saludo para la Mesa Directiva y todos los presentes.

Ahí los he escuchado atentamente, yo creo que hagamos un momento de reflexión como lo han dicho ustedes también, pero tal vez uno no puede hablar de lo que no ha visto, solo de lo que la estrategia medios de comunicación quieren vender, yo personalmente estoy acá en la ciudad de Cali y este fin de semana he estado conociendo este proceso, así como les hice la invitación, vengamos acá a sesionar, hubiéramos podido evitar mucho, ahora yo sé y entiendo las posiciones de cada uno de ustedes desde sus Partidos, porque obviamente son equipos, son un grupo político, pero sí quisiera que reflexionáramos ya como ciudadanos y como seres humanos y tal vez no siempre como con a veces líneas hasta guerreristas cuando hay un Proceso de Paz firmado y queremos es que no haya más muertos, sean procesos de protesta o sean otro tipo de procesos.

Entonces, los invito a que desarmemos esos ánimos de guerra y los invito a que den el paso hacia la Paz, yo creo que como Comisión también debemos ser ejemplo de ello, yo quisiera describir muchas cosas qué incluso mis palabras yo sé que muchos pedirían réplica y me atacarían o dirían muchas cosas porque es la ideología de ustedes, pero sí quiero dejar claro los hechos del día de ayer, en la mañana sale el Alcalde Iván Ospina donde hace un anuncio casi dándole vía libre a los que llama ciudadanos de bien para que ejerzan cualquier tipo de acción en la ciudad, ¿qué hacen los llamados ciudadanos de bien?

Voy a describir un ciudadano de bien como personas vestidas de civil con armas de fuego, que no se sabe si tengan permisos o no, al lado de la Policía o de la Fuerza Pública, haciendo retenes, parando vehículos, que incluso en qué terminó de ello, hicieron todo un plan para buscar provocar a la Guardia Indígena, ¿cómo lo hicieron?, en un lugar de la ciudad montaron un retén, represar un vehículo, revisaron vehículo a vehículo y en uno de los vehículos iba un Consejero del CRIC, lo trataron muy mal, está de testigo el doctor Hoyos, no sé si él aún está en el Congreso o no, él estaba también en el lugar de los hechos, prácticamente lo secuestraron estos ciudadanos de bien, dónde estaba la policía, gente armada y lo encerraron con otras camionetas y lo que hicieron fue buscar que él llamara a la Guardia Indígena para que llegara a ese punto.

Cuando las chivas de la Guarda Indígena llegaron al punto fueron recibidas a disparos, y obviamente, ahí se presentaron todos esos heridos, uno de los carros que estaba allí disparando y las personas que subieron a unas camionetas y fueron y se metieron en ese conjunto residencial, el conjunto residencial donde sale un dron tomando unas imágenes y diciendo supuestamente que los Indígenas supuestamente se estaban tomando los conjuntos residenciales, esas imágenes correspondían a la persecución que hizo la Guardia Indígena de esas personas que habían acabado de coger a bala a los compañeros Indígenas, y entonces es ahí donde había todo un plan como un anzuelo para llevar a los Indígenas hasta cierta zona atacarlos y provocarlos y hasta tenían el dron preparado, esto ya son paramilitares mucho más modernos y al lado estaba la Policía y los Militares.

Ustedes pueden ver que ningún Indígena lleva un arma de fuego, llevan bastones de mando, no llevan armas de fuego, ellos antes llegaron aquí a Cali a buscar que la delincuencia no se apoderara de hacer retenes, que no se apoderara de verdad

de sembrar el terror, ¿qué se quiere?, se quiere que haya diálogo y esa gente no se va a retirar de acá de Cali, como lo dijo el Presidente y el Presidente vino apenas en la madrugada a dar órdenes a sus fuerzas militares y policías, pero hombre, porque no se reúne, yo sé que hay compañeros acá que son del Partido de Gobierno o son aliados al Gobierno, pero sí le digo algo, hoy ante Colombia ese hecho de que el Presidente no dé símbolos de paz, símbolo de diálogo de respeto y que antes aplauda actividades de grupos paramilitares dentro de las ciudades y las acompañen violando todos los Derechos Humanos.

La verdad que eso no lo ve bien el país y no solo el Presidente está quedando mal, todos ustedes, miren cuál es la actitud de la ciudadanía hacia el Congreso de la República; ¿yo porque estoy acá?, porque yo nací de procesos sociales, porque yo soy primero Líder Social antes que ser Congresista, porque yo no voy a abandonar a estas comunidades, porque lo que reclamamos es justo que es lo mismo que yo les he dicho en los debates a ustedes cada vez que tenemos un debate y esa será siempre mi posición.

Los diálogos que plantea el Presidente de la República en un listado que, incluso hace poco lo colocó, alguno de ustedes al chat de nosotros, ahí no plantea ni diálogo con la minga indígena ni está planteando diálogo con los sectores sociales movilizados y estos sectores movilizados que están hoy en los puntos dentro de la ciudad de Cali o en muchos puntos de Colombia, no corresponden a la directriz del Comité Nacional de Paro, no corresponden, hay un estallido social, es gente nueva que está cansada, es gente que quiere ser escuchada y por eso insisto e insistiré, el Congreso debería de hacer un papel de venir acá a la ciudad de Cali, de venir acá a buscar primero que todo traer paz y que las partes no se enfrenten de ninguna manera y buscar a partir de que no haya agresiones buscar construir un diálogo, pero es que hoy no hay credibilidad hacia los Sectores Políticos.

Ustedes vieran todas las opiniones que hay de parte de la ciudadanía, es un cansancio colectivo y sí la agenda es la que pone la ciudadanía, nosotros no podemos seguir dictando una agenda de lo que se nos ocurrió, no, e incluso con mi Partido le propusimos este fin de semana en la reunión a la Mesa Directiva de la Cámara, que cada Comisión discutiera los temas, por ejemplo, nuestra Comisión los temas agrarios, escucháramos campesinas, campesinos, los temas ambientales, los temas mineros del pequeño minero, en fin, la Comisión del transporte escucha allá los transportadores, la Comisión de la salud escucha a los de la salud, las Económicas a la gente que está hablando de temas tributarios y que después consensuáramos, pero no, que teníamos todos que escucharlos en Plenaria, pero finalmente eso como que no agiliza el trabajo, no lleva a nada.

Sí debe el país escuchar a mucha gente que hoy no está siendo escuchada y la agenda de nosotros incluso debería ser priorizada, los proyectos de ley basados en los temas que esta ciudadanía necesita, y nos están hablando, sé que hay muchos proyectos de ley que ustedes también son autores o coautores, también han presentado que son a los que deberíamos de darles prioridad tanto en Comisiones como en Plenarias y terminar por lo menos el Congreso diciendo pidieron esto aquí está la propuesta y lo volvimos Ley de la República, pero veo que hay un Gobierno que no quiere sentarse a una Mesa de Diálogo, que no quiere pacificar el país, que lo quiere ver en llamas, que acompaña a ciudadanos de bien, armados y avanzan con ellos disparándole a otros ciudadanos que no tienen armas de fuego, que están en total indefensión.

Entonces, no sé a dónde nos lleva todo esto, pero mientras no haya la voluntad del Gobierno nacional del Presidente Duque y de todo el Gobierno, aquí seguirán las masacres y demás, la Comunidad Internacional sabe lo que está pasando, yo personalmente de los hechos del día de ayer y ya he dialogado con varias Organizaciones Internacionales, yo tengo las pruebas, tengo los testigos, tengo muchas más imágenes que no hemos revelado de todo como aconteció y como sucedió, como buscaron acribillar a los Indígenas con armas de fuego y la Policía y el Ejército estaban al lado de los ciudadanos de bien que estaban disparando esas armas, y yo personalmente voy hacer la denuncia a nivel internacional, porque eso no se puede quedar así.

Aquí en Colombia el Defensor del Pueblo no va a hacer nada, nadie va a hacer nada, aquí van a buscar seguir matando y antes que no se metieron acá la Universidad del Valle, porque pretendían rodearon toda la Universidad, estuvo el ESMAD, el Ejército, la SIJIN y todos, hicimos la denuncia acá, una Miga tradicionalmente siempre van, son las familias, y dentro de esas familias están las niñas y los niños y aquí están, nosotros no vamos a permitir que les hagan daño, y eso ha sido siempre una Minga tradicional y ustedes lo pueden ver, no es que no estemos inventando cosas.

Entonces, busquemos todos, los invito a ustedes a que miremos desde la Paz, hay una disposición inmensa al diálogo de parte de todas estas comunidades, este fin de semana se hizo acá en el Coliseo de la Universidad una reunión de todos los sectores sociales del Valle y especialmente de Cali y están unos pliegos, están unas propuestas, están unas salidas, ¿pero quiénes los están escuchando?, nadie, nadie, y es lo que se pide, venga una Mesa sentémonos y primero busquemos pacificar todo, hacer cualquier proceso humanitario y demás, pero que sean escuchados y si el Gobierno se reúne con la Mesa Nacional de Paro bien, pero la Mesa Nacional de Paro no va a desarticular lo que hay acá en Cali, lo que hay acá en el Valle, lo que hay en muchos sectores, incluso en Nariño ya, en Boyacá ya está lleno, Abastos, ustedes pueden ir y mirar, en Cundinamarca también ya están circulando los alimentos, vamos a Abastos, vaya cualquiera de ustedes a Corabastos dense cuenta que cantidad de comida hay, hay bastante comida.

Entonces, yo espero que esta Comisión también tenga un acto de Paz y que con ustedes yo sé que tenemos diferencias, con muchos diferencias ideológicas y muchas cosas, pero hoy el país nos obliga de pronto a reflexionar, sé y siempre les he dado los debates con todo el respeto basado en temas técnicos, en conocimiento, en experiencias, en vivencias como lo que le estoy contando hoy, pero si esto se sigue incendiando y se sigue creciendo, vuelvo y le recuerdo a mis compañeros y compañeras, declarar un Estado de Conmoción Interior puede llevar a un Golpe de Estado los Militares colombianos, al mismo Presidente de la República y lo primero que quitan es el Congreso de la República, a todos nosotros nos van a hacer a un lado, entonces, yo sí les invito a que el Congreso incluso miembros del Partido de Gobierno apoyen esta Paz, está calma y que las Fuerzas Militares obedezcan al verdadero mando del Presidente y no a lo que ustedes estuvieron organizando del expresidente Uribe y que más bien todos busquemos pacificar el país y todos seguir trabajando y participando de cada actividad.

Pero no permitan ustedes compañeros del Centro Democrático que el país llegue a declararse Estado de Conmoción Interior y un Golpe de Estado, porque eso nos haría volar a todos de aquí y así cada uno de ustedes tenga sus propuestas desde sus regiones no las van a respetar, así pertenezcan al partido de gobierno no los van a respetar, podemos construir algo lógico, algo concreto, algo respetuoso para el país, seguir procesos democráticos y no como hoy lo quieren declarar.

Porque cuando dicen que abren las vías le dicen a la Gobernadora que cierran el departamento, cuando dice que iban a abrir las vías, para que llegar el alimento, y todo lo que las empresas están demandando y el mismo Gobierno mandó cerrarlo, ¿quién está causando más el caos aquí?, ¿para dónde llevan estos procesos?, hay muchas cosas donde van a pasar, incluso, por encima de ustedes mismos así sean del partido de Gobierno, con respeto lo digo, lo hemos analizado y yo hago la invitación hoy respetuosa para que todos reflexionemos, yo no quiero juzgar a nadie acá, pero sí es un tema muy delicado porque aquí si alguien piensa que va a perder el poder está pensando es en tomarse el poder por el uso de las armas y el dar un Golpe de Estado y acabar con la democracia, la poca democracia que le queda Colombia, con respeto lo digo y eso es lo que nosotros vemos que para allá nos lleva y lo advierto hoy en esta Comisión y lo dejo como constancia también, hacia allá nos llevan y a nosotros a todos nos también nos harían a un lado o nos desaparecerían.

Entonces, construyamos la democracia del país, participemos todos, sé que todos tenemos que ceder, sé que no todos tenemos la razón, sé que podemos construir con nuestras ideas, aquí hemos aprobado proyectos de ley en los que hemos estado de acuerdo, y nos hemos podido poner de acuerdo, y nosotros tenemos unas diferencias más profundas, pero a lo primero, a lo que los llamo es a una invitación hacia la paz, a pacificar el país al diálogo, que hoy no quiere aceptar el Gobierno, están dispuestos todos los sectores que están movilizados, está dispuesta la Minga Indígena, es más, el Gobierno se ha movilizado muchas veces, pero es que incumple, incumple, ¿cuáles son los pliegos de demanda hoy?, lo que le incumplieron a los camioneros, lo que le incumplieron a los campesinos, lo que le incumplieron a los profesores, lo que le incumplieron a los estudiantes, lo que le incumplieron a los Indígenas, es que ya lo tiene el Ministerio del Interior no necesita ni sentarse sino es tomar acciones y decidir vamos a hacer esto, vamos a cumplir en aquello, yo sé que esto no se podrá, pero son símbolos y esto es pacificar el país.

Con todo respeto he dicho estas palabras, no es el ánimo de ofender a nadie, pero sí es una situación muy crítica y yo personalmente estoy acá porque aquí nací, mi partido lo construimos con las Comunidades Indígenas, Campesinas y Negras, para ser representados y aquí estamos y seguiremos, acompañamos y siempre en paz y queremos la paz para este país y no queremos ver más derramamiento de sangre, los invito que sé que tenemos capacidades todos, muchos de ustedes son influyentes en sus Partidos, vamos hacer actos de paz y avanzar y buscar dar condiciones de vida digna y si alguna decisión se tomó de pronto en un momento el Congreso de una manera podemos corregirla, nosotros estamos aquí para hacer Leyes o para incluso para hasta poder quitar o derogar Leyes, que a veces hasta más fácil, como lo que está pidiendo que se derogue la anterior Reforma Tributaria.

Entonces, compañeros y compañeras con todo respeto y aprecio, espero que sigamos trabajando y nos apoyen, si nos quieren venir a matar acá estamos pidiendo Paz, llevando la palabra, siendo respetuosos en democracia y estamos construyendo un país, el país que queremos, el país que quiere esta sociedad que está movilizada, no el país que quiera Sarmiento Angulo u otros personajes, aquí debemos respetar es a la ciudadanía.

Muchas gracias.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Gracias a usted doctor Pachón.

Antes de darle el uso de la palabra al doctor Ballesteros, yo quiero hacer exposición, esta sesión básicamente ha servido para anunciar unos proyectos que vamos a discutir, un bloque de proyectos ya hemos insistido en las ponencias, pero además en conciencia de las dificultades y en conciencia de las responsabilidades nuestras como representantes de la comunidad ante el Congreso y desde una Comisión que tiene que ver con el sector agropecuario, construir propuestas que como todos lo hemos reclamado de diálogos que nos lleven a concertación y a procesos de entendimiento que nos den paz.

Entonces, a todos los intervinientes, al doctor Pachón y a todos desde diferentes puntos de vista

desde esta Comisión, procuraremos generar las acciones que nos permitan manifestarnos, como tal, delante de la comunidad.

Tiene el uso de la palabra el doctor Edwin Gilberto Ballesteros, para pasar al siguiente punto del Orden del Día.

Honorable Representante Edwin Gilberto Ballesteros Archila:

Presidente, muchas gracias, les pido excusas que hoy se me desconfiguró el correo y he tenido algún problema de conexión, pero Presidente, yo con los buenos días para usted, para la mesa directiva y para cada uno de mis compañeros de Comisión y de todos los colombianos que no siguen en esta sección del día de hoy.

Yo quisiera arrancar con una frase querido Presidente y apreciados compañeros y lo primero es que las posturas políticas no nos nuble la empatía Presidente, yo creo que acá hay que hacer un llamado a la cordura, a la construcción y sobre toda a la moderación de lo que se dice desde el Congreso de la República hacia los colombianos, por el bienestar de la Nación, por el bienestar de nuestros campesinos, de la ruralidad, de las empresas, de nuestras familias, yo creo que acá lo que está en juego es el bienestar y la vida de todos también de la gente que tiene sus sueños desde el campo colombiano, de nuestras familias, de la Institucionalidad, de la democracia, pero yo les pido por favor cordura y moderación con el mensaje, porque acá no podemos coger carbón y atizárselo al fuego o leña al fuego como dicen por ahí, para incendiar y prender muchísimo más todo lo que está sucediendo hoy en el país.

Yo sé que hay una cantidad de problemas, de errores, de inconvenientes y desde luego toda la solidaridad y las manos para construir y ayudar a buscar soluciones, pero hay que reconocer que acá todos los problemas estallaron hoy, son un cúmulo de situaciones de décadas que han venido acumulándose y que llevó hoy debido a la pandemia y debido a toda la situación tan difícil que se viene afrontando en el país, es lo que tiene desde luego tanto en el inconformismo social, pero también en una serie de manos oscuras que vienen incidiendo en la alteración del orden público, el vandalismo, del terrorismo y acá este Congreso, con el mayor respeto, este Congreso no puede desconocer esa problemática también, sería taparnos los ojos a la realidad y no querer entender un problema que hoy nos está generando el conflicto que estamos viviendo en las diferentes calles.

Yo lo que creo es que acá la única forma es desde lo que ha propuesto el Gobierno nacional, el Presidente Iván Duque y de lo que quiere esta Comisión también, empezar de que, entre todos, podamos abrir las puertas del diálogo, de la propuesta, iniciar a escucharnos sin una varita mágica para decir que vamos a solucionar todos los problemas, pero sí empezar a seguir en esa ruta que nos permita poder ampliar el plan de vacunación, cumplir esa meta de 35 millones de colombianos vacunados cuanto antes, buscar cómo reactivamos para que nuestros campesinos no sigan perdiendo sus cosechas, buscar cómo protegemos también esa inversión de los empresarios, de los pequeños y medianos empresarios que hoy con actos de vandalismo han visto destruido el esfuerzo de sus familias, de décadas o de muchos años de trabajo botados al abismo, simplemente porque alguien no estuvo de acuerdo y rompió una puerta amenazó a sus empleados y entonces fue y le robó todas sus gallinas ponedoras, sus cerdos, en fin, como la hemos visto todos estos días a través de las redes sociales, Presidente.

Así que esta primera parte Presidente y queridos compañeros, bajémosle un poco al odio, bajémosle un poco al odio de verdad porque es que no podemos seguir disfrazados de ovejitas cuando en el fondo son unos lobos que lo que estamos esperando es la mínima oportunidad para tirarle más leña al fuego y seguir incendiando este país, eso no les queda bien, lo digo en el máximo respeto con mis compañeros de Comisión, no les queda bien a los Congresistas de este país, se disfrazan de lobos en redes sociales, pero detrás están buscando cómo construyen, cómo difaman y cómo se confabulan para que a través de toda esta unión de problemas de manos oscuras, intencionales, de los grupos terroristas también, ellos sí darle un verdadero Golpe de Estado a la democracia, que eso es lo que quieren hacer, Presidente.

Presidente, yo quiero decir para, para finalizar tres cosas, hicimos una constancia la semana pasada en la Plenaria de la Cámara de Representantes, donde le solicitamos a la Mesa Directiva hacer un gran pacto por el respeto, un gran pacto por el respeto para que no continúe la desinformación, esos montajes de esos videos que están haciendo algunos Congresistas, masificándolo a través de las redes sociales donde muestra a la fuerza pública, donde muestran una cantidad de mentiras y terminan convirtiéndolos en verdad, porque la gente obviamente lo cree y las redes sociales se prestan para eso, entonces, es un punto que me parece que esta Comisión, debería apreciado Presidente, usted a ayudarnos a apoyar, yo lo hablé con el Presidente Blanco el día sábado que tuvimos reunión de voceros y creo que van en buen camino, pero es muy importante considero poderlo respaldar y que esa iniciativa se pueda volver un propósito, un acto simbólico desde el Congreso para todo el pueblo colombiano.

Igualmente que me permitan hacer parte de esa Comisión, constituir la Subcomisión que quiere construir esta Comisión, la semana pasada tuvimos la oportunidad del partido invitar a los gremios y algunos actores sociales, para que se pudiera escuchar la problemática que hoy también están afrontando desde el sector agropecuario, de la generación de empleo, desde la pérdida de sus cosechas, los bloqueos injustificados, que hoy tienen en vilo, no solamente la producción y la seguridad alimentaria del país sino también el mantener miles y miles de empleos que con mucho esfuerzo

los pequeños y medianos empresarios de este país vienen organizando.

La solicitud al Comité del Paro que permita la línea de paso de alimentos y demás, yo creo que eso es fundamental, que eso es fundamental para que podamos buscar alternativas de salida, que no se pierdan los alimentos, que no se pierda la leche, que no se mueran las aves, que no sigamos con ese maltrato animal que hemos visto en redes sociales, también me parece que esta Subcomisión y esta Comisión tienen que ser unos articuladores de esos propósitos.

Pero yo finalizo con esto, Presidente, principalmente Presidente, dejemos el odio, dejemos el irrespeto a la fuerza pública, la institucionalidad, dejemos de decir mentiras, dejemos de buscar excusas pretextos de odio con Organismos y Organizaciones Internacionales para desprestigiar a nuestro país, desprestigiar a millones de colombianos buenos, desprestigiar a la productividad de Colombia, esta mañana escuchaba a un empresario decir que qué mal se está haciendo por parte de algunos sectores del país, en ir a decir, una cantidad de mentiras a nivel internacional y que el costo que eso está teniendo es irremediable para la productividad de la ruralidad y para toda nuestra economía.

Yo lo que creo, Presidente, es que acá se siguen disfrazando de ovejas siendo los lobos que quieren destruir la democracia y la Institucionalidad de este país, para después llegar a decir que son los salvadores, los salvadores solamente para ellos, pensando solamente en enriquecerse ellos, pensando solamente en traer un modelo, que aquí está desde 1998 lo advirtieron en Venezuela, hoy los venezolanos no han podido salir de ese problema y es el social comunismo que con dineros del narcotráfico, que con la ayuda de las del ELN y algunos grupos terroristas en este país,... buscando darle un golpe de Estado a la democracia.

Esto no es un problema del Centro Democrático, esto no es un problema del Gobierno de Iván Duque solamente, es un problema de toda la Institución Política, de Instituciones y la Democracia de este país, quieren acabarnos, quieren decir que el problema es de un Gobierno, bueno, listo, puede ser, por qué no resolvemos el problema del Estado, todo el cúmulo de problemas que hay, busquemos sacar esta problemática que está y después nos encargamos de buscar soluciones al Gobierno, como empezamos a salir adelante.

Pero paremos el mensaje, el odio, paremos la desinformación, los ataques, yo particularmente y así me matoneen, así salgan todas las bodegas a atacar ahora cuando termine esta intervención, no me importa, lo hacemos con valentía, no estamos pensando en cálculos electorales para el 2022, acá estamos peleando es con responsabilidad, en decirle la verdad al pueblo colombiano y en que nos unamos, que dejemos el mensaje de odio, que unamos las manos para trabajar por este país y para salir adelante.

Presidente, muchas gracias.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Gracias, doctor Ballesteros.

Siguiente punto del Orden del Día, Secretario.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Sí señor Presidente, con mucho gusto, estamos en el último punto del Orden del Día, que es el que proponga los honorables Representantes.

Presidente tenemos dos proposiciones, si usted nos autoriza damos lectura para que la someta a votación, a aprobación.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Démosle lectura a las proposiciones, señor Secretario, para someterlas a consideración.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Con mucho gusto, señor Presidente.

Doctora Marta, por favor, ¿deja constancia si son dos proposiciones que tiene radicadas?

Subsecretaria, Martha Cecilia Moreno Dávila:

Sí doctor Jaír, son dos proposiciones radicadas.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Démosle lectura, por favor.

Subsecretaria, Martha Cecilia Moreno Dávila:

Sí, jefe.

1. Proposición.

En vista de los acontecimientos que han desatado una profunda crisis institucional en el país, la Comisión Quinta Constitucional hace un llamado urgente a respetar la vida y la movilización ciudadana. Toda democracia que se precie de tal, debe comenzar por garantizar los derechos fundamentales para su pueblo.

Sobre ese entendido y por ser la Célula Legislativa responsable del Régimen Agropecuario solicita al Gobierno nacional y exhorta a los manifestantes a acordar mecanismos, como el de Corredores para la Seguridad Alimentaria, que permitan la movilidad de alimentos hacia los Centros Poblados de los municipios del país, así como de insumos agrícolas hacia las zonas rurales.

Entendemos las razones legítimas de los manifestantes, pero también advertimos que los bloqueos indiscriminados acentúan la vulnerabilidad de los más pobres y generan malestar ciudadano al provocar las alzas de precios por baja oferta, desabastecimiento y pérdidas económicas para campesinos y productores agropecuarios.

Hacemos un llamado a la sensatez para que prime la Justicia y los Valores Democráticos en este momento de angustia y confusión que vivimos.

Finalmente nos solidarizamos con las familias de todas las personas que han sido víctimas de la violencia y de los muertos que han dejado estas luctuosas jornadas.

Suscrita la proposición por los honorables Representantes: *Luciano Grisales Londoño*, *Crisanto Pisso Mazabuel*, *Flora Perdomo Andrade*, *Félix Alejandro Chica Correa* y el Honorable Representante *Rubén Darío Molano*.

2. Proposición.

Créese una Subcomisión que construya una agenda de diálogo con el sector agropecuario con el propósito de escuchar y generar alternativas a partir de las preocupaciones planteadas por los gremios del sector para avanzar en fuentes de diálogo y concertación en el marco de la situación que viene presentándose en el país.

Suscrita por el honorable Representante *Luciano Grisales Londoño.*

Están leídas las dos proposiciones, señor Presidente y señor Secretario.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Señor Secretario, pongamos a consideración las proposiciones, advirtiendo lo siguiente, estas son iniciativas que han salido del trabajo de la Comisión en esta mañana, la subcomisión además tendrá responsabilidades como las de conectar definitivamente la agenda de la Plenaria a la Comisión y a los temas y al sector agropecuario en la Plenaria y eso nos debe llevar a pesar de todo lo que se ha dicho y a pesar de las dificultades a que la Comisión tenga una actitud propositiva delante de las circunstancias actuales.

Entonces, como lo explico son proposiciones que salen del trabajo de esta sesión de la Comisión, esperando que la Comisión haga el trabajo que le corresponde y siga en la ruta del diálogo como la mejor salida a esta crisis.

En consideración, entonces las proposiciones anteriormente leídas.

Honorable Representante César Augusto Ortiz Zorro:

Presidente.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

El doctor César Ortiz.

Honorable Representante César Augusto Ortiz Zorro:

Perdón, Presidente, qué pena es que quiero pedirle muy respetuosamente me permita acompañarlo con mi firma en su segunda proposición, se lo agradecería.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Sí mi doctor César Ortiz, la proposición nosotros queremos que salga directamente como una proposición de toda la Comisión Quinta, pero claro está que este ahí su firma y la firma de todos incluye, todos los miembros de la Comisión.

Honorable Representante Ángel María Gaitán Pulido:

Presidente Luciano, es en el mismo sentido, para firmar la proposición, pero que aparezcan la firma de todos los miembros de la Comisión, por favor, porque eso es la legitimidad de la proposición propuesta por todos los miembros acompañando estas proposiciones, igual para las dos proposiciones.

Muchas gracias.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Gracias, doctor Gaitán.

Señor Secretario y doctora Martha, entonces todas las dos proposiciones son firmadas por los integrantes de la Comisión en pleno.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Sí señor Presidente, como quiera que la primera proposición más que una constancia, vamos a proceder a darle despliegue a la Mesa Directiva, a la Prensa, al Ministerio de Agricultura, a la Presidencia de la República, a los miembros del Comité del Paro, para que se haga conocer, entonces me parece indispensable que estén las firmas de todos los honorables Representantes, tan pronto terminemos la sesión procederemos a recoger la firma de manera digital.

Señor Presidente, con esas constancias entonces someta a votación.

Honorable Representante César Augusto Pachón Achury:

Perdón Presidente, es tan amable y me pueden volver a dar lectura a la primera proposición, son tan amables, Secretario y Presidente.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Señor Secretario, démosle lectura o Martha, démosle a la primera proposición, por favor.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Sí señor.

Subsecretaria, Martha Cecilia Moreno Dávila:

Sí, señor Presidente.

Proposición.

En vista de los acontecimientos que han desatado una profunda crisis institucional en el país, la Comisión Quinta Constitucional hace un llamado urgente a respetar la vida y la movilización ciudadana. Toda democracia que se precie de tal, debe comenzar por garantizar los derechos fundamentales para su pueblo.

Sobre ese entendido y por ser la Célula Legislativa responsable del Régimen Agropecuario solicita al Gobierno nacional y exhorta a los manifestantes a acordar mecanismos, como el de Corredores para la Seguridad Alimentaria, que permitan la movilidad de alimentos hacia los Centros Poblados de los municipios del país, así como de insumos agrícolas hacia las zonas rurales.

Entendemos las razones legítimas de los manifestantes, pero también advertimos que los bloqueos indiscriminados acentúan la vulnerabilidad de los más pobres y generan malestar ciudadano al provocar las alzas de precios por baja oferta, desabastecimiento y pérdidas económicas para campesinos y productores agropecuarios.

Hacemos un llamado a la sensatez para que prime la Justicia y los Valores Democráticos en este momento de angustia y confusión que vivimos.

Finalmente nos solidarizamos con las familias de todas las personas que han sido víctimas de la violencia y de los muertos que han dejado estas luctuosas jornadas.

Está leída la proposición nuevamente, doctor.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Está leída la proposición, doctor Pachón, la intención es que la firmemos a nombre de la Comisión Quinta.

Está pidiendo el uso de la palabra el doctor César Ortiz, tiene el uso de la palabra César Ortiz.

Honorable Representante César Augusto Ortiz Zorro:

No, Presidente, yo conozco su intención, sé que es la mejor, es la mejor intención, a mí me preocupa es que como la presenta el Gobierno, como el Gobierno presente este documento, es eso Presidente.

Me reservo mi explicación, pero la voy a acompañar.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Este documento será allegado al Presidente de la República y a los promotores del Paro y de las Marchas, adicionalmente es una herramienta que tendrá la Subcomisión que vamos a nombrar para que la Comisión Quinta tenga digamos una agenda respecto a lo que está sucediendo, sea más propositiva, más proactiva en esto y señor Secretario que tenga la ruta adecuada para que la Comisión igual también los medios, lleguemos a esa manifestación.

Eso es básicamente doctor César Ortiz.

Quiero anunciar además que la subcomisión desde la Mesa Directiva, estará coordinada por el doctor José Caicedo y estará integrada por el doctor Rubén Darío Molano, por el doctor Ciro Fernández, por el doctor César Ortiz, Crisanto Pisso y Félix Chica, tiene la responsabilidad de montar la agenda que llevará a la Comisión Quinta a interactuar con el sector agropecuario, a exponer además cual podría ser la iniciativa que se tome desde la Plenaria, que sea esta Subcomisión la que oriente la forma en que la Plenaria pudiera abordar al sector agropecuario, que además desde unas Mesas de Diálogo previas antes de llegar a esa presentación del sector agropecuario a la Plenaria de la Cámara tenga también una información, una interacción con los mismos gremios, que además se hace un llamado de atención por la misma Comisión.

Estoy recogiendo lo que hemos hablado de la mañana, que el diálogo y la interlocución sea además con los promotores del Paro, porque se trata de crear fuentes de diálogo entre las partes, nosotros hemos dialogado mucho con los gremios, hemos atendido, como ya lo decíamos anteriormente, a muchas de las inquietudes en el tiempo del sector, innumerable cantidad de Paros en el tiempo, propuestas y compromisos del Gobierno en el tiempo y hoy lo que queremos adicionalmente digamos de allegar todas las inquietudes que actualmente se tiene, pues lo que se desea es crear el puente de diálogo entre los promotores del Paro, el Gobierno Nacional y nosotros como Congreso de la República en nuestras responsabilidades.

Entonces, señor Secretario, se abre la discusión de las proposiciones anteriormente leídas, se cierra su discusión, le pregunto a la Comisión si aprueba las proposiciones anteriormente expuestas.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Han sido aprobadas, señor Presidente, las dos proposiciones leídas.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Muchas gracias, señor Secretario.

Siguiente punto del Orden del Día.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Señor Presidente, ha sido agotado el Orden del Día.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Agotado el Orden del Día levantamos la sesión, citaremos entonces por la Secretaría para la próxima sesión.

Nuevamente insisto en el tema de las ponencias para que en el trascurso de la semana citemos nuevamente simplemente para anunciar proyectos, muy probablemente en horas muy tempranas o podamos, entonces convocar a la sesión para que empecemos la discusión de esos proyectos tal vez el viernes o el sábado.

Se termina la sesión.

Honorable Representante César Augusto Ortiz Zorro:

Presidente, qué pena con usted, me puede recordar quien más quedó en la Subcomisión.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

El doctor Rubén Darío Molano, el doctor Ciro Fernández, César Ortiz, Crisanto Pisso, Félix Chica y la dirección desde la Mesa Directiva del Vicepresidente, el doctor José Caicedo.

Honorable Representante César Augusto Ortiz Zorro:

Y tenemos una agenda, señor Presidente.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Es una de las tareas de la Subcomisión, les pediría entonces el favor, ya lo decía con la dirección del doctor José Caicedo, que montáramos la agenda cuanto antes porque sí es importante que la Comisión Quinta en diálogo con la Presidencia de la Plenaria llegáramos a enfatizar en que nosotros queremos ser los puentes de interlocución de la intención que tiene la Plenaria con el sector agropecuario.

Honorable Representante César Augusto Ortiz Zorro:

Ah bueno, Presidente, muchas gracias.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Bueno señor.

Levantamos entonces la sesión, señor Secretario.

Secretario, Jaír José Ebratt Díaz:

Sí señor Presidente, dejando constancia que a las 11:22 de la mañana, se levanta la sesión.

Deseándole una feliz tarde para todos.

Presidente, Honorable Representante Luciano Grisales Londoño:

Buen día para todos.

LUCIANO GRISALES LONDOÑO
PRESIDENTE

JOSÉ EDILBERTO CAICEDO SASTOQUE
VICEPRESIDENTE

JAIR JOSE EBRATT DÍAZ
SECRETARIO

Acta No. 035 – mayo 10 de 2021 – Legislatura 2020-2021

Comisión Quinta		
Orden del Día Período Constitucional 2018-2022 Legislatura 2020-2021	CÓDIGO	L-M.C.5-F8
	VERSIÓN	01-2014
	PÁGINA	41 de 52

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO
CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN QUINTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE
LEGISLATURA 2020 - 2021
Del 20 de julio de 2020 al 20 de julio de 2021
(Segundo Período de Sesiones del 16 de marzo al 20 de junio de 2021)
Artículo 78 de la Ley 5 de 1992
Lugar: Plataforma MEET

ORDEN DEL DIA

Para la Sesión Ordinaria del día Lunes 10 de mayo de 2021
Hora. 09:00 A.M.

Conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 1125 del 17 de julio de 2020, por medio de la cual se adiciona la Resolución No. 0777 del 06 de abril de 2020, cuyo objeto es la de "...adoptar decisiones y medidas necesarias y procedentes para lograr una eficiente labor legislativa, cuando por razones de la declaración de un estado de Emergencia, el ejercicio de las funciones de la Cámara de Representantes signifique grave riesgo para la salud o la vida de los congresistas, funcionarios y trabajadores de la Corporación".

"La Mesa Directiva de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes informa que para esta sesión la presencia será virtual a través de la plataforma MEET, para lo cual se enviará invitación de conexión al correo de cada Integrante de la Comisión".

I

Llamado a lista y verificación del Quórum

II

Aprobación de Acta de Sesión Legislatura 2020-2021:

- **Acta No. 032 de abril 20 de 2021**

III

Anuncio Proyectos de Ley

IV

Negocios Sustanciados por la Presidencia

V

Lo que propongan los Honorables Representantes

LUCIANO GRISALES LONDOÑO
PRESIDENTE

JOSÉ EDILBERTO CAICEDO SASTOQUE
VICEPRESIDENTE

JAIR JOSÉ EBRATT DIAZ
SECRETARIO

Acta No. 35 – mayo 10 de 2021 – Legislatura 2020-2021

——— Forwarded message ———
De: **Edwin Gilberto Ballesteros Archila HR** <edwin.ballesteros@camara.gov.co>
Date: lun, 10 de may. de 2021 a la(s) 09:51
Subject: PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD
To: Comisión Quinta <comision.quinta@camara.gov.co>
Cc: Jair Jose Ebratt Diaz <jair.ebratt@camara.gov.co>, Luis Carlos Rojas Ortiz <luis.rojas@camara.gov.co>

Señores
COMISIÓN QUINTA
Cámara de Representantes
Congreso de la República.

Reciban un cordial saludo.

Por medio del presente me permito comunicar que desde las 09:17AM he estado intentando conectarme a la sesión de la Comisión pero no ha sido posible pues he tenido reiterados problemas de conectividad.

Luego, me permito dejar constancia frente a esta ausencia pues por motivos de fuerza mayor dado que no he logrado conectarme a la sesión.

Edwin
Ballesteros
Representante a la Cámara por Santander

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

Bogotá, mayo 10 de 2021.

PROPOSICIÓN

En vista de los acontecimientos que han desatado una profunda crisis institucional en el país, la Comisión Quinta Constitucional hace un llamado urgente a respetar la vida y la movilización ciudadana. Toda democracia que se precie de tal, debe comenzar por garantizar los derechos fundamentales para su pueblo.

Sobre ese entendido y por ser la célula legislativa responsable del régimen agropecuario solicita al Gobierno Nacional y exhorta a los manifestantes a acordar mecanismos, como el de corredores para la seguridad alimentaria, que permitan la movilidad de alimentos hacia los centros poblados de los municipios del país, así como de insumos agrícolas hacia las zonas rurales.

Entendemos las razones legítimas de los manifestantes, pero también advertimos que los bloqueos indiscriminados acentúan la vulnerabilidad de los más pobres y generan malestar ciudadano al provocar las alzas de precios por baja oferta, desabastecimiento y pérdidas económicas para campesinos y productores agropecuarios.

Hacemos un llamado a la sensatez para que prime la justicia y los valores democráticos en este momento de angustia y confusión que vivimos. Finalmente nos solidarizamos con las familias de todas las personas que han sido víctimas de la violencia y de los muertos que han dejado estas luctuosas jornadas.

Cordialmente,

LUCIANO GRISALES LONDOÑO
H. Representante a la Cámara
Departamento del Quindío

CRISANTO PISSO MAZABUEL
H. Representante a la Cámara
Departamento del Cauca

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

FLORA PERDOMO ANDRADE
H. Representante a la Cámara
Departamento del Huila

FELIX ALEJANDRO CHICA CORREA
H. Representante a la Cámara
Departamento de Caldas

RUBEN DARÍO MOLANO PIÑEROS
H. Representante a la Cámara
Departamento de Cundinamarca

CÉSAR AUGUSTO ORTIZ ZORRO
H. Representante a la Cámara
Departamento de Casanare

ANGEL MARÍA GAITÁN PULIDO
H. Representante a la Cámara
Departamento del Tolima

EDWIN GILBERTO BALLESTEROS A.
H. Representante a la Cámara
Departamento de Santander

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

HÉCTOR ANGEL ORTIZ JUNCO
Representante a la Cámara por Boyacá

FRANKLIN DEL CRISTO LOZANO DE LA OSSA
H. Representante a la Cámara
Departamento de Magdalena

JOSÉ EDILBERTO CAICEDO S.
H. Representante a la Cámara
Departamento de Cundinamarca

CIRO FERNANDEZ NÚÑEZ
H. Representante a la Cámara
Departamento de Santander

TERESA DE JESÚS ENRÍQUEZ R.
H. Representante a la Cámara
Departamento de Nariño

JUAN FERNANDO ESPINAL R.
H. Representante a la Cámara
Departamento de Antioquia

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

OSCAR CAMILO ARANGO
H. Representante a la Cámara
Departamento de Vichada

KAREN VIOLETTE CURE CORCIONE
H. Representante a la Cámara
Departamento de Bolívar

NICOLÁS ALBEIRO ECHEVERRY A.
H. Representante a la Cámara
Departamento de Antioquia

CÉSAR EUGENIO MARTÍNEZ R.
H. Representante a la Cámara
Departamento de Antioquia

ALONSO JOSÉ DEL RIO CABARCAS
H. Representante a la Cámara
Departamento de Bolívar

PROPOSICION APROBADA

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Bogotá, mayo 10 de 2021.

PROPOSICIÓN

Créese una subcomisión que construya una agenda de dialogo con el sector agropecuario, con el propósito de escuchar y generar alternativas a partir de las preocupaciones planteadas por los gremios del sector para avanzar en puentes de diálogo y concertación en el marco de la situación que viene presentándose en el país.

Cordialmente,

LUCIANO GRISALES LONDOÑO

CRISANTO PISSO MAZABUEL

H. Representante a la Cámara
Departamento del Quindío

H. Representante a la Cámara
Departamento del Cauca

FLORA PERDOMO ANDRADE
H. Representante a la Cámara
Departamento del Huila

FELIX ALEJANDRO CHICA CORREA
H. Representante a la Cámara
Departamento de Caldas

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

RUBEN DARÍO MOLANO PIÑEROS
H. Representante a la Cámara
Departamento de Cundinamarca

CÉSAR AUGUSTO ORTIZ ZORRO
H. Representante a la Cámara
Departamento de Casanare

ANGEL MARÍA GAITÁN PULIDO
H. Representante a la Cámara
Departamento del Tolima

EDWIN GILBERTO BALLESTEROS A.
H. Representante a la Cámara
Departamento de Santander

HÉCTOR ANGEL ORTIZ JUÁREZ
Representante a la Cámara por Boyacá

FRANKLIN DEL CRISTO LOZANO DE LA OSSA
H. Representante a la Cámara
Departamento de Magdalena

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

JOSÉ EDILBERTO CAICEDO S.
H. Representante a la Cámara
Departamento de Cundinamarca

CIRO FERNANDEZ NÚÑEZ
H. Representante a la Cámara
Departamento de Santander

TERESA DE JESÚS ENRÍQUEZ R.
H. Representante a la Cámara
Departamento de Nariño

JUAN FERNANDO ESPINAL R.
H. Representante a la Cámara
Departamento de Antioquia

OSCAR CAMILO ARANGO
H. Representante a la Cámara
Departamento de Vichada

KAREN VIOLETTE CURE CORCIONE
H. Representante a la Cámara
Departamento de Bolívar

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

NICOLÁS ALBEIRO ECHEVERRY A.
H. Representante a la Cámara
Departamento de Antioquia

CÉSAR EUGENIO MARTÍNEZ R.
H. Representante a la Cámara
Departamento de Antioquia

ALONSO JOSÉ DEL RIO CABARCAS
H. Representante a la Cámara
Departamento de Bolívar

PROPOSICION APROBADA

CONTENIDO

Gaceta número 1127 - Martes, 31 de agosto de 2021

CÁMARA DE REPRESENTANTES

ACTAS DE COMISIÓN **Págs.**

Comisión Quinta Constitucional Permanente

Acta número 034 de mayo 4 de 2021 1
Acta número 035 de mayo 10 de 2021 17

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2021

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

I S S N 0 1 2 3 - 9 0 6 6

AÑO XXX - Nº 328 | Bogotá, D. C., lunes, 26 de abril de 2021 | EDICIÓN DE 21 PÁGINAS

DIRECTORES: GREGORIO ELJACH PACHECO, SECRETARIO GENERAL DEL SENADO, www.secretariasenado.gov.co; JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO, SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA, www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

TEXTOS DE PLENARIA

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 218 DE 2020 CÁMARA

por medio de la cual se modifica la Ley 1757 del 6 de julio de 2015 y se dictan otras disposiciones en materia del mecanismo de participación ciudadana de revocatoria de mandato de alcaldes y gobernadores.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente ley es asegurar el respeto de los derechos fundamentales al debido proceso e información en el marco procedimental de la revocatoria de mandato de alcaldes y gobernadores.

Artículo 2. Modifíquese el artículo 65 de la ley 134 del 31 de mayo de 1994, el cual quedará así:

Artículo 65. Motivación de la revocatoria. *El formulario de solicitud de convocatoria a la votación para la revocatoria, deberá contener las razones que fundamentan la insatisfacción general de la ciudadanía por el incumplimiento del programa de gobierno, el plan de desarrollo territorial y/o por cualquier causa relacionada con el ejercicio de las funciones de los alcaldes y gobernadores durante su mandato.*

Parágrafo. *ELIMINADO.*

Artículo 3. Modifíquese el artículo 6 de la ley 1757 del 06 de julio de 2015, el cual quedará así:

Artículo 6. Requisitos para la inscripción de mecanismos de participación ciudadana. *En el momento de la inscripción, el promotor de cualquier mecanismo de participación ciudadana deberá diligenciar un formulario, diseñado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el que como mínimo debe figurar la siguiente información:*

a) El nombre completo, el número del documento de identificación y la dirección de notificaciones del promotor o de los miembros del Comité promotor;

b) El título que describa la propuesta de mecanismo de participación ciudadana;

c) La exposición de motivos que sustenta la propuesta;

d) El proyecto de articulado, salvo en el caso de las propuestas de revocatoria de mandato.

Inscrito un Comité promotor de un referendo, la Registraduría contará con un plazo de ocho (8) días para verificar el cumplimiento de los requisitos de la iniciativa, a partir del cual contará con un plazo de seis (6) meses para la recolección de los apoyos ciudadanos.

Para el caso de la revocatoria de mandato, luego de que la Registraduría verifique y acredite el cumplimiento de los requisitos de la iniciativa, notificará personalmente tal acreditación al alcalde o gobernador, según sea el caso, siguiendo las reglas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Parágrafo 1. *Se podrán inscribir iniciativas para la revocatoria del mandato siempre que hayan transcurrido doce (12) meses contados a partir del momento de posesión del respectivo alcalde o gobernador y no faltare menos de dieciocho (18) meses para la finalización del respectivo periodo constitucional, siempre y cuando los motivos para la revocatoria del mandato se relacionen con la insatisfacción general de la ciudadanía por el incumplimiento del programa de gobierno.*

Parágrafo 2. *En caso de que el motivo para revocar el mandato se relacione con el incumplimiento del plan de desarrollo, el término de un año del que trata el numeral 1 del artículo anterior se deberá contar a partir de la entrada en vigencia del mismo.*

Parágrafo 3. *La inscripción de iniciativas podrá realizarse a través de medios electrónicos, en cuyo caso deberá utilizarse lenguaje estándar de intercambio de información en el formulario.*

Artículo 4. Modifíquese el artículo 11° de la ley 1757 del 06 de julio de 2015, el cual quedará así:

Artículo 11. Entrega de los formularios y estados contables. *Al vencer el plazo para la recolección de apoyos, el promotor presentará los formularios debidamente diligenciados, al Registrador del Estado Civil correspondiente. Vencido el plazo sin que se haya logrado completar el número de apoyos requeridos, la propuesta será archivada.*

Quince días después de la entrega de los formularios de los que trata este artículo, o del vencimiento del plazo para la recolección de firmas, o su prórroga si la hubiere, el promotor o comité promotor deberá entregar los estados contables de la campaña de recolección de apoyos de cualquier propuesta sobre mecanismo de participación ciudadana. En los estados contables figurarán los aportes, en dinero o en especie, que cada persona natural o jurídica realice durante la campaña respectiva.

El Registrador nacional remitirá los estados contables al Consejo Nacional Electoral quien, a través del Fondo Nacional de Financiación Política, será el encargado de recibir, revisar y expedir, dentro de los treinta (30) días siguientes a su radicación, la certificación contable correspondiente.

En el caso en el que el Fondo Nacional de Financiación Política, luego de revisar la información contable de que habla el inciso anterior, encuentre alguna inconsistencia relacionada con los topes de financiamiento y/o los estados contables, oficiará por una única vez al promotor o comité promotor, quien tendrá quince (15) días para realizar las correcciones a que hubiere lugar, luego de la cual empezarán a contarse quince (15) días adicionales para que la autoridad electoral emita una certificación sobre el cumplimiento o no de los topes de financiamiento y la información recibida.

En el evento en que el certificado que emita el Fondo Nacional de Financiamiento Política refleje el incumplimiento de los topes de financiamiento o de las reglas contables por parte del promotor o comité promotor de la revocatoria, el proceso tendrá como finalizado.

El procedimiento para la presentación, revisión y certificación de estados contables indicado en el presente artículo, se aplicará a los comités debidamente inscritos que promuevan el voto negativo o la abstención ante la iniciativa de revocatoria de mandato.

Artículo 5. Audiencia Pública para promover el voto informado. Previo a la entrega de los formularios para la recolección de apoyos y con el fin de promover el voto informado, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar al mandatario, a los comités debidamente inscritos, y a la ciudadanía en general a una audiencia pública que se deberá realizar dentro de la correspondiente circunscripción, como una instancia que garantice los derechos fundamentales a la defensa y la información de quienes participen en ella.

El Consejo Nacional Electoral, dentro del término de seis meses contados a partir de la vigencia de la presente Ley, deberá expedir el acto administrativo que señale el procedimiento que deba seguirse asegurando que dicha instancia no se convierta en una dilación a la continuidad del proceso y se respeten los términos establecidos para la celebración de la jornada de consulta.

En todo caso la asistencia a la audiencia pública para promover el voto informado quedará a discreción de las partes convocadas por el Consejo Nacional Electoral.

Parágrafo 1°. En ningún momento en la audiencia pública se podrá tomar decisión sobre la continuidad del proceso de revocatoria del mandato.

Parágrafo 2°. La autoridad electoral garantizará la publicidad y difusión de la audiencia, la cual deberá ser transmitida por los canales institucionales y virtuales que aseguren la mayor difusión de la audiencia entre la ciudadanía.

Artículo 6. ELIMINADO.

Artículo 7. Vigencia y derogatorias. La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, salvo los procesos de revocatorias de mandato de alcaldes y gobernadores que se hubieren iniciado y se encuentren en trámite al momento de la entrada en vigencia de la presente Ley.

JULIO CÉSAR TRIANA QUINTERO
Ponente

SECRETARÍA GENERAL

Bogotá, D.C., abril 21 de 2021

En Sesión Plenaria del día 13 de abril de 2021, fue aprobado en Segundo Debate el Texto Definitivo con modificaciones del Proyecto de Ley N° 218 de 2020 Cámara **"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 1757 DEL 06 DE JULIO DE 2015 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DEL MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE REVOCATORIA DE MANDATO DE ALCALDES Y GOBERNADORES".** Esto con el fin de que el citado Proyecto de Ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.

Lo anterior, según consta en el acta de la Sesión Plenaria Ordinaria N° 212 de abril 13 de 2021, previo su anuncio en la Sesión Plenaria del día 08 de abril de 2021, correspondiente al Acta N° 211.



JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO GENERAL

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 326 DE 2020 CÁMARA

por medio de la cual se crea el Banco Nacional de Datos Genéticos vinculados a la Comisión de Delitos Violentos de alto impacto.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

ARTÍCULO 1. Creación. Créase, con cargo al Estado y bajo la dirección y coordinación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Banco Nacional de Datos Genéticos vinculados a la comisión de Delitos violentos de alto impacto en Colombia

ARTÍCULO 2. Definiciones. Para efectos de la presente ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

a) Perfil Genético Forense**:** Es un código alfanumérico de parejas de datos que es prácticamente individual y representa los componentes paterno y materno de cada segmento del ADN que se analiza en una persona.

b) Perfil genético mezclado**:** El originado a partir de muestras biológicas mezcladas provenientes de dos o más personas.

c) Banco de perfiles genéticos de apoyo a la investigación criminal**:** Son bases de datos de perfiles genéticos obtenidos de muestras biológicas y personas vinculadas a hechos criminales, codificados de tal manera que permiten conservar confidencialidad y fácil trazabilidad, y que se cruzan entre sí, con el fin de detectar posibles criminales.

d) Fenotipo: Es el conjunto de rasgos observables y detectables de una persona

e) Evidencia abandonada: Es todo objeto recuperado por la policía judicial, en donde pudo haberse transferido material biológico de una persona sospechosa de una conducta criminal.

f) Delitos violentos de alto impacto: Son delitos violentos de alto impacto los siguientes: Homicidio (Art. 103 C.P.); Homicidio Agravado (Art 104 C.P.); Feminicidio (Art. 104A C.P.); Feminicidio Agravado (Art. 104B C.P.); Homicidio Culposo (Art. 109 C.P.); Homicidio Culposo Agravado (Art. 110 C.P.); Homicidio en Persona Protegida (Art. 135 C.P.); Tortura en Persona Protegida (Art. 137 C.P.); Actos Sexuales Violentos en Persona Protegida (Art. 139 C.P.); Desaparición Forzada (Art. 165 C.P.); Desaparición Forzada Agravada (Art. 166 C.P.); Secuestro Simple (Art. 168 C.P.); Secuestro Extorsivo (Art. 169 C.P.); Tortura (Art 178 C.P.); Tortura Agravada (Art. 179 C.P.); Acceso Carnal Violento (Art. 205 C.P.); Acto Sexual Violento (Art. 206 C.P.); Acceso Carnal o Acto Sexual en Persona puesta en Incapacidad de Resistir (Art. 207 C.P.); Acceso Carnal Abusivo con menor de Catorce años (Art. 208 C.P.); Acceso Carnal o Acto Sexual Abusivos con Incapaz de Resistir (Art. 210 C.P.).

g) Genotipos STRs, InDels y SNPs: Se refiere a los diferentes sitios del ADN que pueden analizarse para obtener un perfil genético así: STRs, secuencias repetidas cortas de ADN de tamaño variable entre las personas; InDels: secuencias cortas que varían entre individuos, dependiendo si están presentes o ausentes en su ADN. SNPs: cambios de una sola base del ADN de una persona a otra.

h) Células epiteliales de contacto: Son un tipo de células que recubren las superficies externas e internas del cuerpo y se transfieren con facilidad en la interacción entre personas o con su ambiente.

ARTÍCULO 3. Funciones. En virtud de la dirección y coordinación nacional del Banco Nacional de Datos Genéticos vinculados a la comisión de Delitos violentos de alto impacto, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tendrá las siguientes funciones:

a) Ingreso, búsqueda, eliminación, reporte de coincidencias y control de calidad de perfiles genéticos; y laboratorios especializados que procesen las muestras positivas analizadas.

b) Seguimiento y capacitación a los diferentes organismos que hacen parte del Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses, respecto al procedimiento de toma de muestra y cadena de custodia.

c) Centralización, almacenamiento, y procesamiento de la información genética producida por laboratorios estatales de genética forense y de muestras o evidencias biológicas recuperadas dentro de las investigaciones de delitos violentos de alto impacto.

d) Protección del material genético y de la información obtenidas de muestras forenses analizadas e incluidas en el Banco de Nacional de Datos Genéticos vinculados a la Comisión Delitos Violentos de Alto Impacto, en cumplimiento de los estándares internacionales, mediante criterios éticos y legales de privacidad, control de calidad de los análisis, resguardo de la cadena de custodia y uso exclusivo de la información genética para fines de investigación de delitos violentos de alto impacto.

e) Administración, definición y control de todos los usuarios que puedan tener acceso al Banco Nacional de Datos Genéticos Vinculados a la Comisión Delitos Violentos de Alto Impacto.

El Gobierno Nacional reglamentará su funcionamiento en un plazo no mayor de ocho (8) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley

ARTÍCULO 4°. Almacenamiento, sistematización y toma de material genético. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses almacenará y sistematizará en el Banco Nacional de Datos Genéticos vinculados a la comisión de Delitos violentos de alto impacto, la información genética asociada con las muestras o evidencias biológicas que hubieren sido obtenidas en desarrollo de valoraciones médico legales o necropsias practicadas en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a víctimas de delitos violentos de alto impacto, donde a juicio del forense, pueda recuperarse evidencia biológica potencialmente vinculante de un posible agresor. Igualmente se almacenará la información genética asociada con las muestras biológicas que se recuperen en el lugar de los hechos.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses implementará índices forenses para perfiles de muestras sin titular conocido, del lugar del hecho, valoración medicolegal o necropsia; de igual forma el índice de vinculados para perfiles de indiciados, imputados o condenados.

El administrador del BPG-IC podrá crear los índices que se requieran para facilitar la gestión del banco y su apoyo a la investigación judicial.

En el marco del Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los municipios y/o departamentos donde no se encuentre una sede o personal de ese Instituto, serán los Hospitales o en su defecto las Clínicas privadas quienes se encarguen de recaudar las muestras biológicas de las que trata la presente ley, conforme a lo establecido en el procedimiento de cadena de custodia para asegurar su capacidad demostrativa, así como la ejecución de los procedimientos para su conservación, y enviarlas de forma inmediata al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su procesamiento e inscripción en el Banco.

Será causal de mala conducta del representante legal del hospital o clínica el no reporte de las pruebas biológicas de las que habla el presente artículo. Para clínicas u hospitales privados que no reporten las pruebas biológicas de las que habla en el presente artículo, incurrirán en una multa. El Gobierno Nacional en un plazo no mayor a seis (6) meses reglamentará lo concerniente al protocolo de envío de muestras para el estudio del ADN y las sanciones correspondientes.

PARÁGRAFO PRIMERO: El Banco Nacional de Datos Genéticos dispondrá lo necesario para la conservación de un modo inviolable e inalterable de los archivos de información genética y de las muestras obtenidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La información obrante en el Banco será mantenida de forma permanente**,** excepto en los eventos previstos en que proceda la exclusión de perfiles genéticos de que trata el artículo séptimo de la presente Ley.

PARÁGRAFO TERCERO: En los municipios donde le corresponda a los hospitales ejercer esta función, se va a requerir su acreditación bajo la norma ISO IEC 17025 "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración" con la ONAC, como puntos de toma de muestra de ADN para procesos de análisis con fines de identificación humana

ARTÍCULO 5. Información Genética. La información genética registrada consistirá en la inscripción alfanumérica obtenida, exclusivamente, sobre la base de genotipos que sean polimórficos en la población, carezcan de asociación directa en la expresión de genes y aporten sólo información de la identidad de la persona y su sexo genético.

La información obtenida del ADN sobre rasgos fenotípicos y ancestralidad de una muestra biológica, sin titular, podrá usarse sólo con fines de investigación criminal que facilite la búsqueda de un agresor.

En ningún caso la información genética registrada podrá conocer y/o comunicar información de otras esferas del individuo que puedan encontrarse en su genoma, como la predisposición a enfermedades, rasgos de personalidad y, en general, otros
datos que no se relacionen con el objeto de la presente ley.

En cumplimiento de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, el Banco ejercerá el control necesario para evitar el uso inadecuado de la información genética, ya sea por discriminación genética de las personas o por asociación de perfiles genéticos a comunidades en riesgo de discriminación.

Bajo el principio de confidencialidad e imparcialidad, y para evitar conflictos de intereses con los administradores del Banco, este solo recibirá perfiles genéticos codificados y anónimos, ya sean elementos biológicos de origen desconocido o muestras de referencia de personas conocidas, desligados de toda información personal que pueda servir de trazador hacia la persona de origen. El banco solo conocerá el laboratorio de origen para generar los informes respectivos de hallazgos.

Los administradores del banco no podrán ser, al mismo tiempo, peritos que conozcan la información personal de los involucrados en los hallazgos del banco, no procesarán muestras ni emitirán informes periciales

ARTICULO 6. Inclusión de Perfiles Genéticos. El Banco Nacional de Datos Genéticos almacenará y administrará los perfiles de ADN de condenados por delitos violentos de alto impacto en las siguientes categorías:

1. Perfiles de ADN obtenidos de fluidos biológicos, manchas, fragmentos de tejidos o células epiteliales de contacto, sin titular identificado, es decir, de los cuales no se conoce el individuo origen, recuperados sobre las víctimas o en el lugar de los hechos, que tengan potencial de evidencia demostrativa en el contexto de una investigación criminal.

2. Perfiles de ADN obtenidos de personas de quienes se conoce su identidad, que han sido vinculados a proceso judicial frente a delitos violentos de alto impacto, como condenados con sentencia ejecutoriada, que hayan aportado voluntariamente su muestra en presencia de su apoderado.

Una vez que la sentencia condenatoria se encuentre en firme, el juez o tribunal ordenará de oficio los exámenes tendientes a lograr la identificación genética y su inscripción en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Se realizará el perfilamiento de la población carcelaria del país condenada por delitos contra la libertad y formación sexual y los delitos contra la vida y la integridad personal**.**

En el caso donde sea de utilidad tomar y perfilar genéticamente la muestra de una víctima, esta sólo podrá hacerse bajo la firma y consentimiento informado expreso para los fines específicos y con la

obligación de eliminarse tanto la muestra biológica, como su perfil de ADN, una vez cumplido su objetivo en la investigación.

3. Se incluyen los perfiles genéticos provenientes de vestigios biológicos obtenidos como evidencia abandonada por persona conocida, siempre que la muestra sea recuperada, se encuentre fuera de la esfera del dominio del titular, por lo que no se requerirá de su consentimiento para la toma y el análisis. Estos elementos podrán
obtenerse, exclusivamente, para uso en la investigación criminal.

ARTÍCULO 7. **Exclusión de Perfiles Genéticos.** Los perfiles y el material genético serán excluidos del Banco Nacional de Datos Genéticos vinculados a la comisión de delitos violentos de alto impacto bajo los siguientes criterios:

a) Para personas condenadas por delitos que afecten la vida y la libertad sexual, serán excluidos 40 años después del cumplimiento de su condena o cuando el individuo alcance la edad de 80 años.

b) Cuando se determine que hay ausencia de responsabilidad penal o haya cesación de la acción penal o se aplique alguna de las causales para terminar la acción o sanción penal**.**

ARTÍCULO 8. **De los procedimientos de búsqueda de los Perfiles Genéticos en el Banco Nacional de Datos Genéticos**. El Instituto Nacional de Medicina Legal creará las secciones o índices de perfiles genéticos que sean necesarios para apoyar la investigación judicial de los delitos que trata la presente ley, en los cuales podrá realizar dos tipos de consultas:

1. Búsquedas aleatorias periódicas: Se realizará entre elementos probatorios de origen desconocido, mientras no se conozca su origen. Estos perfiles no son sujetos de derechos y puede disponerse de ellos para búsquedas periódicas que programará el Instituto Nacional de Medicina Legal sin que se requiera orden judicial específica ni control de legalidad para tomarlos, procesarlos e ingresarlos al Banco Nacional de Datos Genéticos y buscarlos contra el mismo u otro índice o categoría.

En todo caso, el Instituto Nacional de Medicina Legal garantizará la seguridad de las bases de datos en general y los componentes de software y hardware por medio de la implementación de la norma internacional ISO/IEC 27001 "Sistema de Gestión de Seguridad de la Información", para evitar la pérdida o alteración de los registros contenidos en el Banco Nacional de Datos Genéticos

También podrán ser objeto de búsqueda aleatoria las evidencias abandonadas que se ajusten a las condiciones de legalidad descritas anteriormente.

2. Búsquedas Dirigidas o Selectivas: Podrán ser objeto de búsquedas dirigidas o selectivas en el Banco Nacional de Datos Genéticos, aquellos perfiles genéticos de personas identificadas o condenadas, sólo en respuesta a órdenes judiciales específicas y siempre que exista control de legalidad previo realizado por un juez de garantías

ARTÍCULO 9. Prohibición del uso de material Genético. Se prohíbe la utilización de cualquier componente de material genético para cualquier fin que no sea la identificación de personas a los efectos previstos en esta ley.

El servidor público que utilice indebidamente el material genético dispuesto en el banco de datos genético, incurrirá en causal de mala conducta sin perjuicio de las demás sanciones a las que haya lugar.

ARTÍCULO 10. Los exámenes genéticos se practicarán en los laboratorios debidamente acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación – ONAC – que deberá, previa revisión, determinar si cada laboratorio cumple con las exigencias técnicas y legales correspondientes para ser acreditados como institución adecuada para la realización de los exámenes correspondientes

ARTÍCULO 11. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias

ELBERT DÍAZ LOZANO
Ponente

SECRETARÍA GENERAL

Bogotá, D.C., abril 14 de 2021

En Sesión Plenaria del día 24 de marzo de 2021, fue aprobado en Segundo Debate el Texto Definitivo sin modificaciones del Proyecto de Ley Estatutaria N° 326 de 2020 Cámara **"POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS VINCULADOS A LA COMISIÓN DE DELITOS VIOLENTOS DE ALTO IMPACTO".** Esto con el fin de que el citado Proyecto de Ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.

Lo anterior, según consta en el acta de la Sesión Plenaria Ordinaria N° 208 de marzo 24 de 2021, previo su anuncio en la Sesión Plenaria del día 23 de marzo de 2021, correspondiente al Acta N° 207.

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO GENERAL

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 019 DE 2020 CÁMARA ACUMULADO CON LOS PROYECTOS DE LEY NÚMEROS 155 DE 2020 Y 221 DE 2020 CÁMARA

por la cual se establecen medidas para promover la adquisición, renovación y no evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)", se modifica la Ley 769 de 2002 y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer medidas que permitan luchar contra la evasión en la adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), mediante la adopción de incentivos que promuevan hábitos óptimos de conducción y de seguridad vial.

Así mismo, establecer una nueva cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que en ningún caso incrementará el valor de la póliza.

Artículo 2. Adiciónense los parágrafos 1° y 2° al artículo 42 de la Ley 769 de 2002, los cuales quedarán así:

Parágrafo 1°. De los incentivos. Los propietarios de los vehículos que registren un buen comportamiento vial serán objeto de la disminución en el valor del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), así:

a) En caso de no reportar accidentes de tránsito dentro del año inmediatamente anterior tendrán un descuento del quince por ciento (15%) sobre el valor del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

b) Si en los dos (2) años inmediatamente anteriores no hizo uso del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, tendrán un descuento del veinte por cierto (20%) en el valor de la tarifa del SOAT.

c) Si en los tres (3) años inmediatamente anteriores no hizo uso del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, tendrán un descuento del veinticinco por cierto del (25%) en el valor de la tarifa del SOAT.

d) Si en los cuatro (4) años inmediatamente anteriores no hizo uso del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, tendrán un descuento del treinta por cierto del (30%) en el valor de la tarifa del SOAT.

e) Si cumple cinco años o más sin hacer uso del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, tendrán un descuento del treinta y cinco por cierto del (35%) en el valor de la tarifa del SOAT.

Parágrafo 2°. De la exclusión de los incentivos. Los incentivos otorgados por esta Ley son excluyentes y no podrán acumularse.

Artículo 3. Adiciónese el artículo 42A a la Ley 769 de 2002, así:

ARTÍCULO 42A. ÁMBITO DEL ASEGURAMIENTO OBLIGATORIO. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, previsto en el artículo 42 Ley 769 de 2002 garantizará la cobertura de gastos por daños materiales a terceros, cubriendo la reparación o parte de ella de los bienes asegurables en caso de un choque simple.

La disminución porcentual de la tarifa del SOAT, prevista en el parágrafo primero (1°) del artículo 42 de esta ley, aplicará también cuando la póliza por este concepto no haya sido afectada.

A efectos de evitar un incremento en el valor de la póliza, las compañías aseguradoras eliminarán el reconocimiento de comisiones a los intermediarios. Los recursos liberados serán aplicados al cubrimiento de esta nueva cobertura para reparar los daños materiales a terceros. En ningún caso podrá incrementarse la tarifa de las primas del seguro con motivo en la ampliación de la cobertura de la que trata el presente artículo.

Parágrafo 1º. **Uso de herramientas tecnológicas.** Con el fin de agilizar los procedimientos en vía ante un choque simple, para el levantamiento del croquis, análisis y recolección de datos de las causas probables de la colisión y posible responsable, deberán utilizarse herramientas técnicas y tecnológicas como drones, plataformas virtuales o equipos móviles que permitan la atención del accidente en forma oportuna, segura y con información confiable.

Parágrafo 2º. Facultades al Gobierno Nacional para la nueva cobertura del SOAT. Por tratarse de un seguro obligatorio de forzosa contratación, facúltese al Gobierno Nacional para que, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, señale con carácter uniforme las condiciones específicas de la nueva cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de

Tránsito -SOAT, de conformidad con las reglas previstas en el artículo 193 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF).

ARTÍCULO NUEVO. El Ministerio de Transporte, en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia Financiera remitirán, dentro de los tres (3) primeros meses del año, a las comisiones Sextas Constitucionales Permanentes del Congreso de la República un informe que contenga el estado y avances del país en el tema de seguridad vial y evasión en la adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

ARTÍCULO NUEVO. Estrategias para incentivar comportamientos ejemplares en la vía. Las entidades del Sector Transporte desarrollarán estrategias que incentiven en los conductores comportamientos ejemplares en las vías, u otros comportamientos de cultura de seguridad vial que impliquen su interacción con los demás actores de la vía, esto de acuerdo con los lineamientos y estudios desarrollados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial -ANSV, o la que haga sus veces.

ARTÍCULO NUEVO. Presentación del Plan Nacional de Solución a las Problemáticas en el SOAT. El Gobierno Nacional en un término no mayor de 6 meses contados a partir de la promulgación de la presente ley, deberá entregar en las Secretarias Generales tanto de Senado como de Cámara de Representantes un plan detallado de mitigación y superación de las problemáticas que afectan el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), de forma puntual, pero no exclusiva: la administración de los recursos por parte de las aseguradoras, la alta evasión, la alta accidentalidad e incremento de costos de coberturas, y el fraude sobre el seguro.

Dicho plan deberá ser expuesto ante el Congreso de la República en sesión plenaria por separado tanto al Senado de la República como a la Cámara de Representantes.

Artículo 4. Vigencia. Esta norma rige a partir de su promulgación y deroga todas aquellas que le sean contrarias.

AQUILEO MEDINA ARTEAGA
Ponente

MILTON HUGO ANGULO VIVEROS
Ponente

EMETERIO JOSE MONTES DE CASTRO
Ponente

RODRIGO ARTURO ROJAS LARA
Ponente

SECRETARÍA GENERAL

Bogotá, D.C., abril 21 de 2021

En Sesión Plenaria del día 13 de abril de 2021, fue aprobado en Segundo Debate el Texto Definitivo con modificaciones del Proyecto de Ley N° 019 de 2020 Cámara Acumulados con los Proyectos de Ley N° 155 de 2020 y 221 de 2020 Cámara **"POR LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA PROMOVER LA ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN Y NO EVASIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)", SE MODIFICA LA LEY 769 DE 2002 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".** Esto con el fin de que el citado Proyecto de Ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.

Lo anterior, según consta en el acta de la Sesión Plenaria Ordinaria N° 212 de abril 13 de 2021, previo su anuncio en la Sesión Plenaria del día 08 de abril de 2021, correspondiente al Acta N° 211.

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO GENERAL

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 034 DE 2019 CÁMARA

por medio de la cual se implementan medidas para proteger y desarrollar la producción agropecuaria nacional.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- OBJETO: Establecer medidas que permitan desarrollar, tecnificar y fortalecer la producción agropecuaria nacional, para los trabajadores y trabajadoras con vocación agropecuaria sin tierra o con tierra insuficiente, , para las campesinas y campesinos sin tierra o con tierra insuficiente así como a la población desplazada víctima del conflicto armado, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueros, las familias campesinas, jóvenes campesinos de los territorios especiales nacionales (frontera), organizaciones campesinas, y grupos étnicos que desarrollen proyectos productivos con valor agregado a los productos cosechados y derivados de la agricultura, la ganadería y las especies menores.

ARTÍCULO 2.- Definiciones y Principios de Interpretación: La presente ley atenderá los principios Constitucionales y legales, así como las disposiciones dirigidas a desarrollar, tecnificar y fortalecer la producción agropecuaria nacional, para los trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, la población desplazada víctima del conflicto armado, las comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueros las familias campesinas, jóvenes campesinos y organizaciones campesinas y grupos étnicos. Servirán además de guía de interpretación las siguiente definiciones y principios de Interpretación.

Para efectos de lo contenido en esta ley se entenderá como:

SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA: Proceso de acompañamiento mediante el cual se gestiona el desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo; con el fin de hacer competitiva y sostenible su producción al tiempo que contribuye a la mejora de la calidad de vida familiar. Por lo tanto, la extensión agropecuaria facilita la gestión de conocimiento, la trazabilidad de los procesos y productos, la implementación de normas técnicas, el diagnóstico y la solución de problemas, en los niveles de la producción primaria, la asociatividad, organización social productiva, la cosecha, la poscosecha, y la comercialización; cumpliendo con la seguridad agroalimentaria y garantizando precios justos y sostenibles; el intercambio de experiencias y la construcción de capacidades individuales, colectivas y sociales. Para tal efecto, la extensión agropecuaria desarrollará actividades vinculadas a promover el cambio técnico en los diferentes eslabones que constituyen la cadena productiva, la asesoría y

acompañamientos a productores en acceso al crédito, formalización de la propiedad, certificación en BPA, entre otros.

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN: Aquel que refiere al conjunto de actores, instituciones y procesos relacionados con la colocación de los productos agropecuarios, a disposición del consumidor. Incluye también canales de comercialización diferentes a los convencionales, soportados en elementos propios de la Economía Solidaria, los cuales favorecen la relación y el reconocimiento entre el productor y el consumidor a través de circuitos cortos y locales de comercialización.

CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN: son una forma de comercio basada en la venta directa de productos frescos o de temporada sin intermediario —o reduciendo al mínimo la intermediación— entre productores y consumidores, con un desplazamiento mínimo de los alimentos.

TASA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA: es la contraprestación económica que se causa por la prestación del servicio público de extensión agropecuaria en los términos de los artículos 24 y 25 de la Ley 1876 de 2017...

Parágrafo. El recaudo de la tasa tendrá como destinación única, la financiación de la prestación del servicio público de extensión agropecuaria a cargo de los municipios.

SUBSIDIO A LA TARIFA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA: Es el auxilio económico que se reconoce a los trabajadores y trabajadoras con vocación agropecuaria sin tierra o con tierra insuficiente, a las campesinas y campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y la población desplazada víctima del conflicto armado y/o a las familias, organizaciones campesinas y grupos étnicos, con respecto a la tarifa de la tasa por la prestación del servicio público de extensión agropecuaria.

PLATAFORMA DIGITAL: Herramienta digital de carácter informativo o comercial que ofrece productos, servicios, conocimientos e instrumentos que faciliten el desarrollo del sector y el beneficio para dos o más tipos de usuarios diferentes pero dependientes y que interaccionan.

CAMPESINO: Un sujeto intercultural e histórico, con unas memorias, saberes y prácticas que constituyen formas de cultura campesina, establecidas sobre la vida familiar y vecinal para la producción de alimentos, bienes comunes y materias primas, con una vida comunitaria multiactiva vinculada a la tierra e integrada con la naturaleza y el territorio. El campesino es un sujeto situado en las zonas rurales y cabeceras municipales asociadas a éstas, con diversas formas de tenencia de la tierra y organización, que produce para el autoconsumo y la producción de excedentes, con los cuales participa en el mercado a nivel local, regional, nacional e internacional.

ARTÍCULO 3°. Sistema de Abastecimiento y Comercialización: El Gobierno Nacional junto con las instituciones encargadas de desarrollar y ejecutar la política agropecuaria y rural, dentro de los proyectos, planes y programas que desarrolle o pretenda ejecutar para el sector agropecuario tendrán en cuenta como prioridad aquellos que:

- Tengan como finalidad el acopio de los productos agropecuarios, que permita la preservación, conservación de estos previo a su comercialización.
- Apoyen, fortalezcan y contribuyan, con los circuitos cortos de comercialización como los mercados locales, campesinos y las prácticas de autoconsumo.
- Ejecuten compras públicas de alimentos de origen agropecuario para atender la demanda de los programas institucionales de servicios de alimentación de las entidades públicas descentralizadas de orden Nacional.
- Creen plataformas digitales para fortalecer el sistema de abastecimiento y comercialización.
- Articulen, faciliten y acompañen a los pequeños y medianos productores, en trámites de registro ante el Invima, certificaciones ICA y demás certificaciones requeridas para el comercio local, regional, nacional o internacional. Así como subsidio al costo de dicho registro.
- Creen incentivos a la comercialización.
- Incentiven la producción agropecuaria de las comunidades étnicas.
- Ejecuten los proyectos de carácter agropecuarios, mediante la priorización del uso de energía limpias y priorizando la conservación y protección de los recursos naturales.

Direccionados hacia los trabajadores y trabajadoras y productores agropecuarios sin tierra o con tierra insuficiente, a las comunidades étnicas y la población desplazada víctima del conflicto armado las comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueros, las familias campesinas, jóvenes campesinos y organizaciones campesinas y grupos étnicos.
Dirigidos a productores agropecuarios pertenecientes a Consejos Comunitarios de comunidades negras, afro, raizales y palenqueras.

Parágrafo. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural incluirá a la población a la que hace referencia el artículo 1 de la presente Ley, en las líneas de acción de la Política Pública del Sector Campesino y especialmente en lo que hace referencia al Sistema de Abastecimiento y Comercialización de productos agropecuarios.

Artículo 4º. Acceso al servicio público de Extensión Agropecuaria: Las entidades responsables del servicio público de Extensión Agropecuaria que componen el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria-SNIA y el Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria o quien haga sus veces prestarán atención preferente, regular y continua para los trabajadores y trabajadoras de sector agropecuario sin tierra o con tierra insuficiente, a campesinas y campesinos sin tierras o con tierra insuficiente y la población desplazada víctima del conflicto armado, las familias campesinas, jóvenes campesinos, organizaciones campesinas y grupos étnicos, para mejorar las capacidades productivas en aspectos como la diversificación de las unidades de producción, calidad e inocuidad de alimentos; planificación de las explotaciones; en la aplicación y uso de tecnologías y recursos adecuados a la naturaleza de la actividad productiva; así como en el proceso de transición hacia nuevas tecnologías de producción y transformación de productos agropecuarios, fomento y fortalecimiento de la asociatividad, organizaciones sociales productivas, con el apoyo de profesionales y técnicos capacitados en este ámbito.

Parágrafo 1. El enfoque de Extensión Agropecuaria en la prestación del servicio debe ser participativo, priorizando a los actores asociados pertenecientes a la Economía Campesina, a la producción ecológica de alimentos, y a la Agricultura Familiar y comunitaria.

Parágrafo 2. La Tasa del Servicio Público de Extensión Agropecuaria no aplicará para los campesinos, y de manera especial, para las campesinas sin tierra o con tierra insuficiente; para los trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente y la población desplazada víctima del conflicto armado y las comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueros; para las comunidades étnicas; para los pescadores artesanales; ni para los sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito definidos en el Artículo 4 del Decreto Ley 902 de 2017, y artículo 28 de la ley 1876 de 2017.

Parágrafo 3. El Subsidio a la tarifa de la tasa por la prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria aplicará para los sujetos de acceso a tierra y formalización a título parcialmente gratuito definidos en el Artículo 5 del Decreto Ley 902 de 2017, lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1876 de 2017. y será progresivo.

ARTICULO 5º. Generación, innovación y Transferencia De Tecnología: La actualización del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria PECTIA tendrá como fundamento operativo la cooperación de las diversas fuentes de conocimiento bajo un modelo de concertación que incluya dinámicas y escenarios de co-producción y co-construcción del conocimiento, de modo que los procesos de diagnóstico, generación, implementación, difusión y creación de innovaciones para el sector agropecuario deberán contar con la participación activa del campesinado incluyendo un enfoque territorial, un enfoque y una producción ecológica de alimentos y un enfoque diferencial.

Todos los planes, programas, proyectos e iniciativas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación agropecuaria que se elaboren en el marco del PECTIA, deberán incluir usos, prácticas, suministro de materiales e insumos para dicha práctica y conocimientos desarrollados y construidos por el campesinado y la agricultura familiar y comunitaria.

Parágrafo 1. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, el Gobierno Nacional reglamentará el mecanismo de participación del campesinado en la actualización del PLAN ESTRATÉGICO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AGROPECUARIA.

Parágrafo 2. Todos los planes, programas, proyectos e iniciativas de inversión, desarrollo tecnológico e innovación agropecuaria que se elaboren en el marco del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria (PECTIA) deberán contar con una cuota mínima de participación femenina.

ARTÍCULO 6º. Infraestructura: El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en cabeza de la Agencia de Desarrollo Rural fomentará la construcción de infraestructura adecuada, así como la implementación de las tecnologías y equipamientos necesarios para el desarrollo del conjunto de los circuitos cortos de comercialización de productos agropecuarios de la Economía Campesina y la Agricultura Familiar.

El tipo de infraestructura y equipamientos requeridos fortalecerá la parte logística, técnica y económica de los productores agropecuarios, buscando la apertura de escenarios estratégicos de exhibición y venta de los productos más representativos de cada región del territorio Nacional, para impulsar la economía del sector y será definida al interior de los Planes de Desarrollo Sostenible de las Zonas de Reserva Campesina o del documento equivalente de planeación para otros Territorios Campesinos en coordinación con los Consejos Municipales de Desarrollo Rural y los consejos territoriales de planeación, en concordancia con los POT, PBOT, EOT y la normatividad ambiental que corresponda. Lo anterior deberá contar con la participación de las organizaciones campesinas locales y de agricultura familiar local, y Juntas de Acción Comunal.

Parágrafo 1. Las plataformas digitales hacen parte de las tecnologías a que alude el inciso primero del presente artículo.

Parágrafo 2. Para las zonas del país con difícil acceso o apartadas del territorio continental, la infraestructura a la que alude el inciso primero del presente artículo deberá priorizar vías de acceso y transporte tendiente a disminuir el costo de esto a los productos agropecuarios.

ARTÍCULO 7°. La dinamización y consolidación de la Economía Campesina y de la Agricultura Familiar podrá ser financiada mediante recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, y de aquellos contemplados en el Artículo 5 del Decreto 267 del 17 de junio de 2014 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Parágrafo 1. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, promoverá y desarrollará una estrategia que asegure, progresivamente, el acceso diferencial al sistema financiero, de los pequeños y medianos productores campesinos.

Parágrafo 2. En los municipios catalogados como PDET por el decreto 893 de 2017, o la norma que lo modifique o sustituya y los municipios ZOMAC se podrá financiar infraestructura productiva destinada a apoyar programas de qué trata la presente Ley, a través del mecanismo de obras por impuestos de que trata el artículo 800-1 del Estatuto Tributario.

Parágrafo 3. El ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Agencia de Desarrollo Rural implementará una alternativa de subsidio para la adquisición de insumos necesarios para la producción primaria tales como fertilizantes, enmiendas, abonos, alimentos concentrados, sales mineralizadas. También propenderá por el subsidio para la adquisición de maquinarias y equipos que permitan la tecnificación de los sistemas de producción de pequeños y medianos productores.

Parágrafo 4. Desarrollar mecanismos que promuévanla soberanía alimentaria, sana y correcta alimentación, enmarcadas en los objetivos del CONPES 113 como "la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa".

ARTÍCULO 8º. Fondo de Fomento para la Economía Solidaria. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con la colaboración del Ministerio del Trabajo, a través de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, creará el fondo especial destinado para la inversión social que tendrá por objeto la consolidación y fortalecimiento de las múltiples formas asociativas en el marco de la Economía Campesina, Social y Solidaria, así como su articulación en sistemas de conexión local, regional y nacional.
Parágrafo 1. El fondo de que trata el presente artículo, se articulará con la política pública integral estatal para la promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo empresarial de las organizaciones de la economía solidaria, de que trata el artículo 164 de la Ley 1955 de 2019, la cual, estará a cargo del Ministerio de Trabajo.

Parágrafo 2. Los instrumentos, programas, planes, proyectos e iniciativa del Fondo de Fomento para Economía Solidaria, al que se refiere este artículo, deberá contar con una cuota mínima de participación femenina.

ARTÍCULO 9°. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le resulten contrarias.

ÁNGEL MÁRIA GAITAN PULIDO
Ponente

RICARDO ALFONSO FERRO LOZANO
Ponente

JOSE EDILBERTO CAICEDO SASTOQUE
Ponente

SECRETARÍA GENERAL

Bogotá, D.C., abril 19 de 2021

En Sesión Plenaria del día 08 de abril de 2021, fue aprobado en Segundo Debate el Texto Definitivo con modificaciones del Proyecto de Ley N° 034 de 2019 Cámara **"POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPLEMENTAN MEDIDAS PARA PROTEGER Y DESARROLLAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA NACIONAL".** Esto con el fin de que el citado Proyecto de Ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.

Lo anterior, según consta en el acta de la Sesión Plenaria Ordinaria N° 211 de abril 08 de 2021, previo su anuncio en la Sesión Plenaria del día 07 de abril de 2021, correspondiente al Acta N° 210.

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO GENERAL

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 044 DE 2020 CÁMARA

por medio de la cual se otorga seguridad jurídica y financiera al seguro agropecuario y se dictan otras disposiciones a favor del agro

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Modifíquese el artículo 1° de la Ley 69 de 1993 y adiciónese un tercer parágrafo, el cual quedará así:

Artículo 1. Del establecimiento del Seguro Agropecuario. Establézcase el Seguro Agropecuario en Colombia, como instrumento para incentivar y proteger la producción agropecuaria, forestal, pesquera y de la acuicultura, buscar el mejoramiento económico del sector agropecuario y/o rural, sector forestal, sector pesquero y de la acuicultura, promover el ordenamiento económico del sector agropecuario y/o rural sector forestal, sector pesquero y de la acuicultura, y como estrategia para coadyuvar al desarrollo global del país.

El objeto del seguro es la protección de la totalidad o parte de las inversiones agropecuarias, forestal, pesquera y de la acuícolas, financiadas con recursos de crédito provenientes del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario o con recursos propios del productor, el reconocimiento del daño emergente y el lucro cesante o el ingreso esperado del productor, siempre y cuando este sea objeto de un acuerdo expreso dentro del respectivo contrato de seguro, previendo las necesidades de producción, transformación y comercialización nacional e internacional y el desarrollo integral del sector económico primario.

PARÁGRAFO PRIMERO. El Seguro Agropecuario podrá ofrecerse bajo la modalidad de seguro paramétrico o por índice, de manera que el pago de la indemnización se hará exigible ante la realización de un índice, definido en el contrato de seguro, el cual deberá estar correlacionado con el daño o la pérdida, teniendo en cuenta para el pago, la suma fija predeterminada en la póliza.

Esta modalidad de seguro podrá ser tomada por cualquier persona natural o jurídica de Derecho Privado o de Derecho Público. En este último caso, la entidad de derecho público podrá actuar como tomador, asegurado y/o beneficiario del Seguro Agropecuario paramétrico, asumir el pago de la prima del seguro y disponer de los recursos recibidos por concepto de indemnización para resarcir a las personas o infraestructura afectada por el riesgo amparado en el seguro, en cuyo caso tal erogación se entenderá como gasto público social.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario definirá las condiciones y los costos máximos de las pólizas para acceder al Seguro Agropecuario, considerando la modalidad de seguro paramétrico o por índice, la protección de la infraestructura y bienes dedicados a la actividad agropecuaria y/o rural, la multiactividad, así como la protección del pequeño productor y su actividad en caso de accidentes en desarrollo de la misma. Además promoverá y establecerá condiciones para el acceso a incentivos a los seguros inclusivos rurales, expedidos a través del ramo agropecuario y otros, con el fin de garantizar que el diseño del incentivo apoye la política de Gestión de Riesgo Agropecuario trazada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

PARÁGRAFO TERCERO. Para efectos de focalización del seguro agropecuario y/o subsidios de los que trata la presente ley, se deberá tener en cuenta la Cédula Rural establecida en el artículo 252 de la ley 1955 del 2019, una vez sea implementada.

ARTÍCULO 2°. Modifíquese el Artículo 3° de la Ley 69 de 1993, modificado por el Artículo 75° de la Ley 1450 de 2011, el cual quedará así:

Artículo 3. Cobertura del Seguro Agropecuario. El Seguro Agropecuario ampara los perjuicios causados por riesgos naturales meteorológicos, geológicos, biológicos, antrópicos, de mercado y comercialización, transporte, entre otros, resultantes de factores extraordinarios e incontrolables al productor, ajenos al control del tomador, de fuerza mayor o caso fortuito y que afecten la producción agropecuaria y la estabilidad de los ingresos de los productores. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reglamentará la aplicación de esta norma.

ARTICULO 3°. Modifíquese el artículo 6° de la Ley 69 de 1993, modificado por el artículo 20° de la Ley 812 de 2003, el cual quedará así:

Artículo 6. Del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios FNRA. Créase El Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, el cual tendrá el tratamiento de Fondo – Cuenta sin personería jurídica ni planta de personal, que será administrado por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO, o quien haga sus veces. El Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios tendrá por objeto:
1. Subsidiar las primas de seguros que amparen a los productores, siempre y cuando la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario apruebe su conveniencia, el mecanismo de otorgamiento por tipo de producto y previendo la sostenibilidad del esquema, según la capacidad del Fondo;
2. Financiar los costos necesarios para el fortalecimiento técnico del Seguro Agropecuario y de pilotos de nuevos diseños de aseguramiento;
3. Otorgar subsidios, apoyos o incentivos para la implementación de instrumentos de gestión de riesgos en el sector agropecuario, forestal, pesquero y de la acuicultura, tales como derivados financieros climáticos, coberturas de precios o de riesgo cambiario; y
4. Obtener información que no sea de carácter público. Para efectos de la información que reposa en entidades públicas, esta no tendrá costo alguno para FINAGRO y las otras entidades que defina el gobierno nacional, el cual además definirá las condiciones de acceso a ella.

La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario reglamentará las financiaciones, subsidios, apoyos o incentivos al seguro, definirá las condiciones de asegurabilidad de los proyectos agropecuarios, forestales, pesqueros y de la acuicultura, objeto del Seguro Agropecuario y priorizará a los pequeños productores agropecuarios y/o rurales en el acceso a los subsidios.

La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario – CNCA determinará, de conformidad con la política trazada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los términos y las condiciones financieras para establecer criterios de equidad de género en el acceso y uso del instrumento de seguro agropecuario, y de manera prioritaria a las mujeres rurales, a los productores agropecuarios que estén calificados como pequeños productores de acuerdo con lo determinado por la CNCA.

Así mismo, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario determinara los lineamientos los términos y las condiciones financieras para establecer el enfoque diferencial a los productores en territorios de grupos étnicos.

En todo caso, se tendrán en cuenta los recursos aprobados en el Marco de Gasto de Mediano Plazo del sector agropecuario.

PARÁGRAFO. Excepcionalmente el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios podrá destinar recursos complementarios para ofrecer la cobertura del reaseguro agropecuario cuando no exista oferta sobre el producto a asegurar y de ser el caso, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario estudiará la conveniencia de establecer este mecanismo, de acuerdo con la capacidad del Fondo y previendo la sostenibilidad del esquema.

ARTÍCULO 4°. Modifíquese el artículo 8° de la Ley 69 de 1993, sobre los recursos del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, el cual quedará así:

Artículo 8. Recursos del Fondo Nacional De Riesgos Agropecuarios. Serán recursos del FNRA los siguientes:
1. Las partidas que le sean asignadas en el Presupuesto General de la Nación, en los términos del artículo 86 de la Ley 101 de 1993. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público garantizará los recursos para el financiamiento del Fondo Nacional de Riesgo Agropecuario con un presupuesto no inferior al valor aprobado el año anterior en el marco del incentivo al Seguro Agropecuario.
2. Un porcentaje de los recursos provenientes de las primas pagadas en seguros agropecuarios a que se refiere esta Ley, determinado periódicamente por el gobierno nacional, y sin exceder el 20% del valor neto de las mismas.
3. Los Recursos que tome a título de créditos internos o mediante cualquier mecanismo financiero, que se desarrolle para obtener con cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas que regulen el crédito público.
4. Las donaciones, aportes y contrapartidas que le otorguen organismos nacionales o internacionales, multilaterales, privados o públicos.
5. Recursos aportados por las entidades públicas o particulares a través de convenios o transferencias.
6. Las utilidades del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios.
7. Un porcentaje de las utilidades del gobierno nacional en las sociedades de economía mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado, de acuerdo con la reglamentación que expida el gobierno nacional.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los recursos del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios que le sean transferidos por parte del Presupuesto General de la Nación, serán hechos a título de capitalización. Así mismo, se considerarán como recursos ejecutados aquellos recursos comprometidos, los cuales quedarán obligados, y su pago, en la misma o posterior vigencia.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios también se podrá financiar con los bonos verdes que decida regular, emitir y reglamentar el gobierno nacional.

ARTÍCULO 5°. Estaciones Meteorológicas y Servicios Climáticos. Del Presupuesto General de la Nación se apropiarán recursos para que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se encargue de proveer herramientas provistas por el Sistema de Información Geográfico, como imágenes obtenidas a través de sensores remotos, drones, entre otros, en aras de proveer insumos para el procesamiento de la información y con ello alimentar el Sistema de Información para la Gestión de Riesgos Agropecuarios y demás necesidades relacionadas, y que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM, lleve a cabo la instalación, operación, mantenimiento y automatización de la red de estaciones meteorológicas de cubrimiento nacional, ubicadas en áreas con vocación agropecuaria.

Parágrafo. Para efectos del cumplimiento de lo estipulado en el presente artículo, se dará un término de dos (2) n años para que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se encargue de proveer los insumos necesarios para el procesamiento de la información y los necesarios para que el IDEAM realice dichas actividades en las áreas con vocación agropecuaria.

ARTÍCULO 6° - Sistema de Información para la Gestión de Riesgos Agropecuarios. Créase el Sistema de Información para la Gestión de Riesgos Agropecuarios (SIGRA), con el propósito de fomentar el conocimiento, la generación, el análisis y el uso de la información sobre los distintos riesgos que afectan la actividad agropecuaria, forestal, pesquera y de la acuicultura, como una herramienta para apoyar la toma de decisiones y orientar la formulación, seguimiento e implementación de la política en esta materia, y ofrecer el apoyo de información que demanden los distintos actores del sector agropecuario forestal, pesquera y de la acuicultura, en los diferentes eslabones de las cadenas productivas agropecuarias y rurales, así como de otros actores relacionados con la gestión de riesgos agropecuarios, tales como centros de investigación, aseguradoras, entre otros.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el marco de las políticas, y tecnologías que definen la infraestructura colombiana de datos espaciales, las tecnologías de la información y las comunicaciones, los estándares y buenas prácticas de producción y difusión de estadísticas, deberá poner en marcha el SIGRA, el cual debe mantenerse actualizado y funcional mediante la integración de información y contenidos de todas sus entidades adscritas y vinculadas, de las que trata el artículo 1º. del Decreto 1985 de 2013 o el que haga sus veces.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reglamentará la aplicación de esta norma a fin de consolidar la información histórica adecuada sobre clima, experiencia de producción y pérdidas, y demás relacionada con riesgos agropecuarios.

PARÁGRAFO PRIMERO. La información relacionada con riesgos agropecuarios que las entidades públicas, como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que desarrollan, procesan, almacenan y comunican, deberán estar disponibles y organizadas para su uso por parte del SIGRA en las condiciones propicias para tal fin.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para la estructuración, puesta en marcha e implementación del SIGRA, las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así como las entidades públicas del orden nacional y entidades territoriales, celebrarán los respectivos acuerdos de interoperabilidad de la información y/o convenios de cooperación técnica a los que haya lugar, para construir un sistema de información robusto que incluya además modelaciones de producción de los bienes de origen vegetal y animal más representativos de cada región con el fin de establecer la línea base de las variables fundamentales a ser consideradas en los seguros agropecuarios paramétricos.

PARÁGRAFO TERCERO. La aplicación de la presente Ley atenderá las apropiaciones del Presupuesto respetando el marco fiscal y de gasto de mediano plazo del sector agropecuario.

ARTÍCULO 7°. Socialización. El Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios con apoyo de las demás entidades gubernamentales relacionadas con la implementación del Seguro Agropecuario en Colombia, se encargarán de adelantar jornadas de socialización en los municipios con vocación agropecuaria forestal, pesquera y de la acuicultura. De ser necesario, se podrán destinar recursos del Fondo Nacional De Riesgos Agropecuarios para la respectiva socialización.

ARTÍCULO 8°. Modifíquese el artículo 1 de la Ley 302 de 1996, modificado por el artículo 11 de la Ley 1731 de 2014 el cual quedará así:

Artículo 1. Creación y objetivos. Créase el Fondo de Solidaridad Agropecuario, como Fondo Cuenta especial separada de los recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo objetivo exclusivo es otorgar apoyo económico a los pequeños y medianos productores agropecuarios, forestales, de acuicultura y pesqueros, para la atención y alivio de sus deudas, cuando en desarrollo de dichas actividades se presenten algunas de las situaciones a que se refiere el artículo 2 de esta ley. También serán beneficiarios de los apoyos contemplados en esta ley los titulares o integradores de esquemas de crédito asociativo o de alianzas estratégicas, que hubieren sido redescontados o registrados ante FINAGRO u otorgados, en general, para el sector agropecuario, en relación con la porción de dichos créditos que correspondan a integrados o asociados que califiquen como pequeños o medianos productores.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá celebrar un contrato de fiducia para la administración de los recursos del Fondo de Solidaridad Agropecuario, así como contratos para la administración o compra de cartera o el otorgamiento de alivios con cualquier entidad habilitada para el efecto, la cual quedará facultada para comprar cartera a los establecimientos de crédito públicos o privados, así como la cartera del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG).

Para los efectos de la presente ley se considerará como pequeños productores a aquellas personas naturales que cumplan con las siguientes condiciones:
a) Que sus activos totales no superen los doscientos cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (250 SMLMV) incluidos los de su cónyuge o compañero (a) permanente, según balance comercial. Para el caso de los usuarios de la reforma agraria, el valor de la tierra no será computable dentro de sus activos totales;

b) Que no menos de las dos terceras (2/3) partes de sus ingresos provengan de la actividad agropecuaria y/o pesquera o que tengan por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) de sus activos invertidos en el sector agropecuario, forestal, de acuicultura o pesquero, según el balance comercial.

Para los efectos de la presente ley se considerará por mediano productor aquella persona natural o jurídica dedicada principalmente a actividades relacionadas con la producción del sector agropecuario, forestal, de acuicultura o pesquero, que al momento de solicitar los apoyos cuenten con un patrimonio neto inferior a los del mediano productor emergente definidos en el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.

Parágrafo. Los recursos del Fondo de Solidaridad Agropecuarios podrán ser los siguientes:

1. Las partidas que le sean asignadas en el Presupuesto General de la Nación, en los términos del artículo 86 de la Ley 101 de 1993. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público garantizará los recursos para el financiamiento del Fondo de Solidaridad Agropecuario.
2. Recursos aportados por las entidades públicas a través de convenios o transferencias.
3. Un porcentaje de las utilidades del gobierno nacional en las sociedades de economía mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado, de acuerdo con la reglamentación que expida el gobierno nacional.

Artículo 9°. Vigencia. La presente ley deroga el artículo 5 de la Ley 1731 de 2014 y demás normas que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su promulgación.

NUBIA LÓPEZ MORALES
Ponente

NIDIA MARCELA OSORIO SALGADO
Ponente

NESTOR LEONARDO RICO RICO
Ponente

SECRETARÍA GENERAL

Bogotá, D.C., marzo 24 de 2021

En Sesión Plenaria del día 23 de marzo de 2021, fue aprobado en Segundo Debate el Texto Definitivo con modificaciones del Proyecto de Ley N° 044 de 2020 Cámara **"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA SEGURIDAD JURÍDICA Y FINANCIERA AL SEGURO AGROPECUARIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES A FAVOR DEL AGRO".** Esto con el fin de que el citado Proyecto de Ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.

Lo anterior, según consta en el acta de las Sesiones Plenaria Ordinaria N° 207 de marzo 23 de 2021, previo su anuncio en la Sesión Plenaria del día 17 de marzo de 2021, correspondiente al Acta N° 206.

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO GENERAL

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 053 DE 2020 CÁMARA

por medio de la cual se reconoce al porro y al Festival Nacional del Porro de San Pelayo como manifestación del Patrimonio Cultural Inmaterial de la nación y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

Artículo 1°. Reconózcase al Porro como manifestación del Patrimonio Cultural Inmaterial y el Festival del Porro de San Pelayo como una acción de salvaguardia de dicha manifestación, y autorícese al Ministerio de Cultura a asesorar el proceso de postulación a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial y el posterior desarrollo del Plan Especial de Salvaguardia del Porro, de acuerdo con el procedimiento vigente.

Artículo 2°. Autorícese al Gobierno Nacional para que, a través del Ministerio de Cultura, de manera articulada con la Gobernación del departamento de Córdoba, los municipios, el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural y la comunidad en general, inicien la elaboración de un Plan Especial de Salvaguardia (PES) para fortalecer los saberes, conocimientos y prácticas de la música del porro.

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno Nacional para que, a través del Ministerio de Cultura, de manera articulada con la Gobernación del departamento de Córdoba, los municipios, el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural y la comunidad en general, genere estrategias que permitan fomentar la gestión y transmisión de los saberes, conocimientos y prácticas ancestrales de la música del porro, para favorecer el relevo generacional y garantizar la permanencia de esta actividad y su sostenibilidad económica con el fin de asegurar la preservación de esta manifestación que perdure a través del tiempo.

Artículo 4°. La presente Ley rige a partir de su sanción y promulgación.

ALFREDO APE CUELLO BAUTE
Ponente

EMETERIO JOSE MONTES DE CASTRO
Ponente

MARTHA PATRICIA VILLALBA HODWALKER
Ponente

SECRETARÍA GENERAL

Bogotá, D.C., abril 20 de 2021

En Sesión Plenaria del día 15 de abril de 2021, fue aprobado en Segundo Debate el Texto Definitivo sin modificaciones del Proyecto de Ley N° 053 de 2020 Cámara **"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE AL PORRO Y AL FESTIVAL NACIONAL DEL PORRO DE SAN PELAYO COMO MANIFESTACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".** Esto con el fin de que el citado Proyecto de Ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.

Lo anterior, según consta en el acta de la Sesión Plenaria Ordinaria N° 214 de abril 15 de 2021, previo su anuncio en la Sesión Plenaria del día 13 de abril de 2021, correspondiente al Acta N° 212.

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO GENERAL

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 067 DE 2020 CÁMARA

por medio de la cual se establecen medidas orientadas a fortalecer la comunidad lactante, la promoción d e la lactancia materna en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

Artículo 1. Objeto. Fortalecer las redes de apoyo de la Comunidad Lactante y orientar acciones para salvaguardar el derecho a la salud de las madres, de los niños y las niñas, y el derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la primera infancia por medio de la promoción de la práctica de la lactancia materna en el territorio nacional.

Artículo 2. Definiciones. Para efectos de la presente ley téngase en cuenta las siguientes definiciones:

Comunidad Lactante: es toda persona natural o jurídica que participa o se relaciona con el proceso y la práctica de la lactancia. Principalmente, las madres y sus bebés, los padres, acompañantes y familiares, los profesionales, trabajadores y agentes del Sistema de Salud y las Redes de Apoyo de la Comunidad Lactante.

Redes de Apoyo a la Lactancia Materna: la conforman individuos o grupos, a nivel comunitario o institucional, que cuentan con conocimiento y experiencia y que brindan apoyo a otros actores de la Comunidad Lactante.

Grupos de Apoyo a la Lactancia Materna (GALM): son grupos de ayuda mutua que ofrecen distintos servicios, y actividades complementarias a la asistencia que ofrecen los servicios de salud. Cubren aspectos relacionados con la lactancia, principalmente en materia de educación y acompañamiento a la Comunidad Lactante.

Promotor (a) de lactancia materna: persona certificada en apoyar a la lactancia materna, la cual mediante la participación en Grupos de Apoyo a la Lactancia Materna (GALM), entre otras actividades, orientará la promoción de lactancia y la apropiación del conocimiento necesario para tener una lactancia materna exitosa.

Asesor (a) en lactancia materna: persona certificada, y con experiencia en apoyar a la lactancia materna que desde la práctica ayuda y acompaña a la Comunidad Lactante.

Consejero (a) en lactancia: persona con formación profesional en áreas de la salud y otras que sean consideradas afines por las autoridades competentes para garantizar la salud y el bienestar de la Comunidad Lactante.

Lactancia Materna Exclusiva: es la única práctica recomendada para la alimentación del infante durante los primeros seis meses de vida. En este periodo, el menor se alimenta exclusivamente con leche de su madre, incluyendo leche extraída. También puede recibir leche de otra madre saludable, siempre que dicha leche haya sido procesada y pasteurizada en un Banco de Leche Humana autorizado. La lactancia exclusiva implica que el menor no debe consumir ningún otro alimento o bebida, ni siquiera agua.

Lactancia materna prolongada: Es aquella lactancia materna que se prolonga más allá de los 2 años de vida de los infantes. Esta práctica puede ser concomitante con la Alimentación Complementaria.

Alimentación Complementaria: es el proceso de transición de la lactancia materna exclusiva, al consumo de otros alimentos. Ocurre generalmente desde los 6 meses y debe prolongarse hasta los 24 meses de vida del infante. En este periodo se debe continuar amamantando al infante o alimentándose con leche materna hasta los dos años o más según lo que decida la madre.

Artículo 3. Formación y mecanismos de certificación. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio del Trabajo, incorporará en el Sistema Nacional de Cualificaciones las acciones necesarias para facilitar la formación en competencias en lactancia, el reconocimiento y desarrollo de experiencias previas y el aprendizaje permanente necesario para fortalecer la oferta de servicios a la Comunidad Lactante.

Parágrafo 1. Las personas que cuenten con conocimiento previo, tendrán la posibilidad de presentar un examen de certificación para validarlo. El Gobierno Nacional regulará la materia, teniendo en cuenta los criterios del enfoque diferencial étnico.

Parágrafo 2°. El Marco Nacional de Cualificaciones que sea definido por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio del Trabajo, debe incluir oportunidades para la formación de promotores, asesores, y consejeros de lactancia, así como la definición de los esquemas de movilidad entre las anteriores categorías y los niveles de educación superior en los que serán ofertados.

Parágrafo 3°. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional deberá garantizar oportunidades para el acceso a la oferta señalada en el presente artículo en todo el territorio nacional, en coordinación con las entidades territoriales, de manera presencial y/o virtual, y considerando las realidades de las regiones garantizando un enfoque diferencial territorial, etáreo, étnico y de procedencia y garantizará el acceso a la oferta de mujeres lactantes en especial situación de vulnerabilidad tales como las mujeres migrantes, rurales, las niñas y adolecentes, las mujeres en situación de discapacidad, entre otras.

Parágrafo 4°. Una vez creado, dentro del sistema de cualificaciones las competencias de lactancia, las instituciones de educación superior debidamente acreditadas por el Ministerio de Educación podrán ofertar la formación en servicios a la comunidad lactante, incluidos todos los niveles de educación.

Artículo 4. Capacitación a mujeres gestantes, madres en periodo de lactancia y sociedad en general. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS), y las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud (IPS), que presten servicios a mujeres gestantes y lactantes y a niños y niñas menores de dos (2) años, deben promover espacios para la educación y promoción de buenas prácticas de lactancia a la Comunidad Lactante y la sociedad en general. Salvo en situaciones que pongan en riesgo la salud de la madre o el neonato.

El cumplimiento de dicha obligación será vigilado por la Superintendencia de Salud.

Artículo 5. Actualización de Profesionales. Las Entidades Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que atiendan partos deberán brindar capacitación y actualización permanente en lactancia materna y alimentación infantil saludable al personal de salud que labore en las áreas de pediatría, neonatos y afines. El Ministerio de Salud regulará la materia.

Artículo 6. Registro público de las Redes de Apoyo de la Comunidad Lactante. El Ministerio de Salud creará el sistema de información para el registro de los distintos actores que conforman dichas redes, a nivel nacional. El sistema facilitará el acceso de los demás miembros de la Comunidad Lactante a la oferta de servicios de las personas y organizaciones que forman parte de las Redes de Apoyo de la Comunidad Lactante, así como información relevante relacionada con la práctica.

Parágrafo 1°. El sistema contendrá como mínimo la siguiente información:

1. Nombre de la persona natural o jurídica,

2. Representante Legal si lo hubiere,

3. Objeto Social, si lo hubiere,

4. Registro en Cámara de comercio, si lo hubiere,

5. El rol en la Comunidad Lactante (Asesora, Grupo de Apoyo la Lactancia Materna, etc.),

6. Número de miembros,

7. Localización (Departamento, Municipio, barrio o localidad)

8. Domicilio,

9. Certificaciones, experiencia o títulos relacionados,

10. Datos de contacto.

Parágrafo 2°. El registro centralizará la información que tengan disponible las Entidades Territoriales, las Entidades Promotoras de Salud, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, y particulares relacionados con los GALM y las Redes Apoyo en los términos del parágrafo 1.

Parágrafo 3°. El registro debe ser alimentado y actualizado por los actores señalados en el parágrafo anterior, con la periodicidad y en los términos que defina el Ministerio de Salud.

Parágrafo 4°. Para el acceso al registro se utilizarán las tecnologías de la información adecuadas para su administración y consulta. Será de acceso público y estará enlazado en las páginas web de las distintas entidades del Gobierno Nacional y las Entidades Territoriales.

Parágrafo 5°. El Ministerio de Salud tendrá el plazo de un año a partir de la promulgación de la presente Ley para crear e implementar el Registro de la Comunidad Lactante.

Parágrafo 6°. El ministerio de salud en coordinación con el Ministerio del Trabajo basándose en la información del registro público de la comunidad lactante promoverá oportunidades para el acceso a oferta de empleo de promotores, asesores y consejeros de lactancia.

Artículo 7. Articulación institucional. Las entidades territoriales deberán facilitar a los grupos y organizaciones registradas conforme a lo contemplado en el artículo anterior, de la presente ley, el acceso a espacios públicos e infraestructura de la misma naturaleza para llevar a cabo actividades destinadas a la capacitación de la Comunidad Lactante en temas relacionados con la práctica de la lactancia materna, con especial prioridad a mujeres gestantes y aquellas en periodo de lactancia.

Artículo 8. Hoja de ruta de atención preventiva de la lactancia materna. El Ministerio de Salud y Protección Social garantizará que, en la ruta de atención a las mujeres en proceso de gestación, parto, y durante el puerperio, se incluyan como mínimo los siguientes aspectos:

1. Garantizar, el contacto piel a piel después del nacimiento, con el fin de facilitar el vínculo afectivo entre madre e hijo y estimular eficazmente el proceso de lactancia materna, cuando las condiciones de salud de la mujer y del recién nacido lo permitan, de conformidad con la evidencia científica actualizada.

2. Informar acerca de la importancia de la lactancia materna en el desarrollo físico emocional - afectivo e intelectual del ser humano, garantizando el respeto por la autonomía de la madre y evitando cualquier cuestionamiento y/o señalamiento a quienes no puedan garantizar la lactancia a su hijo/a.

3. Explicar, acompañar y verificar la técnica de amamantamiento antes de abandonar la entidad hospitalaria.

4. Realizar visitas domiciliarias especializadas de consejería en lactancia materna durante la primera semana posterior al parto, previo consentimiento de la mujer lactante.

5. Acompañar y monitorear que la técnica de lactancia sea adecuada durante los controles neonatales.

6. Orientar sobre la lactancia en el periodo de alimentación complementaria y el estado nutricional del menor durante los primeros dos años de vida.

7. Garantizar el acceso a la información contenida en el registro electrónico de la Comunidad Lactante.

Parágrafo. La Superintendencia de Salud verificará que las Entidades Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de Salud den cumplimiento a las prácticas contempladas en el presente artículo.

Artículo 9. Línea de atención a la mujer. Las entidades competentes de la administración, operación y mantenimiento de las líneas existentes dedicadas a la atención a emergencias y afines con servicios especiales para las mujeres, prestarán el servicio de orientación para la práctica de la lactancia materna.

Parágrafo 1: El Ministerio de Salud diseñará las guías técnicas para brindar la orientación requerida contemplando el acceso a la información del Registro Público de la Comunidad Lactante.

Parágrafo 2: Las autoridades competentes de la administración de las líneas telefónicas de las que trata el presente artículo, garantizarán la continuidad del funcionamiento del servicio de orientación para la lactancia materna.

Artículo 10. Sello de Establecimientos Comerciales Amigos de la Infancia. El Ministerio de Salud y Protección Social o quien corresponda a nivel nacional, establecerá los lineamientos para la certificación de los establecimientos comerciales que cuenten con espacios dignos y el equipamiento necesario para la práctica de la lactancia materna en sus instalaciones, así como otras facilidades que requieran las madres y/o padres para atender servicios sanitarios de los bebés y de menores de cinco años.

Parágrafo 1°. El sello recibirá el nombre de Establecimientos Comerciales Amigos de la Mujer y la Infancia - ECAMI.

Parágrafo 2°. En ningún caso los establecimientos podrán imponer cobros a las mujeres que deseen practicar la lactancia en estos espacios.

Parágrafo 3°. En ninguno de los casos se considerará como requisito habilitante de la certificación, que las áreas destinadas para la lactancia se encuentren ubicadas al interior de los servicios sanitarios del establecimiento.

Parágrafo 4°. El Gobierno Nacional y las entidades territoriales podrán determinar beneficios, alivios o incentivos para quienes obtengan el sello de Establecimientos Comerciales Amigos de la Mujer y la Infancia.

Artículo 11. Promoción de la Comunidad Lactante. El Ministerio de Salud y Protección Social realizará a nivel nacional campañas de promoción del Registro Público de la Comunidad Lactante, el sello de los Establecimientos Comerciales Amigos de la Mujer y la Infancia (ECAMI), el servicio telefónico de orientación para la lactancia materna, entre otros.

Parágrafo. Las estrategias de difusión de las que trata el presente artículo, se realizarán bajo un enfoque diferencial que garantice el acceso a la información en todas las zonas urbanas y rurales del territorio nacional.

Artículo 12. Prevención de la discriminación a la Madre en periodo de lactancia. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer a través del Sistema Nacional de Mujeres articulará la política pública para la prevención y protección ante toda forma de discriminación a la madre en periodo de lactancia. En el marco de esta política se considerarán acciones para la promoción de la lactancia materna en espacios públicos, nuevas masculinidades y la responsabilidad compartida durante la crianza, así como medidas para eliminar la discriminación a la madre en periodo de lactancia en los espacios laborales y espacios públicos.

Parágrafo. Se Fomentará una política pública enfocada a las instituciones de educación media y superior para eliminación de toda discriminación a las madres en periodo de lactancia y se promoverá la lactancia materna.

Artículo 13. Salas Amigas de la Lactancia Materna. En los términos de la Ley 1823 de 2017, la instalación de las Salas Amigas de la Familia Lactante deberá realizarse en espacios que garanticen la salubridad, dignidad y protección de la madre en periodo de lactancia y el menor.

Parágrafo 1°. En ningún caso podrá instalarse la Sala Amiga de la Familia Lactante y la Infancia al interior de los servicios sanitarios de los establecimientos públicos o privados.

Parágrafo 2°. Los establecimientos públicos o privados que hayan instalado Salas Amigas de la Familia Lactante y la Infancia ubicadas al interior de los servicios sanitarios, tendrán un plazo de 1 año para ubicarla en un espacio digno, que cumpla con los parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Artículo 14. Ámbito de Aplicación. La presente Ley será de aplicación en todas las Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, así como para todos los intervinientes en el proceso de lactancia materna, parto y puerperio, dentro del territorio nacional.

Artículo 15. Reglamentación. El Gobierno Nacional deberá reglamentar lo dispuesto en la presente ley en un plazo no mayor de un (1) año contando a partir de su promulgación.

Una vez vencido este plazo, el Gobierno Nacional no perderá de forma alguna su facultad reglamentaria, y en caso tal, los funcionarios competentes podrán ser sancionados de acuerdo a las normas disciplinarias vigentes.

Artículo Nuevo. Promoción y apoyo de la lactancia materna en el entorno laboral: El Gobierno Nacional por intermedio de los Ministerios de Salud y el Ministerio de Trabajo, en articulación con las Entidades Promotoras de Salud, Cajas de Compensación Familiar, las Administradoras de Riesgo Laboral y demás actores responsables promoverán y apoyarán a nivel público y privado la lactancia materna en el entorno laboral, mediante capacitaciones o difusión de información a través de los diferentes canales de comunicación a sus empleados, proveedores o clientes, a efectos de lograr un proceso de mejora continua para proteger y promover la salud y el bienestar de todos los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo.

Parágrafo. La promoción s que hace referencia este artículo, deberán incluir información sobre las redes de apoyo de la comunidad lactante y grupos de apoyo de la lactancia materna.

Artículo Nuevo. Garantizar para madres lactantes, en los casos que sea posible de acuerdo a la labor desempeñada, la modalidad de teletrabajo una vez finalice el periodo de licencia de maternidad hasta tanto el infante haya cumplido el periodo de lactancia materna exclusiva.

Artículo 16. Vigencia y Derogatorias. Esta ley rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

NORMA HURTADO SÁNCHEZ
Ponente

MARÍA CRISTINA SOTO DE GÓMEZ
Ponente

JENNIFER KRISTÍN ARIAS FALLA
Ponente

SECRETARÍA GENERAL

Bogotá, D.C., abril 16 de 2021

En Sesión Plenaria del día 24 de marzo de 2021, fue aprobado en Segundo Debate el Texto Definitivo con modificaciones del Proyecto de Ley N° 067 de 2020 Cámara **"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS ORIENTADAS A FORTALECER LA COMUNIDAD LACTANTE, LA PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA EN EL TERRITORIO NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".** Esto con el fin de que el citado Proyecto de Ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.

Lo anterior, según consta en el acta de la Sesión Plenaria Ordinaria N° 208 de marzo 24 de 2021, previo su anuncio en la Sesión Plenaria del día 23 de marzo de 2021, correspondiente al Acta N° 207.

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
Secretario General

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 283 DE 2019 CÁMARA

por medio del cual se sustituye el título XI, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 del 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:

TÍTULO XI.

DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO I.

DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES

Artículo 328. Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. El que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, acceda, capture, mantenga, recolecte, use, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, trafique o de cualquier otro modo se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta y tres mil setecientos cincuenta (43.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la práctica de cercenar aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras), y descartar el resto del cuerpo al mar.

Artículo 328A. Tráfico de Fauna. El que trafique, mercadee, adquiera, exporte y de cualquier forma comercialice los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de trescientos (300) hasta cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la exportación o comercialización de aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras).

Artículo 328B. Caza Ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, cazare, excediere el número de piezas permitidas o cazare en época de veda, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de treinta y tres (33) a novecientos treinta y siete (937) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.

Artículo 328C. Pesca ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese o almacene ejemplares o productos de especies vedadas, protegidas, en cualquier categoría de amenaza, o en áreas de reserva, o en épocas vedadas, en zona prohibida, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a las que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que:

1. Utilice instrumentos no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente.

2. Altere los refugios o el medio ecológico de especies de recursos hidrobiológicos, como consecuencia de actividades de exploración o explotación de recursos naturales no renovables.

3. Construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ciénagas, lagunas, caños, ríos y canales.

Artículo 329. Manejo ilícito de especies exóticas. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, trasplante, manipule, siembre, hibride, comercialice, transporte, mantenga, transforme, experimente, inocule o propague especies silvestres exóticas, invasoras, que pongan en peligro la salud humana, el ambiente o las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de

cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 330. Deforestación. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente tale, queme, corte, arranque o destruya áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará a la mitad cuando:

1. Cuando la conducta se realice para fines de ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal.

2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.

Artículo 330A. Promoción y financiación de la Deforestación. El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte, arranque o destrucción de áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará a la mitad cuando:

1. Cuando la conducta se realice para fines de ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal.

2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.

Artículo 331. Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos. El que con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, importe, manipule, experimente, posea, inocule, comercialice, exporte, libere o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos, moléculas, substancias o elementos que pongan en peligro la salud o la existencia de los recursos fáunicos, florísticos, hidrobiológicos, hídricos o alteren perjudicialmente sus poblaciones, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 332. Exploración o explotación ilícita de minerales y otros materiales. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga minerales, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando las conductas descritas en este artículo se realicen a través de minería a cielo abierto.

Artículo 332A. Aprovechamiento ilícito de minerales. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, transporte, transforme, beneficie, comercialice o se favorezca a cualquier título de los minerales de que trata el artículo anterior, incurrirá en prisión de ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 332B. Promoción y financiación de la explotación ilícita de minerales. El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, maquinaria o medios mecanizados, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la explotación, exploración, extracción, transporte, transformación o comercialización ilícita de minerales, arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 332C. Tenencia o transporte de mercurio. El que con incumplimiento de la normatividad existente importe, tenga, almacene, transporte o comercialice mercurio, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO II.

DE LOS DAÑOS EN LOS RECURSOS NATURALES

Artículo 333. Daños en los recursos naturales y ecocidio. El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o cause un impacto ambiental grave o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título o a los que estén asociados con estos, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo se entiende por ecocidio, el daño masivo y destrucción generalizada grave y sistémica de los ecosistemas.

Parágrafo 2°. Por impacto ambiental grave se entenderá, la alteración de las condiciones ambientales que se genere como consecuencia de la afectación de los componentes ambientales, eliminando la integridad del sistema y poniendo en riesgo su sostenibilidad.

CAPÍTULO III.

DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Artículo 334. Contaminación ambiental. El que con incumplimiento de la normatividad existente provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertimientos, radiaciones, ruidos, depósitos, o disposiciones al aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas superficiales, marítimas o subterráneas o demás recursos naturales en tal forma que contamine o genere un efecto nocivo en el ambiente, que ponga en peligro la salud humana y los recursos naturales, incurrirá en prisión de sesenta y nueve (69) a ciento cuarenta (140) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en este artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.
2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por la normatividad existente o haya infringido más de dos parámetros.
3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, depósitos, emisiones o disposiciones.
4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.
5. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de control y vigilancia de la autoridad competente.
6. Cuando la contaminación sea producto del almacenamiento, transporte, vertimiento o disposición inadecuada de residuo peligroso.

Artículo 334A. Contaminación ambiental por explotación de minerales, hidrocarburos y otros materiales. El que contamine directa o indirectamente la atmosfera, el suelo, el subsuelo o las aguas, como consecuencia de la actividad de exploración, construcción, montaje, extracción, explotación, beneficio, transformación, acopio, transporte, cierre, desmantelamiento o abandono de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá en prisión de setenta y cinco (75) a ciento cincuenta (150) meses, y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará hasta en una tercera parte si la contaminación se produce como consecuencia de la minería a cielo abierto.

Artículo 335. Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice experimentos con especies, agentes biológicos o bioquímicos que constituyan, generen o pongan en peligro la supervivencia de las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO IV.

DE LA INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Artículo 336. Invasión de áreas de especial importancia ecológica. El que invada, permanezca así sea de manera temporal o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en área de reserva forestal, ecosistemas de importancia ecológica, playas, terrenos de bajamar, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, parque nacional natural, área o ecosistema de interés estratégico, área protegida, definidos en la ley o reglamento incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.

Artículo 336A. Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica. El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.

CAPÍTULO V.

DE LA APROPIACIÓN ILEGAL DE BALDÍOS DE LA NACIÓN

Artículo 337. Apropiación ilegal de baldíos de la nación. El que se apropie, usurpé, use, ocupe, utilice, acumule, o destine baldíos de la nación con fines de expansión ilegal de la frontera agrícola, para ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos.

Artículo 337A. Financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación. El que promueva, financie, ordene, dirija, o suministre medios para la apropiación de baldíos de la nación sin cumplimiento de los requisitos legales con fines de expansión ilegal de la frontera agrícola, para ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los bienes muebles, inmuebles o semovientes encontrados en los baldíos ilegalmente apropiados.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos.

CAPÍTULO VI.

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 338. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando:

a) Cuando la conducta se cometa en ecosistemas naturales que hagan parte del sistema nacional o regional de áreas protegidas, en ecosistemas estratégicos, o en territorios de comunidades étnicas. Con excepción de las conductas consagradas en los artículos 336 y 336A.

b) Cuando la conducta se cometa contra especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana o de especies vedadas, prohibidas, en período de reproducción o crecimiento, de especial importancia ecológica, raras o endémicas del territorio colombiano. Con excepción de la conducta contemplada en el artículo 328C.

c) Cuando con la conducta se altere el suelo, el subsuelo, los recursos hidrobiológicos, se desvíen los cuerpos de agua o se afecten ecosistemas marinos, manglares, pastos marinos y corales.

d) Cuando la conducta se cometiere por la acción u omisión de quienes ejercen funciones de seguimiento, control y vigilancia o personas que ejerzan funciones públicas.

e) Cuando la conducta se cometiere por integrantes de grupos delictivos organizados o grupos armados organizados o con la finalidad de financiar actividades terroristas, grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley, grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a sus integrantes.

f) Cuando la conducta se cometa mediante el uso o manipulación de herramientas tecnológicas.

g) Cuando con la conducta se ponga en peligro la salud humana.

h) Cuando con la conducta se introduzca al suelo o al agua sustancias prohibidas por la normatividad existente o se realice mediante el uso de sustancias tóxicas, peligrosas, venenos, inflamables, combustibles, explosivas, radioactivas, el uso de explosivos, maquinaria pesada o medios mecanizados, entendidos estos últimos como todo tipo de equipos o herramientas mecanizados utilizados para el arranque, la extracción o el beneficio de minerales o la distribución ilegal de combustibles.

i) Cuando se promueva, financie, dirija, facilite o suministre medios para la realización de las conductas. Con excepción de las conductas contempladas en los artículos 330A, 332B, 336A y 337A.

j) Cuando con la conducta se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies.

Artículo 339. Modalidad Culposa. Las penas previstas en los artículos 333, 334, 334A de este código se disminuirán hasta en la mitad cuando las conductas punibles se realicen culposamente.

ARTÍCULO 2°. Modifíquese el numeral 14 del artículo 58 de la ley 599 del 2000¸ el cual quedará así:

Artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad.

(...)

14. Cuando se produjere un daño ambiental grave, una irreversible modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales o se cause la extinción de una especie biológica.

ARTÍCULO 3°. Adiciones al inciso segunda del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, las siguientes conductas punibles:

Artículo 68A. Exclusión de los beneficios y subrogados penales.

(...)

Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaiga sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; abigeato enunciado en el inciso tercero del artículo 243; extorsión; homicidio agravado contemplado en el numeral 6 del artículo 104; lesiones causadas con agentes químicos, ácidos y/o sustancias similares; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objeto peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonales; aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables; tráfico de fauna; deforestación; promoción y financiación de la deforestación; aprovechamiento ilícito de minerales; promoción y financiación de la explotación ilícita de minerales; daños en los recursos naturales y ecocidio; e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

ARTÍCULO 4°. Adiciónese un numeral 33 al artículo 35 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

(...)

33. De los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, tráfico de fauna, deforestación, promoción y financiación de la deforestación, aprovechamiento ilícito de minerales, promoción y financiación de la explotación ilícita de minerales, daños en los recursos naturales y ecocidio, e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

ARTÍCULO 5°. Adiciónese un parágrafo al artículo 91 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así:

(...)

Parágrafo. Cuando se hubiese suspendido o cancelado la personería jurídica de que trata este artículo, la persona natural o jurídica estará inhabilitada para constituir nuevas personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público, con el mismo objeto o actividad económica a desarrollar, hasta que el Juez de Conocimiento tome una decisión definitiva en la sentencia correspondiente.

ARTÍCULO 6°. Adiciónese un parágrafo 2 al artículo 92 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así:

Parágrafo 2. Tratándose de los delitos contemplados en el título XI del Código Penal, el juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.

ARTÍCULO 7°. El artículo 302 de la Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo inciso que quedará así:

Cuando la captura en flagrancia se produzca en ríos o tierra donde el arribo a la cabecera municipal más cercana sólo puede surtirse por vía fluvial o siempre que concurran dificultades objetivas de acceso al territorio como obstáculos geográficos, logísticos, ausencia de infraestructura de transporte o fenómenos meteorológicos que dificulten seriamente el traslado del aprehendido, se realizarán todas las actividades para lograr la comparecencia del capturado ante el juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin que en ningún caso exceda las 36 horas siguientes, contadas a partir del momento de la llegada al puerto o municipio más cercano, según el caso. La autoridad competente deberá acreditar los eventos descritos en el presente inciso.

ARTÍCULO 8°. Dirección de Apoyo Territorial. Créase en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Apoyo Territorial adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana, la que tendrá como función principal liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presenta efectiva de la Entidad en territorios apartados o de difícil acceso, sin perjuicio de la competencia de otras Direcciones sobre la materia.

La Dirección de Apoyo Territorial estará conformada por:

Unidad	Cantidad	Cargo	Niveles
Dirección de Apoyo Territorial	1	Director Nacional I	Directivo
	2	Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito	Profesional
	20	Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional
	1	Profesional Experto	Profesional
	2	Profesional Especializado II	Profesional
	2	Profesional De Gestión III	Profesional
	12	Investigador Experto	Profesional
	10	Profesional Investigador III	Profesional
	9	Profesional Investigador II	Profesional
	9	Profesional Investigador I	Profesional
	10	Técnico Investigador IV	Técnico
	10	Técnico Investigador III	Técnico
	20	Asistente de Fiscal IV	Técnico
	5	Asistente de Fiscal III	Técnico
	5	Asistente de Fiscal II	Técnico
	2	Secretario Ejecutivo	Técnico
	2	Conductor	Asistencial
	3	Secretario Administrativo	Asistencial

ARTÍCULO 9°. Dirección de Apoyo Territorial. Adiciónese el artículo 36A al Decreto Ley 016 de 2014, el cual quedará así: La Dirección de Apoyo Territorial cumplirá las siguientes funciones:

1. Liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presencia efectiva de la Entidad en territorios apartados o de difícil acceso, en aquellas zonas afectadas por fenómenos criminales de alto impacto y por la presencia de grupos armados organizados.
2. Apoyar la investigación, especialmente actos urgentes, en aquellos fenómenos priorizados que se den en territorios donde la Fiscalía General de la Nación no tenga presencia permanente o sean de difícil acceso.
3. Definir los lugares en los que se podrá actuar por medio de grupos itinerantes, con base en criterios geográficos y no en la división político-administrativa, así como en el análisis de la criminalidad del país, la presencia de organizaciones criminales, los tiempos de desplazamiento al lugar de comisión de la conducta punible, la oferta de servicios de justicia por parte de otras entidades, entre otros factores.
4. Conformar grupos especializados de investigadores y analistas expertos en los fenómenos criminales priorizados por la Dirección.
5. Realizar proceso de articulación de la estrategia territorial con otras entidades públicas.
6. Designar fiscales itinerantes en aquellos procesos sobre fenómenos priorizados, con el fin que apoyen, impulsen y asesoren a los fiscales titulares con el fin de lograr una efectiva judicialización.
7. Conformar equipos móviles de la Entidad, en los que periódicamente se reciban denuncias de los habitantes del territorio nacional y se brinde atención a las víctimas de las conductas punibles en territorios apartados o zonas de alto impacto o presencia de grupos armados organizados.
8. Organizar y adelantar comités técnico-jurídicos de revisión de las situaciones y los casos para la ejecución de acciones en el desarrollo efectivo y eficiente de las investigaciones penales de su competencia.
9. Dirigir y coordinar los grupos de trabajo, los departamentos y unidades que se conformen para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Dirección.
10. Dirigir, coordinar y controlar la incorporación y aplicación de políticas públicas en el desarrollo de las actividades que cumplen los servidores, dependencias y los grupos de trabajo que estén a su cargo, de acuerdo con los lineamientos y las orientaciones que impartan las dependencias competentes.
11. Identificar y delimitar situaciones y casos susceptibles de ser priorizados y proponerlos al Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos.
12. Ejecutar los planes de priorización aprobados por el Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos en lo de su competencia.
13. Apoyar, en el marco de sus competencias, a la Dirección de Políticas y Estrategia en el análisis de la información que se requiera para sustentar la formulación de la política en materia criminal.
14. Mantener actualizada la información que se registre en los sistemas de información de la Entidad, en los temas de su competencia.
15. Consolidar, analizar y clasificar la información de las investigaciones y acusaciones adelantadas por los servidores y grupos de trabajo a su cargo y remitirla a la Dirección de Políticas y Estrategia.
16. Dirimir, de conformidad con la Constitución y la ley, los conflictos de competencia que se presenten entre la Fiscalía General de la Nación y los demás organismos que desempeñen funciones de Policía Judicial, en el ámbito de su competencia.
17. Dirimir los conflictos administrativos que se presenten al interior de la Fiscalía en el ejercicio de las funciones o en la asignación de investigaciones, en los casos y según las directrices y lineamientos impartidos por el Fiscal General de la Nación.
18. Asesorar a las dependencias de la Fiscalía General de la Nación que cumplen funciones investigativas y acusatorias en los temas de su competencia.
19. Elaborar e implementar los planes operativos anuales en el ámbito de su competencia, de acuerdo con la metodología diseñada por la Dirección de Planeación y Desarrollo.
20. Aplicar las directrices y lineamientos del Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación.
21. Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el Fiscal o Vicefiscal General de la Nación.

ARTÍCULO 10°. Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. Créase en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente adscrito a la Delegada contra la Criminalidad Organizada, la que tendrá como función principal la investigación y judicialización de los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y las demás conductas delictivas conexas o relacionadas, sin perjuicio de la competencia de las Direcciones Seccionales sobre la materia.

La Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente estará conformada por:

Unidad	Cantidad	Cargo	Niveles
Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	1	Director Nacional I	Directivo
	2	Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito	Profesional
	20	Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional
	1	Profesional Experto	Profesional
	2	Profesional Especializado	Profesional

		II	
	2	Profesional De Gestión III	Profesional
	12	Investigador Experto	Profesional
	10	Profesional Investigador III	Profesional
	9	Profesional Investigador II	Profesional
	9	Profesional Investigador I	Profesional
	10	Técnico Investigador IV	Técnico
	10	Técnico Investigador III	Técnico
	20	Asistente de Fiscal IV	Técnico
	5	Asistente de Fiscal III	Técnico
	5	Asistente de Fiscal II	Técnico
	2	Secretario Ejecutivo	Técnico
	2	Conductor	Asistencial
	3	Secretario Administrativo	Asistencial

ARTÍCULO 11°. Vigencia y Derogatoria. La presente rige a partir de su promulgación y publicación en el Diario Oficial y deroga el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000 y todas las disposiciones que le sean contrarias.

JUAN CARLOSLOZADA VARGAS
Ponente

BUENAVENTURA LEON LEON
Ponente

ARWIN ARIAS BETANCUR
Ponente

JORGE ENRIQUE BURGOS LUGO
Ponente

ADWARD DAVID RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Ponente

JUANITA MARIA GOEBERTUS ESTRADA
Ponente

CARLOS GERMAN NAVAS TALERO
Ponente

LUIS ALBERTO ALBAN URBANO
Ponente

SECRETARÍA GENERAL

Bogotá, D.C., abril 19 de 2021

En Sesión Plenaria del día 06 de abril de 2021, fue aprobado en Segundo Debate el Texto Definitivo con modificaciones del Proyecto de Ley N° 283 de 2019 Cámara **"POR MEDIO DEL CUAL SE SUSTITUYE EL TÍTULO XI, "DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE" DE LA LEY 599 DEL 2000, SE MODIFICA LA LEY 906 DE 2004 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".** Esto con el fin de que el citado Proyecto de Ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.

Lo anterior, según consta en el acta de la Sesión Plenaria Ordinaria N° 209 de abril 06 de 2021, previo su anuncio en la Sesión Plenaria del día 24 de marzo de 2021, correspondiente al Acta N° 208.

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO GENERAL

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 306 DE 2020 CÁMARA

por medio de la cual se modifica el artículo 18 de la Ley 1010 de 2006.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Modifíquese el artículo 18 de la Ley 1010 de 2006, el cual quedará así:

Artículo 18. CADUCIDAD. Las acciones derivadas del acoso laboral caducaran en tres (3) años a partir de la fecha en que hayan ocurrido las conductas a que hace referencia esta Ley.

Artículo 2°. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las normas que le sean contrarias.

MARIA CRISTINA SOTO DE GOMEZ
Ponente

JORGE ENRIQUE BENEDETTI MARTELO
Ponente

SECRETARÍA GENERAL

Bogotá, D.C., abril 14 de 2021

En Sesión Plenaria del día 24 de marzo de 2021, fue aprobado en Segundo Debate el Texto Definitivo sin modificaciones del Proyecto de Ley N° 306 de 2020 Cámara **"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 18 DE LA LEY 1010 DE 2006".** Esto con el fin de que el citado Proyecto de Ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.

Lo anterior, según consta en el acta de la Sesión Plenaria Ordinaria N° 208 de marzo 24 de 2021, previo su anuncio en la Sesión Plenaria del día 23 de marzo de 2021, correspondiente al Acta N° 207.

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO GENERAL

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 427 DE 2020 CÁMARA

por medio de la cual la nación se asocia para rendir público homenaje al municipio de Soledad en el departamento del Atlántico, exaltando y reconociendo su riqueza cultural y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

Artículo 1° Objeto. La presente ley tiene como finalidad que la Nación se asocie y rinda un homenaje público a través de distintos reconocimientos de carácter histórico, cultural y material, como contribución al municipio y sus habitantes por sus aportes al fortalecimiento de la cultura del Caribe Colombiano.

Artículo 2° El Congreso de la República y el Gobierno Nacional rendirán honores en el Capitolio Nacional, al municipio de Soledad del departamento de Atlántico para reconocer y exaltar su aporte Cultural al Caribe Colombiano y a la Nación en general. La Secretaría de la Corporación remitirá en nota de estilo copia de la presente ley a la Alcaldía de Soledad y su Secretaría de Cultura.

Artículo 3° Declárase que todas aquellas manifestaciones sociales, culturales y artísticas que se relacionen con el merecumbé y la butifarra serán Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. El Ministerio de Cultura acompañará al departamento, la autoridad municipal y la comunidad en general para establecer las actividades requeridas que permitan la elaboración e implementación de los correspondientes Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMB), así como de los respectivos Planes Especiales de Salvaguarda (PES) de los referidos bienes culturales.

Artículo 4° ***Reconocimiento cultural.*** Se autoriza al Gobierno nacional para que, en conjunto con el Congreso de la República, rinda honores al municipio de Soledad el día 8 de marzo del año siguiente a la promulgación de la presente ley, mediante una programación cultural especial. Esta deberá ser oficializada bajo la coordinación del Ministerio de Cultura.

El Gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura autorizará la publicación de las memorias construidas por la Academia de Historia de Soledad o quién haga sus veces como documento de importancia para ser difundido en los escenarios académicos e instrumento ejemplarizante para las futuras generaciones.

Artículo 5. ***Reconocimientos materiales.*** Autorícese al Gobierno nacional de conformidad con los artículos 150 numeral 9, 288, 334, 341, 359, numeral 3 y 366 de la Constitución Política y las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001, sus decretos reglamentarios y la Ley 819 de 2003, incorpore dentro del Presupuesto General de la Nación o impulse a través del Sistema General de Regalías, las apropiaciones necesarias que permitan la ejecución de las siguientes obras de carácter vital y de interés nacional:

1. Construcción del Centro de la Cultura Soledeña que incluya los siguientes espacios: biblioteca, hemeroteca, sala de conciertos, sala de conferencias y salas para la formación artística y cultural.
2. Incrementar la formación técnica, tecnológica y complementaria, los procesos de innovación y la promoción de la certificación de competencias laborales, mediante la construcción de programas para las actividades artísticas y culturales.

Artículo 6° Vigencia y Derogatorias. La presente ley entra en vigencia en el momento de su publicación en el diario oficial y deroga todas las leyes y demás disposiciones que le sean contrarias.

CARLOS ADOLFO ARDILA ESPINOSA
Ponente

SECRETARÍA GENERAL

Bogotá, D.C., abril 20 de 2021

En Sesión Plenaria del día 15 de abril de 2021, fue aprobado en Segundo Debate el Texto Definitivo con modificaciones del Proyecto de Ley N° 427 de 2020 Cámara **"POR MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN SE ASOCIA PARA RENDIR PÚBLICO HOMENAJE AL MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, EXALTANDO Y RECONOCIENDO SU RIQUEZA CULTURAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".** Esto con el fin de que el citado Proyecto de Ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.

Lo anterior, según consta en el acta de la Sesión Plenaria Ordinaria N° 214 de abril 15 de 2021, previo su anuncio en la Sesión Plenaria del día 13 de abril de 2021, correspondiente al Acta N° 212.

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO GENERAL

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 453 DE 2020 CÁMARA, 044 DE 2019 SENADO

por medio del cual se exalta la memoria del sociólogo, intelectual, profesor e investigador social, doctor Orlando Fals Borda, desplegando reconocimientos a un pensador colombiano que enorgullece a la nación.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

Artículo 1°. *Objeto.* El Congreso de la República de Colombia, honra y exalta la memoria del sociólogo, intelectual, investigador social y académico Orlando Fals Borda.

Artículo 2°. Encárguese a la unidad administrativa especial de la biblioteca Nacional de Colombia, la recopilación, selección y publicación de la obra del maestro Orlando Fals Borda.

Artículo 3°. Encárguese a la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), la producción y emisión de un documental que recoja y exalte la vida y obra del maestro Orlando Fals Borda.

Artículo 4°. Autorícese al Gobierno Nacional para incorporar dentro del Presupuesto General de la Nación, las apropiaciones necesarias, para los efectos contemplados en la presente ley.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de su promulgación.

NEYLA RUIZ CORREA
Ponente

SECRETARÍA GENERAL

Bogotá, D.C., abril 20 de 2021

En Sesión Plenaria del día 15 de abril de 2021, fue aprobado en Segundo Debate el Texto Definitivo sin modificaciones del Proyecto de Ley N° 453 de 2020 Cámara – 044 de 2019 Senado **"POR MEDIO DEL CUAL SE EXALTA LA MEMORIA DEL SOCIÓLOGO, INTELECTUAL, PROFESOR E INVESTIGADOR SOCIAL, DOCTOR ORLANDO FALS BORDA, DESPLEGANDO RECONOCIMIENTOS A UN PENSADOR COLOMBIANO QUE ENORGULLECE A LA NACIÓN".** Esto con el fin de que el citado Proyecto de Ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.

Lo anterior, según consta en el acta de la Sesión Plenaria Ordinaria N° 214 de abril 15 de 2021, previo su anuncio en la Sesión Plenaria del día 13 de abril de 2021, correspondiente al Acta N° 212.

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO GENERAL

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY N° 464 DE 2020 CÁMARA

por medio de la cual se establece el régimen para el abanderamiento de naves y artefactos navales en Colombia y se disponen incentivos para actividades relacionadas con el sector marítimo.

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY N° 464 DE 2020 CÁMARA "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL RÉGIMEN PARA EL ABANDERAMIENTO DE NAVES Y ARTEFACTOS NAVALES EN COLOMBIA Y SE DISPONEN INCENTIVOS PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SECTOR MARÍTIMO".

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º*. Definiciones para la aplicación de la presente l*ey. Las expresiones utilizadas en esta ley para efectos de su aplicación tendrán el significado que a continuación se determina:

Propietario. La persona natural o jurídica, que aparece como tal en el registro de naves.

Armador. Persona natural o jurídica que, siendo o no propietaria de la nave, la apareja, pertrecha y explota a su propio nombre y por su cuenta y riesgo, percibe las utilidades que produce y soporta todas las responsabilidades que la afectan. La persona que figure en la respectiva matrícula como propietario de una nave se reputará armador, salvo prueba en contrario.

Artefacto naval. Es la construcción flotante, que carece de propulsión propia, que opera en el medio marino, auxiliar o no de la navegación. En el evento de que ese artefacto naval se destine al transporte con el apoyo de una nave, se entenderá el conjunto como una misma unidad de transporte.

Nave. Toda construcción flotante con medios de propulsión propios destinada a la navegación por agua, que se utiliza para el transporte de carga o pasajeros, prestar servicios de remolque, pesca comercial e industrial, actividades de recreo y deportivas, entre otras.

Fletamento. Es el contrato por el cual el armador se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir, con una nave determinada, uno o más viajes preestablecidos, o los viajes que dentro de un plazo convenido ordene el fletador, en las condiciones que el contrato o la costumbre establezcan.

Fletamento a casco desnudo. Es el contrato de arrendamiento válido y debidamente registrado de una nave, por tiempo determinado, en virtud del cual el fletador tiene la posesión y el control, incluido el derecho a contratar al capitán y a la tripulación por el período de vigencia del contrato.

Industria naval. Empresas dedicadas a la construcción *y/o* reparación de **naves, artefactos** navales, plataformas o estructuras marinas.

Licencia de explotación comercial. Es el acto administrativo que, con validez de cinco (5) años, es emitido por parte de la Autoridad Marítima Nacional para autorizar a una persona natural o jurídica a desarrollar una o varias actividades marítimas o prestar uno o varios servicios al sector marítimo con fines comerciales.

Registro. Acto mediante el cual la Autoridad Marítima Nacional inscribe las naves y artefactos navales autorizados para enarbolar la bandera colombiana, así como todos los actos, documentos y contratos relacionados con los mismos, de conformidad con la presente Ley.

Matrícula. Acto administrativo mediante el cual la Autoridad Marítima Nacional certifica que una nave o artefacto naval autorizado ha sido inscrito en el Registro Único Colombiano, de conformidad
con la presente Ley.

Tráfico internacional marítimo: Navegación realizada desde o hacia puerto extranjero, fuera de las aguas jurisdiccionales del país.

Tripulación. El conjunto de personas embarcadas, destinadas a atender todos los servicios de la nave, provistas de sus respectivas licencias de navegación.

Artículo 2°. Prohibiciones a las naves y artefactos navales de bandera colombiana. Ninguna nave o artefacto naval podrá cargar o descargar materiales nucleares o radiactivos en aguas jurisdiccionales o puertos colombianos, sin la debida autorización del Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio de Defensa Nacional en cumplimiento del artículo 81 de la Constitución Política de Colombia, sin perjuicio de las demás autorizaciones que requiera.

TITULO II

DEL REGISTRO ÚNICO COLOMBIANO DE NAVES Y ARTEFACTOS NAVALES

Artículo 3º. Ámbito de aplicación. La presente ley será aplicable a las personas naturales y jurídicas que, en su calidad de propietarios *y/o* armadores, registren naves y artefactos navales bajo la bandera colombiana. Las disposiciones de la presente ley no son aplicables a los buques de guerra.

Artículo 4°. Clasificación del Registro. El registro único colombiano de naves y artefactos navales tendrá la siguiente clasificación:

a. Naves y artefactos navales;
b. Naves y artefactos navales de cabotaje;
c. Naves menores;
d. Naves dedicadas a la pesca industrial;
e. Naves dedicadas a la pesca artesanal;
f. Naves de recreo o deportivas.

Las anteriores clasificaciones serán reglamentadas por la Dirección General Marítima, con base en sus características técnicas, el servicio al cual se destinarán y las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 5º. Individualización de las naves y artefactos navales. Las naves y artefactos navales colombianas se individualizan en el orden interno y para todos los efectos legales, por su nombre, número de registro, puerto de registro y arqueo.

Artículo 6º. Nombre de las naves y artefactos navales. El nombre de la nave o artefacto naval no puede ser igual al de otra nave o artefacto registrado. A tal efecto, la Dirección General Marítima reglamentará la imposición, uso y cese de dicho elemento de individualización.

Artículo 7º. Número de registro de las naves y artefactos navales. El número de registro de una nave o artefacto naval es el de su inscripción. La Dirección General Marítima depurará y organizará el registro colombiano de naves y artefactos navales, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley.

Artículo 8º. Certificado de Matrícula de las naves y artefactos navales. La Dirección General Marítima otorgará a toda nave o artefacto naval que se inscriba en el registro único colombiano un Certificado de Matrícula provisional o definitivo, según corresponda, en el que conste el nombre de la nave o artefacto naval, el de su armador *y/o* propietario, el número de registro, el servicio para el cual está autorizado y los arqueos bruto y neto, así como los demás datos contenidos en su inscripción

Artículo 9º. Pabellón de las naves y artefactos navales. Toda nave o artefacto naval con registro y matrícula colombiana debe izar, en lugar visible, el pabellón nacional y llevará su nombre marcado en los lugares en que disponga la reglamentación que emitirá la Dirección General Marítima. En la popa llevará, además, el nombre del puerto de registro. Lo anterior, sin perjuicio de lo que dispongan los tratados, convenios, acuerdos y prácticas, celebrados o acogidos por el país, para tal efecto.

Artículo 10°. Doble registro. En Colombia podrán registrarse, de manera provisional, las naves y artefactos navales que se encuentren matriculados en el Registro de Naves de otro Estado, única y exclusivamente mientras realizan el trámite de cancelación de dicho registro y les sea expedido el certificado correspondiente.

No obstante, lo anterior, deberán enarbolar la bandera colombiana para todos los efectos, desde que le sea expedida la correspondiente matrícula provisional.

Artículo 11º. Actos sujetos a registro sobre naves y artefactos navales. En el registro de naves y artefactos navales se inscribirán los siguientes actos y negocios jurídicos:

a. Los contratos de construcción, adquisición, enajenación o cesión, así como los constitutivos
de derechos reales, traslativos o extintivos del dominio, las hipotecas, demás gravámenes y embargos.
b. Los contratos de fletamento a casco desnudo.
c. Los contratos de arrendamiento financiero.
d. Las decisiones expedidas por autoridades judiciales y administrativas, que por expresa disposición legal, sean objeto de registro.
e. Cualquier otro acto o contrato relativo a las naves y artefactos navales cuando la ley exija dicha formalidad.

Parágrafo. -Con excepción de las hipotecas, los actos y contratos a que se refieren los literales a), b) y c) del presente artículo no requerirán de escritura pública, siendo suficiente el registro del documento privado contentivo del acto o negocio jurídico celebrado.

Cuando dichos documentos se extiendan en idioma diferente al castellano, se requerirá su traducción efectuada por autoridad o traductor oficial debidamente inscrito ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como su debida legalización y apostilla cuando se requiera.

Los actos y documentos que deban ser inscritos en el registro y no cumplan con las formalidades establecidas en el presente artículo, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen y no serán oponibles a terceros.

Artículo 12º. Compra, Venta e Hipoteca de naves y artefactos navales. La compra, venta e hipoteca de naves y artefactos navales no requerirá de permiso o autorización alguna.

Artículo 13º. Licencia para el acceso a las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil marítimo y la asignación de las letras de llamadas y el número de identificación del servicio móvil marítimo (MMSI). La Licencia para el acceso a las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil marítimo y la asignación de las letras de llamadas y el número de identificación del servicio móvil marítimo (MMSI) dentro del trámite de registro de naves y artefactos navales, serán expedidos por la Dirección General Marítima en el mismo plazo en que se otorga la matricula provisional. Esta licencia se otorgará a nombre de la nave, no del propietario, y tendrá una vigencia indefinida mientras se conserven todas las condiciones tenidas en cuenta para su expedición.

Para lo anterior se coordinará lo correspondiente con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

TÍTULO III

DE LA BANDERA COLOMBIANA

Capítulo I

MATRICULA PROVISIONAL

Artículo 14º. Matrícula Provisional de naves y artefactos navales. Las naves y artefactos navales que se inscriban en el registro colombiano, por primera vez, podrán obtener una matrícula provisional mientras se completan los requisitos para que sea expedida la matrícula definitiva, dependiendo de la solicitud del interesado y del cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley.

Artículo 15º. Requisitos para el registro y expedición de Matrícula Provisional de naves y artefactos navales. Los propietarios y/o armadores o sus representantes directamente o por conducto de apoderado presentarán, de manera presencial o electrónica, solicitud de registro a la Capitanía de Puerto o a la Dirección General Marítima, indicando:

a) El nombre de la nave o artefacto naval que pretende inscribir;
b) Nombre y dirección del propietario:
c) Constructor, fecha y lugar de construcción;
d) Servicio al cual se propone destinarla.

Artículo 16º. Documentación para el registro y expedición de la Matrícula Provisional de naves y artefactos navales. La solicitud de que trata el artículo anterior deberá ir acompañada de la siguiente documentación en medio físico o digital:

a. Certificados de navegabilidad y seguridad vigentes los cuales pueden haber sido expedidos por la anterior bandera o por una organización reconocida por ella, u otra que cuente con acuerdo vigente de delegación con la Dirección General Marítima.

b. Certificado de cancelación del registro anterior o constancia de inicio de dicho trámite.

c. Copia del acto o contrato de compra, si corresponde;

d. Seguro de responsabilidad civil extracontractual que ampare el riesgo de contaminación súbita a favor de terceros afectados, por la suma previamente fijada por la Dirección General Marítima-Ministerio de Defensa Nacional, según la clase, el porte y el servicio al cual se destinará la nave o artefacto naval. El mencionado seguro podrá ser contratado con compañías aseguradoras colombianas o extranjeras o Clubes de Protección e Indemnización P & I que ofrezcan dichas coberturas.

e. Pago de la tarifa establecida para el trámite.

Parágrafo 1º: El requisito del literal d) no es aplicable a las naves de recreo o deportivas que no desarrollen actividades comerciales.

Parágrafo 2º: Para el trámite de registro y expedición de Matrícula Provisional para remolcadores, la Dirección General Marítima conjuntamente con la expedición de la Matricula Provisional, expedirá un Permiso de Operación Provisional, mientras se surten los trámites que determine la reglamentación por parte de la Dirección General Marítima.

Artículo 17º. Expedición de la Matrícula Provisional. Recibida en forma completa la documentación listada en el artículo anterior, la Dirección General Marítima dentro de los tres días hábiles siguientes, inscribirá la nave o artefacto naval en el registro colombiano y expedirá el certificado de matrícula provisional y la licencia para el acceso a las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil marítimo y la asignación de las letras de llamadas y el número de identificación del servicio móvil marítimo (MMSI). No es necesario que la nave o artefacto naval se encuentre en territorio colombiano para que le sea expedida matrícula provisional.

El certificado de matrícula provisional tendrá una vigencia de seis (6) meses, no prorrogables. Una vez vencido este término sin que se haya tramitado el certificado de matrícula definitiva, se procederá a la cancelación del registro.

Capitulo II

MATRICULA DEFINITIVA

Artículo 18º. Requisitos para el registro y expedición de Matrícula definitiva de naves *y* artefactos navales. Los propietarios y/o armadores o sus representantes directamente o por conducto de apoderado presentarán, de manera presencial o electrónica, solicitud de registro de matrícula definitiva a la Capitanía de Puerto o a la Dirección General Marítima.

Siempre que no se haya solicitado inicialmente la matrícula provisional de la que trata el artículo 16, se deberá aportar la siguiente documentación.

a. Copia del documento de compra de la nave o artefacto naval.

b. Certificado de cancelación del registro anterior.

c. Seguro de responsabilidad civil extracontractual que ampare el riesgo de contaminación súbita a favor de terceros afectados, por la suma previamente fijada por la Dirección General Marítima-Ministerio de Defensa Nacional, según la clase, el porte y el servicio al cual se destinará la nave o artefacto naval. El mencionado seguro podrá ser contratado con compañías aseguradoras colombianas o extranjeras o Clubes de Protección e Indemnización P & I que ofrezcan dichas coberturas.

d. Si se trata de persona jurídica, su certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social, cuya fecha de expedición no sea superior a tres (3) meses.

e. Certificados de navegabilidad y seguridad expedidos en nombre de la República de Colombia por la Dirección General Marítima o por una Organización Internacional de clasificación u otra reconocida por ésta, que cuente con acuerdo vigente de delegación con la Dirección General Marítima.

f. La documentación técnica que determine la reglamentación de la Dirección General Marítima, según la clasificación del registro establecida en la presente Ley.

En caso de haber solicitado y obtenido la matricula provisional de la que trata el artículo 16 de esta ley, solo se deberá aportar la documentación exigida en los literales d, e y f.

Dicha documentación deberá ser aportada por lo menos dos meses antes del término de vigencia o duración de la matricula provisional de que trata el artículo 16.

Parágrafo. El requisito del literal c) no es aplicable a las naves de recreo o deportivas que desarrollen actividades no comerciales.

Artículo 19º. Término para la expedición de la matrícula definitiva. Recibida en forma completa la documentación listada en el artículo anterior, la Dirección General Marítima expedirá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, la matrícula definitiva.

En el caso donde la Dirección General Marítima niegue la expedición de la matrícula definitiva, el interesado podrá interponer los recursos de reposición *y/o* apelación ante las autoridades competentes,

Artículo 20º. Nombramiento de Inspectores para para la expedición de la Matrícula Provisional o Definitiva de naves y artefactos navales. El trámite para la expedición de la Matrícula Provisional o Definitiva no requerirá el nombramiento de un inspector por parte de la Autoridad Marítima, si la nave *y/o* artefacto naval está debidamente certificado por una organización reconocida con acuerdo vigente de delegación con la Dirección General Marítima.

Capitulo III

CAMBIO DE DOMINIO Y CANCELACIÓN DE REGISTRO

Artículo 21°. Cambio de dominio de naves y artefactos navales. El cambio de dominio de naves y artefactos navales inscritos en el registro único colombiano no requerirá cancelación de matrícula. Para el efecto el nuevo propietario allegará, de manera presencial o electrónica, el documento de compraventa y solicitará el cambio del certificado para que la nave o artefacto naval quede a su nombre, sin modificar el número de inscripción.

Igual procedimiento se aplicará para el cambio de nombre, cambio de puerto de registro, cambio de motores y modificaciones que alteren sus características.

Parágrafo. La Dirección General Marítima organizará el registro único colombiano de naves y artefactos navales, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo.

Artículo 22º. Cancelación del registro y matrícula de las naves y artefactos navales. El registro y matrícula de una nave o artefacto naval será cancelada por la Dirección General Marítima directamente, previo procedimiento administrativo; o a solicitud del propietario *y/o* armador, acompañando el certificado del Registro Colombiano que acredite que no existen gravámenes que afecten a la nave o artefacto naval, en los siguientes casos:

a. Cuando adquiera bandera en otro país, previa cancelación del registro; o por enarbolar bandera de otro estado de registro, en el evento de tener ya matrícula provisional como lo dispone la presente ley.

b. Cuando así lo solicite el propietario, por causa justificada o lo ordene autoridad competente,
por causas legales;

c. Cuando ocurra su pérdida, debidamente comprobada;

d. Al efectuarse el desguace voluntario de la nave, aunque se construya con los mismos materiales;

e. Por sentencia judicial que así lo ordene dictada en el país o en el extranjero, si esta fuere reconocida legalmente en Colombia.

f. Por acto administrativo que así lo ordene, emitido por autoridad competente como resultado
a la infracción de las leyes ambientales y de pesca.

Cumplidos los requisitos exigidos en cada caso, la Dirección General Marítima, dentro de un plazo de setenta y dos (72) horas hábiles siguientes, otorgará la cancelación de registro y matrícula colombiana.

Capítulo IV

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 23º. Operación de naves y artefactos navales. La operación de las naves y artefactos navales con matrícula provisional o definitiva se limitará al servicio que puedan prestar de acuerdo a sus condiciones técnicas y de seguridad, así como a los requerimientos legales o reglamentarios que se exijan para la actividad que pretendan desarrollar.

Artículo 24º. Certificados estatutarios *y/o* de seguridad. Los certificados estatutarios y/o seguridad hacen parte de los documentos exigidos a las naves y artefactos navales y deben ser presentados cuando la Dirección General Marítima y otra autoridad competente los solicite.

El vencimiento de los certificados implica para la nave o artefacto naval la imposibilidad de navegar y de prestar los servicios a los cuales está destinado. La Capitanía de Puerto no expedirá zarpe sin la presentación de los certificados vigentes.

Parágrafo. Las naves y artefactos navales a los que hace referencia la presente ley serán inspeccionados y certificados por la Dirección General Marítima o por una organización reconocida debidamente delegada para ello por la Autoridad Marítima Nacional.

Artículo 25°. Condiciones de seguridad de las naves y artefactos navales. Las naves *y* artefactos navales deben reunir las condiciones de seguridad previstas en la legislación nacional y en los convenios internacionales ratificados por Colombia, según corresponda al ámbito de su operación.

Artículo 26°. Determinación de condiciones de seguridad de naves y artefactos navales. Las condiciones de seguridad de las naves y artefactos navales a que se refiere este capítulo serán determinadas por la Dirección General Marítima de acuerdo con la naturaleza y finalidad de los servicios que presten y la navegación que efectúen, atendiendo lo establecido en las normas nacionales e internacionales que rigen la materia.

TÍTULO IV

GARANTÍAS MARÍTIMAS E HIPOTECA NAVAL

Artículo 27º. Hipoteca Naval. Podrán hipotecarse todas las naves y artefactos navales de bandera colombiana, las cuales se entenderán para todos los efectos como garantías reales.

Artículo 28º. Garantías Marítimas. Las garantías marítimas de las naves y artefactos navales con arqueo bruto superior a 500 toneladas a los cuales se refiere la presente ley se regirán por la Decisión 487 del Acuerdo de Cartagena sobre Garantías Marítimas (Hipoteca Naval y Privilegios Marítimos) y Embargo Preventivo de Buques o por las normas que la modifiquen o reemplacen.

Las garantías marítimas de las demás nave*s* y artefactos navales se regirán por el Código de Comercio. En caso de no existir norma aplicable, las garantías marítimas se regirán por las normas internacionales que rijan la materia.

Artículo 29º. Registro de Hipotecas y gravámenes sobre naves y artefactos navales. En el registro colombiano se especificará, como mínimo, el nombre y la dirección de la persona a favor de la cual se haya constituido la hipoteca o el gravamen, o el hecho de que haya sido constituida para garantizar obligaciones al portador, el importe máximo garantizado o si ese importe se especificare en el documento de constitución de la hipoteca o del gravamen, y la fecha y otras circunstancias que determinen su rango respecto de otras hipotecas y gravámenes inscritos.

TITULO V

DE LOS TRIBUTOS Y TASAS

Artículo 30°. Adiciónese el parágrafo 8º al artículo 240 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:

Parágrafo 8º. Las rentas provenientes del servicio de transporte marítimo internacional, que realicen naves o artefactos navales inscritos en el registro colombiano, estarán gravadas a la tarifa del impuesto sobre la renta del 2%.

Artículo 31º. Adiciónense el parágrafo 6º al artículo 114-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:

Parágrafo 6º. Los contribuyentes personas jurídicas del impuesto sobre la renta y complementarios, que liquiden la tarifa prevista en el parágrafo 8 del artículo 240 del Estatuto Tributario no aplicarán lo establecido en el presente artículo. Por lo tanto, dichos contribuyentes estarán obligados a efectuar los respectivos aportes en los términos que dispone la ley."

Artículo 32º. Adiciónese el numeral 12 del artículo 2 de la Ley 1115 de 2006, el cual quedará así:

"12. Registro en Colombia de una nave o artefacto naval destinado al tráfico internacional marítimo. Expedición y cancelación de matrícula de naves."

Artículo 33º. Vigencias y derogatorias. La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga la Ley 730 de 2001 y todas las disposiciones que le sean contrarias.

JUAN DAVID VÉLEZ TRUJILLO
ponente

HÉCTOR JAVIER VERGARA SIERRA
Ponente

ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCA
Ponente

GERMÁN ALCIDES BLANCO ALVAREZ
Ponente

SECRETARÍA GENERAL

Bogotá, D.C., marzo 24 de 2021

En Sesión Plenaria del día 23 de marzo de 2021, fue aprobado en Segundo Debate el Texto Definitivo con modificaciones del Proyecto de Ley N° 464 de 2020 Cámara **"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL RÉGIMEN PARA EL ABANDERAMIENTO DE NAVES Y ARTEFACTOS NAVALES EN COLOMBIA Y SE DISPONEN INCENTIVOS PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SECTOR MARÍTIMO".** Esto con el fin de que el citado Proyecto de Ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.

Lo anterior, según consta en el acta de las Sesiones Plenaria Ordinaria N° 207 de marzo 23 de 2021, previo su anuncio en la Sesión Plenaria del día 17 de marzo de 2021, correspondiente al Acta N° 206.

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO GENERAL

CONTENIDO

Gaceta número 328 - Lunes, 26 de abril de 2021

CÁMARA DE REPRESENTANTES

TEXTOS DE PLENARIA

Págs.

Texto definitivo plenaria Cámara al Proyecto de ley estatutaria número 218 de 2020 Cámara, por medio de la cual se modifica la Ley 1757 del 6 de julio de 2015 y se dictan otras disposiciones en materia del mecanismo de participación ciudadana de revocatoria de mandato de alcaldes y gobernadores. 1

Texto definitivo plenaria Cámara al Proyecto de ley estatutaria número 326 de 2020 Cámara, por medio de la cual se crea el Banco Nacional de Datos Genéticos vinculados a la Comisión de Delitos Violentos de alto impacto..... 3

Texto definitivo plenaria Cámara al Proyecto de ley número 019 de 2020 Cámara acumulado con los Proyectos de ley números 155 de 2020 y 221 de 2020 Cámara, por la cual se establecen medidas para promover la adquisición, renovación y no evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat)", se modifica la Ley 769 de 2002 y se dictan otras disposiciones. 4

Texto definitivo plenaria Cámara al Proyecto de ley número 034 de 2019 Cámara, por medio de la cual se implementan medidas para proteger y desarrollar la producción agropecuaria nacional. 5

Texto definitivo plenaria Cámara al Proyecto de ley número 044 de 2020 Cámara, por medio de la cual se otorga seguridad jurídica y financiera al seguro agropecuario y se dictan otras disposiciones a favor del agro 7

Texto definitivo plenaria Cámara al Proyecto de ley número 053 de 2020 Cámara, por medio de la cual se reconoce al porro y al Festival Nacional del Porro de San Pelayo como manifestación del Patrimonio Cultural Inmaterial de la nación y se dictan otras disposiciones. 9

Texto definitivo plenaria Cámara al Proyecto de ley número 283 de 2019 Cámara, por medio de la cual se establecen medidas orientadas a fortalecer la comunidad lactante, la promoción de la lactancia materna en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones..... 10

Texto definitivo plenaria Cámara al Proyecto de ley número 283 de 2019 Cámara, por medio del cual se sustituye el título XI, "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000, se modifica la ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones. 12

Texto definitivo plenaria Cámara al Proyecto de ley número 306 de 2020 Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 18 de la Ley 1010 de 2006. 16

Texto definitivo plenaria Cámara al Proyecto de ley número 427 de 2020 Cámara, por medio de la cual la nación se asocia para rendir público homenaje al municipio de Soledad en el departamento del Atlántico, exaltando y reconociendo su riqueza cultural y se dictan otras disposiciones. 17

Texto definitivo plenaria Cámara al Proyecto de ley número 453 de 2020 Cámara, 044 de 2019 Senado, por medio del cual se exalta la memoria del sociólogo, intelectual, profesor e investigador social, doctor Orlando Fals Borda, desplegando reconocimientos a un pensador colombiano que enorgullece a la nación. 17

Texto definitivo plenaria Cámara al Proyecto de ley número 464 de 2020 Cámara, por medio de la cual se establece el régimen para el abanderamiento de naves y artefactos navales en Colombia y se disponen incentivos para actividades relacionadas con el sector marítimo. 18

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2021

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

I S S N 0 1 2 3 - 9 0 6 6

AÑO XXX - Nº 427 Bogotá, D. C., viernes, 14 de mayo de 2021 EDICIÓN DE 24 PÁGINAS

DIRECTORES: GREGORIO ELJACH PACHECO
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO
www.secretariasenado.gov.co

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA
www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

SENADO DE LA REPÚBLICA

PONENCIAS

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 446 DE 2021 SENADO – 283 DE 2019 CÁMARA

por medio del cual se sustituye el Título XI "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones.

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE

PROYECTO DE LEY NO. 446 DE 2021 SENADO – 283 DE 2019 CÁMARA. "POR MEDIO DEL CUAL SE SUSTITUYE EL TÍTULO XI "DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE" DE LA LEY 599 DE 2000, SE MODIFICA LA LEY 906 DE 2004 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Bogotá D.C., 13 de mayo de 2020.

Honorable Senador
Miguel Ángel Pinto
Presidente
Comisión Primera del Senado
Ciudad

Respetado Presidente,

En cumplimiento de la designación que me hizo la Mesa Directiva de la Comisión Primera, rindo **informe de ponencia para primer debate** al Proyecto de Ley No. 446 de 2021 Senado – 283 de 2019 Cámara. "Por medio del cual se sustituye el Título XI "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones"

1. ANTECEDENTES

La iniciativa fue presentada al Congreso de la República el día 30 de octubre de 2019, por el Honorable Representante a la Cámara por Bogotá Juan Carlos Lozada Vargas, quien fue su ponente y tras discusión fue aprobado en primer debate en la comisión primera de cámara el 12 de junio de 2020, posteriormente, fueron designados como ponentes para segundo debate los Honorables Representantes Juan Carlos Lozada Vargas, Buenaventura León León, Edward David Rodríguez Rodríguez, Erwin Arias Betancur, Juanita Maria Goebertus Estrada, Carlos German Navas Talero, Luis Alberto Alban Urbano, Jorge Enrique Burgos Lugo, quienes presentaron ponencia favorable a la plenaria de la cámara, para su posterior aprobación por parte de la corporación el pasado 6 de abril de 2021.

Finalmente el 5 de mayo de 2021, mediante oficio de secretaria de la Comisión Primera de Senado, fuí informado de la designación que la Mesa directiva mediante Acta MD-25 había resuelto designarme como ponente para primer debate en la Comisión primera de Senado del Proyecto de Ley No. 446 de 2021 Senado – 283 de 2019 Cámara. "Por medio del cual se sustituye el Título XI "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones".

2. OBJETO

El Proyecto de Ley reforma las disposiciones contenidas en el título XI "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente", Capítulo único "Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente" de la Ley 599 de 2000 "Código Penal", con el objetivo de establecer nuevos tipos penales e incluir circunstancias de agravación punitiva que permitan aumentar la protección existente, mejorar la coordinación interinstitucional e incrementar las sanciones penales, como respuesta a los actuales fenómenos que causan daños devastadores en el agua, la biodiversidad y el medio ambiente como interés nacional principal y prevalente de Colombia.

En este orden de ideas, se busca la ampliación de los verbos rectores mediante los cuales se pueda configurar el supuesto de hecho en las figuras delictivas, con el fin de brindar mayores herramientas para la correcta tipificación de las conductas.

Con el aumento de las circunstancias de agravación punitiva, se resalta la importancia de los ecosistemas estratégicos y áreas protegidas, así como de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, hídricos, biológicos o genéticos y en general de los recursos biológicos de la biodiversidad colombiana.

En consecuencia, esta modificación normativa implica la agravación de las consecuencias penales establecidas para los tipos contemplados en el título XI "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente", Capítulo único "Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente" de la Ley 599 de 2000 "Código Penal" que con mayor impacto y frecuencia afectan el bien jurídico protegido, situación que se contempla como medida de política criminal que se observa como ejemplarizante e incide en la prevención del delito.

Por medio de la creación de los nuevos tipos penales de trafico de fauna, deforestación, promoción y financiación a la deforestación, tenencia y transporte de mercurio, financiación de áreas de especial importancia ecológica, apropiación ilegal de baldíos de la nación y financiación de la apropiación ilegal de baldíos de la nación, se busca luchar contra nuevos fenómenos que causan grave afectación a

los recursos naturales y el medio ambiente, nuestra selva tropical húmeda y bosques.

3. ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

Esta iniciativa es de la autoría del Representante a la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Lozada Vargas, y cuenta con el apoyo de las carteras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca y, la Fiscalía General de la Nación.

Se desarrolla, además, en el marco de la Política de Defensa y Seguridad puesta en marcha por el Gobierno Nacional por medio de la campaña «Artemisa» lanzada por el presidente Iván Duque en el mes de abril de 2019; esta estrategia tiene tres objetivos principales, detener la deforestación, contribuir a la conservación del bosques húmedo tropical y judicializar a quienes atenten contra los bienes, calificando el agua, la biodiversidad y el medio ambiente, de interés nacional, primordial y prevalente de Colombia.

En concordancia, el Gobierno con el fin de crear e implementar políticas conjuntas intersectoriales, multidimensionales y sistémicas que contrarresten la deforestación y promuevan la gestión sostenible de los bosques que ocupan aproximadamente el 52% del territorio emergido del país, formuló el CONPES 4021 de 2020.

Mediante la estructuración de esta política nacional, se pudo determinar que el control efectivo de los delitos que representan un alto riesgo para el medio ambiente y recursos naturales, ostentan debilidades técnicas y administrativas, lo que hace su difícil aplicación y judicialización.

Es así como en esta política se establecen planes de acción, estrategias y líneas de acción, dentro de la cual se destacan la 4 y 9, por la cual se fortalecen las capacidades administrativas, técnicas y legales de las autoridades que intervienen en la prevención, investigación, judicialización y control de delitos ambientales.

Este CONPES se expide en cumplimiento de los fines del Consejo Nacional de la Lucha contra la Deforestación y otros delitos ambientales (CONALDEF), buscando desincentivar el accionar de los grupos y personas involucradas en la deforestación, orientando y coordinando acciones para lograr la efectividad de actuaciones administrativas y penales.

Si bien, esta política nacional traza diferentes enfoques desde los diferentes órganos de gobierno para la reducción de la deforestación y gestión sostenible de los bosques, se destaca el desarrollo de intervenciones integrales para el ordenamiento territorial y la resolución de conflictos de uso, ocupación y tenencia de tierras que generan presión sobre el bosque, en concordancia del CONPES 4007 "Estrategia para el fortalecimiento de la Gobernanza en el Sistema de Administración del Territorio Aprobado en 2020".

En este sentido, buscando la promoción del acceso progresivo a la propiedad y formas de tenencia, distribución equitativa de la tierra y la seguridad jurídica, la Agencia Nacional de Tierras realizará el ordenamiento social de la propiedad en municipios programados.

Así mismo, de la mano de esta entidad, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM desarrollarán y monitorearán procesos de otorgamiento de derechos de uso sobre predios baldíos inadjudicables ubicados en zonas de reserva forestal, así como proyectos de contratos de conservación natural, para mitigar los conflictos socioambientales que se evidencien en las áreas de bosque reservadas.

En desarrollo de este proceso, el gobierno busca mejorar la calidad de vida de las poblaciones afectadas por la violencia y pobreza, priorizando en municipios programas de desarrollo con enfoque territorial, áreas con presencia de cultivos ilícitos y núcleos activos de deforestación.

En atención a estos procesos, la ANT, el IGAC, IDEAM y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, implementarán estrategias para la recuperación de baldíos, deslindes y clarificación de tierras, favoreciendo la sana apropiación del territorio y el uso sostenible de los bosques, también formalizará los territorios étnicos incluyendo las áreas en los núcleos activos de deforestación.

Por otro lado, y en consonancia con lo anteriormente expuesto, se busca que con entes de control y entidades de gobierno, se establezcan acciones de coordinación para fortalecer las capacidades administrativas, técnicas y operacionales del CONALDEF, según las funciones que ostente, en busca de la integración de información que permita la toma de decisiones articuladas para luchar contra la deforestación y estructuración de indicadores para realizar seguimiento a programas, planes y estrategias.

Es así, como por medio de un trabajo conjunto, se busca la creación de una política de protección ambiental integral, previniendo amenazas internas y externas de los recursos naturales, evitando que economías ilícitas y otro tipo de aprovechamientos deterioren el ecosistema colombiano.

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La Constitución Política de Colombia a través de su artículo 79 estableció el derecho más colectivo de los humanos: el derecho a gozar de un ambiente sano, determinando que es deber del Estado, proteger la diversidad e integridad del ambiente y las áreas de especial importancia ecológica.

A fin de materializar dicho mandato, una de las medidas adoptadas en pro de darle alcance al artículo 79 Constitucional, fue la de incluir en el Código Penal como delito aquellas conductas que generen un daño o pongan en riesgo los recursos naturales tanto renovables como no renovables del país.

Sin embargo, ante las nuevas dinámicas sociales, políticas y económicas que afronta el planeta, es necesario robustecer la lucha en contra de la alteración y destrucción del ambiente, corrigiendo los actuales tipos penales que han resultado ineficaces y no proporcionales, e introduciendo prohibiciones a conductas que, a pesar de no encontrarse tipificadas, producen un impacto ambiental negativo en la biodiversidad del país.

5. Fundamento Jurídico del Proyecto de Ley.

La Cumbre de Naciones Unidas reunida en Estocolmo en 1972, determinó que la protección del medio ambiente debía tener alcances de protección penal[1], desde entonces la comunidad internacional ha emprendido avances legales pertinentes.

Fue así como por medio de la Ley 23 de 1973, se le concedieron facultades extraordinarias al presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente, y se señalan principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo.

En consecuencia, se expidió el Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente señalando al ambiente como patrimonio común, por lo cual el Estado y los particulares tienen como deber participar en su preservación y manejo, igualmente, regula el manejo de los recursos naturales renovables y no renovables, la defensa del ambiente y sus elementos.

Posteriormente, Colombia incluyó en el Código Penal de 1980 los tipos penales ambientales como herramientas útiles para proteger el medio ambiente en los artículos 242, 243, 244, 245, 246 y 247 del título III de ese código.[2]

1 Jackson, P. De Estocolmo a Kyoto: Breve Historia del Cambio Climático. Naciones Unidas, Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. 2018.

Desarrollando esta tendencia internacional, la Constitución de 1991 de manera innovadora consagró el deber de proteger al medio ambiente como unos de los pilares del Estado Social de Derecho, es así como en los artículos 79 y 80[3] de la Constitución Nacional se establecen las bases que fundamentan la protección al medio ambiente y a los recursos naturales de igual forma, asimismo, se crearon mecanismos populares que buscan proteger de manera efectiva, eficaz y ágil cualquier afectación hacia este.

En desarrollo de estos derechos fundamentales al medio ambiente, la Corte Constitucional como guardiana de la constitución y los derechos fundamentales, mediante sentencia T-536 de 1992, manifestó la importancia y alcance del derecho a un medio ambiente sano:

"*El ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho Constitucional fundamental, pues su violación atenta directamente contra la perpetuación de la especie humana y, en consecuencia, con el derecho más fundamental del hombre: la vida. El derecho a la salud y a la vida son derechos fundamentales porque son esenciales al hombre, la salud se encuentra ligada al medio ambiente que le rodea y que dependiendo de las condiciones que éste le ofrezca, le permitirá desarrollarse económica y socialmente a los pueblos, garantizándoles su supervivencia. Existen unos límites tolerables de contaminación que al ser traspasado constituyen un perjuicio para el medio ambiente y la vida, que no pueden ser justificables y por lo tanto exigen imponer unos correctivos.*

La Corte reiterando su postura, con particular énfasis en la Sentencia C-535 de 16 de octubre de 1996, expresa sobre el patrimonio ecológico local:

"El Congreso puede establecer una legislación básica nacional que evite el deterioro del patrimonio ecológico municipal y proteja el derecho al medio ambiente en ese ámbito local, pues la garantía de ese derecho de la persona no puede quedar sujeta al albur de que la autoridad indígena o el concejo municipal o distrital expidan o no la correspondiente regulación. La competencia de los municipios y las autoridades indígenas en relación con el patrimonio ecológico local no es entonces exclusiva sino concurrente con la normatividad básica nacional que el Congreso expida sobre la materia."

[2] *Decreto – Ley 100 de 1980 [Presidente de la República de Colombia]. Por medio del cual se expide el nuevo Código Penal. Febrero 20 de 1980. Artículos 242, 243, 244, 245, 246 y 247. [Título III].*

[3] *El artículo 79 de la Constitución Política establece: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano (...) Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de esos fines".*
El artículo 80 de la Constitución Política establece: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".

En este mismo sentido, en sentencia C-259 de 2016, la Corte Constitucional realizó un estudio de la protección constitucional que recae sobre el medio ambiente y los recursos naturales, entendiéndolo como un bien jurídico que se expresa como principio, derecho colectivo y derecho-deber, al respecto enfatizó:

"La Constitución Ecológica lleva implícita el reconocimiento al medio ambiente de una triple dimensión: 'de un lado, es un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación. De otro lado, aparece como el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales. Y, finalmente, de la Constitución Ecológica [se] derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares. Es más, en varias oportunidades, este Tribunal ha insistido en que la importancia del medio ambiente en la Constitución es de tal magnitud que implica para el Estado 'unos deberes calificados de protección' (…)" (C-595 de 2010).

Retomando la legislación interna, en busca de una mayor protección al medio ambiente, se expide la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reorganiza el sector público encargado de la conservación del medio ambiente y se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Con el fin de reglamentar parcialmente la Ley 99 de 1993, se expide el Decreto 1753 de 1994, el cual define la licencia ambiental: naturaleza, modalidad y efectos; contenido, procedimientos, requisitos y competencias para el otorgamiento de las licencias ambientales. De igual forma, con el objetivo de incorporar el Convenio sobre Diversidad Biológica hecho en Río de Janeiro de junio 5 de 1992, se aprobó la Ley 165 de 1994.

En desarrollo de la legislación ambiental, llega la Ley 491 de 1999, estableciendo el seguro ecológico y modificando los delitos contra los recursos naturales y el ambiente y modifica en lo relacionado con el bien jurídico del medio ambiente y los recursos naturales señalados en el Código Penal.

Con la Ley 599 de 2000, el código penal contempló nuevos delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, de manera novedosa se incluyeron aspectos sobre la bioseguridad, la biotecnología y el manejo de microorganismos, lo cual denotaba una mejor comprensión e inclusión de los diferentes factores ambientales, por ejemplo, se decidió tener en cuenta la protección de las especies en vía de extinción para su preservación.

Con dicha ley se creó, entre otros la explotación de yacimiento minero o hidrocarburo con el objetivo de castigar penalmente a quienes afecten el agua, el suelo, subsuelo o la atmosfera cuando se desarrollen actividades que contienen esos elementos. De manera general se contempló un aumento punitivo en las conductas delictivas que ya eran parte del ordenamiento jurídico y se crearon otras situaciones con el ánimo de preservar los recursos naturales, fue un gran avance en la materia, debido a que en los artículos 328 al 339 consagró 11 tipos penales, al igual que la modalidad culposa de dos de ellos. Además, se continuó con la línea que había planteado la Ley 491 de 1999, al incluir un título aparte para los delitos ambientales[4].

Adicionalmente, la más reciente reforma al Código Penal en esta materia fue a través de la Ley 1453 de 2011. Por medio de esta norma, se modificaron e introdujeron artículos que agudizan el castigo contra los recursos naturales y el medio ambiente. Por ejemplo, se introdujeron tipos penales como el 332A, que hace referencia a la contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos, es de destacar que esta, ha sido la única modificación que hasta el momento ha sufrido el capítulo XI del Código Penal.

Con la expedición de la Ley 1453 de 2011, se amplían los tipos penales o delitos en contra del medio ambiente y en otros eventos, se aumentan las sanciones que tienen por objeto dar una mayor protección a los recursos naturales que hacen parte del Medio Ambiente, esto con el fin de prevenir y sancionar las actividades humanas que desborden la esfera del derecho administrativo, en la explotación de los recursos no renovables en Colombia y que suscitan mayor gravedad en el manejo de residuos ordinarios, explotaciones de yacimientos mineros, el uso ilícito de agentes biológicos o bioquímicos, o de especies exóticas y que va dirigido en general a todas las empresas que con sus actividades puedan causar daños en el medio ambiente o los recursos naturales, las cuales deberán tener un mayor cuidado en el respeto y cumplimiento de los trámites y autorizaciones ambientales, así como en la ejecución de esas actividades, ante el reproche considerable que llega con los nuevos tipos de delitos medio ambientales[5].

Dado que el Estado necesitaba contar con un organismo técnico que se encargara de la administración y manejo del Sistema de Parques Naturales y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, mediante el Decreto 3572 de septiembre 27 de 2011, se creó la Unidad Administrativa Especial denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia, la cual se encuentra adscrita al Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

[4] Gómez L. La criminalización de delitos ambientales en Colombia: una combinación de aspectos clásicos y modernos del derecho penal. Visto en: https://cienciasjuridicas.javeriana.edu.co/documents/3722972/11719235/6.+Gomez+Joves.pdf/3d197596-a51c-4a24-9faf-51797a2ad9cb

[5] Díaz M. LA PROTECCIÓN JURÍDICO – PENAL DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DELITO AMBIENTAL EN COLOMBIA. Universidad Santo Tomás. Bogotá 2015. Rescatado de: https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/405/la%20proteccion%20juridico-penal%20del%20medio%20ambiente%20y%20el%20delito%20ambiental%20en%20colombia.pdf?sequence=1

En febrero de 2012 de la Unidad Especial para Delitos Ambientales por parte de la Fiscalía General de la Nación, que tiene como objeto la investigación penal en contra de particulares que afecten los recursos naturales y pongan en riesgo el Medio Ambiente nacional, escenario que junto a la reforma de la Ley 1453 de 2011 se constituyó como un paso fundamental, en el reproche penal de toda forma de uso y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales de la biodiversidad colombiana fuera del marco del desarrollo sostenible.

A fin de proteger el medio ambiente y especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica continental y marina costera, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expide Resolución 1912 de 15 de septiembre de 2017, en la cual, se establece un listado oficial de especies silvestres amenazadas, crea criterios para categorizar su riesgo, entre otras disposiciones.

Por medio de este listado, se puede destacar que en Colombia hay 1.203 especies amenazadas desde distintas categorías, en las que 173 se encuentran en peligro crítico, 390 en peligro y 640 especies en categoría vulnerable. 407 corresponden a especies de animales y 796 a especies de plantas[6].

Existen más de 70 especies de aves en riesgo; el Cóndor de los Andes es uno de ellos, sin embargo, se estima que en Colombia tan sólo quedan unos 60 aproximadamente, la cacería es una de las principales amenazas. Cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, indican que en 2017 fueron incautados 23.605 animales; una gran cantidad de ellos fueron sacados de su hábitat para luego ser vendidos en el exterior.

Se calcula que en el país hay alrededor de 30.000 especies, de las cuales 7.500 están en alguna categoría de amenaza; un dato que resulta preocupante, pues problemáticas como la deforestación pueden generar que esta cifra vaya en aumento.

La población mundial de peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles del mundo; se redujo un 60% entre 1970 y 2014.[7]

Los bosques de Colombia además de conservar alta biodiversidad, brindan un importante flujo de bienes, servicios y valores culturales para el bienestar de comunidades locales que habitan y dependen de estos ecosistemas, y soportan el desarrollo nacional de múltiples actividades económicas. Asimismo, los bosques del país contribuyen a la seguridad alimentaria de millones de personas, como fuentes importantes de alimentos, energía e ingresos.

[6] Cifras de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – UICN.

[7] Según el informe Planeta Vivo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

De acuerdo con las cifras oficiales de monitoreo de la superficie de bosque y la deforestación generadas por el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (IDEAM, 2020), la superficie de bosque reportada para el territorio continental e Insular del país para el año 2019 es de 59,8 millones de hectáreas, equivalentes al 52,5% del territorio nacional, muy por arriba del promedio mundial, reportado como 31% de la superficie global (FAO, 2020). Estos cerca de 60 millones de hectáreas de bosque natural, ubican a Colombia como el 3er país de Suramérica con mayor área en bosques. Los bosques naturales de Colombia representan el 1,5% de la superficie forestal global, pero son el soporte y condición por la cual el país es catalogado como el segundo con mayor biodiversidad en el mundo.

La Amazonía Colombiana representa la mayor proporción de bosques naturales del país, con 39.6 millones de hectáreas de bosque (66%), los Andes con 11.3 millones de hectáreas de bosque (19%), seguido por las regiones del Pacífico con 5.5 millones de hectáreas de bosque (9%), Orinoquía con 2.121.189 hectáreas de bosque (4%) y Caribe con 1.7 millones hectáreas de bosque (3%) (IDEAM, 2020).

Colombia perdió 2.678.195 hectáreas de bosque en los últimos diecinueve años, es decir en el periodo 2000-2019. Para este periodo las mayores superficies deforestadas se concentraron entre los años 2016 a 2019; siendo el año 2017 el de mayor superficie deforestada con 219.552 hectáreas. Estos resultados permiten identificar una reducción de la deforestación del 19% entre el año 2018 y 2019, mientras que entre el año 2017 y 2018 había sido del 10%, lo cual confirmaba una tendencia de reducción de este flagelo en el país.

A escala regional, la pérdida en la cobertura de bosque natural, en los últimos 19 años, se concentró principalmente en las regiones de la Amazonía (58%), Andes (18%) y Caribe (11%). La región de la Amazonía es la que presenta la mayor deforestación, con la acumulación de 1,64 millones de hectáreas en el período 2000-2019. Cinco departamentos presentaron el 63% de la deforestación nacional acumulada para el período 2000-2019, Caquetá (22%), Meta (16%), Guaviare (11%), Antioquia (8%) y Putumayo (7%). En lo referente al nivel municipal, en los últimos 5 años (2014 -2019), según la información disponible se identificó que en la jurisdicción de 15 municipios se concentró el 57% de la deforestación acumulada nacional. Los municipios de mayor deforestación en Colombia son: San Vicente del Caguán (90.971 ha), Cartagena del Chairá (86.836 ha), San José del Guaviare (60.402 ha), La Macarena (60.319 ha), Puerto Guzmán (30.598 ha) y Calamar (31.267 ha).

Como se refirió anteriormente el CONPES 4021 de 2020, busca que mediante el trabajo conjunto de diferentes ministerios y entidades se implementen estrategias intersectoriales con el fin de controlar la deforestación y gestión de los bosques para impulsar el uso sostenible del capital natural, la economía forestal y el desarrollo comunitario en los núcleos activos de deforestación.

En este sentido, por medio de esta Política Nacional para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques se establecieron cuatro líneas estratégicas las cuales contienen temáticas relacionadas con la educación y gestión del conocimiento, orientados a fortalecer la conciencia y participación ciudadana sobre la importancia de los bosques para el desarrollo regional y nacional.

En primer lugar, se busca consolidar alternativas sostenibles de producción, conservación y recuperación de los bienes y servicios ecosistémicos de los bosques para el desarrollo rural y la estabilización de la frontera agrícola.

Dentro de esta primera estrategia, se tienen tres líneas de acción, enfocadas en 1. Promoción de apuestas productivas con base en el capital natural que impulsen la economía forestal; 2. Fomento a la aplicación de procesos de conservación y manejo sostenible de los bosques y; 3. Desarrollo mecanismos de extensión, asistencia técnica e investigación para el uso sostenible de la biodiversidad.

En segundo lugar, se pretende mejorar la articulación intersectorial y la armonización de los instrumentos de planificación sectorial, territorial y ambiental para el control de la deforestación y la gestión de bosques.

Respecto de este objetivo se tienen cuatro líneas de trabajo, 1. Desarrollo de intervenciones integrales para el ordenamiento territorial y la resolución de conflictos de uso, ocupación y tenencia de la propiedad que permitan la estabilización de los núcleos de alta deforestación, 2. Generación de capacidades técnicas para desarrollar instrumentos de planificación y ordenación sectorial que eviten deforestación; 3. Fortalecimiento de la comunicación, conocimiento y participación ciudadana para la gobernanza del territorio y gestión sostenible de los bosques nacionales y; 4. Planificación y coordinación de la inversión para la gestión de los bosques y evitar la deforestación.

En tercer lugar, se espera fortalecer las capacidades institucionales sobre prevención, investigación y judicialización mejorando el control de las economías ilegales que impliquen la deforestación, las cuales contienen las líneas, 1. Por la cual se articulan los instrumentos de comando y control en los núcleos de alta deforestación y áreas estratégicas de conservación de bosque natural; 2. Fortalecimiento de las capacidades administrativas, técnicas y legales de las autoridades que intervienen en la prevención, investigación, judicialización, investigación y control de delitos ambientales y; 3. Implementación de acciones de control a economías ilegales impulsoras de deforestación.

En cuarto y último lugar, se tiene como fin mejorar la gestión de información sobre el estado y presiones del recurso forestal, para el desarrollo de acciones de administración y gestión sostenible de bosques nacionales, estrategia desarrollada por medio de las líneas 1. Implementación de estrategias para al fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas y financieras para el control de la deforestación y gestión de los bosques y; 2 generación de esquemas de monitoreo y seguimiento a las intervenciones territoriales asociadas al control de la deforestación.[8]

De igual forma, la Constitución Política de Colombia advierte que, el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, por lo que su explotación genera a favor del Estado una contraprestación económica denominada regalía, como compensación por el agotamiento de un bien no renovable.

Así mismo, la Constitución Política, en su artículo 80, establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, en tal sentido deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Expuesto lo anterior, es evidente que el Estado viene generando herramientas para contrarrestar el flagelo del aprovechamiento ilegal de los recursos naturales y el medio ambiente, no obstante, los daños ocasionados en las regiones son demasiado evidentes y dan a conocer el panorama desolador que a su paso deja esta práctica ilegal en las regiones y el país en general.

6. Necesidad e Importancia de la presente reforma al Código Penal en materia de delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales.

Así las cosas, el legislador de 2000, al dictar las normas relativas al Código Penal vigente, consagró en el actual Título XI, las violaciones contra los recursos naturales y el medio ambiente, tipificando las 13 conductas que hoy constituyen delitos, entre los que hay tres con modalidad culposa.[9]

Visto lo anterior, la legislación colombiana ejerce tutela penal sobre el bien jurídico en materia de medio ambiente, la que se ejerce de manera directa y autónoma con los tipos penales arriba señalados, en los que muchos de tienen las características propias del peligro abstracto. Lo anterior en razón a las consideraciones legales constitucionales e internacionales que rigen la materia y que obligan al Estado colombiano a hacerlo.

[8] *CONPES 4021 de 21 de diciembre de 2020 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4021.pdf*
[9] *Son los artículos 331, 332 y 333.*

A pesar de la importancia que representa para el Estado Colombiano el bien jurídico en comento, la realidad, incluso a nivel mundial, es que nos encontramos ante una serie de problemáticas que han incidido en el detrimento significativo del medio ambiente, situación que exige la toma urgente de medidas eficaces y pertinentes que puedan frenar las devastadoras consecuencias derivadas de problemáticas como la contaminación del aire, el incremento de la pérdida de la diversidad biológica, el cambio climático, la degradación de la tierra, el inadecuado uso de las aguas, entre otros escenarios que ha llevado a la «*degradación ambiental*»[10].

Entendiendo el bien jurídico como *"un interés vital para el desarrollo de los individuos de una sociedad determinada que adquiere reconocimiento jurídico"*[11], para el caso particular puede entenderse el bien jurídico protegido – el derecho al medio ambiente y gozar de los recursos naturales – como uno de carácter colectivo, pues no sólo ampara al sujeto en su esfera individual, sino que protege los presupuestos sociales requeridos para el goce y disfrute de ese bien tutelado.

Siguiendo lo anterior, puede afirmarse que en Colombia "de acuerdo con la forma en la que se han redactado los delitos ambientales, se evidencia que el Título XI no sólo se ocupa de los delitos contra el medio ambiente (tal como el artículo 335), sino que integra, igualmente, delitos para la defensa del equilibrio de los recursos naturales (tal como el artículo 329 C.P)".[12]

Lo anterior hace referencia a asegurar que la satisfacción de las necesidades actuales se realice de una manera tal que no comprometa la capacidad y el derecho de las futuras generaciones para satisfacer las propias.

A pesar de la amplia gama de protección jurídica que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, las agresiones al medio ambiente se manifiestan cada vez con mayor fortaleza y su impacto denota la necesidad de implementar los mecanismos necesarios para prevenir y combatir efectivamente los daños ecológicos que resultan de estas graves acciones.

Colombia perdió 2.678.195 hectáreas de bosque en los últimos diecinueve años, es decir en el periodo 2000-2019. Para este periodo las mayores superficies deforestadas se concentraron entre los años 2016 a 2019; siendo el año 2017 el de mayor superficie deforestada con 219.552 hectáreas. Estos resultados permiten identificar una reducción de la deforestación del 19% entre el año 2018 y 2019, mientras que entre el año 2017 y 2018 había sido del 10%, lo cual confirmaba una tendencia de reducción de este flagelo en el país.

No obstante, si la superficie deforestada retorna a valores similares a los del año 2017, antes del año 2025 Colombia habrá perdido más de 8% de su territorio con bosques naturales, es decir; cerca de 20 mil kilómetros cuadrados. A nivel regional, la pérdida en la cobertura de bosque natural, en los últimos 19 años, se concentró principalmente en las regiones de la Amazonía (58%), Andes (18%) y Caribe (11%). La región de la Amazonía presentó la mayor deforestación, con cerca de 1,64 millones de hectáreas en el período 2000-2019. A nivel municipal, en los últimos 5 años (2014 -2019), según la información disponible se identificó que en la jurisdicción de 15 municipios se concentró el 57% de la deforestación acumulada nacional. Los municipios de mayor deforestación en Colombia son: San Vicente del Caguán (90.971 ha), Cartagena del Chairá (86.836 ha), San José del Guaviare (60.402 ha), La Macarena (60.319 ha), Puerto Guzmán (30.598 ha) y Calamar (31.267 ha).

El presente proyecto de ajuste no pretende modificar la concepción teórica que la ley colombiana aplica, con respecto a los daños contra el medio ambiente y los recursos naturales en materia penal. Se trata, fundamentalmente, de afinar los tipos penales a las conductas dañinas que en la actualidad ponen en peligro el bien jurídico protegido y cuyos verbos rectores tal y como se encuentran definidos en la legislación vigente, no describen a cabalidad.

Por lo anterior, se considera importante que se adicionen verbos rectores los cuales se adecuen a la realidad de los comportamientos recurrentes que hoy por hoy están poniendo en grave peligro el medio ambiente en Colombia, en consecuencia, los nuevos verbos pueden introducirse dentro de los tipos penales ya existentes.

En el mismo sentido, y dada la creciente y alarmante degradación del medio ambiente y el mal uso de los recursos naturales por mano humana, resulta importante aumentar las penas y las multas actualmente vigentes, para aquellas de frecuente ocurrencia y mayor impacto en el bien jurídico tutelado, toda vez que, mayores sanciones podrán disminuir la ascendente curva de daños, muchas veces irreparables.

Por las mismas razones, es importante establecer nuevas circunstancias de agravación punitiva, entre ellas; cuando la conducta se cometa en ecosistemas naturales que hagan parte del sistema nacional o regional de áreas protegidas, en reservas forestales de la Ley 2 de 1959, en ecosistemas estratégicos, ecosistemas de páramo que se encuentren dentro de la delimitación establecida o en territorios colectivos de comunidades étnicas, cuando la conducta se cometiere por la acción u omisión de quienes ejercen funciones de control y vigilancia, persona que ejerza

[10] *La degradación ambiental "es la percepción de una situación o estado no satisfactorio con respecto a sus condiciones iniciales, de una parte, o la totalidad del Medio Ambiente". Bayón Martínez, Pablo, El Medio Ambiente, el Desarrollo Sostenible y la Educación, Revista Educación, Editorial Pueblo y Educación, No 105, enero-abril 2002/Segunda Época, Pág. 5.*
[11] *Kierszendaum, M. "El bien jurídico en el derecho penal, algunas nociones básicas desde la óptica de la discusión actual". Lecciones y ensayos. No. 86, 2009, P. 188.*
[12] *Gómez, L. "La criminalización de delitos ambientales en Colombia: una combinación de aspectos clásicos y modernos del derecho penal". En Universitas, ISSN 1794-5216, Nº. 21, 2020, P. 145.*

funciones públicas o por integrantes de grupos delictivos organizados o grupos armados organizados, cuando se promueva, financie, dirija, facilite o suministre medios para la realización de las conductas contenidas en el título que se pretende reformar, entre otras.

Se destaca además la reciente, declaración[13] conjunta realizada por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente y la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quienes enfatizaron en los desafíos relacionados con la pandemia Covid-19 y la crisis medioambiental mundial, en la que indicaron: *"Pedimos a los Estados que refuercen sus leyes, políticas, programas y reglamentos medioambientales. Los Estados tienen la obligación de prevenir nuevos daños y de establecer fuertes marcos institucionales, cumpliendo las obligaciones contenidas en los instrumentos regionales y universales de derechos humanos, en particular, las contenidas en el Protocolo de San Salvador y el Acuerdo de Escazú".*

Considerando lo mencionado, existe la necesidad de incorporar el tráfico de fauna, deforestación, promoción y financiación de la deforestación, tenencia o transporte de mercurio, financiación de invasión de áreas de especial importancia ecológica, apropiación ilegal de baldíos de la nación y financiación de la apropiación ilegal de baldíos de la nación, como nuevos tipos penales, pues su ausencia representa dificultades en la implementación de medidas de control y sanción para evitar mayores deterioros en la situación medioambiental.

7. DERECHO COMPARADO:

Se hace además necesario resaltar la labor que han emprendido diferentes ordenamientos jurídicos para amparar sus recursos naturales y el medio ambiente, ante los diferentes fenómenos criminales que le impactan de forma directa, así como los diversos pronunciamientos que, en la materia, han desarrollado los Tribunales Internacionales de protección de derechos humanos.

Organización de las Naciones Unidas.

Durante el primer decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo (1960-1970), se estableció como premisa *"Al iniciarse el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, comenzamos a comprender las verdaderas finalidades del desarrollo y la índole del proceso de desarrollo. Nos damos cuenta de que el desarrollo no sólo se refiere a las necesidades materiales del hombre sino al mejoramiento de las condiciones sociales de vida y a sus más nobles aspiraciones. El desarrollo no es sólo el crecimiento económico; es el crecimiento sumado a la evolución."*[14]

En ese sentido, en 1972 se adelantó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en la cual se destaca que la protección y el mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, que el crecimiento natural de la población plantea continuamente problemas relativos a la preservación del medio, y se deben adoptar normas y medidas apropiadas, según proceda, para hacer frente a esos problemas y que se había llegado a un momento histórico donde se hacia necesario enfocar los actos con mayor cuidado a las consecuencias que estos podían representar para el medio, ya que por indiferencia e ignorancia se podrían causar daños inmensos e irreparables al medio terráqueo del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar[15]. En ese sentido dicha conferencia desarrolla una serie de principios entre los cuales se destacan:

- El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y fauna silvestres y su hábitat, que se encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de factores adversos.
- Los recursos no renovables de la Tierra deben emplearse de forma que se evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparte los beneficios de tal empleo.
- Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias y a la liberación de calor, en cantidades o concentraciones tales que el medio no pueda neutralizarlas, para que no se causen daños graves o irreparables a los ecosistemas.
- Debe confiarse a las instituciones nacionales competentes la tarea de planificar, administrar o controlar la utilización de los recursos ambientales de los Estados con miras a mejorar la calidad del medio.

En desarrollo de lo anterior, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 42/186 de 11 de diciembre de 1987, relativa a la perspectiva ambiental hasta el año 2000 y más adelante, manifestó el preocupante estado del medio ambiente y la necesidad de abordar y aplicar medidas para evitar la degradación ambiental, la cual pone en peligro el bienestar de los seres humanos y la supervivencia en el planeta.

Es así, como señala la necesidad de ordenar prudentemente los recursos de los que dispone el mundo y las capacidades del medio ambiente y la rehabilitación de los medios que se hayan explotado en forma errónea o se hayan degradado.

Manifestando que el desarrollo es sostenible siempre y cuando atienda las necesidades de la generación presente sin comprometer las futuras, es así como establece seis categorías de problemas sectoriales, la población, la alimentación y agricultura, energía, industrial, salud y asentamientos humanos y las relaciones económicas internacionales.

A su vez, destaca otros problemas ambientales de orden mundial, como lo son los mares y océanos, espacio exterior, diversidad biológica y la seguridad y medio ambiente.

En conclusión, plantea cinco instrumentos por los cuales se pueden adoptar medidas para proteger el medio ambiente, como lo es la evaluación, planificación, la creación de legislación y derecho ambiental, la concientización y capacitación y creación de instituciones.

La Unión Europea.

En ese sentido, la política de la Unión Europea se encamina a la minimización de los riesgos para el clima, la salud humana y la biodiversidad. El «*Pacto Verde Europeo»* aspira a convertir Europa en el primer continente neutro en carbono, en parte desarrollando fuentes de energía más limpias y tecnologías ecológicas. La Unión Europea (UE) posee unos de los estándares medioambientales más elevados del mundo, propende por una política medioambiental que ayude a la economía a ser más respetuosa con el medio ambiente, proteger los recursos naturales y preserva la salud y el bienestar de los ciudadanos[16].
Las políticas medioambientales y la legislación de la UE protegen los hábitats naturales, mantienen la atmósfera y el agua limpias, garantizan la adecuada eliminación de los residuos, mejoran el conocimiento sobre los productos químicos tóxicos y ayudan a las empresas a avanzar hacia una economía sostenible.

Mediante la Directiva 2008/99/CE[17] de 19 de noviembre de 2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección del medio ambiente mediante el derecho penal se definen una serie de delitos graves que son perjudiciales para el medio ambiente y en la que se exige a los países de la UE la introducción de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para este tipo de delitos[18].

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En el marco del sistema regional de protección de derechos fundamentales tutelado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), son dos los escenarios de asuntos que se presentan con incidencias ambientales[19].

El primero corresponde al grupo de casos en los que el medio ambiente se salvaguarda a través de la protección de uno o varios de los derechos fundamentales recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

El segundo escenario aglutina los supuestos en los que se vulnera un derecho fundamental del CEDH por razones ambientales[20]. En cualquier caso, la protección del medio ambiente es siempre indirecta y sólo es tenida en cuenta en la medida que afecte directamente los derechos subjetivos protegidos por el CEDH.
Los últimos avances jurisprudenciales siguen en esta línea, aunque existe una necesidad creciente de darle una mayor cabida al medio ambiente en este sistema regional de salvaguarda de derechos humanos[21].

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

En América, en el marco interamericano de los derechos humanos, no se encuentra de manera explícita la protección al medio ambiente, tampoco en la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH), o en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (en adelante Protocolo de San Salvador).

Sin embargo, esta se deduce del artículo 26 de la CADH, el cual hace referencia a los derechos económicos sociales y culturales, el artículo 10 "Derecho a la Salud" y especialmente el artículo 11 "Derecho a un Medio Ambiente Sano", estos últimos del Protocolo de San Salvador, interpretándose así que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos y que

---

[13] http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/198.asp

[14] Documentación de la ONU: Desarrollo. Visto en: https://research.un.org/es/docs/dev/1960-1970

[15] La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Reunida en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972. Rescatada de: http://undocs.org/es/A/CONF.48/14/Rev.1

[16] Información de la Comisión Europea- EUR-Lex "El acceso al Derecho de la Unión Europea". Consultable en: https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/environment.html?root_default=SUM_1_CODED=20&locale=es.

[17] DO L 328 de 6.12.2008, pp. 28-37

[18] Los comportamientos ilícitos con efectos negativos sobre la salud humana o el medio ambiente que están sujetos a sanciones incluyen el vertido, la emisión o la introducción en el aire, el suelo o el agua de materiales peligrosos, la matanza, la posesión o el tráfico de cantidades apreciables de especies animales y vegetales protegidas, daños a los hábitats protegidos; la producción, el comercio o el uso de sustancias que agotan la capa de ozono (por ejemplo, los productos químicos en los extintores o disolventes de limpieza), entre otros.

[19] La jurisprudencia del TEDH puede consultarse en: http://hudoc.echr.coe.int.

[20] M. Fernández, 2019, Jurisprudencia ambiental internacional, Universidad Autónoma de Madrid, Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. X, Núm. 1. Visto en: C:/Users/PRINCIPAL/Downloads/360004-Text%20de%20l'article-518768-1-10-20190730.pdf

[21] Fernández Egea, R. M. (2016). La protección del medio ambiente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: últimos avances jurisprudenciales. Revista Jurídica Universidad Autónoma De Madrid, (31). Recuperado a partir de https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6467

los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente[22].

Si bien la Convención Americana sobre Derechos Humanos no reconoce de manera explícita el medio ambiente como derecho humano, empero mediante una interpretación integral del artículo 26, se convoca como deber de los Estados Parte de ese tratado, el respetar los derechos económicos, sociales y culturales, lo cual abarca la protección al medio ambiente.
Una revisión amplia de los casos conocidos por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, evidencia como primera conclusión que no se han resuelto casos específicos sobre violaciones al medio ambiente. Sin embargo, existen planteamientos alternativos donde pueden ubicarse situaciones que involucran, aunque sea tangencialmente, violaciones a este derecho.[23]

En la mayoría de los casos el litigio ambiental en el SIDH, se han encontrado estrechamente vinculado los casos en los que se debaten los derechos de los pueblos indígenas, desde su percepción con el territorio, la propiedad colectiva y sus sistemas normativos propios, los cuales que incluyen dimensiones de carácter religioso y cultural en su relacionamiento con la tierra.

De lo anterior se infiere que la protección al medio ambiente y los recursos naturales es dependiente de la afectación a derechos y garantías previstas en *el corpus iuris interamericano*. En este mismo sentido, Oliveira y Moreira afirman que *"la protección del medio ambiente en el sistema interamericano ocurre por una vía refleja, indirecta, ejercida por la estricta observancia de los dispositivos de la Convención Americana. Su tutela surge del ejercicio de "escribir recto en renglones torcidos", es decir, no surge de la preocupación ambiental en sí misma, sino de la necesidad pragmática de proteger las disposiciones de la Convención Americana"*.[24]

De hecho, la gran mayoría de los casos ambientales del sistema interamericano surgen del uso constante de las zonas forestales y de las zonas rurales en la búsqueda de materias primas, alimentos, agua, combustible y el uso de zonas de disposición de basura.

En este contexto, los más vulnerables a la desregulada explotación económica de los recursos naturales han sido los indígenas, los pueblos cimarrones y las comunidades campesinas de las Américas[25].

México.

En contextos más cercanos, en México surge, la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental publicada en 1971, cuya administración estaba a cargo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

El 11 de enero de 1982 se publica la Ley Federal de Protección al Ambiente y cinco años más tarde, el 28 de enero de 1988, se emite a Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, administrada por la ex Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) por conducto del Instituto Nacional de Ecología (INE)[26].

De conformidad con el artículo 188 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, le corresponde a cada estado el establecimiento de las sanciones penales por los delitos causados contra el medio ambiente, en concordancia con los lineamientos de la propia legislación ambiental de cada entidad. No obstante, lo anterior se cuenta con una Procuraduría Federal de Protección al ambiente, la cual posee delegaciones en cada uno de los estados.

En México, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala la protección del bien jurídico "medio ambiente y el derecho de todas las personas a gozar y disfrutar de un medio ambiente sano", en ese sentido, la legislación penal, hace uso de lo que se denomina técnica legislativa, que consiste en la remisión de forma parcial de la tipificación del delito a otras disposiciones jurídicas, figura jurídica denominada ley penal en blanco.

Es así como en materia penal ambiental la tipificación se hace de forma parcial, ya que se remite a otras disposiciones para conocer todos los elementos del tipo, ya sea que se trate de leyes administrativas, reglamentos o Normas Oficiales Mexicanas.

Como puede apreciarse la materia penal ambiental busca el castigo de aquel que incurrió en conducta considerada como delito, imponiendo una pena o medida de seguridad, en este sentido el Código Penal Federal contempla los llamados Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, cuyas sanciones son pena privativa de libertad y multa[27].

Debido a las características de la normatividad penal y ambiental vigente que fundamentan y motivan la competencia y actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ante la comisión de un delito ambiental, se da mayor relevancia a la persecución de un delito ambiental y al correspondiente castigo del probable responsable, que a la restauración o a la compensación del daño ocasionado, haciéndose nugatorio el derecho a un medio ambiente adecuado previsto por nuestra Constitución[28].

Brasil.

De acuerdo con el artículo 225 de la Constitución Federal de Brasil de 1988, todos tienen derecho al medio ambiente ecológicamente equilibrado, la tutela de este bien jurídico se ha dado a partir de la Ley 9.605 de 1998 *"Ley de los Crímenes Ambientales"* de la cual es posible destacar la responsabilidad penal que recae sobre las personas jurídicas.

No obstante, existe una amplia resistencia a la aplicación de este tipo de responsabilidad, pues se considera la imposibilidad del castigo corporal para ese tipo de personas y la consideración del derecho penal como última ratio que no debería tener aplicación en estos casos ante las sanciones administrativas que se contemplan para las conductas que afecten el medio ambiente.
En el artículo 8 de la Ley 9.605 de 1998, están relacionadas las penas restrictivas de derechos: I. prestación de servicios a la comunidad; II. interdicción temporal de derechos; III. suspensión parcial o total de actividades; IV. prestación pecuniaria; V. encierro domiciliario.
Los artículos 9 al 13 definen en qué consiste cada especie de estas penas restrictivas, de forma seguida, el artículo 16 se permite la suspensión condicional de la pena a los condenados hasta tres años de prisión.
Tanto en la prestación de servicios a la comunidad como en las condiciones de la suspensión condicional de la pena, se impone al condenado la reparación del daño causado. Evidentemente, no siempre es posible recuperar el perjuicio causado al medio ambiente.
Por ejemplo, el corte de árboles a las márgenes de un río puede ser reparada, replantándose el mismo tipo de vegetación; la muerte de un ejemplar de la fauna no puede ser recuperada, es así como en los casos en que hay imposibilidad de restaurar el daño ambiental, los jueces han determinado otras obligaciones al condenado[29].
En materia de deforestación este país ha realizado un ejercicio en el que participen de manera activas las autoridades de diferentes niveles, así en Brasil la responsabilidad por los daños ambientales amplía la distribución a nivel político, administrativo y civil de todos los operarios y entidades involucrados en la deforestación de la Amazonía; se amplía la responsabilidad por la deforestación, concretamente en los municipios en donde la deforestación es agresiva, no solamente a la persona responsable de la deforestación, sino también de los prefectos, fiscales, los representantes del pueblo en el municipio y otras entidades públicas[30]

Perú.

En el mismo sentido, diferentes países de Latinoamérica han emprendido la protección de sus recursos naturales, así la Ley Penal de Perú contempla la figura de los delitos ambientales en su Título XIII, cuenta con cuatro capítulos, el segundo capítulo abarca los "delitos contra los recursos naturales".

"Artículo 310°. - Delitos contra los bosques o formaciones boscosas. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años y con prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas el que, sin contar con permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por autoridad competente, destruye, quema, daña o tala, en todo o en parte, bosques u otras formaciones boscosas, sean naturales o plantaciones".

"Artículo 310°-A.- Tráfico ilegal de productos forestales maderables. El que adquiere, acopia, almacena, transforma, transporta, oculta, custodia, comercializa, embarca, desembarca, importa, exporta o reexporta productos o especímenes forestales maderables, cuyo origen ilícito, conoce o puede presumir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de siete años y con cien a seiscientos días-multa".

Respecto a estas dos conductas el artículo 310º-C prevé una amplia lista de agravantes[31].

---

[22] *Cubides Cárdenas, Jaime El control de convencionalidad: fundamentación e implementación desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos / Cubides Cárdenas, Jaime y otros nueve – Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2016. Visto el 3/02/2021 en: https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14400/4/control-de-convencionalidad.pdf*
[23] *Guía De Defensa Ambiental construyendo la estrategia para el litigio de Casos ante el Sistema Interamericano De Derechos Humanos, rescatado de: https://www.corteidh.or.cr/tablas/24756.pdf*
[24] *Oliveira, Valerio de y Moreira, Gustavo, op. cit., pp. 193-226.*
[25] *Oliveira, Valerio de y Moreira, Gustavo, "La protección jurídica del medio ambiente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", Ius Humani. Revista de Derecho, Ecuador, vol. 4 (2014/2015), enero-agosto de 2015, pp. 193-226, p. 221.*
[26] *Rodríguez Tlexochtli, Justicia ambiental penal en México, Universidad de Xapala. Visto en: https://ux.edu.mx/wp-content/uploads/Libro-Justicia-Penal-ambiental-PUBLICAR.pdf*
[27] *Castillo Gloria, Moreno Martha y Salazar María. Responsabilidad por daño ambiental, regulación mexicana. Perfiles de las Ciencias Sociales, Volumen 5, Número 10, enero-junio 2018, 266-298 pp. Rescatado de: http://ri.ujat.mx/bitstream/20.500.12107/2481/1/176-1728-A.pdf*
[28] *Ledesma Arturo. Responsabilidad Penal Ambiental. Visto el 3-02-21 en: http://www.ceja.org.mx/IMG/pdf/Articulo_de_Arturo_Ledesma.pdf*
[29] Passos de Freitas, Vladimir. La responsabilidad ambiental. SEMARNAT, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Visto en: http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/398/passos.html
[30] De los Ríos Isabel. La responsabilidad Penal Ambiental. Rescatado el 4-2-2021 de: http://www.pnuma.org/gobernanza/documentos/VIProgramaRegional/3%20BASES%20DERECHO%20AMB/11%20de%20los%20Rios%20Resp%20penal%20amb.pdf
[31] *"Artículo 310°-C.- Formas agravadas. En los casos previstos en los artículos 310°, 310°-A y 310°-B, la pena privativa de libertad será no menor de ocho años ni mayor de diez años, bajo cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Si se comete el delito al interior de tierras en propiedad o posesión de comunidades nativas, comunidades campesinas, pueblos indígenas, reservas indígenas; o en reservas territoriales o reservas indígenas a favor de pueblos indígenas en contacto inicial o aislamiento voluntario, áreas naturales*

"Artículo 311°. - Utilización indebida de tierras agrícolas. El que, sin la autorización de cambio de uso, utiliza tierras destinadas por autoridad competente al uso agrícola con fines de expansión urbana, de extracción o elaboración de materiales de construcción u otros usos específicos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de cuatro años. La misma pena será para el que vende u ofrece en venta, para fines urbanos u otro cualquiera, tierras zonificadas como uso agrícola".

Como es posible observar, se tiene una especial protección penal a las especies de flora y fauna silvestre o especímenes forestales maderables, bosques u otras formaciones boscosas, sean naturales o plantaciones.

Asimismo, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley No. 29763, considera como una infracción muy grave causar y/o provocar incendios forestales y sanciona este delito con multas de 10 a 5000 unidades impositivas tributarias, en concordancia, el artículo 310 del Código Penal peruano sanciona con pena privativa de libertad no menor de 4 años ni mayor de 6 años.

Ecuador.

En la legislación ecuatoriana se encuentra que la normativa que integra el régimen punitivo previsto en el Código Orgánico Integral Penal, se establece en el Capítulo cuarto "Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama"

"Artículo 246.- Incendios forestales y de vegetación. - La persona que provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos, en bosques nativos o plantados o páramos, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las comunidades o pequeños agricultores dentro de su territorio. Si estas quemas se vuelven incontrolables y causan incendios forestales, la persona será sancionada por delito culposo con pena privativa de libertad de tres a seis meses. Si como consecuencia de este delito se produce la muerte de una o más personas, se sancionará con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años".

"Artículo 252.- Delitos contra suelo. - La persona que, contraviniendo la normativa vigente, en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes".

Otros países.

En Bolivia está estipulado los daños al medio ambiente en la Ley No. 1333 Capítulo V, Art. 103 y siguientes. *"Todo el que realice acciones que lesionen deterioren, degraden, destruyan el medio ambiente o realice actos descritos en el artículo 20º, según la gravedad del hecho comete una contravención o falta, que merecerá la sanción que fija la Ley."*

La ley penal boliviana sanciona con pena de privación de libertad de no menor a un año ni mayor a diez años.

Finalmente, tanto el Código Penal de Guatemala como el de Panamá, contemplan una serie de delitos como la explotación ilegal de los recursos naturales, contra los recursos forestales, contaminación, contaminación industrial y la protección de los bosques y a fauna, dichas conductas típicas, sancionan, entre otras, a las personas que debidamente autorizada para talar árboles exceden la cantidad, la especie o el área concedida y protege las zonas boscosas que sean de importancia social, económica y ambiental, sin que ello implique que los permisos administrativos otorgados para el aprovechamiento forestal, sean contrarios a la interpretación de ésta Ley, sino que quien no cuente con dichos permisos, o incumpla los parámetros establecidos en los mismos, produzca una afectación en contra de las áreas protegidas, las cuencas hidrográficas, lo cual causa un perjuicio a las poblaciones, en cuanto a la provisión de agua potable.

protegidas, zonas vedadas, concesiones forestales o áreas de conservación privadas debidamente reconocidas por la autoridad competente. 2. Si como consecuencia de la conducta prevista en los artículos correspondientes se afecten vertientes que abastecen de agua a centros poblados, sistemas de irrigación o se erosione el suelo haciendo peligrar las actividades económicas del lugar. 3. Si el autor o partícipe es funcionario o servidor público. 4. Si el delito se comete respecto de especímenes que han sido marcados para realizar estudios o han sido reservados como semilleros. 5. Si el delito se comete con el uso de armas, explosivo o similar. 6. Si el delito se comete con el concurso de dos o más personas. 7. Si el delito es cometido por los titulares de concesiones forestales. 8. Si se trata de productos o especímenes forestales maderables protegidos por la legislación nacional. La pena privativa de libertad será no menor de diez años ni mayor de doce años cuando: 1. El agente actúa como integrante de una organización criminal. 2. El autor causa lesiones graves o muerte durante la comisión del hecho delictivo o a consecuencia de dicho acto. 3. Si el hecho delictivo se realiza para cometer delitos tributarios, aduaneros y de lavados de activos. 4. Financie o facilite la comisión de estos delitos".

8. MODIFICACIONES PROPUESTAS:

8.1 Exclusión de beneficios y subrogados penales.

Los bosques juegan un papel fundamental al regular el ciclo del agua, constituir el hábitat de miles de especies de fauna y flora, reducir los efectos del cambio climático, ayudar a evitar derrumbes y deslizamientos, proteger los suelos, y ser territorio de vida para las comunidades que los habitan, por lo que su protección y conservación es indispensable.

Pese a esto, la actividad del hombre ha conllevado un deterioro considerable sobre los mismos, especialmente por la deforestación con ocasión de sus diferentes motores (identificados por el IDEAM en los resultados de monitoreo de la deforestación en 2019 como: praderización, cultivos ilícitos, extracción ilícita de minerales, malas prácticas de ganadería extensiva, infraestructura de transporte no planificada, tala ilegal y ampliación de frontera agrícola en áreas no permitidas).

Así las cosas, la situación actual de la degradación del recurso forestal en Colombia es alarmante, el Ministerio de Ambiente en el "Estado del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables 2017-2018" explica que los cambios en los bosques y los suelos colombianos corresponden a la dinámica socioeconómica de cada región. La susceptibilidad de la degradación de los suelos por salinización alcanza el 46,6% del área continental e insular de Colombia, lo que demanda implementar prácticas de manejo sostenible, el uso de acuerdo con la oferta natural de los suelos, mantener la cobertura vegetal, entre otras. Por su parte la deforestación implicó, de acuerdo con el IDEAM 2019, la pérdida de 158.894 hectáreas, de las cuales 98.256 correspondieron a la Amazonía, 25.213 a la Región Andina, 14.120 al Pacífico, 12.791 al Caribe y 8.513 a la Orinoquía; si a este total de hectáreas deforestadas se suma el total de hectáreas registradas en 2017 (219.973) y 2018 (197.159) se obtiene que durante los últimos tres años se deforestaron 576.026 hectáreas.

Las áreas protegidas se han visto gravemente afectadas por la problemática, registrándose que en 2019 el 7% de la deforestación nacional se presentó en áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, concentrándose la mayor parte en el Parque Natural Nacional Tinigua (6.527 ha) y en el Parque Natural Nacional Sierra de la Macarena (2.173 ha).

Ante esta situación la legislación penal no puede ser ajena, es necesario ajustarla a los mandatos constitucionales y compromisos internacionales en materia de recursos naturales y medio ambiente, lo que requiere una actualización que corresponda a la realidad nacional y al impacto de las conductas en la sociedad, de manera que se debe robustecer la lucha contra la afectación y destrucción de los recursos naturales a través de la exclusión de beneficios y subrogados penales, de las conductas de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, tráfico de fauna, deforestación, promoción y financiación de la deforestación, daños en los recursos naturales y ecocidio, e invasión de áreas de especial importancia ecológica, que impactan negativamente la biodiversidad del país.

Se debe aclarar que con la modificación del artículo 68 A del Código Penal, no se busca congestionar la administración de justicia o que indirectamente se aumente el hacinamiento carcelario en el país, por el contrario, el objetivo de esta modificación es que, el derecho penal cumpla con su función disuasiva frente aquellas personas que están o pueden, cometer comportamientos delictivos contra los recursos naturales y el medio ambiente, es decir, la prevención general negativa.

Sin tener por qué afectar, comprometer o desconocer los presupuestos sustanciales y adjetivos concebidos a favor de todos los imputados, con la exclusión de los beneficios y subrogados penales lo que se busca es evitar que resulte nugatorio, desproporcionado o irrisorio, el reproche social impuesto para los delitos más graves y de mayor impacto social como el terrorismo, el secuestro, la extorsión y sus conexos; que, como se dijo, quebrantan en forma significativa los valores de gran relevancia individual y colectiva, desestabilizando incluso el propio orden institucional (Corte Constitucional, sala plena, C 762 de 2002).

La exclusión propuesta a estos delitos ambientales de mayor ocurrencia y de alto impacto ecológico, se enmarca dentro de las estrategias ambientales que buscan detener lo que se ha denominado como «la hemorragia deforestadora» que ha destruido 200 mil hectáreas anuales de bosques en el país durante los últimos años y ha afectado nuestros recursos naturales y medio ambiente en general.

8.2 Aumento Punitivo.

Mediante sentencia C-365/12 la Corte Constitucional reconoció que:

"*La Corte ha sostenido que el derecho penal se enmarca en el principio de mínima intervención, según el cual, el ejercicio de la facultad sancionatoria criminal debe operar cuando las demás alternativas de control han fallado. Esta preceptiva significa que el Estado no está obligado a sancionar penalmente todas las conductas antisociales, pero tampoco puede tipificar las que no ofrecen un verdadero riesgo para los intereses de la comunidad o de los individuos; como también ha precisado que la decisión de criminalizar un comportamiento humano es la última de las decisiones posibles en el espectro de sanciones que el Estado está en capacidad jurídica de imponer, y entiende que la decisión de sancionar con una pena, que implica en su máxima drasticidad la pérdida de la libertad, es el recurso extremo al que puede acudir al Estado para reprimir un comportamiento que afecta los intereses sociales. En esta medida, la jurisprudencia legitima la*

descripción típica de las conductas sólo cuando se verifica una necesidad real de protección de los intereses de la comunidad. De allí que el derecho penal sea considerado por la jurisprudencia como la última ratio del derecho sancionatorio".

En el mismo sentido la Sala Pena de la Corte Suprema de Justicia en sentencia rad 33254 feb. 2013, señaló que:

"Si bien es verdad que la sociedad en el estado actual de su desarrollo acude a las penas como medio de control social, también lo es que a ella sólo puede acudirse como último recurso, pues el derecho penal en un Estado democrático sólo tiene justificación como la ultima ratio que se ponga en actividad para garantizar la pacífica convivencia de los asociados, previa evaluación de su gravedad, la cual es cambiante conforme a las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales imperantes en la sociedad en un momento determinado".

De manera más reciente, en la sentencia C-233/19 el máximo órgano de la jurisdicción constitucional destacó que:

"En la medida en que los dispositivos penales son altamente invasivos por comprometer directamente la libertad individual, su utilización debe ser excepcional, de modo que, en principio, sólo es constitucionalmente admisible recurrir a esta vía cuando las demás herramientas jurídicas de intervención social han fracasado. Así, la criminalización constituye "la última de las decisiones posibles en el espectro de 28sanciones que el Estado está capacidad jurídica de imponer, y entiende que la decisión de sancionar con una pena, que implica en su máxima drasticidad la pérdida de la libertad, es el recurso extremo al que puede acudir el Estado para reprimir un comportamiento que afecta los intereses sociales" y "sólo debe acudirse al derecho penal, con su efecto limitativo de las libertades individuales, cuando no exista otro medio de protección de los bienes jurídicos que resulte menos invasivo (…) la criminalización de una conducta solo puede operar como ultima ratio".

Ante tal panorama, el presente Proyecto de Ley propone un aumento punitivo de las penas contempladas en el en el título XI "*De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente*", Capítulo único "*Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente*" de la Ley 599 de 2000 "*Código penal*" para aquellas conductas en las se evidencia la necesidad del incremento del componente sancionatorio, como medida de política criminal, dicho planteamiento encuentra sustento precisamente en la realidad expuesta referente a aquellas conductas criminales de mayor impacto frente al bien jurídico protegido, que demuestran la necesidad de modificación más allá de los fundamentos que dieron legitimidad a la creación originaria del tipo penal.

La intensificación de la incidencia negativa en los derechos fundamentales, basa su legitimidad entre otros, bajo la óptica del principio de proporcionalidad, escenario compatible con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que en sentencia C-420 de 2002 advirtió:

[…] las normas penales se caracterizan precisamente porque a un supuesto de hecho adscriben una sanción consistente en una pena o en una medida de seguridad, según el caso. De allí que al introducir una modificación a la pena se esté variando el contenido de la norma penal pues se está alterando la naturaleza o la intensidad de la respuesta que el Estado da al delito con fines de prevención y resocialización. Esa variación en la naturaleza o en la intensidad de la pena plantea la reconsideración de los presupuestos político-criminales valorados por el legislador penal y es jurídicamente relevante en cuanto la pena, al lado del delito, es una institución nuclear del derecho penal que comporta la legítima privación o restricción de derechos a que se somete a quien ha sido encontrado responsable de una conducta punible.

En igual tendencia, se ha establecido que *"tratándose de la modificación de la norma jurídico penal para incrementar los límites de su componente sancionatorio, el aumento de la pena, en sí mismo, representa una medida de política criminal, que además de impactar negativamente el derecho fundamental a la libertad personal, implica una adición a las valoraciones concernientes a la correlación entre la gravedad del delito y de la pena. Ese plus de ninguna manera podría estar cobijado por los fundamentos legitimantes de la creación originaria del tipo penal"* (C-108/2017).

Quiere decir lo anterior, que la agravación de la consecuencia penal establecida en el momento de creación del tipo requiere un análisis de proporcionalidad independiente y regido por parámetros diversos a los aplicados en el momento de su creación.

En ese sentido, cabe destacar los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional en materia de medio ambiente, toda vez que la política gubernamental se ha centrado en el fortalecimiento de la lucha contra la deforestación, la implementación de la política nacional de Economía Circular, la reducción de las emisiones de Gases Efecto Invernadero en un 51 % en el período 2021-2030, la masificación de programas de transporte limpio y energías renovables sostenibles y la firma de importantes y coyunturales acuerdos como el Pacto de Leticia y la radicación en el Congreso de la República del Acuerdo de Escazú.

El Pacto de Leticia por la Amazonía fue firmado por los Jefes de Estado de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam, mediante el cual se reconoce la importancia de la Amazonia como ecosistema estratégico y fuente del 20 por ciento del agua dulce del planeta, en el cual viven más de 34 millones de personas. El acuerdo contempla 52 acciones claves para su cumplimiento.

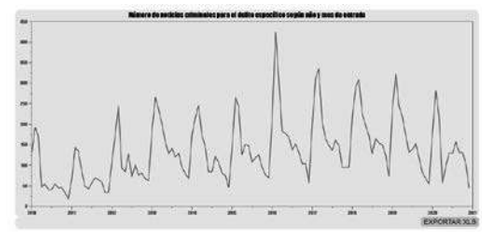
Este panorama, abonado a las estadísticas de deforestación y los visibles impactos ambientales que sufre la biodiversidad colombiana, representa un contexto ostensiblemente diferente al plasmado inicialmente en la Ley 599 de 2000 y la reforma correspondiente a la Ley 1453 de 2011, situación que soporta un aumento punitivo propuesto, fundamentado en los criterios objetivos y plausibles que conservan la proporción entre el bien jurídico protegido del medio ambiente y los recursos naturales y las sanciones a aplicar a los mismos.

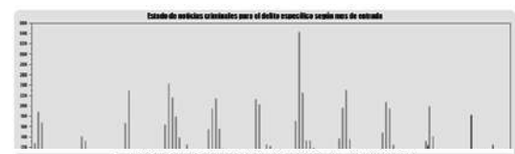
Para sustentar los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad articulados en los artículos 3 y 4 del Código Penal, se precisa un estudio del fenómeno criminológico contra el bien jurídico de los recursos naturales y el medio ambiente, por tal razón, se presentará el comportamiento y la evolución de las entradas de noticias criminales para los delitos específicos que se buscan reformar y las actuaciones procesales relevantes para casa uno, a partir de tres indicadores específicos [32]:

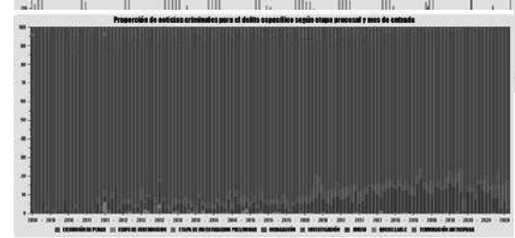
1. Número de noticias criminales para el delito específico según año y mes de entrada.
2. Estado de noticias criminales para el delito específico según mes de entrada.
3. Proporción de noticias criminales para el delito específico según etapa procesal y mes de entrada.

[32] Esta información, es obtenida de los datos abiertos de la Fiscalía General de la Nación. Se debe tener en cuenta que las estadísticas aquí presentadas se derivan de los registros del SPOA en los periodos temporales 2010-2020 y no necesariamente reflejan la realidad criminal del país y de sus diferentes zonas.

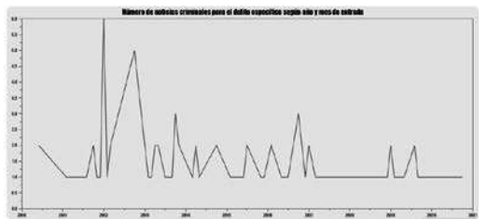
- **Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables (Art 328 C.P)**

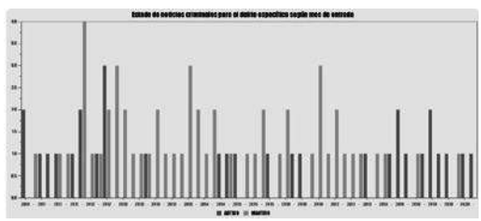


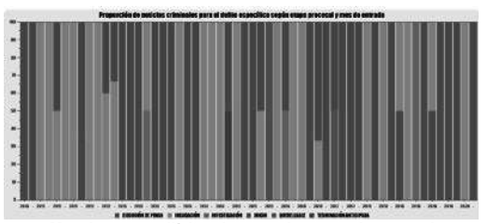




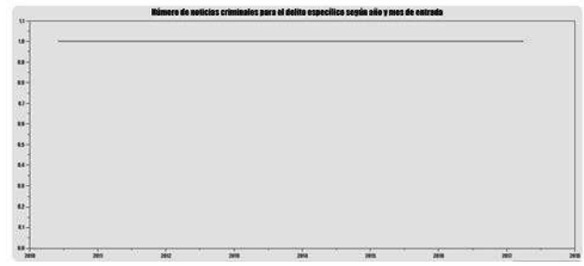
- **Violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de los recursos naturales (Art 329 C.P)**

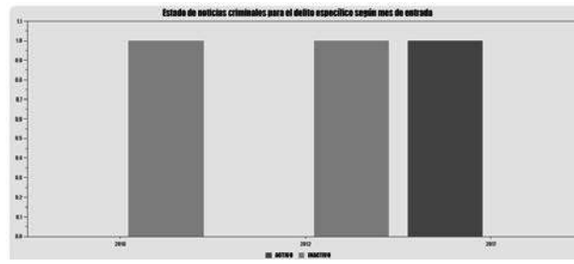


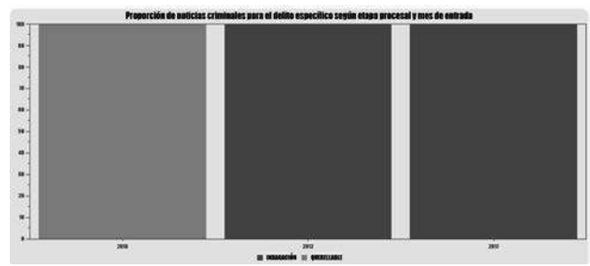




- **Manejo y uso ilícito de organismos, microorganismos y elementos genéticamente modificados (Art 330)**

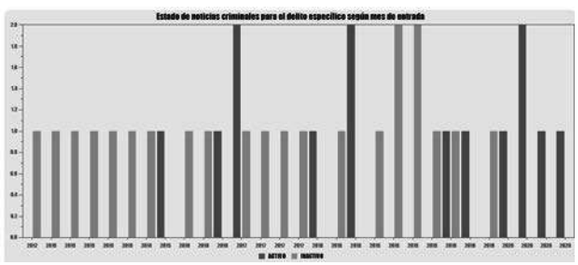


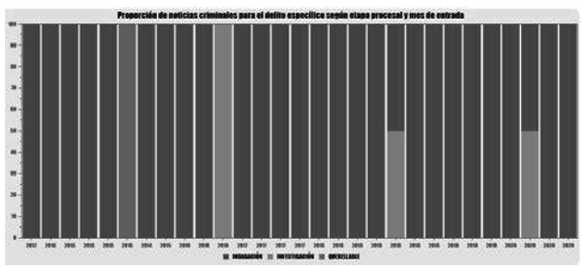




- **Manejo ilícito de especies exóticas (Art 330A)**



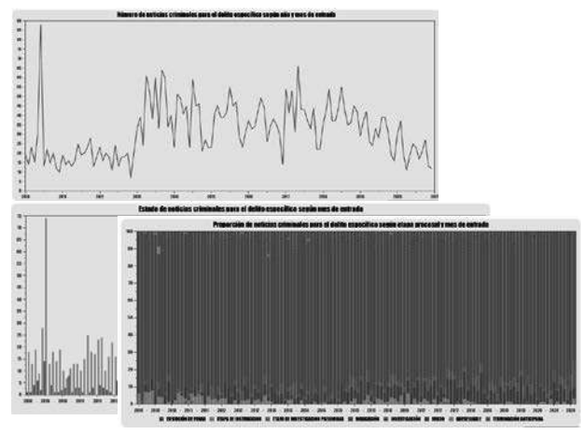


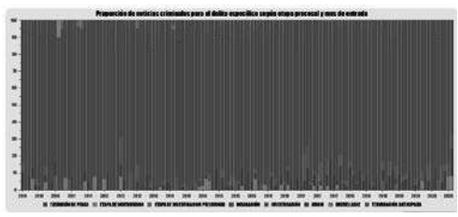


- **Daños en los recursos naturales (Art 331 C.P)**

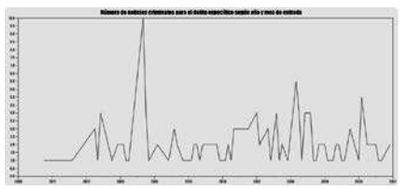


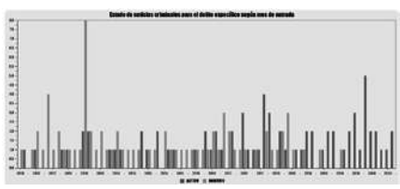
- **Contaminación ambiental (Art 332 C.P)**

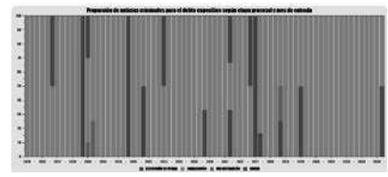




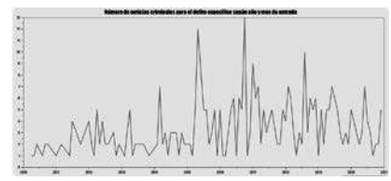
- **Contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos (Art. 332A C.P)**

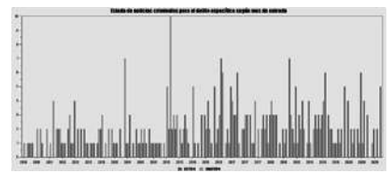


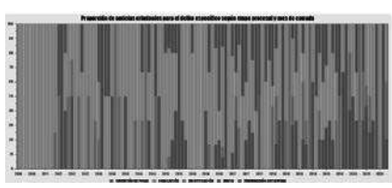




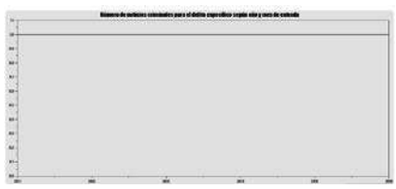
- **Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo (Art. 333 C.P)**

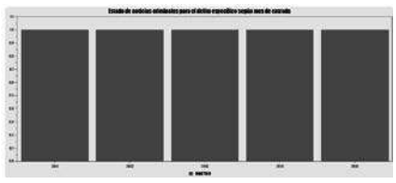


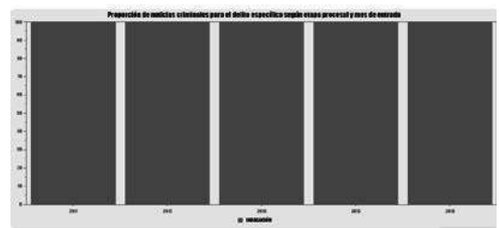




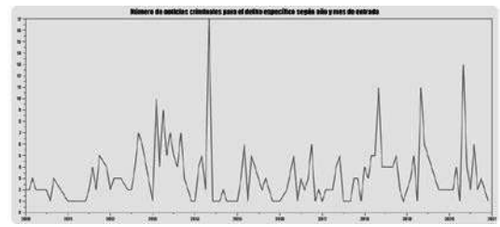
- **Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos (Art 334 C.P)**

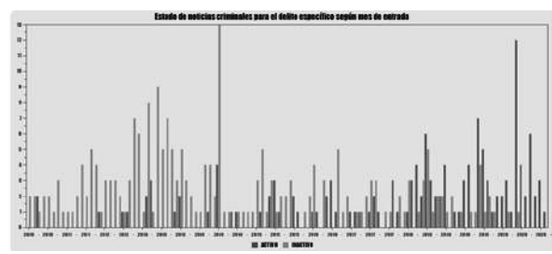


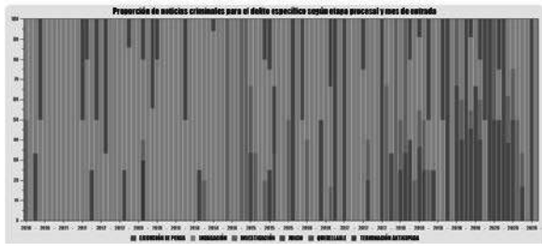




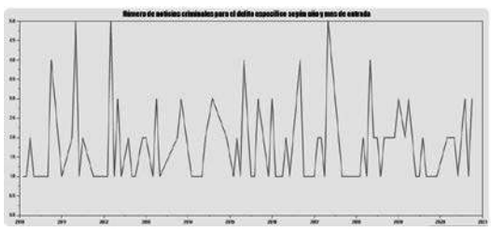
- **Ilícita actividad de pesca (Art. 335 C.P)**

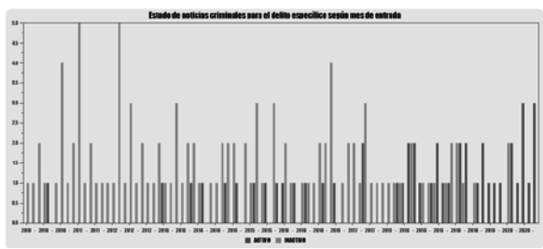


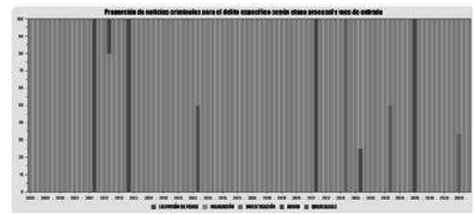




- **Caza ilegal (Art. 336 C.P)**

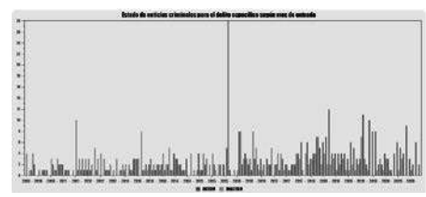


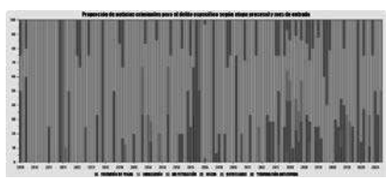




- **Invasión de áreas de especial importancia ecológica (Art. 337 C.P)**







De las estadísticas expuestas, se advierte que bien sea por actos urgentes, asistencia judicial, compulsa de copias, de oficio (informes), denuncias o peticiones especiales; los delitos con mayores noticias criminales corresponden al Art 328 C.P. Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, el Art 331 C.P. Daños en los recursos naturales y el Art 332 C.P. Contaminación ambiental. Tal escenario justifica la necesidad del incremento punitivo para estas conductas, a fin de incidir en la prevención del delito,

Por tal motivo, el presente proyecto de ley propone un incremento punitivo, del 25% para esto delitos, en atención su mayor ocurrencia e impacto social y ambiental.

No obstante lo anterior, se propone un aumento general de la multa en la misma proporción, para aquellos delitos que en la actualidad no contemplan la multa máxima permitida de 50.000 smlmv. en atención a los altos costos que devienen del impacto ecológico causado con estos delitos.

Por lo anterior el aumento punitivo propuesto para la pena privativa de libertad se establecería de la siguiente manera:

DELITO	PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD ACTUAL	PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD AUMENTADA 25%
Artículo 328. Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables	48 - 108 Meses	60-135 Meses
Artículo 328 A. Tráfico de Fauna.		60-135 Meses
Artículo 330. Deforestación.		60- 144 Meses
Artículo 330 A. Promoción y financiación de la Deforestación.		96-180 Meses
Artículo 332 C. Tenencia o transporte de mercurio.		48 – 72 Meses
Artículo 333. Daño en los recursos naturales y ecocidio.	48-108 Meses	60 – 135 Meses
Artículo 334. Contaminación ambiental.	55-112 Meses.	69-140 Meses
Artículo 336 A. Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica.		96 – 180 Meses
Artículo 337. Apropiación ilegal de baldíos de la nación.		60 – 144 Meses
Artículo 337 A. Financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación.		96 – 180 Meses

En cuanto al aumento de las multas:

DELITO	MULTA ACTUAL	MULTA AUMENTADA 25%
ARTICULO 328. APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES.	Hasta 35.000 smlmv	De 134 a 43.750 smlmv
ARTÍCULO 328 A. TRÁFICO DE FAUNA.		300 a 40.000 smlmv
ARTICULO 336. CAZA ILEGAL.	26.6 a 750 smlmv	33-937 smlmv
ARTÍCULO 328 C. PESCA ILEGAL.	Hasta 50.000 smlmv	134 – 50.000 smlmv

ARTÍCULO 329. MANEJO ILÍCITO DE ESPECIES EXÓTICAS.	133.33 – 15.000 smlmv	167 – 18.750 smlmv
ARTÍCULO 330. DEFORESTACIÓN.		134 – 50.000 smlmv
ARTÍCULO 330 A. PROMOCIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA DEFORESTACIÓN.		300 – 50.000 smlmv
ARTÍCULO 331. MANEJO Y USO ILÍCITO DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS, MICROORGANISMOS Y SUSTANCIAS O ELEMENTOS PELIGROSOS.	133.33 -15.000 smlmv	167-18.750 smlmv
ARTÍCULO 322 C. TENENCIA O TRANSPORTE DE MERCURIO.		134 – 50.000 smlmv
ARTÍCULO 333. DAÑOS EN LOS RECURSOS NATURALES Y ECOCIDIO.	133.33 – 15.000 smlmv	167 – 18.750 smlmv
ARTÍCULO 334. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.	140 – 50.000 smlmv	Sin aumento
ARTÍCULO 335. EXPERIMENTACIÓN ILEGAL CON ESPECIES, AGENTES BIOLÓGICOS O BIOQUÍMICOS.	133.33 – 50.000 smlmv	134 – 50.000
ARTICULO 336. INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA	133.3 - 50.000 smlmv	134 – 50.000 smlmv
ARTÍCULO 336 A. FINANCIACIÓN DE INVASIÓN A ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA.		300 – 50.000 smlmv
ARTÍCULO 337. APROPIACIÓN ILEGAL DE BALDÍOS DE LA NACIÓN.		140 – 50.000 smlmv
ARTÍCULO 337 A. FINANCIACIÓN DE LA APROPIACIÓN ILEGAL DE LOS BALDÍOS DE LA NACIÓN.		300 – 50.000 smlmv

El aumento punitivo corresponde, además, a contribuir con los elementos que permita a la Fiscalía General de la Nación como titular de la acción de la acción penal, sustentar y demostrar la urgencia de la imposición de medidas de aseguramiento en los términos previstos en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, ante la especial gravedad y relevancia de la que se revisten estas conductas, ante el aumento punitivo se propone.

Se debe tener en cuenta, que la reforma propuesta conserva la simetría ya establecida entre las conductas contempladas en la parte especial del Código Penal y las penas establecidas aumentándolas conforme al daño social causado.

El incremento punitivo está atado a la política criminal del Estado, y con ello no se vulnera el principio de proporcionalidad, pues además se debe tener en cuenta la oportunidad que pretende establecerse por medio de la rebaja de pena contemplada para la reparación ecológica del daño como pilar fundamental de la iniciativa, que busca superar la eficacia simbólica y transformarse realmente en una herramienta capaz y real de prevenir los crímenes y enfrentar los problemas sociales complejos relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales.

Así las cosas, la reforma propuesta no desconoce la naturaleza del derecho penal como *última ratio*, ni resulta desproporcionado pues constituye un ejercicio constitucionalmente admisible de la libertad de configuración del legislador, quien, al realizar una nueva graduación de las consecuencias punitivas, busca afrontar un fenómeno criminológico de devastadoras consecuencias.

Razón por la cual decide aumentar los límites punitivos de estos delitos para alcanzar la prevención general de una conducta especialmente reprobable, por la incidencia que tiene en los presupuestos básicos a través de los cuales se reconcilian las relaciones del hombre y de la sociedad con la naturaleza, a partir del mandato específico que apela por su conservación y protección.

Por tanto, se propone un aumento de penas mínimas y máximas para las conductas señaladas, con el objetivo de mantener una proporcionalidad razonable entre la sanción correspondiente a estos delitos y la del resto de conductas contempladas en el Código Penal.

8.3 EL DELITO DE TRÁFICO DE FAUNA

El tráfico animal es uno de los negocios ilícitos más dañinos y rentables del mundo. Este delito contra la naturaleza mueve entre 10.000 y 20.000 millones de euros cada año, una cifra equiparable a la que mueve el tráfico de armas y de drogas. El tráfico de especies es un crimen de dimensiones internacionales, con una demanda creciente y cuyas sanciones siguen siendo poco rigurosas a pesar de que pone en grave riesgo la supervivencia de animales en peligro de extinción y está aniquilando la vida salvaje de muchos países.

En Colombia, la situación es realmente preocupante. Además, hay que tener en cuenta que el país tiene 54.871 especies registradas de animales, plantas, hongos y microorganismos, convirtiéndose en el segundo más biodiverso del mundo.

La riqueza de la vida silvestre de Colombia ha hecho irresistible esta actividad para los traficantes ilegales de animales. El comercio de animales protegidos es la tercera industria ilegal más grande de Colombia después del narcotráfico y la trata de personas (y ocupa el cuarto lugar mundial, tras el tráfico de drogas, armas y personas). Aves exóticas, monos, ranas, tortugas, pitones: animales que son buscados ya sea como mascotas, por su carne, presuntos atributos afrodisiacos o por su piel son cazados ilegalmente. Según las cifras más recientes, tan solo en 2017 los funcionarios colombianos y grupos de rescate de la vida salvaje recuperaron a más de 23.000 animales de los traficantes.

En Colombia existen diferentes modalidades para la comisión de dicha conducta, e inclusive apoyados en las nuevas tecnologías se ha identificado por parte de la Fiscalía General de la Nación grupos en redes sociales destinados al tráfico de fauna silvestre. A través de diferentes actos de investigación la Fiscalía General de la Nación ha recopilado información detallada que permitió conocer con exactitud cómo están estructuradas las redes delincuenciales, zonas de injerencia, modus operandi, fuentes de financiamiento y hechos delictivos puntuales que comprometen a integrantes de esta red delincuencial.

Estas redes delincuenciales tienen como actividades ilícitas el tráfico de animales de la biodiversidad Colombiana como lo son guacamayas, loros, micos, flamencos, toches, mirlas, canarios, tortugas, chigüiros, ardillas, entre otros; teniendo su principal injerencia delictiva en la ciudad de Bogotá D.C., lugar desde donde realizan las coordinaciones necesarias para la distribución y comercialización de especímenes de fauna silvestre, especímenes que luego son enviados desde diferentes ciudades y municipios del país, entre los que se destacan Córdoba, Cesar, Amazonas, Putumayo, Vaupés, Guaviare, Meta, Valle del Cauca, Nariño y Chocó. Estas redes delincuenciales controlan todos los aspectos relacionados con los especímenes de fauna silvestre, desde su aprensión, transporte, distribución y comercialización, para lo cual han desarrollado estrategias para el ocultamiento de los especímenes de fauna silvestre.

Aunado a lo anterior, se ha identificado que las principales rutas de comercialización a nivel internacional corresponden a destinos como México, los Estados Unidos (en especial los Estados de Florida, Nueva York, Texas y California), la República Dominicana y Ecuador, otra ruta a Europa (Reino Unido, Italia, Alemania, Bélgica, República Checa, Suecia, Croacia y Turquía).

La problemática estudiada va en aumento, por ende, es necesario frenar el daño que se le hace a los ecosistemas apoyando el tráfico y comercialización ilegal de especies, con este comportamiento no solo se está agotando uno de los patrimonios globales de la humanidad, sino el más importante activo que tiene el país. Se debe empezar a reflexionar y entender que los animales silvestres no pueden vivir en cautiverio, no están condicionados para hacerlo, ellos necesitan su espacio, su alimento e interactuar con individuos de su misma especie. Por las razones expuestas resulta proporcional y razonable, crear este tipo penal, entendiendo la realidad del país y la necesidad de mitigar los efectos que produce el tráfico de fauna silvestre.

8.4 EL DELITO DE DEFORESTACIÓN

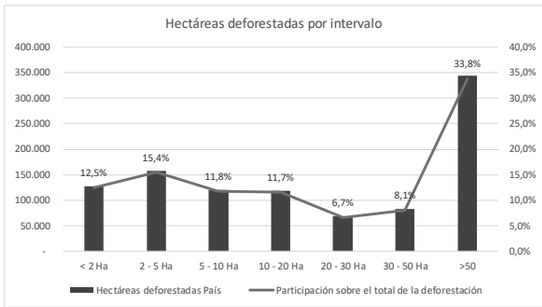
Colombia ha establecido formalmente una definición oficial de bosque natural y de deforestación. El uso formal de estas dos definiciones permite generar la información oficial de monitoreo de la superficie de bosque natural y la deforestación en Colombia, asegurando la estandarización y comprensión adecuada del fenómeno de la deforestación.

Asimismo, Colombia ha sometido formalmente las definiciones oficiales de bosque natural y deforestación a organismos internacionales como la CMNUCC, FAO y el Foro Internacional de Bosques.

- Definición de bosque: Tierra ocupada principalmente por árboles que puede contener arbustos, palmas, guaduas, hierbas y lianas, en la que predomina la cobertura arbórea con una densidad mínima de dosel de 30 %, una altura mínima del dosel (in situ) de 5 metros al momento de su edificación, y un área mínima de 1.0 hectáreas. Se excluyen las coberturas arbóreas de plantaciones forestales comerciales, cultivos de palma, y árboles sembrados para la producción agropecuaria.
- Asimismo, la deforestación está definida como: la conversión directa y/o inducida de la cobertura de bosque a otro tipo de cobertura de la Tierra en un periodo de tiempo determinado (DeFries et al., 2006; GOFC-GOLD, 2009).

La anterior definición, es consecuente con los criterios definidos por la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático (CMNUCC) en su decisión 11/CP.7, con la definición adoptada por Colombia ente el Protocolo de Kioto (MAVDT, 2002), así como la definición de la cobertura de bosque natural utilizada para la estimación y reporte del inventario nacional de gases de efecto invernadero.

Es importante mencionar la deforestación que se presenta en las Zonas de Reserva Forestal declaradas por la Ley 2 de 1959, estas zonas fueron establecidas para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre y aunque no son áreas protegidas, concentran el 67% de los bosques del país.



(…) Cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, indican que en 2017 fueron incautados 23.605 animales; una gran cantidad de ellos fueron sacados de su hábitat para luego ser vendidos en el exterior. Existen más de 70 especies de aves en riesgo; el Cóndor de los Andes es uno de ellos, sin embargo, se estima que en Colombia tan sólo quedan unos 60 aproximadamente, la cacería es una de las principales amenazas.

Se calcula que en el país hay alrededor de 30.000 especies, de las cuales 7.500 están en alguna categoría de amenaza; un dato que resulta preocupante, pues problemáticas como la deforestación pueden generar que esta cifra vaya en aumento.

La población mundial de peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles del mundo; se redujo un 60% entre 1970 y 2014.[33]

Los bosques de Colombia además de conservar alta biodiversidad, brindan un importante flujo de bienes, servicios y valores culturales para el bienestar de comunidades locales que habitan y dependen de estos ecosistemas, y soportan el desarrollo nacional de múltiples actividades económicas. Asimismo, los bosques del país contribuyen a la seguridad alimentaria de millones de personas, como fuentes importantes de alimentos, energía e ingresos, identificándose un gran potencial económico de los bosques en el país, actualmente se aprovechan cerca de 500 especies forestales, para un consumo aparente cercano a los 3,5 millones de metros cúbicos de madera por año y un subregistro del 40 % (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020). En contraste, en 2017, la oferta de productos del bosque y sus derivados fue de 4.844 miles de millones de pesos, lo que representó alrededor del 0,52 % del PIB del país (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2019), estas cifras evidencian la necesidad de incrementar el uso sostenible de los bosques y la participación del sector forestal y del aprovechamiento de los productos no maderables del bosque como el látex, caucho natural, fibras, entre otros, para potenciar este sector económico del país. Si la deforestación continúa aumentando, a 2030 Colombia podría perder alrededor de 1,5 billones de pesos del Producto Interno Bruto (PIB) y entre 1.034 y 1.670 millones de pesos en ahorros genuinos, considerando que según estimaciones del BID en 2014 se contaba con 58,8 millones de hectáreas de bosque, mientras que en 2030 se puede llegar a tener solo 48,8 millones de hectáreas de bosque(Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2017), esta situación evidencia la necesidad de tomar medidas urgentes para atender la deforestación en el país, y también identificar e impulsar medidas que permitan desarrollar la economía forestal como se mencionó anteriormente.

De acuerdo con las cifras oficiales de monitoreo de la superficie de bosque y la deforestación generadas por el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (IDEAM, 2020), la superficie de bosque reportada para el territorio continental e Insular del país para el año 2019 es de 59,8 millones de hectáreas, equivalentes al 52,5% del territorio nacional, muy por arriba del promedio mundial, reportado como 31% de la superficie global (FAO, 2020). Estos cerca de 60 millones de hectáreas de bosque natural, ubican a Colombia como el 3er país de Suramérica con mayor área en bosques. Los bosques naturales de Colombia representan el 1,5% de la superficie forestal global, pero son el soporte y condición por la cual el país es catalogado como el segundo con mayor biodiversidad en el planeta.

La Amazonía Colombiana representa la mayor proporción de bosques naturales del país, con 39.6 millones de hectáreas de bosque (66%), los Andes con 11.3 millones de hectáreas de bosque (19%), seguido por las regiones del Pacífico con 5.5

[33] *Según el informe Planeta Vivo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).*

millones de hectáreas de bosque (9%), Orinoquía con 2.121.189 hectáreas de bosque (4%) y Caribe con 1.7 millones hectáreas de bosque (3%) (IDEAM, 2020).

Colombia perdió 2.678.195 hectáreas de bosque en los últimos diecinueve años, es decir en el periodo 2000-2019. Para este periodo las mayores superficies deforestadas se concentraron entre los años 2016 a 2019; siendo el año 2017 el de mayor superficie deforestada con 219.552 hectáreas. Estos resultados permiten identificar una reducción de la deforestación del 19% entre el año 2018 y 2019, mientras que entre el año 2017 y 2018 había sido del 10%, lo cual confirmaba una tendencia de reducción de este flagelo en el país.

A escala regional, la pérdida en la cobertura de bosque natural, en los últimos 19 años, se concentró principalmente en las regiones de la Amazonía (58%), Andes (18%) y Caribe (11%). La región de la Amazonía es la que presenta la mayor deforestación, con la acumulación de 1,64 millones de hectáreas en el período 2000-2019. Cinco departamentos presentaron el 63% de la deforestación nacional acumulada para el período 2000-2019, Caquetá (22%), Meta (16%), Guaviare (11%), Antioquia (8%) y Putumayo (7%). En lo referente al nivel municipal, en los últimos 5 años (2014 -2019), según la información disponible se identificó que en la jurisdicción de 15 municipios se concentró el 57% de la deforestación acumulada nacional. Los municipios de mayor deforestación en Colombia son: San Vicente del Caguán (90.971 ha), Cartagena del Chairá (86.836 ha), San José del Guaviare (60.402 ha), La Macarena (60.319 ha), Puerto Guzmán (30.598 ha) y Calamar (31.267 ha).

Las principales causas de la deforestación en Colombia se pueden agrupar en directas y subyacentes; las causas directas se relacionan con actividades humanas que afectan directamente la superficie de bosque natural a través del aprovechamiento no sostenible, o su eliminación directa para dar paso a otros usos del suelo, por ejemplo, la ganadería extensiva, la construcción de proyectos de infraestructura vial, la ampliación de la frontera agrícola, entre otros. Por su parte, las causas subyacentes son factores que refuerzan las causas directas, y se refieren a las variables sociales, políticas, económicas, tecnológicas y culturales, que condicionan las relaciones existentes entre sistemas humanos y naturales.

Las personas, grupos sociales o instituciones (públicas o privadas) que, influenciadas o motivadas por una serie de causas subyacentes, toman la decisión de convertir los bosques naturales hacia otras coberturas y usos, son consideradas como agentes de deforestación. De acuerdo con la caracterización de este fenómeno realizada por el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) del IDEAM, se han identificado varios agentes, los cuales están relacionados con las causas directas de la deforestación, estos son: productor agropecuario con cultivos tradicionales, productor pecuario de gran escala, praderizador, productor agrícola de coca, productor agrícola con cultivos industriales, extractor informal o formal de minerales e hidrocarburos, constructor informal o formal de infraestructura vial, extractor informal de madera para la venta y extractor informal de madera para autoconsumo.

Esta problemática se hace más relevante si se tiene en cuenta que la deforestación en Colombia constituye una fuente importante de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), al considerar que en promedio los bosques naturales del país almacenan 124 toneladas de carbono por hectárea, contribuyendo al cambio climático. Asimismo, la deforestación trae como consecuencias la transformación y fragmentación de ecosistemas, aumenta el número de especies en condición de amenaza, altera el recurso hídrico y con ello, el abastecimiento de agua de los centros poblados, y degrada el suelo.

Resulta relevante mencionar, que de acuerdo con datos del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, se identifica indican que los núcleos activos de deforestación son áreas de distribución de 2.697 especies (569 animales y 2.128 plantas), demostrando así la alta diversidad de especies que se concentra en estas regiones del país. Por lo anterior, preocupa que la deforestación esté aumentando la presión sobre especies amenazadas y endémicas que se encuentran en estas zonas. En estos núcleos hay en total cinco especies críticamente amenazadas (CR), seis especies en peligro (EN), y 20 especies vulnerables (VU) según la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Estas cifras incluyen especies emblemáticas como el Pato morado (Netta erythrophthalma) y el Cedro (Cedrela odorata), que se encuentran críticamente amenazadas a nivel global. Adicionalmente, los núcleos activos de deforestación, coinciden con la distribución de nueve especies de animales y 106 especies endémicas de flora, es decir, con distribución limitada a nivel mundial. Esta situación es altamente crítica en los núcleos del Meta y del Chocó, que concentran un mayor número de especies endémicas (16 y 81 especies respectivamente). Es decir, la deforestación en estos dos núcleos puede estar afectando en gran medida la supervivencia de un mayor número de especies con rango de distribución limitado, así como los servicios ecosistémicos asociados. Entre las especies de plantas preocupan las de baja densidad poblacional y que son árboles maderables como el abarco (Cariniana pyriformis), el Almendro (Dipteryx oleífera), los Laureles almanegra (Magnolia spp.), el Comino (Aniba perutilis) y los Cedros (Cedrela spp.).
El delito de deforestación propuesto por esta reforma, cumple con los elementos del tipo penal a la luz de las reglas jurisprudenciales sentadas por la Corte Constitucional en sentencia C-297/16, en la que se indica que:

"La norma penal está constituida por dos elementos: (i) el precepto (praeceptum legis) y (ii) la sanción (sanctio legis). El primero de ellos, es entendido como "la orden de observar un determinado comportamiento, es decir de no realizar algo o de cumplir determinada acción". El segundo, se refiere a "la consecuencia jurídica que debe seguir a la infracción del precepto". El precepto desarrolla la tipicidad de hecho punible, pues este elemento es el que contiene la descripción de lo que se

debe hacer o no hacer, y, por lo tanto, del hecho constitutivo de la conducta reprochable. Ahora bien, el precepto se integra por varios elementos del tipo que conforman su estructura y que pueden ser sintetizados así: "(i) un sujeto activo, que es quien ejecuta la conducta reprochable y punible; (ii) un sujeto pasivo, que es el titular del bien jurídico que el legislador busca proteger y que resulta afectado con la conducta del sujeto activo; (iii) una conducta, que corresponde al comportamiento de acción o de omisión cuya realización se acomoda a la descripción del tipo y que generalmente se identifica con un verbo rector; y (iii) el objeto de doble entidad; jurídica, en cuanto se refiere al interés que el Estado pretende proteger y que resulta vulnerado con la acción u omisión del sujeto activo, y material, que hace relación a aquello (persona o cosa) sobre lo cual se concreta la vulneración del interés jurídico tutelado y hacia el cual se orienta la conducta del agente".

La importancia y lesividad al bien jurídico del medio ambiente y los recursos naturales deviene de tal magnitud que se exige la imposición de una pena que junto a las conductas expuestas para el aumento punitivo comportan los mayores fenómenos criminológicos que deben ser atacados y sancionados penalmente por el Estado, pues sus consecuencias resultan ampliamente evidenciables, tal y como se expuso en el capítulo de justificación de este Proyecto de Ley.

La propuesta normativa, contempla una serie de agravantes propios para este nuevo tipo penal, entre los que se tipifica un aumento de una tercera parte a la mitad cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión y de igual forma, cuando fragmente ecológicamente un área de bosque natural en un lapso de tiempo de hasta seis meses en extensiones de hasta 30 hectáreas.

Dichas situaciones de agravación punitiva encuentran sustento en las dinámicas de deforestación, pues en las Zonas de Reserva Forestal de Ley 2 de 1959, para los últimos 19 años concentraron el 27% de la deforestación del país, con un acumulado de 763.155 hectáreas en pérdida de bosque. Para este tipo de áreas el pico de deforestación se presentó en los años 2017 y 2018, cuando la deforestación representó el 37% y el 34% de la pérdida de bosque en el país, respectivamente. La dinámica de pérdida de bosque a nivel nacional, pero con especial énfasis en las Zonas de Reserva Forestal Ley 2/1959, se identifica que el 42% de la deforestación nacional se presenta en parches de deforestación mayores a 30 hectáreas, no asociados a pequeña economía campesina sino a grandes intervenciones asociados a la praderización y/o acaparamiento de tierras.

De igual forma, las áreas de bosque natural que son deforestadas y convertidas en nuevas praderas introducidas, pero que posteriormente son abandonadas, son colonizadas rápidamente por otras plantas que aprovechan las nuevas condiciones de luz se convierten en áreas de regeneración natural (rastrojos bajos a altos) hasta bosques secundarios. De acuerdo con WRI este tipo de ecosistemas ocupan más de la mitad de los bosques tropicales del planeta. Recientes estudios de ecología forestal indican que pasados 20 años las áreas de bosque tropical afectadas por deforestación solo pueden recuperar hasta una tercera parte de su biodiversidad original. En términos generales se puede indicar que una vez ocurre la deforestación y se abandonan los terrenos, aunque hay una rápida recuperación en cuanto a la composición de esas especies, siendo más acelerada en los bosques húmedos tropicales que en los bosques secos, esta situación es más evidente conforme aumenta el área afectada. *(…)"*

Es además de destacar, las diferencias entre el Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables artículo 328 C.P y el nuevo tipo penal de Deforestación que se pretende implementar, en efecto, en rasgos generales referente a la Deforestación difiere del delito contenido en el artículo 328 del Código penal, por cuanto i) presenta un verbo rector diferente y ii) contempla modalidades específicas de agravación. Adicionalmente, la conducta descrita en el artículo 328 C.P se enfoca en la protección de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, hídricos, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana, mientras que la deforestación se enfoca en los individuos forestales que se encuentran en áreas de reserva forestal, parque regional, parque nacional natural, área o ecosistema de interés estratégico, área protegida, bosques naturales, manglares o baldíos de la nación.

De igual forma, es menester resaltar que, en el caso del concurso aparente de tipos penales, se han establecido una serie de reglas jurisprudenciales y dogmática penal que permita la adecuad resolución del caso de conformidad con los principios interpretativos de especialidad, subsunción, alternatividad y consunción. Así en sentencia C-464/14 la Corte Constitucional determinó:

Adicionalmente, esta misma Corporación ha destacado, coincidiendo con la doctrina, que la solución racional del concurso aparente de tipos –para obviar el quebranto del principio non bis in ídem–, en el sentido de seleccionar la norma que resulte adecuada, impone la aplicación de los principios de especialidad, subsidiariedad y consunción, ya que uno solo de ellos ha de ser llamado a ser aplicado, de lo contrario se violaría el principio de non bis in ídem constitucional, de acuerdo con el cual un mismo comportamiento no puede ser investigado o sancionado dos veces.

Dada la dificultad que se presenta cuando hay concurso aparente para efectos de realizar una correcta adecuación típica de la conducta, la doctrina ha formulado algunos principios interpretativos que ilustran a la demandante sobre los cargos formulados y facilitan a los jueces la forma de proceder en un caso de adecuación típica complejo. Para la Sala estos principios pueden ser usados por el juzgador como parámetro interpretativo en casos de difícil definición al encuadrar correctamente el tipo penal aplicable.

Así lo ha reconocido esta Corte, en sentencia C-121 de 2012 "(…) De cualquier modo, frente al concurso aparente de normas o tipos penales, el operador jurídico, en el ámbito de su autonomía, cuenta con herramientas interpretativas como los principios de especialidad, subsidiariedad, consunción o alternatividad, cuyo cometido es enfrentar, en el plano judicial, eventuales riesgos de vulneración del non bis in ídem".

8.5 TENENCIA Y TRANSPORTE DE MERCURIO

Mediante la Ley 1892 del 11 de mayo de 2018, Colombia aprobó el "Convenio de Minamata sobre el Mercurio" y el 26 de agosto de 2019 fue ratificado por el país sin exenciones.

El "Convenio de Minamata sobre el Mercurio" establece en su artículo 4, numeral 1° que "Cada Parte prohibirá, adoptando las medidas pertinentes, la fabricación, la importación y la exportación de los productos con mercurio añadido incluidos en la Parte 1 del Anexo A después de la fecha de eliminación especificada para esos productos, salvo cuando se haya especificado una exclusión en el Anexo A o cuando la Parte se haya inscrito para una exención conforme al artículo 6".

El "Convenio de Minamata sobre Mercurio" en su Anexo A, Parte 1, establece el año 2020 como fecha "después de la cual no estará permitida la producción, importación ni exportación del producto (fecha de eliminación)".

La Ley 1658 de 2013 estableció disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio en las diferentes actividades industriales del país, fijó requisitos e incentivos para su reducción y eliminación y en su artículo 2, establece que "se adoptará de una política nacional en materia de salud, seguridad y medio ambiente para la reducción y eliminación del uso del mercurio en las diferentes actividades industriales del país donde se utilice dicha sustancia; para lo cual se podrán suscribir convenios, desarrollar programas y ejecutar proyectos de cooperación internacional con el fin de aprovechar la experiencia, la asesoría, la capacitación, la tecnología y los recursos humanos, financieros y técnicos de dichos organismos para promover la reducción y eliminación del uso del mercurio".

El artículo 50 ibídem, determinó con cargo al Ministerio de Comercio Industria y Turismo en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, establecer medidas de control y restricción a la importación y comercialización de mercurio y los productos que lo contengan y la creación de un Registro Único Nacional de Importadores y Comercializadores autorizados.

El Gobierno Nacional mediante Decreto 2133 del 22 de diciembre de 2016 modificado por el Decreto 1041 de 2018, estableció medidas de control a la importación y comercialización de mercurio y los productos que lo contienen y creó el Registro Único Nacional de Importadores y Comercializadores Autorizados, en aras de contar con herramientas efectivas que faciliten controlar su ingreso y la cadena de comercialización.

Mediante el Decreto 419 del 22 de abril del 202, el Ministerio de Comercio, industria y turismo, da cumplimiento a los compromisos adquiridos por Colombia relacionados con el Anexo A – Parte I del Convenio Minamata sobre el Mercurio y se adoptan otras disposiciones.

Lo anterior, por cuanto el mercurio elemental es un elemento líquido tóxico que se vaporiza e inhala fácilmente a temperatura ambiente. La inhalación puede provocar una intoxicación aguda o crónica.

Es uno de los metales de más amplia distribución en el ambiente, y conocido por su alta toxicidad (principalmente el metilmercurio) y responsable de acontecimientos de contaminación a gran escala. Es sabido que la contaminación por mercurio aumenta y continúa siendo una amenaza potencial tanto para la vida acuática como para la salud humana. A pesar de algunas medidas de control, en los últimos cien años ha aumentado su concentración en el ambiente. Es bioquímicamente activo, bioacumulable y persistente, de ahí su alta toxicidad para los seres vivos y el ambiente.

Afectaciones a la salud, se presentan dependiendo del tiempo de exposición ya que puede ingresar al cuerpo por inhalación, ingesta de pescado contaminado o en el ambiente.

Esta exposición puede afectar de manera negativa al crecimiento del cerebro y al sistema nervioso de los bebés sin nacer.

La exposición al mercurio (incluso en pequeñas cantidades) puede causar graves problemas de salud afectando el sistema nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, riñones y ojos.

En niños expuestos al metilmercurio en el útero se han observado efectos negativos en la función cognitiva, la memoria, la atención, el habla y las actividades visuoespaciales y motoras finas.

La intoxicación por mercurio puede conducir a complicaciones potencialmente fatales si no se trata.

La presentación inespecífica de la intoxicación por mercurio, se presentan síntomas como fiebre, náuseas, vómitos y dolor abdominal tos, irritación de garganta, disnea, dolor torácico, diarrea, aumento de la tensión arterial o la frecuencia cardíaca, sabor metálico en la boca, irritación ocular, cefalea y problemas de la vista.

Los límites tolerables de mercurio en una persona son los inferiores a 10 mcg/L (microgramos/litro) y 20 mcg/L en sangre y orina (<25 mcg/gr creatinina en orina de 24 horas), respectivamente.

Los vapores de mercurio metálico o el mercurio orgánico pueden afectar diferentes áreas del cerebro y las funciones que se asocian con estas áreas, lo que se manifiesta en una variedad de síntomas. Éstos incluyen cambios de personalidad (irritabilidad, timidez, nerviosidad), temblores, alteraciones de la visión (reducción del campo visual), sordera, incoordinación muscular, pérdida de la sensación y dificultades de la memoria.

Los estudios de trabajadores expuestos a vapores de mercurio metálico tampoco han demostrado incrementos de la tasa de cáncer asociadas con la exposición al mercurio.

El contacto de la piel con mercurio metálico ha producido una reacción alérgica (erupción de la piel) en algunas personas.

Teniendo en cuenta el estudio que se realizó por parte de la Universidad de Córdoba, "Contaminación por mercurio en humanos y peces en el municipio de Ayapel, Córdoba, Colombia, 2009" demuestra que existe riesgo para la salud del ser humano por el consumo de peces pertenecientes a ciertas especies, obtenidos de la ciénaga de Ayapel. Esto se refleja en el contenido de mercurio total en cabello por encima de los valores permisibles internacionalmente, el cual aumentó con la frecuencia de la ingesta de peces carnívoros, por lo que el consumo de pescado por parte de la población estudiada constituye un riesgo de intoxicación por mercurio. Sin embargo, no puede descartarse que factores como la inhalación y el contacto con mercurio que se generan durante la explotación de este mineral cumplan un papel importante dentro de la contaminación de los humanos. (H1, 2010)

Según el informe ejecutivo del Ministerio de Salud y la Universidad de Córdoba se puede evidenciar que los síntomas subjetivos y signos clínicos relacionados con la exposición a mercurio en una zona minera presentaron síntomas de eretismo mercurial manifestada en orden de importancia por pérdida de memoria, insomnio, alteración de la sensibilidad general (parestesia), inflamación de encías, cansancio anormal, animo depresivo (distimia), alteraciones de la atención (disprosexia), alteraciones del equilibrio, impotencia sexual y pérdida de fuerza. Otros síntomas que se presentaron en un menor, pero no despreciable porcentaje de población (14 y 17%) fueron los temblores en manos y parpados.

Los resultados en una zona pesquera, se registraron resultados similares a la descrita para la zona minera, con un 16 – 47% de la población evaluada registrando síntomas de eretismos mercurial manifestado en orden de importancia por pérdida de memoria, cansancio anormal, insomnio, parestesia, distimia, alteración del equilibrio, pérdida de fuerza e impotencia sexual. Síntomas como disprosexia y temblores en parpados se presentaron en un menor porcentaje de población (12%. (Colombia, 2014).

Impactos Ambientales.

- El impacto ambiental de la explotación ilícita de minerales es grave en la medida en que no genera un impacto puntual y por el contrario genera un desencadenamiento de impactos indirectos que ponen en peligro los servicios eco-sistémicos del país.
- Estas actividades sin control, generan impactos sobre el medio ambiente generando daños y contaminando la capa vegetal. Así, la actividad de explotación ilícita de minerales evita la preservación de los servicios ecosistémicos mediante la detención de la deforestación y contamina los componentes ambientales (suelo, aire, agua, flora y fauna) por el uso de sustancias químicas prohibidas como el mercurio.
- La erosión y el efecto nocivo sobre el suelo se traducen en una menor productividad, en un menoscabo de la biodiversidad y en problemas asociados con los ciclos naturales, como por ejemplo el ciclo del agua y los procesos biológicos de la fauna y flora.
- Así mismo, la explotación ilícita de minerales a través del uso de sustancias tóxicas y prohibidas perjudica la subsistencia de especies animales y vegetales, y pone en riesgo la salubridad humana cuando estas especies animales como el pescado es consumido por las comunidades ribereñas.
- La falta de control de estas sustancias, ocasiona un grave deterioro ambiental, problemas higiénicos y sociales.
- Los líquidos derivados de la explotación, como el ácido sulfúrico y los óxidos de hierro, en el drenaje ácido de minas, requieren un manejo especial. Su inadecuado manejo genera evidentes problemas de salubridad, toda vez que estas sustancias conducen a un desequilibrio en las propiedades del suelo y una devastación progresiva de la flora. El manejo del polvo asociado a la explotación y los niveles recurrentes de ruido, afectan también el medio ambiente.
- Los impactos en materia ambiental en el país muestran que, para el segundo semestre de 2015, 3 de los 7 núcleos de alertas de deforestación de Colombia coinciden con zonas de explotación ilícita de minerales (Nororiente Antioqueño, Caquetá-Putumayo, Sur del Cauca-Nariño) (ver mapa 1).

Por otra parte, el uso intensivo, antitécnico y descontrolado de dragas y retroexcavadoras en los ríos o fuentes de agua y el uso inadecuado de sustancias tóxicas como el mercurio y cianuro para el beneficio de minerales como el oro, causa considerables impactos ambientales y de salud pública, los cuales generan intoxicación y otros problemas como alteraciones neurológicas y malformaciones congénitas, ocasionados por la exposición directa, la manipulación de dichas sustancias y el consumo de alimentos contaminados, en poblaciones influenciadas por el desarrollo de estas actividades.

El mercurio es utilizado en la explotación ilícita de minerales para separar y extraer el oro de las rocas o piedras en las que se encuentra. Según la Organización Mundial de la Salud, el mercurio es tóxico para la salud humana y supone una amenaza especial para el desarrollo del niño en el útero y en las primeras etapas de la vida, afecta los sistemas nervioso, digestivo e inmunitario, así como los pulmones, riñones, la piel y los ojos.

8.6 DE LA APROPIACIÓN ILEGAL DE BALDÍOS DE LA NACIÓN

Un baldío es un bien inmueble que se encuentra en zonas rurales cuyo propietario es la Nación. De acuerdo a la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, los baldíos son bienes públicos de la Nación catalogados dentro de la categoría de bienes fiscales adjudicables, en razón de que la Nación los conserva para adjudicarlos a quienes reúnan la totalidad de las exigencias establecidas en la ley[34]. Por ende, de conformidad con el acuerdo No. 28 del 31 de agosto de 2017 de la Agencia Nacional de Tierras, se estableció la forma mediante la cual las personas pueden ser adjudicatarias de contratos de explotación de baldíos, así como los mecanismos mediante los que pueden asociarse con terceros para lograr ser adjudicatarios de dichos contratos.

Lo anterior, tiene un fundamento constitucional y legal que guarda relación a la función social que debe tener la propiedad dentro del Estado Social de Derecho, razón por la cual la función social de la propiedad se incorpora al contenido de ella para imponer al titular del dominio obligaciones en beneficio de la sociedad. En el caso de las tierras baldías rurales dicha función social se traduce en la obligación de explotarla económicamente y destinarla exclusivamente a actividades agrícolas, en no explotar el terreno si está destinado a la reserva o conservación de recursos naturales renovables. La función social consiste en que el derecho de propiedad debe ser ejercido en forma tal que no perjudique, sino que beneficie a la sociedad, dándole la destinación o uso acorde con las necesidades colectivas y respetando los derechos de los demás.

En consecuencia, resulta contrario al ordenamiento jurídico y atenta contra múltiples bienes jurídicamente tutelados que se utilicen los bienes baldíos de la Nación para actividades ilegales tales como la ganadería en zonas no permitidas, el acaparamiento de tierras, los cultivos de uso ilícito, la exploración o explotación ilícita de minerales, mejora o construcción de infraestructura ilegal, bajo el entendido que, no cumple la función social de la propiedad. Ahora bien, este delito conexo a la deforestación, permite que se ejecuten conductas punibles como el acaparamiento de tierra, puesto que, es un problema que ha sido identificado por todas las entidades de control, y donde los Grupos Armados Organizados -GAO- y otros agentes ilegales o terratenientes realizan estas acciones en contra del medio ambiente, aunado a la ganadería extensiva que la realizan agentes externos de gran poder económico y que pagan al campesino para esta práctica ilegal.

Así las cosas, es necesario, razonable y proporcional que el Estado llegue a los espacios vacíos en que se ejecuta la apropiación ilegal de baldíos, puesto que, los fines perseguidos por el tipo penal contribuyen a la protección del Medio Ambiente, y lograr garantizar un orden económico y social. De igual forma, el tipo penal de financiación de la apropiación ilegal de baldíos complementa la lucha contra el crimen organizado y actividades ilegales asociadas al lavado de activos, financiamiento al terrorismo y delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales.

En reportes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), una de las preocupaciones que veían en el largo plazo para Colombia era que la expansión de los cultivos ilícitos dependía, en ciertos casos, de la falta de información estadística que hay sobre el origen y control de algunos terrenos en el país. Y puntualmente, hacían referencia a los baldíos, pues ante una gran extensión de bosques y selvas, el narcotráfico aprovecha para utilizar dichos bienes y aumentar la economía ilícita. Los factores expuestos demuestran la necesidad de buscar una prevención general en la sociedad y ayuda a contrarrestar los efectos de la criminalidad en los bienes que se buscan proteger.

8.7 VARIACIÓN DE COMPETENCIA – JUECES PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS.

Se resalta la variación en la competencia, para que los delitos respecto de los cuales se propone el aumento punitivo de pena privativa de la libertad, radique en cabeza de los Jueces Penales del Circuito Especializados, con al ánimo de asegurar un juzgamiento más célere, concentrado y eficaz, toda vez que, las competencias asignadas a tales funcionarios resulta más concreta que las abordadas por los Jueces Penales del Circuito, que como se sabe tienen atribuido numerosos comportamientos delictivos contenidos en la mayoría de los títulos del Código Penal.

La referida variación de competencia, facilita además que la etapa de juzgamiento esté a cargo de un número más reducido de operadores judiciales, quienes asumirán con mayor celeridad los procesos, conjurando los efectos prescriptivos de la acción penal, además de permitir que los funcionarios de dicha categoría puedan ser capacitados de manera integral en temas de normativa medioambiental, escenario que dinamizaría el entendimiento del bien jurídico y sus dimensiones, incidiendo en la minimización de fallos contradictorios.

[34] *Corte Constitucional. Sentencia C 595 de 1995. MP. Carlos Gaviria Díaz.*

8.8 SUSPENCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA.

El PL propone adicionar al artículo 91 del Código de Procedimiento Penal un inciso que precise que cuando se hubiese suspendido o cancelado la personería jurídica de que trata este artículo, la persona natural o jurídica estará inhabilitada para constituir nuevas personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público, con el mismo objeto o actividad económica a desarrollar, hasta que el Juez de Conocimiento tome una decisión definitiva en la sentencia correspondiente.

Esta medida busca concientizar y generar una prevención para la sociedad, bajo el entendido que, en la práctica se ha evidenciado que las personas naturales utilizan a las personas jurídicas para la comisión de las conductas punibles, y una vez, han sido vinculadas a una indagación o proceso penal, estas crean o constituyen nuevas personas jurídicas para seguir desplegando la conducta delictiva, sin que se logre evitar la comisión de la misma.

De conformidad con la Sentencia C-603 del 2016, la disposición actualmente establecida en el artículo 91 C.P.P. es un instrumento de carácter procesal previsto para procurar la protección y prevención del delito.

Con la medida provisional se busca paralizar la actividad delictiva, desarrollada por personas naturales a través de organizaciones o sociedad que operan por medio de sus locales o establecimientos abiertos al público, las cuales al verse inmersas en un proceso penal pueden acudir a la creación de nuevas personas jurídicas o establecimientos que permitan la continuación de sus actividades. El Estado no puede permanecer ajeno a esta realidad y se pretende imposibilitar el adelanto de la actividad delictiva mientras se disponga el carácter definitivo de la medida adoptada, en la sentencia condenatoria, por medio de la imposibilidad de acudir a la creación o construcción de nuevas personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público.

Estas medidas pueden adoptarse con el fin de proteger no solo el interés de la sociedad sino también, en específico, el de las víctimas del proceso en curso. Hay conductas delictivas que pueden desarrollarse a través de personas jurídicas o en uso de establecimientos o locales abiertos al público, y pueden suponer una cierta violación continuada de los bienes jurídicos protegidos por la ley penal de una o varias víctimas ya presentes en una actuación procesal. Para el caso que nos ocupa, las personas jurídicas han sido utilizadas para atentar contra los recursos naturales y el medio ambiente, razón por la cual, resulta necesaria, adecuada, razonable y proporcional la adopción de la disposición señalada, para evitar la posibilidad de crear nuevas personas jurídicas y seguir ejecutando la conducta delictiva.

8.9 PROCEDIMIENTO DE CAPTURA EN FLAGRANCIA – ADICIÓN INCISO.

Así mismo, se propone la adición de un inciso al art 302 C.P.P. para el procedimiento de captura en flagrancia, en atención a las circunstancias extraordinarias, alguna de ellas determinadas por factores geográficos y disposición del territorio, en los que efectuar el control de legalidad sobre la captura dentro de los parámetros establecido por nuestro artículo 28 constitucional, resulta imposible por la distancia operativa y logística entre el capturado y el juez de control de garantías más cercano. En tales circunstancias, resulta irrazonable y desproporcionado calificar la captura de ilegal, sin tener en consideración las dificultades que rodean el traslado del aprendido desde el lugar de la captura, la necesidad de preservar su seguridad, así como la de los propios servidores de policía judicial y la integridad del procedimiento.

Al respecto, se destaca que la Corte Constitucional ha reconocido algunas excepciones al término de las 36 horas para la legalización de la captura. Así en sentencia C-239 de 2012, en la que se pronunció sobre la constitucionalidad de un aparte del artículo 56 de la Ley 1453 de 2011 que permitía que en los casos en los que existan razones para sospechar que una nave está siendo utilizada para el tráfico de estupefacientes, el término de las 36 horas siguientes para poner a disposición de la autoridad judicial a la persona capturada, "*se contará a partir del momento en el cual se verifique que las sustancias transportadas son ilícitas en el puerto, siempre y cuando se cumpla el procedimiento de interdicción marítima y se hayan respetado los derechos fundamentales de los involucrados", el máximo órgano de la jurisdicción constitucional consideró que no era razonable declarar la:*
"(…) *inconstitucionalidad del precepto, en particular del aparte acusado en la demanda, por cuanto dicha decisión podría paradójicamente dejar en una situación peor a las personas capturadas durante la operación naval mencionada, pues la falta de una indicación precisa sobre la forma en que se aplica la garantía del artículo 28 constitucional, generaría un vacío normativo que causaría mayor incertidumbre y permitiría toda suerte de interpretaciones en cabeza de los operadores jurídicos*".
Dicho pronunciamiento, enfatizó en la importancia del principio del derecho bajo el cual nadie está obligado a lo imposible, por cuanto aún el Estado disponiendo de todos los recursos y su capacidad en el procedimiento de interdicción marítima podría suceder que:
"(…) *desde el momento en que opera el desvío y por consiguiente la captura en flagrancia inferida de los ocupantes de la nave, hasta el momento en que es verificado por las autoridades competentes el carácter ilícito de la sustancia se dispongan estos últimos ante el juez de control de garantías, hayan transcurrido más de las 36 horas de que trata el art. 28 inc. 2º de la Constitución*".
Por ende, declaró exequible la disposición por el cargo analizado, el entendido de que la puesta a disposición de las personas capturadas durante la interdicción marítima ante el juez de control de garantías y la definición de su situación jurídica, deberá desarrollarse en el menor tiempo posible, sin que en ningún caso exceda las 36 horas siguientes a la llegada a puerto colombiano.

9. DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS O RELACIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS:

De conformidad con el artículo 291 de la Ley 5 de 1992, en la que se estableció que el autor del proyecto y el ponente presentarán en la exposición de motivos un acápite que describa las circunstancias o eventos que podrán generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto.

Se considera que el presente proyecto de Ley no genera conflictos de interés en atención a que se trata de un proyecto que no genera un beneficio particular, actual y directo a los congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 2019; sino que, por el contrario, trata de aumentar penas y multas, así como consagrar nuevos tipos penales que afectan los recursos naturales y el medio ambiente.

Así el Consejo de Estado determinó "No cualquier interés configura la causal de perdida de investidura, pues se sabe que sólo lo será aquél del que se pueda predicar que es:
Directo, esto es, que per se el alegado beneficio, provecho o utilidad encuentre su fuente en el asunto que fue conocido por el legislador;

Particular, que el mismo sea específico o personal, bien para el congresista o quienes se encuentren relacionados con él; y

Actual o inmediato, que concurra para el momento en que ocurrió la participación o votación del congresista, lo que excluye sucesos contingentes, futuros o imprevisibles.[35]

[35] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de noviembre de 2009, radicación número: PI. 01180-00 (C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia).

10. PLIEGO DE MODIFICACIONES

TEXTO APROBADO SEGUNDO DEBATE	TEXTO PROPUESTO PARA TERCER DEBATE
TITULO. *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000,* ***se modifica la Ley 906 del 2004*** *y se dictan otras disposiciones".*	**TITULO.** *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000,* se modifica la Ley 906 del 2004 y se dictan otras *disposiciones".*
ARTÍCULO 1°. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente: **TÍTULO XI.** **DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE** **CAPÍTULO I.** **DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES** **Artículo 328. Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.** El que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, acceda, capture, mantenga, recolecte, use, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, trafique o de cualquier otro modo se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta y tres mil setecientos cincuenta (43.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la práctica de cercenar aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras), y descartar el resto del cuerpo al mar.	**ARTÍCULO 1°.** Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente: **TÍTULO XI.** **DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE** **CAPÍTULO I.** **DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES** **Artículo 328. Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.** El que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, acceda, capture, mantenga, recolecte, use, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, trafique o de cualquier otro modo se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta y tres mil setecientos cincuenta (43.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la práctica de cercenar aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras), y descartar el resto del cuerpo al mar.

Artículo 328A. Tráfico de Fauna. El que trafique, mercadee, adquiera, exporte y de cualquier forma comercialice los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de trescientos (300) hasta cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la exportación o comercialización de aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras).	**Artículo 328A. Tráfico de Fauna.** El que trafique, mercadee, adquiera, exporte y de cualquier forma comercialice los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de trescientos (300) hasta cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la exportación o comercialización de aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras).
Artículo 328B. Caza Ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, cazare, excediere el número de piezas permitidas o cazare en época de veda, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de treinta y tres (33) a novecientos treinta y siete (937) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.	**Artículo 328B. Caza Ilegal.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, cazare, excediere el número de piezas permitidas o cazare en época de veda, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de treinta y tres (33) a novecientos treinta y siete (937) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
Artículo 328C. Pesca Ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese o almacene ejemplares o productos de especies vedadas, protegidas, en cualquier categoría de amenaza, o en áreas de reserva, o ~~**en épocas vedadas**~~, en zona prohibida, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a las que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 328C. Pesca Ilegal.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese o almacene ejemplares o productos de especies vedadas, protegidas, en cualquier categoría de amenaza, o en áreas de reserva, o en zona prohibida, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a las que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá el que: 1. Utilice instrumentos no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente. 2. Altere los refugios o el medio ecológico de especies de recursos hidrobiológicos, como consecuencia de actividades de exploración o explotación de recursos naturales ~~**no renovables.**~~	En la misma pena incurrirá el que: 1. Utilice instrumentos, **artes y métodos de pesca** no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente, **para cualquier especie.** 2. **Modifique,** altere o **atente,** los refugios o el medio ecológico de especies de recursos hidrobiológicos **y pesqueros**, como consecuencia de actividades
3. Construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ciénagas, lagunas, caños, ríos y canales.	de exploración o explotación de recursos naturales. 3. Construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ciénagas, lagunas, caños, ríos y canales. **Parágrafo: La conducta descrita en este artículo no será considerada delito si la misma se ajusta a los condicionamientos y requisitos señalados en la Resolución 649 de 2019 expedida por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) o aquella que la derogue o sustituya, para la pesca de subsistencia.**
Artículo 329. Manejo ilícito de especies exóticas. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, trasplante, manipule, siembre, hibride, comercialice, transporte, mantenga, transforme, experimente, inocule o propague especies silvestres exóticas, invasoras, que pongan en peligro la salud humana, el ambiente o las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 329. Manejo ilícito de especies exóticas.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, trasplante, manipule, siembre, hibride, comercialice, transporte, mantenga, transforme, experimente, inocule o propague especies silvestres exóticas, invasoras, que pongan en peligro la salud humana, el ambiente o las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 330. Deforestación. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente tale, queme, corte, arranque o destruya áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará a la mitad cuando: 1. Cuando la conducta se realice para fines de ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal. 2. Cuando la conducta afecte más de 30	**Artículo 330. Deforestación.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente tale, queme, corte, arranque o destruya áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará a la mitad cuando: 1. Cuando la conducta se realice para fines de ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal. 2. Cuando la conducta afecte más de 30
hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada. **Artículo 330A. Promoción y financiación de la Deforestación.** El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte, arranque o destrucción de áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará a la mitad cuando: 1. Cuando la conducta se realice para fines de ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal. 2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.	hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada. **Artículo 330A. Promoción y financiación de la Deforestación.** El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte, arranque o destrucción de áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará a la mitad cuando: 1. Cuando la conducta se realice para fines de ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal. 2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.
Artículo 331. Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos. El que con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, importe, manipule, experimente, posea, inocule, comercialice, exporte, libere o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos, moléculas, substancias o elementos que pongan en peligro la salud o la existencia de los recursos fáunicos, florísticos, hidrobiológicos, hídricos o alteren perjudicialmente sus poblaciones, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. **Artículo 332. Exploración o explotación ilícita de minerales y otros materiales. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la**	**Artículo 331. Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos.** El que con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, importe, manipule, experimente, posea, inocule, comercialice, exporte, libere o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos, moléculas, substancias o elementos que pongan en peligro la salud o la existencia de los recursos fáunicos, florísticos, hidrobiológicos, hídricos o alteren perjudicialmente sus poblaciones, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. **Artículo 332. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la**
normatividad existente explote, explore o extraiga minerales, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. **La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando las conductas descritas en este artículo se realicen a través de minería a cielo abierto.** **Artículo 332A. Aprovechamiento ilícito de minerales. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, transporte, transforme, beneficie, comercialice o se favorezca a cualquier título de los minerales de que trata el artículo anterior, incurrirá en prisión de ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.** **Artículo 332B. Promoción y financiación de la explotación ilícita de minerales. El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, maquinaria o medios mecanizados, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la explotación, exploración, extracción, transporte, transformación o comercialización ilícita de minerales, arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.** **Artículo 332C. Tenencia o transporte de mercurio.** El que con incumplimiento de la normatividad existente importe, tenga, almacene, transporte o comercialice mercurio, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**normatividad existente explote, explore o extraiga yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133,33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.** **Artículo 332A eliminado.** **Artículo 332B eliminado.** **Artículo 332A. Tenencia o transporte de mercurio.** El que con incumplimiento de la normatividad existente importe, tenga, almacene, transporte, **use** o comercialice mercurio, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO II. **DE LOS DAÑOS EN LOS RECURSOS NATURALES** **Artículo 333. Daños en los recursos naturales y ecocidio.** El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o cause un impacto ambiental grave o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título o a los que estén asociados con estos, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. **Parágrafo 1°.** Para los efectos de este artículo se entiende por ecocidio, el daño masivo y destrucción generalizada grave y sistémica de los ecosistemas. **Parágrafo 2°.** Por impacto ambiental grave se entenderá, la alteración de las condiciones ambientales que se genere como consecuencia de la afectación de los componentes ambientales, eliminando la integridad del sistema y poniendo en riesgo su sostenibilidad. **CAPÍTULO III.** **DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL** **Artículo 334. Contaminación ambiental.** El que con incumplimiento de la normatividad existente provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertimientos, radiaciones, ruidos, depósitos, o disposiciones al aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas superficiales, marítimas o subterráneas o demás recursos naturales en tal forma que contamine o genere un efecto nocivo en el ambiente, que ponga en peligro la salud humana y los recursos naturales, incurrirá en prisión de sesenta y nueve (69) a ciento cuarenta (140) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los	**CAPÍTULO II.** **DE LOS DAÑOS EN LOS RECURSOS NATURALES** **Artículo 333. Daños en los recursos naturales y ecocidio.** El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o cause un impacto ambiental grave o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título o a los que estén asociados con estos, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. **Parágrafo 1°.** Para los efectos de este artículo se entiende por ecocidio, el daño masivo y destrucción generalizada grave y sistémica de los ecosistemas. **Parágrafo 2°.** Por impacto ambiental grave se entenderá, la alteración de las condiciones ambientales que se genere como consecuencia de la afectación de los componentes ambientales, eliminando la integridad del sistema y poniendo en riesgo su sostenibilidad. **CAPÍTULO III.** **DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL** **Artículo 334. Contaminación ambiental.** El que con incumplimiento de la normatividad existente provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertimientos, radiaciones, ruidos, depósitos, o disposiciones al aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas superficiales, marítimas o subterráneas o demás recursos naturales en tal forma que contamine o genere un efecto nocivo en el ambiente, que ponga en peligro la salud humana y los recursos naturales, incurrirá en prisión de sesenta y nueve (69) a ciento cuarenta (140) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los
hechos descritos en este artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas. 2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por la normatividad existente o haya infringido más de dos parámetros. 3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, depósitos, emisiones o disposiciones. 4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo. 5. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de control y vigilancia de la autoridad competente. 6. Cuando la contaminación sea producto del almacenamiento, transporte, vertimiento o disposición inadecuada de residuo peligroso. **Artículo** 334A. **Contaminación ambiental por explotación de minerales, hidrocarburos y otros materiales. El que contamine directa o indirectamente la atmosfera, el suelo, el subsuelo o las aguas, como consecuencia de la actividad de exploración, construcción, montaje, extracción, explotación, beneficio, transformación, acopio, transporte, cierre, desmantelamiento o abandono de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá en prisión de setenta y cinco (75) a ciento cincuenta (150) meses, y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.** **La pena se aumentará hasta en una tercera parte si la contaminación se produce como consecuencia de la minería a cielo abierto.**	hechos descritos en este artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas. 2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por la normatividad existente o haya infringido más de dos parámetros. 3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, depósitos, emisiones o disposiciones. 4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo. 5. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de control y vigilancia de la autoridad competente. 6. Cuando la contaminación sea producto del almacenamiento, transporte, vertimiento o disposición inadecuada de residuo peligroso. **Artículo** 334A. **Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo. El que provoque, contamine o realice directo o indirectamente en los recursos de agua, suelo, subsuelo o atmósfera, con ocasión a la extracción o excavación exploración construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años, y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.**
Artículo 335. Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice experimentos con especies, agentes biológicos o bioquímicos que constituyan, generen o pongan en peligro la supervivencia de las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. **CAPÍTULO IV.** **DE LA INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA** **Artículo 336. Invasión de áreas de especial importancia ecológica.** El que invada, permanezca así sea de manera temporal o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en área de reserva forestal, ecosistemas de importancia ecológica, playas, terrenos de bajamar, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, parque nacional natural, área o ecosistema de interés estratégico, área protegida, definidos en la ley o reglamento incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente. **Artículo 336A. Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica.** El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 335. Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice experimentos con especies, agentes biológicos o bioquímicos que constituyan, generen o pongan en peligro la supervivencia de las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. **CAPÍTULO IV.** **DE LA INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA** **Artículo 336. Invasión de áreas de especial importancia ecológica.** El que invada, permanezca así sea de manera temporal o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en área de reserva forestal, ecosistemas de importancia ecológica, playas, terrenos de bajamar, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, parque nacional natural, área o ecosistema de interés estratégico, área protegida, definidos en la ley o reglamento incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente. **Artículo 336A. Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica.** El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente. **CAPÍTULO V.** **DE LA APROPIACIÓN ILEGAL DE BALDÍOS DE LA NACIÓN** **Artículo 337. Apropiación ilegal de baldíos de la nación.** El que se apropie, usurpé, use, ocupe, utilice, acumule, o destine baldíos de la nación con fines de expansión ilegal de la frontera agrícola, para ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos. **Artículo 337A. Financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación.** El que promueva, financie, ordene, dirija, o suministre medios para la apropiación de baldíos de la nación sin cumplimiento de los requisitos legales con fines de expansión ilegal de la frontera agrícola, para ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de	La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente. **CAPÍTULO V.** **DE LA APROPIACIÓN ILEGAL DE BALDÍOS DE LA NACIÓN** **Artículo 337. Apropiación ilegal de baldíos de la nación.** El que se apropie, usurpé, use, ocupe, utilice, acumule, o destine baldíos de la nación con fines de expansión ilegal de la frontera agrícola, para ganadería en zonas no permitidas, ~~**para acaparamiento de tierras,**~~ para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos. **Parágrafo: La conducta descrita en este artículo no será considerada delito si la misma se ajusta a los condicionamientos y requisitos señalados en la ley 160 de 1994, así como en el Decreto Ley 902 de 2017 para la adjudicación de bienes baldíos.** **Artículo 337A. Financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación.** El que promueva, financie, ordene, dirija, o suministre medios para la apropiación de baldíos de la nación sin cumplimiento de los requisitos legales con fines de expansión ilegal de la frontera agrícola, para ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de

infraestructura ilegal, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los bienes muebles, inmuebles o semovientes encontrados en los baldíos ilegalmente apropiados. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos.	infraestructura ilegal, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los bienes muebles, inmuebles o semovientes encontrados en los baldíos ilegalmente apropiados. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos.
CAPÍTULO VI. **DISPOSICIONES COMUNES**	**CAPÍTULO VI.** **DISPOSICIONES COMUNES**
Artículo 338. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando:	**Artículo 338. Circunstancias de agravación punitiva.** Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando:
a) Cuando la conducta se cometa en ecosistemas naturales que hagan parte del sistema nacional o regional de áreas protegidas, en ecosistemas estratégicos, o en territorios de comunidades étnicas. Con excepción de las conductas consagradas en los artículos 336 y 336A.	a) Cuando la conducta se cometa en ecosistemas naturales que hagan parte del sistema nacional o regional de áreas protegidas, en ecosistemas estratégicos, o en territorios de comunidades étnicas. Con excepción de las conductas consagradas en los artículos 336 y 336A.
b) Cuando la conducta se cometa contra especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana o de especies vedadas, prohibidas, en período de reproducción o crecimiento, de especial importancia ecológica, raras o endémicas del territorio colombiano. Con excepción de la conducta contemplada en el artículo 328C.	b) Cuando la conducta se cometa contra especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana o de especies vedadas, prohibidas, en período de reproducción o crecimiento, de especial importancia ecológica, raras o endémicas del territorio colombiano. Con excepción de la conducta contemplada en el artículo 328C.
c) Cuando con la conducta se altere el suelo, el subsuelo, los recursos hidrobiológicos, se desvíen los cuerpos de agua o se afecten ecosistemas marinos, manglares, pastos marinos y corales.	c)Cuando con la conducta se altere el suelo, el subsuelo, los recursos hidrobiológicos, se desvíen los cuerpos de agua o se afecten ecosistemas marinos, manglares, pastos marinos y corales.
d) Cuando la conducta se cometiere por la acción u omisión de quienes ejercen funciones de seguimiento, control y vigilancia o personas que ejerzan funciones públicas.	d)Cuando la conducta se cometiere por la acción u omisión de quienes ejercen funciones de seguimiento, control y vigilancia o personas que ejerzan funciones públicas.
e) Cuando la conducta se cometiere por integrantes de grupos delictivos organizados o grupos armados organizados o con la finalidad de financiar actividades terroristas, grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley, grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a sus integrantes.	e) Cuando la conducta se cometiere por integrantes de grupos delictivos organizados o grupos armados organizados o con la finalidad de financiar actividades terroristas, grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley, grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a sus integrantes.
f) Cuando la conducta se cometa mediante el uso o manipulación de herramientas tecnológicas.	f) Cuando la conducta se cometa mediante el uso o manipulación de herramientas tecnológicas.
g) Cuando con la conducta se ponga en peligro la salud humana.	g) Cuando con la conducta se ponga en peligro la salud humana.
h) Cuando con la conducta se introduzca al suelo o al agua sustancias prohibidas por la normatividad existente o se realice mediante el uso de sustancias tóxicas, peligrosas, venenos, inflamables, combustibles, explosivas, radioactivas, el uso de explosivos, maquinaria pesada o medios mecanizados, entendidos estos últimos como todo tipo de equipos o herramientas mecanizados utilizados para el arranque, la extracción o el beneficio de minerales o la distribución ilegal de combustibles.	h) Cuando con la conducta se introduzca al suelo o al agua sustancias prohibidas por la normatividad existente o se realice mediante el uso de sustancias tóxicas, peligrosas, venenos, inflamables, combustibles, explosivas, radioactivas, el uso de explosivos, maquinaria pesada o medios mecanizados, entendidos estos últimos como todo tipo de equipos o herramientas mecanizados utilizados para el arranque, la extracción o el beneficio de minerales o la distribución ilegal de combustibles.
i) Cuando se promueva, financie, dirija, facilite o suministre medios para la realización de las conductas. Con excepción de las conductas contempladas en los artículos 330A, 332B, 336A y 337A.	i)Cuando se promueva, financie, dirija, facilite o suministre medios para la realización de las conductas. Con excepción de las conductas contempladas en los artículos 330A, **~~332B~~**, 336A y 337A.
j) Cuando con la conducta se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies.	j) Cuando con la conducta se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies.
Artículo 339. Modalidad Culposa. Las penas previstas en los artículos 333, 334, 334A de este código se disminuirán hasta en la mitad cuando las conductas punibles se realicen culposamente.	**Artículo 339. Modalidad Culposa.** Las penas previstas en los artículos 333, 334, 334A de este código se disminuirán hasta en la mitad cuando las conductas punibles se realicen culposamente.
Artículo 2. Modifíquese el numeral 14 del artículo 58 de la ley 599 del 2000, el cual quedará así:	**Artículo 2.** Modifíquese el numeral 14 del artículo 58 de la ley 599 del 2000, el cual quedará así:
Artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad.	**Artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad.**
(…)	(…)
14. Cuando se produjere un daño ambiental grave, una irreversible modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales o se cause	14. Cuando se produjere un daño ambiental grave, una irreversible modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales o se cause
la extinción de una especie biológica.	la extinción de una especie biológica.
ARTÍCULO 3°. Adiciones al inciso segunda del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, las siguientes conductas punibles:	**ARTÍCULO 3°.** Adiciones al inciso segunda del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, las siguientes conductas punibles:
Artículo 68A. Exclusión de los beneficios y subrogados penales. (…) Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaiga sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; abigeato enunciado en el inciso tercero del artículo 243; extorsión; homicidio agravado contemplado en el numeral 6 del artículo 104; lesiones causadas con agentes químicos, ácidos y/o sustancias similares; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objeto peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonales; aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables; tráfico de fauna; deforestación; promoción y financiación de la deforestación; aprovechamiento ilícito de minerales; promoción y financiación de la explotación ilícita de minerales;	**Artículo 68A. Exclusión de los beneficios y subrogados penales.** (…) Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaiga sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; abigeato enunciado en el inciso tercero del artículo 243; extorsión; homicidio agravado contemplado en el numeral 6 del artículo 104; lesiones causadas con agentes químicos, ácidos y/o sustancias similares; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objeto peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonales; aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables; tráfico de fauna; deforestación; promoción y financiación de la deforestación; **~~aprovechamiento ilícito de minerales; promoción y financiación de la explotación ilícita de minerales;~~**
daños en los recursos naturales y ecocidio; e invasión de áreas de especial importancia ecológica.	daños en los recursos naturales y ecocidio; e invasión de áreas de especial importancia ecológica.
ARTÍCULO 4°. Adiciónese un numeral 33 al artículo 35 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:	**ARTÍCULO 4°.** Adiciónese un numeral 33 al artículo 35 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:
(…)	(…)
33. De los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, tráfico de fauna, deforestación, promoción y financiación de la deforestación, aprovechamiento ilícito de minerales, promoción y financiación de la explotación ilícita de minerales, daños en los recursos naturales y ecocidio, e invasión de áreas de especial importancia ecológica.	33. De los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, tráfico de fauna, deforestación, promoción y financiación de la deforestación, **~~aprovechamiento ilícito de minerales, promoción y financiación de la explotación ilícita de minerales,~~** daños en los recursos naturales y ecocidio, e invasión de áreas de especial importancia ecológica.
ARTÍCULO 5°. Adiciónese un parágrafo al artículo 91 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así:	**ARTÍCULO 5°.** Adiciónese un parágrafo al artículo 91 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así:
(…)	(…)
Parágrafo. Cuando se hubiese suspendido o cancelado la personería jurídica de que trata este artículo, la persona natural o jurídica estará inhabilitada para constituir nuevas personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público, con el mismo objeto o actividad económica a desarrollar, hasta que el Juez de Conocimiento tome una decisión definitiva en la sentencia correspondiente.	**Parágrafo.** Cuando se hubiese suspendido o cancelado la personería jurídica de que trata este artículo, la persona natural o jurídica estará inhabilitada para constituir nuevas personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público, con el mismo objeto o actividad económica a desarrollar, hasta que el Juez de Conocimiento tome una decisión definitiva en la sentencia correspondiente.
ARTÍCULO 6°. Adiciónese un parágrafo 2 al artículo 92 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así:	**ARTÍCULO 6°.** Adiciónese un parágrafo 2 al artículo 92 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así:
Parágrafo 2. Tratándose de los delitos contemplados en el título XI del Código Penal, el juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.	**Parágrafo 2.** Tratándose de los delitos contemplados en el título XI del Código Penal, el juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.
ARTÍCULO 7°. El artículo 302 de la Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo inciso que quedará así:	**ARTÍCULO 7°.** El artículo 302 de la Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo inciso que quedará así:

Cuando la captura en flagrancia se produzca en ríos o tierra donde el arribo a la cabecera municipal más cercana sólo puede surtirse por vía fluvial o siempre que concurran dificultades objetivas de acceso al territorio como obstáculos geográficos, logísticos, ausencia de infraestructura de transporte o fenómenos meteorológicos que dificulten seriamente el traslado del aprehendido, se realizarán todas las actividades para lograr la comparecencia del capturado ante el juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin que en ningún caso exceda las 36 horas siguientes, contadas a partir del momento de la llegada al puerto o municipio más cercano, según el caso. La autoridad competente deberá acreditar los eventos descritos en el presente inciso.	Cuando la captura en flagrancia se produzca en ríos o tierra donde el arribo a la cabecera municipal más cercana sólo puede surtirse por vía fluvial o siempre que concurran dificultades objetivas de acceso al territorio como obstáculos geográficos, logísticos, ausencia de infraestructura de transporte o fenómenos meteorológicos que dificulten seriamente el traslado del aprehendido, se realizarán todas las actividades para lograr la comparecencia del capturado ante el juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin que en ningún caso exceda las 36 horas siguientes, contadas a partir del momento de la llegada al puerto o municipio más cercano, según el caso. La autoridad competente deberá acreditar los eventos descritos en el presente inciso.
Artículo 8. Dirección de Apoyo Territorial. Créase en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Apoyo Territorial adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana, la que tendrá como función principal liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presenta efectiva de la Entidad en territorios apartados o de difícil acceso, sin perjuicio de la competencia de otras Direcciones sobre la materia. La Dirección de Apoyo Territorial estará conformada por:	**Artículo 8. Dirección de Apoyo Territorial.** Créase en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Apoyo Territorial adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana, la que tendrá como función principal liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presenta efectiva de la Entidad en territorios apartados o de difícil acceso, sin perjuicio de la competencia de otras Direcciones sobre la materia. La Dirección de Apoyo Territorial estará conformada por:

Unidad	Cantidad	Cargo	Niveles
Dirección de Apoyo Territorial	1	Director Nacional I	Directivo
	2	Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito	Profesional
	20	Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional
	1	Profesional Experto	Profesional
	2	Profesional Especializado II	Profesional
	2	Profesional De Gestión III	Profesional
	12	Investigador Experto	Profesional
	10	Profesional Investigador III	Profesional
	9	Profesional Investigador II	Profesional
	9	Profesional Investigador I	Profesional
	10	Técnico Investigador IV	Técnico
	10	Técnico Investigador III	Técnico
	20	Asistente de Fiscal IV	Técnico
	5	Asistente de Fiscal III	Técnico
	5	Asistente de Fiscal II	Técnico
	2	Secretario Ejecutivo	Técnico
	2	Conductor	Asistencial
	3	Secretario Administrativo	Asistencial

Unidad	Cantidad	Cargo	Niveles
Dirección de Apoyo Territorial	1	Director Nacional I	Directivo
	2	Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito	Profesional
	20	Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional
	1	Profesional Experto	Profesional
	2	Profesional Especializado II	Profesional
	2	Profesional De Gestión III	Profesional
	12	Investigador Experto	Profesional
	10	Profesional Investigador III	Profesional
	9	Profesional Investigador II	Profesional
	9	Profesional Investigador I	Profesional
	10	Técnico Investigador IV	Técnico
	10	Técnico Investigador III	Técnico
	20	Asistente de Fiscal IV	Técnico
	5	Asistente de Fiscal III	Técnico
	5	Asistente de Fiscal II	Técnico
	2	Secretario Ejecutivo	Técnico
	2	Conductor	Asistencial
	3	Secretario Administrativo	Asistencial

Artículo 9. Dirección de Apoyo Territorial. Adiciónese el artículo 36A al Decreto Ley 016 de 2014, el cual quedará así: La Dirección de Apoyo Territorial cumplirá las siguientes funciones: 1. Liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presencia efectiva de la Entidad en territorios apartados o de difícil acceso, en aquellas zonas afectadas por fenómenos criminales de alto impacto y por la presencia de grupos armados organizados. 2. Apoyar la investigación, especialmente actos urgentes, en aquellos fenómenos priorizados que se den en territorios donde la Fiscalía General de la Nación no tenga presencia permanente o sean de difícil acceso. 3. Definir los lugares en los que se podrá actuar por medio de grupos itinerantes, con base en criterios geográficos y no en la división político-administrativa, así como en el análisis de la criminalidad del país, la presencia de organizaciones criminales, los tiempos de desplazamiento al lugar de comisión de la conducta punible, la oferta de servicios de justicia por parte de otras entidades, entre otros factores. 4. Conformar grupos especializados de investigadores y analistas expertos en los fenómenos criminales priorizados por la Dirección. 5. Realizar proceso de articulación de la estrategia territorial con otras entidades públicas. 6. Designar fiscales itinerantes en aquellos procesos sobre fenómenos priorizados, con el fin que apoyen, impulsen y asesoren a los fiscales titulares con el fin de lograr una efectiva judicialización.	**Artículo 9. Dirección de Apoyo Territorial.** Adiciónese el artículo 36A al Decreto Ley 016 de 2014, el cual quedará así: La Dirección de Apoyo Territorial cumplirá las siguientes funciones: 1. Liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presencia efectiva de la Entidad en territorios apartados o de difícil acceso, en aquellas zonas afectadas por fenómenos criminales de alto impacto y por la presencia de grupos armados organizados. 2. Apoyar la investigación, especialmente actos urgentes, en aquellos fenómenos priorizados que se den en territorios donde la Fiscalía General de la Nación no tenga presencia permanente o sean de difícil acceso. 3. Definir los lugares en los que se podrá actuar por medio de grupos itinerantes, con base en criterios geográficos y no en la división político-administrativa, así como en el análisis de la criminalidad del país, la presencia de organizaciones criminales, los tiempos de desplazamiento al lugar de comisión de la conducta punible, la oferta de servicios de justicia por parte de otras entidades, entre otros factores. 4. Conformar grupos especializados de investigadores y analistas expertos en los fenómenos criminales priorizados por la Dirección. 5. Realizar proceso de articulación de la estrategia territorial con otras entidades públicas. 6. Designar fiscales itinerantes en aquellos procesos sobre fenómenos priorizados, con el fin que apoyen, impulsen y asesoren a los fiscales titulares con el fin de lograr una efectiva judicialización. 7. Conformar equipos móviles de la Entidad, en los que periódicamente se reciban denuncias de los habitantes del territorio nacional y se brinde atención a las víctimas de las conductas punibles en territorios apartados o zonas de alto impacto o presencia de grupos armados organizados. 8. Organizar y adelantar comités técnico-jurídicos de revisión de las situaciones y los casos para la ejecución de acciones en el desarrollo efectivo y eficiente de las investigaciones penales de su competencia. 9. Dirigir y coordinar los grupos de trabajo, los departamentos y unidades que se conformen para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Dirección. 10. Dirigir, coordinar y controlar la incorporación y aplicación de políticas públicas en el desarrollo de las actividades que cumplen los servidores, dependencias y los grupos de trabajo que estén a su cargo, de acuerdo con los lineamientos y las orientaciones que impartan las dependencias competentes. 11. Identificar y delimitar situaciones y casos susceptibles de ser priorizados y proponerlos al Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos. 12. Ejecutar los planes de priorización aprobados por el Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos en lo de su competencia. 13. Apoyar, en el marco de sus competencias, a la Dirección de Políticas y Estrategia en el análisis de la información que se requiera para sustentar la formulación de la política en materia criminal. 14. Mantener actualizada la información que se registre en los sistemas de información de la Entidad, en los temas de su competencia. 15. Consolidar, analizar y clasificar la información de las investigaciones y acusaciones adelantadas por los servidores y grupos de trabajo a su cargo y remitirla a la Dirección de Políticas y Estrategia. 16. Dirimir, de conformidad con la Constitución y la ley, los conflictos de competencia que se presenten entre la Fiscalía General de la Nación y los demás organismos que desempeñen funciones de Policía Judicial, en el ámbito de su competencia. 17. Dirimir los conflictos administrativos que se presenten al interior de la Fiscalía en el ejercicio de las funciones o en la asignación de

investigaciones, en los casos y según las directrices y lineamientos impartidos por el Fiscal General de la Nación. 18. Asesorar a las dependencias de la Fiscalía General de la Nación que cumplen funciones investigativas y acusatorias en los temas de su competencia. 19. Elaborar e implementar los planes operativos anuales en el ámbito de su competencia, de acuerdo con la metodología diseñada por la Dirección de Planeación y Desarrollo. 20. Aplicar las directrices y lineamientos del Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación. 21. Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el Fiscal o Vicefiscal General de la Nación.	presenten al interior de la Fiscalía en el ejercicio de las funciones o en la asignación de investigaciones, en los casos y según las directrices y lineamientos impartidos por el Fiscal General de la Nación. 18. Asesorar a las dependencias de la Fiscalía General de la Nación que cumplen funciones investigativas y acusatorias en los temas de su competencia. 19. Elaborar e implementar los planes operativos anuales en el ámbito de su competencia, de acuerdo con la metodología diseñada por la Dirección de Planeación y Desarrollo. 20. Aplicar las directrices y lineamientos del Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación. 21. Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el Fiscal o Vicefiscal General de la Nación.

Artículo 10. Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. Créase en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente adscrito a la Delegada contra la Criminalidad Organizada, la que tendrá como función principal la investigación y judicialización de los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y las demás conductas delictivas conexas o relacionadas, sin perjuicio de la competencia de las Direcciones Seccionales sobre la materia.

La Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente estará conformada por:

Unidad	Cantidad	Cargo	Niveles
Dirección Especializada para los Delitos contra los Recurs	1	Director Nacional I	Directivo
	2	Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito	Profesional
	20	Fiscal Delegado ante	Profesional

Artículo 10. Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. Créase en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente adscrito a la Delegada contra la Criminalidad Organizada, la que tendrá como función principal la investigación y judicialización de los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y las demás conductas delictivas conexas o relacionadas, sin perjuicio de la competencia de las Direcciones Seccionales sobre la materia.

La Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente estará conformada por:

Unidad	Cantidad	Cargo	Niveles
Dirección Especializada para los Delitos contra los Recurs	1	Director Nacional I	Directivo
	2	Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito	Profesional
	20	Fiscal Delegado ante	Profesional

os Naturales y el Medio Ambiente		Jueces Penales de Circuito Especializado	
	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional
	1	Profesional Experto	Profesional
	2	Profesional Especializado II	Profesional
	2	Profesional De Gestión III	Profesional
	12	Investigador Experto	Profesional
	10	Profesional Investigador III	Profesional
	9	Profesional Investigador II	Profesional
	9	Profesional Investigador I	Profesional
	10	Técnico Investigador IV	Técnico
	10	Técnico Investigador III	Técnico

os Naturales y el Medio Ambiente		Jueces Penales de Circuito Especializado	
	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional
	1	Profesional Experto	Profesional
	2	Profesional Especializado II	Profesional
	2	Profesional De Gestión III	Profesional
	12	Investigador Experto	Profesional
	10	Profesional Investigador III	Profesional
	9	Profesional Investigador II	Profesional
	9	Profesional Investigador I	Profesional
	10	Técnico Investigador IV	Técnico
	10	Técnico Investigador III	Técnico

	20	Asistente de Fiscal IV	Técnico
	5	Asistente de Fiscal III	Técnico
	5	Asistente de Fiscal II	Técnico
	2	Secretario Ejecutivo	Técnico
	2	Conductor	Asistencial
	3	Secretario Administrativo	Asistencial

ARTÍCULO 11°. Vigencia y Derogatoria. La presente rige a partir de su promulgación y publicación en el Diario Oficial y deroga el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000 y todas las disposiciones que le sean contrarias.

	20	Asistente de Fiscal IV	Técnico
	5	Asistente de Fiscal III	Técnico
	5	Asistente de Fiscal II	Técnico
	2	Secretario Ejecutivo	Técnico
	2	Conductor	Asistencial
	3	Secretario Administrativo	Asistencial

ARTÍCULO 11°. Vigencia y Derogatoria. La presente rige a partir de su promulgación y publicación en el Diario Oficial y deroga el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000 y todas las disposiciones que le sean contrarias.

11. PROPOSICIÓN

Con fundamento en las anteriores consideraciones, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 5 de 1992, presento ponencia y en consecuencia solicito a la Honorable Comisión Primera del Senado de la República dar **Primer Debate** al **Proyecto de Ley No. 446 de 2021 Senado – 283 de 2019 Cámara. "Por medio del cual se sustituye el Título XI "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones".,** conforme con el siguiente texto propuesto.

Cordialmente,

SANTIAGO VALENCIA
Senador de la República

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
Comisión Primera del Senado

Proyecto de Ley No. 446 de 2021 Senado – 283 de 2019 Cámara.

"Por medio del cual se sustituye el Título XI "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones".

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:

TÍTULO XI.

DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO I.

DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES

Artículo 328. Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. El que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, acceda, capture, mantenga, recolecte, use, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, trafique o de cualquier otro modo se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta y tres mil setecientos cincuenta (43.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la práctica de cercenar aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras), y descartar el resto del cuerpo al mar.

Artículo 328A. Tráfico de Fauna. El que trafique, mercadee, adquiera, exporte y de cualquier forma comercialice los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de trescientos (300) hasta cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la exportación o comercialización de aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras).

Artículo 328B. Caza Ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, cazare, excediere el número de piezas permitidas o cazare en época de veda, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de treinta y tres (33) a novecientos treinta y siete (937) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.

Artículo 328C. Pesca ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese o almacene ejemplares o productos de especies vedadas, protegidas, en cualquier categoría de amenaza, o en áreas de reserva, o en zona prohibida, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a las que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que:

1. Utilice instrumentos, artes y métodos de pesca no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente, para cualquier especie.

2. Modifique, altere o atente, los refugios o el medio ecológico de especies de recursos hidrobiológicos y pesqueros, como consecuencia de actividades de exploración o explotación de recursos naturales.

3. Construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ciénagas, lagunas, caños, ríos y canales.

Parágrafo: La conducta descrita en este artículo no será considerada delito si la misma se ajusta a los condicionamientos y requisitos señalados en la Resolución 649 de 2019 expedida por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) o aquella que la derogue o sustituya, para la pesca de subsistencia.

Artículo 329. Manejo ilícito de especies exóticas. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, trasplante, manipule, siembre, hibride, comercialice, transporte, mantenga, transforme, experimente, inocule o propague especies silvestres exóticas, invasoras, que pongan en peligro la salud humana, el ambiente o las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 330. Deforestación. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente tale, queme, corte, arranque o destruya áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará a la mitad cuando:

1. Cuando la conducta se realice para fines de ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal.

2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.

Artículo 330A. Promoción y financiación de la deforestación. El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte, arranque o destrucción de áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará a la mitad cuando:

1. Cuando la conducta se realice para fines de ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal.

2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.

Artículo 331. Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos. El que con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, importe, manipule, experimente, posea, inocule, comercialice, exporte, libere o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos, moléculas, substancias o elementos que pongan en peligro la salud o la existencia de los recursos fáunicos, florísticos, hidrobiológicos, hídricos o alteren perjudicialmente sus poblaciones, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 332. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 332A. Tenencia o transporte de mercurio. El que con incumplimiento de la normatividad existente importe, tenga, almacene, transporte, use o comercialice mercurio, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO II.

DE LOS DAÑOS EN LOS RECURSOS NATURALES

Artículo 333. Daños en los recursos naturales y ecocidio. El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o cause un impacto ambiental grave o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título o a los que estén asociados con estos, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo se entiende por ecocidio, el daño masivo y destrucción generalizada grave y sistémica de los ecosistemas.

Parágrafo 2°. Por impacto ambiental grave se entenderá, la alteración de las condiciones ambientales que se genere como consecuencia de la afectación de los componentes ambientales, eliminando la integridad del sistema y poniendo en riesgo su sostenibilidad.

CAPÍTULO III.

DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Artículo 334. Contaminación ambiental. El que con incumplimiento de la normatividad existente provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertimientos, radiaciones, ruidos, depósitos, o disposiciones al aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas superficiales, marítimas o subterráneas o demás recursos naturales en tal forma que contamine o genere un efecto nocivo en el ambiente, que ponga en peligro la salud humana y los recursos naturales, incurrirá en prisión de sesenta y nueve (69) a ciento cuarenta (140) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en este artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.
2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por la normatividad existente o haya infringido más de dos parámetros.
3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, depósitos, emisiones o disposiciones.
4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.
5. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de control y vigilancia de la autoridad competente.
6. Cuando la contaminación sea producto del almacenamiento, transporte, vertimiento o disposición inadecuada de residuo peligroso.

Artículo 334A. Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo. El que provoque, contamine o realice directa o indirectamente en los recursos de agua, suelo, subsuelo o atmósfera, con ocasión a la extracción o excavación, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años, y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 335. Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice experimentos con especies, agentes biológicos o bioquímicos que constituyan, generen o pongan en peligro la supervivencia de las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO IV.

DE LA INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Artículo 336. Invasión de áreas de especial importancia ecológica. El que invada, permanezca así sea de manera temporal o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en área de reserva forestal, ecosistemas de importancia ecológica, playas, terrenos de bajamar, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, parque nacional natural, área o ecosistema de interés estratégico, área protegida, definidos en la ley o reglamento incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.

Artículo 336A. Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica. El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.

CAPÍTULO V.

DE LA APROPIACIÓN ILEGAL DE BALDÍOS DE LA NACIÓN

Artículo 337. Apropiación ilegal de baldíos de la nación. El que se apropie, usurpé, use, ocupe, utilice, acumule, o destine baldíos de la nación con fines de expansión ilegal de la frontera agrícola, para ganadería en zonas no permitidas, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos.

Parágrafo: La conducta descrita en este artículo no será considerada delito si la misma se ajusta a los condicionamientos y requisitos señalados en la ley 160 de 1994, así como en el Decreto Ley 902 de 2017 para la adjudicación de bienes baldíos.

Artículo 337A. Financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación. El que promueva, financie, ordene, dirija, o suministre medios para la apropiación de baldíos de la nación sin cumplimiento de los requisitos legales con fines de expansión ilegal de la frontera agrícola, para ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los bienes muebles, inmuebles o semovientes encontrados en los baldíos ilegalmente apropiados.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos.

CAPÍTULO VI.

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 338. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando:

a) Cuando la conducta se cometa en ecosistemas naturales que hagan parte del sistema nacional o regional de áreas protegidas, en ecosistemas estratégicos, o en territorios de comunidades étnicas. Con excepción de las conductas consagradas en los artículos 336 y 336A.

b) Cuando la conducta se cometa contra especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana o de especies vedadas, prohibidas, en período de reproducción o crecimiento, de especial importancia ecológica, raras o endémicas del territorio colombiano. Con excepción de la conducta contemplada en el artículo 328C.

c)Cuando con la conducta se altere el suelo, el subsuelo, los recursos hidrobiológicos, se desvíen los cuerpos de agua o se afecten ecosistemas marinos, manglares, pastos marinos y corales.

d)Cuando la conducta se cometiere por la acción u omisión de quienes ejercen funciones de seguimiento, control y vigilancia o personas que ejerzan funciones públicas.

e) Cuando la conducta se cometiere por integrantes de grupos delictivos organizados o grupos armados organizados o con la finalidad de financiar actividades terroristas, grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley, grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a sus integrantes.

f) Cuando la conducta se cometa mediante el uso o manipulación de herramientas tecnológicas.

g) Cuando con la conducta se ponga en peligro la salud humana.

h) Cuando con la conducta se introduzca al suelo o al agua sustancias prohibidas por la normatividad existente o se realice mediante el uso de sustancias tóxicas, peligrosas, venenos, inflamables, combustibles, explosivas, radioactivas, el uso de explosivos, maquinaria pesada o medios mecanizados, entendidos estos últimos como todo tipo de equipos o herramientas mecanizados utilizados para el arranque, la extracción o el beneficio de minerales o la distribución ilegal de combustibles.

i)Cuando se promueva, financie, dirija, facilite o suministre medios para la realización de las conductas. Con excepción de las conductas contempladas en los artículos 330A, 336A y 337A.

j) Cuando con la conducta se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies.

Artículo 339. Modalidad Culposa. Las penas previstas en los artículos 333, 334, 334A de este código se disminuirán hasta en la mitad cuando las conductas punibles se realicen culposamente.

ARTÍCULO 2. Modifíquese el numeral 14 del artículo 58 de la ley 599 del 2000, el cual quedará así:

Artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad.

(…)

14. Cuando se produjere un daño ambiental grave, una irreversible modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales o se cause la extinción de una especie biológica.

ARTÍCULO 3. Adiciones al inciso segunda del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, las siguientes conductas punibles:

Artículo 68A. Exclusión de los beneficios y subrogados penales.
(…)
Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaiga sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; abigeato enunciado en el inciso tercero del artículo 243; extorsión; homicidio agravado contemplado en el numeral 6 del artículo 104; lesiones causadas con agentes químicos, ácidos y/o sustancias similares; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objeto peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonales; aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables; tráfico de fauna; deforestación; promoción y financiación de la deforestación; daños en los recursos naturales y ecocidio; e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

ARTÍCULO 4. Adiciónese un numeral 33 al artículo 35 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

(…)

33. De los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, tráfico de fauna, deforestación, promoción y financiación de la deforestación, daños en los recursos naturales y ecocidio, e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

ARTÍCULO 5. Adiciónese un parágrafo al artículo 91 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así:

(…)

Parágrafo. Cuando se hubiese suspendido o cancelado la personería jurídica de que trata este artículo, la persona natural o jurídica estará inhabilitada para constituir nuevas personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público, con el mismo objeto o actividad económica a desarrollar, hasta que el Juez de Conocimiento tome una decisión definitiva en la sentencia correspondiente.

ARTÍCULO 6. Adiciónese un parágrafo 2 al artículo 92 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así:

Parágrafo 2. Tratándose de los delitos contemplados en el título XI del Código Penal, el juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.

ARTÍCULO 7. El artículo 302 de la Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo inciso que quedará así:

Cuando la captura en flagrancia se produzca en ríos o tierra donde el arribo a la cabecera municipal más cercana sólo puede surtirse por vía fluvial o siempre que concurran dificultades objetivas de acceso al territorio como obstáculos geográficos, logísticos, ausencia de infraestructura de transporte o fenómenos meteorológicos que dificulten seriamente el traslado del aprehendido, se realizarán todas las actividades para lograr la comparecencia del capturado ante el juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin que en ningún caso exceda las 36 horas siguientes, contadas a partir del momento de la llegada al puerto o municipio más cercano, según el caso. La autoridad competente deberá acreditar los eventos descritos en el presente inciso.

ARTÍCULO 8. **Dirección de Apoyo Territorial.** Créase en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Apoyo Territorial adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana, la que tendrá como función principal liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presenta efectiva de la Entidad en territorios apartados o de difícil acceso, sin perjuicio de la competencia de otras Direcciones sobre la materia.

La Dirección de Apoyo Territorial estará conformada por:

Unidad	Cantidad	Cargo	Niveles
Dirección de Apoyo Territorial	1	Director Nacional I	Directivo
	2	Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito	Profesional
	20	Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional
	1	Profesional Experto	Profesional
	2	Profesional Especializado II	Profesional
	2	Profesional De Gestión III	Profesional
	12	Investigador Experto	Profesional
	10	Profesional Investigador III	Profesional
	9	Profesional Investigador II	Profesional
	9	Profesional Investigador I	Profesional
	10	Técnico Investigador IV	Técnico
	10	Técnico Investigador III	Técnico
	20	Asistente de Fiscal IV	Técnico
	5	Asistente de Fiscal III	Técnico
	5	Asistente de Fiscal II	Técnico
	2	Secretario Ejecutivo	Técnico
	2	Conductor	Asistencial
	3	Secretario Administrativo	Asistencial

ARTÍCULO 9°. **Dirección de Apoyo Territorial.** Adiciónese el artículo 36A al Decreto Ley 016 de 2014, el cual quedará así: La Dirección de Apoyo Territorial cumplirá las siguientes funciones:

1. Liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presencia efectiva de la Entidad en territorios apartados o de difícil acceso, en aquellas zonas afectadas por fenómenos criminales de alto impacto y por la presencia de grupos armados organizados.
2. Apoyar la investigación, especialmente actos urgentes, en aquellos fenómenos priorizados que se den en territorios donde la Fiscalía General de la Nación no tenga presencia permanente o sean de difícil acceso.
3. Definir los lugares en los que se podrá actuar por medio de grupos itinerantes, con base en criterios geográficos y no en la división político-administrativa, así como en el análisis de la criminalidad del país, la presencia de organizaciones criminales, los tiempos de desplazamiento al lugar de comisión de la conducta punible, la oferta de servicios de justicia por parte de otras entidades, entre otros factores.
4. Conformar grupos especializados de investigadores y analistas expertos en los fenómenos criminales priorizados por la Dirección.
5. Realizar proceso de articulación de la estrategia territorial con otras entidades públicas.
6. Designar fiscales itinerantes en aquellos procesos sobre fenómenos priorizados, con el fin que apoyen, impulsen y asesoren a los fiscales titulares con el fin de lograr una efectiva judicialización.
7. Conformar equipos móviles de la Entidad, en los que periódicamente se reciban denuncias de los habitantes del territorio nacional y se brinde atención a las víctimas de las conductas punibles en territorios apartados o zonas de alto impacto o presencia de grupos armados organizados.
8. Organizar y adelantar comités técnico-jurídicos de revisión de las situaciones y los casos para la ejecución de acciones en el desarrollo efectivo y eficiente de las investigaciones penales de su competencia.
9. Dirigir y coordinar los grupos de trabajo, los departamentos y unidades que se conformen para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Dirección.
10. Dirigir, coordinar y controlar la incorporación y aplicación de políticas públicas en el desarrollo de las actividades que cumplen los servidores, dependencias y los grupos de trabajo que estén a su cargo, de acuerdo con los lineamientos y las orientaciones que impartan las dependencias competentes.
11. Identificar y delimitar situaciones y casos susceptibles de ser priorizados y proponerlos al Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos.
12. Ejecutar los planes de priorización aprobados por el Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos en lo de su competencia.
13. Apoyar, en el marco de sus competencias, a la Dirección de Políticas y Estrategia en el análisis de la información que se requiera para sustentar la formulación de la política en materia criminal.
14. Mantener actualizada la información que se registre en los sistemas de información de la Entidad, en los temas de su competencia.
15. Consolidar, analizar y clasificar la información de las investigaciones y acusaciones adelantadas por los servidores y grupos de trabajo a su cargo y remitirla a la Dirección de Políticas y Estrategia.
16. Dirimir, de conformidad con la Constitución y la ley, los conflictos de competencia que se presenten entre la Fiscalía General de la Nación y los demás organismos que desempeñen funciones de Policía Judicial, en el ámbito de su competencia.
17. Dirimir los conflictos administrativos que se presenten al interior de la Fiscalía en el ejercicio de las funciones o en la asignación de investigaciones, en los casos y según las directrices y lineamientos impartidos por el Fiscal General de la Nación.
18. Asesorar a las dependencias de la Fiscalía General de la Nación que cumplen funciones investigativas y acusatorias en los temas de su competencia.
19. Elaborar e implementar los planes operativos anuales en el ámbito de su competencia, de acuerdo con la metodología diseñada por la Dirección de Planeación y Desarrollo.
20. Aplicar las directrices y lineamientos del Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación.
21. Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el Fiscal o Vicefiscal General de la Nación.

ARTÍCULO 10°. Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. Créase en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente adscrito a la Delegada contra la Criminalidad Organizada, la que tendrá como función principal la investigación y judicialización de los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y las demás conductas delictivas conexas o relacionadas, sin perjuicio de la competencia de las Direcciones Seccionales sobre la materia.

La Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente estará conformada por:

Unidad	Cantidad	Cargo	Niveles
Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	1	Director Nacional I	Directivo
	2	Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito	Profesional
	20	Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional
	1	Profesional Experto	Profesional
	2	Profesional Especializado II	Profesional
	2	Profesional De Gestión III	Profesional
	12	Investigador Experto	Profesional
	10	Profesional Investigador III	Profesional
	9	Profesional Investigador II	Profesional
	9	Profesional Investigador I	Profesional
	10	Técnico Investigador IV	Técnico
	10	Técnico Investigador III	Técnico
	20	Asistente de Fiscal IV	Técnico
	5	Asistente de Fiscal III	Técnico
	5	Asistente de Fiscal II	Técnico
	2	Secretario Ejecutivo	Técnico
	2	Conductor	Asistencial
	3	Secretario Administrativo	Asistencial

ARTÍCULO 11°. Vigencia y Derogatoria. La presente rige a partir de su promulgación y publicación en el Diario Oficial y deroga el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000 y todas las disposiciones que le sean contrarias.

Cordialmente,

SANTIAGO VALENCIA
Senador de la República

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

I S S N 0 1 2 3 - 9 0 6 6

AÑO XXX - Nº 602 | Bogotá, D. C., miércoles, 9 de junio de 2021 | EDICIÓN DE 26 PÁGINAS

DIRECTORES: GREGORIO ELJACH PACHECO, SECRETARIO GENERAL DEL SENADO, www.secretariasenado.gov.co; JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO, SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA, www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

SENADO DE LA REPÚBLICA

PONENCIAS

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE LEY NÚMERO 446 DE 2021 SENADO – 283 DE 2019 CÁMARA

por medio del cual se sustituye el Título XI "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones.

Bogotá D.C., 8 de junio de 2021.

Honorable Senador
Miguel Ángel Pinto
Presidente
Comisión Primera del Senado
Ciudad

Respetado Presidente,

En cumplimiento de la designación que nos hizo la Mesa Directiva de la Comisión Primera, nos permitimos rendir **informe de ponencia para SEGUNDO debate** al Proyecto de Ley No. 446 de 2021 Senado – 283 de 2019 Cámara. "Por medio del cual se sustituye el Título XI "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones"

1. ANTECEDENTES

La iniciativa fue presentada al Congreso de la República el día 30 de octubre de 2019, por el Honorable Representante a la Cámara por Bogotá Juan Carlos Lozada Vargas, quien fue su ponente y tras discusión fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera de Cámara el 12 de junio de 2020. Posteriormente, fueron designados como ponentes para segundo debate los Honorables Representantes Juan Carlos Lozada Vargas, Buenaventura León León, Edward David Rodríguez Rodríguez, Erwin Arias Betancur, Juanita Maria Goebertus Estrada, Carlos German Navas Talero, Luis Alberto Alban Urbano, Jorge Enrique Burgos Lugo, quienes presentaron ponencia favorable a la plenaria de la Cámara, para su posterior aprobación por parte de la corporación el pasado 6 de abril de 2021.

El 5 de mayo de 2021, mediante oficio de secretaria de la Comisión Primera de Senado, fui informado de la designación que la Mesa directiva mediante Acta MD-25 la cual había resuelto designarme como ponente para primer debate en la Comisión primera de Senado del Proyecto de Ley No. 446 de 2021 Senado – 283 de 2019 Cámara. "Por medio del cual se sustituye el Título XI "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones".

Finalmente, el pasado jueves 27 de mayo de 2021, fue discutido, votado y aprobado el proyecto de ley, con tres proposiciones avaladas que formuló la Senadora Angélica Lozano. Dichas proposiciones estaban orientadas a incluir un segundo parágrafo que excluyera al campesinado a ser criminalizado. Es bien sabido que los procesos de adjudicación de baldíos han sido la vía para otorgar por más de 4 décadas, acceso progresivo y legítimo de tierras a campesinos, indígenas y comunidades afro en el marco de las reformas agrarias y mucho más en la actualidad, con los compromisos pactados en el Acuerdo de Paz.

Así mismo, debido a la temática y la discusión del Proyecto de Ley en la Comisión primera del Senado, la Mesa Directiva resolvió designar un número mayor de ponentes para segundo debate, en los que se encuentran los Honorables Senadores: Angelica Lozano, Soledad Tamayo, German Varón Cotrino, Luis Fernando Velazco, Roosvelt Rodríguez, Eduardo Emilio Pacheco, Carlos Eduardo Guevara, Alexander López, Gustavo Petro, Julián Gallo, Roy Barreras, Armando Benedetti, y como coordinador ponente a Santiago Valencia González.

Así las cosas, los diferentes ponentes y asesores tras reuniones que se adelantaron desde 31 de mayo de 2021, han trabajado modificado y acordado el texto que se propone en esta ponencia, en el que se observaron y estudiaron las siguientes solicitudes:

Ser acordó que para el artículo 328 se debe adicionar el verbo rector "acceder" con el fin de proteger los recursos genéticos, toda vez que, la forma de uso de estos recursos se hace es a través del "acceso", por ello, la única forma para usar estos recursos es a través de los contratos de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados en Colombia, regulados por la Decisión Andina 391 "Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos".

Respecto del artículo 328A Tráfico de Fauna, se decide incluir "sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente", con el objetivo de acotar en mayor medida cuales serían las actividades que serían punibles y evitar en ese sentido la criminalización de actividades económicas y de sustento para comunidades, por solicitud de la Senadora Soledad Tamayo y del Senador

Carlos Eduardo Guevara. Por otra parte, acogiendo los argumentos del Senador Eduardo Emilio Pacheco se eliminó el verbo rector “mercadee”.

Sobre el 328B Caza Ilegal se resuelve dejarlo como el aprobado por la comisión primera de senado.

El 328C Pesca Ilegal, se corrige y se elimina del parágrafo el número de la Resolución 649 de 2019 expedida por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), y se ajusta que debe existir una especial protección y no criminalización de la pesca de subsistencia. En este sentido se ajusta el parágrafo siguiendo las recomendaciones del Senador Velasco y la Senadora Angelica Lozano.

Respecto del artículo 329 Manejo ilícito de especies exóticas, se determinó dejarlo como se aprobó en la Comisión Primera de Senado.

Con relación al artículo 330 Deforestación, y 330A Promoción y financiación de la Deforestación, la Senadora Angélica Lozano y el Senador Alexander López, solicitan la eliminación del artículo, sin embargo, luego de discusiones y entrega de argumentos en el marco de la preparación de la ponencia se ajusta el texto acorde con lo presentado a continuación en el pliego de modificaciones y en el texto final, en tanto el objetivo principal de las proposiciones era evitar que se criminalizaran a los campesinos o poblaciones étnicas de los territorios, para en este caso desarticular los autores intelectuales y directos responsables del fenómeno de aumento de la desforestación y no a los campesinos y población civil en general. Finalmente, el Senador Velasco advierte que el agravante presentado en el numero respecto a “minería ilegal” podría ser contraproducente debido que afectaría a quienes se encuentran en la informalidad.

El artículo 331 Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos se mantiene igual, así mismo el 332 Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.que son de minería como actualmente están en el Código Penal.

Con relación a los artículos 337 Apropiación ilegal de baldíos de la nación y 337A Financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación, se decide eliminar el parágrafo 2º debido a que el parágrafo uno se ilustra de forma suficiente las exclusiones existentes en el marco de este tipo penal, específicamente para los campesinos indígenas, y comunidades afro que se encuentren en el marco de normativas contentivas de reformas agrarias y lo estipulado en el Acuerdo de Paz.

En relación con las proposiciones no avaladas de la Senadora Angélica Lozano y el Senador Alexander López contentivas de sus preocupaciones por la disminución de herramientas de negociación en el curso del proceso penal, se les manifestó que existían otras herramientas de exclusión de responsabilidad para evitar criminalizar a campesinos, pescadores artesanales, mineros artesanales y comunidades étnicas e indígenas, sin embargo, el Senador Alexander López reitera la proposición correspondiente a la supresión de la inclusión de nuevos tipos penales Artículo 68ª, correspondiente a Exclusión de los beneficios y subrogados penales para los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables; tráfico de fauna; deforestación; promoción y financiación de la deforestación; daños en los recursos naturales y ecocidio; e invasión de áreas de especial importancia ecológica, en tanto no existe evidencia que corrobore que esta acción disminuya la comisión del tipo penal y preocupa porque no parece obedecer a la función restaurativa de la pena, desconoce el hacinamiento carcelario e imprime elementos que desincentivan desarticular a las organizaciones criminales atacando al eslabón más débil.

Finalmente se solicita la modificación de los artículos 8 y 10 correspondientes a Dirección de Apoyo Territorial y la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y se acoge una nueva redacción, en tanto se pretende determinar que los equipos que refuercen la investigación penal en materia de protección ambiental, obedezcan a criterios de mérito, transparencia, sea un equipo interdisciplinario y se dé prioridad a un concurso de méritos para proveer el personal junto con la estrategia de articulación de la Agencia Nacional de defensa Judicial del Estado para que el estado ejerza una más efectiva defensa en la protección ambiental.

Igualmente, por acuerdo de los ponentes, se acoge la solicitud hecha por el Senador Luis Fernando Velasco, en el sentido de retirar del proyecto las materias relacionadas con la minería, debido a que por la complejidad social de este tema se podría terminar criminalizando a los pequeños mineros que al no poseer título minero se hallan en una situación de informalidad.

Conforme a esto, se decide suprimir el artículo 332 A Tenencia o Transporte de Mercurio, en atención a que en la actualidad existen medidas de tipo legal y administrativo que restringen y prohíben el uso de esta sustancia, y la creación de un tipo penal supondría la criminalización de la pequeña minería, ancestral y de subsistencia, que actualmente se encuentra en procesos de transición a través de transferencia tecnológica para dejar de usar mercurio.

Bajo esta misma concepción, se retiran las referencias a la (minería) pequeña minería, ancestral y de subsistencia, de los artículos 330 Deforestación, 330A Promoción y financiación de la deforestación y del 338 Circunstancias de agravación punitiva en su literal H.

2. OBJETO

El Proyecto de Ley reforma las disposiciones contenidas en el título XI “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, Capítulo único “Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente” de la Ley 599 de 2000 “Código Penal”, con el objetivo de establecer nuevos tipos penales e incluir circunstancias de agravación punitiva que permitan aumentar la protección existente, mejorar la coordinación interinstitucional e incrementar las sanciones penales, como respuesta a los actuales fenómenos que causan daños devastadores en el agua, la biodiversidad y el medio ambiente como interés nacional principal y prevalente de Colombia.

En este orden de ideas, se busca la ampliación de los verbos rectores mediante los cuales se pueda configurar el supuesto de hecho en las figuras delictivas, con el fin de brindar mayores herramientas para la correcta tipificación de las conductas.

Con el aumento de las circunstancias de agravación punitiva, se resalta la importancia de los ecosistemas estratégicos y áreas protegidas, así como de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, hídricos, biológicos o genéticos y en general de los recursos biológicos de la biodiversidad colombiana.

En consecuencia, esta modificación normativa implica la agravación de las consecuencias penales establecidas para los tipos contemplados en el título XI “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, Capítulo único “Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente” de la Ley 599 de 2000 “Código Penal” que con mayor impacto y frecuencia afectan el bien jurídico protegido, situación que se contempla como medida de política criminal que se observa como ejemplarizante e incide en la prevención del delito.

Por medio de la creación de los nuevos tipos penales de tráfico de fauna, deforestación, promoción y financiación a la deforestación, financiación de áreas de especial importancia ecológica, apropiación ilegal de baldíos de la nación y financiación de la apropiación ilegal de baldíos de la nación, se busca luchar contra nuevos fenómenos que causan grave afectación a los recursos naturales y el medio ambiente, nuestra selva tropical húmeda y bosques.

3. ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

Esta iniciativa es de la autoría del Representante a la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Lozada Vargas, y cuenta con el apoyo de las carteras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca y, la Fiscalía General de la Nación.

En ese sentido se busca aportar a las diversas estrategias que deben ser desarrolladas para proteger el medio ambiente, esto incluye las estrategias que se encuentran en marcha por parte del Gobierno Nacional como la operación «Artemisa».

Adicionalmente es necesario referenciar el CONPES 4021 de 2020 dentro de las estrategias que adelanta el Gobierno Nacional en materia de políticas conjuntas intersectoriales, multidimensionales y sistémicas para aportar en la vía de contrarrestar la deforestación y promover la gestión sostenible de los bosques que ocupan aproximadamente el 52% del territorio.

Esta política nacional, reseñó que el control efectivo de los delitos que representan un alto riesgo para el medio ambiente y recursos naturales, ostentan debilidades técnicas y administrativas, lo que hace difícil su aplicación y judicialización. Es así como en esta política se establecen planes de acción, estrategias y líneas de acción, dentro de la cuales se destacan la 4 y 9, por la cual se fortalecen las capacidades administrativas, técnicas y legales de las autoridades que intervienen en la prevención, investigación, judicialización y control de delitos ambientales.

Es pertinente señalar que este proyecto de ley representa una de las acciones para fortalecer la protección al ambiente, reiterando que debe operar de forma articulada con las políticas del actual Gobierno, sin desconocer que existen acciones pendientes de ser ejecutadas como las contenidas en el fallo judicial que declaró el Amazonas como sujeto de derechos y el fortalecimiento de la eficiencia de las demás normativas que tengan como objetivo la protección en materia ambiental.

En consonancia con lo anteriormente expuesto, se busca que, con entes de control y entidades de gobierno, se establezcan acciones de coordinación para fortalecer las capacidades administrativas, técnicas y operacionales del CONALDEF, según las funciones que ostente, en busca de la integración de información que permita la toma de decisiones articuladas para luchar contra la deforestación y estructuración de indicadores para realizar seguimiento a programas, planes y estrategias.

Es así, como por medio de un trabajo conjunto, se busca la creación de una política de protección ambiental integral, previniendo amenazas internas y externas de los recursos naturales, evitando que economías ilícitas y otro tipo de aprovechamientos deterioren el ecosistema colombiano.

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La Constitución Política de Colombia a través de su artículo 79 estableció el derecho más colectivo de los humanos: el derecho a gozar de un ambiente sano, determinando que es deber del Estado, proteger la diversidad e integridad del ambiente y las áreas de especial importancia ecológica.

A fin de materializar dicho mandato, una de las medidas adoptadas en pro de darle alcance al artículo 79 Constitucional, fue la de incluir en el Código Penal como delito

aquellas conductas que generen un daño o pongan en riesgo los recursos naturales tanto renovables como no renovables del país.

Sin embargo, ante las nuevas dinámicas sociales, políticas y económicas que afronta el planeta, es necesario robustecer la lucha en contra de la alteración y destrucción del ambiente, corrigiendo los actuales tipos penales que han resultado ineficaces y no proporcionales, e introduciendo prohibiciones a conductas que, a pesar de no encontrarse tipificadas, producen un impacto ambiental negativo en la biodiversidad del país, sin perder de vista que la lucha contra la desforestación no puede criminalizar a la población sino que debe obedecer a prevenir los delitos como herramienta disuasiva y desarticular las estructuras que vienen causando daños en el ambiente.

5. FUNDAMENTO JURÍDICO DEL PROYECTO DE LEY.

La Cumbre de Naciones Unidas reunida en Estocolmo en 1972, determinó que la protección del medio ambiente debía tener alcances de protección penal[1]. Desde entonces la comunidad internacional ha emprendido avances legales pertinentes.

Fue así como por medio de la Ley 23 de 1973, se le concedieron facultades extraordinarias al presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente, y se señalan principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo.

En consecuencia, se expidió el Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente señalando al ambiente como patrimonio común, por lo cual el Estado y los particulares tienen como deber participar en su preservación y manejo, igualmente, regula el manejo de los recursos naturales renovables y no renovables, la defensa del ambiente y sus elementos.

Posteriormente, Colombia incluyó en el Código Penal de 1980 los tipos penales ambientales como herramientas útiles para proteger el medio ambiente en los artículos 242, 243, 244, 245, 246 y 247 del título III de ese código.[2]

Desarrollando esta tendencia internacional, la Constitución de 1991 de manera innovadora consagró el deber de proteger al medio ambiente como unos de los pilares del Estado Social de Derecho, es así como en los artículos 79 y 80[3] de la Constitución Nacional se establecen las bases que fundamentan la protección al medio ambiente y a los recursos naturales, asimismo, se crearon mecanismos populares que buscan proteger de manera efectiva, eficaz y ágil cualquier afectación hacia este.

En desarrollo de estos derechos fundamentales al medio ambiente, la Corte Constitucional como guardiana de la constitución y los derechos fundamentales, mediante sentencia T-536 de 1992, manifestó la importancia y alcance del derecho a un medio ambiente sano, así:

"*El ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho Constitucional fundamental, pues su violación atenta directamente contra la perpetuación de la especie humana y, en consecuencia, con el derecho más fundamental del hombre: la vida. El derecho a la salud y a la vida son derechos fundamentales porque son esenciales al hombre, la salud se encuentra ligada al medio ambiente que le rodea y que dependiendo de las condiciones que éste le ofrezca, le permitirá desarrollarse económica y socialmente a los pueblos, garantizándoles su supervivencia. Existen unos límites tolerables de contaminación que al ser traspasado constituyen un perjuicio para el medio ambiente y la vida, que no pueden ser justificables y por lo tanto exigen imponer unos correctivos.*

La Corte reiterando su postura, con particular énfasis en la Sentencia C-535 de 16 de octubre de 1996, expresa sobre el patrimonio ecológico local:

"El Congreso puede establecer una legislación básica nacional que evite el deterioro del patrimonio ecológico municipal y proteja el derecho al medio ambiente en ese ámbito local, pues la garantía de ese derecho de la persona no puede quedar sujeta al albur de que la autoridad indígena o el concejo municipal o distrital expidan o no la correspondiente regulación. La competencia de los municipios y las autoridades indígenas en relación con el patrimonio ecológico local no es entonces exclusiva sino concurrente con la normatividad básica nacional que el Congreso expida sobre la materia."

En este mismo sentido, en sentencia C-259 de 2016, la Corte Constitucional realizó un estudio de la protección constitucional que recae sobre el medio ambiente y los recursos naturales, entendiéndolo como un bien jurídico que se expresa como principio, derecho colectivo y derecho-deber, al respecto enfatizó:

1 Jackson, P. De Estocolmo a Kyoto: Breve Historia del Cambio Climático. Naciones Unidas, Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. 2018.
2 *Decreto – Ley 100 de 1980 [Presidente de la República de Colombia]. Por medio del cual se expide el nuevo Código Penal. Febrero 20 de 1980. Artículos 242, 243, 244, 245, 246 y 247. [Título III].*

3 *El artículo 79 de la Constitución Política establece: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano (…) Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de esos fines".*
El artículo 80 de la Constitución Política establece: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".

"La Constitución Ecológica lleva implícita el reconocimiento al medio ambiente de una triple dimensión: 'de un lado, es un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación. De otro lado, aparece como el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales. Y, finalmente, de la Constitución Ecológica [se] derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares. Es más, en varias oportunidades, este Tribunal ha insistido en que la importancia del medio ambiente en la Constitución es de tal magnitud que implica para el Estado 'unos deberes calificados de protección' (…)" (C-595 de 2010).

Retomando la legislación interna, en busca de una mayor protección al medio ambiente, se expide la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reorganiza el sector público encargado de la conservación del medio ambiente y se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Con el fin de reglamentar parcialmente la Ley 99 de 1993, se expide el Decreto 1753 de 1994, el cual define la licencia ambiental: naturaleza, modalidad y efectos; contenido, procedimientos, requisitos y competencias para el otorgamiento de las licencias ambientales. De igual forma, con el objetivo de incorporar el Convenio sobre Diversidad Biológica hecho en Río de Janeiro de junio 5 de 1992, se aprobó la Ley 165 de 1994.

En desarrollo de la legislación ambiental, llega la Ley 491 de 1999, estableciendo el seguro ecológico y modificando los delitos contra los recursos naturales y el ambiente y modifica en lo relacionado con el bien jurídico del medio ambiente y los recursos naturales señalados en el Código Penal.

Con la Ley 599 de 2000, el código penal contempló nuevos delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, de manera novedosa se incluyeron aspectos sobre la bioseguridad, la biotecnología y el manejo de microorganismos, lo cual denotaba una mejor comprensión e inclusión de los diferentes factores ambientales, por ejemplo, se decidió tener en cuenta la protección de las especies en vía de extinción para su preservación.

Con dicha ley se creó, entre otros la explotación de yacimiento minero o hidrocarburo con el objetivo de castigar penalmente a quienes afecten el agua, el suelo, subsuelo o la atmósfera cuando se desarrollen actividades que contienen esos elementos. De manera general se contempló un aumento punitivo en las conductas delictivas que ya eran parte del ordenamiento jurídico y se crearon otras situaciones con el ánimo de preservar los recursos naturales, fue un gran avance en la materia, debido a que en los artículos 328 al 339 consagró 11 tipos penales, al igual que la modalidad culposa de dos de ellos. Además, se continuó con la línea que había planteado la Ley 491 de 1999, al incluir un título aparte para los delitos ambientales[4].

Adicionalmente, la más reciente reforma al Código Penal en esta materia fue a través de la Ley 1453 de 2011. Por medio de esta norma, se modificaron e introdujeron artículos que agudizan el castigo contra los recursos naturales y el medio ambiente. Por ejemplo, se introdujeron tipos penales como el 332A, que hace referencia a la contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos, es de destacar que esta, ha sido la única modificación que hasta el momento ha sufrido el capítulo XI del Código Penal.

Con la expedición de la Ley 1453 de 2011, se amplían los tipos penales o delitos en contra del medio ambiente y en otros eventos, se aumentan las sanciones que tienen por objeto dar una mayor protección a los recursos naturales que hacen parte del Medio Ambiente, esto con el fin de prevenir y sancionar las actividades humanas que desborden la esfera del derecho administrativo, en la explotación de los recursos no renovables en Colombia y que suscitan mayor gravedad en el manejo de residuos ordinarios, explotaciones de yacimientos mineros, el uso ilícito de agentes biológicos o bioquímicos, o de especies exóticas y que va dirigido en general a todas las empresas que con sus actividades puedan causar daños en el medio ambiente o los recursos naturales, las cuales deberán tener un mayor cuidado en el respeto y cumplimiento de los trámites y autorizaciones ambientales, así como en la ejecución de esas actividades, ante el reproche considerable que llega con los nuevos tipos de delitos medio ambientales[5].

Dado que el Estado necesitaba contar con un organismo técnico que se encargara de la administración y manejo del Sistema de Parques Naturales y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, mediante el Decreto 3572 de septiembre 27 de 2011, se creó la Unidad Administrativa Especial denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia, la cual se encuentra adscrita al Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En febrero de 2012 de la Unidad Especial para Delitos Ambientales por parte de la Fiscalía General de la Nación, que tiene como objeto la investigación penal en contra de particulares que afecten los recursos naturales y pongan en riesgo el Medio Ambiente nacional, escenario que junto a la reforma de la Ley 1453 de 2011 se

4 *Gómez L. La criminalización de delitos ambientales en Colombia: una combinación de aspectos clásicos y modernos del derecho penal. Visto en: https://cienciasjuridicas.javeriana.edu.co/documents/3722972/11719235/6.+Gomez+Joves.pdf/3d197596-a51c-4a24-9faf-51797a2ad9cb*
5 *Díaz M. LA PROTECCIÓN JURÍDICO – PENAL DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DELITO AMBIENTAL EN COLOMBIA. Universidad Santo Tomás. Bogotá 2015. Rescatado de: https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/405/la%20proteccion%20juridico-penal%20del%20medio%20ambiente%20y%20el%20delito%20ambiental%20en%20colombia.pdf?sequence=1*

constituyó como un paso fundamental, en el reproche penal de toda forma de uso y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales de la biodiversidad colombiana fuera del marco del desarrollo sostenible.

A fin de proteger el medio ambiente y especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica continental y marina costera, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expide Resolución 1912 de 15 de septiembre de 2017, en la cual, se establece un listado oficial de especies silvestres amenazadas, crea criterios para categorizar su riesgo, entre otras disposiciones.

Por medio de este listado, se puede destacar que en Colombia hay 1.203 especies amenazadas desde distintas categorías, en las que 173 se encuentran en peligro crítico, 390 en peligro y 640 especies en categoría vulnerable. 407 corresponden a especies de animales y 796 a especies de plantas[6].

Existen más de 70 especies de aves en riesgo; el Cóndor de los Andes es uno de ellos, sin embargo, se estima que en Colombia tan sólo quedan unos 60 aproximadamente, la cacería es una de las principales amenazas. Cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, indican que en 2017 fueron incautados 23.605 animales; una gran cantidad de ellos fueron sacados de su hábitat para luego ser vendidos en el exterior.

Se calcula que en el país hay alrededor de 30.000 especies, de las cuales 7.500 están en alguna categoría de amenaza; un dato que resulta preocupante, pues problemáticas como la deforestación pueden generar que esta cifra vaya en aumento.

Los bosques de Colombia además de conservar alta biodiversidad, brindan un importante flujo de bienes, servicios y valores culturales para el bienestar de comunidades locales que habitan y dependen de estos ecosistemas, y soportan el desarrollo nacional de múltiples actividades económicas. Asimismo, los bosques del país contribuyen a la seguridad alimentaria de millones de personas, como fuentes importantes de alimentos, energía e ingresos.

De acuerdo con las cifras oficiales de monitoreo de la superficie de bosque y la deforestación generadas por el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (IDEAM, 2020), la superficie de bosque reportada para el territorio continental e Insular del país para el año 2019 es de 59,8 millones de hectáreas, equivalentes al 52,5% del territorio nacional, muy por arriba del promedio mundial, reportado como 31% de la superficie global (FAO, 2020). Estos cerca de 60 millones de hectáreas de bosque natural, ubican a Colombia como el 3er país de Suramérica con mayor área en bosques. Los bosques naturales de Colombia representan el 1,5% de la superficie forestal global, pero son el soporte y condición por la cual el país es catalogado como el segundo con mayor biodiversidad en el mundo.

La Amazonía Colombiana representa la mayor proporción de bosques naturales del país, con 39.6 millones de hectáreas de bosque (66%), los Andes con 11.3 millones de hectáreas de bosque (19%), seguido por las regiones del Pacífico con 5.5 millones de hectáreas de bosque (9%), Orinoquía con 2.121.189 hectáreas de bosque (4%) y Caribe con 1.7 millones hectáreas de bosque (3%) (IDEAM, 2020).

Colombia perdió 2.678.195 hectáreas de bosque en los últimos diecinueve años, es decir en el periodo 2000-2019. Para este periodo las mayores superficies deforestadas se concentraron entre los años 2016 a 2019; siendo el año 2017 el de mayor superficie deforestada con 219.552 hectáreas. Estos resultados permiten identificar una reducción de la deforestación del 19% entre el año 2018 y 2019, mientras que entre el año 2017 y 2018 había sido del 10%, lo cual confirmaba una tendencia de reducción de este flagelo en el país.

A escala regional, la pérdida en la cobertura de bosque natural, en los últimos 19 años, se concentró principalmente en las regiones de la Amazonía (58%), Andes (18%) y Caribe (11%). La región de la Amazonía es la que presenta la mayor deforestación, con la acumulación de 1,64 millones de hectáreas en el período 2000-2019. Cinco departamentos presentaron el 63% de la deforestación nacional acumulada para el período 2000-2019, Caquetá (22%), Meta (16%), Guaviare (11%), Antioquia (8%) y Putumayo (7%). En lo referente al nivel municipal, en los últimos 5 años (2014 -2019), según la información disponible se identificó que en la jurisdicción de 15 municipios se concentró el 57% de la deforestación acumulada nacional. Los municipios de mayor deforestación en Colombia son: San Vicente del Caguán (90.971 ha), Cartagena del Chairá (86.836 ha), San José del Guaviare (60.402 ha), La Macarena (60.319 ha), Puerto Guzmán (30.598 ha) y Calamar (31.267 ha).

En este sentido, por medio de esta Política Nacional para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques se establecieron cuatro líneas estratégicas las cuales contienen temáticas relacionadas con la educación y gestión del conocimiento, orientados a fortalecer la conciencia y participación ciudadana sobre la importancia de los bosques para el desarrollo regional y nacional.

Así mismo, la Constitución Política, en su artículo 80, establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, en tal sentido deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

6 Cifras de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – UICN.

Expuesto lo anterior, es necesario señalar que es vital fortalecer las herramientas para contrarrestar el flagelo del aprovechamiento ilegal de los recursos naturales y el medio ambiente.

6. NECESIDAD E IMPORTANCIA DE LA PRESENTE REFORMA AL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES.

Así las cosas, el legislador de 2000, al dictar las normas relativas al Código Penal vigente, consagró en el actual Título XI, las violaciones contra los recursos naturales y el medio ambiente, tipificando las 13 conductas que hoy constituyen delitos, entre los que hay tres con modalidad culposa.[7]

Visto lo anterior, la legislación colombiana ejerce tutela penal sobre el bien jurídico en materia de medio ambiente, la que se ejerce de manera directa y autónoma con los tipos penales arriba señalados, en los que muchos tienen las características propias del peligro abstracto. Lo anterior en razón a las consideraciones legales constitucionales e internacionales que rigen la materia y que obligan al Estado colombiano a hacerlo.

A pesar de la importancia que representa para el Estado Colombiano el bien jurídico en comento, la realidad, incluso a nivel mundial, es que nos encontramos ante una serie de problemáticas que han incidido en el detrimento significativo del medio ambiente, situación que exige la toma urgente de medidas eficaces y pertinentes que puedan frenar las devastadoras consecuencias derivadas de problemáticas como la contaminación del aire, el incremento de la pérdida de la diversidad biológica, el cambio climático, la degradación de la tierra, el inadecuado uso de las aguas, entre otros escenarios que ha llevado a la «*degradación ambiental*»[8].

Entendiendo el bien jurídico como "*un interés vital para el desarrollo de los individuos de una sociedad determinada que adquiere reconocimiento jurídico*"[9], para el caso particular puede entenderse el bien jurídico protegido – el derecho al medio ambiente y gozar de los recursos naturales – como uno de carácter colectivo, pues no sólo ampara al sujeto en su esfera individual, sino que protege los presupuestos sociales requeridos para el goce y disfrute de ese bien tutelado.

Siguiendo lo anterior, puede afirmarse que en Colombia "de acuerdo con la forma en la que se han redactado los delitos ambientales, se evidencia que el Título XI no sólo se ocupa de los delitos contra el medio ambiente (tal como el artículo 335), sino que integra, igualmente, delitos para la defensa del equilibrio de los recursos naturales (tal como el artículo 329 C.P)".[10]

Lo anterior hace referencia a asegurar que la satisfacción de las necesidades actuales se realice de una manera tal que no comprometa la capacidad y el derecho de las futuras generaciones para satisfacer las propias.

A pesar de la amplia gama de protección jurídica que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, las agresiones al medio ambiente se manifiestan cada vez con mayor fortaleza y su impacto denota la necesidad de implementar los mecanismos necesarios para prevenir y combatir efectivamente los daños ecológicos que resultan de estas graves acciones.

Colombia perdió 2.678.195 hectáreas de bosque en los últimos diecinueve años, es decir en el periodo 2000-2019. Para este periodo las mayores superficies deforestadas se concentraron entre los años 2016 a 2019; siendo el año 2017 el de mayor superficie deforestada con 219.552 hectáreas. Estos resultados permiten identificar una reducción de la deforestación del 19% entre el año 2018 y 2019, mientras que entre el año 2017 y 2018 había sido del 10%, lo cual confirmaba una tendencia de reducción de este flagelo en el país. No obstante, si la superficie deforestada retorna a valores similares a los del año 2017, antes del año 2025 Colombia habrá perdido más de 8% de su territorio con bosques naturales, es decir; cerca de 20 mil kilómetros cuadrados.

El presente proyecto de ajuste no pretende modificar la concepción teórica que la ley colombiana aplica, con respecto a los daños contra el medio ambiente y los recursos naturales en materia penal. Se trata, fundamentalmente, de afinar los tipos penales a las conductas dañinas que en la actualidad ponen en peligro el bien jurídico protegido y cuyos verbos rectores tal y como se encuentran definidos en la legislación vigente, no describen a cabalidad.

Por lo anterior, se considera importante que se adicionen verbos rectores los cuales se adecuen a la realidad de los comportamientos recurrentes que hoy por hoy están poniendo en grave peligro el medio ambiente en Colombia, en consecuencia, los nuevos verbos pueden introducirse dentro de los tipos penales ya existentes.

En el mismo sentido, y dada la creciente y alarmante degradación del medio ambiente y el mal uso de los recursos naturales por mano humana, resulta importante aumentar las penas y las multas actualmente vigentes, para aquellas de frecuente ocurrencia y mayor impacto en el bien jurídico tutelado, toda vez que,

7 Son los artículos 331, 332 y 333.

8 La degradación ambiental "es la percepción de una situación o estado no satisfactorio con respecto a sus condiciones iniciales, de una parte, o la totalidad del Medio Ambiente". Bayón Martínez, Pablo, El Medio Ambiente, el Desarrollo Sostenible y la Educación, Revista Educación, Editorial Pueblo y Educación, No 105, enero-abril 2002/Segunda Época, Pág. 5.

9 Kierszendaum, M. "El bien jurídico en el derecho penal, algunas nociones básicas desde la óptica de la discusión actual". Lecciones y ensayos. No. 86, 2009, P. 188.

10 Gómez, L. "La criminalización de delitos ambientales en Colombia: una combinación de aspectos clásicos y modernos del derecho penal". En Universitas, ISSN 1794-5216, Nº. 21, 2020, P. 145.

mayores sanciones podrán disminuir la ascendente curva de daños, muchas veces irreparables.

Por las mismas razones, es importante establecer nuevas circunstancias de agravación punitiva, entre ellas; cuando la conducta se cometa en ecosistemas naturales que hagan parte del sistema nacional o regional de áreas protegidas, en reservas forestales de la Ley 2 de 1959, en ecosistemas estratégicos, ecosistemas de páramo que se encuentren dentro de la delimitación establecida o en territorios colectivos de comunidades étnicas, cuando la conducta se cometiere por la acción u omisión de quienes ejercen funciones de control y vigilancia, persona que ejerza funciones públicas o por integrantes de grupos delictivos organizados o grupos armados organizados, cuando se promueva, financie, dirija, facilite o suministre medios para la realización de las conductas contenidas en el título que se pretende reformar, entre otras.

Se destaca además la reciente, declaración[11] conjunta realizada por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente y la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quienes enfatizaron en los desafíos relacionados con la pandemia Covid-19 y la crisis medioambiental mundial, en la que indicaron: *"Pedimos a los Estados que refuercen sus leyes, políticas, programas y reglamentos medioambientales. Los Estados tienen la obligación de prevenir nuevos daños y de establecer fuertes marcos institucionales, cumpliendo las obligaciones contenidas en los instrumentos regionales y universales de derechos humanos, en particular, las contenidas en el Protocolo de San Salvador y el Acuerdo de Escazú".*

Considerando lo mencionado, existe la necesidad de incorporar el tráfico de fauna, deforestación, promoción y financiación de la deforestación, financiación de invasión de áreas de especial importancia ecológica, apropiación ilegal de baldíos de la nación y financiación de la apropiación ilegal de baldíos de la nación, como nuevos tipos penales, pues su ausencia representa dificultades en la implementación de medidas de control y sanción para evitar mayores deterioros en la situación medioambiental.

7. ALGUNOS ASPECTOS PUNTUALES

Exclusión de beneficios y subrogados penales.

11 http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/198.asp

Los bosques juegan un papel fundamental al regular el ciclo del agua, constituir el hábitat de miles de especies de fauna y flora, reducir los efectos del cambio climático, ayudar a evitar derrumbes y deslizamientos, proteger los suelos, y ser territorio de vida para las comunidades que los habitan, por lo que su protección y conservación es indispensable.

Pese a esto, la actividad del hombre ha conllevado un deterioro considerable sobre los mismos, especialmente por la deforestación con ocasión de sus diferentes motores (identificados por el IDEAM en los resultados de monitoreo de la deforestación en 2019 como: praderización, cultivos ilícitos, extracción ilícita de minerales, malas prácticas de ganadería extensiva, infraestructura de transporte no planificada, tala ilegal y ampliación de frontera agrícola en áreas no permitidas).

Así las cosas, la situación actual de la degradación del recurso forestal en Colombia es alarmante, el Ministerio de Ambiente en el "Estado del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables 2017-2018" explica que los cambios en los bosques y los suelos colombianos corresponden a la dinámica socioeconómica de cada región. La susceptibilidad de la degradación de los suelos por salinización alcanza el 46,6% del área continental e insular de Colombia, lo que demanda implementar prácticas de manejo sostenible, el uso de acuerdo con la oferta natural de los suelos, mantener la cobertura vegetal, entre otras. Por su parte la deforestación implicó, de acuerdo con el IDEAM 2019, la pérdida de 158.894 hectáreas, de las cuales 98.256 correspondieron a la Amazonía, 25.213 a la Región Andina, 14.120 al Pacífico, 12.791 al Caribe y 8.513 a la Orinoquía; si a este total de hectáreas deforestadas se suma el total de hectáreas registradas en 2017 (219.973) y 2018 (197.159) se obtiene que durante los últimos tres años se deforestaron 576.026 hectáreas.

Las áreas protegidas se han visto gravemente afectadas por la problemática, registrándose que en 2019 el 7% de la deforestación nacional se presentó en áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, concentrándose la mayor parte en el Parque Natural Nacional Tinigua (6.527 ha) y en el Parque Natural Nacional Sierra de la Macarena (2.173 ha).

Ante esta situación la legislación penal no puede ser ajena, es necesario ajustarla a los mandatos constitucionales y compromisos internacionales en materia de recursos naturales y medio ambiente, lo que requiere una actualización que corresponda a la realidad nacional y al impacto de las conductas en la sociedad, de manera que se debe robustecer la lucha contra la afectación y destrucción de los recursos naturales.

Se planteó en proyecto de ley en trámite, la exclusión de beneficios y subrogados penales como elemento disuasivo, de las conductas de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, tráfico de fauna, deforestación, promoción y financiación de la deforestación, daños en los recursos naturales y ecocidio, e invasión de áreas de especial importancia ecológica, que impactan negativamente la biodiversidad del país, es decir, la prevención general negativa, sin embargo, luego de extensos debates en las reuniones de ponencia se expresaron preocupaciones en relación con la falta de efectividad del mecanismo de eliminación de los beneficios y subrogados penales, en tanto constituyen un elemento de negociación clave en el proceso penal acusatorio y en otros delitos incluidos no mostraron mayores resultados.

La suspensión de la ejecución de la pena solo aplica para los delitos con pena inferior a 4 años; y en este caso los delitos ampliaron su pena, con esta reforma la pena inferior oscilaría en 60 meses, es decir, que con o sin eliminación de subrogados, no se aplicaría la suspensión de la ejecución de la pena.

En relación con la prisión domiciliaria aplica para los delitos con pena de privación máxima de 8 años, de manera que en los delitos ambientales con más de un agravante de plano no tendrían acceso al beneficio, ello junto a los demás requisitos necesarios para que se pueda acceder al mismo acorde con la normativa penal. Finalmente es clave señalar que parte de los ponentes reseñaron que el derecho penal debe actuar como última ratio y no se puede perder de vista el tema del hacinamiento que afronta nuestro país en materia carcelaria junto con la poca efectividad que tuvo la inclusión de más tipos penales en el artículo 68A, ello sin perjuicio de las posturas de algunos de los ponentes que dentro del debate respaldaron mantener la inclusión como elemento disuasivo.

En conclusión, existiendo división en los ponentes se decide por mayorías la eliminación del artículo 68A, esto con el fin de avanzar en la radicación de la ponencia, y que seguramente ya en la discusión de la plenaria se pueda o no reabrir su discusión.

Aumento Punitivo.

Mediante sentencia C-365/12 la Corte Constitucional reconoció que:

"*La Corte ha sostenido que el derecho penal se enmarca en el principio de mínima intervención, según el cual, el ejercicio de la facultad sancionatoria criminal debe operar cuando las demás alternativas de control han fallado. Esta preceptiva significa que el Estado no está obligado a sancionar penalmente todas las conductas antisociales,* ***pero tampoco puede tipificar las que no ofrecen un verdadero riesgo para los intereses de la comunidad o de los individuos; como también ha precisado que la decisión de criminalizar un comportamiento humano es la última de las decisiones posibles en el espectro de sanciones que el Estado está en capacidad jurídica de imponer, y entiende que la decisión de sancionar con una pena, que implica en su máxima drasticidad la pérdida de la libertad, es el recurso extremo al que puede acudir al Estado para reprimir un comportamiento que afecta los intereses sociales.*** *En esta medida, la jurisprudencia legitima la descripción típica de las conductas sólo cuando se verifica una necesidad real de protección de los intereses de la comunidad. De allí que el derecho penal sea considerado por la jurisprudencia como la* ***última ratio*** *del derecho sancionatorio". (Resaltado fuera de texto)*

En el mismo sentido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia rad 33254 feb. 2013, señaló que:

"Si bien es verdad que la sociedad en el estado actual de su desarrollo acude a las penas como medio de control social, también lo es que a ella sólo puede acudirse como último recurso, pues el derecho penal en un Estado democrático sólo tiene justificación como la ultima ratio que se ponga en actividad para garantizar la pacífica convivencia de los asociados, previa evaluación de su gravedad, la cual es cambiante conforme a las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales imperantes en la sociedad en un momento determinado".

De manera más reciente, en la sentencia C-233/19 el máximo órgano de la jurisdicción constitucional destacó que:

"En la medida en que los dispositivos penales son altamente invasivos por comprometer directamente la libertad individual, su utilización debe ser excepcional, de modo que, en principio, sólo es constitucionalmente admisible recurrir a esta vía cuando las demás herramientas jurídicas de intervención social han fracasado. Así, la criminalización constituye "la última de las decisiones posibles en el espectro de sanciones que el Estado está capacidad jurídica de imponer, y entiende que la decisión de sancionar con una pena, que implica en su máxima drasticidad la pérdida de la libertad, es el recurso extremo al que puede acudir el Estado para reprimir un comportamiento que afecta los intereses sociales" y "sólo debe acudirse al derecho penal, con su efecto limitativo de las libertades individuales, cuando no exista otro medio de protección de los bienes jurídicos que resulte menos invasivo (…) la criminalización de una conducta solo puede operar como ultima ratio".

Ante tal panorama, el presente Proyecto de Ley propone un aumento punitivo de las penas contempladas en el en el título XI "*De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente*", Capítulo único "*Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente*" de la Ley 599 de 2000 "*Código penal*" para aquellas conductas en las se evidencia la necesidad del incremento del componente sancionatorio, como medida de política criminal, dicho planteamiento encuentra sustento precisamente en la realidad expuesta referente a aquellas conductas criminales de mayor impacto frente al bien jurídico protegido, que demuestran la necesidad de modificación más allá de los fundamentos que dieron legitimidad a la creación originaria del tipo penal.

La intensificación de la incidencia negativa en los derechos fundamentales, basa su legitimidad entre otros, bajo la óptica del principio de proporcionalidad, escenario

compatible con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que en sentencia C-420 de 2002 advirtió:

[…] las normas penales se caracterizan precisamente porque a un supuesto de hecho adscriben una sanción consistente en una pena o en una medida de seguridad, según el caso. De allí que al introducir una modificación a la pena se esté variando el contenido de la norma penal pues se está alterando la naturaleza o la intensidad de la respuesta que el Estado da al delito con fines de prevención y resocialización. Esa variación en la naturaleza o en la intensidad de la pena plantea la reconsideración de los presupuestos político-criminales valorados por el legislador penal y es jurídicamente relevante en cuanto la pena, al lado del delito, es una institución nuclear del derecho penal que comporta la legítima privación o restricción de derechos a que se somete a quien ha sido encontrado responsable de una conducta punible.

En igual tendencia, se ha establecido que *"tratándose de la modificación de la norma jurídico penal para incrementar los límites de su componente sancionatorio, el aumento de la pena, en sí mismo,* ***representa una medida de política criminal, que además de impactar negativamente el derecho fundamental a la libertad personal, implica una adición a las valoraciones concernientes a la correlación entre la gravedad del delito y de la pena****. Ese plus de ninguna manera podría estar cobijado por los fundamentos legitimantes de la creación originaria del tipo penal"* (C-108/2017).*(resaltado fuera de texto)*

Quiere decir lo anterior, que la agravación de la consecuencia penal establecida en el momento de creación del tipo requiere un análisis de proporcionalidad independiente y es regida por parámetros diversos a los aplicados en el momento de su creación.

En ese sentido, cabe destacar los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional en materia de medio ambiente, toda vez que la política gubernamental plantea el fortalecimiento de la lucha contra la deforestación, la implementación de la política nacional de Economía Circular, la reducción de las emisiones de Gases Efecto Invernadero en un 51 % en el período 2021-2030, la masificación de programas de transporte limpio y energías renovables sostenibles y la firma de importantes y coyunturales acuerdos como el Pacto de Leticia y la radicación en el Congreso de la República del Acuerdo de Escazú.

El Pacto de Leticia por la Amazonía fue firmado por los Jefes de Estado de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam, mediante el cual se reconoce la importancia de la Amazonia como ecosistema estratégico y fuente del 20 por ciento del agua dulce del planeta, en el cual viven más de 34 millones de personas. El acuerdo contempla 52 acciones claves para su cumplimiento.

Este panorama, abonado a las estadísticas de deforestación y los visibles impactos ambientales que sufre la biodiversidad colombiana, representa un contexto ostensiblemente diferente al plasmado inicialmente en la Ley 599 de 2000 y la reforma correspondiente a la Ley 1453 de 2011, situación que soporta el aumento punitivo propuesto, fundamentado en los criterios objetivos que conservan la proporción entre el bien jurídico protegido del medio ambiente, los recursos naturales y las sanciones a aplicar a los mismos.

Acorde con estadísticas obtenidas de datos abiertos de la Fiscalía General de la Nación contenidos en la ponencia de la Gaceta Nº 427 correspondiente al informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley número 446 de 2021 senado – 283 de 2019 cámara, es preciso tener como uno de los elementos de referencia las estadísticas que se derivan de los registros del SPOA en los periodos temporales 2010-2020, donde se advierte que bien sea por actos urgentes, asistencia judicial, compulsa de copias, de oficio (informes), denuncias o peticiones especiales; los delitos con mayores noticias criminales corresponden al Art 328 C.P. Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, el Art 331 C.P. Daños en los recursos naturales y el Art 332 C.P. Contaminación ambiental, lo que nos lleva a realizar una primera aproximación donde se pueden concluir que las herramientas existente en materia de tipicidad no han sido lo suficientemente eficaces para lograr una disuasión y prevenir la comisión de conductas que atenten contra el bien jurídicamente tutelado. Tal escenario justifica la necesidad del incremento punitivo para estas conductas, a fin de incidir en la prevención del delito, y lograr el objetivo final que es la protección del *los recursos naturales y el medio ambiente.*

Por lo anterior y como medida disuasiva se propuso en el proyecto de ley un aumento punitivo para la pena privativa de libertad:

DELITO	PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD ACTUAL	PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD AUMENTADA 25%
Artículo 328. Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables	48 - 108 Meses	60-135 Meses
Artículo 328 A. Tráfico de Fauna.		60-135 Meses
Artículo 330. Deforestación.		60- 144 Meses
Artículo 330 A. Promoción y financiación de la Deforestación.		96-180 Meses
Artículo 333. Daño en los recursos naturales y ecocidio.	48-108 Meses	60 – 135 Meses
Artículo 334. Contaminación ambiental.	55-112 Meses.	69-140 Meses

DELITO	PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD ACTUAL	PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD AUMENTADA 25%
Artículo 336 A. Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica.		96 – 180 Meses
Artículo 337. Apropiación ilegal de baldíos de la nación.		60 – 144 Meses
Artículo 337 A. Financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación.		96 – 180 Meses

En consecuencia, se determinaron cambios en este nivel que podrán encontrarse en el pliego de modificaciones y texto final propuesto.

En cuanto al aumento de las multas:

DELITO	MULTA ACTUAL	MULTA AUMENTADA 25%
ARTICULO 328. APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES.	Hasta 35.000 smlmv	De 134 a 43.750 smlmv
ARTÍCULO 328 A. TRÁFICO DE FAUNA.		300 a 40.000 smlmv
ARTICULO 336. CAZA ILEGAL.	26.6 a 750 smlmv	33-937 smlmv
ARTÍCULO 328 C. PESCA ILEGAL.	Hasta 50.000 smlmv	134 – 50.000 smlmv
ARTÍCULO 329. MANEJO ILÍCITO DE ESPECIES EXÓTICAS.	133.33 – 15.000 smlmv	167 – 18.750 smlmv
ARTÍCULO 330. DEFORESTACIÓN.		134 – 50.000 smlmv

DELITO	MULTA ACTUAL	MULTA AUMENTADA 25%
ARTÍCULO 330 A. PROMOCIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA DEFORESTACIÓN.		300 – 50.000 smlmv
ARTÍCULO 331. MANEJO Y USO ILÍCITO DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS, MICROORGANISMOS Y SUSTANCIAS O ELEMENTOS PELIGROSOS.	133.33 -15.000 smlmv	167-18.750 smlmv
ARTÍCULO 333. DAÑOS EN LOS RECURSOS NATURALES Y ECOCIDIO.	133.33 – 15.000 smlmv	167 – 18.750 smlmv
ARTÍCULO 334. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.	140 – 50.000 smlmv	Sin aumento
ARTÍCULO 335. EXPERIMENTACIÓN ILEGAL CON ESPECIES, AGENTES BIOLÓGICOS O BIOQUÍMICOS.	133.33 – 50.000 smlmv	134 – 50.000
ARTICULO 336. INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA	133.3 - 50.000 smlmv	134 – 50.000 smlmv
ARTÍCULO 336 A. FINANCIACIÓN DE INVASIÓN A ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA.		300 – 50.000 smlmv
ARTÍCULO 337. APROPIACIÓN ILEGAL DE BALDÍOS DE LA NACIÓN.		140 – 50.000 smlmv
ARTÍCULO 337 A. FINANCIACIÓN DE LA APROPIACIÓN ILEGAL DE LOS BALDÍOS DE LA NACIÓN.		300 – 50.000 smlmv

En consecuencia, se determinaron cambios en este nivel que podrán encontrarse en el pliego de modificaciones y texto final propuesto.

El aumento punitivo corresponde, además, a contribuir con los elementos que permitan a la Fiscalía General de la Nación como titular de la acción penal, sustentar

y demostrar la urgencia de la imposición de medidas de aseguramiento en los términos previstos en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, ante la especial gravedad y relevancia de lo que revisten estas conductas, ante el aumento punitivo que se propone.

Se debe tener en cuenta, que la reforma propuesta conserva la simetría ya establecida entre las conductas contempladas en la parte especial del Código Penal y las penas establecidas aumentándolas conforme al daño social causado.

El incremento punitivo está atado a la política criminal del Estado, y con ello no se vulnera el principio de proporcionalidad, pues además se debe tener en cuenta la oportunidad que pretende establecerse por medio de la rebaja de pena contemplada para la reparación ecológica del daño como pilar fundamental de la iniciativa, que busca superar la eficacia simbólica y transformarse realmente en una herramienta capaz y real de prevenir los crímenes y enfrentar los problemas sociales complejos relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales.

Así las cosas, la reforma propuesta no desconoce la naturaleza del derecho penal como *última ratio*, ni resulta desproporcionado pues constituye un ejercicio constitucionalmente admisible de la libertad de configuración del legislador, quien, al realizar una nueva graduación de las consecuencias punitivas, busca afrontar un fenómeno criminológico de devastadoras consecuencias.

Razón por la cual decide aumentar los límites punitivos de estos delitos para alcanzar la prevención general de unas conductas especialmente reprobables, por la incidencia que tienen en los presupuestos básicos a través de los cuales se reconcilian las relaciones del hombre y de la sociedad con la naturaleza, a partir del mandato específico que apela por su conservación y protección.

Por tanto, se propone un aumento de penas mínimas y máximas para las conductas señaladas, con el objetivo de mantener una proporcionalidad razonable entre la sanción correspondiente a estos delitos y la del resto de conductas contempladas en el Código Penal.

8. APECTOS RELEVANTES

DEL DELITO DE TRÁFICO DE FAUNA

El tráfico animal es uno de los negocios ilícitos más dañinos y rentables del mundo. Este delito contra la naturaleza mueve entre 10.000 y 20.000 millones de euros cada año, una cifra equiparable a la que mueve el tráfico de armas y de drogas. El tráfico de especies es un crimen de dimensiones internacionales, con una demanda creciente y cuyas sanciones siguen siendo poco rigurosas a pesar de que pone en grave riesgo la supervivencia de animales en peligro de extinción y está aniquilando la vida salvaje en muchos países.

En Colombia, la situación es realmente preocupante. Además, hay que tener en cuenta que el país tiene 54.871 especies registradas de animales, plantas, hongos y microorganismos, convirtiéndose en el segundo más biodiverso del mundo.

La riqueza de la vida silvestre de Colombia ha hecho irresistible esta actividad para los traficantes ilegales de animales. El comercio de animales protegidos es la tercera industria ilegal más grande de Colombia después del narcotráfico y la trata de personas (y ocupa el cuarto lugar mundial, tras el tráfico de drogas, armas y personas). Aves exóticas, monos, ranas, tortugas, pitones: animales que son buscados ya sea como mascotas, por su carne, presuntos atributos afrodisiacos o por su piel son cazados ilegalmente. Según las cifras más recientes, tan solo en 2017 los funcionarios colombianos y grupos de rescate de la vida salvaje recuperaron a más de 23.000 animales de los traficantes.

En Colombia existen diferentes modalidades para la comisión de dicha conducta, e inclusive apoyados en las nuevas tecnologías se ha identificado por parte de la Fiscalía General de la Nación grupos en redes sociales destinados al tráfico de fauna silvestre. A través de diferentes actos de investigación la Fiscalía General de la Nación ha recopilado información detallada que permitió conocer con exactitud cómo están estructuradas las redes delincuenciales, zonas de injerencia, modus operandi, fuentes de financiamiento y hechos delictivos puntuales que comprometen a integrantes de esta red delincuencial.

Estas redes delincuenciales tienen como actividades ilícitas el tráfico de animales de la biodiversidad Colombiana como lo son guacamayas, loros, micos, flamencos, toches, mirlas, canarios, tortugas, chigüiros, ardillas, entre otros; teniendo su principal injerencia delictiva en la ciudad de Bogotá D.C., lugar desde donde realizan las coordinaciones necesarias para la distribución y comercialización de especímenes de fauna silvestre, especímenes que luego son enviados desde diferentes ciudades y municipios del país, entre los que se destacan Córdoba, Cesar, Amazonas, Putumayo, Vaupés, Guaviare, Meta, Valle del Cauca, Nariño y Chocó. Estas redes delincuenciales controlan todos los aspectos relacionados con los especímenes de fauna silvestre, desde su captura, transporte, distribución y comercialización, para lo cual han desarrollado estrategias para el ocultamiento de los especímenes de fauna silvestre.

Aunado a lo anterior, se ha identificado que las principales rutas de comercialización a nivel internacional corresponden a destinos como México, los Estados Unidos (en especial los Estados de Florida, Nueva York, Texas y California), la República Dominicana y Ecuador, otra ruta a Europa (Reino Unido, Italia, Alemania, Bélgica, República Checa, Suecia, Croacia y Turquía).

La problemática estudiada va en aumento, por ende, es necesario frenar el daño que se le hace a los ecosistemas apoyando el tráfico y comercialización ilegal de especies, con este comportamiento no solo se está agotando uno de los patrimonios globales de la humanidad, sino el más importante activo que tiene el país. Se debe empezar a reflexionar y entender que los animales silvestres no pueden vivir en cautiverio, no están condicionados para hacerlo, ellos necesitan su espacio, su alimento e interactuar con individuos de su misma especie. Por las razones expuestas resulta proporcional y razonable, crear este tipo penal, entendiendo la realidad del país y la necesidad de mitigar los efectos que produce el tráfico de fauna silvestre.

DEL DELITO DE DEFORESTACIÓN

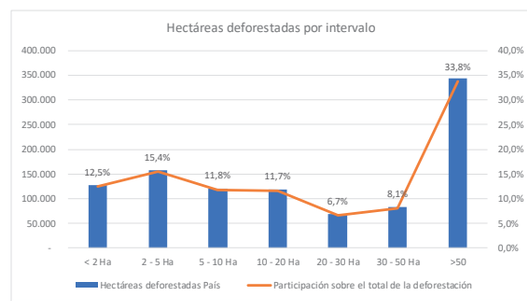
Colombia ha establecido formalmente una definición oficial de bosque natural y de deforestación. El uso formal de estas dos definiciones permite generar la información oficial de monitoreo de la superficie de bosque natural y la deforestación en Colombia, asegurando la estandarización y comprensión adecuada del fenómeno de la deforestación.

Asimismo, Colombia ha sometido formalmente las definiciones oficiales de bosque natural y deforestación a organismos internacionales como la CMNUCC, FAO y el Foro Internacional de Bosques.

- Definición de bosque: Tierra ocupada principalmente por árboles que puede contener arbustos, palmas, guaduas, hierbas y lianas, en la que predomina la cobertura arbórea con una densidad mínima de dosel de 30 %, una altura mínima del dosel (in situ) de 5 metros al momento de su edificación, y un área mínima de 1.0 Ha. Se excluyen las coberturas arbóreas de plantaciones forestales comerciales, cultivos de palma, y árboles sembrados para la producción agropecuaria.
- Asimismo, la deforestación está definida como: la conversión directa y/o inducida de la cobertura de bosque a otro tipo de cobertura de la Tierra en un periodo de tiempo determinado (DeFries et al., 2006; GOFC-GOLD, 2009).

La anterior definición, es consecuente con los criterios definidos por la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático (CMNUCC) en su decisión 11/CP.7, con la definición adoptada por Colombia ente el Protocolo de Kioto (MAVDT, 2002), así como la definición de la cobertura de bosque natural utilizada para la estimación y reporte del inventario nacional de gases de efecto invernadero.

Es importante mencionar la deforestación que se presenta en las Zonas de Reserva Forestal declaradas por la Ley 2 de 1959, estas zonas fueron establecidas para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre y aunque no son áreas protegidas, concentran el 67% de los bosques del país.



Los bosques de Colombia además de conservar alta biodiversidad, brindan un importante flujo de bienes, servicios y valores culturales para el bienestar de comunidades locales que habitan y dependen de estos ecosistemas, y soportan el desarrollo nacional de múltiples actividades económicas. Asimismo, los bosques del país contribuyen a la seguridad alimentaria de millones de personas, como fuentes importantes de alimentos, energía e ingresos, identificándose un gran potencial económico de los bosques en el país. Actualmente se aprovechan cerca de 500 especies forestales, para un consumo aparente cercano a los 3,5 millones de metros cúbicos de madera por año y un subregistro del 40 % (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020).

En contraste, en 2017, la oferta de productos del bosque y sus derivados fue de 4.844 miles de millones de pesos, lo que representó alrededor del 0,52 % del PIB del país (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2019), estas cifras evidencian la necesidad de incrementar el uso sostenible de los bosques y la participación del sector forestal y del aprovechamiento de los productos no maderables del bosque como el látex, caucho natural, fibras, entre otros, para potenciar este sector económico. Si la deforestación continúa aumentando, a 2030 Colombia podría perder alrededor de 1,5 billones de pesos del Producto Interno Bruto (PIB) y entre 1.034 y 1.670 millones de pesos en ahorros genuinos, considerando que según estimaciones del BID en 2014 se contaba con 58,8 millones de hectáreas de bosque, mientras que en 2030 se puede llegar a tener solo 48,8 millones de hectáreas de bosque(Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2017), esta situación evidencia la necesidad de tomar medidas urgentes para atender la

deforestación en el país, y también identificar e impulsar medidas que permitan desarrollar la economía forestal como se mencionó anteriormente.

Las principales causas de la deforestación en Colombia se pueden agrupar en directas y subyacentes; las causas directas se relacionan con actividades humanas que afectan directamente la superficie de bosque natural a través del aprovechamiento no sostenible, o su eliminación directa para dar paso a otros usos del suelo, por ejemplo, la ganadería extensiva, la construcción de proyectos de infraestructura vial, la ampliación de la frontera agrícola, la minería entre otras actividades extractivas. Por su parte, las causas subyacentes son factores que refuerzan las causas directas, y se refieren a las variables sociales, políticas, económicas, tecnológicas y culturales, que condicionan las relaciones existentes entre sistemas humanos y naturales.

Las personas, grupos sociales o instituciones (públicas o privadas) que, influenciadas o motivadas por una serie de causas subyacentes, toman la decisión de convertir los bosques naturales hacia otras coberturas y usos, son consideradas como agentes de deforestación. De acuerdo con la caracterización de este fenómeno realizada por el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) del IDEAM, se han identificado varios agentes, los cuales están relacionados con las causas directas de la deforestación, estos son: productor agropecuario con cultivos tradicionales, productor pecuario de gran escala, praderizador, productor agrícola de coca, productor agrícola con cultivos industriales, extractor informal o formal de minerales e hidrocarburos, constructor informal o formal de infraestructura vial, extractor informal de madera para la venta y extractor informal de madera para autoconsumo.

Esta problemática se hace más relevante si se tiene en cuenta que la deforestación en Colombia constituye una fuente importante de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), al considerar que en promedio los bosques naturales del país almacenan 124 toneladas de carbono por hectárea, contribuyendo al cambio climático. Asimismo, la deforestación trae como consecuencias la transformación y fragmentación de ecosistemas, aumenta el número de especies en condición de amenaza, altera el recurso hídrico y con ello, el abastecimiento de agua de los centros poblados, y degrada el suelo.

Resulta relevante mencionar, que de acuerdo con datos del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, se identifica indican que los núcleos activos de deforestación son áreas de distribución de 2.697 especies (569 animales y 2.128 plantas), demostrando así la alta diversidad de especies que se concentra en estas regiones del país. Por lo anterior, preocupa que la deforestación esté aumentando la presión sobre especies amenazadas y endémicas que se encuentran en estas zonas. En estos núcleos hay en total cinco especies críticamente amenazadas (CR), seis especies en peligro (EN), y 20 especies vulnerables (VU) según la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Estas cifras incluyen especies emblemáticas como el Pato morado (Netta erythrophthalma) y el Cedro (Cedrela odorata), que se encuentran críticamente amenazadas a nivel global. Adicionalmente, los núcleos activos de deforestación, coinciden con la distribución de nueve especies de animales y 106 especies endémicas de flora, es decir, con distribución limitada a nivel mundial. Esta situación es altamente crítica en los núcleos del Meta y del Chocó, que concentran un mayor número de especies endémicas (16 y 81 especies respectivamente).

La deforestación en estos dos núcleos puede estar afectando en gran medida la supervivencia de un mayor número de especies con rango de distribución limitado, así como los servicios ecosistémicos asociados. Entre las especies de plantas preocupan las de baja densidad poblacional y que son árboles maderables como el abarco (Cariniana pyriformis), el Almendro (Dipteryx oleífera), los Laureles almanegra (Magnolia spp.), el Comino (Aniba perutilis) y los Cedros (Cedrela spp.). El delito de deforestación propuesto por esta reforma, cumple con los elementos del tipo penal a la luz de las reglas jurisprudenciales sentadas por la Corte Constitucional en sentencia C-297/16, en la que se indica que:

"La norma penal está constituida por dos elementos: (i) el precepto (praeceptum legis) y (ii) la sanción (sanctio legis). El primero de ellos, es entendido como "la orden de observar un determinado comportamiento, es decir de no realizar algo o de cumplir determinada acción". El segundo, se refiere a "la consecuencia jurídica que debe seguir a la infracción del precepto". El precepto desarrolla la tipicidad de hecho punible, pues este elemento es el que contiene la descripción de lo que se debe hacer o no hacer, y, por lo tanto, del hecho constitutivo de la conducta reprochable. Ahora bien, el precepto se integra por varios elementos del tipo que conforman su estructura y que pueden ser sintetizados así: "(i) un sujeto activo, que es quien ejecuta la conducta reprochable y punible; (ii) un sujeto pasivo, que es el titular del bien jurídico que el legislador busca proteger y que resulta afectado con la conducta del sujeto activo; (iii) una conducta, que corresponde al comportamiento de acción o de omisión cuya realización se acomoda a la descripción del tipo y que generalmente se identifica con un verbo rector; y (iii) el objeto de doble entidad; jurídica, en cuanto se refiere al interés que el Estado pretende proteger y que resulta vulnerado con la acción u omisión del sujeto activo, y material, que hace relación a aquello (persona o cosa) sobre lo cual se concreta la vulneración del interés jurídico tutelado y hacia el cual se orienta la conducta del agente".

La importancia y lesividad al bien jurídico del medio ambiente y los recursos naturales deviene de tal magnitud que exige la imposición de una pena que junto a las conductas expuestas para el aumento punitivo comportan los mayores fenómenos criminológicos que deben ser atacados y sancionados penalmente por el Estado, pues sus consecuencias resultan ampliamente evidenciables, tal y como se expuso en el capítulo de justificación de este Proyecto de Ley.

La propuesta normativa, contempla una serie de agravantes propios para este nuevo tipo penal, entre los que se tipifica un aumento de una tercera parte a la mitad cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión y de igual forma, cuando fragmente ecológicamente un área de bosque natural en un lapso de tiempo de hasta seis meses en extensiones de hasta 30 hectáreas.

Dichas situaciones de agravación punitiva encuentran sustento en las dinámicas de deforestación, pues en las Zonas de Reserva Forestal de Ley 2 de 1959, para los últimos 19 años concentraron el 27% de la deforestación del país, con un acumulado de 763.155 hectáreas en pérdida de bosque. Para este tipo de áreas el pico de deforestación se presentó en los años 2017 y 2018, cuando la deforestación representó el 37% y el 34% de la pérdida de bosque en el país, respectivamente. La dinámica de pérdida de bosque a nivel nacional, pero con especial énfasis en las Zonas de Reserva Forestal Ley 2/1959, se identifica que el 42% de la deforestación nacional se presenta en parches de deforestación mayores a 30 hectáreas, no asociados a pequeña economía campesina sino a grandes intervenciones asociados a la praderización y/o acaparamiento de tierras.

De igual forma, las áreas de bosque natural que son deforestadas y convertidas en nuevas praderas introducidas, pero que posteriormente son abandonadas, son colonizadas rápidamente por otras plantas que aprovechan las nuevas condiciones de luz se convierten en áreas de regeneración natural (rastrojos bajos a altos) hasta bosques secundarios. De acuerdo con WRI este tipo de ecosistemas ocupan más de la mitad de los bosques tropicales del planeta. Recientes estudios de ecología forestal indican que pasados 20 años las áreas de bosque tropical afectadas por deforestación solo pueden recuperar hasta una tercera parte de su biodiversidad original. En términos generales se puede indicar que una vez ocurre la deforestación y se abandonan los terrenos, aunque hay una rápida recuperación en cuanto a la composición de esas especies, siendo más acelerada en los bosques húmedos tropicales que en los bosques secos, esta situación es más evidente conforme aumenta el área afectada. *(…)"*

Es además de destacar, las diferencias entre el Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables artículo 328 C.P y el nuevo tipo penal de Deforestación que se pretende implementar, en efecto, en rasgos generales referente a la Deforestación difiere del delito contenido en el artículo 328 del Código penal, por cuanto i) presenta un verbo rector diferente y ii) contempla modalidades específicas de agravación. Adicionalmente, la conducta descrita en el artículo 328 C.P se enfoca en la protección de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, hídricos, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana, mientras que la deforestación se enfoca en los individuos forestales que se encuentran en áreas de reserva forestal, parque regional, parque nacional natural, área o ecosistema de interés estratégico, área protegida, bosques naturales, manglares o baldíos de la nación.

De igual forma, es menester resaltar que, en el caso del concurso aparente de tipos penales, se han establecido una serie de reglas jurisprudenciales y dogmática penal que permita la adecuada resolución del caso de conformidad con los principios interpretativos de especialidad, subsunción, alternatividad y consunción. Así en sentencia C-464/14 la Corte Constitucional determinó:

"Adicionalmente, esta misma Corporación ha destacado, coincidiendo con la doctrina, que la solución racional del concurso aparente de tipos –para obviar el quebranto del principio non bis in ídem–, en el sentido de seleccionar la norma que resulte adecuada, impone la aplicación de los principios de especialidad, subsidiariedad y consunción, ya que uno solo de ellos ha de ser llamado a ser aplicado, de lo contrario se violaría el principio de non bis in ídem constitucional, de acuerdo con el cual un mismo comportamiento no puede ser investigado o sancionado dos veces.

Dada la dificultad que se presenta cuando hay concurso aparente para efectos de realizar una correcta adecuación típica de la conducta, la doctrina ha formulado algunos principios interpretativos que ilustran a la demandante sobre los cargos formulados y facilitan a los jueces la forma de proceder en un caso de adecuación típica complejo. Para la Sala estos principios pueden ser usados por el juzgador como parámetro interpretativo en casos de difícil definición al encuadrar correctamente el tipo penal aplicable".

Así lo ha reconocido esta Corte, en sentencia C-121 de 2012 "(…) De cualquier modo, frente al concurso aparente de normas o tipos penales, el operador jurídico, en el ámbito de su autonomía, cuenta con herramientas interpretativas como los principios de especialidad, subsidiariedad, consunción o alternatividad, cuyo cometido es enfrentar, en el plano judicial, eventuales riesgos de vulneración del non bis in ídem".

Por otro lado vale la pena destacar que resulta importante ser claros en que esta inclusión no se hará en menoscabo de los derechos colectivos de comunidades campesinas, indígenas y afro, quienes a través de la historia han ejercido un uso directo de la tierra a través de actividades agrícolas, y que en función de esas actividades tradicionales el Estado ha ido otorgando mediante reformas rurales y recientemente en el Acuerdo de Paz, mecanismos expeditos que les permiten tener un acceso progresivo de la tierra para su subsistencia en condiciones dignas. Lo anterior quiere decir, que este delito no recaerá en las actividades que por ley se han legitimado para estas comunidades, en particular lo dispuesto en la Ley 160 de 1994, la Resolución 041 de 1996 y el Decreto Ley 902 de 2017. De las anteriores normas, se destaca lo relativo al concepto de Unidad Agrícola Familiar, la cual se define como el área mínima vital que permite a una familia rural poder vivir de forma digna.

Finalmente, se debe tener en cuenta que atendiendo a los criterios consagrados en el artículo 7 de la Ley 1955 de 2019 las Autoridades Ambientales, en coordinación con otras entidades públicas, podrán celebrar acuerdos con población campesina en condición de vulnerabilidad, que habite, ocupe o realice usos tradicionales asociados a la economía campesina en áreas protegidas del SINAP que deriven su sustento de estos usos y que puedan ser reconocidos por las entidades que suscriben los acuerdos con una relación productiva artesanal y tradicional con el área protegida, con el objeto de contribuir a la atención de los conflictos de uso, ocupación y tenencia que presenten estas áreas.

DE LA APROPIACIÓN ILEGAL DE BALDÍOS DE LA NACIÓN

Un baldío es un bien inmueble que se encuentra en zonas rurales cuyo propietario es la Nación. De acuerdo a la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, los baldíos son bienes públicos de la Nación catalogados dentro de la categoría de bienes fiscales adjudicables, en razón de que la Nación los conserva para adjudicarlos a quienes reúnan la totalidad de las exigencias establecidas en la ley[12]. Por ende, de conformidad con el acuerdo No. 28 del 31 de agosto de 2017 de la Agencia Nacional de Tierras, se estableció la forma mediante la cual las personas pueden ser adjudicatarias de contratos de explotación de baldíos, así como los mecanismos mediante los que pueden asociarse con terceros para lograr ser adjudicatarios de dichos contratos.

Lo anterior, tiene un fundamento constitucional y legal que guarda relación a la función social que debe tener la propiedad dentro del Estado Social de Derecho, razón por la cual la función social de la propiedad se incorpora al contenido de ella para imponer al titular del dominio obligaciones en beneficio de la sociedad. En el caso de las tierras baldías rurales dicha función social se traduce en la obligación de explotarla económicamente y destinarla exclusivamente a actividades agrícolas y en no explotar el terreno si está destinado a la reserva o conservación de recursos naturales renovables. La función social consiste en que el derecho de propiedad debe ser ejercido en forma tal que no perjudique, sino que beneficie a la sociedad, dándole la destinación o uso acorde con las necesidades colectivas y respetando los derechos de los demás.

En consecuencia, resulta contrario al ordenamiento jurídico y atenta contra múltiples bienes jurídicamente tutelados que se utilicen los bienes baldíos de la Nación para actividades ilegales tales como la ganadería en zonas no permitidas, el acaparamiento de tierras, los cultivos de uso ilícito, la exploración o explotación ilícita de minerales, mejora o construcción de infraestructura ilegal, bajo el entendido que, no cumple la función social de la propiedad. Ahora bien, este delito conexo a la deforestación, permite que se ejecuten conductas punibles como el acaparamiento de tierra, puesto que, es un problema que ha sido identificado por todas las entidades de control, y donde los Grupos Armados Organizados -GAO- y otros agentes ilegales o terratenientes realizan estas acciones en contra del medio ambiente, aunado a la ganadería extensiva que la realizan agentes externos de gran poder económico que pagan a terceros para esta práctica ilegal.

Así las cosas, es necesario, razonable y proporcional que el Estado llegue a los espacios vacíos en que se ejecuta la apropiación ilegal de baldíos, puesto que, los fines perseguidos por el tipo penal contribuyen a la protección del medio ambiente, y lograr garantizar un orden económico y social. De igual forma, el tipo penal de financiación de la apropiación ilegal de baldíos complementa la lucha contra el crimen organizado y actividades ilegales asociadas al lavado de activos, financiamiento al terrorismo y delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales.

En reportes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, una de las preocupaciones que veían en el largo plazo para Colombia era que la expansión de los cultivos ilícitos dependía, en ciertos casos, de la falta de información estadística que hay sobre el origen y control de algunos terrenos en el país. Y puntualmente, hacían referencia a los baldíos, pues ante una gran extensión de bosques y selvas, el narcotráfico aprovecha para utilizar dichos bienes y aumentar la economía ilícita. Los factores expuestos demuestran la necesidad de buscar una prevención general en la sociedad y ayuda a contrarrestar los efectos de la criminalidad en los bienes que se buscan proteger.

Por otra parte, es importante resaltar que los baldíos son bienes de la nación que por disposición constitucional están orientados a ser adjudicados a quienes lo ocupen y cumplan con los requisitos previstos en la Ley de Reforma Agraria, en aras de garantizar la función social de la propiedad y el compromiso que tiene el Estado colombiano de garantizar el acceso progresivo a la propiedad de la tierra.

Los procesos de colonización han sido dirigidos por parte del Estado colombiano desde hace más de un siglo, desde los años 30 las distintas instituciones estatales y el Gobierno han promovido la expansión de la frontera agrícola y la colonización de familias campesinas hacia zonas no colonizadas con el ánimo de ampliar la propiedad privada en Colombia y lograr de esta manera el desarrollo productivo.

Así, ante demandas de reforma agraria, de acceso a la propiedad, redistribución y reparto de tierras, la respuesta históricamente ha sido la de asignar baldíos de la nación a comunidades rurales. En esa medida, se han generado todas estas colonizaciones y desarrollos de lo que hoy hacen parte los departamentos de la Amazonía, especialmente el departamento de Caquetá, y la zona limítrofe con el Meta, en donde todo este desarrollo se realizó a partir de colonizaciones dirigidas por parte del INCORA y luego del INCODER que datan de los años 70, y se consolidaron en los 80, es decir, que han trascurrido cerca de 4 décadas con una deuda social correspondientes a la ejecución efectiva de una reforma agraria rural integral, de formalización y de titulación.

Por ende, el derecho penal no puede ser ajeno a las realidades del Estado Colombiano y su esfuerzo para lograr la asignación de los bienes baldíos, razón por la cual, resulta fundamental que se dé estricto cumplimiento a lo estipulado en Ley 160 de 1994, así como en el Decreto Ley 902 de 2017, puesto que, esta normatividad permitirá al campesinado, las comunidades afro, raizales e indígenas, hacer uso de las herramientas que han sido provistas por la ley para que en procesos consensuados, transparentes y organizativos, se les otorgue en derecho propio, tierras que pertenecen a áreas baldías de la nación, y así, garantizar el deber constitucional del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra. De igual forma, esta normatividad busca promover y consolidar la paz, así como apoyar a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos, la población indígena y comunidades afro en los procesos de adquisición de tierras desarrollados por ellos mismos, elevando su nivel de vida y mejorando su bienestar, logrando además alcanzar justicia social y materializando la democracia participativa.

En conclusión, es de suma importancia que sea definido en el Código Penal este delito y se sancione a quien se apropia y acumula baldíos de la nación, sin que cumpla con los requisitos de Ley, o a raíz de la deforestación, sin embargo, esto no puede ir en menoscabo de los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerables que son las que habitan estas regiones apartadas y su subsistencia depende plenamente del trabajo con la tierra.

SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA.

El proyecto de ley propone adicionar al artículo 91 del Código de Procedimiento Penal un inciso que precise que cuando se hubiese suspendido o cancelado la personería jurídica de que trata este artículo, la persona natural o jurídica estará inhabilitada para constituir nuevas personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público, con el mismo objeto o actividad económica a desarrollar, hasta que el Juez de Conocimiento tome una decisión definitiva en la sentencia correspondiente.

Esta medida busca concientizar y generar una prevención para la sociedad, bajo el entendido que, en la práctica se ha evidenciado que las personas naturales utilizan a las personas jurídicas para la comisión de las conductas punibles, y una vez, han sido vinculadas a una indagación o proceso penal, estas crean o constituyen nuevas personas jurídicas para seguir desplegando la conducta delictiva, sin que se logre evitar la comisión de la misma.

De conformidad con la Sentencia C-603 del 2016, la disposición actualmente establecida en el artículo 91 C.P.P. es un instrumento de carácter procesal previsto para procurar la protección y prevención del delito.

Con la medida provisional se busca paralizar la actividad delictiva, desarrollada por personas naturales a través de organizaciones o sociedades que operan por medio de sus locales o establecimientos abiertos al público, las cuales al verse inmersas en un proceso penal pueden acudir a la creación de nuevas personas jurídicas o establecimientos que permitan la continuación de sus actividades. El Estado no puede permanecer ajeno a esta realidad y se pretende imposibilitar el adelanto de la actividad delictiva mientras se disponga el carácter definitivo de la medida adoptada, en la sentencia condenatoria, por medio de la imposibilidad de acudir a la creación o construcción de nuevas personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público.

Estas medidas pueden adoptarse con el fin de proteger no solo el interés de la sociedad sino también, en específico, el de las víctimas del proceso en curso. Hay conductas delictivas que pueden desarrollarse a través de personas jurídicas o en uso de establecimientos o locales abiertos al público, y pueden suponer una cierta violación continuada de los bienes jurídicos protegidos por la ley penal de una o varias víctimas ya presentes en una actuación procesal. Para el caso que nos ocupa, las personas jurídicas han sido utilizadas para atentar contra los recursos naturales y el medio ambiente, razón por la cual, resulta necesaria, adecuada, razonable y proporcional la adopción de la disposición señalada, para evitar la posibilidad de crear nuevas personas jurídicas y seguir ejecutando la conducta delictiva.

FORTALECIMIENTO A LA ESTRUCTURA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL ÁMBITO DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS QUE AFECTAN EL MEDIO AMBIENTE.

A continuación, es pertinente señalar: (1) la finalidad de los artículos propuestos, (2) su objeto específico.

1. Finalidad de los artículos propuestos. Los artículos 8, 9 ,10 y 11 del PL 446 de 2021 Senado – 283 de 2019 Cámara. "Por medio del cual se sustituye el Título XI "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones", tienen como finalidad: i) lograr que las medidas encaminadas a ampliar el ámbito de protección del bien jurídico medio ambiente y recursos naturales contenidas en este proyecto de ley sean efectivas, y ii) judicializar oportunamente las conductas delictivas que afecten el patrimonio biodiverso de los colombianos[13].

[12] *Corte Constitucional. Sentencia C 595 de 1995. MP. Carlos Gaviria Díaz.*

[13] Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad a nivel mundial: cuenta con 98 tipos de ecosistemas generales -incluyendo ecosistemas continentales, costeros y marinos- y alberga recursos de importancia ambiental estratégica, como arrecifes coralinos, praderas de pastos marinos, manglares, glaciares, entre

Lo anterior porque el cumplimiento de los objetivos buscados con el proyecto de ley requiere extender administrativa y operativamente la presencia del Ente Investigador y Acusador en zonas rurales, en las que actualmente no tiene presencia, aunque justamente son estos territorios los que coinciden con las zonas de mayor afectación a los recursos naturales y medio ambiente.

2. Objeto de los artículos. Con el propósito de alcanzar estas finalidades, se crean dos nuevas dependencias en la Fiscalía General de la Nación: i) la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, y ii) la Dirección de Apoyo Territorial.

Fundamentos de la reforma propuesta:

a. Aumento de delitos contra el medio ambiente. La entrada de casos por delitos medioambientales en la Fiscalía General de la Nación creció en un 23% en los últimos años. Este aumento en sí mismo evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta institucional de la Fiscalía frente a este fenómeno criminal.

b. Necesidad de fortalecer la presencia territorial. La estructura orgánica actual de la Fiscalía General de la Nación carece de un enfoque de apoyo urgente, eficiente y de alto nivel en las regiones, al tiempo que con la amplia reducción a la que se vio sometida su planta en 2017[14] no cuenta con los suficientes funcionarios para atender la necesidad de fortalecer la presencia territorial. Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación hace presencia permanente en 491 de los 1.123 municipios del país, es decir, solo tiene presencia institucional en 43% de los municipios del país. Esta circunstancia, puede afectar la realización oportuna de los actos investigativos urgentes y complementarios en aquellos delitos priorizados que requieren ese tipo de actividades, especialmente si se tiene en cuenta que muchas de estas conductas punibles ocurren en zonas de difícil acceso o en las que no está garantizada la seguridad de los investigadores y fiscales, entre otros factores. Además, se debe tomar en consideración que, la reforma del Decreto Ley 898 de 2017 redujo el número de cargos de las plantas globales de las áreas de fiscalía y de policía judicial, suprimiendo en 3172 y 1358 cargos, respectivamente[15].

c. Los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente constituyen otra manifestación de la criminalidad organizada. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, detrás de los delitos ambientales con frecuencia existe una organización criminal[16] que se lucra con estas conductas, en una proporción mucho mayor que las personas que las realizan directamente y que son más fáciles de detectar y penalizar. Adicionalmente, gran parte de los mercados criminales que anteriormente eran controlados por organizaciones al margen de la ley han pasado a ser del dominio de otras organizaciones criminales, al constituir un objeto de interés como oportunidades en materia de financiación[17]. Las regiones que más urgentemente requieren protección en materia medioambiental son en su mayoría regiones caracterizadas por la presencia de grupos armados y organizaciones criminales que se financian por medio de actividades relacionadas con delitos contra el medio ambiente, como la minería ilegal y la deforestación.

d. Necesidad de articulación de la acción especializada y presencia investigativa territorial. Por las características del país, la judicialización efectiva de los delitos ambientales solo se logra al armonizar las competencias de una dirección centralizada especializada en la investigación de ese tipo de delitos, con las de una dirección de apoyo territorial que llegue a los territorios donde ocurren los delitos. Al respecto, es importante recordar que el 42% del territorio colombiano está cubierto por la Amazonía, una región de aproximadamente 480.000 km^2, con reconocida importancia para el ecosistema global por constituir una de las principales fuentes de oxígeno y de recursos hídricos a nivel mundial[18]. Entre 2001 y 2019, el país perdió 4.34 millones de hectáreas de cobertura arbórea[19]. Según lo reportado por el SIMCI[20], en comparación con el año 2016, en el año 2018 se evidenciaron 15.000 hectáreas nuevas de área afectada por la explotación de oro de aluvión en el país[21].

Características de las dependencias creadas:

a. La estructura de cada una de las dependencias creadas, corresponde a los niveles y nomenclatura de los cargos de la Fiscalía General de la Nación establecidos mediante el Decreto Ley 017 de 2014, artículo 8. Así mismo, las características de los cargos y requisitos mínimos están regulados en la misma disposición. Con todo, se resalta que los cargos creados, en su mayoría, son fiscales, asistentes de fiscal e investigadores (de diferentes denominaciones) destinados a atender de manera exclusiva el ejercicio de la acción penal para afrontar este fenómeno criminal, mientras que, un pequeño porcentaje, se destina a cargos administrativos o de gestión para que atiendan las cargas propias del ejercicio de la función pública al interior de la Entidad.

b. Dirección especializada. Es una dependencia propuesta con la finalidad de lograr la priorización en la investigación y judicialización de los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y las demás conductas delictivas conexas o relacionadas, sin perjuicio de la competencia de las Direcciones Seccionales sobre la materia. Precisamente, es imperioso priorizar las investigaciones relacionadas con los delitos de deforestación, y otros delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, ya que constituyen la antesala a la ocurrencia de mayores fenómenos criminales. Según información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el 2018 la deforestación ilegal en Colombia afectó un área de aproximadamente 197.159 hectáreas[22] debido a fenómenos como la praderización, los cultivos de uso ilícito, la ganadería extensiva, la extracción ilícita de minerales, la infraestructura de transporte no planificada, la ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas y la tala ilegal de árboles. A su vez, en 2018 la minería ilegal[23] afectó más de 92.046 hectáreas[24] y se consolidó como una de las principales fuentes de ingresos de actores armados (disidencias de las FARC y ELN) y deterioró gravemente fuentes hídricas de importancia (por ejemplo, los ríos Cauca, Atrato y Quito).

c. Dirección de Apoyo Territorial. Esta dependencia contará con grupos de fiscales itinerantes y grupos móviles de investigación. Estos estarán concentrados en atender los actos urgentes, formular el programa metodológico y dirigir una estrategia investigativa enfocada en el caso concreto que les fue asignado. La dirección de la acción penal en esos casos recaerá en el fiscal líder del equipo, quien podrá actuar de manera articulada con los fiscales competentes en el territorio, pero deberá asumir el caso hasta la realización de la audiencia preliminar de formulación de imputación, momento a partir del cual lo entregará al fiscal que se delegue para continuar con el asunto en etapa de judicialización. Para lograr este objetivo, se requiere contar con fiscales y policías judiciales destinados a atender este tipo de casos priorizados en el territorio. Sin embargo, la planta de personal con la que actualmente cuenta la Entidad no permite suplir las vacantes requeridas para ello.

d. Grupos itinerantes. La Fiscalía General de la Nación ha implementado estrategias de grupos itinerantes con muy buenos resultados en el caso de la Unidad Especial de Investigación. La estrategia de los grupos itinerantes fue diseñada para permitir que unos funcionarios expertos en la investigación de las conductas punibles priorizadas por la Unidad[25] puedan llegar al lugar de los hechos en el menor tiempo posible luego de la ocurrencia de la conducta punible. Así, estos equipos se encargan de realizar los actos investigativos urgentes y complementarios, perfilar las víctimas y los posibles victimarios, consultar las noticias criminales abiertas que puedan estar asociadas a la investigación, definir los elementos materiales probatorios y la evidencia física recaudada en las demás investigaciones que puedan contribuir a esclarecer el hecho investigado y de ordenar la inspección a los expedientes que cuenten con información relevante. Estas actividades son complementadas con los análisis de la criminalidad en la región de ocurrencia de los hechos, a partir de lo cual se formula la hipótesis investigativa.

---

otros. Ver: Sistema de Información Ambiental de Colombia. Ecosistemas de Colombia. Disponible en: http://www.siac.gov.co/ecosistemas

[14] La reforma parcial a la Fiscalía por medio del Decreto Ley 898 de 2017 redujo el número de cargos de la Entidad. La **reducción de 4.500 empleos** en las áreas misionales de la Fiscalía implicó una congestión progresiva en la carga de trabajo de los servidores, sin que la Entidad cuente con los recursos para dar respuesta a las necesidades de justicia de los habitantes del territorio nacional, especialmente en las regiones apartadas, las zonas rurales y los municipios en los que antes operaban grupos armados. A su vez, la planta administrativa se **redujo en 1.203 empleos**, por lo tanto, fue necesario que personal del área misional se apartara de sus funciones de investigación, para atender necesidades administrativas. Por otra parte, en materia de equipos de trabajo, actualmente cada fiscal cuenta con "1 asistente de fiscal" y "1,6 investigadores", personal insuficiente frente a las demandas de justicia e investigación que exige la ciudadanía ante el aumento y transformaciones del delito y la criminalidad organizada. En efecto, actualmente existen 10.19 fiscales por cada 100.000 habitantes, lo cual es una cifra muy baja si se tiene en cuenta que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) el estándar en jueces, que debe ser un número menor al de fiscales, debería ser 65 por cada 100.000 habitantes.

[15] Cifras cargos suprimidos Decreto Ley 898 de 2017.

[16] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)-Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) (2019). Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de percepción remota 2018. Bogotá.

[17] A partir de la entrada en vigencia del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, por ejemplo, se presentó un aumento del 26% en las denuncias por delitos que atentan contra los recursos naturales y el medio ambiente en territorios en los que anteriormente había presencia de las FARC que, como se verá más adelante, no corresponde al aumento en la magnitud de los delitos ambientales. Este aumento puede explicarse con la salida de actores que concentraban y controlaban las rentas ilícitas derivadas de la explotación de recursos naturales, y que deriva en un cambio en el comportamiento en materia de denuncias.

[18] CEPAL et al. (2013). Amazonia posible y sostenible. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/1506

[19] Información reportada por el sistema Global Forest Watch. Disponible para consulta en: https://www.globalforestwatch.org/

[20] Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina contra la Droga y el Delito para Colombia de las Organización de las Naciones Unidas.

[21] Ver por ejemplo la Declaración sobre el Medio ambiente Humano y el Plan de Acción para el Medio Ambiente o la Declaración de Rio de Janeiro.

[22] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Disponible en: http://visionamazonia.minambiente.gov.co/news/la-deforestacion-en-colombia-se-redujo-10-en-comparacion-con-el-ano-2017-y-17-respecto-a-la-tendencia-de-crecimiento-estimada-para-2018/

[23] De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, aproximadamente un 80% de la de la minería de oro en Colombia, es de carácter ilegal. United Nations Environment Programme (2018).

[24] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)-Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) (2019). Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de percepción remota 2018. Bogotá.

[25] Las conductas punibles priorizadas por la Unidad Especial de Investigación son las siguientes: (i) graves afectaciones a excombatientes (homicidios, tentativa de homicidios, amenazas, desapariciones forzadas), (ii) homicidios de familiares de excombatientes, y (iii) homicidios de defensores de derechos humanos verificados por las Naciones Unidas.

U.S. Santiago Valencia C.

9. DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS O RELACIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS.

De conformidad con el artículo 291 de la Ley 5 de 1992, en la que se estableció que el autor del proyecto y el ponente presentarán en la exposición de motivos un acápite que describa las circunstancias o eventos que podrán generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto.

Se considera que el presente proyecto de Ley no genera conflictos de interés en atención a que se trata de un proyecto que no genera un beneficio particular, actual y directo a los congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 2019; sino que, por el contrario, trata de aumentar penas y multas, así como consagrar nuevos tipos penales que afectan los recursos naturales y el medio ambiente.

Así el Consejo de Estado determinó "No cualquier interés configura la causal de perdida de investidura, pues se sabe que sólo lo será aquél del que se pueda predicar que es:

Directo, esto es, que per se el alegado beneficio, provecho o utilidad encuentre su fuente en el asunto que fue conocido por el legislador;

Particular, que el mismo sea específico o personal, bien para el congresista o quienes se encuentren relacionados con él; y

Actual o inmediato, que concurra para el momento en que ocurrió la participación o votación del congresista, lo que excluye sucesos contingentes, futuros o imprevisibles.26

10. PLIEGO DE MODIFICACIONES

TEXTO APROBADO TERCER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE SENADO	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE SENADO
TITULO. *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000*, se modifica la Ley 906 del 2004 y se dictan otras *disposiciones"*.	***TITULO.*** *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000, se modifica la Ley 906 del 2004 y se dictan otras disposiciones".*

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de noviembre de 2009, radicación número: Pl. 01180-00 (C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia).

TEXTO APROBADO TERCER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE SENADO	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE SENADO
ARTÍCULO 1°. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente: **TÍTULO XI.** **DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE** **CAPÍTULO I.** **DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES** **Artículo 328. Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.** El que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, capture, mantenga, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, trafique o de cualquier otro modo se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta y tres mil setecientos cincuenta (43.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la práctica de cercenar aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras), y descartar el resto del cuerpo al mar.	**ARTÍCULO 1°.** Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente: **TÍTULO XI.** **DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE** **CAPÍTULO I.** **DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES** **Artículo 328. Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.** El que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, **acceda,** capture, mantenga, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, trafique o de cualquier otro modo se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta y tres mil setecientos cincuenta (43.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la práctica de cercenar aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras), y descartar el resto del cuerpo al mar.

TEXTO APROBADO TERCER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE SENADO	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE SENADO
Artículo 328A. Tráfico de Fauna. El que trafique, mercadee, adquiera, exporte y de cualquier forma comercialice los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de trescientos (300) hasta cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la exportación o comercialización de aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras).	**Artículo 328A. Tráfico de Fauna.** El que trafique, ~~mercadee~~, adquiera, exporte y de cualquier forma comercialice **sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente** los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de trescientos (300) hasta cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la exportación o comercialización de aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras).
Artículo 328B. Caza Ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, cazare, excediere el número de piezas permitidas o cazare en época de veda, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de treinta y tres (33) a novecientos treinta y siete (937) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.	**Artículo 328B. Caza Ilegal.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, cazare, excediere el número de piezas permitidas o cazare en épocas de veda**s**, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de treinta y tres (33) a novecientos treinta y siete (937) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
Artículo 328C. Pesca ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese o almacene ejemplares o productos de especies vedadas, protegidas, en cualquier categoría de amenaza, o en áreas de reserva, o en zona prohibida, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a las	**Artículo 328C. Pesca ilegal.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese o almacene ejemplares o productos de especies vedadas, protegidas, en cualquier categoría de amenaza, o en áreas de reserva, **o en épocas vedadas,** o en zona prohibida, incurrirá, sin perjuicio de las

TEXTO APROBADO TERCER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE SENADO	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE SENADO
que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la misma pena incurrirá el que: 1. Utilice instrumentos, artes y métodos de pesca no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente, para cualquier especie. 2. Modifique, altere o atente, los refugios o el medio ecológico de especies de recursos hidrobiológicos y pesqueros, como consecuencia de actividades de exploración o explotación de recursos naturales. 3. Construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ciénagas, lagunas, caños, ríos y canales. **Parágrafo:** La conducta descrita en este artículo no será considerada delito si la misma se ajusta a los condicionamientos y requisitos señalados en la Resolución 649 de 2019 expedida por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) o aquella que la derogue o sustituya, para la pesca de subsistencia. **Artículo 329. Manejo ilícito de especies exóticas.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, trasplante, manipule, siembre, hibride, comercialice, transporte, mantenga, transforme,	sanciones administrativas a las que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la misma pena incurrirá el que: 1. Utilice instrumentos, artes y métodos de pesca no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente, para cualquier especie. 2. Modifique, altere o atente, los refugios o el medio ecológico de especies de recursos hidrobiológicos y pesqueros, como consecuencia de actividades de exploración o explotación de recursos naturales. 3. Construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ciénagas, lagunas, caños, ríos y canales. **Parágrafo:** La pesca de subsistencia, no será considera delito, cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la normatividad existente. **Artículo 329. Manejo ilícito de especies exóticas.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, trasplante, manipule, siembre, hibride, comercialice, transporte, mantenga, transforme,

TEXTO APROBADO TERCER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE SENADO	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE SENADO
experimente, inocule o propague especies silvestres exóticas, invasoras, que pongan en peligro la salud humana, el ambiente o las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	experimente, inocule o propague especies silvestres exóticas, invasoras, que pongan en peligro la salud humana, el ambiente o las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 330. Deforestación. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente tale, queme, corte, arranque o destruya áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 330. Deforestación.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente tale, queme, corte, arranque o destruya **áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural**, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena se aumentará a la mitad cuando: 1. Cuando la conducta se realice para fines de ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal. 2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.	La pena se aumentará a la mitad cuando: 1. Cuando la conducta se realice para fines de ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, ~~**exploración y explotación ilícita de minerales**~~ o para mejora o construcción de infraestructura ilegal. 2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.
Artículo 330A. Promoción y financiación de la Deforestación. El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro	**Artículo 330A. Promoción y financiación de la Deforestación.** El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte, arranque o

TEXTO APROBADO TERCER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE SENADO	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE SENADO
beneficio de la tala, quema, corte, arranque o destrucción de áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará a la mitad cuando: 1. Cuando la conducta se realice para fines de ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal. 2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.	destrucción **de áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural**, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará a la mitad cuando: 1. Cuando la conducta se realice para fines de ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, ~~**exploración y explotación ilícita de minerales**~~ o para mejora o construcción de infraestructura ilegal. 2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.
Artículo 331. Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos. El que con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, importe, manipule, experimente, posea, inocule, comercialice, exporte, libere o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos, moléculas, substancias o elementos que pongan en peligro la salud o la existencia de los recursos fáunicos, florísticos, hidrobiológicos, hídricos o alteren perjudicialmente sus poblaciones, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. **Artículo 332. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.** El que	**Artículo 331. Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos.** El que con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, importe, manipule, experimente, posea, inocule, comercialice, exporte, libere o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos, moléculas, substancias o elementos que pongan en peligro la salud o la existencia de los recursos fáunicos, florísticos, hidrobiológicos, hídricos o alteren perjudicialmente sus poblaciones, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. **Artículo 332. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.** El que sin permiso de autoridad competente o con

TEXTO APROBADO TERCER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE SENADO	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE SENADO
sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 332A. Tenencia o transporte de mercurio. El que con incumplimiento de la normatividad existente importe, tenga, almacene, transporte o comercialice mercurio, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	~~**Artículo 332A. Tenencia o transporte de mercurio. El que con incumplimiento de la normatividad existente importe, tenga, almacene, transporte o comercialice mercurio, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.**~~
CAPÍTULO II. **DE LOS DAÑOS EN LOS RECURSOS NATURALES**	**CAPÍTULO II.** **DE LOS DAÑOS EN LOS RECURSOS NATURALES**
Artículo 333. Daños en los recursos naturales y ecocidio. El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o cause un impacto ambiental grave o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título o a los que estén asociados con estos, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 333. Daños en los recursos naturales y ecocidio.** El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o cause un impacto ambiental grave o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título o a los que estén asociados con estos, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

TEXTO APROBADO TERCER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE SENADO	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE SENADO
Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo se entiende por ecocidio, el daño masivo y destrucción generalizada grave y sistémica de los ecosistemas. **Parágrafo 2°.** Por impacto ambiental grave se entenderá, la alteración de las condiciones ambientales que se genere como consecuencia de la afectación de los componentes ambientales, eliminando la integridad del sistema y poniendo en riesgo su sostenibilidad.	**Parágrafo 1°.** Para los efectos de este artículo se entiende por ecocidio, el daño masivo y destrucción generalizada grave y sistémica de los ecosistemas. **Parágrafo 2°.** Por impacto ambiental grave se entenderá, la alteración de las condiciones ambientales que se genere como consecuencia de la afectación de los componentes ambientales, eliminando la integridad del sistema y poniendo en riesgo su sostenibilidad.
CAPÍTULO III. **DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL**	**CAPÍTULO III.** **DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL**
Artículo 334. Contaminación ambiental. El que con incumplimiento de la normatividad existente provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertimientos, radiaciones, ruidos, depósitos, o disposiciones al aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas superficiales, marítimas o subterráneas o demás recursos naturales en tal forma que contamine o genere un efecto nocivo en el ambiente, que ponga en peligro la salud humana y los recursos naturales, incurrirá en prisión de sesenta y nueve (69) a ciento cuarenta (140) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en este artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código concurra alguna de las circunstancias siguientes:	**Artículo 334. Contaminación ambiental.** El que con incumplimiento de la normatividad existente <u>contamine,</u> provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertimientos, radiaciones, ruidos, depósitos, o disposiciones al aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas superficiales, marítimas o subterráneas o demás recursos naturales en tal forma que contamine o genere un efecto nocivo en el ambiente, que ponga en peligro la salud humana y los recursos naturales, incurrirá en prisión de sesenta y nueve (69) a ciento cuarenta (140) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en este artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código concurra alguna de las circunstancias siguientes:

TEXTO APROBADO TERCER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE SENADO	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE SENADO
1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas. 2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por la normatividad existente o haya infringido más de dos parámetros. 3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, depósitos, emisiones o disposiciones. 4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo. 5. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de control y vigilancia de la autoridad competente. 6. Cuando la contaminación sea producto del almacenamiento, transporte, vertimiento o disposición inadecuada de residuo peligroso.	1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas. 2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por la normatividad existente o haya infringido más de dos parámetros. 3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, depósitos, emisiones o disposiciones. 4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo. 5. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de control y vigilancia de la autoridad competente. 6. Cuando la contaminación sea producto del almacenamiento, transporte, vertimiento o disposición inadecuada de residuo peligroso.
Artículo 334A. Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo. El que provoque, contamine o realice directa o indirectamente en los recursos de agua, suelo, subsuelo o atmósfera, con ocasión a la extracción o excavación, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años, y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 334A. Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo.** El que provoque, contamine o realice directa o indirectamente en los recursos de agua, suelo, subsuelo o atmósfera, con ocasión a la extracción o excavación, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años, y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 335. Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la	**Artículo 335. Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la

TEXTO APROBADO TERCER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE SENADO	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE SENADO
normatividad existente, realice experimentos con especies, agentes biológicos o bioquímicos que constituyan, generen o pongan en peligro la supervivencia de las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	normatividad existente, realice experimentos con especies, agentes biológicos o bioquímicos que constituyan, generen o pongan en peligro la supervivencia de las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
CAPÍTULO IV. **DE LA INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA**	**CAPÍTULO IV.** **DE LA INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA**
Artículo 336. Invasión de áreas de especial importancia ecológica. El que invada, permanezca así sea de manera temporal o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en área de reserva forestal, ecosistemas de importancia ecológica, playas, terrenos de bajamar, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, parque nacional natural, área o ecosistema de interés estratégico, área protegida, definidos en la ley o reglamento incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.	**Artículo 336. Invasión de áreas de especial importancia ecológica.** El que invada, permanezca así sea de manera temporal o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en área de reserva forestal, ecosistemas de importancia ecológica, playas, terrenos de bajamar, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, parque nacional natural, área o ecosistema de interés estratégico, área protegida, definidos en la ley o reglamento incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.
Artículo 336A. Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica. El que promueva, financie, dirija, facilite,	**Artículo 336A. Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica.** El que promueva, financie, dirija, facilite,

TEXTO APROBADO TERCER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE SENADO	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE SENADO
suministre medios, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.	~~**suministre medios**~~, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.
CAPÍTULO V. **DE LA APROPIACIÓN ILEGAL DE BALDÍOS DE LA NACIÓN**	**CAPÍTULO V.** **DE LA APROPIACIÓN ILEGAL DE BALDÍOS DE LA NACIÓN**
Artículo 337. Apropiación ilegal de baldíos de la nación. El que usurpé, ocupe, utilice, acumule, tolere, colabore o permita la apropiación de baldíos de la Nación, sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos y despojo de tierras. Parágrafo 1º: La conducta descrita en este artículo no será considerada delito si la misma se ajusta a los condicionamientos y requisitos señalados en la ley 160 de 1994, así como en el Decreto Ley 902 de 2017 para la adjudicación de bienes baldíos.	**Artículo 337. Apropiación ilegal de baldíos de la nación.** El que usurpé, ocupe, utilice, acumule, tolere, colabore o permita la apropiación de baldíos de la Nación, sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos y despojo de tierras. Parágrafo ~~1º~~: La conducta descrita en este artículo no será considerada delito si la misma se ajusta a los condicionamientos y requisitos señalados en la ley 160 de 1994, así como en el Decreto Ley 902 de 2017 para la adjudicación de bienes baldíos.

TEXTO APROBADO TERCER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE SENADO	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE SENADO
Parágrafo 2º: Cuando la conducta descrita en el artículo anterior sea cometida por personas campesinas, indígenas o afrodescendientes, que dependa su subsistencia de la habitación, trabajo o aprovechamiento de los baldíos de la Nación no habrá lugar a responsabilidad penal.	~~**Parágrafo 2º: Cuando la conducta descrita en el artículo anterior sea cometida por personas campesinas, indígenas o afrodescendientes, que dependa su subsistencia de la habitación, trabajo o aprovechamiento de los baldíos de la Nación no habrá lugar a responsabilidad penal.**~~
Artículo 337A. Financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación. El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie, patrocine, induzca, ordene o dirija la apropiación ilegal de baldíos de la nación descrito en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los bienes muebles, inmuebles o semovientes encontrados en los baldíos ilegalmente apropiados. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos. **Parágrafo:** Cuando la conducta descrita en el artículo anterior, sea cometida por personas campesinas, indígenas o afrodescendientes, que dependan su subsistencia de la habitación, trabajo o aprovechamiento de los baldíos de la Nación no habrá lugar a responsabilidad penal.	**Artículo 337A. Financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación.** El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie, patrocine, induzca, ordene o dirija la apropiación ilegal de baldíos de la nación descrito en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los bienes muebles, inmuebles o semovientes encontrados en los baldíos ilegalmente apropiados. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos. ~~**Parágrafo: Cuando la conducta descrita en el artículo anterior, sea cometida por personas campesinas, indígenas o afrodescendientes, que dependan su subsistencia de la habitación, trabajo o aprovechamiento de los baldíos de la**~~

TEXTO APROBADO TERCER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE SENADO	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE SENADO
	~~**Nación no habrá lugar a responsabilidad penal.**~~
CAPÍTULO VI. **DISPOSICIONES COMUNES**	**CAPÍTULO VI.** **DISPOSICIONES COMUNES**
Artículo 338. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando:	**Artículo 338. Circunstancias de agravación punitiva.** Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando:
a) Cuando la conducta se cometa en ecosistemas naturales que hagan parte del sistema nacional o regional de áreas protegidas, en ecosistemas estratégicos, o en territorios de comunidades étnicas. Con excepción de las conductas consagradas en los artículos 336 y 336A.	a) Cuando la conducta se cometa en ecosistemas naturales que hagan parte del sistema nacional o regional de áreas protegidas, en ecosistemas estratégicos, o en territorios de comunidades étnicas. Con excepción de las conductas consagradas en los artículos 336 y 336A.
b) Cuando la conducta se cometa contra especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana o de especies vedadas, prohibidas, en período de reproducción o crecimiento, de especial importancia ecológica, raras o endémicas del territorio colombiano. Con excepción de la conducta contemplada en el artículo 328C.	b) Cuando la conducta se cometa contra especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana o de especies vedadas, prohibidas, en período de reproducción o crecimiento, de especial importancia ecológica, raras o endémicas del territorio colombiano. Con excepción de la conducta contemplada en el artículo 328C.
c)Cuando con la conducta se altere el suelo, el subsuelo, los recursos hidrobiológicos, se desvíen los cuerpos de agua o se afecten ecosistemas marinos, manglares, pastos marinos y corales.	c)Cuando con la conducta se altere el suelo, el subsuelo, los recursos hidrobiológicos, se desvíen los cuerpos de agua o se afecten ecosistemas marinos, manglares, pastos marinos y corales.
d)Cuando la conducta se cometiere por la acción u omisión de quienes ejercen funciones de seguimiento, control y vigilancia o personas que ejerzan funciones públicas.	d)Cuando la conducta se cometiere por la acción u omisión de quienes ejercen funciones de seguimiento, control y vigilancia o personas que ejerzan funciones públicas.
e) Cuando la conducta se cometiere por integrantes de grupos delictivos organizados o grupos armados organizados o con la finalidad	e) Cuando la conducta se cometiere por integrantes de grupos delictivos organizados o

TEXTO APROBADO TERCER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE SENADO	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE SENADO
de financiar actividades terroristas, grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley, grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a sus integrantes.	grupos armados organizados o con la finalidad de financiar actividades terroristas, grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley, grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a sus integrantes.
f) Cuando la conducta se cometa mediante el uso o manipulación de herramientas tecnológicas.	f) Cuando la conducta se cometa mediante el uso o manipulación de herramientas tecnológicas.
g) Cuando con la conducta se ponga en peligro la salud humana.	g) Cuando con la conducta se ponga en peligro la salud humana.
h) Cuando con la conducta se introduzca al suelo o al agua sustancias prohibidas por la normatividad existente o se realice mediante el uso de sustancias tóxicas, peligrosas, venenos, inflamables, combustibles, explosivas, radioactivas, el uso de explosivos, maquinaria pesada o medios mecanizados, entendidos estos últimos como todo tipo de equipos o herramientas mecanizados utilizados para el arranque, la extracción o el beneficio de minerales o la distribución ilegal de combustibles.	h) Cuando con la conducta se introduzca al suelo o al agua sustancias prohibidas por la normatividad existente o se realice mediante el uso de sustancias tóxicas, peligrosas, venenos, inflamables, combustibles, explosivas, radioactivas, el uso de explosivos, maquinaria pesada o ~~**medios mecanizados, entendidos estos últimos como todo tipo de equipos o herramientas mecanizados utilizados para el arranque, la extracción o el beneficio de minerales o**~~ la distribución ilegal de combustibles.
i)Cuando se promueva, financie, dirija, facilite o suministre medios para la realización de las conductas. Con excepción de las conductas contempladas en los artículos 330A, 336A y 337A.	i)Cuando se promueva, financie, dirija, facilite o suministre medios para la realización de las conductas. Con excepción de las conductas contempladas en los artículos 330A, 336A y 337A.
j) Cuando con la conducta se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies.	j) Cuando con la conducta se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies.
Artículo 339. Modalidad Culposa. Las penas previstas en los artículos 333, 334, 334A de este código se disminuirán hasta en la mitad cuando las conductas punibles se realicen culposamente.	**Artículo 339. Modalidad Culposa.** Las penas previstas en los artículos 333, 334, 334A de este código se disminuirán hasta en la mitad cuando las conductas punibles se realicen

TEXTO APROBADO TERCER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE SENADO	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE SENADO
	culposamente.
Artículo 2. Modifíquese el numeral 14 del artículo 58 de la ley 599 del 2000, el cual quedará así: **Artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad.** (…) 14. Cuando se produjere un daño ambiental grave, una irreversible modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales o se cause la extinción de una especie biológica.	**Artículo 2.** Modifíquese el numeral 14 del artículo 58 de la ley 599 del 2000, el cual quedará así: **Artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad.** (…) 14. Cuando se produjere un daño ambiental grave, una irreversible modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales o se cause la extinción de una especie biológica.
ARTÍCULO 3°. Adiciones al inciso segunda del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, las siguientes conductas punibles: **Artículo 68A. Exclusión de los beneficios y subrogados penales.** (…) Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaiga sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; abigeato enunciado en el inciso tercero del artículo 243; extorsión; homicidio agravado contemplado en el numeral 6 del artículo 104; lesiones causadas con agentes químicos, ácidos y/o sustancias similares; violación ilícita de	~~**ARTÍCULO 3°.** Adiciones al inciso segunda del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, las siguientes conductas punibles:~~ ~~**Artículo 68A. Exclusión de los beneficios y subrogados penales.**~~ ~~(…)~~ ~~Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaiga sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; abigeato enunciado en el inciso tercero del artículo 243; extorsión; homicidio agravado contemplado en el numeral 6 del artículo 104; lesiones causadas con agentes químicos, ácidos y/o sustancias similares; violación ilícita de

TEXTO APROBADO TERCER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE SENADO	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE SENADO
comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objeto peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonales; aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables; tráfico de fauna; deforestación; promoción y financiación de la deforestación; daños en los recursos naturales y ecocidio; e invasión de áreas de especial importancia ecológica.	~~comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objeto peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonales; aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables; tráfico de fauna; deforestación; promoción y financiación de la deforestación; daños en los recursos naturales y ecocidio; e invasión de áreas de especial importancia ecológica.~~
ARTÍCULO 4°. Adiciónese un numeral 33 al artículo 35 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así: (…) 33. De los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, tráfico de fauna, deforestación, promoción y financiación de la deforestación, daños en los recursos	**ARTÍCULO 3 4°.** Adiciónese un numeral 33 al artículo 35 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así: (…) 33. De los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, tráfico de fauna, deforestación, promoción y financiación de la deforestación, daños en los recursos

TEXTO APROBADO TERCER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE SENADO	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE SENADO
naturales y ecocidio, e invasión de áreas de especial importancia ecológica.	naturales y ecocidio, e invasión de áreas de especial importancia ecológica.
ARTÍCULO 5°. Adiciónese un parágrafo al artículo 91 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así: (…) **Parágrafo.** Cuando se hubiese suspendido o cancelado la personería jurídica de que trata este artículo, la persona natural o jurídica estará inhabilitada para constituir nuevas personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público, con el mismo objeto o actividad económica a desarrollar, hasta que el Juez de Conocimiento tome una decisión definitiva en la sentencia correspondiente.	**ARTÍCULO 4 ~~5°~~.** Adiciónese un parágrafo al artículo 91 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así: (…) **Parágrafo.** Cuando se hubiese suspendido o cancelado la personería jurídica de que trata este artículo, la persona natural o jurídica estará inhabilitada para constituir nuevas personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público, con el mismo objeto o actividad económica a desarrollar, hasta que el Juez de Conocimiento tome una decisión definitiva en la sentencia correspondiente.
ARTÍCULO 6°. Adiciónese un parágrafo 2 al artículo 92 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así: **Parágrafo 2.** Tratándose de los delitos contemplados en el título XI del Código Penal, el juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.	**ARTÍCULO 5 ~~6°~~.** Adiciónese un parágrafo 2 al artículo 92 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así: **Parágrafo 2.** Tratándose de los delitos contemplados en el título XI del Código Penal, el juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.
ARTÍCULO 7°. El artículo 302 de la Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo inciso que quedará así:	**ARTÍCULO 6 ~~7°~~.** El artículo 302 de la Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo inciso que quedará así:

TEXTO APROBADO TERCER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE SENADO	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE SENADO
Cuando la captura en flagrancia se produzca en ríos o tierra donde el arribo a la cabecera municipal más cercana sólo puede surtirse por vía fluvial o siempre que concurran dificultades objetivas de acceso al territorio como obstáculos geográficos, logísticos, ausencia de infraestructura de transporte o fenómenos meteorológicos que dificulten seriamente el traslado del aprehendido, se realizarán todas las actividades para lograr la comparecencia del capturado ante el juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin que en ningún caso exceda las 36 horas siguientes, contadas a partir del momento de la llegada al puerto o municipio más cercano, según el caso. La autoridad competente deberá acreditar los eventos descritos en el presente inciso.	Cuando la captura en flagrancia se produzca en ríos o tierra donde el arribo a la cabecera municipal más cercana sólo puede surtirse por vía fluvial o siempre que concurran dificultades objetivas de acceso al territorio como obstáculos geográficos, logísticos, ausencia de infraestructura de transporte o fenómenos meteorológicos que dificulten seriamente el traslado del aprehendido, se realizarán todas las actividades para lograr la comparecencia del capturado ante el juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin que en ningún caso exceda las 36 horas siguientes, contadas a partir del momento de la llegada al puerto o municipio más cercano, según el caso. La autoridad competente deberá acreditar los eventos descritos en el presente inciso.
Artículo 8. Dirección de Apoyo Territorial. Créase en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Apoyo Territorial adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana, la que tendrá como función principal liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presenta efectiva de la Entidad en territorios apartados o de difícil acceso, sin perjuicio de la competencia de otras Direcciones sobre la materia. La Dirección de Apoyo Territorial estará conformada por: **Unidad** | **Cantidad** | **Cargo** | **Niveles** Dirección de Apoyo Territorial | 1 | Director Nacional I | Directivo Dirección de Apoyo Territorial | 2 | Fiscal Delegado ante | Profesional	**Artículo 7 ~~8~~. Dirección de Apoyo Territorial.** Créase en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Apoyo Territorial adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana, la que tendrá como función principal liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la ~~presentan~~ **presencia** efectiva de la Entidad **con un trabajo interdisciplinario** en territorios apartados o de difícil acceso, sin perjuicio de la competencia de otras Direcciones sobre la materia. La Dirección de Apoyo Territorial estará conformada por: **Unidad** | **Cantidad** | **Cargo** | **Niveles** Dirección de Apoyo Territorial | 1 | Director Nacional I | Directivo Dirección de Apoyo Territorial | 2 | Fiscal Delegado ante | Profesional

TEXTO APROBADO TERCER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE SENADO				TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE SENADO			
		Tribunal del Distrito				Tribunal del Distrito	
	20	Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado	Profesional		20	Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Profesional		5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional		5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional
	1	Profesional Experto	Profesional		1	Profesional Experto	Profesional
	2	Profesional Especializado II	Profesional		2	Profesional Especializado II	Profesional
	2	Profesional De Gestión III	Profesional		2	Profesional De Gestión III	Profesional
	12	Investigador Experto	Profesional		12	Investigador Experto	Profesional
	10	Profesional Investigador III	Profesional		10	Profesional Investigador III	Profesional
	9	Profesional Investigador II	Profesional		9	Profesional Investigador II	Profesional
	9	Profesional Investigador I	Profesional		9	Profesional Investigador I	Profesional
	10	Técnico Investigador IV	Técnico		10	Técnico Investigador IV	Técnico

TEXTO APROBADO TERCER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE SENADO				TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE SENADO			
	10	Técnico Investigador III	Técnico		~~10~~ **12**	Técnico Investigador III	Técnico
	20	Asistente de Fiscal IV	Técnico		20	Asistente de Fiscal IV	Técnico
	5	Asistente de Fiscal III	Técnico		5	Asistente de Fiscal III	Técnico
	5	Asistente de Fiscal II	Técnico		5	Asistente de Fiscal II	Técnico
	2	Secretario Ejecutivo	Técnico		2	Secretario Ejecutivo	Técnico
	2	Conductor	Asistencial		~~2~~	~~Conductor~~	~~Asistencial~~
	3	Secretario Administrativo	Asistencial		3	Secretario Administrativo	Asistencial

Parágrafo 1: De forma prioritaria la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación desarrollará el concurso necesario para proveer los cargos establecidos en el presente artículo de conformidad con el Sistema Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación, sin perjuicio de los nombramientos en provisionalidad necesarios para implementar inmediatamente la Dirección establecida, en los cuales se aplicarán los principios de mérito, transparencia, garantía de imparcialidad y eficiencia y eficacia del artículo 3, junto con los criterios de mérito señalados en el numeral 3 del artículo 11 del Decreto Ley 020 de 2014.

Parágrafo 2: El inicio del concurso se realizará dentro de los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 3: La Fiscalía General de la Nación presentará anualmente un informe sobre los indicadores de gestión, avance y

TEXTO APROBADO TERCER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE SENADO	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE SENADO
	esclarecimiento en la investigación y judicialización de las conductas que afecten los recursos naturales y el medio ambiente. Esta información será pública y contendrá datos estadísticos que no estén sometidos a reserva.
Artículo 9. Dirección de Apoyo Territorial. Adiciónese el artículo 36A al Decreto Ley 016 de 2014, el cual quedará así: La Dirección de Apoyo Territorial cumplirá las siguientes funciones: 1. Liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presencia efectiva de la Entidad en territorios apartados o de difícil acceso, en aquellas zonas afectadas por fenómenos criminales de alto impacto y por la presencia de grupos armados organizados. 2. Apoyar la investigación, especialmente actos urgentes, en aquellos fenómenos priorizados que se den en territorios donde la Fiscalía General de la Nación no tenga presencia permanente o sean de difícil acceso. 3. Definir los lugares en los que se podrá actuar por medio de grupos itinerantes, con base en criterios geográficos y no en la división político-administrativa, así como en el análisis de la criminalidad del país, la presencia de organizaciones criminales, los tiempos de desplazamiento al lugar de comisión de la conducta punible, la oferta de servicios de justicia por parte de otras entidades, entre otros factores. 4. Conformar grupos especializados de investigadores y analistas expertos en los fenómenos criminales priorizados por la Dirección. 5. Realizar proceso de articulación de la estrategia territorial con otras entidades públicas.	**Artículo 8 ~~9~~. Dirección de Apoyo Territorial.** Adiciónese el artículo 36A al Decreto Ley 016 de 2014, el cual quedará así: La Dirección de Apoyo Territorial cumplirá las siguientes funciones: 1. Liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presencia efectiva de la Entidad en territorios apartados o de difícil acceso, en aquellas zonas afectadas por fenómenos criminales de alto impacto y por la presencia de grupos armados organizados. 2. Apoyar la investigación, especialmente actos urgentes, en aquellos fenómenos priorizados que se den en territorios donde la Fiscalía General de la Nación no tenga presencia permanente o sean de difícil acceso. 3. Definir los lugares en los que se podrá actuar por medio de grupos itinerantes, con base en criterios geográficos y no en la división político-administrativa, así como en el análisis de la criminalidad del país, la presencia de organizaciones criminales, los tiempos de desplazamiento al lugar de comisión de la conducta punible, la oferta de servicios de justicia por parte de otras entidades, entre otros factores. 4. Conformar grupos especializados de investigadores y analistas expertos en los fenómenos criminales priorizados por la Dirección. 5. Realizar proceso de articulación de la estrategia territorial con otras entidades públicas.

TEXTO APROBADO TERCER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE SENADO	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE SENADO
6. Designar fiscales itinerantes en aquellos procesos sobre fenómenos priorizados, con el fin que apoyen, impulsen y asesoren a los fiscales titulares con el fin de lograr una efectiva judicialización. 7. Conformar equipos móviles de la Entidad, en los que periódicamente se reciban denuncias de los habitantes del territorio nacional y se brinde atención a las víctimas de las conductas punibles en territorios apartados o zonas de alto impacto o presencia de grupos armados organizados. 8. Organizar y adelantar comités técnico-jurídicos de revisión de las situaciones y los casos para la ejecución de acciones en el desarrollo efectivo y eficiente de las investigaciones penales de su competencia. 9. Dirigir y coordinar los grupos de trabajo, los departamentos y unidades que se conformen para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Dirección. 10. Dirigir, coordinar y controlar la incorporación y aplicación de políticas públicas en el desarrollo de las actividades que cumplen los servidores, dependencias y los grupos de trabajo que estén a su cargo, de acuerdo con los lineamientos y las orientaciones que impartan las dependencias competentes. 11. Identificar y delimitar situaciones y casos susceptibles de ser priorizados y proponerlos al Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos. 12. Ejecutar los planes de priorización aprobados por el Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos en lo de su competencia. 13. Apoyar, en el marco de sus competencias, a la Dirección de Políticas y Estrategia en el análisis de la información que se requiera para sustentar la formulación de la política en materia criminal.	6. Designar fiscales itinerantes en aquellos procesos sobre fenómenos priorizados, con el fin que apoyen, impulsen y asesoren a los fiscales titulares con el fin de lograr una efectiva judicialización. 7. Conformar equipos móviles de la Entidad, en los que periódicamente se reciban denuncias de los habitantes del territorio nacional y se brinde atención a las víctimas de las conductas punibles en territorios apartados o zonas de alto impacto o presencia de grupos armados organizados. 8. Organizar y adelantar comités técnico-jurídicos de revisión de las situaciones y los casos para la ejecución de acciones en el desarrollo efectivo y eficiente de las investigaciones penales de su competencia. 9. Dirigir y coordinar los grupos de trabajo, los departamentos y unidades que se conformen para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Dirección. 10. Dirigir, coordinar y controlar la incorporación y aplicación de políticas públicas en el desarrollo de las actividades que cumplen los servidores, dependencias y los grupos de trabajo que estén a su cargo, de acuerdo con los lineamientos y las orientaciones que impartan las dependencias competentes. 11. Identificar y delimitar situaciones y casos susceptibles de ser priorizados y proponerlos al Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos. 12. Ejecutar los planes de priorización aprobados por el Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos en lo de su competencia. 13. Apoyar, en el marco de sus competencias, a la Dirección de Políticas y Estrategia en el análisis de la información que se requiera para sustentar la formulación de la política en materia criminal.

TEXTO APROBADO TERCER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE SENADO	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE SENADO
14. Mantener actualizada la información que se registre en los sistemas de información de la Entidad, en los temas de su competencia. 15. Consolidar, analizar y clasificar la información de las investigaciones y acusaciones adelantadas por los servidores y grupos de trabajo a su cargo y remitirla a la Dirección de Políticas y Estrategia. 16. Dirimir, de conformidad con la Constitución y la ley, los conflictos de competencia que se presenten entre la Fiscalía General de la Nación y los demás organismos que desempeñen funciones de Policía Judicial, en el ámbito de su competencia. 17. Dirimir los conflictos administrativos que se presenten al interior de la Fiscalía en el ejercicio de las funciones o en la asignación de investigaciones, en los casos y según las directrices y lineamientos impartidos por el Fiscal General de la Nación. 18. Asesorar a las dependencias de la Fiscalía General de la Nación que cumplen funciones investigativas y acusatorias en los temas de su competencia. 19. Elaborar e implementar los planes operativos anuales en el ámbito de su competencia, de acuerdo con la metodología diseñada por la Dirección de Planeación y Desarrollo. 20. Aplicar las directrices y lineamientos del Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación. 21. Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el Fiscal o Vicefiscal General de la Nación.	14. Mantener actualizada la información que se registre en los sistemas de información de la Entidad, en los temas de su competencia. 15. Consolidar, analizar y clasificar la información de las investigaciones y acusaciones adelantadas por los servidores y grupos de trabajo a su cargo y remitirla a la Dirección de Políticas y Estrategia. 16. Dirimir, de conformidad con la Constitución y la ley, los conflictos de competencia que se presenten entre la Fiscalía General de la Nación y los demás organismos que desempeñen funciones de Policía Judicial, en el ámbito de su competencia. 17. Dirimir los conflictos administrativos que se presenten al interior de la Fiscalía en el ejercicio de las funciones o en la asignación de investigaciones, en los casos y según las directrices y lineamientos impartidos por el Fiscal General de la Nación. 18. Asesorar a las dependencias de la Fiscalía General de la Nación que cumplen funciones investigativas y acusatorias en los temas de su competencia. 19. Elaborar e implementar los planes operativos anuales en el ámbito de su competencia, de acuerdo con la metodología diseñada por la Dirección de Planeación y Desarrollo. 20. Aplicar las directrices y lineamientos del Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación. 21. Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el Fiscal o Vicefiscal General de la Nación.
Artículo 10. Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. Créase en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente adscrito a la Delegada contra la Criminalidad	**Artículo 9 ~~10~~. Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.** Créase en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente adscrito a la Delegada contra la Criminalidad

TEXTO APROBADO TERCER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE SENADO	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE SENADO
Organizada, la que tendrá como función principal la investigación y judicialización de los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y las demás conductas delictivas conexas o relacionadas, sin perjuicio de la competencia de las Direcciones Seccionales sobre la materia. La Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente estará conformada por:	Organizada, la que tendrá como función principal la investigación y judicialización de los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y las demás conductas delictivas conexas o relacionadas, **mediante un trabajo interdisciplinario** sin perjuicio de la competencia de las Direcciones Seccionales sobre la materia. La Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente estará conformada por:

Unidad	Cantidad	Cargo	Niveles
Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	1	Director Nacional I	Directivo
	2	Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito	Profesional
	20	Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional
	1	Profesional Experto	Profesional

Unidad	Cantidad	Cargo	Niveles
Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	1	Director Nacional I	Directivo
	2	Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito	Profesional
	20	Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional
	1	Profesional Experto	Profesional

TEXTO APROBADO TERCER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE SENADO				TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE SENADO			
	2	Profesional Especializado II	Profesional		2	Profesional Especializado II	Profesional
	2	Profesional De Gestión III	Profesional		2	Profesional De Gestión III	Profesional
	12	Investigador Experto	Profesional		12	Investigador Experto	Profesional
	10	Profesional Investigador III	Profesional		10	Profesional Investigador III	Profesional
	9	Profesional Investigador II	Profesional		9	Profesional Investigador II	Profesional
	9	Profesional Investigador I	Profesional		9	Profesional Investigador I	Profesional
	10	Técnico Investigador IV	Técnico		10	Técnico Investigador IV	Técnico
	10	Técnico Investigador III	Técnico		~~10~~ 12	Técnico Investigador III	Técnico
	20	Asistente de Fiscal IV	Técnico		20	Asistente de Fiscal IV	Técnico
	5	Asistente de Fiscal III	Técnico		5	Asistente de Fiscal III	Técnico
	5	Asistente de Fiscal II	Técnico		5	Asistente de Fiscal II	Técnico
	2	Secretario Ejecutivo	Técnico		2	Secretario Ejecutivo	Técnico
	2	Conductor	Asistencial		~~2~~	~~Conductor~~	~~Asistencial~~
	3	Secretario Administrativo	Asistencial		3	Secretario Administrativo	Asistencial

Parágrafo 1: De forma prioritaria la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación desarrollará el concurso necesario para proveer los cargos establecidos en el presente artículo de conformidad con el Sistema Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación, sin perjuicio de los nombramientos en provisionalidad necesarios para implementar inmediatamente la Dirección establecida, en los cuales se aplicarán los principios de mérito, transparencia, garantía de imparcialidad y eficiencia y eficacia del artículo 3, junto con los criterios de mérito señalados en el numeral 3 del artículo 11 del Decreto Ley 020 de 2014.

Parágrafo 2: El inicio del concurso se realizará dentro de los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 3: La Fiscalía General de la Nación presentará anualmente un informe sobre los indicadores de gestión, avance y esclarecimiento en la investigación y judicialización de las conductas que afecten los recursos naturales y el medio ambiente. Esta información será pública y contendrá datos estadísticos que no estén sometidos a reserva.

TEXTO APROBADO TERCER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE SENADO	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE SENADO
	ARTÍCULO NUEVO. ARTÍCULO 11. Prevención del daño antijurídico y promoción de la adecuada defensa litigiosa. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el marco de sus funciones, deberá diseñar e implementar una política de prevención del daño antijurídico en materia de protección ambiental y ecológica. De igual forma, promoverá la coordinación de las acciones que aseguren la adecuada defensa de los intereses litigiosos de la nación dentro de los procesos que se lleven a cabo en materia de defensa de los recursos naturales y de la fauna y la flora silvestre.

TEXTO APROBADO TERCER DEBATE EN COMISIÓN PRIMERA DE SENADO	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE SENADO
ARTÍCULO 11°. Vigencia y Derogatoria. La presente rige a partir de su promulgación y publicación en el Diario Oficial y deroga el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000 y todas las disposiciones que le sean contrarias.	**ARTÍCULO 11 ~~12~~°. Vigencia y Derogatoria.** La presente rige a partir de su promulgación y publicación en el Diario Oficial y deroga el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000 y todas las disposiciones que le sean contrarias.

11. PROPOSICIÓN

Con fundamento en las anteriores consideraciones, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 5 de 1992, presento ponencia favorable y en consecuencia solicito a la Honorable Plenaria del Senado de la República dar **Segundo Debate** al **Proyecto de Ley No. 446 de 2021 Senado – 283 de 2019 Cámara. "Por medio del cual se sustituye el Título XI "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones".,** conforme con el siguiente texto propuesto.

Cordialmente,

SANTIAGO VALENCIA (Coordinador)
Senador de la República

ANGELICA LOZANO
Senadora de la República
(Con Observaciones y salvedades)

LUIS FERNANDO VELASCO
Senador de la República

SOLEDAD TAMAYO
Senadora de la República

GERMAN VARÓN COTRINO
Senador de la República

ROOSVELT RODRIGUEZ
Senador de la República

CARLOS EDUARDO GUEVARA
Senador de la República
(Con Observaciones y salvedades)

EDUARDO EMILIO PACHECO CUELLO
Honorable Senador de la República

GUSTAVO PETRO
Senador de la República

ROY BARRERAS
Senador de la República

ALEXANDER LÓPEZ MAYA
Senador de la República
(Con Observaciones y salvedades)

JULIAN GALLO
Senador de la República
(Con Observaciones y salvedades)

ARMANDO BENEDETTI
Senador de la República
(Con observaciones y salvedades en el artículo 337A)

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE
Plenaria del Senado

Proyecto de Ley No. 446 de 2021 Senado – 283 de 2019 Cámara.

"Por medio del cual se sustituye el Título XI "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones".

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:

TÍTULO XI.

DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO I.

DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES

Artículo 328. Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. El que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, acceda, capture, mantenga, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, trafique o de cualquier otro modo se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta y tres mil setecientos cincuenta (43.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la práctica de cercenar aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras), y descartar el resto del cuerpo al mar.

Artículo 328A. Tráfico de Fauna. El que trafique, adquiera, exporte y de cualquier forma comercialice sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de trescientos (300) hasta cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la exportación o comercialización de aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras).

Artículo 328B. Caza Ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, cazare, excediere el número de piezas permitidas o cazare en épocas de vedas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de treinta y tres (33) a novecientos treinta y siete (937) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.

Artículo 328C. Pesca ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese o almacene ejemplares o productos de especies vedadas, protegidas, en cualquier categoría de amenaza, o en áreas de reserva, o en épocas vedadas, o en zona prohibida, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a las que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que:

1. Utilice instrumentos, artes y métodos de pesca no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente, para cualquier especie.

2. Modifique, altere o atente, los refugios o el medio ecológico de especies de recursos hidrobiológicos y pesqueros, como consecuencia de actividades de exploración o explotación de recursos naturales.

3. Construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ciénagas, lagunas, caños, ríos y canales.

Parágrafo: La pesca de subsistencia no será considera delito, cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la normatividad existente.

Artículo 329. Manejo ilícito de especies exóticas. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, trasplante, manipule, siembre, hibride, comercialice, transporte, mantenga, transforme, experimente, inocule o propague especies silvestres exóticas, invasoras, que pongan en peligro la salud humana, el ambiente o las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 330. Deforestación. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente tale, queme, corte, arranque o destruya áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará a la mitad cuando:

1. Cuando la conducta se realice para fines de ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito o para mejora o construcción de infraestructura ilegal.

2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.

ARTÍCULO 330A. Promoción y financiación de la Deforestación. El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte, arranque o destrucción de áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará a la mitad cuando:

1. Cuando la conducta se realice para fines de ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, o para mejora o construcción de infraestructura ilegal.

2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.

Artículo 331. Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos. El que con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, importe, manipule, experimente, posea, inocule, comercialice, exporte, libere o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos, moléculas, substancias o elementos que pongan en peligro la salud o la existencia de los recursos fáunicos, florísticos, hidrobiológicos, hídricos o alteren perjudicialmente sus poblaciones, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 332. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO II.

DE LOS DAÑOS EN LOS RECURSOS NATURALES

Artículo 333. Daños en los recursos naturales y ecocidio. El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o cause un impacto ambiental grave o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título o a los que estén asociados con estos, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo se entiende por ecocidio, el daño masivo y destrucción generalizada grave y sistémica de los ecosistemas.

Parágrafo 2°. Por impacto ambiental grave se entenderá, la alteración de las condiciones ambientales que se genere como consecuencia de la afectación de los

componentes ambientales, eliminando la integridad del sistema y poniendo en riesgo su sostenibilidad.

CAPÍTULO III.

DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Artículo 334. Contaminación ambiental. El que con incumplimiento de la normatividad existente contamine, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertimientos, radiaciones, ruidos, depósitos, o disposiciones al aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas superficiales, marítimas o subterráneas o demás recursos naturales en tal forma que contamine o genere un efecto nocivo en el ambiente, que ponga en peligro la salud humana y los recursos naturales, incurrirá en prisión de sesenta y nueve (69) a ciento cuarenta (140) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en este artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.
2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por la normatividad existente o haya infringido más de dos parámetros.
3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, depósitos, emisiones o disposiciones.
4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.
5. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de control y vigilancia de la autoridad competente.
6. Cuando la contaminación sea producto del almacenamiento, transporte, vertimiento o disposición inadecuada de residuo peligroso.

Artículo 334A. Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo. El que provoque, contamine o realice directa o indirectamente en los recursos de agua, suelo, subsuelo o atmósfera, con ocasión a la extracción o excavación, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años, y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 335. Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice experimentos con especies, agentes biológicos o bioquímicos que constituyan, generen o pongan en peligro la supervivencia de las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO IV.

DE LA INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Artículo 336. Invasión de áreas de especial importancia ecológica. El que invada, permanezca así sea de manera temporal o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en área de reserva forestal, ecosistemas de importancia ecológica, playas, terrenos de bajamar, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, parque nacional natural, área o ecosistema de interés estratégico, área protegida, definidos en la ley o reglamento incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.

Artículo 336A. Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica. El que promueva, financie, dirija, facilite, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.

CAPÍTULO V.

DE LA APROPIACIÓN ILEGAL DE BALDÍOS DE LA NACIÓN

Artículo 337. Apropiación ilegal de baldíos de la nación. El que usurpé, ocupe, utilice, acumule, tolere, colabore o permita la apropiación de baldíos de la Nación, sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos y despojo de tierras.

Parágrafo: La conducta descrita en este artículo no será considerada delito si la misma se ajusta a los condicionamientos y requisitos señalados en la ley 160 de 1994, así como en el Decreto Ley 902 de 2017 para la adjudicación de bienes baldíos.

Artículo 337A. Financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación. El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie, patrocine, induzca, ordene o dirija la apropiación ilegal de baldíos de la nación descrito en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los bienes muebles, inmuebles o semovientes encontrados en los baldíos ilegalmente apropiados.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos.

CAPÍTULO VI.

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 338. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando:

a) Cuando la conducta se cometa en ecosistemas naturales que hagan parte del sistema nacional o regional de áreas protegidas, en ecosistemas estratégicos, o en territorios de comunidades étnicas. Con excepción de las conductas consagradas en los artículos 336 y 336A.

b) Cuando la conducta se cometa contra especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana o de especies vedadas, prohibidas, en período de reproducción o crecimiento, de especial importancia ecológica, raras o endémicas del territorio colombiano. Con excepción de la conducta contemplada en el artículo 328C.

c)Cuando con la conducta se altere el suelo, el subsuelo, los recursos hidrobiológicos, se desvíen los cuerpos de agua o se afecten ecosistemas marinos, manglares, pastos marinos y corales.

d)Cuando la conducta se cometiere por la acción u omisión de quienes ejercen funciones de seguimiento, control y vigilancia o personas que ejerzan funciones públicas.

e) Cuando la conducta se cometiere por integrantes de grupos delictivos organizados o grupos armados organizados o con la finalidad de financiar actividades terroristas, grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley, grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a sus integrantes.

f) Cuando la conducta se cometa mediante el uso o manipulación de herramientas tecnológicas.

g) Cuando con la conducta se ponga en peligro la salud humana.

h) Cuando con la conducta se introduzca al suelo o al agua sustancias prohibidas por la normatividad existente o se realice mediante el uso de sustancias tóxicas, peligrosas, venenos, inflamables, combustibles, explosivas, radioactivas, el uso de explosivos, maquinaria pesada o la distribución ilegal de combustibles.

i)Cuando se promueva, financie, dirija, facilite o suministre medios para la realización de las conductas. Con excepción de las conductas contempladas en los artículos 330A, 336A y 337A.

j) Cuando con la conducta se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies.

Artículo 339. Modalidad Culposa. Las penas previstas en los artículos 333, 334, 334A de este código se disminuirán hasta en la mitad cuando las conductas punibles se realicen culposamente.

Artículo 2. Modifíquese el numeral 14 del artículo 58 de la ley 599 del 2000, el cual quedará así:

Artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad.

(…)

14. Cuando se produjere un daño ambiental grave, una irreversible modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales o se cause la extinción de una especie biológica.

ARTÍCULO 3°. Adiciónese un numeral 33 al artículo 35 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

(…)

33. De los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, tráfico de fauna, deforestación, promoción y financiación de la deforestación, daños en los recursos naturales y ecocidio, e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

ARTÍCULO 4°. Adiciónese un parágrafo al artículo 91 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así:

(…)

Parágrafo. Cuando se hubiese suspendido o cancelado la personería jurídica de que trata este artículo, la persona natural o jurídica estará inhabilitada para constituir nuevas personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público, con el mismo objeto o actividad económica a desarrollar, hasta que el Juez de Conocimiento tome una decisión definitiva en la sentencia correspondiente.

ARTÍCULO 5°. Adiciónese un parágrafo 2 al artículo 92 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así:

Parágrafo 2. Tratándose de los delitos contemplados en el título XI del Código Penal, el juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.

ARTÍCULO 6°. El artículo 302 de la Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo inciso que quedará así:

Cuando la captura en flagrancia se produzca en ríos o tierra donde el arribo a la cabecera municipal más cercana sólo puede surtirse por vía fluvial o siempre que concurran dificultades objetivas de acceso al territorio como obstáculos geográficos, logísticos, ausencia de infraestructura de transporte o fenómenos meteorológicos que dificulten seriamente el traslado del aprehendido, se realizarán todas las actividades para lograr la comparecencia del capturado ante el juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin que en ningún caso exceda las 36 horas siguientes, contadas a partir del momento de la llegada al puerto o municipio más cercano, según el caso. La autoridad competente deberá acreditar los eventos descritos en el presente inciso.

Artículo 7. Dirección de Apoyo Territorial. Créese en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Apoyo Territorial adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana, la que tendrá como función principal liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presencia efectiva de la Entidad con un trabajo interdisciplinario en territorios apartados o de difícil acceso, sin perjuicio de la competencia de otras Direcciones sobre la materia.

La Dirección de Apoyo Territorial estará conformada por:

Unidad	Cantidad	Cargo	Niveles
Dirección de Apoyo Territorial	1	Director Nacional I	Directivo
	2	Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito	Profesional
	20	Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional
	1	Profesional Experto	Profesional
	2	Profesional Especializado II	Profesional
	2	Profesional De Gestión III	Profesional
	12	Investigador Experto	Profesional
	10	Profesional Investigador III	Profesional
	9	Profesional Investigador II	Profesional
	9	Profesional Investigador I	Profesional
	10	Técnico Investigador IV	Técnico
	12	Técnico Investigador III	Técnico
	20	Asistente de Fiscal IV	Técnico
	5	Asistente de Fiscal III	Técnico
	5	Asistente de Fiscal II	Técnico
	2	Secretario Ejecutivo	Técnico
	3	Secretario Administrativo	Asistencial

Parágrafo 1: De forma prioritaria la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación desarrollará el concurso necesario para proveer los cargos establecidos en el presente artículo de conformidad con el Sistema Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación, sin perjuicio de los nombramientos en provisionalidad necesarios para implementar inmediatamente la Dirección establecida, en los cuales se aplicarán los principios de mérito, transparencia, garantía de imparcialidad y eficiencia y eficacia del artículo 3, junto con los criterios de mérito señalados en el numeral 3 del artículo 11 del Decreto Ley 020 de 2014.

Parágrafo 2: El inicio del concurso se realizará dentro de los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 3: La Fiscalía General de la Nación presentará anualmente un informe sobre los indicadores de gestión, avance y esclarecimiento en la investigación y judicialización de las conductas que afecten los recursos naturales y el medio ambiente. Esta información será pública y contendrá datos estadísticos que no estén sometidos a reserva.

Artículo 8. Dirección de Apoyo Territorial. Adiciónese el artículo 36A al Decreto Ley 016 de 2014, el cual quedará así: La Dirección de Apoyo Territorial cumplirá las siguientes funciones:

1. Liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presencia efectiva de la Entidad en territorios apartados o de difícil acceso, en aquellas zonas afectadas por fenómenos criminales de alto impacto y por la presencia de grupos armados organizados.
2. Apoyar la investigación, especialmente actos urgentes, en aquellos fenómenos priorizados que se den en territorios donde la Fiscalía General de la Nación no tenga presencia permanente o sean de difícil acceso.
3. Definir los lugares en los que se podrá actuar por medio de grupos itinerantes, con base en criterios geográficos y no en la división político-administrativa, así como en el análisis de la criminalidad del país, la presencia de organizaciones criminales, los tiempos de desplazamiento al lugar de comisión de la conducta punible, la oferta de servicios de justicia por parte de otras entidades, entre otros factores.
4. Conformar grupos especializados de investigadores y analistas expertos en los fenómenos criminales priorizados por la Dirección.
5. Realizar proceso de articulación de la estrategia territorial con otras entidades públicas.
6. Designar fiscales itinerantes en aquellos procesos sobre fenómenos priorizados, con el fin que apoyen, impulsen y asesoren a los fiscales titulares con el fin de lograr una efectiva judicialización.
7. Conformar equipos móviles de la Entidad, en los que periódicamente se reciban denuncias de los habitantes del territorio nacional y se brinde atención a las víctimas de las conductas punibles en territorios apartados o zonas de alto impacto o presencia de grupos armados organizados.
8. Organizar y adelantar comités técnico-jurídicos de revisión de las situaciones y los casos para la ejecución de acciones en el desarrollo efectivo y eficiente de las investigaciones penales de su competencia.
9. Dirigir y coordinar los grupos de trabajo, los departamentos y unidades que se conformen para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Dirección.
10. Dirigir, coordinar y controlar la incorporación y aplicación de políticas públicas en el desarrollo de las actividades que cumplen los servidores, dependencias y los grupos de trabajo que estén a su cargo, de acuerdo con los lineamientos y las orientaciones que impartan las dependencias competentes.
11. Identificar y delimitar situaciones y casos susceptibles de ser priorizados y proponerlos al Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos.
12. Ejecutar los planes de priorización aprobados por el Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos en lo de su competencia.
13. Apoyar, en el marco de sus competencias, a la Dirección de Políticas y Estrategia en el análisis de la información que se requiera para sustentar la formulación de la política en materia criminal.
14. Mantener actualizada la información que se registre en los sistemas de información de la Entidad, en los temas de su competencia.
15. Consolidar, analizar y clasificar la información de las investigaciones y acusaciones adelantadas por los servidores y grupos de trabajo a su cargo y remitirla a la Dirección de Políticas y Estrategia.
16. Dirimir, de conformidad con la Constitución y la ley, los conflictos de competencia que se presenten entre la Fiscalía General de la Nación y los demás organismos que desempeñen funciones de Policía Judicial, en el ámbito de su competencia.
17. Dirimir los conflictos administrativos que se presenten al interior de la Fiscalía en el ejercicio de las funciones o en la asignación de investigaciones, en los casos y según las directrices y lineamientos impartidos por el Fiscal General de la Nación.
18. Asesorar a las dependencias de la Fiscalía General de la Nación que cumplen funciones investigativas y acusatorias en los temas de su competencia.
19. Elaborar e implementar los planes operativos anuales en el ámbito de su competencia, de acuerdo con la metodología diseñada por la Dirección de Planeación y Desarrollo.
20. Aplicar las directrices y lineamientos del Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación.
21. Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el Fiscal o Vicefiscal General de la Nación.

Artículo 9. Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. Créese en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio

Ambiente adscrito a la Delegada contra la Criminalidad Organizada, la que tendrá como función principal la investigación y judicialización de los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y las demás conductas delictivas conexas o relacionadas, mediante un trabajo interdisciplinario sin perjuicio de la competencia de las Direcciones Seccionales sobre la materia.

La Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente estará conformada por:

Unidad	Cantidad	Cargo	Niveles
Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	1	Director Nacional I	Directivo
	2	Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito	Profesional
	20	Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional
	1	Profesional Experto	Profesional
	2	Profesional Especializado II	Profesional
	2	Profesional De Gestión III	Profesional
	12	Investigador Experto	Profesional
	10	Profesional Investigador III	Profesional
	9	Profesional Investigador II	Profesional
	9	Profesional Investigador I	Profesional
	10	Técnico Investigador IV	Técnico
	12	Técnico Investigador III	Técnico
	20	Asistente de Fiscal IV	Técnico
	5	Asistente de Fiscal III	Técnico
	5	Asistente de Fiscal II	Técnico
	2	Secretario Ejecutivo	Técnico
	3	Secretario Administrativo	Asistencial

Parágrafo 1: De forma prioritaria la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación desarrollará el concurso necesario para proveer los cargos establecidos en el presente artículo de conformidad con el Sistema Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación, sin perjuicio de los nombramientos en provisionalidad necesarios para implementar inmediatamente la Dirección establecida, en los cuales se aplicarán los principios de mérito, transparencia, garantía de imparcialidad y eficiencia y eficacia del artículo 3, junto con los criterios de mérito señalados en el numeral 3 del artículo 11 del Decreto Ley 020 de 2014.

Parágrafo 2: El inicio del concurso se realizará dentro de los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 3: La Fiscalía General de la Nación presentará anualmente un informe sobre los indicadores de gestión, avance y esclarecimiento en la investigación y judicialización de las conductas que afecten los recursos naturales y el medio ambiente. Esta información será pública y contendrá datos estadísticos que no estén sometidos a reserva.

ARTÍCULO 10. Prevención del daño antijurídico y promoción de la adecuada defensa litigiosa. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el marco de sus funciones, deberá diseñar e implementar una política de prevención del daño antijurídico en materia de protección ambiental y ecológica. De igual forma, promoverá la coordinación de las acciones que aseguren la adecuada defensa de los intereses litigiosos de la nación dentro de los procesos que se lleven a cabo en materia de defensa de los recursos naturales y de la fauna y la flora silvestre.

ARTÍCULO 11°. Vigencia y Derogatoria. La presente rige a partir de su promulgación y publicación en el Diario Oficial y deroga el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000 y todas las disposiciones que le sean contrarias.

Cordialmente,

SANTIAGO VALENCIA (Coordinador)
Senador de la República

ANGELICA LOZANO
Senadora de la República
(Con Observaciones y salvedades)

LUIS FERNANDO VELASCO
Senador de la República

SOLEDAD TAMAYO
Senadora de la República

GERMAN VARÓN COTRINO
Senador de la República

ROOSVELT RODRIGUEZ
Senador de la República

CARLOS EDUARDO GUEVARA
Senador de la República
(Con Observaciones y salvedades)

EDUARDO EMILIO PACHECO CUELLO
Honorable Senador de la República

GUSTAVO PETRO
Senador de la República

ROY BARRERAS
Senador de la República

ALEXANDER LÓPEZ MAYA
Senador de la República
(Con Observaciones y salvedades)

JULIAN GALLO
Senador de la República
(Con Observaciones y salvedades)

ARMANDO BENEDETTI
Senador de la República
(Con observaciones y salvedades en el artículo 337A)

08-06-21. COMISION PRIMERA H. SENADO DE LA REPUBLICA. SECRETARIA COMISION. SESIONES VIRTUALES. En la fecha se radica la ponencia para segundo de esta iniciativa, en el correo institucional comisión.primera@senado.gov.co.

Guillermo León Giraldo Gil
Secretario General Comisión Primera
H. Senado de la República

08-06-21. COMISION PRIMERA H. SENADO DE LA REPUBLICA. SECRETARIA COMISION. SESIONES VIRTUALES. Acorde al artículo 165 de la Ley 5ª de 1992, se autoriza por parte de la Presidencia y la Secretaría de esta célula legislativa, la publicación de este informe de ponencia para segundo debate.

Presidente,

MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ

Secretario General,

GUILLERMO LEÓN GIRALDO GIL

TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN PRIMERA DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA

PROYECTO DE LEY N° 446 DE 2021 SENADO - N° 283 DE 2019 CÁMARA.

"POR MEDIO DEL CUAL SE SUSTITUYE EL TÍTULO XI "DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE" DE LA LEY 599 DE 2000, SE MODIFICA LA LEY 906 DE 2004 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:

TÍTULO XI.
DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO I.
DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES

ARTÍCULO 328. APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES. *El que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, capture, mantenga, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, trafique o de cualquier otro modo se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta y tres mil setecientos cincuenta (43.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la práctica de cercenar aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras), y descartar el resto del cuerpo al mar.

ARTÍCULO 328A. TRÁFICO DE FAUNA. *El que trafique, mercadee, adquiera, exporte y de cualquier forma comercialice los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de trescientos (300) hasta cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la exportación o comercialización de aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras).

ARTÍCULO 328B. CAZA ILEGAL. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, cazare, excediere el número de piezas permitidas o cazare en época de veda, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de treinta y tres (33) a novecientos treinta y siete (937) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.*

ARTÍCULO 328C. PESCA ILEGAL. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese o almacene ejemplares o productos de especies vedadas, protegidas, en cualquier categoría de amenaza, o en áreas de reserva, o en zona prohibida, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a las que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

En la misma pena incurrirá el que:

1. Utilice instrumentos, artes y métodos de pesca no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente, para cualquier especie.

2. Modifique, altere o atente, los refugios o el medio ecológico de especies de recursos hidrobiológicos y pesqueros, como consecuencia de actividades de exploración o explotación de recursos naturales.

3. Construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ciénagas, lagunas, caños, ríos y canales.

PARÁGRAFO: *La conducta descrita en este artículo no será considerada delito si la misma se ajusta a los condicionamientos y requisitos señalados en la Resolución 649 de 2019 expedida por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) o aquella que la derogue o sustituya, para la pesca de subsistencia.*

ARTÍCULO 329. MANEJO ILÍCITO DE ESPECIES EXÓTICAS. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, trasplante, manipule, siembre, hibride, comercialice, transporte, mantenga, transforme, experimente, inocule o propague especies silvestres exóticas, invasoras, que pongan en peligro la salud humana, el ambiente o las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

ARTÍCULO 330. DEFORESTACIÓN. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente tale, queme, corte, arranque o destruya áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

La pena se aumentará a la mitad cuando:

1. Cuando la conducta se realice para fines de ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal.

2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.

ARTÍCULO 330A. PROMOCIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA DEFORESTACIÓN. *El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte, arranque o destrucción de áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

La pena se aumentará a la mitad cuando:

1. Cuando la conducta se realice para fines de ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal.

2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.

ARTÍCULO 331. MANEJO Y USO ILÍCITO DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS, MICROORGANISMOS Y SUSTANCIAS O ELEMENTOS PELIGROSOS. *El que con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, importe, manipule, experimente, posea, inocule, comercialice, exporte, libere o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos, moléculas, substancias o elementos que pongan en peligro la salud o la existencia de los recursos fáunicos, florísticos, hidrobiológicos, hídricos o alteren perjudicialmente sus poblaciones, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

ARTÍCULO 332. EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE YACIMIENTO MINERO Y OTROS MATERIALES. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

ARTÍCULO 332A. TENENCIA O TRANSPORTE DE MERCURIO. *El que con incumplimiento de la normatividad existente importe, tenga, almacene, transporte, use o comercialice mercurio, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

CAPÍTULO II.
DE LOS DAÑOS EN LOS RECURSOS NATURALES

ARTÍCULO 333. DAÑOS EN LOS RECURSOS NATURALES Y ECOCIDIO. *El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o cause un impacto ambiental grave o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título o a los que estén asociados con estos, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

PARÁGRAFO 1°. *Para los efectos de este artículo se entiende por ecocidio, el daño masivo y destrucción generalizada grave y sistémica de los ecosistemas.*

PARÁGRAFO 2°. *Por impacto ambiental grave se entenderá, la alteración de las condiciones ambientales que se genere como consecuencia de la afectación de los componentes ambientales, eliminando la integridad del sistema y poniendo en riesgo su sostenibilidad.*

CAPÍTULO III.
DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

ARTÍCULO 334. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. *El que con incumplimiento de la normatividad existente provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertimientos, radiaciones, ruidos, depósitos, o disposiciones al aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas superficiales, marítimas o subterráneas o demás recursos naturales en tal forma que contamine o genere un efecto nocivo en el ambiente, que ponga en peligro la salud humana y los recursos naturales, incurrirá en prisión de sesenta y nueve (69) a ciento cuarenta (140) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en este artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. *Cuando la conducta se realice con fines terroristas.*
2. *Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por la normatividad existente o haya infringido más de dos parámetros.*
3. *Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, depósitos, emisiones o disposiciones.*
4. *Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.*
5. *Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de control y vigilancia de la autoridad competente.*
6. *Cuando la contaminación sea producto del almacenamiento, transporte, vertimiento o disposición inadecuada de residuo peligroso.*

ARTÍCULO 334A. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTO MINERO O HIDROCARBURO. *El que provoque, contamine o realice directa o indirectamente en los recursos de agua, suelo, subsuelo o atmósfera, con ocasión a la extracción o excavación, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años, y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

ARTÍCULO 335. EXPERIMENTACIÓN ILEGAL CON ESPECIES, AGENTES BIOLÓGICOS O BIOQUÍMICOS. *El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice experimentos con especies, agentes biológicos o bioquímicos que constituyan, generen o pongan en peligro la supervivencia de las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

CAPÍTULO IV.
DE LA INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA

ARTÍCULO 336. INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA. *El que invada, permanezca así sea de manera temporal o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en área de reserva forestal, ecosistemas de importancia ecológica, playas, terrenos de bajamar, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, parque nacional natural, área o ecosistema de interés estratégico, área protegida, definidos en la ley o reglamento incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.

ARTÍCULO 336A. FINANCIACIÓN DE INVASIÓN A ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA. *El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.

CAPÍTULO V.
DE LA APROPIACIÓN ILEGAL DE BALDÍOS DE LA NACIÓN

ARTÍCULO 337. APROPIACIÓN ILEGAL DE BALDÍOS DE LA NACIÓN. *El que usurpé, ocupe, utilice, acumule, tolere, colabore o permita la apropiación de baldíos de la Nación, sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos y despojo de tierras.

PARÁGRAFO 1º. *La conducta descrita en este artículo no será considerada delito si la misma se ajusta a los condicionamientos y requisitos señalados en la ley 160 de 1994, así como en el Decreto Ley 902 de 2017 para la adjudicación de bienes baldíos.*

PARÁGRAFO 2º. *Cuando la conducta descrita en el artículo anterior sea cometida por personas campesinas, indígenas o afrodescendientes, que dependa su subsistencia de la habitación, trabajo o aprovechamiento de los baldíos de la Nación no habrá lugar a responsabilidad penal.*

ARTÍCULO 337A. FINANCIACIÓN DE LA APROPIACIÓN ILEGAL DE LOS BALDÍOS DE LA NACIÓN. *El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie, patrocine, induzca, ordene o dirija la apropiación ilegal de baldíos de la nación descrito en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los bienes muebles, inmuebles o semovientes encontrados en los baldíos ilegalmente apropiados.*

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos.

PARÁGRAFO 1º. *Cuando la conducta descrita en el artículo anterior, sea cometida por personas campesinas, indígenas o afrodescendientes, que dependan su subsistencia de la habitación, trabajo o aprovechamiento de los baldíos de la Nación no habrá lugar a responsabilidad penal.*

CAPÍTULO VI.
DISPOSICIONES COMUNES

ARTÍCULO 338. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA. *Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando:*

a) Cuando la conducta se cometa en ecosistemas naturales que hagan parte del sistema nacional o regional de áreas protegidas, en ecosistemas estratégicos, o en territorios de comunidades étnicas. Con excepción de las conductas consagradas en los artículos 336 y 336A.

b) Cuando la conducta se cometa contra especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana o de especies vedadas, prohibidas, en período de reproducción o crecimiento, de especial importancia ecológica, raras o endémicas del territorio colombiano. Con excepción de la conducta contemplada en el artículo 328C.

c)Cuando con la conducta se altere el suelo, el subsuelo, los recursos hidrobiológicos, se desvíen los cuerpos de agua o se afecten ecosistemas marinos, manglares, pastos marinos y corales.

d)Cuando la conducta se cometiere por la acción u omisión de quienes ejercen funciones de seguimiento, control y vigilancia o personas que ejerzan funciones públicas.

e) Cuando la conducta se cometiere por integrantes de grupos delictivos organizados o grupos armados organizados o con la finalidad de financiar actividades terroristas, grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley, grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a sus integrantes.

f) Cuando la conducta se cometa mediante el uso o manipulación de herramientas tecnológicas.

g) Cuando con la conducta se ponga en peligro la salud humana.

h) Cuando con la conducta se introduzca al suelo o al agua sustancias prohibidas por la normatividad existente o se realice mediante el uso de sustancias tóxicas, peligrosas, venenos, inflamables, combustibles, explosivas, radioactivas, el uso de explosivos, maquinaria pesada o medios mecanizados, entendidos estos últimos como todo tipo de equipos o herramientas mecanizados utilizados para el arranque, la extracción o el beneficio de minerales o la distribución ilegal de combustibles.

i)Cuando se promueva, financie, dirija, facilite o suministre medios para la realización de las conductas. Con excepción de las conductas contempladas en los artículos 330A, 336A y 337A.

j) Cuando con la conducta se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies.

ARTÍCULO 339. MODALIDAD CULPOSA. *Las penas previstas en los artículos 333, 334, 334A de este código se disminuirán hasta en la mitad cuando las conductas punibles se realicen culposamente.*

ARTÍCULO 2. Modifíquese el numeral 14 del artículo 58 de la ley 599 del 2000, el cual quedará así:

ARTÍCULO 58. CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR PUNIBILIDAD.

(…)

14. Cuando se produjere un daño ambiental grave, una irreversible modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales o se cause la extinción de una especie biológica.

ARTÍCULO 3. Adiciones al inciso segunda del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, las siguientes conductas punibles:

ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES.
(…)
Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaiga sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; abigeato enunciado en el inciso tercero del artículo 243; extorsión; homicidio agravado contemplado en el numeral 6 del artículo 104; lesiones causadas con agentes químicos, ácidos y/o sustancias similares; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objeto peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonales; aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables; tráfico de fauna; deforestación; promoción y financiación de la deforestación; daños en los recursos naturales y ecocidio; e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

ARTÍCULO 4. Adiciónese un numeral 33 al artículo 35 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

(…)

33. De los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, tráfico de fauna, deforestación, promoción y financiación de la deforestación, daños en los recursos naturales y ecocidio, e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

ARTÍCULO 5. Adiciónese un parágrafo al artículo 91 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así:

(…)

PARÁGRAFO. *Cuando se hubiese suspendido o cancelado la personería jurídica de que trata este artículo, la persona natural o jurídica estará inhabilitada para constituir nuevas personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público, con el mismo objeto o actividad económica a desarrollar, hasta que el Juez de Conocimiento tome una decisión definitiva en la sentencia correspondiente.*

ARTÍCULO 6. Adiciónese un parágrafo 2 al artículo 92 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así:

PARÁGRAFO 2. *Tratándose de los delitos contemplados en el título XI del Código Penal, el juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.*

ARTÍCULO 7. El artículo 302 de la Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo inciso que quedará así:

Cuando la captura en flagrancia se produzca en ríos o tierra donde el arribo a la cabecera municipal más cercana sólo puede surtirse por vía fluvial o siempre que concurran dificultades objetivas de acceso al territorio como obstáculos geográficos, logísticos, ausencia de infraestructura de transporte o fenómenos meteorológicos que dificulten seriamente el traslado del aprehendido, se realizarán todas las actividades para lograr la comparecencia del capturado ante el juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin que en ningún caso exceda las 36 horas siguientes, contadas a partir del momento de la llegada al puerto o municipio más cercano, según el caso. La autoridad competente deberá acreditar los eventos descritos en el presente inciso.

ARTÍCULO 8. DIRECCIÓN DE APOYO TERRITORIAL. Créase en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Apoyo Territorial adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana, la que tendrá como función principal liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presenta efectiva de la Entidad en territorios apartados o de difícil acceso, sin perjuicio de la competencia de otras Direcciones sobre la materia.

La Dirección de Apoyo Territorial estará conformada por:

Unidad	Cantidad	Cargo	Niveles
Dirección de Apoyo Territorial	1	Director Nacional I	Directivo
	2	Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito	Profesional
	20	Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional
	1	Profesional Experto	Profesional
	2	Profesional Especializado II	Profesional
	2	Profesional De Gestión III	Profesional
	12	Investigador Experto	Profesional
	10	Profesional Investigador III	Profesional

	9	Profesional Investigador II	Profesional
	9	Profesional Investigador I	Profesional
	10	Técnico Investigador IV	Técnico
	10	Técnico Investigador III	Técnico
	20	Asistente de Fiscal IV	Técnico
	5	Asistente de Fiscal III	Técnico
	5	Asistente de Fiscal II	Técnico
	2	Secretario Ejecutivo	Técnico
	2	Conductor	Asistencial
	3	Secretario Administrativo	Asistencial

ARTÍCULO 9°. DIRECCIÓN DE APOYO TERRITORIAL. Adiciónese el artículo 36A al Decreto Ley 016 de 2014, el cual quedará así: La Dirección de Apoyo Territorial cumplirá las siguientes funciones:

1. Liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presencia efectiva de la Entidad en territorios apartados o de difícil acceso, en aquellas zonas afectadas por fenómenos criminales de alto impacto y por la presencia de grupos armados organizados.
2. Apoyar la investigación, especialmente actos urgentes, en aquellos fenómenos priorizados que se den en territorios donde la Fiscalía General de la Nación no tenga presencia permanente o sean de difícil acceso.
3. Definir los lugares en los que se podrá actuar por medio de grupos itinerantes, con base en criterios geográficos y no en la división político-administrativa, así como en el análisis de la criminalidad del país, la presencia de organizaciones criminales, los tiempos de desplazamiento al lugar de comisión de la conducta punible, la oferta de servicios de justicia por parte de otras entidades, entre otros factores.
4. Conformar grupos especializados de investigadores y analistas expertos en los fenómenos criminales priorizados por la Dirección.
5. Realizar proceso de articulación de la estrategia territorial con otras entidades públicas.
6. Designar fiscales itinerantes en aquellos procesos sobre fenómenos priorizados, con el fin que apoyen, impulsen y asesoren a los fiscales titulares con el fin de lograr una efectiva judicialización.
7. Conformar equipos móviles de la Entidad, en los que periódicamente se reciban denuncias de los habitantes del territorio nacional y se brinde atención a las víctimas de las conductas punibles en territorios apartados o zonas de alto impacto o presencia de grupos armados organizados.
8. Organizar y adelantar comités técnico-jurídicos de revisión de las situaciones y los casos para la ejecución de acciones en el desarrollo efectivo y eficiente de las investigaciones penales de su competencia.
9. Dirigir y coordinar los grupos de trabajo, los departamentos y unidades que se conformen para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Dirección.
10. Dirigir, coordinar y controlar la incorporación y aplicación de políticas públicas en el desarrollo de las actividades que cumplen los servidores, dependencias y los grupos de trabajo que estén a su cargo, de acuerdo con los lineamientos y las orientaciones que impartan las dependencias competentes.
11. Identificar y delimitar situaciones y casos susceptibles de ser priorizados y proponerlos al Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos.
12. Ejecutar los planes de priorización aprobados por el Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos en lo de su competencia.
13. Apoyar, en el marco de sus competencias, a la Dirección de Políticas y Estrategia en el análisis de la información que se requiera para sustentar la formulación de la política en materia criminal.
14. Mantener actualizada la información que se registre en los sistemas de información de la Entidad, en los temas de su competencia.
15. Consolidar, analizar y clasificar la información de las investigaciones y acusaciones adelantadas por los servidores y grupos de trabajo a su cargo y remitirla a la Dirección de Políticas y Estrategia.
16. Dirimir, de conformidad con la Constitución y la ley, los conflictos de competencia que se presenten entre la Fiscalía General de la Nación y los demás organismos que desempeñen funciones de Policía Judicial, en el ámbito de su competencia.
17. Dirimir los conflictos administrativos que se presenten al interior de la Fiscalía en el ejercicio de las funciones o en la asignación de investigaciones, en los casos y según las directrices y lineamientos impartidos por el Fiscal General de la Nación.
18. Asesorar a las dependencias de la Fiscalía General de la Nación que cumplen funciones investigativas y acusatorias en los temas de su competencia.
19. Elaborar e implementar los planes operativos anuales en el ámbito de su competencia, de acuerdo con la metodología diseñada por la Dirección de Planeación y Desarrollo.
20. Aplicar las directrices y lineamientos del Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación.
21. Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el Fiscal o Vicefiscal General de la Nación.

ARTÍCULO 10°. DIRECCIÓN ESPECIALIZADA PARA LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE. Créase en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente adscrito a la Delegada contra la Criminalidad Organizada, la que tendrá como función principal la investigación y judicialización de los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y las demás conductas delictivas conexas o relacionadas, sin perjuicio de la competencia de las Direcciones Seccionales sobre la materia.

La Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente estará conformada por:

Unidad	Cantidad	Cargo	Niveles
Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	1	Director Nacional I	Directivo
	2	Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito	Profesional
	20	Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional
	1	Profesional Experto	Profesional
	2	Profesional Especializado II	Profesional
	2	Profesional De Gestión III	Profesional
	12	Investigador Experto	Profesional
	10	Profesional Investigador III	Profesional
	9	Profesional Investigador II	Profesional
	9	Profesional Investigador I	Profesional
	10	Técnico Investigador IV	Técnico
	10	Técnico Investigador III	Técnico
	20	Asistente de Fiscal IV	Técnico
	5	Asistente de Fiscal III	Técnico
	5	Asistente de Fiscal II	Técnico
	2	Secretario Ejecutivo	Técnico
	2	Conductor	Asistencial
	3	Secretario Administrativo	Asistencial

ARTÍCULO 11°. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente rige a partir de su promulgación y publicación en el Diario Oficial y deroga el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000 y todas las disposiciones que le sean contrarias.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS FUE APROBADO EL PROYECTO DE LEY N° 446 DE 2021 SENADO – N° 283 DE 2019 CÁMARA "POR MEDIO DEL CUAL SE SUSTITUYE EL TÍTULO XI "DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE" DE LA LEY 599 DE 2000, SE MODIFICA LA LEY 906 DE 2004 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", COMO CONSTA EN LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE MAYO DE 2021, ACTA N° 48.

PONENTE:

S. SANTIAGO VALENCIA GONZALEZ
H. Senador de la República

Presidente,



MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ

Secretario General,



GUILLERMO LEÓN GIRALDO GIL

Observaciones y salvedades al proyecto de ley 283 de 2019 Cámara – 446 de 2021 Senado "Por medio del cual se sustituye el Título XI "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones"

En relación con el proyecto de la referencia, nos permitimos comunicar que suscribimos la ponencia, pero presentamos las siguientes observaciones que esperamos sean tenidas en cuenta en el último debate que cursará en la plenaria del Senado de la República:

1. Artículo 330 sobre el delito de deforestación

Anunciamos nuestra preocupación por la redacción del artículo, pues si bien aceptamos que el delito contemple una determinación mínima de una hectárea de bosque natural deforestado para que se predique la tipicidad de la conducta, no existe el suficiente sustento técnico que dé cuenta que se trata de una cifra mínima razonable para indicar que existe el suficiente daño al bien jurídico tutelado que quiere protegerse con este delito. Solicitamos a las entidades técnicas del gobierno nacional que antes de que sea debatido el proyecto en el seno de la plenaria del Senado de la República, envíe a los congresistas documentos técnicos que señalen por qué una hectárea es suficiente para indicar que ese grado de deforestación debe ser sancionado penalmente.

Asimismo, este delito debe ser readecuado en la discusión de la plenaria porque debe quedar claro que éste no generará menoscabo en los derechos colectivos de comunidades campesinas, indígenas y afro, quienes no solamente han sido víctimas de criminalizaciones por la ejecución de la operación Artemisa caracterizada por generar capturas, judicializaciones por la presunta comisión de delitos ambientales, uso desmedido de la fuerza y estigmatizaciones, atropellos graves a sus derechos fundamentales y un riesgo incesante de desplazamiento contra esta población vulnerable, aun cuando el Estado tiene la obligación de brindarles una protección especial. Por tal motivo, debe señalarse que este delito no recaerá en las actividades que por ley se han legitimado para estas comunidades, en particular lo dispuesto en la Ley 160 de 1994, la Resolución 041 de 1996 y el Decreto Ley 902 de 2017. De la normativa señalada, se destaca lo relativo al concepto de Unidad Agrícola familiar, la cual se define como el área mínima vital que permite a una familia rural poder vivir de forma digna y cuyas características varían de acuerdo con las características de la población en cuestión y las características geográficas del territorio donde habita.

2. Capítulo V sobre la apropiación ilegal de baldíos de la nación

Ante las demandas de reforma agraria, de acceso a la propiedad de la tierra, de redistribución y de reparto de tierras, la respuesta históricamente ha sido la de asignar baldíos de la nación. Los baldíos, entonces, son bienes de la nación que por disposición constitucional están orientados a población campesina, indígena y afro en cumplimiento de la función social de la propiedad y del compromiso que tiene el Estado colombiano de garantizar el acceso progresivo a la tierra de estas poblaciones. Y en esa medida una reforma al Código Penal no podría resultar regresiva frente al derecho que tienen estas comunidades que ocupan esos baldíos a acceder a tierras y a proteger sus territorios sin ninguna justificación.

Por lo anterior, es fundamental que se dé estricto cumplimiento a lo estipulado en Ley 160 de 1994, así como en el Decreto Ley 902 de 2017 que desarrolla el punto 1 del Acuerdo Final de Paz, para que al campesinado, las comunidades afro, raizales e indígenas, se le permita hacer uso de las herramientas que han sido provistas por la ley para que en procesos consensuados, transparentes y organizativos, se les otorgue en derecho propio, tierras que pertenecen a áreas baldías de la nación con el propósito de subsanar la deuda que como previamente se mencionó, tiene el Estado con estas comunidades de otorgarles una vida digna en territorios que puedan proveerles lo necesario para su supervivencia.

En conclusión, es de suma importancia que sea definido en el Código penal este delito y se sancione a quien se apropia y acumula grandes extensiones de baldíos a raíz de la deforestación, sin embargo, esto no puede ir en menoscabo de los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerables que son las que habitan estas regiones apartadas y su subsistencia dependen plenamente del trabajo con la tierra. Al contrario, el Estado colombiano debe dar cumplimiento del acto legislativo 02 de 2017 y, en consecuencia, debe concentrarse de manera especial en implementar políticas públicas que desarrollen el acceso de tierras baldías a los campesinos, indígenas y afro con el fin de que haya una mejor distribución de la tierra en Colombia, razón principal que ha generado el conflicto armado en nuestro país, inclusive las mismas comunidades deben ser soporte para la recuperación ambiental de los territorios.

3. Eliminación del artículo 3 del proyecto sobre exclusión de subrogados y beneficios penales, el derecho penal como última Ratio.

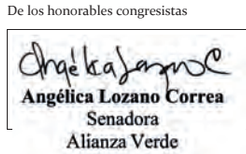
Este proyecto traía consigo la incorporación de una serie de delitos ambientales en el listado de conductas que excluirían la posibilidad del goce de los subrogados y beneficios penales. Es decir, ante una serie de tipos nuevos, sobre los cuales no se ha podido establecer su grado de eficacia ni el daño que buscan prevenir con el derecho penal, se les quería atribuir automáticamente una peligrosidad tal que excluiría la posibilidad de tomar beneficios penales que tienen como finalidad el pleno desarrollo de un fin de la pena, como es la resocialización del condenado, así como la descongestión del sistema penitenciario colombiano.

Debido a lo anterior, consideramos sumamente inconveniente que el legislador establezca estas nuevas exclusiones y por eso reiteramos la postura referente a la eliminación del artículo 68A, en caso de reabrirse la discusión en sede de la Plenaria, toda vez que no se han especificado en la exposición de motivos razones ético-políticas y de conveniencia social que lleven a la necesidad de apartar completamente a los condenados por ciertos delitos ambientales dentro de prisiones intramurales, impidiendo entonces que puedan acceder a libertades condicionales. Si bien somos conscientes del daño severo que conlleva la comisión de delitos tales como el tráfico de fauna, la deforestación o la invasión de áreas de especial importancia ecológica, no por ello consideramos que el legislador debe actuar de manera severa para impedir que puedan gozar de ciertos beneficios penales que, en últimas, buscan la resocialización del condenado con la sociedad de cara a que pueda reparar de manera directa a la nación y los habitantes del territorio nacional, junto con una herramienta de negociación para que se desarticulen estas estructuras criminales que atacan al ambiente desde su eslabón más fuerte, no desde el más débil para prevenir realmente la comisión de estos delitos.

Asimismo, la exclusión de los subrogados penales no trae consigo que haya una desaceleración en la comisión de las conductas punibles que se enlistan en el artículo 68A del código penal, pues tal como sucede con otros tipos penales, por ejemplo, los relacionados con el tráfico de estupefacientes, los datos arrojan que dichos son de los más cometidos.

Además, consideramos que la inclusión de estos delitos ambientales en el catálogo de conductas punibles excluidas de poder ser beneficiarios de subrogados penales, implica un desconocimiento total de las tasas de hacinamiento del sistema penitenciario colombiano, que al día de hoy se acerca al 20%, con una sobrepoblación de 15.711 internos. La Corte Constitucional declaró en la sentencia T-388 de 2013 el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario, obligando al Estado y a los gobiernos nacionales a que tomen medidas para descongestionar las cárceles de Colombia, con el fin de que allí puedan respetarse los derechos humanos de los reclusos. Sin embargo, este artículo ignora completamente esta situación, pues no se encarga de rediseñar la política criminal de tal forma que se favorezca la libertad y se encarcele sólo lo indispensable.

De los honorables congresistas



Angélica Lozano Correa
Senadora
Alianza Verde



ALEXANDER LÓPEZ MAYA
Senador de la República

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

I S S N 0 1 2 3 - 9 0 6 6

AÑO XXX - Nº 755 | Bogotá, D. C., jueves, 8 de julio de 2021 | EDICIÓN DE 23 PÁGINAS

DIRECTORES: GREGORIO ELJACH PACHECO, SECRETARIO GENERAL DEL SENADO, www.secretariasenado.gov.co; JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO, SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA, www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

SENADO DE LA REPÚBLICA

TEXTOS DE PLENARIA

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 446 DE 2021 SENADO Y 283 DE 2019 CÁMARA

por medio del cual se sustituye el Título XI "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2021 AL PROYECTO DE LEY No. 446/2021 SENADO Y 283/2019 CÁMARA "POR MEDIO DEL CUAL SE SUSTITUYE EL TÍTULO XI "DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE" DE LA LEY 599 DE 2000, SE MODIFICA LA LEY 906 DE 2004 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:

TÍTULO XI.

DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO I.

DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES

Artículo 328. Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. El que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, acceda, capture, mantenga, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, trafique o de cualquier otro modo se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta y tres mil setecientos cincuenta (43.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la práctica de cercenar aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras), y descartar el resto del cuerpo al mar.

Artículo 328A. Tráfico de Fauna. El que trafique, adquiera, exporte o comercialice sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de trescientos (300) hasta cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la exportación o comercialización de aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras).

Artículo 328B. Caza Ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, cazare, excediere el número de piezas permitidas o cazare en épocas de vedas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de treinta y tres (33) a novecientos treinta y siete (937) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.

Artículo 328C. Pesca ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese o almacene ejemplares o productos de especies vedadas, protegidas, en cualquier categoría de amenaza, o en áreas de reserva, o en épocas vedadas, o en zona prohibida, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a las que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que:

1. Utilice instrumentos, artes y métodos de pesca no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente, para cualquier especie.

2. Modifique, altere o atente, los refugios o el medio ecológico de especies de recursos hidrobiológicos y pesqueros, como consecuencia de actividades de exploración o explotación de recursos naturales.

3. Construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ciénagas, lagunas, caños, ríos y canales.

Parágrafo: La pesca de subsistencia no será considera delito, cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la normatividad existente.

Artículo 329. Manejo ilícito de especies exóticas. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, trasplante, manipule, siembre, hibride, comercialice, transporte, mantenga, transforme, experimente, inocule o propague especies silvestres exóticas, invasoras, que pongan en peligro la salud humana, el ambiente o las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 330. Deforestación. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente tale, queme, corte, arranque o destruya áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará a la mitad cuando:

1. Cuando la conducta se realice, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito o para mejora o construcción de infraestructura ilegal.

2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.

ARTÍCULO 330A. Promoción y financiación de la Deforestación. El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte, arranque o destrucción de áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará a la mitad cuando:

1. Cuando la conducta se realice para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, o para mejora o construcción de infraestructura ilegal.

2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.

Artículo 331. Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos. El que con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, importe, manipule, experimente, posea, inocule, comercialice, exporte, libere o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos, moléculas, substancias o elementos que pongan en peligro la salud o la existencia de los recursos fáunicos, florísticos, hidrobiológicos, hídricos o alteren perjudicialmente sus poblaciones, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 332. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO II.

DE LOS DAÑOS EN LOS RECURSOS NATURALES

Artículo 333. Daños en los recursos naturales y ecocidio. El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o cause un impacto ambiental grave o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título o a los que estén asociados con estos, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo se entiende por ecocidio, el daño masivo y destrucción generalizada grave y sistémica de los ecosistemas.

Parágrafo 2°. Por impacto ambiental grave se entenderá, la alteración de las condiciones ambientales que se genere como consecuencia de la afectación de los componentes ambientales, eliminando la integridad del sistema y poniendo en riesgo su sostenibilidad.

CAPÍTULO III.

DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Artículo 334. Contaminación ambiental. El que con incumplimiento de la normatividad existente contamine, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertimientos, radiaciones, ruidos, depósitos, o disposiciones al aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas superficiales, marítimas o subterráneas o demás recursos naturales en tal forma que contamine o genere un efecto nocivo en el ambiente, que ponga en peligro la salud humana y los recursos naturales, incurrirá en prisión de sesenta y nueve (69) a ciento cuarenta (140) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en este artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.
2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por la normatividad existente o haya infringido más de dos parámetros.
3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, depósitos, emisiones o disposiciones.
4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.
5. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de control y vigilancia de la autoridad competente.
6. Cuando la contaminación sea producto del almacenamiento, transporte, vertimiento o disposición inadecuada de residuo peligroso.

Artículo 334A. Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo. El que provoque, contamine o realice directa o indirectamente en los recursos de agua, suelo, subsuelo o atmósfera, con ocasión a la extracción o excavación, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años, y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 335. Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice experimentos con especies, agentes biológicos o bioquímicos que constituyan, generen o pongan en peligro la supervivencia de las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO IV.

DE LA INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Artículo 336. Invasión de áreas de especial importancia ecológica. El que invada, permanezca así sea de manera temporal o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en área de reserva forestal, ecosistemas de importancia ecológica, playas, terrenos de bajamar, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, parque nacional natural, área o ecosistema de interés estratégico, área protegida, definidos en la ley o reglamento incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.

Artículo 336A. Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica. El que promueva, financie, dirija, facilite, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.

CAPÍTULO V.

DE LA APROPIACIÓN ILEGAL DE BALDÍOS DE LA NACIÓN

Artículo 337. Apropiación ilegal de baldíos de la nación. El que usurpé, ocupe, utilice, acumule, tolere, colabore o permita la apropiación de baldíos de la Nación, sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos y despojo de tierras.

Parágrafo 1º: La conducta descrita en este artículo no será considerada delito si la misma se ajusta a los condicionamientos y requisitos señalados en la ley 160 de 1994, así como en el Decreto Ley 902 de 2017 para la adjudicación de bienes baldíos.

Parágrafo 2º: Cuando la conducta descrita en el artículo anterior sea cometida por personas campesinas, indígenas o afrodescendientes, que dependa su subsistencia de la habitación, trabajo o aprovechamiento de los baldíos de la nación no habrá lugar a responsabilidad penal.

Artículo 337A. Financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación. El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie, patrocine, induzca, ordene o dirija la apropiación ilegal de baldíos de la nación descrito en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los bienes muebles, inmuebles o semovientes encontrados en los baldíos ilegalmente apropiados.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos.

CAPÍTULO VI.

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 338. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando:

a) Cuando la conducta se cometa en ecosistemas naturales que hagan parte del sistema nacional o regional de áreas protegidas, en ecosistemas estratégicos, o en territorios de comunidades étnicas. Con excepción de las conductas consagradas en los artículos 336 y 336A.

b) Cuando la conducta se cometa contra especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana o de especies vedadas, prohibidas, en período de reproducción o crecimiento, de especial importancia ecológica, raras o endémicas del territorio colombiano. Con excepción de la conducta contemplada en el artículo 328C.

c)Cuando con la conducta se altere el suelo, el subsuelo, los recursos hidrobiológicos, se desvíen los cuerpos de agua o se afecten ecosistemas marinos, manglares, pastos marinos y corales.

d)Cuando la conducta se cometiere por la acción u omisión de quienes ejercen funciones de seguimiento, control y vigilancia o personas que ejerzan funciones públicas.

e) Cuando la conducta se cometiere por integrantes de grupos delictivos organizados o grupos armados organizados o con la finalidad de financiar actividades terroristas, grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley, grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a sus integrantes.

f) Cuando la conducta se cometa mediante el uso o manipulación de herramientas tecnológicas.

g) Cuando con la conducta se ponga en peligro la salud humana.

h) Cuando con la conducta se introduzca al suelo o al agua sustancias prohibidas por la normatividad existente o se realice mediante el uso de sustancias tóxicas, peligrosas, venenos, inflamables, combustibles, explosivas, radioactivas, el uso de explosivos, maquinaria pesada o la distribución ilegal de combustibles.

i)Cuando se promueva, financie, dirija, facilite o suministre medios para la realización de las conductas. Con excepción de las conductas contempladas en los artículos 330A, 336A y 337A.

j) Cuando con la conducta se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies.

Artículo 339. Modalidad Culposa. Las penas previstas en los artículos 333, 334, 334A de este código se disminuirán hasta en la mitad cuando las conductas punibles se realicen culposamente.

Artículo 2. Modifíquese el numeral 14 del artículo 58 de la ley 599 del 2000**,** el cual quedará así:

Artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad.

(…)

14. Cuando se produjere un daño ambiental grave, una irreversible modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales o se cause la extinción de una especie biológica.

ARTÍCULO 3°. Adiciónese un numeral 33 al artículo 35 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

(…)

33. De los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, tráfico de fauna, deforestación, promoción y financiación de la deforestación, daños en los recursos naturales y ecocidio, e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

ARTÍCULO 4°. Adiciónese un parágrafo al artículo 91 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así:

(…)

Parágrafo. Cuando se hubiese suspendido o cancelado la personería jurídica de que trata este artículo, la persona natural o jurídica estará inhabilitada para constituir nuevas personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público, con el mismo objeto o actividad económica a desarrollar, hasta que el Juez de Conocimiento tome una decisión definitiva en la sentencia correspondiente.

ARTÍCULO 5°. Adiciónese un parágrafo 2 al artículo 92 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así:

Parágrafo 2. Tratándose de los delitos contemplados en el título XI del Código Penal, el juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.

ARTÍCULO 6°. El artículo 302 de la Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo inciso que quedará así:

Cuando la captura en flagrancia se produzca en ríos o tierra donde el arribo a la cabecera municipal más cercana sólo puede surtirse por vía fluvial o siempre que concurran dificultades objetivas de acceso al territorio como obstáculos geográficos, logísticos, ausencia de infraestructura de transporte o fenómenos meteorológicos que dificulten seriamente el traslado del aprehendido, se realizarán todas las actividades para lograr la comparecencia del capturado ante el juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin que en ningún caso exceda las 36 horas siguientes, contadas a partir del momento de la llegada al puerto o municipio más cercano, según el caso. La autoridad competente deberá acreditar los eventos descritos en el presente inciso.

Artículo 7. Dirección de Apoyo Territorial. Créese en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Apoyo Territorial adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana, la que tendrá como función principal liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presencia efectiva de la Entidad con un trabajo interdisciplinario en territorios apartados o de difícil acceso, sin perjuicio de la competencia de otras Direcciones sobre la materia.

La Dirección de Apoyo Territorial estará conformada por:

Unidad	Cantidad	Cargo	Niveles
Dirección de Apoyo Territorial	1	Director Nacional I	Directivo
	2	Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito	Profesional
	20	Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional
	1	Profesional Experto	Profesional
	2	Profesional Especializado II	Profesional
	2	Profesional De Gestión III	Profesional
	12	Investigador Experto	Profesional
	10	Profesional Investigador III	Profesional
	9	Profesional Investigador II	Profesional
	9	Profesional Investigador I	Profesional
	10	Técnico Investigador IV	Técnico
	12	Técnico Investigador III	Técnico
	20	Asistente de Fiscal IV	Técnico
	5	Asistente de Fiscal III	Técnico
	5	Asistente de Fiscal II	Técnico
	2	Secretario Ejecutivo	Técnico
	3	Secretario Administrativo	Asistencial

Parágrafo 1: De forma prioritaria la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación desarrollará el concurso necesario para proveer los cargos establecidos en el presente artículo de conformidad con el Sistema Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación, sin perjuicio de los nombramientos en provisionalidad necesarios para implementar inmediatamente la Dirección establecida, en los cuales se aplicarán los principios de mérito, transparencia, garantía de imparcialidad y eficiencia y eficacia del artículo 3, junto con los criterios de mérito señalados en el numeral 3 del artículo 11 del Decreto Ley 020 de 2014.

Parágrafo 2: El inicio del concurso se realizará dentro de los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 3: La Fiscalía General de la Nación presentará anualmente un informe sobre los indicadores de gestión, avance y esclarecimiento en la investigación y judicialización de las conductas que afecten los recursos naturales y el medio ambiente. Esta información será pública y contendrá datos estadísticos que no estén sometidos a reserva.

Artículo 8. Dirección de Apoyo Territorial. Adiciónese el artículo 36A al Decreto Ley 016 de 2014, el cual quedará así: La Dirección de Apoyo Territorial cumplirá las siguientes funciones:

1. Liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presencia efectiva de la Entidad en territorios apartados o de difícil acceso, en aquellas zonas afectadas por fenómenos criminales de alto impacto y por la presencia de grupos armados organizados.
2. Apoyar la investigación, especialmente actos urgentes, en aquellos fenómenos priorizados que se den en territorios donde la Fiscalía General de la Nación no tenga presencia permanente o sean de difícil acceso.
3. Definir los lugares en los que se podrá actuar por medio de grupos itinerantes, con base en criterios geográficos y no en la división político-administrativa, así como en el análisis de la criminalidad del país, la presencia de organizaciones criminales, los tiempos de desplazamiento al lugar de comisión de la conducta punible, la oferta de servicios de justicia por parte de otras entidades, entre otros factores.
4. Conformar grupos especializados de investigadores y analistas expertos en los fenómenos criminales priorizados por la Dirección.
5. Realizar proceso de articulación de la estrategia territorial con otras entidades públicas.
6. Designar fiscales itinerantes en aquellos procesos sobre fenómenos priorizados, con el fin que apoyen, impulsen y asesoren a los fiscales titulares con el fin de lograr una efectiva judicialización.
7. Conformar equipos móviles de la Entidad, en los que periódicamente se reciban denuncias de los habitantes del territorio nacional y se brinde atención a las víctimas de las conductas punibles en territorios apartados o zonas de alto impacto o presencia de grupos armados organizados.
8. Organizar y adelantar comités técnico-jurídicos de revisión de las situaciones y los casos para la ejecución de acciones en el desarrollo efectivo y eficiente de las investigaciones penales de su competencia.
9. Dirigir y coordinar los grupos de trabajo, los departamentos y unidades que se conformen para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Dirección.
10. Dirigir, coordinar y controlar la incorporación y aplicación de políticas públicas en el desarrollo de las actividades que cumplen los servidores, dependencias y los grupos de trabajo que estén a su cargo, de acuerdo con los lineamientos y las orientaciones que impartan las dependencias competentes.
11. Identificar y delimitar situaciones y casos susceptibles de ser priorizados y proponerlos al Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos.
12. Ejecutar los planes de priorización aprobados por el Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos en lo de su competencia.
13. Apoyar, en el marco de sus competencias, a la Dirección de Políticas y Estrategia en el análisis de la información que se requiera para sustentar la formulación de la política en materia criminal.
14. Mantener actualizada la información que se registre en los sistemas de información de la Entidad, en los temas de su competencia.
15. Consolidar, analizar y clasificar la información de las investigaciones y acusaciones adelantadas por los servidores y grupos de trabajo a su cargo y remitirla a la Dirección de Políticas y Estrategia.
16. Dirimir, de conformidad con la Constitución y la ley, los conflictos de competencia que se presenten entre la Fiscalía General de la Nación y los demás organismos que desempeñen funciones de Policía Judicial, en el ámbito de su competencia.
17. Dirimir los conflictos administrativos que se presenten al interior de la Fiscalía en el ejercicio de las funciones o en la asignación de investigaciones, en los casos y según las directrices y lineamientos impartidos por el Fiscal General de la Nación.
18. Asesorar a las dependencias de la Fiscalía General de la Nación que cumplen funciones investigativas y acusatorias en los temas de su competencia.
19. Elaborar e implementar los planes operativos anuales en el ámbito de su competencia, de acuerdo con la metodología diseñada por la Dirección de Planeación y Desarrollo.
20. Aplicar las directrices y lineamientos del Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación.
21. Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el Fiscal o Vicefiscal General de la Nación.

Artículo 9. Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. Créese en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente adscrito a la Delegada contra la Criminalidad Organizada, la que tendrá como función principal la investigación y judicialización de los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y las demás conductas delictivas conexas o relacionadas, mediante un trabajo interdisciplinario sin perjuicio de la competencia de las Direcciones Seccionales sobre la materia.

La Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente estará conformada por:

Unidad	Cantidad	Cargo	Niveles
Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	1	Director Nacional I	Directivo
	2	Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito	Profesional
	20	Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional
	1	Profesional Experto	Profesional
	2	Profesional Especializado II	Profesional
	2	Profesional De Gestión III	Profesional
	12	Investigador Experto	Profesional
	10	Profesional Investigador III	Profesional
	9	Profesional Investigador II	Profesional
	9	Profesional Investigador I	Profesional
	10	Técnico Investigador IV	Técnico
	12	Técnico Investigador III	Técnico
	20	Asistente de Fiscal IV	Técnico
	5	Asistente de Fiscal III	Técnico
	5	Asistente de Fiscal II	Técnico
	2	Secretario Ejecutivo	Técnico
	3	Secretario Administrativo	Asistencial

Parágrafo 1: De forma prioritaria la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación desarrollará el concurso necesario para proveer los cargos establecidos en el presente artículo de conformidad con el Sistema Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación, sin perjuicio de los nombramientos en provisionalidad necesarios para implementar inmediatamente la Dirección establecida, en los cuales se aplicarán los principios de mérito, transparencia, garantía de imparcialidad y eficiencia y eficacia del artículo 3, junto con los criterios de mérito señalados en el numeral 3 del artículo 11 del Decreto Ley 020 de 2014.

Parágrafo 2: El inicio del concurso se realizará dentro de los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 3: La Fiscalía General de la Nación presentará anualmente un informe sobre los indicadores de gestión, avance y esclarecimiento en la investigación y judicialización de las conductas que afecten los recursos naturales y el medio ambiente. Esta información será pública y contendrá datos estadísticos que no estén sometidos a reserva.

ARTÍCULO 10. Prevención del daño antijurídico y promoción de la adecuada defensa litigiosa. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el marco de sus funciones, deberá diseñar e implementar una política de prevención del daño antijurídico en materia de protección ambiental y ecológica. De igual forma, promoverá la coordinación de las acciones que aseguren la adecuada defensa de los intereses litigiosos de la nación dentro de los procesos que se lleven a cabo en materia de defensa de los recursos naturales y de la fauna y la flora silvestre.

ARTÍCULO 11 (NUEVO): Se autoriza al Gobierno Nacional para asignar los recursos para la implementación y ejecución de la presente ley.

De conformidad con la normativa vigente, las erogaciones que se causen con ocasión de la implementación y ejecución de la presente ley deberán consultar la situación fiscal de la Nación y ajustarse al Marco de Gasto de Mediano Plazo de cada sector involucrado, en concordancia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y las normas orgánicas de presupuesto.

ARTÍCULO 12°. Vigencia y Derogatoria. La presente rige a partir de su promulgación y publicación en el Diario Oficial y deroga el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000 y todas las disposiciones que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la República del día 17 de junio de 2021, al Proyecto de Ley No. **446/2021 SENADO Y 283/2019 CÁMARA "POR MEDIO DEL CUAL SE SUSTITUYE EL TÍTULO XI "DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE" DE LA LEY 599 DE 2000, SE MODIFICA LA LEY 906 DE 2004 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".**

Cordialmente,

SANTIAGO VALENCIA
Senador Ponente

El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la República del día 17 de junio de 2021, de conformidad con el texto propuesto para segundo debate.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 316 DE 2020 SENADO - 089 DE 2019 CÁMARA

por medio de la cual se establecen medidas para fortalecer la conciencia educativa para el trabajo en la educación básica secundaria, educación media y educación superior y se dictan otras disposiciones en materia de inserción laboral para jóvenes.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NUMERO 316 DE 2020 SENADO - 089 DE 2019 CÁMARA: "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA FORTALECER LA CONCIENCIA EDUCATIVA PARA EL TRABAJO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA, EDUCACIÓN MEDIA Y EDUCACIÓN SUPERIOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE INSERCIÓN LABORAL PARA JÓVENES"

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene como objeto fortalecer la exploración de intereses, talentos y el descubrimiento de aptitudes para los estudiantes de educación básica secundaria y educación media; y promover el desarrollo de incentivos dirigidos al fortalecimiento de la inserción laboral de los jóvenes entre los 18 y 28 años de edad a nivel nacional.

TÍTULO I

PRÁCTICAS LABORALES, EXPERIENCIA LABORAL Y EXPERIENCIA PROFESIONAL

Artículo 2. **Naturaleza, definición y reglamentación de la práctica laboral.** Adiciónese un parágrafo al artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, el cual quedará así:

Parágrafo 4o. Si las actividades que se desarrollan no están directamente relacionadas con el área de estudio la práctica laboral mutará a relación laboral con sus implicaciones legales.

Artículo 3. (Nuevo). Adiciónese un parágrafo al artículo 2º de la Ley 2039 de 2020, el cual quedará así:

Parágrafo. La experiencia laboral a la cual hace referencia el inciso primero del presente artículo podrá extenderse a menores de edad, siempre y cuando exista consentimiento por parte de sus padres o representantes, de conformidad con la legislación civil, y en concordancia con la Ley 1088 de 2006, el régimen laboral y demás disposiciones vigentes, o las que las modifiquen.

Artículo 4. (Nuevo). Adiciónese un parágrafo al artículo 2º de la Ley 2039 de 2020, el cual quedará así:

Parágrafo. Sin distinción de edad, quienes cuenten con doble titulación en programas de pregrado en educación superior, podrán convalidar la experiencia profesional obtenida en ejercicio de tales profesiones, siempre y cuando pertenezcan a la misma área del conocimiento.

TÍTULO II

FORTALECIMIENTO DE LA CONCIENCIA EDUCATIVA PARA EL TRABAJO DESDE LA EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y EDUCACIÓN MEDIA

Artículo 3. Promoción de alianzas estratégicas para la transición hacia el trabajo. Promoción de alianzas estratégicas para la transición hacia el trabajo. El Gobierno nacional desarrollará y reglamentará, en un plazo máximo de un (1) año contado a partir de la promulgación de la presente ley, una política dirigida al establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la exploración de intereses, talentos y el descubrimiento de aptitudes de los estudiantes de educación básica secundaria y educación media, generando escenarios pedagógicos para el desarrollo de ejercicios prácticos o experiencias vivenciales que les permitan poner en práctica los conocimientos y competencias teóricas adquiridas y lograr una transición más consiente e informada al mercado laboral y a la educación superior. Igualmente, para la formación en capacidades especializadas, formación técnica y tecnológica, y las demás figuras integradas establecidas en la legislación colombiana como elementos fundamentales para su inserción en el mercado laboral, fundamentado en el bienestar y desarrollo socioeconómico, con la participación de los sectores público, privado y la sociedad civil.

Como lineamientos transversales, se fomentará el emprendimiento, la innovación, la creatividad y la tecnología, brindando el conocimiento teórico- práctico para el desarrollo de estas iniciativas.

Artículo 4. Estrategia de orientación socio ocupacional y laboral para estudiantes pertenecientes a Población Vulnerable. El Gobierno nacional formulará desarrollará y reglamentará, en un plazo máximo de un (1) año contado a partir de la promulgación de la presente ley, los lineamientos de la estrategia para el fortalecimiento de la exploración de intereses, talentos y el descubrimiento de aptitudes, de orientación socio ocupacional y laboral en estudiantes de educación básica secundaria y educación media, que se encuentren catalogados como población en condición de vulnerabilidad. La implementación de la estrategia y lineamientos estará a cargo de las entidades territoriales.

La estrategia referida en el inciso precedente deberá aplicarse, sin desmedro de los derechos de los demás grupos en situación de vulnerabilidad, a aquellos estudiantes de educación básica secundaria y educación media:

- Acreditados como víctimas en el registro que lleva la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas o quien haga sus veces.
- En situación de discapacidad.
- Domiciliadas en los municipios con más altos índices de pobreza, afectados por la violencia o con presencia de cultivos ilícitos y economías ilegales.
- Pertenecientes a minorías étnicas o raciales.
- Que hagan parte de los procesos que implementa la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) o quien haga sus veces.
- Quienes tengan ambos padres fallecidos, o desaparecidos.

Parágrafo 1. El diseño de esta estrategia y lineamientos tendrá un especial enfoque de desarrollo rural y de inclusión laboral y emprendimiento para estudiantes de educación básica secundaria y educación media que se encuentra en los criterios diferenciadores.

Parágrafo 2. Socializar información sobre la oferta programática orientada a facilitar la inclusión en la ruta de empleabilidad o emprendimiento, de tal manera que la población objetivo tenga conocimiento y pueda acceder a esta una vez culmine su período de formación.

Artículo 5. Política de competencias laborales para la Cuarta Revolución Industrial. Los establecimientos educativos promoverán en los jóvenes de la educación básica secundaria y educación media las habilidades para el desarrollo laboral futuro, de cara a los retos del siglo XXI y la era digital, tales como: liderazgo, flexibilidad cognitiva, negociación, toma de decisiones, orientación al servicio, inteligencia emocional, relaciones interpersonales, manejo de personas, creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas complejos, curiosidad, iniciativa, colaboración, adaptación al cambio, entre otras, a través de diversas herramientas tradicionales o de realidad virtual que permitan una participación interactiva y práctica. Para esto, las instituciones educativas podrán desarrollar convenios o alianzas estratégicas que les permitan actuar conforme a los principios eficiencia, eficacia y transparencia.

TÍTULO III

INCENTIVOS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES ENTRE 18 Y 28 AÑOS DE EDAD EN EL SECTOR PRIVADO

Artículo 6. Cláusulas dirigidas a promover la inserción laboral o contractual de jóvenes en el sector privado. En los procesos que se desarrollen dentro de las distintas modalidades de contratación pública establecidas en la ley, las entidades públicas incorporarán en los contratos que celebren, cláusulas dirigidas a la promoción de la inserción laboral o contractual de jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, profesionales o tecnólogos, siempre que las personas jurídicas o naturales que participen en dichos procesos, se encuentren obligadas a disponer de personal para la ejecución del objeto contractual.

Una vez se suscriba el respectivo contrato, el contratista deberá vincular, laboral o contractualmente a dicha población de forma inmediata y durante toda la ejecución del contrato estatal. En ningún caso, el porcentaje de jóvenes vinculados podrá ser inferior al 8% del total del personal que requiere el contratista para la ejecución contractual.

Parágrafo 1. Las personas jurídicas de derecho público deberán adelantar los estudios del sector que permitan identificar los perfiles de los jóvenes que se vincularán en la etapa contractual, de conformidad con el objeto de la contratación, incluyendo sus requisitos mínimos de formación profesional o técnica, Dicho estudio, deberá ser publicado dentro de los estudios previos que harán parte del respectivo proceso de selección.

Parágrafo 2. El contratista, al vincular la población en los términos de que trata el presente artículo, aplicará de forma preferente, las disposiciones contenidas en las leyes 2039 y 2043 de 2020, o las normas que las sustituyan o modifiquen.

Parágrafo 3. Durante la ejecución contractual, las personas jurídicas de derecho público, a través de los supervisores o interventores, tendrán el deber de vigilar y controlar que el contratista vincule en los términos del presente artículo a población joven. El incumplimiento del mismo, se considerará causal de mala conducta y será sancionado en los términos que establezca la ley disciplinaria.

Parágrafo 4. La presente disposición entrará a regir tres (3) meses después de su promulgación. En este periodo previo a su entrada en vigencia, las personas jurídicas de derecho público deberán planear la formulación de las cláusulas que permitan que la promoción de la inserción laboral o contractual de los jóvenes sea eficaz.

TÍTULO IV

VIGENCIA Y DEROGATORIAS

Artículo 7. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la República del día 17 junio de 2021, al **PROYECTO DE LEY NUMERO 316 DE 2020 SENADO - 089 DE 2019 CÁMARA: "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA FORTALECER LA CONCIENCIA EDUCATIVA PARA EL TRABAJO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA, EDUCACIÓN MEDIA Y EDUCACIÓN SUPERIOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE INSERCIÓN LABORAL PARA JÓVENES".**

Cordialmente,

RUBY HELENA CHAGÜI SPATH
Senadora Ponente

El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la República del día 17 de junio de 2021, de conformidad con el texto propuesto para segundo debate.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 286 DE 2020 SENADO, 120 DE 2019 CÁMARA

por la cual se dota a las asociaciones mutualistas de identidad, autonomía y vinculación a la economía del país como empresas solidarias y se establecen otras disposiciones.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NUMERO 286 DE 2020 SENADO, 120 DE 2019 CÁMARA: "POR LA CUAL SE DOTA A LAS ASOCIACIONES MUTUALISTAS DE IDENTIDAD, AUTONOMÍA Y VINCULACIÓN A LA ECONOMÍA DEL PAÍS COMO EMPRESAS SOLIDARIAS Y SE ESTABLECEN OTRAS DISPOSICIONES".

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

TÍTULO I
De la naturaleza jurídica, constitución y régimen interno de las asociaciones mutualistas

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto. El objeto la presente Ley es dotar a las asociaciones mutualistas de un marco jurídico adecuado que garantice su identidad, su autonomía, su vinculación activa a la economía del país, y el reconocimiento por parte del Estado como modalidades empresariales solidarias con fines de mejoramiento social.

Artículo 2. Definición y Naturaleza. Las asociaciones mutualistas son empresas de economía solidaria, de derecho privado, cuya naturaleza es sin ánimo de lucro, inspiradas en la solidaridad, con fines de interés social, constituidas libre y democráticamente por la asociación de personas naturales, personas jurídicas sin ánimo de lucro, o la mezcla de las anteriores, que se comprometen a realizar contribuciones al fondo social mutual, con el objeto de ayudarse mutuamente para la satisfacción de sus necesidades y de la comunidad en general, siempre en razón del interés social o del bienestar colectivo.

Las asociaciones mutualistas podrán realizar todo tipo de actividades relacionadas con la previsión, la promoción, la protección social, así como constituir y organizar emprendimientos asociativos para la producción de bienes y otros servicios buscando el mejoramiento económico, cultural y social de sus asociados y la comunidad

Artículo 3. Acuerdo y Actos Mutual. Se denomina acuerdo mutual el contrato de asociación por medio del cual unas personas naturales o jurídicas de naturaleza jurídica sin ánimo de lucro acuerdan conformar una persona jurídica distinta de sus asociados, capaz de contraer obligaciones y ejercer derechos.

Dicho contrato de asociación se formaliza con la asamblea general de constitución, en la que los asociados fundadores aprueban los estatutos que regirán a la asociación mutualista y eligen a los miembros de los órganos de administración y control. Sera prueba del contrato en mención el acta de constitución suscrita por los asociados fundadores.

Una vez que se constituye y nace a la vida jurídica la asociación mutualista, esta puede realizar los actos mutuales que se indican a continuación, con la finalidad de desarrollar su objeto social:
1. Entre asociaciones mutualistas
2. Entre asociaciones mutualistas y organizaciones de la economía solidaria
3. Entre asociaciones mutualistas y personas jurídicas de similar naturaleza jurídica (sin ánimo de lucro)
4. Entre asociaciones mutualistas y sus asociados y,
5. Entre asociaciones mutualistas y terceros distintos de sus asociados, en los casos en que los estatutos permitan tal extensión de servicios.

Parágrafo: Se entiende como acto mutual el negocio jurídico que crea, modifica o extingue una obligación, realizado por la asociación mutualista en cumplimiento de su objeto social, otras personas jurídicas u otras personas naturales determinadas por la ley.

Artículo 4. Principios. Toda asociación mutual se regirá por los siguientes principios:

1. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua.
2. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora.
3. Adhesión voluntaria, responsable y abierta.
4. Participación económica de los asociados.
5. Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y progresiva.
6. Autonomía, autodeterminación y autogobierno.
7. Servicio a la comunidad.
8. Integración con otras organizaciones del mismo sector.
9. Promoción de la cultura ecológica.
10. Primacía del ser humano, su trabajo y sus mecanismos de cooperación sobre los medios de producción.
11. Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción.

Artículo 5. Características. Toda asociación mutual deberá reunir las siguientes características:

1. Que se cree y administre de conformidad con los principios de las asociaciones mutualistas y las organizaciones de la economía solidaria.
2. Que establezca contribuciones económicas a sus asociados para la prestación de los servicios de las asociaciones mutualistas, las cuales no son retornables a sus asociados.
3. Que el patrimonio y el número de asociados sea variable e ilimitado.
4. Que realice permanentemente actividades de educación mutual.
5. Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de los asociados, sin consideración al monto de sus contribuciones.
6. Que establezca la no devolución de las contribuciones de los asociados y la irrepartibilidad del remanente patrimonial en caso de liquidación.
7. Que su duración sea indefinida.
8. Que promueva la participación e integración con otras entidades que tengan como fin el desarrollo integral del ser humano.
9. Que los estatutos establezcan su naturaleza jurídica sin ánimo de lucro, por lo que se debe señalar que son irrepartibles las reservas sociales y los fondos, y en caso de liquidación, el remanente patrimonial y sus excedentes serán destinados a la prestación de servicios de carácter social.
10. Que las asociaciones mutualistas se organicen como empresas, que contemplen en su objeto social el ejercicio de una actividad socioeconómica tendiente a satisfacer necesidades de sus asociados y el desarrollo de obras de servicio comunitario.
11. Que establezca un vínculo común asociativo, fundado en los principios y fines aplicables a las organizaciones de la economía solidaria.

Artículo 6. Objetivos de las asociaciones mutualistas. Las asociaciones mutualistas se constituirán y desarrollarán sus actividades en cumplimiento con los siguientes objetivos principales:

1. Promover el desarrollo integral del ser humano, mediante el mejoramiento de las condiciones de vida de sus asociados e inmediatos beneficiarios.
2. Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento solidario, crítico, creativo y emprendedor, como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos.
3. Contribuir al desarrollo económico, mediante la realización de su objeto social y la participación en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de orden territorial.
4. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa.
5. Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna.

Artículo 7. Responsabilidad. La responsabilidad de las asociaciones mutualistas para con los terceros se limita al monto de su patrimonio social.

Artículo 8. Prohibiciones. A ninguna asociación mutualista le será permitido:
1. Establecer acuerdos con sociedades comerciales que las hagan participar directa o indirectamente de los beneficios o prerrogativas que las leyes otorguen a las asociaciones mutualistas o que beneficien a los directivos de estas a nivel personal.
2. Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen discriminaciones sociales, económicas, religiosas, o políticas.
3. Conceder ventajas o privilegios a los promotores, empleados y fundadores.
4. Conceder a sus administradores, en desarrollo de las funciones propias de sus cargos, porcentajes, comisiones, prebendas, privilegios o similares que perjudiquen el cumplimiento de su objeto social o afecten a la entidad.
5. Desarrollar actividades distintas a las estipuladas en sus estatutos.
6. Transformarse en sociedad mercantil.

CAPÍTULO I I
De la constitución, registro y reconocimiento

Artículo 9. Constitución. Las asociaciones mutualistas se constituirán con un mínimo de veinte (20) asociados, personas naturales o jurídicas sin ánimo de lucro que se encuentren debidamente constituidas. La constitución se llevará a cabo en asamblea general, de la cual se dejará constancia en documento privado denominado acta, la cual deberá ser registrada en la cámara de comercio de su jurisdicción, de conformidad con el Decreto Ley 019 de 2012.

El acta de la asamblea general de constitución deberá establecer por lo menos los siguientes aspectos: (i) fecha, hora y lugar en la que se reúnen los asociados; (ii) nombre completo, numero de documento de identidad y domicilio de los asociados; (iii) orden del día; (iv) constancia de la aprobación de los estatutos de la asociación mutual; (v) constancia de la aprobación del monto de las contribuciones que entregaran los

asociados, forma y periodicidad de pago y (vi) elección de los miembros que integraran los organismos de administración y control de la asociación.

La persona jurídica que conforma la asociación mutual nace a partir de la inscripción en el registro de la cámara de comercio del domicilio principal de dicha organización del acta de la asamblea general de constitución.

Parágrafo 1: Las asociaciones mutualistas se podrán constituir con la participación de personas jurídicas, sin perjuicio del número mínimo de asociados requeridos de conformidad con el inciso primero del presente artículo.

Parágrafo 2: En ningún caso las personas jurídicas podrán superar el veinte por ciento (20%) de los asociados.

Artículo 10. Denominación. Las expresiones Mutual, Mutualidades, Socorros Mutuos y Auxilio Mutuo sólo podrán ser usadas por las asociaciones mutualistas. A Los terceros que infrinjan esta norma o que se aprovechen de los derechos y prerrogativas que la Ley conceda a las asociaciones mutualistas, se les aplicarán las sanciones previstas en las disposiciones vigentes sobre la materia.

Artículo 11. Disposiciones Estatutarias. El estatuto de toda asociación mutual deberá contener:

1. Razón social, naturaleza, domicilio y ámbito territorial de operaciones.
2. Objeto social y relación de servicios.
3. Derechos y deberes de los asociados; condiciones para su admisión, retiro, exclusión y determinación del órgano competente para su decisión.
4. Régimen de sanciones, causales y procedimientos.
5. Procedimientos para resolver diferencias o conflictos transigibles entre los asociados, y entre estos y la asociación mutual.
6. Régimen de organización interna, constitución, representación legal, procedimientos y funcionamiento de los órganos de administración y control; requisitos, incompatibilidades, responsabilidades, forma de elección y remoción de sus miembros.
7. Régimen económico donde se establezca una cuota de contribución, su forma de pago y periodicidad.
8. Régimen de responsabilidad de la asociación mutual y de sus asociados.
9. Normas para fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación.
10. Procedimientos para la reforma del estatuto.
11. Las demás estipulaciones que se consideren necesarias para asegurar el adecuado cumplimiento del objeto social.

Parágrafo 1. El estatuto será reglamentado por la junta directiva con el propósito de facilitar su aplicación en el funcionamiento interno y en el desarrollo de sus actividades.

Parágrafo 2. Las reformas del estatuto serán aprobadas en asamblea general.

Artículo 12. Reformas estatutarias. Las asociaciones mutualistas cuentan con autonomía para reformar sus estatutos. Una vez aprobados deberán ser registrados en la Cámara de Comercio donde se encuentre registrada la asociación mutual, surtido este trámite, se deberá enviar copia a la Superintendencia de Economía Solidaria o la entidad que haga sus veces para su respectivo control de legalidad.

Parágrafo: Las reformas estatutarias serán aprobadas de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la presente ley.

CAPÍTULO III
De los asociados

Artículo 13. Asociados. Podrán ser asociados de las asociaciones mutualistas:

1. Las personas naturales legalmente capaces y los menores de edad a través de representante legal.
2. Las personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro que se encuentren en ejercicio.
3. Los herederos legítimos del asociado

Parágrafo. La calidad de asociado se adquiere cuando se suscribe el acuerdo mutual.

Artículo 14. Derechos de los Asociados. Serán derechos de los asociados:

1. Beneficiarse o disponer de las prestaciones mutuales que se tengan establecidas estatutariamente.
2. Participar de la administración, mediante el desempeño de cargos sociales.
3. Ser informados y fiscalizar la gestión de la asociación mutual, de acuerdo con las prescripciones estatutarias.
4. Ejercer actos de decisión y elección en los órganos de administración y control.
5. Retirarse voluntariamente.

Artículo 15. Deberes de los Asociados. Serán deberes de los asociados:

1. Observar las disposiciones del estatuto y los reglamentos que rijan la asociación mutual.
2. Participar de las actividades de la asociación mutual, definidas en su estatuto, y realizar con ella las operaciones propias de su objeto social.
3. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y control.
4 Comportarse responsablemente y ejercer actos de solidaridad en sus relaciones con la asociación mutual y con los asociados de la misma.
5. Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la estabilidad económica o el prestigio social de la asociación mutual.
6. Adquirir conocimientos sobre los principios básicos del mutualismo y participar en los programas de educación mutual.
7. Pagar oportunamente las contribuciones y cumplir las demás obligaciones económicas que establezca y adquiera con la asociación mutual.
8. Dar efectivo cumplimiento al acto mutual.
9. Las demás que estipulen el estatuto.

Parágrafo. El ejercicio de los derechos estará condicionado al cumplimiento de los deberes, con excepción del numeral 5 del artículo 18.

Artículo 16. Pérdida del Carácter de Asociados. La calidad de asociado se perderá por retiro voluntario, exclusión, fallecimiento del asociado persona natural, disolución o transformación del asociado persona jurídica. El estatuto de cada asociación mutual establecerá los procedimientos que deberán observarse en cada caso.

Artículo 17. Régimen Disciplinario. El estatuto de cada asociación mutual deberá establecer los procedimientos disciplinarios, las sanciones aplicables y los organismos competentes para ejercer tales funciones. Para el efecto se consagrarán las causales de exclusión o de suspensión, y se garantizarán los derechos de defensa y debido proceso.

CAPÍTULO IV
Del régimen económico

Artículo 18. Patrimonio. El patrimonio de las asociaciones mutualistas es de carácter irrepartible y estará constituido por:

1. El fondo social mutual;
2. Los fondos y reservas permanentes;
3. Las donaciones o auxilios que se reciban con destino al incremento patrimonial.

Artículo 19. Fondo Social Mutual. El fondo social mutual es el conjunto de bienes integrados por (i) las contribuciones que realizan los asociados según las prescripciones estatutarias y reglamentarias que regulen dicha materia; (ii) los excedentes de ejercicio que destine la asamblea general acorde con lo dispuesto en el artículo 28 de la presente Ley y (iii) las donaciones con destinación específica para este fondo.

Artículo 20. Contribuciones. Se denominan contribuciones las cuotas periódicas obligatoriamente aportadas por los asociados de las asociaciones mutualistas para incrementar el fondo social mutual.

Dichas contribuciones podrán ser en dinero, especie y trabajo convencionalmente avaluados. Para tal fin los estatutos y reglamentos de las asociaciones mutualistas determinaran el procedimiento para establecer el valor de las contribuciones aportadas en especie y en trabajo. Si los estatutos y reglamentos guardan silencio sobre el valor de las aportaciones en especie o en trabajo, se aplicará el procedimiento que establece el Código de Comercio respecto de las sociedades comerciales, en la medida que no desvirtúe la naturaleza jurídica de la asociación mutual.

Las contribuciones pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las primeras son las que fijan los estatutos y reglamentos, y las segundas las que aprueba la asamblea general para situaciones extraordinarias.

Artículo 21. Fondos mutuales. Representan el conjunto de las contribuciones que los asociados de la asociación mutualista realizan obligatoria o voluntariamente, de acuerdo con lo definido en los estatutos y reglamentos, para adelantar las actividades propias de su objeto social. Dichos fondos mutuales presuponen un convenio o contrato del que emana una determinada obligación de contribución económica y el derecho de percibir unos beneficios sociales. Las diferentes condiciones de la contribución a estos fondos estarán determinadas por los reglamentos.

Parágrafo 1. La percepción de beneficios sociales, que supone una contraprestación, se realizará con cargo al fondo mutual hasta su agotamiento. Esto es, el fondo mutual responderá hasta el monto total del mismo.

Parágrafo 2. Los fondos mutuales se crearán e incrementarán con la contribución directa de los asociados, pero la asamblea general podrá aplicar recursos para su incremento con cargo al remanente de los excedentes anuales o por disposición de la junta directiva con cargo al presupuesto anual.

Artículo 22. Fondo de educación mutual. Las asociaciones mutualistas tendrán un fondo permanente de educación mutual, el cual tendrá por objeto habilitar medios económicos que permitan la información, formación, capacitación, asistencia técnica e investigación de sus asociados, directivos, administradores y beneficiarios. El fondo de educación mutual se podrá crear y mantener por:

1. Donaciones con destinación específica para educación.
2. Partidas definidas en el presupuesto de gastos.
3. Excedentes obtenidos de actividades especiales para obtener recursos para educación que permitan incrementar el fondo de educación

Artículo 23. Otras reservas y fondos. El estatuto, la asamblea general y la junta directiva podrán establecer la forma de crear y/o incrementar otras reservas y fondos, de naturaleza patrimonial o pasiva, para fines determinados, claramente justificados, definidos y reglamentados. Una vez constituidos, podrán prever en sus reglamentos y presupuestos, incrementos progresivos de estas reservas y fondos, con cargo al ejercicio económico anual.

Artículo 24. Asignación de excedentes. Los excedentes son irrepartibles entre los asociados, y la asamblea general será la encargada de decidir su aplicación, de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Si el resultado del ejercicio económico es positivo, se destinará hasta un cincuenta por ciento (50%) para incrementar el fondo social mutual y su reserva patrimonial; así como crear y mantener un fondo de educación mutual, un fondo de solidaridad y un fondo de imprevistos. La reserva de protección del fondo social mutual se constituirá e incrementará con el 10% de los excedentes anuales. Cada fondo deberá contar por lo menos con un cinco por ciento (5%).
2. El remanente quedará a disposición de la asamblea general para crear nuevas reservas o fondos, o para incrementar los ya existentes.

Parágrafo. No obstante, lo anterior, el excedente de las asociaciones mutualistas se aplicará en primer término a compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Cuando la reserva de protección del fondo social mutual se hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera aplicación del excedente será para restablecer la reserva al nivel que tenían antes de su utilización.

Artículo 25. Período de Ejercicio Económico. Las asociaciones mutualistas tendrán ejercicios anuales que se cerrarán a 31 de diciembre. Al término de cada ejercicio se cortarán las cuentas y se elaborarán los informes financieros de propósito general.

Artículo 26. Inembargabilidad de las contribuciones. Las contribuciones que los asociados efectúan para formar e incrementar el fondo mutual son inembargables, no reembolsables e irrepartibles. Tampoco constituyen cuotas de administración ni contrato de compra-venta.

CAPÍTULO V
De la dirección, administración y control

Artículo 27. Órganos de administración. La administración de las asociaciones mutualistas estará a cargo de la asamblea general, la junta directiva y el representante legal.

Artículo 28. Asamblea General. La asamblea general será el órgano máximo de administración y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, estatutarias o reglamentarias. La constituirá la reunión de los asociados hábiles o de los delegados elegidos por éstos.

Parágrafo 1. Son asociados hábiles los regularmente inscritos en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones con la asociación mutual al momento de la convocatoria.

Parágrafo 2. Los estatutos podrán establecer que la asamblea general de asociados sea sustituida por la asamblea general de delegados, cuando aquella se dificulte en razón del número de asociados, o por los asociados se encuentren domiciliados en diferentes municipios del país, o cuando su realización resulte desproporcionadamente onerosa en consideración a los recursos de la asociación mutual. El número mínimo de delegados será de veinte (20). Los delegados serán elegidos en el número y para el periodo previsto en los estatutos. La junta directiva reglamentará el procedimiento de elección que en todo caso deberá garantizar la adecuada información y participación de los asociados. A la asamblea general de delegados le será aplicable, en lo pertinente, las normas relativas a la asamblea general de asociados.

Artículo 29. Clases de Asambleas. Las reuniones de asamblea general serán ordinarias o extraordinarias. Las primeras se celebrarán durante los primeros tres meses de cada año para el ejercicio de las funciones regulares. Las extraordinarias podrán reunirse en cualquier época del año, con el objeto de tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no puedan postergarse hasta la siguiente asamblea general ordinaria. Las asambleas generales extraordinarias sólo podrán tratar los asuntos para las cuales fueron convocadas y los que se deriven estrictamente de estos.

Artículo 30. Convocatoria. La asamblea general ordinaria o extraordinaria será convocada por la junta directiva para fecha, hora, lugar y objeto determinado y se hará conocer a los asociados con quince (15) días hábiles de antelación a la asamblea general. La junta de control social, el revisor fiscal o un diez (10%) de los asociados hábiles podrán solicitar a la junta directiva, la convocatoria de asamblea general extraordinaria. El estatuto de la asociación mutual determinará los procedimientos y la competencia para efectuar la convocatoria a asamblea general ordinaria, cuando la junta directiva no la realice dentro del plazo establecido en la presente ley o desatienda la petición de convocar la asamblea extraordinaria. La convocatoria se hará conocer a los asociados hábiles o delegados elegidos, en la forma y términos previstos en el estatuto.

Parágrafo. La junta directiva expedirá la lista de asociados hábiles e inhábiles y la junta de control social verificará su exactitud. Para conocimiento de los asociados, la relación de asociados inhábiles será publicada, de acuerdo con los procedimientos previstos en el estatuto.

Artículo 31. Quórum. La asistencia de la mitad de los asociados hábiles o de los delegados convocados constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas. Si dentro de la hora siguiente a la señalada para su iniciación no se hubiere integrado este quórum, la asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados no inferior al diez por ciento (10%) del total de los asociados hábiles, ni al cincuenta por ciento (50%) del número mínimo requerido para constituir una asociación mutual. Para el caso de las asambleas generales de delegados el número mínimo de éstos será de veinte (20) y el quórum mínimo será del cincuenta por ciento (50%) de los elegidos y convocados, siempre que dicho porcentaje no sea inferior al mínimo de delegados que requiere una asamblea de delegados. Una vez constituido el quórum, éste no se entenderá desintegrado por el retiro de alguno o algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el mínimo establecido en el inciso anterior.

Artículo 32. Mayorías. Por regla general, las decisiones de la asamblea general se tomarán por mayoría de votos de los asociados o delegados asistentes. Para la reforma del estatuto y la fijación de contribuciones extraordinarias se requerirá el voto de las dos terceras partes de los asociados o delegados asistentes, así como para la determinación de la fusión, transformación, escisión y disolución para liquidación.

La elección de los órganos de administración y control social se hará mediante los procedimientos o sistemas que determine el estatuto. Cuando se adopte el de las listas o planchas, se aplicará el sistema de cuociente electoral. En las asambleas generales corresponderá a cada asociado un solo voto, y los asociados o delegados convocados no podrán delegar su representación en ningún caso y para ningún efecto.

Las personas jurídicas asociadas a la asociación mutual participarán en las asambleas generales de éstas, por intermedio de su representante legal o de la persona que éste delegue.

Artículo 33. Funciones de la Asamblea. La asamblea general ejercerá las siguientes funciones:

1. Establecer las políticas y directrices generales de la asociación mutual para el cumplimiento del objetivo social.
2. Reformar el estatuto.
3. Examinar los informes de los órganos de administración y control.
4. Considerar, aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio.
5. Fijar contribuciones extraordinarias.
6. Elegir los miembros de la junta directiva y de la junta de control social.
7. Nombrar el revisor fiscal y su suplente y fijar su remuneración cuando hubiere lugar.
8. Decidir la fusión, incorporación, transformación, escisión y liquidación de la asociación mutual.
9. Las demás que le señalen las leyes y el estatuto.

Artículo 34. Junta Directiva. La junta directiva es el órgano de administración permanente de la asociación mutual, subordinado a las directrices y políticas de la asamblea general. Estará integrada por un mínimo de cinco (5) asociados, con sus respectivos suplentes numéricos. Su período, las causales de remoción y sus funciones se fijarán en el estatuto, el cual podrá consagrar la renovación parcial de sus miembros en cada asamblea general. Tendrá la facultad de designar el representante legal de conformidad con los requisitos y procedimientos que defina el estatuto. Las atribuciones de la junta directiva serán las necesarias para la realización del objeto social; se

consideran atribuciones implícitas las no asignadas expresamente a otros órganos por la ley o por el estatuto.

Parágrafo: Los estatutos de las asociaciones mutualistas y las asambleas generales definirán los criterios que se exigirán a las personas que aspiren a ser miembros de los órganos de dirección y control, teniendo en cuenta la integridad ética, el compromiso social, nivel educativo, aptitudes y conocimientos.

Artículo 35. Representante Legal. Las asociaciones mutualistas tendrán un representante legal quien será responsable de ejecutar las prescripciones estatutarias, las decisiones de la asamblea general, de la junta directiva y los requerimientos de las entidades gubernamentales encargadas de la economía solidaria. El representante legal será designado por la junta directiva, acorde con las disposiciones que se fijen en el estatuto; la órbita de sus actuaciones, requisitos, incompatibilidades y funciones serán precisadas en éste.

Artículo 36. Órganos de control. Las funciones de control social y técnico de las asociaciones mutualistas, estarán a cargo de la junta de control social y la revisoría fiscal, respectivamente.

Parágrafo. Las asociaciones mutualistas que realicen operaciones de ahorro y crédito deberán establecer en su respectivo estatuto la conformación de un comité de control para el ahorro y el crédito, encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales vigentes en la materia.

Artículo 37. Junta de Control Social. La junta de control social será elegida por la asamblea general y ejercerá las funciones fijadas en el estatuto, de acuerdo con las normas generales sobre el ejercicio del control social, siempre y cuando no correspondan a las asignadas a otros órganos sociales. El número de integrantes será mínimo de tres (3) con sus suplentes personales; su período y sistema de elección serán previstos en el estatuto.

Artículo 38. Revisor Fiscal. Por regla general la asociación mutual tendrá un revisor fiscal con su respectivo suplente, elegido en la asamblea general, con su asignación. Su período, sistema de elección y funciones serán previstos en el estatuto. Los requisitos para su designación y procedimientos de actuación serán los definidos en las normas legales vigentes sobre la materia.

Artículo 39. Incompatibilidades. Los miembros de las Juntas de control social no podrán ser simultáneamente miembros de la junta directiva, ni llevar asuntos de la asociación mutual en calidad de empleado o asesor.

Los miembros de la junta directiva no podrán celebrar contratos de prestación de servicios o de asesoría con la entidad.

Parágrafo 1. Los conyugues, compañeros permanentes, y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil de los miembros de la junta directiva; del representante legal de la junta de control social o del revisor fiscal de la asociación mutual no podrán celebrar contratos de prestación de servicios o de asesoría con esa organización.

Parágrafo 2. La aprobación de los créditos que soliciten el representante legal; los miembros de la junta directiva o los miembros de la junta de control social de las asociaciones mutualistas, corresponderá al órgano, comité o estamento que de conformidad con los estatutos y reglamentos de la asociación mutual sea creado para tal efecto.

Artículo 40. Actas. Las actas de las reuniones de los órganos de administración y control de la asociación mutual, debidamente firmadas y aprobadas, serán pruebas suficientes de los hechos que consten en ellas.

Parágrafo 1. Las actas de los órganos de administración y control de las asociaciones mutualistas se encabezarán con fecha y número consecutivo y contendrán, por lo menos, la siguiente información: (i) lugar, fecha y hora de reunión; (ii) forma y antelación de la convocatoria; (iii) nombre y número de asistentes; (iv) los asuntos tratados y (v) las decisiones adoptadas, señalando el número de votos emitidos en favor, en contra o en blanco.

Parágrafo 2. Compete a los jueces civiles municipales, o quien haga sus veces, el conocimiento de las impugnaciones de los actos o decisiones de la asamblea general y de la junta directiva de las asociaciones mutualistas, cuando no se ajusten a la ley o a sus estatutos, o cuando excedan los límites del objeto social. El procedimiento será el abreviado previsto en el Código eneral del Proceso.

CAPÍTULO VI
De los servicios

Artículo 41. Prestaciones Mutuales. Son prestaciones mutuales el conjunto de los productos y servicios que establezcan las asociaciones mutualistas para la satisfacción de necesidades de los asociados, sus familias y la comunidad. Estos productos y servicios pueden ser de asistencia médica, farmacéutica, funeraria, subsidios, ahorro y crédito, de previsión exequial, gestión para el empleo, proyectos de diferentes líneas productivas, actividades culturales, ambientales, educativas, deportivas, recreativas o turísticas, así como cualquier otra prestación que tenga por fin la promoción y dignificación de la persona humana y el mejoramiento social.

Parágrafo. Las asociaciones mutualistas prestarán sus productos y servicios preferiblemente a los asociados y a sus beneficiarios. De acuerdo con el estatuto podrán extenderlos al público no asociado, siempre en razón del interés social o del bienestar colectivo.

Artículo 42. Prestaciones de Ahorro y Crédito. Las asociaciones mutualistas pueden prestar los servicios de ahorro y crédito solamente a sus asociados, en las modalidades que le son permitidas y observando las disposiciones especiales sobre la materia. La supervisión estatal de estos servicios, se hará con base en criterios técnicos y salvaguardando la característica mutual de los mismos.

Artículo 43. Establecimiento de Prestaciones. Para el establecimiento de los servicios, la junta directiva de la asociación mutual dictará las reglamentaciones pertinentes, mediante las cuales consagrará los objetivos específicos de los mismos, los recursos de operación, así como todas aquellas disposiciones convenientes para garantizar su desarrollo, eficiencia y normal funcionamiento.

Parágrafo: La asociación mutual cobrará en forma justa y equitativa los servicios que preste, procurando que dichos ingresos le permitan asumir los costos de operación y administración indispensables para atender el cumplimiento del objeto social.

Artículo 44. Convenios para la Prestación de Servicios. Cuando las asociaciones mutualistas no puedan prestar directamente los servicios a sus asociados, podrán atenderlos celebrando convenios con otras entidades, de preferencia de su misma naturaleza o del sector solidario de la economía.

Los servicios médicos, farmacéuticos, funerarios y de previsión exequial podrán ser prestados de forma directa y en especie, en los términos establecidos por la ley.

CAPÍTULO VII
De la educación mutual

Artículo 45. Obligatoriedad. Las asociaciones mutualistas estarán obligadas a realizar de modo permanente actividades orientadas a la formación de sus asociados en los principios y doctrina del mutualismo, así como para capacitar a los directivos y administradores para el adecuado cumplimiento de sus funciones. La asistencia técnica, la investigación y la promoción del mutualismo hacen parte de la educación mutual.

Parágrafo: Los recursos del fondo de educación se orientarán exclusivamente al cumplimiento de esta obligación. Se podrá dar cumplimiento a esta obligación mediante la delegación o ejecución de programas conjuntos realizados por organismos de grado superior o por personas jurídicas autorizadas para el efecto.

Artículo 46. Comité de Educación Mutual. En el estatuto de toda asociación mutual deberá preverse el funcionamiento de un comité nombrado por la junta directiva, encargado de orientar y coordinar las actividades de educación mutual y de elaborar los planes o programas, con su correspondiente presupuesto, incluyendo la utilización del fondo de educación. El período, funcionamiento y número de integrantes del comité de educación serán definidos en el estatuto.

CAPÍTULO VIII
De la fusión, transformación y escisión

Artículo 47. Fusión. Las asociaciones mutualistas, por determinación de su asamblea general, podrán fusionarse, con otra u otras asociaciones mutualistas para constituir una nueva asociación mutual que se subrogará en sus derechos y obligaciones. Para tal fin, la nueva asociación mutual adoptará una denominación distinta al de las asociaciones mutualistas que se fusionan. En este caso, las asociaciones mutualistas que se fusionen se disolverán sin liquidarse y la nueva entidad se hará cargo del patrimonio de las disueltas.

También, las asociaciones mutualistas podrán fusionarse para incorporarse a otra asociación mutual. La asociación mutual que es incorporada o absorbida se denomina incorporada y la asociación mutual que absorbe o incorpora se denomina incorporante.

Para efectos de la fusión, la incorporante se subrogará en todos los derechos y obligaciones de la incorporada. En este caso, la incorporada se disuelve sin liquidarse.

Parágrafo 1. La decisión que adopte la fusión deberá ser aprobada por la asamblea general de las asociaciones mutualistas que participen en el proceso de fusión. Para tal fin se requerirá que la aprobación tenga como mínimo la mayoría de que trata el artículo 36 de la presente Ley

Parágrafo 2. Toda fusión requerirá autorización previa por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria o la entidad que haga sus veces.

Artículo 48. Transformación. La asamblea general de las asociaciones mutualistas podrá adoptar la decisión de transformarse en una organización de la economía solidaria siempre que la reunión del órgano máximo de administración cumpla con las formalidades legales, estatutarias y reglamentarias pertinentes.

La trasformación de la asociación mutual implica que su patrimonio será considerado como irrepartible en la organización de la economía solidaria en la que se transforma. Además, dicha transformación no genera ni disolución ni liquidación de la asociación mutual, lo cual significa que tal transformación es sin solución de continuidad. En ningún caso podrán transformarse en sociedades comerciales.

Parágrafo. Toda trasformación requerirá autorización previa por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria o la entidad que haga sus veces, sin perjuicio de las autorizaciones que se deba otorgar para el ejercicio de determinada actividad.

Artículo 49. Escisión. Por decisión de la asamblea general, adoptada con el voto de las dos terceras partes de los asociados hábiles o delegados elegidos presentes, las asociaciones mutualistas podrán escindirse. El patrimonio que se destina en la escisión para constituir una nueva organización de la economía solidaria (escisión propia) o para integrarlo a otra organización de la economía solidaria (escisión impropia) se deberá destinar a un fondo patrimonial especial no repartible para dar cumplimiento a su objeto social.

CAPÍTULO IX
De la disolución y liquidación

Artículo 50. Disolución. Las asociaciones mutualistas podrán ser disueltas por acuerdo de la asamblea general, siguiendo las normas vigentes sobre la materia y produciendo los registros que ellas contemplen.

Artículo 51. Causales de Disolución. Las asociaciones mutualistas se disolverán por una cualquiera de las siguientes causales:

1. Por decisión voluntaria de los asociados, adoptada en asamblea general con el voto calificado previsto en esta ley.
2. Por reducción de los asociados a un número inferior al requerido para la constitución de la asociación mutual, siempre que esta situación se prolongue por más de seis (6) meses.
3. Por fusión a otras asociaciones mutualistas
4. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para el cual fueron creadas.
5. Porque los medios que empleen para el cumplimiento de sus fines o porque las actividades que desarrollen sean contrarias a la ley, las buenas costumbres o la doctrina asociación mutualista.

Artículo 52. Plazo para Subsanar Causales de Disolución. En los casos previstos en los numerales 2, 4 y 5 del artículo anterior, la Superintendencia de Economía Solidaria o la entidad que haga sus veces, de acuerdo a las normas previstas para el efecto, dará a la asociación mutual un plazo para que subsane la causal o para que en el mismo término convoque a asamblea general con el fin de acordar la disolución, sin perjuicio de la intervención administrativa de dicho órgano**.**

Artículo 53. Liquidación. Disuelta la asociación mutual se procederá a su liquidación. El procedimiento para efectuarla, nombramiento de liquidador o liquidadores, sus deberes, prelación de pagos y demás disposiciones, será acorde con las normas que regulan a las cooperativas y ante los vacíos legales de las mismas se aplicaran las de las sociedades comerciales en la medida que no sean incorporadas con la naturaleza jurídica de las asociaciones mutualistas.

Parágrafo: Los remanentes de la liquidación serán transferidos a la entidad sin ánimo de lucro que el estatuto o la asamblea de disolución hayan previsto. A falta de dichas disposiciones estatutarias, se transferirán a la entidad de integración mutual de su radio de acción, con destino a la formación de fondos comunes para el desarrollo del mutualismo.

CAPÍTULO X
De la integración mutual

Artículo 54. Asociación de Mutualistas. Las asociaciones mutualistas podrán asociarse entre sí para el mejor cumplimiento de sus fines sociales y económicos, el logro de sus propósitos comunes o para estimular y facilitar el desarrollo general del mutualismo, en organismos de segundo y tercer grado. Estos últimos tendrán por objetivo unificar la acción de representación del movimiento mutualista, nacional e internacionalmente.

Los organismos de segundo grado serán de carácter regional o nacional; los de carácter regional se constituirán con un número mínimo de cinco (5) mutualistas y los de carácter nacional con un mínimo de diez (10). Tales entidades establecerán en sus estatutos el valor y forma de pago de las cuotas que deban cancelar los afiliados, teniendo en cuenta factores como número de asociados y usuarios, de manera tal que se garantice una adecuada participación en los servicios que preste el organismo de grado superior.

Los organismos de tercer grado podrán constituirse con un número no inferior a cinco (5) entidades de segundo grado, y en sus estatutos determinarán la participación de las mismas y su forma de integración.

Parágrafo. A los organismos mencionados en este artículo les serán aplicables, en lo pertinente, las normas legales previstas para las asociaciones mutualistas

Artículo 55. Funciones de los Organismos de Segundo Grado. Los organismos de segundo grado desarrollarán las actividades previstas en sus estatutos, pero cumplirán de manera especial las siguientes funciones:

1. Divulgar la aplicación y práctica de la doctrina y principios del mutualismo.
2. Prestar a las asociaciones mutualistas afiliadas, asistencia educativa, técnica, financiera y administrativa.
3. Promover y fomentar las organizaciones Mutualistas.
4. Representación gremial.
5. Generar procesos de integración económica para la comercialización y procesos de transformación al servicio de las asociaciones mutualistas asociadas.

Artículo 56. Asociación con Entidades del Sector Social y Solidario. Las asociaciones mutualistas podrán vincularse a cualquier entidad del sector social y solidario, con el propósito de dar cumplimiento a su objeto social.

TÍTULO II
De las relaciones del Estado con las asociaciones mutualistas

CAPÍTULO I
Promoción, fomento y supervisión de las asociaciones mutualistas

Artículo 57. Promoción. Las mutualistas que legalmente se constituyan serán consideradas por el Estado como instituciones de interés social. El Gobierno Nacional adoptará las políticas, normas y procedimientos adecuados para asegurar el acceso de las asociaciones mutualistas a los programas y recursos financieros de fomento necesarios para una mayor cobertura y calidad de las actividades que atiendan estas entidades.

Artículo 58. Vinculación al desarrollo territorial. Las asociaciones mutualistas, y/o sus organismos de segundo o tercer grado, serán tenidas en cuenta por los entes territoriales para la formulación o ejecución de planes, programas y proyectos de beneficio social de sus respectivos radios de acción. Los entes territoriales apoyarán, en su radio de acción específico, los programas de desarrollo del mutualismo y establecerán lazos de relación con los organismos de segundo y tercer grado de su ámbito territorial, en procura de establecer programas comunes de desarrollo, contribuir con los programas autónomos de desarrollo del sector o introducir estos en los planes, programas y proyectos de desarrollo territorial

Artículo 59. Régimen Tributario. En materia de impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, las asociaciones mutualistas pertenecen al Régimen Tributario Especial de conformidad con las normas vigentes contempladas en el estatuto tributario.

Artículo 60. Supervisión. Las asociaciones mutualistas estarán sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Economía Solidaria o la entidad que haga sus veces, con la finalidad de asegurar que sus actos se ajusten a las normas legales y estatutarias. En todo caso, las funciones de supervisión no implican, por ningún motivo, facultad de cogestión o intervención en la autonomía jurídica y democrática de las asociaciones mutualistas.

Artículo 61. Actos Sancionables y Sanciones. La Superintendencia de Economía Solidaria o la entidad que haga sus veces, ejercerá funciones de vigilancia, inspección y control sobre las asociaciones mutualistas y tendrá la facultad legal de adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio consagrado en la Ley 1437 de 2011, y demás normas que la modifiquen adicionen, aclaren, deroguen o complementen, con la finalidad de determinar los hechos infractores, los responsables y el grado de culpabilidad de la asociación mutual propiamente dicha o de sus miembros que integran los órganos de administración y control.

Las infracciones personalmente imputables, son señaladas a continuación:

1. Utilizar la denominación o el objeto de la Asociación Mutualista para encubrir actividades o propósitos especulativos o contrarios a las características de las asociaciones mutualistas o no permitidos a éstas por las normas legales vigentes.
2. Por desviación de los fondos con destinación específica estatutariamente establecidos.
3. Repartir entre los asociados las reservas, fondos, auxilios, y donaciones de carácter patrimonial.
4. Alterar la presentación de los estados financieros.
5. Admitir como asociados a quienes no puedan serlo por prescripción legal o estatutaria.
6. Ser renuentes a los actos de inspección o vigilancia.
7. Realizar actos de disposición excediendo las facultades establecidas por la ley, los estatutos o reglamentos, u omitir el cumplimiento de sus funciones.
8. No asignar a las reservas y fondos obligatorios las cantidades que correspondan de acuerdo con la ley, los estatutos y reglamentos internos.
9. No presentar oportunamente a la asamblea general los informes, balances y estados financieros que deben ser sometidos a ésta para su aprobación.
10. No convocar a la asamblea general en el tiempo y con las formalidades estatutarias.
11. No observar en la liquidación las formalidades previstas en la ley y los estatutos.
12. No reportar oportunamente a la Superintendencia de Economía Solidaria los informes, balances y estados financieros, de conformidad con las normas vigentes.
13. No registrar la asociación mutualista en la Superintendencia de Economía Solidaria para el respectivo control de legalidad, y
14. Las derivadas del incumplimiento de los deberes y funciones previstos en la ley y en los estatutos.

Parágrafo 1. De encontrarse responsable la asociación mutual, la Superintendencia de Economía Solidaria o la entidad que haga sus veces, impondrá las sanciones consagradas en la Ley 454 de 1998 y demás normas que la modifiquen, adicionen, aclaren o complementen.

Parágrafo 2. Para efectos de determinar la sanción, el grado de responsabilidad y culpabilidad; los agravantes y atenuantes de la sanción y los eximentes de responsabilidad se aplicarán lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y la Ley 454 de 1998 y demás normas que la modifiquen, adicionen, aclaren o complementen.

Artículo 62. Informe de gestión. Dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de cada legislatura, la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias o la entidad que haga sus veces presentará un informe al Congreso de la República sobre los avances en la consolidación del sector mutualista**.**

CAPÍTULO II
Régimen de responsabilidades

Artículo 63. Responsabilidad. Las asociaciones mutualistas y los miembros de sus órganos de administración y control, serán responsables por los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento de las normas legales y estatutarias, y se harán acreedores a las sanciones previstas en la ley.

Parágrafo. Los miembros de la junta directiva y la junta de control social serán eximidos de responsabilidad mediante la prueba de no haber participado en la reunión o de haber salvado expresamente su voto. De la misma forma, el representante legal y el revisor fiscal podrán ser exonerados de responsabilidad si demuestran que las conductas anómalas fueron denunciadas ante la instancia pertinente.

CAPÍTULO III
Disposiciones finales

Artículo 64. Las materias y situaciones no previstas en esta ley, se resolverán primeramente conforme a las disposiciones generales sobre entidades de economía solidaria y otras que se asimilan por su naturaleza. Subsidiariamente, se resolverán conforme a los principios mutualistas generalmente aceptados y a la doctrina solidaria.

Artículo 65. En un plazo de un año, contado a partir de la vigencia de esta Ley, las asociaciones mutualistas constituidas con anterioridad a dicha fecha deberán adaptar su estatuto, en lo que corresponda a las prescripciones de la misma.

Artículo 66. Vigencia y Derogatoria. La presente Ley entrará a regir a partir de su sanción, promulgación y publicación en el Diario Oficial; y deroga el Decreto 1480 de 1989 y todas las disposiciones que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la República del día 20 junio de 2021, **PROYECTO DE LEY NUMERO 286 DE 2020 SENADO, 120 DE 2019 CÁMARA: "POR LA CUAL SE DOTA A LAS ASOCIACIONES MUTUALISTAS DE IDENTIDAD, AUTONOMÍA Y VINCULACIÓN A LA ECONOMÍA DEL PAÍS COMO EMPRESAS SOLIDARIAS Y SE ESTABLECEN OTRAS DISPOSICIONES".**

Cordialmente,

LAURA ESTHER FORTICH SANCHEZ
Senadora Ponente

El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la República del día 20 de junio de 2021, de conformidad con el texto propuesto aprobada en la Cámara de Representantes.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 18 DE JUNIO DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 314 DE 2020 SENADO, 220 DE 2019 CÁMARA

por la cual se crea el Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres, se modifica la Ley 1146 de 2007 y se dictan otras disposiciones.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 18 DE JUNIO DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NUMERO 314 DE 2020 SENADO, 220 DE 2019 CÁMARA: "POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE ALERTAS TEMPRANAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES, SE MODIFICA LA LEY 1146 DE 2007 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. OBJETO. La presente Ley tiene por objeto la creación del Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas y Adolescentes, modificar la Ley 1146 de 2007 y establecer medidas que articulen la identificación, atención, prevención y reducción de los principales factores de riesgo de violencia sexual contra los menores de edad en Colombia.

ARTÍCULO 2°. Modifíquese el Artículo 5° de la Ley 1146 de 2007 el cual quedará así:

ARTÍCULO 5°. FUNCIONES DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL CONSULTIVO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DEL ABUSO SEXUAL. El Comité tendrá las siguientes funciones:

1. Actuar como órgano consultor y asesor, encargado de formular políticas y programas de las entidades responsables y relacionadas con la prevención de la violencia sexual y la atención integral del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.
2. Evaluar trimestralmente la situación del abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional, a fin de realizar un diagnóstico claro del problema.
3. Establecer medidas de coordinación interinstitucional e intersectorial con el fin de garantizar la detección, la prevención de la violencia sexual en todos los niveles y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. Se hará seguimiento trimestral al cumplimiento de las medidas establecidas.
4. Proponer acciones conjuntas para la sensibilización y capacitación de las entidades y de la sociedad respecto de la prevención, denuncia y ruta de atención de los casos de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.
5. Acompañar y contribuir con el desarrollo de los programas de educación en salud sexual y reproductiva dirigida a niños, niñas y adolescentes para lo cual, entre otras, presentará conceptos, estudios y propuestas, a fin de garantizar la prevención de la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes.
6. Proponer y gestionar con el Ministerio de la Protección Social, lo relativo a la vigilancia epidemiológica del abuso sexual.
7. Hacer recomendaciones sobre el contenido del material de apoyo empleado por los programas en salud sexual y reproductiva dirigida a niños, niñas y adolescentes.
8. Presentar anualmente ante las Comisiones Séptimas del Senado de la República y la Cámara de Representantes, un informe acerca de las acciones adelantadas en torno al objeto de la presente ley y los resultados de las mismas.
9. El Comité se dará su propia organización y agenda de trabajo anual. Como mínimo constituirá subcomités de atención, prevención y comunicación.
10. Construir, elaborar y ajustar el funcionamiento del Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas y Adolescentes.
11. Evaluar los resultados e información del Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas y Adolescentes, y emitir el informe con las recomendaciones a las regiones, departamentos y municipios.
12. Establecer un sistema de evaluación que permita identificar la situación de los diferentes entes territoriales en relación con sus políticas, planes, programas y proyectos en pro de la eliminación de la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes. Y definir una metodología para atender a los entes territoriales que presenten un mayor índice de violencia sexual, y tomar con ellos medidas extraordinarias.
13. Unificar y coordinar las estrategias de prevención en conjunto con todas las entidades que permita una mayor eficacia para disminuir los índices de Violencia Sexual contra los niños, niñas y adolescentes.
14. Las demás funciones emanadas en virtud de la creación del Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas y Adolescentes.

Los conceptos requeridos al Comité por el Gobierno Nacional, deberán ser rendidos dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su solicitud, so pena de constituirse en causal de mala conducta para el funcionario que omita rendir los informes en los términos establecidos en el presente artículo. Parágrafo. Los Consejos de Política Social y los Subcomités de Infancia y Familia, sin perjuicio de sus competencias, implementarán las directrices y recomendaciones impartidas por el Comité, en sus respectivos territorios.

Artículo 3º Principios. *El sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres,* orientará sus acciones de acuerdo con los siguientes principios:

1. Respeto de la dignidad humana: *El respeto por la dignidad humana orienta las acciones de prevención, protección, respeto y garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Las acciones de este Sistema no generarán riesgos adicionales ni agravarán los preexistentes.*

2. *Colaboración armónica:* *El ordenamiento constitucional colombiano impone, en virtud de la división de poderes, un mandato de colaboración armónica, que comprende no solo a los órganos que conforman las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, sino a todos los demás organismos que tienen asignadas funciones para la protección integral de los niños, niñas, adolescentes y mujeres en Colombia.*

3. *Igualdad y no discriminación:* *Todos los niños, niñas, adolescentes y mujeres, sin distinción, pueden disfrutar de todos los derechos consagrados en la Constitución, incluidos el derecho a la igualdad de trato ante la Ley y el derecho a ser protegidos frente a las agresiones de sus derechos.*

4. *Coordinación y corresponsabilidad institucional:* *La coordinación y corresponsabilidad entre todas las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas y Adolescentes son necesarias para garantizar los derechos fundamentales a niños, niñas y adolescentes. Se deberá asegurar la articulación entre autoridades y entidades del orden nacional y territorial, para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Sistema, respetando sus competencias constitucionales y legales.*

5. Celeridad: *El Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres, advertirá y reaccionará frente a los riesgos de violencia sexual identificados por las autoridades estatales y generará una respuesta rápida, integral y coordinada.*

6.Debida diligencia: *Los servidores públicos actuarán en materia de prevención y protección frente a posibles actos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, con la debida diligencia y serán responsables por acción, omisión o extralimitación de sus funciones conforme a la Constitución Política y a la Ley.*

7. *Participación:* *El Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres, tendrá en cuenta las observaciones, sugerencias y solicitudes de la sociedad civil, organizaciones para la protección de derechos humanos y demás actores públicos, privados y mixtos que promueven los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres.*

8. Enfoque territorial: *El Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres desarrollará sus acciones teniendo en cuenta las características y dinámicas de los territorios.*

9. Información compartida: *Todas las autoridades y entidades públicas deben aportar la información necesaria para una respuesta inmediata y eficaz para la prevención de la violencia sexual y la respuesta orientada a la protección de los niños, niñas, adolescentes y mujeres. Lo anterior, sin perjuicio de la reserva legal aplicable.*

Artículo 4º. Ámbito de aplicación. *Los principios y disposiciones contenidas en la presente ley sobre el Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres; tendrán aplicación en el territorio nacional y su implementación y operación se desarrollará en los municipios y distritos, en coordinación con las autoridades del orden departamental y nacional.*

Artículo 5°. Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres. *Crear el Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres, como el sistema que permita identificar y detectar los riesgos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres y para garantizar una respuesta rápida y eficaz por parte de las diferentes autoridades del Estado, que permita prevenir los actos y hechos constitutivos de violencia sexual.*

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Consejería para la Equidad de la Mujer, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y la Fiscalía General de la Nación, determinaran el mecanismo mediante el cual se opere e implemente el Sistema de Alertas Tempranas.

El Gobierno Nacional, reglamentará las funciones, competencias, y componentes del Sistema de Alertas Tempranas. Para lo cual tendrá el término de 6 meses, contados a partir de la aprobación de la partida que se asigne del presupuesto nacional para su implementación.

Parágrafo 1. El sistema Nacional de Alertas tempranas podrá incorporar mecanismos de respuesta rápida y eficaz para la búsqueda, localización y el resguardo de los niños, niñas, adolecentes desaparecidos, raptados y o secuestrados.

Artículo 6°. Objetivos específicos*. El Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres tendrá los siguientes objetivos específicos:*

1. Monitorear, identificar y advertir oportunamente sobre los riesgos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres.

2. Reaccionar de manera rápida y oportuna a los riesgos identificados, mediante la articulación de las acciones de las autoridades del orden municipal, distrital y departamental, en coordinación con las autoridades del orden Nacional.

3. Realizar actividades de seguimiento y monitoreo tendientes a examinar el efecto de las medidas adoptadas y su evolución, en coordinación con el Sistema Integrado de Información de Violencias de Género (SIVIGE).

4. Propiciar escenarios de información pública sobre las acciones realizadas y logros obtenidos frente a los riesgos advertidos y otras situaciones relacionadas.

Artículo 7°. Modifíquese el inciso primero y el parágrafo 1 del artículo 17 de la ley 1146 de 2007, *El cual quedará así:*

Artículo 17. RECURSOS. El Ministerio de Salud y Protección Social queda autorizado para administrar por medio de la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la Violencia Sexual y Atención Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas del Abuso Sexual, una cuenta especial, sin personería jurídica, que recepcionará los recursos captados para prevenir la violencia sexual y atender integralmente a los niños, niñas y adolescentes víctimas del abuso sexual. El Gobierno reglamentará la materia. (...)

PARÁGRAFO 1o. El Gobierno Nacional reglamentará lo concerniente a la administración de la cuenta, así como los procedimientos para recibir y administrar los recursos provenientes de donaciones y de cooperación internacional previamente mencionados en el presente artículo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes que regulan la cooperación económica internacional.

Artículo 8°: Sostenibilidad del sistema. Financiación del sistema nacional de alertas tempranas para la prevención de la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes. Las acciones, programas y proyectos que se adelanten en desarrollo del sistema nacional de alertas tempranas para la prevención de la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes, podrán tener como fuentes de financiación los recursos provenientes de

1. Las partidas específicas del Presupuesto General de la Nación.
2. Recursos de cooperación internacional.
3. Las donaciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y organismos internacionales.
4. Los recursos de libre inversión del componente de Propósito General del Sistema General de Participaciones.
5. Las demás fuentes de financiación de origen licito que contribuyan de manera directa y exclusiva a la sostenibilidad del sistema

Parágrafo. El Gobierno Nacional apropiará en la Ley del Presupuesto General de la Nación, para cada vigencia fiscal, los recursos necesarios para la operación y sostenibilidad del Sistema.

Artículo 9°. Vigencia y derogatorias. *La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las normas que le sean contrarias."*

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la República del día 18 junio de 2021, al **PROYECTO DE LEY NUMERO 314 DE 2020 SENADO, 220 DE 2019 CÁMARA: "POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE ALERTAS TEMPRANAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES, SE MODIFICA LA LEY 1146 DE 2007 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**

Cordialmente,

ESPERANZA ANDRADE SERRANO
Senadora Ponente

El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la República del día 18 de junio de 2021, de conformidad con el texto propuesto para segundo debate.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 252 DE 2020 SENADO, 256 DE 2019 CÁMARA

por la cual se reconoce el patrimonio cultural material e inmaterial de la Nación del pueblo raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se propone la elaboración de los estudios correspondientes para realizar las declaratorias que correspondan, acorde a los procedimientos vigentes y se dictan otras disposiciones.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 252 DE 2020 SENADO, 256 DE 2019 CÁMARA: "POR LA CUAL SE RECONOCE EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DE LA NACIÓN DEL PUEBLO RAIZAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, SE PROPONE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES PARA REALIZAR LAS DECLARATORIAS QUE CORRESPONDAN, ACORDE A LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

CAPÍTULO I
DECLARATORIAS

Artículo 1°. Reconózcase Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación los saberes, conocimientos ancestrales, técnicas tradicionales y prácticas culturales en su convivencia con el mar y a la arquitectura tradicional del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Parágrafo 1°. Los saberes, conocimientos ancestrales y prácticas culturales raizales en su convivencia con el mar comprenden la reunión de saberes, conocimientos ancestrales y prácticas culturales que encuentran, en la convivencia con el mar, su razón de ser. A través de muchas generaciones el pueblo raizal ha transmitido prácticas culturales armónicas con la preservación de especies y con la protección de este medio natural. Si bien se sabe que existen otras expresiones culturales que también forman parte de este patrimonio cultural marino, esta manifestación recoge algunos de esos saberes y prácticas con el fin de facilitar la gestión cultural.

Parágrafo 2°. Los espacios verdes o patios comunales o familiares o 'the yard' o 'di yaad' son espacios de sociabilidad fundamentales de la cultura Raizal que rodean los inmuebles de la arquitectura tradicional de las islas, hacen parte integral del conjunto arquitectónico tradicional del Pueblo Raizal del Archipiélago y contienen vegetación, árboles, huertas y demás elementos de valor ornamental, ambiental, de seguridad alimentaria y nutricional, paisajístico y espiritual, elementos importantes para la preservación de la Reserva de Biósfera Seaflower.

Parágrafo 3°. Para efectos de esta ley, entiéndase por arquitectura tradicional del pueblo raizal del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el diseño, las edificaciones o inmuebles y monumentos realizados a partir de los saberes y utilización de los oficios tradicionales asociados que representan la cultura ancestral del pueblo Raizal de las islas.

Artículo 2°. Facultase al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Cultura, para que de manera articulada con el Departamento Archipiélago de San Andrés y la Alcaldía del Municipio de Providencia y Santa Catalina, previa identificación y valoración del estado del Patrimonio y su incorporación en el POT de San Andrés y el EOT de Providencia y Santa Catalina, implementen en el marco del ordenamiento territorial y de los usos del suelo y de los planes de desarrollo, programas y proyectos para la protección, conservación, valoración, divulgación y visibilización de los espacios verdes o patios comunales o familiares o "the yard" o "di yaad", que hacen parte integral del conjunto arquitectónico tradicional del pueblo raizal del Archipiélago y constituyen elementos importantes para la conservación del patrimonio cultural.

Artículo 3°. Reconózcase como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, el conocimiento ancestral de los constructores de la arquitectura tradicional del Pueblo Raizal del Archipiélago, quienes son poseedores de los saberes, conocimientos, técnicas, oficios y prácticas asociadas al diseño y construcción de inmuebles, monumentos y embarcaciones que representan la cultura ancestral del pueblo Raizal de las islas.

Artículo 4°. De manera articulada la Gobernación del Departamento Archipiélago, la Alcaldía del municipio de Providencia y Santa Catalina, Coralina, el Raizal Council y el Consejo Departamental de Patrimonio, deberán elaborar una Lista Indicativa de Candidatos a Bien de Interés Cultural (LICBIC) en el ámbito del Departamento Archipiélago; previo inventario y valoración del patrimonio material y definir qué bienes de la lista puedan ser declarados como Bien de Interés Cultural (BIC); y determinar cuáles requieren un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP).

Artículo 5°. Se faculta al Ministerio de Cultura, al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, al Archivo General de la Nación y al Instituto Caro y Cuervo a promover la investigación acerca de las Ruinas del Fuerte de la Libertad "Fort Warwick" o "Fuerte Louis Aury" en el municipio de Providencia y Santa Catalina, además de realizar un mapeo arqueológico marino y terrestre detallado para identificar otros sitios de interés arqueológico de las islas, indicando las características de los sitios y sus áreas de influencia y definiendo cuales requieren Plan de Manejo Arqueológico, así como para fomentar la divulgación de los resultados de las investigaciones tanto en creole, inglés y castellano, al igual que a través de la tradición oral en aras de asegurar la integridad étnica y cultural y la recuperación de la memoria colectiva y la apropiación social del patrimonio cultural del pueblo raizal".

Parágrafo. De manera articulada la Gobernación del Departamento Archipiélago, la Alcaldía del municipio de Providencia y Santa Catalina, la Corporación para el Desarrollo Sostenible (CORALINA), el Raizal Council y El Consejo Departamental de Patrimonio y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, deberán realizar un mapeo arqueológico marino y terrestre detallado del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para identificar otros sitios de interés arqueológico de las islas; indicar las características de tales sitios y sus áreas de influencia; definir cuáles requieren un Plan de Manejo Arqueológico; y determinar los lineamientos de protección, gestión, divulgación y sostenibilidad de los mismos.

Artículo 6°. El Ministerio de Cultura, deberá establecer estrategias de cooperación interinstitucional e internacional para la protección, gestión, divulgación y sostenibilidad del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial de la Nación, los Bienes de Interés Cultural (BIC), el Patrimonio Arqueológico, y los sitios de interés arqueológico identificados en el Departamento Archipiélago, teniendo en consideración lo estipulado en la ley 1675 del 2013.

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 7°. Autorización. Autorícese al Gobierno Nacional para que, a través del Ministerio de Cultura en coordinación con otras entidades competentes adelante las siguientes acciones:

a. Fortalecer los oficios del patrimonio cultural mediante acciones articuladas que permitan desarrollar diversos mecanismos que promuevan las economías colaborativas, las oportunidades laborales y de emprendimiento, así como el incentivo a procesos de educación, formación formales e informales en oficios relacionados con las artes y el patrimonio a partir del modelo aprender haciendo a través de la creación de la Escuela Taller de San Andrés Islas y la Red de Talleres Escuela.

b. Promover el desarrollo integral sostenible de los portadores de los saberes, conocimientos, técnicas, oficios y prácticas asociadas a la arquitectura tradicional del Archipiélago y de su actividad ancestral, en sus diversas técnicas y modalidades, integrándolos al desarrollo social, económico, cultural y ambiental del país.

c. Realizar el reconocimiento de aprendizajes previos de los saberes, conocimientos ancestrales, técnicas tradicionales y prácticas culturales en su convivencia con el mar y a la arquitectura tradicional del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el Marco del Sistema Nacional de Cualificaciones.

d. Fomentar la gestión y transmisión de las prácticas, conocimientos y técnicas de los constructores tradicionales del Archipiélago, para favorecer el relevo generacional y garantizar la permanencia de esta actividad y su sostenibilidad económica con el fin de asegurar la preservación de la actividad ancestral raizal en las islas como una identidad cultural que perdure a través del tiempo.

e. Fomentar procesos que aporten a la sostenibilidad social, económica, cultural y ambiental del patrimonio cultural del Pueblo Raizal del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

f. Fortalecer las cadenas productivas asociadas al patrimonio cultural y las condiciones para la articulación entre el turismo, el patrimonio cultural y otros sectores productivos de manera que contribuyan a la visibilización, comunicación, apropiación y sostenibilidad del patrimonio cultural.

Articulo 8: Manejo integral del patrimonio cultural del ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. El Ministerio de Cultura y de manera articulada con la Gobernación del Departamento Archipiélago y la Alcaldía del Municipio de Providencia y Santa Catalina, en un término de un (1) año, deberán realizar un plan para identificar los componentes del patrimonio cultural del archipiélago en sus diferentes categorías, lo cual incluye las manifestaciones del patrimonio arquitectónico, conjuntos urbanos, paisajes culturales, así como sus necesidades de protección y manejo con los instrumentos correspondientes, como los planes especiales de manejo y protección. En este plan se deberán establecer las acciones necesarias para garantizar el reconocimiento, la apropiación social, la protección, la conservación y la sostenibilidad de los BIC o de los bienes que pretendan declararse como tales y de las relaciones que se tienen con el patrimonio cultural de naturaleza material, inmaterial, el entorno natural y las condiciones ambientales, de conformidad a lo señalado en el Decreto 2358

de 2019 "Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura", en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, así:

a. Precisar las acciones en diferentes escalas de identificación, reconocimiento y valoración del patrimonio cultural, así como de las necesidades de protección y manejo que sean necesarias para la conservación del patrimonio cultural y su articulación al desarrollo sostenible del Archipiélago.

b. Establecer las condiciones físicas, sociales, económicas y de gestión para el mantenimiento, conservación, recuperación, intervención y manejo del patrimonio cultural.

c. Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural.

d. Generar las condiciones y estrategias para el mejor conocimiento y la apropiación del patrimonio cultural por parte de la comunidad, con el fin de garantizar su conservación y su transmisión a las futuras generaciones.

e. Establecer conjuntamente con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y con el Departamento de San Andrés y los Municipios de Providencia y Santa Catalina, las acciones para promover la incorporación del patrimonio cultural en los respectivos instrumentos de planificación.

Artículo 9°. Nota de Estilo. El Congreso de la República de Colombia podrá emitir nota de estilo en un pergamino que contenga el texto de la presente Ley.

Artículo 10°. Incorporación Presupuestal. A partir de la vigencia de la presente ley, el Gobierno Departamental en el marco de su autonomía, podrá asignar las apropiaciones requeridas con el fin de lograr la ejecución de las siguientes obras de utilidad pública y de interés social e histórico:

a) Recuperación, mantenimiento y conservación de inmuebles representativos de la arquitectura tradicional del Pueblo Raizal del Departamento Archipiélago, previo inventario realizado por el Ministerio de Cultura en conjunto con la Gobernación del Departamento Archipiélago, la Alcaldía del municipio de Providencia y Santa Catalina, el Raizal Council y el Consejo Territorial del Patrimonio.

b) Proyectos elaborados en el marco de los Planes de Manejo del Patrimonio Cultural Arquitectónico o urbano o paisajes culturales y demás disposiciones contenidas en la presente Ley.

c) Proyectos elaborados en el marco del Plan Especial de Salvaguarda (PES) de los oficios, saberes, prácticas asociadas al mar, a la arquitectura raizal y carpintería tradicional, elaborado en conjunto con los sabedores, portadores y otros actores claves de la comunidad.

d) Protección de humedales y manglares. El Ministerio de ambiente en coordinación con los departamentos y municipios en la zona, dispondrá de un plan de protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales y manglares y de los servicios ambientales que éstos brindan a la población del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Deberán definir las zonas para la protección, manejo, uso y aprovechamiento de ecosistemas forestales en cuencas hidrográficas.

El Gobierno Nacional promoverá la estructuración de proyectos para pago por servicios ambientales.

Parágrafo. La asistencia técnica para los fines previstos en la presente Ley, será prestada por las Instituciones pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con sus entidades adscritas y vinculadas y las Entidades territoriales.

Artículo 11°. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura en coordinación con las demás entidades competentes, incluyendo a la gobernación del departamento archipiélago y la alcaldía del municipio de Providencia y Santa Catalina, promoverá el uso de madera adecuada y legal, certificada con sello de calidad, buen manejo y prácticas sostenibles de producción para los proyectos de intervención, construcción, mantenimiento y reparación de los inmuebles y embarcaciones de la arquitectura de tradición raizal de las islas. Así mismo, se deberá promover estímulos e incentivos para la conservación y mantenimiento de la arquitectura autóctona de la región.

Parágrafo. El Ministerio de Cultura en coordinación con la Gobernación del Departamento Archipiélago y la Alcaldía del Municipio de Providencia y Santa Catalina reglamentará la aplicación de los estímulos e incentivos de lo previsto en este artículo de modo que se propicie su sostenibilidad y la generación de recursos para su conservación y mantenimiento, que además genere beneficios para la comunidad asociada al bien.

Artículo 12: De manera articulada con la Gobernación del departamento Archipiélago, la Alcaldía del municipio de Providencia y Santa Catalina, Coralina, el Raizal Council y el Consejo Municipal y Departamental de Patrimonio, pescadores, matronas e interesados en la cocina tradicional, sector turístico y hotelero, líderes sociales y religiosos, y comunidad en general deberán elaborar un Plan Especial de Salvaguardia (PES) para fortalecer los saberes, conocimientos ancestrales, técnicas tradicionales y prácticas culturales del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus áreas de interés.

Artículo 13: Se fortalecerán las capacidades técnicas locales y departamentales para la gestión de incentivos a los propietarios de inmuebles que manifiesten los atributos de la arquitectura de interés cultural del Archipiélago, quienes inviertan en la recuperación y construcción nueva de estos inmuebles y en el fomento a los oficios y prácticas culturales relacionadas con el patrimonio cultural.

Parágrafo. Se promoverán las nuevas construcciones para viviendas que hagan parte de los programas de gobierno y que se realicen dentro del territorio del Archipiélago, las cuales deberán incluir los atributos de la vivienda de interés cultural para el Archipiélago:

a. Técnicas constructivas tradicionales.
b. Incentivar bajar costos para el uso de la madera.
c. Espacialidad y elementos formales de la región.
d. Protección del patrimonio natural.

Artículo 14 Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la República del día 17 junio de 2021, al **PROYECTO DE LEY NÚMERO 252 DE 2020 SENADO, 256 DE 2019 CÁMARA: "POR LA CUAL SE RECONOCE EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DE LA NACIÓN DEL PUEBLO RAIZAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, SE PROPONE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES PARA REALIZAR LAS DECLARATORIAS QUE CORRESPONDAN, ACORDE A LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".**

Cordialmente,

HORACIO JOSE SERPA NONCADA
Senador Ponente

El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la República del día 17 de junio de 2021, de conformidad con el texto propuesto para segundo debate.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 392 DE 2021 SENADO, 351 DE 2020 CÁMARA

por medio de la cual se autoriza la emisión de la Estampilla Pro Universidad del Quindío.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NUMERO 392 DE 2021 DE 2020 SENADO, 351 DE 2020 CÁMARA: "POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO"

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. AUTORIZACIÓN. Autorizase a la Asamblea Departamental del Quindío, para que ordene la emisión de la estampilla Pro Universidad del Quindío.

Parágrafo: Se autoriza a la Asamblea Departamental del Quindío para determinar las características, hechos económicos, tarifas, actos administrativos u objetos de gravamen, excepciones y todos los demás aspectos inherentes al uso de carácter obligatorio de la estampilla autorizada en la presente Ley, en relación con las actividades, contratos, operaciones, actos, procesos y procedimientos que se deban realizar en el Departamento del Quindío y sus municipios. Las ordenanzas emanadas de la Asamblea departamental del Quindío en desarrollo de lo dispuesto en la presente Ley serán puestas en conocimiento del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO 2°: DESTINACIÓN. El recaudo por concepto de lo establecido en el artículo1° se destinará a la adquisición de equipos de laboratorio, recursos educativos, apoyo a la investigación, transferencia de tecnología, mejoramiento de la infraestructura, y para otros servicios de la Universidad. El sesenta por ciento (60%) del recaudo será destinado al fomento de la investigación en las áreas priorizadas por la universidad.

El Consejo Superior de la Universidad del Quindío será la instancia responsable de definir los programas y proyectos a los cuales se destinarán los recursos recaudados por la estampilla.

ARTÍCULO 3°: CUANTÍA. La emisión de la estampilla que se autoriza será hasta por la suma de cincuenta mil millones de pesos ($ 50.000.000.000).

Parágrafo 1: La presente Ley tendrá vigencia hasta recaudar el monto total establecido en el presente artículo, a pesos constantes del año en que entre en vigencia la presente Ley.

Parágrafo 2°. La tarifa contemplada en esta ley no podrá exceder del dos por ciento (2%) del valor del hecho y objeto del gravamen.

Parágrafo 3°. Los recursos obtenidos por las entidades del orden departamental y municipal por concepto de la estampilla serán transferidos a la Universidad del Quindío dentro de los primeros 10 días calendario del mes siguiente a su recaudo.

ARTÍCULO 4°: FACULTAD. Facultar a los concejos municipales del Departamento del Quindío para que, con autorización previa de la Asamblea Departamental, hagan obligatorio el uso de la estampilla, cuya emisión por esta Ley se autoriza, siempre con destino a la Universidad del Quindío.

ARTÍCULO 5°: OBLIGACIÓN. La obligación de adherir y anular la estampilla a que se refiere esta Ley queda a cargo de los funcionarios Departamentales y Municipales que intervengan en los actos, de conformidad con lo establecido en las ordenanzas y acuerdos municipales.

ARTÍCULO 6°: CONTROL. El control del recaudo y del traslado oportuno de los recursos a la Universidad del Quindío, así como de la utilización de los fondos provenientes del cumplimiento de la presente ley, estarán a cargo de la Contraloría del departamento.

Parágrafo 1°: La rectoría de la Universidad del Quindío deberá rendir informe semestral a la Asamblea Departamental del Quindío sobre el recaudo de los recursos generados por la estampilla y su destinación.

ARTÍCULO 7°: VIGENCIA. La presente Ley rige a partir de su promulgación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la República del día 17 junio de 2021, al **PROYECTO DE LEY NUMERO 392 DE 2021 DE 2020 SENADO, 351 DE 2020 CÁMARA: POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DEL QUINDÍO**"

Cordialmente,

MARIA DEL ROSARIO GUERRA
Senador Ponente

El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la República del día 17 de junio de 2021, de conformidad con el texto propuesto para segundo debate.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 18 DE JUNIO DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 232 DE 2020 SENADO, 347 DE 2020 CÁMARA

por medio de la cual la Nación exalta y rinde homenaje a la memoria del Presidente de la República Marco Fidel Suárez al cumplirse el primer centenario de su gobierno.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 18 DE JUNIO DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NUMERO 232 DE 2020 SENADO, 347 DE 2020 CÁMARA: "POR MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN EXALTA Y RINDE HOMENAJE A LA MEMORIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MARCO FIDEL SUÁREZ AL CUMPLIRSE EL PRIMER CENTENARIO DE SU GOBIERNO".

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

ARTÍCULO 1. La Nación exalta y rinde homenaje a la memoria de Marco Fidel Suárez, presidente de la República de Colombia entre 1918 y 1921, en la celebración de los cien años de su gobierno, por su crucial aporte al conocimiento y al desarrollo del país.

ARTÍCULO 2. Autorícese al Gobierno Nacional para incorporar al Presupuesto General de la Nación, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, las apropiaciones específicas y partidas presupuestales necesarias, para, en acuerdo con la Gobernación del departamento de Antioquia y la Alcaldía del municipio de Bello, impulsar, promover, proteger, conservar, aumentar, restaurar, divulgar, fortalecer y financiar el desarrollo de las siguientes obras materiales y audiovisuales con las que se conmemora el Centenario del gobierno de Marco Fidel Suárez:

1. La dotación de la colección del Monumento Choza-Museo "Marco Fidel Suárez", en el Municipio de Bello, Antioquia.
2. Biblioteca Marco Fidel Suárez de Bello – Antioquia.
3. Institución Educativa "Marco Fidel Suárez" del municipio de Bello.
4. Monumento nacional antiguo templo parroquial de Hatoviejo, situado en la plaza principal de Bello, costado oriental.
5. Restauración y habilitación de la antigua Estación del Ferrocarril de Antioquia en Bello. Esta autorización se entenderá extendida a la celebración de los contratos y convenios interadministrativos requeridos para tales fines.
6. La producción y emisión de programas que trata el artículo 7 de la presente Ley.

ARTÍCULO 3. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, en coordinación con la Alcaldía del municipio de Bello, Antioquia, dará aplicación al procedimiento previsto en el artículo 8º de la Ley 397 de 1997, y demás normas que lo desarrollen, con el fin de identificar y declarar como bien de interés cultural el centro histórico de dicho municipio, y formular el respectivo Plan Especial de Manejo y Protección –PEMP—

El Ministerio de Cultura informará a las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes del Congreso de la República el avance de estas acciones, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley.

ARTÍCULO 4. Autorícese al departamento de Antioquia y al municipio de Bello para impulsar y apoyar ante las entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, el logro de recursos económicos adicionales y complementarios a los que se autorizan apropiar en el Presupuesto General de la Nación de cada vigencia fiscal, destinados al desarrollo del objeto de la presente ley.

ARTÍCULO 5. Autorícese al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a las Fuerzas Militares y de Policía para rendir honores al entonces Presidente de la República Marco Fidel Suárez, en acto especial y protocolario, el 9 de noviembre de cada año en el municipio de Bello, Antioquia. Este evento contará con la presencia de altos funcionarios del Gobierno Nacional, miembros del Congreso de la República y demás autoridades locales y regionales.
El acto conmemorativo tendrá una parada militar de las Fuerzas Militares y de Policía.

ARTÍCULO 6. Encárguese al Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, la apertura de una convocatoria pública con el fin de hacer recopilación, selección y publicación, en medio físico y digital, de investigaciones que estudien la obra, gobierno o contexto del presidente Marco Fidel Suárez.

ARTÍCULO 7. Encárguese a la Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, la producción y emisión de programas que analicen y resalten la importancia de la obra y el gobierno de Marco Fidel Suárez.

ARTÍCULO 8. Autorícese al Museo Nacional de Colombia incorporar dentro de sus planes, una exposición que recopile los sucesos más relevantes de la historia del municipio de Bello, Antioquia y el papel que desempeñó el que fuera Presidente de la República, Marco Fidel Suárez, en la vida del municipio de Bello (Antioquia) y de Colombia.

ARTÍCULO 9. El Gobierno Nacional enviará un informe anual a las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes del Congreso de la República, en el que se detalle el avance en el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, especialmente para la ejecución de las obras mencionadas en el artículo 2º.

ARTÍCULO 10. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la República del día 18 junio de 2021, al **PROYECTO DE LEY NUMERO 232 DE 2020 SENADO, 347 DE 2020 CÁMARA: "POR MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN EXALTA Y RINDE HOMENAJE A LA MEMORIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MARCO FIDEL SUÁREZ AL CUMPLIRSE EL PRIMER CENTENARIO DE SU GOBIERNO"**

Cordialmente,

PAOLA HOLGUIN
Senadora Ponente

El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la República del día 18 de junio de 2021, de conformidad con el texto propuesto para segundo debate.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 401 DE 2021 SENADO Y 560 DE 2021 CÁMARA

por medio de la cual se reglamenta la prisión perpetua revisable y se reforma el Código Penal (Ley 599 de 2000), el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) y se dictan otras disposiciones, Ley Gilma Jiménez.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2021 AL PROYECTO DE LEY No. 401/2021 SENADO Y 560/2021 CÁMARA "POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA LA PRISIÓN PERPETUA REVISABLE Y SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL (LEY 599 DE 2000), EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (LEY 906 DE 2004), EL CÓDIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO (LEY 65 DE 1993) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, LEY GILMA JIMÉNEZ".

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1. Modifíquese el artículo 31° del Código Penal, el cual quedará así:
ARTÍCULO 31. CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES. El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas.
En los eventos de concurso, la pena privativa de la libertad no podrá exceder de sesenta (60) años, salvo cuando al menos una de las disposiciones de la ley penal infringidas contemple como pena hasta la prisión perpetua revisable, caso en el cual, de ser está la condena impuesta, esta última será la única pena de prisión aplicable, sin perjuicio de las otras penas principales o accesorias que apliquen al caso.
Cuando cualquiera de las conductas punibles concurrentes con la que tenga señalada la pena más grave contemplare sanciones distintas a las establecidas en ésta, dichas consecuencias jurídicas se tendrán en cuenta a efectos de hacer la tasación de la pena correspondiente.
PARÁGRAFO. En los eventos de los delitos continuados y masa se impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo aumentada en una tercera parte.

ARTÍCULO 2°. Modifíquese el artículo 35° del Código Penal, el cual quedará así:

ARTÍCULO 35. PENAS PRINCIPALES. Son penas principales la privativa de la libertad de prisión; la prisión perpetua revisable; la pecuniaria de multa y las demás privativas de otros derechos que como tal se consagran en la parte especial.

ARTÍCULO 3°. Modifíquese el numeral 1° del artículo 37° del Código Penal, el cual quedará así:

ARTÍCULO 37. LA PRISIÓN. La pena de prisión se sujetará a las siguientes reglas:

1. La pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de cincuenta (50) años, excepto en los casos de concurso y de prisión perpetua revisable.
2. Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que supongan la reducción de la condena, se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y en el presente código
3. La detención preventiva no se reputa como pena. Sin embargo, en caso de condena, el tiempo cumplido bajo tal circunstancia se computará como parte cumplida de la pena.

ARTÍCULO 4°. Modifíquese el artículo 61° del Código Penal, el cual quedará así:

ARTICULO 61. FUNDAMENTOS PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. Efectuado el procedimiento anterior, el sentenciador dividirá el ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley en cuartos: uno mínimo, dos medios y uno máximo.

El sentenciador solo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva, dentro de los cuartos medios cuando concurran circunstancias de atenuación y de agravación punitiva, y dentro del cuarto máximo cuando únicamente concurran circunstancias de agravación punitiva.

Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse la pena, el sentenciador la impondrá ponderando los siguientes aspectos: la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrente, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto.

Además de los fundamentos señalados en el inciso anterior, para efectos de la determinación de la pena, en la tentativa se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo y en la complicidad el mayor o menor grado de eficacia de la contribución o ayuda.

El sistema de cuartos no se aplicará en aquellos eventos en los cuales se han llevado a cabo preacuerdos o negociaciones entre la Fiscalía y la defensa, o se trate de delitos que impongan como pena la prisión perpetua revisable.

ARTÍCULO 5°. Agréguese un inciso al artículo 64° del Código Penal, el cual quedará así:

ARTÍCULO 64. LIBERTAD CONDICIONAL. El juez, previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos:

1. Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena.
2. Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena.
3. Que demuestre arraigo familiar y social.

Corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional establecer, con todos los elementos de prueba allegados a la actuación, la existencia o inexistencia del arraigo.

En todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia del condenado.

El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario.

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará cuando se haya impuesto la pena de prisión perpetua revisable.

ARTÍCULO 6°. El Código Penal tendrá un nuevo artículo 68B, del siguiente tenor:

ARTÍCULO 68B. REVISIÓN DE LA PENA POR EVALUACIÓN DE RESOCIALIZACIÓN DE LA PRISIÓN PERPETUA. La pena de prisión perpetua será revisada, de oficio o a petición de parte, cuando la persona sentenciada haya cumplido veinticinco (25) años de privación efectiva de la libertad, para evaluar el proceso de resocialización del condenado.

De la evaluación de resocialización del condenado conoce el Juez de Ejecución de Penas y Medias de Seguridad quien al verificar el cumplimiento de veinticinco (25) años de privación efectiva de la libertad del condenado ordenará de oficio o a petición de parte que se allegue:

a) Certificado de los antecedentes disciplinarios del condenado dentro del establecimiento penitenciario y/o carcelario.
b) Certificado del mecanismo de reparación integral de las víctimas.
c) Certificado de trabajo, enseñanza o estudio, según corresponda.
d) Concepto del equipo psicosocial presentado a través de la Dirección General del INPEC, con los contenidos reglamentarios exigidos en el artículo 483C de la Ley 906 de 2004.

Cuando el concepto del INPEC sea positivo sobre los avances de resocialización del condenado, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad remitirá los documentos, junto con la solicitud de revisión de la pena al juez de instancia que haya proferido la sentencia condenatoria para que a través de un incidente de que trata el artículo 483A de la Ley 906 de 2004, determine si hay lugar a la revisión de la pena de prisión perpetua.

Cuando haya lugar a la revisión de la pena de prisión perpetua el juez de instancia competente ordenará su modificación por una pena temporal, que no podrá ser inferior al máximo de prisión establecido para los tipos penales de cincuenta (50) años y en caso de concurso de sesenta (60) años.

Los veinticinco años de privación efectiva de la libertad serán descontados por el juez de instancia competente, al momento de fijar la pena temporal.
Contra el auto que niega o modifica la prisión perpetua procede el control automático en los mismos términos del artículo 199A de la Ley 906 de 2004.

ARTÍCULO 7°. El Código Penal tendrá un nuevo artículo 68C, del siguiente tenor:

ARTÍCULO 68C. PLAN INDIVIDUAL DE RESOCIALIZACIÓN. Con base en la prueba pericial practicada, de que trata el artículo 483A de la Ley 906 de 2004, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad ordenará la continuidad, modificación o adición al Plan individual de resocialización del condenado elaborado por el equipo psicosocial allegado a través de la Dirección General del INPEC, cuyo seguimiento y cumplimiento se verificará mediante evaluaciones periódicas bianuales ante el equipo psicosocial, el cual debe permitir conocer el grado de habilitación social y de convivencia del condenado.

PARÁGRAFO TRANSITORIO: El Ministerio de Justicia y del Derecho, sin que sea requisito para la aplicación de lo reglamentado en la presente ley, en un plazo no mayor a un (1) año expedirán los lineamentos para la formulación del plan de resocialización, el cual deberá, en cualquier caso, acogerse a los principios de la justicia terapéutica y el enfoque de justicia restaurativa.

ARTÍCULO 8°. Modifíquese el artículo 83° de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

ARTICULO 83. TERMINO DE PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL. La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo.

El término de prescripción para las conductas punibles de desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de una organización sindical, homicidio de defensor de Derechos Humanos, homicidio de periodista, desplazamiento forzado será de treinta (30) años. En las conductas punibles de ejecución permanente el término de prescripción comenzará a correr desde la perpetración del último acto. La acción penal para los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra será imprescriptible.

Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, del incesto o del homicidio agravado del artículo 103A del Código Penal, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, la acción penal será imprescriptible.

En las conductas punibles que tengan señalada pena no privativa de la libertad, la acción penal prescribirá en cinco (5) años.

Para este efecto se tendrán en cuenta las causales sustanciales modificadoras de la punibilidad.

Al servidor público que en ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en la mitad. Lo anterior se aplicará también en relación con los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria y de quienes obren como agentes retenedores o recaudadores.

También se aumentará el término de prescripción, en la mitad, cuando la conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior.

En todo caso, cuando se aumente el término de prescripción, no se excederá el límite máximo fijado.

ARTÍCULO 9°. Modifíquese el artículo 89° de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

ARTICULO 89. TERMINO DE PRESCRIPCION DE LA SANCION PENAL. La pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco años contados a partir de la ejecutoria de la correspondiente sentencia.

La pena no privativa de la libertad prescribe en cinco (5) años.

La pena de prisión perpetua revisable prescribirá en 60 años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia que la impone.

ARTÍCULO 10º. El Código Penal tendrá un nuevo artículo 103A, el cual dispondrá lo siguiente:

ARTÍCULO 103A. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA CUANDO EL HOMICIDIO RECAE EN NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. La pena por el delito de homicidio u homicidio agravado será de 480 a 600 meses de prisión o pena de prisión perpetua revisable si la víctima fuere una persona menor de dieciocho (18) años y cuando:

a. Se realizare contra un niño, niña u adolescente menor de catorce (14) años.
b. La víctima se encontrará en especial situación de vulnerabilidad en razón de su corta edad, etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial.
c. La producción del resultado estuviera antecedida de una o varias conductas tipificadas como contrarias a la libertad, integridad y formación sexuales de la víctima.
d. El autor sea padre, madre o quien tenga el deber de custodia de un niño, niña o adolescente.
e. La conducta se cometiere con alevosía o ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor de la víctima.
f. La conducta sea un acto deliberado, con un evidente desprecio por la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes.
g. La acción se realizó de manera premeditada, incluyendo cuando el autor acecho a la víctima.
h. La conducta se consuma en un contexto de violencia de género.
i. Se someta a la víctima tratos crueles, inhumanos o degradantes.
j. El hecho se cometiere con la intención de generar control social, temor u obediencia en la comunidad.
k. El autor ha perpetuado múltiples homicidios contra niños, niñas y adolescentes.

PARÁGRAFO 1º: La prisión perpetua revisable solo procederá frente a quien cometiere la conducta en calidad de autor coautor o determinador, con dolo directo y en los casos de consumación de la conducta.

PARÁGRAFO 2º: En los eventos en los cuales el juez determine que la pena aplicable es menor a la prisión perpetua, deberá atenerse al marco de punibilidad establecido en el artículo 104 del Código Penal.

ARTÍCULO 11°. El Código Penal tendrá un nuevo artículo 211A, el cual dispondrá lo siguiente:

ARTÍCULO 211A. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA CUANDO LA CONDUCTA SE COMETIERE EN CONTRA DE NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. Cuando se cometiere uno de los delitos descritos en los artículos 205, 207 o 210 de este Código, la pena será de 480 a 600 meses de prisión o pena de prisión perpetua revisable, si la víctima fuere un menor de dieciocho (18) años y en los siguientes casos:

a) El autor se haya aprovechado de una relación de superioridad, deber de cuidado o parentesco con la víctima, por ser su pariente hasta el cuarto grado de consanguineidad, segundo de afinidad o primero civil.
b) La conducta se cometiere con sevicia, o mediante actos degradantes o vejatorios.
c) Si el hecho se cometiere con la intención de generar control social, temor u obediencia en la comunidad.
d) La víctima se encontrará en especial situación de vulnerabilidad en razón de su corta edad, etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial.
e) La conducta se cometiere con alevosía o ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor de la víctima.
f) La conducta se consuma en un contexto de violencia de género.
g) Se someta a la víctima tratos crueles, inhumanos o degradantes.
h) El autor ha perpetuado múltiples conductas punibles de las contenidas en los artículos 205, 207 y 211 del Código Penal contra niños, niñas o adolescentes.

PARÁGRAFO: La prisión perpetua revisable solo procederá frente a quien cometiere la conducta en calidad de autor coautor o determinador, con dolo directo y en los casos de consumación de la conducta.

ARTÍCULO 12°. Modifíquese el artículo 32 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

ARTÍCULO 32. DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:

1. De la casación.
2. De la acción de revisión cuando la sentencia o la preclusión ejecutoriadas hayan sido proferidas en única o segunda instancia por esta corporación o por los tribunales.
3. De la definición de competencia cuando se trate de aforados constitucionales y legales, o de tribunales, o de juzgados de diferentes distritos.
4. Del juzgamiento de los funcionarios a que se refieren los artículos 174 y 235 numeral 2 de la Constitución Política.
5. Del juzgamiento de los funcionarios a que se refiere el artículo 235 numeral 4 de la Constitución Política.
6. De la investigación y juzgamiento de los Senadores y Representantes a la Cámara.
7. De las solicitudes de cambio de radicación de procesos penales de un distrito judicial a otro durante el juzgamiento.
8. Del juzgamiento del viceprocurador, vicefiscal, magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior Militar, del Consejo Nacional Electoral, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y Tribunales, Procuradores Delegados, Procuradores Judiciales II, Registrador Nacional del Estado Civil, Director Nacional de Fiscalía y Directores Seccionales de Fiscalía.
9. Del control automático de las providencias proferidas por los Tribunales Superiores del Distrito Judicial que impongan la prisión perpetua revisable.
10. Del incidente de revisión de la pena de prisión perpetua y evaluación de resocialización descrito en el art. 483A.
11. Del control automático del auto que niega la revisión o modifica la prisión perpetua, proferido por los Tribunales Superiores del Distrito Judicial.

PARÁGRAFO. Cuando los funcionarios a los que se refieren los numerales 5, 6 y 8 y 9 anteriores hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos, el fuero solo se mantendrá para los delitos que tengan relación con las funciones desempeñadas.

ARTÍCULO 13°. Modifíquese el artículo 33 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

ARTÍCULO 33. DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO RESPECTO DE LOS JUECES PENALES DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. Los tribunales superiores de distrito respecto de los jueces penales de circuito especializados conocen:

1. Del recurso de apelación de los autos y sentencias que sean proferidas en primera instancia por los jueces penales de circuito especializados.
2. En primera instancia, de los procesos que se sigan a los jueces penales de circuito especializados y fiscales delegados ante los juzgados penales de circuito

especializados por los delitos que cometan en ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.
3. De la acción de revisión contra sentencias proferidas por los jueces penales de circuito especializados, y preclusiones proferidas en investigaciones por delitos de su competencia.
4. De las solicitudes de cambio de radicación dentro del mismo distrito.
5. De la definición de competencia de los jueces del mismo distrito.
6. Del recurso de apelación interpuesto en contra la decisión del juez de ejecución de penas cuando se trate de condenados por delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados.
7. Del control automático de las providencias proferidas en primera instancia por los jueces penales del circuito especializado que impongan la prisión perpetua revisable.
8. Del control automático del auto que niega la revisión o modifica la prisión perpetua, proferido por los jueces penales del circuito especializado.

ARTÍCULO 14°. Modifíquese el artículo 34 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

ARTÍCULO 34. DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO. Las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial conocen:

1. De los recursos de apelación contra los autos y sentencias que en primera instancia profieran los jueces del circuito y de las sentencias proferidas por los municipales del mismo distrito.
2. En primera instancia, de las actuaciones que se sigan a los jueces del circuito, de ejecución de penas y medidas de seguridad, municipales, de menores, de familia, penales militares, procuradores provinciales, procuradores grado I, personeros distritales y municipales cuando actúan como agentes del Ministerio Público en la actuación penal, y a los fiscales delegados ante los jueces penales del circuito, municipales o promiscuos, por los delitos que cometan en ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.
3. De la acción de revisión contra sentencias proferidas por los jueces de circuito o municipales pertenecientes al mismo distrito, y preclusiones proferidas en investigaciones por delitos de su competencia.
4. De las solicitudes de cambio de radicación dentro del mismo distrito.
5. De la definición de competencia de los jueces del circuito del mismo distrito, o municipales de diferentes circuitos.
6. Del recurso de apelación interpuesto contra la decisión del juez de ejecución de penas.
7. Del control automático de las providencias proferidas en primera instancia por los jueces penales del circuito que impongan la prisión perpetua revisable.
8. Del incidente de revisión de la pena de prisión perpetua y evaluación de resocialización descrito en el art. 483A.
9. Del control automático del auto que niega la revisión o modifica la prisión perpetua proferido por los jueces penales de circuito.

PARÁGRAFO: Las sentencias que impongan la pena de prisión perpetua y sean confirmadas por los Tribunales de Distrito Judicial tendrán revisión por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, esta revisión se hará en término máximo de treinta (30) días y en efecto suspensivo.

ARTÍCULO 15°. Modifíquese el artículo 38° del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

ARTÍCULO 38. DE LOS JUECES DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD*:* Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad conocen:

1. De las decisiones necesarias para que las sentencias ejecutoriadas que impongan sanciones penales se cumplan.
2. De la acumulación jurídica de penas en caso de varias sentencias condenatorias proferidas en procesos distintos contra la misma persona.
3. Sobre la libertad condicional y su revocatoria.
4. De lo relacionado con la rebaja de la pena y redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza.
5. De la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias o de las solicitudes de reconocimiento de beneficios administrativos que supongan una modificación en las condiciones de cumplimiento de la condena o una reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.
6. De la verificación del lugar y condiciones en que se deba cumplir la pena o la medida de seguridad. Asimismo, del control para exigir los correctivos o imponerlos si se desatienden, y la forma como se cumplen las medidas de seguridad impuestas a los inimputables.
   En ejercicio de esta función, participarán con los gerentes o directores de los centros de rehabilitación en todo lo concerniente a los condenados inimputables y ordenará la modificación o cesación de las respectivas medidas, de acuerdo con los informes suministrados por los equipos terapéuticos responsables del cuidado, tratamiento y rehabilitación de estas personas. Si lo estima conveniente podrá ordenar las verificaciones de rigor acudiendo a colaboraciones oficiales o privadas.
7. De la aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a reducción, modificación, sustitución, suspensión o extinción de la sanción penal.
8. De la extinción de la sanción penal.
9. Del reconocimiento de la ineficacia de la sentencia condenatoria cuando la norma incriminadora haya sido declarada inexequible o haya perdido su vigencia.
10. De la evaluación de resocialización del condenado a prisión perpetua que haya cumplido 25 años de privación efectiva de la libertad.
11. Del seguimiento al cumplimiento del Plan Individual de resocialización de que trata el artículo 68C, y su continuidad, modificación o adición conforme los avances.

Parágrafo 1º. Cuando se trate de condenados que gocen de fuero constitucional o legal, la competencia para la ejecución de las sanciones penales corresponderá, en primera instancia, a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad del lugar donde se encuentre cumpliendo la pena. La segunda instancia corresponderá al respectivo juez de conocimiento.

Parágrafo 2º. Los jueces penales del circuito y penales municipales conocerán y decretarán la extinción de la sanción penal por prescripción en los procesos de su competencia.

ARTÍCULO 16°. Adiciónese un Capítulo XII del Título VI del Libro I del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, integrado por un artículo nuevo que, quedará así:

CAPÍTULO XII: Control automático de la sentencia que impone la prisión perpetua revisable.

ARTÍCULO 199A. CONTROL AUTOMÁTICO DE LA SENTENCIA QUE IMPONE LA PRISIÓN PERPETUA REVISABLE. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la sentencia condenatoria que imponga la pena prisión perpetua revisable, el expediente será enviado al superior jerárquico para que proceda a realizar su control automático. Si el primer fallo condenatorio fuere dictado por la Corte Suprema de Justicia, se seguirá lo establecido en el numeral 7° del artículo 235 de la Constitución Política, modificado por el acto legislativo 01 de 2018, sobre la doble conformidad. El control automático de la sentencia se concederá en efecto suspensivo.

Dentro del mismo término, las partes e intervinientes podrán presentar alegatos por escrito con los argumentos que sustenten la solicitud de confirmación, revocatoria o modificación de la sentencia condenatoria, a fin de que sean tenidos en cuenta al momento de resolver el control automático.

Contra la sentencia de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial que define el control automático, procede el recurso extraordinario de casación.

PARÁGRAFO. - El incumplimiento de los términos aquí establecidos y/o su demora implica falta disciplinaria de los funcionarios responsables.

ARTÍCULO 17°. Modifíquese el artículo 181 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

ARTÍCULO 181. PROCEDENCIA. El recurso como control constitucional y legal procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales por:

1. Falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso.
2. Desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes.
3. El manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia.
4. Cuando la casación tenga por objeto únicamente lo referente a la reparación integral decretada en la providencia que resuelva el incidente, deberá tener como fundamento las causales y la cuantía establecidas en las normas que regulan la casación civil.

PARÁGRAFO. No procederá la casación cuando el fallo de control automático de la prisión perpetua revisable sea emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

ARTÍCULO 18°. Modifíquese el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

ARTÍCULO 349. IMPROCEDENCIA DE ACUERDOS O NEGOCIACIONES CON EL IMPUTADO O ACUSADO. En los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, no se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre, por lo menos, el cincuenta por ciento del valor equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo del remanente.

En relación con los delitos sancionados con prisión perpetua revisable no proceden acuerdos o negociaciones.

ARTÍCULO 19°. El Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, tendrá un nuevo artículo 483A, que será del siguiente tenor:

ARTÍCULO 483A. PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA PRISIÓN PERPETUA POR EVALUACIÓN DE RESOCIALIZACIÓN. Recibida la solicitud del Juez de ejecución de penas y medida de seguridad, de que trata el artículo 68B de la Ley 599 de 2000, el juez de instancia que haya proferido la sentencia condenatoria convocará a la audiencia pública con la que dará inicio a un incidente mediante el cual se revisará la prisión perpetua y se evaluará el grado de resocialización del condenado.

A esta audiencia el Juez citará a la Fiscalía, al condenado, su defensor, a la víctima y su representante y al Ministerio Público. Para el adelantamiento del incidente será indispensable la presencia del condenado y su defensor, la participación de las demás partes e intervinientes será facultativa.

Iniciada la audiencia el Juez le dará la palabra a las partes e intervinientes para que soliciten las pruebas que consideren necesarias para la evaluación del grado de resocialización del condenado y la revisión de la prisión perpetua, al término de lo cual, mediante auto motivado, decretará las que considere pertinentes, conducentes, legales y útiles. El Juez ordenará la práctica de un dictamen pericial desarrollado por un equipo interdisciplinario acreditado como peritos particulares o del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que participen al menos, un psicólogo, un psiquiatra y un trabajador social con conocimientos y/o experiencia en la evaluación de personas con problemáticas violentas o de agresividad sexual. Su designación y el procedimiento para rendir el informe pericial, se desarrollará con arreglo a lo dispuesto en la presente ley. El informe pericial deberá contener la evaluación de los factores determinados en el artículo 483B de la Ley 906 de 2004, y deberá concluir sobre la viabilidad o inviabilidad de reinserción del condenado.
Una vez el auto de pruebas se encuentre en firme, dentro de los quince (15) días siguientes, el Juez citará a una audiencia en la cual se procederá a la práctica de las pruebas decretadas. Cumplida la etapa de pruebas, el juez, escuchará por una única vez a la Fiscalía General de la Nación, a la representación de las víctimas, al Ministerio Público, al condenado y a su defensa. Todos deberán referirse exclusivamente a los presupuestos para la revisión de la prisión perpetua.

Contra el auto que niega o modifica la prisión perpetua procede el control automático en los mismos términos del artículo 199A de la Ley 906 de 2004.

La carpeta del proceso de revisión y los documentos allegados estarán a su disposición durante de los ocho (8) días anteriores a la audiencia.

En caso de que la decisión de no conceder la modificación de la pena de prisión perpetua quede en firme, transcurridos al menos diez (10) años desde la fecha en que fuere negada, se podrá solicitar de nuevo.

ARTÍCULO 20°. El Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, tendrá un nuevo artículo 483B, el cual será del siguiente tenor:

ARTÍCULO 483B. CONTENIDO DEL DICTAMEN DE PERITOS: El examen pericial de que trata el artículo 483A, practicado al momento de la revisión de la prisión perpetua impuesta como pena, deberá incorporar, al menos, los siguientes factores:

a) Una evaluación de la personalidad del condenado, la capacidad de relacionamiento especialmente con niños, niñas y adolescentes, las tensiones emocionales o inmadurez psicológica o emocional, los componentes agresivos o de respuesta violenta en su comportamiento, el padecimiento de trastornos psiquiátricos o rasgos psicopáticos, comportamientos impulsivos y capacidad de control, la capacidad de arrepentimiento, la capacidad de cumplir labores por trabajo y estudio y de disciplina y adaptación a normas, la valoración del riesgo de violencia y la evaluación frente a la posibilidad de cumplir programas de reinserción social.
b) La evaluación sobre el riesgo de reincidencia, en las conductas por las que le fue impuesta la condena de prisión perpetua.
c) Las recomendaciones sobre el tipo de tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico en los eventos en que se estimen necesarios.
d) El diagnóstico y pronóstico sobre el tipo de patología, si la hay.

ARTÍCULO 21°. El Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, tendrá un nuevo artículo 483C, el cual dispondrá lo siguiente:

ARTÍCULO 483C. CONTENIDO DEL CONCEPTO DEL EQUIPO PSICOSOCIAL DEL INPEC: El informe psicosocial allegado a través de la Dirección General del INPEC de que trata el literal d) del artículo 68B del Código Penal, deberá incorporar, al menos, los siguientes elementos:

1. Evolución y resultados del tratamiento penitenciario.
2. La descripción de la participación voluntaria en alguna práctica de justicia restaurativa o terapéutica, si las hubo.
3. Las horas de trabajo, estudio o enseñanza acreditadas por el condenado.
4. Factores de riesgo de reincidencia, con el fin de conocer sus posibilidades para reinsertarse adecuadamente en la sociedad como resultado del programa de resocialización.

PARÁGRAFO: Las horas de trabajo, estudio o enseñanza se tendrán en cuenta para efectos del análisis de la revisión de la pena, como evidencia de la resocialización, pero no aplican como actividades para redención de la pena de que trata la Ley 65 de 1993, por cuanto la revisión solo procede tras veinticinco (25) años de prisión intramural efectiva.

ARTÍCULO 22°. Modifíquese el artículo 459 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

ARTÍCULO 459. EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. La ejecución de la sanción penal impuesta mediante sentencia ejecutoriada, corresponde a las autoridades penitenciarias bajo la supervisión y control del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en coordinación con el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.

En todo lo relacionado con la ejecución de la pena, el Ministerio Público podrá intervenir e interponer los recursos que sean necesarios.

En el tratamiento penitenciario será prioritaria la intervención de los equipos psicosociales y de las entidades públicas y privadas que de mejor manera permitan alcanzar los fines de la resocialización y la protección a la persona condenada, mediante programas, prácticas y acciones dirigidas a facilitar la justicia terapéutica y la justicia restaurativa.

En lo relacionado con la ejecución de la pena de prisión perpetua, los equipos psicosociales de los establecimientos de reclusión implementarán programas de tratamiento diferenciado para esta población, de acuerdo con el Manual que para tal fin, y en un plazo no mayor a un (1) año, defina el INPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho, de modo que permita a las personas condenadas con prisión perpetua progresar hacia la rehabilitación, sin que su expedición sea requisito para la aplicación de lo reglamentado en la presente ley.

ARTÍCULO 23°. Modifíquese el artículo 6° del Código Penitenciario y Carcelario, Ley 65 de 1993, el cual fue reformado por la ley quedará así:

ARTÍCULO 6. PENAS PROSCRITAS. PROHIBICIONES. No habrá pena de muerte. Se prohíben las penas de destierro y confiscación. La pena de prisión perpetua será aplicada de manera excepcional. Nadie será sometido a desaparición forzada, torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

ARTÍCULO 24°. Modifíquese el artículo 146 del Código Penitenciario y Carcelario, Ley 65 de 1993, el cual fue reformado por la ley quedará así:

ARTÍCULO 146. BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS. Los permisos hasta de setenta y dos horas, la libertad y franquicia preparatorias, el trabajo extramuros y penitenciaria abierta harán parte del tratamiento penitenciario en sus distintas fases, de acuerdo con la reglamentación respectiva.

Los beneficios que impliquen permanencia fuera del establecimiento de reclusión no serán aplicables en casos de personas condenadas a prisión perpetua.

ARTÍCULO 25°. En cumplimiento del parágrafo transitorio del artículo 1 del acto legislativo 01 de 2020, en sus incisos 2 y 3, el gobierno nacional, en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar , deberá formular, socializar e implementar la política pública de protección a la integridad, vida y salud de los niños, niñas y adolescentes y las estrategias de mitigación, disminución, sanción de los delitos contra la integridad, formación y libertad sexual cuyas víctimas son menores, así como aquellos que atenten contra la vida, integridad física y libertad.

El gobierno nacional tendrá un plazo perentorio de un (1) año a partir de la sanción de la presente ley para formular la política pública integral y para tomar las medidas públicas, presupuestales, judiciales y de atención para atender las alertas tempranas y la prevención de este tipo de actos punibles.

ARTÍCULO 26º (Nuevo): Modifíquese el artículo 33º del Código Penal, el cual quedará así:

ARTÍCULO 33. INIMPUTABILIDAD. Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviera la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez sicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares.

No será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno mental.

Los menores de dieciocho (18) años estarán sometidos al Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes y en ningún caso se les impondrá la prisión perpetua revisable.

ARTÍCULO 27º (Nuevo): Modifíquese el inciso primero del artículo 104 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

ARTÍCULO 104: CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN. La pena será de cuatrocientos ochenta (480) a seiscientos (600) meses de prisión, si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere.

ARTÍCULO 28°. VIGENCIA. La presente Ley rige desde su promulgación y deroga todas las disposiciones que le resulten contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la República del día 15 de junio de 2021, al Proyecto de Ley No. **401/2021 SENADO Y 560/2021 CÁMARA "POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA LA PRISIÓN PERPETUA REVISABLE Y SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL (LEY 599 DE 2000), EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (LEY 906 DE 2004), EL CÓDIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO (LEY 65 DE 1993) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, LEY GILMA JIMÉNEZ".**

Cordialmente,

MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ
Senador Ponente

El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la República del día 15 de junio de 2021, de conformidad con el texto propuesto para segundo debate.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

CONTENIDO

Gaceta número 755 - Jueves, 8 de julio de 2021

SENADO DE LA REPÚBLICA

TEXTOS DE PLENARIA

Págs.

Texto definitivo aprobado en sesión plenaria mixta del Senado de la República del día 17 de junio de 2021 al Proyecto de ley número 446 de 2021 Senado y 283 de 2019 Cámara, por medio del cual se sustituye el Título XI "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones... 1

Texto definitivo aprobado en sesión plenaria mixta del Senado de la República del día 17 de junio de 2021 al Proyecto de ley número 316 de 2020 Senado - 089 de 2019 Cámara, por medio de la cual se establecen medidas para fortalecer la conciencia educativa para el trabajo en la educación básica secundaria, educación media y educación superior y se dictan otras disposiciones en materia de inserción laboral para jóvenes..... 5

Texto definitivo aprobado en sesión plenaria mixta del Senado de la República del día 20 de junio de 2021 al Proyecto de ley número 286 de 2020 Senado, 120 de 2019 Cámara, por la cual se dota a las asociaciones mutualistas de identidad, autonomía y vinculación a la economía del país como empresas solidarias y se establecen otras disposiciones. 7

Texto definitivo aprobado en sesión plenaria mixta del Senado de la República del día 18 de junio de 2021 al Proyecto de ley número 314 de 2020 Senado, 220 de 2019 Cámara, por la cual se crea el Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres, se modifica la Ley 1146 de 2007 y se dictan otras disposiciones..... 13

Texto definitivo aprobado en sesión plenaria mixta del Senado de la República del día 17 de junio de 2021 al Proyecto de ley número 252 de 2020 Senado, 256 de 2019 Cámara, por la cual se reconoce el patrimonio cultural material e inmaterial de la Nación del pueblo raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se propone la elaboración de los estudios correspondientes para realizar las declaratorias que correspondan, acorde a los procedimientos vigentes y se dictan otras disposiciones. 15

Texto definitivo aprobado en sesión plenaria mixta del Senado de la República del día 17 de junio de 2021 al Proyecto de ley número 392 de 2021 Senado, 351 de 2020 Cámara, por medio de la cual se autoriza la emisión de la Estampilla Pro Universidad del Quindío..... 17

Texto definitivo aprobado en sesión plenaria mixta del Senado de la República del día 18 de junio de 2021 al Proyecto de ley número 232 de 2020 Senado, 347 de 2020 Cámara, por medio de la cual la Nación exalta y rinde homenaje a la memoria del Presidente de la República Marco Fidel Suárez al cumplirse el primer centenario de su gobierno. 18

Texto definitivo aprobado en sesión plenaria mixta del Senado de la República del día 15 de junio de 2021 al Proyecto de ley número 401 de 2021 Senado y 560 de 2021 Cámara, por medio de la cual se reglamenta la prisión perpetua revisable y se reforma el Código Penal (Ley 599 de 2000), el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) y se dictan otras disposiciones, Ley Gilma Jiménez. 19

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2021

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

I S S N 0 1 2 3 - 9 0 6 6

AÑO XXX - Nº 820 | Bogotá, D. C., viernes, 23 de julio de 2021 | EDICIÓN DE 12 PÁGINAS

DIRECTORES: GREGORIO ELJACH PACHECO, SECRETARIO GENERAL DEL SENADO, www.secretariasenado.gov.co; JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO, SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA, www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

SENADO DE LA REPÚBLICA

TEXTOS DE PLENARIA

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2021 AL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA NÚMERO 251 DE 2019 SENADO - 011 DE 2019 CÁMARA

por medio de la cual se modifica el Decreto Ley 1421 de 1993, referente al Estatuto Orgánico de Bogotá.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2021 AL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA No. 251 DE 2019 SENADO - 011 DE 2019 CÁMARA "POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL DECRETO LEY 1421 DE 1993, REFERENTE AL ESTATUTO ORGÁNICO DE BOGOTÁ"

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA

Artículo 1°. Objeto. La presente Ley tiene por objeto modificar algunos artículos del Decreto Ley 1421 de 1993, en aplicación de los principios de descentralización, desconcentración, delegación, pluralismo, transparencia y eficiencia.

Artículo 2°. La atribución 8 del Artículo 38 del Decreto Ley 1421, quedara así:

8. Nombrar y remover libremente los secretarios del despacho, los jefes de departamento administrativo, los gerentes de entidades descentralizadas, el Tesorero Distrital, los alcaldes locales y otros agentes suyos. Conforme a las disposiciones pertinentes, nombrar y remover a los demás funcionarios de la administración central. Igualmente, velar por el cumplimiento de las funciones de los servidores distritales y ejercer la potestad disciplinaria frente a los mismos.

Artículo 3°. Adiciónese el artículo 53A al Decreto Ley 1421 de 1993, el cual quedará de la siguiente manera:

Artículo 53A. Consejo Distrital de Gobierno Para Asuntos Locales. Créese el Consejo Distrital de Gobierno para Asuntos Locales como una instancia de atención de asuntos concernientes únicamente a las localidades. El Consejo se reunirá por lo menos dos veces al año y, en él tendrán asiento el Alcalde Mayor de Bogotá, los secretarios de despacho y los alcaldes locales, más los demás funcionarios que el Alcalde Mayor de Bogotá invite.

Sus reglas de funcionamiento serán determinadas mediante Decreto Distrital.

Artículo 4. Adicionar un nuevo artículo al Decreto Ley 1421 de 1993, así:

Artículo 53B. Gabinete Local. Serán parte del gabinete local los alcaldes locales y los delegados de cada sector administrativo.

Los sectores administrativos que componen la administración distrital deberán tener al menos un delegado con capacidad de decisión para cada localidad como un enlace directo de los asuntos de su competencia en las alcaldías locales. Sus reglas de funcionamiento serán determinadas mediante Decreto Distrital.

Parágrafo. Las cabezas de cada sector del gobierno distrital deberán reunirse, en coordinación con la Secretaría Distrital de Gobierno, con cada alcalde local y el enlace local de la respectiva localidad, semestralmente con el propósito de articular la acción distrital y local en torno a la adopción e implementación de un plan interinstitucional del sector, de conformidad con la reglamentación que expida la Administración Distrital para tal fin.

Artículo 5°. Adicionar un nuevo numeral al artículo 60 del Decreto Ley 1421, así:

Artículo 60. Objetivos y propósitos. La división territorial del Distrito Capital en localidades deberá garantizar:

(...)

6. Que corresponda y coincida con el plan de ordenamiento territorial.

Artículo 6°. El artículo 62 del Decreto Ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:

Artículo 62. Creación de localidades. El Concejo Distrital, a iniciativa del Alcalde Mayor, señalará a las localidades su denominación, límites y atribuciones administrativas, y dictará las demás disposiciones que fueren necesarias para su organización y funcionamiento.

Además, se podrán crear zonas rurales para la administración de localidades con características distintas a las de las zonas urbanas. Para estos fines se deberá tener en cuenta:

1. La cobertura y calidad en la prestación de los servicios básicos, comunitarios e institucionales.

2. Las características sociales de sus habitantes y demás aspectos que identifiquen las localidades con el objeto de disponer de los recursos financieros, administrativos, logísticos y humanos que garanticen su adecuado funcionamiento.

3. La existencia de ecosistemas estratégicos para la conservación del medio ambiente.

4. La configuración del territorio que defina cada ejercicio de formulación y adopción del Plan de Ordenamiento Territorial.

5. Análisis de la actividad económica, industrial y comercial, además de las características de los municipios circunvecinos, cuando sea procedente.

Parágrafo. En todo caso, el tamaño de las localidades deberá ser distribuido de manera similar y proporcional en cuanto a número de habitantes en cada una de ellas teniendo en cuenta criterios demográficos.

Parágrafo Transitorio: La delimitación de las localidades será la que se definida mediante el acto administrativo que adopte el Plan de Ordenamiento Territorial.

Los efectos de esta nueva delimitación entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2028.

Artículo 7°. El artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:

Artículo 65. Requisitos para los cargos de edil y alcalde local. Para ser elegido edil o nombrado alcalde local se requiere ser ciudadano en ejercicio y haber residido o desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la respectiva localidad por lo menos durante los dos años anteriores a la fecha de la elección o del nombramiento.

Para ocupar el cargo de alcalde local, se deberá contar con los requisitos máximos descritos en el numeral 13.2.1.1 del artículo 13 del Decreto Ley 785 de 2005.

Artículo 8°. El artículo 69 del Decreto Ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:

Artículo 69. Atribuciones de las juntas. De conformidad con la Constitución, la ley, los acuerdos del Concejo y los decretos del Alcalde Mayor, corresponde a las Juntas Administradoras:

1. Adoptar el Plan de Desarrollo Local en concordancia con el plan general de desarrollo económico y social de obras públicas y el plan general de ordenamiento físico del distrito, previa audiencia de las organizaciones sociales, cívicas y populares de la localidad.

2. Vigilar y controlar la prestación de los servicios distritales en su localidad y las inversiones que en ella se realicen con recursos públicos.

3. Presentar proyectos de inversión ante las autoridades Nacionales y Distritales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión.

4. Aprobar el presupuesto anual del respectivo fondo de desarrollo, previo concepto favorable del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal y de conformidad con los programas y proyectos del plan de desarrollo local.

El ochenta por ciento (80%) de las apropiaciones no podrá́ ser inferior al monto de dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales y el veinte por ciento (20%) restante de las apropiaciones no podrá́ ser inferior al monto de doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales. No podrán hacer apropiaciones para la iniciación de nuevas obras mientras no estén terminadas las que se hubieren iniciado en la respectiva localidad para el mismo servicio.

5. Cumplir las funciones que, en materia de servicios públicos, construcción de obras y ejercicio de atribuciones administrativas les asigne la ley y les deleguen las autoridades nacionales y distritales.

6. Preservar y hacer respetar el espacio público. En virtud de esta atribución podrán reglamentar su uso para la realización de actos culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales y ordenar el cobro de derechos por tal concepto, que el respectivo Fondo de Desarrollo destinará al mejoramiento del espacio público de la localidad, de acuerdo con los parámetros que fije el Concejo Distrital.

7. Promover la participación y veeduría ciudadana y comunitaria en el manejo y control de los asuntos públicos.

8. Presentar al Concejo Distrital proyectos de acuerdo relacionados con la localidad que no sean de la iniciativa privativa del Alcalde Mayor.

9. Vigilar la ejecución de los contratos en la localidad y formular ante las autoridades competentes las recomendaciones que estimen convenientes para el mejor desarrollo de esos contratos. En ejercicio de esta función los ediles podrán solicitar y obtener los informes y demás documentos que requieran.

10. Promover las campañas necesarias para la protección y recuperación de los recursos y del medio ambiente en la localidad.

11.Solicitar informes a las autoridades locales, quienes deben expedirlos dentro de los diez (10) días siguientes. Su omisión injustificada constituye causal de mala conducta.

12. Participar en la elaboración del plan general de desarrollo económico, social y de obras públicas.

13. Ejercer la veeduría que proceda sobre los elementos, maquinaria y demás bienes que la administración distrital destine a la localidad.

14. Las Juntas Administradoras Locales podrán citar, una vez cada seis (6) meses al Alcalde Local correspondiente.

Los cuestionarios para las sesiones de seguimiento a la gestión e inversión local deberán hacerse con anticipación no menor de cinco (5) días hábiles y formularse en cuestionario escrito. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario, el cual deberá estar precedido de la motivación de la citación y encabezar el orden del día de la sesión. El funcionario citado deberá radicar en la secretaria de la JAL la respuesta al cuestionario, dentro del tercer día hábil siguiente al recibo de la citación.

15. Gestionar ante la Alcaldía Local correspondiente las iniciativas de la comunidad con respecto a asuntos de gestión pública y desarrollo local. A su vez, coordinarán con las instancias de participación local para contribuir al fortalecimiento de la gestión local que permita identificar la solución de problemas.

16. Coordinar con las instancias de participación local para contribuir al fortalecimiento de la gestión local mediante la disposición de información pertinente que permita identificar soluciones a problemas relacionados con la gestión local del desarrollo;

17. Ejercer las demás funciones que les asignen la Constitución, la ley y los decretos del alcalde mayor.

18. Presentar anualmente una rendición de cuentas sobre la asistencia de sus corporados, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares, proyectos, partidas e inversiones públicas que hayan gestionado, así como cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos.

Artículo 9°. El Decreto Ley 1421 de 1993 tendrá un artículo nuevo, el cual quedará de la siguiente manera:

Artículo 69A. Apoyo técnico y administrativo a las Juntas Administradoras Locales. Con el fin de promover la gestión de las Juntas Administradoras Locales, la Alcaldía Mayor de Bogotá, reglamentará las condiciones en las que las JAL podrán acceder a mesas de apoyo técnico por localidad, para ejecutar labores jurídicas, administrativas y de secretaria, con cargo al Fondo de Desarrollo Local correspondiente.

Artículo 10. El artículo 85 del Decreto Ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:

Artículo 85. Reemplazos. Las faltas absolutas y temporales de los alcaldes locales serán provistas por las personas que designe el alcalde mayor.

En el primer caso, solicitará de la junta respectiva la elaboración de una terna, salvo cuando falten 18 meses para la terminación del periodo.

Esta terna se conformará por aquellas personas que hubiesen pasado el proceso meritocrático para el respectivo periodo gubernamental, en caso en que dicho listado no cuente con 3 o más personas se deberá cumplir con un nuevo proceso meritocrático.

Artículo 11. El artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:

Artículo 86. Atribuciones. Corresponde a los alcaldes locales:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, las demás normas nacionales aplicables, los acuerdos distritales y locales y las decisiones de las autoridades distritales.

2. Administrar las Alcaldías Locales y los Fondos de Desarrollo Local.

3. Articular y coordinar en sus respectivas localidades las políticas distritales de cada sector a través del trabajo conjunto con su gabinete local.

4. Reglamentar los respectivos acuerdos locales.

5. Cumplir las funciones que les fijen y deleguen el Concejo de Bogotá, el Alcalde Mayor, las Juntas Administradoras y otras autoridades distritales.

6.Coordinar la acción administrativa del Distrito en la localidad.

7.Velar por la tranquilidad y seguridad ciudadanas. Conforme a las disposiciones vigentes, contribuir a la conservación del orden público en su localidad y con la ayuda de las autoridades nacionales y distritales, restablecerlo cuando fuere turbado.

8. Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo urbano, uso del suelo y reforma urbana. De acuerdo con esas mismas normas expedir o negar los permisos de funcionamiento que soliciten los particulares. Sus decisiones en esta materia serán apelables ante el jefe del departamento distrital de planeación, o quien haga sus veces.

9. Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público, el patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y el ambiente, con sujeción a la ley, a las normas nacionales aplicables, y a los acuerdos distritales y locales.

10. Conocer de los procesos relacionados con violación de las normas sobre construcción de obras y urbanismo e imponer las sanciones correspondientes. El Concejo Distrital podrá señalar de manera general los casos en que son apelables las decisiones que se dicten con base en esta atribución y, ante quién.

11. Expedir los permisos de demolición en los casos de inmuebles que amenazan ruina, previo concepto favorable de la entidad distrital de planeación.

12. Vigilar y controlar la prestación de servicios, la construcción de obras y el ejercicio de funciones públicas por parte de las autoridades distritales o de personas particulares.

13. Coordinar la participación ciudadana en la localidad y ~~de~~ la articulación entre los procesos de participación ciudadana y la toma de decisiones del gobierno distrital.

14. Ejecutar las políticas de presupuestos participativos dictadas por la Secretaría Distrital de Gobierno y establecer las disposiciones que aseguren la realización de las actividades necesarias para la efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de programación del presupuesto local, el cual se deberá desarrollar en armonía con el plan de desarrollo distrital y el de las localidades, en plena concordancia con la Ley 1757 de 2015 y las demás disposiciones legales aplicables.

15. Planificar, contratar y ordenar los gastos e inversiones públicas relacionadas con el desarrollo de procesos de participación ciudadana en la localidad en el marco de la normatividad vigente aplicable, guardando concordancia con los criterios de: i) representatividad poblacional; ii) diversidad y tolerancia; iii) transparencia; iv) sostenibilidad en el tiempo, v) eficiencia y eficacia; entendida como la posibilidad de que las decisiones que se tomen en función de los espacios de participación ciudadana se conviertan en decisiones del gobierno distrital);

17. Hacer seguimiento, junto a las demás autoridades competentes, a la prestación de servicios, la construcción de obras y el ejercicio de funciones públicas por parte de las autoridades distritales o de personas particulares.

18. Desarrollar acciones que promuevan los derechos de las mujeres, desde los enfoques de género, de derechos, diferencial y territorial.

19. Implementar modelos de gestión que permitan atender de manera oportuna la justicia policiva en su territorio. Así mismo, desarrollar las distintas acciones tendientes a implementar en su localidad las políticas públicas en materia de protección, restauración, educación y prevención de que habla el artículo 8 de la Ley 1801 de 2016 o la norma que la sustituya.

20. El alcalde Local, podrá crear un equipo de trabajo, con el fin de que en los eventos en que sea comisionado para la práctica de despachos comisorios, pueda a su vez delegarlo en este equipo.

21. Ejercer las demás funciones que les asignen la Constitución y la ley, los acuerdos distritales y los decretos del alcalde mayor.

Parágrafo. Toda reasignación de funciones o nueva atribución o delegación de competencias a las alcaldías locales deberá garantizar la disponibilidad efectiva de

recursos administrativos, logísticos y humanos que garanticen el cumplimiento eficiente de las mismas.

Artículo 12°. El artículo 89 del Decreto Ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:

Artículo 89. Participación en el presupuesto distrital. A partir de la vigencia fiscal de mil novecientos noventa y cuatro (1994), no menos del doce por ciento (12%) de los ingresos corrientes del presupuesto de la administración central del Distrito, se asignará a las localidades teniendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de la población de cada una de ellas y según los índices que para el efecto establezca la entidad distrital de Planeación. Para los efectos aquí previstos no se tendrán en cuenta los ingresos corrientes de los establecimientos públicos ni las utilidades de las empresas industriales y comerciales que se apropien en el presupuesto distrital.

El Concejo Distrital, a iniciativa del alcalde mayor podrá incrementar dicha participación anual y acumulativamente en un dos por ciento (2%), sin que la misma supere en total el veinte por ciento (20%) de los ingresos a que se refiere este artículo. Igualmente el concejo a iniciativa del alcalde podrá reducir en cualquier tiempo esta participación, respetando en todo caso el porcentaje mínimo previsto en el inciso anterior.

La asignación global que conforme a este artículo se haga en el presupuesto distrital para cada localidad, será distribuida y apropiada por la correspondiente junta administradora previo el cumplimiento de los requisitos presupuestales previstos en este estatuto, de acuerdo con el respectivo plan de desarrollo y consultando las necesidades básicas insatisfechas y los criterios de la planeación participativa. Para tal efecto deberá oír a las comunidades organizadas.

Artículo 13º. El artículo 129 del Decreto Ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:

Artículo 129. Salarios y prestaciones. Los empleados públicos de Bogotá Distrito Capital tendrán un régimen salarial especial que determinará el Gobierno Nacional dentro de los límites establecidos por la Ley 617 de 2000 y el Marco Fiscal de Mediano Plazo; en todo caso, en virtud del principio de progresividad laboral este régimen no podrá ser inferior al actualmente vigente.

El régimen salarial de los empleados y trabajadores del Distrito estará sujeto a la disponibilidad presupuestal y al Marco Fiscal de Mediano Plazo del Distrito Capital y deberá contar con previo concepto expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda.

El Gobierno Nacional reglamentará dentro los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente ley, el régimen salarial especial para los empleados y trabajadores del Distrito Capital.

Artículo 14°. Adicionar un artículo nuevo al Decreto Ley 1421 de 1993, así:

Artículo 143A. Vigencias futuras ordinarias. El Confis Distrital podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras de funcionamiento o inversión cuando su ejecución se inicie con el presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que:

a. El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata esta ley;

b. Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas;

c. Se disponga del concepto favorable de la Secretaría Distrital de Hacienda y de la Secretaría Distrital de Planeación, cuando se trate de proyectos de inversión.

d. Cuando se trate de proyectos de inversión con cofinanciación de la nación, deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.

La autorización por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica. El Gobierno Distrital reglamentará la materia.

La Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto incluirá en los proyectos de presupuesto, las asignaciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.

Artículo 15°. Adicionar un artículo nuevo al Decreto Ley 1421 de 1993, así:

Artículo 143C. Recursos adicionales de la nación, financiación del régimen subsidiado. Los recursos adicionales a los previstos en el presupuesto aprobado de cada vigencia por concepto de Transferencias, Cofinanciación y demás aportes de la Nación y Rentas de destinación específica que financian el Régimen Subsidiado se incorporarán al Presupuesto Distrital mediante decreto distrital. La Secretaría Distrital de Hacienda, informará de estas operaciones a la Comisión de Presupuesto del Concejo Distrital, dentro de los treinta (30) días siguientes a la incorporación de dichos recursos.

Artículo 16°. Adicionar un artículo nuevo al Decreto Ley 1421 de 1993, así:

Artículo 179A. En el marco de un programa especial de descongestión, el Distrito dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley establecerá mecanismos de terminación anticipada de las actuaciones administrativa por contravenciones ocurridas con anterioridad a la vigencia de la Ley 1801 de 2016, atendiendo situaciones de caducidad, tiempo de iniciación de la actuación, principio de lesividad, carencia actual de objeto.

Se dispondrán alternativas, para terminación de procesos abiertos sin trámite procesal en tiempo determinados de acuerdo a temáticas específicas, mecanismos de amnistías, condonaciones y/o subrogaciones para sanciones.

Así mismo, se podrá establecer mecanismos de acuerdos con los presuntos infractores que permita declarar la terminación de la actuación. Se podrá ordenar el reemplazo de multa general señalada (de cualquier tipo) por jornada pedagógica o trabajo comunitario. Podrá adelantar campañas para reemplazar multas señaladas por ocupación del espacio público a vendedores informales por jornadas pedagógicas.

La Alcaldía Mayor podrá, en este marco, extender los mismos mecanismos para actuaciones o conductas en el marco de la Ley 1801 de 2016.

Artículo 17º. Adicionar un artículo nuevo al Decreto Ley 1421 de 1993, así:

Artículo nuevo: Los alcaldes locales serán designados bajo criterios de meritocracia y paridad de género. En todo caso el 50% de quienes resulten designados deberán ser mujeres. Sus reglas de funcionamiento serán establecidas mediante Decreto Distrital.

Artículo 18. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las demás normas que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la República del día 16 junio de 2021, al **PROYECTO DE LEY ORGÁNICA No. 251 DE 2019 SENADO - 011 DE 2019 CÁMARA "POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL DECRETO LEY 1421 DE 1993, REFERENTE AL ESTATUTO ORGÁNICO DE BOGOTÁ"**

Cordialmente,

GERMÁN VARÓN COTRINO
Senador de la República
Ponente

El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la República del día 16 de junio de 2021, de conformidad con el texto propuesto para segundo debate.

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

I S S N 0 1 2 3 - 9 0 6 6

AÑO XXX - Nº 683 | Bogotá, D. C., jueves, 17 de junio de 2021 | EDICIÓN DE 29 PÁGINAS

DIRECTORES: GREGORIO ELJACH PACHECO, SECRETARIO GENERAL DEL SENADO, www.secretariasenado.gov.co; JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO, SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA, www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

SENADO DE LA REPÚBLICA

INFORMES DE CONCILIACIÓN

INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 38 DE 2021 SENADO, 521 DE 2021 CÁMARA

por el cual se modifican los artículos 328 y 356 de la Constitución Política otorgándole la categoría de distrito turístico, cultural e histórico al municipio de Puerto Colombia en el departamento del Atlántico.

Bogotá DC., 17 de junio de 2021

INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 038 DE 2021 SENADO, 521 DE 2021 CÁMARA
"por el cual se modifican los artículos 328 y 356 de la constitución política otorgándole la categoría de distrito turístico, cultural e histórico al municipio de Puerto Colombia en el departamento del Atlántico".

Señores
ARTURO CHAR CHALJUB
Presidente
Senado de la República

GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ
Presidente
Cámara de Representantes

REF: INFORME DE CONCILIACIÓN DEL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 038 DE 2021 SENADO, 521 DE 2021 CÁMARA, "POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 328 Y 356 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA OTORGÁNDOLE LA CATEGORÍA DE DISTRÍTO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO AL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

Honorables presidentes,

De acuerdo con las designaciones efectuadas por las Presidencias del Honorables Senado de la República y de la Honorable Cámara de Representantes, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 161 de la Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, los suscritos integrantes de la Comisión Accidental de Conciliación, nos permitimos someter, por su conducto, a consideración de las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes para continuar su trámite correspondiente, el texto conciliado del Proyecto de Acto Legislativo de la referencia, dirimiendo de esta manera las discrepancias existentes entre los textos aprobados por las respectivas sesiones plenarias del 23 de abril y del 17 de junio de 2021.

En el siguiente cuadro se relacionan los textos aprobados por las plenarias de ambas Cámaras:

TEXTO APROBADO PLENARIA DE CÁMARA	TEXTO APROBADO PLENARIA DE SENADO	CONSIDERACIONES
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 038 DE 2021 SENADO, 521 DE 2021 CÁMARA, "POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 328 Y 356 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA OTORGÁNDOLE LA CATEGORÍA DE DISTRÍTO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO AL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" Por el cual se modifican los artículos 328 y 356 de la constitución política otorgándole la categoría de Distrito Turístico, Cultural e Histórico al municipio de Puerto Colombia en el Departamento del Atlántico.	**PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 038 DE 2021 SENADO, 521 DE 2021 CÁMARA, "POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 328 Y 356 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA OTORGÁNDOLE LA CATEGORÍA DE DISTRÍTO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO AL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"** Por el cual se modifican los artículos 328 y 356 de la constitución política otorgándole la categoría de Distrito Turístico, Cultural e Histórico al municipio de Puerto Colombia en el Departamento del Atlántico.	**NO EXISTEN DISCREPANCIAS**
Artículo 1. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 356 de la Constitución Política, el cual quedará de la siguiente manera: El municipio de Puerto Colombia se organiza como Distrito Turístico, Cultural e Histórico. Su régimen político, fiscal y administrativo serán los	**Artículo 1.** Adiciónese el siguiente inciso y parágrafo al artículo 356 de la Constitución Política, el cual quedará de la siguiente manera: La ciudad de Puerto Colombia se organiza como Distrito Turístico, Cultural e Histórico. Su régimen político, fiscal y administrativo serán los	**SE ACOGE TEXTO DE SENADO**

que determinen la Constitución y las leyes especiales que se dicten sobre la materia, y en lo no dispuesto en ellas, serán las normas vigentes para los municipios.	que determinen la Constitución y las leyes especiales que se dicten sobre la materia, y en lo no dispuesto en ellas, serán las normas vigentes para los municipios. **Parágrafo:** La ciudad de Puerto Colombia como Distrito de Turístico, Cultural e Histórico y las demás ciudades que se organicen como distritos especiales no estarán obligados a efectuar ajustes administrativos que aumenten sus costos. La ley podrá crear mecanismos adicionales a los existentes que fomenten y promocionen desarrollos en turismo, cultura e historia.	
Artículo 2. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 328 de la Constitución Política, el cual quedará de la siguiente manera: (...) El municipio de Puerto Colombia se organiza como Distrito Turístico, Cultural e Histórico. Sus autoridades junto con las autoridades nacionales podrán establecer estrategias de articulación para el aprovechamiento del desarrollo.	**Artículo 2.** Adiciónese el siguiente inciso al artículo 328 de la Constitución Política, el cual quedará de la siguiente manera: (...) La ciudad de Puerto Colombia se organiza como Distrito Turístico, Cultural e Histórico. Sus autoridades junto con las autoridades nacionales podrán establecer estrategias de articulación para el aprovechamiento del desarrollo.	**SE ACOGE TEXTO DE SENADO**
Artículo 3. El presente Acto Legislativo rige a partir de su promulgación.	**Artículo 3.** El presente Acto Legislativo rige a partir de su promulgación.	**NO EXISTEN DISCREPANCIAS**

PROPOSICIÓN

Así las cosas, luego de un análisis detallado de los textos, solicitamos a los miembros de las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, acoger el texto aprobado por la plenaria del Senado de la República el 17 de junio del 2021.

Cordialmente,

ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA
Senador de la República

MARTHA VILLALBA HODWALKER
Representante a la Cámara

En virtud de lo anterior, y para los efectos pertinentes, el citado texto conciliado es el siguiente:

TEXTO CONCILIADO
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 38 DE 2021 SENADO - 521 DE 2021 CÁMARA

Por el cual se modifican los artículos 328 y 356 de la Constitución Política otorgándole la categoría de Distrito Turístico, Cultural e Histórico al municipio de Puerto Colombia en el departamento del Atlántico.

Artículo 1. Adiciónese el siguiente inciso y parágrafo al artículo 356 de la Constitución Política, el cual quedará de la siguiente manera:

La ciudad de Puerto Colombia se organiza como Distrito Turístico, Cultural e Histórico. Su régimen político, fiscal y administrativo serán los que determinen la Constitución y las leyes especiales que se dicten sobre la materia, y en lo no dispuesto en ellas, serán las normas vigentes para los municipios.

Parágrafo: La ciudad de Puerto Colombia como Distrito de Turístico, Cultural e Histórico y las demás ciudades que se organicen como distritos especiales no estarán obligados a efectuar ajustes administrativos que aumenten sus costos. La ley podrá crear mecanismos adicionales a los existentes que fomenten y promocionen desarrollos en turismo, cultura e historia.

Artículo 2. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 328 de la Constitución Política, el cual quedará de la siguiente manera:

(...) La ciudad de Puerto Colombia se organiza como Distrito Turístico, Cultural e Histórico. Sus autoridades junto con las autoridades nacionales podrán establecer estrategias de articulación para el aprovechamiento del desarrollo.

Artículo 3. El presente Acto Legislativo rige a partir de su promulgación.

De los Honorables Congresistas,

Cordialmente,

ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA
Senador de la República

MARTHA VILLALBA HODWALKER
Representante a la Cámara

INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 252 DE 2020 SENADO, 256 DE 2019 CÁMARA

por la cual se reconoce el patrimonio cultural material e inmaterial de la Nación del pueblo raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se propone la elaboración de los estudios correspondientes para realizar las declaratorias que correspondan, acorde a los procedimientos vigentes y se dictan otras disposiciones.

INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY Nº 252 DE 2020 SENADO, 256 DE 2019 CÁMARA

"POR LA CUAL SE RECONOCE EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DE LA NACIÓN DEL PUEBLO RAIZAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, SE PROPONE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES PARA REALIZAR LAS DECLARATORIAS QUE CORRESPONDAN, ACORDE A LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Bogotá D.C., 17 de junio de 2021

Doctores
Honorable Senador
ARTURO CHAR CHALJUB
Presidente
Senado de la República

Honorable Representante
GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ
Presidente
Cámara de Representantes

REF: Informe de conciliación del Proyecto de Ley Nº 252 de 2020 Senado, 256 de 2019 Cámara "POR LA CUAL SE RECONOCE EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DE LA NACIÓN DEL PUEBLO RAIZAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, SE PROPONE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES PARA REALIZAR LAS DECLARATORIAS QUE CORRESPONDAN, ACORDE A LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Respetados Presidentes,

De acuerdo con la designación efectuada por las presidencias del Honorable Senado de la República y de la Honorable Cámara de Representantes, y de conformidad con el artículo 161 de la Constitución Política y los artículos 186, 187 y 188 de la Ley 5 de 1992, los suscritos Senadores y Representantes integrantes de la comisión de conciliación, procedimos a realizar un estudio comparativo de los textos aprobados en la Plenaria del Honorable Senado de la República y de la Honorable Cámara de Representantes.

Una vez analizados, decidimos acoger en su totalidad el texto aprobado en el Senado de la República, ya que refleja los consensos logrados en el trámite de esta iniciativa. En consecuencia, solicitamos a las mesas directivas de las Plenarias de Senado y Cámara de Representantes poner en consideración este informe de conciliación y a los miembros de ambas corporaciones su apoyo para la aprobación.

TEXTO APROBADO EN PLENARIA DE CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO APROBADO EN PLENARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	DECISIÓN
TITULO: "POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACIÓN LA ARQUITECTURA TRADICIONAL DEL PUEBLO RAIZAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.".	**TITULO:** POR LA CUAL SE RECONOCE EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DE LA NACIÓN DEL PUEBLO RAIZAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, SE PROPONE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES PARA REALIZAR LAS DECLARATORIAS QUE CORRESPONDAN, ACORDE A LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"	SE ACOGE EL TEXTO DE SENADO
Artículo 1°: Reconózcase Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación los saberes, conocimientos ancestrales, técnicas tradicionales y prácticas culturales en su convivencia con el mar y a la arquitectura tradicional del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. **Parágrafo 1º**. Los saberes, conocimientos ancestrales y prácticas culturales raizales en su convivencia con el mar es la reunión de saberes, conocimientos ancestrales y prácticas culturales que encuentran en la convivencia con el mar su razón de ser. A través de muchas generaciones el pueblo raizal ha transmitido prácticas culturales armónicas con la preservación de especies y con la protección de este medio natural. Si bien se sabe que existen otras expresiones culturales que también forman parte de este patrimonio cultural marino, esta manifestación recoge algunos de esos saberes y prácticas con el fin de facilitar la gestión cultural. **Parágrafo 2º.** Los espacios verdes o patios comunales o familiares o 'the yard' o 'di yaad' son espacios de sociabilidad fundamentales de la cultura Raizal que rodean los inmuebles de la arquitectura tradicional de las islas, hacen parte integral del conjunto arquitectónico tradicional del Pueblo Raizal del Archipiélago y contienen vegetación, árboles, huertas y demás elementos de valor ornamental, ambiental, de seguridad alimentaria y nutricional, paisajístico y espiritual, elementos importantes para la preservación de la Reserva de Biósfera Seaflower. **Parágrafo 3°**. Para efectos de esta ley, entiéndase por arquitectura tradicional del pueblo raizal del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el diseño, las edificaciones o inmuebles y monumentos realizados a partir de los saberes y utilización de los oficios tradicionales asociados que representan la cultura ancestral del pueblo Raizal de las islas".	Artículo 1°: Reconózcase Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación los saberes, conocimientos ancestrales, técnicas tradicionales y prácticas culturales en su convivencia con el mar y a la arquitectura tradicional del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Parágrafo 1º. Los saberes, conocimientos ancestrales y prácticas culturales raizales en su convivencia con el mar es la reunión de saberes, conocimientos ancestrales y prácticas culturales que encuentran en la convivencia con el mar su razón de ser. A través de muchas generaciones el pueblo raizal ha transmitido prácticas culturales armónicas con la preservación de especies y con la protección de este medio natural. Si bien se sabe que existen otras expresiones culturales que también forman parte de este patrimonio cultural marino, esta manifestación recoge algunos de esos saberes y prácticas con el fin de facilitar la gestión cultural. Parágrafo 2º. Los espacios verdes o patios comunales o familiares o 'the yard' o 'di yaad' son espacios de sociabilidad fundamentales de la cultura Raizal que rodean los inmuebles de la arquitectura tradicional de las islas, hacen parte integral del conjunto arquitectónico tradicional del Pueblo Raizal del Archipiélago y contienen vegetación, árboles, huertas y demás elementos de valor ornamental, ambiental, de seguridad alimentaria y nutricional, paisajístico y espiritual, elementos importantes para la preservación de la Reserva de Biósfera Seaflower. Parágrafo 3°. Para efectos de esta ley, entiéndase por arquitectura tradicional del pueblo raizal del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el diseño, las edificaciones o inmuebles y monumentos realizados a partir de los saberes y utilización de los oficios tradicionales asociados que representan la cultura ancestral del pueblo Raizal de las islas".	IGUAL
Artículo 2º. Facúltese al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Cultura, para que de manera articulada con el Departamento Archipiélago de San Andrés, ~~Providencia y Santa~~ Catalina y la Alcaldía del Municipio de Providencia y Santa Catalina, implementen, en el marco del ordenamiento territorial y de los usos del suelo y de los planes de desarrollo, programas y proyectos para la protección, conservación, valoración, divulgación y visibilizarían de los espacios verdes o patios comunales o familiares o 'the yard' o 'di yaad', que hacen parte integral del conjunto arquitectónico tradicional del Pueblo Raizal del Archipiélago y constituyen elementos importantes para la conservación del patrimonio cultural".	**Artículo 2º.** Facúltese al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Cultura, para que de manera articulada con el Departamento Archipiélago de San Andrés, y la Alcaldía del Municipio de Providencia y Santa Catalina, previa identificación y valoración del estado del patrimonio y su incorporación en el POT de San Andrés y el EOT de Providencia y Santa Catalina implementen, en el marco del ordenamiento territorial y de los usos del suelo y de los planes de desarrollo, programas y proyectos para la protección, conservación, valoración, divulgación y visibilización de los espacios verdes o patios comunales o familiares o 'the yard' o 'di yaad', que hacen parte integral del conjunto arquitectónico tradicional del Pueblo Raizal del Archipiélago y constituyen elementos importantes para la conservación del patrimonio cultural".	SE ACOGE EL TEXTO DE SENADO
Artículo 3º. Reconózcase Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, el conocimiento ancestral de los constructores de la arquitectura tradicional del Pueblo Raizal del Archipiélago, quienes son poseedores de los saberes, conocimientos, técnicas, oficios y prácticas asociadas al diseño y construcción de inmuebles, monumentos y embarcaciones que representan la cultura ancestral del pueblo Raizal de las islas.	**Artículo 3º.** Reconózcase como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, el conocimiento ancestral de los constructores de la arquitectura tradicional del Pueblo Raizal del Archipiélago, quienes son poseedores de los saberes, conocimientos, técnicas, oficios y prácticas asociadas al diseño y construcción de inmuebles, monumentos y embarcaciones que representan la cultura ancestral del pueblo Raizal de las islas.	IGUAL
Artículo 4º. De manera articulada la Gobernación del Departamento Archipiélago, la Alcaldía del municipio de Providencia y Santa Catalina, Coralina, el Raizal Council y el Consejo Municipal, Departamental de Patrimonio, deberán elaborar una Lista Indicativa de Candidatos a Bien de Interés Cultural (LICBIC) en el ámbito del Departamento Archipiélago; previo inventario y valoración del patrimonio material y definir qué bienes de la lista puedan ser declarados como Bien de Interés Cultural (BIC); y determinar cuáles requieren un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP).	**Artículo 4º.** De manera articulada la Gobernación del Departamento Archipiélago, la Alcaldía del municipio de Providencia y Santa Catalina, Coralina, el Raizal Council y el Consejo Departamental de Patrimonio, deberán elaborar una Lista Indicativa de Candidatos a Bien de Interés Cultural (LICBIC) en el ámbito del Departamento Archipiélago; previo inventario y valoración del patrimonio material y definir qué bienes de la lista puedan ser declarados como Bien de Interés Cultural (BIC); y determinar cuáles requieren un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP).	SE ACOGE EL TEXTO DE SENADO
Artículo 5º. El Artículo 1° de la Ley 1185 de 2008 modificatorio del artículo 4°de Ley 397 de 1997, Integración del patrimonio cultural de la Nación, "consideran como bienes de interés cultural del ámbito nacional los bienes del patrimonio arqueológico". Faculta al Ministerio de Cultura, al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, al Archivo General de la Nación y al Instituto Caro y Cuervo a promover la investigación acerca de las Ruinas del Fuerte de La Libertad o "Fort Warwick" o "Fuerte Louis Aury" en el municipio de Providencia y Santa Catalina, así como fomentar la divulgación de los resultados de las investigaciones tanto en creole, inglés y castellano, al igual que a través de la tradición oral, en aras de asegurar la integridad étnica y cultural, la recuperación de la memoria colectiva y la apropiación social del patrimonio cultural del pueblo raizal.	**Artículo 5º** Se faculta al Ministerio de Cultura, al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, al Archivo General de la Nación y al Instituto Caro y Cuervo a promover la investigación acerca de las Ruinas del Fuerte de la Libertad "Fort Warwick" o "Fuerte Louis Aury" en el municipio de Providencia y Santa Catalina, además de realizar un mapeo arqueológico marino y terrestre detallado para identificar otros sitios de interés arqueológico de las islas, indicando las características de los sitios y sus áreas de influencia y definiendo cuales requieren Plan de Manejo Arqueológico, así como para fomentar la divulgación de los resultados de las investigaciones tanto en creole, inglés y castellano, al igual que a través de la tradición oral en aras de asegurar la integridad étnica y cultural y la recuperación de la memoria colectiva y la apropiación social del patrimonio cultural del pueblo raizal.	SE ACOGE EL TEXTO DE SENADO.

Parágrafo. De manera articulada la Gobernación del Departamento Archipiélago, la Alcaldía del municipio de Providencia y Santa Catalina, la Corporación para el Desarrollo Sostenible (CORALINA), el Raizal Council y El Consejo Departamental de Patrimonio y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, deberán realizar un mapeo arqueológico marino y terrestre detallado del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para identificar otros sitios de interés arqueológico de las islas; indicar las características de tales sitios y sus áreas de influencia; definir cuáles requieren un Plan de Manejo Arqueológico; y determinar los lineamientos de protección, gestión, divulgación y sostenibilidad de los mismos.	**Parágrafo.** De manera articulada la Gobernación del Departamento Archipiélago, la Alcaldía del municipio de Providencia y Santa Catalina, la Corporación para el Desarrollo Sostenible (CORALINA), el Raizal Council y El Consejo Departamental de Patrimonio y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, deberán realizar un mapeo arqueológico marino y terrestre detallado del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para identificar otros sitios de interés arqueológico de las islas; indicar las características de tales sitios y sus áreas de influencia; definir cuáles requieren un Plan de Manejo Arqueológico; y determinar los lineamientos de protección, gestión, divulgación y sostenibilidad de los mismos	
Artículo 6º. El Ministerio de Cultura, deberá establecer estrategias de cooperación interinstitucional e internacional para la protección, gestión, divulgación y sostenibilidad del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial de la Nación, los Bienes de Interés Cultural (BIC), el Patrimonio Arqueológico, y los sitios de interés arqueológico identificados en el Departamento Archipiélago, teniendo en consideración lo estipulado en la ley 1675 del 2013.	**Artículo 6º.** El Ministerio de Cultura, deberá establecer estrategias de cooperación interinstitucional e internacional para la protección, gestión, divulgación y sostenibilidad del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial de la Nación, los Bienes de Interés Cultural (BIC), el Patrimonio Arqueológico, y los sitios de interés arqueológico identificados en el Departamento Archipiélago, teniendo en consideración lo estipulado en la ley 1675 del 2013	IGUAL
Artículo 7°. Autorización. Autorícese al Gobierno nacional para que, a través	**Artículo 7°. Autorización.** Autorícese al Gobierno Nacional para que, a través	

de los Ministerios de Cultura; y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; contribuya a:	del Ministerio de Cultura en coordinación con otras entidades competentes adelante:	SE ACOGE EL TEXTO DE SENADO.
a. Fortalecer los oficios del patrimonio cultural mediante acciones articuladas que permitan desarrollar diversos mecanismos que promuevan las economías colaborativas, las oportunidades laborales y de emprendimiento, así como, el incentivo a procesos de educación, formación formales e informales en oficios relacionados con las artes y el patrimonio a partir del modelo aprender haciendo a través de la creación de la Escuela Taller de San Andrés Islas y la Red de Talleres	**a.** Fortalecer los oficios del patrimonio cultural mediante acciones articuladas que permitan desarrollar diversos mecanismos que promuevan las economías colaborativas, las oportunidades laborales y de emprendimiento, así como, el incentivo a procesos de educación, formación formales e informales en oficios relacionados con las artes y el patrimonio a partir del modelo aprender haciendo a través de la creación de la Escuela Taller de San Andrés Islas y la Red de Talleres Escuela.	
b. Promover el desarrollo integral sostenible de los portadores de los saberes, conocimientos, técnicas, oficios y prácticas asociadas a la arquitectura tradicional del Archipiélago y de su actividad ancestral, en sus diversas técnicas y modalidades, integrándolos al desarrollo social, económico, cultural y ambiental del país.	**b.** Promover el desarrollo integral sostenible de los portadores de los saberes, conocimientos, técnicas, oficios y prácticas asociadas a la arquitectura tradicional del Archipiélago y de su actividad ancestral, en sus diversas técnicas y modalidades, integrándolos al desarrollo social, económico, cultural y ambiental del país.	
c. Facilitar el acceso de los constructores de la arquitectura tradicional del Archipiélago a un financiamiento especial público o privado y condonarles por resultados, para fomentar el emprendimiento y mejorar sus procesos de productividad y competitividad.	**c.** Realizar el reconocimiento de aprendizajes previos de los saberes, conocimientos ancestrales, técnicas tradicionales y prácticas culturales en su convivencia con el mar y a la arquitectura tradicional del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el Marco del Sistema Nacional de Cualificaciones.	

d. Realizar el reconocimiento de aprendizajes previos de los saberes, conocimientos ancestrales, técnicas tradicionales y prácticas culturales en su convivencia con el mar y a la arquitectura tradicional del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el Marco del Sistema Nacional de Cualificaciones.	**d.** Fomentar la gestión y transmisión de las prácticas, conocimientos y técnicas de los constructores tradicionales del Archipiélago, para favorecer el relevo generacional y garantizar la permanencia de esta actividad y su sostenibilidad económica con el fin de asegurar la preservación de la actividad ancestral raizal en las islas como una identidad cultural que perdure a través del tiempo.	
e. Fomentar la gestión y transmisión de las prácticas, conocimientos y técnicas de los constructores tradicionales del Archipiélago, para favorecer el relevo generacional y garantizar la permanencia de esta actividad y su sostenibilidad económica con el fin de asegurar la preservación de la actividad ancestral raizal en las islas como una identidad cultural que perdure a través del tiempo. **f.** Realizar un piloto de red de posadas nativas como estrategia de turismo cultural en articulación entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con el fin de conservar la arquitectura autóctona y el patrimonio cultural mueble que estas contienen a través de los cuales se cuenten las historias de los objetos que pueden ser resignificados como parte de la estrategia de empoderamiento de mujeres y valor agregado de los negocios propios de las posadas. Estas casas harán parte del programa de Vivienda de Interés Social, Vivienda de Interés Prioritario,	**e.** Fomentar procesos que aporten a la sostenibilidad social, económica, cultural y ambiental del patrimonio cultural del Pueblo Raizal del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. **f.** Fortalecer las cadenas productivas asociadas al patrimonio cultural y las condiciones para la articulación entre el turismo, el patrimonio cultural y otros sectores productivos de manera que contribuyan a la visibilización, comunicación, apropiación y sostenibilidad del patrimonio cultural.	

Vivienda de Interés Cultural y Vivienda de Interés Social Rural; por lo cual, las entidades competentes otorgarán subsidios y/o apoyos para acondicionar, reparar, reformar o construir vivienda para dedicar parte de ella al hospedaje turístico para que el turista comparta la vida social y valores culturales de las familias Raizales. **g.** Fomentar procesos que aporten a la sostenibilidad social, económica, cultural y ambiental del patrimonio cultural del Pueblo Raizal del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. **h.** Fortalecer la cadena productiva y las condiciones para la articulación entre el turismo, el patrimonio cultural y otros sectores productivos de manera que contribuyan a la visibilización, comunicación, apropiación y sostenibilidad del patrimonio cultural		
Artículo 8º. Plan de Manejo del Patrimonio Cultural Arquitectónico. El Ministerio de Cultura y de manera articulada con la Gobernación del Departamento Archipiélago y la Alcaldía del Municipio de Providencia y Santa Catalina en un término de un (1) año deberán formular el Plan Especial de Manejo y Protección del Grupo Arquitectónico para el departamento Archipiélago del que trata la presente Ley y establecer las acciones necesarias para garantizar la protección, la conservación y la sostenibilidad de los BIC o	**Artículo 8:** Manejo integral del patrimonio cultural del ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. El Ministerio de Cultura y de manera articulada con la Gobernación del Departamento Archipiélago y la Alcaldía del Municipio de Providencia y Santa Catalina en un término de un (1) año deberán realizar un plan para identificar los componentes del patrimonio cultural del archipiélago en sus diferentes categorías, lo cual incluye las manifestaciones del patrimonio arquitectónico, conjuntos urbanos, paisajes culturales, así como sus necesidades de protección y manejo con el o los instrumentos	SE ACOGE EL TEXTO DE SENADO

de los bienes que pretendan declararse como tales y las relaciones que se tiene con el patrimonio cultural de naturaleza material, inmaterial y las condiciones ambientales de conformidad a lo señalado en el Artículo 16 del Decreto 2358 de 2019 "Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial", así:	correspondientes como los planes especiales de manejo y protección. En este plan se deberán establecer las acciones necesarias para garantizar el reconocimiento, la apropiación social, la protección, la conservación y la sostenibilidad de los BIC o de los bienes que pretendan declararse como tales y de las relaciones que se tienen con el patrimonio cultural de naturaleza material, inmaterial, el entorno natural y las condiciones ambientales, de conformidad a lo señalado en el Decreto 2358 de 2019" "Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial", así:	
a. Precisar las acciones en diferentes escalas de protección de carácter preventivo y/o correctivo que sean necesarias para la conservación de los bienes.	a. Precisar las acciones en diferentes escalas de identificación, reconocimiento y valoración del patrimonio cultural, así como de las necesidades de protección y manejo que sean necesarias para la conservación del patrimonio cultural y su articulación al desarrollo sostenible del Archipiélago.	
b. Establecer las condiciones físicas, de mantenimiento, conservación y rehabilitación los bienes.	b. Establecer las condiciones físicas, sociales, económicas y de gestión para el mantenimiento, conservación, recuperación, intervención y manejo del patrimonio cultural.	
c. Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y sostenibilidad de los bienes.	c. Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural.	
	d. Generar las condiciones y estrategias para el mejor conocimiento y la apropiación del patrimonio cultural por parte de la comunidad, con el fin de garantizar su conservación y su transmisión a las futuras generaciones.	
	e. Establecer conjuntamente con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y con el Departamento de San Andrés y los Municipios de Providencia y Santa Catalina, las acciones para promover la incorporación del patrimonio cultural en los respectivos instrumentos de planificación.	

d. Generar las condiciones y estrategias para el mejor conocimiento y la apropiación de los bienes por parte de la comunidad, con el fin de garantizar su conservación y su transmisión a las futuras generaciones. **e.** Armonizar y garantizar la regulación del uso del suelo, la ocupación y el aprovechamiento para la protección del BIC e integración con el entorno local, la incorporación de los elementos de gestión urbanística y los instrumentos de gestión del suelo.		
Artículo 9º. Concurrencia. El Congreso de la República de Colombia, concurre a la declaración de la arquitectura tradicional del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como patrimonio cultural material e inmaterial de la Nación, emitiendo en nota de estilo un pergamino que contenga el texto de la presente ley	**Artículo 9º. Nota de Estilo.** El Congreso de la República de Colombia, podrá emitir nota de estilo en un pergamino que contenga el texto de la presente Ley.	SE ACOGE EL TEXTO DE SENADO.
Artículo **10°. Incorporación Presupuestal.** A partir de la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional podrá asignar las apropiaciones requeridas en el Presupuesto General de la Nación, con el fin de lograr la ejecución de las siguientes obras de utilidad pública y de interés social e histórico: **a)** Recuperación, mantenimiento y conservación de inmuebles representativos de la arquitectura tradicional del Pueblo Raizal del Departamento Archipiélago, previo inventario realizado por el Ministerio de Cultura en conjunto con la Gobernación del Departamento Archipiélago, la Alcaldía del municipio de Providencia y Santa Catalina, el Raizal Council y el Consejo Territorial del Patrimonio. **b)** Proyectos elaborados en el marco del Plan de Manejo del Patrimonio Cultural Arquitectónico y demás disposiciones contenidas en la presente Ley. **c)** Proyectos elaborados en el marco del Plan Especial de Salvaguarda (PES) de los oficios, saberes y prácticas asociados a la arquitectura y carpintería tradicional, elaborado en conjunto con los sabedores y portadores y otros actores claves de la comunidad.	Artículo **10°. Incorporación Presupuestal.** A partir de la vigencia de la presente ley, el Gobierno Departamental en el marco de su autonomía, podrá asignar las apropiaciones requeridas con el fin de lograr la ejecución de las siguientes obras de utilidad pública y de interés social e histórico: **a)** Recuperación, mantenimiento y conservación de inmuebles representativos de la arquitectura tradicional del Pueblo Raizal del Departamento Archipiélago, previo inventario realizado por el Ministerio de Cultura en conjunto con la Gobernación del Departamento Archipiélago, la Alcaldía del municipio de Providencia y Santa Catalina, el Raizal Council y el Consejo Territorial del Patrimonio. **b)** Proyectos elaborados en el marco de los Planes de Manejo del Patrimonio Cultural Arquitectónico o urbano o paisajes culturales y demás disposiciones contenidas en la presente Ley. **c)** Proyectos elaborados en el marco del Plan Especial de Salvaguarda (PES) de los oficios, saberes, prácticas asociados al mar, a la arquitectura raizal y carpintería tradicional, elaborado en conjunto con los sabedores, portadores y otros actores claves de la comunidad. d) Protección de humedales y manglares. El Ministerio de Ambiente en coordinación con los departamentos y municipios de la zona, dispondrá de un plan de protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales y manglares y de los servicios ambientales que éstos brindan a la población del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Deberán definir las zonas para protección, manejo, uso y aprovechamiento de ecosistemas forestales en cuencas hidrográficas. El Gobierno Nacional promoverá la estructuración de proyectos para pago por servicios ambientales. Parágrafo. La asistencia técnica para los fines previstos en la presente Ley, será prestada por las Instituciones pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con sus entidades adscritas y vinculadas y las Entidades Territoriales.	SE ACOGE EL TEXTO DE SENADO.
Artículo 11°. El Gobierno Nacional, de manera articulada con la gobernación del departamento archipiélago y la alcaldía del municipio de Providencia y Santa Catalina promoverá el uso de madera adecuada y legal, certificada con sello de calidad, buen manejo y prácticas sostenibles de producción para los proyectos de intervención, construcción, mantenimiento y reparación de los inmuebles y embarcaciones de la arquitectura tradicional de las islas. Así mismo, se deberá promover estímulos e incentivos para la conservación y mantenimiento de la arquitectura autóctona de la región. **Parágrafo.** El Ministerio de Cultura en coordinación con la Gobernación del Departamento Archipiélago y la Alcaldía del Municipio de Providencia y Santa Catalina reglamentará la aplicación de los estímulos e incentivos	**Artículo 11°.** El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura en coordinación con las demás entidades competentes, incluyendo a la gobernación del departamento archipiélago y la alcaldía del municipio de Providencia y Santa Catalina promoverá el uso de madera adecuada y legal, certificada con sello de calidad, buen manejo y prácticas sostenibles de producción para los proyectos de intervención, construcción, mantenimiento y reparación de los inmuebles y embarcaciones de la arquitectura de tradición raizal de las islas. Así mismo, se deberá promover estímulos e incentivos para la conservación y mantenimiento de la arquitectura autóctona de la región. **Parágrafo.** El Ministerio de Cultura en coordinación con la Gobernación del Departamento Archipiélago y la Alcaldía del Municipio de Providencia y Santa Catalina reglamentará la aplicación de los estímulos e incentivos de lo previsto en este artículo de modo que se propicie su	SE ACOGE EL TEXTO DE SENADO

de lo previsto en este artículo de modo que se propicie su sostenibilidad y la generación de recursos para su conservación y mantenimiento y que además genere beneficios para la comunidad asociada al bien	sostenibilidad y la generación de recursos para su conservación y mantenimiento y que además genere beneficios para la comunidad asociada al bien.	
Artículo 12°. Las declaratorias establecidas en la presente ley se respaldarán con los estudios técnico-científicos establecidos en la ley y deberán ser desarrollados por los actores señalados en los artículos 7 y 8 y demás entidades públicas nacionales, departamentales, privadas y ONG.	**Artículo 12:** De manera articulada con la Gobernación del departamento Archipiélago, la Alcaldía del municipio de Providencia y Santa Catalina, Coralina, el Raizal Council y el Consejo Municipal y Departamental de Patrimonio, pescadores, matronas e interesados en la cocina tradicional, sector turístico y hotelero, líderes sociales y religiosos, y comunidad en general deberán elaborar un Plan Especial de Salvaguardia (PES) para fortalecer los saberes, conocimientos ancestrales, técnicas tradicionales y prácticas culturales del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus áreas de interés.	SE ACOGE EL TEXTO DE SENADO
Artículo Nuevo: De manera articulada con la Gobernación del departamento Archipiélago, la Alcaldía del municipio de Providencia y Santa Catalina, Coralina, el Raizal Council y el Consejo Municipal y Departamental de Patrimonio, pescadores, matronas e interesados en la cocina tradicional, sector turístico y hotelero, líderes sociales y religiosos, y comunidad en general deberán elaborar un Plan Especial de Salvaguardia (PES) para fortalecer los saberes, conocimientos ancestrales, técnicas tradicionales y prácticas culturales del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus áreas de interés		
Artículo Nuevo: Fortalecer las capacidades técnicas locales y departamentales para la gestión de incentivos a los propietarios de inmuebles que manifiesten los atributos de la arquitectura de interés cultural del Archipiélago, quienes inviertan en la recuperación y construcción nueva de estos inmuebles y en el fomento a los oficios y prácticas culturales relacionadas con el patrimonio cultural. **Parágrafo.** Por lo menos el 70% de las nuevas construcciones para viviendas que hagan parte de los programas de gobierno y que se realicen dentro del territorio del Archipiélago deberán incluir los atributos de la vivienda de interés cultural para el Archipiélago entre los cuales: - Técnicas constructivas tradicionales. - Incentivar bajar costos para el uso de la madera. - Espacialidad y elementos formales de la región. - Protección del patrimonio natural.	**Artículo 13°:** Fortalecer las capacidades técnicas locales y departamentales para la gestión de incentivos a los propietarios de inmuebles que manifiesten los atributos de la arquitectura de interés cultural del Archipiélago, quienes inviertan en la recuperación y construcción nueva de estos inmuebles y en el fomento a los oficios y prácticas culturales relacionadas con el patrimonio cultural. **Parágrafo.** Se promoverán las nuevas construcciones para viviendas que hagan parte de los programas de gobierno y que se realicen dentro del territorio del Archipiélago deberán incluir los atributos de la vivienda de interés cultural para el Archipiélago entre los cuales: - Técnicas constructivas tradicionales. - Incentivar bajar costos para el uso de la madera. - Espacialidad y elementos formales de la región. - Protección del patrimonio natural.	SE ACOGE EL TEXTO DE SENADO
Artículo Nuevo: Facúltese al Gobierno nacional, a través de los Ministerios de: Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación; Industria, Comercio y Turismo; y Agricultura y Desarrollo Rural, Educación e INVIMA para que de manera articulada con el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Alcaldía del Municipio de Providencia y Santa Catalina y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), implementen		

políticas, programas y proyectos para la protección, recuperación, conservación, sostenibilidad, valoración, divulgación, financiación y visibilización de las cocinas y bebidas tradicionales del pueblo Raizal del Archipiélago.		
Artículo 13° Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.	**Artículo 14° Vigencia.** La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.	IGUAL.

Firman los Honorables Congresistas,

HORACIO JOSÉ SERPA MONCADA
Senador
Conciliador

ADRIANA GÓMEZ MILLÁN
Representante a la Cámara
Conciliador

El texto adoptado por la comisión de conciliación es el siguiente:

PROYECTO DE LEY Nº 252 DE 2020 SENADO, 256 DE 2019 CÁMARA

"POR LA CUAL SE RECONOCE EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DE LA NACIÓN DEL PUEBLO RAIZAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, SE PROPONE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES PARA REALIZAR LAS DECLARATORIAS QUE CORRESPONDAN, ACORDE A LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

Artículo 1°. Reconózcase Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación los saberes, conocimientos ancestrales, técnicas tradicionales y prácticas culturales en su convivencia con el mar y a la arquitectura tradicional del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Parágrafo 1º. Los saberes, conocimientos ancestrales y prácticas culturales raizales en su convivencia con el mar comprenden la reunión de saberes, conocimientos ancestrales y prácticas culturales que encuentran, en la convivencia con el mar, su razón de ser. A través de muchas generaciones el pueblo raizal ha transmitido prácticas culturales armónicas con la preservación de especies y con la protección de este medio natural. Si bien se sabe que existen otras expresiones culturales que también forman parte de este patrimonio cultural marino, esta manifestación recoge algunos de esos saberes y prácticas con el fin de facilitar la gestión cultural.

Parágrafo 2º. Los espacios verdes o patios comunales o familiares o 'the yard' o 'di yaad' son espacios de sociabilidad fundamentales de la cultura Raizal que rodean los inmuebles de la arquitectura tradicional de las islas, hacen parte integral del conjunto arquitectónico tradicional del Pueblo Raizal del Archipiélago y contienen vegetación, árboles, huertas y demás elementos de valor ornamental, ambiental, de seguridad alimentaria y nutricional, paisajístico y espiritual, elementos importantes para la preservación de la Reserva de Biósfera Seaflower.

Parágrafo 3°. Para efectos de esta ley, entiéndase por arquitectura tradicional del pueblo raizal del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el diseño, las edificaciones o inmuebles y monumentos realizados a partir de los saberes y utilización de los oficios tradicionales asociados que representan la cultura ancestral del pueblo Raizal de las islas.

Artículo 2º. Facultase al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Cultura, para que de manera articulada con el Departamento Archipiélago de San Andrés y la Alcaldía del Municipio de Providencia y Santa Catalina, previa identificación y valoración del estado del Patrimonio y su incorporación en el POT de San Andrés y el EOT de Providencia y Santa Catalina,

implementen en el marco del ordenamiento territorial y de los usos del suelo y de los planes de desarrollo, programas y proyectos para la protección, conservación, valoración, divulgación y visibilización de los espacios verdes o patios comunales o familiares o "the yard" o "di yaad", que hacen parte integral del conjunto arquitectónico tradicional del pueblo raizal del Archipiélago y constituyen elementos importantes para la conservación del patrimonio cultural.

Artículo 3º. Reconózcase como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, el conocimiento ancestral de los constructores de la arquitectura tradicional del Pueblo Raizal del Archipiélago, quienes son poseedores de los saberes, conocimientos, técnicas, oficios y prácticas asociadas al diseño y construcción de inmuebles, monumentos y embarcaciones que representan la cultura ancestral del pueblo Raizal de las islas.

Artículo 4º. De manera articulada la Gobernación del Departamento Archipiélago, la Alcaldía del municipio de Providencia y Santa Catalina, Coralina, el Raizal Council y el Consejo Departamental de Patrimonio, deberán elaborar una Lista Indicativa de Candidatos a Bien de Interés Cultural (LICBIC) en el ámbito del Departamento Archipiélago; previo inventario y valoración del patrimonio material y definir qué bienes de la lista puedan ser declarados como Bien de Interés Cultural (BIC); y determinar cuáles requieren un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP).

Artículo 5º. Se faculta al Ministerio de Cultura, al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, al Archivo General de la Nación y al Instituto Caro y Cuervo a promover la investigación acerca de las Ruinas del Fuerte de la Libertad "Fort Warwick" o "Fuerte Louis Aury" en el municipio de Providencia y Santa Catalina, además de realizar un mapeo arqueológico marino y terrestre detallado para identificar otros sitios de interés arqueológico de las islas, indicando las características de los sitios y sus áreas de influencia y definiendo cuales requieren Plan de Manejo Arqueológico, así como para fomentar la divulgación de los resultados de las investigaciones tanto en creole, inglés y castellano, al igual que a través de la tradición oral en aras de asegurar la integridad étnica y cultural y la recuperación de la memoria colectiva y la apropiación social del patrimonio cultural del pueblo raizal.

Parágrafo. De manera articulada la Gobernación del Departamento Archipiélago, la Alcaldía del municipio de Providencia y Santa Catalina, la Corporación para el Desarrollo Sostenible (CORALINA), el Raizal Council y El Consejo Departamental de Patrimonio y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, deberán realizar un mapeo arqueológico marino y terrestre detallado del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para identificar otros sitios de interés arqueológico de las islas; indicar las características de tales sitios y sus áreas de influencia; definir cuáles requieren un Plan de Manejo Arqueológico; y determinar los lineamientos de protección, gestión, divulgación y sostenibilidad de los mismos.

Artículo 6º. El Ministerio de Cultura, deberá establecer estrategias de cooperación interinstitucional e internacional para la protección, gestión, divulgación y sostenibilidad del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial de la Nación, los Bienes de Interés Cultural (BIC), el Patrimonio Arqueológico, y los sitios de interés arqueológico identificados en el Departamento Archipiélago, teniendo en consideración lo estipulado en la ley 1675 del 2013.

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 7°. Autorización. Autorícese al Gobierno Nacional para que, a través del Ministerio de Cultura en coordinación con otras entidades competentes adelante las siguientes acciones:

a. Fortalecer los oficios del patrimonio cultural mediante acciones articuladas que permitan desarrollar diversos mecanismos que promuevan las economías colaborativas, las oportunidades laborales y de emprendimiento, así como el incentivo a procesos de educación, formación formales e informales en oficios relacionados con las artes y el patrimonio a partir del modelo aprender haciendo a través de la creación de la Escuela Taller de San Andrés Islas y la Red de Talleres Escuela.

b. Promover el desarrollo integral sostenible de los portadores de los saberes, conocimientos, técnicas, oficios y prácticas asociadas a la arquitectura tradicional del Archipiélago y de su actividad ancestral, en sus diversas técnicas y modalidades, integrándolos al desarrollo social, económico, cultural y ambiental del país.

c. Realizar el reconocimiento de aprendizajes previos de los saberes, conocimientos ancestrales, técnicas tradicionales y prácticas culturales en su convivencia con el mar y a la arquitectura tradicional del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el Marco del Sistema Nacional de Cualificaciones.

d. Fomentar la gestión y transmisión de las prácticas, conocimientos y técnicas de los constructores tradicionales del Archipiélago, para favorecer el relevo generacional y garantizar la permanencia de esta actividad y su sostenibilidad económica con el fin de asegurar la preservación de la actividad ancestral raizal en las islas como una identidad cultural que perdure a través del tiempo.

e. Fomentar procesos que aporten a la sostenibilidad social, económica, cultural y ambiental del patrimonio cultural del Pueblo Raizal del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

f. Fortalecer las cadenas productivas asociadas al patrimonio cultural y las condiciones para la articulación entre el turismo, el patrimonio cultural y otros sectores productivos de manera que contribuyan a la visibilización, comunicación, apropiación y sostenibilidad del patrimonio cultural.

Articulo 8: Manejo integral del patrimonio cultural del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El Ministerio de Cultura y de manera articulada con la Gobernación del Departamento Archipiélago y la Alcaldía del Municipio de Providencia y Santa Catalina, en un término de un (1) año, deberán realizar un plan para identificar los componentes del patrimonio cultural del archipiélago en sus diferentes categorías, lo cual incluye las manifestaciones del patrimonio arquitectónico, conjuntos urbanos, paisajes culturales, así como sus necesidades de protección y manejo con los instrumentos correspondientes, como los planes especiales de manejo y protección. En este plan se deberán establecer las acciones necesarias para garantizar el reconocimiento, la apropiación social, la protección, la conservación y la sostenibilidad de los BIC o de los bienes que pretendan declararse como tales y de las relaciones que se tienen con el patrimonio cultural de naturaleza material, inmaterial, el entorno natural y las condiciones ambientales, de conformidad a lo señalado en el–Decreto 2358 de 2019 "Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura", en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, así:

a. Precisar las acciones en diferentes escalas de identificación, reconocimiento y valoración del patrimonio cultural, así como de las necesidades de protección y manejo que sean necesarias para la conservación del patrimonio cultural y su articulación al desarrollo sostenible del Archipiélago.

b. Establecer las condiciones físicas, sociales, económicas y de gestión para el mantenimiento, conservación, recuperación, intervención y manejo del patrimonio cultural.

c. Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural.

d. Generar las condiciones y estrategias para el mejor conocimiento y la apropiación del patrimonio cultural por parte de la comunidad, con el fin de garantizar su conservación y su transmisión a las futuras generaciones.

e. Establecer conjuntamente con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y con el Departamento de San Andrés y los Municipios de Providencia y Santa Catalina, las acciones para promover la incorporación del patrimonio cultural en los respectivos instrumentos de planificación.

Artículo 9º. Nota de Estilo. El Congreso de la República de Colombia podrá emitir nota de estilo en un pergamino que contenga el texto de la presente Ley.

Artículo 10°. Incorporación Presupuestal. A partir de la vigencia de la presente ley, el Gobierno Departamental en el marco de su autonomía, podrá asignar las apropiaciones requeridas con el fin de lograr la ejecución de las siguientes obras de utilidad pública y de interés social e histórico:

a) Recuperación, mantenimiento y conservación de inmuebles representativos de la arquitectura tradicional del Pueblo Raizal del Departamento Archipiélago, previo inventario realizado por el Ministerio de Cultura en conjunto con la Gobernación del Departamento Archipiélago, la Alcaldía del municipio de Providencia y Santa Catalina, el Raizal Council y el Consejo Territorial del Patrimonio.

b) Proyectos elaborados en el marco de los Planes de Manejo del Patrimonio Cultural Arquitectónico o urbano o paisajes culturales y demás disposiciones contenidas en la presente Ley.

c) Proyectos elaborados en el marco del Plan Especial de Salvaguarda (PES) de los oficios, saberes, prácticas asociadas al mar, a la arquitectura raizal y carpintería tradicional, elaborado en conjunto con los sabedores, portadores y otros actores claves de la comunidad.

d) Protección de humedales y manglares. El Ministerio de Ambiente en coordinación con los departamentos y municipios de la zona, dispondrá de un plan de protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales y manglares y de los servicios ambientales que éstos brindan a la población del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Deberán definir las zonas para protección, manejo, uso y aprovechamiento de ecosistemas forestales en cuencas hidrográficas. El Gobierno Nacional promoverá la estructuración de proyectos para pago por servicios ambientales.

Parágrafo. La asistencia técnica para los fines previstos en la presente Ley, será prestada por las Instituciones pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con sus entidades adscritas y vinculadas y las Entidades Territoriales.

Artículo 11°. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura en coordinación con las demás entidades competentes, incluyendo a la gobernación del departamento archipiélago y la alcaldía del municipio de Providencia y Santa Catalina, promoverá el uso de madera adecuada y legal, certificada con sello de calidad, buen manejo y prácticas sostenibles de producción para los proyectos de intervención, construcción, mantenimiento y reparación de los inmuebles y embarcaciones de la arquitectura de tradición raizal de las islas. Así mismo, se deberá promover estímulos e incentivos para la conservación y mantenimiento de la arquitectura autóctona de la región.

Parágrafo. El Ministerio de Cultura en coordinación con la Gobernación del Departamento Archipiélago y la Alcaldía del Municipio de Providencia y Santa Catalina reglamentará la aplicación de los estímulos e incentivos de lo previsto en este artículo de modo que se propicie su sostenibilidad y la generación de recursos para su conservación y mantenimiento, que además genere beneficios para la comunidad asociada al bien.

Artículo 12º. De manera articulada con la Gobernación del departamento Archipiélago, la Alcaldía del municipio de Providencia y Santa Catalina, Coralina, el Raizal Council y el Consejo Municipal y Departamental de Patrimonio, pescadores, matronas e interesados en la cocina tradicional, sector turístico y hotelero, líderes sociales y religiosos, y comunidad en general deberán elaborar un Plan Especial de Salvaguardia (PES) para fortalecer los saberes, conocimientos ancestrales, técnicas tradicionales y prácticas culturales del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus áreas de interés.

Artículo 13º. Se fortalecerán las capacidades técnicas locales y departamentales para la gestión de incentivos a los propietarios de inmuebles que manifiesten los atributos de la arquitectura de interés cultural del Archipiélago, quienes inviertan en la recuperación y construcción nueva de estos inmuebles y en el fomento a los oficios y prácticas culturales relacionadas con el patrimonio cultural.

Parágrafo. Se promoverán las nuevas construcciones para viviendas que hagan parte de los programas de gobierno y que se realicen dentro del territorio del Archipiélago, las cuales deberán incluir los atributos de la vivienda de interés cultural para el Archipiélago:

a. Técnicas constructivas tradicionales.
b. Incentivar bajar costos para el uso de la madera.
c. Espacialidad y elementos formales de la región.
d. Protección del patrimonio natural.

Artículo 14º. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

En consecuencia, los suscritos conciliadores solicitamos de manera respetuosa a las Honorables Plenarias del Senado de la República y Cámara de Representantes aprobar la conciliación del Proyecto de Ley Nº 252 DE 2020 Senado, 256 de 2019 Cámara "POR LA CUAL SE RECONOCE EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DE LA NACIÓN DEL PUEBLO RAIZAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, SE PROPONE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES PARA REALIZAR LAS DECLARATORIAS QUE CORRESPONDAN, ACORDE A LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", según el texto conciliado.

Firman los Honorables Congresistas,

HORACIO JOSÉ SERPA MONCADA
Senador
Conciliador

ADRIANA GÓMEZ MILLÁN
Representante a la Cámara
Conciliador

INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 192 DE 2019 CÁMARA, 274 DE 2020 SENADO

por medio de la cual se crea el Régimen de Trabajo Remoto y se establecen normas para promoverlo, regularlo y se dictan otras disposiciones.

INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY 192 DE 2019 CÁMARA – 274 DE 2020 SENADO "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL RÉGIMEN DE TRABAJO REMOTO Y SE ESTABLECEN NORMAS PARA PROMOVERLO, REGULARLO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

17 junio de 2021

Doctores
ARTURO CHAR CHALJUB
Presidente
Senado de la República

GERMAN BLANCO ALVAREZ
Presidente
Cámara de Representantes
Ciudad

REF: Informe de conciliación al **PROYECTO DE LEY 192 DE 2019 CÁMARA – 274 DE 2020 SENADO "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL RÉGIMEN DE TRABAJO REMOTO Y SE ESTABLECEN NORMAS PARA PROMOVERLO, REGULARLO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**

Honorables Presidentes:

De acuerdo con las designaciones efectuadas por las Presidencias del Honorable Senado de la República y de la Honorable Cámara de Representantes, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 161 de la Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, los suscritos integrantes de la Comisión de Conciliación, nos permitimos someter, por su conducto, a consideración de las Plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes para continuar su trámite correspondiente, el texto conciliado del proyecto de ley de la referencia.

En el siguiente cuadro se relacionan los textos aprobados por la Plenaria de Cámara el pasado 25 de agosto de 2020 y por la Plenaria de Senado el 17 de Junio de 2021.

TEXTO APROBADO EN CÁMARA	TEXTO APROBADO EN SENADO	CONSIDERACIONES
POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL RÉGIMEN DEL TRABAJO VIRTUAL Y SE ESTABLECEN NORMAS PARA PROMOVERLO, REGULARLO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".	**PROYECTO DE LEY 192 DE 2019 CÁMARA – 274 DE 2020 SENADO "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL RÉGIMEN DE TRABAJO REMOTO Y SE ESTABLECEN NORMAS PARA PROMOVERLO,**	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO.

	REGULARLO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"	
Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto crear una nueva modalidad de contratación y vinculación laboral, denominada trabajo remoto, la cual será contratada y desarrollada a través de las tecnologías existentes y nuevas. Esta modalidad implica una vinculación laboral directa y formal, con el reconocimiento de los derechos y garantías derivadas de un contrato de trabajo, sin que se busque precarizar el trabajo.	**Artículo 1o. Objeto.** La presente ley tiene por objeto crear una nueva forma de ejecución del contrato de trabajo, denominada trabajo remoto, la cual será pactada de manera voluntaria por las partes y podrá ser desarrollada a través de las tecnologías existentes y nuevas, u otros medios y mecanismos que permitan ejercer la labor contratada de manera remota. Esta nueva forma ejecución del contrato de trabajo se efectuará de manera remota en su totalidad e implica una vinculación laboral con el reconocimiento de los derechos y garantías derivadas de un contrato de trabajo.	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
Artículo 2º. Ámbito de Aplicación. Las normas contenidas en esta Ley serán aplicables a toda persona natural que se encuentren en el territorio nacional; así como las entidades públicas y privadas nacionales; y a su vez a las empresas extranjeras que contraten trabajadores que se encuentren dentro del territorio nacional. bajo esta modalidad. **Parágrafo.** La vinculación a través del trabajo remoto es voluntaria, tanto para el	**Artículo 2o. Ámbito de aplicación**. Las normas contenidas en esta Ley serán aplicables a toda persona natural que se encuentren domiciliadas en el territorio nacional; así como las entidades públicas y privadas nacionales; y a su vez a las empresas extranjeras que contraten trabajadores que se encuentren dentro del territorio nacional. **Parágrafo:** Las entidades del orden nacional deberán contar con concepto previo y habilitante por parte del	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
empleador como para el trabajador.	Ministerio de Hacienda para obtener la disponibilidad presupuestal que permita acoger lo dispuesto en la presente ley.	
Artículo 3º. Definiciones. Para efectos de la presente ley, se entenderán las siguientes definiciones: **a. Trabajo remoto:** Es una modalidad de trabajo en la cual toda la relación laboral, desde su inicio hasta su terminación, se debe realizar de manera remota mediante la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones donde el empleador y trabajador, no interactúan físicamente a lo largo de la vinculación contractual. Lo anterior, incluye también la posibilidad de realizar un proceso de selección no presencial, con el uso y aplicación de las diferentes tecnologías disponibles. Sin perjuicio de lo anterior, a discreción del empleador y de manera excepcional, el trabajador remoto podrá ser citado en	**Artículo 3o. Definiciones.** Para efectos de la presente ley, se entenderán las siguientes definiciones: a. Trabajo remoto: Es una forma de ejecución del contrato de trabajo en la cual toda la relación laboral, desde su inicio hasta su terminación, se debe realizar de manera remota mediante la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones u otro medio o mecanismo, donde el empleador y trabajador, no interactúan físicamente a lo largo de la vinculación contractual. En todo caso, esta forma de ejecución no comparte los elementos constitutivos y regulados para el teletrabajo y/o trabajo en casa y las normas que lo modifiquen. b. Nueva forma de ejecución del contrato remota. Es aquella por la cual	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO

las instalaciones del empleador. **b. Contrato de trabajo remoto**: Es aquel contrato laboral por el cual una persona natural se obliga a prestar una actividad remota a través de las tecnologías disponibles en favor de otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración, lo cual puede constar en archivos digitales. En este tipo de contrato de trabajo, las partes podrán manifestar su consentimiento y/o aceptación mediante el uso de la firma electrónica, a través de mensajes de datos, bajo los principios de autenticidad, integridad, disponibilidad, fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad. En cualquier momento, un contrato laboral convencional previamente suscrito podrá asumir naturaleza de contrato de trabajo remoto por mutuo acuerdo,	una persona natural, vinculada por un contrato laboral, se obliga a prestar una actividad remota a través de las tecnologías disponibles u otro medio o mecanismo, en favor de otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante la obtención de un salario, lo cual puede constar en medios digitales. En esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo, las partes podrán manifestar su consentimiento y o aceptación mediante el uso de la firma electrónica digital y a través de mensajes de datos, bajo los principios y características establecidas en la Ley 527 de 1999 u norma que la modifique, conforme a la autenticidad, integridad, disponibilidad, fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad. c. Trabajador remoto: Persona natural, cubierta por los	

cuando las funciones del trabajo cumplan con el anterior literal, sin perjuicio de lo establecido en el código sustantivo del trabajo y garantizando las condiciones anteriormente pactadas que dieron lugar al contrato de trabajo. **c. Trabajador remoto:** Persona natural, cubierta por los principios mínimos del trabajo y vinculado formalmente mediante un contrato de trabajo, desarrolla actividades de manera remota a través de las tecnologías existentes y nuevas, desde un lugar de su elección, siempre en consenso con el empleador. **d. Nuevas tecnologías:** Cualquier medio, plataforma, software, programa, equipo, dispositivo y/o equipo que permita la comunicación, interacción y/o prestación de un servicio de manera remota mediante una conexión a internet o a cualquier otra red	principios mínimos del trabajo y vinculado mediante un contrato de trabajo, desarrollando actividades de manera remota a través de las tecnologías existentes y nuevas u otro medio o mecanismo, d. Nuevas tecnologías: Cualquier medio, plataforma, software, programa, equipo, dispositivo y/o equipo que permita la comunicación, interacción y/o ejecución del contrato de trabajo de manera remota mediante una conexión a internet o a cualquier otra red que permita ejecutar dichas acciones. Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones contempladas en el artículo 6 de la ley 1341 de 2009. e. Firma Electrónica: Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas privadas, que permite identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos,	

que permita ejecutar dichas acciones. Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones contempladas en el artículo 6 de la ley 1341 de 2009. **e. Firma Electrónica:** Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas privadas, que permite identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente, este conjunto de datos electrónicos acompañan o están asociados a un documento electrónico y cuyas funciones básicas son (i) i identificar a una persona de manera inequívoca, (ii) Asegurar la exclusividad e integridad del documento firmado y (iii) los datos que utiliza el firmante	siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente, este conjunto de datos electrónicos acompañan o están asociados a un documento electrónico y cuyas funciones básicas son (i) identificar a una persona de manera inequívoca, (ii) Asegurar la exclusividad e integridad del documento firmado y (iii) los datos que utiliza el firmante para realizar la firma son únicos y exclusivos y, por tanto, posteriormente, no puede negarse la firma el documento. f. OTP (One Time Password): es un mecanismo de autenticación, el cual consiste en un código temporal que le llega a la persona a través de mensaje de texto SMS o correo electrónico certificado, para que este pueda de manera segura realizar acciones	

para realizar la firma son únicos y exclusivos y, por tanto, posteriormente, no puede negarse la firma el documento. **f. ECM (Enterprise Content Management):** son todas aquellas estrategias, métodos y herramientas para la gestión de contenidos empresariales por las cuales se permite a las organizaciones la posibilidad de crear, almacenar, distribuir, archivar y gestionar todo su contenido de forma óptima. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 527 de 1999. **g. OTP (One Time Password**): es un mecanismo de autenticación, el cual consiste en un código temporal que le llega a la persona a través de mensaje de texto SMS o correo electrónico certificado, para que este pueda de manera segura realizar acciones virtuales, en donde se certificará la identidad de la persona, ya sea vía internet o mediante la aplicación para	virtuales, en donde se certificará la identidad de la persona, ya sea vía internet o mediante la aplicación para teléfonos móviles (APP). El presente mecanismo puede ser opcional por el empleador, si se considera necesario para la seguridad de sus acciones remotas. En todo caso, deberá tener un mecanismo idóneo como lo describe el literal e del presente artículo para todo tipo de acción.	

teléfonos móviles (APP).		
Artículo 4º. Principios Generales del Contrato de Trabajo Remoto. Para efectos de la presente ley, los principios que aquí se exponen, son de obligatorio cumplimiento por las partes: **a.** El contrato de trabajo remoto requerirá para todos los efectos, la concurrencia de los elementos esenciales mencionados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. **b.** Estará basado en el respeto y garantía de los derechos mínimos en materia laboral, así como la subordinación por parte del empleador. Los trabajadores vinculados mediante el contrato de trabajo remoto tendrán los mismos derechos económicos de que gozan todos los trabajadores, incluidas las garantías sindicales y de seguridad social. **c.** Esta modalidad contractual no requiere un lugar físico determinado para la prestación de los servicios. El	**Artículo 4o. Principios Generales del Trabajo Remoto.** Para efectos de la presente ley, los principios que aquí se exponen, son de obligatorio cumplimiento por las partes: a. El trabajo remoto requerirá para todos los efectos, la concurrencia de los elementos esenciales mencionados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. b. Estará basado en el respeto y garantía de los derechos mínimos en materia laboral. Los trabajadores vinculados mediante el contrato laboral para ejecutar sus funciones por medio del trabajo remoto, tendrán los mismos derechos laborales de que gozan todos los trabajadores, incluidas las garantías sindicales y de seguridad social. c. Esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo remota no requiere un lugar físico determinado para la prestación de los servicios. El	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
trabajador tendrá total libertad para prestar sus servicios desde el lugar que considere adecuado, no obstante, en todo momento deberá contar con una conexión y cobertura óptima a internet y los equipos o dispositivos electrónicos para el desempeño de su labor e informar al empleador sobre el lugar desde el cual realizará su labor y deberá garantizar el cumpliendo en todo caso, de los requerimientos mínimos de seguridad y salud en el trabajo, atendiendo las recomendaciones de las Administradoras de Riesgos Laborales, generando el autocuidado como medida preventiva. **d.** El contrato de trabajo remoto tiene como principio la flexibilidad en todas las etapas precontractuales y contractuales, de forma que incluso el perfeccionamiento del contrato de trabajo deberá darse de manera remota, haciendo uso de las tecnologías	trabajador podrá prestar sus servicios desde el lugar que considere adecuado, de común acuerdo con el empleador, previo visto bueno de la Administradora de Riesgos Laborales presente en el contrato. No obstante, en todo momento deberá contar con una conexión y cobertura a internet e informar al empleador sobre el lugar desde el cual realizará su labor y este deberá aprobar el lugar escogido para garantizar el cumplimiento de los requerimientos mínimos de seguridad y salud en el trabajo, atendiendo las recomendaciones de la Administradora de Riesgos Laborales, propiciando el autocuidado como medida preventiva. d. El trabajo remoto tiene como principio la flexibilidad en todas las etapas precontractuales y contractuales, de forma que incluso el perfeccionamiento del contrato de trabajo deberá darse de manera	
existentes y nuevas, completando su perfección con la firma electrónica. El trabajador remoto podrá decidir cuánto tiempo y en qué momento presta sus servicios, siempre en consenso con el empleador, sin sobrepasar la jornada máxima legal, y sin que ello implique un desconocimiento de sus derechos mínimos y/o garantías irrenunciables. **e.** Al contrato de trabajo se le aplicarán las normas sobre garantías sindicales previstas en la legislación laboral vigente; así mismo, se evitará la discriminación en el empleo y se garantizará la igualdad de trato para los trabajadores remotos. **f.** No existe la exclusividad laboral en esta modalidad contractual, toda vez que basados en la concurrencia de voluntades, el trabajo remoto supone la disponibilidad del empleador y a su vez la libertad para	remota, haciendo uso de las tecnologías existentes y nuevas u otro medio o mecanismo, completando su perfección con la firma electrónica u digital.El trabajador remoto y el empleador acordarán el tiempo de ejecución, sin perjuicio de las formalidades del contrato a término fijo, y el momento de la prestación del servicio, sin sobrepasar la jornada máxima legal, y sin que ello implique un desconocimiento de sus derechos mínimos y/o garantías irrenunciables, excepto si se trata de un cargo de dirección, confianza y manejo. e. Al trabajo remoto se le aplicarán las normas sobre garantías y derechos sindicales previstas en la legislación laboral vigente. f. No existe la exclusividad laboral en esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo. En todo caso, se regirá por lo establecido en el articulo 26 del	
ejercer otras labores, siempre y cuando no afecten las condiciones pactadas en el contrato remoto vigente. **Parágrafo.** El literal f del presente artículo no podrá aplicarse a las personas que laboren en entidades públicas de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Constitución Política de Colombia.	Código Sustantvo del Trabajo o norma que lo modifique, en tanto que, basados en la concurrencia de voluntades, el trabajo remoto supone la disponibilidad del empleador y a su vez la libertad para ejercer otras labores, sin embargo, por acuerdo de voluntades y atendiendo la naturaleza del contrato en específico, esta puede pactarse cuando se encuentre en riesgo asuntos confidenciales del empleador. Debe mediar la aceptación del empleado para estipularse la cláusula de exclusividad. g. Se garantiza la no discriminación en los procesos de selección y ejecución de los contratos de trabajo que se organicen y ejecuten de manera remota, así como la igualdad de trato para los trabajadores remotos. **Parágrafo.** El literal f del presente artículo no podrá aplicarse a las personas	

	que laboren en entidades públicas de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Constitución Política de Colombia.	
Artículo 5º. Política Pública del Trabajo Remoto. Con el fin de desarrollar los propósitos y objetivo de la presente ley, el Gobierno Nacional, en un plazo no mayor a 6 meses, a través de las autoridades competentes y con la activa participación de los diferentes sectores sociales involucrados, evaluará, implementará y ejecutará una política pública sobre los lineamientos para la estructuración y desarrollo del trabajo remoto en el país, teniendo cuenta las diferentes disposiciones de la presente ley. Esta política deberá contar con el acompañamiento de las autoridades correspondientes, así como de las Confederaciones de Trabajadores más representativas del país y deberá contener los componentes básicos para lograr una adecuada entrada en funcionamiento e implementación del trabajo remoto. **Parágrafo 1.** El Departamento Nacional de Planeación – DNP –, o quien haga sus veces, deberá realizar una evaluación la política	**Artículo 5. Política Pública del Trabajo Remoto.** Con el fin de desarrollar los propósitos y objetivo de la presente ley, el Gobierno Nacional, en un plazo no mayor a 6 (seis) meses, a través de las autoridades competentes que el gobierno designe y con la activa participación de los diferentes sectores sociales involucrados, diseñará e implementará una política pública sobre los lineamientos para la estructuración y desarrollo del trabajo remoto en el país, teniendo cuenta las diferentes disposiciones de la presente ley. Esta política deberá contar con el acompañamiento de las autoridades correspondientes, los representantes de los empleadores, así como de las Confederaciones de Trabajadores y deberá contener los componentes básicos para lograr una adecuada entrada en funcionamiento e implementación del trabajo remoto **Parágrafo 1.** El Departamento Nacional de Planeación – DNP –, o quien haga sus veces, deberá realizar una evaluación de la política	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
pública de trabajo remoto dentro de los primeros cinco (5) años de su implementación, y deberá presentar un informe con las conclusiones y recomendaciones al respecto a las Comisiones Séptimas Constitucionales Permanentes del Congreso de la República. **Parágrafo 2.** El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE –, o quien haga sus veces, será la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales sobre la realización de trabajo remoto por parte de la población colombiana, así como por las empresas e instituciones oficiales. Esta información deberá ser pública y estar habilitada para ser consultada y analizada de forma independiente.	pública de trabajo remoto dentro de los primeros cinco (5) años de su implementación, y deberá presentar un informe con las conclusiones y recomendaciones al respecto a las Comisiones Séptimas Constitucionales Permanentes del Congreso de la República. **Parágrafo 2.** El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE –, o quien haga sus veces, será la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales sobre la realización de trabajo remoto por parte de la población colombiana, así como por las empresas e instituciones oficiales, a partir del aprovechamiento de registros administrativos y otras fuentes de información disponibles en el Sistema Estadístico Nacional. Esta información será dispuesta por el DANE de manera agregada y anonimizada, para consulta pública, respetando la reserva estadística establecida en el artículo 5 de la Ley 79 de 1993.	
Artículo 6º. Implementación. El Gobierno Nacional fomentará a través de campañas socialización, por lo menos una vez al año, en las organizaciones tanto públicas como privadas, la implementación del trabajo remoto. Así mismo, adelantará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral en el marco del trabajo remoto y compartirá los casos de éxito y ventajas que este trae consigo para la economía y empleabilidad en Colombia	**Artículo 6. Implementación.** El Gobierno Nacional fomentará a través de campañas socialización, por lo menos una vez al año, en las organizaciones tanto públicas como privadas, la implementación del trabajo remoto. Así mismo, adelantará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral en el marco del trabajo remoto y compartirá los casos de éxito y ventajas que este trae consigo para la economía y empleabilidad en Colombia.	SIN DISCREPANCIAS
Artículo 7º. Perfeccionamiento y firma del Contrato Remoto. Todas las etapas del contrato de trabajo deberán realizarse de manera remota, usando nuevas tecnologías o las ya existentes, sin que se requiera la presencia física de las partes involucradas. **Parágrafo 1**. Los acuerdos en materia laboral remota requerirán firma electrónica de las partes para su perfeccionamiento, con el objetivo de certificar la identidad de las partes y/o eventuales cambios en el documento virtual, dicho acuerdo se tendrá por válido. **Parágrafo 2.** La implementación de este tipo de tecnologías no podrá tener costo adicional para el candidato y/o trabajador remoto, por lo que el costo de implementar las tecnologías requeridas para tal efecto correrá por cuenta del empleador. **Parágrafo 3.** Todos los documentos anexos, deberán ser cargados a la plataforma ECM que disponga el empleador. Estos documentos serán entregados en formato PDF con el objetivo de permitir la validación del documento y formarán parte integral del contrato laboral remoto. **Parágrafo 4.** En todo caso, los contratos laborales remotos, de común acuerdo entre el empleador y el trabajador, podrán incluir como parte integral, un acuerdo de confidencialidad entre las partes.	**Artículo 7o. Perfeccionamiento y firma del Contrato, bajo la forma de ejecución del contrato de trabajo remota.** Todas las etapas del contrato de trabajo deberán realizarse de manera remota, usando nuevas tecnologías o las ya existentes, sin que se requiera la presencia física de las partes involucradas, excepto en los casos en que, por salud ocupacional se requiera presencialidad. **Parágrafo 1.** Los acuerdos en materia laboral y que se ejecuten de manera remota requerirán firma electrónica o digital de las partes para su perfeccionamiento, con el objetivo de certificar la identidad de las partes y/o eventuales cambios en el documento digital. En todo caso, deberá conservar las características establecidas en la Ley 527 de 1999 u norma que la modifique, conforme a la autenticidad, integridad, disponibilidad, fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad. **Parágrafo 2.** La implementación de este tipo de tecnologías no podrá tener costo adicional para el candidato y/o trabajador remoto, por lo que el costo de implementar las tecnologías requeridas para tal efecto correrá por cuenta del empleador. **Parágrafo 3.** En todo caso, los contratos laborales, ejecutado de manera remota, de común acuerdo entre el empleador y el trabajador, podrán incluir como parte integral, un acuerdo de confidencialidad entre las partes.	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
Artículo 8º. Exámenes médicos. El empleador deberá verificar el estado de salud de sus trabajadores a través de la realización de los exámenes médicos de ingreso, periódicos y/o de egreso a sus trabajadores remotos a través de proveedores autorizados. Cuando la naturaleza del procedimiento lo permita, dichos exámenes podrán llevarse a cabo virtualmente o a través de las tecnologías existentes y/o nuevas, a través de figuras como la telemedicina o la	**Artículo 8. Exámenes médicos.** El empleador deberá verificar el estado de salud de sus trabajadores a través de la realización de los exámenes médicos de ingreso, periódicos y/o de egreso a sus trabajadores remotos a través de proveedores autorizados.	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO

valoración médica virtual y/o remota.		
Artículo 9º. Condiciones de Trabajo. El contrato de trabajo remoto se celebrará, ejecutará e incluso terminará de manera remota, mediante el uso de nuevas tecnologías. Por lo anterior, el trabajador remoto podrá prestar sus servicios desde cualquier lugar, siempre en consenso con el empleador, dedicando para ello la cantidad de tiempo que determine siempre y cuando no sobrepase la jornada máxima legal y cumpla con los requisitos mínimos previstos por el empleador en relación con la calidad y cantidad del trabajo, así como con la conectividad, equipos y herramientas implementadas para tal fin. **Parágrafo.** El trabajador remoto no podrá generar copias parciales, ni totales de los trabajos entregados.	**Artículo 9. Condiciones de Trabajo.** El trabajo remoto se ejecutará y podrá ser terminado de manera remota, mediante el uso de nuevas tecnologías u otro medio o mecanismo, sin perjuicio de las formalidades del contrato según su duración y respetando las disposiciones que sobre terminación del contrato de trabajo se encuentren en el Código Sustantivo del Trabajo, Convención Colectiva, Acuerdo Colectivo, lo que sea más favorable al trabajador. No obstante,los contratos de trabajo que migren a esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo deben conservar sus elementos de creación El trabajador remoto podrá prestar sus servicios desde cualquier lugar, siempre en consenso con el empleador, dedicando para ello la cantidad de tiempo que determine, con sujeción a la jornada laboral pactada, siempre y cuando no sobrepase la jornada máxima legal y cumpla con los requisitos mínimos previstos por el empleador en relación con la calidad y cantidad del trabajo, así como con la conectividad. Lo anterior con el debido acompañamiento de las Administradoras de Riesgos Laborales	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO

	presentes en la relación laboral.	
Artículo 10º. Herramientas y equipos de trabajo. El empleador deberá poner a disposición del trabajador remoto, salvo estipulación en contrario, las herramientas tecnológicas, instrumentos y equipos para la adecuada realización de las labores. En consonancia con el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo, en el contrato de trabajo remoto deberá constar lo siguiente: 1. Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y si es posible de espacio. 2. Determinar los días y los horarios en que el trabajador remoto realizará sus actividades para efectos de delimitar la responsabilidad en caso de accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal. 3. Definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y fijar el procedimiento de la entrega por parte del	**Artículo 10º. Herramientas y equipos de trabajo.** El empleador deberá poner a disposición del trabajador remoto, las herramientas tecnológicas, instrumentos, equipos, conexiones, programas, valor de la energía e internet y/o telefonía, así como cubrir los costos de los desplazamientos ordenados por él. El empleador deberá asumir el mantenimiento de equipos, herramientas, programas y demás elementos necesarios para la prestación y desarrollo de las labores del trabajador remoto. En consonancia con el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo, en el trabajo remoto deberá constar lo siguiente: a. Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y espacio. b. Determinar las funciones, los días y los horarios en que el trabajador remoto realizará sus actividades para efectos de ayudar a identificar el origen en caso de accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal cuando esté sometida a ella. c. Definir las	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO

trabajador remoto al momento de finalizar la modalidad de trabajo remoto. 4. Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el trabajador remoto. **Parágrafo 1.** Para efectos de lo consagrado en el presente artículo, y teniendo en cuenta la importancia que tiene para esta modalidad de trabajo el uso de tecnologías adecuadas, el empleador podrá verificar que los equipos que va a usar el trabajador remoto de forma que se pueda evidenciar que cumplen con los estándares mínimos requeridos para realizar las labores. **Parágrafo 2.** El empleador deberá acordar con el trabajador remoto el reconocimiento de un auxilio de naturaleza no salarial para cubrir los costos derivados de servicio público de energía eléctrica, conexión a internet y/o telefónica y en general de aquellos costos adicionales en los que incurra el trabajador remoto para el cumplimiento de sus labores. Este auxilio no podrá ser inferior al valor del auxilio de transporte vigente. **Parágrafo 3.** Cuando el contrato remoto fuere	responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y fijar el procedimiento de entrega de los elementos de trabajo por parte del empleador al trabajador remoto. d. Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el trabajador remoto. **Parágrafo 1.** Para efectos de lo consagrado en el presente artículo, y teniendo en cuenta la importancia que tiene para esta forma de ejecución del contrato de trabajo remota y el uso de tecnologías adecuadas, el empleador podrá verificar la conexión con la que cuente el trabajador remoto y que esta sea apta para realizar la labor. **Parágrafo 2.** Cuando el trabajo remoto fuere desarrollado en el sector público, el empleador deberá dar cumplimiento a las normativas relacionadas con el manejo electrónico de documentos, de conformidad con las tablas de retención documental establecidas por el Archivo General de la Nación. **Parágrafo 3.** Si el trabajador remoto no llegare a recibir la información necesaria para realizar sus labores o no se le facilitaran o suministrarán las herramientas, programas,	

desarrollado en el sector público, el empleador deberá dar cumplimiento a las normativas relacionadas con el manejo electrónico de documentos, de conformidad con las tablas de retención documental establecidas por el Archivo General de la Nación. **Parágrafo 4.** Si el trabajador remoto no llegara a recibir la información necesaria para realizar sus labores o no se le facilitaran o suministrarán las herramientas, programas, software o demás elementos necesarios para el desempeño de sus funciones u obligaciones, o estos presenten fallas previamente advertidas por el trabajador remoto, el empleador no podrá dejar de reconocer el pago del salario a que el trabajador tiene derecho." **Parágrafo 5.** El empleador deberá asumir el mantenimiento de equipos, herramientas, programas y demás elementos necesarios para la prestación y desarrollo de las labores del trabajador remoto.	software o demás elementos necesarios para el desempeño de sus funciones u obligaciones, o se presenten fallas previamente advertidas por el trabajador remoto, el empleador no podrá dejar de reconocer el pago del salario y demás prestaciones a que el trabajador tiene derecho.	
Artículo 11º. Subordinación. El empleador conservará el poder subordinante, específica y principalmente en lo relacionado al cómo y cuándo prestará el servicio el trabajador remoto, en el	**Artículo 11º. Subordinación.** El empleador conservará el poder subordinante, en el marco del respeto de los derechos mínimos del trabajador y de las regulaciones establecidas en la legislación laboral;	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO

marco del respeto de los derechos mínimos del trabajador y de las regulaciones establecidas en la legislación laboral; así como en lo relacionado con la facultad de ejercer el poder disciplinario a que haya lugar.	así como en lo relacionado con la facultad de ejercer el poder disciplinario a que haya lugar.	
Artículo 12º. Conexión a plataforma/sistema informático y/o tecnológico del empleador. El empleador podrá implementar una plataforma, software, programa, aplicación o cualquier herramienta tecnológica para facilitar las comunicaciones con el trabajador remoto y en general para la prestación de los servicios personales, facilitando así que el trabajador remoto se conecte a través de la red para prestar sus servicios. Las plataformas, softwares, programas, aplicaciones o similares podrán ser implementados para cumplir con cualquier obligación derivada de la relación laboral, lo cual incluye sin limitarse a los procesos disciplinarios, entrenamientos y capacitaciones, realización de reuniones de comités, formalización de beneficios e incluso la terminación del contrato de trabajo remoto. **Parágrafo.** Para la realización de toda acción y/o actuación por parte del empleador o el trabajador	**Artículo 12º. Conexión a plataforma/sistema informático y/o tecnológico del empleador.** El empleador podrá implementar una plataforma, software, programa, aplicación o cualquier herramienta tecnológica para facilitar las comunicaciones con el trabajador remoto y en general para la prestación de los servicios personales, facilitando así que el trabajador remoto se conecte a través de la red para prestar sus servicios. Las plataformas, softwares, programas, aplicaciones o similares podrán ser implementados para cumplir con cualquier obligación derivada de la relación laboral, lo cual incluye sin limitarse a los procesos, entrenamientos y capacitaciones, realización de reuniones de comités, formalización de beneficios e incluso la terminación del contrato de trabajo remoto.	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
derecho al reconocimiento y pago de las horas extras a su jornada de trabajo habitual o contractual, como también al trabajo realizado en dominicales y festivo de conformidad a lo establecido en el artículo 159 y 179 del Código Sustantivo del Trabajo.	con el empleador, ejecuten su contrato de manera remota, tendrán derecho al reconocimiento y pago de las horas extras a su jornada de trabajo ordinaria o contractual, como también al trabajo realizado en dominicales y festivo de conformidad a lo establecido en el artículo 134, 159 y 179 del Código Sustantivo del Trabajo, sin perjuicio de lo pactado para los cargos de dirección, manejo y confianza.	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
Artículo 16º. Suspensión del contrato. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, el trabajador remoto podrá libremente elegir períodos de suspensión del contrato, siempre en consenso con el empleador y de acuerdo con la disponibilidad y necesidad de la operación. Durante la suspensión del contrato el trabajador se abstendrá de prestar el servicio y el empleador estará exonerado de pagar el salario correspondiente al periodo de suspensión. El contrato de trabajo remoto permanecerá vigente durante el periodo de tiempo de la suspensión.	**NO EXISTE** **EN COMISIÓN SÉPTIMA DE SENADO SE ELIMINA ATENDIENDO QUE LA SUSPENSIÓN ESTÁ REGULADA EN EL ARTÍCULO 51 DEL CST Y AL NO PRETENDER ESTABLECER NUEVAS CONDICIONES PARA ELLO, NO SE REQUIERE DE LA INCLUSIÓN DEL ARTÍCULO EN EL PROYECTO.**	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
Artículo 17º. Citación del trabajador a las instalaciones del empleador. El empleador, de manera excepcional, podrá requerir al	**Artículo 16. Citación del trabajador a las instalaciones del empleador.** El empleador, de manera excepcional, podrá requerir al	

remoto, deberá llevarse a cabo autenticación OTP.		
Artículo 13º. Aplicación de normas para prevenir corregir y sancionar el acoso laboral. Las normas relacionadas para prevenir corregir y sancionar el acoso laboral. Serán aplicables a los empleadores o empleadores que implementen el contrato de trabajo remoto. Definidas en la Ley 1010 de 2006, y las demás normas que la adicionen, o modifiquen o complementen.	**Artículo 13º. Aplicación de normas para prevenir corregir y sancionar el acoso laboral.** Las normas definidas en la Ley 1010 de 2006 y las demás normas que la adicionen, o modifiquen o complementen, relacionadas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral, serán aplicables a los empleadores y trabajadores que implementen el trabajo remoto	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
Artículo 14º. Periodos de pago del salario. El pago del salario para trabajadores remotos podrá hacerse de manera diaria, semanal, quincenal, mensual o como lo acuerden las partes; en el caso de la periodicidad mensual, el salario en dinero deberá pagarse por periodos iguales y vencidos, podrá pagarse en periodo mensual siguiente a aquel en el que fue causado. Lo anterior, no obsta para que cumplida y oportunamente se haga el pago de aportes a seguridad social y parafiscales dentro de los plazos previstos en la ley vigente.	**Artículo 14º. Periodos de pago del salario**. El pago del salario se hará conforme a las reglas establecidas en el artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo y normas concordantes	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
Artículo 15º. Los trabajadores vinculados por medio de la modalidad de trabajo remoto tendrán	**Artículo 15º. Reconocimiento horas extras.** Los trabajadores que, de común acuerdo	
trabajador remoto en sus instalaciones laborales para los siguientes casos: 1. Verificación de los estándares y requisitos que deben cumplir las herramientas y los equipos de trabajo para la realización de la labor previstos anteriormente por el empleador. 2. Cuando para la ejecución de las labores del trabajador remoto, se deban instalar o actualizar manualmente en los equipos de trabajo algún tipo de software, programa, aplicación o plataforma. 3. Cuando el trabajador presente reiteradamente el incumplimiento de sus labores. 4. Citación para proceso de descargos laborales, así como las demás citaciones que sean requeridas por el empleador para adelantar el proceso sancionatorio o disciplinario para la aplicación de lo contemplado en los artículos 111 y 112 del Código	trabajador remoto en sus instalaciones laborales, para los siguientes casos: 1. Verificación de los estándares y requisitos que deben cumplir las herramientas y los equipos de trabajo para la realización de la labor previstos anteriormente por el empleador. 2. Cuando para la ejecución de las labores del trabajador remoto, se deban instalar o actualizar manualmente en los equipos de trabajo algún tipo de software, programa, aplicación o plataforma 3. Cuando el trabajador presente reiteradamente el incumplimiento de sus labores y eventualmente sea citado para proceso de descargos laborales, así como las demás citaciones que sean requeridas por el empleador para adelantar el proceso sancionatorio o disciplinario para la aplicación de lo contemplado en los artículos 111 y 112 del Código Sustantivo del Trabajo. **Parágrafo.** El trabajador remoto, no será beneficiario del auxilio de transporte determinado por la ley. En caso de que el empleador requiera que el trabajador remoto se presente en sus instalaciones, siempre que el trabajador remoto cumpla con los requisitos legales para ello, deber	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO

Sustantivo del Trabajo. **Parágrafo.** En caso de que el empleador requiera que el trabajador remoto se presente en sus instalaciones, siempre que el trabajador remoto cumpla con los requisitos legales para ello, el empleador deberá reconocer de manera proporcional el auxilio legal de transporte previsto en la legislación laboral vigente.	reconocer, en los casos en que sea aplicable de acuerdo con la normativa vigente y de manera proporcional, el auxilio legal de transporte previsto en la legislación laboral vigente **Parágrafo 2.** En todo caso, las citaciones aquí previstas no dan lugar al cambio de forma de ejecución del contrato de trabajo remota, toda vez que continuar siendo remoto.	
Artículo 18º. Dotación de calzado y vestido. El trabajador remoto no tendrá derecho a recibir la prestación social denominada calzado y vestido en los términos previstos en el Código Sustantivo del Trabajo. Lo anterior considerando que la prestación del servicio no supone la necesidad de utilizar un vestido o calzado de labor.	**SE ELIMINA** **NO ES GARANTISTA CONDICIONAR ESTA DISPOSICIÓN POR TRATARSE DE GARANTÍAS DE TODO TRABAJADOR ANTE LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO. NO ES LA INTENCIÓN DEL PROYECTO.**	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
Artículo 19º. Control de horarios y cumplimiento de funciones y obligaciones en contratos de trabajo remoto. El empleador se encuentra facultado y autorizado para controlar el cumplimiento de las obligaciones, funciones y deberes del trabajador remoto, mediante el uso de herramientas tecnológicas, pero en todo caso, el empleador	**Artículo 18°. Control de horarios y cumplimiento de funciones y obligaciones en el trabajo remoto.** El empleador se encuentra facultado y autorizado para controlar el cumplimiento de las obligaciones, funciones y deberes del trabajador remoto, mediante el uso de herramientas tecnológicas u otros medios o mecanismos,	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO

respetará la intimidad y privacidad del trabajador remoto. Se entenderá como privacidad del trabajador remoto, para efectos de la presente ley, cualquier asunto diferente a aquellos directa o indirectamente relacionados con las labores, funciones, deberes y/u obligaciones que tenga el trabajador remoto en virtud de su contrato de trabajo y que permita armonizar la jornada pactada con la vida familiar y personal de los trabajadores remotos, evitando con ello, asigna cargas diferentes a las pactadas en la jornada laboral remota. Para ello, el empleador y trabajador remoto deberán ceñirse a la jornada pactada, con la intención de evitar la hiperconexión, que puede generar impactos en la salud y equilibrio emocional de los trabajadores remotos. **Parágrafo 1.** Toda entidad, pública o privada, que utilice la modalidad de contratación laboral remoto, deberá poseer un software de administración de contenidos, que permita generar trazabilidad, formularios electrónicos, validación automática de listas restrictivas, creación de documentos PDF, flujos de trabajo parametrizables con modelador BPM (Business Process Management), a	pero en todo caso, el empleador respetará la intimidad y privacidad del trabajador remoto, y el derecho a la desconexión laboral, entendida como la garantía que todo trabajador y empleador, de no tener contacto con herramientas, bien sea tecnológicas o no, relacionadas con su ámbito laboral, después de culminada la jornada ordinaria de trabajo o durante de ella, en el tiempo que se haya conciliado para la vida personal y familiar. Se entenderá como privacidad del trabajador remoto, para efectos de la presente ley, cualquier asunto diferente a aquellos directa o indirectamente relacionados con las labores, funciones, deberes y/u obligaciones que tenga el trabajador remoto en virtud de su contrato de trabajo y que permita armonizar la jornada pactada con la vida familiar y personal de los trabajadores remotos, evitando con ello, asignar cargas diferentes a las pactadas en la jornada laboral remota. Para ello, el empleador y trabajador remoto deberán ceñirse a la jornada pactada, con la intención de evitar la hiperconexión, que puede generar impactos en la salud y equilibrio emocional de los trabajadores remotos.	

su vez deberá poseer funcionalidades de ejecución de usuario, ejecución de temporizadores, ejecución de sistema y herramientas de actividades que se puedan configurar en las ejecuciones. **Parágrafo 2.** Toda entidad que utilice la modalidad de contratación laboral remota, deberá poseer un módulo de validación real de la identidad de los trabajadores remotos, a través de tecnologías de validación biométrica.		
Artículo 20º. Formulario electrónico único de afiliación al Sistema General de Seguridad Social y entidades parafiscales. Sin perjuicio de los mecanismos de afiliación previstos para el Sistema de Riesgos Laborales y/o el Sistema de Afiliación Transaccional previsto para el Sistema de Salud, el Gobierno Nacional deberá diseñar e implementar un formulario único de afiliación al Sistema General de Seguridad Social y a las entidades parafiscales que permita a los trabajadores remotos inscribirse al Sistema General de Seguridad Social sin que se requiera la firma manuscrita de las partes y podrá radicarse remota o virtualmente.	**Artículo 19. Formulario electrónico único de afiliación al Sistema General de Seguridad Social y entidades parafiscales.** Sin perjuicio de los mecanismos de afiliación previstos para el Sistema de Riesgos Laborales y/o el Sistema de Afiliación Transaccional previsto para el Sistema de Salud, el Gobierno Nacional deberá diseñar e implementar un formulario único de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en un tiempo no mayor 1 año (un año) y a las entidades parafiscales que permita a los trabajadores remotos inscribirse al Sistema General de Seguridad Social sin que se requiera la firma manuscrita de las partes y podrá radicarse remota o virtualmente.	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO

Artículo 21º. Aportes a la Seguridad Social. El contrato de trabajo remoto en materia de aportes a la seguridad social se regulará por las normas vigentes en materia de Sistema General de Seguridad Social.	**Artículo 20. Aportes a la Seguridad Social.** El contrato de trabajo, ejecutado de manera remota, en materia de aportes a la seguridad social se regulará por las normas vigentes en materia de Sistema General de Seguridad Social.	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
Artículo 22º. Las Administradoras de Riesgos Laborales, deberán elaborar un programa de prevención, control y actuación de riesgos laborales que llegaren a presentar los trabajadores remotos y de rehabilitación integral, el cual deberá ser suministrado tanto al trabajador como al empleador. El empleador tendrá la obligación de afiliar al trabajador remoto al Sistema General de Riesgos Laborales, conforme a lo establecido en la Ley 776 de 2002 y el Decreto-Ley 1295 de 1994, modificado por la Ley 1562 de 2012. Para efectos de lo cual, el empleador deberá allegar, a la Administradora de Riesgos laborales – ARL - , copia del contrato o del acto administrativo de vinculación laboral del trabajador remoto, adjuntando el formulario facilitado por ésta para la determinación del riesgo y definición del origen de las contingencias que llegaren a presentarse.	**Artículo 21°. Programa de prevención, control y actuación de riesgos laborales**. Las Administradoras de Riesgos Laborales, deberán elaborar un programa de prevención, control y actuación de riesgos laborales y de rehabilitación integral que llegaren a presentar los trabajadores remotos, el cual deberá ser suministrado tanto al trabajador como al empleador. El empleador tendrá la obligación de afiliar al trabajador remoto al Sistema General de Riesgos Laborales, conforme a lo establecido en la Ley 776 de 2002 y el Decreto-Ley 1295 de 1994, modificado por la Ley 1562 de 2012. Para efectos de lo cual, el empleador deberá allegar, a la Administradora de Riesgos laborales – ARL - , copia del contrato o del acto administrativo de vinculación laboral del trabajador remoto, adjuntando el formulario facilitado por ésta para la determinación del riesgo y definición del origen de las	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO

Parágrafo 1. Las Aseguradoras de Riesgos Laborales deberán elaborar el formulario a que hace referencia el presente artículo, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de ley, en el cual deberá solicitarse la descripción de las actividades que ejecutará el trabajador remoto, el lugar en el cual se desarrollarán, el horario en el cual se ejecutarán, la clase de riesgo que corresponde a las labores ejecutadas y la clase de riesgo correspondiente a la empresa o centro de trabajo; dicho formulario deberá publicado en la página web de la ARL, para fines de consulta y descargue para diligenciamiento de aquellos empleadores que puedan llegar a requerirlo. **Parágrafo 2.** Las Administradoras de Riesgos Laborales acompañarán a los trabajadores remotos y a los empleadores en la verificación de las condiciones de trabajo, que garanticen al trabajador remoto una real seguridad y salud en el trabajo.	contingencias que llegaren a presentarse. **Parágrafo 1.** Las Aseguradoras de Riesgos Laborales deberán elaborar el formulario a que hace referencia el presente artículo, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, en el cual deberá solicitarse la descripción de las actividades que ejecutará el trabajador remoto, el lugar en el cual se desarrollarán, el horario en el cual se ejecutarán, la clase de riesgo que corresponde a las labores ejecutadas y la clase de riesgo correspondiente a la empresa o centro de trabajo; dicho formulario deberá ser publicado en la página web de la ARL, para fines de consulta y descarga para diligenciamiento de aquellos empleadores que puedan llegar a requerirlo. En el caso que existan múltiples contratos, el formulario deber permitir identificar los contratos que relaciona y los datos que se relacionan en anterior inciso. **Parágrafo 2.** Las Administradoras de Riesgos Laborales acompañarán de manera obligatoria, a los trabajadores remotos y a los empleadores en la verificación de las condiciones de trabajo, que garanticen al	

	trabajador remoto una real seguridad y salud en el trabajo.	
Artículo 23º. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, empleadores y trabajadores remotos en cualquiera de sus modalidades podrán acogerse a las disposiciones propias de los trabajadores remotos, con el fin de que estas disposiciones les sean aplicables, mediando la concurrencia de voluntades entre trabajador y empleador.	**Artículo 22. Migración a trabajo remoto.** A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, cualquier trabajador podrá acogerse a esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo remota prevista en esta ley, siempre que medie la concurrencia de voluntades entre trabajador y empleador, sin menoscabo de los derechos laborales adquiridos.	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
Artículo 24º. Aplicación de normas respecto salas de lactancia. Las normas relacionadas con las Salas Amigas de la Familia Lactante del entorno laboral, no serán aplicables a los empleadores que implementen el contrato de trabajo remoto para vincular trabajadores remotos.	**Artículo 23°. Aplicación de normas respecto de tiempo de lactancia**. El empleador garantizará en todo momento las horas de lactancia y los tiempos de licencia de maternidad, a que tiene derecho la madre trabajadora y lactante sin que ello implique el desmejoramiento de sus condiciones laborales	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
Artículo 25º. Las empresas que tengan trabajadores acogidos a la modalidad de trabajo remoto deberán garantizar que mínimo el 10% de dichos trabajadores sean pertenecientes a grupos étnicos y/o personas en situación de discapacidad; lo cual será exigible siempre y cuando se cuente con la oferta de	**Artículo 24°. Vinculación sector especialmente protegidos**. Los empleadores que hagan uso de esta forma de ejecución del contrato de trabajo remota deberán promover la vinculación de jóvenes, mujeres, trabajadores y trabajadoras que sean pertenecientes a grupos étnicos y/o personas con discapacidad.	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO

perfiles requeridos dentro de dichos grupos.		
ARTÌCULO NUEVO. La reproducción, traducción, adaptación, arreglo o transformación de contenidos desarrollados por el trabajador en medios remotos no podrán ser usados ni explotados económicamente por el empleador por fuera del termino de duración de la relación contractual. Cualquier disposición contractual en contrario es inexistente de pleno derecho. La reproducción, traducción, adaptación, arreglo o transformación de contenidos desarrollados por el trabajador en medios remotos no podrán ser usados ni explotados económicamente por el empleador por fuera del termino de duración de la relación contractual. Cualquier disposición contractual en contrario es inexistente de pleno derecho.	**SE ELIMINA**	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
ARTÍCULO NUEVO. TAREAS DE CUIDADOS. Las personas que trabajen bajo esta modalidad y que acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de catorce (14) años, personas con discapacidad o adultas mayores que convivan con la persona trabajadora y que requieran asistencia	**Artículo 25°. Tareas de cuidados**. Las personas que trabajen de manera remota y que acrediten tener a su cargo, de manera única, el cuidado de personas menores de catorce (14) años, personas con discapacidad o adultas mayores en primer grado de consanguinidad que convivan con el trabajador remoto y que requieran	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO

específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada.	asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada, con un autorización previa al empleador que permita la interrupción, sin el desmejoramiento de sus condiciones laborales.	
ARTÍCULO NUEVO. Cuando se tratare del régimen privado, la exclusividad laboral podrá ser pactada de común acuerdo entre las partes cuando la naturaleza de la labor a realizar así lo requiera.	**SE ELIMINA** **Por considerarse inmersa dentro de la exclusividad, mencionada anteriormente en el proyecto.**	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
ARTICULO NUEVO. En consenso con el empleador, el trabajador remoto podrá prestar los servicios para el cual fue contratado por horas, conforme sus necesidades y las del empleador. Igualmente, las partes podrán programar los servicios, observando los límites mínimos y máximos de la jornada por semana establecidos en las leyes vigentes. Dicha jornada por horas pactada será distribuida en la semana y no implicaría un cumplimiento de horario estricto diario, sin perjuicio de la verificación que ejercerá el empleador de manera semanal para comprobar el cumplimiento de lo pactado.	**Articulo 26°. Sobre la Jornada laboral en el trabajo remoto.** La jornada laboral en esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo remota, se ajustar a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, convención colectiva, acuerdo colectivo o contrato de trabajo, la que sea más favorable al trabajador. El trabajador remoto podrá prestar los servicios para el cual fue contratado, conforme sus necesidades y las del empleador. Lo anterior no permitirá, en ningún caso y por ningún motivo, el desmejoramiento de las condiciones salariales del trabajador. Dicha jornada ser	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO

Parágrafo. El Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Trabajo en un plazo no mayor a 6 meses, reglamentará la proporción de los aportes y realizará los ajustes correspondientes a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes para aquellos contratos de trabajo remotos cuyos periodos de pagos sean por horas.	distribuida en la semana y no implicaría un cumplimiento estricto de horario al día	
NO EXISTE	**Artículo 27°.** Los empleados públicos podrán ejecutar sus funciones por medio del trabajo remoto consagrado en la presente ley, para lo cual se respetarán todos sus derechos y garantías laborales inherentes a su vinculación legal y reglamentaria conforme las normas vigentes.	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
Artículo 26º. Vigencia. La presente Ley rige a partir de su sanción, promulgación y publicación en el Diario Oficial.	**Artículo 28°. Vigencia.** La presente Ley rige a partir de su sanción, promulgación y publicación en el Diario Oficial.	NO HAY DISCREPANCIAS

Con el fin de dar cumplimiento a la designación, y después de analizados los textos provenientes de Cámara y Senado y atendiendo que una vez radicada la ponencia del segundo debate ante la Plenaria del Senado, el Ministerio de Trabajo y sectores interesados presentaron valiosos aportes que ayudaron a mejorar, precisar y enriquecer el proyecto, y por ello, se define por parte de los conciliadores acoger el texto aprobado en Senado, atendiendo los cambios debidamente relacionados, pues recoge con mayor precisión la intención del legislador frente al Proyecto de Ley.

A continuación, el texto conciliado.

TEXTO CONCILIADO PROYECTO DE LEY 192 DE 2019 CÁMARA – 274 DE 2020 SENADO "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL RÉGIMEN DE TRABAJO REMOTO Y SE ESTABLECEN NORMAS PARA PROMOVERLO, REGULARLO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Artículo 1o. Objeto. La presente ley tiene por objeto crear una nueva forma de ejecución del contrato de trabajo, denominada trabajo remoto, la cual será pactada de manera voluntaria por las partes y podrá ser desarrollada a través de las tecnologías existentes y nuevas, u otros medios y mecanismos que permitan ejercer la labor contratada de manera remota.
Esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo se efectuará de manera remota en su totalidad e implica una vinculación laboral con el reconocimiento de los derechos y garantías derivadas de un contrato de trabajo.

Artículo 2o. Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en esta Ley serán aplicables a toda persona natural que se encuentren domiciliadas en el territorio nacional; así como las entidades públicas y privadas nacionales; y a su vez a las empresas extranjeras que contraten trabajadores que se encuentren dentro del territorio nacional.
Parágrafo: Las entidades del orden nacional deberán contar con concepto previo y habilitante por parte del Ministerio de Hacienda para obtener la disponibilidad presupuestal que permita acoger lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 3o. Definiciones. Para efectos de la presente ley, se entenderán las siguientes definiciones:

a. Trabajo remoto: Es una forma de ejecución del contrato de trabajo en la cual toda la relación laboral, desde su inicio hasta su terminación, se debe realizar de manera remota mediante la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones u otro medio o mecanismo, donde el empleador y trabajador, no interactúan físicamente a lo largo de la vinculación contractual. En todo caso, esta forma de ejecución no comparte los elementos constitutivos y regulados para el teletrabajo y/o trabajo en casa y las normas que lo modifiquen.
b. Nueva forma de ejecución del contrato remota. Es aquella por la cual una persona natural, vinculada por un contrato laboral, se obliga a prestar una actividad remota a través de las tecnologías disponibles u otro medio o mecanismo, en favor de otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante la obtención de un salario, lo cual puede constar en medios digitales. En esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo, las partes podrán manifestar su consentimiento y o aceptación mediante el uso de la firma electrónica –digital y a través de mensajes de datos, bajo los principios y características establecidas en la Ley 527 de 1999 u norma que la modifique, conforme a la autenticidad, integridad, disponibilidad, fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad.
c. Trabajador remoto: Persona natural, cubierta por los principios mínimos del trabajo y vinculado mediante un contrato de trabajo, desarrollando actividades de manera remota a través de las tecnologías existentes y nuevas u otro medio o mecanismo.
d. Nuevas tecnologías: Cualquier medio, plataforma, software, programa, equipo, dispositivo y/o equipo que permita la comunicación, interacción y/o ejecución del contrato de trabajo de manera remota mediante una conexión a internet o a cualquier otra red que permita ejecutar dichas acciones. Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones contempladas en el artículo 6 de la ley 1341 de 2009.
e. Firma Electrónica: Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas privadas, que permite identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente, este conjunto de datos electrónicos acompañan o están asociados a un documento electrónico y cuyas funciones básicas son (i) identificar a una persona de manera inequívoca, (ii) Asegurar la exclusividad e integridad del documento firmado y (iii) los datos que utiliza el firmante para realizar la firma son únicos y exclusivos y, por tanto, posteriormente, no puede negarse la firma el documento.
f. OTP (One Time Password): es un mecanismo de autenticación, el cual consiste en un código temporal que le llega a la persona a través de mensaje de texto SMS o correo electrónico certificado, para que este pueda de manera segura realizar acciones virtuales, en donde se certificará la identidad de la persona, ya sea vía internet o mediante la aplicación para teléfonos móviles (APP). El presente mecanismo puede ser opcional por el empleador, si se considera necesario para la seguridad de sus acciones remotas. En todo caso, deberá tener un mecanismo idóneo como lo describe el literal e del presente artículo para todo tipo de acción.

Artículo 4o. Principios Generales del Trabajo Remoto. Para efectos de la presente ley, los principios que aquí se exponen, son de obligatorio cumplimiento por las partes:

a. El trabajo remoto requerirá para todos los efectos, la concurrencia de los elementos esenciales mencionados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
b. Estará basado en el respeto y garantía de los derechos mínimos en materia laboral. Los trabajadores vinculados mediante el contrato laboral para ejecutar sus funciones por medio del trabajo remoto, tendrán los mismos derechos laborales de que gozan todos los trabajadores, incluidas las garantías sindicales y de seguridad social.
c. Esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo remota no requiere un lugar físico determinado para la prestación de los servicios. El trabajador podrá prestar sus servicios desde el lugar que considere adecuado, de común acuerdo con el empleador, previo visto bueno de la Administradora de Riesgos Laborales presente en el contrato. No obstante, en todo momento deberá contar con una conexión y cobertura a internet e informar al empleador sobre el lugar desde el cual realizará su labor y este deberá aprobar el lugar escogido para garantizar el cumplimiento de los requerimientos mínimos de seguridad y salud en el trabajo, atendiendo las recomendaciones de la Administradora de Riesgos Laborales, propiciando el autocuidado como medida preventiva.
d. El trabajo remoto tiene como principio la flexibilidad en todas las etapas precontractuales y contractuales, de forma que incluso el perfeccionamiento del contrato de trabajo deberá darse de manera remota, haciendo uso de las tecnologías existentes y nuevas u otro medio o mecanismo, completando su perfección con la firma electrónica u digital. El trabajador remoto y el empleador acordarán el tiempo de ejecución, sin perjuicio de las formalidades del contrato a término fijo, y el momento de la prestación del servicio, sin sobrepasar la jornada máxima legal, y sin que ello implique un desconocimiento de sus derechos mínimos y/o garantías irrenunciables, excepto si se trata de un cargo de dirección, confianza y manejo.
e. Al trabajo remoto se le aplicarán las normas sobre garantías y derechos sindicales previstas en la legislación laboral vigente.
f. No existe la exclusividad laboral en esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo. En todo caso, se regirá por lo establecido en el artículo 26 del Código Sustantvo del Trabajo o norma que lo modifique, en tanto que, basados en la concurrencia de voluntades, el trabajo remoto supone la disponibilidad del empleador y a su vez la libertad para ejercer otras labores, sin embargo, por acuerdo de voluntades y atendiendo la naturaleza del contrato en específico, esta puede pactarse cuando se encuentre en riesgo asuntos confidenciales del empleador. Debe mediar la aceptación del empleado para estipularse la cláusula de exclusividad.
g. Se garantiza la no discriminación en los procesos de selección y ejecución de los contratos de trabajo que se organicen y ejecuten de manera remota, así como la igualdad de trato para los trabajadores remotos.
Parágrafo 1. El literal f del presente artículo no podrá aplicarse a las personas que laboren en entidades públicas de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Constitución Política de Colombia.

Artículo 5. Política Pública del Trabajo Remoto. Con el fin de desarrollar los propósitos y objetivo de la presente ley, el Gobierno Nacional, en un plazo no mayor a 6 (seis) meses, a través de las autoridades competentes que el gobierno designe y con la activa participación de los diferentes sectores sociales involucrados, diseñará e implementará una política pública sobre los lineamientos para la estructuración y desarrollo del trabajo remoto en el país, teniendo cuenta las diferentes disposiciones de la presente ley.
Esta política deberá contar con el acompañamiento de las autoridades correspondientes, los representantes de los empleadores, así como de las Confederaciones de Trabajadores y deberá contener los componentes básicos para lograr una adecuada entrada en funcionamiento e implementación del trabajo remoto.

Parágrafo 1. El Departamento Nacional de Planeación – DNP –, o quien haga sus veces, deberá realizar una evaluación de la política pública de trabajo remoto dentro de los primeros cinco (5) años de su implementación, y deberá presentar un informe con las conclusiones y recomendaciones al respecto a las Comisiones Séptimas Constitucionales Permanentes del Congreso de la República.

Parágrafo 2. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE –, o quien haga sus veces, será la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales sobre la realización de trabajo remoto por parte de la población colombiana, así como por las empresas e

instituciones oficiales, a partir del aprovechamiento de registros administrativos y otras fuentes de información disponibles en el Sistema Estadístico Nacional. Esta información será dispuesta por el DANE de manera agregada y anonimizada, para consulta pública, respetando la reserva estadística establecida en el artículo 5 de la Ley 79 de 1993.

Artículo 6o. Implementación. El Gobierno Nacional fomentará a través de campañas de socialización, por lo menos una vez al año, en las organizaciones tanto públicas como privadas, la implementación del trabajo remoto. Así mismo, adelantará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral en el marco del trabajo remoto y compartirá los casos de éxito y ventajas que este trae consigo para la economía y empleabilidad en Colombia.

Artículo 7o. Perfeccionamiento y firma del Contrato, bajo la forma de ejecución del contrato de trabajo remota. Todas las etapas del contrato de trabajo deberán realizarse de manera remota, usando nuevas tecnologías o las ya existentes, sin que se requiera la presencia física de las partes involucradas, excepto en los casos en que, por salud ocupacional se requiera presencialidad.

Parágrafo 1. Los acuerdos en materia laboral y que se ejecuten de manera remota requerirán firma electrónica o digital de las partes para su perfeccionamiento, con el objetivo de certificar la identidad de las partes y/o eventuales cambios en el documento digital.

En todo caso, deberá conservar las características establecidas en la Ley 527 de 1999 u norma que la modifique, conforme a la autenticidad, integridad, disponibilidad, fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad.

Parágrafo 2. La implementación de este tipo de tecnologías no podrá tener costo adicional para el candidato y/o trabajador remoto, por lo que el costo de implementar las tecnologías requeridas para tal efecto correrá por cuenta del empleador.

Parágrafo 3. En todo caso, los contratos laborales, ejecutado de manera remota, de común acuerdo entre el empleador y el trabajador, podrán incluir como parte integral, un acuerdo de confidencialidad entre las partes.

Artículo 8º. Exámenes médicos. El empleador deberá verificar el estado de salud de sus trabajadores a través de la realización de los exámenes médicos de ingreso, periódicos y/o de egreso a sus trabajadores remotos a través de proveedores autorizados.

Artículo 9o. Condiciones de Trabajo. El trabajo remoto se ejecutará y podrá ser terminado de manera remota, mediante el uso de nuevas tecnologías u otro medio o mecanismo, sin perjuicio de las formalidades del contrato según su duración y respetando las disposiciones que sobre terminación del contrato de trabajo se encuentren en el Código Sustantivo del Trabajo, Convención Colectiva, Acuerdo Colectivo, lo que sea más favorable al trabajador. No obstante,los contratos de trabajo que migren a esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo deben conservar sus elementos de creación

El trabajador remoto podrá prestar sus servicios desde cualquier lugar, siempre en consenso con el empleador, dedicando para ello la cantidad de tiempo que determine, con sujeción a la jornada laboral pactada, siempre y cuando no sobrepase la jornada máxima legal y cumpla con los requisitos mínimos previstos por el empleador en relación con la calidad y cantidad del trabajo, así como con la conectividad. Lo anterior con el debido acompañamiento de las Administradoras de Riesgos Laborales presentes en la relación laboral.

Artículo 10º. Herramientas y equipos de trabajo. El empleador deberá poner a disposición del trabajador remoto, las herramientas tecnológicas, instrumentos, equipos, conexiones, programas, valor de la energía e internet y/o telefonía, así como cubrir los costos de los desplazamientos ordenados por él.

El empleador deberá asumir el mantenimiento de equipos, herramientas, programas y demás elementos necesarios para la prestación y desarrollo de las labores del trabajador remoto. En consonancia con el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo, en el trabajo remoto deberá constar lo siguiente:

a. Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y espacio.
b. Determinar las funciones, los días y los horarios en que el trabajador remoto realizará sus actividades para efectos de ayudar a identificar el origen en caso de accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal cuando esté sometida a ella. c. Definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y fijar el procedimiento de entrega de los elementos de trabajo por parte del empleador al trabajador remoto.
d. Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el trabajador remoto.

Parágrafo 1. Para efectos de lo consagrado en el presente artículo, y teniendo en cuenta la importancia que tiene para esta forma de ejecución del contrato de trabajo remota y el uso de tecnologías adecuadas, el empleador podrá verificar la conexión con la que cuente el trabajador remoto y que esta sea apta para realizar la labor.

Parágrafo 2. Cuando el trabajo remoto fuere desarrollado en el sector público, el empleador deberá dar cumplimiento a las normativas relacionadas con el manejo electrónico de documentos, de conformidad con las tablas de retención documental establecidas por el Archivo General de la Nación.

Parágrafo 3. Si el trabajador remoto no llegare a recibir la información necesaria para realizar sus labores o no se le facilitaran o suministraran las herramientas, programas, software o demás elementos necesarios para el desempeño de sus funciones u obligaciones, o se presenten fallas previamente advertidas por el trabajador remoto, el empleador no podrá dejar de reconocer el pago del salario y demás prestaciones a que el trabajador tiene derecho.

Artículo 11º. Subordinación. El empleador conservará el poder subordinante, en el marco del respeto de los derechos mínimos del trabajador y de las regulaciones establecidas en la legislación laboral; así como en lo relacionado con la facultad de ejercer el poder disciplinario a que haya lugar.

Artículo 12º. Conexión a plataforma/sistema informático y/o tecnológico del empleador. El empleador podrá implementar una plataforma, software, programa, aplicación o cualquier herramienta tecnológica para facilitar las comunicaciones con el trabajador remoto y en general para la prestación de los servicios personales, facilitando así que el trabajador remoto se conecte a través de la red para prestar sus servicios. Las plataformas, softwares, programas, aplicaciones o similares podrán ser implementados para cumplir con cualquier obligación derivada de la relación laboral, lo cual incluye sin limitarse a los procesos, entrenamientos y capacitaciones, realización de reuniones de comités, formalización de beneficios e incluso la terminación del contrato de trabajo remoto.

Artículo 13º. Aplicación de normas para prevenir corregir y sancionar el acoso laboral. Las normas definidas en la Ley 1010 de 2006 y las demás normas que la adicionen, o modifiquen o complementen, relacionadas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral, serán aplicables a los empleadores y trabajadores que implementen el trabajo remoto

Artículo 14º. Periodos de pago del salario. El pago del salario se hará conforme a las reglas establecidas en el artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo y normas concordantes

Artículo 15º. Reconocimiento horas extras. Los trabajadores que, de común acuerdo con el empleador, ejecuten su contrato de manera remota, tendrán derecho al reconocimiento y pago de las horas extras a su jornada de trabajo ordinaria o contractual, como también al trabajo realizado en dominicales y festivo de conformidad a lo establecido en el artículo 134, 159 y 179 del Código Sustantivo del Trabajo, sin perjuicio de lo pactado para los cargos de dirección, manejo y confianza.

Artículo 16. Citación del trabajador a las instalaciones del empleador. El empleador, de manera excepcional, podrá requerir al trabajador remoto en sus instalaciones laborales, para los siguientes casos:
1. Verificación de los estándares y requisitos que deben cumplir las herramientas y los equipos de trabajo para la realización de la labor previstos anteriormente por el empleador.
2. Cuando para la ejecución de las labores del trabajador remoto, se deban instalar o actualizar manualmente en los equipos de trabajo algún tipo de software, programa, aplicación o plataforma
3. Cuando el trabajador presente reiteradamente el incumplimiento de sus labores y eventualmente sea citado para proceso de descargos laborales, así como las demás citaciones que sean requeridas por el empleador para adelantar el proceso sancionatorio o disciplinario para la aplicación de lo contemplado en los artículos 111 y 112 del Código Sustantivo del Trabajo.

P**arágrafo.** El trabajador remoto, no será beneficiario del auxilio de transporte determinado por la ley. En caso de que el empleador requiera que el trabajador remoto se presente en sus instalaciones, siempre que el trabajador remoto cumpla con los requisitos legales para ello, deberá reconocer, en los casos en que sea aplicable de acuerdo con la normativa vigente y de manera proporcional, el auxilio legal de transporte previsto en la legislación laboral vigente

Parágrafo 2. En todo caso, las citaciones aquí previstas no dan lugar al cambio de forma de ejecución del contrato de trabajo remota, toda vez que continuar siendo remoto.

Artículo 17. °. Control de horarios y cumplimiento de funciones y obligaciones en el trabajo remoto. El empleador se encuentra facultado y autorizado para controlar el cumplimiento de las obligaciones, funciones y deberes del trabajador remoto, mediante el uso de herramientas tecnológicas u otros medios o mecanismos, pero en todo caso, el empleador respetará la intimidad y privacidad del trabajador remoto, y el derecho a la desconexión laboral, entendida como la garantía que todo trabajador y empleador, de no tener contacto con herramientas, bien sea tecnológicas o no, relacionadas con su ámbito laboral, después de culminada la jornada ordinaria de trabajo o durante de ella, en el tiempo que se haya conciliado para la vida personal y familiar.
Se entenderá como privacidad del trabajador remoto, para efectos de la presente ley, cualquier asunto diferente a aquellos directa o indirectamente relacionados con las labores, funciones, deberes y/u obligaciones que tenga el trabajador remoto en virtud de su contrato de trabajo y que permita armonizar la jornada pactada con la vida familiar y personal de los trabajadores remotos, evitando con ello, asignar cargas diferentes a las pactadas en la jornada laboral remota.
Para ello, el empleador y trabajador remoto deberán ceñirse a la jornada pactada, con la intención de evitar la hiperconexión, que puede generar impactos en la salud y equilibrio emocional de los trabajadores remotos.

Artículo 18. Formulario electrónico único de afiliación al Sistema General de Seguridad Social y entidades parafiscales. Sin perjuicio de los mecanismos de afiliación previstos para el Sistema de Riesgos Laborales y/o el Sistema de Afiliación Transaccional previsto para el Sistema de Salud, el Gobierno Nacional deberá diseñar e implementar un formulario único de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en un tiempo no mayor 1 año (un año) y a las entidades parafiscales que permita a los trabajadores remotos inscribirse al Sistema General de Seguridad Social sin que se requiera la firma manuscrita de las partes y podrá radicarse remota o virtualmente.

Artículo 19. Aportes a la Seguridad Social. El contrato de trabajo, ejecutado de manera remota, en materia de aportes a la seguridad social se regulará por las normas vigentes en materia de Sistema General de Seguridad Social.

Artículo 20°. Programa de prevención, control y actuación de riesgos laborales. Las Administradoras de Riesgos Laborales, deberán elaborar un programa de prevención, control y actuación de riesgos laborales y de rehabilitación integral que llegaren a presentar los trabajadores remotos, el cual deberá ser suministrado tanto al trabajador como al empleador. El empleador tendrá la obligación de afiliar al trabajador remoto al Sistema General de Riesgos Laborales, conforme a lo establecido en la Ley 776 de 2002 y el Decreto-Ley 1295 de 1994, modificado por la Ley 1562 de 2012. Para efectos de lo cual, el empleador deberá allegar, a la Administradora de Riesgos laborales – ARL -, copia del contrato o del acto administrativo de vinculación laboral del trabajador remoto, adjuntando el formulario

facilitado por ésta para la determinación del riesgo y definición del origen de las contingencias que llegaren a presentarse.

Parágrafo 1. Las Aseguradoras de Riesgos Laborales deberán elaborar el formulario a que hace referencia el presente artículo, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, en el cual deberá solicitarse la descripción de las actividades que ejecutará el trabajador remoto, el lugar en el cual se desarrollarán, el horario en el cual se ejecutarán, la clase de riesgo que corresponde a las labores ejecutadas y la clase de riesgo correspondiente a la empresa o centro de trabajo; dicho formulario deberá ser publicado en la página web de la ARL, para fines de consulta y descarga para diligenciamiento de aquellos empleadores que puedan llegar a requerirlo. En el caso que existan múltiples contratos, el formulario deber permitir identificar los contratos que relaciona y los datos que se relacionan en anterior inciso.

Parágrafo 2. Las Administradoras de Riesgos Laborales acompañarán de manera obligatoria, a los trabajadores remotos y a los empleadores en la verificación de las condiciones de trabajo, que garanticen al trabajador remoto una real seguridad y salud en el trabajo.

Artículo 21. Migración al trabajo remoto. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, cualquier trabajador podrá acogerse a esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo remota prevista en esta ley, siempre que medie la concurrencia de voluntades entre trabajador y empleador, sin menoscabo de los derechos laborales adquiridos.

Artículo 22°. Aplicación de normas respecto al tiempo de lactancia. El empleador garantizará en todo momento las horas de lactancia y los tiempos de licencia de maternidad, a que tiene derecho la madre trabajadora y lactante sin que ello implique el desmejoramiento de sus condiciones laborales

Artículo 23°. Vinculación sector especialmente protegidos. Los empleadores que hagan uso de esta forma de ejecución del contrato de trabajo remota deberán promover la vinculación de jóvenes, mujeres, trabajadores y trabajadoras que sean pertenecientes a grupos étnicos y/o personas con discapacidad.

Artículo 24°. Tareas de cuidados. Las personas que trabajen de manera remota y que acrediten tener a su cargo, de manera única, el cuidado de personas menores de catorce (14) años, personas con discapacidad o adultas mayores en primer grado de consanguinidad que convivan con el trabajador remoto y que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada, con un autorización previa al empleador que permita la interrupción, sin el desmejoramiento de sus condiciones laborales.

Artículo 25°. Sobre la Jornada laboral en el trabajo remoto. La jornada laboral en esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo remota, se ajustará a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, convención colectiva, acuerdo colectivo o contrato de trabajo, la que sea más favorable al trabajador. El trabajador remoto podrá prestar los servicios para los cuales fue contratado, conforme a sus necesidades y las del empleador. Lo anterior no permite, en ningún caso y por ningún motivo, el desmejoramiento de las condiciones salariales del trabajador.

Dicha jornada será distribuida en la semana y no implicaría un cumplimiento estricto de horario al día.

Artículo 26°. Los empleados públicos podrán ejecutar sus funciones por medio del trabajo remoto consagrado en la presente ley, para lo cual se respetarán todos sus derechos y garantías laborales inherentes a su vinculación legal y reglamentaria conforme las normas vigentes.

Artículo 27°. Vigencia. La presente Ley rige a partir de su sanción, promulgación y publicación en el Diario Oficial.

Cordialmente,

Los CONCILIADORES:

ALFREDO DELUQUE ZULETA
REPRESENTANTE A LA CÁMARA

JAIRO CRISTO CORREA
REPRESENTANTE A LA CÁMARA

JOSÉ RITTER LÓPEZ
SENADOR DE LA REPÚBLICA

CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE
ENADOR DE LA REPÚBLICA

INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 446 DE 2021 SENADO, 283 DE 2019 CÁMARA

por medio del cual se sustituye el Título XI "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones.

INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY NO. 446 DE 2021 SENADO – 283 DE 2019 CÁMARA. "POR MEDIO DEL CUAL SE SUSTITUYE EL TÍTULO XI "DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE" DE LA LEY 599 DE 2000, SE MODIFICA LA LEY 906 DE 2004 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Junio de 2021

Doctores
ARTURO CHAR CHALJUB
Presidente
Senado de la República

GERMAN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ
Presidente
Cámara de Representantes
Ciudad

REF: INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY NO. 446 DE 2021 SENADO – 283 DE 2019 CÁMARA. "POR MEDIO DEL CUAL SE SUSTITUYE EL TÍTULO XI "DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE" DE LA LEY 599 DE 2000, SE MODIFICA LA LEY 906 DE 2004 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Honorables Presidentes:

De acuerdo con las designaciones efectuadas por las Presidencias del Honorable Senado de la República y de la Honorable Cámara de Representantes, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 161 de la Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, los suscritos integrantes de la Comisión Accidental de Conciliación, nos permitimos someter, por su conducto, a consideración de las Plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes para continuar su trámite correspondiente, el texto conciliado del proyecto de ley de la referencia, dirimiendo de esta manera las discrepancias existentes entre los textos aprobados por la plenaria de la Cámara de Representantes el 6 de abril de 2021 y por la plenaria del Senado el pasado 17 de junio 2021.

En el siguiente cuadro se relacionan los textos aprobados por la Plenaria de Cámara el 6 de abril del 2021 y por la Plenaria de Senado el 17 de Junio de 2021:

PLENARIA DE CÁMARA	PLENARIA DE SENADO	
TITULO. "*Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000,* ***se modifica la Ley 906 del 2004*** *y se dictan otras disposiciones".*	**TITULO.** "*Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000,* ***se modifica la Ley 906 del 2004*** *y se dictan otras disposiciones".*	**NO EXISTEN DISCREPANCIAS**
ARTÍCULO 1°. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente: **TÍTULO XI.** **DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE** **CAPÍTULO I.** **DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES**	ARTÍCULO 1°. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente: **TÍTULO XI.** **DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE** **CAPÍTULO I.** **DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES**	
Artículo 328. Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. El que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, acceda, capture, mantenga, recolecte, use, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, trafique o de cualquier otro modo se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco	**Artículo 328. Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.** El que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, acceda, capture, mantenga, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, trafique o de cualquier otro modo se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa	**En Senado se eliminan los verbos "recolecte, use"**

(135) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta y tres mil setecientos cincuenta (43.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la práctica de cercenar aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras), y descartar el resto del cuerpo al mar.	de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta y tres mil setecientos cincuenta (43.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la práctica de cercenar aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras), y descartar el resto del cuerpo al mar.	
Artículo 328A. Tráfico de Fauna. El que trafique, mercadee, adquiera, exporte y de cualquier forma comercialice los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de trescientos (300) hasta cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la exportación o comercialización de aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras).	**Artículo 328A. Tráfico de Fauna.** El que trafique, adquiera, exporte o comercialice sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de trescientos (300) hasta cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la exportación o comercialización de aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras).	En senado se elimina el verbo "mercadee", se agrega la frase "sin permiso de autoridad competente". Se elimina la frase "y de cualquier forma"
Artículo 328B. Caza Ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, cazare, excediere el número de piezas permitidas o cazare en época de veda, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de treinta y tres (33) a novecientos treinta y siete (937) salarios mínimos legales	**Artículo 328B. Caza Ilegal.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, cazare, excediere el número de piezas permitidas o cazare en épocas de vedas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de treinta y tres (33) a novecientos treinta y siete (937) salarios	**En senado se habla en plural de "Épocas de vedas"**

mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. **Artículo 328C. Pesca ilegal.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese o almacene ejemplares o productos de especies vedadas, protegidas, en cualquier categoría de amenaza, o en áreas de reserva, o en épocas vedadas, en zona prohibida, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a las que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la misma pena incurrirá el que: 1. Utilice instrumentos no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente. 2. Altere los refugios o el medio ecológico de especies de recursos hidrobiológicos, como consecuencia de actividades de exploración o explotación de recursos naturales no renovables. 3. Construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ciénagas, lagunas, caños, ríos y canales.	mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. **Artículo 328C. Pesca ilegal.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese o almacene ejemplares o productos de especies vedadas, protegidas, en cualquier categoría de amenaza, o en áreas de reserva, o en épocas vedadas, o en zona prohibida, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a las que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la misma pena incurrirá el que: 1. Utilice instrumentos, artes y métodos de pesca no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente, para cualquier especie. 2. Modifique, altere o atente, los refugios o el medio ecológico de especies de recursos hidrobiológicos y pesqueros, como consecuencia de actividades de exploración o explotación de recursos naturales. 3. Construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares,	En Senado se incluya la frase "artes y métodos de pesca" en el numeral primer **En Senado se modifica la redacción del numeral 2.** **En Senado se agrega el parágrafo**

	ciénagas, lagunas, caños, ríos y canales. Parágrafo: La pesca de subsistencia, no será considera delito, cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la normatividad existente.	
Artículo 329. Manejo ilícito de especies exóticas. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, trasplante, manipule, siembre, hibride, comercialice, transporte, mantenga, transforme, experimente, inocule o propague especies silvestres exóticas, invasoras, que pongan en peligro la salud humana, el ambiente o las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 329. Manejo ilícito de especies exóticas.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, trasplante, manipule, siembre, hibride, comercialice, transporte, mantenga, transforme, experimente, inocule o propague especies silvestres exóticas, invasoras, que pongan en peligro la salud humana, el ambiente o las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Se mantiene igual**
Artículo 330. Deforestación. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente tale, queme, corte, arranque o destruya áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará a la mitad cuando:	**Artículo 330. Deforestación.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente tale, queme, corte, arranque o destruya áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará a la mitad cuando:	**En senado se eliminó del numeral 1 las siguientes frases "**exploración y explotación ilícita de minerales ", "para fines de ganadería en zonas no permitidas,"

1. Cuando la conducta se realice para fines de ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal. 2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada. **Artículo 330A. Promoción y financiación de la Deforestación.** El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte, arranque o destrucción de áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará a la mitad cuando: 1. Cuando la conducta se realice para fines de ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal. 2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de	1. Cuando la conducta se realice para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito o para mejora o construcción de infraestructura ilegal. 2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada. **Artículo 330A. Promoción y financiación de la Deforestación.** El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte, arranque o destrucción de áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará a la mitad cuando: 1. Cuando la conducta se realice para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal. 2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo	**En senado se eliminó del numeral 1 las siguientes frases "**exploración y explotación ilícita de minerales ", "para fines de ganadería en zonas no permitidas,"

extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.	de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.	
Artículo 331. Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos. El que con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, importe, manipule, experimente, posea, inocule, comercialice, exporte, libere o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos, moléculas, substancias o elementos que pongan en peligro la salud o la existencia de los recursos fáunicos, florísticos, hidrobiológicos, hídricos o alteren perjudicialmente sus poblaciones, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 331. Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos.** El que con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, importe, manipule, experimente, posea, inocule, comercialice, exporte, libere o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos, moléculas, substancias o elementos que pongan en peligro la salud o la existencia de los recursos fáunicos, florísticos, hidrobiológicos, hídricos o alteren perjudicialmente sus poblaciones, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	Permanece igual
Artículo 332. Exploración o explotación ilícita de minerales y otros materiales. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga minerales, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando	**Artículo 332. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a cincuenta mil (50.000)	En senado se deja la redacción original del código penal.

las conductas descritas en este artículo se realicen a través de minería a cielo abierto.	salarios mínimos legales mensuales vigentes.	
Artículo 332A. Aprovechamiento ilícito de minerales. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, transporte, transforme, beneficie, comercialice o se favorezca a cualquier título de los minerales de que trata el artículo anterior, incurrirá en prisión de ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.		El artículo de Aprovechamiento ilícito de minerales se eliminó en el Senado.
Artículo 332B. Promoción y financiación de la explotación ilícita de minerales. El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, maquinaria o medios mecanizados, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la explotación, exploración, extracción, transporte, transformación o comercialización ilícita de minerales, arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.		El Artículo de promoción y financiación de explotación ilícita de minerales se eliminó en el Senado.
Artículo 332C. Tenencia o transporte de mercurio. El que con incumplimiento de la normatividad existente importe, tenga, almacene, transporte o		El artículo de tenencia o transporte de mercurio se eliminó en Senado

comercialice mercurio, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.		
CAPÍTULO II. **DE LOS DAÑOS EN LOS RECURSOS NATURALES**	**CAPÍTULO II.** **DE LOS DAÑOS EN LOS RECURSOS NATURALES**	
Artículo 333. Daños en los recursos naturales y ecocidio. El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o cause un impacto ambiental grave o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título o a los que estén asociados con estos, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo se entiende por ecocidio, el daño masivo y destrucción generalizada grave y sistémica de los ecosistemas. Parágrafo 2°. Por impacto ambiental grave se entenderá, la alteración de las condiciones ambientales que se genere como consecuencia de la afectación de los componentes ambientales, eliminando la integridad del sistema y poniendo en riesgo su sostenibilidad.	**Artículo 333. Daños en los recursos naturales y ecocidio.** El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o cause un impacto ambiental grave o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título o a los que estén asociados con estos, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo se entiende por ecocidio, el daño masivo y destrucción generalizada grave y sistémica de los ecosistemas. Parágrafo 2°. Por impacto ambiental grave se entenderá, la alteración de las condiciones ambientales que se genere como consecuencia de la afectación de los componentes ambientales, eliminando la integridad del sistema y poniendo en riesgo su sostenibilidad.	Permanece igual
CAPÍTULO III.	**CAPÍTULO III.**	

DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	**DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL**	
Artículo 334. Contaminación ambiental. El que con incumplimiento de la normatividad existente provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertimientos, radiaciones, ruidos, depósitos, o disposiciones al aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas superficiales, marítimas o subterráneas o demás recursos naturales en tal forma que contamine o genere un efecto nocivo en el ambiente, que ponga en peligro la salud humana y los recursos naturales, incurrirá en prisión de sesenta y nueve (69) a ciento cuarenta (140) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en este artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas. 2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por la normatividad existente o haya infringido más de dos parámetros. 3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos,	**Artículo 334. Contaminación ambiental.** El que con incumplimiento de la normatividad existente contamine, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertimientos, radiaciones, ruidos, depósitos, o disposiciones al aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas superficiales, marítimas o subterráneas o demás recursos naturales en tal forma que contamine o genere un efecto nocivo en el ambiente, que ponga en peligro la salud humana y los recursos naturales, incurrirá en prisión de sesenta y nueve (69) a ciento cuarenta (140) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en este artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas. 2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por la normatividad existente o haya infringido más de dos parámetros. 3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o	En senado se agrega el verbo “contamine”

depósitos, emisiones o disposiciones. 4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo. 5. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de control y vigilancia de la autoridad competente. 6. Cuando la contaminación sea producto del almacenamiento, transporte, vertimiento o disposición inadecuada de residuo peligroso. **Artículo 334A. Contaminación ambiental por explotación de minerales, hidrocarburos y otros materiales.** El que contamine directa o indirectamente la atmosfera, el suelo, el subsuelo o las aguas, como consecuencia de la actividad de exploración, construcción, montaje, extracción, explotación, beneficio, transformación, acopio, transporte, cierre, desmantelamiento o abandono de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá en prisión de setenta y cinco (75) a ciento cincuenta (150) meses, y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará hasta en una tercera parte si la contaminación se produce como consecuencia de la minería a cielo abierto.	engañosamente los vertimientos, depósitos, emisiones o disposiciones. 4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo. 5. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de control y vigilancia de la autoridad competente. 6. Cuando la contaminación sea producto del almacenamiento, transporte, vertimiento o disposición inadecuada de residuo peligroso. **Artículo 334A. Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo**. El que provoque, contamine o realice directa o indirectamente en los recursos de agua, suelo, subsuelo o atmósfera, con ocasión a la extracción o excavación, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años, y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	En senado se modifica la redacción del primer inciso, se agrega “recursos de agua”. De igual manera se suprime la circunstancia de mayor punibilidad contenida en el inciso final

Artículo 335. Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice experimentos con especies, agentes biológicos o bioquímicos que constituyan, generen o pongan en peligro la supervivencia de las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. **CAPÍTULO IV.** **DE LA INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA** **Artículo 336. Invasión de áreas de especial importancia ecológica.** El que invada, permanezca así sea de manera temporal o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en área de reserva forestal, ecosistemas de importancia ecológica, playas, terrenos de bajamar, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, parque nacional natural, área o ecosistema de interés estratégico, área protegida, definidos en la ley o reglamento incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta	**Artículo 335. Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice experimentos con especies, agentes biológicos o bioquímicos que constituyan, generen o pongan en peligro la supervivencia de las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. **CAPÍTULO IV.** **DE LA INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA** **Artículo 336. Invasión de áreas de especial importancia ecológica.** El que invada, permanezca así sea de manera temporal o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en área de reserva forestal, ecosistemas de importancia ecológica, playas, terrenos de bajamar, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, parque nacional natural, área o ecosistema de interés estratégico, área protegida, definidos en la ley o reglamento incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta	Permanece Igual Permanece Igual

mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente. **Artículo 336A. Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica.** El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente. **CAPÍTULO V.** **DE LA APROPIACIÓN ILEGAL DE BALDÍOS DE LA NACIÓN** **Artículo 337. Apropiación ilegal de baldíos de la nación**. El que se apropie, usurpé, use, ocupe, utilice, acumule, o destine baldíos de la	mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente. **Artículo 336A. Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica.** El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente. **CAPÍTULO V.** **DE LA APROPIACIÓN ILEGAL DE BALDÍOS DE LA NACIÓN** **Artículo 337. Apropiación ilegal de baldíos de la nación.** El que usurpé, ocupe, utilice, acumule, tolere, colabore o permita la	Permanece igual. En senado se eliminan verbos “apropie”, y “use”. En senado se agrega la frase “tolere,

nación con fines de expansión ilegal de la frontera agrícola, para ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos. **Artículo 337A. Financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación**. El que promueva, financie, ordene, dirija, o suministre medios para la apropiación de baldíos de la nación sin cumplimiento de los requisitos legales con fines de expansión	apropiación de baldíos de la Nación, sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos y despojo de tierras. **<u>Parágrafo 1º: La conducta descrita en este artículo no será considerada delito si la misma se ajusta a los condicionamientos y requisitos señalados en la ley 160 de 1994, así como en el Decreto Ley 902 de 2017 para la adjudicación de bienes baldíos.</u>** **<u>Parágrafo 2°: Cuando la conducta descrita en el artículo anterior sea cometida por personas campesinas, indígenas o afrodescendientes, que dependa su subsistencia de la habitación, trabajo o aprovechamiento de los baldíos de la nación no habrá lugar a responsabilidad penal.</u>** **Artículo 337A. Financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación.** El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva,	colabore o permita la apropiación“. En senado se elimina la frase “con fines de expansión ilegal de la frontera agrícola, para ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal” y se sustituye por “sin el lleno de los requisitos de ley” En senado se agregan dos parágrafos. El parágrafo Segundo se agrega en último debate con el fin de aclara la protección de los campesinos, indígenas y afrodescendiente. Se modifica la redacción en Senado.

ilegal de la frontera agrícola, para ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los bienes muebles, inmuebles o semovientes encontrados en los baldíos ilegalmente apropiados. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos.	organice, apoye, mantenga, financie, patrocine, induzca, ordene o dirija la apropiación ilegal de baldíos de la nación descrito en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los bienes muebles, inmuebles o semovientes encontrados en los baldíos ilegalmente apropiados. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos.	
CAPÍTULO VI. **DISPOSICIONES COMUNES**	**CAPÍTULO VI.** **DISPOSICIONES COMUNES**	
Artículo 338. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando: a)Cuando la conducta se cometa en ecosistemas naturales que hagan parte del sistema nacional o regional de áreas protegidas, en ecosistemas estratégicos, o en territorios de comunidades étnicas. Con excepción de las conductas consagradas en los artículos 336 y 336A. b) Cuando la conducta se cometa contra especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana o de especies vedadas, prohibidas, en período de	**Artículo 338. Circunstancias de agravación punitiva**. Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando: a) Cuando la conducta se cometa en ecosistemas naturales que hagan parte del sistema nacional o regional de áreas protegidas, en ecosistemas estratégicos, o en territorios de comunidades étnicas. Con excepción de las conductas consagradas en los artículos 336 y 336A. b) Cuando la conducta se cometa contra especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana o de especies vedadas, prohibidas, en período de	Permanece Igual

reproducción o crecimiento, de especial importancia ecológica, raras o endémicas del territorio colombiano. Con excepción de la conducta contemplada en el artículo 328C. c)Cuando con la conducta se altere el suelo, el subsuelo, los recursos hidrobiológicos, se desvíen los cuerpos de agua o se afecten ecosistemas marinos, manglares, pastos marinos y corales. d) Cuando la conducta se cometiere por la acción u omisión de quienes ejercen funciones de seguimiento, control y vigilancia o personas que ejerzan funciones públicas. e) Cuando la conducta se cometiere por integrantes de grupos delictivos organizados o grupos armados organizados o con la finalidad de financiar actividades terroristas, grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley, grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a sus integrantes. f) Cuando la conducta se cometa mediante el uso o manipulación de herramientas tecnológicas. g) Cuando con la conducta se ponga en peligro la salud humana. h) Cuando con la conducta se introduzca al suelo o al agua sustancias prohibidas por la normatividad existente o se realice mediante el uso de sustancias tóxicas, peligrosas, venenos, inflamables, combustibles, explosivas, radioactivas, el uso de	reproducción o crecimiento, de especial importancia ecológica, raras o endémicas del territorio colombiano. Con excepción de la conducta contemplada en el artículo 328C. c) Cuando con la conducta se altere el suelo, el subsuelo, los recursos hidrobiológicos, se desvíen los cuerpos de agua o se afecten ecosistemas marinos, manglares, pastos marinos y corales. d) Cuando la conducta se cometiere por la acción u omisión de quienes ejercen funciones de seguimiento, control y vigilancia o personas que ejerzan funciones públicas. e) Cuando la conducta se cometiere por integrantes de grupos delictivos organizados o grupos armados organizados o con la finalidad de financiar actividades terroristas, grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley, grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a sus integrantes. f) Cuando la conducta se cometa mediante el uso o manipulación de herramientas tecnológicas. g) Cuando con la conducta se ponga en peligro la salud humana. h) Cuando con la conducta se introduzca al suelo o al agua sustancias prohibidas por la normatividad existente o se realice mediante el uso de sustancias tóxicas, peligrosas, venenos, inflamables, combustibles, explosivas, radioactivas, el uso de	

explosivos, maquinaria pesada o medios mecanizados, entendidos estos últimos como todo tipo de equipos o herramientas mecanizados utilizados para el arranque, la extracción o el beneficio de minerales o la distribución ilegal de combustibles. i) Cuando se promueva, financie, dirija, facilite o suministre medios para la realización de las conductas. Con excepción de las conductas contempladas en los artículos 330A, 332B, 336A y 337A. j) Cuando con la conducta se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies. **Artículo 339. Modalidad Culposa.** Las penas previstas en los artículos 333, 334, 334A de este código se disminuirán hasta en la mitad cuando las conductas punibles se realicen culposamente.	explosivos, maquinaria pesada o medios mecanizados, entendidos estos últimos como todo tipo de equipos o herramientas mecanizados utilizados para el arranque, la extracción o el beneficio de minerales o la distribución ilegal de combustibles. i) Cuando se promueva, financie, dirija, facilite o suministre medios para la realización de las conductas. Con excepción de las conductas contempladas en los artículos 330A, 336A y 337A. j) Cuando con la conducta se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies. **Artículo 339. Modalidad Culposa.** Las penas previstas en los artículos 333, 334, 334A de este código se disminuirán hasta en la mitad cuando las conductas punibles se realicen culposamente.	Permanece Igual
Artículo 2. Modifíquese el numeral 14 del artículo 58 de la ley 599 del 2000, el cual quedará así: **Artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad.** (…) 14. Cuando se produjere un daño ambiental grave, una irreversible modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales o se cause la extinción de una especie biológica.	**Artículo 2.** Modifíquese el numeral 14 del artículo 58 de la ley 599 del 2000, el cual quedará así: **Artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad.** (…) 14. Cuando se produjere un daño ambiental grave, una irreversible modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales o se cause la extinción de una especie biológica.	**Permanece igual**

ARTÍCULO 3°. Adiciones al inciso segunda del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, las siguientes conductas punibles: **Artículo 68A. Exclusión de los beneficios y subrogados penales.** (…) Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaiga sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; abigeato enunciado en el inciso tercero del artículo 243; extorsión; homicidio agravado contemplado en el numeral 6 del artículo 104; lesiones causadas con agentes químicos, ácidos y/o sustancias similares; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objeto peligrosos;	**Eliminado**	

fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonales; aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables; tráfico de fauna; deforestación; promoción y financiación de la deforestación; aprovechamiento ilícito de minerales; promoción y financiación de la explotación ilícita de minerales; daños en los recursos naturales y ecocidio; e invasión de áreas de especial importancia ecológica.		
ARTÍCULO 4°. Adiciónese un numeral 33 al artículo 35 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así: (…) 33. De los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, tráfico de fauna, deforestación, promoción y financiación de la deforestación, aprovechamiento ilícito de minerales, promoción y financiación de la explotación ilícita de minerales, daños en los recursos naturales y ecocidio, e invasión de áreas de especial importancia ecológica.	**ARTÍCULO 3.** Adiciónese un numeral 33 al artículo 35 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así: (…) 33. De los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, tráfico de fauna, deforestación, promoción y financiación de la deforestación, daños en los recursos naturales y ecocidio, e invasión de áreas de especial importancia ecológica.	**En senado se elimina la frase** "aprovechamiento ilícito de minerales, promoción y financiación de la explotación ilícita de minerales, "

ARTÍCULO 5°. Adiciónese un parágrafo al artículo 91 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así: (…) **Parágrafo.** Cuando se hubiese suspendido o cancelado la personería jurídica de que trata este artículo, la persona natural o jurídica estará inhabilitada para constituir nuevas personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público, con el mismo objeto o actividad económica a desarrollar, hasta que el Juez de Conocimiento tome una decisión definitiva en la sentencia correspondiente.	**ARTÍCULO 4.** Adiciónese un parágrafo al artículo 91 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así: (…) **Parágrafo.** Cuando se hubiese suspendido o cancelado la personería jurídica de que trata este artículo, la persona natural o jurídica estará inhabilitada para constituir nuevas personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público, con el mismo objeto o actividad económica a desarrollar, hasta que el Juez de Conocimiento tome una decisión definitiva en la sentencia correspondiente.	**Permanece igual**
ARTÍCULO 6°. Adiciónese un parágrafo 2 al artículo 92 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así: **Parágrafo 2.** Tratándose de los delitos contemplados en el título XI del Código Penal, el juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.	**ARTÍCULO 5.** Adiciónese un parágrafo 2 al artículo 92 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así: **Parágrafo 2.** Tratándose de los delitos contemplados en el título XI del Código Penal, el juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.	**Permanece igual**
ARTÍCULO 7°. El artículo 302 de la Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo inciso que quedará así: Cuando la captura en flagrancia se produzca en ríos o tierra donde el arribo a la cabecera municipal más cercana sólo puede surtirse por vía fluvial o siempre que concurran dificultades objetivas de acceso al territorio como obstáculos	**ARTÍCULO 6.** El artículo 302 de la Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo inciso que quedará así: Cuando la captura en flagrancia se produzca en ríos o tierra donde el arribo a la cabecera municipal más cercana sólo puede surtirse por vía fluvial o siempre que concurran dificultades objetivas de acceso al territorio como obstáculos	**Permanece igual**

geográficos, logísticos, ausencia de infraestructura de transporte o fenómenos meteorológicos que dificulten seriamente el traslado del aprehendido, se realizarán todas las actividades para lograr la comparecencia del capturado ante el juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin que en ningún caso exceda las 36 horas siguientes, contadas a partir del momento de la llegada al puerto o municipio más cercano, según el caso. La autoridad competente deberá acreditar los eventos descritos en el presente inciso.	geográficos, logísticos, ausencia de infraestructura de transporte o fenómenos meteorológicos que dificulten seriamente el traslado del aprehendido, se realizarán todas las actividades para lograr la comparecencia del capturado ante el juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin que en ningún caso exceda las 36 horas siguientes, contadas a partir del momento de la llegada al puerto o municipio más cercano, según el caso. La autoridad competente deberá acreditar los eventos descritos en el presente inciso.	
Artículo 8. Dirección de Apoyo Territorial. Créase en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Apoyo Territorial adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana, la que tendrá como función principal liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presenta efectiva de la Entidad en territorios apartados o de difícil acceso, sin perjuicio de la competencia de otras Direcciones sobre la materia. La Dirección de Apoyo Territorial estará conformada por: **Unidad** | **Cantidad** | **Cargo** Dirección de Apoyo Territorial | 1 | Director Nacional I 2 | Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito	**Artículo 7. Dirección de Apoyo Territorial.** Creese en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Apoyo Territorial adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana, la que tendrá como función principal liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presencia efectiva de la Entidad con un trabajo interdisciplinario en territorios apartados o de difícil acceso, sin perjuicio de la competencia de otras Direcciones sobre la materia. La Dirección de Apoyo Territorial estará conformada por: **Unidad** | **Cantidad** | **Cargo** Dirección de Apoyo Territorial | 1 | Director Nacional I 2 | Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito	**En senado se modifica el verbo "crease" por "creese". Se modifica el verbo "presentar" por "presencia"** **Se agrega la frase " <u>con un trabajo interdisciplinario</u>"** Se modifica la tabla y se agregan 3 parágrafos.

	20	Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado	Profesional	20	Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado
	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Profesional	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito
	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos
	1	Profesional Experto	Profesional	1	Profesional Experto
	2	Profesional Especializado II	Profesional	2	Profesional Especializado II
	2	Profesional De Gestión III	Profesional	2	Profesional De Gestión III
	12	Investigador Experto	Profesional	12	Investigador Experto
	10	Profesional Investigador III	Profesional	10	Profesional Investigador III
	9	Profesional Investigador II	Profesional	9	Profesional Investigador II
	9	Profesional Investigador I	Profesional	9	Profesional Investigador I
	10	Técnico Investigador IV	Técnico	10	Técnico Investigador IV
	10	Técnico Investigador III	Técnico	~~10~~ <u>12</u>	Técnico Investigador III
	20	Asistente de Fiscal IV	Técnico	20	Asistente de Fiscal IV
	5	Asistente de Fiscal III	Técnico	5	Asistente de Fiscal III
	5	Asistente de Fiscal II	Técnico	5	Asistente de Fiscal II

	2	Secretario Ejecutivo	Técnico	2	Secretario Ejecutivo	
	2	Conductor	Asistencial	~~2~~	~~**Conductor**~~	
	3	Secretario Administrativo	Asistencial	3	Secretario Administrativo	

Parágrafo 1: De forma prioritaria la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación desarrollará el concurso necesario para proveer los cargos establecidos en el presente artículo de conformidad con el Sistema Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación, sin perjuicio de los nombramientos en provisionalidad necesarios para implementar inmediatamente la Dirección establecida, en los cuales se aplicarán los principios de mérito, transparencia, garantía de imparcialidad y eficiencia y eficacia del artículo 3, junto con los criterios de mérito señalados en el numeral 3 del artículo 11 del Decreto Ley 020 de 2014.

Parágrafo 2: El inicio del concurso se realizará dentro de los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 3: La Fiscalía General de la Nación presentará anualmente un informe sobre los indicadores de gestión, avance y esclarecimiento en la investigación y judicialización de las conductas que afecten los recursos naturales y el medio ambiente. Esta información será pública y contendrá datos estadísticos que no estén sometidos a reserva.

Artículo 9. Dirección de Apoyo Territorial. Adiciónese el artículo 36A al Decreto Ley 016 de 2014, el cual quedará así: La Dirección de Apoyo Territorial cumplirá las siguientes funciones: 1. Liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presencia efectiva de la Entidad en territorios apartados o de difícil acceso, en aquellas zonas afectadas por fenómenos criminales de alto impacto y por la presencia de grupos armados organizados. 2. Apoyar la investigación, especialmente actos urgentes, en aquellos fenómenos priorizados que se den en territorios donde la Fiscalía General de la Nación no tenga presencia permanente o sean de difícil acceso. 3. Definir los lugares en los que se podrá actuar por medio de grupos itinerantes, con base en criterios geográficos y no en la división político-administrativa, así como en el análisis de la criminalidad del país, la presencia de organizaciones criminales, los tiempos de desplazamiento al lugar de comisión de la conducta punible, la oferta de servicios de justicia por parte de otras entidades, entre otros factores. 4. Conformar grupos especializados de investigadores y analistas expertos en los fenómenos criminales priorizados por la Dirección.	**Artículo 8. Dirección de Apoyo Territorial.** Adiciónese el artículo 36A al Decreto Ley 016 de 2014, el cual quedará así: La Dirección de Apoyo Territorial cumplirá las siguientes funciones: 1. Liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presencia efectiva de la Entidad en territorios apartados o de difícil acceso, en aquellas zonas afectadas por fenómenos criminales de alto impacto y por la presencia de grupos armados organizados. 2. Apoyar la investigación, especialmente actos urgentes, en aquellos fenómenos priorizados que se den en territorios donde la Fiscalía General de la Nación no tenga presencia permanente o sean de difícil acceso. 3. Definir los lugares en los que se podrá actuar por medio de grupos itinerantes, con base en criterios geográficos y no en la división político-administrativa, así como en el análisis de la criminalidad del país, la presencia de organizaciones criminales, los tiempos de desplazamiento al lugar de comisión de la conducta punible, la oferta de servicios de justicia por parte de otras entidades, entre otros factores. 4. Conformar grupos especializados de investigadores y analistas expertos en los fenómenos criminales priorizados por la Dirección.	**Permanece igual**

5. Realizar proceso de articulación de la estrategia territorial con otras entidades públicas. 6. Designar fiscales itinerantes en aquellos procesos sobre fenómenos priorizados, con el fin que apoyen, impulsen y asesoren a los fiscales titulares con el fin de lograr una efectiva judicialización. 7. Conformar equipos móviles de la Entidad, en los que periódicamente se reciban denuncias de los habitantes del territorio nacional y se brinde atención a las víctimas de las conductas punibles en territorios apartados o zonas de alto impacto o presencia de grupos armados organizados. 8. Organizar y adelantar comités técnico-jurídicos de revisión de las situaciones y los casos para la ejecución de acciones en el desarrollo efectivo y eficiente de las investigaciones penales de su competencia. 9. Dirigir y coordinar los grupos de trabajo, los departamentos y unidades que se conformen para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Dirección. 10. Dirigir, coordinar y controlar la incorporación y aplicación de políticas públicas en el desarrollo de las actividades que cumplen los servidores, dependencias y los grupos de trabajo que estén a su cargo, de acuerdo con los lineamientos y las orientaciones que impartan las dependencias competentes. 11. Identificar y delimitar situaciones y casos susceptibles de ser priorizados y proponerlos al Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos. 12. Ejecutar los planes de priorización aprobados por el Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos en lo de su competencia.	5. Realizar proceso de articulación de la estrategia territorial con otras entidades públicas. 6. Designar fiscales itinerantes en aquellos procesos sobre fenómenos priorizados, con el fin que apoyen, impulsen y asesoren a los fiscales titulares con el fin de lograr una efectiva judicialización. 7. Conformar equipos móviles de la Entidad, en los que periódicamente se reciban denuncias de los habitantes del territorio nacional y se brinde atención a las víctimas de las conductas punibles en territorios apartados o zonas de alto impacto o presencia de grupos armados organizados. 8. Organizar y adelantar comités técnico-jurídicos de revisión de las situaciones y los casos para la ejecución de acciones en el desarrollo efectivo y eficiente de las investigaciones penales de su competencia. 9. Dirigir y coordinar los grupos de trabajo, los departamentos y unidades que se conformen para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Dirección. 10. Dirigir, coordinar y controlar la incorporación y aplicación de políticas públicas en el desarrollo de las actividades que cumplen los servidores, dependencias y los grupos de trabajo que estén a su cargo, de acuerdo con los lineamientos y las orientaciones que impartan las dependencias competentes. 11. Identificar y delimitar situaciones y casos susceptibles de ser priorizados y proponerlos al Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos. 12. Ejecutar los planes de priorización aprobados por el Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos en lo de su competencia.	

13. Apoyar, en el marco de sus competencias, a la Dirección de Políticas y Estrategia en el análisis de la información que se requiera para sustentar la formulación de la política en materia criminal. 14. Mantener actualizada la información que se registre en los sistemas de información de la Entidad, en los temas de su competencia. 15. Consolidar, analizar y clasificar la información de las investigaciones y acusaciones adelantadas por los servidores y grupos de trabajo a su cargo y remitirla a la Dirección de Políticas y Estrategia. 16. Dirimir, de conformidad con la Constitución y la ley, los conflictos de competencia que se presenten entre la Fiscalía General de la Nación y los demás organismos que desempeñen funciones de Policía Judicial, en el ámbito de su competencia. 17. Dirimir los conflictos administrativos que se presenten al interior de la Fiscalía en el ejercicio de las funciones o en la asignación de investigaciones, en los casos y según las directrices y lineamientos impartidos por el Fiscal General de la Nación. 18. Asesorar a las dependencias de la Fiscalía General de la Nación que cumplen funciones investigativas y acusatorias en los temas de su competencia. 19. Elaborar e implementar los planes operativos anuales en el ámbito de su competencia, de acuerdo con la metodología diseñada por la Dirección de Planeación y Desarrollo. 20. Aplicar las directrices y lineamientos del Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación.	13. Apoyar, en el marco de sus competencias, a la Dirección de Políticas y Estrategia en el análisis de la información que se requiera para sustentar la formulación de la política en materia criminal. 14. Mantener actualizada la información que se registre en los sistemas de información de la Entidad, en los temas de su competencia. 15. Consolidar, analizar y clasificar la información de las investigaciones y acusaciones adelantadas por los servidores y grupos de trabajo a su cargo y remitirla a la Dirección de Políticas y Estrategia. 16. Dirimir, de conformidad con la Constitución y la ley, los conflictos de competencia que se presenten entre la Fiscalía General de la Nación y los demás organismos que desempeñen funciones de Policía Judicial, en el ámbito de su competencia. 17. Dirimir los conflictos administrativos que se presenten al interior de la Fiscalía en el ejercicio de las funciones o en la asignación de investigaciones, en los casos y según las directrices y lineamientos impartidos por el Fiscal General de la Nación. 18. Asesorar a las dependencias de la Fiscalía General de la Nación que cumplen funciones investigativas y acusatorias en los temas de su competencia. 19. Elaborar e implementar los planes operativos anuales en el ámbito de su competencia, de acuerdo con la metodología diseñada por la Dirección de Planeación y Desarrollo. 20. Aplicar las directrices y lineamientos del Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación. 21. Las demás que le sean asignadas por la ley, o	

<table>
<tr>
<td>21. Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el Fiscal o Vicefiscal General de la Nación.</td>
<td>delegadas por el Fiscal o Vicefiscal General de la Nación.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Artículo 10. Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. Créase en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente adscrito a la Delegada contra la Criminalidad Organizada, la que tendrá como función principal la investigación y judicialización de los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y las demás conductas delictivas conexas o relacionadas, sin perjuicio de la competencia de las Direcciones Seccionales sobre la materia.

La Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente estará conformada por:

<table>
<tr><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Cargo</th></tr>
<tr><td>Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio</td><td>1</td><td>Director Nacional I</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito</td></tr>
<tr><td></td><td>20</td><td>Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado</td></tr>
</table>
</td>
<td>Artículo 9. Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. Créese en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente adscrito a la Delegada contra la Criminalidad Organizada, la que tendrá como función principal la investigación y judicialización de los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y las demás conductas delictivas conexas o relacionadas, <u>mediante un trabajo interdisciplinario</u> sin perjuicio de la competencia de las Direcciones Seccionales sobre la materia.

La Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente estará conformada por:

<table>
<tr><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Cargo</th></tr>
<tr><td>Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio</td><td>1</td><td>Director Nacional I</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito</td></tr>
<tr><td></td><td>20</td><td>Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado</td></tr>
</table>
</td>
<td>En senado se modifica el verbo “Creáse” por “creese”.
En senado se agrega la frase “<u>mediante un trabajo interdisciplinario “</u>

Se modifica la tabla y se agregan 3 parágrafos.</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>Ambiente</td><td>5</td><td>Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito</td><td>Ambientne</td><td>5</td><td>Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito</td><td>Profesional</td>
</tr>
<tr>
<td></td><td>5</td><td>Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos</td><td>Profesional</td><td>5</td><td>Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos</td><td>Profesional</td>
</tr>
<tr>
<td></td><td>1</td><td>Profesional Experto</td><td>Profesional</td><td>1</td><td>Profesional Experto</td><td>Profesional</td>
</tr>
<tr>
<td></td><td>2</td><td>Profesional Especializado II</td><td>Profesional</td><td>2</td><td>Profesional Especializado II</td><td>Profesional</td>
</tr>
<tr>
<td></td><td>2</td><td>Profesional De Gestión III</td><td>Profesional</td><td>2</td><td>Profesional De Gestión III</td><td>Profesional</td>
</tr>
<tr>
<td></td><td>12</td><td>Investigador Experto</td><td>Profesional</td><td>12</td><td>Investigador Experto</td><td>Profesional</td>
</tr>
<tr>
<td></td><td>10</td><td>Profesional Investigador III</td><td>Profesional</td><td>10</td><td>Profesional Investigador III</td><td>Profesional</td>
</tr>
<tr>
<td></td><td>9</td><td>Profesional Investigador II</td><td>Profesional</td><td>9</td><td>Profesional Investigador II</td><td>Profesional</td>
</tr>
<tr>
<td></td><td>9</td><td>Profesional Investigador I</td><td>Profesional</td><td>9</td><td>Profesional Investigador I</td><td>Profesional</td>
</tr>
<tr>
<td></td><td>10</td><td>Técnico Investigador IV</td><td>Técnico</td><td>10</td><td>Técnico Investigador IV</td><td>Técnico</td>
</tr>
<tr>
<td></td><td>10</td><td>Técnico Investigador III</td><td>Técnico</td><td><s>10</s> <u>12</u></td><td>Técnico Investigador III</td><td>Técnico</td>
</tr>
<tr>
<td></td><td>20</td><td>Asistente de Fiscal IV</td><td>Técnico</td><td>20</td><td>Asistente de Fiscal IV</td><td>Técnico</td>
</tr>
<tr>
<td></td><td>5</td><td>Asistente de Fiscal III</td><td>Técnico</td><td>5</td><td>Asistente de Fiscal III</td><td>Técnico</td>
</tr>
<tr>
<td></td><td>5</td><td>Asistente de Fiscal II</td><td>Técnico</td><td>5</td><td>Asistente de Fiscal II</td><td>Técnico</td>
</tr>
<tr>
<td></td><td>2</td><td>Secretario Ejecutivo</td><td>Técnico</td><td>2</td><td>Secretario Ejecutivo</td><td>Técnico</td>
</tr>
<tr>
<td></td><td>2</td><td>Conductor</td><td>Asistencial</td><td><s>2</s></td><td><s>Conductor</s></td><td><s>Asistencial</s></td>
</tr>
<tr>
<td></td><td>3</td><td>Secretario Administrativo</td><td>Asistencial</td><td>3</td><td>Secretario Administrativo</td><td>Asistencial</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td><u>Parágrafo 1: De forma prioritaria la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación desarrollará el concurso necesario para proveer los cargos establecidos en el presente artículo de conformidad con el Sistema Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación, sin perjuicio de los nombramientos en provisionalidad necesarios para implementar inmediatamente la Dirección establecida, en los cuales se aplicarán los principios de mérito, transparencia, garantía de imparcialidad y eficiencia y eficacia del artículo 3, junto con los criterios de mérito señalados en el numeral 3 del artículo 11 del Decreto Ley 020 de 2014.</u>

<u>Parágrafo 2: El inicio del concurso se realizará dentro de los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.</u>

<u>Parágrafo 3: La Fiscalía General de la Nación presentará anualmente un informe sobre los indicadores de gestión, avance y esclarecimiento en la investigación y judicialización de las conductas que afecten los recursos naturales y el medio ambiente. Esta información será pública y contendrá datos estadísticos que no estén sometidos a reserva.</u></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NUEVO</td>
<td>ARTÍCULO 10 Prevención del daño antijurídico y promoción de la adecuada defensa litigiosa. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el marco de sus funciones, deberá diseñar e implementar una política de prevención del daño antijurídico en materia de protección ambiental y ecológica. De igual forma, promoverá la coordinación de las acciones que aseguren la adecuada defensa de los intereses litigiosos de la nación dentro de los procesos que se lleven a cabo en materia de defensa de los recursos naturales y de la fauna y la flora silvestre.</td>
<td>Artículo nuevo en Senado.</td>
</tr>
<tr>
<td>NUEVO</td>
<td>ARTÍCULO NUEVO: Se autoriza al Gobierno Nacional para asignar los recursos para la implementación y ejecución de la presente ley.

De conformidad con la normativa vigente, las erogaciones que se causen con ocasión de la implementación y ejecución de la presente ley deberán consultar la situación fiscal de la Nación y ajustarse al Marco de Gasto de Mediano Plazo de cada sector involucrado, en concordancia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y las normas orgánicas de presupuesto.</td>
<td>Artículo nuevo en senado</td>
</tr>
<tr>
<td>ARTÍCULO 11°. Vigencia y Derogatoria. La presente rige a partir de su promulgación y publicación en el Diario Oficial y deroga el Título XI, “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000 y todas las</td>
<td>ARTÍCULO 12. Vigencia y Derogatoria. La presente rige a partir de su promulgación y publicación en el Diario Oficial y deroga el Título XI, “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000 y todas las</td>
<td>Permanece igual</td>
</tr>
</table>

disposiciones que le sean contrarias.	disposiciones que le sean contrarias.	

PROPOSICIÓN

Así las cosas, luego de un análisis detallado de los textos, ***solicitamos a los miembros de las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes acoger el texto de Senado toda vez que, acoge mayoritariamente las recomendaciones y propuestas que se presentaron a lo lago de los debates.***

Cordialmente,









En virtud de lo anterior, y para los efectos pertinentes, el citado texto conciliado es el siguiente:

TEXTO CONCILIADO
PROYECTO DE LEY NO. 446 DE 2021 SENADO – 283 DE 2019 CÁMARA.
"POR MEDIO DEL CUAL SE SUSTITUYE EL TÍTULO XI "DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE" DE LA LEY 599 DE 2000, SE MODIFICA LA LEY 906 DE 2004 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

ARTÍCULO 1°. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:

TÍTULO XI.

DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO I.

DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES

Artículo 328. Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. El que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, acceda, capture, mantenga, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, trafique o de cualquier otro modo se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta y tres mil setecientos cincuenta (43.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la práctica de cercenar aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras), y descartar el resto del cuerpo al mar.

Artículo 328A. Tráfico de Fauna. El que trafique, adquiera, exporte o comercialice sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de trescientos (300) hasta cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la exportación o comercialización de aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras).

Artículo 328B. Caza Ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, cazare, excediere el número de piezas permitidas o cazare en épocas de vedas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de treinta y tres (33) a novecientos treinta y siete (937) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.

Artículo 328C. Pesca ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese o almacene ejemplares o productos de especies vedadas, protegidas, en cualquier categoría de amenaza, o en áreas de reserva, o en épocas vedadas, o en zona prohibida, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a las que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que:

1. Utilice instrumentos, artes y métodos de pesca no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente, para cualquier especie.

2. Modifique, altere o atente, los refugios o el medio ecológico de especies de recursos hidrobiológicos y pesqueros, como consecuencia de actividades de exploración o explotación de recursos naturales.

3. Construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ciénagas, lagunas, caños, ríos y canales.

Parágrafo: La pesca de subsistencia, no será considera delito, cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la normatividad existente.

Artículo 329. Manejo ilícito de especies exóticas. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, trasplante, manipule, siembre, hibride, comercialice, transporte, mantenga, transforme, experimente, inocule o propague especies silvestres exóticas, invasoras, que pongan en peligro la salud humana, el ambiente o las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 330. Deforestación. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente tale, queme, corte, arranque o destruya áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará a la mitad cuando:

1. Cuando la conducta se realice para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito o para mejora o construcción de infraestructura ilegal.

2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.

Artículo 330A. Promoción y financiación de la Deforestación. El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte, arranque o destrucción de áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará a la mitad cuando:

1. Cuando la conducta se realice para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal.

2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.

Artículo 331. Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos. El que con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, importe, manipule, experimente, posea, inocule, comercialice, exporte, libere o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos, moléculas, substancias o elementos que pongan en peligro la salud o la existencia de los recursos fáunicos, florísticos, hidrobiológicos, hídricos o alteren perjudicialmente sus poblaciones, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 332. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO II.

DE LOS DAÑOS EN LOS RECURSOS NATURALES

Artículo 333. Daños en los recursos naturales y ecocidio. El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o cause un impacto ambiental grave o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título o a los que estén asociados con estos, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo se entiende por ecocidio, el daño masivo y destrucción generalizada grave y sistémica de los ecosistemas.

Parágrafo 2°. Por impacto ambiental grave se entenderá, la alteración de las condiciones ambientales que se genere como consecuencia de la afectación de los componentes ambientales, eliminando la integridad del sistema y poniendo en riesgo su sostenibilidad.

CAPÍTULO III.

DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Artículo 334. Contaminación ambiental. El que con incumplimiento de la normatividad existente contamine, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertimientos, radiaciones, ruidos, depósitos, o disposiciones al aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas superficiales, marítimas o subterráneas o demás recursos naturales en tal forma que contamine o genere un efecto nocivo en el ambiente, que ponga en peligro la salud humana y los recursos naturales, incurrirá en prisión de sesenta y nueve (69) a ciento cuarenta (140) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en este artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.
2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por la normatividad existente o haya infringido más de dos parámetros.
3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, depósitos, emisiones o disposiciones.
4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.
5. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de control y vigilancia de la autoridad competente.
6. Cuando la contaminación sea producto del almacenamiento, transporte, vertimiento o disposición inadecuada de residuo peligroso.

Artículo 334A. Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo. El que provoque, contamine o realice directa o indirectamente en los recursos de agua, suelo, subsuelo o atmósfera, con ocasión a la extracción o excavación, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años, y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 335. Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice experimentos con especies, agentes biológicos o bioquímicos que constituyan, generen o pongan en peligro la supervivencia de las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO IV.

DE LA INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Artículo 336. Invasión de áreas de especial importancia ecológica. El que invada, permanezca así sea de manera temporal o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en área de reserva forestal, ecosistemas de importancia ecológica, playas, terrenos de bajamar, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, parque nacional natural, área o ecosistema de interés estratégico, área protegida, definidos en la ley o reglamento incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.

Artículo 336A. Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica. El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.

CAPÍTULO V.

DE LA APROPIACIÓN ILEGAL DE BALDÍOS DE LA NACIÓN

Artículo 337. Apropiación ilegal de baldíos de la nación. El que usurpé, ocupe, utilice, acumule, tolere, colabore o permita la apropiación de baldíos de la Nación, sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos y despojo de tierras.

Parágrafo 1º: La conducta descrita en este artículo no será considerada delito si la misma se ajusta a los condicionamientos y requisitos señalados en la ley 160 de 1994, así como en el Decreto Ley 902 de 2017 para la adjudicación de bienes baldíos.

Parágrafo 2°: Cuando la conducta descrita en el artículo anterior sea cometida por personas campesinas, indígenas o afrodescendientes, que dependa su subsistencia de la habitación, trabajo o aprovechamiento de los baldíos de la nación no habrá lugar a responsabilidad penal.

Artículo 337A. Financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación. El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie, patrocine, induzca, ordene o dirija la apropiación ilegal de baldíos de la nación descrito en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los bienes muebles, inmuebles o semovientes encontrados en los baldíos ilegalmente apropiados.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos.

CAPÍTULO VI.

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 338. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando:

a) Cuando la conducta se cometa en ecosistemas naturales que hagan parte del sistema nacional o regional de áreas protegidas, en ecosistemas estratégicos, o en territorios de comunidades étnicas. Con excepción de las conductas consagradas en los artículos 336 y 336A.

b) Cuando la conducta se cometa contra especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana o de especies vedadas, prohibidas, en período de reproducción o crecimiento, de especial importancia ecológica, raras o endémicas del territorio colombiano. Con excepción de la conducta contemplada en el artículo 328C.

c) Cuando con la conducta se altere el suelo, el subsuelo, los recursos hidrobiológicos, se desvíen los cuerpos de agua o se afecten ecosistemas marinos, manglares, pastos marinos y corales.

d) Cuando la conducta se cometiere por la acción u omisión de quienes ejercen funciones de seguimiento, control y vigilancia o personas que ejerzan funciones públicas.

e) Cuando la conducta se cometiere por integrantes de grupos delictivos organizados o grupos armados organizados o con la finalidad de financiar actividades terroristas, grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley, grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a sus integrantes.

f) Cuando la conducta se cometa mediante el uso o manipulación de herramientas tecnológicas.

g) Cuando con la conducta se ponga en peligro la salud humana.

h) Cuando con la conducta se introduzca al suelo o al agua sustancias prohibidas por la normatividad existente o se realice mediante el uso de sustancias tóxicas, peligrosas, venenos, inflamables, combustibles, explosivas, radioactivas, el uso de explosivos, maquinaria pesada o medios mecanizados, entendidos estos últimos como todo tipo de equipos o herramientas mecanizados utilizados para el arranque, la extracción o el beneficio de minerales o la distribución ilegal de combustibles.

i) Cuando se promueva, financie, dirija, facilite o suministre medios para la realización de las conductas. Con excepción de las conductas contempladas en los artículos 330A, 336A y 337A.

j) Cuando con la conducta se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies.

Artículo 339. Modalidad Culposa. Las penas previstas en los artículos 333, 334, 334A de este código se disminuirán hasta en la mitad cuando las conductas punibles se realicen culposamente.

Artículo 2. Modifíquese el numeral 14 del artículo 58 de la ley 599 del 2000, el cual quedará así:

Artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad.

(…)

14. Cuando se produjere un daño ambiental grave, una irreversible modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales o se cause la extinción de una especie biológica.

ARTÍCULO 3. Adiciónese un numeral 33 al artículo 35 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

(…)

33. De los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, tráfico de fauna, deforestación, promoción y financiación de la deforestación, daños en los recursos naturales y ecocidio, e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

ARTÍCULO 4. Adiciónese un parágrafo al artículo 91 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así:

(…)

Parágrafo. Cuando se hubiese suspendido o cancelado la personería jurídica de que trata este artículo, la persona natural o jurídica estará inhabilitada para constituir nuevas personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público, con el mismo objeto o actividad económica a desarrollar, hasta que el Juez de Conocimiento tome una decisión definitiva en la sentencia correspondiente.

ARTÍCULO 5. Adiciónese un parágrafo 2 al artículo 92 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así:

Parágrafo 2. Tratándose de los delitos contemplados en el título XI del Código Penal, el juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.

ARTÍCULO 6. El artículo 302 de la Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo inciso que quedará así:

Cuando la captura en flagrancia se produzca en ríos o tierra donde el arribo a la cabecera municipal más cercana sólo puede surtirse por vía fluvial o siempre que concurran dificultades objetivas de acceso al territorio como obstáculos geográficos, logísticos, ausencia de infraestructura de transporte o fenómenos meteorológicos que dificulten seriamente el traslado del aprehendido, se realizarán todas las actividades para lograr la comparecencia del capturado ante el juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin que en ningún caso exceda las 36 horas siguientes, contadas a partir del momento de la llegada al puerto o municipio más cercano, según el caso. La autoridad competente deberá acreditar los eventos descritos en el presente inciso.

Artículo 7. Dirección de Apoyo Territorial. Creese en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Apoyo Territorial adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana, la que tendrá como función principal liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presencia efectiva de la Entidad con un trabajo interdisciplinario en territorios apartados o de difícil acceso, sin perjuicio de la competencia de otras Direcciones sobre la materia.

La Dirección de Apoyo Territorial estará conformada por:

Unidad	Cantidad	Cargo	Niveles
Dirección de Apoyo Territorial	1	Director Nacional I	Directivo
	2	Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito	Profesional
	20	Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional
	1	Profesional Experto	Profesional
	2	Profesional Especializado II	Profesional
	2	Profesional De Gestión III	Profesional
	12	Investigador Experto	Profesional
	10	Profesional Investigador III	Profesional
	9	Profesional Investigador II	Profesional
	9	Profesional Investigador I	Profesional
	10	Técnico Investigador IV	Técnico
	~~10~~ 12	Técnico Investigador III	Técnico
	20	Asistente de Fiscal IV	Técnico
	5	Asistente de Fiscal III	Técnico
	5	Asistente de Fiscal II	Técnico
	2	Secretario Ejecutivo	Técnico
	3	Secretario Administrativo	Asistencial

Parágrafo 1: De forma prioritaria la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación desarrollará el concurso necesario para proveer los cargos establecidos en el presente artículo de conformidad con el Sistema Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación, sin perjuicio de los nombramientos en provisionalidad necesarios para implementar inmediatamente la Dirección establecida, en los cuales se aplicarán los principios de mérito, transparencia, garantía de imparcialidad y eficiencia y eficacia del artículo 3, junto con los criterios de mérito señalados en el numeral 3 del artículo 11 del Decreto Ley 020 de 2014.

Parágrafo 2: El inicio del concurso se realizará dentro de los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 3: La Fiscalía General de la Nación presentará anualmente un informe sobre los indicadores de gestión, avance y esclarecimiento en la investigación y judicialización de las conductas que afecten los recursos naturales y el medio ambiente. Esta información será pública y contendrá datos estadísticos que no estén sometidos a reserva.

Artículo 8. Dirección de Apoyo Territorial. Adiciónese el artículo 36A al Decreto Ley 016 de 2014, el cual quedará así: La Dirección de Apoyo Territorial cumplirá las siguientes funciones:

22. Liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presencia efectiva de la Entidad en territorios apartados o de difícil acceso, en aquellas zonas afectadas por fenómenos criminales de alto impacto y por la presencia de grupos armados organizados.
23. Apoyar la investigación, especialmente actos urgentes, en aquellos fenómenos priorizados que se den en territorios donde la Fiscalía General de la Nación no tenga presencia permanente o sean de difícil acceso.
24. Definir los lugares en los que se podrá actuar por medio de grupos itinerantes, con base en criterios geográficos y no en la división político-administrativa, así como en el análisis de la criminalidad del país, la presencia de organizaciones criminales, los tiempos de desplazamiento al lugar de comisión de la conducta punible, la oferta de servicios de justicia por parte de otras entidades, entre otros factores.
25. Conformar grupos especializados de investigadores y analistas expertos en los fenómenos criminales priorizados por la Dirección.
26. Realizar proceso de articulación de la estrategia territorial con otras entidades públicas.
27. Designar fiscales itinerantes en aquellos procesos sobre fenómenos priorizados, con el fin que apoyen, impulsen y asesoren a los fiscales titulares con el fin de lograr una efectiva judicialización.
28. Conformar equipos móviles de la Entidad, en los que periódicamente se reciban denuncias de los habitantes del territorio nacional y se brinde atención a las víctimas de las conductas punibles en territorios apartados o zonas de alto impacto o presencia de grupos armados organizados.
29. Organizar y adelantar comités técnico-jurídicos de revisión de las situaciones y los casos para la ejecución de acciones en el desarrollo efectivo y eficiente de las investigaciones penales de su competencia.
30. Dirigir y coordinar los grupos de trabajo, los departamentos y unidades que se conformen para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Dirección.
31. Dirigir, coordinar y controlar la incorporación y aplicación de políticas públicas en el desarrollo de las actividades que cumplen los servidores, dependencias y los grupos de trabajo que estén a su cargo, de acuerdo con los lineamientos y las orientaciones que impartan las dependencias competentes.
32. Identificar y delimitar situaciones y casos susceptibles de ser priorizados y proponerlos al Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos.
33. Ejecutar los planes de priorización aprobados por el Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos en lo de su competencia.
34. Apoyar, en el marco de sus competencias, a la Dirección de Políticas y Estrategia en el análisis de la información que se requiera para sustentar la formulación de la política en materia criminal.
35. Mantener actualizada la información que se registre en los sistemas de información de la Entidad, en los temas de su competencia.
36. Consolidar, analizar y clasificar la información de las investigaciones y acusaciones adelantadas por los servidores y grupos de trabajo a su cargo y remitirla a la Dirección de Políticas y Estrategia.
37. Dirimir, de conformidad con la Constitución y la ley, los conflictos de competencia que se presenten entre la Fiscalía General de la Nación y los demás organismos que desempeñen funciones de Policía Judicial, en el ámbito de su competencia.
38. Dirimir los conflictos administrativos que se presenten al interior de la Fiscalía en el ejercicio de las funciones o en la asignación de investigaciones, en los casos y según las directrices y lineamientos impartidos por el Fiscal General de la Nación.
39. Asesorar a las dependencias de la Fiscalía General de la Nación que cumplen funciones investigativas y acusatorias en los temas de su competencia.
40. Elaborar e implementar los planes operativos anuales en el ámbito de su competencia, de acuerdo con la metodología diseñada por la Dirección de Planeación y Desarrollo.
41. Aplicar las directrices y lineamientos del Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación.
42. Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el Fiscal o Vicefiscal General de la Nación.

Artículo 9. Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. Créese en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente adscrito a la Delegada contra la Criminalidad Organizada, la que tendrá como función principal la investigación y judicialización de los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y las demás conductas delictivas conexas o relacionadas, mediante un trabajo interdisciplinario sin perjuicio de la competencia de las Direcciones Seccionales sobre la materia.

La Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente estará conformada por:

Unidad	Cantidad	Cargo	Niveles
Dirección Especializada para los Delitos contra los	1	Director Nacional I	Directivo
	2	Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito	Profesional
	20	Fiscal Delegado	Profesional

Recursos Naturales y el Medio Ambiente		ante Jueces Penales de Circuito Especializado	
	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional
	1	Profesional Experto	Profesional
	2	Profesional Especializado II	Profesional
	2	Profesional De Gestión III	Profesional
	12	Investigador Experto	Profesional
	10	Profesional Investigador III	Profesional
	9	Profesional Investigador II	Profesional
	9	Profesional Investigador I	Profesional
	10	Técnico Investigador IV	Técnico
	12	Técnico Investigador III	Técnico
	20	Asistente de Fiscal IV	Técnico
	5	Asistente de Fiscal III	Técnico
	5	Asistente de Fiscal II	Técnico
	2	Secretario Ejecutivo	Técnico
	3	Secretario Administrativo	Asistencial

Parágrafo 1: De forma prioritaria la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación desarrollará el concurso necesario para proveer los cargos establecidos en el presente artículo de conformidad con el Sistema Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación, sin perjuicio de los nombramientos en provisionalidad necesarios para implementar inmediatamente la Dirección establecida, en los cuales se aplicarán los principios de mérito, transparencia, garantía de imparcialidad y eficiencia y eficacia del artículo 3, junto con los criterios de mérito señalados en el numeral 3 del artículo 11 del Decreto Ley 020 de 2014.

Parágrafo 2: El inicio del concurso se realizará dentro de los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 3: La Fiscalía General de la Nación presentará anualmente un informe sobre los indicadores de gestión, avance y esclarecimiento en la investigación y judicialización de las conductas que afecten los recursos naturales y el medio ambiente. Esta información será pública y contendrá datos estadísticos que no estén sometidos a reserva.

ARTÍCULO 10. Prevención del daño antijurídico y promoción de la adecuada defensa litigiosa. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el marco de sus funciones, deberá diseñar e implementar una política de prevención del daño antijurídico en materia de protección ambiental y ecológica. De igual forma, promoverá la coordinación de las acciones que aseguren la adecuada defensa de los intereses litigiosos de la nación dentro de los procesos que se lleven a cabo en materia de defensa de los recursos naturales y de la fauna y la flora silvestre.

ARTÍCULO 11. Se autoriza al Gobierno Nacional para asignar los recursos para la implementación y ejecución de la presente ley.

De conformidad con la normativa vigente, las erogaciones que se causen con ocasión de la implementación y ejecución de la presente ley deberán consultar la situación fiscal de la Nación y ajustarse al Marco de Gasto de Mediano Plazo de cada sector involucrado, en concordancia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y las normas orgánicas de presupuesto.

ARTÍCULO 12. Vigencia y Derogatoria. La presente rige a partir de su promulgación y publicación en el Diario Oficial y deroga el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000 y todas las disposiciones que le sean contrarias.

De los Honorables Congresistas,

Cordialmente,

JUAN CARLOS LOSADA VARGAS
Representante a la Cámara
C.C. 79.835.285 de Bogotá

CONTENIDO

Gaceta número 683 - jueves, 17 de junio de 2021

SENADO DE LA REPÚBLICA

Págs.

INFORMES DE CONCILIACIÓN

Informe de conciliación al Proyecto de Acto Legislativo número 38 de 2021 Senado, 521 de 2021 Cámara, por el cual se modifican los artículos 328 y 356 de la Constitución Política otorgándole la categoría de distrito turístico, cultural e histórico al municipio de Puerto Colombia en el departamento del Atlántico 1

Informe de conciliación al Proyecto de ley número 252 de 2020 Senado, 256 de 2019 Cámara, por la cual se reconoce el patrimonio cultural material e inmaterial de la Nación del pueblo raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se propone la elaboración de los estudios correspondientes para realizar las declaratorias que correspondan, acorde a los procedimientos vigentes y se dictan otras disposiciones 2

Informe de conciliación al Proyecto de ley número 192 de 2019 Cámara, 274 de 2020 Senado, por medio de la cual se crea el Régimen de Trabajo Remoto y se establecen normas para promoverlo, regularlo y se dictan otras disposiciones 8

Informe de conciliación al Proyecto de ley número 446 de 2021 Senado, 283 de 2019 Cámara, por medio del cual se sustituye el Título XI "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones..... 18

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

I S S N 0 1 2 3 - 9 0 6 6

AÑO XXX - Nº 686 Bogotá, D. C., jueves, 17 de junio de 2021 EDICIÓN DE 23 PÁGINAS

DIRECTORES: GREGORIO ELJACH PACHECO
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO
www.secretariasenado.gov.co

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA
www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

INFORMES DE CONCILIACIÓN

INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 192 DE 2019 CÁMARA – 274 DE 2020 SENADO

por medio de la cual se crea el régimen de trabajo remoto y se establecen normas para promoverlo, regularlo y se dictan otras disposiciones.

INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY 192 DE 2019 CÁMARA – 274 DE 2020 SENADO "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL RÉGIMEN DE TRABAJO REMOTO Y SE ESTABLECEN NORMAS PARA PROMOVERLO, REGULARLO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

17 junio de 2021

Doctores
ARTURO CHAR CHALJUB
Presidente
Senado de la República

GERMAN BLANCO ALVAREZ
Presidente
Cámara de Representantes
Ciudad

REF: Informe de conciliación al **PROYECTO DE LEY 192 DE 2019 CÁMARA – 274 DE 2020 SENADO "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL RÉGIMEN DE TRABAJO REMOTO Y SE ESTABLECEN NORMAS PARA PROMOVERLO, REGULARLO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**

Honorables Presidentes:

De acuerdo con las designaciones efectuadas por las Presidencias del Honorable Senado de la República y de la Honorable Cámara de Representantes, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 161 de la Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, los suscritos integrantes de la Comisión de Conciliación, nos permitimos someter, por su conducto, a consideración de las Plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes para continuar su trámite correspondiente, el texto conciliado del proyecto de ley de la referencia.

En el siguiente cuadro se relacionan los textos aprobados por la Plenaria de Cámara el pasado 25 de agosto de 2020 y por la Plenaria de Senado el 17 de Junio de 2021.

TEXTO APROBADO EN CÁMARA	TEXTO APROBADO EN SENADO	CONSIDERACIONES
POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL RÉGIMEN DEL TRABAJO VIRTUAL Y SE ESTABLECEN NORMAS PARA PROMOVERLO, REGULARLO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".	**PROYECTO DE LEY 192 DE 2019 CÁMARA – 274 DE 2020 SENADO "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL RÉGIMEN DE TRABAJO REMOTO Y SE ESTABLECEN NORMAS PARA PROMOVERLO, REGULARLO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO.
Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto crear una nueva modalidad de contratación y vinculación laboral, denominada trabajo remoto, la cual será contratada y desarrollada a través de las tecnologías existentes y nuevas. Esta modalidad implica una vinculación laboral directa y formal, con el reconocimiento de los derechos y garantías derivadas de un contrato de trabajo, sin que se busque precarizar el trabajo.	**Artículo 1o. Objeto.** La presente ley tiene por objeto crear una nueva forma de ejecución del contrato de trabajo, denominada trabajo remoto, la cual será pactada de manera voluntaria por las partes y podrá ser desarrollada a través de las tecnologías existentes y nuevas, u otros medios y mecanismos que permitan ejercer la labor contratada de manera remota. Esta nueva forma ejecución del contrato de trabajo se efectuará de manera remota en su totalidad e implica una vinculación laboral con el reconocimiento de los derechos y garantías derivadas de un contrato de trabajo.	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
Artículo 2º. Ámbito de Aplicación. Las normas contenidas en esta Ley serán aplicables a toda persona natural que se encuentren en el territorio nacional; así como las entidades públicas y privadas nacionales; y a su vez a las empresas extranjeras que contraten trabajadores que se encuentren dentro del territorio nacional. bajo esta modalidad. **Parágrafo.** La vinculación a través del trabajo remoto es voluntaria, tanto para el	**Artículo 2o. Ámbito de aplicación**. Las normas contenidas en esta Ley serán aplicables a toda persona natural que se encuentren domiciliadas en el territorio nacional; así como las entidades públicas y privadas nacionales; y a su vez a las empresas extranjeras que contraten trabajadores que se encuentren dentro del territorio nacional. **Parágrafo:** Las entidades del orden nacional deberán contar con concepto previo y habilitante por parte del	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO

empleador como para el trabajador.	Ministerio de Hacienda para obtener la disponibilidad presupuestal que permita acoger lo dispuesto en la presente ley.	
Artículo 3º. Definiciones. Para efectos de la presente ley, se entenderán las siguientes definiciones: **a. Trabajo remoto:** Es una modalidad de trabajo en la cual toda la relación laboral, desde su inicio hasta su terminación, se debe realizar de manera remota mediante la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones donde el empleador y trabajador, no interactúan físicamente a lo largo de la vinculación contractual. Lo anterior, incluye también la posibilidad de realizar un proceso de selección no presencial, con el uso y aplicación de las diferentes tecnologías disponibles. Sin perjuicio de lo anterior, a discreción del empleador y de manera excepcional, el trabajador remoto podrá ser citado en	**Artículo 3o. Definiciones.** Para efectos de la presente ley, se entenderán las siguientes definiciones: a. Trabajo remoto: Es una forma de ejecución del contrato de trabajo en la cual toda la relación laboral, desde su inicio hasta su terminación, se debe realizar de manera remota mediante la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones u otro medio o mecanismo, donde el empleador y trabajador, no interactúan físicamente a lo largo de la vinculación contractual. En todo caso, esta forma de ejecución no comparte los elementos constitutivos y regulados para el teletrabajo y/o trabajo en casa y las normas que lo modifiquen. b. Nueva forma de ejecución del contrato remota. Es aquella por la cual	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
las instalaciones del empleador. **b. Contrato de trabajo remoto**: Es aquel contrato laboral por el cual una persona natural se obliga a prestar una actividad remota a través de las tecnologías disponibles en favor de otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración, lo cual puede constar en archivos digitales. En este tipo de contrato de trabajo, las partes podrán manifestar su consentimiento y/o aceptación mediante el uso de la firma electrónica, a través de mensajes de datos, bajo los principios de autenticidad, integridad, disponibilidad, fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad. En cualquier momento, un contrato laboral convencional previamente suscrito podrá asumir naturaleza de contrato de trabajo remoto por mutuo acuerdo,	una persona natural, vinculada por un contrato laboral, se obliga a prestar una actividad remota a través de las tecnologías disponibles u otro medio o mecanismo, en favor de otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante la obtención de un salario, lo cual puede constar en medios digitales. En esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo, las partes podrán manifestar su consentimiento y o aceptación mediante el uso de la firma electrónica digital y a través de mensajes de datos, bajo los principios y características establecidas en la Ley 527 de 1999 u norma que la modifique, conforme a la autenticidad, integridad, disponibilidad, fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad. c. Trabajador remoto: Persona natural, cubierta por los	
cuando las funciones del trabajo cumplan con el anterior literal, sin perjuicio de lo establecido en el código sustantivo del trabajo y garantizando las condiciones anteriormente pactadas que dieron lugar al contrato de trabajo. **c. Trabajador remoto:** Persona natural, cubierta por los principios mínimos del trabajo y vinculado formalmente mediante un contrato de trabajo, desarrolla actividades de manera remota a través de las tecnologías existentes y nuevas, desde un lugar de su elección, siempre en consenso con el empleador. **d. Nuevas tecnologías:** Cualquier medio, plataforma, software, programa, equipo, dispositivo y/o equipo que permita la comunicación, interacción y/o prestación de un servicio de manera remota mediante una conexión a internet o a cualquier otra red	principios mínimos del trabajo y vinculado mediante un contrato de trabajo, desarrollando actividades de manera remota a través de las tecnologías existentes y nuevas u otro medio o mecanismo, d. Nuevas tecnologías: Cualquier medio, plataforma, software, programa, equipo, dispositivo y/o equipo que permita la comunicación, interacción y/o ejecución del contrato de trabajo de manera remota mediante una conexión a internet o a cualquier otra red que permita ejecutar dichas acciones. Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones contempladas en el artículo 6 de la ley 1341 de 2009. e. Firma Electrónica: Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas privadas, que permite identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos,	
que permita ejecutar dichas acciones. Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones contempladas en el artículo 6 de la ley 1341 de 2009. **e. Firma Electrónica:** Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas privadas, que permite identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente, este conjunto de datos electrónicos acompañan o están asociados a un documento electrónico y cuyas funciones básicas son (i) i identificar a una persona de manera inequívoca, (ii) Asegurar la exclusividad e integridad del documento firmado y (iii) los datos que utiliza el firmante	siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente, este conjunto de datos electrónicos acompañan o están asociados a un documento electrónico y cuyas funciones básicas son (i) identificar a una persona de manera inequívoca, (ii) Asegurar la exclusividad e integridad del documento firmado y (iii) los datos que utiliza el firmante para realizar la firma son únicos y exclusivos y, por tanto, posteriormente, no puede negarse la firma el documento. f. OTP (One Time Password): es un mecanismo de autenticación, el cual consiste en un código temporal que le llega a la persona a través de mensaje de texto SMS o correo electrónico certificado, para que este pueda de manera segura realizar acciones	

para realizar la firma son únicos y exclusivos y, por tanto, posteriormente, no puede negarse la firma el documento. **f. ECM (Enterprise Content Management):** son todas aquellas estrategias, métodos y herramientas para la gestión de contenidos empresariales por las cuales se permite a las organizaciones la posibilidad de crear, almacenar, distribuir, archivar y gestionar todo su contenido de forma óptima. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 527 de 1999. **g. OTP (One Time Password**): es un mecanismo de autenticación, el cual consiste en un código temporal que le llega a la persona a través de mensaje de texto SMS o correo electrónico certificado, para que este pueda de manera segura realizar acciones virtuales, en donde se certificará la identidad de la persona, ya sea vía internet o mediante la aplicación para	virtuales, en donde se certificará la identidad de la persona, ya sea vía internet o mediante la aplicación para teléfonos móviles (APP). El presente mecanismo puede ser opcional por el empleador, si se considera necesario para la seguridad de sus acciones remotas. En todo caso, deberá tener un mecanismo idóneo como lo describe el literal e del presente artículo para todo tipo de acción.	
teléfonos móviles (APP).		
Artículo 4º. Principios Generales del Contrato de Trabajo Remoto. Para efectos de la presente ley, los principios que aquí se exponen, son de obligatorio cumplimiento por las partes: **a.** El contrato de trabajo remoto requerirá para todos los efectos, la concurrencia de los elementos esenciales mencionados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. **b.** Estará basado en el respeto y garantía de los derechos mínimos en materia laboral, así como la subordinación por parte del empleador. Los trabajadores vinculados mediante el contrato de trabajo remoto tendrán los mismos derechos económicos de que gozan todos los trabajadores, incluidas las garantías sindicales y de seguridad social. **c.** Esta modalidad contractual no requiere un lugar físico determinado para la prestación de los servicios. El	**Artículo 4o. Principios Generales del Trabajo Remoto.** Para efectos de la presente ley, los principios que aquí se exponen, son de obligatorio cumplimiento por las partes: a. El trabajo remoto requerirá para todos los efectos, la concurrencia de los elementos esenciales mencionados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. b. Estará basado en el respeto y garantía de los derechos mínimos en materia laboral. Los trabajadores vinculados mediante el contrato laboral para ejecutar sus funciones por medio del trabajo remoto, tendrán los mismos derechos laborales de que gozan todos los trabajadores, incluidas las garantías sindicales y de seguridad social. c. Esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo remota no requiere un lugar físico determinado para la prestación de los servicios. El	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
trabajador tendrá total libertad para prestar sus servicios desde el lugar que considere adecuado, no obstante, en todo momento deberá contar con una conexión y cobertura óptima a internet y los equipos o dispositivos electrónicos para el desempeño de su labor e informar al empleador sobre el lugar desde el cual realizará su labor y deberá garantizar el cumpliendo en todo caso, de los requerimientos mínimos de seguridad y salud en el trabajo, atendiendo las recomendaciones de las Administradoras de Riesgos Laborales, generando el autocuidado como medida preventiva. **d.** El contrato de trabajo remoto tiene como principio la flexibilidad en todas las etapas precontractuales y contractuales, de forma que incluso el perfeccionamiento del contrato de trabajo deberá darse de manera remota, haciendo uso de las tecnologías	trabajador podrá prestar sus servicios desde el lugar que considere adecuado, de común acuerdo con el empleador, previo visto bueno de la Administradora de Riesgos Laborales presente en el contrato. No obstante, en todo momento deberá contar con una conexión y cobertura a internet e informar al empleador sobre el lugar desde el cual realizará su labor y este deberá aprobar el lugar escogido para garantizar el cumplimiento de los requerimientos mínimos de seguridad y salud en el trabajo, atendiendo las recomendaciones de la Administradora de Riesgos Laborales, propiciando el autocuidado como medida preventiva. d. El trabajo remoto tiene como principio la flexibilidad en todas las etapas precontractuales y contractuales, de forma que incluso el perfeccionamiento del contrato de trabajo deberá darse de manera	
existentes y nuevas, completando su perfección con la firma electrónica. El trabajador remoto podrá decidir cuánto tiempo y en qué momento presta sus servicios, siempre en consenso con el empleador, sin sobrepasar la jornada máxima legal, y sin que ello implique un desconocimiento de sus derechos mínimos y/o garantías irrenunciables. **e.** Al contrato de trabajo se le aplicarán las normas sobre garantías sindicales previstas en la legislación laboral vigente; así mismo, se evitará la discriminación en el empleo y se garantizará la igualdad de trato para los trabajadores remotos. **f.** No existe la exclusividad laboral en esta modalidad contractual, toda vez que basados en la concurrencia de voluntades, el trabajo remoto supone la disponibilidad del empleador y a su vez la libertad para	remota, haciendo uso de las tecnologías existentes y nuevas u otro medio o mecanismo, completando su perfección con la firma electrónica u digital.El trabajador remoto y el empleador acordarán el tiempo de ejecución, sin perjuicio de las formalidades del contrato a término fijo, y el momento de la prestación del servicio, sin sobrepasar la jornada máxima legal, y sin que ello implique un desconocimiento de sus derechos mínimos y/o garantías irrenunciables, excepto si se trata de un cargo de dirección, confianza y manejo. e. Al trabajo remoto se le aplicarán las normas sobre garantías y derechos sindicales previstas en la legislación laboral vigente. f. No existe la exclusividad laboral en esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo. En todo caso, se regirá por lo establecido en el articulo 26 del	

ejercer otras labores, siempre y cuando no afecten las condiciones pactadas en el contrato remoto vigente. **Parágrafo.** El literal f del presente artículo no podrá aplicarse a las personas que laboren en entidades públicas de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Constitución Política de Colombia.	Código Sustantvo del Trabajo o norma que lo modifique, en tanto que, basados en la concurrencia de voluntades, el trabajo remoto supone la disponibilidad del empleador y a su vez la libertad para ejercer otras labores, sin embargo, por acuerdo de voluntades y atendiendo la naturaleza del contrato en específico, esta puede pactarse cuando se encuentre en riesgo asuntos confidenciales del empleador. Debe mediar la aceptación del empleado para estipularse la cláusula de exclusividad. g. Se garantiza la no discriminación en los procesos de selección y ejecución de los contratos de trabajo que se organicen y ejecuten de manera remota, así como la igualdad de trato para los trabajadores remotos. **Parágrafo.** El literal f del presente artículo no podrá aplicarse a las personas	

	que laboren en entidades públicas de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Constitución Política de Colombia.	
Artículo 5º. Política Pública del Trabajo Remoto. Con el fin de desarrollar los propósitos y objetivo de la presente ley, el Gobierno Nacional, en un plazo no mayor a 6 meses, a través de las autoridades competentes y con la activa participación de los diferentes sectores sociales involucrados, evaluará, implementará y ejecutará una política pública sobre los lineamientos para la estructuración y desarrollo del trabajo remoto en el país, teniendo cuenta las diferentes disposiciones de la presente ley. Esta política deberá contar con el acompañamiento de las autoridades correspondientes, así como de las Confederaciones de Trabajadores más representativas del país y deberá contener los componentes básicos para lograr una adecuada entrada en funcionamiento e implementación del trabajo remoto. **Parágrafo 1.** El Departamento Nacional de Planeación – DNP –, o quien haga sus veces, deberá realizar una evaluación la política	**Artículo 5. Política Pública del Trabajo Remoto.** Con el fin de desarrollar los propósitos y objetivo de la presente ley, el Gobierno Nacional, en un plazo no mayor a 6 (seis) meses, a través de las autoridades competentes que el gobierno designe y con la activa participación de los diferentes sectores sociales involucrados, diseñará e implementará una política pública sobre los lineamientos para la estructuración y desarrollo del trabajo remoto en el país, teniendo cuenta las diferentes disposiciones de la presente ley. Esta política deberá contar con el acompañamiento de las autoridades correspondientes, los representantes de los empleadores, así como de las Confederaciones de Trabajadores y deberá contener los componentes básicos para lograr una adecuada entrada en funcionamiento e implementación del trabajo remoto **Parágrafo 1.** El Departamento Nacional de Planeación – DNP –, o quien haga sus veces, deberá realizar una evaluación de la política	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO

pública de trabajo remoto dentro de los primeros cinco (5) años de su implementación, y deberá presentar un informe con las conclusiones y recomendaciones al respecto a las Comisiones Séptimas Constitucionales Permanentes del Congreso de la República. **Parágrafo 2.** El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE –, o quien haga sus veces, será la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales sobre la realización de trabajo remoto por parte de la población colombiana, así como por las empresas e instituciones oficiales. Esta información deberá ser pública y estar habilitada para ser consultada y analizada de forma independiente.	pública de trabajo remoto dentro de los primeros cinco (5) años de su implementación, y deberá presentar un informe con las conclusiones y recomendaciones al respecto a las Comisiones Séptimas Constitucionales Permanentes del Congreso de la República. **Parágrafo 2.** El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE –, o quien haga sus veces, será la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales sobre la realización de trabajo remoto por parte de la población colombiana, así como por las empresas e instituciones oficiales, a partir del aprovechamiento de registros administrativos y otras fuentes de información disponibles en el Sistema Estadístico Nacional. Esta información será dispuesta por el DANE de manera agregada y anonimizada, para consulta pública, respetando la reserva estadística establecida en el artículo 5 de la Ley 79 de 1993.	
Artículo 6º. Implementación. El Gobierno Nacional fomentará a través de campañas de	**Artículo 6. Implementación.** El Gobierno Nacional fomentará a través de campañas de socialización, por lo menos una vez al año, en las organizaciones tanto públicas como privadas, la implementación del trabajo remoto. Así mismo, adelantará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral en el marco del trabajo remoto y compartirá los casos de éxito y ventajas que este trae consigo para la economía y empleabilidad en Colombia.	SIN DISCREPANCIAS
Artículo 7º. Perfeccionamiento y firma del Contrato Remoto. Todas las etapas del contrato de trabajo deberán realizarse de manera remota, usando nuevas tecnologías o las ya existentes, sin que se requiera la presencia física de las partes involucradas. **Parágrafo 1**. Los acuerdos en materia laboral remota requerirán firma electrónica de las partes para su perfeccionamiento, con el objetivo de certificar la identidad de las partes y/o eventuales cambios en el documento virtual, dicho acuerdo se tendrá por válido. **Parágrafo 2.** La implementación de este tipo de tecnologías no podrá tener costo adicional para el candidato y/o trabajador remoto, por lo que el costo de implementar las	**Artículo 7o. Perfeccionamiento y firma del Contrato, bajo la forma de ejecución del contrato de trabajo remota.** Todas las etapas del contrato de trabajo deberán realizarse de manera remota, usando nuevas tecnologías o las ya existentes, sin que se requiera la presencia física de las partes involucradas, excepto en los casos en que, por salud ocupacional se requiera presencialidad. **Parágrafo 1.** Los acuerdos en materia laboral y que se ejecuten de manera remota requerirán firma electrónica o digital de las partes para su perfeccionamiento, con el objetivo de certificar la identidad de las partes y/o eventuales cambios en el documento digital. En todo caso, deberá conservar las	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO

tecnologías requeridas para tal efecto correrá por cuenta del empleador. **Parágrafo 3.** Todos los documentos anexos, deberán ser cargados a la plataforma ECM que disponga el empleador. Estos documentos serán entregados en formato PDF con el objetivo de permitir la validación del documento y formarán parte integral del contrato laboral remoto. **Parágrafo 4.** En todo caso, los contratos laborales remotos, de común acuerdo entre el empleador y el trabajador, podrán incluir como parte integral, un acuerdo de confidencialidad entre las partes.	características establecidas en la Ley 527 de 1999 u norma que la modifique, conforme a la autenticidad, integridad, disponibilidad, fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad. **Parágrafo 2.** La implementación de este tipo de tecnologías no podrá tener costo adicional para el candidato y/o trabajador remoto, por lo que el costo de implementar las tecnologías requeridas para tal efecto correrá por cuenta del empleador. **Parágrafo 3.** En todo caso, los contratos laborales, ejecutado de manera remota, de común acuerdo entre el empleador y el trabajador, podrán incluir como parte integral, un acuerdo de confidencialidad entre las partes.	
Artículo 8º. Exámenes médicos. El empleador deberá verificar el estado de salud de sus trabajadores a través de la realización de los exámenes médicos de ingreso, periódicos y/o de egreso a sus trabajadores remotos a través de proveedores autorizados. Cuando la naturaleza del procedimiento lo permita, dichos exámenes podrán llevarse a cabo virtualmente o a través de las tecnologías existentes y/o nuevas, a través de figuras como la telemedicina o la	**Artículo 8. Exámenes médicos.** El empleador deberá verificar el estado de salud de sus trabajadores a través de la realización de los exámenes médicos de ingreso, periódicos y/o de egreso a sus trabajadores remotos a través de proveedores autorizados.	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO

valoración médica virtual y/o remota.		
Artículo 9º. Condiciones de Trabajo. El contrato de trabajo remoto se celebrará, ejecutará e incluso terminará de manera remota, mediante el uso de nuevas tecnologías. Por lo anterior, el trabajador remoto podrá prestar sus servicios desde cualquier lugar, siempre en consenso con el empleador, dedicando para ello la cantidad de tiempo que determine siempre y cuando no sobrepase la jornada máxima legal y cumpla con los requisitos mínimos previstos por el empleador en relación con la calidad y cantidad del trabajo, así como con la conectividad, equipos y herramientas implementadas para tal fin. **Parágrafo.** El trabajador remoto no podrá generar copias parciales, ni totales de los trabajos entregados.	**Artículo 9. Condiciones de Trabajo.** El trabajo remoto se ejecutará y podrá ser terminado de manera remota, mediante el uso de nuevas tecnologías u otro medio o mecanismo, sin perjuicio de las formalidades del contrato según su duración y respetando las disposiciones que sobre terminación del contrato de trabajo se encuentren en el Código Sustantivo del Trabajo, Convención Colectiva, Acuerdo Colectivo, lo que sea más favorable al trabajador. No obstante,los contratos de trabajo que migren a esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo deben conservar sus elementos de creación El trabajador remoto podrá prestar sus servicios desde cualquier lugar, siempre en consenso con el empleador, dedicando para ello la cantidad de tiempo que determine, con sujeción a la jornada laboral pactada, siempre y cuando no sobrepase la jornada máxima legal y cumpla con los requisitos mínimos previstos por el empleador en relación con la calidad y cantidad del trabajo, así como con la conectividad. Lo anterior con el debido acompañamiento de las Administradoras de Riesgos Laborales	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO

	presentes en la relación laboral.	
Artículo 10º. Herramientas y equipos de trabajo. El empleador deberá poner a disposición del trabajador remoto, salvo estipulación en contrario, las herramientas tecnológicas, instrumentos y equipos para la adecuada realización de las labores. En consonancia con el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo, en el contrato de trabajo remoto deberá constar lo siguiente: 1. Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y si es posible de espacio. 2. Determinar los días y los horarios en que el trabajador remoto realizará sus actividades para efectos de delimitar la responsabilidad en caso de accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal. 3. Definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y fijar el procedimiento de la entrega por parte del	**Artículo 10º. Herramientas y equipos de trabajo.** El empleador deberá poner a disposición del trabajador remoto, las herramientas tecnológicas, instrumentos, equipos, conexiones, programas, valor de la energía e internet y/o telefonía, así como cubrir los costos de los desplazamientos ordenados por él. El empleador deberá asumir el mantenimiento de equipos, herramientas, programas y demás elementos necesarios para la prestación y desarrollo de las labores del trabajador remoto. En consonancia con el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo, en el trabajo remoto deberá constar lo siguiente: a. Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y espacio. b. Determinar las funciones, los días y los horarios en que el trabajador remoto realizará sus actividades para efectos de ayudar a identificar el origen en caso de accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal cuando esté sometida a ella. c. Definir las	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO

trabajador remoto al momento de finalizar la modalidad de trabajo remoto. 4. Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el trabajador remoto. **Parágrafo 1.** Para efectos de lo consagrado en el presente artículo, y teniendo en cuenta la importancia que tiene para esta modalidad de trabajo el uso de tecnologías adecuadas, el empleador podrá verificar que los equipos que va a usar el trabajador remoto de forma que se pueda evidenciar que cumplen con los estándares mínimos requeridos para realizar las labores. **Parágrafo 2.** El empleador deberá acordar con el trabajador remoto el reconocimiento de un auxilio de naturaleza no salarial para cubrir los costos derivados de servicio público de energía eléctrica, conexión a internet y/o telefónica y en general de aquellos costos adicionales en los que incurra el trabajador remoto para el cumplimiento de sus labores. Este auxilio no podrá ser inferior al valor del auxilio de transporte vigente. **Parágrafo 3.** Cuando el contrato remoto fuere	responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y fijar el procedimiento de entrega de los elementos de trabajo por parte del empleador al trabajador remoto. d. Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el trabajador remoto. **Parágrafo 1.** Para efectos de lo consagrado en el presente artículo, y teniendo en cuenta la importancia que tiene para esta forma de ejecución del contrato de trabajo remota y el uso de tecnologías adecuadas, el empleador podrá verificar la conexión con la que cuente el trabajador remoto y que esta sea apta para realizar la labor. **Parágrafo 2.** Cuando el trabajo remoto fuere desarrollado en el sector público, el empleador deberá dar cumplimiento a las normativas relacionadas con el manejo electrónico de documentos, de conformidad con las tablas de retención documental establecidas por el Archivo General de la Nación. **Parágrafo 3.** Si el trabajador remoto no llegare a recibir la información necesaria para realizar sus labores o no se le facilitaran o suministrarán las herramientas, programas,	

desarrollado en el sector público, el empleador deberá dar cumplimiento a las normativas relacionadas con el manejo electrónico de documentos, de conformidad con las tablas de retención documental establecidas por el Archivo General de la Nación. **Parágrafo 4.** Si el trabajador remoto no llegara a recibir la información necesaria para realizar sus labores o no se le facilitaran o suministrarán las herramientas, programas, software o demás elementos necesarios para el desempeño de sus funciones u obligaciones, o estos presenten fallas previamente advertidas por el trabajador remoto, el empleador no podrá dejar de reconocer el pago del salario a que el trabajador tiene derecho." **Parágrafo 5.** El empleador deberá asumir el mantenimiento de equipos, herramientas, programas y demás elementos necesarios para la prestación y desarrollo de las labores del trabajador remoto.	software o demás elementos necesarios para el desempeño de sus funciones u obligaciones, o se presenten fallas previamente advertidas por el trabajador remoto, el empleador no podrá dejar de reconocer el pago del salario y demás prestaciones a que el trabajador tiene derecho.	
Artículo 11º. Subordinación. El empleador conservará el poder subordinante, específica y principalmente en lo relacionado al cómo y cuándo prestará el servicio el trabajador remoto, en el marco del respeto de los derechos mínimos del trabajador y de las regulaciones establecidas en la legislación laboral; así como en lo relacionado con la facultad de ejercer el poder disciplinario a que haya lugar.	**Artículo 11º. Subordinación.** El empleador conservará el poder subordinante, en el marco del respeto de los derechos mínimos del trabajador y de las regulaciones establecidas en la legislación laboral; así como en lo relacionado con la facultad de ejercer el poder disciplinario a que haya lugar.	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
Artículo 12º. Conexión a plataforma/sistema informático y/o tecnológico del empleador. El empleador podrá implementar una plataforma, software, programa, aplicación o cualquier herramienta tecnológica para facilitar las comunicaciones con el trabajador remoto y en general para la prestación de los servicios personales, facilitando así que el trabajador remoto se conecte a través de la red para prestar sus servicios. Las plataformas, softwares, programas, aplicaciones o similares podrán ser implementados para cumplir con cualquier obligación derivada de la relación laboral, lo cual incluye sin limitarse a los procesos disciplinarios, entrenamientos y capacitaciones, realización de reuniones de comités, formalización de beneficios e incluso la terminación del contrato de trabajo remoto. **Parágrafo.** Para la realización de toda acción y/o actuación por parte del empleador o el trabajador remoto, deberá llevarse a cabo autenticación OTP.	**Artículo 12º. Conexión a plataforma/sistema informático y/o tecnológico del empleador.** El empleador podrá implementar una plataforma, software, programa, aplicación o cualquier herramienta tecnológica para facilitar las comunicaciones con el trabajador remoto y en general para la prestación de los servicios personales, facilitando así que el trabajador remoto se conecte a través de la red para prestar sus servicios. Las plataformas, softwares, programas, aplicaciones o similares podrán ser implementados para cumplir con cualquier obligación derivada de la relación laboral, lo cual incluye sin limitarse a los procesos, entrenamientos y capacitaciones, realización de reuniones de comités, formalización de beneficios e incluso la terminación del contrato de trabajo remoto.	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
Artículo 13º. Aplicación de normas para prevenir corregir y sancionar el acoso laboral. Las normas relacionadas para prevenir corregir y sancionar el acoso laboral. Serán aplicables a los empleadores o empleadores que implementen el contrato de trabajo remoto. Definidas en la Ley 1010 de 2006, y las demás normas que la adicionen, o modifiquen o complementen.	**Artículo 13º. Aplicación de normas para prevenir corregir y sancionar el acoso laboral.** Las normas definidas en la Ley 1010 de 2006 y las demás normas que la adicionen, o modifiquen o complementen, relacionadas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral, serán aplicables a los empleadores y trabajadores que implementen el trabajo remoto	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
Artículo 14º. Periodos de pago del salario. El pago del salario para trabajadores remotos podrá hacerse de manera diaria, semanal, quincenal, mensual o como lo acuerden las partes; en el caso de la periodicidad mensual, el salario en dinero deberá pagarse por periodos iguales y vencidos, podrá pagarse en periodo mensual siguiente a aquel en el que fue causado. Lo anterior, no obsta para que cumplida y oportunamente se haga el pago de aportes a seguridad social y parafiscales dentro de los plazos previstos en la ley vigente.	**Artículo 14º. Periodos de pago del salario**. El pago del salario se hará conforme a las reglas establecidas en el artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo y normas concordantes	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
Artículo 15º. Los trabajadores vinculados por medio de la modalidad de trabajo remoto tendrán derecho al reconocimiento y pago de las horas extras a su jornada de trabajo habitual o contractual, como también al trabajo realizado en dominicales y festivo de conformidad a lo establecido en el artículo 159 y 179 del Código Sustantivo del Trabajo.	**Artículo 15º. Reconocimiento horas extras.** Los trabajadores que, de común acuerdo con el empleador, ejecuten su contrato de manera remota, tendrán derecho al reconocimiento y pago de las horas extras a su jornada de trabajo ordinaria o contractual, como también al trabajo realizado en dominicales y festivo de conformidad a lo establecido en el artículo 134, 159 y 179 del Código Sustantivo del Trabajo, sin perjuicio de lo pactado para los cargos de dirección, manejo y confianza.	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
Artículo 16º. Suspensión del contrato. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, el trabajador remoto podrá libremente elegir períodos de suspensión del contrato, siempre en consenso con el empleador y de acuerdo con la disponibilidad y necesidad de la operación. Durante la suspensión del contrato el trabajador se abstendrá de prestar el servicio y el empleador estará exonerado de pagar el salario correspondiente al periodo de suspensión. El contrato de trabajo remoto permanecerá vigente durante el periodo de tiempo de la suspensión.	**NO EXISTE** **EN COMISIÓN SÉPTIMA DE SENADO SE ELIMINA ATENDIENDO QUE LA SUSPENSIÓN ESTÁ REGULADA EN EL ARTÍCULO 51 DEL CST Y AL NO PRETENDER ESTABLECER NUEVAS CONDICIONES PARA ELLO, NO SE REQUIERE DE LA INCLUSIÓN DEL ARTÍCULO EN EL PROYECTO.**	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
Artículo 17º. Citación del trabajador a las instalaciones del empleador. El empleador, de manera excepcional, podrá requerir al	**Artículo 16. Citación del trabajador a las instalaciones del empleador.** El empleador, de manera excepcional, podrá requerir al	

trabajador remoto en sus instalaciones laborales para los siguientes casos: 1. Verificación de los estándares y requisitos que deben cumplir las herramientas y los equipos de trabajo para la realización de la labor previstos anteriormente por el empleador. 2. Cuando para la ejecución de las labores del trabajador remoto, se deban instalar o actualizar manualmente en los equipos de trabajo algún tipo de software, programa, aplicación o plataforma. 3. Cuando el trabajador presente reiteradamente el incumplimiento de sus labores. 4. Citación para proceso de descargos laborales, así como las demás citaciones que sean requeridas por el empleador para adelantar el proceso sancionatorio o disciplinario para la aplicación de lo contemplado en los artículos 111 y 112 del Código	trabajador remoto en sus instalaciones laborales, para los siguientes casos: 1. Verificación de los estándares y requisitos que deben cumplir las herramientas y los equipos de trabajo para la realización de la labor previstos anteriormente por el empleador. 2. Cuando para la ejecución de las labores del trabajador remoto, se deban instalar o actualizar manualmente en los equipos de trabajo algún tipo de software, programa, aplicación o plataforma 3. Cuando el trabajador presente reiteradamente el incumplimiento de sus labores y eventualmente sea citado para proceso de descargos laborales, así como las demás citaciones que sean requeridas por el empleador para adelantar el proceso sancionatorio o disciplinario para la aplicación de lo contemplado en los artículos 111 y 112 del Código Sustantivo del Trabajo. **Parágrafo.** El trabajador remoto, no será beneficiario del auxilio de transporte determinado por la ley. En caso de que el empleador requiera que el trabajador remoto se presente en sus instalaciones, siempre que el trabajador remoto cumpla con los requisitos legales para ello, deber	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
Sustantivo del Trabajo. **Parágrafo.** En caso de que el empleador requiera que el trabajador remoto se presente en sus instalaciones, siempre que el trabajador remoto cumpla con los requisitos legales para ello, el empleador deberá reconocer de manera proporcional el auxilio legal de transporte previsto en la legislación laboral vigente.	reconocer, en los casos en que sea aplicable de acuerdo con la normativa vigente y de manera proporcional, el auxilio legal de transporte previsto en la legislación laboral vigente **Parágrafo 2.** En todo caso, las citaciones aquí previstas no dan lugar al cambio de forma de ejecución del contrato de trabajo remota, toda vez que continuar siendo remoto.	
Artículo 18º. Dotación de calzado y vestido. El trabajador remoto no tendrá derecho a recibir la prestación social denominada calzado y vestido en los términos previstos en el Código Sustantivo del Trabajo. Lo anterior considerando que la prestación del servicio no supone la necesidad de utilizar un vestido o calzado de labor.	**SE ELIMINA** **NO ES GARANTISTA CONDICIONAR ESTA DISPOSICIÓN POR TRATARSE DE GARANTÍAS DE TODO TRABAJADOR ANTE LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO. NO ES LA INTENCIÓN DEL PROYECTO.**	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
Artículo 19º. Control de horarios y cumplimiento de funciones y obligaciones en contratos de trabajo remoto. El empleador se encuentra facultado y autorizado para controlar el cumplimiento de las obligaciones, funciones y deberes del trabajador remoto, mediante el uso de herramientas tecnológicas, pero en todo caso, el empleador	**Artículo 18°. Control de horarios y cumplimiento de funciones y obligaciones en el trabajo remoto.** El empleador se encuentra facultado y autorizado para controlar el cumplimiento de las obligaciones, funciones y deberes del trabajador remoto, mediante el uso de herramientas tecnológicas u otros medios o mecanismos,	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
respetará la intimidad y privacidad del trabajador remoto. Se entenderá como privacidad del trabajador remoto, para efectos de la presente ley, cualquier asunto diferente a aquellos directa o indirectamente relacionados con las labores, funciones, deberes y/u obligaciones que tenga el trabajador remoto en virtud de su contrato de trabajo y que permita armonizar la jornada pactada con la vida familiar y personal de los trabajadores remotos, evitando con ello, asigna cargas diferentes a las pactadas en la jornada laboral remota. Para ello, el empleador y trabajador remoto deberán ceñirse a la jornada pactada, con la intención de evitar la hiperconexión, que puede generar impactos en la salud y equilibrio emocional de los trabajadores remotos. **Parágrafo 1.** Toda entidad, pública o privada, que utilice la modalidad de contratación laboral remoto, deberá poseer un software de administración de contenidos, que permita generar trazabilidad, formularios electrónicos, validación automática de listas restrictivas, creación de documentos PDF, flujos de trabajo parametrizables con modelador BPM (Business Process Management), a	pero en todo caso, el empleador respetará la intimidad y privacidad del trabajador remoto, y el derecho a la desconexión laboral, entendida como la garantía que todo trabajador y empleador, de no tener contacto con herramientas, bien sea tecnológicas o no, relacionadas con su ámbito laboral, después de culminada la jornada ordinaria de trabajo o durante de ella, en el tiempo que se haya conciliado para la vida personal y familiar. Se entenderá como privacidad del trabajador remoto, para efectos de la presente ley, cualquier asunto diferente a aquellos directa o indirectamente relacionados con las labores, funciones, deberes y/u obligaciones que tenga el trabajador remoto en virtud de su contrato de trabajo y que permita armonizar la jornada pactada con la vida familiar y personal de los trabajadores remotos, evitando con ello, asignar cargas diferentes a las pactadas en la jornada laboral remota. Para ello, el empleador y trabajador remoto deberán ceñirse a la jornada pactada, con la intención de evitar la hiperconexión, que puede generar impactos en la salud y equilibrio emocional de los trabajadores remotos.	
su vez deberá poseer funcionalidades de ejecución de usuario, ejecución de temporizadores, ejecución de sistema y herramientas de actividades que se puedan configurar en las ejecuciones. **Parágrafo 2.** Toda entidad que utilice la modalidad de contratación laboral remota, deberá poseer un módulo de validación real de la identidad de los trabajadores remotos, a través de tecnologías de validación biométrica.		
Artículo 20º. Formulario electrónico único de afiliación al Sistema General de Seguridad Social y entidades parafiscales. Sin perjuicio de los mecanismos de afiliación previstos para el Sistema de Riesgos Laborales y/o el Sistema de Afiliación Transaccional previsto para el Sistema de Salud, el Gobierno Nacional deberá diseñar e implementar un formulario único de afiliación al Sistema General de Seguridad Social y a las entidades parafiscales que permita a los trabajadores remotos inscribirse al Sistema General de Seguridad Social sin que se requiera la firma manuscrita de las partes y podrá radicarse remota o virtualmente.	**Artículo 19. Formulario electrónico único de afiliación al Sistema General de Seguridad Social y entidades parafiscales.** Sin perjuicio de los mecanismos de afiliación previstos para el Sistema de Riesgos Laborales y/o el Sistema de Afiliación Transaccional previsto para el Sistema de Salud, el Gobierno Nacional deberá diseñar e implementar un formulario único de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en un tiempo no mayor 1 año (un año) y a las entidades parafiscales que permita a los trabajadores remotos inscribirse al Sistema General de Seguridad Social sin que se requiera la firma manuscrita de las partes y podrá radicarse remota o virtualmente.	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO

Artículo 21º. Aportes a la Seguridad Social. El contrato de trabajo remoto en materia de aportes a la seguridad social se regulará por las normas vigentes en materia de Sistema General de Seguridad Social.	**Artículo 20. Aportes a la Seguridad Social.** El contrato de trabajo, ejecutado de manera remota, en materia de aportes a la seguridad social se regulará por las normas vigentes en materia de Sistema General de Seguridad Social.	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
Artículo 22º. Las Administradoras de Riesgos Laborales, deberán elaborar un programa de prevención, control y actuación de riesgos laborales que llegaren a presentar los trabajadores remotos y de rehabilitación integral, el cual deberá ser suministrado tanto al trabajador como al empleador. El empleador tendrá la obligación de afiliar al trabajador remoto al Sistema General de Riesgos Laborales, conforme a lo establecido en la Ley 776 de 2002 y el Decreto-Ley 1295 de 1994, modificado por la Ley 1562 de 2012. Para efectos de lo cual, el empleador deberá allegar, a la Administradora de Riesgos laborales – ARL - , copia del contrato o del acto administrativo de vinculación laboral del trabajador remoto, adjuntando el formulario facilitado por ésta para la determinación del riesgo y definición del origen de las contingencias que llegaren a presentarse.	**Artículo 21°. Programa de prevención, control y actuación de riesgos laborales**. Las Administradoras de Riesgos Laborales, deberán elaborar un programa de prevención, control y actuación de riesgos laborales y de rehabilitación integral que llegaren a presentar los trabajadores remotos, el cual deberá ser suministrado tanto al trabajador como al empleador. El empleador tendrá la obligación de afiliar al trabajador remoto al Sistema General de Riesgos Laborales, conforme a lo establecido en la Ley 776 de 2002 y el Decreto-Ley 1295 de 1994, modificado por la Ley 1562 de 2012. Para efectos de lo cual, el empleador deberá allegar, a la Administradora de Riesgos laborales – ARL - , copia del contrato o del acto administrativo de vinculación laboral del trabajador remoto, adjuntando el formulario facilitado por ésta para la determinación del riesgo y definición del origen de las contingencias que llegaren a presentarse. **Parágrafo 1.** Las Aseguradoras de Riesgos Laborales deberán elaborar el formulario a que hace referencia el presente artículo, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de ley, en el cual deberá solicitarse la descripción de las actividades que ejecutará el trabajador remoto, el lugar en el cual se desarrollarán, el horario en el cual se ejecutarán, la clase de riesgo que corresponde a las labores ejecutadas y la clase de riesgo correspondiente a la empresa o centro de trabajo; dicho formulario deberá publicado en la página web de la ARL, para fines de consulta y descargue para diligenciamiento de aquellos empleadores que puedan llegar a requerirlo. **Parágrafo 2.** Las Administradoras de Riesgos Laborales acompañarán a los trabajadores remotos y a los empleadores en la verificación de las condiciones de trabajo, que garanticen al trabajador remoto una real seguridad y salud en el trabajo.	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
	trabajador remoto una real seguridad y salud en el trabajo.	
Artículo 23º. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, empleadores y trabajadores remotos en cualquiera de sus modalidades podrán acogerse a las disposiciones propias de los trabajadores remotos, con el fin de que estas disposiciones les sean aplicables, mediando la concurrencia de voluntades entre trabajador y empleador.	**Artículo 22. Migración a trabajo remoto.** A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, cualquier trabajador podrá acogerse a esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo remota prevista en esta ley, siempre que medie la concurrencia de voluntades entre trabajador y empleador, sin menoscabo de los derechos laborales adquiridos.	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
Artículo 24º. Aplicación de normas respecto salas de lactancia. Las normas relacionadas con las Salas Amigas de la Familia Lactante del entorno laboral, no serán aplicables a los empleadores que implementen el contrato de trabajo remoto para vincular trabajadores remotos.	**Artículo 23°. Aplicación de normas respecto de tiempo de lactancia**. El empleador garantizará en todo momento las horas de lactancia y los tiempos de licencia de maternidad, a que tiene derecho la madre trabajadora y lactante sin que ello implique el desmejoramiento de sus condiciones laborales	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
Artículo 25º. Las empresas que tengan trabajadores acogidos a la modalidad de trabajo remoto deberán garantizar que mínimo el 10% de dichos trabajadores sean pertenecientes a grupos étnicos y/o personas en situación de discapacidad; lo cual será exigible siempre y cuando se cuente con la oferta de perfiles requeridos dentro de dichos grupos.	**Artículo 24°. Vinculación sector especialmente protegidos**. Los empleadores que hagan uso de esta forma de ejecución del contrato de trabajo remota deberán promover la vinculación de jóvenes, mujeres, trabajadores y trabajadoras que sean pertenecientes a grupos étnicos y/o personas con discapacidad.	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
ARTÌCULO NUEVO. La reproducción, traducción, adaptación, arreglo o transformación de contenidos desarrollados por el trabajador en medios remotos no podrán ser usados ni explotados económicamente por el empleador por fuera del termino de duración de la relación contractual. Cualquier disposición contractual en contrario es inexistente de pleno derecho. La reproducción, traducción, adaptación, arreglo o transformación de contenidos desarrollados por el trabajador en medios remotos no podrán ser usados ni explotados económicamente por el empleador por fuera del termino de duración de la relación contractual. Cualquier disposición contractual en contrario es inexistente de pleno derecho.	**SE ELIMINA**	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
ARTÍCULO NUEVO. TAREAS DE CUIDADOS. Las personas que trabajen bajo esta modalidad y que acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de catorce (14) años, personas con discapacidad o adultas mayores que convivan con la persona trabajadora y que requieran asistencia	**Artículo 25°. Tareas de cuidados**. Las personas que trabajen de manera remota y que acrediten tener a su cargo, de manera única, el cuidado de personas menores de catorce (14) años, personas con discapacidad o adultas mayores en primer grado de consanguinidad que convivan con el trabajador remoto y que requieran	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO

específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada.	asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada, con un autorización previa al empleador que permita la interrupción, sin el desmejoramiento de sus condiciones laborales.	
ARTÍCULO NUEVO. Cuando se tratare del régimen privado, la exclusividad laboral podrá ser pactada de común acuerdo entre las partes cuando la naturaleza de la labor a realizar así lo requiera**.**	**SE ELIMINA** **Por considerarse inmersa dentro de la exclusividad, mencionada anteriormente en el proyecto.**	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
ARTICULO NUEVO. En consenso con el empleador, el trabajador remoto podrá prestar los servicios para el cual fue contratado por horas, conforme sus necesidades y las del empleador. Igualmente, las partes podrán programar los servicios, observando los límites mínimos y máximos de la jornada por semana establecidos en las leyes vigentes. Dicha jornada por horas pactada será distribuida en la semana y no implicaría un cumplimiento de horario estricto diario, sin perjuicio de la verificación que ejercerá el empleador de manera semanal para comprobar el cumplimiento de lo pactado.	**Artículo 26°. Sobre la Jornada laboral en el trabajo remoto.** La jornada laboral en esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo remota, se ajustar a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, convención colectiva, acuerdo colectivo o contrato de trabajo, la que sea más favorable al trabajador. El trabajador remoto podrá prestar los servicios para el cual fue contratado, conforme sus necesidades y las del empleador. Lo anterior no permitirá, en ningún caso y por ningún motivo, el desmejoramiento de las condiciones salariales del trabajador. Dicha jornada ser distribuida en la semana y no implicaría un cumplimiento estricto de horario al día	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
Parágrafo. El Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Trabajo en un plazo no mayor a 6 meses, reglamentará la proporción de los aportes y realizará los ajustes correspondientes a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes para aquellos contratos de trabajo remotos cuyos periodos de pagos sean por horas.		
NO EXISTE	**Artículo 27°.** Los empleados públicos podrán ejecutar sus funciones por medio del trabajo remoto consagrado en la presente ley, para lo cual se respetarán todos sus derechos y garantías laborales inherentes a su vinculación legal y reglamentaria conforme las normas vigentes.	SE ACOGE EL TEXTO APROBADO EN SENADO
Artículo 26°. Vigencia. La presente Ley rige a partir de su sanción, promulgación y publicación en el Diario Oficial.	**Artículo 28°. Vigencia.** La presente Ley rige a partir de su sanción, promulgación y publicación en el Diario Oficial.	NO HAY DISCREPANCIAS

Con el fin de dar cumplimiento a la designación, y después de analizados los textos provenientes de Cámara y Senado y atendiendo que una vez radicada la ponencia del segundo debate ante la Plenaria del Senado, el Ministerio de Trabajo y sectores interesados presentaron valiosos aportes que ayudaron a mejorar, precisar y enriquecer el proyecto, y por ello, se define por parte de los conciliadores acoger el texto aprobado en Senado, atendiendo los cambios debidamente relacionados, pues recoge con mayor precisión la intención del legislador frente al Proyecto de Ley.

A continuación, el texto conciliado.

TEXTO CONCILIADO PROYECTO DE LEY 192 DE 2019 CÁMARA – 274 DE 2020 SENADO "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL RÉGIMEN DE TRABAJO REMOTO Y SE ESTABLECEN NORMAS PARA PROMOVERLO, REGULARLO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Artículo 1o. Objeto. La presente ley tiene por objeto crear una nueva forma de ejecución del contrato de trabajo, denominada trabajo remoto, la cual será pactada de manera voluntaria por las partes y podrá ser desarrollada a través de las tecnologías existentes y nuevas, u otros medios y mecanismos que permitan ejercer la labor contratada de manera remota.
Esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo se efectuará de manera remota en su totalidad e implica una vinculación laboral con el reconocimiento de los derechos y garantías derivadas de un contrato de trabajo.

Artículo 2o. Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en esta Ley serán aplicables a toda persona natural que se encuentren domiciliadas en el territorio nacional; así como las entidades públicas y privadas nacionales; y a su vez a las empresas extranjeras que contraten trabajadores que se encuentren dentro del territorio nacional.
Parágrafo: Las entidades del orden nacional deberán contar con concepto previo y habilitante por parte del Ministerio de Hacienda para obtener la disponibilidad presupuestal que permita acoger lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 3o. Definiciones. Para efectos de la presente ley, se entenderán las siguientes definiciones:

a. Trabajo remoto: Es una forma de ejecución del contrato de trabajo en la cual toda la relación laboral, desde su inicio hasta su terminación, se debe realizar de manera remota mediante la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones u otro medio o mecanismo, donde el empleador y trabajador, no interactúan físicamente a lo largo de la vinculación contractual. En todo caso, esta forma de ejecución no comparte los elementos constitutivos y regulados para el teletrabajo y/o trabajo en casa y las normas que lo modifiquen.
b. Nueva forma de ejecución del contrato remota. Es aquella por la cual una persona natural, vinculada por un contrato laboral, se obliga a prestar una actividad remota a través de las tecnologías disponibles u otro medio o mecanismo, en favor de otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante la obtención de un salario, lo cual puede constar en medios digitales. En esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo, las partes podrán manifestar su consentimiento y o aceptación mediante el uso de la firma electrónica –digital y a través de mensajes de datos, bajo los principios y características establecidas en la Ley 527 de 1999 u norma que la modifique, conforme a la autenticidad, integridad, disponibilidad, fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad.
c. Trabajador remoto: Persona natural, cubierta por los principios mínimos del trabajo y vinculado mediante un contrato de trabajo, desarrollando actividades de manera remota a través de las tecnologías existentes y nuevas u otro medio o mecanismo.
d. Nuevas tecnologías: Cualquier medio, plataforma, software, programa, equipo, dispositivo y/o equipo que permita la comunicación, interacción y/o ejecución del contrato de trabajo de manera remota mediante una conexión a internet o a cualquier otra red que permita ejecutar dichas acciones. Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones contempladas en el artículo 6 de la ley 1341 de 2009.
e. Firma Electrónica: Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas privadas, que permite identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente, este conjunto de datos electrónicos acompañan o están asociados a un documento electrónico y cuyas funciones básicas son (i) identificar a una persona de manera inequívoca, (ii) Asegurar la exclusividad e integridad del documento firmado y (iii) los datos que utiliza el firmante para realizar la firma son únicos y exclusivos y, por tanto, posteriormente, no puede negarse la firma el documento.
f. OTP (One Time Password): es un mecanismo de autenticación, el cual consiste en un código temporal que le llega a la persona a través de mensaje de texto SMS o correo electrónico certificado, para que este pueda de manera segura realizar acciones virtuales, en donde se certificará la identidad de la persona, ya sea vía internet o mediante la aplicación para teléfonos móviles (APP). El presente mecanismo puede ser opcional por el empleador, si se considera necesario para la seguridad de sus acciones remotas. En todo caso, deberá tener un mecanismo idóneo como lo describe el literal e del presente artículo para todo tipo de acción.

Artículo 4o. Principios Generales del Trabajo Remoto. Para efectos de la presente ley, los principios que aquí se exponen, son de obligatorio cumplimiento por las partes:

a. El trabajo remoto requerirá para todos los efectos, la concurrencia de los elementos esenciales mencionados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
b. Estará basado en el respeto y garantía de los derechos mínimos en materia laboral. Los trabajadores vinculados mediante el contrato laboral para ejecutar sus funciones por medio del trabajo remoto, tendrán los mismos derechos laborales de que gozan todos los trabajadores, incluidas las garantías sindicales y de seguridad social.
c. Esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo remota no requiere un lugar físico determinado para la prestación de los servicios. El trabajador podrá prestar sus servicios desde el lugar que considere adecuado, de común acuerdo con el empleador, previo visto bueno de la Administradora de Riesgos Laborales presente en el contrato. No obstante, en todo momento deberá contar con una conexión y cobertura a internet e informar al empleador sobre el lugar desde el cual realizará su labor y este deberá aprobar el lugar escogido para garantizar el cumplimiento de los requerimientos mínimos de seguridad y salud en el trabajo, atendiendo las recomendaciones de la Administradora de Riesgos Laborales, propiciando el autocuidado como medida preventiva.

d. El trabajo remoto tiene como principio la flexibilidad en todas las etapas precontractuales y contractuales, de forma que incluso el perfeccionamiento del contrato de trabajo deberá darse de manera remota, haciendo uso de las tecnologías existentes y nuevas u otro medio o mecanismo, completando su perfección con la firma electrónica u digital. El trabajador remoto y el empleador acordarán el tiempo de ejecución, sin perjuicio de las formalidades del contrato a término fijo, y el momento de la prestación del servicio, sin sobrepasar la jornada máxima legal, y sin que ello implique un desconocimiento de sus derechos mínimos y/o garantías irrenunciables, excepto si se trata de un cargo de dirección, confianza y manejo.
e. Al trabajo remoto se le aplicarán las normas sobre garantías y derechos sindicales previstas en la legislación laboral vigente.
f. No existe la exclusividad laboral en esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo. En todo caso, se regirá por lo establecido en el articulo 26 del Código Sustantvo del Trabajo o norma que lo modifique, en tanto que, basados en la concurrencia de voluntades, el trabajo remoto supone la disponibilidad del empleador y a su vez la libertad para ejercer otras labores, sin embargo, por acuerdo de voluntades y atendiendo la naturaleza del contrato en específico, esta puede pactarse cuando se encuentre en riesgo asuntos confidenciales del empleador. Debe mediar la aceptación del empleado para estipularse la cláusula de exclusividad.
g. Se garantiza la no discriminación en los procesos de selección y ejecución de los contratos de trabajo que se organicen y ejecuten de manera remota, así como la igualdad de trato para los trabajadores remotos.
Parágrafo 1. El literal f del presente artículo no podrá aplicarse a las personas que laboren en entidades públicas de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Constitución Política de Colombia.

Artículo 5. Política Pública del Trabajo Remoto. Con el fin de desarrollar los propósitos y objetivo de la presente ley, el Gobierno Nacional, en un plazo no mayor a 6 (seis) meses, a través de las autoridades competentes que el gobierno designe y con la activa participación de los diferentes sectores sociales involucrados, diseñará e implementará una política pública sobre los lineamientos para la estructuración y desarrollo del trabajo remoto en el país, teniendo cuenta las diferentes disposiciones de la presente ley.
Esta política deberá contar con el acompañamiento de las autoridades correspondientes, los representantes de los empleadores, así como de las Confederaciones de Trabajadores y deberá contener los componentes básicos para lograr una adecuada entrada en funcionamiento e implementación del trabajo remoto.

Parágrafo 1. El Departamento Nacional de Planeación – DNP –, o quien haga sus veces, deberá realizar una evaluación de la política pública de trabajo remoto dentro de los primeros cinco (5) años de su implementación, y deberá presentar un informe con las conclusiones y recomendaciones al respecto a las Comisiones Séptimas Constitucionales Permanentes del Congreso de la República.

Parágrafo 2. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE –, o quien haga sus veces, será la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales sobre la realización de trabajo remoto por parte de la población colombiana, así como por las empresas e instituciones oficiales, a partir del aprovechamiento de registros administrativos y otras fuentes de información disponibles en el Sistema Estadístico Nacional. Esta información será dispuesta por el DANE de manera agregada y anonimizada, para consulta pública, respetando la reserva estadística establecida en el artículo 5 de la Ley 79 de 1993.

Artículo 6o. Implementación. El Gobierno Nacional fomentará a través de campañas de socialización, por lo menos una vez al año, en las organizaciones tanto públicas como privadas, la implementación del trabajo remoto. Así mismo, adelantará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral en el marco del trabajo remoto y compartirá los casos de éxito y ventajas que este trae consigo para la economía y empleabilidad en Colombia.

Artículo 7o. Perfeccionamiento y firma del Contrato, bajo la forma de ejecución del contrato de trabajo remota. Todas las etapas del contrato de trabajo deberán realizarse de manera remota, usando nuevas tecnologías o las ya existentes, sin que se requiera la presencia física de las partes involucradas, excepto en los casos en que, por salud ocupacional se requiera presencialidad.

Parágrafo 1. Los acuerdos en materia laboral y que se ejecuten de manera remota requerirán firma electrónica o digital de las partes para su perfeccionamiento, con el objetivo de certificar la identidad de las partes y/o eventuales cambios en el documento digital.

En todo caso, deberá conservar las características establecidas en la Ley 527 de 1999 u norma que la modifique, conforme a la autenticidad, integridad, disponibilidad, fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad.

Parágrafo 2. La implementación de este tipo de tecnologías no podrá tener costo adicional para el candidato y/o trabajador remoto, por lo que el costo de implementar las tecnologías requeridas para tal efecto correrá por cuenta del empleador.

Parágrafo 3. En todo caso, los contratos laborales, ejecutado de manera remota, de común acuerdo entre el empleador y el trabajador, podrán incluir como parte integral, un acuerdo de confidencialidad entre las partes.

Artículo 8º. Exámenes médicos. El empleador deberá verificar el estado de salud de sus trabajadores a través de la realización de los exámenes médicos de ingreso, periódicos y/o de egreso a sus trabajadores remotos a través de proveedores autorizados.

Artículo 9o. Condiciones de Trabajo. El trabajo remoto se ejecutará y podrá ser terminado de manera remota, mediante el uso de nuevas tecnologías u otro medio o mecanismo, sin perjuicio de las formalidades del contrato según su duración y respetando las disposiciones que sobre terminación del contrato de trabajo se encuentren en el Código Sustantivo del Trabajo, Convención Colectiva, Acuerdo Colectivo, lo que sea más favorable al trabajador. No obstante,los contratos de trabajo que migren a esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo deben conservar sus elementos de creación

El trabajador remoto podrá prestar sus servicios desde cualquier lugar, siempre en consenso con el empleador, dedicando para ello la cantidad de tiempo que determine, con sujeción a la jornada laboral pactada, siempre y cuando no sobrepase la jornada máxima legal y cumpla con los requisitos mínimos previstos por el empleador en relación con la calidad y cantidad del trabajo, así como con la conectividad. Lo anterior con el debido acompañamiento de las Administradoras de Riesgos Laborales presentes en la relación laboral.

Artículo 10º. Herramientas y equipos de trabajo. El empleador deberá poner a disposición del trabajador remoto, las herramientas tecnológicas, instrumentos, equipos, conexiones, programas, valor de la energía e internet y/o telefonía, así como cubrir los costos de los desplazamientos ordenados por él.

El empleador deberá asumir el mantenimiento de equipos, herramientas, programas y demás elementos necesarios para la prestación y desarrollo de las labores del trabajador remoto. En consonancia con el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo, en el trabajo remoto deberá constar lo siguiente:

a. Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y espacio.
b. Determinar las funciones, los días y los horarios en que el trabajador remoto realizará sus actividades para efectos de ayudar a identificar el origen en caso de accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal cuando esté sometida a ella. c. Definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y fijar el procedimiento de entrega de los elementos de trabajo por parte del empleador al trabajador remoto.
d. Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el trabajador remoto.

Parágrafo 1. Para efectos de lo consagrado en el presente artículo, y teniendo en cuenta la importancia que tiene para esta forma de ejecución del contrato de trabajo remota y el uso de tecnologías adecuadas, el empleador podrá verificar la conexión con la que cuente el trabajador remoto y que esta sea apta para realizar la labor.

Parágrafo 2. Cuando el trabajo remoto fuere desarrollado en el sector público, el empleador deberá dar cumplimiento a las normativas relacionadas con el manejo electrónico de documentos, de conformidad con las tablas de retención documental establecidas por el Archivo General de la Nación.

Parágrafo 3. Si el trabajador remoto no llegare a recibir la información necesaria para realizar sus labores o no se le facilitaran o suministraran las herramientas, programas, software o demás elementos necesarios para el desempeño de sus funciones u obligaciones, o se presenten fallas previamente advertidas por el trabajador remoto, el empleador no podrá dejar de reconocer el pago del salario y demás prestaciones a que el trabajador tiene derecho.

Artículo 11º. Subordinación. El empleador conservará el poder subordinante, en el marco del respeto de los derechos mínimos del trabajador y de las regulaciones establecidas en la legislación laboral; así como en lo relacionado con la facultad de ejercer el poder disciplinario a que haya lugar.

Artículo 12º. Conexión a plataforma/sistema informático y/o tecnológico del empleador. El empleador podrá implementar una plataforma, software, programa, aplicación o cualquier herramienta tecnológica para facilitar las comunicaciones con el trabajador remoto y en general para la prestación de los servicios personales, facilitando así que el trabajador remoto se conecte a través de la red para prestar sus servicios. Las plataformas, softwares, programas, aplicaciones o similares podrán ser implementados para cumplir con cualquier obligación derivada de la relación laboral, lo cual incluye sin limitarse a los procesos, entrenamientos y capacitaciones, realización de reuniones de comités, formalización de beneficios e incluso la terminación del contrato de trabajo remoto.

Artículo 13º. Aplicación de normas para prevenir corregir y sancionar el acoso laboral. Las normas definidas en la Ley 1010 de 2006 y las demás normas que la adicionen, o modifiquen o complementen, relacionadas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral, serán aplicables a los empleadores y trabajadores que implementen el trabajo remoto

Artículo 14º. Periodos de pago del salario. El pago del salario se hará conforme a las reglas establecidas en el artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo y normas concordantes

Artículo 15º. Reconocimiento horas extras. Los trabajadores que, de común acuerdo con el empleador, ejecuten su contrato de manera remota, tendrán derecho al reconocimiento y pago de las horas extras a su jornada de trabajo ordinaria o contractual, como también al trabajo realizado en dominicales y festivo de conformidad a lo establecido en el artículo 134, 159 y 179 del Código Sustantivo del Trabajo, sin perjuicio de lo pactado para los cargos de dirección, manejo y confianza.

Artículo 16. Citación del trabajador a las instalaciones del empleador. El empleador, de manera excepcional, podrá requerir al trabajador remoto en sus instalaciones laborales, para los siguientes casos:
1. Verificación de los estándares y requisitos que deben cumplir las herramientas y los equipos de trabajo para la realización de la labor previstos anteriormente por el empleador.
2. Cuando para la ejecución de las labores del trabajador remoto, se deban instalar o actualizar manualmente en los equipos de trabajo algún tipo de software, programa, aplicación o plataforma
3. Cuando el trabajador presente reiteradamente el incumplimiento de sus labores y eventualmente sea citado para proceso de descargos laborales, así como las demás citaciones que sean requeridas por el empleador para adelantar el proceso sancionatorio o disciplinario para la aplicación de lo contemplado en los artículos 111 y 112 del Código Sustantivo del Trabajo.

P**arágrafo.** El trabajador remoto, no será beneficiario del auxilio de transporte determinado por la ley. En caso de que el empleador requiera que el trabajador remoto se presente en sus instalaciones, siempre que el trabajador remoto cumpla con los requisitos legales para ello, deberá reconocer, en los casos en que sea aplicable de acuerdo con la normativa vigente y de manera proporcional, el auxilio legal de transporte previsto en la legislación laboral vigente

Parágrafo 2. En todo caso, las citaciones aquí previstas no dan lugar al cambio de forma de ejecución del contrato de trabajo remota, toda vez que continuar siendo remoto.

Artículo 17. °. Control de horarios y cumplimiento de funciones y obligaciones en el trabajo remoto. El empleador se encuentra facultado y autorizado para controlar el cumplimiento de las obligaciones, funciones y deberes del trabajador remoto, mediante el uso de herramientas tecnológicas u otros medios o mecanismos, pero en todo caso, el empleador respetará la intimidad y privacidad del trabajador remoto, y el derecho a la desconexión laboral, entendida como la garantía que todo trabajador y empleador, de no tener contacto con herramientas, bien sea tecnológicas o no, relacionadas con su ámbito laboral, después de culminada la jornada ordinaria de trabajo o durante de ella, en el tiempo que se haya conciliado para la vida personal y familiar.
Se entenderá como privacidad del trabajador remoto, para efectos de la presente ley, cualquier asunto diferente a aquellos directa o indirectamente relacionados con las labores, funciones, deberes y/u obligaciones que tenga el trabajador remoto en virtud de su contrato de trabajo y que permita armonizar la jornada pactada con la vida familiar y personal de los trabajadores remotos, evitando con ello, asignar cargas diferentes a las pactadas en la jornada laboral remota.
Para ello, el empleador y trabajador remoto deberán ceñirse a la jornada pactada, con la intención de evitar la hiperconexión, que puede generar impactos en la salud y equilibrio emocional de los trabajadores remotos.

Artículo 18. Formulario electrónico único de afiliación al Sistema General de Seguridad Social y entidades parafiscales. Sin perjuicio de los mecanismos de afiliación previstos para el Sistema de Riesgos Laborales y/o el Sistema de Afiliación Transaccional previsto para el Sistema de Salud, el Gobierno Nacional deberá diseñar e implementar un formulario único de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en un tiempo no mayor 1 año (un año) y a las entidades parafiscales que permita a los trabajadores remotos inscribirse al Sistema General de Seguridad Social sin que se requiera la firma manuscrita de las partes y podrá radicarse remota o virtualmente.

Artículo 19. Aportes a la Seguridad Social. El contrato de trabajo, ejecutado de manera remota, en materia de aportes a la seguridad social se regulará por las normas vigentes en materia de Sistema General de Seguridad Social.

Artículo 20°. Programa de prevención, control y actuación de riesgos laborales. Las Administradoras de Riesgos Laborales, deberán elaborar un programa de prevención, control y actuación de riesgos laborales y de rehabilitación integral que llegaren a presentar los trabajadores remotos, el cual deberá ser suministrado tanto al trabajador como al empleador. El empleador tendrá la obligación de afiliar al trabajador remoto al Sistema General de Riesgos Laborales, conforme a lo establecido en la Ley 776 de 2002 y el Decreto-Ley 1295 de 1994, modificado por la Ley 1562 de 2012. Para efectos de lo cual, el empleador deberá allegar, a la Administradora de Riesgos laborales – ARL -, copia del contrato o del acto administrativo de vinculación laboral del trabajador remoto, adjuntando el formulario facilitado por ésta para la determinación del riesgo y definición del origen de las contingencias que llegaren a presentarse.

Parágrafo 1. Las Aseguradoras de Riesgos Laborales deberán elaborar el formulario a que hace referencia el presente artículo, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, en el cual deberá solicitarse la descripción de las actividades que ejecutará el trabajador remoto, el lugar en el cual se desarrollarán, el horario en el cual se ejecutarán, la clase de riesgo que corresponde a las labores ejecutadas y la clase de riesgo correspondiente a la empresa o centro de trabajo; dicho formulario deberá ser publicado en la página web de la ARL, para fines de consulta y descarga para diligenciamiento de aquellos empleadores que puedan llegar a requerirlo. En el caso que existan múltiples contratos, el formulario deber permitir identificar los contratos que relaciona y los datos que se relacionan en anterior inciso.

Parágrafo 2. Las Administradoras de Riesgos Laborales acompañarán de manera obligatoria, a los trabajadores remotos y a los empleadores en la verificación de las condiciones de trabajo, que garanticen al trabajador remoto una real seguridad y salud en el trabajo.

Artículo 21. Migración al trabajo remoto. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, cualquier trabajador podrá acogerse a esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo remota prevista en esta ley, siempre que medie la concurrencia de voluntades entre trabajador y empleador, sin menoscabo de los derechos laborales adquiridos.

Artículo 22°. Aplicación de normas respecto al tiempo de lactancia. El empleador garantizará en todo momento las horas de lactancia y los tiempos de licencia de maternidad, a que tiene derecho la madre trabajadora y lactante sin que ello implique el desmejoramiento de sus condiciones laborales

Artículo 23°. Vinculación sector especialmente protegidos. Los empleadores que hagan uso de esta forma de ejecución del contrato de trabajo remota deberán promover la vinculación de jóvenes, mujeres, trabajadores y trabajadoras que sean pertenecientes a grupos étnicos y/o personas con discapacidad.

Artículo 24°. Tareas de cuidados. Las personas que trabajen de manera remota y que acrediten tener a su cargo, de manera única, el cuidado de personas menores de catorce (14) años, personas con discapacidad o adultas mayores en primer grado de consanguinidad que convivan con el trabajador remoto y que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada, con un autorización previa al empleador que permita la interrupción, sin el desmejoramiento de sus condiciones laborales.

Artículo 25°. Sobre la Jornada laboral en el trabajo remoto. La jornada laboral en esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo remota, se ajustará a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, convención colectiva, acuerdo colectivo o contrato de trabajo, la que sea más favorable al trabajador. El trabajador remoto podrá prestar los servicios para los cuales fue contratado, conforme a sus necesidades y las del empleador. Lo anterior no permite, en ningún caso y por ningún motivo, el desmejoramiento de las condiciones salariales del trabajador.

Dicha jornada será distribuida en la semana y no implicaría un cumplimiento estricto de horario al día.

Artículo 26°. Los empleados públicos podrán ejecutar sus funciones por medio del trabajo remoto consagrado en la presente ley, para lo cual se respetarán todos sus derechos y garantías laborales inherentes a su vinculación legal y reglamentaria conforme las normas vigentes.

Artículo 27°. Vigencia. La presente Ley rige a partir de su sanción, promulgación y publicación en el Diario Oficial.

Cordialmente,

Los CONCILIADORES:

ALFREDO DELUQUE ZULETA
REPRESENTANTE A LA CÁMARA

JAIRO CRISTO CORREA
REPRESENTANTE A LA CÁMARA

JOSÉ RITTER LÓPEZ
SENADOR DE LA REPÚBLICA

CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE
ENADOR DE LA REPÚBLICA

INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 446 DE 2021 SENADO – 283 DE 2019 CÁMARA

por medio del cual se sustituye el Título XI "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones.

INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY NO. 446 DE 2021 SENADO – 283 DE 2019 CÁMARA, "POR MEDIO DEL CUAL SE SUSTITUYE EL TÍTULO XI "DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE" DE LA LEY 599 DE 2000, SE MODIFICA LA LEY 906 DE 2004 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Junio de 2021

Doctores
ARTURO CHAR CHALJUB
Presidente
Senado de la República

GERMAN ALCÍDES BLANCO ÁLVAREZ
Presidente
Cámara de Representantes
Ciudad

REF: INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY NO. 446 DE 2021 SENADO – 283 DE 2019 CÁMARA, "POR MEDIO DEL CUAL SE SUSTITUYE EL TÍTULO XI "DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE" DE LA LEY 599 DE 2000, SE MODIFICA LA LEY 906 DE 2004 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Honorables Presidentes

De acuerdo con las designaciones efectuadas por las Presidencias del Honorable Senado de la República y de la Honorable Cámara de Representantes, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 161 de la Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, los suscritos integrantes de la Comisión Accidental de Conciliación, nos permitimos someter, por su conducto, a consideración de las Plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes para continuar su trámite correspondiente, el texto conciliado del proyecto de ley de la referencia, dirimiendo de esta manera las discrepancias existentes entre los textos aprobados por la plenaria de la Cámara de Representantes el 6 de abril de 2021 y por la plenaria del Senado el pasado 17 de junio 2021.

En el siguiente cuadro se relacionan los textos aprobados por la Plenaria de Cámara el 6 de abril del 2021 y por la Plenaria de Senado el 17 de Junio de 2021

TEXTO APROBADO	TEXTO APROBADO	CONSIDERACIONES

PLENARIA DE CÁMARA	PLENARIA DE SENADO	
TITULO. *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000, **se modifica la Ley 906 del 2004** y se dictan otras disposiciones"*	**TITULO.** *"Por medio del cual se sustituye el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 del 2000, **se modifica la Ley 906 del 2004** y se dictan otras disposiciones".*	**NO EXISTEN DISCREPANCIAS**
ARTÍCULO 1°. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:	ARTÍCULO 1° Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:	
TÍTULO XI. **DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE**	**TÍTULO XI.** **DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE**	
CAPÍTULO I. **DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES**	**CAPÍTULO I.** **DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES**	
Artículo 328. Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. El que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, acceda, capture, mantenga, recolecte, use, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, trafique o de cualquier otro modo se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos faúnicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta y tres mil setecientos cincuenta (43.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes	**Artículo 328. Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.** El que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, acceda, capture, mantenga, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, trafique o de cualquier otro modo se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos faúnicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta y tres mil setecientos cincuenta (43.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**En Senado se eliminan los verbos "recolecte, use"**
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la práctica de cercenar aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras), y descartar el resto del cuerpo al mar.	La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la práctica de cercenar aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras), y descartar el resto del cuerpo al mar.	
Artículo 328A. Tráfico de Fauna. El que trafique, mercadee, adquiera, exporte y de cualquier forma comercialice los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de trescientos (300) hasta cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes	**Artículo 328A. Tráfico de Fauna.** El que trafique, adquiera, exporte o comercialice sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de trescientos (300) hasta cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes	En senado se elimina el verbo "mercadee", se agrega la frase "sin permiso de autoridad competente". Se elimina la frase "y de cualquier forma"
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la exportación o comercialización de aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras).	La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la exportación o comercialización de aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras).	
Artículo 328B. Caza ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, cazare, excediere el número de piezas permitidas o cazare en época de veda, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de treinta y tres (33) a novecientos treinta y siete (937) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.	**Artículo 328B. Caza ilegal.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, cazare, excediere el número de piezas permitidas o cazare en épocas de vedas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de treinta y tres (33) a novecientos treinta y siete (937) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.	**En senado se habla en plural de "Épocas de vedas"**
Artículo 328C. Pesca ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese o almacene ejemplares o productos de especies vedadas, protegidas, en cualquier categoría de amenaza, o en áreas de reserva, o en épocas vedadas, en zona prohibida, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a las que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 328C. Pesca ilegal.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese o almacene ejemplares o productos de especies vedadas, protegidas, en cualquier categoría de amenaza, o en áreas de reserva, o en épocas vedadas, o en zona prohibida, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a las que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes	En Senado se incluya la frase "artes y métodos de pesca" en el numeral primer **En Senado se modifica la redacción del numeral 2.** **En Senado se agrega el parágrafo**
En la misma pena incurrirá el que: 1. Utilice instrumentos no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente. 2. Altere los refugios o el medio ecológico de especies de recursos hidrobiológicos, como consecuencia de actividades de exploración o explotación de recursos naturales no renovables. 3. Construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ciénagas, lagunas, caños, ríos y canales.	En la misma pena incurrirá el que: 1. Utilice instrumentos, artes y métodos de pesca no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente, para cualquier especie 2. Modifique, altere o atente, los refugios o el medio ecológico de especies de recursos hidrobiológicos y pesqueros, como consecuencia de actividades de exploración o explotación de recursos naturales 3. Construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ciénagas, lagunas, caños, ríos y canales. Parágrafo: La pesca de subsistencia, no será considera delito, cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la normatividad existente	
Artículo 329. Manejo ilícito de especies exóticas. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, trasplante, manipule, siembre, hibride, comercialice, transporte, mantenga transforme, experimente, inocule o propague especies silvestres exóticas, invasoras, que pongan en peligro la salud humana, el ambiente o las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 329. Manejo ilícito de especies exóticas.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, trasplante, manipule, siembre, hibride, comercialice, transporte, mantenga, transforme, experimente, inocule o propague especies silvestres exóticas, invasoras, que pongan en peligro la salud humana, el ambiente o las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Se mantiene igual**
Artículo 330. Deforestación. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente talе, queme, corte, arranque o destruya áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará a la mitad cuando:	**Artículo 330. Deforestación.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente tale, queme, corte, arranque o destruya áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará a la mitad cuando:	**En senado se eliminó del numeral 1 las siguientes frases "exploración y explotación ilícita de minerales ", "para fines de ganadería en zonas no permitidas."**

1. Cuando la conducta se realice para fines de ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal. 2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada	1. Cuando la conducta se realice para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito o para mejora o construcción de infraestructura ilegal. 2 Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.	
Artículo 330A. Promoción y financiación de la Deforestación. El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte, arranque o destrucción de áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará a la mitad cuando: 1 Cuando la conducta se realice para fines de ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal. 2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de	**Artículo 330A. Promoción y financiación de la Deforestación. El** que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte, arranque o destrucción de áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará a la mitad cuando: 1. Cuando la conducta se realice para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal. 2 Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo	**En senado se eliminó del numeral 1 las siguientes frases** "exploración y explotación ilícita de minerales ", "para fines de ganadería en zonas no permitidas,`

extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.	de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.	
Artículo 331. Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos. El que con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, importe, manipule, experimente, posea, inocule, comercialice, exporte, libere o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos, moléculas, substancias o elementos que pongan en peligro la salud o la existencia de los recursos faunicos, florísticos, hidrobiológicos, hídricos o alteren perjudicialmente sus poblaciones, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 331. Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos.** El que con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, importe, manipule, experimente, posea, inocule, comercialice, exporte, libere o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos, moléculas, substancias o elementos que pongan en peligro la salud o la existencia de los recursos faunicos, florísticos, hidrobiológicos, hídricos o alteren perjudicialmente sus poblaciones, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	Permanece igual
Artículo 332. Exploración o explotación ilícita de minerales y otros materiales. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga minerales, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando	**Artículo 332. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a cincuenta mil (50.000)	En senado se deja la redacción original del código penal

las conductas descritas en este artículo se realicen a través de minería a cielo abierto. **Artículo 332A. Aprovechamiento ilícito de minerales.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, transporte, transforme, beneficie, comercialice o se favorezca a cualquier título de los minerales de que trata el artículo anterior, incurrirá en prisión de ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. **Artículo 332B. Promoción y financiación de la explotación ilícita de minerales.** El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, maquinaria o medios mecanizados, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la explotación, exploración, extracción, transporte, transformación o comercialización ilícita de minerales, arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. **Artículo 332C. Tenencia o transporte de mercurio.** El que con incumplimiento de la normatividad existente importe, tenga, almacene, transporte o	salarios mínimos legales mensuales vigentes.	El artículo de Aprovechamiento ilícito de minerales se eliminó en el Senado. El Artículo de promoción y financiación de explotación ilícita de minerales se eliminó en el Senado. El artículo de tenencia o transporte de mercurio se eliminó en Senado

comercialice mercurio, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a setenta y dos (72) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.		
CAPÍTULO II. **DE LOS DAÑOS EN LOS RECURSOS NATURALES**	**CAPÍTULO II.** **DE LOS DAÑOS EN LOS RECURSOS NATURALES**	
Artículo 333. Daños en los recursos naturales y ecocidio. El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o cause un impacto ambiental grave o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título o a los que estén asociados con estos, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo se entiende por ecocidio, el daño masivo y destrucción generalizada grave y sistémica de los ecosistemas Parágrafo 2°. Por impacto ambiental grave se entenderá, la alteración de las condiciones ambientales que se genere como consecuencia de la afectación de los componentes ambientales, eliminando la integridad del sistema y poniendo en riesgo su sostenibilidad.	**Artículo 333. Daños en los recursos naturales y ecocidio.** El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o cause un impacto ambiental grave o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título o a los que estén asociados con estos, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo se entiende por ecocidio, el daño masivo y destrucción generalizada grave y sistémica de los ecosistemas Parágrafo 2° Por impacto ambiental grave se entenderá, la alteración de las condiciones ambientales que se genere como consecuencia de la afectación de los componentes ambientales, eliminando la integridad del sistema y poniendo en riesgo su sostenibilidad.	Permanece igual
CAPÍTULO III.	**CAPÍTULO III.**	

DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	**DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL**	
Artículo 334. Contaminación ambiental. El que con incumplimiento de la normatividad existente provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertimientos radiaciones, ruidos, depósitos, o disposiciones al aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas superficiales, marítimas o subterráneas o demás recursos naturales en tal forma que contamine o genere un efecto nocivo en el ambiente, que ponga en peligro la salud humana y los recursos naturales, incurrirá en prisión de sesenta y nueve (69) a ciento cuarenta (140) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 334. Contaminación ambiental.** El que con incumplimiento de la normatividad existente contamine, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertimientos, radiaciones, ruidos, depósitos, o disposiciones al aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas superficiales, marítimas o subterráneas o demás recursos naturales en tal forma que contamine o genere un efecto nocivo en el ambiente, que ponga en peligro la salud humana y los recursos naturales, incurrirá en prisión de sesenta y nueve (69) a ciento cuarenta (140) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	En senado se agrega el verbo "contamine"
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en este artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas. 2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por la normatividad existente o haya infringido más de dos parámetros. 3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, depósitos, emisiones o disposiciones. 4 Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo. 5 Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de control y vigilancia de la autoridad competente. 6. Cuando la contaminación sea producto del almacenamiento, transporte, vertimiento o disposición inadecuada de residuo peligroso	La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en este artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas. 2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por la normatividad existente o haya infringido más de dos parámetros. 3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, depósitos, emisiones o disposiciones. 4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo 5. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de control y vigilancia de la autoridad competente. 6. Cuando la contaminación sea producto del almacenamiento, transporte, vertimiento o disposición inadecuada de residuo peligroso.	
	Artículo 334A. Contaminación ambiental por explotación de minerales, hidrocarburos y otros materiales. El que contamine directa o indirectamente la atmosfera, el suelo, el subsuelo o las aguas, como consecuencia de la actividad de exploración, construcción, montaje, extracción, explotación, beneficio, transformación, acopio, transporte, cierre, desmantelamiento o abandono de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá en prisión de setenta y cinco (75) a ciento cincuenta (150) meses, y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará hasta en una tercera parte si la contaminación se produce como consecuencia de la minería a cielo abierto.	**Artículo 334A. Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo.** El que provoque, contamine o realice directa o indirectamente en los recursos de agua, suelo, subsuelo o atmósfera, con ocasión a la extracción o excavación, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años, y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	En senado se modifica la redacción del primer inciso, se agrega "recursos de agua". De igual manera se suprime la circunstancia de mayor punibilidad contenida en el inciso final
Artículo 335. Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice experimentos con especies, agentes biológicos o bioquímicos que constituyan, generen o pongan en peligro la supervivencia de las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Artículo 335. Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos.** El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice experimentos con especies, agentes biológicos o bioquímicos que constituyan, generen o pongan en peligro la supervivencia de las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	Permanece igual
CAPÍTULO IV. **DE LA INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA**	**CAPÍTULO IV.** **DE LA INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA**	
Artículo 336. Invasión de áreas de especial importancia ecológica. El que invada, permanezca así sea de manera temporal o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en área de reserva forestal, ecosistemas de importancia ecológica, playas, terrenos de bajamar, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, parque nacional natural, área o ecosistema de interés estratégico, área protegida, definidos en la ley o reglamento incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.	**Artículo 336. Invasión de áreas de especial importancia ecológica.** El que invada, permanezca así sea de manera temporal o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en área de reserva forestal, ecosistemas de importancia ecológica, playas, terrenos de bajamar, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, parque nacional natural, área o ecosistema de interés estratégico, área protegida, definidos en la ley o reglamento incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.	Permanece Igual
Artículo 336A. Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica. El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.	**Artículo 336A. Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica.** El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.	Permanece igual.
CAPÍTULO V. **DE LA APROPIACIÓN ILEGAL DE BALDÍOS DE LA NACIÓN**	**CAPÍTULO V.** **DE LA APROPIACIÓN ILEGAL DE BALDÍOS DE LA NACIÓN**	
Artículo 337. Apropiación ilegal de baldíos de la nación. El que se apropie, usurpe, use, ocupe, utilice, acumule, o destine baldíos de la	**Artículo 337. Apropiación ilegal de baldíos de la nación.** El que usurpe, ocupe, utilice, acumule, tolere, colabore o permita la	En senado se eliminan verbos "apropie", y "use". En senado se agrega la frase "tolere,

nación con fines de expansión ilegal de la frontera agrícola, para ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación dicta de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos.	apropiación de baldíos de la Nación, sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos y despojo de tierras **Parágrafo 1°: La conducta descrita en este artículo no será considerada delito si la misma se ajusta a los condicionamientos y requisitos señalados en la ley 160 de 1994, así como en el Decreto Ley 902 de 2017 para la adjudicación de bienes baldíos.** **Parágrafo 2°: Cuando la conducta descrita en el artículo anterior sea cometida por personas campesinas, indígenas o afrodescendientes, que dependa su subsistencia de la habitación, trabajo o aprovechamiento de los baldíos de la nación no habrá lugar a responsabilidad penal.**	colabore o permita la apropiación". En senado se elimina la frase "con fines de expansión ilegal de la frontera agrícola, para ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal" y se sustituye por "sin el lleno de los requisitos de ley" En senado se agregan dos parágrafos. El parágrafo Segundo se agrega en último debate con el fin de aclara la protección de los campesinos, indígenas y afrodescendiente.
Artículo 337A. Financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación El que promueva, financie, ordene, dirija, o suministre medios para la apropiación de baldíos de la nación sin cumplimiento de los requisitos legales con fines de expansión	**Artículo 337A. Financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación.** El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva,	Se modifica la redacción en Senado.

ilegal de la frontera agrícola, para ganadería en zonas no permitidas, para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los bienes muebles, inmuebles o semovientes encontrados en los baldíos ilegalmente apropiados. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos	organice, apoye, mantenga, financie, patrocine, induzca, ordene o dirija la apropiación ilegal de baldíos de la nación descrito en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los bienes muebles, inmuebles o semovientes encontrados en los baldíos ilegalmente apropiados. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos	
CAPÍTULO VI. **DISPOSICIONES COMUNES**	**CAPÍTULO VI.** **DISPOSICIONES COMUNES**	
Artículo 338. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando:	**Artículo 338. Circunstancias de agravación punitiva.** Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando:	Permanece Igual
a)Cuando la conducta se cometa en ecosistemas naturales que hagan parte del sistema nacional o regional de áreas protegidas, en ecosistemas estratégicos, o en territorios de comunidades étnicas. Con excepción de las conductas consagradas en los artículos 336 y 336A.	a) Cuando la conducta se cometa en ecosistemas naturales que hagan parte del sistema nacional o regional de áreas protegidas, en ecosistemas estratégicos, o en territorios de comunidades étnicas. Con excepción de las conductas consagradas en los artículos 336 y 336A.	
b) Cuando la conducta se cometa contra especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana o de especies vedadas, prohibidas, en período de	b) Cuando la conducta se cometa contra especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana o de especies vedadas, prohibidas, en período de	

reproducción o crecimiento, de especial importancia ecológica, raras o endémicas del territorio colombiano. Con excepción de la conducta contemplada en el artículo 328C.	reproducción o crecimiento, de especial importancia ecológica, raras o endémicas del territorio colombiano. Con excepción de la conducta contemplada en el artículo 328C.	
c)Cuando con la conducta se altere el suelo, el subsuelo, los recursos hidrobiológicos, se desvíen los cuerpos de agua o se afecten ecosistemas marinos, manglares, pastos marinos y corales.	c) Cuando con la conducta se altere el suelo, el subsuelo, los recursos hidrobiológicos, se desvíen los cuerpos de agua o se afecten ecosistemas marinos, manglares, pastos marinos y corales.	
d) Cuando la conducta se cometiere por la acción u omisión de quienes ejercen funciones de seguimiento, control y vigilancia o personas que ejerzan funciones públicas.	d) Cuando la conducta se cometiere por la acción u omisión de quienes ejercen funciones de seguimiento, control y vigilancia o personas que ejerzan funciones públicas.	
e) Cuando la conducta se cometiere por integrantes de grupos delictivos organizados o grupos armados organizados o con la finalidad de financiar actividades terroristas, grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley, grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a sus integrantes	e) Cuando la conducta se cometiere por integrantes de grupos delictivos organizados o grupos armados organizados o con la finalidad de financiar actividades terroristas, grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley, grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a sus integrantes.	
f) Cuando la conducta se cometa mediante el uso o manipulación de herramientas tecnológicas.	f) Cuando la conducta se cometa mediante el uso o manipulación de herramientas tecnológicas.	
g) Cuando con la conducta se ponga en peligro la salud humana.	g) Cuando con la conducta se ponga en peligro la salud humana.	
h) Cuando con la conducta se introduzca al suelo o al agua sustancias prohibidas por la normatividad existente o se realice mediante el uso de sustancias tóxicas, peligrosas, venenos, inflamables, combustibles, explosivas, radioactivas, el uso de	h) Cuando con la conducta se introduzca al suelo o al agua sustancias prohibidas por la normatividad existente o se realice mediante el uso de sustancias tóxicas, peligrosas, venenos, inflamables, combustibles, explosivas, radioactivas, el uso de	

explosivos, maquinaria pesada o medios mecanizados, entendidos estos últimos como todo tipo de equipos o herramientas mecanizados utilizados para el arranque, la extracción o el beneficio de minerales o la distribución ilegal de combustibles.	explosivos, maquinaria pesada o medios mecanizados, entendidos estos últimos como todo tipo de equipos o herramientas mecanizados utilizados para el arranque, la extracción o el beneficio de minerales o la distribución ilegal de combustibles.	
i) Cuando se promueva, financie, dirija, facilite o suministre medios para la realización de las conductas. Con excepción de las conductas contempladas en los artículos 330A, 332B, 336A y 337A.	i) Cuando se promueva, financie, dirija, facilite o suministre medios para la realización de las conductas. Con excepción de las conductas contempladas en los artículos 330A, 336A y 337A.	
j) Cuando con la conducta se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies.	j) Cuando con la conducta se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies.	
Artículo 339. Modalidad Culposa. Las penas previstas en los artículos 333, 334, 334A de este código se disminuirán hasta en la mitad cuando las conductas punibles se realicen culposamente.	**Artículo 339. Modalidad Culposa.** Las penas previstas en los artículos 333, 334, 334A de este código se disminuirán hasta en la mitad cuando las conductas punibles se realicen culposamente.	Permanece Igual
Artículo 2. Modifíquese el numeral 14 del artículo 58 de la ley 599 del 2000, el cual quedará así: **Artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad.** (. .) 14. Cuando se produjere un daño ambiental grave, una irreversible modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales o se cause la extinción de una especie biológica.	**Artículo 2.** Modifíquese el numeral 14 del artículo 58 de la ley 599 del 2000, el cual quedará así: **Artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad.** (. .) 14. Cuando se produjere un daño ambiental grave, una irreversible modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales o se cause la extinción de una especie biológica	**Permanece Igual**

ARTÍCULO 3°. Adiciones al inciso segunda del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, las siguientes conductas punibles. **Artículo 68A. Exclusión de los beneficios y subrogados penales.** (..) Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaiga sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos. soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; abigeato enunciado en el inciso tercero del artículo 243; extorsión; homicidio agravado contemplado en el numeral 6 del artículo 104, lesiones causadas con agentes químicos, ácidos y/o sustancias similares; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio: lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objeto peligrosos;	**Eliminado**	

fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas. biológicas y nucleares: delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión: y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles. falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro, contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados. ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonales; aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. tráfico de fauna; deforestación; promoción y financiación de la deforestación; aprovechamiento ilícito de minerales; promoción y financiación de la explotación ilícita de minerales; daños en los recursos naturales y ecocidio; e invasión de áreas de especial importancia ecológica.		
ARTÍCULO 4°. Adiciónese un numeral 33 al artículo 35 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así: (...) 33. De los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, tráfico de fauna, deforestación, promoción y financiación de la deforestación, aprovechamiento ilícito de minerales, promoción y financiación de la explotación ilícita de minerales, daños en los recursos naturales y ecocidio, e invasión de áreas de especial importancia ecológica.	**ARTÍCULO 3.** Adiciónese un numeral 33 al artículo 35 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así: (...) 33. De los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, tráfico de fauna, deforestación, promoción y financiación de la deforestación, daños en los recursos naturales y ecocidio, e invasión de áreas de especial importancia ecológica.	**En senado se elimina la frase** "aprovechamiento ilícito de minerales, promoción y financiación de la explotación ilícita de minerales, "

ARTÍCULO 5°. Adiciónese un parágrafo el artículo 91 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así. (...) **Parágrafo.** Cuando se hubiese suspendido o cancelado la personería jurídica de que trata este artículo, la persona natural o jurídica estará inhabilitada para constituir nuevas personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público, con el mismo objeto o actividad económica a desarrollar, hasta que el Juez de Conocimiento tome una decisión definitiva en la sentencia correspondiente.	**ARTÍCULO 4.** Adiciónese un parágrafo al artículo 91 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así. (.) **Parágrafo.** Cuando se hubiese suspendido o cancelado la personería jurídica de que trata este artículo la persona natural o jurídica estará inhabilitada para constituir nuevas personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público. con el mismo objeto o actividad económica a desarrollar, hasta qué el Juez de Conocimiento tome una decisión definitiva en la sentencia correspondiente.	**Permanece igual**
ARTÍCULO 6°. Adiciónese un parágrafo 2 al artículo 92 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así: **Parágrafo 2.** Tratándose de los delitos contemplados en el título XI del Código Penal, el juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental	**ARTÍCULO 5.** Adiciónese un parágrafo 2 al artículo 92 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así: Parágrafo 2. Tratándose de los delitos contemplados en el título XI del Código Penal, el juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.	**Permanece igual**
ARTÍCULO 7°. El artículo 302 de la Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo inciso que quedará así: Cuando la captura en flagrancia se produzca en ríos o tierra donde el arribo a la cabecera municipal más cercana sólo puede surtirse por vía fluvial o siempre que concurran dificultades objetivas de acceso al territorio como obstáculos	**ARTÍCULO 6.** El artículo 302 de la Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo inciso que quedará así. Cuando la captura en flagrancia se produzca en ríos o tierra donde el arribo a la cabecera municipal más cercana sólo puede surtirse por vía fluvial o siempre que concurran dificultades objetivas de acceso al territorio como obstáculos	**Permanece igual**

geográficos, logísticos, ausencia de infraestructura de transporte o fenómenos meteorológicos que dificulten seriamente el traslado del aprehendido, se realizarán todas las actividades para lograr la comparecencia del capturado ante el juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin que en ningún caso exceda las 36 horas siguientes, contadas a partir del momento de la llegada al puerto o municipio más cercano, según el caso. La autoridad competente deberá acreditar los eventos descritos en el presente inciso.	geográficos, logísticos, ausencia de infraestructura de transporte o fenómenos meteorológicos que dificulten seriamente el traslado del aprehendido, se realizarán todas las actividades para lograr la comparecencia del capturado ante el juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin que en ningún caso exceda las 36 horas siguientes, contadas a partir del momento de la llegada al puerto o municipio más cercano, según el caso. La autoridad competente deberá acreditar los eventos descritos en el presente inciso.	
Artículo 8. Dirección de Apoyo Territorial. Créase en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Apoyo Territorial adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana, la que tendrá como función principal liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presencia efectiva de la Entidad en territorios apartados o de difícil acceso, sin perjuicio de la competencia de otras Direcciones sobre la materia La Dirección de Apoyo Territorial estará conformada por: **Unidad** | **Cantidad** | **Cargo** Dirección de Apoyo Territorial | 1 | Director Nacional I 2 | Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito	**Artículo 7. Dirección de Apoyo Territorial.** Créese en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Apoyo Territorial adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana, la que tendrá como función principal liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presencia efectiva de la Entidad con un trabajo interdisciplinario en territorios apartados o de difícil acceso, sin perjuicio de la competencia de otras Direcciones sobre la materia. La Dirección de Apoyo Territorial estará conformada por: **Unidad** | **Cantidad** | **Cargo** Dirección de Apoyo Territorial | 1 | Director Nacional I 2 | Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito	**En senado se modifica el verbo "crease" por "creese". Se modifica el verbo "presentar" por "presencia"** **Se agrega la frase " con un trabajo interdisciplinario"** Se modifica la tabla y se agregan 3 parágrafos.

	20	Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado	Profesional	20	Fiscal Delegado ante Jueces Penales del Circuito Especializado
	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Profesional	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito
	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos
	1	Profesional Experto	Profesional	1	Profesional Experto
	2	Profesional Especializado II	Profesional	2	Profesional Especializado II
	2	Profesional De Gestión III	Profesional	2	Profesional De Gestión III
	12	Investigador Experto	Profesional	12	Investigador Experto
	10	Profesional Investigador III	Profesional	10	Profesional Investigador III
	9	Profesional Investigador II	Profesional	9	Profesional Investigador II
	9	Profesional Investigador I	Profesional	9	Profesional Investigador I
	10	Técnico Investigador IV	Técnico	10	Técnico Investigador IV
	10	Técnico Investigador III	Técnico	10 12	Técnico Investigador III
	20	Asistente de Fiscal IV	Técnico	20	Asistente de Fiscal IV
	5	Asistente de Fiscal III	Técnico	5	Asistente de Fiscal III
	5	Asistente de Fiscal II	Técnico	5	Asistente de Fiscal II

2	Secretario Ejecutivo	2	Secretario Ejecutivo
2	Conductor	2	~~Conductor~~
3	Secretario Administrativo	3	Secretario Administrativo

Parágrafo 1: De forma prioritaria la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación desarrollará el concurso necesario para proveer los cargos establecidos en el presente artículo de conformidad con el Sistema Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación, sin perjuicio de los nombramientos en provisionalidad necesarios para implementar inmediatamente la Dirección establecida, en los cuales se aplicarán los principios de mérito, transparencia, garantía de imparcialidad y eficiencia y eficacia del artículo 3, junto con los criterios de mérito señalados en el numeral 3 del artículo 11 del Decreto Ley 020 de 2014.

Parágrafo 2: El inicio del concurso se realizará dentro de los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 3: La Fiscalía General de la Nación presentará anualmente un informe sobre los indicadores de gestión, avance y esclarecimiento en la investigación y judicialización de las conductas que afecten los recursos naturales y el medio ambiente. Esta información será pública y contendrá datos estadísticos que no estén sometidos a reserva.

Artículo 9. Dirección de Apoyo Territorial. Adiciónese el artículo 36A al Decreto Ley 016 de 2014, el cual quedará así: La Dirección de Apoyo Territorial cumplirá las siguientes funciones: 1. Liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presencia efectiva de la Entidad en territorios apartados o de difícil acceso, en aquellas zonas afectadas por fenómenos criminales de alto impacto y por la presencia de grupos armados organizados. 2 Apoyar la investigación, especialmente actos urgentes, en aquellos fenómenos priorizados que se den en territorios donde la Fiscalía General de la Nación no tenga presencia permanente o sean de difícil acceso. 3. Definir los lugares en los que se podrá actuar por medio de grupos itinerantes, con base en criterios geográficos y no en la división político-administrativa, así como en el análisis de la criminalidad del país, la presencia de organizaciones criminales, los tiempos de desplazamiento al lugar de comisión de la conducta punible, la oferta de servicios de justicia por parte de otras entidades, entre otros factores. 4. Conformar grupos especializados de investigadores y analistas expertos en los fenómenos criminales priorizados por la Dirección.	**Artículo 8. Dirección de Apoyo Territorial.** Adiciónese el artículo 36A al Decreto Ley 016 de 2014, el cual quedará así. La Dirección de Apoyo Territorial cumplirá las siguientes funciones: 1. Liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presencia efectiva de la Entidad en territorios apartados o de difícil acceso, en aquellas zonas afectadas por fenómenos criminales de alto impacto y por la presencia de grupos armados organizados. 2. Apoyar la investigación, especialmente actos urgentes, en aquellos fenómenos priorizados que se den en territorios donde la Fiscalía General de la Nación no tenga presencia permanente o sean de difícil acceso 3. Definir los lugares en los que se podrá actuar por medio de grupos itinerantes, con base en criterios geográficos y no en la división político-administrativa, así como en el análisis de la criminalidad del país, la presencia de organizaciones criminales, los tiempos de desplazamiento al lugar de comisión de la conducta punible, la oferta de servicios de justicia por parte de otras entidades, entre otros factores. 4. Conformar grupos especializados de investigadores y analistas expertos en los fenómenos criminales priorizados por la Dirección.	**Permanece igual**

5. Realizar proceso de articulación de la estrategia territoriel con otras entidades públicas. 6 Designar fiscales itinerantes en aquellos procesos sobre fenómenos priorizados, con el fin que apoyen, impulsen y asesoren a los fiscales titulares con el fin de lograr una efectiva judicialización 7. Conformar equipos móviles de la Entidad, en los que periódicamente se reciban denuncias de los habitantes del territorio nacional y se brinde atención a las víctimas de las conductas punibles en territorios apartados o zonas de alto impacto o presencia de grupos armados organizados. 8. Organizar y adelantar comités técnico-jurídicos de revisión de las situaciones y los casos para la ejecución de acciones en el desarrollo efectivo y eficiente de las investigaciones penales de su competencia. 9. Dirigir y coordinar los grupos de trabajo, los departamentos y unidades que se conformen para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Dirección. 10. Dirigir, coordinar y controlar la incorporación y aplicación de políticas públicas en el desarrollo de las actividades que cumplen los servidores, dependencias y los grupos de trabajo que estén a su cargo, de acuerdo con los lineamientos y las orientaciones que impartan las dependencias competentes. 11. Identificar y delimitar situaciones y casos susceptibles de ser priorizados y proponerlos al Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos. 12. Ejecutar los planes de priorización aprobados por el Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos en lo de su competencia.	5. Realizar proceso de articulación de la estrategia territorial con otras entidades públicas. 6. Designar fiscales itinerantes en aquellos procesos sobre fenómenos priorizados, con el fin que apoyen, impulsen y asesoren a los fiscales titulares con el fin de lograr una efectiva judicialización. 7. Conformar equipos móviles de la Entidad, en los que periódicamente se reciban denuncias de los habitantes del territorio nacional y se brinde atención a las víctimas de las conductas punibles en territorios apartados o zonas de alto impacto o presencia de grupos armados organizados. 8. Organizar y adelantar comités técnico-jurídicos de revisión de las situaciones y los casos para la ejecución de acciones en el desarrollo efectivo y eficiente de las investigaciones penales de su competencia. 9. Dirigir y coordinar los grupos de trabajo, los departamentos y unidades que se conformen para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Dirección. 10. Dirigir, coordinar y controlar la incorporación y aplicación de políticas públicas en el desarrollo de las actividades que cumplen los servidores, dependencias y los grupos de trabajo que estén a su cargo, de acuerdo con los lineamientos y las orientaciones que impartan las dependencias competentes. 11. Identificar y delimitar situaciones y casos susceptibles de ser priorizados y proponerlos al Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos 12. Ejecutar los planes de priorización aprobados por el Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos en lo de su competencia.

13. Apoyar, en el marco de sus competencias, a la Dirección de Políticas y Estrategia en el análisis de la información que se requiera para sustentar la formulación de la política en materia criminal. 14. Mantener actualizada la información que se registre en los sistemas de información de la Entidad, en los temas de su competencia. 15. Consolidar, analizar y clasificar la información de las investigaciones y acusaciones adelantadas por los servidores y grupos de trabajo a su cargo y remitirla a la Dirección de Políticas y Estrategia. 16. Dirimir, de conformidad con la Constitución y la ley, los conflictos de competencia que se presenten entre la Fiscalía General de la Nación y los demás organismos que desempeñen funciones de Policía Judicial, en el ámbito de su competencia. 17 Dirimir los conflictos administrativos que se presenten al interior de la Fiscalía en el ejercicio de las funciones o en la asignación de investigaciones, en los casos y según las directrices y lineamientos impartidos por el Fiscal General de la Nación. 18. Asesorar a las dependencias de la Fiscalía General de la Nación que cumplen funciones investigativas y acusatorias en los temas de su competencia. 19. Elaborar e implementar los planes operativos anuales en el ámbito de su competencia, de acuerdo con la metodología diseñada por la Dirección de Planeación y Desarrollo. 20. Aplicar las directrices y lineamientos del Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación.	13. Apoyar, en el marco de sus competencias, a la Dirección de Políticas y Estrategia en el análisis de la información que se requiera para sustentar la formulación de la política en materia criminal. 14. Mantener actualizada la información que se registre en los sistemas de información de la Entidad, en los temas de su competencia. 15. Consolidar, analizar y clasificar la información de las investigaciones y acusaciones adelantadas por los servidores y grupos de trabajo a su cargo y remitirla a la Dirección de Políticas y Estrategia. 16. Dirimir, de conformidad con la Constitución y la ley, los conflictos de competencia que se presenten entre la Fiscalía General de la Nación y los demás organismos que desempeñen funciones de Policía Judicial, en el ámbito de su competencia. 17 Dirimir los conflictos administrativos que se presenten al Interior de la Fiscalía en el ejercicio de las funciones o en la asignación de investigaciones, en los casos y según las directrices y lineamientos impartidos por el Fiscal General de la Nación. 18. Asesorar a las dependencias de la Fiscalía General de la Nación que cumplen funciones investigativas y acusatorias en los temas de su competencia. 19. Elaborar e implementar los planes operativos anuales en el ámbito de su competencia, de acuerdo con la metodología diseñada por la Dirección de Planeación y Desarrollo. 20. Aplicar las directrices y lineamientos del Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación. 21. Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el Fiscal o Vicefiscal General de la Nación.	

21. Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el Fiscal o Vicefiscal General de la Nación.	delegadas por el Fiscal o Vicefiscal General de la Nación.	
Artículo 10. Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. Créase en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente adscrito a la Delegada contra la Criminalidad Organizada, la que tendrá como función principal la investigación y judicialización de los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y las demás conductas delictivas conexas o relacionadas, sin perjuicio de la competencia de las Direcciones Seccionales sobre la materia La Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente estará conformada por. Unidad / Cantidad / Cargo Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente / 1 / Director Nacional I 2 / Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito 20 / Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado	**Artículo 8. Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.** Crégse en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente adscrito a la Delegada contra la Criminalidad Organizada, la que tendrá como función principal la investigación y judicialización de los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y las demás conductas delictivas conexas o relacionadas, **mediante un trabajo interdisciplinario** sin perjuicio de la competencia de las Direcciones Seccionales sobre la materia La Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente estará conformada por: Unidad / Cantidad / Cargo Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente / 1 / Director Nacional I 2 / Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito 20 / Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado	**En senado se modifica el verbo "Créase" por "creese".** **En senado se agrega la frase "mediante un trabajo interdisciplinario "** **Se modifica la tabla y se agregan 3 parágrafos.**

Ambiente	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Ambiental	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional
	1	Profesional Experto	Profesional	1	Profesional Experto	Profesional
	2	Profesional Especializado II	Profesional	2	Profesional Especializado II	Profesional
	2	Profesional De Gestión III	Profesional	2	Profesional De Gestión III	Profesional
	12	Investigador Experto	Profesional	12	Investigador Experto	Profesional
	10	Profesional Investigador III	Profesional	10	Profesional Investigador III	Profesional
	9	Profesional Investigador II	Profesional	9	Profesional Investigador II	Profesional
	9	Profesional Investigador I	Profesional	9	Profesional Investigador I	Profesional
	10	Técnico Investigador IV	Técnico	10	Técnico Investigador IV	Técnico
	10	Técnico Investigador III	Técnico	40 12	Técnico Investigador III	Técnico
	20	Asistente de Fiscal IV	Técnico	20	Asistente de Fiscal IV	Técnico
	5	Asistente de Fiscal III	Técnico	5	Asistente de Fiscal III	Técnico
	5	Asistente de Fiscal II	Técnico	5	Asistente de Fiscal II	Técnico
	2	Secretario Ejecutivo	Técnico	2	Secretario Ejecutivo	Técnico
	2	Conductor	Asistencial	2	**Conductor**	**Asistencial**
	3	Secretario Administrativo	Asistencial	3	Secretario Administrativo	Asistencial

	Parágrafo 1: De forma prioritaria la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación desarrollará el concurso necesario para proveer los cargos establecidos en el presente artículo de conformidad con el Sistema Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación, sin perjuicio de los nombramientos en provisionalidad necesarios para implementar inmediatamente la Dirección establecida, en los cuales se aplicarán los principios de mérito, transparencia, garantía de imparcialidad y eficiencia y eficacia del artículo 3, junto con los criterios de mérito señalados en el numeral 3 del artículo 11 del Decreto Ley 020 de 2014. **Parágrafo 2: El inicio del concurso se realizará dentro de los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.** **Parágrafo 3: La Fiscalía General de la Nación presentará anualmente un informe sobre los indicadores de gestión, avance y esclarecimiento en la investigación y judicialización de las conductas que afectan los recursos naturales y el medio ambiente. Esta información será pública y contendrá datos estadísticos que no estén sometidos a reserva.**	
NUEVO	**ARTÍCULO 10 Prevención del daño antijurídico y promoción de la adecuada defensa** litigiosa. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el marco de	**Artículo nuevo en Senado.**

	sus funciones, deberá diseñar e implementar una política de prevención del daño antijurídico en materia de protección ambiental y ecológica. De igual forma, promoverá la coordinación de las acciones que aseguren la adecuada defensa de los intereses litigiosos de la nación dentro de los procesos que se lleven a cabo en materia de defensa de los recursos naturales y de la fauna y la flora silvestre.	
NUEVO	**ARTÍCULO NUEVO:** Se autoriza al Gobierno Nacional para asignar los recursos para la implementación y ejecución de la presente ley. De conformidad con la normativa vigente, las erogaciones que se causen con ocasión de la implementación y ejecución de la presente ley deberán consultar la situación fiscal de la Nación y ajustarse al Marco de Gasto de Mediano Plazo de cada sector involucrado, en concordancia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y las normas orgánicas de presupuesto.	**Artículo nuevo en senado**
ARTÍCULO 11°. Vigencia y Derogatoria. La presente rige a partir de su promulgación y publicación en el Diario Oficial y deroga el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000 y todas las	**ARTÍCULO 12. Vigencia y Derogatoria.** La presente rige a partir de su promulgación y publicación en el Diario Oficial y deroga el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000 y todas las	**Permanece igual**

disposiciones que le sean contrarias.	disposiciones que le sean contrarias.	

PROPOSICIÓN

Así las cosas, luego de un análisis detallado de los textos, ***solicitamos a los miembros de las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes acoger el texto de Senado toda vez que, acoge mayoritariamente las recomendaciones y propuestas que se presentaron a lo lago de los debates.***

Cordialmente,

Santiago Valencia G.

ESPERANZA Andrade S.

André Cuello.

JUAN CARLOS LOZADA VARGAS
Representante a la Cámara
C.C. 79.935.283 de Bogotá

En virtud de lo anterior, y para los efectos pertinentes, el citado texto conciliado es el siguiente:

TEXTO CONCILIADO
PROYECTO DE LEY NO. 448 DE 2021 SENADO – 283 DE 2019 CÁMARA.
"POR MEDIO DEL CUAL SE SUSTITUYE EL TÍTULO XI "DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE" DE LA LEY 599 DE 2000, SE MODIFICA LA LEY 906 DE 2004 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

ARTÍCULO 1°. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:

TÍTULO XI.

DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO I.

DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES

Artículo 328. Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. El que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, acceda, capture, mantenga, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, trafique o de cualquier otro modo se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos faunícos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta y tres mil setecientos cincuenta (43.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la práctica de cercenar aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras) y descartar el resto del cuerpo al mar.

Artículo 328A. Tráfico de Fauna. El que trafique, adquiera, exporte o comercialice sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de trescientos (300) hasta cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la exportación o comercialización de aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras)

Artículo 328B. Caza ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, cazare, excediera el número de piezas permitidas o cazare en épocas de vedas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de treinta y tres (33) a novecientos treinta y siete (937) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.

Artículo 328C. Pesca ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese o almacene ejemplares o productos de especies vedadas, protegidas, en cualquier categoría de amenaza, o en áreas de reserva, o en épocas vedadas, o en zona prohibida, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a las que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que:

1. Utilice instrumentos, artes y métodos de pesca no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente, para cualquier especie.

2. Modifique, altere o atente, los refugios o el medio ecológico de especies de recursos hidrobiológicos y pesqueros, como consecuencia de actividades de exploración o explotación de recursos naturales.

3. Construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ciénagas, lagunas, caños, ríos y canales.

Parágrafo. La pesca de subsistencia, no será considera delito, cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la normatividad existente.

Artículo 329. Manejo ilícito de especies exóticas. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, trasplante, manipule, siembre, hibride, comercialice, transporte, mantenga, transforme, experimente, inocule o propague especies silvestres exóticas, invasoras, que pongan en peligro la salud humana, el ambiente o las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a diecisiete mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 330. Deforestación. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente tale, queme, corte, arranque o destruya áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará a la mitad cuando:

1. Cuando la conducta se realice para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito o para mejora o construcción de infraestructura ilegal.

2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.

Artículo 330A. Promoción y financiación de la Deforestación. El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte, arranque o destrucción de áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará a la mitad cuando:

1. Cuando la conducta se realice para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal.

2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada

Artículo 331. Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos. El que con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, importe, manipule, experimente, posea, inocule, comercialice, exporte, libere o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos, moléculas, substancias o elementos que pongan en peligro la salud o la existencia de los recursos faunicos, floristicos, hidrobiológicos, hídricos o alteren perjudicialmente sus poblaciones, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 332. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO II.

DE LOS DAÑOS EN LOS RECURSOS NATURALES

Artículo 333. Daños en los recursos naturales y ecocidio. El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o cause un impacto ambiental grave o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título o a los que estén asociados con estos, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo se entiende por ecocidio, el daño masivo y destrucción generalizada grave y sistémica de los ecosistemas.

Parágrafo 2°. Por impacto ambiental grave se entenderá, la alteración de las condiciones ambientales que se genere como consecuencia de la afectación de los componentes ambientales, eliminando la integridad del sistema y poniendo en riesgo su sostenibilidad.

CAPÍTULO III.

DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Artículo 334. Contaminación ambiental. El que con incumplimiento de la normatividad existente contamine, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertimientos, radiaciones, ruidos, depósitos, o disposiciones al aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas superficiales, marítimas o subterráneas o demás recursos naturales en tal forma que contamine o genere un efecto nocivo en el ambiente, que ponga en peligro la salud humana y los recursos naturales, incurrirá en prisión de sesenta y nueve (69) a ciento cuarenta (140) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en este artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.
2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por la normatividad existente o haya infringido más de dos parámetros.
3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, depósitos, emisiones o disposiciones.
4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.
5. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de control y vigilancia de la autoridad competente.
6. Cuando la contaminación sea producto del almacenamiento, transporte, vertimiento o disposición inadecuada de residuo peligroso.

Artículo 334A. Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo. El que provoque, contamine o realice directa o indirectamente en los recursos de agua, suelo, subsuelo o atmósfera, con ocasión a la extracción o excavación, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años, y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 335. Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice experimentos con especies, agentes biológicos o bioquímicos que constituyan, generen o pongan en peligro la supervivencia de las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO IV.

DE LA INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Artículo 336. Invasión de áreas de especial importancia ecológica. El que invada, permanezca así sea de manera temporal o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en área de reserva forestal, ecosistemas de importancia ecológica, playas, terrenos de bajamar, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, parque nacional natural, área o ecosistema de interés estratégico, área protegida, definidos en la ley o reglamento incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.

Artículo 336A. Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica. El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.

CAPÍTULO V.

DE LA APROPIACIÓN ILEGAL DE BALDÍOS DE LA NACIÓN

Artículo 337. Apropiación ilegal de baldíos de la nación. El que usurpe, ocupe, utilice, acumule, tolere, colabore o permita la apropiación de baldíos de la Nación, sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos y despojo de tierras.

Parágrafo 1°. La conducta descrita en este artículo no será considerada delito si la misma se ajusta a los condicionamientos y requisitos señalados en la ley 160 de 1994, así como en el Decreto Ley 902 de 2017 para la adjudicación de bienes baldíos.

Parágrafo 2°: Cuando la conducta descrita en el artículo anterior sea cometida por personas campesinas, indígenas o afrodescendientes, que dependa su subsistencia de la habitación, trabajo o aprovechamiento de los baldíos de la nación no habrá lugar a responsabilidad penal.

Artículo 337A. Financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación. El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie, patrocine, induzca, ordene o dirija la apropiación ilegal de baldíos de la nación descrito en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los bienes muebles, inmuebles o semovientes encontrados en los baldíos ilegalmente apropiados.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos.

CAPÍTULO VI.

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 338. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando:

a) Cuando la conducta se cometa en ecosistemas naturales que hagan parte del sistema nacional o regional de áreas protegidas, en ecosistemas estratégicos, o en territorios de comunidades étnicas Con excepción de las conductas consagradas en los artículos 338 y 336A.

b) Cuando la conducta se cometa contra especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana o de especies vedadas, prohibidas, en período de reproducción o crecimiento, de especial importancia ecológica, raras o endémicas del territorio colombiano. Con excepción de la conducta contemplada en el artículo 328C.

c) Cuando con la conducta se altere el suelo, el subsuelo, los recursos hidrobiológicos, se desvíen los cuerpos de agua o se afecten ecosistemas manglares, pastos marinos y corales.

d) Cuando la conducta se cometiere por la acción u omisión de quienes ejercen funciones de seguimiento, control y vigilancia o personas que ejerzan funciones públicas.

e) Cuando la conducta se cometiere por integrantes de grupos delictivos organizados o grupos armados organizados o con la finalidad de financiar actividades terroristas, grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley, grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a sus integrantes.

f) Cuando la conducta se cometa mediante el uso o manipulación de herramientas tecnológicas.

g) Cuando con la conducta se ponga en peligro la salud humana.

h) Cuando con la conducta se introduzca al suelo o al agua sustancias prohibidas por la normatividad existente o se realice mediante el uso de sustancias tóxicas, peligrosas, venenos, inflamables, combustibles, explosivas, radioactivas, el uso de explosivos, maquinaria pesada o medios mecanizados, entendidos estos últimos como todo tipo de equipos o herramientas mecanizados utilizados para el arranque, la extracción o el beneficio de minerales o la distribución ilegal de combustibles.

i) Cuando se promueva, financie, dirija, facilite o suministre medios para la realización de las conductas. Con excepción de las conductas contempladas en los artículos 330A, 336A y 337A.

j) Cuando con la conducta se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies.

Artículo 339. Modalidad Culposa. Las penas previstas en los artículos 333, 334, 334A de este código se disminuirán hasta en la mitad cuando las conductas punibles se realicen culposamente.

Artículo 2. Modifíquese el numeral 14 del artículo 58 de la ley 599 del 2000, el cual quedará así:

Artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad.

(...)

14. Cuando se produjere un daño ambiental grave, una irreversible modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales o se cause la extinción de una especie biológica.

ARTÍCULO 3. Adiciónese un numeral 33 al artículo 35 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

(...)

33. De los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, tráfico de fauna, deforestación, promoción y financiación de la deforestación, daños en los recursos naturales y ecocidio, e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

ARTÍCULO 4. Adiciónese un parágrafo al artículo 91 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así:

(..)

Parágrafo. Cuando se hubiese suspendido o cancelado la personería jurídica de que trata este artículo, la persona natural o jurídica estará inhabilitada para constituir nuevas personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público, con el mismo objeto o actividad económica a desarrollar, hasta que el Juez de Conocimiento tome una decisión definitiva en la sentencia correspondiente.

ARTÍCULO 5. Adiciónese un parágrafo 2 al artículo 92 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así:

Parágrafo 2. Tratándose de los delitos contemplados en el título XI del Código Penal, el juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.

ARTÍCULO 6. El artículo 302 de la Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo inciso que quedará así:

Cuando la captura en flagrancia se produzca en ríos o tierra donde el arribo a la cabecera municipal más cercana sólo puede surtirse por vía fluvial o siempre que concurran dificultades objetivas de acceso al territorio como obstáculos geográficos, logísticos, ausencia de infraestructura de transporte o fenómenos meteorológicos que dificulten seriamente el traslado del aprehendido, se realizarán todas las actividades para lograr la comparecencia del capturado ante el juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin que en ningún caso exceda las 36 horas siguientes, contadas a partir del momento de la llegada al puerto o municipio más cercano, según el caso. La autoridad competente deberá acreditar los eventos descritos en el presente inciso.

Artículo 7. Dirección de Apoyo Territorial. Créese en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Apoyo Territorial adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana, la que tendrá como función principal liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presencia efectiva de la Entidad con un trabajo interdisciplinario en territorios apartados o de difícil acceso, sin perjuicio de la competencia de otras Direcciones sobre la materia.

La Dirección de Apoyo Territorial estará conformada por:

Unidad	Cantidad	Cargo	Niveles
Dirección de Apoyo Territorial	1	Director Nacional I	Directivo
	2	Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito	Profesional
	20	Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional
	1	Profesional Experto	Profesional
	2	Profesional Especializado II	Profesional
	2	Profesional De Gestión III	Profesional
	12	Investigador Experto	Profesional
	10	Profesional Investigador III	Profesional
	9	Profesional Investigador II	Profesional
	9	Profesional Investigador I	Profesional
	10	Técnico Investigador IV	Técnico
	~~40~~ 12	Técnico Investigador III	Técnico
	20	Asistente de Fiscal IV	Técnico
	5	Asistente de Fiscal III	Técnico
	5	Asistente de Fiscal II	Técnico
	2	Secretario Ejecutivo	Técnico
	3	Secretario Administrativo	Asistencial

Parágrafo 1. De forma prioritaria la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación desarrollará el concurso necesario para proveer los cargos establecidos en el presente artículo de conformidad con el Sistema Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación, sin perjuicio de los nombramientos en provisionalidad necesarios para implementar inmediatamente la Dirección establecida, en los cuales se aplicarán los principios de mérito, transparencia, garantía de imparcialidad y eficiencia y eficacia del artículo 3, junto con los criterios de mérito señalados en el numeral 3 del artículo 11 del Decreto Ley 020 de 2014.

Parágrafo 2: El inicio del concurso se realizará dentro de los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 3: La Fiscalía General de la Nación presentará anualmente un informe sobre los indicadores de gestión, avance y esclarecimiento en la investigación y judicialización de las conductas que afecten los recursos naturales y el medio ambiente. Esta información será pública y contendrá datos estadísticos que no estén sometidos a reserva.

Artículo 8. Dirección de Apoyo Territorial. Adiciónese el artículo 36A al Decreto Ley 016 de 2014, el cual quedará así. La Dirección de Apoyo Territorial cumplirá las siguientes funciones:

22. Liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presencia efectiva de la Entidad en territorios apartados o de difícil acceso, en aquellas zonas afectadas por fenómenos criminales de alto impacto y por la presencia de grupos armados organizados.
23. Apoyar la investigación, especialmente actos urgentes, en aquellos fenómenos priorizados que se den en territorios donde la Fiscalía General de la Nación no tenga presencia permanente o sean de difícil acceso.
24. Definir los lugares en los que se podrá actuar por medio de grupos itinerantes, con base en criterios geográficos y no en la división político-administrativa, así como en el análisis de la criminalidad del país, la presencia de organizaciones criminales, los tiempos de desplazamiento al lugar de comisión de la conducta punible, la oferta de servicios de justicia por parte de otras entidades, entre otros factores.
25. Conformar grupos especializados de investigadores y analistas expertos en los fenómenos criminales priorizados por la Dirección.
26. Realizar proceso de articulación de la estrategia territorial con otras entidades públicas.
27. Designar fiscales itinerantes en aquellos procesos sobre fenómenos priorizados, con el fin que apoyen, impulsen y asesoren a los fiscales titulares con el fin de lograr una efectiva judicialización.
28. Conformar equipos móviles de la Entidad, en los que periódicamente se reciban denuncias de los habitantes del territorio nacional y se brinde atención a las víctimas de las conductas punibles en territorios apartados o zonas de alto impacto o presencia de grupos armados organizados.
29. Organizar y adelantar comités técnico-jurídicos de revisión de las situaciones y los casos para la ejecución de acciones en el desarrollo efectivo y eficiente de las investigaciones penales de su competencia.
30. Dirigir y coordinar los grupos de trabajo, los departamentos y unidades que se conformen para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Dirección.
31. Dirigir, coordinar y controlar la incorporación y aplicación de políticas públicas en el desarrollo de las actividades que cumplen los servidores, dependencias y los grupos de trabajo que estén a su cargo, de acuerdo con los lineamientos y las orientaciones que impartan las dependencias competentes

32. Identificar y delimitar situaciones y casos susceptibles de ser priorizados y proponerlos al Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos.
33. Ejecutar los planes de priorización aprobados por el Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos en lo de su competencia.
34. Apoyar, en el marco de sus competencias, a la Dirección de Políticas y Estrategia en el análisis de la información que se requiera para sustentar la formulación de la política en materia criminal.
35. Mantener actualizada la información que se registre en los sistemas de información de la Entidad, en los temas de su competencia.
36. Consolidar, analizar y clasificar la información de las investigaciones y acusaciones adelantadas por los servidores y grupos de trabajo a su cargo y remitirla a la Dirección de Políticas y Estrategia
37. Dirimir, de conformidad con la Constitución y la ley, los conflictos de competencia que se presenten entre la Fiscalía General de la Nación y los demás organismos que desempeñen funciones de Policía Judicial, en el ámbito de su competencia.
38. Dirimir los conflictos administrativos que se presenten al interior de la Fiscalía en el ejercicio de las funciones o en la asignación de investigaciones, en los casos y según las directrices y lineamientos impartidos por el Fiscal General de la Nación.
39. Asesorar a las dependencias de la Fiscalía General de la Nación que cumplen funciones investigativas y acusatorias en los temas de su competencia.
40. Elaborar e implementar los planes operativos anuales en el ámbito de su competencia, de acuerdo con la metodología diseñada por la Dirección de Planeación y Desarrollo.
41. Aplicar las directrices y lineamientos del Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación.
42. Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el Fiscal o Vicefiscal General de la Nación.

Artículo 9. Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. Créese en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente adscrita a la Delegada contra la Criminalidad Organizada, la que tendrá como función principal la investigación y judicialización de los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y las demás conductas delictivas conexas o relacionadas, mediante un trabajo interdisciplinario sin perjuicio de la competencia de las Direcciones Seccionales sobre la materia.

La Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente estará conformada por:

Unidad	Cantidad	Cargo	Niveles
Dirección	1	Director Nacional I	Directivo
Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales	2	Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito	Profesional
	20	Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional
	1	Profesional Experto	Profesional
	2	Profesional Especializado II	Profesional
	2	Profesional De Gestión III	Profesional
	12	Investigador Experto	Profesional
	10	Profesional Investigador III	Profesional
	9	Profesional Investigador II	Profesional
	9	Profesional Investigador I	Profesional
	10	Técnico Investigador IV	Técnico
	12	Técnico Investigador III	Técnico
	20	Asistente de Fiscal IV	Técnico
	5	Asistente de Fiscal III	Técnico
	5	Asistente de Fiscal II	Técnico
	2	Secretario Ejecutivo	Técnico
	3	Secretario Administrativo	Asistencial

Parágrafo 1: De forma prioritaria la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación desarrollará el concurso necesario para proveer los cargos establecidos en el presente artículo de conformidad con el Sistema Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación, sin perjuicio de los nombramientos en provisionalidad necesarios para implementar inmediatamente la Dirección establecida, en los cuales se aplicarán los principios de mérito, transparencia, garantía de imparcialidad y eficiencia y eficacia del artículo 3 junto con los criterios de mérito señalados en el numeral 3 del artículo 11 del Decreto Ley 020 de 2014.

Parágrafo 2: El inicio del concurso se realizará dentro de los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 3: La Fiscalía General de la Nación presentará anualmente un informe sobre los indicadores de gestión, avance y esclarecimiento en la investigación y judicialización de las conductas que afecten los recursos naturales y el medio ambiente. Esta información será pública y contendrá datos estadísticos que no estén sometidos a reserva

ARTÍCULO 10. Prevención del daño antijurídico y promoción de la adecuada defensa litigiosa. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el marco de sus funciones, deberá diseñar e implementar una política de prevención del daño antijurídico en materia de protección ambiental y ecológica. De igual forma, promoverá la coordinación de las acciones que aseguren la adecuada defensa de los intereses litigiosos de la nación dentro de los procesos que se lleven a cabo en materia de defensa de los recursos naturales y de la fauna y la flora silvestre.

ARTÍCULO 11. Se autoriza al Gobierno Nacional para asignar los recursos para la implementación y ejecución de la presente ley.

De conformidad con la normativa vigente, las erogaciones que se causen con ocasión de la implementación y ejecución de la presente ley deberán consultar la situación fiscal de la Nación y ajustarse al Marco de Gasto de Mediano Plazo de cada sector involucrado, en concordancia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y las normas orgánicas de presupuesto.

ARTÍCULO 12. Vigencia y Derogatoria. La presente rige a partir de su promulgación y publicación en el Diario Oficial y deroga el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000 y todas las disposiciones que le sean contrarias

De los Honorables Congresistas,

Cordialmente,

JUAN CARLOS LOZADA VARGAS
Representante a la Cámara
C.C. 79.935.285 de Bogotá

C O N T E N I D O

Gaceta número 686 - Jueves, 17 de junio de 2021

CÁMARA DE REPRESENTANTES

INFORMES DE CONCILIACIÓN

Págs.

Informe de conciliación al proyecto de ley número 192 de 2019 Cámara – 274 de 2020 Senado, por medio de la cual se crea el régimen de trabajo remoto y se establecen normas para promoverlo, regularlo y se dictan otras disposiciones 1

Informe de conciliación al proyecto de ley número 446 de 2021 Senado – 283 de 2019 Cámara, por medio del cual se sustituye el Título XI "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones..... 11

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2021

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

I S S N 0 1 2 3 - 9 0 6 6

AÑO XXXI - Nº 68 | Bogotá, D. C., viernes, 11 de febrero de 2022 | EDICIÓN DE 30 PÁGINAS

DIRECTORES: GREGORIO ELJACH PACHECO, SECRETARIO GENERAL DEL SENADO, www.secretariasenado.gov.co; JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO, SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA, www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

LEYES SANCIONADAS

LEY 2081 DE 2021

(febrero 3)

por la cual se declara imprescriptible la acción penal en caso de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito de incesto, cometidos en menores de 18 años - No más silencio.



LEY Nº 2081 3 FEB 2021

"POR LA CUAL SE DECLARA IMPRESCRIPTIBLE LA ACCIÓN PENAL EN CASO DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD, INTEGRIDAD Y FORMACIÓN SEXUALES, O EL DELITO DE INCESTO, COMETIDOS EN MENORES DE 18 AÑOS - NO MÁS SILENCIO"

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1. Modifíquese el artículo 83 de la Ley 599 del 2000 "Por la cual se expide el Código Penal", el cual quedará así:

"ARTICULO 83. TERMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), salvo lo dispuesto en los incisos siguientes de este artículo.

El término de prescripción para las conductas punibles de desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de una organización sindical, homicidio de defensor de Derechos Humanos, homicidio de periodista y desplazamiento forzado será de treinta (30) años. En las conductas punibles de ejecución permanente el término de prescripción comenzará a correr desde la perpetración del último acto. La acción penal para los delitos de genocidio, lesa humanidad, y crímenes de guerra será imprescriptible.

Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito de incesto, cometidos en menores de 18 años, la acción penal será imprescriptible.

En las conductas punibles que tengan señalada pena no privativa de la libertad, la acción penal prescribirá en cinco (5) años.

Para este efecto se tendrán en cuenta las causales sustanciales modificadoras de la punibilidad.

Al servidor público que en ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en la mitad. Lo anterior se aplicará también en relación con los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria y de quienes obren como agentes retenedores o recaudadores.



También se aumentará el término de prescripción, en la mitad, cuando la conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior.

En todo caso, cuando se aumente el término de prescripción, no se excederá el límite máximo fijado".

ARTÍCULO 2. Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

ARTURO CHAR CHALJUB

EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA

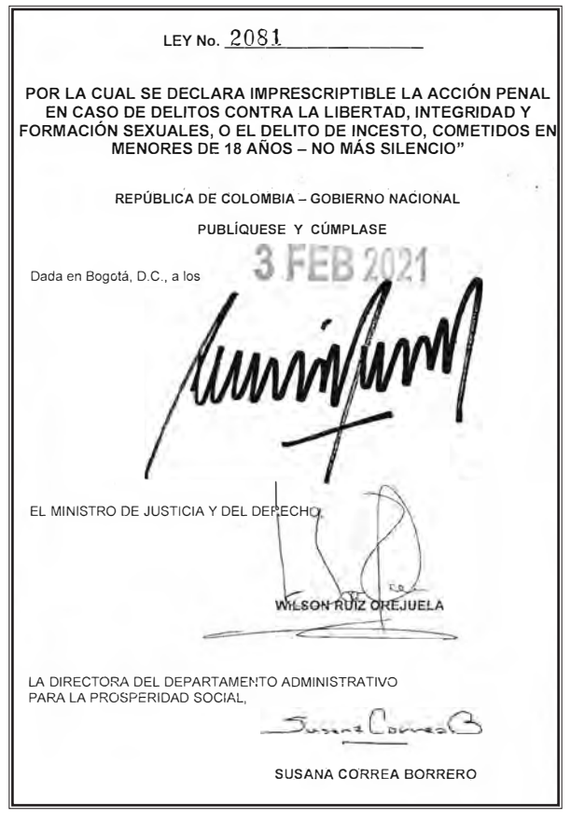
GREGORIO ELJACH PACHECO

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ

EL SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO



LEY No. 2081

POR LA CUAL SE DECLARA IMPRESCRIPTIBLE LA ACCIÓN PENAL EN CASO DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD, INTEGRIDAD Y FORMACIÓN SEXUALES, O EL DELITO DE INCESTO, COMETIDOS EN MENORES DE 18 AÑOS – NO MÁS SILENCIO"

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 3 FEB 2021

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO,

WILSON RUIZ OREJUELA

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL,

SUSANA CORREA BORRERO

LEY 2088 DE 2021

(mayo 12)

por la cual se regula el trabajo en casa y se dictan otras disposiciones.



LEY N° 2088 12 MAY 2021

"POR LA CUAL SE REGULA EL TRABAJO EN CASA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

Artículo 1. Objeto y campo de aplicación. La presente ley tiene por objeto regular la habilitación de trabajo en casa como una forma de prestación del servicio en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, que se presenten en el marco de una relación laboral, legal y reglamentaria con el Estado o con el sector privado, sin que conlleve variación de las condiciones laborales establecidas o pactadas al inicio de la relación laboral

Parágrafo. La presente ley no será aplicable a quienes se encuentren cobijados por regímenes especiales de orden constitucional o legal en atención al desempeño de sus funciones siempre y cuando estas sean incompatibles con el trabajo en casa.

Artículo 2. Definición de Trabajo en Casa. Se entiende como trabajo en casa la habilitación al servidor público o trabajador del sector privado para desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realiza, sin modificar la naturaleza del contrato o relación laboral, o legal y reglamentaria respectiva, ni tampoco desmejorar las condiciones del contrato laboral, cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo, privilegiando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Este no se limita al trabajo que puede ser realizado mediante tecnologías de la información y las comunicaciones, medios informáticos o análogos, sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo o labor que no requiera la presencia física del trabajador o funcionario en las instalaciones de la empresa o entidad.

Artículo 3. Garantías en la habilitación del ejercicio del trabajo en casa en las funciones y servicios públicos. Para el cumplimiento de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos, en la habilitación del trabajo en casa para los servidores públicos se garantizarán:

a. La satisfacción de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, seguridad jurídica, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad propios del ejercicio de la función administrativa;
b. La salvaguarda de las prerrogativas laborales y sociales de los trabajadores;



c. El respeto de los principios esenciales del Estado Social de Derecho y de los derechos fundamentales de las personas.

Artículo 4. Criterios aplicables al trabajo en casa. La habilitación del trabajo en casa se regirá por los principios generales de las relaciones laborales señalados en la Constitución Política y en la ley, y por los siguientes criterios:

a. **Coordinación.** Las funciones, servicios y actividades laborales deberán desarrollarse de manera armónica y complementaria entre el empleador y el trabajador para alcanzar los objetivos y logros fijados. La coordinación deberá darse desde el momento mismo de la asignación de tareas o actividades, para lo cual se deberán fijar los medios y herramientas que permitan el reporte, seguimiento y evaluación, así como la comunicación constante y recíproca.
b. **Desconexión laboral.** Es la garantía y el derecho que tiene todo trabajador y servidor público a disfrutar de su tiempo de descanso, permisos, vacaciones, feriados, licencias con el fin de conciliar su vida personal, familiar y laboral. Por su parte el empleador se abstendrá de formular órdenes u otros requerimientos al trabajador por fuera de la jornada laboral.

Artículo 5. Elementos de la relación laboral en el Trabajo en Casa. La habilitación del trabajo en casa implica que se mantenga la facultad subordinante del empleador, junto con la potestad de supervisión de las labores del trabajador. Permanecerán todas las obligaciones, derechos y deberes derivados de la prestación personal del servicio.

El empleador determinará los instrumentos, la frecuencia y el modelo de evaluación del desempeño, cumplimiento de metas, así como el mecanismo para el reporte y/o resultados de éstas, por el tiempo que dure el trabajo en casa. El Gobierno nacional determinará los instrumentos para la habilitación del trabajo en casa para los servidores públicos.

El seguimiento de los objetivos y actividades de los servidores públicos y trabajadores del sector privado deberá obedecer a criterios concertados y establecidos con anterioridad.

Artículo 6. Jornada de Trabajo. Durante el tiempo que dure el trabajo en casa se mantendrán vigentes las normas previstas en el Código Sustantivo del Trabajo y en los reglamentos aplicables a los servidores públicos, relativos al horario y la jornada laboral. Estarán excluidos del cumplimiento de estas disposiciones y de la remuneración del trabajo suplementario los trabajadores de dirección, de confianza o de manejo, así como los niveles directivo y asesor, en el sector público.

Artículo 7. Término del trabajo en casa. La habilitación de trabajo en casa originada por circunstancias excepcionales, ocasionales o especiales se extenderá hasta por un término de tres meses prorrogables por un término igual por una única vez, sin embargo, si persisten las circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidieron que el trabajador pudiera realizar sus funciones en su lugar de trabajo se extenderá la habilitación de trabajo en casa hasta que desaparezcan dichas condiciones.

En todo caso, el empleador o nominador conserva la facultad unilateral de dar por terminada la habilitación de trabajo en casa, siempre y cuando desaparezcan las circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que dieron origen a dicha habilitación.

Artículo 8. Elementos de Trabajo. Para el desarrollo del trabajo en casa y el cumplimiento de sus funciones, el servidor público o el trabajador del sector privado, podrá disponer de sus propios equipos y demás herramientas, siempre que medie acuerdo con el respectivo empleador y/o entidad pública.

Si no se llega al mencionado acuerdo, el empleador suministrará los equipos, sistemas de información, software o materiales necesarios para el desarrollo de la función o labor contratada, de acuerdo con los recursos disponibles para tal efecto.

El empleador definirá los criterios y responsabilidades en cuanto al acceso y cuidado de los equipos, así como respecto a la custodia y reserva de la información de conformidad con la normativa vigente sobre la materia.

En todo caso el empleador es el primer responsable de suministrar los equipos necesarios para el desarrollo de las actividades, cumplimiento de funciones y prestación del servicio bajo la habilitación de trabajo en casa.

Artículo 9. Procedimientos necesarios para la implementación del Trabajo en Casa. Previo a la implementación del trabajo en casa, toda empresa y entidad pública o privada deberá contar con un procedimiento tendiente a proteger este derecho y garantizar a través de las capacitaciones a que haya lugar el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación - TIC o cualquier otro tipo de elemento utilizado que pueda generar alguna limitación al mismo.

Para dar inicio a esta habilitación, el empleador deberá notificar por escrito a sus trabajadores acerca de la habilitación de trabajo en casa, y en dicha comunicación, se indicará el periodo de tiempo que el trabajador estará laborando bajo esta habilitación.

Artículo 10. Sobre los derechos salariales y prestacionales. Durante el tiempo que el servidor público o trabajador del sector privado preste sus servicios o desarrolle sus actividades bajo la habilitación de trabajo en casa, tendrá derecho a percibir los salarios y prestaciones sociales derivadas de su relación laboral.

A los servidores públicos y trabajadores del sector privado que devenguen hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigente y que se les reconozca el auxilio de transporte en los términos de las normas vigentes sobre el particular, durante el tiempo que presten sus servicios bajo la habilitación de trabajo en casa, se le reconocerá este pago a título de auxilio de conectividad digital. El auxilio de conectividad y el auxilio de transporte no son acumulables.

Parágrafo 1. Para los servidores públicos, el auxilio de conectividad se reconocerá en los términos y condiciones establecidos para el auxilio de transporte.

3

En todo caso la habilitación de trabajo en casa no implicará retroceso, demoras o falta de calidad en la atención y en el desempeño de funciones y prestación de servicios.

Artículo 15. Inspección y Vigilancia. El Ministerio de Trabajo ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control en el desarrollo de las actividades reguladas en la presente ley. En cuanto a las relaciones de derecho individual del Trabajo entre la Administración Pública y los trabajadores del sector se rige por las normas especiales vigentes.

Artículo 16. Vigencia. Esta Ley rige a partir de su promulgación.

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

ARTURO CHAR CHALJUB

EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA

GREGORIO ELJACH PACHECO

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

GERMAN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ

EL SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

5

Parágrafo 2. Para los trabajadores del sector privado, el valor establecido para el auxilio de transporte se reconocerá como auxilio de conectividad digital y tendrá los mismos efectos salariales del auxilio de transporte.

Artículo 11. Garantías laborales, sindicales y de seguridad social. Durante el tiempo que se preste el servicio o actividad bajo la habilitación de trabajo en casa, el servidor público o trabajador del sector privado continuará disfrutando de los mismos derechos y garantías que rigen su relación laboral, entre otras, las que regulan la jornada laboral, horas extras, trabajo nocturno, dominicales y festivos, descansos dentro de la jornada laboral, derechos de asociación y negociación sindical y en general todos los beneficios a que tenga derecho en el marco de la respectiva relación laboral.

Durante el tiempo que se presten los servicios o actividades bajo la habilitación del trabajo en casa el servidor público o trabajador del sector privado continuará amparado por las acciones de promoción y prevención, así como de las prestaciones económicas y asistenciales, en materia de riesgos laborales.

Así mismo, la Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliado el empleador, deberá promover programas que permitan garantizar condiciones de salud física y mental, así como la seguridad en el trabajo, para lo cual los empleadores deberán comunicar y actualizar ante la Administradora de Riesgos Laborales los datos del trabajador y en aquellos casos en que sea necesaria la prestación del servicio o el desarrollo de actividades en un lugar diferente al inicialmente pactado en la relación laboral deberá informar la dirección en la que se efectuará el desarrollo de las actividades.

Artículo 12. Programas de bienestar y capacitación. Para la implementación de la habilitación de trabajo en casa, el empleador deberá promover la formación, capacitación y el desarrollo de competencias digitales, en los servidores públicos y trabajadores del sector privado cuando la actividad a desarrollar así lo requiera.

Artículo 13. Implementación del trabajo en casa. El trabajo en casa como habilitación excepcional aquí regulada no requerirá modificación al Reglamento Interno de Trabajo ni al Manual de Funciones, salvo que fuera necesario para el desarrollo de las labores.

Parágrafo. En los eventos en que sea necesario modificar el reglamento interno no podrán variar las condiciones laborales establecidas o pactadas al inicio de la relación laboral.

Artículo 14. Canales oficiales de comunicación para ciudadanos y usuarios. Las entidades públicas y los empleadores del sector privado deberán adoptar las directrices necesarias para el desarrollo del trabajo en la habilitación del trabajo en casa, y en especial darán a conocer a los ciudadanos y usuarios en su página web, los canales oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarán sus servicios de manera virtual, así como los mecanismos tecnológicos y/o virtuales que emplearán para el registro y respuesta de las peticiones.

4

LEY No. 2088

POR LA CUAL SE REGULA EL TRABAJO EN CASA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **12 MAY 2021**

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (E)

JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTÍNEZ

EL MINISTRO DEL TRABAJO,

ÁNGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ

LA MINISTRA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES,

KAREN CECILIA ABUDINEN ABUCHAIBE

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (E)

CLAUDIA PATRICIA HERNÁNDEZ LEÓN

LEY 2089 DE 2021

(mayo 14)

por medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes y se dictan otras disposiciones.

LEY N° 2089 14 MAY 2021

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PROHÍBE EL USO DEL CASTIGO FÍSICO, LOS TRATOS CRUELES, HUMILLANTES O DEGRADANTES Y CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA COMO MÉTODO DE CORRECCIÓN CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Los padres o quienes ejercen la patria potestad de los menores tienen el derecho a educar, criar y corregir a sus hijos de acuerdo a sus creencias y valores. El único límite es la prohibición del uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes. La prohibición se extiende a cualquier otra persona encargada de su cuidado, en cada uno de los diferentes entornos en los que transcurre la niñez y la adolescencia.

El castigo físico y los tratos crueles o humillantes no serán causal de pérdida de la patria potestad o de la custodia, ni causal para procesos de emancipación, siempre y cuando no sean una conducta reiterativa y no afecte la salud mental o física del niño, niña o adolescente; sin perjuicio a que la utilización del castigo físico o tratos crueles o humillantes ameriten sanciones para quienes no ejerzan la patria potestad, pero están encargados del cuidado, en cada uno de los diferentes entornos en los que transcurre la niñez y la adolescencia.

ARTÍCULO 2°. Definiciones: Para la adecuada comprensión, interpretación e implementación de la presente Ley, se adoptarán las siguientes definiciones:

a) Castigo físico: Aquella acción de crianza, orientación o educación en que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar dolor físico, siempre que esta acción no constituya conducta punible de maltrato o violencia intrafamiliar.

b) Tratos crueles, humillantes o degradantes: Aquella acción con la que se hiere la dignidad del niño, niña o adolescente o se menosprecie, denigre, degrade, estigmatice o amenace de manera cruel, siempre que no constituya conducta punible. No será causal de pérdida de la patria potestad o de la custodia, ni causal para procesos de emancipación, siempre y cuando no sea una conducta reiterativa y no se afecte la salud mental o física del niño, niña o adolescente.

c) Entornos: Son todos los contextos en donde transcurre la vida de los niños, niñas y adolescentes, entre ellos: el hogar, centros educativos o comunitarios, espacios públicos o virtuales.

1

d) Crianza, orientación o educación sin violencia: son las acciones que en ejercicio de su autoridad y en cumplimiento de sus deberes y obligaciones ejecutan los padres o quien ejerce la patria potestad o personas encargadas de su cuidado basadas en el respeto por los derechos y la dignidad de la niña, niño o adolescente.

ARTÍCULO 3°. Modifíquese el artículo 262 de la Ley 84 de 1873, Código Civil, el cual quedará así:

Artículo 262. Vigilancia, corrección y sanción sin violencia. Las familias, los padres, las personas encargadas del cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes o quienes tengan su representación legal, tendrán la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos.

Queda prohibido el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección, sanción o disciplina.

ARTÍCULO 4°. Adiciónese el artículo 18-A a la Ley 1098 de 2006 "Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia", el cual quedará así:

Artículo 18-A. Derecho al buen trato: Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al buen trato, a recibir orientación, educación, cuidado y disciplina, por medio de métodos no violentos. Este derecho comprende la protección de su integridad física, psíquica y emocional, en el contexto de los derechos de los padres o de quien ejerza la patria potestad o persona encargada de su cuidado; de criarlos y educarlos en sus valores y creencias.

Parágrafo. En ningún caso serán admitidos los castigos físicos como forma de corrección ni disciplina.

ARTÍCULO 5°. Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención. El Gobierno Nacional a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio del Interior, y el Ministerio de Justicia y el Derecho, en ejercicio de sus objetivos misionales, junto con los padres de familia, representados en las asociaciones de padres y demás organizaciones civiles que los agrupe implementará en los siguientes seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley una Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención, que propenda por la eliminación del castigo físico y los tratos crueles, humillantes o degradantes contra niños, niñas y adolescentes.

La Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención promoverá la participación de los padres de familia para identificar e ilustrar alternativas y prácticas para educar, orientar y disciplinar sin violencia. Se respetarán siempre los derechos de los padres, o quien ejerza la patria potestad de definir sobre la educación de sus hijos, y para inculcar y escoger los valores, ideologías o creencias para sus hijos. La Estrategia promoverá la inclusión de elementos en materia de salud mental, tratamiento psicológico y manejo psicoemocional. Al mismo tiempo, promoverá el respeto recíproco entre los niños, niñas y adolescentes, y sus

2

familias y personas encargadas de su cuidado. Con la finalidad de facilitar la eliminación del castigo físico y los tratos crueles, humillantes o degradantes, el Gobierno Nacional podrá crear centros de formación y ofertar cursos o brindar herramientas a través de organizaciones sociales, las escuelas de padres, entre otras, dirigidas hacia las familias, los padres o quienes ejercen la patria potestad o las personas encargadas de cuidar niños, niñas y adolescentes. Además realizará acciones de difusión, sensibilización y acompañamiento para prevenir el uso del castigo físico, Articulará esta estrategia con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1959 de 2019.

Las entidades territoriales adoptarán la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención en un plazo máximo de seis (6) meses después de su promulgación por el Gobierno Nacional.

Parágrafo. La Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, participara en todo lo concerniente a este artículo.

ARTÍCULO 6°. El ICBF y el Ministerio del Interior deberán presentar ante las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representante un informe dentro de los veinte (20) primeros días de cada legislatura para mostrar todos los avances de la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención.

Con la misma regularidad se realizará también una audiencia pública en el Congreso para que los padres de familia y las organizaciones sociales puedan expresarse sobre la materia.

ARTÍCULO 7°. Vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

ARTURO CHAR CHALJUB

EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA

GREGORIO ELJACH PACHECO

3

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ

EL SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

4



LEY No. 2089

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PROHÍBE EL USO DEL CASTIGO FÍSICO, LOS TRATOS CRUELES, HUMILLANTES O DEGRADANTES Y CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA COMO MÉTODO DE CORRECCIÓN CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 14 MAY 2021

Dada en Bogotá, D.C. a los

EL MINISTRO DEL INTERIOR,

DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO,

WILSON RUÍZ OREJUELA

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,

MARÍA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,

VICTOR MANUEL MUÑOZ RODRÍGUEZ

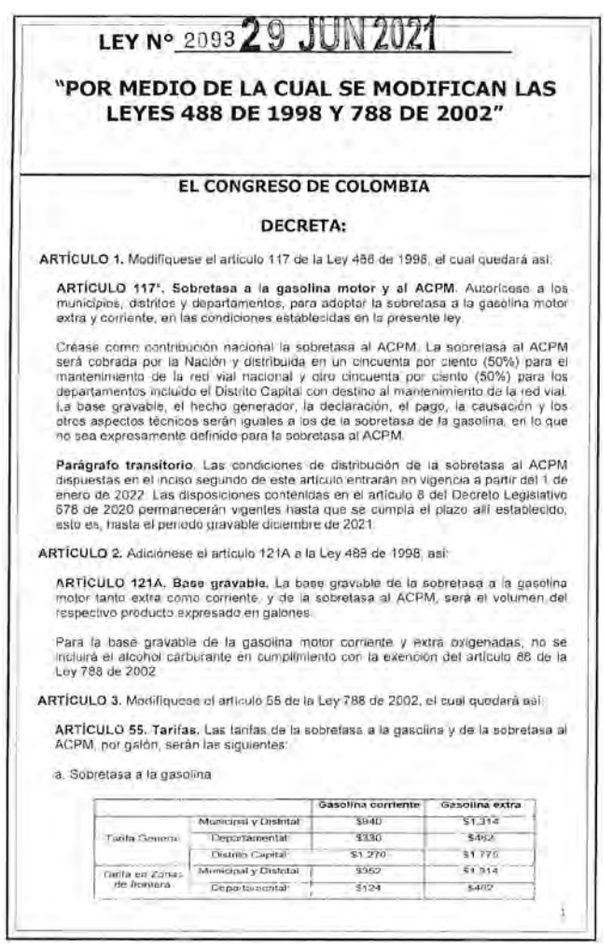
LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS

SUSANA CORREA BORRERO

LEY 2093 DE 2021

(junio 29)

por medio de la cual se modifican las Leyes 488 de 1998 y 788 de 2002.



LEY N° 2093 29 JUN 2021

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LAS LEYES 488 DE 1998 Y 788 DE 2002"

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1. Modifíquese el artículo 117 de la Ley 488 de 1998, el cual quedará así:

ARTÍCULO 117°. Sobretasa a la gasolina motor y al ACPM. Autorícese a los municipios, distritos y departamentos, para adoptar la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente, en las condiciones establecidas en la presente ley.

Créase como contribución nacional la sobretasa al ACPM. La sobretasa al ACPM será cobrada por la Nación y distribuida en un cincuenta por ciento (50%) para el mantenimiento de la red vial nacional y otro cincuenta por ciento (50%) para los departamentos incluido el Distrito Capital con destino al mantenimiento de la red vial. La base gravable, el hecho generador, la declaración, el pago, la causación y los otros aspectos técnicos serán iguales a los de la sobretasa de la gasolina, en lo que no sea expresamente definido para la sobretasa al ACPM.

Parágrafo transitorio. Las condiciones de distribución de la sobretasa al ACPM dispuestas en el inciso segundo de este artículo entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2022. Las disposiciones contenidas en el artículo 8 del Decreto Legislativo 578 de 2020 permanecerán vigentes hasta que se cumpla el plazo allí establecido, esto es, hasta el periodo gravable diciembre de 2021.

ARTÍCULO 2. Adiciónese el artículo 121A a la Ley 488 de 1998, así:

ARTÍCULO 121A. Base gravable. La base gravable de la sobretasa a la gasolina motor tanto extra como corriente, y de la sobretasa al ACPM, será el volumen del respectivo producto expresado en galones.

Para la base gravable de la gasolina motor corriente y extra oxigenadas, no se incluirá el alcohol carburante en cumplimiento con la exención del artículo 88 de la Ley 788 de 2002.

ARTÍCULO 3. Modifíquese el artículo 55 de la Ley 788 de 2002, el cual quedará así:

ARTÍCULO 55. Tarifas. Las tarifas de la sobretasa a la gasolina y de la sobretasa al ACPM, por galón, serán las siguientes:

a. Sobretasa a la gasolina

		Gasolina corriente	Gasolina extra
Tarifa General	Municipal y Distrital	$940	$1.314
	Departamental	$330	$462
	Distrito Capital	$1.270	$1.776
Tarifa en Zonas de frontera	Municipal y Distrital	$360	$1.314
	Departamental	$124	$462

1

b. Sobretasa al ACPM

La tarifa de la sobretasa al ACPM será de $301 pesos por galón. La sobretasa al ACPM para consumo en municipios zonas de frontera se liquidará con una tarifa de $204 por galón para el producto nacional y $114 por galón para el producto importado.

Parágrafo 1. Para los fines de este artículo, el Departamento de Cundinamarca no incluye al Distrito Capital de Bogotá.

Parágrafo 2. Para el caso de la sobretasa a la gasolina, los Concejos de los municipios ubicados en zonas de frontera podrán optar entre la tarifa municipal para zonas de frontera establecida en la tabla de este artículo o la adopción de una tarifa diferencial de $114 por galón de gasolina corriente y de $426 por galón de gasolina extra.

En caso de adoptar la tarifa diferencial establecida en este parágrafo, deberán informar de esta situación a los responsables de declarar y pagar el impuesto, antes de iniciar el periodo gravable para el cual aplica la mencionada tarifa.

En todo caso, mientras la entidad territorial no haya informado al responsable la adopción de la tarifa diferencial establecida en este parágrafo, la tarifa aplicable será la tarifa municipal para cada tipo de combustible establecida para los municipios de zonas de frontera.

Parágrafo 3. Las tarifas en zonas de frontera para la sobretasa a la gasolina y la sobretasa al ACPM para el producto nacional aplicarán exclusivamente a los volúmenes máximos asignados a los diferentes agentes de la cadena de distribución de combustibles. Para ventas por encima de los volúmenes en mención o agentes que no son objeto de los mismos, la tarifa de la sobretasa a la gasolina por galón y la sobretasa al ACPM por galón será la tarifa general respectiva señalada en el presente artículo.

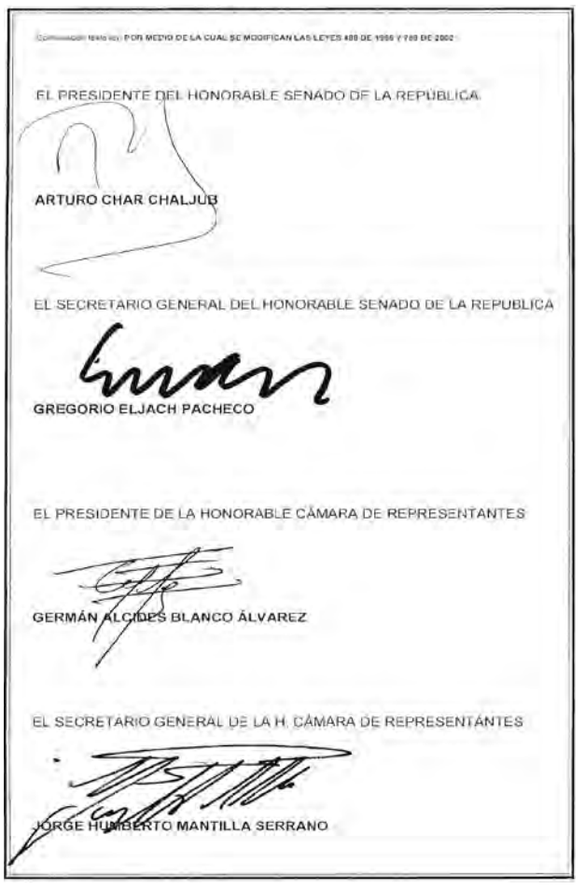
Parágrafo 4. Para el consumo de nafta o cualquier otro combustible o líquido derivado del petróleo que pueda ser usado como carburante en motores diseñados para ser utilizados con gasolina, la tarifa será la misma de la gasolina motor extra.

Parágrafo 5. Las tarifas previstas en este artículo se incrementarán a partir del 1 de enero del año 2023, con la variación anual del índice de precios al consumidor certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE al 30 de noviembre y el resultado se aproximará al peso más cercano. La Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público certificará y publicará, antes del 1 de enero de cada año, las tarifas así indexadas.

Parágrafo 6. En los casos en que, a la entrada en vigencia de la presente ley existan, a favor de la Nación, contratos de pignoración de la sobretasa a la gasolina, se observarán estos compromisos y se mantendrán vigentes, sin perjuicio de los ajustes que se deban realizar en los documentos contractuales para mantener las equivalencias en el monto de las pignoraciones.

ARTÍCULO 4. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación.

2



POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LAS LEYES 488 DE 1998 Y 788 DE 2002

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

ARTURO CHAR CHALJUB

EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA

GREGORIO ELJACH PACHECO

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ

EL SECRETARIO GENERAL DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO



LEY No. 2093

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LAS LEYES 488 DE 1998 Y 788 DE 2002

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 29 JUN 2021

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO

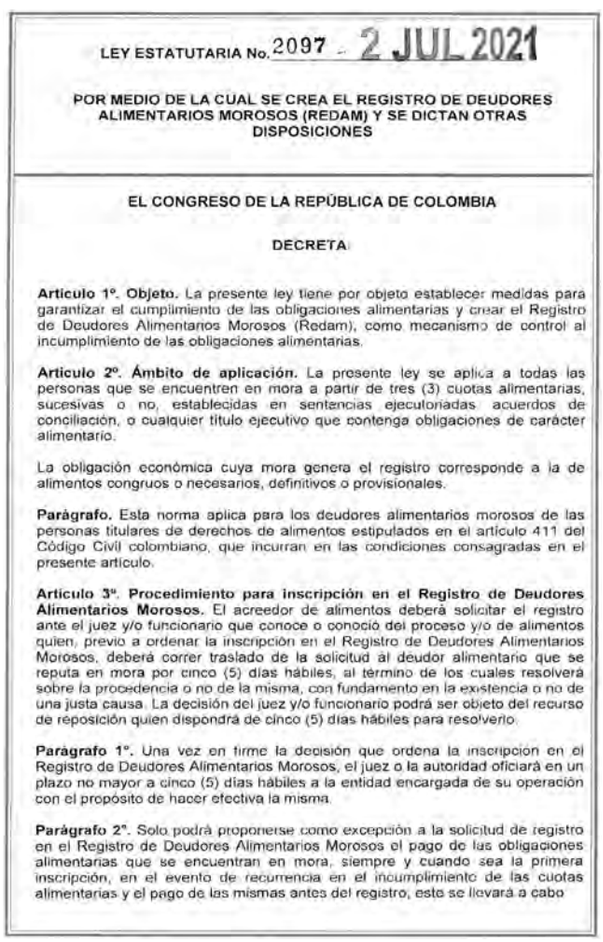
EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA

DIEGO MESA PUYO

LEY 2097 DE 2021

(julio 2)

por medio de la cual se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) y se dictan otras disposiciones.



LEY ESTATUTARIA No. 2097 - 2 JUL 2021

POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

DECRETA:

Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), como mecanismo de control al incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Artículo 2º. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todas las personas que se encuentren en mora a partir de tres (3) cuotas alimentarias, sucesivas o no, establecidas en sentencias ejecutoriadas acuerdos de conciliación, o cualquier título ejecutivo que contenga obligaciones de carácter alimentario.

La obligación económica cuya mora genera el registro corresponde a la de alimentos congruos o necesarios, definitivos o provisionales.

Parágrafo. Esta norma aplica para los deudores alimentarios morosos de las personas titulares de derechos de alimentos estipulados en el artículo 411 del Código Civil colombiano, que incurran en las condiciones consagradas en el presente artículo.

Artículo 3º. Procedimiento para inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El acreedor de alimentos deberá solicitar el registro ante el juez y/o funcionario que conoce o conoció del proceso y/o de alimentos quien, previo a ordenar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, deberá correr traslado de la solicitud al deudor alimentario que se reputa en mora por cinco (5) días hábiles, al término de los cuales resolverá sobre la procedencia o no de la misma, con fundamento en la existencia o no de una justa causa. La decisión del juez y/o funcionario podrá ser objeto del recurso de reposición quien dispondrá de cinco (5) días hábiles para resolverlo.

Parágrafo 1º. Una vez en firme la decisión que ordena la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el juez o la autoridad oficiará en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a la entidad encargada de su operación con el propósito de hacer efectiva la misma.

Parágrafo 2º. Solo podrá proponerse como excepción a la solicitud de registro en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos el pago de las obligaciones alimentarias que se encuentran en mora, siempre y cuando sea la primera inscripción, en el evento de recurrencia en el incumplimiento de las cuotas alimentarias y el pago de las mismas antes del registro, este se llevará a cabo



por tres meses en la segunda oportunidad y por 6 meses en las ocasiones siguientes.

Parágrafo 3º. Cuando se acredite la cancelación total de las cuotas alimentarias en mora, el juez oficiará en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a la entidad encargada de su operación con el propósito de cancelar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En el mismo oficio el juez ordenará el retiro inmediato de la información negativa del deudor de alimentos del Registro.

Parágrafo 4º. Cuando la obligación alimentaria conste en título ejecutivo diferente a sentencia judicial, el acreedor alimentario podrá acudir, a prevención, a una Comisaría de Familia o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para poner en conocimiento el incumplimiento en las obligaciones alimentarias que dan lugar a la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La Comisaría de Familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estará obligada a dar inicio al trámite contemplado en el presente artículo, garantizando en todo caso, el derecho de contradicción y de defensa del presunto deudor alimentario moroso.

Artículo 4º. Funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Las funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos son:

1. Llevar un registro de los deudores alimentarios morosos.
2. Expedir gratuitamente los certificados a través de página web, que soliciten las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.

Estos certificados deberán contener como mínimo la información contemplada en el artículo 5° de la presente ley.

Parágrafo. Los certificados contemplados en el numeral 2 del presente artículo, tendrán una validez de tres (3) meses y podrán expedirse por medio de documento en físico o por plataformas tecnológicas o virtuales que permitan que este sea expedido con celeridad y practicidad para el ciudadano. El Gobierno nacional reglamentará la materia, respetando en todo caso lo contemplado en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012.

Artículo 5º. Contenido de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El Registro de Deudores Alimentarios Morosos deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

1. Nombres y apellidos completos del Deudor Alimentario Moroso.
2. Domicilio actual o último conocido del Deudor Alimentario Moroso.
3. Número de documento de identidad del Deudor Alimentario Moroso.
4. Identificación del documento donde conste la obligación alimentaria.
5. Cantidad de cuotas en mora parcial o total, monto de la obligación pendiente e intereses hasta la fecha de la comunicación.
6. Identificación de la autoridad que ordena el registro.
7. Fecha del registro.

Artículo 6º. Consecuencias de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos generará las siguientes consecuencias:

1. El deudor alimentario moroso solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también

se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado.

2. No se podrá nombrar ni posesionar en cargos públicos ni de elección popular a las personas reportadas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, hasta tanto no se pongan a paz y salvo con las obligaciones alimentarias.
Si el deudor alimentario es servidor público al momento de su inscripción en el Redam, estará sujeto a la suspensión del ejercicio de sus funciones, hasta tanto no se ponga a paz y salvo con las obligaciones alimentarias. En todo caso, se garantizará al deudor alimentario los derechos de defensa y debido proceso.

3. Cuando el deudor alimentario pretenda perfeccionar la enajenación de bienes muebles o inmuebles sujetos a registro, la notaría exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

4. Cuando el deudor alimentario solicite un crédito o la renovación de un crédito ante una entidad bancaria o de financiamiento, se exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

5. Impedimento para salir del país y efectuar trámites migratorios ante Migración Colombia o la entidad que haga sus veces.

6. No se requerirá la autorización del padre o madre inscrito en el Redam contemplada en el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006.

Parágrafo 1°. La entidad designada por el Gobierno nacional para implementar, administrar y mantener el Redam, remitirá la información contenida en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos a las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, para lo de su competencia.

Parágrafo 2°. La carga de verificación si el ciudadano está inscrito en el Registro recaerá únicamente en el Estado. La imposibilidad de verificar el registro deberá interpretarse en favor del ciudadano.

Artículo 7°. Operación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El Gobierno nacional, designará a una entidad del orden nacional para que implemente, administre y mantenga actualizado el Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias.

Parágrafo 1°. La entidad a la que hace referencia el presente artículo, podrá constituir una base de datos de carácter público para la administración de la misma, dando aplicación a lo previsto en el parágrafo 1° del artículo sexto de esta ley.
Parágrafo 2°. La implementación del Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias deberá llevarse a cabo en el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

Parágrafo 3°. La entidad responsable del tratamiento de la información adoptará mecanismos útiles, eficientes, demostrables y verificables para garantizar el cumplimiento de la presente ley y los principios y reglas previstos en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 respecto del tratamiento de los datos personales que harán parte del citado registro.

En la reglamentación de este registro se definirá, entre otros, lo siguiente: (a) la finalidad de la recolección y utilización de los datos; (b) las condiciones en las que podrán ser accedidos por parte de personas naturales o jurídicas, públicas y

EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

GREGORIO ELJACH PACHECO

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ

EL SECRETARIO GENERAL DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

privadas; (c) el tipo de información que se suministrará a los interesados; (d) los usos que se puede dar a la información contenida en el registro; (e) el tiempo que estará registrada la información, de conformidad con el principio de temporalidad o caducidad del dato.

Adicionalmente, se deben prever mecanismos técnicos capaces de limitar el alcance de las consultas y de las búsquedas electrónicas con el fin de prevenir todo tipo de descarga o de consulta no autorizada de datos personales.

Parágrafo 4°. El registro contará con un mecanismo de verificación, formación y apoyo para los deudores en desempleo o informalidad a través del Servicio Público de Empleo.

Artículo 8°. Remisión general. Los principios y reglas generales previstas en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, o las que las reemplacen o modifiquen, se aplicarán a la administración de la información y los datos incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Artículo 9°. Advertencia de consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones alimentarias. En las sentencias que impongan alimentos, y en los acuerdos de conciliación de alimentos celebrados ante autoridad administrativa, se advertirá a los obligados de las consecuencias previstas en esta ley por su incumplimiento.

Artículo 10. Término para exigir alimentos. Quienes sean titulares de alimentos, en los términos del artículo 411 del Código Civil, podrán solicitar el reconocimiento judicial de las acreencias alimentarias en las que se incurrió, aun cuando las circunstancias económicas del acreedor alimentario señalen que posea la capacidad económica para costear su subsistencia, pero que fueron necesarias para consolidar dicha capacidad.

Parágrafo 1°. Quienes acrediten haber sufragado las acreencias alimentarias a las que hace referencia el presente artículo, podrán, de manera alternativa, subrogar al titular de las acreencias alimentarias, en el reconocimiento judicial de las mismas.

Parágrafo 2°. Lo estatuido en el presente artículo solo tendrá aplicación en la jurisdicción civil y no cambiará el precedente jurisprudencial en materia penal para el delito de inasistencia alimentaria, según el cual para que se configure responsabilidad penal por este delito, debe verificarse la necesidad de la víctima de la asistencia alimentaria y la capacidad de pago del acusado.

Artículo 11. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

ARTURO CHAR CHALJUB

LEY ESTATUTARIA No. 2097

POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los - 2 JUL 2021

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO,

WILSON RUIZ OREJUELA

EL SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL– DPS,

PIERRE EUGENIO GARCÍA JACQUIER

LEY 2108 DE 2021

(julio 29)

Ley de internet como servicio público esencial y universal o por medio de la cual se modifica la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.

LEY N° 2108 29 JUL 2021

"LEY DE INTERNET COMO SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL Y UNIVERSAL" O "POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 1341 DE 2009 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto establecer dentro de los servicios públicos de telecomunicaciones, el acceso a Internet como uno de carácter esencial, con el fin de propender por la universalidad para garantizar y asegurar la prestación del servicio de manera eficiente, continua y permanente, permitiendo la conectividad de todos los habitantes del territorio nacional, en especial de la población que, en razón a su condición social o étnica se encuentre en situación de vulnerabilidad o en zonas rurales y apartadas.

ARTÍCULO 2. Agréguese un numeral al artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 3 de la Ley 1978 de 2019, así:

ARTÍCULO 2o. PRINCIPIOS ORIENTADORES.

(...)

11. Universalidad: El fin último de intervención del Estado en el Sector TIC es propender por el servicio universal a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

ARTÍCULO 3. Agréguese el inciso segundo al artículo 38 de la Ley 1341 de 2009, así:

ARTÍCULO 38. MASIFICACIÓN DEL USO DE LAS TIC Y CIERRE DE LA BRECHA DIGITAL.

(...)

Lo anterior, mediante la promoción del acceso universal, el servicio universal, la apropiación, capacitación y uso productivo de las TIC, de manera prioritaria para la población que, en razón a su condición social o étnica se encuentre en situación de vulnerabilidad o en zonas rurales, apartadas y de difícil acceso, buscando garantizar que se brinde un servicio de calidad y de última generación.

1

Parágrafo transitorio. Las medidas descritas en el anterior parágrafo 4 igualmente serán aplicables durante los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley.

ARTÍCULO 6. Agréguense dos parágrafos al artículo 31 de la Ley 1978 de 2019, así:

ARTÍCULO 31. ESTABLECIMIENTO DE CARGAS U OBLIGACIONES DIFERENCIALES EN ZONAS DE SERVICIO UNIVERSAL.

(...)

Parágrafo 1: Con el fin de incentivar la provisión del servicio de acceso a Internet en todo el territorio nacional, dentro de los diez (10) meses siguientes a la expedición de la presente Ley la Comisión de Regulación de Comunicaciones deberá adoptar un paquete de medidas regulatorias diferenciales, respecto de aquellos elementos que no sean esenciales para la prestación del servicio, dirigidos a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que brinden acceso a Internet fijo residencial minorista en zonas rurales, apartadas, de difícil acceso y que tengan menos de treinta mil (30.000) usuarios reportados en el Sistema de Información Integral del Sector de TIC -ColombiaTIC- con corte al 30 de junio de 2020.

Parágrafo 2: Con el fin de incentivar la provisión del servicio de acceso a Internet en todo el territorio nacional, dentro de los diez (10) meses siguientes a la expedición de la presente Ley el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberá adoptar un paquete de medidas reglamentarias diferenciales, respecto de aquellos elementos que no sean esenciales para la prestación del servicio, dirigidos a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que brinden acceso a Internet fijo residencial minorista en zonas rurales, apartadas, de difícil acceso y que tengan menos de treinta mil (30.000) usuarios reportados en el Sistema de Información Integral del Sector de TIC -ColombiaTIC- con corte al 30 de junio de 2020.

ARTÍCULO 7. Modifíquese el parágrafo 2 del artículo 193 de la Ley 1753 de 2015, que quedará así:

ARTÍCULO 193. ACCESO A LAS TIC Y DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA.

(...)

PARÁGRAFO 2. Las solicitudes de licencia para la construcción, conexión, instalación, modificación u operación de cualquier equipamiento para la prestación de servicios de telecomunicaciones, fijas y móviles, serán resueltas por la entidad, pública o privada, competente dentro del mes siguiente a su presentación. Transcurrido este plazo sin que se haya notificado la decisión que resuelva la petición, se entenderá concedida la licencia en favor del peticionario en los términos solicitados en razón a que ha operado el silencio administrativo positivo. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes la

3

ARTÍCULO 4. Adiciónese un parágrafo nuevo al artículo 10 de la Ley 1341 de 2009, el cual quedará así:

ARTÍCULO 10. HABILITACIÓN GENERAL

(...)

Parágrafo 4. El acceso a Internet es un servicio público esencial. Por tanto, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones no podrán suspender las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de las redes requeridas para la operación de este servicio público esencial, y garantizarán la continua provisión del servicio. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de los deberes y obligaciones a cargo de los suscriptores y usuarios del servicio, conforme a la regulación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

ARTÍCULO 5. Agréguese el parágrafo 4 al artículo 8 de la Ley 1341 de 2009, así:

ARTÍCULO 8o. LAS TELECOMUNICACIONES EN CASOS DE EMERGENCIA, CONMOCIÓN O CALAMIDAD Y PREVENCIÓN PARA DICHOS EVENTOS.

(...)

Parágrafo 4. Durante la vigencia de los estados de excepción y las emergencias sanitarias que sean declaradas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en los que se requiera garantizar el acceso a Internet de los habitantes del territorio nacional como parte de la atención y mitigación de la emergencia y de sus efectos, los proveedores del servicio público de telecomunicaciones (PRST) aplicarán las siguientes reglas:

Para los planes de telefonía móvil (voz y datos) en la modalidad pospago cuyo valor no exceda una coma cinco (1.5) Unidades de Valor Tributario (UVT) si el usuario incurre en impago del servicio, mantendrá al menos los siguientes elementos: la opción de efectuar recargas para usar el servicio en la modalidad prepago, envío de doscientos (200) mensajes de texto (SMS) gratis y la recepción de estos sin ninguna restricción, la navegación gratuita en treinta (30) direcciones de Internet (URL), que serán definidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con apoyo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, para acceder a servicios de salud, atención de emergencias, del gobierno y de educación.

Para los servicios de telefonía móvil (voz y datos) en la modalidad prepago se mantendrá al menos el envío de doscientos (200) mensajes de texto (SMS) gratis y la recepción de estos sin ninguna restricción.

Lo dispuesto en el presente parágrafo aplicará únicamente cuando el usuario curse tráfico sobre la red de su operador.

2

autoridad competente deberá reconocer al peticionario los efectos del silencio administrativo positivo.

ARTÍCULO 8. Todos los usuarios de los servicios de acceso a Internet móvil en la modalidad prepago y pospago de hasta uno coma cinco (1,5) Unidades de Valor Tributario (UVT) podrán navegar sin costo para el usuario (*zero rating*) al dominio, subdominio y páginas adyacentes del portal de educación que será dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Este portal dispondrá de contenidos educativos en texto, animaciones e imágenes.

ARTÍCULO 9. Adicionar un numeral al artículo 35 de la Ley 1341 de 2009, así:

ARTÍCULO 35. FUNCIONES DEL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

(...)

23. Financiar el desarrollo de líneas de crédito, fomento y fortalecimiento de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que brinden acceso a Internet fijo residencial minorista que tengan menos de treinta mil (30.000) usuarios reportados en el Sistema de Información Integral del Sector de TIC -ColombiaTIC- con corte al 30 de junio de 2020. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones reglamentará la materia.

ARTÍCULO 10. Agréguese el parágrafo transitorio 2 al artículo 24 de la Ley 1341 de 2009, así:

PARÁGRAFO TRANSITORIO DOS. De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo transitorio dos del artículo 36 de la presente ley para proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que proveen el servicio de acceso a Internet fijo residencial minorista que, al 31 de diciembre de 2020 tengan por lo menos un (1) usuario y menos de treinta mil (30.000) usuarios, se exceptúan del pago de la contribución anual a la CRC, por concepto de los ingresos obtenidos por la provisión del servicio de acceso a Internet fijo residencial minorista, durante el periodo que permanezca vigente la exención dispuesta en el parágrafo transitorio dos del artículo 36 de la presente ley sobre la contraprestación periódica al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La excepción en el pago de la contribución dejará de ser aplicable si, posterior al 31 de diciembre de 2020, los proveedores beneficiarios llegan a ser controlantes de manera directa o indirecta de otra(s) sociedad(es) o controlados de manera directa o indirecta por parte de otra(s) sociedad(es) a través de cualquier operación o figura jurídica, sin limitarse a adquisiciones, escisiones o cualquier forma de transformación societaria.

ARTÍCULO 11. Agréguese el parágrafo transitorio 2 al artículo 36 de la Ley 1341 de 2009, así:

4

PARÁGRAFO TRANSITORIO DOS. Con el fin de promover la masificación del acceso a Internet en todo el territorio nacional, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que proveen el servicio de acceso a Internet fijo residencial minorista que, al 31 de diciembre de 2020 tengan por lo menos un (1) usuario y menos de treinta mil (30.000) usuarios reportados en el Sistema de Información Integral del Sector de TIC - ColombiaTIC-, se exceptúan del pago de la contraprestación periódica a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por cinco (5) años, contados desde la aprobación del plan de inversiones por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La excepción en el pago, dejará de ser aplicable si posterior al 31 de diciembre de 2020, los proveedores beneficiarios llegan a ser controlantes de manera directa o indirecta de otra(s) sociedad(es) o controlados manera directa o indirecta por parte de otra(s) sociedad (es) a través de cualquier operación o figura jurídica, sin limitarse a adquisiciones, fusiones, escisiones o cualquier forma de transformación societaria. Para ello, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones expedirá, durante los cuatro (4) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, la reglamentación que definirá, entre otras condiciones, las inversiones que deberán realizar estos proveedores durante el tiempo de la exención, las condiciones para mantener el beneficio, así como los mecanismos de verificación de su cumplimiento. Durante el periodo de exención, deberán presentar declaraciones informativas. Esta exención se hará por una única vez. El incumplimiento de las condiciones establecidas en la reglamentación que expida el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en virtud del presente artículo dará lugar a la terminación de la excepción del pago de la contraprestación dispuesta en el presente parágrafo transitorio, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.

ARTÍCULO 12. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga el Decreto Legislativo 555 de 2020.

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

ARTURO CHAR CHALJUB

5

EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

GREGORIO ELJACH PACHECO

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ

EL SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

6

LEY No. 2108

"LEY DE INTERNET COMO SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL Y UNIVERSAL" O "POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 1341 DE 2009 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

29 JUL 2021

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO

7

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,

MARÍA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ

LA MINISTRA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES,

KAREN CECILIA ABUDINEN ABUCHAIBE

LEY 2109 DE 2021

(julio 29)

por medio del cual se fomenta la orientacion socio-ocupacional en los establecimientos oficiales y privados de educacion formal para la educacion media.

LEY N° 2109 29 JUL 2021

"POR MEDIO DEL CUAL SE FOMENTA LA ORIENTACIÓN SOCIO-OCUPACIONAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES Y PRIVADOS DE EDUCACIÓN FORMAL PARA LA EDUCACIÓN MEDIA"

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto promover la Orientación Socio- Ocupacional y definir sus ámbitos de trabajo para la educación media en todos los establecimientos oficiales y privados de educación formal, como herramienta para brindar a los educandos los elementos suficientes para tomar una decisión adecuada, informada y objetiva sobre su futuro académico y proyección laboral.

ARTÍCULO 2°. Orientación Socio-Ocupacional. Para los fines de la presente ley debe entenderse la orientación Socio-ocupacional como el proceso de acompañamiento a los jóvenes durante su momento de transición hacia la educación posmedia y a la vida laboral, el cual les permite tomar decisiones informadas y racionales, a partir del reconocimiento de sus intereses, aptitudes, valores, deseos y ponderación de las oportunidades de formación y trabajo que ofrece el contexto social, cultural, político y económico, todo en el marco de un ejercicio de construcción de trayectorias ocupacionales satisfactorias.

ARTÍCULO 3°. Objetivos Generales. El proceso de orientación socio-ocupacional tiene un carácter transversal al proceso de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes de educación media y deberá cumplir con los siguientes objetivos:

a) Favorecer el desarrollo de las trayectorias educativas de los jóvenes, articulando acciones con los niveles de educación previos y posteriores a la media, en torno a la importancia de la permanencia en el sistema educativo para el empoderamiento sobre el proyecto de vida y transición a la vida adulta.
b) Incentivar en los estudiantes la capacidad de visualizar el futuro deseado, construyendo bases firmes sustentadas en las decisiones y acciones sobre educación y el trabajo, al finalizar la educación media.
c) Fortalecer en los estudiantes la creatividad, la capacidad de proponerse metas y buscar diferentes rutas para alcanzarlas, el manejo de la incertidumbre, el desarrollo de herramientas psicoemocionales, la adaptación a los cambios, la resiliencia, la comunicación efectiva de sus deseos, sueños y aspiraciones y la autonomía en la toma de decisiones.

1

f) Vincular acciones que atiendan las necesidades de orientación de los diferentes grupos poblacionales como los jóvenes rurales y los grupos étnicos y busquen romper con los estereotipos que pueden limitar su visión de futuro y la construcción de proyectos de vida.
g) Articular con el sector empresarial acciones orientadas a movilizar la demanda; generando mecanismos de retroalimentación y mejoramiento de la pertinencia del perfil ocupacional, de acuerdo a las necesidades del sector productivo.

Parágrafo 1°. En desarrollo de su autonomía cada Institución Educativa no oficial que ofrece educación media definirá los responsables del proceso de orientación socio-ocupacional, con perfil idóneo que garantice obtener los resultados que se definen en el parágrafo 3 del presente artículo.

Por su parte para los Establecimientos Educativos Oficiales, en la reorganización y distribución de las plantas docentes oficiales, realizada por las Secretarías de Educación de las Entidades Territoriales Certificadas, podrán asignar los docentes orientadores para el cumplimiento de lo señalado en la presente Ley.

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional definirá los lineamientos normativos y operativos para que los establecimientos educativos de carácter oficial cuenten con orientación socio-ocupacional. De manera tal, que Los planes de orientación socio-ocupacional implementados por los establecimientos educativos tengan como referentes las disposiciones y el material de trabajo desarrollado por el Ministerio de Educación.

Parágrafo 3°. Como resultado de los planes de orientación socio-ocupacional, los establecimientos educativos darán un diagnóstico a cada estudiante en coordinación con las secretarías de educación y los aliados, identificarán y pondrán a disposición la oferta territorial en la cual le brinden alternativas a los estudiantes para la escogencia de su programa de educación posmedia y/o formación para el trabajo que incluyan criterios como, demanda y oferta de profesiones y ocupaciones del mercado laboral regional, brechas de capital humano en los sectores estratégicos de la región, tendencias del mercado laboral colombiano, información de la oferta educativa: Acreditación, oferta de programas por área de conocimiento y niveles educativos y salarios de enganche para los recién graduados.

Parágrafo 4°. Las secretarías de educación podrán, con recursos propios, disponer de profesionales en psicología, psicopedagogía y de orientación escolar para acompañar a las instituciones educativas oficiales con el fin de cumplir lo dispuesto en el parágrafo 3°.

No obstante la creación de plantas en las secretarías de educación estaría supeditada a la disponibilidad de recursos de cada ETC, sin tener garantías de su implementación.

ARTÍCULO 5°. Alianzas interinstitucionales. El Ministerio de Educación, las secretarías de educación y los establecimientos educativos promoverán la articulación interinstitucional con las entidades que brinden información

3

d) Brindar espacios pedagógicos para que los estudiantes de manera innovadora exploren, identifiquen, analicen y reflexionen acerca de sus habilidades, fortalezas, valores, actitudes, gustos y expectativas a futuro.
e) Proveer la compresión de la oferta de formación posmedia que permita a los jóvenes identificar las oportunidades laborales que se ofrecen a nivel regional y nacional y cuenten con criterios de comparación y ponderación de la oferta en términos de calidad y pertinencia frente a sus expectativas ocupacionales.
f) Acercar al estudiante a las dinámicas del mundo del trabajo, de manera que pueda articular sus oportunidades de formación con los campos ocupacionales donde puede desempeñarse a futuro, comprendiendo las dinámicas ocupacionales de los sectores productivos, del mercado laboral y las demandas de talento humano y favorecer la equidad de género mediante la eliminación de los estereotipos.
g) implementar medidas que faciliten a los jóvenes, la adaptación a los cambios, comprendiendo y aceptando las situaciones nuevas o imprevistas, manteniendo una actitud flexible que le permita ajustarse a los itinerarios de formación y trabajo, sin alterar necesariamente sus metas.
h) propender por el desarrollo y aprendizaje de las habilidades necesarias para el desarrollo de oficios y aprovechamiento de las oportunidades laborales, de cara a las necesidades futuras de una economía globalizada, con la apropiación del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

ARTÍCULO 4°. Mecanismos de fomento de la orientación socio-ocupacional. En las instituciones educativas se deberá implementar un plan de orientación socio- ocupacional, a manera de intervención integral, donde se formulen estrategias para empoderar al joven con su trayectoria ocupacional, brindándole herramientas para la toma de decisiones y ayudándola a identificar sus habilidades y destrezas de cara al aprovechamiento de las oportunidades de formación y trabajo que logre identificar en su contexto, a través de un asesoramiento sistemático, intencionado y articulado con el currículo. El plan de orientación deberá:

a) Implementar acciones para el descubrimiento de intereses, análisis de recursos personales, expectativas del proyecto de vida, preparación para los procesos de selección e ingreso a programas de formación posmedia.
b) Facilitar el acceso a las fuentes y mecanismos de información sobre las opciones de los programas de formación posmedia, alternativas de financiación y situación actual del mercado laboral.
c) Aprovechar las herramientas web (micrositios, portales y páginas) que permiten la identificación y reflexión sobre las aptitudes, capacidades e intereses como base para la elección.
d) Articular las acciones de orientación con otros espacios que permitan el reconocimiento de intereses y capacidades como los proyectos transversales, las actividades de emprendimiento, el servicio social estudiantil obligatorio, etc.
e) Vincular las familias en el proceso de orientación socio-ocupacional para establecer el apoyo que pueden brindar durante toda la etapa de transición.

2

necesaria para acercar y empoderar a los jóvenes con los escenarios de formación y de trabajo que encontrarán al graduarse. Entidades como:

a) Universidades, instituciones universitarias, instituciones tecnológicas, instituciones técnicas y profesionales e instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, con el fin de que estas brinden información sobre su oferta académica, modalidades de formación, procesos de selección y admisión, requisitos, campos de conocimiento y acción de las distintas profesiones y toda la información útil que lleve a los estudiantes a un mejor conocimiento de la oferta de formación posmedia.

b) Entidades y gremios del sector productivo con el fin de acercar y socializar a los jóvenes sobre situaciones cotidianas del murido laboral, permitiéndoles conocer diferentes tipos de profesionales y las actividades que realizan, así como acceder a información actualizada sobre las ocupaciones y dinámicas del mercado laboral.

ARTÍCULO 6°. Las obligaciones socio-ocupacional definidas en la presente Ley, aplicarán también para las instituciones de protección que atiendan a niños, niñas y adolescentes que se encuentren cursando grados del nivel de Educación media y que estén bajo proceso administrativo de restablecimiento de derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en modalidades internas, de medio familiar o las que hagan sus veces.

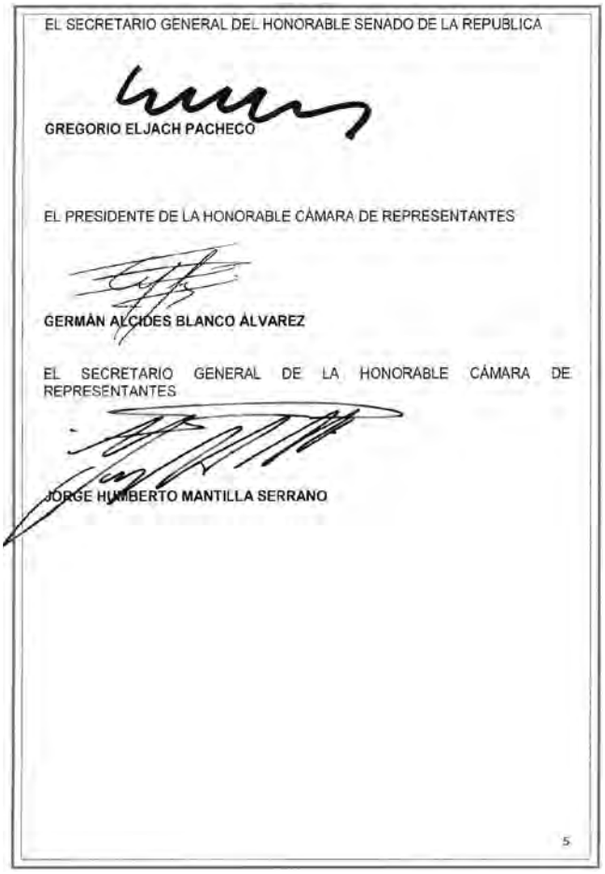
Parágrafo. la implementación de los modelos respectivos para garantizar la orientación socio-ocupacional de los niños, niñas y adolescentes mencionados en el presente artículo, estarán a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y del operador que esté a cargo de su proceso.

ARTÍCULO 7°. Vigencia y Derogatorias. La presente Ley deroga las disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su promulgación.

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

ARTURO CHAR CHALJUB

4



EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA

GREGORIO ELJACH PACHECO

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ

EL SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

5



LEY No. 2109

"POR MEDIO DEL CUAL SE FOMENTA LA ORIENTACIÓN SOCIO-OCUPACIONAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES Y PRIVADOS DE EDUCACIÓN FORMAL PARA LA EDUCACIÓN MEDIA"

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 29 JUL 2021

EL MINISTRO DEL TRABAJO,

ÁNGEL CUSTODIO CABRERA BAEZ

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,

MARÍA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ

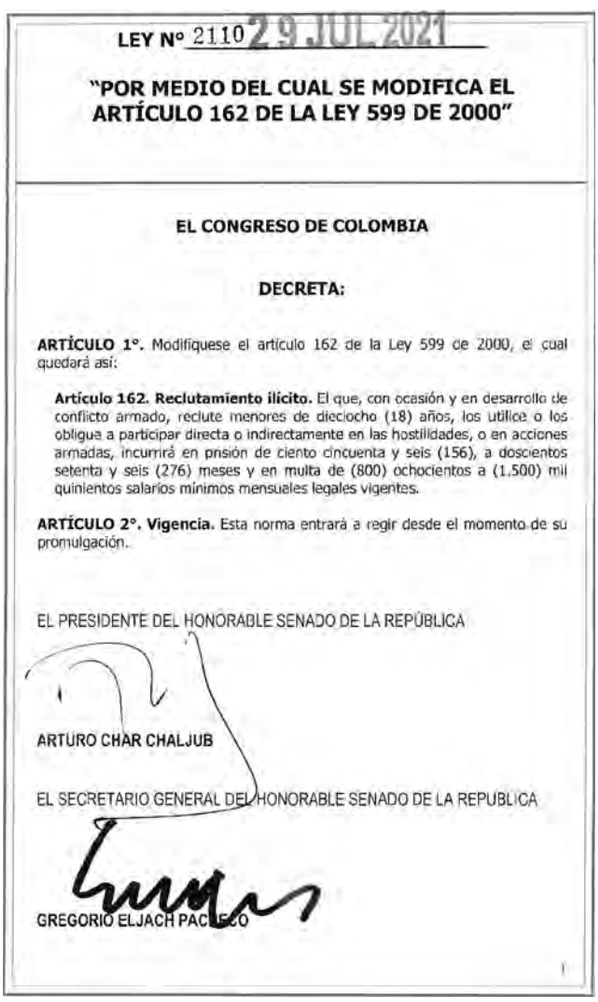
LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL,

SUSANA CORREA BORRERO

LEY 2110 DE 2021

(julio 29)

por medio del cual se modifica el artículo 162 de la Ley 599 de 2000.



LEY Nº 2110 29 JUL 2021

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 162 DE LA LEY 599 DE 2000"

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Modifíquese el artículo 162 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 162. Reclutamiento ilícito. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, recluta menores de dieciocho (18) años, los utilice o los obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades, o en acciones armadas, incurrirá en prisión de ciento cincuenta y seis (156), a doscientos setenta y seis (276) meses y en multa de (800) ochocientos a (1.500) mil quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes.

ARTÍCULO 2°. Vigencia. Esta norma entrará a regir desde el momento de su promulgación.

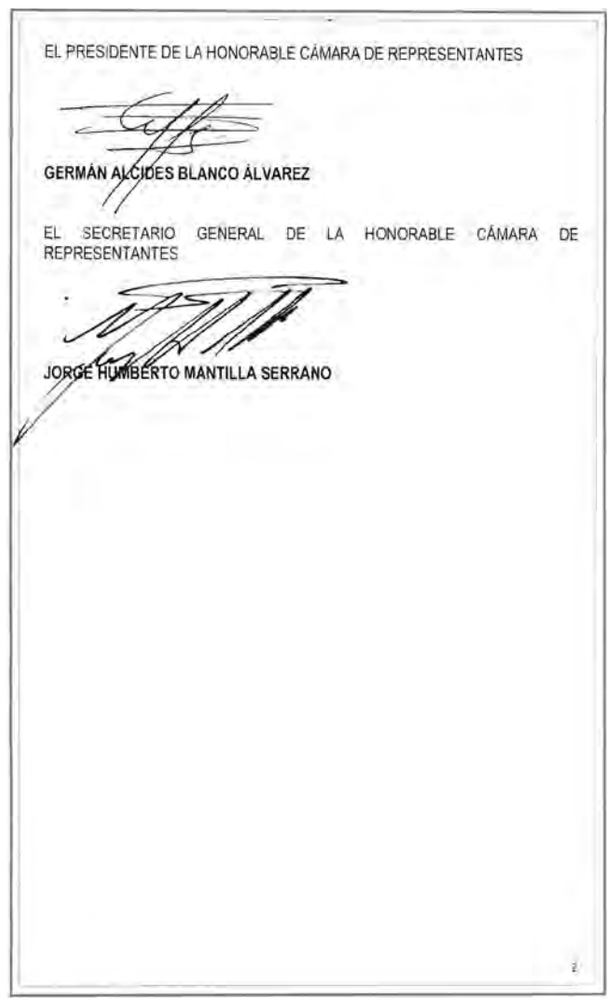
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

ARTURO CHAR CHALJUB

EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA

GREGORIO ELJACH PACHECO

1



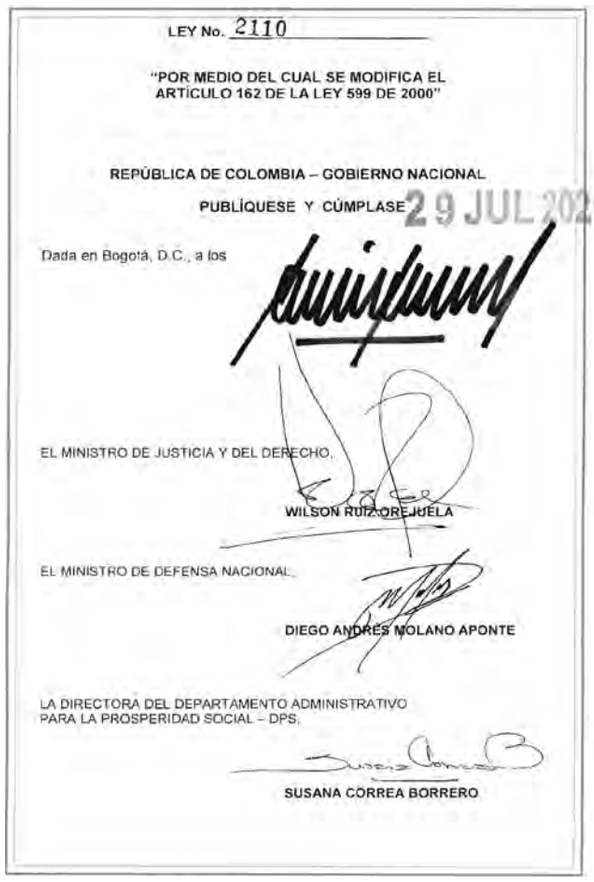
EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ

EL SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

2



LEY No. 2110

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 162 DE LA LEY 599 DE 2000"

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 29 JUL 2021

Dada en Bogotá, D.C., a los

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO,

WILSON RUIZ OREJUELA

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL,

DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – DPS,

SUSANA CORREA BORRERO

LEY 2111 DE 2021

(julio 29)

por medio del cual se sustituye el Título XI "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones.



LEY N° 2111 29 JUL 2021

"POR MEDIO DEL CUAL SE SUSTITUYE EL TÍTULO XI "DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE" DE LA LEY 599 DE 2000, SE MODIFICA LA LEY 906 DE 2004 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º. Sustitúyase el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000, por el siguiente:

TÍTULO XI.

DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO I.

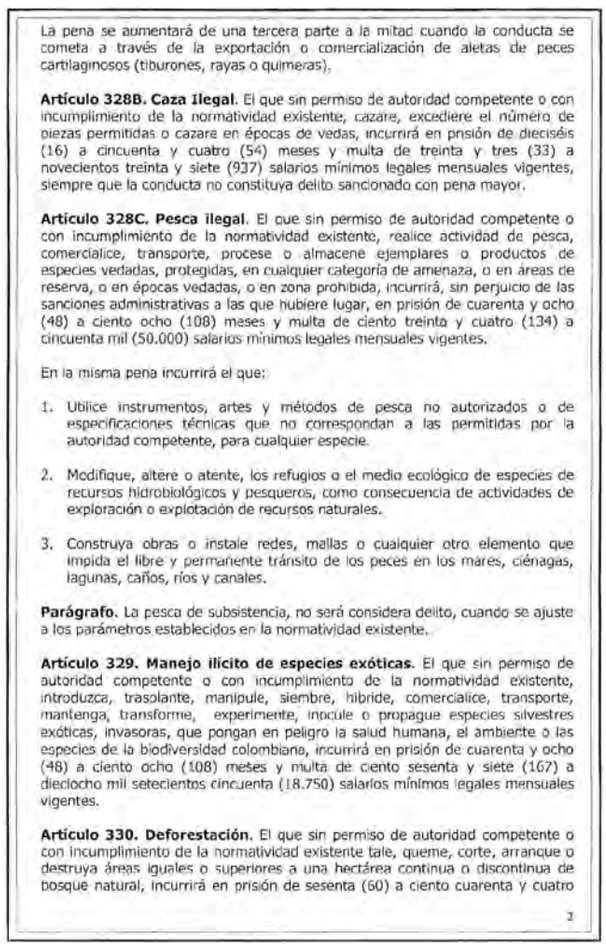
DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES

Artículo 328. Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. El que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, acceda, capture, mantenga, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, trafique o de cualquier otro modo se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta y tres mil setecientos cincuenta (43.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la práctica de cercenar aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras), y descartar el resto del cuerpo al mar.

Artículo 328A. Tráfico de Fauna. El que trafique, adquiera, exporte o comercialice sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de trescientos (300) hasta cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

1



La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la exportación o comercialización de aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras).

Artículo 328B. Caza ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, cazare, excediere el número de piezas permitidas o cazare en épocas de vedas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de treinta y tres (33) a novecientos treinta y siete (937) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.

Artículo 328C. Pesca ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice actividad de pesca, comercialice, transporte, procese o almacene ejemplares o productos de especies vedadas, protegidas, en cualquier categoría de amenaza, o en áreas de reserva, o en épocas vedadas, o en zona prohibida, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a las que hubiere lugar, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que:

1. Ubique instrumentos, artes y métodos de pesca no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas por la autoridad competente, para cualquier especie.

2. Modifique, altere o atente, los refugios o el medio ecológico de especies de recursos hidrobiológicos y pesqueros, como consecuencia de actividades de exploración o explotación de recursos naturales.

3. Construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente tránsito de los peces en los mares, ciénagas, lagunas, caños, ríos y canales.

Parágrafo. La pesca de subsistencia, no será considera delito, cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la normatividad existente.

Artículo 329. Manejo ilícito de especies exóticas. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, trasplante, manipule, siembre, hibride, comercialice, transporte, mantenga, transforme, experimente, inocule o propague especies silvestres exóticas, invasoras, que pongan en peligro la salud humana, el ambiente o las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 330. Deforestación. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente tale, queme, corte, arranque o destruya áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro

2

(144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará a la mitad cuando:

1. Cuando la conducta se realice para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito o para mejora o construcción de infraestructura ilegal.

2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.

Artículo 330A. Promoción y financiación de la Deforestación. El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de la tala, quema, corte, arranque o destrucción de áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará a la mitad cuando:

1. Cuando la conducta se realice para acaparamiento de tierras, para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal.

2. Cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta seis meses se acumule la misma superficie deforestada.

Artículo 331. Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos. El que con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, importe, manipule, experimente, posea, inocule, comercialice, exporte, libere o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos, moléculas, substancias o elementos que pongan en peligro la salud o la existencia de los recursos fáunicos, florísticos, hidrobiológicos, hídricos o alteren perjudicialmente sus poblaciones, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 332. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO II.

Artículo 334A. Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo. El que provoque, contamine o realice directa o indirectamente en los recursos de agua, suelo, subsuelo o atmósfera, con ocasión a la extracción o excavación, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años, y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 335. Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice experimentos con especies, agentes biológicos o bioquímicos que constituyan, generen o pongan en peligro la supervivencia de las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPÍTULO IV.

DE LA INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Artículo 336. Invasión de áreas de especial importancia ecológica. El que invada, permanezca así sea de manera temporal o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en área de reserva forestal, ecosistemas de importancia ecológica, playas, terrenos de bajamar, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, parque nacional natural, área o ecosistema de interés estratégico, área protegida, definidos en la ley o reglamento incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.

Artículo 336A. Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica. El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaratoria, o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente.

DE LOS DAÑOS EN LOS RECURSOS NATURALES

Artículo 333. Daños en los recursos naturales y ecocidio. El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o cause un impacto ambiental grave o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título o a los que estén asociados con estos, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo se entiende por ecocidio, el daño masivo y destrucción generalizada grave y sistémica de los ecosistemas.

Parágrafo 2°. Por impacto ambiental grave se entenderá, la alteración de las condiciones ambientales que se genere como consecuencia de la afectación de los componentes ambientales, eliminando la integridad del sistema y poniendo en riesgo su sostenibilidad.

CAPÍTULO III.

DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Artículo 334. Contaminación ambiental. El que con incumplimiento de la normatividad existente contamine, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertimientos, radiaciones, ruidos, depósitos, o disposiciones al aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas superficiales, marítimas o subterráneas o demás recursos naturales en tal forma que contamine o genere un efecto nocivo en el ambiente, que ponga en peligro la salud humana y los recursos naturales, incurrirá en prisión de sesenta y nueve (69) a ciento cuarenta (140) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en este artículo, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas.
2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por la normatividad existente o haya infringido más de dos parámetros.
3. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, depósitos, emisiones o disposiciones.
4. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa o judicial competente de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el presente artículo.
5. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se haya obstaculizado la actividad de control y vigilancia de la autoridad competente.
6. Cuando la contaminación sea producto del almacenamiento, transporte, vertimiento o disposición inadecuada de residuo peligroso.

CAPÍTULO V.

DE LA APROPIACIÓN ILEGAL DE BALDÍOS DE LA NACIÓN

Artículo 337. Apropiación ilegal de baldíos de la nación. El que usurpe, ocupe, utilice, acumule, tolere, colabore o permita la apropiación de baldíos de la Nación, sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos y despojo de tierras.

Parágrafo 1º. La conducta descrita en este artículo no será considerada delito si la misma se ajusta a los condicionamientos y requisitos señalados en la ley 160 de 1994, así como en el Decreto Ley 902 de 2017 para la adjudicación de bienes baldíos.

Parágrafo 2°. Cuando la conducta descrita en el artículo anterior sea cometida por personas campesinas, indígenas o afrodescendientes, que dependa su subsistencia de la habitación, trabajo o aprovechamiento de los baldíos de la nación no habrá lugar a responsabilidad penal.

Artículo 337A. Financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación. El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie, patrocine, induzca, ordene o dirija la apropiación ilegal de baldíos de la nación descrito en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los bienes muebles, inmuebles o semovientes encontrados en los baldíos ilegalmente apropiados.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos.

CAPÍTULO VI.

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 338. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando:

a) Cuando la conducta se cometa en ecosistemas naturales que hagan parte del sistema nacional o regional de áreas protegidas, en ecosistemas estratégicos, o en territorios de comunidades étnicas. Con excepción de las conductas consagradas en los artículos 336 y 336A.

b) Cuando la conducta se cometa contra especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana o de especies vedadas, prohibidas, en período de reproducción o crecimiento, de especial importancia ecológica, raras o endémicas del territorio colombiano. Con excepción de la conducta contemplada en el artículo 328C.

c) Cuando con la conducta se altere el suelo, el subsuelo, los recursos hidrobiológicos, se desvíen los cuerpos de agua o se afecten ecosistemas marinos, manglares, pastos marinos y corales.

d) Cuando la conducta se cometiere por la acción u omisión de quienes ejercen funciones de seguimiento, control y vigilancia o personas que ejerzan funciones públicas.

e) Cuando la conducta se cometiere por integrantes de grupos delictivos organizados o grupos armados organizados o con la finalidad de financiar actividades terroristas, grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley, grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a sus integrantes.

f) Cuando la conducta se cometa mediante el uso o manipulación de herramientas tecnológicas.

g) Cuando con la conducta se ponga en peligro la salud humana.

h) Cuando con la conducta se introduzca al suelo o al agua sustancias prohibidas por la normatividad existente o se realice mediante el uso de sustancias tóxicas, peligrosas, venenos, inflamables, combustibles, explosivas, radioactivas, el uso de explosivos, maquinaria pesada o medios mecanizados, entendidos estos últimos como todo tipo de equipos o herramientas mecanizados utilizados para el arranque, la extracción o el beneficio de minerales o la distribución ilegal de combustibles.

i) Cuando se promueva, financie, dirija, facilite o suministre medios para la realización de las conductas. Con excepción de las conductas contempladas en los artículos 330A, 336A y 337A.

j) Cuando con la conducta se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies.

Artículo 339. Modalidad Culposa. Las penas previstas en los artículos 333, 334, 334A de este código se disminuirán hasta en la mitad cuando las conductas punibles se realicen culposamente.

ARTÍCULO 2. Modifíquese el numeral 14 del artículo 58 de la ley 599 del 2000, el cual quedará así:

Artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad.

(...)

7

caso exceda las 36 horas siguientes, contadas a partir del momento de la llegada al puerto o municipio más cercano, según el caso. La autoridad competente deberá acreditar los eventos descritos en el presente inciso.

ARTÍCULO 7. Dirección de Apoyo Territorial. Créese en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Apoyo Territorial adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana, la que tendrá como función principal liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presencia efectiva de la Entidad con un trabajo interdisciplinario en territorios apartados o de difícil acceso, sin perjuicio de la competencia de otras Direcciones sobre la materia.

La Dirección de Apoyo Territorial estará conformada por:

Unidad	Cantidad	Cargo	Niveles
Dirección de Apoyo Territorial	1	Director Nacional I	Directivo
	2	Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito	Profesional
	20	Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional
	1	Profesional Experto	Profesional
	2	Profesional Especializado II	Profesional
	2	Profesional De Gestión III	Profesional
	12	Investigador Experto	Profesional
	10	Profesional Investigador III	Profesional
	9	Profesional Investigador II	Profesional
	9	Profesional Investigador I	Profesional
	10	Técnico Investigador IV	Técnico
	12	Técnico Investigador III	Técnico
	20	Asistente de Fiscal IV	Técnico
	5	Asistente de Fiscal III	Técnico
	5	Asistente de Fiscal II	Técnico
	2	Secretario Ejecutivo	Técnico
	3	Secretario Administrativo	Asistencial

Parágrafo 1. De forma prioritaria la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación desarrollará el concurso necesario para proveer los cargos establecidos en el presente artículo de conformidad con el Sistema Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación, sin perjuicio de los nombramientos en provisionalidad necesarios para implementar inmediatamente la Dirección establecida, en los cuales se aplicarán los principios de mérito, transparencia, garantía de imparcialidad y eficiencia y eficacia del artículo 3, junto con los criterios de mérito señalados en el numeral 3 del artículo 11 del Decreto Ley 020 de 2014.

9

14. Cuando se produjere un daño ambiental grave, una irreversible modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales o se cause la extinción de una especie biológica.

ARTÍCULO 3. Adiciónese un numeral 33 al artículo 35 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

(...)

33. De los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, tráfico de fauna, deforestación, promoción y financiación de la deforestación, daños en los recursos naturales y ecocidio, e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

ARTÍCULO 4. Adiciónese un parágrafo al artículo 91 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así:

(...)

Parágrafo. Cuando se hubiese suspendido o cancelado la personería jurídica de que trata este artículo, la persona natural o jurídica estará inhabilitada para constituir nuevas personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público, con el mismo objeto o actividad económica a desarrollar, hasta que el Juez de Conocimiento tome una decisión definitiva en la sentencia correspondiente.

ARTÍCULO 5. Adiciónese un parágrafo 2 al artículo 92 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así:

Parágrafo 2. Tratándose de los delitos contemplados en el título XI del Código Penal, el juez podrá ordenar, como medida cautelar, la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.

ARTÍCULO 6. El artículo 302 de la Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo inciso que quedará así:

Cuando la captura en flagrancia se produzca en ríos o tierra donde el arribo a la cabecera municipal más cercana sólo puede surtirse por vía fluvial o siempre que concurran dificultades objetivas de acceso al territorio como obstáculos geográficos, logísticos, ausencia de infraestructura de transporte o fenómenos meteorológicos que dificulten seriamente el traslado del aprehendido, se realizarán todas las actividades para lograr la comparecencia del capturado ante el juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin que en ningún

8

Parágrafo 2. El inicio del concurso se realizará dentro de los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 3. La Fiscalía General de la Nación presentará anualmente un informe sobre los indicadores de gestión, avance y esclarecimiento en la investigación y judicialización de las conductas que afecten los recursos naturales y el medio ambiente. Esta información será pública y contendrá datos estadísticos que no estén sometidos a reserva.

ARTÍCULO 8. Dirección de Apoyo Territorial. Adiciónese el artículo 36A al Decreto Ley 016 de 2014, el cual quedará así: La Dirección de Apoyo Territorial cumplirá las siguientes funciones:

1. Liderar la estrategia de apoyo regional de la Fiscalía General de la Nación, con miras a aumentar la presencia efectiva de la Enticad en territorios apartados o de difícil acceso, en aquellas zonas afectadas por fenómenos criminales de alto impacto y por la presencia de grupos armados organizados.
2. Apoyar la investigación, especialmente actos urgentes, en aquellos fenómenos priorizados que se den en territorios donde la Fiscalía General de la Nación no tenga presencia permanente o sean de difícil acceso.
3. Definir los lugares en los que se podrá actuar por medio de grupos itinerantes, con base en criterios geográficos y no en la división político-administrativa, así como en el análisis de la criminalidad del país, la presencia de organizaciones criminales, los tiempos de desplazamiento al lugar de comisión de la conducta punible, la oferta de servicios de justicia por parte de otras entidades, entre otros factores.
4. Conformar grupos especializados de investigadores y analistas expertos en los fenómenos criminales priorizados por la Dirección.
5. Realizar proceso de articulación de la estrategia territorial con otras entidades públicas.
6. Designar fiscales itinerantes en aquellos procesos sobre fenómenos priorizados, con el fin que apoyen, impulsen y asesoren a los fiscales titulares con el fin de lograr una efectiva judicialización.
7. Conformar equipos móviles de la Entidad, en los que periódicamente se reciban denuncias de los habitantes del territorio nacional y se brinde atención a las víctimas de las conductas punibles en territorios apartados o zonas de alto impacto o presencia de grupos armados organizados.
8. Organizar y adelantar comités técnico-jurídicos de revisión de las situaciones y los casos para la ejecución de acciones en el desarrollo efectivo y eficiente de las investigaciones penales de su competencia.
9. Dirigir y coordinar los grupos de trabajo, los departamentos y unidades que se conformen para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Dirección.
10. Dirigir, coordinar y controlar la incorporación y aplicación de políticas públicas en el desarrollo de las actividades que cumplen los servidores, dependencias y los grupos de trabajo que estén a su cargo, de acuerdo con los lineamientos y las orientaciones que impartan las dependencias competentes.
11. Identificar y delimitar situaciones y casos susceptibles de ser priorizados y proponerlos al Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos.

10

12. Ejecutar los planes de priorización aprobados por el Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos en lo de su competencia.
13. Apoyar, en el marco de sus competencias, a la Dirección de Políticas y Estrategia en el análisis de la información que se requiera para sustentar la formulación de la política en materia criminal.
14. Mantener actualizada la información que se registre en los sistemas de información de la Entidad, en los temas de su competencia.
15. Consolidar, analizar y clasificar la información de las investigaciones y acusaciones adelantadas por los servidores y grupos de trabajo a su cargo y remitirla a la Dirección de Políticas y Estrategia.
16. Dirimir, de conformidad con la Constitución y la ley, los conflictos de competencia que se presenten entre la Fiscalía General de la Nación y los demás organismos que desempeñen funciones de Policía Judicial, en el ámbito de su competencia.
17. Dirimir los conflictos administrativos que se presenten al interior de la Fiscalía en el ejercicio de las funciones o en la asignación de investigaciones, en los casos y según las directrices y lineamientos impartidos por el Fiscal General de la Nación.
18. Asesorar a las dependencias de la Fiscalía General de la Nación que cumplen funciones investigativas y acusatorias en los temas de su competencia.
19. Elaborar e implementar los planes operativos anuales en el ámbito de su competencia, de acuerdo con la metodología diseñada por la Dirección de Planeación y Desarrollo.
20. Aplicar las directrices y lineamientos del Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación.
21. Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el Fiscal o Vicefiscal General de la Nación.

ARTÍCULO 9. Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. Créese en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente adscrito a la Delegada contra la Criminalidad Organizada, la que tendrá como función principal la investigación y judicialización de los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y las demás conductas delictivas conexas o relacionadas, mediante un trabajo interdisciplinario sin perjuicio de la competencia de las Direcciones Seccionales sobre la materia.

La Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente estará conformada por:

Unidad	Cantidad	Cargo	Niveles
Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	1	Director Nacional I	Directivo
	2	Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito	Profesional
	20	Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito	Profesional
	5	Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos	Profesional
	1	Profesional Experto	Profesional
	2	Profesional Especializado II	Profesional
	2	Profesional De Gestión III	Profesional
	12	Investigador Experto	Profesional
	10	Profesional Investigador III	Profesional
	9	Profesional Investigador II	Profesional
	9	Profesional Investigador I	Profesional
	10	Técnico Investigador IV	Técnico
	12	Técnico Investigador III	Técnico
	20	Asistente de Fiscal IV	Técnico
	5	Asistente de Fiscal III	Técnico
	5	Asistente de Fiscal II	Técnico
	2	Secretario Ejecutivo	Técnico
	3	Secretario Administrativo	Asistencial

Parágrafo 1. De forma prioritaria la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación desarrollará el concurso necesario para proveer los cargos establecidos en el presente artículo de conformidad con el Sistema Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación, sin perjuicio de los nombramientos en provisionalidad necesarios para implementar inmediatamente la Dirección establecida, en los cuales se aplicarán los principios de mérito, transparencia, garantía de imparcialidad y eficiencia y eficacia del artículo 3, junto con los criterios de mérito señalados en el numeral 3 del artículo 11 del Decreto Ley 020 de 2014.

Parágrafo 2. El inicio del concurso se realizará dentro de los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 3. La Fiscalía General de la Nación presentará anualmente un informe sobre los indicadores de gestión, avance y esclarecimiento en la investigación y judicialización de las conductas que afecten los recursos naturales y el medio ambiente. Esta información será pública y contendrá datos estadísticos que no estén sometidos a reserva.

ARTÍCULO 10. Prevención del daño antijurídico y promoción de la adecuada defensa litigiosa. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el marco de sus funciones, deberá diseñar e implementar una política de prevención del daño antijurídico en materia de protección ambiental y ecológica. De igual forma, promoverá la coordinación de las acciones que aseguren la adecuada defensa de los intereses litigiosos de la nación dentro de los procesos que se lleven a cabo en materia de defensa de los recursos naturales y de la fauna y la flora silvestre.

ARTÍCULO 11. Se autoriza al Gobierno Nacional para asignar los recursos para la implementación y ejecución de la presente ley.

De conformidad con la normativa vigente, las erogaciones que se causen con ocasión de la implementación y ejecución de la presente ley deberán consultar la situación fiscal de la Nación y ajustarse al Marco de Gasto de Mediano Plazo de cada sector involucrado, en concordancia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y las normas orgánicas de presupuesto.

ARTÍCULO 12. Vigencia y Derogatoria. La presente rige a partir de su promulgación y publicación en el Diario Oficial y deroga el Título XI, "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" Capítulo Único, Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, artículos 328 a 339, del Libro II, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN GENERAL de la Ley 599 de 2000 y todas las disposiciones que le sean contrarias.

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

ARTURO CHAR CHALJUB

EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA

GREGORIO ELJACH PACHECO

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ

EL SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

LEY No. 2111

"POR MEDIO DEL CUAL SE SUSTITUYE EL TÍTULO XI "DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE" DE LA LEY 599 DE 2000, SE MODIFICA LA LEY 906 DE 2004 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 29 JUL 2021

Dada en Bogotá, D.C., a los

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO,

WILSON RUIZ OREJUELA

EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA,

DIEGO MESA PUYO

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,

CARLOS EDUARDO CORREA ESCAF

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA,

NERO JOSÉ ALVIS BARRANCO

LEY 2112 DE 2021

(julio 29)

por medio de la cual se fortalece el emprendimiento y el escalamiento del tejido empresarial nacional.

LEY N° 2112 29 JUL 2021

"POR MEDIO DE LA CUAL SE FORTALECE EL EMPRENDIMIENTO Y EL ESCALAMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL NACIONAL"

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º. OBJETIVO. La presente ley tiene como objetivo incentivar el emprendimiento y escalamiento del tejido empresarial colombiano a través del fortalecimiento de los fondos de capital privado y/o deuda privada.

ARTÍCULO 2º. Modifíquese el inciso 2º del artículo 100 de la Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones" y adiciónese un parágrafo al mismo artículo, los cuales quedaran así:

"Como mínimo, un 3% de los recursos se deberán invertir en Fondos de Capital Privado y/o deuda privada, incluidos los fondos que inviertan en fondos de capital privado y/o deuda privada, conocidos como "fondos de fondos", siempre y cuando estos recursos sean invertidos en empresas colombianas o proyectos productivos en Colombia a fin de fortalecer el emprendimiento y el escalamiento del tejido empresarial del país. No se consideraran para el cálculo de este porcentaje las inversiones a las empresas extractivas del sector minero energético y a las vinculadas económicamente a las administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad o pertenecientes a grupos empresariales o conglomerados financieros de estas instituciones, salvo que se trate de fondos de capital privado y/o deuda privada que destinen al menos dos terceras (2/3) partes de los aportes de sus inversionistas a proyectos de infraestructura, ya sea bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas (APP) descrito en la ley 1508 de 2012 y/o bajo las condiciones que determine el Gobierno Nacional para las nuevas generaciones y proyectos de infraestructura. En cualquier caso, las inversiones en Títulos de Deuda Pública no podrán ser superiores al cincuenta por ciento (50%) del valor de los recursos de los Fondos de Pensiones."

"Parágrafo. Para la realización de las inversiones que computan para el cumplimiento del porcentaje mínimo del 3% establecido en el inciso segundo del presente artículo, estas deberán cumplir con los lineamientos fijados por la reglamentación que expedida el Gobierno nacional y/o por las políticas de inversión de las administradoras, los cuales deberán tener en cuenta dentro de sus objetivos que la inversión de recursos se realice dentro de un marco de

1

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ

EL SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

3

adecuada seguridad y que mejore las condiciones de riesgo y retorno de la cuentas individuales de los afiliados, entre otros."

ARTÍCULO 3º. GRADUALIDAD. El porcentaje mínimo de inversión de recursos en Fondos de Capital Privado y/o deuda privada de que trata el inciso segundo del artículo 100 de la Ley 100 de 1993, deberá obtenerse en los dos años siguientes contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 4º. REPORTE DE INFORMACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Las Sociedades Administradoras de los Fondos de Capital Privado y/o deuda privada, como entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, o en su defecto, los gestores profesionales de los Fondos de Capital Privado de qué trata el artículo 2º de la presente ley, deberán certificar y reportar trimestralmente a la Superintendencia Financiera de Colombia el estricto cumplimiento de su reglamento, con el fin de contribuir a la transparencia y garantizar el acceso de la información a la ciudadanía.

ARTÍCULO 5º. REGLAMENTACIÓN. El gobierno nacional reglamentara las disposiciones contenidas en la presente ley.

ARTÍCULO 6º. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

ARTURO CHAR CHALJUB

EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA

GREGORIO ELJACH PACHECO

2

LEY No. 2112

"POR MEDIO DE LA CUAL SE FORTALECE EL EMPRENDIMIENTO Y EL ESCALAMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL NACIONAL"

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 29 JUL 2021

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO

EL MINISTRO DEL TRABAJO,

ÁNGEL CUSTODIO CABRERA BAEZ

LA MINISTRA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO,

MARÍA XIMENA LOMBANA VILLALBA

LEY 2113 DE 2021

(julio 29)

por medio del cual se regula el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior.

LEY N° 2113 29 JUL 2021

"POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR"

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. OBJETO. El objeto de esta ley es establecer el marco normativo por medio del cual se regula la práctica del Consultorio Jurídico de las Instituciones de Educación Superior.

ARTÍCULO 2°. DEFINICIÓN. El Consultorio Jurídico es un escenario de aprendizaje práctico de las Instituciones de Educación Superior, autorizado en los términos de esta ley, en el cual los estudiantes de los programas de Derecho, bajo la supervisión, la guía y la coordinación del personal docente y administrativo que apoya el ejercicio académico, adquieren conocimientos y desarrollan competencias, habilidades y valores éticos para el ejercicio de la profesión de abogado, prestando el servicio obligatorio y gratuito de asistencia jurídica a la población establecida en la presente ley.

ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS. El Consultorio Jurídico estará orientado bajo los siguientes principios generales:

1. **Educación Jurídica Práctica.** El Consultorio Jurídico garantiza procesos de aprendizaje a partir del acercamiento de los estudiantes a las personas en condición de vulnerabilidad, la sociedad, las necesidades jurídicas que enfrentan y los contextos en que se desarrollan, al igual que fomenta el desarrollo de estrategias y de acciones de defensa de sus derechos dentro de estándares de innovación, calidad y actualidad, colaborando con la administración de justicia y asegurando el cumplimiento del derecho de acceso a la justicia.

2. **Autonomía Universitaria.** Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el contenido de esta ley, se reconoce la autonomía de las instituciones de educación superior, las cuales cuentan con las competencias para regular todos los aspectos relativos al funcionamiento, administración y reglamento de los consultorios jurídicos, así como la correspondencia entre estos aspectos y el contenido de sus Proyectos Educativos Institucionales y Proyectos Educativos de Programa.

3. **Formación Integral.** El Consultorio Jurídico constituye un escenario idóneo para la formación académica, profesional, técnica, humana, social y ética

1

ARTÍCULO 4°. OBJETIVOS. El Consultorio Jurídico garantiza los siguientes objetivos:

1. Formación Práctica. Fortalecer el proceso educativo interdisciplinar de los estudiantes de los programas de Derecho mediante la articulación de la teoría y la práctica a partir de casos reales con un enfoque humanístico y ético.

2. Acceso a la justicia. Contribuir a que las personas beneficiarias de sus servicios accedan a la asesoría jurídica, la conciliación extrajudicial en derecho, la representación judicial y extrajudicial, la pedagogía en derechos y el ejercicio del litigio estratégico de interés público.

3. Proyección social. Generar conciencia acerca de la responsabilidad y función social que comporta el ejercicio de la abogacía, en cuyo desarrollo se debe actuar como agente activo en la reducción de la desigualdad y el alcance de la equidad social.

4. Innovación jurídica. Propiciar, a través de la Institución de Educación Superior, el conocimiento científico, reflexivo e innovador del Derecho, contribuyendo a su vez con la transformación digital para el fortalecimiento de su ejercicio, atendiendo a las realidades contemporáneas de interés para el campo jurídico y que tengan impacto sobre el contexto socioeconómico de las comunidades donde ostenta influencia la facultad de derecho.

5. Resolución de conflictos: Impulsar los diferentes métodos de solución de conflictos y la justicia restaurativa, como herramientas encaminadas a la autocomposición de las controversias que se suscitan en el marco de la convivencia social.

ARTÍCULO 5°. CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIOS JURÍDICOS. Las Instituciones de Educación Superior con Programa de Pregrado en Derecho tendrán un Consultorio Jurídico que para su funcionamiento requerirá aprobación del Ministerio de Justicia y del Derecho, en los términos que establezca la reglamentación correspondiente.

De manera permanente, los Consultorios Jurídicos deberán garantizar las condiciones de funcionamiento conforme a las disposiciones que establezca el Gobierno nacional. El Ministerio de Justicia y del Derecho será el encargado de ejercer el control y la vigilancia sobre los mismos.

Parágrafo Transitorio. El Gobierno nacional reglamentará la materia dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley. Hasta tanto no se expida el reglamento respectivo, el trámite de aprobación de funcionamiento de los Consultorios Jurídicos se adelantará ante el Consejo Superior de la Judicatura.

ARTÍCULO 6°. SERVICIOS DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS. Los Consultorios Jurídicos prestarán servicios de asesoría jurídica, conciliación extrajudicial en derecho, representación judicial y extrajudicial, adelantamiento de actuaciones administrativas e interposición de recursos en sede administrativa

3

del abogado, permitiendo a los estudiantes de Derecho adquirir, mediante experiencias propias del ejercicio de la profesión, los saberes y habilidades necesarias y esperados para el ejercicio de la abogacía.

4. **Interés general.** El Consultorio Jurídico busca la defensa del interés general, su armonización con los intereses particulares y con los fines del Estado Social de Derecho, propendiendo por la justicia y la equidad en la sociedad.

5. **Función social**. El Consultorio Jurídico orienta su acción a la defensa de derechos de sujetos de especial protección constitucional y personas naturales que carezcan de medios económicos para contratar los servicios de un profesional en Derecho, o en general personas o grupos que, por sus circunstancias especiales, se encuentren en situación de vulnerabilidad o indefensión, en los términos establecidos en la presente ley.

6. **Progresividad.** Las prácticas jurídicas formativas que se desarrollan en el Consultorio Jurídico se articulan de manera progresiva con el currículo diseñado y acogido por la Institución de Educación Superior y el programa de acuerdo con su naturaleza, modalidad y metodología.

7. **Gratuidad.** El Consultorio Jurídico presta servicios jurídicos gratuitos en favor de las personas beneficiadas que se definen en esta ley. Los gastos necesarios para el impulso procesal y las costas judiciales en los trámites que apliquen serán asumidos por el usuario y en ningún caso los asumirá el estudiante.

8. **Inclusión.** El Consultorio Jurídico garantiza los ajustes razonables necesarios para asegurar que los estudiantes, docentes y las personas beneficiarias de sus servicios puedan tener acceso y participar activamente en ellos, en igualdad de condiciones. Así mismo, fomenta en los estudiantes una perspectiva de igualdad, respeto por la diversidad e inclusión.

9. **Accesibilidad.** El Consultorio Jurídico asegura a todos los estudiantes, docentes y usuarios el acceso en igualdad de condiciones al entorno físico, la información y las comunicaciones relacionadas con la prestación de sus servicios, y establece parámetros que les permitan acceder a servicios no presenciales. En relación con los usuarios de la administración de justicia, facilitan, en la medida de sus posibilidades y conforme a lo que se determine en los reglamentos de las instituciones de educación superior, que los sujetos procesales puedan acceder en sus sedes a las actuaciones virtuales.

10. **Confidencialidad.** Los miembros del Consultorio Jurídico no podrán revelar o utilizar la información suministrada por quienes solicitan la prestación de sus servicios, a menos que hayan recibido del solicitante autorización escrita para ello, o que tengan necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito.

11. **Calidad.** Cada Universidad fijará los estándares que garanticen la calidad y eficiencia en la prestación del servicio en el correspondiente consultorio jurídico y centro de conciliación.

2

y pedagogía en derechos. Así mismo, podrán prestar servicios de conciliación en equidad, mediación, mecanismos de justicia restaurativa y litigio estratégico de interés público, así como todos aquellos otros servicios que guarden relación y permitan el cumplimiento de los principios y objetivos establecidos en esta ley.

Estos servicios se prestarán por conducto de los estudiantes de Derecho, bajo la guía, supervisión y control del Consultorio Jurídico, el cual se podrá cursar a partir de la aprobación de por lo menos la mitad de los créditos académicos del plan de estudios y en cualquier caso hasta su finalización, cumpliendo con los requisitos que establezca cada institución de educación superior conforme a los principios de autonomía y progresividad previstos en la presente ley.

La prestación de los servicios en el consultorio jurídico por parte de los estudiantes no podrá ser menor a dos ni exceder de cinco semestres. En aplicación de los principios de autonomía y progresividad consagrados en la presente ley, cada institución de educación superior definirá dentro de ese rango el tiempo de prestación de los diferentes servicios a cargo de los estudiantes de los consultorios. Con todo, los estudiantes ejercerán las funciones de representación de terceros consagradas en el artículo 9 de esta Ley a partir de la aprobación de todas las asignaturas habilitantes para este efecto según el respectivo Programa de Derecho y por lo menos durante dos semestres, para lo cual los consultorios propiciarán las condiciones necesarias para la prestación efectiva de este servicio.

El Consultorio Jurídico, como componente de la formación práctica del estudiante de derecho y que hará parte integral del currículo, en ningún caso será susceptible de omisión, homologación, convalidación o sustitución.

Parágrafo 1°. Para los efectos de esta ley, se entiende por litigio estratégico de interés público las acciones jurídicas encaminadas a lograr un efecto significativo en las políticas públicas, la legislación y la sociedad civil, a través de la garantía de los derechos. El litigio estratégico de interés público lo podrán adelantar los consultorios jurídicos mediante el empleo del modelo pedagógico de las clínicas jurídicas o el desarrollo de otras estrategias pedagógicas que promuevan la integración entre la investigación aplicada y el desarrollo de acciones jurídicas para lograr un resultado de alto impacto social.

Parágrafo 2°. No estarán obligados a prestar el servicio de representación a terceros los estudiantes que certifiquen que desempeñan labores en áreas jurídicas en el sector público. La institución de educación superior podrá disponer que tales estudiantes desarrollen su práctica en el Consultorio Jurídico prescindiendo de la representación de terceros y a través de los demás servicios prestados por este, estableciendo las respectivas fórmulas para compensar las cargas de trabajo en relación con aquellos estudiantes que sí deban prestar la representación de terceros.

No obstante lo anterior, los estudiantes que, bajo las condiciones expresadas en el inciso anterior, opten por ejercer la representación a terceros, no podrán actuar contra la Nación, el departamento, el distrito o el municipio, según la esfera administrativa a la que pertenezca la entidad a la cual presten sus

4

servicios. La entidad deberá otorgar los permisos a que haya lugar, sin perjuicio de las compensaciones que se establezcan internamente para el efecto.

Parágrafo 3°. Para la prestación del servicio de conciliación extrajudicial en derecho, los consultorios jurídicos deberán organizar su propio centro de conciliación, conforme a los parámetros legales y reglamentarios de creación, funcionamiento y supervisión que regulan la materia. Los consultorios jurídicos también podrán crear y poner en funcionamiento centros de conciliación en equidad, mediación y justicia restaurativa o disponer de espacios o escenarios para la prestación de sus servicios, según lo estime pertinente cada Institución de Educación Superior.

ARTÍCULO 7°. PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Los servicios de asesoría jurídica y pedagogía en derecho propios del Consultorio Jurídico podrán prestarse a entidades públicas o privadas, en las áreas pro bono de firmas de abogados, en despachos judiciales, notarías, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, cajas de compensación familiar, centros de conciliación y centros de mediación y conciliación en equidad, cuando tales servicios sean en provecho de los beneficiarios y con el alcance indicado en el artículo siguiente, y previa suscripción de convenios o acuerdos, bajo la verificación permanente por parte de la institución de educación superior de la connotación jurídica y de los beneficiarios de las actividades realizadas.

Parágrafo. La prestación de los servicios indicados en este artículo, no comportará bajo ninguna circunstancia la prestación del servicio de representación a terceros consagradas en el artículo 9 de esta ley.

ARTÍCULO 8°. BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS. Los Consultorios Jurídicos prestarán servicios de asesoría jurídica y litigio estratégico de interés público a sujetos de especial protección constitucional, a personas naturales que carezcan de medios económicos para contratar los servicios de un profesional en Derecho, y en general a personas o grupos que, por sus circunstancias especiales, se encuentren en situación de vulnerabilidad o indefensión, cuando se trate de asuntos íntimamente ligados con su condición.

Los demás servicios a cargo del Consultorio Jurídico solo se prestarán a personas naturales que carezcan de medios económicos para contratar los servicios de un profesional en Derecho, previa evaluación de la situación socioeconómica particular de los usuarios que los solicitan, conforme a los criterios establecidos por la Institución de Educación Superior en el marco de su autonomía.

En caso de encontrar improcedente la atención a un usuario, el consultorio jurídico le deberá informar acerca de dicha determinación.

Parágrafo. En ningún caso el valor de la pretensión podrá ser tenido en cuenta como factor de evaluación de la situación socioeconómica del usuario.

ARTÍCULO 9°. COMPETENCIA GENERAL PARA LA REPRESENTACIÓN DE TERCEROS. Para el ejercicio de la representación de terceros determinados como personas beneficiadas del servicio en los términos de esta ley, los estudiantes, bajo la supervisión, la guía y el control del Consultorio Jurídico,

5

podrán actuar en los casos establecidos en este artículo, siempre y cuando la cuantía no supere los 50 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), salvo la competencia aquí establecida en materia penal, laboral y de tránsito.

1. En materia penal en los procesos de conocimiento de los jueces penales municipales o promiscuos municipales:

a) Como representantes de la parte civil en los procedimientos regidos por la Ley 600 de 2000, o representantes de víctimas en los procesos tramitados bajo la Ley 906 de 2004, o la norma que haga sus veces, según el caso.
b) Como defensores o voceros en los procesos regidos por la Ley 600 de 2000 o como defensores en los procesos tramitados bajo la Ley 906 de 2004, o la norma que haga sus veces, según el caso.
c) En los asuntos querellables, así como en los procedimientos penales de los que conocen los juzgados municipales cuando actúen como jueces de conocimiento o como jueces de control de garantías, incluso si son juzgados promiscuos, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 941 de 2005;
d) Como representantes del acusador privado en los términos de la Ley 1826 de 2017.

2. En materia penal como apoderados de víctima en procesos de conocimiento de los jueces penales del circuito tramitados bajo la Ley 906 de 2004, o la norma que haga sus veces, según el caso.

3. En los procedimientos laborales, siempre y cuando la cuantía no supere los 20 smlmv.

4. En los procedimientos civiles de que conocen los jueces municipales en única instancia.

5. En los procedimientos de jurisdicción voluntaria. En cualquier caso, para los asuntos relativos a la emancipación y la adopción, el estudiante deberá contar con un acompañamiento especial por parte del personal docente, el cual, también estará a cargo de la representación judicial en este tipo de causas.

6. En los procedimientos de competencia de los jueces de familia en única instancia, y en los trámites administrativos que adelantan las Comisarías de Familia, Defensorías de Familia e inspecciones de policía, salvo los asuntos que versen sobre medidas de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, y procesos de adopción. Si el asunto versara sobre la patria potestad, el estudiante deberá contar con un acompañamiento especial por parte del personal docente, el cual, también estará a cargo de la representación judicial en este tipo de causas.

7. En las acciones constitucionales de tutela, cumplimiento y populares.

8. En los arbitrajes sociales, conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley 1563 de 2012 o la norma que haga sus veces.

6

9. En los siguientes asuntos jurisdiccionales, adelantados ante autoridades administrativas, siempre y cuando se puedan llevar a cabo en la zona de influencia que determine el Programa de Derecho respectivo:

a) Ante la Superintendencia de Industria y Comercio: Las acciones de protección al consumidor;
b) Ante la Superintendencia Financiera: La acción de Protección al Consumidor Financiero;
c) Ante la Superintendencia de Salud: Las acciones sobre negación de cobertura, reembolso económico de gastos médicos, y reconocimiento y pago de incapacidades y licencias.

10. En los procedimientos disciplinarios de competencia de las personerías municipales y la Procuraduría General de la Nación, cuando sea imposible la notificación. De lo anterior se exceptúan los procesos contra funcionarios de elección popular, dirección, confianza y manejo.

11. De oficio, en los procedimientos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías Municipales, Distritales, Departamentales y General de la República, cuando sea imposible la notificación. De lo anterior se exceptúan los procesos contra funcionarios de elección popular, dirección, confianza y manejo.

12. En los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio que adelanten las Superintendencias, autoridades administrativas, los organismos de control y las entidades constitucionales autónomas.

13. En los asuntos policivos adelantados bajo el trámite verbal abreviado ante los inspectores de policía, así como en los procesos relativos al control y recuperación del espacio público adelantados ante los entes territoriales.

14. En la elaboración de derechos de petición, quejas y reclamaciones, así como el adelantamiento de actuaciones administrativas e interposición de recursos en sede administrativa, tanto en entidades públicas como privadas.

15. En trámites de beneficios administrativos, subrogados penales y sustitutivos de la prisión y solicitudes de libertad, en los términos de la Ley 1760 de 2015 o la que la sustituya.

16. En los procedimientos contravencionales de tránsito, para asuntos cuya sanción no fuere superior a multa de veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes.

Parágrafo 1°. Para poder actuar ante las autoridades, los estudiantes inscritos en Consultorio Jurídico requieren autorización expresa otorgada para cada caso por el director del consultorio, la cual se anexará al expediente respectivo, y el correspondiente poder. Las autoridades no podrán exigir a los estudiantes certificaciones o documentación diversa a la establecida en este artículo.

En ningún caso se exigirá para la representación de terceros, la presencia o el acompañamiento de personal del Consultorio Jurídico a las audiencias. El

7

incumplimiento de esta disposición por parte de cualquier servidor público será causal de mala conducta.

Parágrafo 2°. Los estudiantes podrán ejercer la representación en las audiencias de conciliación extrajudicial y judicial, aún en aquellos eventos en los que el representado no asista porque el domicilio de alguna de las partes no esté en el municipio del lugar donde se vaya a celebrar la audiencia o alguna de ellas se encuentre por fuera del territorio nacional, y siempre que se encuentre debidamente facultado para conciliar, cuando se deban llevar a cabo dentro de los asuntos establecidos en este artículo. Para armonizar esta facultad con el acceso efectivo a la justicia, los consultorios jurídicos deberán garantizar a los usuarios la continuidad en la prestación de los servicios de representación judicial, en aquellos casos en los que el trámite conciliatorio constituya requisito de procedibilidad para acceder a la jurisdicción y que el consultorio sea competente para adelantar el proceso judicial.

Parágrafo 3°. Para facilitar el acceso a la justicia conforme a los objetivos establecidos en esta Ley, en las instalaciones donde funcionen los despachos judiciales podrán operar oficinas de los consultorios jurídicos, siempre y cuando se garanticen las condiciones mínimas de infraestructura y equipamiento que se requieran para su funcionamiento.

ARTÍCULO 10. CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y LA REPRESENTACIÓN DE LOS USUARIOS. Los estudiantes inscritos en Consultorio Jurídico atenderán de manera ininterrumpida los procesos que se encuentren bajo su responsabilidad, la cual cesará en el momento en el que se realice la entrega formal de los mismos a los estudiantes que los sustituirán, sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, de conformidad con lo que determine la Dirección del Consultorio Jurídico, quien definirá la fecha en que se hará la respectiva entrega.

Durante los recesos y vacaciones académicas dispuestos por la Institución de Educación Superior, los estudiantes continuarán ejecutando todas las gestiones y los actos tendientes al buen desarrollo de los procesos.

ARTÍCULO 11. AMPARO DE POBREZA. Para efectos de la valoración de las condiciones de la parte solicitante, dentro de la decisión acerca del reconocimiento de amparo de pobreza, se presume que quien actúa a través de estudiantes de consultorio jurídico se encuentra en incapacidad de sufragar los gastos del trámite correspondiente, sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y las de las personas a quienes por ley debe alimentos.

ARTÍCULO 12. AUXILIO ESTUDIANTIL DE TRANSPORTE. Las Instituciones de Educación Superior, en el marco de la autonomía que les confiere la Ley, podrán otorgar auxilios estudiantiles de transporte a quienes acrediten una situación económica precaria y que por razón de su labor en el Consultorio Jurídico requieran transportarse a sedes judiciales o administrativas.

ARTÍCULO 13. APOYOS TECNOLÓGICOS. Las Instituciones de Educación Superior implementarán herramientas tecnológicas que complementen el aprendizaje, faciliten y apoyen la interacción virtual en el proceso de formación y

8

en la labor misional del consultorio jurídico, y den lugar a la comunicación entre el consultorio jurídico y sus usuarios.

La atención virtual a los usuarios se impartirá en correspondencia con los principios orientadores y disposiciones aplicables contenidos en la Ley 1341 de 2009 o la norma que haga sus veces. Se deberá garantizar, en cualquier caso, la confidencialidad en la prestación del servicio, bajo los parámetros establecidos en el artículo 3 de esta Ley, así como los medios para poner a disposición del usuario la trazabilidad de la atención prestada, así como la documentación en medio digital o físico, según sea requerido por este, donde se de cuenta de la atención recibida y los resultados correspondientes.

De acuerdo con reglamentos de las instituciones de educación superior, los consultorios jurídicos podrán prestar servicios de asesoría legal y pedagogía en derechos bajo la modalidad virtual, cuando las circunstancias así lo exijan, en favor de la población beneficiaria de estos servicios o cuando el domicilio de los beneficiarios se encuentre en otros municipios, en los que no exista presencia de consultorios jurídicos. Para estos efectos, se podrán suscribir los convenios correspondientes para la accesibilidad a los medios tecnológicos por parte de los usuarios con autoridades públicas, instituciones educativas públicas y/o privadas, empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, o cualquier otra institución pública o privada según corresponda.

ARTÍCULO 14. RETROALIMENTACIÓN DE LOS USUARIOS. Los Consultorios jurídicos deberán establecer los mecanismos e instancias que se consideren pertinentes para el asesoramiento, conocimiento y atención de inquietudes, quejas o reclamos por parte de sus usuarios y de información al público.

ARTÍCULO 15. SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS. El Ministerio de Justicia y del Derecho diseñará e implementará un sistema de información con fines de estricto rigor académico y organizativo, para apoyar la elaboración de políticas públicas y en aras de armonizar la oferta de servicios prestados por los Consultorios Jurídicos con la garantía de acceso efectivo a la justicia.

Los Consultorios Jurídicos deberán reportar a este sistema los datos estadísticos, que permitan la consolidación de información cuantitativa y cualitativa que determine el Gobierno nacional sobre la gestión por ellos adelantada, teniendo en cuenta aspectos como el número de estudiantes vinculados a cada modalidad de servicio ofrecido, el tipo de causas atendidas y la población beneficiaria.

La información que se suministre no podrá darse a conocer al público ni a las entidades u organismos oficiales, ni a las autoridades públicas, sino únicamente en resúmenes numéricos, que no hagan posible deducir de ellos información alguna de carácter individual que pudiera utilizarse para fines comerciales, de tributación fiscal, de investigación judicial o cualquier otro diferente a los establecidos en el presente artículo.

Dicho sistema de información también deberá garantizar un espacio de consolidación y divulgación de buenas prácticas.

9

ARTÍCULO 16. El artículo 2º de la Ley 2039 de 2020 quedará así:

*"**ARTÍCULO 2º. Equivalencia de experiencias.** Con el objeto de establecer incentivos educativos y laborales para los estudiantes de educación superior de pregrado y postgrado, educación técnica, tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y desarrollo humano, formación profesional integral del SENA, escuelas normales superiores, así como toda la oferta de formación por competencias, a partir de la presente ley, las pasantías, prácticas, judicaturas, servicio en los consultorios jurídicos, monitorias, contratos laborales, contratos de prestación de servicios y la participación en grupos de investigación debidamente certificados por la autoridad competente, serán acreditables como experiencia profesional válida, siempre y cuando su contenido se relacione directamente con el programa académico cursado.*

En el caso de los grupos de investigación, la autoridad competente para expedir la respectiva certificación será el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al igual que las entidades públicas y privadas parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SNCTeI, en el caso de la investigación aplicada de la formación profesional integral del SENA, la certificación será emitida por esta institución.

El Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Trabajo reglamentarán, cada uno en el marco de sus competencias, en un término no superior a doce (12) meses contados a partir de la expedición de la presente Ley, a fin de establecer una tabla de equivalencias que permita convertir dichas experiencias previas a la obtención del título de pregrado en experiencia profesional válida. En todo caso, el valor asignado a la experiencia previa será menor a aquella experiencia posterior a la obtención del respectivo título. En el caso del sector de la Función Pública, las equivalencias deberán estar articuladas con el Decreto 1083 de 2015, o el que haga sus veces.

***Parágrafo 1º.** La experiencia previa solo será válida una vez se haya culminado el programa académico, aunque no se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos establecidos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996.*

***Parágrafo 2º.** En los concursos públicos de mérito se deberá tener en cuenta la experiencia previa a la obtención del título profesional. En la valoración de la experiencia profesional requerida para un empleo público, se tendrá en cuenta como experiencia previa para los fines de la presente ley, la adquirida en desarrollo y ejercicio de profesiones de la misma área del conocimiento del empleo público.*

***Parágrafo 3º.** En el término de seis (6) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley, el Ministerio de Trabajo reglamentará un esquema de expediente digital laboral que facilite a los trabajadores en general, pero especialmente a los trabajadores jóvenes en particular, la movilidad en los empleos, de tal forma que contenga, entre otras, las*

10

certificaciones digitales académicas y laborales de que trata este artículo. Este expediente hará parte de los sistemas de información del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) creado por ley 1636 de 2013 y deberá cumplir las garantías en calidad informática contenidas en la ley 527 de 1999.

***Parágrafo 4º.** Para el caso del servicio en consultorios jurídicos, la experiencia máxima que se podrá establecer en la tabla de equivalencias será de seis (6) meses."*

ARTÍCULO 17. TRANSICIÓN NORMATIVA. Dentro del término de seis (6) meses a partir de la expedición de esta Ley, el Gobierno nacional hará los ajustes necesarios al contenido del Decreto 1069 de 2015, en particular a sus artículos 2.2.7.2.1, 2.2.1.22 y 2.2.7.2.3, y a toda la normativa adicional que resulte pertinente, para armonizar sus contenidos con las disposiciones aquí establecidas.

Asimismo, las Instituciones de Educación Superior con programas de Derecho efectuarán dentro de los dos (2) años a partir de la expedición de esta Ley, los ajustes curriculares, tecnológicos, de personal y de infraestructura a que haya lugar, para armonizar la estructura y operación de sus consultorios jurídicos con el contenido de esta Ley, sin que ello implique el desconocimiento de las autorizaciones para su funcionamiento que fueren expedidas con anterioridad a la expedición de esta Ley.

ARTICULO 18. No se efectuarán en materia de autorización y habilitación para su funcionamiento los convenios de consultorios jurídicos firmados con anterioridad a la expedición de la presente ley.

ARTÍCULO 19. VIGENCIA. La presente Ley entra en vigencia a partir de su publicación.

ARTÍCULO 20. DEROGATORIAS. Deróguense, a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, el artículo 1 de la Ley 583 de 2000; la expresión "así como la aprobación para la constitución de consultorios jurídicos prevista en el artículo 30 de dicho Decreto" contenida en el numeral 5 del artículo 627 de la Ley 1564 de 2012, y todas las disposiciones que le sean contrarias.

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

ARTURO CHAR CHALJUB

11

EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA

GREGORIO ELJACH PACHECO

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ

EL SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

12



LEY No. 2113

"POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR"

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 29 JUL 2021

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

WILSON RUÍZ OREJUELA

LA VICEMINISTRA DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,

MARÍA ANDREA GODOY CASADIEGO

EL MINISTRO DEL TRABAJO,

ÁNGEL CUSTODIO CABRERA BAEZ



Hoja 2 Continuación de la Ley "POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR"

29 JUL 2021

LA MINISTRA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO,

MARÍA XIMENA LOMBANA VILLALBA

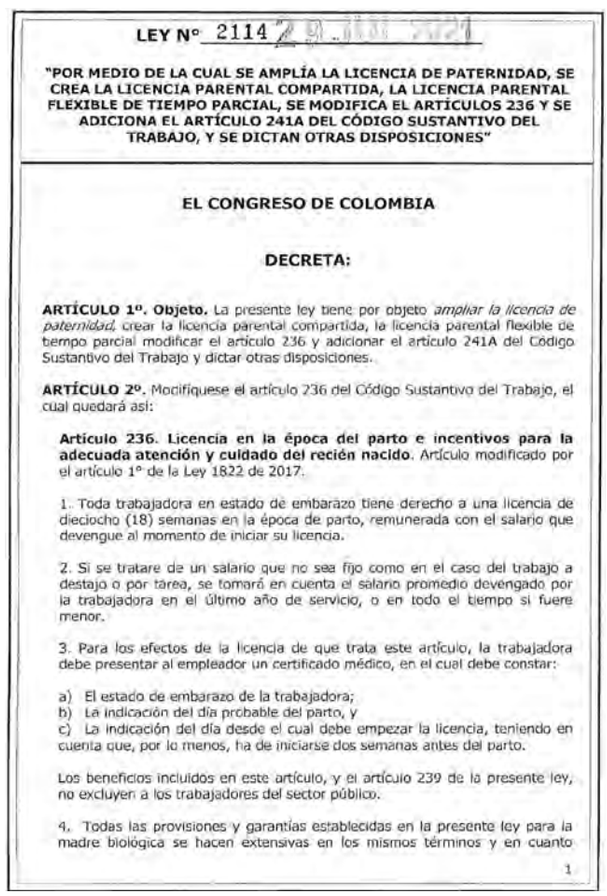
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,

MARÍA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ

LEY 2114 DE 2021

(julio 29)

por medio de la cual se amplía la licencia de paternidad, se crea la licencia parental compartida, la licencia parental flexible de tiempo parcial, se modifica el artículo 236 y se adiciona el artículo 241A del Código Sustantivo del Trabajo, y se dictan otras disposiciones.



LEY Nº 2114 29 JUL 2021

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AMPLÍA LA LICENCIA DE PATERNIDAD, SE CREA LA LICENCIA PARENTAL COMPARTIDA, LA LICENCIA PARENTAL FLEXIBLE DE TIEMPO PARCIAL, SE MODIFICA EL ARTÍCULOS 236 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 241A DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto *ampliar la licencia de paternidad*, crear la licencia parental compartida, la licencia parental flexible de tiempo parcial modificar el artículo 236 y adicionar el artículo 241A del Código Sustantivo del Trabajo y dictar otras disposiciones.

ARTÍCULO 2º. Modifíquese el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así:

Artículo 236. Licencia en la época del parto e incentivos para la adecuada atención y cuidado del recién nacido. Artículo modificado por el artículo 1º de la Ley 1822 de 2017.

1. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de dieciocho (18) semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al momento de iniciar su licencia.

2. Si se tratare de un salario que no sea fijo como en el caso del trabajo a destajo o por tarea, se tomará en cuenta el salario promedio devengado por la trabajadora en el último año de servicio, o en todo el tiempo si fuere menor.

3. Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico, en el cual debe constar:

a) El estado de embarazo de la trabajadora;
b) La indicación del día probable del parto, y
c) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto.

Los beneficios incluidos en este artículo, y el artículo 239 de la presente ley, no excluyen a los trabajadores del sector público.

4. Todas las provisiones y garantías establecidas en la presente ley para la madre biológica se hacen extensivas en los mismos términos y en cuanto

1



fuere procedente a la madre adoptante, o al padre que quede a cargo del recién nacido sin apoyo de la madre, sea por enfermedad, abandono o muerte, asimilando la fecha del parto a la de la entrega oficial del menor que se ha adoptado, o del que adquiere custodia justo después del nacimiento. En ese sentido, la licencia materna se extiende al padre en caso de fallecimiento, abandono o enfermedad de la madre, el empleador del padre del niño le concederá una licencia de duración equivalente al tiempo que falta para expirar el periodo de la licencia posterior al parto concedida a la madre.

5. La licencia de maternidad para madres de niños prematuros, tendrá en cuenta la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a término, las cuales serán sumadas a las dieciocho (18) semanas que se establecen en la presente ley. Cuando se trate de madres con parto múltiple o madres de un hijo con discapacidad, la licencia se ampliará en dos semanas más.

6. La trabajadora que haga uso de la licencia en la época del parto tomará las dieciocho (18) semanas de licencia a las que tiene derecho, de la siguiente manera:

a) Licencia de maternidad preparto. Esta será de una (1) semana con anterioridad a la fecha probable del parto debidamente acreditada. Si por alguna razón médica la futura madre requiere una semana adicional previa al parto podrá gozar de las dos (2) semanas, con dieciséis (16) posparto. Si en caso diferente, por razón médica no puede tomar la semana previa al parto, podrá disfrutar las dieciocho (18) semanas en el posparto inmediato.
b) Licencia de maternidad posparto. Esta licencia tendrá una duración normal de diecisiete (17) semanas contadas desde la fecha del parto, o de dieciséis (16) o dieciocho (18) semanas por decisión médica, de acuerdo con lo previsto en el literal anterior.

Parágrafo 1º. De las dieciocho (18) semanas de licencia remunerada, la semana anterior al probable parto será de obligatorio goce a menos que el médico tratante prescriba algo diferente. La licencia remunerada de la que habla este artículo es incompatible con la licencia de calamidad doméstica y en caso de haberse solicitado esta última por el nacimiento de un hijo, estos días serán descontados de la misma.

Parágrafo 2º. El padre tendrá derecho a dos (2) semanas de licencia remunerada de paternidad.

La licencia remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos del cónyuge o de la compañera permanente, así como para el padre adoptante.

El único soporte válido para el otorgamiento de la licencia remunerada de paternidad es el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento del menor.

2

La licencia remunerada de paternidad estará a cargo de la EPS y será reconocida proporcionalmente a las semanas cotizadas por el padre durante el periodo de gestación.

La licencia de paternidad se ampliará en una (1) semana adicional por cada punto porcentual de disminución de la tasa de desempleo estructural comparada con su nivel al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, sin que en ningún caso pueda superar las cinco (5) semanas

La metodología de medición de la tasa de desempleo estructural será definida de manera conjunta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Banco de la República y el Departamento Nacional de Planeación. La tasa de desempleo estructural será publicada en el mes de diciembre de cada año y constituirá la base para definir si se amplía o no la licencia para el año siguiente.

Se autoriza al Gobierno nacional para que en el caso de los niños prematuros se aplique lo establecido en el presente parágrafo.

Parágrafo 3°. Para efectos de la aplicación del numeral quinto (5°) del presente artículo, se deberá anexar al certificado de nacido vivo y la certificación expedida por el médico tratante en la cual se identifique diferencia entre la edad gestacional y el nacimiento a término, con el fin de determinar en cuántas semanas se debe ampliar la licencia de maternidad, o determinar la multiplicidad en el embarazo.

El Ministerio de Salud reglamentará en un término no superior a seis (6) meses contados a partir de la expedición de la presente ley, lo concerniente al contenido de la certificación de que trata este parágrafo y fijará los criterios médicos a ser tenidos en cuenta por el médico tratante a efectos de expedirla.

Parágrafo 4°. Licencia parental compartida. Los padres podrán distribuir libremente entre sí las últimas seis (6) semanas de la licencia de la madre, siempre y cuando cumplan las condiciones y requisitos dispuestos en este artículo. Esta licencia, en el caso de la madre, es independiente del permiso de lactancia.

La licencia parental compartida se regirá por las siguientes condiciones:

1. El tiempo de licencia parental compartida se contará a partir de la fecha del parto. Salvo que el médico tratante haya determinado que la madre deba tomar entre una o dos (2) semanas de licencia previas a la fecha probable del parto o por determinación de la madre.
2. La madre deberá tomar como mínimo las primeras doce (12) semanas después del parto, las cuales serán intransferibles. Las restantes seis (6) semanas podrán ser distribuidas entre la madre y el padre, de común acuerdo entre los dos. El tiempo de licencia del padre no podrá ser recortado en aplicación de esta figura.
3. En ningún caso se podrán fragmentar, intercalar ni tomar de manera simultánea los períodos de licencia salvo por enfermedad postparto de la madre, debidamente certificada por el médico.

4. La licencia parental compartida será remunerada con base en el salario de quien disfrute de la licencia por el período correspondiente. El pago de la misma estará a cargo del respectivo empleador o EPS, acorde con la normatividad vigente.

Para los efectos de la licencia de que trata este parágrafo, los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. El único soporte válido para el otorgamiento de licencia compartida es el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de nacimiento del menor.
2. Debe existir mutuo acuerdo entre los padres acerca de la distribución de las semanas de licencia. Ambos padres deberán realizar un documento firmado explicando la distribución acordada y presentarla ante sus empleadores, en un término de treinta (30) días contados a partir del nacimiento del menor.
3. El médico tratante debe autorizar por escrito el acuerdo de los padres, a fin de garantizar la salud de la madre y el recién nacido.
4. Los padres deberán presentar ante el empleador un certificado médico, en el cual debe constar:

   a) El estado de embarazo de la mujer; o una constancia del nacimiento del menor.
   b) La indicación del día probable del parto, o la fecha del nacimiento del menor.
   c) La indicación del día desde el cual empezarían las licencias de cada uno.
   d) La licencia parental compartida también se aplicará con respecto a los niños prematuros y adoptivos, teniendo en cuenta el presente artículo.

La licencia parental compartida es aplicable también a los trabajadores del sector público. Para estos efectos, el Departamento Administrativo de la Función Pública reglamentará la materia dentro de los seis (6) meses siguientes a la sanción de la presente ley.

No podrán optar por la licencia parental compartida, los padres que hayan sido condenados en los últimos cinco (5) años por los delitos contemplados en el título IV delitos contra la libertad, integridad y formaciones sexuales; los padres condenados en los últimos dos (2) años; por los delitos contemplados en el título VI contra la familia, capítulo primero "de la violencia intrafamiliar" y capítulo cuarto "de los delitos contra la asistencia alimentaria" de la Ley 599 de 2000 o los padres que tengan vigente una medida de protección en su contra, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, o la norma que lo modifique, sustituya o adicione.

Parágrafo 5°. Licencia parental flexible de tiempo parcial. La madre y/o padre podrán optar por una licencia parental flexible de tiempo parcial, en la cual, podrán cambiar un periodo determinado de su licencia de maternidad o de paternidad por un período de trabajo de medio tiempo, equivalente al

doble del tiempo correspondiente al período de tiempo seleccionado. Esta licencia, en el caso de la madre, es independiente del permiso de lactancia.

La licencia parental flexible de tiempo parcial se regirá por las siguientes condiciones:

1. Los padres podrán usar esta figura antes de la semana dos (2) de su licencia de paternidad; las madres, a no antes de la semana trece (13) de su licencia de maternidad.
2. El tiempo de licencia parental flexible de tiempo parcial se contará a partir de la fecha del parto. Salvo que el médico tratante haya determinado que la madre deba tomar una o dos (2) semanas de licencia previas a la fecha probable del parto. Los periodos seleccionados para la licencia parental flexible no podrán interrumpirse y retomarse posteriormente. Deberán ser continuos, salvo aquellos casos en que medie acuerdo entre el empleador y el trabajador.
3. La licencia parental flexible de tiempo parcial será remunerada con base en el salario de quien disfrute de la licencia por el período correspondiente. El pago de la misma estará a cargo del respectivo empleador o EPS. El pago del salario por el tiempo parcial laborado se regirá acorde con la normatividad vigente.
4. La licencia parental flexible de tiempo parcial también podrá ser utilizada por madres y/o padres que también hagan uso de la licencia parental compartida, observando las condiciones señaladas en este parágrafo, así como en el parágrafo 4º del presente artículo.

Para los efectos de la licencia de la que trata este parágrafo, los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. El único soporte válido para el otorgamiento de licencia parental flexible de tiempo parcial es el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento del menor.
2. Debe existir mutuo acuerdo entre los empleadores y los trabajadores. El acuerdo deberá ir acompañado de un certificado médico que dé cuenta de:

   a) El estado de embarazo de la mujer; o constancia del nacimiento.
   b) La indicación del día probable del parto, o indicación de fecha del parto y
   c) La indicación del día desde el cual empezaría la licencia correspondiente. Este acuerdo deberá consultarse con el empleador a más tardar dentro de los 30 días siguientes al nacimiento. El empleador deberá dar respuesta a la solicitud dentro de los cinco (5) hábiles siguientes a su presentación.

La licencia parental flexible de tiempo parcial también se aplicará con respecto a los niños prematuros y adoptivos, teniendo en cuenta lo dispuesto en el presente artículo.

La licencia parental flexible de tiempo parcial es aplicable también a los trabajadores del sector público. Para estos efectos, el Departamento Administrativo de la Función Pública, reglamentará la materia dentro de los seis (6) meses siguientes a la sanción de la presente ley. Superado este periodo de tiempo el Presidente de la República conservará su facultad reglamentaria.

ARTÍCULO 3º. Medidas antidiscriminatorias en materia laboral. Adiciónese un artículo 241 A al Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así:

Artículo 241 A. Medidas antidiscriminatorias en materia laboral.

1. Pruebas de embarazo. La exigencia de la práctica de pruebas de embarazo queda prohibida como requisito obligatorio para el acceso o permanencia en cualquier actividad laboral. La prueba de embarazo solo podrá solicitarse, con consentimiento previo de la trabajadora, en los casos en los que el trabajo a desempeñar implique riesgos reales o potenciales que puedan incidir negativamente en el desarrollo normal del embarazo.

Se presume que toda exigencia de ordenar la práctica de una prueba de embarazo para acceso o permanencia en cualquier actividad laboral tiene carácter discriminatorio. Esta presunción admite prueba en contrario, pero se invertirá la carga de la prueba a favor de la mujer y será el empleador o contratante quien deba desvirtuar la conducta discriminatoria y demostrar que existen riesgos reales o potenciales que puedan incidir negativamente en el desarrollo normal del embarazo.

El empleador, al enlistar las evaluaciones médicas preocupacionales o de preingreso, deberá dejar constancia que, en estas, no se incluye una prueba de embarazo. Cuando las evaluaciones médicas preocupacionales o de preingreso involucren exámenes de sangre, la candidata podrá seleccionar el centro médico o laboratorio en dónde realizar dichos exámenes. En todo caso, el centro médico o laboratorio que se escoja deberá ser reconocido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

El empleador que ordene la realización de una prueba de embarazo en contra de lo establecido en el presente artículo, se le impondrá una multa de hasta dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco (2455) Unidades de Valor Tributario (UVT) de conformidad con la reglamentación que sobre la materia haga el Ministerio del Trabajo. La trabajadora que haya sido obligada a la realización de una prueba de embarazo en contra de lo establecido en este artículo deberá ser contratada para el cargo al cual aspiraba.

2. Entrevistas de trabajo. La realización de preguntas relacionadas con planes y reproductivos queda prohibida en las entrevistas laborales y se presumirá como una práctica discriminatoria.

El empleador que realice preguntas discriminatorias en contra de lo establecido en el presente artículo, se le impondrá una multa de hasta dos mil cuatrocientos

cincuenta y cinco (2455) Unidades de Valor Tributario (UVT), de conformidad con la reglamentación que sobre la materia haga el Ministerio del Trabajo.

ARTÍCULO 4º. Comunicación y difusión de nuevas modalidades de licencias parentales y campañas pedagógicas sobre la corresponsabilidad en la crianza de los hijos. El Gobierno nacional, en cabeza del Ministro del Trabajo, adelantará un proceso de comunicación y difusión de las nuevas modalidades de licencias introducidas en la presente ley. De igual manera, se adelantarán campañas pedagógicas, enfocadas en la importancia de la corresponsabilidad de los padres en la crianza de los hijos, que atiendan el contexto y la realidad colombiana, dirigidas a empleadores y trabajadores del sector público y privado.

El proceso de comunicación y difusión y las campañas pedagógicas deberán iniciarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley y deberá extenderse, en el tiempo, incluyendo, difusión en medios masivos de comunicación, así como talleres dirigidos a trabajadores y empleadores quienes deberán incluirlos en sus capacitaciones o inducciones.

ARTÍCULO 5º. Compensación de Maternidad de los Afiliados del Régimen Subsidiado que contribuyen solidariamente al SGSSS. Para las afiliadas del régimen subsidiado cabeza del núcleo familiar que contribuyan solidariamente al SGSSS, de conformidad con el artículo 242 de la Ley 1955 de 2019 o la norma que haga sus veces, se les reconocerá una compensación de maternidad proporcional a la tarifa de la contribución realizada. Para tal efecto, el Gobierno nacional reglamentará los términos y condiciones en los que operará este reconocimiento.

ARTÍCULO 6º. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir del momento de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

ARTURO CHAR CHALJUB

EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA

GREGORIO ELJACH PACHECO

7

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ

EL SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

8

LEY No. 2114

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AMPLÍA LA LICENCIA DE PATERNIDAD, SE CREA LA LICENCIA PARENTAL COMPARTIDA, LA LICENCIA PARENTAL FLEXIBLE DE TIEMPO PARCIAL, SE MODIFICA EL ARTÍCULOS 236 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 241ª DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 29 JUL. 2021

Dada en Bogotá, D.C., a los

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO

LA VICEMINISTRA DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

MARÍA ANDREA GODOY CASADIEGO

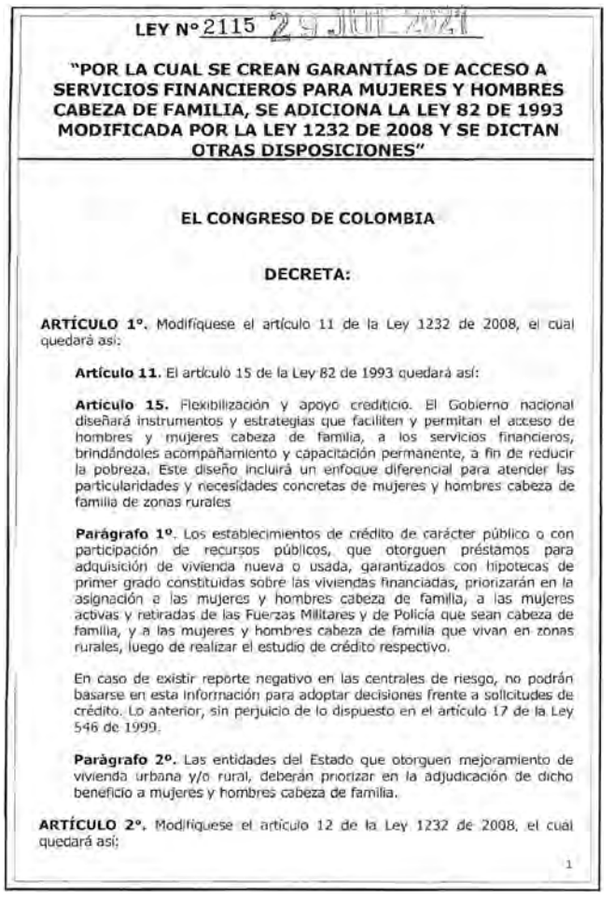
EL MINISTRO DEL TRABAJO,

ÁNGEL CUSTODIO CABRERA BAEZ

LEY 2115 DE 2021

(julio 29)

por la cual se crean garantías de acceso a servicios financieros para mujeres y hombres cabeza de familia, se adiciona la Ley 82 de 1993 modificada por la Ley 1232 de 2008 y se dictan otras disposiciones.



LEY N° 2115 29 JUL 2021

"POR LA CUAL SE CREAN GARANTÍAS DE ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS PARA MUJERES Y HOMBRES CABEZA DE FAMILIA, SE ADICIONA LA LEY 82 DE 1993 MODIFICADA POR LA LEY 1232 DE 2008 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Modifíquese el artículo 11 de la Ley 1232 de 2008, el cual quedará así:

Artículo 11. El artículo 15 de la Ley 82 de 1993 quedará así:

Artículo 15. Flexibilización y apoyo crediticio. El Gobierno nacional diseñará instrumentos y estrategias que faciliten y permitan el acceso de hombres y mujeres cabeza de familia, a los servicios financieros, brindándoles acompañamiento y capacitación permanente, a fin de reducir la pobreza. Este diseño incluirá un enfoque diferencial para atender las particularidades y necesidades concretas de mujeres y hombres cabeza de familia de zonas rurales

Parágrafo 1º. Los establecimientos de crédito de carácter público o con participación de recursos públicos, que otorguen préstamos para adquisición de vivienda nueva o usada, garantizados con hipotecas de primer grado constituidas sobre las viviendas financiadas, priorizarán en la asignación a las mujeres y hombres cabeza de familia, a las mujeres activas y retiradas de las Fuerzas Militares y de Policía que sean cabeza de familia, y a las mujeres y hombres cabeza de familia que vivan en zonas rurales, luego de realizar el estudio de crédito respectivo.

En caso de existir reporte negativo en las centrales de riesgo, no podrán basarse en esta información para adoptar decisiones frente a solicitudes de crédito. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 546 de 1999.

Parágrafo 2º. Las entidades del Estado que otorguen mejoramiento de vivienda urbana y/o rural, deberán priorizar en la adjudicación de dicho beneficio a mujeres y hombres cabeza de familia.

ARTÍCULO 2°. Modifíquese el artículo 12 de la Ley 1232 de 2008, el cual quedará así:

1



para lograr la calificación de su desempeño básico y por competencias. Tales entidades deberán:

a) Generar estadísticas con perspectiva de género a través de los organismos competentes, que permitan construir y formular planes, programas, proyectos y políticas públicas adecuadas a las necesidades de mujeres y hombres cabeza de familia;

b) Generar programas gratuitos de capacitación, flexibles en su duración y adaptados a la disponibilidad de tiempo de mujeres y hombres cabeza de familia;

c) Crear redes regionales emprendedoras y productivas que vinculen a mujeres y hombres cabeza de familia en actividades económicas sostenibles y rentables. El Gobierno Nacional determinará cuáles son las entidades que ejercerán la inspección, vigilancia y control en el cumplimiento y ejecuciones de los planes, programas y políticas públicas dirigidas a mujeres y hombres cabeza de familia.

Parágrafo 1°. El Departamento Nacional de Planeación- DNP fijará los parámetros que permitan la evaluación de estas acciones gubernamentales, a través de indicadores de gestión y resultados.

Parágrafo 2°. La Banca de oportunidades financiará de manera prioritaria los proyectos que adelanten mujeres y hombres cabeza de familia en el marco del fomento para el desarrollo empresarial a que hace referencia el presente artículo.

Parágrafo 3°. La Agencia de Emprendimiento e Innovación - Innpulsa, o quien haga sus veces, creará y promoverá convocatorias de emprendimiento dirigidas a mujeres y hombres cabeza de familia.

Parágrafo 4º. Para efectos de definir la población objetivo de la oferta que establece el presente artículo, se tendrá en cuenta como criterio de priorización a los grupos poblacionales con mayor afectación por la emergencia sanitaria del COVID 19, como son las mujeres, los jóvenes y la población de la ruralidad.

ARTÍCULO 5º. Modifíquese el artículo 2º de la Ley 1232 de 2008, el cual quedará así:

Artículo 2º. El artículo 3º de la Ley 82 de 1993 quedará así:

Artículo 3º. Especial protección. El Gobierno Nacional establecerá mecanismos eficaces para dar protección especial a la mujer y al hombre cabeza de familia, promoviendo el fortalecimiento de sus derechos económicos, sociales y culturales, procurando establecer condiciones de vida dignas, promoviendo la equidad y la participación social con el propósito de ampliar la cobertura de atención en salud y salud sexual y reproductiva; el acceso a servicios de bienestar , de vivienda, de acceso a la educación básica, media y superior incrementando su cobertura, calidad

3



Artículo 12. El artículo 17 de la ley 82 de 1993 quedará así:

Artículo 17. Desarrollo del principio de igualdad. En aplicación del principio de igualdad de oportunidades a favor de mujeres y hombres cabeza de familia, las entidades públicas nacionales y territoriales a las cuales corresponda por aplicación de normas vigentes al efecto, que ofrezcan programas de desarrollo social, deberán fijar en la formulación y ejecución de los mismos, un porcentaje en los presupuestos para proyectos destinados a mujeres y hombres cabeza de familia que contemplen capacitación técnica de acuerdo con la oferta y la demanda, de apoyo a cadenas productivas y a procesos organizacionales, como componente solidario en la ejecución de proyectos sociales de desarrollo que les permitan generar recursos y empleo digno y estable. El Gobierno nacional reglamentará la materia.

Parágrafo. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio establecerá los mecanismos de acompañamiento social que faciliten el direccionamiento de la oferta institucional en materia de vivienda urbana y rural a hogares conformados por mujeres y hombres cabeza de familia.

ARTÍCULO 3º. Información de mujeres y hombres cabeza de familia. El Departamento Nacional de Planeación -DNP, dispondrá la información sobre mujeres y hombres cabeza de familia, derivada de las herramientas existentes a su cargo.

Parágrafo. El Departamento Nacional de Planeación - DNP, presentará un informe anual ante las Comisiones Séptimas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, contentivo de las cifras y la información que manejan sobre mujeres y hombres cabeza de familia, con el fin de crear acciones y estrategias para dicha población.

ARTÍCULO 4º. Modifíquese el artículo 6 de la Ley 1232 de 2008, el cual quedará así:

Artículo 6º. El artículo 8° de la Ley 82 de 1993 quedará así:

Artículo 8°. Fomento para el desarrollo empresarial. El Gobierno Nacional ofrecerá planes y programas de capacitación gratuita y desarrollo de microempresas industriales, comerciales y artesanales; empresas familiares, empresas de economía solidaria y proyectos emprendedores, con los cuales mujeres y hombres cabeza de familia puedan realizar una actividad económicamente rentable.

Para tal efecto, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, y las Secretarías de Planeación departamentales, distritales y municipales, y los demás organismos de naturaleza similar existentes o que llegaren a crearse diseñarán y ejecutarán planes y programas dirigidos especialmente a mujeres y hombres cabeza de familia,

2



y pertinencia, de acceso a la ciencia y tecnología, a líneas especiales de crédito y trabajos dignos y estables".

ARTÍCULO 6. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

ARTURO CHAR CHALJUB

EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA

GREGORIO ELJACH PACHECO

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ

EL SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

4



LEY No. 2115

"POR LA CUAL SE CREAN GARANTÍAS DE ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS PARA MUJERES Y HOMBRES CABEZA DE FAMILIA, SE ADICIONA LA LEY 82 DE 1993 MODIFICADA POR LA LEY 1232 DE 2008 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 29 JUL 2021

Dada en Bogotá, D.C., a los

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO

EL MINISTRO DEL TRABAJO,

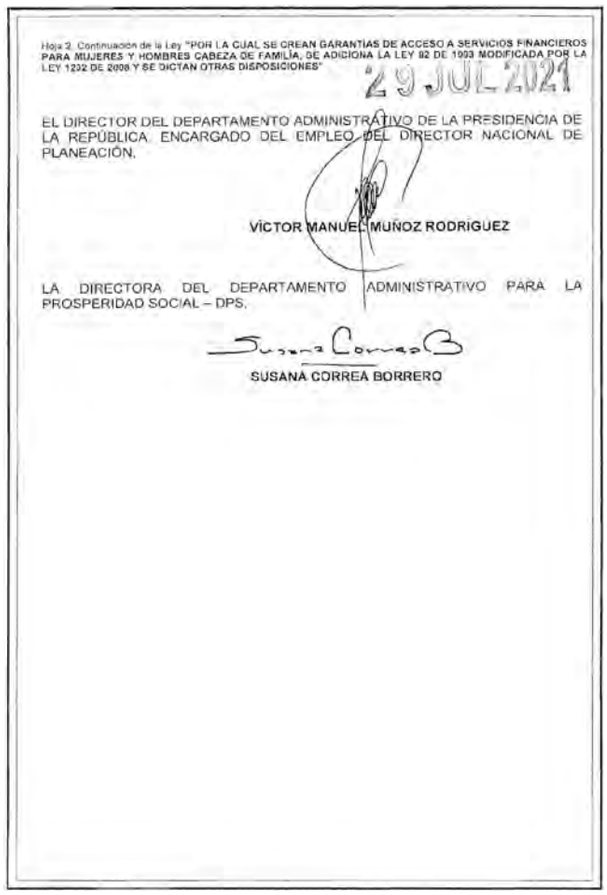
ÁNGEL CUSTODIO CABRERA BAEZ

LA MINISTRA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO,

MARÍA XIMENA LOMBANA VILLALBA

EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO,

JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ



Hoja 2. Continuación de la Ley "POR LA CUAL SE CREAN GARANTÍAS DE ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS PARA MUJERES Y HOMBRES CABEZA DE FAMILIA, SE ADICIONA LA LEY 82 DE 1993 MODIFICADA POR LA LEY 1232 DE 2008 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

29 JUL 2021

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, ENCARGADO DEL EMPLEO DEL DIRECTOR NACIONAL DE PLANEACIÓN,

VÍCTOR MANUEL MUÑOZ RODRÍGUEZ

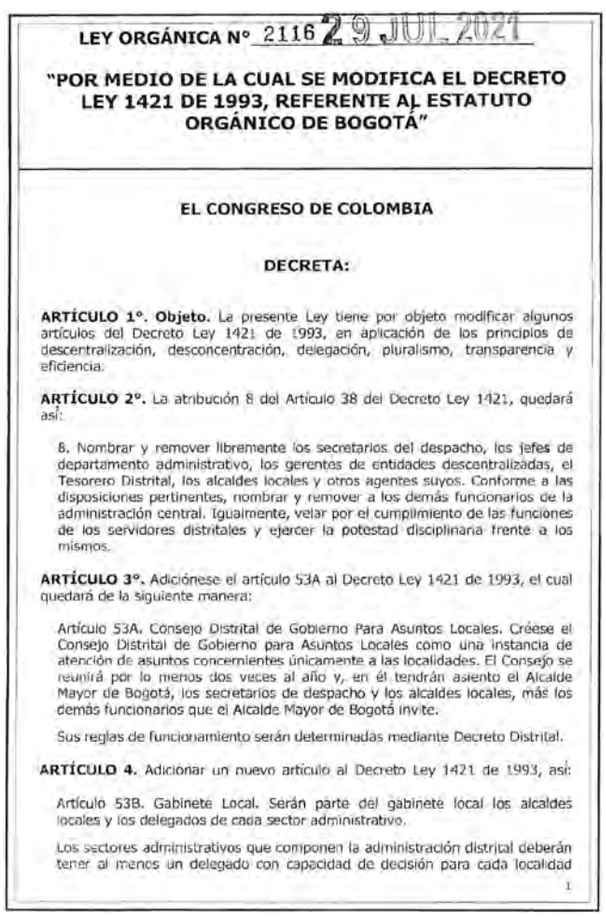
LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – DPS,

SUSANA CORREA BORRERO

LEY ORGÁNICA 2116 DE 2021

(julio 29)

por medio de la cual se modifica el Decreto-ley 1421 de 1993, referente al Estatuto Orgánico de Bogotá.



LEY ORGÁNICA N° 2116 29 JUL 2021

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL DECRETO LEY 1421 DE 1993, REFERENTE AL ESTATUTO ORGÁNICO DE BOGOTÁ"

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Objeto. La presente Ley tiene por objeto modificar algunos artículos del Decreto Ley 1421 de 1993, en aplicación de los principios de descentralización, desconcentración, delegación, pluralismo, transparencia y eficiencia.

ARTÍCULO 2°. La atribución 8 del Artículo 38 del Decreto Ley 1421, quedará así:

8. Nombrar y remover libremente los secretarios del despacho, los jefes de departamento administrativo, los gerentes de entidades descentralizadas, el Tesorero Distrital, los alcaldes locales y otros agentes suyos. Conforme a las disposiciones pertinentes, nombrar y remover a los demás funcionarios de la administración central. Igualmente, velar por el cumplimiento de las funciones de los servidores distritales y ejercer la potestad disciplinaria frente a los mismos.

ARTÍCULO 3°. Adiciónese el artículo 53A al Decreto Ley 1421 de 1993, el cual quedará de la siguiente manera:

Artículo 53A. Consejo Distrital de Gobierno Para Asuntos Locales. Créese el Consejo Distrital de Gobierno para Asuntos Locales como una instancia de atención de asuntos concernientes únicamente a las localidades. El Consejo se reunirá por lo menos dos veces al año y, en él tendrán asiento el Alcalde Mayor de Bogotá, los secretarios de despacho y los alcaldes locales, más los demás funcionarios que el Alcalde Mayor de Bogotá invite.

Sus reglas de funcionamiento serán determinadas mediante Decreto Distrital.

ARTÍCULO 4. Adicionar un nuevo artículo al Decreto Ley 1421 de 1993, así:

Artículo 53B. Gabinete Local. Serán parte del gabinete local los alcaldes locales y los delegados de cada sector administrativo.

Los sectores administrativos que componen la administración distrital deberán tener al menos un delegado con capacidad de decisión para cada localidad

1



como un enlace directo de los asuntos de su competencia en las alcaldías locales. Sus reglas de funcionamiento serán determinadas mediante Decreto Distrital.

Parágrafo. Las cabezas de cada sector del gobierno distrital deberán reunirse, en coordinación con la Secretaría Distrital de Gobierno, con cada alcalde local y el enlace local de la respectiva localidad, semestralmente con el propósito de articular la acción distrital y local en torno a la adopción e implementación de un plan interinstitucional del sector, de conformidad con la reglamentación que expida la Administración Distrital para tal fin.

ARTÍCULO 5°. Adicionar un nuevo numeral al artículo 60 del Decreto Ley 1421, así:

Artículo 60. Objetivos y propósitos. La división territorial del Distrito Capital en localidades deberá garantizar: (...)

6. Que corresponda y coincida con el plan de ordenamiento territorial.

ARTÍCULO 6°. El artículo 62 del Decreto Ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:

Artículo 62. Creación de localidades. El Concejo Distrital, a iniciativa del Alcalde Mayor, señalará a las localidades su denominación, límites y atribuciones administrativas, y dictará las demás disposiciones que fueren necesarias para su organización y funcionamiento.

Además, se podrán crear zonas rurales para la administración de localidades con características distintas a las de las zonas urbanas. Para estos fines se deberá tener en cuenta:

1. La cobertura y calidad en la prestación de los servicios básicos, comunitarios e institucionales.

2. Las características sociales de sus habitantes y demás aspectos que identifiquen las localidades con el objeto de disponer de los recursos financieros, administrativos, logísticos y humanos que garanticen su adecuado funcionamiento.

3. La existencia de ecosistemas estratégicos para la conservación del medio ambiente.

4. La configuración del territorio que defina cada ejercicio de formulación y adopción del Plan de Ordenamiento Territorial.

5. Análisis de la actividad económica, industrial y comercial, además de las características de los municipios circunvecinos, cuando sea procedente.

Parágrafo. En todo caso, el tamaño de las localidades deberá ser distribuido de manera similar y proporcional en cuanto a número de habitantes en cada una de ellas teniendo en cuenta criterios demográficos.

Parágrafo Transitorio: La delimitación de las localidades será la que se definida mediante el acto administrativo que adopte el Plan de Ordenamiento Territorial.

2

Los efectos de esta nueva delimitación entrará en vigencia a partir del 1o de enero de 2028.

ARTÍCULO 7º. El artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:

Artículo 65. Requisitos para los cargos de edil y alcalde local. Para ser elegido edil o nombrado alcalde local se requiere ser ciudadano en ejercicio y haber residido o desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la respectiva localidad por lo menos durante los dos años anteriores a la fecha de la elección o del nombramiento.

Para ocupar el cargo de alcalde local, se deberá contar con los requisitos máximos descritos en el numeral 13.2.1.1 del artículo 13 del Decreto Ley 785 de 2005.

ARTÍCULO 8º. El artículo 69 del Decreto Ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:

Artículo 69. Atribuciones de las Juntas. De conformidad con la Constitución, la ley, los acuerdos del Concejo y los decretos del Alcalde Mayor, corresponde a las Juntas Administradoras:

1. Adoptar el Plan de Desarrollo Local en concordancia con el plan general de desarrollo económico y social de obras públicas y el plan general de ordenamiento físico del distrito, previa audiencia de las organizaciones sociales, cívicas y populares de la localidad.

2. Vigilar y controlar la prestación de los servicios distritales en su localidad y las inversiones que en ella se realicen con recursos públicos.

3. Presentar proyectos de inversión ante las autoridades Nacionales y Distritales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión.

4. Aprobar el presupuesto anual del respectivo fondo de desarrollo, previo concepto favorable del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal y de conformidad con los programas y proyectos del plan de desarrollo local.

El ochenta por ciento (80%) de las apropiaciones no podrá ser inferior al monto de dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales y el veinte por ciento (20%) restante de las apropiaciones no podrá ser inferior al monto de doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales. No podrán hacer apropiaciones para la iniciación de nuevas obras mientras no estén terminadas las que se hubieren iniciado en la respectiva localidad para el mismo servicio.

5. Cumplir las funciones que, en materia de servicios públicos, construcción de obras y ejercicio de atribuciones administrativas les asigne la ley y les deleguen las autoridades nacionales y distritales.

3

6. Preservar y hacer respetar el espacio público. En virtud de esta atribución podrán reglamentar su uso para la realización de actos culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales y ordenar el cobro de derechos por tal concepto, que el respectivo Fondo de Desarrollo destinará al mejoramiento del espacio público de la localidad, de acuerdo con los parámetros que fije el Concejo Distrital.

7. Promover la participación y veeduría ciudadana y comunitaria en el manejo y control de los asuntos públicos.

8. Presentar al Concejo Distrital proyectos de acuerdo relacionados con la localidad que no sean de la iniciativa privativa del Alcalde Mayor.

9. Vigilar la ejecución de los contratos en la localidad y formular ante las autoridades competentes las recomendaciones que estimen convenientes para el mejor desarrollo de esos contratos. En ejercicio de esta función los ediles podrán solicitar y obtener los informes y demás documentos que requieran.

10. Promover las campañas necesarias para la protección y recuperación de los recursos y del medio ambiente en la localidad.

11.Solicitar informes a las autoridades locales, quienes deben expedirlos dentro de los diez (10) días siguientes. Su omisión injustificada constituye causal de mala conducta.

12. Participar en la elaboración del plan general de desarrollo económico, social y de obras públicas.

13. Ejercer la veeduría que proceda sobre los elementos, maquinaria y demás bienes que la administración distrital destine a la localidad.

14. Las Juntas Administradoras Locales podrán citar, una vez cada seis (6) meses al Alcalde Local correspondiente.

Los cuestionarios para las sesiones de seguimiento a la gestión e inversión local deberán hacerse con anticipación no menor de cinco (5) días hábiles y formularse en cuestionario escrito. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario, el cual deberá estar precedido de la motivación de la citación y encabezar el orden del día de la sesión. El funcionario citado deberá radicar en la secretaría de la JAL la respuesta al cuestionario, dentro del tercer día hábil siguiente al recibo de la citación.

15. Gestionar ante la Alcaldía Local correspondiente las iniciativas de la comunidad con respecto a asuntos de gestión pública y desarrollo local. A su vez, coordinarán con las instancias de participación local para contribuir al fortalecimiento de la gestión local que permita identificar la solución de problemas.

16. Coordinar con las instancias de participación local para contribuir al fortalecimiento de la gestión local mediante la disposición de información

4

pertinente que permita identificar soluciones a problemas relacionados con la gestión local del desarrollo;

17. Presentar anualmente una rendición de cuentas sobre la asistencia de sus corporados, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares, proyectos, partidas e inversiones públicas que hayan gestionado, así como cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos.

18. Ejercer las demás funciones que les asignen la Constitución, la ley y los decretos del alcalde mayor.

ARTÍCULO 9º. El Decreto Ley 1421 de 1993 tendrá un artículo nuevo, el cual quedará de la siguiente manera:

Artículo 69A. Apoyo técnico y administrativo a las Juntas Administradoras Locales.

Con el fin de promover la gestión de las Juntas Administradoras Locales, la Alcaldía Mayor de Bogotá, reglamentará las condiciones en las que las JAL podrán acceder a mesas de apoyo técnico por localidad, para ejecutar labores jurídicas, administrativas y de secretaría, con cargo al Fondo de Desarrollo Local correspondiente.

ARTÍCULO 10º. El artículo 85 del Decreto Ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:

Artículo 85. Reemplazos. Las faltas absolutas y temporales de los alcaldes locales serán provistas por las personas que designe el alcalde mayor.

En el primer caso, solicitará de la junta respectiva la elaboración de una terna, salvo cuando falten 18 meses para la terminación del periodo.

Esta terna se conformará por aquellas personas que hubiesen pasado el proceso meritocrático para el respectivo periodo gubernamental, en caso en que dicho listado no cuente con 3 o más personas se deberá cumplir con un nuevo proceso meritocrático.

ARTÍCULO 11. El artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:

Artículo 86. Atribuciones. Corresponde a los alcaldes locales:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, las demás normas nacionales aplicables,

los acuerdos distritales y locales y las decisiones de las autoridades distritales.
2. Administrar las Alcaldías Locales y los Fondos de Desarrollo Local.

3. Articular y coordinar en sus respectivas localidades las políticas distritales de cada sector a través del trabajo conjunto con su gabinete local.

4. Reglamentar los respectivos acuerdos locales.

5

5. Cumplir las funciones que les fijen y deleguen el Concejo de Bogotá, el Alcalde Mayor, las Juntas Administradoras y otras autoridades distritales.

6.Coordinar la acción administrativa del Distrito en la localidad.

7.Velar por la tranquilidad y seguridad ciudadanas. Conforme a las disposiciones vigentes, contribuir a la conservación del orden público en su localidad y con la ayuda de las autoridades nacionales y distritales, restablecerlo cuando fuere turbado.

8. Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo urbano, uso del suelo y reforma urbana. De acuerdo con esas mismas normas expedir o negar los permisos de funcionamiento que soliciten los particulares. Sus decisiones en esta materia serán apelables ante el jefe del departamento distrital de planeación, o quien haga sus veces.

9. Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público, el patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y el ambiente, con sujeción a la ley, a las normas nacionales aplicables, y a los acuerdos distritales y locales.

10. Conocer de los procesos relacionados con violación de las normas sobre construcción de obras y urbanismo e imponer las sanciones correspondientes. El Concejo Distrital podrá señalar de manera general los casos en que son apelables las decisiones que se dicten con base en esta atribución y, ante quién.

11. Expedir los permisos de demolición en los casos de inmuebles que amenazan ruina, previo concepto favorable de la entidad distrital de planeación.

12. Vigilar y controlar la prestación de servicios, la construcción de obras y el ejercicio de funciones públicas por parte de las autoridades distritales o de personas particulares.

13. Coordinar la participación ciudadana en la localidad y de la articulación entre los procesos de participación ciudadana y la toma de decisiones del gobierno distrital.

14. Ejecutar las políticas de presupuestos participativos dictadas por la Secretaría Distrital de Gobierno y establecer las disposiciones que aseguren la realización de las actividades necesarias para la efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de programación del presupuesto local, el cual se deberá desarrollar en armonía con el plan de desarrollo distrital y el de las localidades, en plena concordancia con la Ley 1757 de 2015 y las demás disposiciones legales aplicables.

15. Planificar, contratar y ordenar los gastos e inversiones públicas relacionadas con el desarrollo de procesos de participación ciudadana en la localidad en el marco de la normatividad vigente aplicable, guardando concordancia con los criterios de: i) representatividad poblacional; ii) diversidad y tolerancia; iii) transparencia; iv) sostenibilidad en el tiempo, v) eficiencia y eficacia; entendida como la posibilidad de que las decisiones que se tomen en función de los espacios de participación ciudadana se conviertan en decisiones del gobierno distrital);

6

16. Hacer seguimiento, junto a las demás autoridades competentes, a la prestación de servicios, la construcción de obras y el ejercicio de funciones públicas por parte de las autoridades distritales o de personas particulares.

17. Desarrollar acciones que promuevan los derechos de las mujeres, desde los enfoques de género, de derechos, diferencial y territorial.

18. Implementar modelos de gestión que permitan atender de manera oportuna la justicia policiva en su territorio. Así mismo, desarrollar las distintas acciones tendientes a implementar en su localidad las políticas públicas en materia de protección, restauración, educación y prevención de que habla el artículo 8 de la Ley 1801 de 2016 o la norma que la sustituya.

19. El alcalde Local, podrá crear un equipo de trabajo, con el fin de que en los eventos en que sea comisionado para la práctica de despachos comisorios, pueda a su vez delegarlo en este equipo.

20. Ejercer las demás funciones que les asignen la Constitución y la ley, los acuerdos distritales y los decretos del alcalde mayor.

Parágrafo. Toda reasignación de funciones o nueva atribución o delegación de competencias a las alcaldías locales deberá garantizar la disponibilidad efectiva de recursos administrativos, logísticos y humanos que garanticen el cumplimiento eficiente de las mismas.

ARTÍCULO 12°. El artículo 89 del Decreto Ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:

Artículo 89. Participación en el presupuesto distrital. A partir de la vigencia fiscal de mil novecientos noventa y cuatro (1994), no menos del doce por ciento (12%) de los ingresos corrientes del presupuesto de la administración central del Distrito, se asignará a las localidades teniendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de la población de cada una de ellas y según los índices que para el efecto establezca la entidad distrital de Planeación. Para los efectos aquí previstos no se tendrán en cuenta los ingresos corrientes de los establecimientos públicos ni las utilidades de las empresas industriales y comerciales que se apropien en el presupuesto distrital.

El Concejo Distrital, a iniciativa del alcalde mayor podrá incrementar dicha participación anual y acumulativamente en un dos por ciento (2%), sin que la misma supere en total el veinte por ciento (20%) de los ingresos a que se refiere este artículo. Igualmente el concejo a iniciativa del alcalde podrá reducir en cualquier tiempo esta participación, respetando en todo caso el porcentaje mínimo previsto en el inciso anterior.

La asignación global que conforme a este artículo se haga en el presupuesto distrital para cada localidad, será distribuida y apropiada por la correspondiente junta administradora previo el cumplimiento de los requisitos presupuestales previstos en este estatuto, de acuerdo con el respectivo plan de desarrollo y consultando las necesidades básicas insatisfechas y los criterios de la planeación participativa. Para tal efecto deberá oír a las comunidades organizadas.

7

ARTÍCULO 15°. Adicionar un artículo nuevo al Decreto Ley 1421 de 1993, así:

Artículo 143C. Recursos adicionales de la nación, financiación del régimen subsidiado. Los recursos adicionales a los previstos en el presupuesto aprobado de cada vigencia por concepto de Transferencias, Cofinanciación y demás aportes de la Nación y Rentas de destinación específica que financian el Régimen Subsidiado se incorporarán al Presupuesto Distrital mediante decreto distrital. La Secretaría Distrital de Hacienda, informará de estas operaciones a la Comisión de Presupuesto del Concejo Distrital, dentro de los treinta (30) días siguientes a la incorporación de dichos recursos.

ARTÍCULO 16°. Adicionar un artículo nuevo al Decreto Ley 1421 de 1993, así:

Artículo 179A. En el marco de un programa especial de descongestión, el Distrito dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley establecerá mecanismos de terminación anticipada de las actuaciones administrativa por contravenciones ocurridas con anterioridad a la vigencia de la Ley 1801 de 2016, atendiendo situaciones de caducidad, tiempo de iniciación de la actuación, principio de lesividad, carencia actual de objeto.

Se dispondrán alternativas, para terminación de procesos abiertos sin trámite procesal en tiempo determinados de acuerdo a temáticas específicas, mecanismos de amnistías, condonaciones y/o subrogaciones para sanciones.

Así mismo, se podrá establecer mecanismos de acuerdos con los presuntos infractores que permita declarar la terminación de la actuación. Se podrá ordenar el reemplazo de multa general señalada (de cualquier tipo) por jornada pedagógica o trabajo comunitario. Podrá adelantar campañas para reemplazar multas señaladas por ocupación del espacio público a vendedores informales por jornadas pedagógicas.

La Alcaldía Mayor podrá, en este marco, extender los mismos mecanismos para actuaciones o conductas en el marco de la Ley 1801 de 2016.

Artículo 17°. Adicionar un artículo nuevo al Decreto Ley 1421 de 1993, así:

Artículo nuevo. Los alcaldes locales serán designados bajo criterios de meritocracia y paridad de género. En todo caso el 50% de quienes resulten designados deberán ser mujeres. Sus reglas de funcionamiento serán establecidas mediante Decreto Distrital.

Artículo 18°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las demás normas que le sean contrarias.

9

ARTÍCULO 13°. El artículo 129 del Decreto Ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:

Artículo 129. Salarios y prestaciones. Los empleados públicos de Bogotá Distrito Capital tendrán un régimen salarial especial que determinará el Gobierno Nacional dentro de los límites establecidos por la Ley 617 de 2000 y el Marco Fiscal de Mediano Plazo; en todo caso, en virtud del principio de progresividad laboral este régimen no podrá ser inferior al actualmente vigente.
El régimen salarial de los empleados y trabajadores del Distrito estará sujeto a la disponibilidad presupuestal y al Marco Fiscal de Mediano Plazo del Distrito Capital y deberá contar con previo concepto expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda.

El Gobierno Nacional reglamentará dentro los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente ley, el régimen salarial especial para los empleados y trabajadores del Distrito Capital.

ARTÍCULO 14°. Adicionar un artículo nuevo al Decreto Ley 1421 de 1993, así:

Artículo 143A. Vigencias futuras ordinarias. El Confis Distrital podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras de funcionamiento o inversión cuando su ejecución se inicie con el presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que:

a. El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata esta ley;

b. Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas serán autorizadas;

c. Se disponga del concepto favorable de la Secretaría Distrital de Hacienda y de la Secretaría Distrital de Planeación, cuando se trate de proyectos de inversión.

d. Cuando se trate de proyectos de inversión con cofinanciación de la nación, deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.

La autorización por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica. El Gobierno Distrital reglamentará la materia.

La Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto incluirá en los proyectos de presupuesto, las asignaciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.

8

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

ARTURO CHAR CHALJUB

EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA

GREGORIO ELJACH PACHECO

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ

EL SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

10



LEY ORGÁNICA No. 2116

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL DECRETO LEY 1421 DE 1993, REFERENTE AL ESTATUTO ORGÁNICO DE BOGOTÁ"

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 29 JUL 2021

EL MINISTRO DEL INTERIOR,

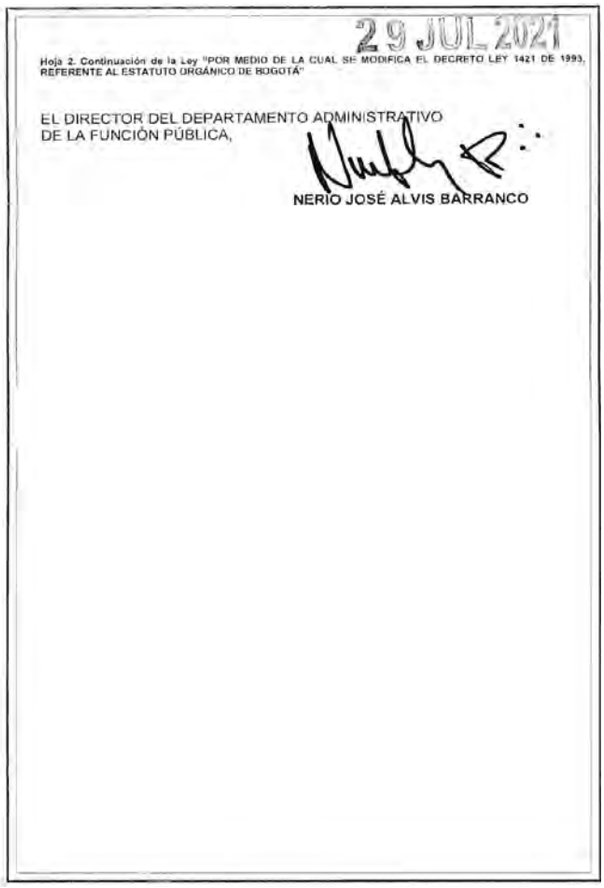
DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO

EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO,

JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ



29 JUL 2021

Hoja 2. Continuación de la Ley "POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL DECRETO LEY 1421 DE 1993, REFERENTE AL ESTATUTO ORGÁNICO DE BOGOTÁ"

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA,

NERIO JOSÉ ALVIS BARRANCO

LEY 2117 DE 2021

(julio 29)

por medio del cual se adiciona la Ley 1429 de 2010, la Ley 823 de 2003, se establecen medidas para fortalecer y promover la igualdad de la mujer en el acceso laboral y en educación en los sectores económicos donde han tenido una baja participación y se dictan otras disposiciones.



LEY N° 2117 29 JUL 2021

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA LA LEY 1429 DE 2010, LA LEY 823 DE 2003, SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA FORTALECER Y PROMOVER LA IGUALDAD DE LA MUJER EN EL ACCESO LABORAL Y EN EDUCACIÓN EN LOS SECTORES ECONÓMICOS DONDE HAN TENIDO UNA BAJA PARTICIPACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto adicionar las Leyes 1429 de 2010 y 823 de 2003, con el fin de fortalecer y promover la igualdad de la mujer en sectores económicos donde históricamente han tenido poca participación, establecer medidas para el acceso a la educación sin estereotipos y así permitir la incorporación de las mujeres, en especial las mujeres cabeza de familia, en los diferentes sectores productivos del país con un salario justo que les permita mejorar sus condiciones de vida y disminuya la brecha salarial entre hombres y mujeres.

ARTÍCULO 2°. El artículo 3° de la Ley 1429 de 2010, quedará así:

Artículo 3°. Focalización de los programas de desarrollo empresarial. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno nacional, bajo la coordinación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, deberá:

a) Diseñar y promover programas de microcrédito y crédito orientados a empresas del sector rural y urbano, creadas por jóvenes menores de 28 años. Técnicos por competencias laborales, técnicos profesionales, tecnólogos o profesionales, que conduzcan a la formalización y generación empresarial, y del empleo, para lo cual utilizará herramientas como: incentivos a la tasa, incentivos al capital, periodos de gracia, incremento de las garantías financieras que posee el Estado y simplificación de trámites.

Para el desarrollo de lo contenido en el anterior literal, la Superintendencia Financiera de Colombia o la entidad que corresponda facilitará y simplificará los trámites a los que se encuentren sujetos los establecimientos de crédito y demás operadores financieros.

b) Diseñar y promover, en el nivel central y en las entidades territoriales, el desarrollo de programas de apoyo técnico y financiero para asistencia técnica, capital de trabajo y activos fijos, que conduzca la formalización y generación empresarial, y del empleo en el sector rural.



En todo caso, los montos de los apoyos y las condiciones de reembolso estarán sometidos al logro de los objetivos previstos por el proyecto productivo o empresarial que se desarrolle. El Gobierno nacional, en cada uno de los sectores, definirá mediante reglamento los criterios para su aplicación e implementación.

c) Diseñar y promover programas de formación, capacitación, asistencia técnica y asesoría especializada, que conduzcan a la formalización y generación empresarial, del empleo y el teletrabajo.

d) Fortalecer las relaciones entre Universidad-Empresa-Estado, fomentando en todo el país iniciativas tendientes a que estos tres sectores trabajen mancomunadamente en el desarrollo innovador en sus regiones.

e) Mejorar la ocupabilidad de los/as jóvenes, diseñando, gestionando y evaluando una oferta que contemple todas las necesidades formativas de una persona en situación de exclusión y que cubra todas las etapas que necesite para su inserción social y laboral.

f) Diseñar y promover programas de formación y capacitación, haciendo énfasis en las condiciones específicas y diferenciales de cada Región, Distrito, Departamento o Municipio, dirigido a las mujeres y en especial a las mujeres madres cabeza de familia, para que las conduzca a la formalización y generación empresarial, del empleo y el teletrabajo en sectores económicos como: agropecuario, transporte, minas y energía, intermediación financiera, servicios públicos, construcción, ciencia, tecnología e innovación; con el objetivo de mejorar la tasa de ocupabilidad de las mujeres en estos sectores sin consideración a estereotipos sobre trabajos específicos de las mujeres. El diseño de los programas de formación y capacitación de que habla el presente literal, contará con el acompañamiento de las sedes regionales del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, para la priorización de los programas que se ofertarán.

g) Reglamentar criterios de desempate con fundamento en el principio de selección objetiva en favor de la mujer y en especial las mujeres madres cabeza de familia, cuando en convocatorias nacionales y regionales, promovidas por autoridades públicas, que vayan dirigidas a programas de emprendimiento, ofreciendo otorgar capital semilla, presemilla o cualquier apoyo financiero con beneficios especiales, y se presente un empate en el resultado final de la misma.

Parágrafo 1°. El Gobierno nacional establecerá programas especiales de formalización y generación de empleo en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, en consideración de su situación geográfica y carencias de infraestructura vial que impiden su conexión con el resto del país.

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional establecerá mecanismos que conduzcan a la formalización y generación empresarial, y del empleo, en el sector agropecuario.

Parágrafo 3°. El Gobierno nacional expedirá el reglamento para que el Fondo Nacional de Garantías otorgue condiciones especiales de garantía a empresas creadas por jóvenes menores de veintiocho (28) años tecnólogos, técnicos o profesionales, que conduzcan a la formalización y generación empresarial y del empleo, por el ochenta por ciento (80%) del valor del crédito requerido.

Parágrafo 4°. El Conpes se reunirá al menos una vez al año para hacerle seguimiento a lo establecido en el presente artículo. El Comité Mixto de Formalización Empresarial y Laboral del Sistema Nacional de Competitividad se reunirá al menos una vez al año para coordinar los programas públicos y privados de desarrollo empresarial que sirvan de apoyo y estímulo a la creación y formalización de las empresas y los trabajadores, teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo.

Parágrafo 5°. Estos programas de formación y capacitación tendrán prioridad para los jóvenes con discapacidad.

Parágrafo 6°. El Gobierno nacional establecerá mecanismos que conduzcan a la formalización y generación empresarial, y del empleo para las mujeres de manera específica en los sectores agropecuario, transporte, minas y energía, intermediación financiera, servicios públicos y construcción, ciencia, tecnología e innovación, atendiendo las recomendaciones por parte del Sistema Nacional de las Mujeres.

ARTÍCULO 3°. El artículo 5° de la Ley 823 de 2003, modificado por el artículo 8° de la Ley 1496 de 2011, quedará así:

Artículo 5°. Con el fin de promover y fortalecer el acceso de las mujeres al trabajo urbano y rural y a la generación de ingresos en condiciones de igualdad, el Gobierno nacional deberá:

1. Desarrollar acciones y programas que aseguren la no discriminación de las mujeres en el trabajo y la aplicación del principio de salario igual a trabajo de igual valor. El incumplimiento de este principio dará lugar a la imposición de multas por parte del Ministerio del Trabajo, conforme a lo dispuesto en la legislación laboral.

2. Diseñar programas de formación y capacitación laboral para las mujeres, haciendo énfasis estos en las condiciones específicas y diferenciales de cada Región, Distrito, Departamento o Municipios, sin consideración a estereotipos sobre trabajos específicos de las mujeres. En especial, el Gobierno nacional promoverá la incorporación de las mujeres al empleo en sectores económicos como agropecuario, transporte, minas y energía, intermediación financiera, servicios públicos, construcción, ciencia, tecnología e innovación mediante la sensibilización, la capacitación y el reconocimiento de incentivos a los empresarios del sector.

3. Brindar apoyo tecnológico, organizacional y gerencial a las micro, pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres y a las que empleen mayoritariamente personal femenino.

3

4. Divulgar, informar y sensibilizar a la sociedad y a las mujeres sobre las oportunidades en los diferentes sectores productivos del país, sus derechos laborales y económicos, y sobre los mecanismos de protección de los mismos.

5. Garantizar a la mujer campesina el acceso a la propiedad o tenencia de la tierra y al crédito agrario, la asistencia técnica, la capacitación y la tecnología agropecuaria, para su adecuada explotación.

6. Vigilar y controlar el cumplimiento de las normas sobre seguridad social a favor de las mujeres trabajadoras, e imponer las sanciones legales cuando a ello hubiere lugar.

7. Realizar evaluaciones periódicas sobre las condiciones de trabajo de las mujeres, especialmente de las trabajadoras rurales, elaborar los registros estadísticos y adoptar las medidas correctivas pertinentes.

Parágrafo. El Gobierno nacional en el término de un (1) año diseñará una estrategia de promoción, capacitación e inclusión laboral y en educación para la mujer, en especial la mujer madre cabeza de familia, en los diferentes sectores económicos, en virtud del numeral segundo del presente artículo. Para ello podrá contar con el apoyo de instituciones públicas y privadas.

ARTÍCULO 4°. Medidas en materia de educación. El Ministerio de Educación Nacional dentro del término de un (1) año fortalecerá la Estrategia Nacional de Orientación Socio-Ocupacional para promover la formación de mujeres, en especial mujeres madres cabeza de familia, en educación profesional, tecnológica y técnica profesional, en los programas que presentan bajos índices de incorporación por parte de las mujeres, con especial énfasis hacia la formación en carreras orientadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con el fin de facilitar el ingreso al mercado laboral de ellas en los diferentes sectores productivos en donde han tenido baja participación.

En el mismo término y de manera articulada, corresponderá al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Educación Nacional hacer un acompañamiento a las entidades territoriales, en la formulación de una política pública focalizada, en los programas de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y en el Subsistema de Formación para el Trabajo.

ARTÍCULO 5°. Informes periódicos de aplicabilidad de la ley. El Ministerio de Trabajo y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) presentarán un informe anual a las Comisiones Sextas y Séptimas Constitucionales del Congreso de la República sobre la aplicabilidad de la presente ley.

En ese informe se expondrán los avances en inclusión laboral y en educación para las mujeres; las estrategias para reducir la brecha salarial y el impacto que los programas de educación profesional, tecnológica y técnica profesional enfocados al acceso laboral de las mujeres en diferentes sectores han tenido en el desarrollo de los derechos de las mujeres. También se proyectarán los objetivos del Gobierno Nacional frente a la aplicabilidad de la presente ley.

4

Parágrafo 1°. El informe será discutido por las Comisiones Constitucionales antes mencionadas dentro del segundo periodo de cada legislatura, lo anterior, con el fin de presentar observaciones y revisar la implementación de la presente ley.

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional, en la información que debe presentar a la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República del Sistema Nacional de las Mujeres o el que haga sus veces, incluirá la información relacionada con el desarrollo y aplicación de la presente ley y las metas de empleo, de emprendimiento y de fomento a la industria.

ARTÍCULO 6°. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación, modifica las disposiciones expresamente referidas y deroga aquellas que le sean contrarias.

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

ARTURO CHAR CHALJUB

EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA

GREGORIO ELJACH PACHECO

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ

EL SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

5

LEY No. 2117

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA LA LEY 1429 DE 2010, LA LEY 823 DE 2003, SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA FORTALECER Y PROMOVER LA IGUALDAD DE LA MUJER EN EL ACCESO LABORAL Y EN EDUCACIÓN EN LOS SECTORES ECONÓMICOS DONDE HAN TENIDO UNA BAJA PARTICIPACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

EL MINISTRO DEL INTERIOR,

DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO

EL MINISTRO DEL TRABAJO,

ÁNGEL CUSTODIO CABRERA BAEZ

LA MINISTRA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO,

MARÍA XIMENA LOMBANA VILLALBA



Hoja 2 - Continuación de la Ley "POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA LA LEY 1420 DE 2010, LA LEY 823 DE 2003, SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA FORTALECER Y PROMOVER LA IGUALDAD DE LA MUJER EN EL ACCESO LABORAL Y EN EDUCACIÓN EN LOS SECTORES ECONÓMICOS DONDE HAN TENIDO UNA BAJA PARTICIPACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

29 JUL 2021

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,

MARÍA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ

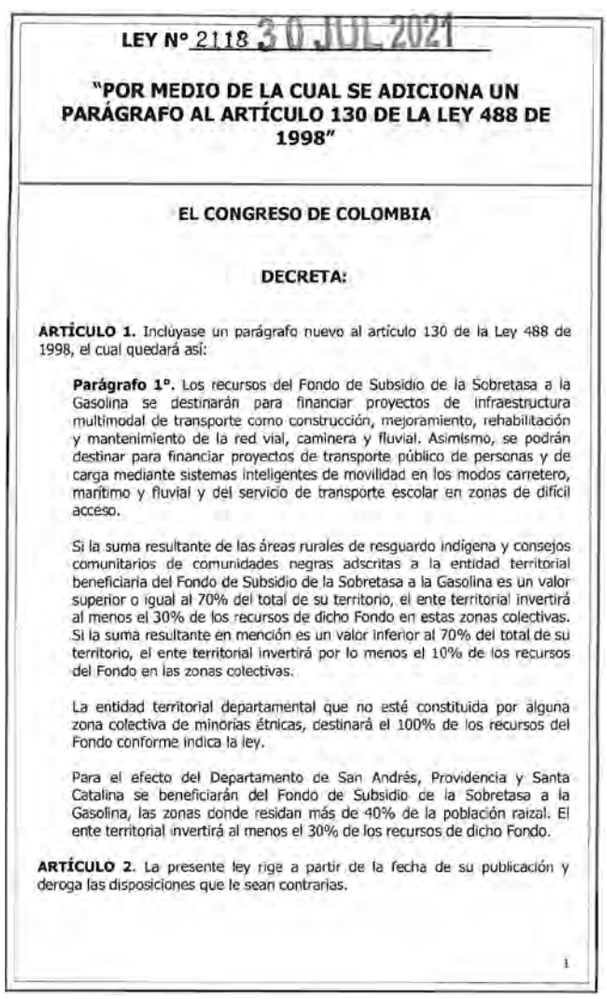
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, ENCARGADO DEL EMPLEO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN,

VICTOR MANUEL MUÑOZ RODRÍGUEZ

LEY 2118 DE 2021

(julio 30)

por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 130 de la Ley 488 de 1998.



LEY N° 2118 30 JUL 2021

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADICIONA UN PARÁGRAFO AL ARTÍCULO 130 DE LA LEY 488 DE 1998"

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1. Inclúyase un parágrafo nuevo al artículo 130 de la Ley 488 de 1998, el cual quedará así:

Parágrafo 1°. Los recursos del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina se destinarán para financiar proyectos de infraestructura multimodal de transporte como construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la red vial, caminera y fluvial. Asimismo, se podrán destinar para financiar proyectos de transporte público de personas y de carga mediante sistemas inteligentes de movilidad en los modos carretero, marítimo y fluvial y del servicio de transporte escolar en zonas de difícil acceso.

Si la suma resultante de las áreas rurales de resguardo indígena y consejos comunitarios de comunidades negras adscritas a la entidad territorial beneficiaria del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina es un valor superior o igual al 70% del total de su territorio, el ente territorial invertirá al menos el 30% de los recursos de dicho Fondo en estas zonas colectivas. Si la suma resultante en mención es un valor inferior al 70% del total de su territorio, el ente territorial invertirá por lo menos el 10% de los recursos del Fondo en las zonas colectivas.

La entidad territorial departamental que no esté constituida por alguna zona colectiva de minorías étnicas, destinará el 100% de los recursos del Fondo conforme indica la ley.

Para el efecto del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se beneficiarán del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina, las zonas donde residan más de 40% de la población raizal. El ente territorial invertirá al menos el 30% de los recursos de dicho Fondo.

ARTÍCULO 2. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

1



EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

ARTURO CHAR CHALJUB

EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

GREGORIO ELJACH PACHECO

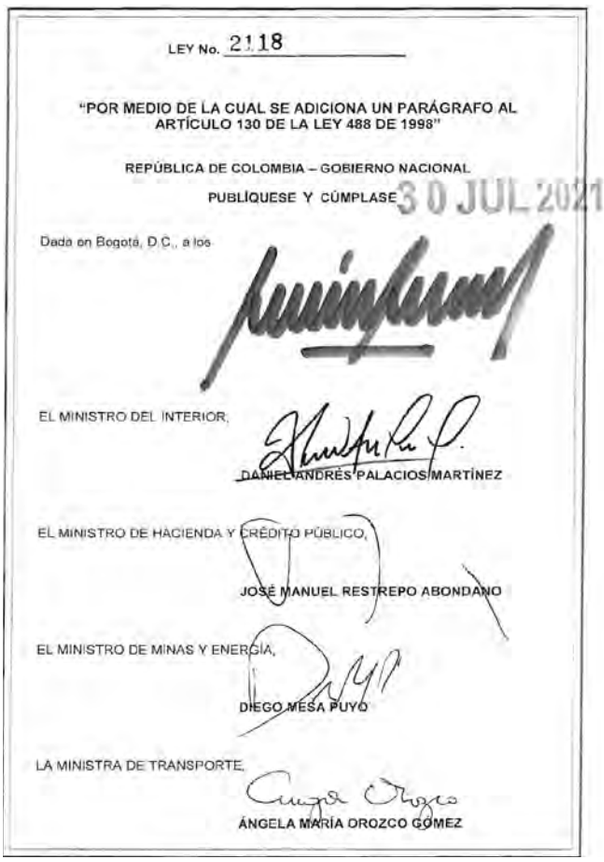
EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ

EL SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

2



LEY No. 2118

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADICIONA UN PARÁGRAFO AL ARTÍCULO 130 DE LA LEY 488 DE 1998"

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 30 JUL 2021

Dada en Bogotá, D.C., a los

EL MINISTRO DEL INTERIOR,

DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO

EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA,

DIEGO MESA PUYO

LA MINISTRA DE TRANSPORTE,

ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ

CONTENIDO

Gaceta número 68 - Viernes, 11 de febrero de 2022

CÁMARA DE REPRESENTANTES

LEYES SANCIONADAS

Págs.

Ley 2081 de 2021, por la cual se declara imprescriptible la acción penal en caso de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito de incesto, cometidos en menores de 18 años- No más silencio. 1

Ley 2088 de 2021, por la cual se regula el trabajo en casa y se dictan otras disposiciones. 2

Ley 2089 de 2021, por medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes y se dictan otras disposiciones..... 4

Págs.

Ley 2093 de 2021, por medio de la cual se modifican las Leyes 488 de 1998 y 788 de 2002. 5

Ley 2097 de 2021, por medio de la cual se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) y se dictan otras disposiciones..... 6

Ley 2108 de 2021, Ley de internet como servicio público esencial y universal o por medio de la cual se modifica la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. 8

Ley 2109 de 2021, por medio del cual se fomenta la orientacion socio-ocupacional en los establecimientos oficiales y privados de educacion formal para la educacion media. 10

Ley 2110 de 2021, por medio del cual se modifica el artículo 162 de la Ley 599 de 2000. 11

Ley 2111 de 2021, por medio del cual se sustituye el Título XI "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones. 12

Ley 2112 de 2021, por medio de la cual se fortalece el emprendimiento y el escalamiento del tejido empresarial nacional. 16

Ley 2113 de 2021, por medio del cual se regula el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior. 17

Ley 2114 de 2021, por medio de la cual se amplía la licencia de paternidad, se crea la licencia parental compartida, la licencia parental flexible de tiempo parcial, se modifica el artículo 236 y se adiciona el artículo 241A del Código Sustantivo del Trabajo, y se dictan otras disposiciones..... 20

Ley 2115 de 2021, por la cual se crean garantías de acceso a servicios financieros para mujeres y hombres cabeza de familia, se adiciona la Ley 82 de 1993 modificada por la Ley 1232 de 2008 y se dictan otras disposiciones..... 23

Ley Orgánica 2116 de 2021, por medio de la cual se modifica el Decreto-Ley 1421 de 1993, referente al Estatuto Orgánico de Bogotá. 24

Ley 2117 de 2021, por medio del cual se adiciona la Ley 1429 de 2010, la Ley 823 de 2003, se establecen medidas para fortalecer y promover la igualdad de la mujer en el acceso laboral y en educación en los sectores económicos donde han tenido una baja participación y se dictan otras disposiciones..... 27

Ley 2118 de 2021, por medio de la cual se adiciona un paragrafo al artículo 130 de la Ley 488 de 1998..... 29

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2022